

DE NEGOTIIS CAUSARUM (II) *

«Puede usted objetar que no se trata de un proceso, y tiene razón, porque sólo es un proceso si yo lo reconozco como tal. Pero ahora sí lo reconozco, en cierto modo por compasión. Si uno quiere darle alguna importancia, no puede enfrentarse con él más que de un modo compasivo. No digo que sea un procedimiento aberrante, pero ofrezco a su conciencia esta definición del mismo» (Franz Kafka, *El proceso*, capítulo II).

Continúo en estas páginas los estudios sobre el proceso oficial visigodo cuya publicación inicié en el ANUARIO de 1985. Los planteamientos generales expuestos entonces, y muy particularmente mi confesada repugnancia por un análisis jurídico estéril para el conocimiento histórico, deben considerarse extensivos y aplicables al trabajo que ahora presento; es de advertir, sin embargo, que la naturaleza de la materia a historiar, así como la índole de muchas leyes objeto de comentario, sin prestarse siempre a ofrecer ese conocimiento de manera inmediata, solamente cobrarán el sentido propuesto dentro de un marco más general en el que deben integrarse. En otras palabras: la minuciosidad de la regulación procesal visigoda, que me veo en la obligación científica de atender, conducirá a incursiones por terrenos excesivamente técnicos o específicos; pero que así fuese el proceso del *Liber Iudiciorum*, y por consiguiente el trabajo actual que pretende rendir cuentas de sus términos, ha de encerrar un valor no despreciable: se trata de una manifestación directa de la pretensión real de monopolizar la justicia, que sabemos es la clave interpretativa de toda la legislación visigoda; las contradicciones y tensiones entre una tal pretensión y la presencia institucional de realidades progresiva o ya netamente feudales, ocasionalmente reflejadas incluso a propósito de la reglamen-

* En recuerdo de Marcelo Vigil († 1986).

tación de trámites procesales bastante secundarios, aflorarán —pero no siempre— de modo recurrente y significativo, permitiendo el desarrollo de las ideas apuntadas en la entrega anterior al hilo del tratamiento de los detalles procesales en ésta.

La continuidad temática y metodológica exigía numerar los diferentes capítulos o párrafos actuales en correspondencia con los del artículo de 1985, e idéntica observación vale respecto del título del presente. Aquellos capítulos tratarán, sucesivamente, la iniciación del proceso mediante acusaciones o iniciativa judicial (VII), la citación y comparecencia del demandado-acusado (VIII), la situación de la cosa objeto de litigio, cuando fuera el caso (IX), las cuestiones más generales de desarrollo de los pleitos (ferias y días hábiles, horario del juez, criterios de competencia...) (X), la regulación y práctica de la prueba (XI) y la decisión del proceso (XII). Un capítulo extravagante, que lo es sobre todo por mi pretensión de rehuir servidumbres dogmáticas perturbadoras de la reflexión histórica, va dedicado a los intentos de dispensar a la familia real un trato procesal especial; mediante la consideración de semejante argumento vinculo de alguna forma la parte final del «*De negotiis causarum* (I)», referida, como se recordará, a la representación procesal, con cuestiones que interesan a la apertura del procedimiento, por lo que he creído oportuno situarlo al inicio de esta disertación (VI). Por último, y a reservas del cumplimiento pleno de mis proyectos en torno a las prácticas judiciales vigentes en el reino de Toledo, que interesará muy especialmente la actuación de la Iglesia, se encontrará una parte conclusiva (XIII) sintetizando los resultados logrados por la investigación; allí recojo las enseñanzas que el estudio del proceso real visigodo aporta a la mejor comprensión de una sociedad cuyo grado de feudalización ha de aparecer especularmente reflejado por esa parcela de la historia de sus instituciones.

* * *

Las citas —forzosamente numerosas— de las fuentes y de la literatura secundaria van abreviadas: también sigo de ese modo precedentes propios. Según éstos, a continuación del texto incluyo una relación de fuentes y bibliografía, repitiendo incluso los títulos que por estar ya elencados en la primera parte podía haber omitido en

esta ocasión sin demasiada incomodidad para los lectores; pero en ellos pensé al reproducir referencias conocidas junto a otras que empleo ahora de nuevas. Y no hará falta, en fin, justificar la utilización de aquella literatura en la medida que exigen mis hipótesis y el contraste de los datos que las apoyan; he intentado siempre dar cuenta de los *autores* en que me baso o cuya obra respetuosamente discuto, asumiendo en exclusiva la responsabilidad de proclamarlos, a los efectos de estas páginas, *autoridades*. Así se explicará que otras obras, de alegación posible al interesar mis estudios *ratione materiae*, queden silenciadas a lo largo de la exposición; me permito recomendar al lector curioso algunas reflexiones sobre la frase de Jean Bodin con que comenzaba el año pasado.

VI

La contradicción existente entre la transmisibilidad hereditaria de los elementos socioeconómicos cuya posesión determinaba la del poder en el reino de Toledo —riqueza en bienes de todo tipo, dependientes de cualquier condición— y la teórica naturaleza electiva de la corona visigoda exigió, entre otras soluciones institucionales que no deben interesarnos, la promulgación de una copiosa legislación canónica protectora de la familia real, incidiendo como veremos en el terreno mismo del proceso. Se trataba de proteger a (la mujer y) los hijos del monarca frente a las reclamaciones presentadas en su contra, a propósito del patrimonio heredado del rey u obtenido por sus donaciones; se trataba también de evitar condenas y penas de índole variada.

El estudio de los textos correspondientes se presenta como un *prius* respecto de la exposición del régimen jurídico del proceso del *Liber Iudiciorum* (VII y ss.), pues su eficacia habría de consistir precisamente en evitarlo; por otro lado, parece constituir un *posterius* en relación a la consideración de las cuestiones de «capacidad» (IV), ya que, sin comprometerla, los cánones correspondientes pretendían limitar su ejercicio en favor de la familia del rey; la observación puede extenderse al régimen de la representación procesal, donde comencé a manejar estas noticias (V), dada la importancia de la figura en el seno de una sociedad progresivamente feudalizada.

Dentro de tales coordenadas sistemáticas se analiza una información procedente de las actas de los Concilios de Toledo V, a. 636, c. 2; VI, a. 638, c. 16; XIII, a. 683, c. 4; XV, a. 688, *passim*; XVI, a. 693, c. 8; XVII, a. 694, c. 7. De todo ello selecciono lo principal a tenor de la temática de estos estudios, teniendo en cuenta que la existencia de otros trabajos que las utilizan para reconstruir la práctica política del reino de Toledo¹ me exonera ahora de entrar en pormenores. Las fuentes canónicas y la situación histórica que reflejan servirán, finalmente, para interpretar algunas leyes seculares que, a mi modo de ver, acusan la misma situación.

* * *

La historia del siglo VII es la historia de las luchas por el trono entre grupos oligárquicos encontrados, o, si se prefiere, la historia de la aparición y progresivo reforzamiento de las disposiciones normativas encaminadas a lograr la protección del rey visigodo y de su familia. La falsa posición de los parientes más cercanos del rey fallecido o depuesto, tan precaria como para necesitar garantías especiales, derivaba, en mayor o menor medida, de la práctica—institucionalmente inexcusable— de una política de confiscaciones, que había de afectarles: de un lado, ocupante del trono un miembro de la facción contraria a la que venía gobernando, se imponía debilitar a los principales representantes de la oligarquía desplazada (por lo general la familia real, en momentos en que se logra—a veces— la transmisión de la corona a los hijos); de otro, no podía dejarse de disponer de un patrimonio suficiente para recompensar nuevas fidelidades y asegurar así el disfrute estable del poder político. Instrumentos siempre eficaces y brillantes expedientes de legitimación de la acción política, el derecho y el proceso fueron los cauces adecuados en el reino de Toledo para completar

1. Interesan sobre todo José ORLANDIS, «La reina en la monarquía visigoda», pp. 109-135; Abilio BARBERO-Marcelo VIGIL, *La formación del feudalismo*, cuyas pp. 126 y ss. sobre «el juramento de fidelidad, su carácter y castigos que comporta su ruptura» no carecen de referencias—sin ser específicamente abordado— al aspecto que ahora preocupa. Siempre sin un análisis de los datos que recogen podrán consultarse aún DIETRICH CLAUDE, *Adel, Kirche und Königtum*, pp. 102 y ss., 181 y ss., y LUIS A. GARCÍA MORENO, *El fin del reino visigodo de Toledo*, pp. 195 y ss. sobre Concilio de Toledo XV, a. 688.

los efectos de una traición triunfante o de una maniobra cortesana de resultado similar: derecho y proceso visigodos como técnica para realizar las pertinentes confiscaciones y saldar cuentas con los sectores derrotados de la nobleza laica y de la Iglesia. En este contexto, que la protección de la familia del rey frente a los riesgos de un cambio drástico a la hora de la sucesión al trono tuviera, entonces, contenidos procesales, no debe ciertamente extrañarnos: se requería compensar, mediante el juego de idénticas instituciones, la importancia del proceso en tanto vehículo de la represión.

Pero la interpretación de los datos históricos es algo más compleja, como demostrará una reflexión sobre las normas pertinentes. Estas se concentran en torno a dos reinados precisos: en primer lugar la época de Chintila (636-639), donde encuentran una adecuada posición junto a la definición de las reglas sobre sucesión de la corona, eficacia del juramento de fidelidad y régimen del delito de traición; en segundo lugar los años de Ervigio (680-687), que registran la pretensión excepcional de conceder a las normas tuitivas de la familia regia la virtualidad de que venían careciendo en la práctica; la frustración de las pretensiones ervigianas y la continuidad con soluciones anteriores caracterizan las disposiciones conciliares adoptadas en el reinado de Egica (687-702). Veremos a continuación que la tendencia de esas normas protectoras apuntaba a la reproducción, en el terreno de la relación política, de la lógica institucional propia de los lazos de dependencia que articulaban la sociedad de Toledo en su conjunto, en los que, como ya sabemos (IV), se excluía la posibilidad de controlar las actuaciones del *dominus-patronus* por parte de la justicia oficial al estar proscritas las reclamaciones en su contra presentadas por los sometidos (*ser-vi, liberti*, ingenuos menores constituidos *in patrocínio*); el fracaso de esa tendencia, esto es, de los intentos de adecuar el régimen jurídico de los vínculos políticos entre el rey y los súbditos al que regulaba las relaciones entre patronos y dependientes, protagonizados principalmente por Ervigio, supondría en último análisis la imposible afirmación de la monarquía electiva toledana, que, así contradictoria con sus mismas bases sociales, cayó rápidamente descompuesta ante el empuje del Islam.

«Es evidente que, aunque es posible que fuera elegido por los magnates y los obispos, Chintila se sintió fuertemente amenazado desde el momento de su subida al trono», comenta Thompson² a la vista de los escasos testimonios directos que nos quedan de ese reinado (636-639), fundamentalmente reducidos a las actas de los Concilios de Toledo V, a. 636, y VI, a. 638. Las primeras, por entero volcadas en robustecer la posición política del rey —aparte un canon inicial sobre letanías—³, no pueden interpretarse de modo diverso; la aparición de similares normas en las segundas lo confirmaría. Podemos pensar que Chintila preparaba desde comienzos de su reinado —seguramente con el beneplácito de la jerarquía eclesiástica—⁴ el futuro acceso al trono de su hijo Tulga, pero no hace falta recurrir a esta suerte de hipótesis para justificar la necesidad sentida de proteger jurídicamente a la prole real: la inseguridad

2 Edward A. THOMPSON, *Los godos en España*, p. 208

3 El c. 3 introducía requisitos de capacidad para ocupar el trono, el siguiente castigaba a quienes maquinaban contra la vida del rey para sucederle; el c. 5 iba referido a las maldiciones contra el príncipe; el c. 6, a las garantías de las donaciones reales a los *fideles*; el c. 7 ordenaba la insistente lectura de los cánones de tiempos de Sisenando sobre inviolabilidad de la persona del monarca; el c. 8 era relativo a la concesión del perdón regio. Las actas se cierran con un canon laudatorio del reinante Chintila; un decreto de este monarca, encomendando a las autoridades respetar como fiesta oficial los días señalados para las letanías en el c. 1 del Concilio, sigue a las suscripciones.

4. Poco sabemos acerca de las relaciones entre Chintila y los altos dignatarios eclesiásticos, pero las escasas noticias permiten suponer que fueron estrechas: dos convocatorias de concilio general en dieciocho meses (los que median entre el 30 de junio del a. 636, fecha de clausura del Toledano V, y el 9 de enero del a. 638, en que comienza sus sesiones Concilio de Toledo VI), con amplia asistencia de obispos; contenido —cfr. nota anterior— casi exclusivamente político —a favor del rey— de las decisiones conciliares, represión antisemita mediante el primero de los *placita* o compromisos formales de ortodoxia católica impuestos a la judería, a relacionar con el canon «de custodia fidei iudeorum» (c. 3, Concilio de Toledo VI), con olvido de la prohibición isidoriana de conversiones forzadas. Consta además que Chintila —como otros monarcas toledanos— intervino en la promoción de algunos clérigos; cfr. Edward A. THOMPSON, *Los godos en España*, pp. 214-215, donde se refieren las cartas de Braulio resolviendo las dudas planteadas por la consagración —con todo tipo de reservas y defectos litúrgicos— de un sacerdote apoyado por el rey y mal aceptado por Eugenio (I) de Toledo

del propio monarca de Toledo ante la amenaza de sublevaciones que hoy mal llegamos a conocer⁵ sería razón suficiente de la elaboración de algunos preceptos tuitivos con el concurso de la Iglesia.

El primero de esos preceptos, que lo es también de la serie de cánones favorables a la descendencia real que estudiamos en estas páginas, se contiene en el c. 2 del Concilio de Toledo V, a. 636. Presenta en sustancia un contenido procesal, al prever la defensa de los hijos del rey para evitar, sobre todo, que fueran injustamente despojados de sus bienes o, más en general, que se les inquietase con litigios —*causae*— artificiosos sin otra intención que perjudicarlos —*laedendi eos*—⁶; la pena de los trasgresores consistía en el anatema perpetuo y la condenación eterna con apartamiento de todo trato de cristianos, es decir, castigos espirituales propios de los traidores según lo establecido por el Concilio de Toledo IV, a. 633, c. 75 (cfr. IV), cuyas condenas aparecen *expressis verbis* en el canon que vengo comentando⁷. Es lógico pensar que la inclinación a perpetuar una misma familia en el trono de Toledo o, si se prefiere, a transmitir hereditariamente la corona, si, de un lado, habría de resultar congruente con la transmisión hereditaria

5. La insistencia de los cánones de los Concilios de Toledo V y VI sólo se explicaría aceptando la existencia de conjuras, que la legislación conciliar debía castigar y prevenir. Al menos —entre otros posibles ejemplos— el importante c. 2 del Concilio de Toledo V, a. 636, recogido en parte en la nota siguiente, consideraba los atentados contra el rey y su prole como mal que, aun siempre prohibido, se practicaba con contumacia: «Summa autem nobis vigilantia et grandi religionis cura providendum est, ut mala quae adsidue prohibita perpetrantur circuminspecta disciplina ecclesiastica extirpentur».

6. «De custodia salutis regum et defensione prolis praesentium principum.— . Ut omni benignitate omnique firmitate circa omnem posteritatem principis nostri Chintilani regis teneatur dilectio et praebeatur rationabile defensionis adminiculum, ne rebus iuste provisus aut etiam parentum digna provisiones procuratis vel iuris proprietate iniuste fraudenter, ne a quoquam causae inlicitae et exquisitae laedendi eos praebeantur, ne quoquumque modo quibuslibet rebus sprete dilectione molestentur »

7. El preámbulo de las actas de este V Concilio permite pensar que la jerarquía se limitó a sancionar las instrucciones presentadas por el rey, verdadero artífice de estas disposiciones: «qui —*Chintila*— medio nostri coetus ingressus cum obtimatibus et senioribus palatii sui supplex se omnium orationibus commendavit, suosque fideles ita facere sancta exhortatione coegit, atque hanc institutionem, quam ex praecepto eius et decreto nostro sancimus, divina inspiratione praemisit» (Vives, p. 226).

de las relaciones de dependencia, tanto desde el ángulo señorial como desde la situación de los sometidos (cfr. de nuevo IV), de otro, y principalmente, llevaba a extender la normativa represora de la traición en beneficio de la familia del rey, sin olvidar que la protección procesal que se le dispensaba evitaría muy directamente reclamaciones encaminadas a socavar la base patrimonial del grupo en el poder.

Concilio de Toledo VI, a. 638, c. 16, reprodujo estas reglas, citadas incluso como decreto que siempre debía respetarse; pero no faltaron algunas novedades: tal el silencio sobre los castigos que soportarían los incumplidores, seguramente por considerarse suficientes los definidos en el canon del a. 636, que ya conocemos. Se insistía en la protección de los hijos de Chintila mediante asistencia procesal y prohibición de pleitos injustamente incoados *ne de rebus ipsis profligatis aut parentum dignitate procuratis vel largitate principis aut alicuius inpensis aut etiam proprietate debitis fraudentur qualibet insidia calliditatis*; pero también se recordaba que la disposición era una *generalis sententia*, esto es, que habría de regir en el futuro sin limitarse solamente a la descendencia de Chintila. El canon finalizaba recordando las bondades sin número del gobierno de Chintila, benefactor de todo el reino.

El canon del a. 638 preludiaba así el estilo de las demás normas conciliares sobre la cuestión, adoptadas en los reinados de Ervigio y de Egica. Concilio de Toledo XIII, a. 683, c. 4, aparece formalmente —el tomo guardaba silencio sobre el extremo— como concesión de la alta jerarquía eclesiástica y nobiliaria a favor de Ervigio, compensando de algún modo su generosidad por las amnistías a los rebeldes contra Wamba, la condonación de deudas fiscales y los privilegios procesales de la nobleza y los dignatarios de la Iglesia, todo ello con ocasión del mismo Concilio (cc. 1-3). Y en la legislación canónica de tiempos de Egica los preceptos correspondientes (Concilio de Toledo XVI, a. 693, c. 8; XVII, a. 694, c. 7) siguen la fórmula ervigiana: protección de la familia real, concedida como gracia por el Concilio, sin previa solicitud regia.

Pero la dependencia de los cánones de los Concilios XVI y XVII respecto del dictado reinante Ervigio es más profunda, extendiéndose al contenido mismo de la protección otorgada a la familia del rey, considerablemente más amplio que hacía cincuenta o se-

senta años. Junto a la asistencia procesal a los hijos del rey, que era lo que preocupaba en la época de Chintila, esa asistencia se ampliaba en beneficio de la mujer y de los hijos políticos del monarca; se incluía además una larga lista de posibles atentados contra estas personas reales —a su integridad física y su vida misma; a su capacidad para reinar o, en todo caso, para intervenir activamente en la cosa pública⁸; a sus patrimonios— que eran radicalmente proscritos, en un intento supremo de proteger el clan real en una situación de crisis institucional generalizada. Se llegaba incluso a convocar la participación especial de los obispos en defensa de la familia del rey, en defecto de otro patrono procesal de sus intereses (Concilio de Toledo XVII, a. 694, c. 7)⁹.

Es evidente que todas estas normas acusan la defectuosa institucionalización de la relación política vigente en el reino de Toledo, o, lo que es lo mismo, la difícil adaptación del régimen jurídico propio de las relaciones de dependencia al plano más elevado de una monarquía que no acertaremos a explicar al margen de las mismas. No es casual que un rey débil, como fue Ervigio, pretendiese avanzar en esa dirección, acumulando a las que los hechos demostraban dudosas garantías de la estirpe real una fórmula original, fundamentada en el juramento, con idéntico objeto tuitivo. Por el Concilio de Toledo XV, a. 688, que inaugura el reinado de Egica, sabemos de la exigencia por parte de Ervigio de juramentos especiales, destinados a dificultar la persecución judicial de su mujer y sus hijos; la denuncia de Egica, yerno de Ervigio, aunque rápidamente dissociado del grupo palatino en el que se apoyaba su suegro¹⁰, motivaría que las principales reflexiones del decimoquinto

8. Como sería la tonsura violenta o la profesión religiosa forzada, es decir, que Ervigio se vería asaltado por el recuerdo de su actuación contra Wamba. Tal vez el recelo frente a la pena de azotes, que expresa la legislación conciliar tanto de Ervigio como de Egica, se dirigía a salvaguardar aquella capacidad, pues ya vimos (cfr. «*De negotiis causarum* (I)», n. 70), que el castigo corporal a veces se vincula a la pena de *infamia* en el derecho del *Liber*.

9. El Concilio de Toledo XVI, a. 693, c. 8, había introducido ya el deber de decir oraciones especiales en favor de la familia de Egica.

10. Cfr. LUIS A. GARCÍA MORENO, *El fin del reino visigodo de Toledo*, basado en Claude: mientras son muchos los dignatarios laicos que firmando las actas del Concilio de Toledo XIII aparecen de nuevo como suscriptores del XV (p. 195), muy pocos siguen ostentando una elevada posición junto a Egica años

concilio se destinaran a la interpretación de esos vínculos jurados y, en última instancia, a justificar la presentación de acusaciones contra los familiares del rey fallecido.

La información que poseemos es desigual, pues a Egica preocupaba ante todo la promesa que él había otorgado al contraer matrimonio con Cixilo, hija de Ervigio, y bastante menos el juramento prestado por todos los súbditos; tampoco sabemos demasiado sobre la circunstancia histórica que movió a Ervigio a reforzar excepcionalmente las reglas en vigor sobre respeto de la casa real, aunque los datos que ofrecen las mismas actas del XV Concilio permiten entrever acciones violentas del rey contra grupos nobiliarios, cuya posterior respuesta vengativa se querría evitar ¹¹. Es cierto, en todo caso, que Egica juró prestar ayuda judicial a la reina viuda y a los hijos de Ervigio, lo que habría de canalizarse normalmente por la vía de la representación procesal interesada, según fue examinado más arriba (V); es cierto también que el nuevo rey deseaba legitimar las persecuciones judiciales contra su familia política, alegando ante el Concilio que el juramento protector entraba en conflicto con otro, evacuado asimismo por orden de Ervigio antes de acceder al trono, obligándose a gobernar con justicia todo el reino ¹². Los

después, a juzgar por las firmas del Concilio de Toledo XVI, lo que se interpreta como «una importante purga en las filas de la alta nobleza que ocupaba importantes puestos en el gobierno del reino» (p. 204).

11. « Additur super hoc —decía Egica en el tomo, refiriéndose a Ervigio— ut fertur pressurarum eius in plerosque acerbitas, quos indebite rebus et honore privavit, quos de nobili statu in servitutem sui iuris implicuit, quos tormentis subegit, quos etiam violentis iudiciis pressit .» (Vives, p. 451). No veo por qué Edward A. THOMPSON, *Los godos en España*, p. 275, considera que «los últimos años de Ervigio fueron criticados más tarde, aunque tal crítica no es digna de crédito — los documentos no proporcionan detalles, y Egica tenía motivos para exagerar la cuestión»; si faltan ciertamente documentos, los únicos que tenemos presentan el contenido que Thompson, sin razones, rechaza. La obsesión ervigiana por la impunidad de sus hijos y el tranquilo disfrute de sus riquezas estaría justificada si admitimos que el origen de éstas se vinculaba a una política de confiscaciones, que seguramente motivaron presiones de todo tipo en tiempos de Egica para lograr la devolución a los linajes desposeídos, previo proceso.

12. « . Acta sunt ista et specialibus conditionum probantur nexibus inligata. Quarum etiam duarum conditionum inevitabilem et sibi contrariam seriem et illarum quas ob protectionem filiorum suorum mici exegit et istarum

padres conciliares, utilizando los más prolijos y sutiles argumentos, se inclinaron por una interpretación conciliadora de los dos compromisos jurados¹³ cuyo fruto, en la práctica, consistiría en permitir a Egica y a los jueces atender las demandas presentadas contra los hijos de Ervigio¹⁴. A las *conditiones* juradas por los súbditos les fue atribuida similar eficacia: nada en ellas se oponía, según la decisión conciliar, a reclamar en juicio contra la familia regia, si se hacía justamente; los jueces que cursaran las acusaciones no incurrían, en contra de lo que algunos venían afirmando, en el pecado de perjurio, como tampoco los testigos o los representantes de los adversarios procesales de la familia de Ervigio¹⁵.

Que Ervigio aspirase a la defensa de sus hijos mediante vínculos jurados es importante, pues se trataba, en definitiva, de utilizar una institución —el juramento de fidelidad— con un alcance exigido por las tendencias hereditarias en la transmisión de la corona. No hay que olvidar que Egica probablemente estaba emparentado con

quas ob praelectionem regni mici exigendas instituit ... Non enim potero periurii effugere notam si aut iamdicti principis contra iustitiam defendendo prolem non reddidero populis veritatem, aut propter veritatem populorum zelans negotia, erga filios eius promissionis meae non inplevero vota » (Vives, pp. 450-451).

13. « Sic ergo ab illis vinculis iuramenti quibus secreto ante iuravit principem nostrum Egicanem regem sancta synodus absolvendum elegit, ut aut cognatos ad populorum regulam dirigat aut populos in cognatorum iustam defensionem adsumat, ut quasi unius patris germinisque filios utrumque uno devocans in affectu nec in cognatorum iustis negotiis favorem populorum obtendat nec rursus in populorum questibus cognatis favore pertentet » (Vives, p. 468).

14. « Hac igitur ratione praemissa absolutis et discretis personis atque vobis singulorum negotia ipsa quae contra partem iam dicti piae memoriae Ervigi principis vel filiorum eius habeantur proponenda, admisimus, definientes ut legibus canonibusque designata iustitia inter oppositos et respondentes a iudicibusque inconcussa servetur » (Vives, pp. 470-471).

15. « Hac igitur reddita ratione conficitur, ut ad praedictarum seriem conditionum nullus teneatur obnoxius, quisquis repulsa malitia contra iam dicti principis partem aut negotia sibi debita iudicibus iudicanda obiecerit aut qui talium mandata susceperint aut testis iudex qui advocatus testimonium dixerit, aut iudices ipsi qui huiusmodi iuste negotia terminaverint vel hii etiam qui parti iustitiam habenti simpliciter fautores extiterint ad relevationem potius miserorum currentes quam parti cuiquam delectantes esse nocibiles » (Vives, p. 470)

Wamba, por lo que su matrimonio con Cixilo, que debemos considerar una suerte de proclamación oficial de sus expectativas al trono como sucesor de Ervigio, revestiría la condición de alianza entre familias nobles enfrentadas. Jurar especial asistencia procesal a la familia en la que entraba, según había hecho Egica, no era otra cosa que asumir —con juramento— un aspecto capital de los implicados por la relación de dependencia; extender ese juramento a todo el pueblo, a lo que llegó también Ervigio —mostrándonos ahora la fuerza expansiva del régimen institucional de esa relación en el terreno de la fidelidad política—, suponía reproducir, con mejor o peor fortuna, un principio fundamental de los vínculos entre *patroni* y —con el contenido que conocemos (cfr. IV)— *servi*: la imposibilidad —hereditaria— de los segundos de reclamar ante los jueces oficiales en contra de los primeros; imposibilidad —«incapacidad» procesal— que el juramento ervigiano pretendía generalizar.

El fracaso de este intento, que —de haber prosperado— hubiera situado a la familia del rey al margen de la justicia oficial, según lo estaban, respecto de sus dependientes, los *potentes*, fue logrado sobre todo por la colaboración de la Iglesia con Egica, cubriendo ideológicamente sus actuaciones políticas. Pero la reacción del sucesor de Ervigio se prolongó en otros aspectos, que también deben interesarnos. Se trata de la novela editada por Zeumer como LV 2,5,19, *Ut nemo deinceps citra fidem regiam vel propria causarum negotia in deceptione regie potestatis vel cuiuslibet alterius se iuramenti vinculo alligare presumat*, en mi opinión íntimamente relacionada, entre otras fuentes que veremos, con el Concilio de Toledo XV, ya terminado¹⁶. Como ya advirtió Karl Zeumer, esta novela

16. LV 2,5,19, Egica: «Ut nemo deinceps citra fidem regiam vel propria causarum negotia in deceptione regie potestatis vel cuiuslibet alterius se iuramenti vinculo alligare presumat.—Plerumque solet humani generis inimicus pravis corda hominum suggestionibus inretire et fidelium animos pestifero veneni poculo sauciare. Inde quod, quanto plebs regie celsitudinis culmen sincera debet reverentia honorare, tanto amplius vel in eius deceptione vel aliarum personarum videntur mentes plebium excitari. Quidam enim, dum sententiam illam canonis Toletani adtendunt, in qua decretum est, neminem licere citra manifestum et evidens culpe indicium ab honore sui ordinis vel servitio domus regie deici et nec antea vinculorum nexibus inligari vel questionibus subdi, nisi prius in publica fuerint examinatione deducti, subtili se quodammodo iuramento in necem vel abiectioem regiam perfidie nituntur fraudibus alligare,

viene a completar el régimen jurídico de la fidelidad debida al rey, o, si se prefiere una formulación negativa, de su ruptura (traición), pues contiene una prohibición rigurosa de hacer juramentos, con las únicas excepciones del prestado a favor del monarca y de los exigidos en el marco del proceso —*propria causarum negotia*—, bajo las duras penas del delito de traición (cfr. LV 2,1,8, Chindasvinto)¹⁷. Resulta muy claro que Egica reaccionaba, en general contra pactos jurados que podían costarle el trono, y de ahí las referencias en su ley al llamado *habeas corpus* del Concilio de Toledo XIII, a. 683, c. 2, así como, probablemente, a la amarga experiencia que supuso la rebelión del arzobispo toledano Sisberto¹⁸, pero creo que LV 2,5,19 respondía también a la situación provocada por Ervigio al obligar a jurar en beneficio de su familia, con la consiguiente merma de las posibilidades efectivas de iniciar procesos en su contra: si LV 2,5,19 parece, en lo que hace a lo primero, un complemento de aquella otra novela de Egica (LV 2,1,7)¹⁹ en que se legalizaba por fin la prestación del juramento de fidelidad, hasta entonces regulado solamente por normas canónicas demasiado genéricas

ne ea, que fraudis moliuntur peragenda consiliis, ab alterutro cernantur quandoquidem propalari. Quod et temporibus nostris detectum facinus manifestis eorum confessionibus retinetur, qui nostram gloriam conati sunt aut gaudio interimere aut mortifera veneni potione decipere. His igitur nefarie argumentationis consiliis legalibus congruit obviare censuris, quod nec principalis honor qualibet possit gravitate devolvi, et infidelium pectora condigna debeant ultione retundi. Unde speciali edicto decernimus, ut nemo deinceps citra fidem regiam vel propria causarum negotia se cum alio presumat vinculis nectere iuramenti aut in deceptione potestatis regie vel cuiuslibet alterius tam scelerate fraudis audeat actione constringi. Si quis vero amodo aliter, quam premissum est, huiusmodi iuramento se alligare presumserit, illius se noverit legis perculi sanctione, que perfidis noscitur et contra regem agentibus promulgata existere».

17. Página 112, nota 2 de la edición zeumeriana.

18. La condena de Sisberto en Concilio de Toledo XVI, a. 693, cc. 9 y 10 y el «decretum iudicii ab universis editum» (Vives, pp. 513-515). Cfr. Luis A. GARCÍA MORENO, *Prosopografía*, n.º 252, pp. 121-122.

19. Sobre esta ley, con más bibliografía, Carlos PETIT, «*Consuetudo y mos*», pp. 233-235. En p. 234 afirmaba yo entonces que Paulo, el *dux* rebelde contra Wamba, tenía su ducado en Septimania; pero conviene más prudencia ante la escasez de fuentes: lo que únicamente sabemos se recoge por Luis A. GARCÍA MORENO, *Prosopografía*, n.º 111, pp. 65-68

y por la costumbre, encerraba aún, en lo referente a lo segundo, una sanción civil previsoras de argucias como las de Ervigio.

El empleo abusivo del juramento comprometiendo la justicia oficial —su monopolio en las manos del monarca— no sería, con todo, una novedad radical introducida por Ervigio para proteger a su familia frente a las consecuencias imprevisibles de la entronización de un nuevo monarca. Por otros textos sabemos que la crisis en que se debate el reinado de Egica —y que, por ejemplo, dejó constancia en el *Liber* bajo la forma de leyes represoras de las fugas masivas de dependientes (LV 9,1,21) o de los poderes correctivos detentados por los magnates (LV 6,5,13*)— se reflejaba también en el terreno del proceso, indicándonos ahora hasta qué punto llegaron sus esfuerzos para salvaguardar la justicia oficial a despecho de las exigencias impuestas por la feudalización progresiva del reino de Toledo. Hay que destacar muy en especial LV 2,2,10, *De his, qui negotia sua iure principali iudicialiter incipiunt et postea inter se citra iudicium pacificare presumunt et ad convenientiam redire*: después de lamentar la sustracción de la decisión de los litigios a los jueces y a las leyes oficiales, lo que ocasionaba todo tipo de problemas a la hora de resolverlos y para realizar la verdadera justicia, la novela describe como práctica muy extendida —*solent enim plerique*— la existencia de acuerdos privados —*convenientiae*— entre los contendientes, que zanjaban de ese modo sus diferencias al margen del *Liber*, de los *iudices* y del propio rey; esta clase de pactos era radicalmente vetada, de manera que el proceso incoado ante el monarca o sus delegados y jueces debería tramitarse siempre hasta pronunciar el fallo final, con pena —para ambas partes— del doble del valor reclamado a favor del rey o de los oficiales intervinientes, o la alternativa —*si ipsi causidici non habuerint, unde componant*— de doscientos azotes; sólo la autoridad real o judicial podría obligar a la conclusión de un acuerdo entre los litigantes, sin que, lógicamente, jugaran en tal caso las previsiones punitivas examinadas²⁰. Ciertamente, nada nos dice en esta ley que los conve-

20. LV 2,2,10, Egica: «De his, qui negotia sua iure principali iudicialiter incipiunt et postea inter se citra iudicium pacificare presumunt et ad convenientiam redire.—Si cepta causantium negotia dirimentis non terminet discreta censura, non solum difficile sedantur altercantium negotia, sed et diversis causatur obiectionibus iustitia perquisita Solent enim plerique, postquam

nios así prohibidos estuvieran garantizados por medio de juramentos, pero pienso que sería lo más probable al menos hasta la promulgación de LV 2,5,19; esta ley acumularía, entonces, la condena de unas prácticas —indicativas del foso que separaba la realidad social y las prescripciones oficiales— a los objetivos antiervigianos, arriba aludidos. La novela LV 2,2,10 no carecía, además, de antecedentes, pues ya en tiempos de Chindasvinto fue necesaria una ley (LV 2,4,11) para castigar la realización de aquellos tratos —*placita*— que muchos solían concluir al objeto de prestar testimonios interesados; es evidente que se trataba de reprimir desviaciones contrarias a la ley real, surgidas precisamente de la aceptación, aunque no sin reticencias, de los procesos oficiales, pero la posterior prohibición de *convenientiae* por parte de Egica demostraría en mi opinión un progresivo alejamiento de la órbita de la justicia oficial, patente con claridad en las fuentes de finales del siglo VII.

* * *

suarum intentionum iurgia principali adpetunt examine finienda, quadoque resoluti licentia legalem fugiendo iacturam ad convenientie finem deducere, quam regiis auditibus protulerant causam. Ne ergo sub fraudis huius argumento pars causantium iudicialis fori equitatem effugiat, ideo presentis legis sanctione decernimus, ut, quicumque deinceps causam suam contra alium regio intumaverit culmini decernendam, nulla ratione se de iudicio submoveat nec quamlibet cum suo adversario convenientiam agat; sed tam diu cepti negotii propositionem intendat, donec regalis clementia speciale partibus iudicium promat. Quod si inchoatum negotium coram principe, vel quos idem princeps arbitrio suo elegerit, expedire neglexerit et quamcumque definitionem cum suo causidico peregerit, tam petitor quam pulsatus tantum regie potestati persolvere se noverint, quantum ille, cuius petitio extiterit, per causam ipsam conquirere poterat; ita videlicet ut, quod regia potestas exinde facere vel iudicare decreverit in arbitrio voluntatis illius subiaceat. Simili quoque damno et illi mulctandi sunt, qui post cause initium renuentes iudicium de inchoato presumpserint inter se pactitare negotio. Sic quoque tam iudex quam saio damni ipsius exsolutionem inter se dividere debeant. Quod si ipsi causidici non habuerint, unde componant, CC flagellorum ictus utrique accipiant; sicque denuo iudex ille causam ipsam terminandi licentiam habeat. Illos tantundem a legis huius iactura indemnes efficiant, quibus aut regia iussio licentiam deliberationis indulserit, aut quos iudex ille, qui causam terminat, inter se pacificandos absolverit». Cfr. LV 7,4,1, Recesvinto, que castiga (con cinco sueldos) al juez que permite el acuerdo entre el ofendido reclamante y el reo en caso de hurto

Partiendo de una legislación conciliar que favorecía a la familia del rey frente al mismo derecho del proceso, terminamos por situarnos, a propósito de la novela LV 2,2,10, ante la ineficacia de la justicia real en una sociedad, como la hispanovisigoda, con formas de organización feudales: si la *convenientia* en cuanto alternativa de unas actuaciones judiciales realizadas *legaliter*, es decir, con arreglo al *Liber Iudiciorum*, sólo triunfó siglos más tarde, ese triunfo se explica por el desarrollo de un modelo de organización social —el feudalismo— que paulatinamente fue conformando las instituciones del reino de Toledo y se implantó en los reinos cristianos altomedievales; de cánones protectores a condenas de *convenientiae* han servido de eslabón aquellos textos de tiempos de Ervigio y de Egica que atestiguan el imparable asalto del régimen jurídico del patrocinio a las instancias del poder real. Materiales, los vistos en las páginas precedentes, por supuesto diversos, pero prueba —todos ellos— del divorcio creciente entre la *teoría* del derecho del rey y la *práctica* que comprometía su aplicación. El análisis de los trámites y técnicas procedimentales, que abordo en los párrafos siguientes, ofrecerá nuevas ocasiones para comprobar que este tipo de tensiones presidieron el juego institucional de la justicia visigoda.

VII

Siquiera teóricamente, el proceso visigodo es un proceso del rey; no hay apenas margen (legal) para la actuación parajudicial de los litigantes. El juez real lleva su dirección y así, una vez excitado por la demanda o la acusación que presenta el *petitor* o *querellans*, comienza por citar al demandado (*qui pulsatus est*), forzándole a la comparecencia (cfr. VIII). Pero también se admite, como contrapunto a este principio acusatorio presente en el *Liber* como veremos, la iniciativa de oficio del órgano judicial, esto es, la *inquisitio*, especialmente operativa tratándose de la persecución y castigo de ciertos delitos graves. El estudio de los mismos, que nos situará ante una de las más nítidas manifestaciones del carácter regio del derecho procesal visigodo, y del supuesto —habitual, sobre todo respecto a las causas *pro debito*— de la iniciación a instancia de parte, compone el contenido del actual párrafo.

Los jueces del rey estaban abiertos a todo aquel que, gozando de capacidad procesal (cfr. IV), se sintiera lesionado en su esfera de derechos por la conducta de otro u otros, pero como determinadas circunstancias podían impedir o dificultar el ejercicio de esa capacidad, el *Liber* contiene algunas —pocas— reglas especiales para tal clase de supuestos.

En relación con las reclamaciones patrimoniales una ley de Chindasvinto permite la tramitación del litigio, y consiguientemente la admisión de la pertinente demanda, cuando actúa uno solo de varios comuneros, asumiendo así la representación de los intereses de la comunidad, lo que al parecer prohibía una norma anterior desconocida, derogada por Chindasvinto (*legis inconvenientis sententia*)²¹; hay que recordar que respecto a la pluralidad de partes cierta *antiqua* de Leovigildo ordenaba la actuación de uno de los interesados representando a los demás *ut nulla pars multorum intentione aut clamore turbetur* (LV 2,2,3). En ninguno de estos textos se mantiene el régimen cautelar previsto para el caso en derecho romano²².

En relación a algunos delitos —adulterio, en el sentido amplio en que aparece en el *Liber Iudiciorum*, y homicidio— entre las disposiciones sustantivas represivas encontramos ciertas normas procesales, que ahora deben recogerse. Así, si la acusación por adulterio

21. LV 10,1,4, Chindasvinto: «Ut liceat uni heredi respondere, si ab aliquo petitur, et petere, si certe causa qualicumque compellitur.—Cum prisce legis autoritate fuerit constitutum, ut his, qui ad dicendam causam compellitur, non nisi presente eo, qui rei litigiose consors est, audiatur, satis ex hoc petitorum negotia superflue conspeximus dilatari, cum ad dicendam causam pro sua unusquisque persona sufficiat. Igitur ne callida oppositione causantis, dum excusatio pretenditur pro consorte, tricennalis obvient annositas petitori, providentissima deliberatione sancimus, ut, remota excusatione, consortium tam pro eorum quam pro sua persona qui iudicialiter pro comunibus rebus fuerit adpellatus respondeat. Nec ullum preiudicium consortis absentia, si coheres eius iustissime, seu etiam per comentum aut per ignavia fuerit superatus, incurrat; sed si reparare negotium legaliter intenderit, permittatur. Abrogata denique suprafate legis tam inconvenientis sententia, hoc salubre decretum per universos regni nostri populos omni decernimus reverentia valiturum. Hac similis etiam hordo servabitur, si unus forsitam ex consortibus quemquam crediderit lite pulsandum».

22. Cfr. CT 2,12,2, a. 364, sobre la cual Carlos PETIT, *Fiadores y fianzas*, pp. 63-66

correspondía normalmente al marido, cuando la voluntad marital se encontrara disminuida por las pócimas de su mujer una ley chindasvindiana concedía la *accusandi licentia* a los hijos y —en su defecto— a los parientes del marido, estableciendo, además de recompensas para los acusadores sobre los bienes de la culpable, la intervención de la justicia del rey ante la inactividad de los más directos afectados²³. La razón de la regla sobre acusación está muy

23. LV 3,4,13, Chindasvinto (redacción recesvindiana): «De personis, quibus adulterium accusare conceditur, et qualiter perquiri aut convinci iubetur —Si perpetratum scelus legalis censura non reprimit, sceleratorum temeritas ab adsuctis vitis nequaquam quiescit. Ideoque, quia quorundam interdum uxores, viros suos abominantes seseque adulterio polluentes, ita potionibus quibusdam vel maleficiorum factionibus eorundem virorum mentes alienant adque precipitant, ut nec agnitum uxoris adulterium accusare publice vel defendere valeant, nec ab eiusdem adultere coniugis consortio vel dilectione discedant, id in causis talibus omnino servandum est: ut, si eiusdem adultere aut decepti mariti etate sunt legitimi filii, ipsis, iuxta quod maritus adultere poterat, sit aput iudicem mulieris adulterium accusandi vel conprobandi licentia. Certe si aut filii desunt, aut non eiusdem etatis vel sollertie, qui hoc expetire legitime possint, ne fortasse, dum dilatio ulciscendi adulterii intercedit, aut deceptum maritum fraudulenter adultera perimat, aut facultas eius filiis suis aut propinquis ex hac occasione depereat, propinquos mariti adultere sub hac discretionem accusandi adulteram lex ista constituit, ut si, accusationis huius fiduciam adsumentes, adulterium mulieris eorum inquisitione manifeste patuerit, tam eius adultere filii ex ipso iam tempore, quo convicta fuerit tale facinus perpetrasset, quam etiam propinqui sui post eius obitum, si filii defuerint, adultere mulieris obtineant facultatem. Sin autem filii suprestes existunt, et tamen aut non eiusdem etatis aut talis experientie, qui mulieris adulterium accusare vel convincere competenter intendant, tunc ille propincus mariti, qui manifestum mulieris adulterium ultus fuerit, quintam partem facultatis adultere pro labore suo percipiat; quattuor autem partes ad integrum predictorum filii sibi vindicent ac defendant. Nam si, aut propinquorum in hac parte tepiditas aut filiorum neglegentia vel fortasse numeris acceptio utrosque corrumpens, minime fuerit eadem actio a talibus personis quesita, dum ad regiam cognitionem eadem causae pervenerit, ipse procul dubio pro mercedem suam constiturus est, vel a quo debeat tale negotium prosecui, vel quantum prosecutor de rebus scelerat mulieris pro commodo sui laboris incunctanter consequi possit. Verum quia difficile fieri potest, ut per liberas personas mulieris adulterium indagetur, dum frequenter hoc vitium occulte perpetrari sit solitum, proinde, quando ad convincendum adulterium accusate mulieris ingenuitas omnino defuerit, predictis personis, quibus eius adulterium accusare presenti lege perm.issum est, hoc etiam aperte licitum erit, ut per questionem familie utriusque domini accusate mulieris adulterium coram iudice iustissime requiratur».

clara, pues convenía evitar la impunidad del adulterio en la práctica, al igual, seguramente, que castigar el empleo de venenos y conjuros que tanto preocupó a Chindasvinto²⁴, pero en el caso de otra ley del mismo título, LV 3,4,18, Recesvinto, la previsión real sobre las acusaciones viene motivada por el deseo de aceptar principios canónicos: de ese modo explico, al menos, la exigencia de presentar indicios ciertos de culpabilidad cuando fuera acusado de incontinencia sexual —adulterio— algún presbítero, diácono o subdiácono²⁵.

24. Cfr. LV 2,4,1, Chindasvinto, en la que los *malefici* y *venefici* son citados entre las personas, *quibus testificari non liceat*, así como las cuatro leyes chindasvindianas (LV 6,2,1; 6,2,3; 6,2,4; 6,2,5) del título «De maleficis et consulentibus adque veneficis».

25. LV 3,4,18, Recesvinto: «De inmundicia sacerdotum vel ministrorum.— Quia, quanto munditia carnis sacra auctoritat inperat, tanto hanc adpetere ipsius ministros eius clamor informat, adeo et nos ponere finem inlicitis ausibus rite compellimur; quoniam et ipsi divinis nutibus devotissime placere conamur. Igitur quemcumque presbiterum, diaconem adque etiam subdiaconem devote vidue, penitenti seu cuicumque virgini vel muliercule seculari aut coniugio aut adulterio conmixtum esse evidentissime patuerit, mox hoc episcopus sive iudex repperierint, talem conmixtionem disrumpere non retardent. Redacto autem illo in sui pontificis potestatem, sub penitentie lamenta iuxta sacros canones deputetur; quam distractionis eius severitatem, si pontificum torpor implere neclexerit, idem pontifex duas libras auri fisco persolvat et commissum malum vindicare non differat. Quod si corrigere hoc nequiverit, aut concilium adpellet aut regis hoc auditibus nuntiet. Mulieres vero, que illis fuerint predictis inmundiciis implicate, centenis flagellis a iudicibus verberentur, et conmiscendi se illis aditus omnino negetur, servata ad episcopis etiam super hoc scelere in utroque sexu patrum sententia, que canonum decretis agnoscitur ordinata. In ulciscendis autem talibus sceleribus non passim damus accusandi vel puniendi licentiam, nisi aut manifestis indiciis patuerit scelus, aut legitime fuerit id ipsum malum adcusatum adque convictum quatenus nulla videamur intentione vel ordine patrum transgredi precepta sanctorum aut obviare sacris regulis antiquorum». La ley está en relación con Concilio de Toledo VIII, a. 653, c. 2; pero respecto a las garantías de veracidad de la acusación regirían las reglas del derecho canónico antiguo, recogidas en la *Hispana* [por ejemplo, Concilio de Calcedonia, a 451, c. 21; Concilio de Cartago II, a. 390, c. 6; Concilio de Cartago IV (= *Statuta Ecclesiae Antiqua*, atribuidos a Cesáreo de Arlés, aa. 470-543), c. 96; Concilio de Vaison I, c. 7] y en las fuentes canónicas propiamente visigodas (Concilio de Toledo VI, a. 638, c. 11); sobre este punto, Jean GAUDEMET, *L'Eglise dans l'Empire romaine*, p. 261.

Junto al adulterio, el homicidio como supuesto particular en que existen reglas especiales en punto a la *accusandi licentia*. LV 6,5,15, Chindasvinto, la otorga expresamente a todos los parientes de la víctima, incluso los lejanos, y también a los terceros *ne ergo possit evadere homicida quod fecit*, y es que, como reconoce Chindasvinto, el homicida no ha de sentirse seguro cuando sabe que cualquiera tiene legitimación para acusarle²⁶. En seguida veremos que el homicidio —respecto del cual adoptó normas especiales Recesvinto admitiendo testigos serviles, a falta de ingenuos (cfr. IV)— y el adulterio son delitos en los que el rey visigodo establecía la *inquisitio* judicial desencadenante del proceso; la insistencia en forzar la acusación sería entonces un complemento de la iniciativa de oficio, dirigido siempre a lograr su represión.

* * *

Siendo escasas las leyes que nos ilustran sobre requisitos o circunstancias de la reclamación —a veces llamada *actio*—²⁷ que, por lo general, pone en marcha el procedimiento, no son muchas más las que se pronuncian sobre los aspectos formales de las demandas y acusaciones. Salvo las noticias ofrecidas por FV 35 y LV 6,1,6, Chindasvinto, que no creo —según demuestro ahora— debamos generalizar, el silencio de las fuentes es casi total, quedándonos tan sólo la vía de las hipótesis; situados en la misma, todo hace pensar

26. LV 6,5,15, Chindasvinto: «Quod et proximis et extraneis homicida conceditur accusare.—Cum ceterorum criminum reos penas semper oporteat excipere, quas merentur, nefas esse putandum est, homicidas umquam indemnes relinquere, quos severiori magis condecet atrocitate puniri. Ne ergo possit evadere homicida quod fecit, aut aliquis scelus eius presumat forsitan excusando celare, primo proximis occisi datur licentia accusandi; quod si iidem proximi ad querendam defuncti mortem aut tepidi fuerint aut forte distulerint, tunc accusandi homicidam tam omnibus generaliter aliis parentibus quam exteris aditum pandimus; ita ut, qui homicidam fraudulenter excusare conatus fuerit vel defendere, commodum, quod propterea fuerit consecutus, in duplum compellatur accusatori persolvere. Nam homicidii reus numquam potest esse securus, cum contra eum accusationem deferre nulli penitus licentia denegetur».

27. Cfr., por ejemplo, LV 3,4,13, Chindasvinto, para el caso de adulterio; LV 8,1,7, *antiqua*, y LV 10,2,7, Recesvinto, en términos más generales. Pero es evidente la degradación respecto a los conceptos clásicos romanos, por exigencias del vulgarismo: Max KASER, *Zivilprozessrecht*, pp. 467-468.

que el proceso del *Liber Iudiciorum* no llegó a conocer el libelo acusatorio, forma escrita de demanda característica del derecho procesal romano tardío y presente en el Breviario²⁸: las reclamaciones serían normalmente orales, constituyendo la citación judicial cursada al demandado —una *epistula*— el primer medio a disposición de éste para conocer los términos de la controversia.

Mas examinemos esas noticias que no hay que generalizar. En primer lugar, la fórmula 35, correspondiente a una reclamación patrimonial motivada por la ocupación antijurídica de una cosa (probablemente inmuebles o ganados, pues salen a relucir los frutos), con el *nomen iuris* de *libellum* —según la truncada cláusula de datación— o *coniuratio* —término recogido en el dispositivo— y referencias imprecisas a las disposiciones legales en que el reclamante apoya su pretensión²⁹. En segundo lugar, la ley de Chindasvinto, con marcado carácter penal y referencias a la forma de las acusaciones dirigidas al rey —una *epistula*, con suscripciones de testigos— para el caso en que no fuese posible acceder directamente al monarca³⁰. Los dos textos son favorables a la escritura

28. Max KASER, *Zivilprozessrecht*, pp. 460 y ss., con más bibliografía.

29. FV 35: « quia (re)m iuris (me)i debitam, quam ille su(a aua)ritia extra discussionem iudicantis uiolentius usurpatione de meo dominio abstulit, nullos in eodem loco profliget la(b)o(re)s certe nec quicquam inibi augmentet, dum inte(rim m)anente iustitia per legum statuta appetendo iuditiariam potestatem inter partes de ueritate silentium imponatur. Quod si transcen(den)s h(an)c coniurationem nostram hoc quod in iure nostro pertinet in aliquod augmentauerit, sciat se, per iustitia dum nos(tr)o dominio hoc ipsum (p)ro(b)au(erim)us, debere secundum legum instituta de inuasionem uel singulis annis frugum collectione ac sumptus per litis expensas nobis satisfacere et hoc quod inibi profligauit amittere. Factum libellum ». Edición Angel CANELLAS LÓPEZ, *Diplomática hispano-visigoda*, doc. n.º 24, p. 133.

30. LV 6,1,6, Chindasvinto: «Qualiter ad regem accusatio deferatur.—Si quis principi contra quemlibet falsa suggesserit, ita ut dicat eum aduersus regem, gentem uel patriam aliquid nequiter mediatum fuisse aut agere uel egisse, seu in autoritatibus uel preceptis regie potestatis aut eorum, qui iudiciaria ordinatione funguntur, fraudulenter quippiam inmutasse, adque etiam scripturam falsam fecisse uel recitasse falsamque monetam ferisse, sed et si ueneficium uel maleficium aut adulterium uxoris aliene fortasse prodiderit, horum uel similium criminum accusator, que ad capitis periculum uel rerum amissione pertinere uidentur, si uera repperiantur que dixerit, nullam omnino calumniam sustinebit. Si certe quod opponit falsum esse constiterit, et per solam inuidiam id fecisse patuerit, ut iacturam capitis aut detrimentum corporis uel

en relación a querellas y demandas, a cuya redacción habría de contribuir precisamente el primero (FV 35), pero no es difícil reducir la información a su restringido marco de procedencia. Por lo que hace a FV 35, si aceptamos como válida la fecha atribuida al formulario por la mayoría de los visigotistas³¹, su testimonio reflejaría simplemente el *status quaestionis* anterior a la promulgación del *Liber*, o, si preferimos, se trataría de un modelo de *libellum* explicable por la continuidad del Breviario: la derogación de éste —la prohibición de invocar ante los jueces las leyes romanas—³² arrastraría la práctica del uso del libelo propio del derecho romano desde mediados del siglo v. Y si considera el lector demasiado formalista esta argumentación, de nuevo insistiría en el silencio del derecho oficial visigodo sobre la redacción de la reclamación presentada ante el juez, muy significativo dada la prolijidad de la regulación de otras cuestiones relativas a la apertura del procedimiento —por ejemplo, los trámites de citación (*infra* VIII)— en un libro jurídico decididamente favorable al empleo del escrito para todo tipo de actos³³. Tampoco sirve LV 6,1,6, Chindasvinto, a favor

rerum damna pateretur quem accusare conatus est, in potestate traditus accusati, ille hanc penam in se suisque rebus suscipiat, qui hoc alium innocentem pati voluerat. Ita ut ille, qui aliquid scire se dicit, quod ad cognitionem principis possit deduci, et in eo loco fuerit, ubi tunc regiam potestatem esse contigerit, aut per se statim suggerat omne, quod novit, aut per fidelem regis eius auditibus denuncianda procuret. Quod si procul a rege cum esse provenierit, et per aliquem principi mandandum crediderit, quod accusationem alterius dinoscitur pertinere, coram illo, cui hoc suggerendum committit, talem epistulam faciat, per quam evidenter quid mandet exponant. Quam etiam epistulam tres testes, quos sibi novit esse fideles, evidentibus signis aut suscriptionibus simul cum ipso confirment, ut postea quod mandaverit negare non possit».

31. Es decir, la época de Sisebuto (612-621), mencionado en FV 20 como reinante. En contra de Alfonso García-Gallo y a favor de la datación tradicional he tenido oportunidad de pronunciarme en «*Consuetudo y mos*», p. 229 y nota 39; también, «*De negotiis causarum (I)*», pp. 188-189 y nota 73, a cuyos argumentos habría que añadir el conocimiento del libelo por FV 35 en contraste con la discreción que guarda al respecto el *Liber*

32. LV 2,1,10, Recesvinto.

33. Rafael GIBERT, «Prenotariado visigótico», *passim*; Carlos PETIT, *Fiadores y fianzas*, pp. 168 y ss. Aplicaciones concretas del principio de escritura en el proceso —prueba de testigos, tortura, redacción del fallo, citaciones— aparecerán con frecuencia en este trabajo.

de la forma escrita: se trata de una ley sobre delaciones, no demandas, que servirían de base fáctica para actuaciones judiciales *ex officio* del propio rey; su naturaleza penal (inserta en el título *De accusationibus criminum*) tal vez favoreció la extensión en este caso de los requisitos de la *inscriptio*, aceptada en el *Liber* como uno más de los romanismos procesales visigodos³⁴, si es que no fuera más fácil suponer que la circunstancia de la delación ante el rey justificaba, salvo para los altos dignatarios palatinos y demás personajes del círculo real, el recurso a la forma escrita como vehículo de comunicación poco menos que necesario.

* * *

Por *inquisitio* judicial, es decir, sin actuación previa de parte en reclamación del restablecimiento del orden jurídico³⁵, tenía también lugar el proceso según derecho visigodo, lo que es lógico cuando el modelo procesal que establece el *Liber* responde al intento de monopolizar la justicia en las manos del rey de Toledo. De ahí que esta modalidad de iniciación del procedimiento fuese referida al castigo de algunos delitos considerados graves, mereciendo ahora el calificativo de excepcional.

La revisión del *Liber* y la consulta de la exigua bibliografía existente³⁶ ha permitido detectar los siguientes casos: uniones sexuales

34. Theodor MOMMSEN, *Romisches Strafrecht*, pp. 384-386; Felix DAHN, *Westgothische Studien*, pp. 261-262. Volveremos sobre ello al tratar la tortura.

35. Opero con un concepto amplio de *inquisitio*, como el que — esporádicamente— usa Giovanni PUGLIESE, «Processo privato y processo pubblico», p. 108: el carácter inquisitivo que sería la nota del «processo pubblico» entraña, nada más, la atribución al juez de poderes de iniciativa e investigación, y no una confusión entre los papeles de juez y de parte. Para mayores precisiones, cfr. la obra de Brunner citada a continuación.

36. Sobre todo Felix DAHN, *Westgothische Studien*, pp. 265-266 («Verfolgung von Amtswegen»), si bien hay que depurar sus referencias mediante el análisis directo de los textos. También, brevemente, Joaquín CERDÁ Y RUIZ-FUNES, «En torno a la pesquisa y procedimiento inquisitivo», pp. 496-498; pero Cerdá parece demasiado preocupado por trasladar al *Liber* —manejado en la versión, no siempre coincidente, del Fuero Juzgo— el modelo de estudio que emplea respecto de las fuentes medievales (inquisición como forma de iniciar el proceso e inquisición como prueba), cuya descripción, sobre la base de las fuentes francas, debemos sobre todo a Heinrich BRUNNER, «Zeugen- und Inquisitionsbeweis der karolingischen Zeit», especialmente pp. 146 y ss., síntesis conclusiva

prohibidas (LV 3,2,2, *antiqua*; LV 3,2,3, *antiqua*; LV 3,4,17, *antiqua*; LV 3,5,2, Recaredo); homicidio (LV 6,5,14, Chindasvinto; indirectamente, también LV 8,1,3, *antiqua*); abusos episcopales en relación al patrimonio eclesiástico (LV 4,5,6, Wamba); falsedad de moneda (LV 7,6,2, Recesvinto); exposición de niños (LV 4,4,1, *antiqua*). Pero sabemos que era susceptible de delación ante el rey la comisión de delitos (LV 6,1,1, Chindasvinto, con mención expresa de falsedades de escritura y moneda, hechicería, envenenamiento y adulterio, y remisión más general a los crímenes penados con la muerte o la confiscación), resultando de ello la apertura de causa por el tribunal real, a lo que podría agregar el testimonio de otras leyes, *infra* comentadas, donde la presencia de *indices* o delatores —en sede de hurto, en relación a la represión del judaísmo— determinaría asimismo la actuación judicial de oficio. Tampoco faltan en *Liber* previsiones sobre la inmediata intervención del juez real castigando a los delincuentes (entre ellos, los recogidos *supra* LV 3,4,17; LV 8,1,3; LV 3,4,13, Chindasvinto; etc.), lo que se traduciría probablemente en la iniciación de la *causa* sin necesidad de parte acusadora.

Apreciará el lector una cierta coincidencia en cuanto a los delitos que las leyes visigodas aíslan —con mejor o peor fortuna— al efecto de otorgarles un peculiar tratamiento procesal: que éste pase por la enunciación de reglas específicas sobre la *accusandi licentia*, que a su respecto se contemple la acusación formulada ante el rey, que la legislación sobre tortura (cfr. *infra* XI) permita en esos casos la aplicación del tormento incluso en relación a esclavos para inculpar al *dominus* ..., se trata siempre de supuestos muy aproximados, a considerar entre las faltas más graves según los criterios valorativos del legislador de Toledo. Pero éste ha seguido, también ahora, los precedentes que ofrecía el derecho romano tardoantiguo³⁷.

Veamos, en primer lugar, la actuación del juez en caso de *adulterium*. Sobre la misma disponemos de la información de varias

en pp. 243 y ss.; su manejo delimitará bien las distancias que median entre la *inquisitio*-prueba y el sistema probatorio visigodo. Sin especial aportación a mi propósito, aunque de indiscutible interés documental, cfr. ahora Luis GARCÍA DE VALDEAVELLANO, «La pesquisa como medio de prueba», p. 237 sobre derecho visigodo.

37. Theodor MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, pp. 350-351.

leyes, que establecen: (i) la subsidiariedad de la actuación de la justicia real en relación a quienes el derecho del *Liber* define como titulares de una inmediata *accusandi licentia* (LV 3,4,13, Chindasvinto, *supra* recogida), tratándose de infidelidad uxoria; (ii) la intervención directa del juez, separando —llegado el caso— a los amantes e iniciando el proceso para la represión de las uniones entre una ingenua, *domina* (LV 3,2,2, *antiqua*) o no (LV 3,2,3, *antiqua*), con un *servus*³⁸; (iii) el castigo de la mujer *publice fornicata*.

38. LV 3,2,2, *antiqua*: «Si mulier ingenua servo suo vel liberto proprio sese commisceat.—Si ingenua mulier servo suo vel proprio liberto se in adulterio miscuerit aut forsitan eum maritum habere voluerit et ex hoc manifesta probatione convincitur, occidatur; ita ut adulter et adultera ante iudice publice fustigentur et ignibus concrementur. Cum autem per reatum tam turpis admissi quicumque iudex, in quacumque regni nostri provincia constitutus, agnoverit dominam servo suo sive patronam liberto fuisse coniunctam, eos separare non differat; ita ut bona eiusdem mulieris, aut si sunt de alio viro idonei filii, evidenter obtineant, aut propinquis eius legali successione proficiant. Quod si usque ad tertium gradum defecerit heres, tunc omnia fiscus usurpet; ex tali enim consortio filios procreatos constitui non oportet heredes. Illa vero, seu virgo sive vidua fuerit, penam excipiat superius comprehensam. Quod si ad altaria sancta confugerit, donetur a rege, cui iussum fuerit, perenniter servitura»; no hace falta ahora resaltar que esta ley, donde se aplica la pena de muerte en una de sus modalidades más duras, se sitúa entre aquellas que equiparan *servus* y *libertus*, antes estudiadas (cfr. IV). LV 3,2,3, *antiqua* (red recesvindiana): «Si mulier ingenua servo alieno, seu ingenuus ancille aliene sese coniungat.—Si mulier ingenua servo alieno, sive regis, se matrimonio sociaverit sive etiam per adulterium iungere presumerit, statim, ubi primum hoc iudex agnoverit, eos ad separandum festinare non differat, ut penam, quam merentur, hoc est, singuli eorum centena flagella suscipiant. Et si post hanc contradictionem se iterum coniuncxerint, eos iudex apprehendi iubeat et in sua presentia exhiberi, ut unicuique eorum iteratim centena flagella inponere non desistat. Quod si tertia vice se separare noluerint, similiter centena flagella eis inponi iubemus, et ipsa mulier parentibus suis in potestate tradatur. Quod si postmodum eam parentes retrorsum dimiserint, sit ancilla domino eius servi. Filii tamen, et quandocumque et quanticumque, qui ex ea iniquitate fuerint procreati, condicione patris sequantur, ut in servitio permaneant; facultate vero mulieris propinqui sui legali successione conquirant. Ipsam autem legem precipimus custodire et de viris ingennis, qui regias ancillas vel etiam cuiuscumque habuerint copulatas, ut condicionis hec forma servetur». Como vemos, al caso de la unión de la mujer ingenua con esclavo se acumula aquí la del hombre de condición libre con *ancilla*; la ley plantea además otros problemas, como su contenido «germánico» que Alvaro D'Ors, *El Código de Eurico*, pp 136-137, explica pensando en la actividad de

tionem exercens (LV 3,4,17, *antiqua*)³⁹; y (iv) el régimen sancionador —aunque *sicut et canones ecclesiastici proibent*— de los contactos sexuales entre clérigos y viudas o vírgenes consagradas, y penitentes (LV 3,5,2, Recaredo)⁴⁰. La previsión de fuertes penas para los jueces

Leovigildo. Cfr. aún Karl ZEUMER, *Historia de la legislación*, pp. 230-326, donde donde se recogen los textos romanos que sirvieron de fuente a la *antiqua* 2 y los pasajes paralelos a la *antiqua* 3 de otras *leges barbarorum*.

39. LV 3,4,17, *antiqua*: «De meretricibus ingenuis vel ancillis, aut si earum scelus iudices perquirere vel corrigere noluerint.—Si aliqua puella ingenua sive mulier in civitate publice fornicationem exercens meretrix agnoscat et frequenter deprehensa in adulterio, nullo modo erubescens, iugiter multos viros per turpem suam consuetudinem adtrahere cognoscat, huiusmodi a comite civitatis comprehensa CCC flagellis publice verberetur et discussa ante populum dimittatur sub ea conditione, ut postmodum in turpibus viciis nullatenus deprehendatur, nec umquam in civitatem ei veniendi aditus detur. Et si postmodum ad pristina facta redisse cognoscitur, iteratim a comite CCC flagella suscipiat et donetur a nobis alicui pauperi, ubi in gravi servitio permaneat et numquam in civitatem ambulare permittatur. Et si ita forte contingat, ut cum conscientiam patris sui vel matris adulterium admittat, ut quasi per turpem consuetudinem et conversationem victum sibi vel parentibus suis adquirere videatur, et ex hoc pater vel mater fuerint pro hac iniqua conscientia fortasse convicti, singuli eorum centena flagella suscipiant. Si vero ancilla cuiuscumque in civitate simili conversatione habitare dinoscitur, a iudice correpta trecentenis similiter flagellis publice verberetur et decalvata domino reformetur sub ea conditione, ut eam longius a civitate faciat conversari aut certe tali loco transvendat, ubi penitus ad civitatem accessum non habeat. Quod si forsitam nec ad villa transmittere nec vendere voluerit, et iterum ad civitatem reversa fuerit, huiusmodi dominus in conventu publice L flagella suscipiat. Ipsa vero ancilla donetur alicui pauperi, cui rex aut dux vel comes eligere voluerit, ita ut postmodum ad eandem civitatem illi veniendi aditus non prestetur. Quod si contigerit, ut cum domini voluntatem adulterium admisisset, acquirens per fornicationes pecuniam domino suo, et ex hoc publice fuerit convictus, ipse dominus eundem numerum flagellorum, qui superius de eadem continetur ancilla, suscipiat. Similiter et de ipsis precipimus custodiri, que per vicos et villas in fornicandi consuetudine fuerint deprehense. Quod si iudex per negligentiam, aut forte redemptus, talia vitia requirere aut contestari vel distringere noluerit, a comite civitatis C flagella suscipiat et XXX solidos reddat ei, cui a nobis fuerit ordinatum».

40. LV 3,5,2, Recaredo (redacción recesvindiana): «Item de coniugiis et adulteriis incestivis, seu virginibus sacris ac viduis et penitentibus laicali veste vel coitu sorditatis.—Flavius Reccaredus rex universis provinciis Domino ordinante ad regni nostri dicionem pertinentibus Noxia preteritorum operum pravitas fecit futuris temporibus legem ponere et viciosis facinoribus licentius

negligentes venía a reforzar el carácter público del enjuiciamiento en estos supuestos, indicándonos ciertamente la importancia social de los impedimentos para las uniones entre personas de diferente *status* y la aplicación de las leyes de la Iglesia en el reino de Toledo.

Pero los textos nos indican además, y así la ley de Recaredo, que la justicia real desfallecía a veces ante las presiones de los poderosos; a ello responde confesadamente la intervención judicial establecida por Wamba en LV 4,5,6. Como en alguno de los casos anteriores, aquí resulta muy clara la iniciativa del juez faltando acusador, a los efectos, ahora, de la defensa del patrimonio de las iglesias «propias»: una autoridad episcopal cuyos abusos llegaran

inolitis termino iustitie obviare. Audetur denique a multis contra divine legis monita vel contra honestos vite communis mores devotas Deo virgines et continentiam viduitatis cum benedictionem sacerdotis iuxta morem canonum profitentes seu adfinitatis consanguinitate coniunctas feminas aut violenter aut per consensum sibi coniuges sumere et Deo dicatam castitatem vel referendam generis copulationem inconcesse libidinis inmunditia sordidare. Que temeritas, dum vel a viris vel a feminis eiusdem professionis admittitur, et castis aborret moribus et fidem veram inpugnat. Zelamus enim pro veritatem zelo Dei adque ecclesiam sanctam catholicam his fidei nostre commonemus decretis, ut deinceps, sicut et canones ecclesiastici proibent, nullus Deo devotam virginem, nullus sub religionis abitum consistentem sive viduitatis continentiam profitentem seu agentem penitentiam vel sui proximam generis aut eam, de cuius admixtione incestive notam possit subire infamie, non licito conubio aut vim aut consensu accipiat coniugem; quia nec verum poterit esse coniugium, quod a meliori proposito deducitur ad deterius, et sub falsi nominis copula incestiva pollutio et fornicationis inmunditia perpetratur. Hoc vero nefas si agere amodo provinciarum nostrarum cuiuslibet gentis homines sexus utriusque temptaverint, insistente sacerdote vel iudice, etiam si nullus accuset, omnimodis separati exilio perpetuo religentur nec aliqua in defensionem sui longitudine temporis excusentur. Eorum vero bona, qui talia gesserint, si eis de priori coniugio filii defuerint, ipsorum filiis absque infamie notam omnino proficient, qui, licet sint scelerate concepti, sunt tamen unda sacri baptismatis expiati. Quod si filii forte defuerint, illi ad capiendam hereditatem succedant, quibus priscarum legum sanctio legitimam successionem indulgit. Similis quoque de religiosis forma servabitur, quibus nubere canonum sententia proibetur; illis tantum feminis ab ac sententia segregatis, que violentiam coniunctionis indebite sine precedenti vel sequenti consensione pertulerint. Sacerdotes vero vel iudices, si talia cognoscentes ulcisci fortasse distulerint, quinas auri libras fisco cogantur exolvere. Quod si forte id redarguere voluerint, nec poterint, regis hoc auditibus insinuare procurent; ut, quod eorum non potuit vindicare sententia, principalis damnet omnino censura».

a la apropiación de las dotaciones de las iglesias actuaría con frecuencia impidiendo la reclamación ante la justicia real, por lo que sólo los colaboradores del monarca —duques, condes, tiufados y vicarios en especial— podrían refrenar la *dura potestas* del obispo en la práctica ⁴¹. Es evidente que esta disposición, integrada en lo que constituyó un enérgico plan de reforma eclesiástica emprendido

41. LV 4,5,6, Wamba: «De coercitione pontificum, qui pro rebus, quas a suis ecclesiis auferunt, tricennium intercessisse causantur.— Multorum enim mentes pontificum, illicito cupidatis ausu precipites, quedam de his, que in eorum diocesi fundatis ecclesiis pia fidelium oblatione donantur, insatiabilis rapacitatis studio aut iuri ecclesie principalis innectunt, aut donanda aliis vel sub stipendio habenda distribuunt, sicque non solum aliena vota dirumpunt, sed et sacrilegium operantur in eo, quod ecclesie Dei fraudatores existunt ... abrogata ergo deinceps totius cupiditatis licentia, nulli pontificum ultra licebit, aut quicumque ab ecclesiis diocesis sui auferre, aut abstultum quodcumque per obpositionem tricennii vindicari. Non enim in hac causa deinceps tricennale tempus accipiendum est sed quodcumque fuerit veritatis origo monstrata, iustitiam partis sue recipiat. Quia et, ut multiplex annorum series sine repetitione pertranseat, facit hoc prementis dura potestas, que sic subdita sibi sacerdotum comprimit colla, ut pro ablatis rebus intendere contra prementis personam nec audeant nec presumant. Proinde, ne talium silentio vox perenniter expoliata ecclesie conquiescat, licitum erit huius presumptionis admissum et per quemcumque et quodcumque accusatum detegi et imminentis ipsius cause negotium expediri; sub isto videlicet ordine, ut, si heredes fundatoris ecclesie adsunt, ipsa talia prosequantur; sin autem non fuerint, aut etiam, etsi sint, causare tamen noluerint, tunc ducibus vel comitibus, tiufadis atque vicariis sive quibuscumque personis, quos cognitio huius rei adtigerit, et aditus accusandi et licentia tribuitur exequendi . . . Quicumque tamen iudicum tenorem legis huius adimplere neglexerit, quod aut iudicare talia differat aut iudicanda regis auditibus nullo modo innotescat, omnem rei taxationem, quam episcopus ille persolvere debuit, qui talia fecerit, tota ecclesie illi de sua idem iudex proprietate debet componere, cuius accusatum sibi negotium destitit iudicare...». La extensa ley, aquí extractada en función de mis actuales objetivos, ha sido bien estudiada por Abilio BARBERO-Marcelo VIGIL, *La formación del feudalismo*, pp. 80-82, como reflejo «de las contradicciones del reino visigodo en la época de Wamba», advirtiendo en la misma «un doble proceso cuyos resultados eran en ambos casos el reconocimiento de una feudalización inevitable»: la tensión entre el latifundio de iglesias y monasterios frente al episcopado urbano, apostando el rey decididamente por la autonomía de los primeros en relación al segundo, y, en segundo lugar, la necesidad episcopal de acumular riquezas y dependientes para el mantenimiento de la posición de obispo.

por Wamba⁴², ofrecía una de las razones de su deposición y del consiguiente ascenso al trono de Ervigio.

Dos leyes de mediados del siglo VII se ocuparon de la intervención del juez en relación al homicidio y a la falsedad de moneda. La primera, de Chindasvinto (LV 6,5,14), presenta otra vez esa intervención supliendo la falta de ejercicio de la *accusandi licentia* por parte de los parientes —dirigida a ellos se encuentra, como castigo, la privación de derechos hereditarios según precedentes romanos—⁴³ de la víctima, a los que correspondía en especial la acusación; la segunda, recesvindiana (LV 7,6,2) y con iguales precedentes⁴⁴, reprime las alteraciones en el numerario oficial y las acuñaciones falsas mediante un duro y discriminatorio régimen de penas y la necesaria actuación del juez real *ubi primum hoc ... agnoverit*.

* * *

Pero la intervención de oficio por parte del juez respondería las más de las veces a la delación del que llegaba a ser acusado, por lo que las leyes hasta aquí examinadas deben ser completadas estudiando los textos que nos informan sobre los *indices* o delatores. Se trata de una información doblemente parcial, pues, de un lado, procede en su mayoría del título *De indicibus furti* (LV 7,1), que abre en el *Liber* la regulación de los delitos patrimoniales, mientras que, de otro, se insiste en el fenómeno del esclavo delator —ante todo en las leyes antijudaicas— sin demasiadas noticias sobre otras especies de *indices*; semejante parcialidad no resulta indiferente, al permitirnos comprobar, desde luego, las implicaciones de los problemas sociales en la determinación de la técnica y las normas de procedimiento.

Información fragmentaria, pues, desde el punto de vista de las leyes en que aparece la figura del delator, pero todavía aquélla lo es más teniendo en cuenta la escasa reglamentación de las conse-

42. Como sería LV 4,5,7, promulgada en el a. 675, que alegué en «*De negotiis causarum* (I)», p. 218 y nota 140, o los intentos de este rey de introducir novedades en los territorios diocesanos, sobre lo que informa Concilio de Toledo XII, a. 681, c. 4.

43. Karl ZEUMER, p. 280 de su edición.

44. Karl ZEUMER, p. 310 de su edición. El trabajo de Jaime LLUIS Y NAVAS, «La España visigoda ante la falsificación de moneda (Un problema jurídico-monetal)», carece de todo valor.

cuencias procesales de ésta. Si descartamos, como creo, dos de esas leyes donde la presencia del *index* en el procedimiento es una de las cautelas que rodean la aplicación del tormento (LV 7,1,1 y 7,1,5, ambas *antiquae*), del título *De indicibus...* interesarán las leyes 2 (necesaria confirmación dominical de la denuncia presentada por un *servus*) y las 3-4 (efectos de la delación respecto del que la realiza, según su participación —o no— en el hurto); fuera de LV 7,1 encontramos un caso especial a propósito de la legislación sobre violencias y rapiñas (LV 8,1,10, *antiqua*) y varios textos en que el *index* aparece denunciando la violación de las disposiciones contra los judíos (LV 12,2,14, Sisebuto; LV 12,3,13, Ervigio; LV 12,3,16, Ervigio; LV 12,3,18 Ervigio) o la falsedad de moneda (LV 7,6,1; esta ley, sobre cuya paternidad apenas se pronuncian los manuscritos, sería según D'Ors⁴⁵ de Leovigildo). Pudiera añadirse aún LV 7,5,2, Chindasvinto, sobre falsedades documentales, mas la referencia a los *indices* se contiene en unas frases finales recogidas solamente por dos manuscritos de la redacción vulgata (V 4 y 8 de Zeumer), con lo que falta certeza sobre su carácter visigodo. El estilo casuístico del *Liber Iudiciorum* ha llevado, vemos, a menciones dispersas del supuesto de delación, pero hay que imaginarse su vigencia también en casos distintos a los examinados⁴⁶.

La eficacia de las delaciones consistía evidentemente en provocar la apertura del procedimiento a iniciativa del juez real, pero junto a esta consecuencia principal seguían otras, relativas al autor de la denuncia. Este era recompensado económicamente (LV 7,6,1: seis onzas de oro para el ingenuo que delata al monedero falso y tres, o la libertad, para el esclavo; LV 7,1,4, *antiqua*: pago de hasta el valor de la cosa al delator de un hurto; LV 12,2,4, Sisebuto: una libra de oro al esclavo que denuncia a un judío) o bien —siguiendo precedentes romanos—⁴⁷ quedaba exento de responsabilidad penal si había participado en el delito (LV 7,1,2, *antiqua*; LV 7,5,2, Chin-

45. Alvaro D'ORS, *El Código de Eurico*, p. 73.

46. Felix DAHN, *Westgothische Studien*, pp. 262-263, incluye, junto a los textos que recojo, otras leyes del título «De raptu virginum vel viduarum» (LV 3,3); pero yo no he sabido relacionarlas con la existencia de delatores.

47. Fundamental al respecto Theodor MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, pp. 504 y ss.; mas no siempre resulta fácil identificar los textos romanos que sirvieron de fuente (así Karl ZEUMER, p. 287, nota 1, de su edición).

dasvinto, mss. V 4 y 8; cfr. LV 3,5,4, Chindasvinto); los delatores de condición servil podían, en ciertas circunstancias, obtener la libertad (LV 12,2,4, Sisebuto; LV 12,3,16 y 18, las dos de Ervigio).

Las leyes últimamente citadas presentan un interés particular, pues enlazan, de una parte, con las ya estudiadas (cfr. IV) a propósito de comprobar la capacidad procesal de los esclavos visigodos, en tanto que, de otra, y es argumento que todavía no puede tener desarrollo, se vinculan a las normas sobre la tortura —sobre los casos en que venía admitido el tormento de un *servus* para inculpar a su señor—; la eventual contradicción entre la falta de capacidad servil para acusar, especialmente clara respecto al propio *dominus/patronus*, y los objetivos del rey y su aparato judicial, que llevaron —como sabemos— a favorecer la promoción de ciertos esclavos a la selecta categoría del servicio palatino para así denunciar a los señores (cfr. Concilio de Toledo XIII, a. 683, c. 6, en relación a LV 2,2,4, Chindasvinto), otorga el sentido histórico conveniente a las disposiciones examinadas. La conexión tortura *in capite dominorum* y delación servil resulta inmediata, si tenemos en cuenta que el *Liber* contempla la segunda en supuestos de admisión de la primera (cfr. LV 7,6,1, *antiqua*, falsedad de moneda); y esa conexión explica, a mi modo de ver, la insistencia de las leyes de Sisebuto y Ervigio en las denuncias de los esclavos contra sus amos judíos: la deteriorada posición de los judíos, de estatuto jurídico afín al de los traidores (cfr. aún IV), llevaba necesariamente a fomentar su delación con toda clase de recompensas, es decir, a dispensar al judío el tratamiento de la traición también en el momento de iniciación del proceso.

Un supuesto especial de delación contiene, como se recordará, LV 6,1,6, Chindasvinto, cuyo contenido conocemos⁴⁸. Se trata de la denuncia presentada ante el rey, bien por comparecencia personal o mediante uno de sus *fideles*, bien por un escrito firmado por testigos. La información que da esta ley es valiosa, pues permite considerar que los delitos en ella recogidos —la traición, las falsedades de escritura y moneda, el envenenamiento, la hechicería, y el adulterio uxorio, así como, en general, aquellas acciones *que ad capitis periculum vel rerum amissione pertinere videntur*— eran los que

48. Véase nota 30.

llegaban a oídos del monarca, que actuaría en su condición de supremo juez en estos casos; permite también pensar que así eran canalizadas —principalmente— acusaciones en el seno de la nobleza, cobrando sentido las previsiones de LV 2,4,4 sobre la *testificandi licentia* de los siervos del rey (véase *supra*) y —en un momento de reacción nobiliaria— de Concilio de Toledo XIII, a. 683, c. 2, que rodeaba de garantías procesales la inculpación de obispos, nobles y gardingos.

VIII

Frente a otras *leges barbarorum* en que la iniciación del procedimiento queda atribuida, en buena medida, al propio acusador (*mannitio* o convocatoria del demandado a cargo de aquél), el derecho del *Liber Iudiciorum* conoce solamente la citación cursada por el órgano judicial, aparte ahora el supuesto de LV 2,2,4, Chindasvinto, que ya estudiaremos. Sin pensar en la aceptación del derecho procesal romano, se ha querido ver en ello desde la óptica germanista una rápida superación de las fases históricas que conducen, a partir de la *mannitio*, a la citación oficial del juez (*bannitio*), de manera que la legislación visigoda escrita reflejaría el resultado final de una evolución característica del derecho germánico en términos generales⁴⁹; pero a esta concepción puede oponerse una cierta falta de respeto a los datos que suministran, en su parquedad, las fuentes. En efecto: de la vigencia del principio de la convocatoria del demandado por la autoridad judicial nos informaría para el derecho euriciano *Fragmenta Gaudenziana* 11⁵⁰, si es que nos decidimos a adscribir esta fuente a la torturada historia jurídica

49 Heinrich BRUNNER-Claudius Frh. v SCHWERIN, *Deutsche Rechtsgeschichte*, II, pp. 244 y ss., especialmente p. 252.

50. «Si quis iudex miserit nuntium ad aliquem veniendi ad iudicium, et ad quem miserit venire contempserit semel et bis, et si tertio ad iudicis iussum non venerit ad iudicium, perdat causam et restituat debitori suo, quod ei debere constiterit. Et si forte presens non fuerit, quando iudicis preceptio ad domum ipsius venerit, aut infirmitas illum tardaverit, aut forsitan in causa regis fuerit occupatus, si de his tribus una occupatio fuerit super eum, non molestetur. Et si postmodum venerit, restituat debitum suum secundum regis edictum», ed. Karl Zeumer, LV, p. 470. Cfr. Alvaro D'ORS, *El Código de Eurico*, p. 67, y Karl ZEUMER, *Historia de la legislación*, p. 159.

visigoda; pero al menos debe ser pacífico aceptar, sobre la base de la información contenida en la *antigua* LV 8,1,7 —*si quis autem ad negocium dicendum iudicis fuerit admonitione conventus*—, que ya desde tiempos de Leovigildo la única forma de proceder regularmente en el trámite de citación estaba en las manos del *iudex* real. Si tenemos presente además la noticia que ofrece Recaredo en LV 12,1,2 —*sed si privatus cum servis fisci nostri habuerit causationem, actor vel procurator commonitus in iudicio rectoris provincie vel iudicis territorii*...— se habrá de considerar que la ley principal reguladora de las citaciones, LV 2,1,19, Chindasvinto, se limitó a reglamentar con detalle un principio procesal —la convocatoria del demandado por orden del juez— que siempre había estado presente en la mecánica de la administración de justicia visigoda.

La ley chindasvintiana establecía lo siguiente⁵¹. Interpelado el

51. LV 2,1,19, Chindasvinto: «De his, qui admoniti iudicis epistula vel sigillo ad iudicium venire contemnunt.—Iudex cum ab aliquo fuerit interpellatus, adversarium querellantis admonitione unius epistule vel sigilli ad iudicium venire conpellat, sub ea videlicet ratione, ut coram ingenuis personis his, qui a iudice missus extiterit, illi, qui ad causam dicendam conpellitur, offerat epistulam vel sigillum. Et si tali admonitione conventus aut se dilataverit aut ad iudicium venire contemserit, pro dilatione sola quinque auri solidos petitori et pro contemptu quinque alios iudice coactus exolvat. Quod si non habuerit, unde conponat, quinquaginta flagella contemtor idem vel dilator coram iudice verberetur, ita ut non ei flagellorum ista correptio inducat notam infamie. Sin autem solummodo contemtor extiterit et non habuerit, unde compositionem exolvat, absque ulla testificandi iactura XXX flagella suscipiat. His autem, qui pulsatur, si ad accipiendam admonitionem iudicis sese dixerit nullatenus dilatasse vel contempsisse et hoc nullo potuerit teste convinci, dum sacramentum reddiderit, quod per nullam occasionem vel contemptum hoc fecerit, a damnis vel flagellis superius comprehensis habeatur indemnis. Quod si quilibet episcopus admonitionem iudicis, fretus honore sacerdotali, contemserit et pro sua persona adsertorem dare distulerit, confestim a iudice negotii seu a provincie sue duce vel comite compulsus quinquaginta solidorum damnum excipiat, ex qua summa pecunie XX solidi iudice contempto proficiant, XXX vero sacerdoti ipsius petitor consequatur. Si certe presbiter, diaconus vel subdiaconus adque clericus vel monachus ad accipiendam iudicis epistulam vel sigillum se dilataverint aut pro sui persona ad respondendum minime direxerint prosecutorem vel contumaciter fuerint contemtores, unusquisque eorum iuxta legis huius sententiam, que in laicis superius lata est, indicta damna suscipiat; et si non habuerit, unde conponat, eius episcopus moneatur, ut pro eo satis-

juez regio por el demandante (*petitor* o *querellans*), mediante lo que sería una especie de breve demanda oral —con descripción de la cosa para el caso del *furtum* (cfr. LV 7,2,1, *antiqua*)—, procedía a enviar al acusado la pertinente citación a juicio (*ad iudicium venire conpellat*), bajo la forma de una *epistula* sellada⁵² donde posi-

facere, si voluerit, licentiam habeat. Sin autem noluerit, sacramentis coram iudice se noverit obligandum, quod supradictis personis distractionem talem adibeat, ut per XXX dierum spatium ieiuniis continuis adfligantur, sufficiatque illis circa solis hoccasum per dies singulos panis vel aque refectioem accipere, que contumacis vitam rationabili possit distractione corrigere. Tlla omnino discretionem servata, ut, si aut etatis aut egritudinis instantia patuerit, que hanc disciplinam sustinere non posse demonstrat, tam in clericis cuiuscumque ordinis quam in laicis, non tam durissime sententiam castigationis instantia compleat iudicis, sed habita consideratione pro egritudine vel etate, ita contemtoe corrigat, ne ipse contemtoe aut langorem maximum aut debilitationem vel mortem incurrat. Ille vero, qui ad implendam commonitionem iudicis contemtoe extiterit seque ita dilataverit, ut eum iudex tam facile reperire non possit, et si post tempus indictum in diebus quattuor non occurrat, si quinto die venerit, omnem huius legis sententiam se noverit evasurum. Pari modo et qui longius centum milibus pervenitur, si ad undecimum diem post tempus institutum occurrerit, et hunc nullatenus sanctionis huius pena damnabit. Similiter et qui in ducentorum milium spatio constitutus in vicesima prima die, postquam iussus fuerat, se ipsum iudici presentaverit audiendum, eo modo a iactura legis huius habetur indemnis. Similis quoque servabitur ordo, ubi fuerit amplius itineris longitudo. Hii denique, quibus tam rationabile tempus adiectum est, si se ulterius dilatantes minime ad institutum diem superadietionis occurrerint, confestim iudex ea, que pars petit querellantis, reservato negotio dilatatoris, tradere non differat petitori, ita ut, dum contemtoe in postmodum ad negotium dicendum succeserit, si vicesimum primum diem transcenderit, XX auri solidos coactus exolvat. Nam et his, qui de centum milibus superiorem ordinem preteriens constitutionem undecimi diei fuerit supergressus, et idem decem solidorum damnum excipiat, de quibus damnis superius institutis medietatem sibi iudex adquirat, alteram vero medietatem pars petitoris obtineat. Si tamen admonitum aut egritudo ad veniendum nulla suspenderit, aut inundatio fluminum non retinuerit, vel aditum non obstruxerit, in quo montes transituri sunt, conspersio superflua nivium; que necessitas utrum evidenter evenerit, an per excusationem videatur opponi, aut idoneis testibus aut suo iuramento firmabit». Algún comentario a esa ley en Moritz A. von BETHMANN-HOLLWEG, *Der Civilprozess*, IV, pp. 242 y ss.; modernamente, Paul D. KING, *Derecho y sociedad*, pp. 114-116.

52. Cfr. Paul D. KING, *Derecho y sociedad*, p. 115 y nota 61, en que así se interpreta, frente a Zeumer, la expresión legal «amonitione unius epistule vel sigilli»; también Angel CANELLAS LÓPEZ, *Diplomática hispano-visigoda*, p. 61. Una

blemente quedaban recogidos los términos de la reclamación y la fecha prevista para la comparecencia. La entrega de la *epistula*, a cargo del sayón normalmente (*qui a iudice missus extiterit*), se realizaría *coram ingenuis personis*, esto es, con la publicidad necesaria para constituir al demandado en condición de tal ante la comunidad. LV 2,1,19 continúa en este punto fijando un complejo abanico de castigos para los demandados que demoran o no realizan la comparecencia: diez sueldos, a repartir por mitad entre el juez y el actor, *pro dilatione sola*, o cincuenta azotes (sin infamia) como alternativa para los más pobres; cinco sueldos (¿para el *iudex*?) en caso de negativa a aceptar el mandato judicial (*sin autem solummodo contemtor extiterit*), con treinta azotes en caso de impago. El acusado, sin embargo, podía librarse de estos castigos si demostraba, mediante juramento en defecto de otras pruebas, que la incomparecencia obedecía a una justa causa. Tratándose de eclesiásticos, Chindasvinto recogía en su ley otro tipo de castigos: si el acusado era un *episcopus* y éste no enviaba un representante para responder de los cargos ante el juez (cfr. LV 2,3,1, Recesvinto, antes —parágrafo V— estudiada) incurría en la considerable multa de cincuenta sueldos, a repartir entre el *petitor* (treinta sueldos) y el juez (veinte), cuyo pago, cuando el *iudex negotii* no fuera lo suficientemente poderoso para obtenerlo, llegaban a exigir el *comes* o el *dux provincie*; los eclesiásticos de inferior rango —*presbiter, diaconus vel subdiaconus adque clericus vel monachus*— estaban sometidos a las penas pecuniarias establecidas para los laicos, aunque se preveía, como regla especial, purgar el impago con treinta días de severo ayuno, en lugar de los azotes, y —sobre todo— la posibilidad de que fuera el obispo quien pagase la multa. La ley finaliza estableciendo algunos plazos para comparecer en función de la distancia que separa del tribunal convocante, con nueva fijación de multas

iusio obsignata aparece en LV 2,2,7, Chindasvinto. Poseemos además algunos anillos de sello, correspondientes a personajes elevados —si bien no consta su carácter de jueces— que han sido aprovechados en investigaciones prosopográficas: cfr. Gerd KAMPERS, *Personengeschichtliche Studien zum Westgotenreich in Spanien*, núms. 32 (anillo encontrado en Lugo, con el nombre *Ildiver*), 41 (noticias sobre una pizarra con un escrito de *Faustinus* a *Paulus* —de alta posición, según permite pensar la referencia a su *claritas*— en que se habla de «sigilla de tuo anello») y 46 (anillo signatario de *Severa*, mujer noble).

que, diferentes a las primeras, se me ocurre explicar admitiendo éstas referidas solamente a la convocatoria de los acusados que se encontraban junto a la sede del *iudex negotii* y no tenían, entonces, que desplazarse⁵³; la lejanía del demandado reticente sirvió también, con toda probabilidad, para justificar que Chindasvinto atribuyese —pero *reservato negotio dilatoris*— la posesión de las cosas en litigio a la *pars querellantis* (cfr. *infra* IX), si es que tal medida no era efecto de la contumacia en todo caso. Nevadas, enfermedades y otras circunstancias de fuerza mayor, a probar ante el juez, servían para justificar la incomparecencia, pero también para exonerar de castigos físicos —azotes, ayunos— a quienes carecían de la fortaleza necesaria para sufrirlos.

La extensa ley chindasvintiana, que hasta ahora me he esforzado en resumir e interpretar, presenta varios puntos de interés que conviene comentar con algún detenimiento. Ante todo su posición como pieza decisiva de la intervención del aparato regio en los procesos, pues semejante regulación de la citación a juicio, con un arsenal de instrumentos destinado a garantizarla verdaderamente efectivo y variado, respondía muy bien al diseño general de una justicia oficial y pública, en la que los poderes judiciales de conducción del proceso se afirmaban por encima de préstamos tardorromanos y de fórmulas más primitivas —«germánicas»— de resolución semiprivada de las controversias a las que asiste el juez como mero espectador⁵⁴. En efecto: al *iudex* real corresponde amonestar al demandado para que comparezca a juicio; el emisario del *iudex* realiza —normalmente— la entrega de la orden de convocatoria; al mismo *iudex* ha otorgado el rey amplios poderes disciplinarios en castigo de los contumaces; la autoridad real prevé las circunstancias en que podrá excusarse la tardanza o imposibilidad de comparecer ante la justicia oficial, y no otras; la ley del rey llega a cuantificar distancias geográficas, convirtiéndolas en módulos de tiempo a efectos siempre de costreñir a la comparecencia; el rey, mediante los oficiales de que se sirve, somete a su justicia a los dignatarios de la Iglesia, quienes, aun con un régimen especial

53. Pero la ley presenta dificultades de comprensión: Karl ZEUMER, *Historia de la legislación*, p. 159.

54. Heinrich BRUNNER-Claudius Frh. v. SCHWERIN, *Deutsche Rechtsgeschichte*, II, pp. 435 y ss., en especial pp. 439-440.

de sanciones, deben comparecer para responder de las acusaciones en su contra.

Ahora bien: hasta qué punto este modelo de iniciación del proceso, centrado absolutamente en el monopolio político del rey visigodo, fuera viable en una sociedad feudalizada, merece reflexión, desde luego. Hay que advertir, en primer lugar, que la naturaleza compilatoria del *Liber Iudiciorum* respetaba disposiciones, como LV 2,1,19, Chindasvinto, cuando la coyuntura política en que fueron dictadas originariamente era un recuerdo del pasado; cuando, en concreto, los tiempos de un rey enérgico y represor, como había sido Chindasvinto, cedían su lugar al reinado de monarcas más débiles cuya capacidad de imponerse a los *potentes* era reducida en la práctica. El aumento progresivo de las relaciones de dependencia a lo largo del siglo VII minaba las posibilidades efectivas de un control real de los resortes del poder, al margen en cualquier caso de actitudes y condiciones personales de quien los oligarcas de Toledo designaban *rex Gothorum*; reducía entonces, en segundo lugar, la vigencia histórica de un proceso fuertemente vigilado por el rey y sus jueces, a favor de soluciones alternativas en que los contendientes ritualizaban su lucha por el juego de figuras procesales apartadas, a veces, del derecho del rey, también en este terreno específico del establecimiento del litigio: las líneas anteriores (cfr. VI) sobre las *convenientiae* condenadas por Egica (LV 2,2,10) y las que aún seguirán en este párrafo, me eximen ahora de mayores explicaciones.

Tal actitud de cautela ante la repercusión de LV 2,1,19 en la práctica social del siglo VII responde además a la consideración de algún pasaje de su mismo texto: si la fortaleza de Chindasvinto viene acreditada, según el razonamiento de algunos autores⁵⁵, por la energía con que los eclesiásticos, incluso obispos, eran obligados a comparecer ante la justicia real, la fragilidad de esta justicia —aún bajo Chindasvinto— aparece en las previsiones legales que permitían al *iudex negotii* reclamar el auxilio del *comes* y del pode-

55. Así Karl ZEUMER, *Historia de la legislación*, p. 159; Edward A. THOMPSON, *Los godos en España*, pp. 224-225, donde la medida se sitúa en el marco más amplio de la praxis política de Chindasvinto respecto a la Iglesia y que tiene, entre otros, momentos tan llamativos como el encumbramiento de Eugenio a la sede de Toledo, en contra de las súplicas de Braulio.

roso *dux provinciae* para exigir de los obispos el cumplimiento de los mandatos de comparecencia; en este sentido la ley chindasvintiana sería uno más entre otros textos normativos visigodos que establecen similares recursos a los más altos representantes del trono real, y al rey mismo en ocasiones, cuando los poderosos disputan, sobre la base de una posición política sustentada en vínculos de patrocinio, el poder teóricamente exclusivo atribuido al monarca de Toledo⁵⁶. Síntoma de una feudalización creciente que afectaba al orden de la Iglesia y a las relaciones jerárquicas entre los consagrados al servicio divino, LV 2,1,19, reproduce soluciones propias del derecho servil en la esfera eclesiástica, al permitir que fuera el *episcopus* quien pagase las multas en castigo de la incomparecencia de *presbiteri, diaconi, subdiaconi* y *clerici* situados bajo su dependencia: es evidente que la responsabilidad del *dominus* por los hechos ilícitos de los sometidos (cfr. por ejemplo LV 7,2,13, Chindasvinto, *De domino furis*) ha servido aquí como paradigma institucional para establecer el régimen jurídico de los lazos que unen al obispo con los clérigos de la diócesis ante los ojos del rey; es evidente también que la aceptación del papel legal del obispo como filtro interpuesto entre los eclesiásticos que rehúsan la justicia del rey y las pretensiones de éste, acreditada todavía por la vigilancia del ayuno impuesto al clérigo contumaz a cargo —exclusivamente— del obispo, nos da idea de las dificultades que debía vencer Chindasvinto en la imposición de un derecho procesal centrado en la figura del monarca y contradictorio —en tal medida— con la dispersión del poder en el reino de Toledo.

La regulación chindasvindiana de la comparecencia, contenida en la ley que vengo analizando, presenta otra serie de problemas, explicables de nuevo por la difícil afirmación en la práctica del monopolio judicial del rey y sus oficiales. Podemos sospechar que el *saio* auxiliar del juez, contemplado en LV 2,1,19 al efecto de entregar la citación, cedía en ocasiones ante la iniciativa del propio reclamante; al menos, en otra ley *De interruptione tricennii* (LV 10,2,6), debida precisamente a Chindasvinto, encontramos al *possessor* de un bien citado *a iudice seu a repetente*. Es fácil pensar, como

56. Alexander R. KORSUNSKIJ, «O razvitii feodalnij othosheniy v Gotscoy Ispanii», pp. 3-19, así como leyes citadas *infra* en el texto.

hace King⁵⁷, que a veces intervenía el actor en los trámites de citación presentando en persona la *epistula* judicial al demandado, con relajación, en tal supuesto, del estricto control del procedimiento atribuido a los jueces del rey; pero este oscuro pasaje puede tener otra interpretación, sin que la misma, como ha de verse cumplidamente, obligue a revisar la tesis enunciada: mis reservas ante la pasividad de las partes en el desarrollo del litigio —en los trámites inaugurales que por ahora interesan— por depender tan sólo de la actuación del *iudex* de designación real.

Se trata de cuanto sugiere un análisis de LV 2,2,4, también de Chindasvinto. El contenido del texto se refiere a la apertura del procedimiento, en los siguientes términos. Cuando las partes se obligan a comparecer ante el juez en día señalado mediante un *placitum sponsionis* —un compromiso escrito que incorpora la cláusula estipulatoria, probablemente—⁵⁸, los jueces y sayones deberán vigilar por el exacto cumplimiento de ese compromiso, ordenando el pago de la pena prevista en el *placitum* a favor del contendiente que comparece y no puede seguir el pleito por la ausencia injustificada de la otra parte. La ley se encuentra como vemos dirigida a reprimir la indolencia o la colaboración culpable de los jueces con quienes se burlan de la justicia oficial, quebrantando sus compromisos; así tiene sentido que la represión de las actuaciones judiciales torcidas se extienda aún al castigo —mediante el pago al inocente de la cláusula penal inserta en el *placitum*— de aquellos jueces y sayones que destruyan los *placita* o los entreguen a la parte reticente para hacer desaparecer las pruebas de la existencia de un acuerdo de litigar⁵⁹. Si ponemos en relación esta regulación con el

57. Paul D. KING, *Derecho y sociedad*, pp. 115-116.

58. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, *Las garantías reales*, pp. 90 y ss.

59. LV 2,2,4, Chindasvinto: «Ut ambe partes causantium a iudice vel saione placito distringatur, quo possint ad prosequendum negotium pariter convenire.—Sepe negligentia iudicum vel saionum, dum duarum partium sponsio non exigitur, una pars superflue convexatur. Nam occurrente uno ad placitum et alio differente, non parvum dispendium uni parti concutitur. Statuimus ergo cunctosque iudices, vel quibuscumque iudicandi potestas est, commonemus, ut, quotiens pro quoquam negotio per sponsionem placiti constituendum est tempus, quando aut ubi causa dicatur vel debitum fortasse reddatur, pars utraque, hoc est tam petentis quam petiti, ita placito distringantur, ut in constituto die aut per se aut per mandatarios suos presti sint in iudicio, qualiter

inciso destacado en LV 10,2,6, puede suponerse que Chindasvinto contemplaba en el mismo una citación informal del acusado a cargo del demandante, que actuaría exigiendo parajudicialmente el cumplimiento del *placitum*, pero en tal caso, según quedó apuntado, no nos situaríamos fuera de la intervención privada en los trámites oficiales del proceso.

LV 2,2,4, Chindasvinto, es un texto muy complejo, que casa mal con la ley de citaciones que ya conocemos. Pues si LV 2,1,19, según tuve ocasión de exponer en otra sede⁶⁰, ofrece una imagen radicalmente centralizada de la justicia visigoda, en la que los poderes del rey y de sus jueces resultarían decisivos para la resolución pacífica de los conflictos, LV 2,2,4, parece situarse en la línea de disposición del proceso por los litigantes, línea más cercana a la llamada tradición jurídica germánica que a las reglas características del derecho procesal romano tardío. Una vieja monografía de Franz Beyerle participaba de esta interpretación, al considerar la ley chindasvindiana (2,2,4) dentro de las primeras fases evolutivas del procedimiento germánico: estaríamos ante una manifestación del *Terminsgedinge* o *Streitginge*, el acuerdo parajudicial, superador de la violencia que existe entre los contendientes, por el que ambos asumen la obligación de acudir ante el juez en día señalado. La ley visigoda, siempre según Beyerle, vincularía sin embargo, como ejem-

aut propositum negotium finiatur aut debitum reformetur, et pars, que distulerit hac sese a prefinito die suspenderit, aut si infirmitas eum vel itineris necessitas inpedierit, hoc ipsut iudici aut causidico suo non intimaverit neque ad peragendum negotium infra tempus alia lege constitutum occurrerit, stante negotio penam placiti sui illi cogatur exolvere, quem iuxta suam promissionem iudicio adesse constiterit. Quod si iudex hec aut saio adimplere neglexerit et unam partem placito distringens alteram pretermiserit, penam illam, quam illum damnare voluit, quem solum sub placito misit, de suo adimpleat, cui placitum visus est exegisse. Certe si in damno partis alterius placitum, quod ab altero exegit, alteri parti iudex vel saio reddiderit aut fortasse ruperit vel absconderit, penam quidem, que in placito inserta fuerat, de suo illi persolvat, pro cuius causa conscriptum placitum esse constabat; actionem tamen ille, cui competit, peragendam insistat. Damnum sane, quod per placitum in nomine iudicis vel saionis institutum esse dinoscitur, non ad saionem vel iudicem ex omnibus pertinebit; sed, salvo negotio veritatem habentis, medietatem sibi exinde iudex vel saio et medietatem pars petentis per omnia vindicabit».

60. Carlos PETIT, *Fiadores y fianzas*, pp. 126 y ss

plo de una fase más evolucionada, el acuerdo de litigar (*Terminsge-
dinge*) a la convocatoria judicial (*richterliche Vorladung*), demos-
trando la erosión de la primitiva justicia privada a manos del poder
público, pues, en efecto, a tenor de la interpretación del profesor
de Jena y Basilea ⁶¹, el *placitum* o compromiso seguiría al mandato
judicial: al juez competía *sponsionem exigere*, y el mismo juez era
responsable en caso de que *placitum, quod ab altero exegit, alteri
parti iudex vel saio reddiderit aut fortasse ruperit vel absconderit* ⁶².
La citación judicial, garantizada su eficacia mediante una multa
(pública) y no ya por las cláusulas penales del *placitum* ⁶³, sería pro-
pia de un estadio más avanzado en la evolución del proceso germá-
nico, al que correspondería —añado yo, siguiendo el razonamiento
de Beyerle— la ley de Chindasvinto recopilada como LV 2,1,19.

Pero la construcción de Beyerle choca con la circunstancia de
la autoría chindasvindiana de los dos textos controvertidos, con lo
que parece muy problemático considerar que Chindasvinto respe-
taba en un caso la tradición procesal germánica más antigua (LV
2,2,4), introduciendo simultáneamente, más que correcciones, prin-
cipios de procedimiento opuestos a la misma tradición (LV 2,1,19) ⁶⁴.
Convendrá profundizar, por tanto, el estudio de estas leyes y encon-
trarles un sentido al margen de las teorías evolutivas tan del gusto
de Beyerle.

Pudiera suponerse, por supuesto, que la citación a juicio cursada
por el *iudex* oficial en los términos de LV 2,1,19 conducía necesari-
amente a la celebración de un *placitum* entre los litigantes, que
funcionaría así de garantía de la comparecencia del demandado
ante el juez el día y en el lugar establecidos —...*quotiens pro quo-
cumque negotio per sponsionem placiti constituendum est tempus,
quando aut ubi causa dicatur*, LV 2,2,4— ⁶⁵ y de ahí que la ley regu-
ladora del contrato procesal de comparecencia se remitiera a los
plazos establecidos en LV 2,1,19 en orden a realizarla, pero aún cabe

61. En este punto, no obstante su silencio, coincidente con Felix DAHN, *Westgothische Studien*, p. 249.

62. Franz BEYERLE, *Das Entwicklungsproblem im germanischen Rechtsgang*, pp. 95 y ss

63. Franz BEYERLE, *Das Entwicklungsproblem im germanischen Rechtsgang*, p. 97: «So tritt an die Stelle des Bussgedinges die Bussandrohung»

64. Carlos PETIT, *Fiadores y fianzas*, p. 131 y nota 51.

65. Así Beyerle y Dahn, *supra* nota 61.

interpretar que el *placitum sponsionis* establecido por Chindasvinto sería exigible tan sólo en ciertos casos, es decir, cuando el decurso procesal se interrumpe por la incidencia de días feriados (LV 2,1,12, Chindasvinto) o a causa de la imposibilidad —justificada— del juez en proseguir el conocimiento del negocio (LV 2,1,22, Chindasvinto), supuestos ambos en que no había lugar a las penas de la contumacia porque el demandado atendió en un principio la orden de citación y convenía, con todo, asegurar su presencia física —o la actuación del *mandatarius* que lo representara— ante el órgano judicial ⁶⁶; la aparición esporádica de fiadores de comparecencia como alternativa —*si certe* (sc. el demandado) *sit, de cuius fide dubitetur*— al *placitum*, además de evocar la disyunción cláusula penal/fianza que presenta, a favor de la primera, el régimen contractual visigodo en términos generales ⁶⁷, subrayaría precisamente el carácter ancilar del *placitum* respecto de la citación judicial regulada por LV 2,1,19 y su eficacia restringida en el proceso oficial del *Liber Iudiciorum*.

La complejidad aparente de la legislación de Chindasvinto, explicada como vemos por la asunción de principios de diferente origen histórico desde la posición germanista o mediante un inteligente intento de casar dos regímenes abiertamente diferentes acudiendo al argumento de la *lex specialis* (LV 2,2,4 en relación a LV 2,1,19, en los casos —previstos por el mismo legislador— de LV 2,1,12 y 2,1,22), desaparece en mi opinión cuando las sutilezas jurídicas dejan terreno a la interpretación histórica de las circunstancias y los problemas sociales presentes en el reino de Toledo. Hemos visto antes que el diseño de un proceso público, fuertemente controlado por la justicia oficial y en esa medida indisponible por las partes, que afloraba en el instante de su apertura a tenor de LV 2,1,19, habría de resultar contradictorio con la difusión de los lazos de dependencia económica y personal en todos los estratos de la población visigoda, revelando aquella ley sobre citaciones —tal vez la muestra

66. Es la posición de King, *supra* nota 57.

67. Carlos PETIT, *Fiadores y fianzas*, pp. 165 y ss. Pero frente a esta explicación de la escasa importancia de la fianza ha opuesto Alvaro d'Ors un discreto escepticismo: cfr. su nota a mi libro en AHDE 53 (1983), p. 673. J(osé) M(aría) F(ont) parece sin embargo aceptarla; cfr. *Índice histórico español* 27 (enero-diciembre 1981, nn. 90-92), ref. 81-481, p. 95.

más elocuente del procedimiento oficial— las miserias de las pretensiones reales incorporadas al *Liber Iudiciorum*, en el caso —nada despreciable— de los clérigos sometidos a la potestad episcopal; hemos visto también que el abandono del proceso ya entablado y la composición privada de las partes al margen de los jueces del rey y de su derecho —*convenientiae*— aparecía como asunto preocupante a finales del siglo VII. Si tenemos en cuenta todos estos datos, no debería extrañar que Chindasvinto legislase sobre formas de iniciar el proceso como las amparadas por LV 2,2,4, formas que permitían a los contendientes una mayor iniciativa —pero, en principio al menos, no excluyente de la intervención del poder oficial— al respecto: el acuerdo parajudicial concluido entre los litigantes iba destinado, no se olvide, a desencadenar la intervención del juez real; esto es, funcionaba como un pacto de sumisión a su favor, que Chindasvinto no habría de dificultar. Recordemos aún que el juego de las relaciones de patrocinio afectaba a los mismos jueces del rey⁶⁸, con lo que, a mi modo de ver, se puede explicar el contenido de LV 2,2,4, Chindasvinto, como una norma penal en castigo de las desviaciones de los jueces reales, fuera propiamente de la regulación de los pasos iniciales del procedimiento, aunque inevitablemente involucrada en éstos; la negligencia frecuente de jueces y sayones para exigir lo establecido en el *placitum* —*sepe negligentia iudicum vel saionum, dum duarum partium sponsio non exigitur, una pars superflue convexatur*— no sería, entonces, tanto un obstáculo al cumplimiento de un trámite procesal —la celebración del *placitum* de comparecencia tras la citación, según Dahn y Beyerle— determinado en las leyes, cuanto el abandono de los cauces oficiales de resolución de los litigios por parte de aquellos en quienes confiaba el rey para mantener esa importante rama de su poder: unos jueces que, con violencia al acuerdo de las partes, llega-

68. Ofrezco referencias en Carlos PETIT, «*Consuetudo y mos*», p. 249. Y para el mundo de la justicia de la Iglesia, véase, entre otros muchos, el testimonio de Isidor. *Sent.* 3,45,3: «Multi praesules Ecclesiarum, timentes ne ameritiam perdant, et molestiam odiorum incurrant, peccantes non arguunt, et corripere pauperum oppressores verentur; nec pertimescunt de severitate redendae rationis, pro eo quod conticescunt de plebibus sibi commissis», a lo que se referiría sin duda Egica cuando condenaba a los obispos «amicitia intellecti aut beneficio corrupti» (LV 9,1,21). Sobre ello vuelvo *infra*, XII.

ban a desatender interesadamente la pretensión del que acudía a la justicia del rey o destruían el *placitum* incumplido por el otro contendiente.

Me resulta evidente que LV 2,2,4 sólo encuentra explicación en una sociedad en que las vías oficialmente establecidas para zanjar diferencias jurídicas eran objeto de subversión, pues la existencia de los *placita* procesales, con el contenido que permite atribuirles aquella ley, presupone la práctica de resolver los litigios de espaldas a la justicia real —y sin perjuicio de que, cuando se produjeran situaciones como las previstas en LV 2,1,12 y 2,1,22, el derecho del *Liber Iudiciorum* forzara unos acuerdos, garantes de nuevas comparecencias del acusado, cuya importancia operaba fuera de esos supuestos— según acreditan además textos como la novela de Egica LV 2,2,10. Pero es fácil creer (cfr. IV) que el proceso oficial visigodo, y por tanto el interés de los contendientes a acogerse a sus preceptos, podía resultar atractivo hasta dentro de los límites reducidos en que se desarrollaba su vigencia, justificándose de este modo la aparición de convenios de sumisión a la autoridad judicial real; desde tal planteamiento no hace falta insistir en el deseo de garantizar el juego de la justicia del rey, por encima de colaboraciones de los jueces con alguna de las partes, como razón principal de las preocupaciones normativas de Chindasvinto.

Estas últimas afirmaciones enlazan con argumentos que ya han hecho su aparición, pues si, como veíamos, LV 2,1,19, Chindasvinto, pretende extender al mundo de la Iglesia los rigores de la justicia del rey confesando —sin embargo— el papel predominante del obispo, guarda silencio sobre la suerte de los *nobiles* y *potentes* laicos que fueran objeto de acusaciones. De su presencia alterando las previsiones oficiales en el proceso sabemos ya por el estudio de los representantes o mandatarios de las partes (cfr. V); de la influencia que podían llegar a ejercer sobre unos jueces sometidos a los dictados del patrocinio hemos visto varios textos a lo largo del estudio, cuyo número podemos incrementar sin dificultades (así, LV 7,4,6, Recesvinto, *De damno iudicis criminorum indebite absolventis*). En función de todo ello será difícil rechazar que la *negligentia* judicial condenada por Chindasvinto en LV 2,2,4 obedecía a las presiones de los poderosos, estando envueltos personalmente en alguna acusación o bien actuando a favor de alguno de sus sometidos, con lo que

las conclusiones obtenidas respecto de los obispos serían extensibles a los magnates laicos. Al mismo resultado conducen las leyes que testimonian la incapacidad de los jueces para someter a los *potentes* al dictado de la justicia oficial (LV 3,5,2, Recaredo; LV 3,6,1, *antiqua*; LV 7,1,1, *antiqua*; etc.), por lo que no resulta simplemente hipotético imaginarse frecuentes tensiones entre la justicia del rey y los poderosos laicos a la hora de intentar hacerlos responder de la acusación en un juicio. Y este modo de ver las cosas nos permite aún interpretar otras leyes, como LV 2,1,20, Chindasvinto⁶⁹, destinada al castigo de los jueces que negaban cursar la citación al demandado —*et ipse* (sc. el juez) *eum audire noluerit aut sigillum negaverit*— o dificultaban la marcha del proceso *pro patrocínio aut amicitia*, con el alcance específico del último término en el lenguaje de las relaciones de dependencia⁷⁰, o la también chindasvindiana LV 6,4,3, que describe al *iudex, amicitia corruptus vel premio* a propósito de la composición por lesiones⁷¹.

* * *

En íntima conexión con el punto examinado —la citación judicial del demandado— se encuentra la regulación de las garantías de la comparecencia a juicio, que debe merecer ahora alguna conside-

69. LV 2,1,20, Chindasvinto: «Si iudex interpellantem audire contemnat, vel utrum fraudulenter an ignoranter iudicium promat.—Si quis iudici pro adversario suo querellam intulerit, et ipse eum audire noluerit aut sigillum negaverit et per diversas occasiones causam eius protaxerit, pro patrocínio aut amicitia nolens legibus obtemperare, et ipse, qui petit, hoc testibus potuerit adprobare: det ille iudex ei, quem audire noluit, pro fatigationem eius tantum, quantum ipse ab adversario suo secundum legalem iudicium fuerat accepturus, et ipsam causam ille, qui petit, usque ad tempus legibus constitutum ita habeat reservatam, ut, cum eam proponere voluerit, debitam sibi percipiat veritatem. Certe si fraudem aut dilationem iudicis non potuerit petitor adprobare, sacramento suam iudex conscientiam expiet, quod eum nullo malignitatis obtentu vel quolibet favore aut amicitia audire distulerit, et propter hoc culpabilis idem iudex nullatenus habeatur. Eidem tamen iudici liceat, ut in una ebdomada duobus diebus vel omnibus meridianis horis, si voluerit, absque causarum audientia sue vacet domui pro quiete Reliquo vero tempore prolata sibi negotia frequens et absque dilatione qualibet examinet», menciones las últimas que servirán más adelante.

70. Cfr. Hans-Joachim DIESNER, *Isidor von Sevilla und das westgotische Spanien*, p. 101.

71. Véase *infra* XII y notas correspondientes

ración. Ya sabemos que el *placitum* procesal mencionado por LV 2,2,4, Chindasvinto, suponía, al igual que las multas de la ley de citaciones (LV 2,1,19), un medio para forzar la comparecencia ante el juez, en el primer caso por la amenaza de penas convencionales; pero acabamos de observar que las condiciones impuestas por la feudalización de la sociedad visigoda —la mixtificación de la administración real de la justicia mediante el juego del patrocinio— hacían frecuente el incumplimiento de *placita* y cláusulas penales en la práctica. Se justificaría, entonces, la aparición de medios alternativos para asegurar la comparecencia, pero el derecho del *Liber Iudiciorum*, no obstante su carácter monopolizador de la justicia, contempla las garantías de la comparecencia —la posibilidad efectiva de aplicar las previsiones del procedimiento del derecho regio— de modo ciertamente residual: tan sólo en pocos textos, alguno antes invocado, la ley real se preocupa por situar a los acusados ante el juez, indicando los mecanismos técnicos dirigidos a ese fin.

Tenemos, en primer lugar, LV 2,1,12, Chindasvinto. Aquí se regulan las ferias judiciales (véase *infra* X) y su incidencia en la tramitación de los litigios comenzados. Los juristas de Chindasvinto distinguían al respecto entre el caso en que el demandado fuera persona *cui facile credi possit* y el supuesto en que resultase poco fiable (*de cuius fide dubitetur*), para ordenar la celebración de un *placitum* de comparecencia (con cláusula penal, hay que pensar, a la vista de LV 2,2,4) en la primera circunstancia, en tanto, en relación a la segunda, de aquél *de cuius fide dubitetur* era exigido un fiador que asegurase su presencia para finalizar la causa donde y cuando el *iudex* estableciera (*pro se fideiussorem adhibeat, quatenus peractis temporibus supradictis* —sc. las fiestas judiciales— *ad finiendam cum petitore causam, ubi iudex elegerit, remota dilatione occurrat*). Qué se entiende por *fides* en este contexto es algo difícil de precisar: en un primer estudio de LV 2,1,12, enfocado con exclusividad en orden a la exposición del régimen jurídico de las fianzas en derecho visigodo, tuve ocasión de apuntar una interpretación literal y vaga, considerando como «demandado insolvente y mendaz» a la parte *de cuius fide dubitetur*⁷²; pero las reflexiones ante-

72. Carlos PETIT, *Fiadores y fianzas*, p. 135.

riores sobre la infamia y su particular incidencia procesal (cfr. *supra* IV) me obligan a pensar que, tal vez, en esa rápida mención estaban involucradas masas más amplias de la población visigoda, como los judíos (cuya capacidad procesal, no lo olvidemos, propiamente se vería afectada por las medidas de Recesvinto'), así como los infames, traidores o no, al ser víctimas de acusaciones en un proceso; de ser cierta esta explicación, judíos e infames verían enduccionada su condición ante los jueces reales también a la hora de garantizar su presencia en el proceso necesitando de fiadores al efecto, con lo que las observaciones sobre los contenidos procesales de la relación de patrocinio —la facilidad con que el patrono asumía la representación interesada de sus dependientes (cfr. V)— pudieran extenderse de alguna manera a los fiadores de comparecencia, en ciertos casos. LV 2,1,12 menciona también la *fideiussio* a propósito de un rebuscado supuesto, que sirve para acreditar de paso la vigencia práctica de las leyes visigodas, si bien mediante interpretaciones intencionadamente literales destinadas a evitar su correcta aplicación⁷³. Prohibido por Chindasvinto cursar la citación en día festivo, podía darse el caso de que alguien apareciese en público solamente esos días, para escapar así de la orden judicial; contra abuso semejante la ley 2,1,12 declaraba de aplicación el régimen de garantías de comparecencia que hemos examinado, reservando la fianza —con la alternativa del apresamiento bajo el control del juez: *aput iudicem sub custodia*— para el acusado que no otorga un *placitum* (aquél *de quo suspecta sit placiti fides*).

Más fianzas encontramos en las *antiquae* LV 5,7,4, LV 9,1,13 y LV 11,1,8. En estas leyes la garantía personal parece a veces institución protectora del demandado —frente al eventual *dominus*, en caso de la *reclamatio ex libertate in servitute* en un proceso de estado (LV 5,7,4); frente al propietario que reclama como *servus* a un fugitivo acogido a la protección de un tercero (LV 9,1,13)—, acumulando esa primera función a la garantía de la comparecencia, predominante por el contrario en LV 11,1,8: el médico deudor, que no ha de ser apresado, *sub fideiussorem debet consistere*. Una atención especial merece LV 9,1,13, probablemente leovigildiana, *Si fugi-*

73. Me ocupé de otros casos, con uso de un trabajo anterior de Hermann Nehlsen, en «*Consuetudo y mos*», pp. 243-244

*tivus in domum cuiuscumque fuerit inventus*⁷⁴, pues presentando la fuga servil como un posible cambio ilegítimo de patrono —la *domus potentis* aparece convertida en el foco de atracción de los siervos huidos— de nuevo plantea la incidencia de las relaciones de dependencia en la regulación del proceso. En efecto: aceptada en esta ley la regla general que exige la inmediata entrega del fugitivo a quien lo reclama (LV 9,1,8, *antiqua*; LV 9,1,18, Chindasvinto; etc.), se establece especialmente que el reclamante garantizará ante el juez que no le ha de causar daño alguno hasta la resolución de la cuestión de estado, pues en caso contrario el fugitivo permanece bajo la custodia —*fideiussione consistat*— del que lo acoge, en tanto se decide —*rationabiliter*— sobre el fondo del asunto; es evidente que la *antiqua* ampara al fugitivo contra posibles presiones encaminadas a arrancarle una confesión sobre su estado servil (cfr. LV 5,7,7, *antiqua*), pero resulta muy claro también que la ley real acepta el papel que se atribuye el benefactor del fugitivo: garantía de comparecencia —disponibilidad para la justicia oficial— y protección dispensada por quien las circunstancias, y el deseo de un desgraciado tal vez, convertían en un nuevo *patronus*.

Junto al *placitum* y al fiador encontramos así el arresto o la *custodia* del demandado como tercer medio para procurar su comparecencia. Veamos ante todo lo dispuesto en LV 6,4,8, *antiqua*, para D'Ors procedente del derecho euriciano⁷⁵, en la que el arresto vuelve a aparecer en similar concurrencia con la fianza. La ley está referida al delito de lesiones entre ingenuos y ordena que el agresor permanezca en cárcel o bien *sub fideiussore* hasta que la evolución de las heridas permita considerar salva la víctima, pronunciándose la condena correspondiente. Al estudiar esta fianza tuve oportunidad de señalar que la *antiqua* establece una suerte de pri-

74. «Si fugitivus in domum cuiuscumque fuerit inventus.—Si fugitivus in domo potentis vel cuiuslibet fuerit inventus, qui liberum se esse dicat aut fortasse non dicat, repetenti sine delatione reddatur. Ille vero, qui recepit, se iudicio cabeat adfuturum, nullis ante iudicium tormentis eum traditurus, donec aut ste suam vindicet libertatem, aut certe ille adprobet servum, qui repetit. Quod si petitor sta cabere noluerit, fugitivus ille sub illius, aput quem inventus est, fideiussione tamdiu consistat, quamdiu agnosci possit, quid de eodem rationabiliter iudex absque retardatione definiat». Sobre este texto, Carlos PETIT, *Fiadores y fianzas*, pp. 143-144

75 Alvaro D'ORS, *El Código de Eurico*, p 118.

vilegio procesal para los ingenuos, pues respecto de *servi* (LV 6,4,10, *antiqua*: lesiones causadas por *servus* a *ingenuus*; LV 6,4,11, *antiqua*: lesiones entre *servi*) se daba el encarcelamiento sin posibilidad de quedar bajo fiador (cfr. de nuevo LV 6,4,10: el *servus* autor del delito *continuo tradatur in carcerem*), discriminación ésta que no puede atribuirse claramente a Leovigildo⁷⁶. La *antiqua* 6,4,8, coincidente en ello con la ley de Chindasvinto sobre ferias, no se entretiene, en fin, en precisar el ámbito de responsabilidad del fiador ni cuándo era de otorgar la fianza en lugar de proceder al apresamiento; podemos suponer, en relación a lo primero, que el fiador —en tanto garante de la comparecencia— respondería del pago de las multas y composiciones establecidas para el caso de contumacia, así como, probablemente, de la pena que correspondiese a un acusado que escapa por colaboración o falta de diligencia en la custodia (cfr. LV 7,4,3, *antiqua*), mientras que en relación a lo segundo no hay problemas en seguir a Felix Dahn cuando opina⁷⁷ que el *iudex* real, en atención a las condiciones personales del inculpado, decidiría sobre el régimen de garantías —fianza o prisión— de la comparecencia.

Sin perjuicio de lo que venimos examinando, la opción apresamiento/fianza es muy secundaria en unas leyes inclinadas mayoritariamente por el arresto para asegurar que el culpable respondiese ante la justicia real. Tratándose de un proceso por delitos, en especial de los sometidos a lo que se ha llamado sistema punitivo público⁷⁸, la detención del presunto autor —impidiendo así la huída y obstaculizando la comisión de más crímenes— sería la regla habitual⁷⁹; operaba —al menos— en relación al *furtum* (LV 7,2,14 y 7,2,22, ambas *antiquae*), a la falsedad de moneda (LV 7,6,2, Recesvinto), a la *turba* congregada *ad faciendam cedem* (LV 8,1,3, *antiqua*) y respecto del *servus* delincuente cuyo dueño se encuentra *in expeditione publica* (LV 8,1,8, Recesvinto). Pero hay que suponer que también en otras circunstancias se producía el arresto, dada la inclusión en el *Liber Iudiciorum* de un título especial *De custodia et sententia damnatorum* (LV 7,4) donde encontramos dos *antiquae*

76. Carlos PETIT, *Fiadores y fianzas*, pp. 135-137.

77. *Westgothische Studien*, p. 268.

78. Hermann NEHLSSEN, *Sklavenrecht*, pp. 220 y ss.

79. Así Paul D. KING, *Derecho y sociedad*, p. 116.

fijando, una, la pena de quien dejase escapar a un detenido (LV 7,4,3: era de aplicación el castigo del fugitivo), y estableciendo, otra, la suma a percibir por la custodia del reo, satisfecha por éste de ser declarado culpable (LV 7,4,4).

El estatuto privilegiado de los principales del reino, según fue formulado tras la entronización de Ervigio, incidía por otra parte en el aseguramiento de la persona del eventual delincuente mediante prisión, pues la medida estaba excluida a tenor de lo que —desde Dahn— viene conociéndose equívocamente como *habeas corpus visigodo*⁸⁰. Del texto que lo regula (Concilio de Toledo XIII, a. 683, c. 2) interesa recordar ahora que los favorecidos por el precepto —*optimates*, gardingos y altos dignatarios de la Iglesia— se encontraban exentos de todo apremio que pudiera forzar una declaración inculpatoria, en particular violencias corporales y arrestos⁸¹, aunque se disponía también que cuando existiese grave riesgo de rebelión (*eos quod pro conturbatione terrae diligentius oporteat custodiri*) o de fuga al exterior del reino (*quos in locis talibus manere constiterit unde nocibilis perfugii suspicio sit*) los encausados quedaran libres pero bajo una estricta vigilancia, lo que suponía —al parecer— la ruptura temporal con sus familias y bienes⁸². Si

80 Felix DAHN, *Die Könige der Germanen*, VI, pp. 241-242. Como ejemplo significativo me limitaré a recordar Claudio SÁNCHEZ-ALBORNOZ, *En torno a los orígenes del feudalismo*, p. 162 (entre muchas otras). Rafael Gibert y Sánchez de la Vega comentó hace poco el texto, alegando otros posteriores, con motivo de la Semana Internacional de Estudios Visigóticos, celebrada en Madrid en octubre de 1985.

81. « Unde congruam devotioni eius sententiam decernentes hoc in commune decrevimus ut nullus deinceps ex palatini ordinis gradu vel religionis sanctae conventum, regiae subtilitatis astu vel profanae potestatis instinctu sive quorumlibet hominum malitiosae volumptatis obnису citra manifestum et evidens culpaе suae indicium ab honore sui ordinis vel servitio, domus regiae arceatur, non ante vinculoꝝ nexibus inligetur, non quaestioni subdatur, non quibuslibet tormentoꝝ vel flagelloꝝ generibus maceretur, non rebus privetur, non etiam carceralibus custodiis mancipetur, neque adhibitis hinc inde iniustis occasionibus abdicetur, pero quod illi violenta, occulta vel fraudulenta professio extrahatur » (ed. Vives, p. 417). Cfr. *infra* nota 240, con más pasajes del texto.

82. « .Sic tamen repulso omni terroꝝ sub circuminspecta et diligenti custodia habeantur, ut tempus quo iudicari eos oporteat nullo modo sub fraudulencia dilatetur, quo ab uxoribus vel propinquis atque etiam rebus suis diutissime separati professionem suam videantur dedisse inviti » (ed. Vives, p. 417).

ponemos en relación este canon toledano con la *antiqua* sobre lesiones 6,4,8, se apreciará la llamativa extensión a favor de la alta nobleza de soluciones muy ocasionales conocidas por el derecho anterior; pero debemos ser escépticos a la hora de discurrir sobre la vigencia práctica de unos mecanismos políticos que se veían afectados por las relaciones de poder y las circunstancias de cada reinado (cfr. antes VI, sobre la condena de Sisberto por Egica y Concilio de Toledo XVI, a. 693, cc. 9 y 10).

Marginemos este supuesto especial, que volverá a interesar todavía, y centrémonos en el tratamiento del arresto del acusado/demandado. Parece probable que la *custodia damnatorum* correspondía al juez, si bien la ley que la menciona (LV 7,4,4) emplea al respecto una fórmula tan abierta (...*vel hii, qui reos capiunt aut custodiendos accipiunt*) que la falta de fuentes impide precisar; seguramente tenía competencia en estos casos el sayón o alguna autoridad con atributos militares, situación que acentuaría además la progresiva militarización de la administración regia desde las reformas de Chindasvinto y Recesvinto⁸³, pero no puedo excluir otras interpretaciones a la vista de leyes en que la parte acusada —o reclamada en un proceso de estado— permanece bajo vigilancia extrajudicial (cfr. de nuevo LV 9,1,13, *antiqua*; en LV 8,4,19, *antiqua*, se exime de composición al dueño de un perro que hiere o mata al *fugitivus criminus* en el momento de su apresamiento). Habría que admitir, incluso, la detención del demandado en causas *pro debito*, prohibido en un caso particular (el del *medicus*, según LV 11,1,8, *antiqua*) mas permitida en otras leyes (cfr. la *antiqua* LV 6,4,4, *Si itinerantem quis retinuerit iniuriose adque nolenter*, así como LV 9,3,4, *antiqua*, donde encontramos al *debitor*, junto con el *reus*, entre quienes *ad ecclesiam confungunt*); en tales ocasiones la prisión del deudor forzaría el cumplimiento de la prestación ciertamente, pero también evitaba su evasión ante un proceso inminente⁸⁴.

83. LUIS A. GARCÍA MORENO, «Estudios sobre la organización administrativa», pp. 149-155 especialmente.

84. Véase la citada LV 6,4,4, *antiqua*, sobre apresamiento de un viajero: no se pagaría la composición (cinco sueldos) « si debitor illi fuerit et debitum reddere noluerit, sine iniuria hunc territorii iudici presentet, et ipse illi quod iustum est ordinet»; aquí se contempla al deudor dado a la fuga e intercep-

Las últimas referencias vuelven a enfrentarnos al problema de las actuaciones privadas en el marco de la justicia oficial, que aflora nuevamente si consideramos, como cuarta y última técnica destinada a forzar la comparecencia ante el juez, la toma de prendas del demandado. Recesvinto promulgó una ley general prohibiendo las prendaciones bajo pena —para ingenuos— de pago del duplo⁸⁵, pero no sabemos si así se declaraba proscrita solamente la toma extrajudicial de prendas, admitiéndose a favor de la justicia real el recurso a la prenda como garantía para la buena marcha del procedimiento⁸⁶; el silencio del *Liber Iudiciorum*, en abierto contraste con el posterior panorama altomedieval, obliga a considerar con recelo aun esta segunda posibilidad.

IX

Las leyes del *Liber* que nos informan sobre el régimen jurídico de la *res litigiosa* —o, en términos más abiertos, de las cosas objeto de disputa y eventual litigio— enlazan naturalmente con la ya examinada LV 5,6,1, Recesvinto, pues así las unas como la otra sólo encuentran sentido en tanto reacción frente a prácticas surgidas al margen de los mecanismos institucionales del derecho procesal regio, en una línea de lucha contra la crisis imparable de la justicia oficial a causa de la multiplicación de las relaciones de patrocinio. Interesan en este sentido varios textos del título *De invasionibus et direptionibus* (LV 8,1'), a los que se han de agregar aún otros pro-

tado por el acreedor. En general, sobre la prisión por deudas, LV 5,6,5, Chindasvinto y, al respecto, Francisco TOMÁS Y VALIENTE, «La prisión por deudas», pp. 254-259.

85. LV 5,6,1, Recesvinto: «De non pignerando.—Pignerandi licentiam in omnibus submovemus; alioquin si non acceptum pignus presumserit ingenuus de iure alterius usurpare, duplum cogatur exolvere. Servus autem simplum restituat et C flagella suscipiet». Sobre la ley interesará, aunque desde perspectiva distinta, Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, *Las garant,as reales*, pp 72-74

86. Como harían pensar otros textos jurídicos, cercanos a las fuentes propiamente visigodas (*Fragmenta Gaudenziana*, 12 y 13; cfr. Alvaro D'ORS, *El Código de Eurico*, pp. 108-109: Recesvinto suplantó con su ley otra anterior euriciana, cuyo contenido, según lo que hipotéticamente dejan entrever los dos fragmentos gaudenzianos y algunas fuentes romano-vulgares, no sería en modo alguno permisivo de la toma de prendas extrajudicial), y un pasaje circunstancial de una ley de Chindasvinto

cedentes de sedes tan dispares como LV 5,4, *De conmutationibus et venditionibus* y LV 10,3, *De terminis et iimitibus*; de la consideración conjunta de las informaciones que suministran, del estudio —además— de las transformaciones experimentadas por alguna *antiqua* respecto a su primitivo tenor euriciano, se concluye a favor de la existencia de un clima de violencia social que no siempre llegaba a neutralizar el proceso del *Liber Iudiciorum*. Algún secundario pasaje legal, referido a la cosa litigiosa aunque sin tan nítidas conexiones, encontrará todavía atención en el presente párrafo; su misma excepcionalidad —se trata fundamentalmente de LV 10,2,6, *Chindasvinto*— permitirá reforzar la conclusión anterior, pues nos muestra dónde residían los verdaderos problemas de la sociedad hispana —de su derecho— a lo largo de los siglos VI y VII.

* * *

La norma básica de que disponemos es LV 8,1,2⁸⁷, una *antiqua* de procedencia euriciano que recoge el *status quaestionis* sobre el crimen de *invasio* en el derecho romano tardío. Aquí se tipifica la expulsión violenta del poseedor (de un fundo) *priusquam pro ipso iudicis sententia procedat*, esto es, faltando la pertinente declaración judicial a favor del reclamante invasor, consistiendo el castigo en la pérdida de la *causa*, cuando se tratara de acciones violentas del propietario legítimo, o en el pago al despojado de un *tantum, quantum invasit* si el invasor carecía de derechos sobre la cosa disputada. La *antiqua* se revela absolutamente fiel a sus precedentes romanos, bien identificados, entre otras fuentes, en varias *interpretationes* a constituciones recopiladas en el Teodosiano⁸⁸; las

87. LV 8,1,2, *antiqua*: «Si possessor per violentiam expellatur.—Quicumque violenter expulerit possidentem, priusquam pro ipso iudicis sententia procedat, si causam meliorem habuerit, ipsam causam, de qua agitur, perdat. Ille vero, qui violentiam pertulit, universa in statu, quo fuerant, recipiat quod possedit et securus teneat. Si vero illud invasit, quod per iudicium obtinere non potuit, et causam amittat et aliud tantum, quantum invasit, reddat expulso».

88. Alvaro D'ORS, *El Código de Eurico*, pp. 191-192, Karl ZEUMER, p. 213 y nota 2 de su edición. Los textos romanos son CT 4,22,3, a. 389, y su *interpretatio*; CT 2,62,2, a. 330, v su *int*; cfr. además *Edictum Theodorici*, 10. Más referencias da Ernst LEVY, «West-östliches Vulgarrecht und Justinian», p. 268, pues la condena de *invasio* y asimilados sería una de las «Koinzidenzen west-östlichen Vulgarrechts».

penas señaladas, así como el supuesto fáctico del delito —invasión del bien en litigio— serían los descritos en aquéllos. Pudiera pensarse entonces que estamos ante un caso más en el que el respeto por la tradición ha llevado a conservar textos jurídicos carentes de verdadero sentido en la práctica, pero la cuestión no es tan simple, como ahora veremos. De una parte, la actualidad de las invasiones en época propiamente toledana aparece líquidamente por la presencia en el *Liber* de otras leyes emanadas de la cancillería de reyes del siglo VII, cuyas noticias permiten comprender además lo que sucedía con frecuencia bajo el régimen de LV 8,1,2. En segundo lugar, las manipulaciones que sufrieron ciertos pasajes euricianos por la revisión de Leovigildo apuntan en la misma dirección, pues la atracción de alguna regla sobre repartos de tierra entre godos y romanos (CE 312) a la órbita de la *invasio* (LV 5,4,20) sólo puede explicarse si admitimos la importancia social de las invasiones como peligro constante frente a los procesos regios. Por lo demás, la continuidad de la reglamentación romano-tardía de la *invasio* no ha de extrañarnos, si tenemos en cuenta que fue una más entre tantas manifestaciones institucionales propias de la transición de la sociedad esclavista antigua hacia el feudalismo y que tal momento histórico transicional permite interpretar la historia del reino visigodo de Toledo.

Si en ese reino resultaban preocupantes las violencias de las partes, contemporáneas a la misma tramitación del proceso, de nuevo nos encontramos ante la aceptación de los cauces oficiales para resolver controversias jurídicas pero rodeada de toda clase de reticencias (cfr. antes VI, a propósito de LV 2,2,10, Egica). La mención de un doble régimen sancionador para la *invasio* en LV 8,1,2, merece así mayor atención, pues si es muy claro que las ocupaciones realizadas por quien carecía de pretensión legítima sobre el inmueble en litigio funcionaban como alternativa de la intervención judicial en una sociedad violenta, la *invasio* del propietario (el que, según la ley, *causam meliorem habuerit*), además de evocar un primer y arbitrario despojo que querría solventarse mediante la ayuda de la justicia del rey, respondería a un recelo sobre la imparcialidad de los jueces oficiales en sus decisiones, no siempre al margen de los dictados del interés y de los lazos de patrocinio. En este sentido es muy importante LV 8,1,5, Chindasvinto, *Ut nulla res ab alio*

possessa absque iudicio usurpetur. La ley, que desplazó otra anterior de la que tendríamos noticia por FV 35 según Karl Zeumer⁸⁹, dispone, en primer lugar, que ningún oficial real —*comes, vicarius, vilicus, prepositus* ..., es decir, personajes con competencias judiciales y de administración del patrimonio fiscal— ni cualquier *servus* o ingenuo se atreva a usurpar la *res ab alio possessa* antes de producirse la resolución del litigio; el pago del *duplum*, más la devolución de los frutos, castigaría la invasión, previéndose además otras penas —azotes y entrega en servidumbre al ofendido— según la condición servil de los invasores⁹⁰. Que aquí se menciona a los titulares de cargos de la administración regia como posibles invasores, es irrefutable; que se piense en arbitrariedades cometidas por éstos en algún proceso no pasa de ser una hipótesis, probable en mi opinión por los datos ya alegados y por el número no despreciable de disposiciones que castigan al juez *beneficio/amicitia corruptus* (v. gr. LV 6,4,3, Chindasvinto; LV 7,4,6, Recesvinto, donde el *iudex* juzga abusivamente *pro patrocínio aut amicitia alicuius*;

89. Pag. 315, nota 1 de su edición; críticamente Alvaro D'ORS, *El Código de Eurico*, pp. 191-192, a propósito de la previsión sobre los frutos y pensando, en todo caso, en una ley de Leovigildo.

90. LV 8,1,5, Chindasvinto: «Ut nulla res ab alio possessa absque iudicio usurpetur.—Nullus comes, vicarius, vilicus, prepositus, actor aut procurator seu quilibet ingenuus adque etiam servus rem, que ab alio possidetur, post nomen regie potestatis vel dominorum suorum aut suum usurpare presumat ante iudicium. Quod si non expectata discussione id, quod ab alio possidetur aut iuris alterius esse dinoscitur, invaserit, omne, quod abstulit vel presumptuosus invasit (tam in mancipiis quam in ceteris rebus), in duplum ei restituat, de cuius iure visus est abstulisse, hac singulorum annorum fruges, quas inde fideliter colligisse iuraverit, petitori compellatur exolvere. Et tamen, si servus absque domini voluntate hoc fecerit, CC insuper extensus publice flagella suscipiat; ita ut, si dominus pro rei duplicacione noluerit satisfacere, rem, que ablata est, in eo statu cum frugibus restituat et eundem servum pro facti temeritate insistente iudice ei, cuius res invasit vel abstulit, servitutum tradere non desistat. Omnismodis tamen erit sollicite perquirendum, ne qualibet suasionem vel fraudis alicuius conmento idem servus cum illius domini voluntate hoc fecerit, cuius rem ablata esse constiterit. Et si ita reppertum fuerit, iuxta aliam legem dominus, qui suavit vel malum fieri fraudulenter permisit, quantum servus tulerat, septuplum dominus rei domino servi persolvat, et servum suum dominus eius securus possideat». La frase en paréntesis corresponde a un glosema ervigiano; no deja de ser significativa la referencia especial a la *invasio* de esclavos.

LV 9,1,21, Egica). En cualquier caso, de la ley chindasvintiana interesa destacar que la *invasio* llegaba a realizarse, fueran o no oficiales del rey sus autores, *post nomen regie potestatis vel dominorum suorum aut suum*, esto es, que la autoridad real y la de un *dominus*-patrono estaban equiparadas a los efectos prácticos de servir como excusa para interrumpir la marcha de los procesos.

La prohibición de ocupar cosas en disputa con desprecio de la justicia del rey preocupa además en LV 8,1,7, *antiqua*, para D'Ors de Leovigildo⁹¹, donde el agravamiento de las penas tradicionales (tardo)romanas —el invasor con derecho respondía al *duplum*, o al *triplum* caso de no tenerlo— era debido a la ausencia del despojado o a su salida en expedición militar. También con penas especiales, y en parte interesante a nuestro actual argumento, el título *De invasionibus...* incluye una ley de Chindasvinto (LV 8,1,4) donde la actuación violenta de una parte viene claramente presentada como usurpación de las funciones que corresponden a los *iudices* del rey. De esta ley, que castiga la reclusión de *dominus vel domina* en su propia casa o —con el *damnum invasionis* y cien azotes, como regla general, en este segundo caso— la expulsión del *dominus* de la misma, nos atrae ante todo un pasaje final: el castigo por *invasio* se aplicaría a *qui domum alienam sua autoritate sine regis vel iudicis iussione adprehendere, describere aut obsignare presumserint*. A mi modo de ver, y habida cuenta de que Chindasvinto legislaba de manera especial sobre la invasión de una casa (exactamente, y es expresión inhabitual en el *Liber*, una *curtis*), aquí se piensa en una controversia por bienes inmuebles, pero total o parcialmente —es decir, actuaciones abusivas con desprecio a las reglas del proceso— al margen de la justicia oficial; si uno de los contendientes ocupa, pone su sello clausurando la casa o toma cualquier otra medida *sine regis vel iudicis iussione* era punido como invasor. *Adprehendere* es un típico término chindasvindiano (cfr. LV 4,5,4 y LV 10,2,6, ambas de Chindasvinto), que viene a significar entrar en posesión de una cosa; en el contexto de la ley 8,1,4 sería sugestivo entenderlo como toma extrajudicial de prendas, lo que explicaría la ulterior prohibición de Recesvinto (LV 5,6,1), pero debo reconocer que el sentido de ese verbo en los otros textos donde se emplea,

91. Alvaro D'ORS, *El Código de Eurico*, p 192

así como la terminología del *Liber* en materia de prenda ⁹², no apoya demasiado la interpretación. No existen problemas, al menos, respecto del *obsignare* que utiliza Chindasvinto: se trata de marcar el sello del juez o del sayón (cfr. LV 2,2,7 y LV 10,2,6, las dos de este rey), a efectos de ciertos trámites de procedimiento; prohibiendo a un contendiente *obsignare* Chindasvinto reservaba para la justicia oficial determinados actos que habían de corresponderle en exclusiva.

Es claro que con esta disposición el derecho del rey concretaba otras, muy generales y ya conocidas (cfr. III), en represión de quienes actuaran como jueces faltando la *regia iussio* (LV 2,1,18, Chindasvinto; cfr. además LV 2,1,15 y 2,1,17, ambas de Recesvinto), pero conviene simplemente subrayar la alternativa, que aquí aparece, entre actuaciones controladas en el marco del proceso y actuaciones parajudiciales de las partes; esto lo apreciamos además al consultar LV 10,3,4, Recesvinto, ley que regula algunos aspectos de las controversias por la tierra a falta de pruebas sobre los linderos y que contrapone en su parte final el ejercicio de pretensiones *presumptive* o *per iudicium*, otorgando el tratamiento de la invasión (*nam si incondite et improvisè adtemptet aliquatenus accedere velle, liceat hunc domino vere ut violentum accusare et ut invasorem per iudicium legibus abdicare*) al primer caso.

* * *

En términos generales los negocios sobre la *res in contentione posita* se encontraban prohibidos en el derecho euriciano (CE 298), lo que toma Leovigildo, con alguna ampliación (junto a la venta y donación, se menciona el traslado), y queda incluido en el *Liber Iudiciorum* (LV 5,4,9, *antiqua*). El principio —de derecho romano— vuelve aparecer en LV 5,4,20, *antiqua*, basada en CE 312 (donación de la cosa *iudicio repetenda* a un *Gothus*), extendida por Leovigildo al caso de la venta y con castigo de pérdida de la causa más devolución de lo recibido como precio o entrega de cosa similar para quien provoca la *invasio* ⁹³. Según la opinión de D'Ors, Eurico

92. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, *Las garantías reales*, pp 70-72

93. LV 5,4,20, *antiqua*: «Si res ille vendantur aut donentur, que prius debuerint per iudicium obtineri —Si quis rem, que est per iudicium repetenda, priusquam adversarium iudicialiter superaret, ita vendiderit vel donaverit

sustituyó en CE 312 una vieja norma teodoriana relativa a los repartos de tierras, generalizándola para contemplar toda donación de *romanus* a *gothus* mediante una modificación «inspirada por el deseo de implicar en la antigua norma una sanción para la *translatio ad potentiores*, considerando al godo como *potentior* natural en aquella época»; Leovigildo alteraría aún más el texto, situándolo definitivamente bajo la óptica de la *invasio* —y de ahí que redactase otra ley para penar la *translatio ad potentiores* (LV 2,2,8)— sin perjuicio de conservar el capítulo euriciano modificado entre las reglas de los contratos⁹⁴. Si aceptamos esta reconstrucción de la historia de LV 5,4,20, *antiqua*, nos encontraríamos ante un supuesto de reelaboración normativa motivado, sin duda, por la presión de unas circunstancias no siempre favorables a la aplicación pacífica del derecho procesal oficial en el reino de Toledo.

* * *

Veamos ahora un texto que completa, con informaciones sobre reclamaciones de inmuebles, el contenido de este párrafo. Es una ley de Chindasvinto, antes alegada, LV 10,2,6, *De interruptione tricennii*⁹⁵. En sustancia, Chindasvinto ha establecido aquí una serie

alicui aut forsitan tradiderit occupandam, ut absque audientia iudicantis privetur dominium possessoris, ipse, qui possedit, per executionem iudicis rem, que occupata fuerat, statim recipiat nec de eius postmodum repetitione contendat, etiam si bona sit causa petentis. Ille vero, qui hoc vendidit aut donabit vel occupari precepit, quod iuste vindicare nullatenus potuit, eiusdem meriti rem aut pretium ei, a quo victus fuerit, repensare cogatur, quia rem, antequam vindicaret, fecit invadi».

94. Alvaro D'ORS, *El Código de Eurico*, pp. 245-247.

95. LV 10,2,6, Chindasvinto: «De interruptione tricennii.—Sepe proprium ius alterius longiqua possessio in ius transmittit alterius; nam quod XXX quisque annis expletis absque interruptione temporis possidet, nequaquam ulterius per repetentis calumniam amittere potest. Ut ergo tam petenti quam possessori competenter possit esse consultum, id ab omnibus observandum est, ut, quicumque rem, que ab alio per XXV annos et supra, infra XXX tamen possessa est, sui iuris esse adstruxerit, et possessor fortasse, sive a iudice seu a repetente conmonitus, vel reddere distulerit vel rationabiliter responsum parare contemserit aut quamcumque dilatione videatur adferre, sive etiam eiusdem rei, que petitur, absente possessore, hoc est aut in alia provincia aut in expeditione publica positum esse constiterit, tunc iudex id, quod repositur, id est seu possessionem, sive quodcumque fuerit, pro inruptione temporis coram duobus aut tribus ingenuis petenti consignare procuret; ita

de trámites, directamente bajo control judicial, en orden a la interrupción de la prescripción cuando se produce un litigio por la propiedad, mediante un mecanismo consistente en conceder posesión del bien en litigio al que lo demanda durante un plazo de ocho días, ante varios testigos. Sin ser un capítulo tan elocuente como los hasta ahora examinados, no es difícil suponer que la ley pretende evitar violencias por parte del reclamante, y así ordena la intervención del sayón —informado al efecto mediante una *epistula* cuya fórmula se recoge—⁹⁶, pero nos indica además que la resistencia del poseedor a comparecer ante el juez —admitiéndose sin embargo una ausencia justificada— era la razón de la medida; la reticencia frente a la justicia del rey aparece, de nuevo, como mal a extirpar por el legislador visigodo.

ut, si iudex rem ipsam petenti saionis instantia preceperit consignari, per epistulam manu sua suscriptam eundem saionem iuxta modum subterius comprehensum informet. Et si forte possessio est, ubi repositio alicuius substantie sit, ne per rationales excusatio fiat, anulo iudicis aut saionis, qui locum consignat, eadem hostia, ubi res est reposita, per illos octo dies maneant ob-signata, et ille, qui accepit, octo tantum diebus possideat et nihil exinde expendere aut evertere vel alienare presumat; sed in eo tantum loco quod voluerit aut potuerit laboris exercent. Post octo autem dies rem intemeratam dimittat, ab eo, quem possidentem invenerat, indubitanter adprehendendam et nulla ex hoc ille, qui hoocto diebus possedit, calumniam pertimescat; ita tamen, si vel ipse vel pars eius aut posteritas infra XXX annos a die interrupti temporis rem, quam sibi consignari poposcerat, sui iuris esse convincat. Nam si convinci eadem actio taliter non potuerit, ille quidem, qui supprestis est, qui dominium alienum inquietabit, rei domino velut iniustus satisfaciat petitor; aut si aliquid expenderit vel everterit, in quadruplum reddere compellatur; parti vero aius aut posteritati nulla ex hoc ulterius calumnia moveatur, illa evidentissime condicione taxata: ut, si diversarum rerum et in diversis locis hec, de qua agitur, fuerit dispersa facultas, ex omnibus his, que ad eandem pertinent repetitionem, unum, quodcumque fuerit, secundum presentis legis decretum a iussionem iudicis consignatum pro traditione teneatur omnium rerum».

96. «Exemplar epistole informationis.—Ille iudex illi saioni. Informamus te, ut locum illum, quem ille repetit, et nunc in dominio illius esse videtur, iuxta legis ordinem coram duobus aut tribus ingenuis illi consignes octo tantum diebus possidendum; ita ut, si aliquid ibi repositionis habeatur et anulo domini sui non est signatum, propter auferendam excusationem rationalium per illos octo dies anulo tuo maneat ob-signatum; ante vero nihil exinde aliquatenus auferatur» Cfr. Angel CANELLAS LÓPEZ, *Diplomática hispano-visigoda*, pp. 55-56

X

El estudio de la iniciación del procedimiento y sus repercusiones desde el doble punto de vista de la situación jurídica de las partes —acusaciones, comparecencias— y —cuando fuera el caso— del objeto en litigio debe proseguir ahora dando entrada a algunas leyes que nos ilustran sobre ciertas cuestiones generales relacionadas con la práctica de la justicia oficial visigoda. Leyes sobre fiestas judiciales (LV 2,1,12, Chindasvinto), horario de trabajo del juez (LV 2,1,20, Chindasvinto), reglas de competencia (LV 2,1,18, Chindasvinto, entre otras muchas), *auditores* o asesores del juzgador (LV 2,2,2, Chindasvinto) . que interesan, en primer lugar, al objeto de cubrir la temática de estas investigaciones sobre el proceso visigodo del modo más completo posible, pero especialmente, en segundo lugar, porque su consideración ofrece elementos nuevos para apreciar el elevado grado en que el legislador de Toledo pretendía regular y ejercer la administración de justicia en términos exclusivos, lo que conducirá necesariamente, y es un tercer vector de reflexión, a resaltar por nuevas vías la existencia de tensiones sociales que comprometían ese teórico monopolio real de la justicia en la práctica, acreditando la corrección de la tesis central que desarrollan mis páginas anteriores y las presentes.

* * *

La ley de Chindasvinto sobre ferias y períodos de vacancia de la justicia real (LV 2,1,12) es representativa del papel reglamentador que desempeñó ese rey en relación al funcionamiento de la administración visigoda, previsto hasta los últimos detalles, aunque ahora destacará como ejemplo de las tradiciones normativas —romana y eclesiástica, y en el fondo propiamente la segunda— que se encuentran frecuentemente detrás de su obra legislativa. Atrae además, y este aspecto ha merecido ya alguna atención, por las consecuencias estrictamente procesales que la incidencia de un día o una época festivos tenían en la tramitación de la *causa*: recordemos (cfr. VIII) que para casos semejantes Chindasvinto había arbitrado unos mecanismos en garantía de la segunda comparecencia del demandado —*placitum*, fiador— ante la suspensión de actuaciones motivada por la fiesta, cuya repercusión, con todo, se relajaba si la

importancia del trámite judicial —apresamiento y ejecución de un criminal castigado con pena de muerte— o la necesidad de reprimir abusos de las partes basados en una interpretación torcida del texto legal —el ocultamiento, durante días hábiles, del que sabía se le buscaba para ser citado a juicio— exigía su realización. Omitiendo el tratamiento de esta clase de cuestiones más técnicas, me limitaré en lo que sigue a la presentación de las fiestas judiciales contempladas por la ley⁹⁷.

97. LV 2,1,12, Chindasvinto: «De diebus festis et feriatis, in quibus non sunt negotia exequenda.—Die dominico neminem liceat executione constringi, quia omnes causas religio debet excludere; in quo nullus ad causam dicendam nec propter aliquod debitum fortasse solvendum quemquam inquietare presumat. Diebus etiam Pascalibus nulla patimur quemlibet executione teneri, id est per XV dies, septem, qui Pascalem sollemnitatem precedunt, et septem alios, qui secuntur. Nativitatis quoque dominice, Circumcisionis, Epiphanie, Ascensionis et Pentecosten singuli dies simili reverentia venerentur. Necnon et pro messivis feriis a XV. kalendas Augustas usque ad XV. kalendas Septembres, in Cartaginensi vero provincia propter locustarum vastationem adsiduam a XV. kalendas Julias usque in kalendas Augustas messivas ferias precipimus observandas et propter vindemias colligendas a XV. kalendas Octobres usque ad XV. kalendas Novembres. Omnibus hanc constitutionem concedimus, ut per hec tempora nullus ad causam dicendam venire cogatur vel sub executione aliqua deputetur nisi forte causa, pro qua conpellitur, cepta iam aput iudicem fuisse videatur. Nam procul dubio, si inquoata fuisse hactio repperitur, ad peragendum negotium absque ulla feriatorum dierum obiectione cogendus est qui pulsatur; ita ut, si persona est, cui facile credi possit, placito districtus abscedat; si certe sit, de cuius fide dubitetur, pro se fideiussorem adhibeat, quatenus peractis temporibus supradictis ad finiendam cum petitore causam, ubi iudex elegerit, remota dilatione occurrat. Preter qui tale crimen admiserint, quos necesse sit sententia mortis puniri, qui etiam in talibus omnino diebus et comprehendendi sunt et ardua in vinculis custodia retinendi, quousque, peracto die dominico vel feriis supradictis, debita eos subsequatur ultio iudicantis. Messivis sane vel vindemialibus feriis in criminosas et dignas morti personas legalis nullatenus censura cessabit. Sed nec illum ista lex excusatum habebit, qui necdum ad iudicium ante compulsus, et tamen, sciens esse se quandoquidem conpellendo, reliquis se temporibus dilatans, ad hoc in predictis feriis illi, a quo pulsandus est, se indubitanter ostendit, quia putat, se ad causam dicendam nulla legis sanctione posse teneri. Quem tamen aut per placitum distringi precipimus, quando cum petitore causam finire sit prestus; aut si forte talis est, de quo suspecta sit placiti fides, neque fideiussorem pro se adhibere potuerit, aput iudicem sub custodia maneat, ut, expleto tempore feriato, causa, pro qua conpellitur, finem accipiat. Si quis autem contra decretum legis huius agere presumserit, et ad iudicem ex hoc querella

Ante todo, ferias o fiestas (cfr. Isidor. *Etym.* 5,30,12: *Sed ex his festos dies hominum causa institutos, feriatos divinatorum sacrorum*) de carácter religioso: el domingo, la Pascua y la semanas anterior y posterior a tal festividad, Navidad, Circuncisión, Epifanía, Ascensión y Pentecostés. Según adelanté en el párrafo anterior, Chindasvinto seguía aquí la regulación bajoimperial presente en el Código Teodosiano y recogida en el Breviario⁹⁸ y otras fuentes romano-

pervenerit, quinquaginta hictus flagellorum publice extensus accipiat». Para Felix DAHN, *Westgothische Studien*, p. 246, los tiempos fijados en esta ley «Gerichtsferien sind es nicht, denn die anhängigen Sachen nehmen ihren Fortgang», tratándose sólo de evitar demandas y prendaciones. Aparte de que, por lo que hace a la toma de prendas, no está muy claro su reconocimiento en el derecho del *Liber*, la colocación de la ley en el título «De iudicibus et iudicatis», en unión de su rúbrica («De diebus festis et feriatis, in quibus non sunt negotia exequenda»), parece contestar la afirmación de Dahn; si la causa estaba comenzada no habría, sin más, de tramitarse: era objeto de suspensión, con nuevas previsiones para la comparecencia. Estimar, con Dahn, p. 246, que las fiestas judiciales son las enumeradas por Ervigio en LV 12,3,6, merece nuevo rechazo: veremos que esa ley extiende el régimen de fiestas cristianas a los judíos, sin alusiones a los efectos del calendario judicial (y sin perjuicio, claro es, de abundantes y esperadas coincidencias entre las fiestas de LV 12,3,6 y las de LV 2,1,12).

98. CT 2,8,19, a. 389 (=BA 2,8,2): «Omnes dies iubemus esse iuridicos. Illos tantum manere feriarum dies fas erit, quos geminis mensibus ad requiem laboris indulgentior annus accepit, aestivis fervoribus mitigandis et autumnis festibus decerpendis. (1) Kalendarum quoque Ianuariarum consuetos dies otio mancipamus. (2) His adicimus natalicios dies urbium maximarum Romae atque Constantinopolis, quibus debent iura differri, quia et ab ipsis nata sunt. (3) Sacros quoque paschae dies, qui septeno vel praecedunt numero vel sequuntur, in eadem observatione numeramus, nec non et dies solis, qui repetito in se calculo revolvuntur, (4) Parem necesse est habere reverentiam nostris etiam diebus, qui vel lucis auspicia vel ortus imperii protulerunt». *Interpretatio*: «Causas per anni spatium omnibus diebus secundum leges audiri praecipimus. Et licet lex quattuor menses ad fructos colligendos indulserit, sed ita pro provinciarum qualitate et pro praesentia dominorum vedidimus faciendum, ut a die VIII kal. Iul. usque in kal. Aug. messivae feriae concedantur, et de kal. Aug. usque in X kal. Septemb. agendarum causarum licentia tribuatur. A X autem kal. Septemb. usque in idus Octobr. vindemiales feriae concedatur. Dies etiam dominicarum, qui feriati sunt, ab audiendis negotiis vel exigendis debitis sequestramus. Sanctos etiam paschae dies, id est septem qui antecedunt, et septem qui sequuntur. Nec non et dies natalis domini nostri vel epiphaniae sine forensi strepitu volumus celebrari. Natalem etiam principis vel initium regni pari reverentia convenit observari». Cfr. ade-

bárbaras⁹⁹, pero también hubo de atender disposiciones conciliares del siglo VI¹⁰⁰ y a una vigorosa tradición patrística incorporada por el obispo hispalense Isidoro¹⁰¹; textos muchos de los cuales insisten en el carácter sagrado del domingo —enraizado en la legislación secular y canónica, y en la práctica religiosa, desde los siglos V y VI según el modelo del *sabbat* de los judíos— e incluso, por lo que hace a los canónicos, establecen la festividad dominical con incidencia particular en la tramitación de asuntos judiciales¹⁰².

En razón de las labores de cosecha y vendimia la ley de Chindasvinto determinaba aún nuevos períodos de vacación para la justicia regia. *Pro messivis feriis a xv. kalendas Augustas ad xv. kalendas Septembres*, vale decir, del 18 de julio al 18 de agosto, excep-

más CT 2,8,18, a. 386, que no pasó al Breviario. Pero siendo éstas las principales, existen otras leyes desde tiempos de Constantino, que aceptó el domingo como inhábil judicialmente, hasta, sobre todo y lógicamente, Teodosio I, a quien correspondió suprimir el culto pagano y adoptar el calendario cristiano también en relación a los procesos: MAX KASER, *Zivilprozessrecht*, p. 446, con alguna bibliografía.

99. LRB 11,5: «Messivis vero feriis et vindimialibus, paschalibus etiam XV diebus et natalis Domini septem, dominicis etiam diebus ceterisque Epiphaniae et quinquagissime nulla prorsus sunt litigia commovenda. Quod si factum fuerit, erit severissime a iudicibus vindicandum». LRB 11,6: «Fiscalia vero negotia dicti etiam feriacitis diebus licebit». *Edictum Theodorici* 154: «Die solis, qui dominicus nuncupantur, sed et diebus paschalibus, nullum praecipimus conveniri; qui contra fecerit, sacrilegii reus habeatur».

100. Concilio de Agatha (Agde), a. 506, c. 31; Concilio de Narbona, a. 589, c. 4; Concilio de Tarragona, a. 516, c. 4: «Ut nullus episcopus vel infra positus die dominico causas iudicare praesumat.—Ut nullus episcoporum aut presbyterorum vel clericorum die dominico propositum cuiusquumque causae negotium audeat iudicare, nisi hoc tantum, ut deo statuta sollemnia peragant. Ceteris vero diebus conventibus personis illa quae iusta sunt habeant licentiam iudicandi, excepto criminalia negotia».

101. Isidor. *Etym.* 6,17 («De cyclo Paschali») y 18 («De reliquis festivitibus»); *De eccl. off.* 1,24,1: «Quique ideo dominicus dies appellatur, ut in eo a terrenis operibus vel mundanis illecebris abstinentes, tantum divinis cultibus serviamus, dantes scilicet huic diei honorem et reverentiam propter spem resurrectionis nostrae, quam habemus in illo» Cfr. en general la obra de Justo Fernández Alonso citada a continuación.

102. Véase nota 100. Y sobre festividades religiosas en la liturgia visigoda, Justo FERNÁNDEZ ALONSO, *La cura pastoral*, pp. 344-368.

tuándose —*propter locustarum vastationem adsiduam*—¹⁰³ la provincia Cartaginense, en que las vacaciones se desarrollaban del 17 de junio al primero de agosto; *propter vindemias colligendas* las ferias, a estos efectos ya uniformes, discurrían entre el 17 de septiembre y el 18 de octubre. Así que, en resumen, por incidencia de unas labores agrícolas vitales en la economía visigoda existía la práctica suspensión de cualquier actividad judicial oficial entre el verano y parte del otoño¹⁰⁴; la importancia que tuviera la paralización del aparato judicial del rey en estos tiempos respecto de la composición de controversias mediante fórmulas como las condenadas por Egica a finales del siglo VII (*convenientiae* de LV 2,2,10) o por la presencia de los poderosos administrando justicia sin designación real (cfr. LV 2,1,15 y 17, Recesvinto; LV 2,1,18, Chindasvinto; y téngase en cuenta también LV 2,1,5, Recesvinto: *...ita ut, reiectis illis, quas non equitas iudicantis, sed libitus inpresserat potestatis, evacuatisque iudiciis omnibusque scripturis earum ordenatione confectis, he sole valeant leges, etc.*), siendo una línea de investigación del argumento no puede ahora, lógicamente, merecer mayor desarrollo.

Otras leyes del *Liber* van referidas a las fiestas, si bien, situadas sistemáticamente fuera del libro *De negotiis causarum*, sin una especial repercusión en la reglamentación del procedimiento. Se trata de normas fruto de la política antijudía de Recesvinto y Ervigio, que disponen, negativamente, la prohibición de celebrar fiestas religiosas judías, como la Pascua hebrea o el sábado (LV 12,2,5, Recesvinto; LV 12,3,5, Ervigio), a cambio de, en términos positivos, establecer para los judíos la observancia de las fiestas cristianas (LV 12,3,6, Ervigio). El clima de persecución desatado contra los judíos durante el siglo VII por todo el Mediterráneo llevó al olvido los preceptos tardorromanos que introducían alguna especialidad

103. Cfr. Luis A. GARCÍA MORENO, *El fin del reino visigodo de Toledo*, p. 114 sobre las plagas.

104. Concilio de Toledo VII, a 646, c. 6, dispensaba a los obispos cercanos a la sede regia de la obligación de residir en Toledo un mes anualmente, cuando fuera tiempo de cosecha o vendimia («messivis tamen vel vindemialibus feriis relaxatis»); el canon, dictado probablemente por las mismas fechas que la ley de Chindasvinto, aceptaría la conveniencia de que los obispos vigilaran los rendimientos del patrimonio fundiario de sus iglesias

procesal a su favor en atención a las festividades hebraicas ¹⁰⁵, lo cual, unido a la supresión de la jurisdicción especial judía en virtud de una ley de Recesvinto (LV 12,2,9), determinaría la completa vigencia de las reglas sobre ferias judiciales (LV 2,1,12, Chindasvinto) respecto de esta masa de población —reticentemente— visigoda.

En relación estrecha con las examinadas debe situarse otra ley del mismo título *De iudicibus et iudicatis*, pues se encuentra destinada a reglamentar la duración de la jornada judicial (LV 2,1,20, Chindasvinto). Su texto ya fue alegado (cfr. VIII) a propósito de LV 2,2,4, Chindasvinto, pero en la parte que actualmente interesa —al final— permite al juez —*si voluerit*— suspender sus actividades dos días por semana —¿con inclusión de la fiesta dominical?— ¹⁰⁶ así como *in ... omnibus meridianis horis*, pudiendo descansar en su casa *absque causarum audientia*. El pasaje tiene, en mi opinión, mayor valor que el de una mera anécdota o curiosidad: en primer lugar, porque Chindasvinto ha recogido de nuevo el precedente que le ofrecía una constitución bajoimperial, en este caso para exonerar al juez de audiencia por las tardes ¹⁰⁷, mostrándonos

105. CT 2,8,26, a. 409/412 (=BA 2,8,3): «Die sabbata ac reliquis sub tempore, quo Iudaei cultus sui reverentiam servant, neminem aut facere aliquid aut ulla ex parte conveniri debere praecipimus, cum fiscalibus conmodis et litigiis privatorum constat reliquos dies posse sufficere». *Interpretatio*: «Die sabbati nullum Iudaeorum aut pro fiscali utilitate aut pro quolibet negotio volumus conveniri, quia religionis eorum dies non debet actione aliqua perturbari» cfr. además, pues se trata de una constitución geminada, CT 8,8,8, y CT 16,8,12, a. 397, no recogida en el Breviario. Sobre estos textos Luis GARCÍA IGLESIAS, *Los judíos en la España antigua*, p. 97 y nota 79; Max KASER, *Zivilprozessrecht*, p. 446 y nota 12.

106. Felix DAHN, *Westgothische Studien*, p. 246 y nota 2: «ausser dem Sonntag».

107. Max KASER, *Zivilprozessrecht*, p. 446, véase CT 1,20,1, a. 408 (=BA 1,7,1): «Honorati, qui lites habere noscuntur, his horis, quibus causarum merita vel fata penduntur, residendi cum iudice non habeant facultatem: nec meridianis horis a litigatoribus iudices videantur. Quina itaque pondo auri tam iudici quam eius officio atque honoratis parem multam adscribendam esse cognoscat, si quis contra praeceptum huiusmodi venire temptaverit». *Interpretatio*: «Honorati provinciarum, id est ex curiae corpore, si et ipsi in lite sunt constituti, tempore, quo causae a iudicibus ventilantur, cum iudice non resideant, et litigatores meridianis horis iudicem non salutent. Si aliud praesumserint, multam supra scriptae legis exolvant».

otra vez la importancia de las normas procesales romanas en la ordenación del procedimiento visigodo; en segundo término, porque la restricción de la jornada del juez a las mañanas, cuatro —o cinco— días por semana y en un —diríamos— año judicial con abundantes períodos inhábiles, conduce a pensar en la tramitación rapidísima de los litigios, resueltos normalmente por la comparecencia de las partes, el cruce de sus alegaciones¹⁰⁸ y la inmediata práctica de la prueba ante el juez, seguida del fallo y de la redacción, en los casos previstos y que veremos (cfr. XII), de éste y de lo actuado, todo lo cual se refuerza si consideramos que LV 2,1,20 es una norma penal en castigo de los jueces que se negaban a cumplir los trámites de citación o demoraban injustificadamente la resolución de las causas. Sabemos, en efecto, de la existencia de una ley de contenido similar destinada a evitar retrasos por malicia del representante procesal de la parte (LV 2,3,5, *antiqua*), pudiendo agregarse también el testimonio de LV 2,1,22, igualmente de Chin-

108. Carecemos de textos legales sobre la contestación del demandado-acusado y sus alegaciones. FV 40, una «cartula dijudicationis» que recoge las actas de un proceso, documenta sin embargo, aunque con brevedad, la controversia de las partes ante los jueces: « Tandem ille con(tra) illum (a)ss(eru)it dice(ns): 'Rem illam, quae iure patri mei deb(itam mansit), cur eam in tu(o) seruitio habeas, edicito': E contra ille ait: '(Rem) istam, quam a nobis reposcere conaris, per ill. et ill. capitulo nobis collata sunt, et per t(o)t annos nominata (r)es iu(r)e patres mei ill. et nostro seruitio mansit. Sed s(i) iuxta quod asseris, res illa esse pat(ris) tui ill. iu(r)e fuisse debita affirmas, conuincere te oportet'. Tunc ille petitor sencundum ill. responsum se t(a)lem probationem manifestus est habere » , cd. Angel CANELLAS LÓPEZ, *Diplomática hispano-visigoda*, doc. núm. 53, p. 150. El formulario de los documentos altomedievales recogidos en la *Histoire du Languedoc* presenta al juez interpelando al demandado sobre los términos de la disputa, según fue expresada por el actor; año 862: «in iudicio Isimberto, misso Unafredo comite . veniens omo nomine Richimirus ... dicens: 'Facite mihi iustitia de isto Savigildo .. Iste Savigildo hoc invasit iniuste '. Nos missus et iudices interrogavimus Sav. 'Qui respondis ad hec de hac causa?'...»; año 918: «Ibique... veniens . . Adalbertus ... dicebat: 'Domne episcopo et vos iudices, iubete me audire et facilitate mihi iustitiam de isto Arifonso abbate'. Tunc interrogaverunt ipsi iudices supranominati iam dicto abbate: 'quid respondere vellis de ac causa, unde iste . te interpellat?' . .» (tomo los ejemplos de Franz BEYERLE, *Das Entwicklungsproblem im germanischen Rechtsgang*, pp. 144-145 y nota 28). Es evidente que el estudio sistemático de los documentos procesales altomedievales, todavía por realizar, aclarará bastantes puntos de la historia del proceso visigodo.

dasvinto: la disposición en esta ley de un plazo máximo de ocho días para dictar sentencia *a die cepte accionis* contribuye a trazar la mecánica procedimental visigoda como instrumento teóricamente veloz para resolver controversias por mediación de los jueces del rey.

De LV 2,1,20 se desprende además que los jueces abandonaban la sede del tribunal para permanecer en sus casas *pro quiete* después del mediodía; pero nada sabemos sobre la ubicación de tal sede o de sus características¹⁰⁹. Los datos de Isidoro en *Etym.* carecen en mi opinión de cualquier valor documental¹¹⁰. Una fuente hagiográfica nos presenta a un juez actuando en una institución monástica femenina, donde se desplazó por mandato real tal vez a título de *adsertor pacis*¹¹¹. Y los relatos cronísticos del reinado de Wamba describen el juicio del rebelde Paulo y sus secuaces ante el oficio palatino y el ejército, congregados en Toledo¹¹².

* * *

Allí donde estuviera, el tribunal sería lo suficientemente amplio como para permitir la presencia de las partes y/o sus representantes, los testigos, el sayón y los asesores designados por el juez; a su

109. Así ya Paul D. KING, *Derecho y sociedad*, p. 120.

110. Isidor. *Etym.* 18,15,1: «Forus est exercendarum litium locis, a fando dictus (sive a Foroneo rege, qui primus Graecis leges dedit). Qui locus et Pro-rostra vocatur ab eo quod ex bello Punico captis navibus Carthaginensium rostra ablata sunt, et in foro Romano praefixa, ut esset huius insigne victoriae. Constat autem forus causa, lege et iudice».

111. *Vita Fructuosi*, 15: «Sponsus uero saepedictae uirginis domnae Benedictae cum dolo et memore ingenti flebiliter aduersus eam, inmissus perfida laboris inuidia inimici, suggesit regi; sicque de praesentia regis leuauit iudicem qui inter eis examinaret iudicii ueritatem comite nomine Angelate qui ueniens ad monasterium uirginum regia procinctus autoritate; compulsus uero praepositus uirginum ut praefatam uirginem de congregatione secernens praesentaret qualiter sponso suo responderet .», ed Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ, *La vida de San Fructuoso de Braga*, p. 108. En el caso se debatía la suerte de unos esponsales celebrados entre un (desconocido) gardingo y la pía Benedicta, que abandonó sus compromisos mundanos para seguir la vida contemplativa como discípula de San Fructuoso; la condición del burlado esposo explica su fácil acceso al rey (Chindasvinto).

112. Jul. Tol. *Historia Wambae*, 30, en relación con el relato del *Iudicium in tyrannorum perfidia promulgatum*, 5-7.

discreción quedaba tolerar otro público. Las leyes visigodas que regulan estos extremos no siempre resultan claras, y sobre las mismas se ha elaborado toda una visión («germanista») favorable a una participación popular en la administración de justicia reliquia de las asambleas de guerreros de una primera época, de manera que la presión de los visigodos por conservar esa participación sería la justificación de las restricciones al acceso del público durante los juicios, contenida en la legislación oficial¹¹³. El análisis de los principales datos legales permitirá comprobar la fragilidad de semejante interpretación.

La norma básica es la chindasvindiana LV 2,2,2, *Ut nullo audientia clamore aut tumultu turbetur*¹¹⁴. Apremiar que la misma «no hace sino resolver de plano una cuestión que constantemente se había de estar planteando al querer los godos conservar sus antiguos derechos judiciales», según quiere M. Torres López, resulta más que excesivo; la ley sólo dispone acerca del orden de la audiencia en términos generales, atribuyendo al juez su garantía con uso —llegado el caso— del poder sancionador que tiene reconocido (multa de diez sueldos y expulsión del alborotador). No hay la menor base para suponer que el *clamor* o el *tumultus* obedecía a los irrefrenables ímpetus populares de godos celosos de conservar su

113. Manuel TORRES LÓPEZ, *Lecciones*, II, p. 298, y sobre todo Claudio SÁNCHEZ-ALBORNOZ, «Ruina y extinción del municipio romano en España», apéndice segundo: «los auditores o jurados populares de los jueces visigodos», pp. 141-143 de la edición manejada; sobre este apéndice, acusado a Sánchez-Albornoz de una mala traducción de LV 2,2,2, Paulo MERÊA, reseña a «Ruina y extinción», pp. 283-285. Sin comparables pretensiones germanistas, las leyes que interesan han merecido el comentario de Paul D. KING, *Derecho y sociedad*, pp. 120-122.

114. LV 2,2,2, Chindasvinto: «Ut nullo audientia clamore aut tumultu turbetur.—Audientia non tumultu aut clamore turbetur, sed in parte positus, qui causam non habent, illi soli in iudicio ingrediantur, quos constant interesse debere. Iudex autem si elegerit auditores alios secum esse presentes aut forte causam, que proponitur, cum eis conferre voluerit, sue sit potestatis. Si certe noluerit, nullus se in audientiam ingerat, partem alterius quacumque superfluitate aut obiectu inpugnaturus, qualiter uni parti nutriri possit impedimentum. Quod si admonitus quisquam a iudicem fuerit, ut in causa taceat hac prestare causando patrocium non presumat, et ausus ultra fuerit parti cuiuslibet patrocium, decem auri solidos eidem iudici profuturos coactus exolvat, ipse vero, in nullo resultans, contumeliose de iudicio proiectus abscedat».

tradición. Es sintomático, primeramente, que la ley de Chindasvinto vaya seguida de una *antiqua* (LV 2,2,3) con la que guarda estrecha relación (cfr. su frase final: *ut nulla pars multorum intentione aut clamore turbetur*) y donde la circunstancia de *tumultus* en la *audientia* responde simplemente a la pluralidad y número de los litigantes; la *antiqua*, como también otra ley de Chindasvinto en que se contempla el litisconsorcio (LV 10,1,4), resuelve el problema estableciendo la representación forzosa de la comunidad (*iudicantis inter eos erit electio, ut utrasque partes inpugnantes se invicem eligant, qui eorum negotia suscipiant*). En segundo lugar, otros pasajes del *Liber*, alguno recopilado en el mismo título *De negotiarum exordiis*, ofrecen nuevos supuestos prácticos en que se producían violencias en la tramitación de las causas, sin que su testimonio permita pensar en los restos de la asamblea popular germánica: se trataba más bien, y el argumento encontró antes suficiente atención (cfr. V), de evitar presiones sobre el juez y el contrincante procesal provenientes del valedor de una de las partes, dada la eficacia del patrocinio en este aspecto de la defensa de los intereses en un proceso (LV 2,2,8, *antiqua*; cfr. además LV 2,3,9, Chindasvinto). Y, en fin, es de recordar, por cuanto apoya una explicación más coherente de LV 2,2,2 que la propuesta por los germanistas, que los cambios procesales motivados por el triunfo de la *extraordinaria cognitio* evolucionaron en el sentido de restringir, si no excluir, la presencia de público ante los tribunales en el derecho romano del Bajo Imperio¹¹⁵, con lo que la legislación visigoda, situada normalmente en su línea evolutiva, contaba ya con un poderoso precedente.

A esa tradición romana se vincula desde luego la presencia de *auditores* junto al juez, según tolera la ley de Chindasvinto¹¹⁶. Reconocida la posibilidad de que los jueces designaran un vicario (inter-

115. Max KASER, *Zivilprozessrecht*, p. 445: del antiguo *tribunal*, libremente accesible, en el siglo IV se situó ya el órgano judicial en un espacio cerrado —*secretarium* o *auditorium*—, de acceso restringido; el pueblo permanecía alejado mediante *cancelli*, cubriendo unas cortinas la entrada al *secretarium*.

116. En este sentido, fundamental, Aldo CHECCHINI, «I 'consilarii' nella storia della procedura», pp. 7 y ss.; del mismo, «Studi sull'ordinamento processuale romano», *passim*. Sus enseñanzas son recogidas por Paulo MERÊA, reseña a Claudio SÁNCHEZ-ALBORNOZ, «Ruina y extinción», pp. 283-285; véase aún Karin NEHLSSEN-VON STRYK, *Die boni homines des frühen Mittelalters*, p. 287

polación ervigiana en LV 2,1,15, Recesvinto), podría suponerse que —al menos desde Ervigio, o antes si aceptamos en vigor una práctica que sus juristas llegaron a legalizar— los *auditores* serían colaboradores del juez, ocasionalmente sustitutos suyos, con quienes discutir las causas; pero nada sabemos de cierto. Que la facultad judicial de nombrar auditores fuese uno de los mecanismos de asalto a la justicia regia abierto a los poderosos, es una segunda hipótesis más que fundada, considerando la organización social del reino de Toledo y el peso progresivo de unos vínculos de dependencia que gravitaban también sobre los jueces; mas carecemos de noticias concluyentes. Hasta resultaría posible que los *auditores* fuesen personajes eclesiásticos, en función de la frecuencia con que las leyes y cánones visigodos contemplan la colaboración de las autoridades laicas y de la Iglesia en la represión de determinados delitos.

Además de los *auditores*, y acaso acumulando sus funciones, algunas leyes ordenan la presencia de *boni homines* en relación a ciertos trámites de los juicios. Así LV 6,1,5, Chindasvinto, relativa a la tortura de esclavo o liberto, en que los *b. h.* actúan valorando el precio del *servus artifex* que fallece en el tormento; o LV 6,1,2, Chindasvinto, referente a la misma institución, donde aparecen unos *testes*, presentes en el acto, que servían al juez para demostrar su inocencia en caso de muerte de un *ingenuus* sometido a tormento¹¹⁷. La prohibición contenida en LV 7,1,5, *antiqua*, de que el juez conozca en solitario de una causa criminal (...*Comes autem aut iudex nullum discutere solus presumat, ne aliquod possit esse conludium, ut innocens fortasse tormenta sustineat*) claramente va referida al mismo supuesto de aplicación de tortura, que habría de

117. Sobre estos y otros casos Karin NEHLSSEN-VON STRYK, *Die boni homines des frühen Mittelalters*, pp. 135-137 y 286-289; para la autora no queda rastro del viejo *mallum* germánico ni pueden, propiamente, relacionarse las leyes visigodas que maneja con semejante cuestión; cfr. sus pp. 85-92 sobre la pretendida participación popular en la administración de la justicia. Esta participación del pueblo, propia de la edad media, no carecería de precedentes romanos: as, Aldo CHECCHINI, «L'ordinamento processuale romano nell'alto medioevo», *passim*, y «Note sull'origine delle istituzioni processuali della Sardegna medioevale», *passim*

realizarse, entonces, ante un cierto público; la regla valía también para las ejecuciones de condenas a muerte (LV 7,4,7, *antiqua*).

* * *

Varias leyes incorporan un criterio de —diríamos— competencia territorial del juez, a los efectos de precisar su actuación en represión de los delitos cometidos en el distrito que gobierna (LV 12,3,7, Ervigio: *iudicis instantia in cuius territorio actum extiterit*) o de aquéllos que en el mismo lugar se descubren (LV 7,6,2, Recesvinto: castigo del falsificador de moneda *ubi primum hoc iudex agnoverint*; cfr. LV 8,1,12, *antiqua*: *ubi ex hoc iudici fuerit interpellatum*, y LV 9,3,3, *antiqua*: *ubi primum iudici de eo fuerit relatum*); en causas no-penales resultaba competente el juez del demandado (LV 2,2,7, Chindasvinto, sobre la cual *infra*). En uno y otro caso el legislador visigodo ha recogido criterios competenciales que rigen en el proceso romano, también en época tardía ¹¹⁸.

La cuestión residiría en concretar el alcance del término *territorium* aplicado a la autoridad judicial visigoda ¹¹⁹, si es que, además de renunciar a la labor considerando la escasez de nuestras fuentes, no conviniese excluir de entrada planteamientos demasiado cercanos a la racionalidad jurídica de la sociedad burguesa. Imposible, propiamente, la determinación de divisiones del territorio con virtualidad jurídica en tiempos preliberales, baste con aceptar las noticias legales sobre ámbitos de ejercicio de jurisdicción con dosis de ambigüedad históricamente explicables: *iudex* era tanto como juez, esto es, no podemos determinar la existencia de un cargo administrativo específico designado con ese nombre; territorio, ciudad, provincia o lugar —por no seguir multiplicando los ejemplos— en tanto demarcaciones de su función eran realidades igualmente elásticas, por lo que se deben introducir cautelas a la hora de pronunciarse sobre una pretendida «competencia territorial».

Algunas leyes que pueden alegarse a tal propósito, junto a la aceptación de principios romanos según antes destacaba, revelan en mi opinión las preocupaciones reales por evitar la pérdida del

118. MAX KASER, *Zivilprozessrecht*, p. 478.

119. Véanse los intentos y las observaciones de Paul D. KING, *Derecho y sociedad*, pp. 99-103, en especial p. 100 y nn. 158 y ss.; ya antes Paulo MERÊA, reseña a claudio Sánchez-Albornoz (*supra* nota 116), pp. 286-297.

control del aparato de justicia que venimos comprobando mediante estos estudios. Desde semejante punto de vista es muy importante LV 2,1,18, Chindasvinto, *De damnis eorum, qui non accepta potestate presumserint iudicare*, por cuanto equipara el ejercicio de potestades judiciales sin autorización real (*qui iudicandi potestatem nullam habet*, luego alterado por Ervigio incluyendo la posibilidad de arbitraje) a la actuación de un juez en lugar diferente al que se le ha encomendado (*in territorio non sibi commiso*), confiando en el *dux* provincial para la represión del abuso. Y una similar preocupación refleja, probablemente, la extraña y original ¹²⁰ LV 2,2,7, también de Chindasvinto. Este texto fue citado antes, pues es básico para demostrar que el juez que había de entender del proceso era el del demandado, pero interesa además para conocer el procedimiento previsto por el rey cuando, vigente tal principio de atribución de competencias, la reclamación era presentada ante juez distinto: el del actor, según se deduce de su lectura. Chindasvinto ordenaba lo siguiente: si un hombre ingenuo o de condición servil tuviere que litigar en otro territorio, una vez presentada la demanda ante el juez, éste habrá de requerir a su colega de demarcación diferente, mediante *epistula* suscrita de su mano y signada, para que atienda si no demora la reclamación (*ut negotium querellantis audire et ordinare non differat*); es de suponer que esa *epistula* contenía los términos de la demanda y —sobre todo— la identidad del demandado, de manera que pudiera iniciarse el procedimiento —por ejemplo, citando al interesado— aun en defecto de la presencia física del actor, a no ser que la práctica consistiese —imposible saberlo— en la entrega de la *epistula* por el propio reclamante. La negativa a la orden del primer juez daba paso a la toma de prendas en los bienes del juez requerido, hasta el monto necesario para satisfacer al actor; caso de no hallarse bienes que preñar, el juez requirente ordenaría la prendación de lo primero que se encontrase en el territorio del requerido. Esta asombrosa regulación de prendas judiciales descansa, en buena mediada, en la intervención directa del interesado: Chindasvinto disponía en la parte final de su ley las penas para aquellos, reclamantes y quienes les

120. Cfr. Adolf SCHMITT-WEIGAND, *Rechtspflegdelikte*, pp. 71-72, con resumen de la ley; para este autor resulta «*einzigartig im Bereich der Stammesrechte*»; cfr. además pp. 109-110.

auxiliaran, a veces de condición servil, que tomasen prendas cuando la demanda resultaba injusta. Entre otros extremos, la ley establece el recurso al rey, al *comes* o al *dux provincie* a favor de quien fue prendado sin estar involucrado en el asunto, correspondiendo entonces a la autoridad condal, ducal o real compensar a la víctima al cuádruplo con cargo a bienes del juez que se resiste a conocer de la causa ¹²¹. Así se dulcifica una suerte de responsabilidad colec-

121. LV 2,2,7, Chindasvinto: «Si quilibet ex alterius iudicis potestate in alterius iudicis territorio habeat causam.—Si quisquam ingenuorum adque servorum extra territorium, in quo conmanent, in alterius territorio iudicis causationem habuerint, iudex, ad cuius ordinationem idem petitor pertinet, epistula sua manu suscripta adque signata eidem iudici dirigat, in qua premoneat, ut negotium querellantis audire et ordinare non differat. Et si ad unam conventionem sperationem eius implere distulerit, tunc ille iudex, de cuius territorio est ille, qui petit, de rebus iudicis illius, ad quem direxit epistulam, in quibuscumque locis repperire potuerit, tantum usurpet, quantum res illa esse dinoscitur, de qua petitor querellam intulerit, quod eidem petitori possidendum nihilominus dabit; quam rem ita possideat qui acceperit, ut conservatis aliis rebus, de solis frugibus usum et expensas obtineat. Cum vero ille iudex, qui ad epistulam alterius iudicis negotium querellantis audire noluerit, iustitiam ex eodem negotium querellanti priori fecerit, ea, que ille iudex, qui commonuit, de rebus eius abstulerat, ipse alteri iudici sine retardatione restituat; de frugibus vero rationabiliter expensis ille, qui expendit, nihili reddat. Quod si postea, iustissime discusso negotio, inveniatur iudex ille per iniustam petitoris querellam rem indebite amisisse, tunc iniustus petitor rem, quam accepit, illi iudici, cuius fuit, ex integro reddat et aliud tantum de suo ei coactus exolvat. Quod si iudex ille, qui dilationem facit, rerum suarum possibilitatem in vicino non habet, unde alter iudex, qui commonuit, petitori repenset, tunc de territorio eiusdem iudicis differentis cuiuscumque rem tantum auferat, quantum petenti consignet, aut certe obsignatam petitori faciat iussionem, in qua pigneris quantitatem adnotet, per quam petitor presumendi sibi habeat potestatem. Dum vero ille, qui pigneratus extiterit, regi, duci vel comiti pro tali fuerit pignere querellatus, eadem pigneris damna, que idem suggerens pertulit, in quadruplum ei de suo iudex ipse dilationis coactus restituat. Quod si de rebus debitoris petitor pignus abstulerit, ad superiorem satisfactionem iudex teneri non poterit. Certe si idem iudex admonitus absque dilationem causam audierit petitoris, in qua eum perveniat habere nullatenus veritatem, iudicium, per quod eius iniustitia patuit, evidentibus scriptis emittat, de cuius textu exemplar fideliter translatum suaque manu suscriptum adque signatum iudici, a quo admonitus fuerat, dirigere non moretur. Et si post hoc equitatis iudicium patuerit presumptio pignerantis, ingenuus siquidem ea, que causa pigneris abstulit, duplam, id est amissam rem cum simili re, in satisfactione restituat. Servus autem, qui talia commisisse detegitur, C hictus accipiat flagellorum adque

tiva de los habitantes del distrito por los delitos o abusos de su juez, que llevó a Dahn, fiado además de viejas y más defectuosas ediciones del *Liber*, a pesar que se trataba de una *antiqua* «aus einer Zeit» en que «der Staatsgedanke noch wenig entwickelt war»¹²², pero ya Zeumer demostró que la tradición manuscrita impide dejar de atribuir el precepto en cuestión a Chindasvinto¹²³; la mención inicial sobre *servi* litigantes, enigmática tratándose de una *antiqua*, encuentra en cambio perfecto sentido dentro de la legislación chindasvindiana (cfr. *supra* IV), y a la misma conclusión conduce la ya citada LV 2,1,18, Chindasvinto, que impedía al juez conocer las causas *in territorio non sibi commiso*. Cómo explicar una ley tan original, más propia de posteriores tiempos medievales¹²⁴, es problemático; tal vez haya que pensar en el peligro de jueces atados por los lazos del patrocinio con los poderosos locales, y de ahí el recelo oficial ante la diligencia que desempeñarían en sus actuaciones; seguramente se trataba, y considerando así la cuestión no excluyo lo anterior, de oficiales reales que actuaban con una considerable independencia respecto de los dictados del rey y de su derecho, en el seno de una administración progresivamente feudalizada¹²⁵.

XI

Iniciado el proceso tras la comparecencia del demandado, evacuado, en su caso, el trámite de contestación a la acusación —del que no hay otra noticia, sabemos, que la representada por FV 40:

turpiter decalvatus in integrum mox reformet rem, quam causa pigneris occupabit. Illi vero, qui ad pignerandum convenerint, si servi sint et suo sponte concurrerint, centenis et ipsi verberentur flagellis; si vero ingenui, aliut tantum domino restituant, quantum ei abstulisse probantur, sequestrata compositione illius, qui pignus indebite fecisse convincitur».

122. Felix DAHN, *Westgothische Studien*, p. 253.

123. Karl ZEUMER, *Historia de la legislación*, pp. 179-180.

124. Adolf SCHMITT-WEIGAND, *Rechtspflegedelikte*, p. 72 y nota 529, remite al Fuero de Calatayud (a. 1131) cap. 54.

125. Es una de las principales conclusiones de Luis A. GARCÍA MORENO, «Estudios sobre la organización administrativa», p. 7: «en el reino visigodo no sólo se llegó a un grado muy alto de feudalización en las relaciones sociales y económicas . sino que se dio un paso más: se llegó a una explicitación bastante clara en la organización administrativa».

E contra ille ait 'Rem istam, quam a nobis reposcere conaris, per ill. et ill. capitulo nobis collata sunt, et per tot annos nominata res iure patres mei ill. et nostro seruitio mansit. Sed si iuxta quod asseris, res illa esse patris tui ill. iure fuisse debita affirmas, convincere te oportet'...— sigue la fase probatoria, propiamente el meollo de todo el procedimiento. A caballo entre las alegaciones de los litigantes y la proposición y práctica de las pruebas, el proceso del *Liber* conoce un trámite de recitación de las normas aplicables, a modo de fundamentación jurídica de las pretensiones de las partes. También de esta forma aquel proceso se demuestra deudor del derecho romano, en el que, como se sabe, probablemente por influjos helénicos fue abriéndose paso el uso procesal de invocar el derecho en vigor referido a la controversia. Progresivamente, en un mundo donde los encargados de la justicia perdían la formación jurídica tradicional a sus cargos —cuando no se trataba de las infranqueables barreras elevadas entre jueces y colecciones de textos doctrinales y legislativos por el triunfo del vulgarismo— tal uso ganó terreno, sobre todo en las provincias, hasta impregnar un esquema procedimental que heredaron, entre otros, los visigodos¹²⁶.

Los datos del siglo VII que poseemos son documentales y normativos, pero éstos de índole indirecta, faltando en el *Liber* leyes específicamente destinadas a regular el trámite de *recitatio*; los documentos, por su parte, presentan un valor reducido al ser anteriores a la promulgación del *Liber* —caso de FV 40—¹²⁷ o por encontrarse

126. Cfr. Max KASER, *Zivilprozessrecht*, p. 486, y sobre todo Egon WEISS, «Recitatio und Responsum im römischen Provinzialprozess», *passim*, útil y bien informado, aunque no muy moderno (1912); el trabajo de Erwin SEIDL, «Die Jurisprudenz der ägyptischen Provinzialrichter byzantinischer Zeit», además de presentar las limitaciones geográficas y temporales que promete su título —limitaciones habituales de nuestros conocimientos sobre las prácticas judiciales romanas, que proceden de la tiranía ejercida por las fuentes—, tan sólo se refiere ocasionalmente al argumento: cfr. p. 247. Pero la *recitatio* merecería mayor atención, pues en ella se reflejan sin duda las transformaciones de la vida jurídica postclásica y los cambios que afectaron, en ella, al procedimiento, sumadas todavía mayores penurias en la difusión de los textos; habrá incluso que valorar el choque entre una cultura de escritura y el paulatino triunfo de la oralidad en tiempos cercanos a los medievales, donde expedientes como la *recitatio* permitían enlazar realidades sociales bien diferentes.

127. Cfr. *infra* nota 130; en *Fiadores y fianzas*, pp. 129-130 y nota 247 tuvo

rodeados de circunstancias que impiden generalizar sus noticias ¹²⁸; atestiguan, en cualquier caso, la persistencia del uso romano y permiten comprender mejor la lectura de las leyes visigodas que interesan a la *recitatio*.

La más importante de ellas es LV 2,1,11, Recesvinto, que al disponer —respecto del propio *Liber* y según la rúbrica— *Ne excepto talem librum, qualis hic numper est editus, alterum quisque presumat habere* indica la vigencia de la recitación cuando prohíbe presentar ante el juez, *pro quocumque negotium*, otro cuerpo legal que el promulgado oficialmente. La contraposición en el texto entre el código *qui nuper est editus* y cualquier otro *vetitum liber* —por ejemplo las leyes romanas y de pueblos remotos, rechazadas por el mismo Recesvinto en LV 2,1,10— resulta muy clara, junto a la tipificación de la conducta delictiva del juez que no procediese de inmediato a destrozar el ejemplar de leyes no oficiales exhibido en su presencia: *Iudex quoque, si vetitum librum sibi postea oblatum disrumpere fortasse distulerit, predictae damnationis dispendio (XXX libras auri fisco) subiacebit* ¹²⁹. Y de esta práctica de invocar leyes aplicables al caso litigioso, con exposición del texto normativo ante el juez, nos informa aún la manipulación ervigiana de la recordada

ocasión de adherirme a Karl ZEUMER, *Historia de la legislación*, p. 74, identificando hipotéticamente en ese texto una cita de *Codex Revisus*.

128. Caso del juicio del rebelde Paulo ante Wamba, que dicta su condena en sesión especial del *Aula Regia* y presente el ejército recordando el tenor verbal de las leyes civiles (LV 2,1,8, Chindasvinto) y canónicas (Concilio de Toledo IV, a. 633, c. 75) sobre la traición (*Iudicium in tyrannorum perfidiam promulgatum* 7), o el de la sentencia pronunciada por el Concilio de Toledo VI, a. 638 (*Exemplar iudicii inter Marcianum et Habentium episcopos*, ed. Juan TEJADA Y RAMIRO, *Colección de cánones de la Iglesia española*, I, pp. 326 y ss.), en que se cita *Pauli Sententiae* 1,1,4, Concilio de Lérida (a. 546) c. 7 y Concilio de Calcedonia (a. 451) c. 18. Pero podrá aducirse que estamos ante simples citas de textos jurídicos y no propiamente una *recitatio*; faltaría probar, en lo que hace al texto canónico al menos, que la invocación de normas fue realizada por el obispo recurrente y no se trató de la lectura de los preceptos a aplicar —con posterior transcripción en las actas— por parte de los padres conciliares según práctica reiterada (cfr. Concilio de Toledo XV, a. 688, c. 5, con citas de San Isidoro; Concilio de Toledo XVI, a. 793, c. 6, donde se invocan pasajes de la Escritura; el uso de cánones de un concilio en las sesiones de otro era frecuentísimo).

129. Cfr. Adolph SCHMITT-WEIGAND, *Rechtspflegedelikte*, p. 119, cuya lectura llamó mi atención sobre la ley que comento.

disposición de Recesvinto, eximiendo de la multa —la más elevada de las prescritas por el legislador visigodo— a quienes acudieran a leyes no vigentes *non ad confutationem harum legum ... sed ad probationem preteritarum causarum*.

Al efecto de designar estos usos procesales LV 2,1,11, Recesvinto, no emplea, ciertamente, el término *recitatio*, que es la expresión técnica utilizada en las fuentes latinas del derecho y la retórica, pero el verbo *recitare* se documenta en otras leyes, a recordar todavía, en tanto en la norma recesvindiciana se habla de *librum legum ... iudici offerre* y de *anteriores leges ... proferre in iudicio* (glosema ervigiano), con lo que el lenguaje legal visigodo sigue anclado en la terminología romana¹³⁰. *Recitare* se utiliza por Chindasvinto a propósito del delito de falsedad (LV 7,5,2: *Si quis scripturam falsam fecerit aut recitaverit vel subposuerit sciens vel in iudicio protulerit...*; cfr. además LV 6,1,6, Chindasvinto, *Qualiter ad regem accusatio deferatur*, ya examinada, donde la acusación de hacer o recitar escrituras falsas figura entre los crímenes denunciados ante el rey) y en la novela incierta que Zeumer edita como LV 7,5,9, texto enigmático donde aparecen unos notarios públicos (*...et quia plerosque cognovimus iussiones regias non solum scribere, sed etiam recitare atque scriptas exhibere notariis roborandas.* , y también: *nullus ex notariis quorumlibet seu cuiuslibet gentis et generis homo extra notarios publicos ... iussiones sive diversas institutiones, que ex nomine regio prescribuntur, recitare audeat...*). Pero estas menciones plantean problemas que van más allá de las simples reflexiones sobre su terminología, pues no todas tienen el alcance procesal que se busca ni pueden siempre encuadrarse en las coordenadas precisas de la legislación visigoda. No sabemos, por ejemplo, si las *iussiones* reales falsificadas y, en su caso, recitadas eran —permítaseme la utilización, para entendernos, de expresiones groseramente aproximativas— meras órdenes o verdaderas leyes; aunque la

130. Egon WEISS, «Recitatio und Responsum im römischen Provinzialprozess», p. 218 y nota 1 sobre la utilización de *recitare* y *proferre* (cfr. por ejemplo D. 42,1,32, Call. lib. 3 de cognitionibus: «Cum prolatis constitutionibus contra eas pronuntiat iudex. »). FV 40 —ed. Angel CANELLAS LÓPEZ, *Diplomática hispano-visigoda*, doc. núm. 53, pp. 150-151— emplea también *proferre* «Pro inde nec mora obsistit et ille in nostro conspectu sententias legis libri ill. protulit, legem illam qui est sub titulo illo, era illa, ubi dicit hoc et illud».

misma LV 7,5,9 equipara *iussiones* y *diversas institutiones*, con lo que en principio podríamos situarnos ante textos legales (cfr. entre muchas LV 12,3,28, Ervigio), permanece indescifrable la referencia a unos notarios públicos¹³¹ a los que correspondería en exclusiva la recitación de los preceptos; el origen impreciso de la novela complica además su interpretación, para la que parece inexcusable un nuevo estudio de los manuscritos. A su vez, el empleo de *recitare* en LV 7,5,2, Chindasvinto, procede, como identificó Zeumer en su edición, de un texto de las *Pauli Sententiae* sobre la *lex Cornelia de falsis* presente en el Breviario (PS 5,25,1 = BA 5,27,1), aunque no tengo inconveniente en admitir su asimilación por parte de la cancellería de Chindasvinto a la vista de LV 6,1,6 (*scripturam falsam facere vel recitare*); quedaría en pie, sin embargo, la cuestión de la relación entre la *recitatio* de escrituras y órdenes regias —inclusos los textos legales, si adscribimos LV 7,5,9 a los últimos años del reino de Toledo— y el trámite procesal que ahora se estudia. Es interesante al respecto volver sobre LV 7,5,2, Chindasvinto, pues junto a las manipulaciones de los documentos punidas como falsedad, entre las que figura la recitación de la escritura —una «Geltendmachung», en expresión de Mommsen referida a los testamentos—¹³², encontramos también tipificada la acción de alegar en juicio el documento falsificado (*Si quis scripturam falsam ... in iudicio protulerit*). Esto evoca la lectura pública del documento ante el juez, acercándose práctica de la prueba documental y recitación *stricto sensu*; la consideración de la novela LV 7,5,9 permitiría incrementar las conexiones, pues allí se castiga la falsedad en documentos reales, leyes y órdenes.

El recurso a la *recitatio* para practicar la prueba respondería a la progresiva reducción del círculo de personas letradas que pudiesen interpretar los documentos —esos documentos protagonistas de la vida jurídica oficial— y a una consiguiente búsqueda de fór-

131. Cfr. Rafael GIBERT, «Prenotariado visigótico», pp. 41-43; José BONO, *Historia del derecho notarial*, I/1, pp. 80-81, donde parece entender el *recitare* de LV 7,5,9 en el sentido de *extractar*. Pero Bono no se cuestiona la naturaleza visigoda de ese texto, con lo que acepta como probado la existencia de «notarios del officium palatinum» (p. 81).

132. Theodor MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, p. 671 y nota 2: *recitare*, aplicado a un testamento falso, equivaldría a su «wissentliche Geltendmachung»

mulas alternativas, pero algún juicio historiográfico favorable a la continuidad de la cultura clásica entre los visigodos ¹³³ y, sobre todo, los hábitos de lectura vigentes antes de la aparición de la «galaxia Gutenberg» descrita por McLuhan ¹³⁴ imponen prudencia. Ha de admitirse que la *recitatio* permitía a los textos —leyes y documentos— el despliegue de toda la eficacia que les reservaba un derecho teóricamente literario, aplicado en ambientes no siempre favorables a las letras ¹³⁵, pero admitiremos también que la mención —no regulación— de ese trámite en el *Liber Iudiciorum* cumplió históricamente la función de garantizar la aplicación del derecho regio en la marcha cotidiana de los juicios. Resulta ilustrativo insistir en

133. Pierre RICHÉ, *Éducation et culture*, pp. 294-297: «maintien de la civilisation de l'écrit» en el reino de Toledo, apoyándose en la profusión de leyes sobre actos escritos, en las fórmulas y en los hallazgos de pizarras esgrafiadas. La no sustitución de la *subscriptio* por el mero *signum*, como tuvo lugar en las Galias, probaría para Riché (pp. 296-297) el uso de la escritura entre los laicos, en tanto la esporádica previsión del analfabetismo (LV 6,1,6; *Fragmenta Gaudenziana* 15; FV 7) «montre bien qu'il ne s'agit encore que de cas particuliers». El problema estriba en conocer la incidencia social de lo que no dejan de ser previsiones oficiales; otorgar validez a los escritos, dentro de límites y observadas ciertas formas, para constituir y probar relaciones jurídicas es un indicador poco seguro del recurso a la escritura: la magia de lo escrito sobre un iletrado acreditaría, precisamente, lo contrario. La prueba favorable acaso vendría aportada por las pizarras, pero se trata de un testimonio escaso, ceñido a una época precisa, que no se puede generalizar. Las actas de los Concilios conocen lamentaciones sobre la ignorancia del clero (cfr. entre otros Concilio de Narbona, a. 589, c. 11; Concilio de Toledo VIII, a. 653, c. 8; Concilio de Toledo IV, a. 633, c. 25; el desconocimiento de cánones y Escrituras llegaba al episcopado. Véase además Francisco MARTÍN HERNÁNDEZ, «Escuelas de formación del clero en la España visigoda», p. 72), por lo que un juicio sobre el nivel cultural de los encargados de administrar justicia debe ser muy prudente. En el panorama de la literatura altomedieval destaca la advertencia de Asser, sabio del círculo del rey Alfredo el Grande de Inglaterra (aa 871-900) y luego obispo de Sherborne, que en su opúsculo biográfico *De rebus gestis Alfredi* se queja de muchos jueces incapaces de leer los textos jurídicos por su analfabetismo, en contraste con la exigencia de juzgar según el mensaje legal; tomo estas noticias, cuya fecha y procedencia las separaran de la Hispania goda, de Adolf SCHMITT-KEIGAND, *Rechtspfledelike*, p. 159.

134. Marshall McLuhan, *La galaxia Gutenberg*, en especial pp. 104-107: «La lectura, en la antigüedad y en la Edad Media, fue necesariamente lectura en voz alta».

135 Véase *supra* nota 133.

LV 2,1,11, Recesvinto, pues se trata de una ley que —en unión de otras, igualmente destinadas a reforzar el monopolio normativo del monarca—¹³⁶ pretendía resolver el espinoso problema del derecho utilizado por los jueces, agotándolo en los cauces oficiales. Más que la recitación de las leyes del rey en el proceso, parece preocupar el castigo por recitar textos derogados, falsificados o inventados.

Así nos situamos otra vez ante el conflicto entre el derecho del rey y las exigencias institucionales de la sociedad hispanovisigoda, que lo desbordaban ampliamente según venimos comprobando. A las presiones sobre los jueces, a la sustracción a su conocimiento de partes sustanciales de la litigiosidad social, a los sobornos y exigencias de los vínculos de patrocinio se añade, en fin, la amenazante posibilidad de recitar en juicio pseudoleyes, con el resultado siempre de quebrantar el control regio ejercido sobre la justicia en armonía con la feudalización del reino de Toledo. De esta forma tornamos a un punto que ha encontrado ya atención: la aceptación de las previsiones oficiales —por ejemplo, ahora, respecto del uso de la *recitatio*— pero circundadas de reservas y reticencias, desvirtuándose su sentido en la misma medida en que el poder real resultaba contradictorio con la realidad social que aspiraba dominar. Aceptación, por supuesto, que arropaba bajo la legitimidad del derecho regio prácticas que lo violentaban; de ahí la proliferación de falsas leyes, establecidas por la iniquidad de los poderosos según denuncias de Recesvinto (LV 2,1,5), origen previsible de las confusiones que pretendió evitar Ervigio gracias a una nueva redacción —oficial— del *Liber* (LV 2,1,1) y de los gravísimos daños y expolios padecidos por los pueblos sujetos al rey (LV 7,5,9)¹³⁷; de ahí, también, la utilización procesal de textos espúreos, a lo que servía especialmente la *recitatio*. Que esa utilización tuviera como vehículo el patrocinio interesado de la posición de una parte, cuando no la colaboración cómplice del juzgador, resulta evidente.

* * *

136. Cfr. Carlos PETIT, «*Consuetudo y mos*», pp. 240-243, con comentarios y referencias.

137. Sobre estos textos, en especial, Aquilino IGLESIAS FERREIRÓS, «La creación del derecho en el reino visigodo», pp. 165-167.

El proceso visigodo, en línea con el derecho tardoantiguo, asume el carácter de método racional de búsqueda de la verdad. El examen de los testigos y la consulta de los documentos, desde luego, pero además la confesión arrancada bajo tortura o reforzada por la invocación de la divinidad —juramento— son otros tantos medios dirigidos a ese fin objetivo. Fuera de la justicia del rey no existe la verdad, o, para mayor exactitud, faltan instrumentos legítimos para averiguarla, pues nos situaríamos ya, propiamente, fuera del ámbito mismo de la justicia; por eso la regulación visigoda de las pruebas acumula a su carácter sustancialmente romano —o *clásico*, si se prefiere, identificando la clasicidad a tal objeto en el paso de una verdad subjetiva a una verdad objetiva y por tanto al alcance de la comunidad mediante la prueba—¹³⁸ la circunstancia de ser una manifestación especial del monopolio de justicia reconocido al monarca. Pero la inviabilidad de un derecho del rey excluyente de la realidad feudal vigente en la sociedad contemporánea se proyectaba aún en este terreno del procedimiento, bajo la forma, que deberá interesarnos, de recursos a medios irracionales de determinación de la verdad tan incontrolados por las instancias oficiales como contrarios a la sustancia de aquel derecho. De semejantes alternativas a las pruebas consagradas por la tradición jurídica romana y presentes en el *Liber*, así como de las mismas pruebas —digamos— legales, se trata seguidamente en este apartado.

* * *

La *antiqua* LV 2,1,23: *Iudex, ut bene causa agnoscat, primum testes interroget, deinde iscripturas requirat, ut veritas possit certius inveniri, ne ad sacramentum facile veniatur...* nos sitúa directamente ante las cuestiones centrales del derecho probatorio y las hipótesis, ya arriba expuestas, útiles a su comprensión, pues a la mención de las pruebas principales, que además aparecen lógicamente ordenadas (con el juramento a título extraordinario), se agrega el decidido protagonismo del juez en esta fase del proceso y su función objetiva de indagación de la verdad.

El juez del rey, al igual que el rey mismo cuando juzga, inter-

138. Cfr. Michel Foucault, *La verdad y las formas jurídicas*, especialmente la conferencia tercera (pp. 63 y ss.), aunque sus ideas, siempre sugerentes, descansen en ocasiones en sobreentendidos historiográficos.

viene activamente en el desarrollo de la controversia. Hemos visto que ante él se presenta la acusación o demanda, correspondiéndole en exclusiva —otra cosa fue, seguramente, lo que las circunstancias sociales permitieron (cfr. VIII)— convocar al demandado, y sabemos también que por delaciones o de oficio iniciaba los procesos en casos especialmente graves (cfr. VII). Por eso no puede extrañar el dominio judicial de la prueba, que además se encuentra en función de la índole pública del derecho procesal visigodo. Las leyes del *Liber* presentan efectivamente al juez interrogando a los testigos y exigiendo pruebas documentales para averiguar la verdad (LV 2,1,23, *antiqua*), sopesando los testimonios depuestos para elegir aquellos que, por mostrar la verdad, deberán ser ratificados bajo juramento (LV 2,4,2, *antiqua*: ...*Quod si ab utraque parte testimonia equaliter proferantur, discussa prius [veritate verborum, quibus magis debeat credi, iudicis extimabit electio]*), examinando las grafías de los testigos de un acto escrito, luego impugnado, *ut veritas facilius innotescat* (LV 2,4,3, Chindasvinto), preguntando a la víctima de un hurto la descripción del objeto sustraído (LV 7,2,1, *antiqua*), indagando —en fin— el tenor original de un documento en el supuesto de *reparatio scripture* (LV 7,5,2, Chindasvinto, manipulada por los juristas ervigianos). En una sede inesperada, al comienzo del duodécimo libro del código visigodo, aparece incluso la amonestación de Chindasvinto ordenando a sus jueces que actúen sin acepción de personas e investiguen en todas las causas la verdad de los hechos (LV 12,1,1). Esta superior actividad judicial en búsqueda de la *veritas* se encuentra además en el derecho de las fórmulas¹³⁹, que responde, al igual que los rasgos prin-

139. FV 40 (ed Angel CANELLAS LÓPEZ, *Diplomática hispano-visigoda*, doc. número 53, pp. 150-151): convocatoria de las partes para resolver judicialmente la controversia (« cumque diutissime contendo et se mutuo iniuriando crebis conuiciis laccessirent, legis autoritate illis praecipimus ut remota iurgiorum controuersia propria in conspectu nostro propalarentur negocia»); interrogatorio de testigos y averiguación de las circunstancias personales que invalidan su deposición (« quam etiam in nostro iudicio proferens, id est illum et illum, iuxta legum decreta sagaci intencione eos segregatim percontari decreuimus Quorum dum testimonium liquide discutere conaremus, inuenimus illum et illum seruos esse illius et consanguineos fratres eorum in seruitio originali esse ill.»); exigencia de confesión jurada a una de las partes (« Cumque ille imperatum a nobis fuisset ut iuxta quod locutus est pro rem illam et illam sacramentum redderet, ipse illud iuramentum reddere non ausauit»).

cipales del proceso del *Liber* como sabemos, al esquema autoritario de la *extraordinaria cognitio* ¹⁴⁰.

Esquema autoritario que llevó en derecho romano tardío a una elevada dosis de reglamentación del régimen de la prueba ¹⁴¹. Si en la etapa clásica, junto a la presencia decisiva de las partes en un proceso propiamente arbitral (en el que, por ejemplo, el juramento decisorio llegaba a funcionar como alternativa de la resolución del juez para zanjar el litigio), el margen otorgado al juzgador en la apreciación del resultado de las pruebas, así como para su práctica, era considerabilísimo, la jerarquización del proceso y regulación estricta de las instancias introdujo en el derecho probatorio toda suerte de rigideces: insuficiencia legal de un único testimonio, por más que pudiera convencer al juez plenamente de la veracidad de lo declarado (CT 11,39,3, a. 334 = CJ 4,20,9), exclusión de la testifical en procesos de libertad (CJ 4,20,2, a. 223), requisitos de forma en los documentos para robustecer un valor probatorio que acaba desbancando a los testigos, en tanto, respecto de éstos, circunstancias de posición social y riqueza —desde siempre relevantes: D. 22, 5,3— ¹⁴² determinan el valor de sus deposiciones... Podría decirse que la prueba, dominio de la retórica en el derecho clásico, pasa,

140. Cfr. Maxime LEMOSSE, *Cognitio. Étude sur le rôle du juge dans l'instruction du procès civil antique*, especialmente sus páginas (239 y ss) sobre «la recherche autoritaire de la vérité»; más en general Max KASSER, *Zivilprozessrecht*, pp. 484 y ss. Interesará además Gian Gualberto ARCHI, «Les preuves dans le droit du Bas-Empire», pp. 402 y ss., donde documenta su siguiente afirmación: «Ce qui importe à la chancellerie impériale est la *veritas*, sur l'existence objective de laquelle les hommes du IV^e. siècle ne semblent pas avoir les doutes que nous autres . . . avons»; pero Archi, aquí muy acertado, lo parece menos cuando se manifiesta reacio a ver una oposición radical entre las pruebas clásicas y las posteriores, caracterizadas por su incardinación en torno a un principio 'inquisitivo'.

141. Para lo que sigue, además de las obras citadas en la nota anterior, interesa Giovanni PUGLIESE, «La preuve dans le procès romain de l'époque classique», *passim*, así como F. DÖLGER, «Der Beweis im byzantinischen Gerichtsverfahren», pp. 606 ss. sobre la praxis bizantina.

142. Sobre este texto de Calístrato, reproducido con toda clase de agudas observaciones, Peter GARNSEY, «El privilegio legal en el Imperio Romano», pp. 162 y 165.

tras la crisis del siglo III, a ser terreno de especial incidencia de la legislación imperial ¹⁴³.

La presencia de este panorama jurídico en los títulos pertinentes del *Liber Iudiciorum*, muy intensa, se aprecia con toda facilidad contrastando las abundantes notas con que Karl Zeumer enriqueció su edición, pero se trata —otra vez— de la utilización autónoma de materiales y principios romanos, que ha permitido desarrollar un cierto grado de originalidad a la legislación visigoda sobre las pruebas; el ejemplo más conocido de cuanto afirmo será, probablemente, el juramento de los testigos, regulado en el *Liber* con el carácter asertorio que lo aparta de los postulados del derecho romano (LV 2,4,2, *antiqua*, sobre cuyo tenor, controvertido, habrá que volver), pero aún cabría recordar el régimen de la tortura. Las líneas donde se aborda el estudio de los distintos medios de prueba han de permitir mayores precisiones.

También romana se presenta la preferencia visigoda por la prueba del actor ('klägerischer Beweis'), cuya indiscutible vigencia en el derecho del *Liber* como criterio de atribución del *onus probandi* sirve para apartar ese derecho de los ordenamientos germánicos en que la acusación desembocaba siempre en el pago de composiciones o en el juramento purgatorio del demandado ¹⁴⁴. Según Beyerle, que ha estudiado meticulosamente la cuestión ¹⁴⁵, Eurico, aceptando «Rechtsgedanken der römischen Kulturwelt», introdujo la oposición entre la prueba de los hechos a cargo del acusador —*probatio, certa probatio*— y el juramento purgatorio —*sacramentum*—,

143. Bastaría revisar la compilación justiniana para descubrir ese interés por la prueba: D. 12,2, «De iure iurando»; D. 22,3, «De probationibus et praesumptionibus»; D. 22,4, «De fide instrumentorum et amissione eorum»; D. 22,5, «De testibus»; CJ 4,19, «De probationibus»; CJ 4,20, «De testibus»; Nov. 90, «De testibus».

144 En general, Heinrich BRUNNER-Claudius Frh v. SCHWERIN, *Deutsche Rechtsgeschichte*, II, pp. 498 y ss. Por eso, el allanamiento del acusado libera al actor del deber de probar: LV 2,1,25, Chindasvinto.

145. Franz BEYERLE, *Das Entwicklungsproblem im germanischen Rechtsgang*, pp. 368 y ss., en especial pp. 327-376 (análisis estilístico de L. Bai 9,18), pp. 424-425 («Die Bedeutung des klägerischen Überführungsbeweises») y las pp. 453-455, propiamente conclusivas. Pero Beyerle se interesa ante todo por el derecho salio, sirviendo el visigodo para la comprensión de las —diríamos— desviaciones no-germánicas de éste. Cfr. *infra* n. 221: un trabajo de Merêa donde se expresan, frente a Beyerle, toda clase de cautelas.

prefiriendo la primera al segundo; el tenor de la perdida norma euriciana nos sería conocido por *Lex Baiuvarium* 9,18, que respetó una frase —despreciada por Zeumer en su ensayo de restitución de CE *ex lege Baiuvariorum*— donde se contenía, y como novedad, esa regla. La evolución del sistema penal y procesal de los pueblos germánicos —el desplazamiento de la venganza privada por el pago de composiciones, con el consiguiente interés del ofendido en demostrar la culpabilidad del ofensor triunfando las pruebas sobre la posibilidad de exculparse mediante juramento— facilitó la difusión de las novedades euricianas entre bávaros, burgundios, salios y alamanes (pero, respecto de éstos, en las causas seguidas ante el tribunal ducal), aunque sólo el derecho visigodo acreditase la relegación del juramento a título de prueba subsidiaria (LV 2,1,23, *antiqua*; LV 2,2,5, Chindasvinto; pero véase LV 6,1,2, Chindasvinto, que estudio *infra*).

La explicación de Beyerle se apoya en un análisis estilístico del texto bávaro citado, acumulando así a su indiscutible fuerza argumental las perplejidades que arroja siempre un mero estudio de la terminología¹⁴⁶, pero aún de acuerdo en el origen euriciano del precepto, no parece posible defender, con Beyerle, la naturaleza visigoda de un juramento purgatorio del óemandado rodeado de cojuradores¹⁴⁷. Incluso cabe discutir, como hizo Merêa y estudia-

146. FRANZ BEYERLE, *Das Entwicklungsproblem im germanischen Rechtsgang*, pp. 372-376, 383 y ss. Aunque Beyerle apunta también la incompreensión leovigildiana del precepto original euriciano —la decisiva frase que conserva la ley bávara: «Hoc autem volumus inter Baiuvarios in perpetuum custodire, ut causa investigata et veraciter inventa apud iudicem sit iudicata. Nulli liceat iurare, sed sicut iudicatum est, cogatur exolvere», aparece transformada en el presunto *Codex Revisus* como, en palabras de la *antiqua* LV 2,1,23, «Hoc etiam iustitie potius indagatio vera commendat, ut scripture ex omnibus intercurrent et iurandi necessitas sex omnino suspendat», que supone una simple versión del pensamiento ya expuesto al comienzo de la *antiqua* (así, correctamente, Beyerle, pp. 372-373)— como muestra de la distancia jurídica que media entre la novedad atribuida a Eurico y los tiempos de Leovigildo. Más abajo, en el texto, destaco sin embargo la frecuente aparición de un juramento purgatorio en CE que no se presenta como alternativa a la prueba.

147. FRANZ BEYERLE, *Das Entwicklungsproblem im germanischen Rechtsgang*, pp. 386 y ss., estudiando la expresión *certa probatio* en la Ley Sállica; cfr. en concreto p. 386: « auch die Formulierung des salischen Satzes 'si probatio certa non fuerit, cum iuratores (se) exolvat' ist eurizianisch». La demos-

remos, la procedencia germánica de este *sacramentum* que presta —extraordinariamente— el acusado, habida cuenta de las transformaciones del *iusiurandum* en las provincias occidentales del Imperio durante los tiempos postclásicos. La preferencia de la prueba racional a cargo del actor resulta, en cualquier caso, muy clara (LV 2,1,23, *antiqua*; LV 5,7,8, *antiqua*: *Si quis ingenuum ad servitium addicere voluerit, ipse doceat, quo ordine ei servus advenerit; et si servus ingenuum se esse dixerit, et ipse simili modo ingenuitatis sue firmam ostendat probationem*), sin perjuicio desde luego de la facultad judicial de exigir pruebas a las dos partes y estimar —poco menos que libremente— su resultado (LV 5,7,8, *antiqua*, ya citada: *Iudex vero eorum recipere testimonium debet, quos meliores adque plures esse providerit*; y en especial LV 2,2,5, Chindasvinto: *Quotiens causa auditur, probatio quidem ab utraque parte, hoc est tam a petente quam ab eo, qui petitur, debet inquiri, et qui magis recipi debeat, iudicem discernere competenter oportet*); en función siempre de los amplios poderes del juez en la marcha del proceso (cfr. *supra*) para la determinación de una *veritas* que justifica cualquier clase de indagaciones.

* * *

Primum testes interroget, ordena la *antiqua* al juez (cfr. Isid. *Etym.* 18,15,5: *probatio autem testibus et fide tabularum constat*; Isidor. *Etym.* 5,23: *Testes sunt quibus veritas quaeritur in iudicio*) al presentar la prueba de testigos como la fundamental en derecho

tracción de su aserto la encuentra en LV 7,2,23, Recesvinto, en lo que el propio Beyerle considera «ein glücklicher Zufall»: ese texto recesvindiano se remontaría a un pasaje desconocido de CE, que dejó rastros en L. Bai. 9,9, estableciendo, a propósito de la muerte de animal ajeno, «Quod si convinci non poterit (*sc. el autor del daño*), quod talia fecerit, sacramenta evidentissime dabit». Aquí se dice, en efecto, que faltando la prueba (del ofendido) sobre la culpabilidad del reo, éste se libraría prestando *sacramenta*, pero el empleo del plural en este caso, que además es aislado (Beyerle, al menos, no sabe dar otros apoyos), es demasiado frágil como para permitir afirmar la existencia de cojuradores al lado del acusado que jura inocencia. Los pasos intermedios que separan el perdido original de Eurico de este texto de mediados del siglo VII son tan dilatados que imponen prudencia; además, la manipulación recesvindiana pudo llevar a un uso impreciso de *sacramentum* en plural, pues institucionalmente resultaría irrelevante. Hasta podría pensarse en los errores de la tradición manuscrita, que refleja en algún caso (códices R 1 y V 1 de la edición zeumeriana, p. 297) las lecturas *sacramenti, sacramentum*.

visigodo. Desde luego esta prueba, en contraste con otros derechos germánicos redactados¹⁴⁸, es la más minuciosamente regulada en el *Liber Iudiciorum*: a ella va referida la mayoría de las catorce leyes del título *De testibus et testimoniis* (LV 2,4)¹⁴⁹ y otro buen número de textos situados en sedes dispersas¹⁵⁰; la lista de noticias podría aumentar aceptando los intentos de Ureña —que usa argumentos no siempre satisfactorios—¹⁵¹ por considerar visigodas algunas *antiquae* editadas por la Academia.

148. Así Paulo MERÊA, «A prova testemunhal», pp. 170-171. La explicación estriba en el valor del juramento purgatorio como vértice de todo el procedimiento

149. Pero no todas, pues en ese título también encuentran regulación los testigos de un acto jurídico; 'fronteriza' sería LV 2,4,3, Chindasvinto, *De investiganda iustitia, si aliut loquatur testis, aliut scriptura*, donde es clara la preferencia concedida al documento pero, sobre todo, la diligencia del legislador facultando al juez real para investigar la verdad mediante el cotejo de suscripciones (la *contropatio manuum* de la práctica romana, sobre lo que puede verse Angel CANELLAS LÓPEZ, *Diplomática hispano-visigoda*, pp. 43-44; la bibliografía de este autor remitirá —p. 115— a Karl ZEUMMER, «Zum westgotischen Urkundenwesen. I. Suscriptio und Signum. II: Die Schriftvergleichung *contropatio*», en *Neues Archiv* 24 (1899), pp. 13-38, que no he podido manejar); esta ley está recogida *infra* nota 206.

150. Cfr. LV 3,4, «De adulteriis», en el que dos *antiquae* (10 y 11) inciden en el testimonio servil para inculpar al *dominus* de este delito; LV 5,4, «De conmutationibus et venditionibus», cuya ley 14 —una *antiqua* derivada de CE 288 incluye un añadido leovigildiano —procedente, según Karl ZEUMER, p. 223 y nota 1 de su edición, de una sentencia de Paulo— sobre la tortura del esclavo *in capite dominorum*; etc.

151. Rafael de UREÑA Y SMENJAUD, *La legislación Gótico-hispana*, pp. 71 y ss., consideraba como *antiquae* extravagantes, desaparecidas de los cuerpos legales del siglo VII, las leyes *Testes priusquam* (p. 72), *Volumus ut sacramenta* (p. 74) y *Clericos ad testimonium* (p. 75), todas ellas presentes en la edición de la Real Academia. La primera de estas leyes procede de una *interpretatio* al Teodosiano recogida en el Breviario (ICT 11,39,3 = ITC-BA 11,14,2), derogada —según Ureña— por Leovigildo al sancionar la regla del juramento asertorio del testigo (Ureña, pp. 72-73); la última, propiamente un texto canónico norteafricano incluso en la *Hispana*, se trataría más bien —siempre según Ureña, p. 75, que introduce en este punto matizaciones— de una «simple adición hecha por algún jurisconsulto del período de la Reconquista». *Volumus ut sacramenta* sería, en cambio, euriciana para Ureña (p. 73), pero lo más probable, como apuntó Gama Barros, es que la presencia de este capítulo en los códigos medievales se deba a la utilización de Benedictus Levita, basado a su vez en la *Lex Baiuvariorum*: cfr. Paulo MERÊA, «Notas sobre a Lex Visigothorum 2,1,23», p. 127.

Pero la relativa abundancia de leyes sobre testigos, que datan ante todo del siglo VII, une su frecuente obscuridad a una gran parquedad en suministrar noticias; cuestiones de capacidad para ser testigo, juramento y perjurio concentran la atención del legislador; se establece alguna regla, residualmente, sobre la deposición por escrito (LV 2,4,5, Chindasvinto), y poco más. Bajo esas informaciones no siempre claras ni completas afloran, por supuesto, los problemas que encontraba la justicia real en la práctica del siglo VII, pues la indagación de la verdad mediante el proceso del rey chocaba contra la frecuencia de los falsos testimonios (LV 2,4,6, Chindasvinto; LV 2,4,7, Ervigio; LV 2,4,8, Egica; LV 2,4,9, Chindasvinto) y, por consiguiente, del perjurio (LV 2,4,14, *antiqua*) en un mundo feudalizado donde los pactos para prestar testimonio interesado aparecen descritos por el monarca como moneda corriente (LV 2,4,11, Chindasvinto).

La capacidad para prestar testimonio viene a reflejar las mismas circunstancias que permitían el acceso a los tribunales del rey y que ya conocemos (cfr. IV), pues las referencias a la *testimonian-di/testificandi licentia* incluían casi siempre la capacidad procesal en sentido amplio. Homicidas, ladrones, envenenadores, falsarios y consultores de adivinos carecían, como, en general todos los castigados con infamia (falsedades: LV 2,4,3, Chindasvinto; LV 7,5,5, *antiqua*; LV 7,5,7, Chindasvinto; perjurio: LV 2,4,4, *antiqua* extravagante; delación sin fundamento: LV 7,1,1, *antiqua*; apostasía: LV 3,5,3, Chindasvinto; homicidio injustificado de *servus* propio: LV 6,5,12, Chindasvinto, interpolación ervigiana; prevaricación: LV 7,4,5, *antiqua*; incumplimiento de deberes militares: LV 9,2,8, Wamba; uniones sexuales ilegítimas: LV 3,2,7, Chindasvinto; LV 3,5,2, Recaredo; etc.), del *testimonium* (LV 2,4,1, Chindasvinto); los menores de catorce años cumplidos eran incapaces a los mismos efectos por razón de edad, regla romana¹⁵² aceptada por el derecho canónico antiguo presente en la *Hispana* (Concilio de Cartago VII, a. 419, c. 4) y por el secular visigodo (LV 2,4,12, Recesvinto); los dementes, según establece una ley sobre el testamento (LV 2,5,11,

¹⁵² Una regulación de la capacidad del testigo contenía la *lex Iulia de vi publica et privata*, negándola a los impúberes; pero no es seguro que los criterios de esa ley se aplicaran en asuntos no criminales: Max KASER, *Zivilprozessrecht*, p. 282

Recesvinto) y los parientes de las partes *adversus extraneos* (LV 2,4,13, *antiqua emendata*) tampoco podían servir de testigos; y, en fin y ante todo, lo mismo valía para los no libres o los libertos contra el patrono, sin perjuicio del principio (romano) del testimonio servil arrancado en el tormento (LV 2,4,4, Chindasvinto), al menos hasta Ervigio, y de las innovaciones debidas a Chindasvinto (LV 2,4,4, citada, sobre los *servi* del servicio palatino, plenamente capaces) y Recesvinto (LV 2,4,10 y LV 5,7,12; pero a falta de testigos ingenuos y en ciertos casos). Los judíos, sabemos también (cfr. de nuevo IV) perdían la *testificandi licentia* contra cristianos (LV 12,2,9 y 10, Recesvinto), ateniéndose en ello a los establecimientos del derecho canónico contemporáneo (Concilio de Toledo IV, a. 633, c. 4) y del derecho romano influido por el cristianismo (CJ 1,5,21, a. 531); la explicación, basada en la *infidelitas* del criptojudío, abarca, como vimos, a los infames-traidores.

De estas reglas, no muy diversas a las consagradas por las tradiciones jurídicas romana y germánica¹⁵³, interesa considerar con más detenimiento la ley sobre parentesco, que lógicamente no estudié al publicar la primera entrega de estos trabajos; interesan además los preceptos relativos al testimonio servil, en parte ya conocidos (cfr. IV), pero que deben ponerse aún en relación con la tortura y con las exigencias de requisitos económicos y sociales de admisión, a título de testigos, de personas teóricamente capaces.

La *antiqua emendata* LV 2,4,13, *Ut contra extraneos parentela*

153. Para el derecho romano: Max KASER, *Zivilprozessrecht*, pp. 282 y 494; Giovanni PUGLIESE, «La preuve dans le procès romain de l'époque classique», p. 316; Charalambos N. FRAGISTAS, «Le témoignage dans le procès civil en droit byzantin», pp. 623-632; pero el derecho secular visigodo no recogería la condición clerical como excusa/incapacidad de testificar (Fragistas, pp. 630-631), presente en cambio en el derecho canónico de la *Hispana* (Concilio de Cartago V, a. 400, c. 1; se trata de un texto inserto en algún manuscrito del *Liber* y editado por la Academia como *antiqua*: cfr. Rafael Ureña, citado *supra* n. 151), aunque el trato especial que recibían los altos dignatarios de la Iglesia en algún aspecto del proceso (v.gr. su necesaria actuación mediante representante: LV 2,3,1, Recesvinto y Concilio de Mérida, a. 666, c. 5; o lo establecido en la ley de c.taciones —LV 21,19— de Chindasvinto) seguramente hubo de proyectarse en la prueba de testigos. Para el derecho germánico: Heinrich BRUNNER-Claudius Frh. v. SCHWERIN, *Deutsche Rechtsgeschichte*, II, pp. 533-534

*et propinquitas testimonium minime dicant*¹⁵⁴, presenta un texto algo enigmático que mereció la atención de Zeumer y D'Ors; ambos de acuerdo en reputar su núcleo originario derecho euriciano, disienten, sin embargo, en ciertos detalles de interpretación. En síntesis, la ley establece que no puedan testificar contra extraños personas vinculadas en relación de parentesco con las partes: hermanos y hermanas uterinos, tíos y primos hasta el quinto grado. La proscripción de esta parentela algo o muy lejana contrasta con el silencio del *Liber* respecto de los parientes más próximos —por ejemplo, los relacionados en línea directa de consanguinidad—, que *a fortiori* también se encontrarían apartados del proceso de sus propíncuos; una ley euricana o de Leovigildo perdida en los siglos VI o VII¹⁵⁵, o bien la continuada vigencia de las sospechas de la práctica romana frente a eventuales testigos *de domo producti*¹⁵⁶, completaba *ratione materiae* la regla transmitida por la *antiqua*. Sea como fuere, la misma permitía el testimonio *contra parentes* dentro de la misma *cognatio*, esto es, probablemente¹⁵⁷, cuando las partes y los testigos proceden de idéntica estirpe y se encuentran comprendidos en las previsiones de la ley; y desde Ervigio era posible deponer en pleito del pariente en defecto de ingenuos.

Esta última disposición, debida a la intervención de los juristas ervigianos, y el principio mismo de exclusión de los parientes como testigos justifican algunos comentarios, pues si aquéllo nos recuerda la subsidiariedad con que venía admitido el testimonio servil por Recesvinto, se trata siempre, y así semejante principio, de averiguar la verdad por medios objetivos. La relegación de los parientes

154. LV 2,4,13 (aut-constiterit es una interpolación ervigiana). «Ut contra extraneos parentela et propinquitas testimonium minime dicant.—Fratres, sorores uterini, patrui, amite, avunculi, matertere sive eorum filii, item nepos, neptis, consubrini vel amitini in iudicio adversus extraneos testimonium dicere non admittantur; nisi forsitan parentes eiusdem cognationis inter se litem habuerint, aut in causa, de qua agitur, aliam omnino ingenuitatem deesse constiterit»; cfr. LV 4,1, el título «De gradibus» que se toma del Breviario (*Pauli Sententiae*). Pero el impedimento matrimonial en razón de parentesco abarcaba hasta el sexto grado: Ramón FERNÁNDEZ ESPINAR, «Las prohibiciones de contraer matrimonio entre parientes en la época visigoda», pp. 407 y ss.

155. Karl ZEUMER, *Historia de la legislación*, pp. 195-198.

156. Alvaro D'ORS, *El Código de Eurico*, pp. 64-66.

157. Karl ZEUMER, *Historia de la legislación*, pp. 197-198.

en el proceso, que sólo tendría como límite —gracias a Ervigio— la escasez de ingenuos que pudiesen prestar testimonio (cfr. IV), aparta sensiblemente el derecho visigodo del de otros pueblos germánicos que exigían la presencia de cojuradores emparentados¹⁵⁸, acercándolo en cambio al romano, sobre cuyas trazas, no hace falta más insistencia, se mueven las soluciones recogidas en el *Liber Iudiciorum*.

Volvamos ahora al testimonio de *servi* y asimilados. El régimen jurídico del mismo, que nos es conocido en buena medida, puede resumirse en los términos siguientes. A salvo la posición de los esclavos reales dirigentes del servicio palatino, a quienes Chindasvinto concedió la *dicendi vel testificandi licentia, sicut et ceteris ingenuis* (LV 2,4,4; los demás esclavos de palacio podían deponer cuando comprobase su honestidad el rey), la legislación visigoda sólo admite el testimonio servil bajo tormento (LV 2,4,4: *Servo penitus non credatur, si super aliquem crimen obiecerit, aut si etiam dominum suum in crimine inpetierit, nisi in tormentis positus exponat quod dixerit*), por lo menos antes de Ervigio (cfr. la versión ervigiana del pasaje: ... *Nam etiam si in tormentis positus exponat quod obicit, credi tamen illi nullo modo oportebit*); la regla, romana (D. 48,5,28 pr. y 16; D. 48,18,6 pr.; CJ 9,46,6; PS 5,6,3 y ss., recogidas en BA: PS 5,18,3 y ss.), fue atemperada por Recesvinto para el supuesto de homicidio y faltando testigos ingenuos, o cuando se tratase de litigios de poca monta —surgidos seguramente de la esfera patrimonial de *servi casati*— y de fugas de esclavos (LV 2,4,10). Es interesante destacar que Recesvinto acusaba la progresiva pérdida de *status* de la población ingenua, según acreditan otros textos, lo que le obligaba a ampliar el ámbito de capacidad de los *servi*; importa también tener en cuenta que LV 2,4,10, contraponiendo simplemente testigos ingenuos y testigos serviles, subsumía en éstos a los libertos, como expresamente reguló el mismo Recesvinto con similares soluciones (LV 5,7,10, *Ne testificent manumissi*) que revelan, por cierto, el deterioro de su condición. Situación jurídica deteriorada la de los libertos (cfr. por ejemplo LV 5,7,20, Egica, y Concilio de Toledo XIII, a. 683, tomo real y c. 6) no muy diversa

158. Como los burgundios o los longobardos: Heinrich BRUNNER-Claudius Frh. v. SCHWERIN, *Deutsche Rechtsgeschichte*, II, pp. 514 ss.

de la de los *ingenui minores* envueltos en los vínculos del patrocinio (cfr. LV 8,1,1, Recesvinto).

Una ley chindasvindiana, LV 6,5,12, *Ne domini extra iudicem servos suos occidant, et si ingenuus occidat ingenuum*, transmite nuevos conocimientos sobre el testimonio del *servus*, demostrando, una vez más, que la ampliación de sus facultades —la concesión de una cierta *capacidad*—, requerida por las transformaciones institucionales que acompañan la transición al feudalismo, actuaba en beneficio de patronos y señores (cfr. IV). Aquí se regula, en primer lugar, la prohibición de matar al propio *servus* al margen de los controles de la justicia real (*extra discussionem publicam ... extra publicum iudicium...*), no obstante las concesiones al auxilio dominical a la hora de ejecutar un fallo condenatorio (*... a iudice sive a proprio domino mortis, quam meretur, sententiam excipiat*), salvando seguidamente la posibilidad de reprimir los ataques serviles (*... si servus vel ancilla, ausu pestifero resultantes dominis, seu gladio vel lapide sive quocumque hictu dominum dominamve percusserit vel percutere conatus fuerit*) en defensa propia (*...et domini se cupientes defendere statim in eo furore servum aut ancillam occiderint, nullatenus ad satisfactionem tenendi sunt homicidii*); en este contexto la admisión del testimonio servil sin restricciones, en su caso reforzado mediante juramentos (*...si tamen res taliter gesta probabilis fuerit, hoc est, et per testimonium vel iuramentum servorum vel ancillarum, quos interfuisse constiterit, et per sacramentum eius, qui talia gesserit ...*), recuerda otras disposiciones, igualmente situadas a mediados del siglo VII, en que la atribución al esclavo de una cierta esfera de capacidad procesal (LV 2,2,9, Chindasvinto) operaba, sin equívocos, como instrumento requerido por la defensa de los intereses dominicales.

Pero el principal problema institucional que planteaba el testimonio servil se refería, como ya en Roma, a la admisión de declaraciones inculpatorias para el *dominus*, pues si, de una parte, el modo de producción esclavista, en transformación todavía en el reino de Toledo, exigía la irrelevancia de los actos del esclavo como norma que regía especialmente cuando tales actos podían perjudicar la esfera de intereses dominicales, de otra la progresiva consolidación de formas de poder apartadas de la conveniencia inmediata de los propietarios de esclavos en la medida requerida por

el mantenimiento de la organización social toda, obligaba en ciertos casos a desconocer el interés particular del *dominus* en beneficio de consideraciones más amplias. En este punto, como en otros que se han analizado ya o que deberán ocuparnos aún, la lógica continuidad de las soluciones romanas resulta muy clara, aunque sometida a las modificaciones impuestas por las condiciones sociales y los problemas políticos presentes en el reino de Toledo durante el siglo VII; algunas *antiquae*, situadas con frecuencia en la línea de aquellas soluciones, parecen dar paso a innovaciones legislativas de —sobre todo— Chindasvinto y Ervigio, en función de la presencia de nuevas circunstancias que imponían la transformación autónoma de la herencia jurídica romana.

El camino recorrido, dentro de ésta, por la máxima *de servis in dominos quaeri non licet*, en el sentido de la admisión creciente de supuestos en que procedía arrancar del *servus* una deposición contraria al señor¹⁵⁹, condujo en derecho visigodo a la formulación de cinco principales delitos cuya represión por la justicia del rey justificaba el atentado a la independencia dominical; se trata de los crímenes de adulterio, traición, falsedad de moneda, homicidio y maleficio según una *antiqua*, al parecer leovigildiana¹⁶⁰, recopilada en el *Liber* como LV 6,1,4. Estos casos se explican, en parte (adulterio y traición, la segunda en lugar del *crimen maiestatis*), por la tradición romana¹⁶¹, pero la adición de nuevos delitos a los consa-

159. Véase especialmente Leonhard SCHUMACHER, *Servus Index*, pp. 205-215; así la observación general conclusiva contenida en p. 205: «die Untersuchung der Rolle von Sklaven und Freigelassenen im öffentlichen römischen Strafprozess hat die Maxime *de servis in dominos quaeri non licet* als durchaus modifizierbar und flexibel in der Anwendung erwiesen». Cfr. además Theodor MOMMSEN, *Romisches Strafrecht*, pp. 414-418.

160. Así Alvaro D'ORS, *El Código de Eurico*, p. 76, contra el criterio de Karl Zeumer y Rafael de Ureña. Pero a esta norma fundamental se añaden otras: LV 3,4,10, *antiqua* y LV 3,4,13, Chindasvinto, sobre el adulterio; LV 7,6,1, sin rúbrica, sobre falsedad monetar.

161. Leonhard SCHUMACHER, *Servus Index*, pp. 209-210; sobre *Edictum Theodorici* 17-19 y 49 (delitos de raptó y de majestad), el mismo, pp. 212-213. Es de observar que mientras la acusación de adulterio funcionaba en Roma como instrumento sustitutorio, por más ágil, de la de *crimen maiestatis* (Leonhard Schumacher, p. 210), en derecho visigodo cumple el papel de proteger principalmente contra uniones sexuales entre libres y *servi*, garantizando de ese

grados por esa tradición obedece a las exigencias de la persecución penal en el reino visigodo: la falsificación de la moneda, que preocupaba desde antiguo, aparte su relativa conexión con el *fraus census* en cuanto suponía, digamos, un delito fiscal, no puede entenderse del todo al margen de la traición, si consideramos la finalidad legitimadora y propagandística de las acuñaciones a partir de la aparición del numerario propiamente visigodo con Leovigildo; el homicidio y el maleficio fueron, a su vez, objeto de reglas especiales de procedimiento (iniciación de la causa *ex officio*, admisión subsidiaria de testimonio servil —por supuesto sin tortura— para castigo del homicidio desde Recesvinto, normas particulares sobre la *accusandi licentia* en estos casos y en el de *adulterium* ...), entre las que figuraba, como vemos, la declaración servil *contra dominos*. La coincidencia apreciable entre los delitos en que ésta se permite y los supuestos en que cabe la tortura contra los personajes más elevados del reino (LV 6,1,2, Chindasvinto: traición, homicidio, adulterio) revela, en mi opinión, la incidencia del monopolio de poder en manos del monarca como límite máximo ideal impuesto a los poderosos.

No hay que pensar que las garantías y requisitos establecidos por el legislador en la reglamentación de la tortura eran aplicables al tormento servil dirigido a lograr un testimonio válido. La exigencia al actor de un compromiso de satisfacer convenientemente al *dominus* por el esclavo torturado injustamente (LV 6,1,5, Chindasvinto) se refiere claramente a la acusación infundada del *servus*, sin que pueda extenderse al caso de su testimonio porque, entre otras razones ¹⁶², el amplio arbitrio judicial que reconoce el *Liber* determinaría cuándo procedía examinar bajo tormento las declaraciones de los *servi*; LV 9,1,21, Egica, contiene, en relación con la averiguación de la identidad servil del que quiere venderse como esclavo, un ejemplo posible de semejante *examinatio iudicialis* ¹⁶³.

Para inculpar a un tercero se admitía el testimonio del *servus* sin otra restricción, como sabemos (cfr. *supra*), que sustituir la

modo la reproducción de las circunstancias y diferencias propias de la sociedad toledana.

162. Como sería una continuidad de los usos procesales romanos: Theodor MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, p. 416 y n. 1.

163. Así Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «El proceso del Conde Bera», p. 90.

carencia de *testificandi licentia* por el tormento, seguramente porque, según afirmaba Isidoro, *a tormentis fides praebetur, post quae nemo creditur velle mentiri* (Isidor. *Etym.* 2,30,16). Que la regla se contenga en una ley de Chindasvinto (LV 2,4,4) no obliga a suponer que este monarca la introdujera como novedad; con toda probabilidad se seguía aquí la práctica procesal romana¹⁶⁴, si es que no preferimos admitir la existencia de alguna norma anterior que no dejó rastros en el *Liber Iudiciorum* al ser sustituida por el texto de Chindasvinto. Más interés presenta la valoración de la modificación ervigiana de ese precepto, aparentemente excluyente del testimonio servil *in tormentis* según vimos, pues la previsión de una *examinatio poene* por Egica en LV 9,1,21, *supra* mencionada, sería, entre otros, un argumento para entender subsistente la regla a pesar de las manipulaciones de LV 2,4,4 debidas a los juristas de Ervigio. Desde luego las mismas razones que me llevan a considerar la regulación de Chindasvinto como declaración expresa de un uso siempre vigente en la justicia visigoda¹⁶⁵ conducirían a admitir su continuidad durante y después de Ervigio, pero creo, además, que la explicación de este glosema ervigiano en la ley reguladora de la *testificandi licentia* del servicio palatino bien pudo responder a las innovaciones introducidas, y como garantía a la nobleza, en este asunto en virtud del canon 6 del Concilio de Toledo XIII, a. 683 (*Ut exceptis servis vel libertis fiscalibus nullus de servitu quorumlibet aut libertis deinceps ad palatinum officium quocumque temore transeat*): se protegía a los nobles, según expresé en el artículo anterior¹⁶⁶, «frente al riesgo de la promoción *ex iussu regio* de sus dependientes ... al *entourage* del monarca, y de la consiguiente adquisición de la facultad de actuar en su contra en los juicios». El deseo de restringir un testimonio servil inculpatario justificaría, entonces, los retoques del inicio de LV 2,4,4.

Es evidente que esta regulación afectaría a los *liberti* e, incluso, *ingenui minores* a medida de la equiparación social y jurídica entre tales grupos, en principio diferentes; la exigencia de ciertos requi-

164. Véase nota 162

165. Poseemos testimonios de la aplicación de la tortura con anterioridad a la legislación que la regulaba: cfr Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «El proceso del Conde Bera», pp. 75-76 y n. 217, con ejemplos del siglo VI.

166. Carlos PETIT, «De negotiis causarum (I)», p. 206

sitos de naturaleza económica a los testigos apuntaba, ciertamente, en esa dirección. El derecho romano siempre expresó recelos frente a los testigos de poca consideración social, cuya pobreza les hacía —en principio— fácilmente corruptibles¹⁶⁷, circunstancia que no se ha estimado ajena a la preferencia postclásica por la prueba escrita¹⁶⁸, y en el reino de Toledo, cuando el panorama de crisis presente en Occidente desde el siglo III llega a su culminación, la desconfianza por los testigos humildes se tradujo en datos de derecho positivo. No hay que olvidar además que la pretensión de preservar la justicia del rey frente a los poderosos había de favorecer la presencia en el *Liber* de leyes exigentes para con los testigos, dificultando de esa forma la intervención procesal de personas sometidas a relaciones de patrocinio; la *veritas* perseguida por el monarca, y a su modelo por los jueces inferiores, en teoría, difícilmente resultaría de las declaraciones de un miserable sujeto a un señor.

El testigo, ante todo, debía ser idóneo (LV 2,1,19, Chindasvinto; LV 2,4,3, Chindasvinto; LV 2,5,11, Recesvinto: se trata de un testigo instrumental; LV 6,5,5, Recesvinto; LV 6,5,19, *antiqua*; LV 9,1,9, Ervigio; LV 9,2,8, Wamba; etc.), término algo impreciso, en uso también respecto del fiador¹⁶⁹, pero que evoca, como ya en las fuentes romanas¹⁷⁰, circunstancias de poder económico y posición social de cierta importancia. De las leyes visigodas las más locuaces proceden de Chindasvinto y Recesvinto: *In duobus autem idoneis testibus*, establecía el primero en LV 2,4,3, *quos prisca legum recipiendos sancsit auctoritas, non solum considerandum est, quam sit idonei genere, hoc est indubitanter ingenui, sed etiam, si sint hones-*

167. D. 22,5,3 pr. y *supra* nota 142; Max KASER, *Zivilprozessrecht*, p. 493, con bibliografía; Charalambos N. FRAGISTAS, «Le témoignage dans le procès civil en droit byzantin», pp. 631-632.

168. Max KASER, *Zivilprozessrecht*, pp. 493-494.

169. Carlos PETIT, *Fiadores y fianzas*, pp. 60-61 para el derecho recogido en el Breviario; pp. 148 y ss., p. 157 y nota 311 sobre la compraventa euriciana.

170. Idoneidad como solvencia. Bernhard KÜBLER, «Bemerkungen über die Bedeutung der Insovenz», pp. 506 y ss.; idoneidad con la carga social de la voz *honestus* y similares: Peter GARNSEY, *Social Status and Legal Privilege*, especialmente p. 232 y nota 3, entre otros lugares; G. CARDASCIA, «L'apparition dans le droit des classes d'honestiores et d'humiliores», *passim*. ICT 16,2,39 (=BA 16,1,5) contrapone claramente *persona idonea-persona infima*

tate mentis perspicui adque rerum plenitudine opulenti. Nam videatur esse cavendum, ne forte quisque compulsus inopia, dum necessitatem non tolerat, precipitanter periurare non metuat; mientras que Recesvinto, mucho más escueto, se limitaba en LV 6,5,5 a contraponer la prueba de la inocencia del homicida casual *suo sacramento aut testibus numero et dignitate idoneis*, aunque sabemos (cfr. IV) que la concesión por este rey de una limitada capacidad testifical a los *servi* suponía precisamente el disfrute del peculio (LV 2,4,10: *Non tamen aliter illis credi poterit, nisi et ab omni crimine alieni extiterint et gravi depressi paupertatem non fuerint*). La enemiga contra el testigo pobre aparece aún en la obra isidoriana (Isidor. *Sent.* 5,55,1: *Et si mendacium gratis dicitur, quanto magis si venale quaeritur? Neque enim deerit multiplex conventus falsorum, si tantum praesentia sit nummorum;* cfr. también *Etym.* 2,30,14-15).

La definición chindasvindiana de la idoneidad testifical acumula, a juzgar por la ley 2,4,3, la condición de libre ingenuo a una borrosa honestidad mental y una mucho más exacta riqueza en bienes materiales, pero la admisión de testigos serviles por Recesvinto convierte en determinante sólo ese último requisito. Menos claras las referencias a la honestidad y dignidad de los testigos (LV 2,4,3 y 6,5,5), evocan, ciertamente, la función de manifestar la solidaridad del que depone con una de las partes, en lo que Pugliese, estudiando el derecho romano, consideraba «la persistencia de un matiz de irracionalidad» en el testimonio clásico¹⁷¹; lamentablemente la escasez de fuentes es una barrera poco menos que insuperable a la hora de intentar componer una, digamos, historia sociológica del proceso visigodo, pero resulta válido suponer, a la vista de los amplios poderes concedidos a los jueces para determinar la verdad, que la preferencia por unas u otras declaraciones testificales descansaría en buena medida en la importancia de los testigos. La incomodidad del legislador ante *mandatarii* poderosos (cfr. V) no dejó, sin embargo, constancia en la regulación de esta prueba.

Exigencias como las descritas realizaban la repercusión social de la *testimoniandi licentia* en la práctica, pues la adición de requi-

171. Giovanni PUGLIESSE, «La preuve dans le procès romain de l'époque classique», pp. 312-313, usando a Cicerón

sitos a los básicos de capacidad se traducían en una disminución de las personas hábiles para intervenir en los procesos a título de testigos; así se explica la identidad entre privación de rango jurídico y social —pena de infamia— y pérdida de los derechos procesales, singularmente la posibilidad de atestiguar. Pero ahora conviene mencionar un segundo requisito de validez del testimonio: el relativo al número de los testigos. La ley de Chindasvinto mencionada ordenaba al juez considerar la idoneidad de dos testigos, y Recesvinto, sabemos también, preveía una prueba *testibus numero et dignitate idoneis*. Estas leyes dan por supuesto la pluralidad de testimonios para hacer prueba, al igual que otras muchas que, sin embargo, no precisan su cantidad; el número de dos, perfectamente establecido por Chindasvinto en una ley donde se regula, entre otros puntos, la tacha de los testigos (LV 2,1,25), determinaba la eficacia de la testifical. No hace falta añadir que con ello el derecho visigodo recoge lo prescrito por la Biblia, influyente también en las fuentes jurídicas romanas desde Constantino ¹⁷².

La consideración de las leyes últimamente citadas introduce insensiblemente en el tratamiento de cuestiones estrictamente procedimentales relativas a la práctica de la prueba, pues el juicio sobre la idoneidad de los testigos, la admisión de su tacha o la exigencia de —al menos— dos deposiciones confluyentes serían otros tantos capítulos en que se concretasen los poderes del juez en la dirección del proceso. Otra de esas cuestiones, contemplada

172. La insuficiencia del testimonio único ya apunta en CJ 4,20,4 a. 284, referido a la *testatio prolata*; pero la nulidad del mismo es declarada por Constantino (CJ 4 20,9, a 334: «Et nunc manifeste sancimus, et unius omnino testis responsio non audiatur, etiamsi praeclare curiae honore praeefulgat»), adaptando la regla canónica con base bíblica (Deuteronomio 17,16 y 19,15; Mateo 18,16; Juan 8,17, Pablo, II a los Corintios 13,1; Pablo, I a Timoteo 5,19; Pablo a los Hebreos 10,28). Cfr. además Isidor. *Etym.* 18,15,6; *Liber numerorum* 4,18; *Quaestiones in vetus Testamentum*, In Deuteronomium 13,1-2 (Migne, PL, col. 361) La preferencia isidoriana por tres testigos carece de mayor significación; cfr. *Liber numerorum* 4,13; «Ternarius princeps est imparium numerus». En *Etym.* 5,24,29 sigue el Deuteronomio, hablando de dos o tres testigos. Para la regla en derecho romano, ilustrando críticamente con textos el camino que media entre la pluralidad de testigos como elemento de confirmación de lo declarado y su exigencia como elemento necesario o constitutivo de la prueba testifical, Ugo ZILLETI, «Sul valore probatorio della testimonianza nella *cognitio extraordinem*», *passim*.

ahora en LV 2,4,5, Chindasvinto, *Ne testes per epistulam testimonium reddant; et qualiter iniungi testimonium possit*, va referido a la forma de la declaración¹⁷³. Aquí se establece, en primer lugar, la exclusiva validez del testimonio de presente, admitiéndose a continuación, en casos de impedimento por razón de edad o enfermedad, o —sobre todo, habida cuenta del tenor íntegro de la ley— cuando media una larga distancia hasta la sede del tribunal, una declaración jurada, redactada a modo de *conditiones*, que el representante del testigo llevará ante el juez, jurando, por su parte, que el mandante lo hizo en su presencia. Esta disposición de Chindasvinto resulta original por varios conceptos, pues lo que en la práctica habría de funcionar como la *testatio prolata* romana¹⁷⁴ técnicamente aparecía convertido en un supuesto especial del principio *testes a praesente*: lo era, en todo caso, el mandatario. Además reviste interés la equiparación, siempre a efectos de deponer testimonio, de *testes, parentes y amici*, expresiones que cobran sentido a la vista de la minuciosa, aunque obscura, regulación de la designación del representante —ingenuo idóneo— de los testigos¹⁷⁵ en una suerte de asamblea presidida por el *iudex* o su delegado y congre-

173. «Testes non per epistulam testimonium dicant, sed presentes quam noverunt non taceant veritatem nec de aliis negotiis testimonium dicant, nisi de his tantummodo, que sub presentia eorum acta esse noscuntur. Certe si idem testes, aut parentes vel amici, seu etate decrepiti vel infirmitate gravati aut in aliam et longinquam provinciam constituti, de re, que ipsis est cognita, testimonium aliquibus iniungendum putaverint, et si non sint omnes de uno territorio, qui testimonium dicendum conmittunt, in eo tamen territorio, ubi ille conmanet, qui plus ex his videatur idoneus, congregentur et ante eiusdem territorii iudicem vel coram his, quos iudex elegerit, et mandatum faciant idoneis ingenuis, quibus voluerint, et quod illis est cognitum per condicionum seriem iurare procurent; qualiter, quibus testificandi vicissitudo conmittitur, id indubitanter, ubi necesse fuerit, suo sacramento confirment, quod iurare mandatores suos iustissime et evidentissime per semetipsos audierint. Aliter autem mandatum de talibus negotiis editum aput omnes iudices erit semper invalidum»

174 Cfr. Giovanni PUGLIESE, «La preuve dans le procès romain de l'époque classique», pp. 313-314, no obstante el valor diferente que se dispensaba a este testimonio (D. 22,5,3,4); el ejemplo documental vendría representado, para comienzos de la Era, por algunas tablillas cerúleas de Herculano.

175. Pero la ley habla siempre en plural para referirse tanto al uno como a los otros.

gada en el lugar —*territorium*— del testigo *qui plus ... videtur idoneus*. ¿Nos encontramos ante una borrosa manifestación institucional del *conventus publicus vicinorum* que menciona una ley de Recesvinto (LV 8,5,6)? ¿Se trataría, más bien, de una representación ostentada por algún poderoso local, probablemente el señor de las tierras que poblaban los testigos? La falta de datos impide respuestas claras, pero la tendencia a la concentración fundiaria en las pocas y mismas manos que ejercían la presión de los vínculos de patrocinio, bien documentada para el reino de Toledo a lo largo del siglo VII según se sabe, parece situarse detrás de estas ambiguas provisiones: estaríamos, de nuevo, ante el intento de someter a la justicia real la población de los latifundios, aunque contando con la colaboración de un *dominus* patrono y propietario que veía así reconocidos indirectamente sus poderes. Por lo demás, LV 2,4,5, Chindasvinto, participa de la preferencia por los testigos sobre la escritura que anima matizadamente la regulación visigoda de la prueba.

Conviene ahora repasar aquellos textos que aportan más información sobre la práctica de la testifical en el proceso. Ya sabemos que la posición del juez como director del procedimiento, unida a la exigencia oficial de averiguación de la verdad, permitía la petición de testigos a las dos partes, no obstante el deber del actor de demostrar la acusación (cfr. *supra*); en palabras —ya conocidas— de Chindasvinto, que además no van exclusivamente referidas a la prueba de testigos, *Quotiens causa auditur, probatio quidem ab utraque parte, hoc est tam a petente quam ab eo, qui petitur debet inquiri* (LV 2,2,5; cfr. LV 2,4,2, *antiqua*: ...*Quod si ab utraque parte testimonia equaliter proferantur...*). Hay que suponer que los litigantes presentaban testigos de propia iniciativa (cfr. LV 2,4,9, Chindasvinto: *Si vero testis, simpliciter ab alio ad testimonium invitatus...*), correspondiendo al juez decidir sobre su admisión, si es que el mismo juez no solicitaba de oficio testimonios que confirmasen los alegatos de las partes (cfr. LV 2,1,25, Chindasvinto: *si ... hordinante iudice, una pars testes adduxerit*); en todo caso el *Liber* conoce un trámite de tacha de los testigos propuestos (LV 2,1,25, Chindasvinto: *ut antequam testes illi, qui testimonium dederant, moriantur, si habuerit quod rationabiliter in eis accuset, patienter audiatur a iudice...*), con la posibilidad de abrir un plazo

de tres meses para allegar nuevos e intachables cuando *duo testes non remanserit, qui digni in eodem testimonio maneant* (cfr. LV 2,4,7, Ervigio; LV 2,4,8, Egica; sobre las cuales trato *infra*). Como en derecho romano¹⁷⁶ nadie estaba, al parecer, obligado a testificar, pero una *antiqua* de probable procedencia leovigildiana (LV 2,4,2) castiga la denegación interesada de testimonio o la negativa a prestar juramento de que nada se sabe en relación a la causa¹⁷⁷.

Los testigos eran interrogados libremente por el juez (LV 2,4,2: *Discussa prius veritate verborum, quibus magis debeat credi, iudicis extimabit electio*), pero, seguramente, en presencia o con conocimiento de la parte contraria a efectos de la tacha; no olvidemos que la autoridad judicial incluía facultades suficientes como para permitir o rechazar la asistencia de los pleiteantes en cada momento del proceso, o la de sus representantes y testigos y del público en general (cfr. LV 2,2,2, Chindasvinto: *illi soli in iudicio ingrediantur, quos constat interesse debere*). El interrogatorio se haría separando los testigos al efecto de confrontar sus declaraciones, según recomienda Isidoro (*Sent.* 3,55,4: *Testibus falsis coniunctis tarde mendacii falsitas reperitur. Quod si separati fuerint, examine iudicantis cito manifestantur. Nam sicut in unitate pravorum grandis est fortitudo, ita in separatione maior infirmitas*; *íd.* 3,55,5: *Fraudulentiae cito reprehenditur mendacium, falsidicorum enim testimo-*

176. Max KASER, *Zivilprozessrecht*, pp. 281-282, aunque había casos especiales en razón de la cualidad del testigo (así el *libripens* del derecho antiguo, testigo instrumental de negocios *per aes et libram*) o del tipo de procedimiento (*testibus quibus in iudiciis publicis lege denuntiari solet*): Giovanni PUGLIESE, «La preuve dans le procès romain de l'époque classique», pp. 314-315. El régimen cambió con Justiniano (CJ 4,20,16 pr.), influyente tal vez en LV 2,4,2: Karl ZEUMER, *Historia de la legislación*, p. 188.

177. LV 2,4,2, *antiqua*: «Certe si admonitus quisquam a iudice de re, quam novit, testimonium peribere noluerit, aut si nescire se dixerit, id ipsum etiam iurare distulerit et per gratiam aut per venalitem vere subpresserit: si nobilis fuerit, testimonium postea in nullo iudicio dicere permittatur, nec testimonium ipsius recipiatur ulterius. Quod si, licet ingenue, minoris tamen fuerit dignitatis persone, et testimonium careant et C flagella infamati suscipiant; quia non minor reatus est vera subprimere quam falsa confingere», consideración esta última no compartida por Isidoro (*Sent.* 3,55,3: «Unum pene crimen habent, et qui falsitatem promit, et qui supprimit veritatem, quia ille obesse vult, et iste prodesse non vult. Peior est testis qui laedit quam qui praestare non vult. Nam ille malignus est, iste inutilis»).

nium sibi non convenit) y documenta el derecho de las fórmulas ¹⁷⁸.

En relación al interrogatorio del testigo surge, en fin, la cuestión del juramento que éste había de prestar corroborando la veracidad de sus declaraciones; se trataba de asunto debatido, ya que la *antiqua* LV 2,4,2 (*Iudex, causa finita et sacramentum secundum leges, sicut ipse ordinaverit, a testibus dato, iudicium emittat; quia testes sine sacramento testimonium peribere non possunt ...*) permite interpretaciones encontradas. El punto de vista que pudiéramos llamar germanista fue defendido, hace tiempo, por Heinrich Brunner y Karl Zeumer, seguidos luego por Paulo Merêa, y supone la admisión de un juramento asertorio del testigo —esto es, el juramento que reforzaba aquella declaración testifical que el juez consideraba había de constituir prueba— como regla en derecho visigodo ¹⁷⁹; éste sería, entonces, lugar de encuentro entre los principios procesales romanos y el formalismo del procedimiento germánico ¹⁸⁰. Tal modo de ver las cosas mereció la crítica de Alvaro D'Ors, referida especialmente a las manifestaciones de Zeumer; para D'Ors la *antiqua* en discusión atestiguaría más bien la clara continuidad del juramento promisorio romano (*testes sine sacramento testimonium peribere non possunt*); la referencia legal a la orden del juez (*sicut ipse ordenaverit*) no establecería tanto la selección judicial de deposiciones contrapuestas como la necesaria opción entre testimonios —jurados— no igualmente creíbles ¹⁸¹.

No me resulta fácil inclinarme por germanistas o romanistas, pero adelanto que me convence más la interpretación de los primeros. Si Concilio de Toledo VIII, a. 653, c. 2, reconoce que lo dicho

178. FV 40 (ed. Angeles CANELLAS LÓPEZ, *Diplomática hispano-visigoda*, doc. núm. 53, p. 150): «Tunc ille petitor secundum ill. responsum se t(a)lem probationem manifestus est habere; quam etiam in nostro iudicio proferens, id est iillum et illum, iuxta legum decreta sagaci intencione eos segregatim percontari decreui(m)us».

179. Heinrich BRUNNER, «Zeugen- und Inquisitionsbeweis der karolingischen Zeit», pp. 117-120; Karl ZEUMER, *Historia de la legislación*, p. 188.

180. Paulo MERÊA, «A prova testemunhal», pp. 171-173.

181. Alvaro D'ORS, *El Código de Eurico*, pp. 63-64. Las fuentes normativas romanas sobre el juramento promisorio (cfr. CT 11,39,3, a. 334=CJ 4,20,9; CJ 4,20,18 pr., a. 528) abundan; no así los documentos: véase Erwin SEIDL, *Der Eid im römischen-ägyptischen Provinzialrecht*, II, pp. 92 (ausencia de papiros) y 153 (documentos coptos —tardíos— con juramentos).

por los testigos se tiene por más verdadero cuando lo refuerza un juramento (*omne etiam quod testis adstipulat tunc verius constat, quam id adiecto iurationis adfirmat*) estamos a un paso del juramento asertorio; precisamente porque hay testimonios que hacen prueba y cuya tacha obliga a revisar el fallo, Ervigio recuerda que se trata de testimonios jurados (LV 2,4,7: *...nam si aliquem de numero illorum testium, qui primum iurasse noscuntur...*). De esta clase era, al menos, el previsto por la misma LV 2,4,2, *antiqua* para el caso de la negativa a jurar que nada se sabe (*...si nescire se dixerit, id ipsum etiam iurare distulerit...*), si es que las exigencias institucionales en juego nos impiden alegar también CE 276 a título de precedente y aun como criterio interpretativo¹⁸². La consagración del juramento promisorio por una presunta *antiqua*, recogida en la edición de la Academia¹⁸³, carece, frente a ello, de relevancia, pues consiste, según indicó ya Ureña, de una versión de ICT 11,39,3 (=BA 11,14,2) que refleja la regla romana sin adscripción posible al derecho euriciano¹⁸⁴.

Todo lo anterior descansa en la lectura de pasajes legales tan ambiguos cuyo diverso entendimiento —la *dilatio sacramenti* en el supuesto de declaración negativa de LV 2,4,2 quedaría explicada porque no hay propiamente declaración¹⁸⁵; la referencia al juramento de ciertos testigos, luego reconocidos como falsos, en LV 2,4,7, distaría de excluir la posibilidad de declaraciones, también

182. CE 276,4: «Tunc iudex, quos certiores agnoverit, faciat eos sacramenta praeberere quod terminum sine ulla fraude monstraverint». Que se trate aquí de *inspectores terminorum* y no de *testes*, como alega Alvaro D'ORS, *El Código de Eurico*, p. 64, no impide a mi modo de ver valorar el texto.

183. Rafael de UREÑA Y SMENJAUD, *La legislación Gótica hispana*, pp. 71-72: «Ut testes priusquam de causa interrogentur, sacramento constringantur.— Testes priusquam de causa interrogentur, sacramento debere constringi, ut iurent se nihil nisi rei veritatem esse dicturos. Hoc etiam iubemus ut honestioribus magis quam vilioribus testibus fides potius ammittatur. Unius autem testimonium, quamlibet splendide et idonea videatur esse persona, nullatenus audiendum». Para Ureña, p. 72, el precepto «tal vez formó parte de la *Antiqua*», siendo la *prisca lex* a la que hace referencia Chindasvinto en LV 2,4,3 («In duobus autem idoneis testibus, quos prisca legum recipendos sancsit auctoritas. »); con Leovigildo (LV 2,4,2) triunfaría una «tendencia germánica», esto es, favorable al juramento asertorio, perdiéndose el primer texto.

184. Así Alvaro D'ORS, *El Código de Eurico*, p. 63.

185. Alvaro D'ORS, *El Código de Eurico*, p. 64.

juradas, irrelevantes para la decisión del litigio y por eso de mención ahora superflua— impide superar la carencia de documentación ¹⁸⁶; pero si recordamos la recelosa actitud eclesiástica frente al perjurio, vigente, como por todas partes ¹⁸⁷, en el reino de Toledo, se comprenderá bien que la legislación secular visigoda aceptara el juramento asertorio del testigo —la restricción de jurar respecto de la declaración que debe constituir la prueba— como solución poco menos que obligada.

El repaso de la obra isidoriana resultará, en este sentido, sumamente ilustrativo. Isidor. *Synonima* 2,56 avierte *prohibe etiam tibi iuramentum, tolle iurandi usum; iusiurandum interdic tibi; periculosum est enim iurare, assiduitas iurandi periurii consuetudinem facit*, sintetizando en esta insistente fórmula —requerida por el estilo de la obra de procedencia— su postura contraria al juramento. De medio semejante sólo puede hacerse uso en último extremo —enseña Isidor. en *Sent.* 2,31,1—, pues aunque el juramento no sea contrario a la ley divina la adquisición de la costumbre de jurar conduce insensiblemente al perjurio (*Sent.* 2,31,2). El juramento, desde luego, es el expediente ideal para otorgar credibilidad a la propia palabra, por lo que el mendaz suele jurar para ser creído (*Sent.* 2,31,5) y el honesto con frecuencia se ve costreñado a hacerlo a causa de la incredulidad de quienes lo oyen (*Sent.* 2,31,6); pero peca gravemente el que obliga a jurar a otro (*Sent.* 2,31,7). En consecuencia, los monjes y las vírgenes tienen prohibido jurar en virtud de sus reglas ¹⁸⁸, y tampoco debe jurar el laico —cristiano fiel— que

186. Pero sabemos, al menos, que la documentación procesal altomedieval de Cataluña, zona de arraigada presencia jurídica visigoda, recoge con profusión juramentos testificales asertorios: véase Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «La creación del derecho en Cataluña», pp. 183-186; en p. 184, tras recoger las opiniones de D'Ors y de Zeumer, Iglesia reconoce que «la unión entre *Liber* 2,2,5 y 2,4,2 parece hablar en favor de la posición de Zeumer —como mostraría igualmente *Liber* 2,4,5—».

187. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «El proceso del Conde Bera», pp. 70-71

188. *Reg Leand.* 29: «Ne virgo iurare debeat.—Nunquam iurare, sed semper uerum dicere, pari obserua studio. Nam sicut carnalibus pro terrore fraudis iurare permissum est, sic prohibita sunt spiritualibus, etiam dum sibi bene consci sunt, sacramenta. Sit, inquit, sermo uester: est, est; non, non; quod autem plus est a malo est. Caue itaque iurare in bono, quia de malo est. Et propterea dicitur esse a malo, eo quod iurandi necessitas ex infideli fit

representa los intereses monásticos en el curso de un proceso¹⁸⁹. La enemiga contra el perjurio refuerza, desde luego, la idea de un juramento asertorio, pero al mismo tiempo permite explicar su vigencia en el proceso del *Liber* al margen de diluidas continuidades germánicas.

Es evidente que la aspiración real a controlar la litigiosidad social en exclusiva, atribuyendo amplios poderes a unos jueces oficiales muy activos y con proclamación del principio de objetividad en la determinación de los hechos, chocaría contra el falso testimonio y el desprecio por la palabra jurada, o, si se prefiere, que el perjurio y la falsedad del testigo actuarían como medios de desvirtuación del proceso del rey, a modo de cortapisas inmediatas a la ideología monárquica institucionalizada en el *Liber*. Desde esta perspectiva la manipulación de la prueba testifical, nuclear en derecho visigodo, constituyendo un asalto directo al poder real, se situaba, en sus efectos, junto a las presiones ejercidas sobre jueces atados por las exigencias del patrocinio o sencillamente incapaces de reprimir a los poderosos en la práctica; se situaba también al lado de usos denunciados por el rey —las *convenientiae* de LV 2,2,10, Egica (cfr. LV 7,4,1, Recesvinto)— de presencia cotidiana en los procesos. La represión de las falsedades testificales, objeto de minuciosa regulación en el título *De testibus...*, debe ser enjuiciada, entonces, en el seno de las tensiones que sacudían la justicia del

conscientia. Eius autem hominis iurandi extorquetur necessitas, cuius fides manet in dubio. Tu uero quae simplicitem cordis debes ostendere labiis, cur te spontaneo adligas sacramento? Tolle iurandi usum in bono et non periurabis in malo. Loquere ueritatem ex corde et aberit iurandi necessitas. Legimus enim: Ne adsuecas iurationi, quoniam multi casus in illa» (ed. Julio Campos-Ismael Roca, pp. 71-72). *Reg. Isidor.* 17: «De delictis.—Delicta autem aut gravia sunt aut leuia. Leuioris culpa reus est. qui saepius iurauerit. Grauiori autem culpa obnoxius est. si periurauerit; si falsum dixerit.» (ed. Julio Campos-Ismael Roca, pp. 114-115). *Reg. Fruct.* 6: «De obedientia et sessione monachi.— Quum locuntur lenta et silens uox sit, iuramentum et mendacium carens nec fraudem studens.» (ed. Julio Campos-Ismael Roca, p. 146).

189. *Reg. comm.* 3: «Qualis debeat eligi abbas in monasterio — Si certe aliquis insequutor monasterii accesserit et aliquid auferre conauerit et per tollere uoluerit uni de laicis causam iniungat, et ipso fidelissimo christiano quem uita bona commendat et fama mala non reprobatur, qui et res monasterii absque peccato iudicet et quaerat, et si usus iurandi est hoc faciat sine iuramento et poena.» (ed. Julio Campos-Ismael Roca, pp. 177-178).

rey y la práctica de su imposición, ofreciendo un elemento nada despreciable en orden a su conocimiento.

A lo prometido en el párrafo anterior quedarán reducidas las líneas siguientes. El intento de aportar nuevos argumentos a favor del juramento asertorio en derecho visigodo mediante el estudio de la falsedad —la hipotética condena diversa del falso testimonio y del perjurio, pues cabrían testimonios falsos no jurados— se acredita, en mi opinión, escasamente operativo, aunque tampoco cabe partir de la identificación de perjurio y testimonio falso¹⁹⁰.

Me permito realizar previamente dos observaciones. La represión de los abusos en la prueba testifical —utilizo intencionadamente una fórmula imprecisa— abarca seis leyes del título *De testibus...*, que tiene —contando siempre la extravagante LV 2,4,14— catorce, es decir, que el *Liber* dedica similar atención al testimonio y a sus manipulaciones; conviene retener este dato, pues evoca la falsedad testifical como delito preocupante en el reino de Toledo. Y segundo: lo principal de la regulación de ese delito se ha debido a Chindasvinto, con lo que los papeles de máximo legislador del proceso (cfr. II) y de represor de desviaciones contrarias al derecho procesal real, lógicamente coinciden.

La pena chindasvindiana por el falso testimonio consiste en el resarcimiento del posible daño causado, si el falsario es *maior loci persona*, o en la entrega en servidumbre a la víctima, cuando se trata de un *minor*, con pérdida en ambos casos de la *testificandi licentia*, por supuesto (cfr. LV 2,4,1, Chindasvinto); el inductor reci-

190. Como hace Juan Antonio ALEJANDRE, «El delito de falsedad testimonial», pp. 34 y ss.; para Alejandro, p. 34, el derecho visigodo se alinea con el romano al exigir el juramento promisorio del testigo. Véanse también pp. 98-99 y nota 1: «El Derecho visigodo regulaba la falsedad testimonial-perjurio, y aunque la ley 2,4,6 de Chindasvinto al sancionar el falso testimonio no indicaba que éste hubiera de ir precedido de juramento, dicha ley era completada por la 2,4,1 del *Liber*, también del mismo monarca, en la cual se exigía el juramento previo», donde un *lapsus calami* hace remitirse a una ley (LV 2,4,1, Chindasvinto) ajena al contenido que se le atribuye; el planteamiento inicial de Alejandro favorable al juramento promisorio —de tanto más valor cuanto que el autor presenta sus conclusiones basadas en su exclusiva interpretación de los textos, sin considerar la polémica que los rodea— llevaría a identificar esa ley «en la cual se exigía el juramento previo» con LV 2,4,2, pero se trata de una *antiqua*, no de una ley de Chindasvinto.

be idéntico castigo (LV 2,4,6, Chindasvinto). Estas penas se repiten en LV 2,4,9, Chindasvinto, ley cuya especificidad no puede verse entonces, según quiere Juan Antonio Alejandro, en que contemple la falsedad desde el ángulo del inductor ¹⁹¹, claramente castigado ya en LV 2,4,6 (*...Quicumque autem vel beneficio corruerit aliquem vel circumventionem qualibet falsum testimonium dicere persuaserit, dum evidens huius rei commentum patuerit, tam autor sceleris, qui in interitum intendit alterius, quam his, qui rerum aviditate cupidus testificande prebuit falsitatis adsensum, pari simul sententia falsarii teneantur*), sino más bien, como la misma ley 9 proclama, en el contexto de litigios de *status*. La ley, en efecto, relaciona la deposición en falso exclusivamente con la pérdida de la condición de ingenuo o liberto y con la proclamación de la libertad de un *servus alienus* atestiguado —en falso— libre, indicándonos ahora qué tipo de falsedades procesales funcionaban en la práctica del siglo VII. Por lo demás, esta ley novena servía aún para declarar, completando la sexta, la irresponsabilidad penal de la parte que produce un testigo desconociendo su falsía (*...Si vero testis, simpliciter ab alio ad testimonium invitatus, false contra ingenuum adque libertum testificare dinoscitur, qualiter per eius testimonium in servitute quisque humiliaretur, et tamen ille, qui testem protulit, conscius fraudis huius non invenitur, solus testis ipse superiori sententia, id est, sicut ille, qui testem ad falsum provocabit, ei, quem suo testimonio decipere voluerit, obnoxius maneat...*).

Frente a semejante régimen de castigos, la *antiqua* extravagante LV 2,4,14 establece cien azotes y decalvación con infamia en caso de perjurio; el *potens* sufriría además la confiscación hasta un cuarto de su fortuna ¹⁹². Sería fácil pensar que estas penas se acu-

191. Juan Antonio ALEJANDRE, «El delito de falsedad testimonial», p. 34; las consideraciones que el autor realiza a continuación, relativas al régimen de sanciones previsto por Chindasvinto, parecen forzadas.

192. «De his, qui animas suas periurio necant.—Si quis animam suam periurio necaverit, seu quisque presumtuose periurasse detegitur, aut si quislibet videns se impressum sciendo veritatem negaverit, dum hoc certius iudex agnoverit, addicatur et centum flagella suscipiat et statim sic notam infamie incurrat, ut postea ei testificari non liceat. Et si potentior fuerit, secundum superiorem legem, que De falsariis continetur, insistente iudice quartam partem facultatum suarum amittat, illi consignandam, cui fraudem periurii moliri conatus est».

mulaban a las chindasvindianas del testimonio falso, cuando se tratase de falsedad cometida en un testimonio que hace prueba y llega a ser jurado, en tanto la deposición que no elige el juez como prueba era castigada solamente según las leyes de Chindasvinto, pero resulta solamente una hipótesis. La valoración de la ley viene dificultada además por las diversas formas que presenta en los manuscritos¹⁹³, que —por si fuera poco— la colocan en sedes diferentes. La existencia de frecuentes añadidos, presuntamente medievales, a las leyes visigodas que castigan la falsedad¹⁹⁴, revelando el interés postgótico por el perjurio en un mundo que conoce la ordalía¹⁹⁵, obliga a ser cautos con textos como LV 2,4,14. Pero obliga también a marginar un estudio detallado de la misma, si se excluye, como ahora, la utilización directa de los manuscritos.

Las dudas existentes sobre la identidad visigoda de algunas de las normas que vengo alegando no permiten, desde luego, concluir contra lo ya afirmado que el problema del falso testimonio tuviera escasas proporciones en el reino de Toledo, pues junto al argumento positivo que ofrecen las leyes reguladoras de la revisión del fallo ante el descubrimiento de la falsedad del testimonio que hizo prueba (LV 2,4,6, añadido ervigiano; LV 2,4,7, Ervigio; LV 2,4,8, Egica) (cfr. *infra* XII), aparece todavía una disposición de Chindasvinto

193. Véase Rafael de UREÑA Y SMENJAUD, *La legislación Gótico-hispana*, pp. 159-160, editando otras dos versiones, contenidas en la edición académica. En ellas falta la referencia al *potens*, con lo que la confiscación del cuarto queda generalizada; el texto que recogen los manuscritos V 17 y 18 contiene además una cláusula final eximiendo del castigo al que jura incautamente o por ira, sin intención de perjudicar.

194. Así a LV 2,4,6, Chindasvinto, en los mss. R 2, E 1, V 1, V 2, V 4, V 5, V 6 y V 8 (cfr. p. 99 de la edición de Zeumer) se añaden las penas de cien azotes y decalvación (*viliter* o *turpiter*) con infamia, esto es, penas previstas en la ley *Si quis animam suam* editada como LV 2,4,14. Cfr. además Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «El proceso del Conde Bera», pp. 71-72: una adición medieval, probablemente catalana, en que el perjurio se equipara a la infidelidad, agravándose la pena. ¿Se trata de una atracción del régimen del perjurio a la simple falsedad testifical, obra de juristas medievales? ¿O estamos más bien ante una revisión medieval de las leyes visigodas pertinentes, en cuyo haber habría aún que contar la *antiqua* extravagante que Zeumer edita como LV 2,4,14, en sus varias formas, que sólo transmiten manuscritos de la *vulgata*?

195. Cfr. de nuevo Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «El proceso del Conde Bera», pp. 71-72

proscribiendo los acuerdos de prestar testimonios interesados (LV 2,4,11). Si aceptamos los términos en que se expresa la cancillería real, la proliferación de tales *placita* resultaba realidad preocupante (*quia satis est contrarium veritati*), que los jueces habrían de erradicar mediante la investigación de la existencia de esta clase de convenios y su inmediata destrucción; los suscribientes del *placitum* estarían castigados con cien azotes, aunque no, como resulta lógico dada la inquietud oficial por conservar la prueba de testigos, con la pérdida de la *testificandi licentia*¹⁹⁶. Es interesante observar, en primer lugar, que Chindasvinto ordenaba aquí a los jueces que procediesen de manera similar a la que más tarde diseñó su hijo contra la recitación de textos legales espúreos (cfr. *supra*); en uno y otro caso se trataba de atentados al derecho del rey y a su proceso. Y que los *placita* prohibidos parecen acordados por un cierto número de personas (*quos eadem placita nominaverint*), documentando entonces verdaderas asociaciones, cuyos miembros se comprometían a deponer testimonio en apoyo mutuo (cfr. LV 2,4,5, Chindasvinto); es fuerte la tentación de relacionar tales prácticas con la extensión del patrocinio, pero el silencio de las fuentes disponibles impone cautelas.

En cierto sentido podemos considerar documentos alternativos a estos *placita*, desconocidos por supuesto, las *conditiones sacramentorum* otorgadas por los testigos¹⁹⁷. La legislación visigoda esta-

196. LV 2,4,11, Chindasvinto: «De his, qui se placitorum scriptis obligant, ne pro aliorum causis veritatem dicant.—Plerosque cognovimus ita sesse interdum per placitum obligare, ut pro sua suorumque utilitate testificare non differant; si quis autem contra eos habuerit testimonium dicere, nullatenus adquiescant. Quod quia satis est contrarium veritati, hanc omnes iudices se noverint habere licentiam, ut talia conmenta instanter inquirant et inventa disrumpant, adque quos eadem placita nominaverint, centenis falgellis verberandos insistant; ita tamen, ut ista disciplina non ad infamie notam eis pertineat, sed *testificandi*, quod cognitum habent, sit illis ex lege concessa semper et indubitata libertas».

197. Cfr. Isidor. *Etym.* 5,24,29: «Condiciones proprie testium sunt, et dictae condiciones a condicendo, quasi condiciones, quia non ibi testis unus iurat, sed duo vel plures. Non enim in unius ore, sed in duorum aut trium testium stat omne verbum. Item condiciones, quod inter se conveniat sermo testium, quasi *condictiones*»; para Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ, «Un document privé», p. 62 y nota 32, Isidoro conoce el acto, pero yerra imaginando una absurda etimología. Yo me pregunto además si la restricción isidoriana de las *conditiones*

blecía, ya lo sabemos, que el examen judicial dictaminase las declaraciones que habían de ser recibidas como pruebas (LV 2,2,5, Chindasvinto; LV 2,4,2, *antiqua*; LV 5,6,8, *antiqua*); estas declaraciones eran recogidas por escrito, adornadas de cláusulas juratorias y suscritas —tal vez— por el deponente. La documentación del testimonio que era prueba realizaba precisamente tal condición, disponiéndose en ciertos casos —*si de rebus modicis mota fuerit actio*— que su redacción y entrega a las partes desplazase el *iudicium* mismo¹⁹⁸; en otros la imposibilidad de testimoniar personalmente conducía, según vimos, al apoderamiento de un tercero, portador de la decla-

iuramenti a los testigos supone el silencio intencionado de otra clase de juramentos, especialmente el prestado por el demandado purgándose de la acusación.

198. LV 2,1,25, Chindasvinto, *Iudex, qualiter faciat iudicatum*, sobre la que trato *infra* XII. Pero hay que preguntarse si la ley está pensando, como al parecer Isidoro, en las *conditiones* del testigo, en el juramento purgatorio del demandado (cfr. LV 2,2,5, Chindasvinto) o en ambas cosas. Zeumer da por supuesto que las «*conditiones, ad quas iuratur*» citadas en la ley recogen un juramento de parte (véanse pp. 71-72, nota 3, de su edición; también, *Historia de la legislación*, p. 174); el texto de la pizarra dada a conocer por Manuel C. Díaz y Díaz (cfr. nota anterior e *infra* nota 257) tal vez contiene un juramento de esa especie. La referencia legal a la entrega al vencido de un ejemplar de las *conditiones* roborado por los testigos («*De quibus tamen condicionibus et ille, que victus est, ab eisdem testibus roboratum exemplar habebit*») me hace sospechar, salvo que pensemos que se trata de testigos instrumentales, es decir, suscribientes del juramento redactado de un litigante (lo que contradice precisamente el ejemplar en pizarra conservado, donde sólo figuran firmas de jueces), que la vaga expresión legal («*conditiones, ad quas iuratur*») acogía también las *conditiones* del testigo en el proceso; así lo entendió, al menos, el compositor del Fuero Juzgo (FJ 2,1,23: «.E si el pleyto fuere de pequenna cosa, lo que dixeren las testimonias, pues que fueren iuradas, deve seer escrito sola mientras, é dévelo tener el que venció, y el vencido deve aver el traslado daquel escrito»). No puede olvidarse tampoco que LV 2,1,25 trata a continuación de problemas relativos a la prueba testifical. En resumen, nos encontramos ante problemas derivados tanto de la diversa realidad sustancial que se documentaba como *conditiones* juradas, cuanto de la falta de un estudio detenido de los datos legales y de los documentos disponibles; la posible sede que ofrecería Angel CANELLAS LÓPEZ, *Diplomática hispano-visigoda*, pp. 57-58 sobre «*conditiones sacramentorum*», defrauda al especialista. Y no en último término por haber tomado este autor anteriores errores de Manuel C. Díaz y Díaz (cfr. p. 57 de Canellas y 62 de Díaz; p. 57 de Canellas y p. 63, nota 39, de Díaz): véase mi reseña a Canellas en este mismo ANUARIO.

ración bajo forma de *conditiones* juradas en su presencia (LV 2,4,5, Chindasvinto). Una de las fórmulas visigodas (FV 39) es el modelo para la redacción de las *conditiones* testificales¹⁹⁹. Su texto, que comienza con el *nomen iuris* y la referencia a una orden judicial (*Conditiones sacramentorum, ad quas ex ordinatione ill. iudicum iurare debeant*), contiene hasta nueve invocaciones sagradas, entre las que destacan la ortodoxa formulación trinitaria inicial (*Iuramus primum per Deum Patrem omnipotentem et Ihesum Xpm filium eius Sanctumque Spiritum, qui est una et consubstantialis magestas*) y la mención de los altares del santo mártir local, sobre el que los testigos afirman haber depositado el escrito (*iuramus per ... sacrosancto altario domini nostri ill. martiris, ubi has conditiones superpositas nostris continemus manibus*); sigue la declaración, muy escuetamente redactada (*...quia nos iuste iurare et nihil falsum dicere, sed nos scimus inter ill. et ill. hoc et illud in tempore illo actuum fuisse*); finaliza con diez imprecaciones de condena y maldiciones. El escatocolo incluye la suscripción del documento por parte de un vicario condal y otro personaje indeterminado; no constan las firmas de los otorgantes (*Late conditiones sub die ill., anno ill., era ill. Ill. uicem agens illustrissimi uiri comitis ill. has conditiones ex nostra praeceptione latas subscripsit. Ill. has conditiones nostra coram praesentia latas subscripsi*)²⁰⁰.

* * *

La necesidad de poner por escrito el testimonio jurado, además de reforzar la idea de un juramento asertorio —¿qué sentido tendría el otorgamiento de *conditiones* antes de la declaración, o, inclu-

199. Ed. Angel CANELLAS LÓPEZ, *Diplomática hispano-visigoda*, doc. núm. 83, pp. 167-168. Cfr. Moritz A. v. BETHMANN-HOLLWEG, *Der Civilprozess*, IV, p. 214; para este autor suscriben el vicario, que actúa de *iudex*, y sus *auditores*.

200. Otro caso en que los testigos juran pero no suscriben ofrece LV 2,5,13, Chindasvinto: testamento otorgado por persona «in itinere pergens aut in expeditione publica», faltando ingenuos; si el otorgante es iletrado o no puede escribir por enfermedad («si litteras nescierit aut pre langore scribere non potuerit») puede testar oralmente ante no libres, que luego jurarán la voluntad del otorgante ante el obispo y el juez: a éstos corresponde redactar el documento pertinente y suscribirlo (cfr. Rafael GIBERT, «Prenotariado visigótico», pp. 27-28). Que la ley evoque la existencia de un ejército donde no faltan elementos serviles (así LV 9,2,9, Ervigio), además predominantes, no puede ahora entretenernos.

so, documentando juramentos verbales prestados por *todos* los testigos, algunos necesariamente perjuros?—, nos introduce en el estudio de la prueba de documentos, pues parece difícil no admitir que las *conditiones* testificales servirían para demostrar la condición de vencedor en el proceso, a veces en términos exclusivos (cfr. LV 2,1,25, Chindasvinto); la declaración oral considerada por el juez prueba, documentándose, constituía a su vez prueba en un segundo y eventual litigio.

No es la presente sede apropiada para insistir en la importancia que el derecho del *Liber* reconoce a los actos escritos —al uso de la escritura en los negocios jurídicos—, sin perjuicio de que se trate, normalmente, de formas probatorias que tienen su alternativa en los testigos (cfr. por ejemplo CE 286 = LV 5,4,3, *antiqua*, para la compraventa) y sólo más rara vez de requisito *ad solemnitatem* (cfr., igualmente por ejemplo, CE 307 = LV 5,2,7, *antiqua*, sobre donaciones —*mortis causa*— entre cónyuges). El triunfo de lo escrito supone forzosamente el de la prueba documental, sobre todo en litigios patrimoniales²⁰¹, y justifica la regulación de la falsedad de documentos castigando esa conducta con ostensible dureza²⁰².

Sin embargo, el título pertinente (LV 2,5, *De scripturis valituris...*) no ha sido enfocado en el *Liber* desde el ángulo procesal. Preocupaba el documento como prueba del negocio (requisitos de datación, firmas y signos: LV 2,5,1, Chindasvinto; efectiva presencia en el acto de los testigos instrumentales: LV 2,5,3, Egica; formas de los testamentos: LV 2,5,12, Recesvinto; LV 2,5,13, Chindasvinto; LV 2,5,16, Chindasvinto; etc.) y no tanto la regulación de la prueba de documentos. Tampoco es mucho lo que sobre la misma disponen las partes más procesales del *Liber* (LV 2,1 y 2,2): necesaria intervención judicial solicitando a los litigantes la presentación de las escrituras base de sus pretensiones (LV 2,1,23: *Iudex, ut bene causa agnoscat, primum testes interroget, deinde iscripturas requirat, ut veritas possit certius inveniri...*), y poco más. Por supuesto, en la medida en que la controversia versara sobre la legalidad o el alcan-

201. Así Paul D. KING, *Derecho y sociedad*, p. 126.

202. Rafel GIBERT, «Prenotariado visigótico», pp. 38-43, preferible, por descriptivo, a Juan Antonio ALEJANDRE, «Estudio histórico del delito de falsedad documental», pp. 139-147.

ce de los actos documentados, el examen judicial de la escritura otorgada había de ser prueba decisiva para resolver el pleito; piénsese en la validez parcial de lo pactado excediendo los límites legales, respecto a lo que, según LV 2,5,10, Recesvinto, *solet dubietas in controversiis exoriri*, con referencia particular a testamentos (probablemente excesos en la libre disposición permitida: LV 4,5,1, Chindasvinto), dotes (LV 3,1,5, Chindasvinto) y cualesquiera otras escrituras (así las cláusulas penales demasiado elevadas: LV 2,5,8, Chindasvinto).

LV 2,5,15, Chindasvinto, es el texto que merece mayor atención, pues regula el trámite a seguir cuando se exhibe en juicio —*dum in audientia prolate constiterint*— documentos otorgados y suscritos por personas ya fallecidas, existiendo alguna duda sobre su genuinidad. Ese trámite consiste en una (romanizada) *contropatio manuum*, o determinación del carácter auténtico de signos y suscripciones mediante su cotejo con los insertos en otras tres o cuatro escrituras²⁰³. «Del resultado favorable de esta comparación, escribe Gibert²⁰⁴, «dependía la validez» del documento; añadamos: a efectos de ser tenido en cuenta como prueba *in audientia*.

La *contropatio* operaba superando la inexistencia de *conditor* y de *testes*, por lo que hay que pensar, como asunto de procedimiento propio de la documental, en la convocatoria por el juez de otorgante y testigos instrumentales vivos para corroborar lo contenido en la escritura, cuando no se trataba simplemente de oponer en contra del escrito una información diversa declarada por aquéllos²⁰⁵. Para

203. LV 2,5,15, Chindasvinto: «De contropatione manuum, si scriptura ver-tatur in dubium —Omnes scripture, quarum et auctor et testis defunctus est, in quibus tamen suscriptio vel signum conditoris adque testium firmitas reperitur, dum in audientia prolate constiterint, ex aliis cartarum signis vel suscriptionibus contropentur, sufficiatque ad firmitatem vel veritatis huius indaginem agnoscendam trium aut quattuor scripturarum similis et evidens prolata suscriptio. Quod si talibus scripturis legum tempora obviaverint, pro certo decernitur, quia valere non poterunt». Cfr. referencias bibliográficas *supra* nota 149.

204. «Prenotariado visigótico», p. 28.

205. «Pero la fuerza probatoria —*sc. del documento*— descansaba sobre el testimonio de otorgantes y testigos, sobre una indagación acerca de la autenticidad del escrito», Rafael GIBERT, «Prenotariado visigótico», p. 32. Conocemos un caso aproximado. la carta que envía el obispo Potamio de Braga al Concilio de Toledo X, a. 656, confesando sus delitos («. Ecce etenim trac-

casos semejantes de colisión entre los —doblemente: del instrumento y ante el juez— testigos y el documento, el mismo Chindasvinto había establecido la preferencia del segundo sobre los primeros, previendo en particular, y en defecto de otras pruebas aportadas por el litigante defensor de la escritura, el recurso a la *contropatio* si el testigo alegaba que su firma había sido falsificada; el juramento del afectado —del testigo instrumental, que interviene en el proceso— jugaba a título subsidiario ²⁰⁶.

* * *

Examen de testigos y consulta de documentos son las pruebas principales que permiten al juez real la resolución del proceso; a falta de las mismas, según consigné anteriormente, el juramento

tantibus nobis in pace Dei de ecclesiasticis regulis, delatum est conventui nostro epistolium confussae confessionis et abolendae subscriptionis, quod Potamius Bracarensis ecclesiae episcopus de factis propriis suis verbisque adnotarat articulis . . .), fue mostrada a Potamio para que éste confirmase su autoría y la autenticidad de la firma (« . . . tunc solitarie tantum secretimque adunatis pontificibus Dei praedictum episcopum adesse fecimus coram nobis, quem singulibus adgredientes amplius quam loquelis reseratam illi suae deformitatis et nostrae confusionis protulimus scribturam, quam accipiens ac recurrens sciscitantibus nobis utrum sui operis suaeque adnotationis intimatio esset, ilico suum actum sui que oris eloquium suorumque digitorum esse robur adseruit quod illic relegendo providit . . . ») (ed. Vives, p. 320).

206. La ley, que en su parte final ya nos ha ocupado, dice al respecto lo siguiente. LV 2,4,3, Chindasvinto: «De investiganda iustitia, si aliut loquatur testis, aliut scriptura.—Quotiens aliut testis loquitur, quam ea scriptura continet, in qua ipse suscripsisse dinoscitur, quamvis contra scripture textum diversa verborum sit a testibus impugnatio, scripture tamen potius constat esse credendum Quod si testes dixerint ea, que offertur, scriptura minime roborasse. prolator eius probare debet, utrum ab eisdem testibus scriptura fuisse roborata constiterit. Et si hoc ipse quibuslibet aliis documentis convincere fortasse nequiverit, experientia iudicis id requirere sollerter curabit; ita ut pro manus contropatione testis ille, qui negat, iudice presente scribat, qui etiam plus cogatur scribere, ut veritas facilius innotescat, ubi scilicet et hoc omnino querendum est, ut scripture querantur et presententur, quas antea fecit sive suscripsit Et si tota ista defecerint, tunc condicionibus editis iurare non differat, uod nequaquam inibi suscriptor accesserit . . . »; si el recelo por el perjurio de nuevo obliga a contemplar el juramento —aquí necesariamente asertorio— en último término, la iniciativa judicial en la determinación de la verdad —*de investiganda iustitia*— adquiere tintes llamativos. Cfr LV 2,5,18, Egica, en razón de la materia

de la parte aparece como último instrumento de determinación de unos hechos que constituyen la base material del *iuditium*. Esta idea general deberá ser matizada, pues en algunos casos el derecho visigodo permitía la tortura del acusado de ciertos delitos y, por tanto, el desplazamiento del juramento mediante una confesión lograda con dolorosas garantías de veracidad; pero el uso oficialmente limitado de la tortura, al margen ahora su mayor aplicación en una práctica procesal que difícilmente llegaremos a conocer²⁰⁷, recomienda reservar la descripción del tormento para más adelante.

La aceptación en el *Liber* de un sistema probatorio pretendidamente racional y objetivo, dentro de los moldes romanos, ha supuesto la marginación del juramento de la parte —normal, pero no necesariamente como veremos, de la parte acusada— a un papel secundario. Se podría incluso decir que el juramento no aparece en el *Liber* propiamente como prueba: es el expediente final para establecer el apoyo fáctico del fallo en los supuestos de carencia de pruebas. La alternativa (*certa*) *probatio/sacramentum*, que contienen muchas leyes (*antiqua* LV 2,1,23: *In his vero causis sacramenta prestentur, in quibus nullam scripturam vel probationem seu certa indicia veritatis discussio iudicantis invenerit*; LV 2,2,5, Chindasvinto: *Tamen si per probationem rei veritas investigare —sc. iudex— nequiverit, tunc ille, qui pulsatur, sacramentis se expiet*; etc.), lo expresa de manera muy clara²⁰⁸, y nos avisa además de la dificultad de comprender el juramento del litigante según los esquemas del derecho probatorio.

Muy numerosos los textos normativos que mencionan el juramento e innecesario dar cuenta de todos, puede bastar con señalar tendencias: las *antiquae* de procedencia euriciana son ricas en el uso expiatorio del juramento, sin que conste siempre su carácter subsidiario²⁰⁹; otras *antiquae*, de origen más dudoso, contraponen

207. Cfr nota 165.

208. Con más textos, aunque a otros efectos (identificar el núcleo euriciano de LV 2,1,23), Franz BEYERLE, *Das Entwicklungsproblem im germanischen Rechtsgang*, pp. 369 y ss. Pero este autor no considera los pasajes euricianos que cito en la nota siguiente.

209. LV 5,5,1 (=CE 278); LV 5,5,2 (=CE 279), LV 5,5,3 (=CE 280); LV 5,5,7 (=CE 284, pero repárese en el inciso «et fugitivus non potuerit inveniri», pues faltaría el principal testigo que exonera al *dominus*), LV 8,4,14 (cfr. Alvaro

probatio y *sacramentum* como fórmulas aparentemente intercambiables²¹⁰ o se pronuncian, lo sabemos, por el juramento subsidiario²¹¹; las leyes de Chindasvinto y Recesvinto siguen uno²¹² y otro²¹³ modelo, aunque —hay que suponer— aceptando plenamente el juramento a título subsidiario en el primer caso. Estos juramentos lo son del demandado, pero Ervigio, con algún posible mas aislado precedente²¹⁴, concedió al juez la facultad de exigir el juramento

D'ORS, *El Código de Eurico*, pp. 166-167); LV 9,1,14 (cfr. Alvaro D'ORS, *El Código de Eurico*, pp. 89-90: la naturaleza euriciana de la ley se demuestra por los textos para'elos del derecho burgundio); etc.

210. LV 4,4,2: «ut iuret aut probet» (cfr. Alvaro D'ORS, *El Código de Eurico*, p. 151); LV 9,1,4: «domino requirenti fugitivum suum prebeat sacramentum: se nescisse, quod fugeret; aut si certe potuerit adprobare, quod fugitivum non celaverit, ab omni calumnia liber abscedat»; LV 10,1,6, *ant. emendata*: «aut testibus aut iuramento».

211. LV 2,1,23: «In his vero causis sacramenta prestantur, in quibus nullam scripturam vel probationem seu certa indicia veritatis discussio iudicantis invenerit».

212. LV 6,5,7, Recesvinto: «aut sacramento aut testibus»; LV 7,2,8, Recesvinto (pero de base euriciana: CE *ex lege Baiuvariorum* 6, p. 30 de la ed. zeumeriana): «adprobet se aut sacramento aut testibus innocentem» LV 6,5,12, Chindasvinto: «et per testimonium vel iuramentum servorum vel ancillarum, quos interfuisse constiterit, et per sacramentum eius, qui talia gesserit . . et vel testibus probare potuerit vel certo sacramento suam conscientiam expiaverit».

213. LV 2,1,20, Chindasvinto: «si fraudem . iudicis non potuerit petitor adprobare, sacramento suam iudex conscientiam expiet»; LV 2,2,5, Chindasvinto: «Tamen si per probationem rei veritas investigare nequiverit, tunc ille, qui pulsatur, sacramentis se expiet»; LV 6,1,2, Chindasvinto: «Si autem actio minoris est quantitatis, quam trecenti sunt solidi, per probationem convictus qui accusatur secundum leges alias componere compellatur; aut si convinci non potuerit, sacramento se expians compositionem accipiat, que de mala petitione legibus continetur Sed si petendum in causa patuerit, et probatio fortasse convincende rei defuerit, nobilior ille vel potentior conscientiam suam sacramentis purgare non differat»; LV 2,2,9, Chindasvinto: «ita ut, si servus quod proponit convincere non potuerit, ingenuus idem conscientiam suam expiet sacramentis . et post tale sacramentum servus pro iniusta petitione, sicut et ingenuus, componere non moretur». Cfr. además Concilio de Toledo VIII, a. 653, c. 2: «quod si et testis deficiat, innocentis fidem sola iurisurandi taxatio manifestat», y LV 2,4,3, Chindasvinto, en nota 206.

214. El ofrecido por LV 5,4,13, Chindasvinto, *De servorum venditis rebus*, en la que vemos jurando al *dominus*, y a efectos de lograr la rescisión del negocio, que el objeto enajenado por el *servus* no pertenecía al peculio.

a cualquiera de las partes, faltando la prueba²¹⁵; síntoma de una realidad en que seguramente los litigantes intercambiaban las posiciones de acusador y acusado²¹⁶ o contagio, tal vez, de lo establecido respecto a los testigos, se observa en cualquier caso, más que la existencia de leyes postrecesvindianas admitiendo un juramento del actor, el silencio normativo sobre el juramento del demandado en las leyes posteriores a Recesvinto.

Estas comprobaciones enlazan con la pregunta por la naturaleza del juramento purgatorio en el *Liber Iudiciorum*, o, si se prefiere, con su definición en términos de supervivencia germánica. Se ha pensado —antes tuve ocasión de exponerlo, al introducir en este parágrafo la materia de la prueba— en un abandono de la tradición germánica desde Eurico, innovador en derecho visigodo prefiriendo la prueba sobre el recurso expiatorio al juramento²¹⁷; la progresiva erosión del considerado «medio de prueba germánico más importante»²¹⁸ quedaría demostrada, aparte la hipotética revisión leovigildiana de una ley de Eurico conocida tan sólo indirectamente²¹⁹, por interpolaciones de Ervigio a LV 2,1,23, *antiqua*, que consentían, *pro sola investigatione iustitie*, la exigencia judicial del juramento a cualquiera de las partes²²⁰.

215. LV 2,1,23, *antiqua*, añadido final ervigiano: «in quibus tamen causis et a quo iuramentum detur pro sola investigatione iustitie, in iudicis potestate consistat».

216. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «La creación del derecho en Cataluña», p. 176, analizando una documentación procesal que cumplía con fidelidad lo establecido en el *Liber Iudiciorum*: «A veces la forma de redactarse el proceso no permite distinguir claramente los respectivos papeles de demandado y demandante. A partir de la segunda mitad del siglo XII se hace imposible, en muchos casos, llevar a cabo esa distinción o, si así se prefiere, durante el proceso se asiste a un constante cambiar de papeles de las partes». Poseemos además un testimonio de época visigoda, si bien no exento de problemas: FV 40.

217. Franz BEYERLE, *Das Entwicklungsproblem im germanischen Rechtsgang*, especialmente las conclusivas pp. 424-425, antes citadas (*supra* nota 145); pp. 377-378 sobre la posición euriciana, que nos sería conocida por la ley bávara mejor que por LV 2,1,23, *antiqua*. Pero la atribución a Eurico del juramento subsidiario se enfrenta a la redacción de los textos citados en nota 209.

218. Karl ZEUMER, *Historia de la legislación*, p. 163.

219. Franz Beyerle, cit. en nota 217.

220. Karl ZEUMER, *Historia de la legislación*, p. 163: «este resto del derecho germánico, en lo que se refiere a las pruebas, fue suprimido por Ervigio, de-

La construcción anterior desarrolla de manera coherente una opinión de Franz Beyerle enriquecida con la atención zeumeriana a las innovaciones de Ervigio y supone la germanización del juramento exculpatorio en un proceso sin pruebas. Pero así se olvida que en CE el juramento no siempre reviste un carácter subsidiario, con lo que la prioridad de la prueba sobre la inocencia jurada conviene mejor a la tarea revisora emprendida por Leovigildo. Se olvida también —recordarlo fue mérito de Merêa²²¹— la vigencia de una práctica romanovulgar con ese contenido, que ciertamente ha dejado testimonios²²². Si estamos ante un vulgarismo favorecido por experiencias jurídicas de naturaleza germánica²²³ o se trata de un efecto de la evolución autónoma del juramento en los usos judiciales de las provincias de Occidente²²⁴, por lo demás mal conocidos, no es fácil de determinar, pero el dato recomienda al menos una cierta prudencia a la hora de trazar la genealogía de las soluciones normativas visigodas.

El método mismo está en causa: no hará falta insistir en mi escepticismo sobre esta clase de planteamientos, tanto más peligrosos cuanto el interrogante por 'lo germánico' y 'lo romano' en dere-

jando, también en un apéndice, al criterio del juez que éste decidiera qué parte debía ser la que tenía que jurar».

221 Paulo MERÊA, «Notas sobre a Lex Visigothorum 2,1,23», pp. 127-128, contra los intentos de Beyerle de identificar la formulación euriciana de ese precepto en la versión de la *Lex Baiuvariorum* y aceptando la reconstrucción de Zeumer (CE *ex lege Baiuvariorum* 7) «à falta de melhor»; pp. 129 y ss., sobre las *interpretationes* al Paulo visigodo, deduciendo (pp. 131-133) que en un ambiente de creciente uso del juramento, como el Occidente tardoantiguo, se explica el triunfo del juramento purgatorio. IPS influiría en CE; el probable uso de ese juramento en la práctica romana se reforzaría además por FV 40, donde aparece como juramento subsidiario.

222. IPS 2,1,1: «Quum de repetitione pecuniae agitur, et probatio debita pecuniae nulla proferatur, iubet (sententia) huius rei ambiguitatem sacramentorum interpositione finiri»; IPS 2,1,2: «Licet prior petitor offerat sacramentum, tamen quum nulla probatio, debiti est, is, qui calumniam se pati dicit, potest fidem suam iurisiurandi religione firmare» (Paulo MERÊA, «Notas sobre a Lex Visigothorum 2,1,23», pp. 129-131). Cfr. además Alvaro D'ORS, *El Código de Eurico*, p. 10, p. 90 y n. 160.

223. Paulo MERÊA, «Notas sobre a Lex Visigothorum 2,1,23», p. 130 y n. 130, con referencia a Levy, para quien alguno de los textos en discusión «ins unromisch abbiegt».

224. Cfr. *supra* nota 221.

cho visigodo nos desplaza de la cuestión por la función social que las presuntas o posibles herencias institucionales debían asumir en el ámbito concreto del reino de Toledo²²⁵. A mi modo de ver la evolución que sigue el poder monárquico en ese reino —la historia de su conformación mediante las leyes y la adopción de la ideología elaborada por la Iglesia— permite explicar la suerte sufrida por el juramento, pues si la reserva de la «creación del derecho en manos del monarca, bajo la tutela eclesiástica»²²⁶ encierra necesariamente el ejercicio de la justicia por medio del proceso, la facultad real de resolver en exclusiva las controversias conduce a un monopolio de la prueba y por tanto de la verdad, que sólo podrá conocerse mediante su práctica; de este modo, el juramento purgatorio propio acaba por desaparecer, sin perjuicio de la subsistencia del juramento: siempre a título residual (*ne ad sacramentum facile veniatur*), ha de exigirlo el juez *pro sola investigatione iustitiae*, es decir, con total independencia de la voluntad de los litigantes y de su posición en el proceso.

* * *

Ante una acusación por delitos las restricciones a los juramentos de las partes contenidas en las normas descritas —de vigencia que aún resta contrastar— no impedían la obtención de confesiones dotadas de valor probatorio por medio de la aplicación del tormento. Su presencia en el *Liber* acredita de nuevo la romanización del proceso visigodo, así también separado de otros derechos germánicos redactados²²⁷; pero la tortura, consecuencia necesaria de un sistema de pruebas que pretende la determinación objetiva de la verdad, opera como exponente de la incorporación original de figuras romanas en el código de Toledo, revelando, pues a ello son de-

225. Carlos PETIT, *Fiadores y fianzas*, pp. 156-157, y sobre todo «*De negotiis causarum* (I)», pp. 153-154.

226. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «La creación del derecho en el reino visigodo», p. 166.

227. Heinrich BRUNNER-Claudius Frh. v. SCHWERIN, *Deutsche Rechtsgeschichte*, II, p. 542. Y para una presentación general de la tortura en el *Liber* puede acudirse a Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ, S. J., «La tortura judicial en la legislación histórica española», pp. 234 y ss., no exento de inexactitudes (cfr. por ejemplo Carlos PETIT, *Fiadores y fianzas*, pp. 30-31 y nota 23); también Paul D. KING, *Derecho y sociedad*, pp. 133-135, usando las leyes interesantes en la versión ervigiana

bidas las innovaciones en la tradición romana, condiciones y problemas sociales específicos fundamento de la creatividad jurídica visigoda.

Al margen de menciones más o menos ocasionales²²⁸, la regulación de la tortura se contiene en dos leyes de Chindasvinto, luego modificadas por Ervigio, del título *De accusationibus criminum* (LV 6,1,2 y 5). Ambos textos, relativos respectivamente a la tortura de ingenuos y de *servi/liberti*, admiten este trámite *in criminalibus causis* (LV 6,1,2), con acepción de personas y siempre a título subsidiario²²⁹. La regla general es que el acusador que insta la tortura

228. Cfr. LV 2,3,4, Chindasvinto (reglas de representación procesal para solicitar trámite de tormento); LV 2,4,4, Chindasvinto (tortura de *servi* como testigos, con exclusión de ciertos *servi regales*); LV 6,1,3, ¿Egica? (la ley sobre la prueba caldaria, que habrá de ocuparnos); LV 6,1,4 y 7,6,1, ambas *antiquae*, aunque *sine rubrica* la segunda (casos de tortura servil *in capite dominorum*); LV 7,1,1 y 7,1,5, *antiquae* (reglas sobre iniciación y tramitación de causas penales, que conservarían interés a los ojos de los recopiladores del *Liber*, no obstante las novedades legislativas de Chindasvinto, por sus referencias a los *indices* o delatores: M. Díez, cit.); LV 12,2,9, Recesvinto (prohibición de que un judío solicite tortura contra cristiano). A veces encontramos apariciones atécnicas del término *tormentum*: cfr. LV 9,1,13, *antigua*.

229. Así en el supuesto de acusación de *nobiles*: «Quod si probare non potuerit » (LV 6,1,2); cuando la acusación lo es de delito con composición inferior a trescientos sueldos: «Si autem actio minoris est quantitatis, quam trecenti sunt solidi, per probationem convictus qui accusatur secundum alias leges componere compellatur; aut si convinci non potuerit, sacramento se expians compositionem accipiat, que de mala petitione legibus continetur» (LV 6,1,2; cfr. LV 2,2,5, Chindasvinto); en caso de acusación de *inferior* contra *potentior*: «Speciale tamen constitutione decernimus, ut persona inferior nobiliorem a se vel potentiozem inscribere non presumat. Sed si petendum in causa patuerit, et probatio fortasse convincende rei defuerit, nobilior ille vel potentior conscientiam suam sacramentis purgare non differat, quod nec amiserit nec habeat penes se vel retineat rem, pro qua fuerit petitus; et reddito iuramento ille, qui male petit, sicut alia lex continet, ei componere non moretur» (LV 6,1,2; cfr. LV 2,2,5, Chindasvinto), donde las concesiones procesales a los *nobiliores* llegan a preferir el juramento purgatorio a la tortura; tratándose de delito servil y en defecto de la prueba de la inocencia a cargo del *dominus* o del pago por éste de composición: «Si autem dolo servum alienum quispiam subdendum questioni intenderit, et dominis servi, qui accusatur, per probationem eum potuerit de obiecto crimine reddere innocentem, accusator eius alium paris meriti servum accusati domino cogatur exolvere, et dispendium, quod dominus eius in adprobationem innocentis servi pertulerit, prout ratio-

debía ser de *status* social igual o superior al del acusado: los nobles y dignatarios palatinos serían acusados por sus iguales (... *equalem sibi nobilitate vel dignitate palatini officil quicumque accusatum crediderit*: LV 6,1,2), y aún entonces sólo se llega a la tortura tratándose de los *crimina capitalia* fijados por Chindasvinto (traición homicidio, adulterio); los ingenuos no *potentes* podían ser acusados y sometidos a tortura, siempre por otros ingenuos o por algún *potentior*, en los mismos casos capitales y también en el supuesto de *furtum* o demás actos delictivos castigados con una composición de trescientos —o más— sueldos, luego elevados a quinientos por Ervigio. El *inferior* no podía hacer torturar a un *potentior*, quien, acusado sin pruebas, se libraba por juramento purgatorio; el mismo recurso era otorgado al simple ingenuo cuando la composición fuese de menor cuantía. En relación a los *servi* (LV 6,1,5) se admitía siempre la tortura para probar cualquier tipo de delitos, si el *dominus* no quería o podía demostrar la inocencia del *servus* o no accedía a pagar la composición; y ya sabemos las condiciones en que cabía la tortura del testigo servil, incluso *in capite dominorum*.

LV 6,1,2, Chindasvinto, incluye además las normas procedimentales del trámite de tormento, que suponen la minuciosa descripción de actuaciones controladas por el juez y dirigidas —pues aquí se aprecia la naturaleza subsidiaria de la tortura en el proceso— a eliminar posibles arbitrariedades. Vimos antes (cfr. V) que el acusador que pide la tortura podía intervenir mediante representante, exigiéndose de éste condición similar a la del acusado; la *iniunctio* o apoderamiento, suscrita por tres testigos, había de contener la facultad de solicitud del tormento, de modo expreso, en todo caso;

nabiliter iudex reddi perpenderit, ab iniusto accusatore exactum domino servi restituatur. De rebus vero minimis culpa servi repperta, dominus, si voluerit, componendi licentiam habeat . Pro maiori vero noxa, si compositionem dominus noluerit solvere, servum pro crimine non morabitur tradere» (LV 6,1,5). Ervigio reguló, al menos *expressis verbis*, el supuesto de acusaciones contra nobles y sus hijos por crimen no capital: «Nam si capitalia, qua supra taxata sunt, accusata non fuerint, sed furtum dactum dicitur vel aliud quodcumque illicitum, nobiles ob hoc potentioresque persone, ut sunt primates palatii nostri eorumque filii, nulla permittimus ratione questionibus agitari. Sed se in causa, pro qua conpellitur, probatio defuerit, suam qui pulsatur debeat iuramento conscientiam expiare» (LV 6,1,2, líneas 20-25 de la edición zeumeriana, p. 248); cfr. *infra* nota 239

en las acusaciones contra nobles quedaba excluida la representación (LV 2,3,4, Chindasvinto). Previo juramento del actor de no obrar con fraude o malicia (LV 6,1,5), la petición de tortura se realizaba por *inscriptio*, documento de acusación —pero no, según las leyes de Chindasvinto, la acusación primitiva que pone en marcha el proceso (cfr. LV 7,11, *antiqua*)— con firma de tres testigos donde era descrito el delito imputado al reo y el acusador asumía la responsabilidad por una acusación no demostrada²³⁰; se cuidaba en especial que su contenido no trascendiera al acusado, pues la *pro-fessio* o *confessio* de éste, de producirse, sólo resultaría condenatoria si coincidente con lo declarado por el actor en la *inscriptio*²³¹. La práctica del tormento abarcaba un máximo de tres días y, al parecer, a cargo del propio acusador²³²; el *iudex* y unos *virii honesti* presenciaban las actuaciones.

230. «Quod si probare non potuerit, coram principe vel his, quos sua princeps auctoritate preceperit, trium testium suscriptione roborata inscriptio fiat, et sic questionis examen incipiat; ita ut, qui subditur questioni si innox tormenta pertulerit, accusator ei confestim serviturus tradatur, ut, salva tantum anima, quod in eo exercere voluerit vel de istatu eius iudicare elegerit, in arbitrio suo consistat» (LV 6,1,2); «Si servus in aliquo crimine accusatur, antea non torqueatur, quam ille, qui accusat, ac se condicione constringat, ut, si innocens tormenta pertulerit, pro eo, quod innocentem in tormentis tradidit, alium eiusdem meriti servum domino reformare cogatur». Cfr. además LV 7,1,1, *antiqua*: «Iudex reum, qui accusatur, antea non torqueat, quam ille, qui accusat, si indicem presentare noluerit, se per placitum trium testium roboratione firmatum ea condicione constringat, ut, si his, qui accusatus est, manifestis indiciis innocens conprobatur, ipse penam, quam illi intendit, excipiat»; LV 7,1,5, *antiqua*: «Ille vero, qui accusabit, et penam et damnum suscipiat, quod debuit percipi accusatus, si de crimine fuisset convictus». Las *antiquae* incorporan la regla romano-tardía (Theodor MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, pp. 496-497), en tanto la legislación de Chindasvinto enfoca la cuestión como responsabilidad contraída frente al acusado (o su dueño).

231. «Iudex tamen hanc cautelam servare debebit, ut accusator omnem rei ordinem scriptis exponat, et iudici occulte presentans, sic questionis examinatio fiat. Quod si accusator, priusquam occulte iudici notitiam tradat, aut per se aut per quemlibet de re, qua accusat, per ordinem instruxerit quem accusat, non liceat iudici accusatum subdere questioni; cum iam per accusatoris iudicium detectum constet ac publicatum esse negotium» (LV 6,1,2).

232. «Verumtamen seu nobilis sive inferior seu ingenua persona, si questioni subdita fuerit, ita coram iudice vel aliis honestis viris a iudice convocatis accusator penas inferat, ne vitam extinguat. Et quia per triduum questio agitari debet » (LV 6,1,2, faltando previsión similar respecto a los *servi* en

Si el hombre libre acusado fallece en el trámite, el acusador es entregado a su familia, que podrá causarle la muerte; el juez sufre igual pena, a menos que se expíe por juramento y por la declaración, igualmente jurada, de los *honesti viri* presentes demostrando no haber mediado dolo ni soborno del acusador, pero siempre responde del pago de trescientos sueldos²³³. En relación a la tortura de *servus* la muerte *in tormentis* del acusado inocente o no confeso se castiga con una composición de dos *servi* de igual valor²³⁴ o por reducción a servidumbre, a favor del *dominus*; la responsabilidad judicial por tortura excesiva consiste en el pago de otro *servus*. La simple *debilitatio* del injustamente acusado está reprimida por las mismas penas, quedando la víctima como libre —la ley habla de *ingenuus*— bajo el patrocinio del antiguo dueño²³⁵.

Las reformas ervigianas del régimen de la tortura, brevemente descrito en los párrafos anteriores, reflejan fielmente el deterioro jurídico de los grupos sociales más bajos, al tiempo que favorecen la selecta posición de *nobiles* y *potentes* ya admitida por Chindasvinto. Síntoma de una realidad social de hundimiento de los *ingenui minores* y progresiva confusión de *servi* y *liberti* (cfr. en general IV), las manipulaciones sufridas por LV 6,1,5 a cargo de los juristas de Ervigio pasaron por la reelaboración de las reglas sobre tortura

LV 6,1,5). Pero nada más sabemos de cierto sobre las técnicas de tortura; cfr Isidor. *Etym.* 5,27,14-23.

233. «Accusator autem, in potestate proximorum parentum mortui traditus, eadem mortis pena multetur, qua ille multatus est, qui per eius accusationem morte damnatus interiit»; « et quia per triduum questio agitari debet, si inminente casu qui tormentis subditur mortuus fuerit ex malitia iudicis vel alicodolo, seu ab adversario accusati corruptus beneficio talia tormenta fieri non prohibuit, unde mors occurreret, ipse iudex iniquitatis proximis parentibus simili vindicta puniendus tradatur. Si certe suo se sacramento innocentem reddiderit, et testes, qui fuerint presentes, iuraverint, quod nulla sua malitia vel dolo aut corruptione beneficii mors ipsa provenerit, nisi solo tormentorum eventu, pro eo, quod indiscretus iudex superflua non prohibuit, CCC solidus heredibus mortui compellatur exolvere» (LV 6,1,2). Ervigio elevó la cuantía.

234. «Si vero innocens in tormentis mortuus vel debilitatus fuerit, duos equalis meriti servos cum eodem domino reddere non moretur» (LV 6,1,5). La ley se preocupa de precisar qué debe entenderse por *servi equalis meriti*, «ut de servorum meritis omnis ambiguitas cesset contentionis».

235. « et ille, qui debilitatus est, ingenuus in patrocinio domini sui permaneat» (LV 6,1,5).

de los libertos²³⁶, estableciendo diferentes requisitos para su admisión a tenor de la condición más o menos elevada de aquéllos²³⁷. La responsabilidad por un tormento injusto o que acarrea la muerte del acusado era fijada también de manera discriminada²³⁸. Pero más profundas fueron las novedades normativas que afectaron a los *nobiles*, pues si, de un lado, mediante glosemas insertos en LV 6,1,2 se admitía el pago de una (indeterminada) composición como alternativa a la reducción a servidumbre, que era la penalidad habitual en caso de tortura de inocente, o se prohibía tajantemente la tortura de los *primates palatii* y sus hijos fuera de las tres *crimina capitalia*²³⁹, de otro, y aprovechando la ocasión que suministraba

236. Abordada precisamente en la ley sobre tortura servil por Chindasvinto (LV 6,1,5), las reformas de Ervigio suponen la extensión, respecto de los *liberti*, de la distinción *idoneus/rusticanus*, propia de los *servi*. El tenor original de LV 6,1,5, en lo relativo a este punto disponía lo siguiente: «Ingenuus sane, si libertum questioni putaverit addicendum, sive pro capitali crimine seu pro centum quinquaginta solidorum quantitate, si innox quodcumque tormenti pertulerit, CL solidos eius petitor ei componere compellendus est».

237. Añadido ervigiano a LV 6,1,5: «Ingenuus sane, si quemlibet libertum idoneum pro capitali crimine sive pro aliis scelerum causis questioni pulsaverit addicendum, non aliter eum inpetere poterit adscribendum, nisi ducentorum quinquaginta solidorum quantitate causa ipsa valuerit, pro qua eum accusator conatus fuerit subdere questioni. Nam si inferior fuerit atque rusticanus, *quem liberum esse constet*, tunc in eo permittetur questio agitari, si causa ipsa, unde accusatur, C solidis valere constiterit». Me permito llamar la atención sobre la frase en cursiva, pues ofrece un valioso argumento para considerar que el *libertus rusticanus* pasaba normalmente por *servus*.

238. «Quod si indiscrete qui questione subditur in quacumque parte membrorum debilitationem incurrerit, tunc iudex, qui temperamentum in tormentis non tenuit, CC illi, qui tormenta sustulit, solidos persolvat. Ille vero, qui cum iniuste questionandum adpetiit, CCC solidos ei dare cogendus est. Certe si in tormentis positus mortem incurrerit, predictam summam solidorum tam iudex quam petitor propinquis parentibus mortui persolvebunt. Similiter et de inferioribus illis libertis, si debilitatione vel morte quis per intemperantiam fuerit condemnatus, medietas satisfactionis, que supra de libertis idoneis constituta est, ei, qui indebite questionatus est, si tamen vixerit, aut suis heredibus, si ipse inde mortuus fuerit, exsolvenda est».

239. Así se añadieron a LV 6,1,2 las frases siguientes: «Quod si conponi sibi ab accusatore voluerit, tantum ei pars accusatoris conponat, quantum ipse, qui questioni subiacuit, inlata sibi taxaverit suorum tormenta supplicia»; y más abajo: «Nam si capitalia, que supra taxata sunt, accusata non fuerint, sed furtum factum dicitur vel aliud quodcumque illicitum, nobiles ob hoc

el perdón a los rebeldes contra Wamba, se promulgó un canon favorable a la nobleza en el Concilio de Toledo XIII, a. 683, que excluía la práctica de la tortura y otros apremios contra obispos, gardingos y *optimates* palatinos²⁴⁰; la concesión de Ervigio sería objeto de revisión, con motivo de la conjura de Sisberto, en tiempos de Egica²⁴¹.

* * *

Tal es, en resumen, el conjunto de preceptos con que el *Liber Iudiciorum* regula las pruebas. Se ha podido comprobar que el punto inicial de estas reflexiones, la consideración del proceso como método de determinación de la verdad con concurso de la prueba, característico de la cultura antigua, pervivió en derecho visigodo asumiendo el papel que le correspondía en tanto complemento ló-

potentioresque persone, ut sunt primates palatii nostri eorumque filii, nulla permittimus ratione questionibus agitari».

240. Concilio de Toledo XIII, a. 683, c. 2: «De accusatis sacerdotibus seu etiam obtimatibus palatii atque gardingis sub qua eos iustitiae cautela examinari conveniat.—Secundae conlationis obiectu res nostro coetui lacrymando occurrit, quae tanto est synodalis iudicii pondere abigenda, quanto immensam stragem populis afferet pariter et ruinam: etenim decursis retro temporibus vidimus multos et flevimus ex palatini ordinis officio cecidisse quos et violenta professio ab honore degerit et citravale regum factione iudicium aut morti aut ignominiae perpetuae subiugavit .. Unde congruam devotioni eius sententiam decernentes hoc in commune decrevimus ut nullus deinceps ex palatini ordinis gradu vel religionis sanctae conventum, regiae subtilitatis astu vel profanae potestatis instinctu sive quorumlibet hominum malitiosae voluptatis obnusu citra manifestum et evidens culpaе suae indicium ab honore sui ordinis vel servitio, domus regiae arceatur, non ante vinculorum nexibus inligetur, non quaestioni subdatur, non quibuslibet tormentorum vel flagellorum generibus maceretur sed is qui accusatur gradum sui ordinis tenens et nihil ante de supradictorum capitulorum nocibilitate persentiens, in publica sacerdotum, seniorum atque etiam gardingorum discussione deductus et iustissime perquisitus aut obnoxius reatui detectae culpaе legum poenas excipiat, aut innoxius iudicio omnium conprobatus appareat»; líneas más abajo el canon parece referirse también a los ingenuos que no tienen cargo palatino, para extender este régimen procesal a su favor «si de infidelitatis crimine quicumque eis obicitur». El cotejo de estas disposiciones con el contenido del tomo presentado por Ervigio ante el Concilio (Vives, pp. 412-413) demuestra que los descos reales eran menos generosos que la voluntad de la asamblea eclesiástica.

241 Véase *supra* nota 18, cfr además LV 2,5,19, Egica, en nota 16

gico del monopolio de justicia que se reservaba el monarca. La prueba destacadamente, pero, desde luego, el proceso todo en sus principios, reflejan la concepción del poder existente en el reino de Toledo, al menos desde la visión —unilateral— ofrecida por el derecho del rey.

Este mismo derecho nos indica sin embargo las dificultades que rodeaban la aplicación práctica de aquellos principios; la racionalidad del sistema probatorio, entre ellos, no dejó de encontrarse en discusión, existiendo algunos datos que demuestran la distancia existente entre las previsiones normativas oficiales y su concreta vigencia en el seno de una sociedad sometida a los cambios impuestos por una feudalización creciente. Con el análisis de tales datos termina este ya demasiado largo apartado.

Interesa ante todo alegar una ley dictada por Ervigio *De personis iudicum sive etiam ceterorum, qui aut divinos consulunt aut auguriis intendunt* (LV 6,2,2), pues su lectura ofrece la imagen en negativo de cuanto se ha venido exponiendo. Partiendo del modelo procesal de pruebas racionales y raigambre romana, controlado por el rey mediante sus jueces, este precepto se dirige a reprimir a los que consultaban adivinos para conocer los hechos del litigio y dictar sentencia; el mal afectaría a todo tipo de jueces si la ley va referida a *quis, ex quolibet iudicum gradu vel ordine*, permitiéndonos sospechar que estamos ante un abuso generalizado. Es importante llamar la atención sobre el conflicto entre la prueba que por comodidad podemos calificar de oficial y la prueba, propiamente anti-prueba, de adivinos: recorre toda la ley manifestándose terminológicamente en el uso repetido de la oposición *veritas-mendacium*, que se explica causalmente por la oposición *Deus-diabolus* (LV 6,2,2: *...Omnis igitur veritas ex Deo est, mendacium vero ex diabolo est quia et ipse diabolus ab initio mendax est*)²⁴² y conduce, como conclusión de la argumentación silogística de la cancillería de Ervigio, a contraponer el mundo de la justicia oficial —de la verdad mediante la prueba, y por tanto de Dios— al ámbito condenable de una pretendida justicia irracional —de la mentira procedente del adivino y por tanto del diablo— en la que se situaban unos

242. Se trata de una composición basada en pasajes neotestamentarios: sobre Cristo como origen de la verdad, Juan 1,17 y 14,6; el diablo, causa de mentira, Juan 8,44 (cfr. Pablo, II a los Corintios 11,3).

jueces *Dei spiritu vacui, erroris spiritu pleni*. Las penas previstas por Chindasvinto en LV 6,2,1, citada expresamente en el texto²⁴³, castigarían a los jueces y a cualesquiera otros consultores de augures²⁴⁴.

243. Las penas consisten en azotes, confiscación y reducción a servidumbre, tratándose de ingenuos; los *servi* serían vendidos *in transmarinis partibus*.

244. LV 6,2,2, Ervigio: «De personis iudicum sive etiam ceterorum, qui aut divinos consulunt aut auguriis intendunt.—Sicut pia veritas mendacii conser-tione non capitur, ita non est consequens, ut latens veritas mendacio investigetur. Omnis igitur veritas ex Deo est, mendacium vero ex diabolo est, quia et ipse diabolus ab initio mendax est. Cum ergo utraque res suos principes habeat, quid opus est, ut veritas cuiuscumque mendacio admittatur exquiri? Quidam enim feruntur ex iudicibus, Dei spiritu vacui, erroris spiritu pleni, qui acta maleficiorum dum investigari subtili perquisitionis perspicacia nequeunt, execrables divinorum pronuntiationes intendunt. Veritatem se enim inveniri non putant, nisi divinos et aruspices consulant, et eo sibi repperiende veritatis aditum claudunt, quod veritatem ipsam per mendacium addiscere concupiscunt. Dum enim maleficium per divinum, maleficia per divinationes comprobare pertemtant, quasi tertio loco ipsi se diabolo servituros inlaqueant. Quapropter, si quis ex quolibet iudicum gradu vel ordine per divinos aut eorum similes aliquid sciscitare temptaverit vel adprobare intenderit, si quis etiam hominum, cuiuslibet sit ordinis vel persone, a talibus aut salutis aut egritudinis responsa poposcerit vel consulendos eos pro quibuscumque rebus crederit, ad legis illius teneatur satisfactionem obnoxius, que in hoc libro sexto sub titulo secundo era prima eos, qui de salute vel morte hominis vaticinatores quosque consulere pertemtant, statuit serenitatis ordine resecari. Illi tantum iudices ad huius legis non tenebuntur sententiam condemnandi, qui divinos ipsos atque eorum similes non sciscitandi, sed ulciscendi voto coram multis perquirendo detriverint; id est, si non, ut aliquid de eos scire exquirendo intendant, sed detectis sibi hoc solum, unde feriantur, exquirant. At nunc, quia et auguriis deditos eodem modo novimus esse odibiles Deo, ideo speciali legis sanctione decernimus, ut, quicumque sint illi, quibus augurii vel auguria observare contingerint, quinquagenis publice subiciantur verberibus coercendi. Qui tamen, si ad solitum vitium ultra redierint, perditio etiam testimonio, simili erunt sententia flagellorum feriendi»; la astucia del juez dirigiéndose al adivino para desenmascararlo refuerza mis impresiones sobre la generalización de esta práctica: el adivino no se extrañaría de que lo consultase el titular de un cargo judicial. Cfr. además Concilio de Toledo IV, a. 633, c. 29: «De clericis magos aut aruspices consulentibus.—Si episcopus quis aut presbyter sive diaconus vel quilibet ex ordine clericorum magos et aruspices aut ariolos aut certe augures vel sortilegos, vel eos, qui profitentur artem aliquam, aut aliquos eorum similia exercentes, consulere fuerit deprehensus, ab honore dignitatis suae depositus monasterii curam excipiat, ibique perpetuae poenitentiae dedi-

No se negará que siendo el juez, a tenor del diseño procesal tardorromano aceptado por el *Liber*, propiamente eje de todo el procedimiento, esta clase de desviaciones en el momento de la prueba subvertía los controles regioes sobre la justicia (cfr. LV 2,4,8, Egica: *iustitia, que Deus est*), trasladando la resolución de los conflictos sociales —de aquéllos que tenían acceso a los tribunales del rey: cfr. IV— del terreno institucional previsto por el monarca y su derecho al plano más ambiguo, y para nosotros prácticamente desconocido, de creencias y usos populares, surgidos al compás de la feudalización de la sociedad toledana. Es de pensar que la situación de crisis extendida por la que atravesó esa sociedad desde mediados del siglo VII —plagas, depresión económica que revela el envilecimiento del numerario real y la revisión de las cuantías contenidas en el *Liber*, tensiones y revueltas en la sucesión a la corona que llevan a intentar la elevación del régimen jurídico del patrocinio a las relaciones entre el rey y el pueblo (cfr. VI), degradación de *status* (cfr. IV) y fugas serviles...— se proyectó también, y aún directamente, en el campo del proceso; no se trata ahora de resaltar nuevamente la incidencia de los vínculos de dependencia en unos jueces que las fuentes presentan muy sensibles a los dictados del patrocinio, ni tampoco de recordar otra vez las violencias condenadas por el rey en salvaguarda de su procedimiento, pero conviene tener presente que la creciente impotencia del poder regio, de esa forma manifestada, conmovía las reglas de la administración de justicia: la proliferación de *convenientiae* (LV 2,2,10, Egica) y la intervención de adivinos en los procesos (LV 6,2,2, Ervigio) aparecían como mecanismos de pacificación social alternativos a los instrumentos jurídicos oficiales.

La afirmación anterior puede expresarse en términos más convencionales de historia jurídica, si admitimos que el progresivo abandono de la tradición romana, impuesto por nuevas circunstancias, conducía a la lenta implantación de técnicas y normas de derecho tan alejadas de las instituciones propias de una sociedad

tus scelus admissum sacrilegii luat», con contactos de fondo y terminología (sc. «vel quilibet ex ordine clericorum» —«si quis ex quolibet iudicum gradu vel ordine»; «vel sortilegos, vel eos, qui profitentur artem aliquam, aut aliquos eorum similia exercentes» — «per divinos aut eorum similes») con el precepto de Ervigio

esclavista como convenientes a una sociedad feudal en formación; por eso no ha de extrañar que fenómenos apenas emergentes en el reino de Toledo estuviesen destinados a lograr en los siglos medievales un previsible desarrollo. Así interpreto yo, al menos, la cuestión de la ordalía, íntimamente relacionada con la ley de Ervigio que vengo comentando; su consideración actual, que seguirá de cerca los estudios de Aquilino Iglesia, agota el tratamiento del derecho probatorio visigodo y permite finalizar el contenido del presente párrafo.

La *sedes materiae* la ofrece una ley que Zeumer edita como LV 6,1,3, atribuida a Egica, Witiza, Recesvinto, Ervigio y Wamba según unos muy divergentes manuscritos²⁴⁵, de difícil interpretación y diversidad de versiones. Siguiendo —«por su claridad»— el texto recogido en el manuscrito V 2 de la edición zeumeriana, Aquilino Iglesia describía sus prescripciones del modo que recojo a continuación. «Para resolver la situación determinada por la existencia de delitos, cuya responsabilidad económica no superaba los 300 sueldos, por lo que su acusación no quedaba sometida a las prescripciones de *Liber* 6,1,2, en su redacción recesvindiana, se determina que el acusado, por orden del juez, sea sometido a la prueba caldaria. Si de la misma se manifiesta la *facti temeritas*, el juez deberá someter al acusado a tormento»²⁴⁶; también —añado yo— los testigos sobre cuya credibilidad existieran sospechas²⁴⁷. No hace

245. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «El proceso del Conde Bera», pp. 80 y 84.

246. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «El proceso del Conde Bera», pp. 90-91.

247. He aquí el texto de la ley, tal como aparece en la edición de Zeumer (desprecio las múltiples variantes): «Quomodo iudex per examen caldarie causam perquirat —Multas cognovimus querelas, et ab ingenuis multa mala pati, credentes in trecentis solidis questionem agitari. Quod nos modo per salubrem ordinationem censemus, ut, quamvis parva sit res facti ab aliquo criminis, eum per examinationem caldarie a iudice distringendum ordinamus, et dum facti temeritas patuerit, iudex eum questioni subdere non dubitet; et dum suam dederit professionem, superiori legi subiacebit. Quod si per examen caldarie innoxius apparuerit, petitor nullam pertimescat calumniam, Hic quoque et de suspectis habendis personis, qui ad testimonium venerint dicendum, ordo servabitur». La reconstrucción de la ley según el ms. V 2, poniendo en juego el aparato crítico editado por Zeumer, sería así: «FLS GLS EGIGA REX NVT EM TOLETO. Quomodo iudex per examen caldarie causam inquirat —Multas cognovimus querelas, et ab ingenuis multa mala quidam perpersi credencium nisi suma DCorum solidorum questionem non posse agitari. Quod nos noviter

falta reflexionar demasiado para comprobar hasta qué punto LV 6,1,3 violenta el sistema de pruebas que conocemos, pues esta ley supone, en primer lugar y en relación a la tortura, la supresión de cualquier límite de cuantía a la hora de su aplicación —*quamvis parva sit facti criminis ... iudex eum (sc. el acusado) questionari non dubitet*— ante la interposición de una *examinatio caldarie* como cautela previa al tormento, mientras que tratándose, en segundo lugar, de la prueba de testigos, el reconocido arbitrio judicial para seleccionar las declaraciones ha dejado paso a la determinación de su veracidad o falsía aplicando semejante *examinatio*; que la caldaria se conciba como garantía en orden a la tortura, en lugar de ser la prueba que resuelve definitivamente la culpabilidad o inocencia del reo, es una tercera llamativa característica de LV 6,1,3 para una historia del procedimiento. Todos estos problemas, unidos a la dificultosa tradición textual de la ley y a la falta de noticias sobre la práctica de ordalías en tiempos toledanos, han motivado un tradicional escepticismo sobre su paternidad visigoda, apuntado, frente a una doctrina germanista extranjera inclinada a considerar la existencia de ordalías²⁴⁸, por diversos autores españoles²⁴⁹. Hoy

salubri amonitione censemus, ut, quamvis parva res sit facti criminis, presump-
tor vel accusatus a iudice districtus noxium se vel inculpabilem hostenditur per
examinationem caldarie. Et si facti temeritas imperaverit, iudex eum questio-
nari non dubitet; et si suam dederit professionem, subiaceat statutis legum
iuxta culpe modum. Quod se per examinationem caldarie accusatus vel pre-
sumptor innoxius apparuerit, petitor nullam pertimescat calumniam. Hic quo-
que et de suspectis personis, qui ad testimonium venerit dicendum, ordo serva-
bitur. Nullam enim executionem ab inceptis iubentur constringi, quos novimus
Dei iudicio occulto reservari».

248 Por todos Heinrich BRUNNER-Claudius Frh. v SCHWERIN, *Deutsche Rechtsgeschichte*, II, pp. 542, 545 y nota 34, 549. Conscientes de algunos problemas planteados por LV 6,1,3 los autores se veían en el deber de precisar que la presunta ordalía era regulada «in überraschender Weise», «in eigentümlicher Anwendung». De supervivencias de paganismo germánico habla, respecto a esa ley, S. MCKENNA, *Paganism and Pagan Survivals in Spain*, pp. 134-135; para McKenna, p. 135, el recurso a la ordalía estaría en relación con la privación de la *testificandi licentia* por efecto de la ley militar de Wamba (LV 9,2,8), luego devuelta por Ervigio: «unable to settle their disputes legally these people might easily revert to the old Germanic custom of the ordeal»; la debilidad del argumento es total, especialmente para una época posterior a Concilio de Toledo XII, a. 681, c. 7.

249. Así Francisco Martínez Marina o Alfonso García-Gallo; referencias

se acepta que nos encontramos ante una pseudoley visigoda añadida a algunos manuscritos del *Liber* en años y ambientes medievales que conocían la ordalía²⁵⁰, al objeto de presentar como *lex gothica* una nueva realidad que arraigaba en la práctica.

Se cierra, así, el círculo de esta exposición. La fecha tardía de la supuesta novela visigoda no impide rastrear en el reino de Toledo la existencia de un «pensamiento preordálico» consistente en la «creencia en la intervención de la divinidad en la vida de los hombres, con el fin de restaurar la justicia violada»²⁵¹, que si no llegó a cuajar positivamente en las leyes, desde un ángulo negativo —al menos— encontró reflejo en LV 6,2,2. La obsesión escatológica de los reinados de Ervigio y Egica²⁵², siendo índice de la amplia crisis

—imprecisas— en Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «El proceso del Conde Bera», cit. También Ramón PRIETO BANCES, «Una huella isidoriana en la legislación del reino de Oviedo», pp. 495-498, de utilidad escasa.

250. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «El proceso del Conde Bera», pp. 83 y ss., pp. 92 y ss., apuntando a Cataluña. Del mismo, «La creación del derecho en Cataluña», pp. 193 y ss., pp. 262 y ss.

251. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «El proceso del Conde Bera», pp. 98 y ss.

252. Fundamental al respecto Juan GIL FERNÁNDEZ, «Judíos y cristianos en la Hispania del siglo VII», especialmente pp. 83 y ss. sobre «el Imperio en peligro y la crisis espiritual del reino visigodo». Envueltos judíos y cristianos en toda suerte de especulaciones escatológicas y disputas cronológicas acerca de la venida del Mesías, en la segunda mitad del siglo VII y en Toledo «apenas —escribe Gil, p. 84— hay obispo que no cargue las tintas sobre el fin cercano de la carne y la postrera rendición de cuentas ante el Juicio tremendo de Dios»; el escrito y la figura más representativos serían el tratado antijudaico *Comprobación de la Sexta Edad* de Julián de Toledo, pero otros personajes de la Patrística hispanogoda acusaban idénticas preocupaciones apocalípticas (Ildefonso, Braulio, Fructuoso, Idalio: Gil, pp. 84-85). Su vigencia se acredita por fuentes canónicas también: del «mundo que se acaba» hablaba Ervigio en su tomo al Concilio de Toledo XII, a. 681 (Vives, p. 380: «Non dubium, sanctissimi patres, quod optima conciliorum adiutoria ruenti mundo subveniunt, si officiosis quae corrigenda sunt studiis peragantur, et ideo quibus malis terra prematur quibusque plagis proventu dierum succedentium feriat, paternitati vestrae non reor esse incognitum»), en tanto años después Concilio de Toledo XVI, a. 693, c. 4 se lamentaría de los desesperados que llegaban al suicidio. Dentro de estas coordenadas hay que comprender, como ha mostrado Gil, la dura represión antijudía de Ervigio-Egica; yo añadiría, además, ese «pensamiento preordálico» identificado —pero sin acusar recibo de las enseñanzas de Gil y basándose, entonces, en «un cambio en la mentalidad en cuanto a la creación del derecho»— por Aquilino IGLESIA, «El proceso del Conde Bera», p. 98, y unas

por la que atravesaba la sociedad visigoda, ofrecía además el clima propicio para buscar en el mundo de lo trascendente la justicia que el monarca y sus jueces no siempre podían realizar.

XII

Sobre la finalización del litigio disponemos de la información que suministra una ley de Chindasvinto (LV 2,1,25), donde esta cuestión se enfoca desde el punto de vista documental. Las causas terminaban normalmente por la sentencia del juez, *iudicium*, que debía recogerse por escrito *presentibus utrisque partibus* y ser entregada a cada uno de los litigantes suscrita por aquél; si el pleito comportase una cuantía escasa había de bastar con las *conditiones iuramenti* que documentaban el testimonio recibido como prueba. Pero como la controversia podía zanjarse cuando el acusado (*pars, que pro negotio quocumque compellitur*) admitía la reclamación, en este supuesto la *professio* era redactada y firmada por el juez, sustituyendo al *iudicium* o las *conditiones*. En todo caso, el abandono del juicio por una de las partes en el trámite probatorio no impediría practicar las pruebas aportadas por la otra y dictar sentencia, aunque el ausente conservaba la posibilidad de tachar a los testigos del contrario antes de que fallecieran²⁵³.

prácticas judiciales del tipo de las descritas y condenadas por Ervigio en LV 6,2,2.

253. LV 2,1,25, Chindasvinto: «Iudex, qualiter faciat iudicatum —Si de facultatibus vel de rebus maximis aut etiam dignis negotium agitetur, iudex, presentibus utrisque partibus, duo iudicia de re discussa conscribat, que simili textu et suscriptione roborata litigantium partes accipiant. Certe si de rebus modicis mota fuerit actio, sole condiciones, ad quas iuratur, aput eum, qui victor extiterit, pro ordine iudicii habeantur. De quibus tamen condicionibus et ille, qui victus est, ab eisdem testibus roboratum exemplar habebit. Quod si pars, que pro negotio quocumque compellitur, professa fuerit aput iudicem, non esse necessarium a petitore dari probationem, quamlibet parve rei sit actio, conscribendem est a iudice suaque manu iudicium roborandum, ne fortasse quelibet ad futurum ex hoc intentio moveatur. Si vero, hordinante iudice, una pars testes adduxerit, et dum oportuerit eorum testimonium debere recipi, pars altera de iudicio se absque iudicis consultum subtraxerit, liceat iudici prolatos testes accipere, et quod ipsi testimonio suo firmaverint, illi, qui eos protulit, sua instantia consignare. Nam ei, qui fraudulenter se de iudicio sustulit, producere testem alium omnino erit inlicitum; qui scilicet hoc

LV 2,1,25 parece obsesionada con la reapertura de litigios ya concluidos, pues la documentación del fallo o similar había de servir para evitar nuevas reclamaciones de idéntico objeto (...*ne fortasse quelibet, ad futurum ex hoc intentio moveatur*)²⁵⁴, pero el lamentable estado de las fuentes permite conocer bien poco acerca de esta clase de escrituras. Una *antiqua* de probable procedencia leovigildiana²⁵⁵ cita los *iudicia* entre aquellas *scripturas, que simul tradi partibus debent* (LV 5,5,10), en tanto el formulario atribuido a tiempos de Sisebuto contiene un modelo de *carta dijudicationis* (FV 40), autotitulada *iuditii pagina*, que por su presunta fecha no sirve demasiado para conocer el contenido del *iudicium* regulado por Chindasvinto²⁵⁶. De las *conditiones, ad quas iurater*, alternativa

sibi tantum noverit esse concessum, ut antequam testes illi, qui testimonium dederant, moriantur, si habuerit quod rationabiliter in eis accuset, patienter audiatur a iudice; et si accusatus testis fuerit evidenter convictus, eius testimonium pro nihilo habeatur. Unde et si duo testes non remanserint, qui digni in eodem testimonio maneant, ille, qui primum testem obtulerat, infra trium mensium spatium testes alios, qui ceptum negotium firment, inquirere non desistat. Quod si invenire nequiverit, rem universam ille recipiat, qui eam ante visus fuerat possedisse. Iudex sane de omnibus causis, qui iudicaverit, exemplar penes se pro conpescendis controversiis reservare curabit»; cfr. además LV 2,3,2, *antiqua*: «(iudex) ... hac preterea mandati exemplar accipiat illius adsertoris aput se cum iudicatio exemplaribus reservandum» Para la aplicación de esta ley en el altomedioevo catalán, Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «La creación del derecho en Cataluña», pp. 204 y ss., 209 y ss.; sobre las *conditiones, ad quas iuratur* véase *supra* nota 198 e *infra* nota 257. Una versión medieval de LV 2,1,25 edita Zeumer, p. 462, entre los *additamenta* a LV.

254. Karl ZEUMER, *Historia de la legislación*, p. 174: se trataría de una práctica romana, anterior a Chisvinto en su aceptación por la legislación visigoda (CE 277; LV 2,3,2, *antiqua*; LV 5,5,10, *antiqua*)

255. Así Alvaro D'ORS, *El Código de Eurico*, p. 203.

256. El documento, que mereció la atención de Moritz A. v Bethmann-Hollweg en su exposición del derecho procesal visigodo (cfr *Der Civilprozess*, IV, pp. 242 y ss.), contiene propiamente las actas de un juicio y no, según creo exigía Chindasvinto, la mera sentencia; así parece cercano a la práctica canónica de la primera mitad del siglo VII (juicio entre Habencio y Marciano, cit. en nota 128). Los *iudicia* de LV 2,1,25 tenían, además, que ser firmados por el juez: pero en FV 40 —siempre usada en la edición de Angel CANELLAS LÓPEZ, *Diplomática hispano-visigoda*, doc. núm. 53, pp. 150-151— firman otros personajes, tal vez las partes o sus mandatarios («Ille hanc iuditii paginam nostro in iudito latam subscripsit. Ill. rogitus a domino et fratre ill hunc iudicium ab ipso et nostra coram praesentia latam subscripsit»).

de la sentencia *si de rebus modicis mota fuerit actio* (LV 2,1,25), poseemos FV 39 y —tal vez— el documento en pizarra que editó Díaz y Díaz, indudablemente relacionado con aquélla ²⁵⁷. Otra pizarra visigoda, en fin, pudiera conectarse con la *professio* o reconocimiento de los derechos del actor admitida en LV 2,1,25 ²⁵⁸.

* * *

A los gastos del proceso y su atribución en derecho visigodo dedicó algunas páginas Jesús Lalinde, quien sostuvo, de una parte, que la existencia en el *Liber* de diversas multas procesales no impedía —contra Chiovenda— un pronunciamiento sobre las costas; su imputación, de otra, estaría inspirada por el criterio subjetivo ^{258 bis}. Y aunque Lalinde sólo encontró como apoyo seguro de su hipótesis

257. Ed. Angel CANELLAS LÓPEZ, *Diplomática hispano-visigoda*, doc. núm. 38, pp. 141-142 (pero debe leerse en la línea 2.^a *Widerici* por *Wiredici*). Algunas fórmulas juratorias y la alusión al sacrosanto altar de algún mártir local coinciden en FV 39 y en la pizarra (Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ, «Un document privé», pp. 64-65, cotejando los pasajes correspondientes), por lo que la vinculación entre ambos textos resulta innegable. Deducir de estas conexiones de formulario, lógicas al tratarse de un mismo acto (el juramento), que estamos ante la misma institución sería, aunque posible, peligroso: la doble referencia al objeto del litigio («propter caballos quos mutaverant») y a los ruegos del reclamante («conditionis sacramentorum ad quas debead iurare Lolus essurdinatione Eunandi, Argeredi vicaris rari Widerici, Argivindis . daci iudicibus, ad petitione Basili») permiten pensar en un juramento prestado por el demandado, no por un testigo (cfr. *supra* nota 198). Pero cabría también entender que Lolus era un testigo producido por Basilius (sobre estos nombres, Gerd KAMPERS, *Personengeschichtliche Studien zum Westgotenreich in Spanien*, p. 99 y núm. 400, remitiendo al núm. 7; p. 112 y núm. 518, con igual remisión), con lo que la pizarra incorporaría el juramento de su declaración, tenida por prueba; la mala conservación del texto ofrece base para todo tipo de especulaciones. Con independencia del carácter del juramento, llama la atención la pluralidad de jueces que intervienen en el acto, cuando el *Liber* contempla siempre, a salvo la existencia de *auditores* (LV 2,2,2, Chindasvinto) o la actuación conjunta de juez y obispo (por ejemplo, LV 2,1,30, en su versión ervigiana), la figura de un órgano judicial unipersonal: ¡otro más de los secretos que guardan las pizarras!

258. Se trataría, con el «tal vez» que vengo empleando al citar estos torturados textos, del que recoge Angel CANELLAS LÓPEZ, *Diplomática hispano-visigoda*, doc. núm. 64, p. 157: «professio de ser(vitute)».

258 bis. Jesús LALINDE ABADÍA, «Los gastos del proceso en el derecho visigodo», *passim*.

la interpolación ervigiana a LV 2,1,26, referente al supuesto particular de la partición de herencia, la revisión detenida del *Liber* me ha permitido detectar en la ley sobre tortura servil de Chindasvinto otra posible aplicación del mismo principio²⁵⁹. De más interés que estas anécdotas considero, sin embargo, la preocupación real por fijar la retribución de jueces y sayones (*lex Theudi*; LV 2,1,26, *emendata* por Chindasvinto), pues revelan el esfuerzo por controlar la justicia oficial que sabemos inspira la regulación de todo el procedimiento.

* * *

Las líneas anteriores nos sitúan ahora ante otra manifestación del mismo esfuerzo. El *Liber Iudiciorum*, en garantía del diseño imposible de un proceso que sólo pertenece al rey, establecía diversas vías para reprimir ignorancias, negligencias y actuaciones dolosas del juez que sentenciaba injustamente. Mediante su estudio hemos de apreciar que las leyes sobre prevaricación o configuradoras de unos borrosos recursos contra las decisiones judiciales revelan —por su incremento en número y multiplicación de caute- las a lo largo del siglo VII— las miserias del aparato regio de la justicia, o, para ser más exactos, su necesaria adecuación a la realidad de los vínculos de dependencia exigidos por las circunstancias sociales vigentes en tal siglo. Apreciaremos además los intentos reales de someter a los jueces mediante el concurso de la jerarquía eclesiástica, aunque a despecho, y es asunto que no puede tener consideración específica en estas páginas, del grado de feudalización que llegó a alcanzar contemporáneamente esa misma jerarquía.

* * *

Al igual que en otras *leges barbarorum* —y aun con una regulación que influyó en alguna de ellas—²⁶⁰ el *Liber Iudiciorum* con-

259. LV 6,1,5, Chindasvinto: « Si autem dolo servum alienum quispiam subdendum questioni intenderit, et dominus servi, qui accusatur, per probationem eum potuerit de obiecto crimine reddere innocentem, accusator eius alium parís meriti servum accusati domino cogatur exolvere, et dispendium, quod dominus eius in adprobationem innocentis servi pertulerit, prout rationabiliter iudex reddi perpenderit, ab iniusto accusatore exactum domino servi restituatur»; pero habrá que discernir si estamos ante una simple reparación del daño causado o bien, propiamente, de un gasto procesal.

260 Adolf SCHMITT-WEIGAND, *Rechtspflegedelikte*, p. 112; p. 44 (influencias

templa el pronunciamiento de un fallo injusto en la *antiqua* LV 2,1,21. Esta ley distingue claramente entre la sentencia dictada con prevaricación —*per qualibet commodum*, es decir, singularizando la idea general de fallo injusto intencional en el supuesto de actuación por soborno, que sería lo más frecuente—²⁶¹ y con simple ignorancia —*per ignorantiam, ignoranter*— demostrada por el juramento expiatorio del juez, estableciendo en todo caso la nulidad de la decisión y el castigo, en el primero, de un *alium tantum* de la suma en litigio a pagar por el juez al litigante afectado, con la alternativa de reducción a servidumbre a su favor de no poder satisfacer la composición²⁶²; Ervigio dulcificó estas penas al sustituir la entrega en servidumbre por cincuenta azotes²⁶³. Se ha considerado, a mi modo de ver sin demasiado fundamento, que así se resolvía el problema de la injusticia de una sentencia recaída en causa civil,

en la legislación del rey longobardo Liutprando, apoyado en Tamassia), p. 72 y nota 531 (influencias en la *Lex Baiuvariorum*).

261. Así coincidía el derecho visigodo con los otros derechos de pueblos germánicos: Adolf SCHMITT-WEIGAND, *Rechtspflegedelikte*, pp. 122-123.

262. LV 2,1,21, *antiqua*: «Si iudex aut per commodum aut per ignorantiam iudicet causam—Iudex si per quodlibet commodum male iudicaverit et cumque iniuste quidquam auferri preceperit, ille, qui a iudice ordinatus ad tollendum fuerat destinatus, ea, que tulit, restituat. Nam ipse iudex contrarius equitatis alium tantum de suo, quantum auferri iusserat, mox reformet, id est, ablate rei simpla redintegratione concessa, pro satisfactione sue temeritatis alium tantum, quantum auferri preceperat, de sua facultate illi, quem iniuste damnaverat, reddat. Quod si non habuerit, unde conponat, cum his, que habere dinoscitur, ipse iudex illi, cui conponere debuit, subiaceat serviturus. Sin autem per ignorantiam iniuste iudicaverit et sacramentis se potuerit excusare, quod non per amicitiam vel cupiditate aut per commodum quolibet, sed tantumdem ignoranter hoc fecerit: quod iudicabit non valeat, et ipse iudex non implicetur in culpa». Para la relación de esta norma con las correspondientes del derecho bávaro (*Lex Bai. 2, 17-18*), cfr. Karl ZEUMER, *Historia de la legislación*, pp. 160-162; en p. 28 de su edición, la restitución del hipotético original euriciano (*CE ex lege Baiuvariorum 1*); precisando los puntos de vista de Zeumer, Alvaro D'ORS, *El Código de Eurico*, pp. 57-59.

263. El glosema ervigiano dice así: «Quod si tantum quantum abstulit, non habuerit unde conponat, saltim vel id ipsum ex toto, quod habere videtur, illi, quem damnaverat, pro omni conpositione restituat. Quod si ex omnibus nihil rerum habuerit, unde conpositionem exsolvat, L publice extensus flagella suscipiat». Pero varios manuscritos de la *vulgata* siguen añadiendo la reducción a servidumbre (códices V 1, 2, 4, y 17 *in margine*)

pero ya sabemos (cfr. III) que este tipo de distinciones no sirven para explicar los cauces procesales visigodos: la aplicación de la *antiqua* al pago de composiciones nacidas de delito sería perfectamente admisible²⁶⁴, sin perjuicio de la existencia de otras reglas especiales sobre responsabilidad judicial por injusticia del fallo presentes, también, en el *Liber*²⁶⁵.

Quién o qué órgano era competente para exigir esas responsabilidades al juez y por qué cauce podían dirigir sus quejas las víctimas de injusticia, son extremos llamativamente silenciados en la *antiqua*²⁶⁶. Muestra de la defectuosa configuración de la apelación en el derecho más antiguo recogido en el *Liber*, cabe pensar en la competencia de los jueces superiores, *comites* y *duces*²⁶⁷, y —por

264. Cfr. ANTONIO PADOA-SCHIOPPA, *L'appello nel diritto intermedio*, I, pp. 119 y ss.

265. Así LV 5,7,8, *antiqua* (con remisión a la pena del falso en la versión recesvindiana, alterada por Ervigio con referencia expresa a la *antiqua* LV 2,1,21); LV 7,4,5, *antiqua*; cfr. además LV 8,1,8, Recesvinto (véase Hermann NEHLSSEN, *Sklavenrecht*, p. 230), que aplica el régimen de LV 6,1,5, Chindasvinto; sobre la responsabilidad del juez por abusos en la tortura, Adolf SCHMITT-WEIGAND, *Rechtspflegedelikte*, p. 76.

266. Así Adolf SCHMITT-WEIGAND, *Rechtspflegedelikte*, p. 75; ANTONIO PADOA-SCHIOPPA, *L'appello nel diritto intermedio*, cit.

267. Adolf SCHMITT-WEIGAND, *Rechtspflegedelikte*, p. 75, donde un *lapsus* le hace hablar de *Richter* en vez de *Konig*; por supuesto la intervención judicial del *dux* estaría en función de la asunción de tales competencias por este alto cargo: cfr. Luis A. GARCÍA MORENO, «Estudios sobre la organización administrativa», pp. 119 y ss.: sería a partir de Chindasvinto cuando el *dux* asume competencias judiciales (en otra esfera que la estrictamente militar), sin que resulte claro el carácter —instancia ordinaria o de apelación— de las mismas (p. 124). Rafael GIBERT, «El reino visigodo y el particularismo español», pp. 42-43, parece entender, mediante una lectura de LV 2,1,24, Chindasvinto (*ad suum ducem aditum accedendi poposcere!*), que el *dux* era «titular de una jurisdicción suprema y garantía de los súbditos» originariamente, mientras que esa ley chindasvintiana procedería de una etapa en que «el rey ha sustituido al duque como juez supremo; es a él a quien en definitiva se puede apelar; entonces se ha incluido al duque entre los jueces posiblemente sospechosos, lo que no podía suponerse cuando representaban la última instancia»; yo no me atrevería a suscribir esta interpretación, pero cfr. Concilio de Toledo XII, a. 681, tomo regio: «De ceteris autem causis atque negotiis quae novella competant institutionem firmari, evidentium sententiarum titulis exaranda conscribite, ut quae praesto sunt religiosi provinciarum rectores et clarissimorum ordinum

supuesto— del mismo rey; muy probable además, a tenor de la evolución que sigue la legislación visigoda y que veremos, la intervención episcopal, prevista en concilios de los siglos VI y VII para la vigilancia y control de los gobernantes²⁶⁸, y así aceptada en las leyes²⁶⁹.

totius Spaniae duces promulgationis vestrae sententias coram positi praenocentes eo illa in commissas sibi terrarum latitudines inoffensibili exerant iudiciorum instantia, quo praesentialiter adsistentes prespicua oris vestri conceperint instituta» (Vives, pp. 383-384). Cfr. además LV 6,4,3, Chindasvinto.

268. Concilio de Toledo III, a. 589, c. 18: «Ut semel in anno synodus fiat et iudices et actores fisci praesentes sint.—. Iudices vero locorum vel actores fiscalium patrimoniorum ex decreto gloriossimi domini nostri simul cum sacerdotali concilio autumnali tempore die calendarum novembrium in unum conveniant, ut discant quam pie et iuste cum populis agere debeant, ne in angariis aut in operationibus superfluis sive privatum onorent sive fiscalem gravent. Sint etenim prospectores episcopi secundum regiam admonitionem, qualiter iudicis cum populis agant, ut aut ipsos praemunitos corrigant aut insolentias eorum auditibus principis innotescant; quod si correptos emendare nequiverint, et ab ecclesia et a comunione suspendant: a sacerdote vero et a senioribus deliberetur, quid provincia sine suo detrimento praestare debeat iudicium», lo que supone el normal conocimiento de los abusos por el rey, actuando los obispos como denunciadores, pero que deja abierta la posibilidad de otro tipo de decisión sobre la injusticia judicial y, en cualquier caso, reserva a la jerarquía la condena canónica del juez injusto. Cfr. Aloysius K. ZIEGLER, *Church and State*, pp. 141-142: las medidas del Concilio de Toledo III probablemente no fueron cumplidas, conociéndose solamente un caso (el representado por Concilio de Sevilla II, a. 619) en que se acredita la presencia de (dos: Siselo, *rector rerum publicarum*, probablemente gobernador de la Bética: Luis A. GARCÍA MORENO, *Prosopografía*, núm. 135 en p. 75 y nota 1 a esa entrada; y Suanila, *actor rerum fiscalium*, esto es, «el encargado de la administración de los bienes del fisco en la provincia Bética»: Luis A. GARCÍA MORENO, *Prosopografía*, núm. 140 en p. 76) oficiales en el sínodo (provincial); por eso Concilio de Toledo IV, a. 633, c. 3 optaría por la presencia de los jueces, etc., sólo mediando acusación: «. Omnes autem qui causas adversus episcopos aut iudices vel potentes aut contra quoslibet alios habere noscuntur ad eundem concilium concurrant, et quaequumque examine synodali a quibuslibet prave usurpata inveniuntur, regii executoris instantia iustissime his quibus iura sunt reformatur, ita ut pro compellendis iudicibus vel secularibus viris ad synodum metropolitani studio idem exequutor a principe postuletur»; en el mismo Concilio el c. 32 (cfr. Aloysius K. ZIEGLER, *Church and State*, p. 140) presenta a los obispos como varones a los que Dios ha encargado la protección del pueblo, por lo que deberán amonestar a los jueces opresores de los débiles, denunciándolos llegado el caso ante el rey. Un ejemplo de este control en Concilio de Toledo XVI, a. 693, en relación al *spatarius* Teudemundo, que ejerció

La colaboración del obispo en la administración regia de la justicia encontró una clara definición en tiempos de Chindasvinto, cuya ley LV 2,1,24 ofrece sin duda una suerte de apelación *a iudice suspecto* en la que intervenía la jerarquía de la Iglesia. Teme algún litigante la parcialidad del juez secular —*cuiusquemque honoris aut ordinis*, según la rúbrica del precepto— (y se queja en este sentido ante el obispo) entonces el *episcopus civitatis* y el juez sospechoso han de reunirse para conocer la causa —*ad liquidum discutiant adque pertractent*— y dictar una resolución en común. Respetando ese fallo se permite acudir a la audiencia real en apelación: si la parte vence, además de obtener satisfacción a sus pretensiones, debe recibir un *alium tantum* del juez y del obispo, esto es, la composición prevista en la *antiqua* por sentencia injusta a sabiendas; si no prospera la apelación el recurrente soportará la misma pena a favor del juez (¿y del obispo?) o cien azotes en su presencia, de ser insolvente ²⁷⁰.

por orden de Wamba como *numerarius* en Mérida (Vives, pp. 517-518); cfr. Luis A. GARCÍA MORENO, *Prosopografía*, núm. 148 en pp. 78-79.

269. Especialmente LV 12,1,2, Recaredo: «Ut nullus ex his, qui populorum accipiunt potestatem et curam, quoscumque de opulis aut in sumtibus aut indictionibus inquitare pertemet.—...Sacerdotes vero, quos divina obtestatione conmonemus, si excessus iudicum aut actorum scierint et ad nostram non retulerint agnitionem, noverint se concilii iudicio esse plectandos, et detrimenta, que pauperes eorum silentio pertulerint, ex eorum rebus illis esse restituenda» (cfr. Concilio de Toledo IV, a. 633, c. 32 *in fine*: «Si quis autem episcoporum id —*sc. las denuncias ante el rey de jueces abusivos*— neglexerit, concilio reus est»). Por la misma época las fuentes francas revelan una actitud similar: Aloysius K. ZIEGLER, *Church and State*, pp. 139-140, con cita de Concilio de Tours II, a. 567, c. 27 y *praeceptio* de Clotario II (pero cfr. sobre este último texto Carlos PETIT, «*Consuetudo y mos*», pp. 225-226 y nota 30, con referencias a los autores modernos que han determinado su verdadera naturaleza); y también las bizantinas: Luis A. GARCÍA MORENO, «Estudios sobre la organización administrativa», p. 45 y nota 174. Véase además Karl ZEUMER, *Historia de la legislación*, p. 173.

270. LV 2,1,24, Chindasvinto: «Si cuiuscumque honoris aut ordinis iudex dicatur haberi suspectus.—Si quis iudicem aut comitem aut vicarium comitis seu thiuphadum suspectos habere se dixerit et ad suum ducem aditum accendi poposcerit aut fortasse eundem ducem suspectum habere dixerit, non sub hac occasione petitor ac presertim pauper quilibet petiatur ultra dilatione. Sed ipsi, qui iudicant eius negotium, unde suspecti dicuntur haberi, cum episcopo civitatis ad liquidum discutiant adque pertractent et de quo indicaverint

Las duras consecuencias de la apelación fracasada no impedirían esta clase de reclamaciones para ante el rey, cuando Recesvinto, en lo que debemos considerar un programa completo de revisión de la política de su enérgico padre²⁷¹, dictó una ley contra la celebración de pactos de no atacar fallos (injustos), que los jueces forzaban a concluir²⁷²; seguramente como remedio frente a prácticas que situaban a los jueces al margen de la vigilancia real, así como para superar la negativa del juez a conocer junto al obispo en la determinación común de la sentencia, el mismo Recesvinto promulgó LV 2,1,30, *De data episcopis potestatem distringendi iudi-*

*pariter conscribant suscribantque iudicium. Et qui suspectum iudicem habere se dixerat, si contra eum deinceps fuerit querellatus, completis prius, que per iudicium statuta sunt, sciat sibi aput audientiam principis appellare iudicem esse permissum; ita ut, si iudex vel sacerdos repperiti fuerint nequiter iudicasse, et res ablata querellanti restituatur ad integrum, et a quibus aliter, quam veritas habuit, iudicatum est aliud tantum de rebus propriis ei sit satisfactum. Si certe iniustam contra iudicem querellam detulerit et causam, de qua agitur, iuste iudicatam fuisse constiterit, damnum, quod iudex sortire debuit, petitor sortiatur. Et si non habuerit, unde compositionem exolvat, C flagellis extensus publice in eiusdem iudicis presentiam verberetur. Nam si forte quiquam pro utilitatem regiam aliquid scire se dixerit, aditus ei ad conspectum nostre glorie negari non poterit». Cfr. LV 2,1,31, Chindasvinto, estableciendo la competencia del *comes* sobre los jueces inferiores y la del obispo, a salvo la posibilidad de la designación por el rey de un juez especial de apelación.*

271. El momento oportuno de realizarla sería Concilio de Toledo VIII, a. 653; las concesiones de Recesvinto abarcaban, además, la posibilidad de presentar reclamaciones contra el rey no obstante el duro castigo contra las acusaciones falsas (LV 2,1,9), la nueva regulación de las donaciones reales (LV 2,1,6), la representación forzosa del monarca en los juicios (LV 2,3,1) y la nulidad de los fallos judiciales dictados *regio metu vei iussu* (LV 2,1,29)

272. LV 2,1,28, Recesvinto: «Ut omne vinculum, quod post datum iniustum iudicium a causidicis fuerit exactum, habeatur invalidum.—Vidimus interdum iustitiam ab iniquis iudicibus et suo loco seclusam et devito vigore solutam, iniustitiam autem et loco iustitiae introductam et multis modis decretorum vinculis adligatam. Quidam enim, postquam iudicia iniusta conscripserint, aut unam aut ambas causantium partes placitorum inter se nexibus ligant, ne iniuste datum iudicium quandoque iusta contentione resolvant. Adeo, ubi non directus et beneplacitus est convenientie modus, sed ubi pro conprimenda iuste causantis intentione vel voce repperiuntur quocumque modum definitionem vincula conligata, omnimodis habeantur invalida nec sint adinventionis alicuius conexione firmata». La relación entre esta ley y las *convenientiae* que luego condenó Egica (LV 2,2,10) parece fuera de dudas

ces nequiter iudicantes. Según la interpretación de Zeumer, que en general no tengo inconveniente en admitir, este precepto se coloca dentro de las previsiones de Chindasvinto y supone la intercesión del obispo cerca del *comes civitatis* —bien como juez de instancia, bien por ser la más frecuente instancia de apelación: LV 2,1,31, Chindasvinto— para que revise el fallo injusto o que la parte (oprimida: *pauper*) teme llegue a serlo; el obispo sentenciaba en solitario de rehusar el *comes* hacerlo junto con él (régimen de LV 2,1,24), pero correspondía al *comes*, bajo pena de un quinto de la cuantía en litigio a pagar al obispo, la ejecución de la sentencia episcopal; idéntico castigo sufriría el obispo que se negase a atender una reclamación²⁷³. Caso ciertamente aislado en el código toledano, la ley mereció una nueva redacción en tiempos de Ervigio: sus términos fueron aclarados y como principal novedad la fuerza directamente ejecutiva de la sentencia del obispo dejó paso a la intervención del rey, ante quien habían de enviarse los fallos (divergentes) del obispo y del juez sospechoso para decidir en última instancia²⁷⁴.

Se ha intentado, sin demasiado éxito en mi opinión, reconstruir una escala jerárquica de órganos judiciales a propósito de las previsiones de estas normas²⁷⁵, olvidando la naturaleza casuística del

273. Karl ZEUMER, *Historia de la legislación*, pp. 166-167, cfr además Adolf SCHMITT-WEIGAND, *Rechtspflegedelikte*, p. 76 y Aloysius K. ZIEGLER, *Church and State*, pp. 142-143.

274. Karl ZEUMER, *Historia de la legislación*, p. 168. Cfr. además Antonio PADOA-SCHIOPPA, *L'appello nel diritto intermedio*, I, pp. 125 y ss.

275. Así Karl ZEUMER, *Historia de la legislación*, p. 169: «Según el derecho de la ley ervigiana, la apelación por sospechas contra el juez y la queja, tratada, al parecer, de manera análoga como la demanda por denegación de justicia, se regula, en sus líneas generales, de la manera siguiente: se permite, según parece, apelación o queja contra el juez inferior al juez superior, al *comes civitatis* o al *dux*; de éste pasa al obispo. El obispo y el juez deben entonces tratar conjuntamente la causa. Si se ponen de acuerdo para fallar en común, sólo le queda al apelante contra esta sentencia, como última instancia, la apelación al rey. Si no se ponen de acuerdo . . . el obispo tiene derecho a emitir un fallo especial propio, que envía al rey, con un informe de la sentencia del juez laico de la que disiente, a través del apelante, para que el monarca dé una sentencia definitiva». La inseguridad del diseño se trasluce en la insistencia zeumeriana al adelantar un «al parecer» o un «según parece» a sus interpretaciones; realmente, del examen conjunto de LV 2,1,24, LV 2,1,30

Liber Iudiciorum y la misma elasticidad que había de producirse respecto a la apelación en la práctica; lo único seguro que sabemos se reduce al decisivo papel del obispo como juez del rey, con importancia creciente desde la atribución —legal— de tales competencias a fines del siglo VI: si en un principio la colaboración episcopal con la justicia real era prestada más bien en el seno del concilio, desde el reinado de Chindasvinto el obispo local aparece revestido de las funciones concretas de juez de *apelación*. Chindasvinto, y sus sucesores, se apoyaban así en la tradición del derecho romano tardío²⁷⁶ y, tal vez, en el conocimiento mismo del derecho justiniano²⁷⁷, caso de que rechazamos admitir, en contra de una utilización de la legislación de Justiniano que resulta de dudosa justificación, que la posición del obispo a modo de patrono local le confería poderes similares a oriente y occidente del Mediterráneo; pero lo que me interesa destacar es el recurso real a los obispos para frenar las desviaciones de los jueces en relación al derecho oficial.

Ya sabemos —pero ahora resulta necesario recordarlo— que esas desviaciones se encontraban motivadas no en último lugar por la entrada de los jueces en relaciones de dependencia. Hans-Joachim Diesner lo ha mostrado decididamente analizando la obra

(en sus dos versiones) y LV 2,1,31 resulta muy difícil comprender cuál (o cuáles, y precisamente en cada época) era la autoridad que conocía de la apelación, que además se encuentra bastante desdibujada; cfr. Luis A. GARCÍA MORENO, «Estudios sobre la organización administrativa», p. 124, donde llega a hablar de «las cambiantes disposiciones sobre la recíproca o no limitación en los poderes públicos judiciales de los *duces* con respecto a los obispos».

276. Cfr. Biondo BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, I, pp. 435 y ss., p. 443: «al vescovo si conferisce l'alta vigilanza su tutta la pubblica amministrazione»; Adolf SCHMITT-WEIGAND, *Rechtspflegedelikte*, p. 75, donde considera expresamente que LV 2,1,24, Chindasvinto «ist vermutlich aus einer zweifachen Rezeption römischrechtlicher Vorschriften entstanden», que serían, junto a las disposiciones de Justiniano, especialmente la novela de Valentiniano III 35, a. 452, recogida en BA (Nov. Val. III, 12).

277. Karl ZEUMER, *Historia de la legislación*, pp. 169-172: la fuente posible sería la novela 86, a. 531, de Justiniano. Los autores posteriores insisten en esta explicación: además de Adolf Schmitt-Weigand, citado en nota precedente, pueden examinarse William Kenneth BOYD, *The Ecclesiastical Edicts of the Theodosian Code*, pp. 115-116 y Aloysius K. ZIEGLER, *Church and State*, p. 75 («several Visigothic laws seem undoubtedly to have been modelled after Justinian»)

isidoriana: la parte correspondiente a los jueces en *Sent.*, «una de las más vinculadas a la realidad» en opinión del autor²⁷⁸, presentan desde luego un modelo ideal de juez influido por las imágenes de la Biblia, mas informan también del peligro de juzgar con acepción de personas *amicitiae favore* (Isidor. *Sent.* 3,53,1; 3,54,7), de corrupción judicial por regalos de los poderosos (*Sent.* 3,54,4-5) o de la perversión del juicio *timore* o *metu potestatis* (Isidor. *Sent.* 3,54,7)²⁷⁹. Apartadas las figuras retóricas impuestas por el género, el mismo Isidoro presenta en *Synonima* 1,6 ss. el alma torturada que se queja de ser un desamparado carente de protector y defensa, uno de los ingenuos que no siendo patrono ni cliente se encuentra aislado y expuesto a los ataques de los bandos que dividen a los pueblos, acusado de crímenes que ignoraba por falsos testigos y crueles jueces que en su contra sentencian; inocente, ha de sufrir condenas a muerte o a destierro...: se evocan así las parcialidades cometidas por unos jueces envueltos en vínculos de patrocinio, describiendo, desde la perspectiva en esta ocasión del que padece sus actuaciones, los efectos de la *amicitia*, del *timor* o del *metus potestatis* sobre los encargados de la justicia. Tajón de Zaragoza ataca en sus *Sent.* 5,11 (*De superbis divitibus*) parecidos abusos.

Sabemos también que las condenas de la patrística discurrían paralelas a los testimonios de las leyes reales. Cuando Chindasvinto establece, dentro de la regulación de la composición por lesiones, que obispo y *dux* quedarán encargados de reprimir al juez negligente, se trata de un *iudex, amicitia corruptus vel premio* (LV 6,4,3). Si Recesvinto se ve en la necesidad de dictar una norma *de damno*

278. Sobre el valor de los escritos de Isidoro como fuente para conocer la realidad hispanovisigoda se ha pronunciado favorablemente Ursicino DOMÍNGUEZ DEL VAL, «Características de la Patrística Hispana en el siglo VII», p. 31, que habla en general de la «orientación realista y práctica» de los padres visigodos; específicamente Hans-Joachim DIESNER, «Zeitgeschichte und Gegenwart-sbezug bei Isidor von Sevilla», *passim* y del mismo, *Isidor von Sevilla und seiner Zeit*, p. 59 y n. 159.

279. Hans-Joachim DIESNER, *Isidor von Sevilla und das westgotische Spanien*, pp. 56 y ss.: el grado de feudalización de la sociedad hispanovisigoda impondría que un juez joven o de bajo rango contara con el patrocinio de algún poderoso, a veces del rey, por lo que las posibilidades de juzgar libremente debían ser excepcionales. Del mismo *Isidor von Sevilla und seiner Zeit*, pp. 59 y ss. Cfr *supra* nota 70.

iudicis criminorum indebite absolventis es porque los jueces a veces actuaban *pro patrocínio aut amicitia alicuius* (LV 7,4,6). Pocos años después Ervigio advierte a los jueces contra su posible parcialidad en el cumplimiento de la legislación antijudaica, lo que no era nada excepcional *acceptione munerum* (LV 12,3,25; cfr. LV 9,1,21, Egica). Teniendo presente esta clase de informaciones cobra sentido la admonición general de Chindasvinto a sus jueces para que procedan objetivamente, investigando siempre la verdad y mediante el examen de todas las causas *absque personarum acceptione* (LV 12,1,1); la preocupación real por evitar que aquéllos, *qui populorum accipiunt potestatem et curam*, exijan prestaciones —*indictiones, exactiones, operas vel angarias*— irregulares, ilumina otra vertiente del comportamiento de los oficiales regios en el seno de una sociedad feudal en formación (LV 12,1,2, Recaredo).

A lo largo de estas páginas hemos visto, sin embargo, que la propia autoridad real de Toledo se vio forzada a reconocer la existencia —entiéndaseme: en términos institucionales— de los señores, titulares de amplios poderes correctivos sobre sometidos, *servi* o no, y filtro necesario entre ellos y la justicia del rey (cfr. nuevamente, por ejemplo, LV 2,1,19, Chindasvinto; LV 2,3,9, Chindasvinto; LV 2,4,5, Chindasvinto; LV 8,1,1, Recesvinto). No ha de sorprender entonces que frente al pujante mundo señorial, controlador —incluso— de los encargados por el rey de la aplicación de su derecho y su proceso, la monarquía invocase la colaboración de la jerarquía de la Iglesia para intentar el ejercicio de alguna función de control sobre oficiales regios que actuaban con creciente independencia; la importancia de los obispos ante el pueblo, las amplias posibilidades de que gozaban a la hora de hacer sentir su autoridad —conferidas, no se olvide, tanto por una legitimación ideológica socialmente aceptada (con la faceta, terriblemente eficaz, de la imposición de la penitencia canónica), cuanto por la disponibilidad inmediata del patrimonio de la sede, la familia *servii in obsequio Ecclesiae* o los clérigos inferiores— y la tradición tardoantigua favorable a la asunción de atribuciones seculares, ya aludida, justificaban la opción real a favor de los obispos como instancia de poder capaz de mantener a los jueces dentro de los cauces institucionales fijados en el *Liber Iudiciorum*.

El peso decisivo de los obispos a modo de órgano de apelación

respondió además a la acentuación progresiva de los poderes judiciales episcopales. Si el obispo visigodo, a tenor de las fuentes del siglo VI (cfr. en especial Concilio de Tarragona, a. 516, c. 4, que habla de clérigos de todo tipo; CT 16,2,23, a. 376, dirigida precisamente a los obispos de las Galias y de Hispania y presente en BA 16,1,3; Novela de Valentiniano III 35, a. 452, recogida asimismo en BA, 12), actuaba entre laicos a título arbitral, los textos canónicos del siglo VII ya silencian el arbitraje episcopal para transmitir un cúmulo de noticias sobre actuaciones del obispo como juez, al margen de la voluntad de las partes. Encontramos, por ejemplo, obispos que juzgan con autoridad delegada del rey, conociendo del crimen de traición (Concilio de Toledo IV, a. 633, c. 31), obispos que en unión de los jueces reales asumen la represión del paganismo (Concilio de Toledo III, a. 589; Concilio de Toledo XII, a. 681, c. 11; Concilio de Toledo XVI, a. 693, c. 2), obispos que, nuevamente colaborando con la justicia del rey, vigilan el cumplimiento de las leyes sobre los judíos (Concilio de Toledo IV, a. 633, c. 65; Concilio de Toledo XII, a. 681, c. 9), obispos —en fin— que intervienen decisivamente en el juicio de magnates palatinos configurado en Concilio de Toledo XIII, a. 683, c. 2. Y estas atribuciones del obispo, entre las que he analizado especialmente las relacionadas con la *appellatio a iudice suspecto* por exigencias del asunto en estudio, aún podrían completarse mencionando, a propósito de las más variadas cuestiones, la legislación secular (cfr. interpolación ervigiana a LV 2,5,12, Recesvinto, sobre intervención episcopal en la confirmación de testamentos; LV 2,5,13, Chindasvinto, sobre testamentos *in itinere*; LV 2,5,16, Recesvinto, testamentos ológrafos; LV 4,3,4, Recesvinto, rendición de cuentas de la tutela). De manera gráfica y paralela, la evolución que sigue la terminología de las fuentes visigodas en la designación de los diversos oficios eclesiásticos parte del empleo de vocablos cuyo campo semántico refleja sobre todo una misión pastoral, para finalizar, en la segunda mitad del siglo VII, con la preferencia por aquellas expresiones que subrayan la elevada posición del obispo como cabeza de una jerarquía que estructura categorías clericales bien distintas²⁸⁰.

280. Eustaquio SÁNCHEZ SALOR, *Jerarquías eclesiásticas y monacales en época visigótica*, pp. 34 y ss., pp. 41 y ss.

Nos encontramos, según tuve ocasión de defender en ponencia presentada ante la Semana Internacional de Estudios Visigóticos (Madrid, octubre de 1985), con una verdadera judicialización del episcopado visigodo en el siglo VII, pero no conviene abordar ahora el estudio de este fenómeno. Baste señalar que la colaboración del episcopado con el rey, vigilando la administración de justicia y aun participando en ella, había de reflejar idéntico grado de feudalización del que presentaban las instancias laicas contemporáneas, revelándose así remedio imposible de la erosión del monopolio político que correspondía en teoría al monarca y se proyectaba directamente en las instituciones procesales. Si el mismo Isidoro enseña en sus *Sent.* que los obispos auxilian a los oprimidos cuando padecen los abusos de *potentes*, arrojando incluso su enemistad y los artificios que emplearán para perjudicarles (*Sent.* 3,45,4, muy relacionada con las leyes visigodas sobre apelación), suministra el contrapunto de estas afirmaciones cuando reconoce la existencia de prelados que *metu potestatis veritatem occultant, et a bono opere, vel a iustitiae praedicatione, rei alicuius formidine aut potestate terrente avertuntur* (Isidor. *Sent.* 3,45,2); se trata de sacerdotes guiados *amore rerum saecularium* (3,45,2), que prefieren seguir los dictados de los poderosos *timentes, ne amicitiam perdant* (3,45,3). Por eso, aunque el rey reconoce sus atribuciones en la apelación, recela en ocasiones del comportamiento de unos obispos que no se encuentran tampoco al margen del patrocinio (LV 9,1,21, Egica: *...nam si episcopi, ad quorum cognitionem hec causa —sc. la investigación de las fugas serviles— pervenerit, amicitia intellecti aut beneficio corrupti ... huius legis sententiam impetrantibus illis implere distulerint...*); de ahí las preocupaciones de Recesvinto por extender a los altos dignatarios eclesiásticos las medidas seculares promulgadas fijando límites a los poderes dominicales sobre sometidos (cfr. LV 6,5,13, en relación a Concilio de Mérida, a. 666, c. 15), o el interés de Wamba —del rey que intentó reformar más profundamente el régimen de la Iglesia y acabó depuesto con la intervención decisiva del metropolitano Julián de Toledo— en lograr una legislación canónica sobre la extensión de las facultades judiciales y correctivas de los obispos (Concilio de Toledo XI, a. 675, cc. 5, 6 y 7; Concilio de Braga III, a. 675, c. 6). El análisis detenido de las actuaciones judi-

ciales de la Iglesia visigoda demostrará, con seguridad, la identidad feudal de las controversias que afectaban a la jerarquía.

* * *

La revisión del fallo en caso de falsedad testifical (cfr. XI) fue prevista moderadamente por Ervigio, interpolando LV 2,4,6, Chindasvinto, y en una ley propia, recopilada como LV 2,4,7²⁸¹. La primera se refiere al supuesto de la declaración posterior del testigo falso confesando su delito, en el que sólo podría reabrirse la causa cuando el litigante derrotado por la primitiva y falsa declaración presentara nuevas pruebas —testificales o documentales— que permitiesen averiguar la verdad²⁸²; la segunda concede al perjudicado un plazo de seis meses para probar, incluso después de recaída sentencia, que los testigos producidos por el contrario eran incapaces o falsarios, esto es, venía a corregirse la disposición de Chindasvinto sobre la tacha del testigo, permisiva de esa tacha en tanto viviera el declarante (LV 2,1,25), a no ser que prefiramos interpretar que el generoso plazo chindasviniano quedaba reservado a la parte que abandonó el proceso en la fase de prueba; en cualquier caso una novela posterior de Egica (LV 2,4,8) aplicó la regla de los treinta años en lugar de los seis meses de la ley de Ervigio —para que no *iustitia, que Deus est, temporibus brevitatis succumbat*—, anunciando además (cfr. Concilio de Toledo XII, a. 681, c. 7) la posibilidad de atacar sentencias anteriores. Este llamativo precepto, como —a su manera— la amnistía ervigiana de los condenados por Wamba, seguramente atendió a la necesidad de revisar las depuraciones de los clanes nobiliarios en tiempos de Ervigio.

281. Textos sobre los que se podrá consultar Juan Antonio ALEJANDRE, «El delito de falsedad testimonial», cit.

282. Pues la falsedad confesada por el testigo suponía, entre otras penas, pérdida del derecho a testificar. La regulación ervigiana haciendo posible la revisión adaptaba soluciones vigentes en la praxis judicial de la Iglesia en la primera mitad del siglo VII (juicio entre Habencio y Marciano, citado en nota 128)

XIII

Queda expuesto con lo anterior el régimen jurídico del proceso visigodo, en sus líneas y trámites principales. Llegado así el momento de concluir estas páginas según lo prometido más arriba, no extrañará mi rechazo de la posibilidad de recapitular ordenada y extractadamente las noticias obtenidas del manejo de los textos; confiando en su conocimiento por parte del lector, opto por realizar, sobre su base, algunas observaciones de índole general, interesado sobre todo en las enseñanzas que el análisis de las reglas y actuaciones judiciales permite obtener en orden a la mejor comprensión de los problemas existentes en el reino de Toledo. Respeto de este modo los presupuestos metodológicos de que partí al realizar —y presentar: cfr. I— mi investigación; la solvencia que me otorga haberla ultimado —por lo que se refiere a la justicia del rey— me permite añadir que las hipótesis iniciales acreditaron su eficacia: las instituciones procesales rinden cuentas de la feudalización emergente en la sociedad hispanovisigoda, de esta forma reflejada por una parcela de la historia de su derecho; otro arranque, me parece, hubiera conducido a interpretaciones erróneas de muchas leyes, cuando no al desprecio abierto de otras tan inservibles para una construcción dogmática del derecho procesal visigodo como válidas, y al estudio de LV 6,2,2, Ervigio me remito (cfr. *supra* XI), para la comprensión de la realidad social en que aquél surgió y a la que hubo de aplicarse.

* * *

Considerando los materiales utilizados por el legislador visigodo, la regulación del procedimiento se ha revelado como una parcela de intensa utilización del arsenal jurídico romanotardío. Esto quiere decir, simplemente, que el modelo bajoimperial de un monarca *conditor legum* y supremo juez, que centraliza en sí mismo y en sus autoridades delegadas la potestad de resolver pacíficamente las controversias, anima todo el derecho visigodo; el carácter sacral de la realeza toledana —la ideología religiosa que reviste la acción política— reforzó ese modelo y por tanto sus implicaciones más directas en el terreno de la justicia. Pero la asunción obligada de prece-

dentes romanos no ha conducido más allá de la aceptación del diseño procesal que de ellos se deduce, sin suponer la marginación de la creatividad jurídica de los monarcas de Toledo: el desarrollo de las circunstancias socioeconómicas contemporáneas a la vigencia del referido modelo fue conduciendo, y así en la Hispania de los siglos VI y VII, a la formación de un marco nuevo de producción y ejercicio de poder —el feudalismo— que impuso determinadas transformaciones institucionales. Tal vez el ejemplo más claro lo encuentre el lector en el capítulo dedicado al estudio de la representación procesal (cfr. V), pero también puede dirigirse a las páginas donde abordaba la *capacidad* —las posibilidades de actuación ante la justicia del rey— de los sometidos a relaciones de patrocinio (cfr. IV).

Las nuevas soluciones jurídicas que toman los reyes visigodos no demuestran la vigencia —definida normalmente, por la historiografía jurídica que acepta la llamada tesis germanista, en términos de continuidad, latente o no— de principios o reglas de derecho germánico, a no ser que queramos confundir, según he escrito en ocasión anterior, germanismo con feudalismo. Los escasos germanismos de la legislación procesal visigoda, a veces alegados, reciben mejor explicación considerando precisamente la tradición jurídica romana (pensemos por ejemplo en el juramento purgatorio del acusado: cfr. XI), al margen la cuestión, que creo innecesario abordar ahora, de la elaboración artificial de un pretendido derecho germánico mediante la extrapolación de noticias de César y Tácito por encima de los siglos y la utilización indiscriminada y conjunta de las diversas *leges barbarorum*. Cuanto conocemos sobre la historia del pueblo visigodo desde su presencia en tierras imperiales difícilmente hubiese conducido a otro puerto.

Dentro del modelo romano-imperial de procedimiento, que además podía sentirse cercano gracias a Bizancio, la regulación procesal visigoda ha sido consecuentemente detallada; exhuberante, incluso. Detalles de tipo técnico —por ejemplo en relación con la citación (cfr. VIII), la prueba de testigos o la tortura (cfr. XI)— que debemos entender como la concreción normativa del monopolio de poder y justicia que correspondía al monarca.

Pero muchos de estos detalles, y en general toda la legislación, acreditan la existencia de otros poderes presentes en la sociedad

hispanogoda del siglo VII. Poderes de una alta jerarquía nobiliar o eclesiástica que interfieren activamente el derecho del proceso: representación interesada de una de las partes, con violencia a la otra y al juez del rey (cfr. V); resistencias a la orden de convocatoria cursada por ese juez para seguir —*legaliter*— el proceso (cfr. VIII); independencia de los sometidos a un patrono respecto de la justicia real, gracias a la colaboración de éste; presiones sobre unos jueces —laicos o no, pero aquí interesaron especialmente los primeros— que prevarican en la medida de la generalización del patrocinio (cfr. entre otros XII)... Las leyes visigodas presentan el proceso del rey como cauce único contra el que, sin embargo, surgen las *convenientiae* (cfr. VI), como método racional de determinación de la verdad que la práctica abandona acudiendo a otras pruebas (cfr. XI); intentan la colaboración de la jerarquía de la Iglesia, pero reconocen, a un tiempo, la incapacidad del rey a la hora de someterla eficazmente en una situación de crisis institucional amplia (cfr. XII).

Se trata, como vemos, de prácticas socialmente relevantes de las que ha dejado noticia el propio derecho del rey, demostrado de esta forma contradictorio respecto de los postulados ideológicos en que se sustenta. La vigencia —poco menos que imposible— de ese derecho y del proceso regulado por él funciona, por lo demás, como una de las contradicciones que sacudieron la sociedad toledana y sus instituciones, o, si se prefiere, aporta un cualificado ejemplo del divorcio que separaba la teoría política y el ejercicio concreto del gobierno en el reino de Toledo. El estudio de la capacidad procesal se reveló un buen terreno para el análisis, permitiéndonos comprobar que la asimilación progresiva de masas de población de estatuto jurídico diferente en origen desembocaba en el tratamiento uniforme, ante el derecho, de los sometidos a relaciones de dependencia, especialmente en cuanto a las normas fijadas por el rey estableciendo las condiciones de acceso a la justicia oficial (cfr. IV); pero semejante comprobación condujo necesariamente a oponer a la aplicación social del proceso regio toda clase de reservas, cuando el número de dependientes, de cuantificación imposible aunque muy alta a tenor de las fuentes, suponía la sustracción a los tribunales reales de una parte de la litigiosidad social —la derivada del mismo vínculo de patrocinio— que la formación del feudalismo

elevaba a un rango constitutivo. Que, a pesar de tales limitaciones, el proceso del rey habría de resultar atractivo a los patronos —los únicos que reunían las condiciones necesarias para someterse a sus cauces— parece fuera de dudas; el encuentro entre intereses dominicales contrapuestos —pensemos en las fugas serviles, con la previsible consecuencia de un cambio ilegítimo de patrono— o la oposición entre algún patrono y el propio rey ofrecieron base suficiente para acudir a una justicia ideológicamente legitimada, si no ejercida en la medida de las fuerzas de cada monarca. Sus límites, ya quedó dicho, se encuentran reflejados por normas que demuestran las dificultades del proceso oficial para servir como instrumento de mediación entre los poderosos.

* * *

Sin demasiada insistencia, las páginas que así acaban han reflejado una cierta utilización de palabras como *feudal* o *feudalismo*, con referencia siempre al reino visigodo de Toledo. Aplicadas en un estudio de lo que académicamente se conoce como historia institucional tal vez merezcan reprobaciones, pues aún circula como verdad sabida la tesis que sostiene la escasa presencia en suelo peninsular de las denominadas instituciones feudovasalláticas, limitadas en cualquier caso a determinadas zonas y bien definidas épocas. Conocedor de ese problema, que, en el fondo, procede de una concepción de lo feudal acotada en términos estrictos, he optado por un entendimiento abierto del feudalismo, como uno de los modos en que se organizó la sociedad caracterizado por la presencia determinante de relaciones de dependencia con contenido económico, social y político. Si comencé en 1985 recordando los nombres de Vigil y Barbero justo es, aunque superfluo, terminar invocando su autoridad, de nuevo.

CARLOS PETIT

ABREVIATURAS Y EDICIONES

- AHDE *Anuario de Historia del Derecho Español.*
- BA Breviarium Alaricianum, ed. Gustav HAENEL, *Lex Romana Wisigothorum*, Berolini-Lipsiae, 1849 (rep. facs. Aalen, Scientia Verlag, 1962).
- CE Codex Euricianus, ed. Alvaro D'ORS, *El Código de Eurico.*
- CHE *Cuadernos de Historia de España.*
- CJ Codex Iustinianus, ed. Paul KRÜGER, *Corpus Iuris Civilis*, II, Berolini, Weidmann, 11.ª ed. 1954.
- CT Codex Theodosianus, ed. Theodor MOMMSEN-Paul M. MEYER, *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus sirmondianis*, 1/2, Berolini, Weidmann, 3.ª ed. 1962.
- Concilio — Griegos y africanos: ed. Gonzalo MARTÍNEZ DÍAZ (S.I.)-Félix RODRÍGUEZ (S.I.), *La Colección canónica Hispana. III. Conciltos griegos y africanos*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto Enrique Flórez, 1982 (=Monumenta Hispaniae Sacra. Serie Canónica, vol III).
- Galicanos: ed. Juan TEJADA Y RAMIRO, *Colección de cánones de la Iglesia española, publicada en latín o espensas de nuestros reyes por el Señor Don Francisco Antonio González, bibliotecario mayor de la Nacional de esta Corte, traducida al castellano con notas e ilustraciones por D. Juan Tejada y Ramiro*, I, Madrid, Imprenta de D. José M.ª Alonso, 1849.
- Visigodos: ed. José VIVES et alii, *Concilios visigóticos e hispano-romanos*, Barcelona-Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto Enrique Flórez, 1963 (=España Cristiana. Textos: Vol I).
- D Digesta, ed. Theodor MOMMSEN-Paul KRÜGER, *Corpus Iuris Civilis*, I, Berolini, Weidmann, 16.ª ed. 1954.
- Edictum Theodorici* Ed. FIRA, *Auctores.*

- FIRA, *Auctores* Ed. I. BAVIERA-I. FURLANI, *Fontes iuris romani anteustiniani. Pars altera: Auctores*, Florentiae, G. Barbera, reimp. 1968.
- Fragmenta Gaudenziana* . Ed. Karolo ZEUMER, vid. LV, pp. 469-472
- FV *Formulae Visigothicae*, ed. Angel CANELLAS LÓPEZ, *Diplomática hispano-visigoda*.
- HID *Historia. Instituciones. Documentos*.
- Hispana* Vid. Concilios (griegos y africanos).
- ICT Interpretatio ad CT.
- Isidor. Isidori Hispalensis Episcopus Opera :
 — (Isidor.?) *Liber Numerum: Liber Numerum qui in Sanctis Scripturis occurrunt*, ed. J. P. Migne, PL, 83, cols. 179-200.
 — *Sent.: Sententiarum libri IIII*, ed. Julio CAMPOS-Ismael ROCA, *Santos Padres Españoles, II*.
 — *Diff.: Differentiarum, sive de proprietate sermonum libri II*, ed. J. P. MIGNE, PL, 83, cols. 9-98.
 — *Etym.: Etymologiarum sive originum libri XX*, ed. W. M. LINDSAY, Oxonii, 1911.
 — *Quaestiones in Vetus Testamentus*, ed J. P. MIGNE, PL, 83, cols. 737-826.
 — *Synonima: Synonima, sive de lamentatione animae peccatricis*, ed. J. P. MIGNE, PL, 83, cols. 825-868.
- Iudicium in tyrannorum perfidiam promulgatum* . Ed. B. KRUSCH-W. LEVISON, MGH, *Scriptores rerum Merovingicarum*, tomus V, Hannoverae et Lipsiae, Hahn, 1910.
- Julián de Toledo, *Historia Wambae*. Julianus Toletanus Episcopus, *Historia Wambae Regis Toletani*, ed. B. KRUSCH-W. LEVISON, *supra cit.*
- L Bai. Lex Baiuvariorum, ed. Ihoanne MERKEL, MGH, *Legum tomus III*, Hannoverae, Hahn, 1863 (rep facs. 1965).
- LRB Lex Romana Burgundionum, ed. FIRA, *Auctores*

- LV . . . Lex Visigothorum sive Liber Iudiciorum, ed. Karolo ZEUMER, MGH, Legum Sectio I, 1. Leges Visigothorum, Hannoverae et Lipsiae, Hahn, 1902.
- MGH Monumenta Germaniae Historica.
- Pauli Sententiae*
(PS) . . . Ed. FIRA, *Auctores*.
- PL . . . J. P. MIGNE, *Patrologiae cursus completus. Series latina*, París, 1844, ss.
- Reg. Regulae virginum vel monachorum (Leandri, Isidori, Fructuosi, Communis), ed. Julio CAMPOS-Ismael ROCA, *Santos Padres Españoles, II*.
- RHDFE *Revue historique de droit français et étranger*
- SDHI . *Studia et Documenta Historiae et Iuris*
- SZ (RA) . . . *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*.
- Taio, *Sent.* Tajón de Zaragoza, *Sententiarum libri quinque*, ed J. P. MIGNE, PL, 80, cols. 727-990.
- Vita Fructuosi* Ed. Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ, *La Vida de San Fructuoso de Braga. Estudio y edición crítica*, Braga, 1974.

RELACION BIBLIOGRAFICA

- ALEJANDRE GARCÍA, Juan Antonio: «Estudio histórico del delito de falsedad documental», en AHDE 42 (1972), pp. 117-187.
- ALEJANDRE GARCÍA, Juan Antonio: «El delito de falsedad testimonial en el Derecho histórico español», en HID 3 (1976), pp. 9-139.
- ARCHI, Gian Gualberto: «Les preuves dans le droit du Bas Empire», en *Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions*, XVI: *La preuve*, 1ère. partie: Antiquité, Bruxelles, 1965, pp. 389-414 [=con alguna variante y en italiano en *Iura* 12 (1961), 1 ss.].
- BARBERO, Abilio-VIGIL, Marcelo: *La formación del feudalismo en la Península Ibérica*, Barcelona, Crítica, 1978.
- v. BETHMANN-HOLLWEG, Moritz A.: *Der Civilprozess des gemeinen Rechts in geschichtlichen Entwicklung. IV: Der germanisch-romanische Civilprozess im Mittelalter, 1. Vom fünften bis achten Jahrhundert*, Bonn, Adolph Marcus, 1868 (rep. facs. Aalen, Scientia Verlag 1959).

- BEYERLE, Franz: *Das Entwicklungsproblem im germanischen Rechtsgang. I. Sühne, Rache und Preisgabe in ihrer Beziehung zum Strafprozess der Volksrechte*, Heidelberg, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung (=Deutschrrechtliche Beiträge, Band 10, Heft 2), 1915.
- BONO, José: *Historia del derecho notarial español, I. La Edad Media. 1. Introducción, preliminar y fuentes*, Madrid, Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España (=Ars Notariae Hispanica, 1), 1979.
- BOYD, William Kenneth: *The Ecclesiastical Edicts of the Theodosian Code*, New York, Columbia University Studies in the Social Sciences (63), 1905 (rep. facs. New York, Ams Press, 1969).
- BRUNNER, Heinrich-v. SCHWERIN, Claudius: *Deutsche Rechtsgeschichte, II Band, zweite Auflage* (neu bearbeitet von Claudius Frh. v. Schwerin), München und Leipzig, Duncker & Humblot, 1928 (rep. facs. Berlin, Duncker & Humblot, 1958).
- CAMPOS, Julio-ROCA, Ismael: *Santos Padres Españoles, II. San Leandro, San Fructuoso, San Isidoro. Reglas monásticas de la España visigoda. Los tres libros de las «Sentencias»*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos (=BAC, 321), 1971.
- CANELLAS LÓPEZ, Angel: *Diplomática hispano-visigoda*, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1979
- CARDASCIA, G.: «L'apparition dans le droit des classes d'honestiores et d'humiliores», en RHDFE 28 (4ème. série) (1950), pp. 305-337, 461-485.
- CERDÁ RUIZ-FUNES, Joaquín: «En torno a la pesquisa y procedimiento inquisitivo en el Derecho castellano-leonés de la Edad Media», en AHDE, 32 (1962), pp. 483-517.
- CHECCHINI, Aldo: *Scritti giuridici e storico-giuridici, II*, Padova, Cedam, 1958
- CHECCHINI, Aldo: «L'ordinamento processuale romano nell'alto medioevo» (1932), en *Scritti*, cit., pp. 227-252.
- CHECCHINI, Aldo: «Studi sull'ordinamento processuale romano» (1925), en *Scritti*, cit., pp. 107-206.
- CHECCHINI, Aldo: «Note sull'origine delle istituzioni processuali della Sardegna medioevale» (1927), en *Scritti*, cit., pp. 207-226.
- CLAUDE, Dietrich: *Adel, Kirche und Königtum im Westgotenreich*, Sigmaringen, Jan Thorbecke Verlag (=Vorträge und Forschungen. Sonderband 8. Hrg. vom Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte), 1971.
- DAHN, Felix: *Die Könige der Germanen. Das Wesen des ältesten Königstums der germanischen Stämme* (1871), III/6, rep. facs. Hildesheim-New York, G. Oms Verlag, 1976.

- DAHAN, Felix: *Westgothische Studien. Entstehungsgeschichte, Privatrecht, Strafrecht, Civil- und Straf-Process und Gesammkritik der Lex Visigothorum*, Würzburg, Druck und Verlag der Stahl'schen Buch- und Kunsthandlung, 1874.
- DÍAZ Y DÍAZ, Manuel C.: «Un document privé de l'Espagne wisigothique sur ardoise», en *Studi Medievali*, serie terza, 1 (1960), pp. 52-71.
- DIESNER, Hans-Joachim: *Isidor von Sevilla und seiner Zeit*, Stuttgart, Calwer Verlag (=Arbeiten zur Theologie, Heft 52), 1973.
- DIESNER, Hans-Joachim: *Isidor von Sevilla und das westgotische Spanien*, Berlin 1977 (Lizenzausgabe Trier, Spee Verlag, 1978), Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, phil.-hist. Klasse, Band 67, Heft 3
- DIESNER, Hans-Joachim: «Zeitsgeschichte und Gegenwartsbezug bei Isidor von Sevilla», en *Philologus*, 119 (1975), pp. 92-97.
- DÖLGER, F.: «Der Beweis im byzantinischen Gerichtsverfahren», en *Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions*, XVI: *La preuve*, 1ère. partie: Antiquité, Bruxelles, 1965, pp. 595-612.
- DOMÍNGUEZ DEL VAL, Ursicino: «Características de la Patrística Hispana en el siglo VII», en *La patrología toledano-visigoda*, XXVII Semana Española de Teología (Toledo, 25-29 de septiembre de 1967), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Patronato Menéndez Pelayo-Instituto Francisco Suárez), 1970, pp. 5-36.
- FERNÁNDEZ ALONSO, Justo: *La cura pastoral en la España romanovisigoda*, Roma, Publicaciones del Instituto Español de Estudios Eclesiásticos (=Sección Monografías, 2), 1955.
- FERNÁNDEZ ESPINAR, Ramón: «Las prohibiciones de contraer matrimonio entre parientes en la época visigoda», en *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid*, 6 (1962), pp. 351-416.
- FOUCAULT, Michel: *La verdad y las formas jurídicas* (1978), traducción castellana de Enrique Lynch, México, Gedisa Mexicana, 1983 (1.ª ed. cast. Barcelona, Gedisa, 1980).
- FRAGISTAS, Charalambos N.: «Le temoignage dans le procès civil en droit byzantin», en *Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions*, XVI: *La preuve*, 1ère. partie: Antiquité, Bruxelles 1965, 613-634.
- GARCÍA IGLESIAS, Luis: *Los judíos en la España antigua*, Madrid, Ediciones Cristiandad, 1978

- GARCÍA MORENO, Luis A.: «Estudios sobre la organización administrativa del reino visigodo de Toledo», en AHDE 44 (1974), pp. 5-155.
- GARCÍA MORENO, Luis A.: *El fin del reino visigodo de Toledo, decadencia y catástrofe. Una contribución a su crítica*, Madrid, Universidad Autónoma (=Antiqua et Mediaevalia, 1), 1975.
- GARCÍA MORENO, Luis A.: *Prosopografía del reino visigodo de Toledo*, Salamanca, Publicaciones de la Universidad (=Acta Salmanticensia iussu Senatus Universitatis edita: Filosofía y Letras, 77), 1974.
- GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Luis: «La pesquisa como medio de prueba en el derecho procesal del reino astur-leonés. (Dos documentos para su estudio)», en *Homenaje a Emilio Gómez Orbaneja*, Madrid, Editorial Moneda y Crédito, 1977, pp. 221-241.
- GARNSEY, Peter: *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford, University Press, 1970.
- GARNSEY, Peter: «El privilegio legal en el Imperio Romano», en Moses I. Finley, ed., *Estudios sobre historia antigua*, trad. de Ramón López, Madrid, Akal Editor, 1981, pp. 157-183 (=Pass and Present 41, 1968)
- GAUDEMET, Jean: *L'Église dans l'empire romain (IVe.-Ve. siècles)*, Paris, Sirey (=Histoire du Droit et des Institutions de l'Église en Occident, publiée sous la direction de Gabriel Le Bras. Tome III), 1958.
- GIBERT, Rafael: «Prenotariado visigótico», en CHE, 63-64 (1980), pp. 12-43.
- GIBERT, Rafael: «El reino visigodo y el particularismo español», en *Estudios Visigóticos*, I, Roma-Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Delegación en Roma (=Cuadernos de! Instituto Jurídico Español, 5), 1956, pp. 15-47.
- GIL FERNÁNDEZ, Juan: «Judíos y cristianos en la Hispania del siglo VII», en *Hispania Sacra*, 30 (1977), pp. 9-110.
- IGLESIA FERREIRÓS, Aquilino: «El proceso del Conde Bera y el problema de las ordalías», en AHDE 51 (1981), pp. 1-221.
- IGLESIA FERREIRÓS, Aquilino: «La creación del derecho en Cataluña», en AHDE 47 (1977), pp. 99-423.
- IGLESIA FERREIRÓS, Aquilino: *Las garantías reales en el derecho histórico español, I. La prenda contractual: desde sus orígenes hasta la recepción del derecho común*, I, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago (=Monografías de la Universidad de Santiago de Compostela, 38), 1977.
- IGLESIA FERREIRÓS, Aquilino: «La creación del derecho en el reino visigodo», en *Revista de Historia del Derecho*, 2 (=Volumen homenaje a M. Torres López, 1), 1977-1978, pp. 117-167.

- KAMPERS, Gerd: *Personengeschichtliche Studien zum Westgotenreich in Spanien*, Münster (Westfalen), Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung (=Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, hrg. von Odilo Engels, zweite Reihe, 17. Band), 1979.
- KASER, Max: *Das römische Zivilprozessrecht*, München, C. H. Beck (=Rechtsgeschichte des Altertums im Rahmen des Handbuches der Altertumswissenschaft, X.3.4), 1966.
- KING, Paul D.: *Derecho y sociedad en el reino visigodo* (1972), versión española de M. Rodríguez Alonso, revisión de Salustiano Moreta, Madrid, Alianza Editorial (=Alianza Universidad, 295), 1981.
- KÜBLER, Bernhard: «Bemerkungen über die Bedeutung der Insolvenz für die Gestaltung von Rechtsverhältnissen», en *Studi in memoria di Aldo Albertoni. I. Diritto romano e bizantino*, a cura di P. Ciapessoni, Padova, Cedam, 1935, pp. 491-511.
- KORSUNSKIJ, Alexander R.: «O razvitii feodalnij othosheniy v Gotscoy Ispanii», en *Srednie Veca*, 33 (1963), pp. 3-19.
- LALINDE ABADÍA, Jesús :«Los gastos del proceso en derecho visigodo», en *Studi in onore di Edoardo Volterra*, V, Milano, Giuffrè, 1971, pp. 99-120.
- LEVY, Ernst: «West-östliches Vulgarrecht und Justinian», en *Gesammelte Schriften*, I, Graz-Köln, Böhlau, 1963, pp. 264-288 [=SZ (RA) 76 (1959), pp. 1-36].
- LEMOSSE, Maxime: *Cognitio. Étude sur le rôle du juge dans l'instruction du procès civil antique*, Paris, Librairie André Lesot, 1944.
- LLUIS Y NAVAS, Jaime: «La España visigoda ante la falsificación de moneda. (Un problema jurídico-monetal)», en *Numisma*, II/5 (1952, octubre-diciembre), pp. 87-96.
- MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco: «Escuelas de formación del clero en la España visigoda», en *La patrología toledano-visigoda*, XXVII Semana Española de Teología (Toledo, 25-29 de septiembre de 1967), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Patronato Menéndez Pelayo-Instituto Francisco Suárez), 1970, pp. 65-98.
- MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo (S.J.): «La tortura judicial en la legislación histórica española», en *AHDE* 32 (1962), pp. 223-300
- MCKENNA, S.: *Paganism and Pagan Survivals in Spain up to the Fall of Visigothic Kingdom*, Washington D.C., The Catholic University of America, 1938.
- MCLUHAN, Marshall: *La galaxia Gutenberg. Génesis del «homo typographicus»* (1962), traducción castellana de Juan Novella, Barcelona, Planeta-De Agostini (=Obras maestras del pensamiento contemporáneo, 20), 1985.

- MERÊA, Paulo: «Da minha gaveta, II: A prova testemunhal no direito visigótico e no direito da Reconquista», en *Boletim da Faculdade de Direito* (Coimbra), 32 (1956), pp. 171-181.
- MERÊA, Paulo: Reseña a Claudio Sánchez-Albornoz, «Ruina y extinción del municipio romano en España e instituciones que lo reemplazan» (1943), en *Estudos de direito visigótico*, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1948.
- MERÊA, Paulo: «Notas sobre a Lex Visigothorum 2,1,23», en *História e direito*. (Escritos dispersos), I, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1967, pp. 125-133 (=AHDE 21-22, 1951-1952, pp. 1163-1168).
- MOMMSEN, Theodor: *Römisches Strafrecht*, Leipzig, Duncker & Humblot, 1899 (rep. facs. Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1955).
- NEHLSSEN-V. STRYK, Karin: *Die boni homines des frühen Mittelalters, unter besonderer Berücksichtigung der fränkischen Quellen*, Berlin, Duncker & Humblot (=Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen, hrg. vom Institut für Rechtsgeschichte und geschichtliche Rechtsvergleichung der Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg i. Br. Neue Folge, 2. Bd.), 1981.
- NEHLSSEN, Hermann: *Sklavenrecht zwischen Antike und Mittelalter. Germanisches und römisches Recht in den germanischen Rechtsaufzeichnungen, I. Ostgoten, Westgoten, Franken Langobarden*, Göttingen (Frankfurt, Zürich), Musterschmidt (=Göttinger Studien zur Rechtsgeschichte, hrg. von Prof. Dr. Karl Kroeschell, Bd. 7), 1972.
- ORLANDIS, José: «La reina en la monarquía visigoda», en *Estudios Visigóticos, III. El poder real y la sucesión al trono en la monarquía visigótica*, Roma-Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Delegación en Roma (=Cuadernos del Instituto Jurídico Español, 16), 1962, pp. 103-123 (=AHDE 27-28, 1957-1958, pp. 109-135).
- ORS, Alvaro d': *El Código de Eurico. Edición, palingenesis, índices*, Roma-Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Delegación en Roma (=Cuadernos del Instituto Jurídico Español, 12: Estudios Visigóticos, II), 1960.
- PADOA SCHIOPPA, Antonio: *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, I, Milano, Giuffrè, 1967.
- PETIT, Carlos: «Consuetudo y mos en la Lex Visigothorum», en AHDE 54 (1984), pp. 209-252.
- PETIT, Carlos: «De negotiis causarum (I)», en AHDE 55 (1985), pp. 151-251.
- PETIT, Carlos: *Fiadores y fianzas en derecho romanovisigodo*, Sevilla, Publicaciones de la Universidad (=Serie Derecho, 45), 1983.
- PRIETO BANCES, Ramón: «Una huella isidoriana en la legislación del reino de Oviedo», en Manuel C. Díaz y Díaz (ed.), *Isidoriana*, León, Centro de Estudios «San Isidoro», 1961, pp. 495-498.

- PUGLIESE, Giovanni: «La preuve dans le procès romain de l'époque classique», en *Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions*, XVI: *La preuve*, 1ère. partie: Antiquité, Bruxelles 1965, pp. 277-348.
- PUGLIESE, Giovanni: «Processo privato e processo pubblico. Contributo all'individuazione dei loro caratteri nella storia del diritto romano», en *Rivista di diritto processuale* 3 (1948), pp. 36-109.
- RICHÉ, Pierre: *Éducation et culture dans l'Occident barbare. VIe.-VIIIe. siècles* (1962), Paris, Éditions du Seuil, 3ème. éd. revue et corrigée s/f (¿1972?).
- SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Claudio: «Ruina y extinción del municipio romano en España e instituciones que lo reemplazan» (1943), en *Estudios Visigodos*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo (=Studi Storici, fasc. 78-79), 1971, pp. 9-147.
- SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Claudio: *En torno a los orígenes del feudalismo. Libro I-Tomo I: Fideles y gardingos en la monarquía visigoda. Raíces del vasallaje y del beneficio hispanos*, Buenos Aires, EUDEBA, 2.ª ed. 1974.
- SÁNCHEZ SALOR, Eustaquio: *Jerarquías eclesiásticas y monacales en época visigótica*, Salamanca, Publicaciones de la Universidad (=Acta Salmanticensia iussu Senatus Universitatis edita: Filosofía y Letras, 96), 1976.
- SCHMITT-WEIGAND, Adolf: *Rechtspflegedelikte in der fränkischen Zeit*, Berlin, Walter de Gruyter & Co. (=Münsterische Beiträge zur Rechts- und Staatswissenschaft, 7), 1962.
- SCHUMACHER, Leonhard: *Servus Index. Sklavenverhor und Sklavenanzeige im republikanischen und kaiserlichen Rom*, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag (=Forschungen zur antiken Sklaverei, in Auftrag der Kommission für Geschichte des Altertums der Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Hrg. von Joseph Vogt und Heinz Bellen. Band XV), 1982.
- SEIDL, Erwin: *Der Eid im römischen-ägyptischen Provinzialrecht*, II, München, C.H. Beck (=Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte, 24), 1935.
- SEIDL, Erwin: «Die Jurisprudenz der ägyptischen Provinzialrecht byzantinischer Zeit», en *Festschrift für Ernst Rabel*, II, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1954, pp. 235-261.
- THOMPSON, Edward A.: *Los godos en España* (1969), traducción de Javier Faci, Madrid, Alianza Editorial (=El libro de bolsillo, 321), 2.ª ed 1979.
- TOMÁS Y VALIENTE, Francisco: «La prisión por deudas en los derechos castellano y aragonés», en *AHDE* 30 (1960), pp. 249-489.
- TORRES LÓPEZ, Manuel: *Lecciones de Historia del Derecho Español*, II, Salamanca, Librería General «La Facultad», de Germán García, 1934.

- UREÑA Y SMENJAUD, Rafael de: *La legislación Gótico-hispana. Leges antiquiores. Liber Iudiciorum. Estudio crítico*, Madrid, Establecimiento tipográfico de Idamor Moreno, 2.ª ed. 1906.
- WEISS, Egon: «Recitatio und Responsum im römischen Provinzialrecht, ein Beitrag zum Gerichtsgebrauch», en *SZ (RA)*, 33 (1912), pp. 212-239.
- ZEUMER, Karl: *Historia de la legislación visigoda*, traducción del alemán por Carlos Clavería, Barcelona, Universidad de Barcelona-Facultad de Derecho, 1944.
- ZIEGLER, Aloysius K.: *Church and State in Visigothic Spain*, Washington D.C., Catholic University of America, 1930.
- ZILLETI, Ugo: «Sul valore probatorio della testimonianza nella *cognitio extraordinem*», en *SDHI* 29 (1963), pp. 124-150.

* * *

NOTA: A la relación bibliográfica publicada con la primera parte de este trabajo (*AHDE* 55, 1985, pp. 151-251) hay que añadir:

VERLINDEN, Charles: «L'esclavage dans le monde ibérique médiéval», en *AHDE* 11 (1934), pp. 283-448.

EL "PROVINCIANISMO EXACERBADO". LA CONSOLIDACION DEL REGIMEN FORAL VASCO 1845-1850 *

«Lo legal en lo que atañe a las provincias vascas es la DESIGUALDAD. Así lo han querido la naturaleza, la historia, el derecho y los poderes supremos de la Nación.»

Pedro de Egaña, 1852

SUMARIO: I. INTRODUCCION. El proceso de fortalecimiento provincial del País Vasco en la crisis de la monarquía tradicional (1812-1833). El final de una guerra como principio de una foralidad constitucional (1833-1839). Pretensiones niveladoras: la revolución frustrada (1841-1843).—II. EL RESURGIR DE LA FORALIDAD. La caída de Espartero y la «restauración foral». Los moderados y la foralidad. El decreto del 4 de julio de 1844.—III. LA PUGNA POR EL CONTROL PROVINCIAL (I). La definición del régimen local moderado (leyes de enero de 1848): ayuntamiento foral vs ayuntamiento constitucional y diputación foral vs diputación provincial. La instrucción del 18 de febrero de 1845.—IV. LA PUGNA POR EL CONTROL PROVINCIAL (II). La definición del modelo administrativizador moderado (leyes de abril de 1845). La autonomía jurisdiccional de la administración y la lucha por los Consejos Provinciales: el discurso político provincial y la colonización de los Consejos Provinciales por el «poder foral».

I. INTRODUCCIÓN

Desde que en 1812 se comenzara en España a recorrer el peculiar e intermitente camino que conducía a la definitiva singladura constitucional iniciada en 1837, se asiste, en las provincias vascas,

* Este artículo, a excepción de su introducción y de alguna otra consideración ahora introducida, forma parte de mi memoria de licenciatura que, con el título «Los poderes locales en la formación del régimen foral. Guipúzcoa, 1812-1850», fue presentada en la Universidad Autónoma de Madrid en noviembre de 1985. Por supuesto las deudas que tanto para la confección de la mencionada memoria, como para la de este artículo, se han contraídos son nume-

a un redimensionamiento paulatino de su foralidad, desarrollado tanto frente al nuevo sistema —en la pugna entre Fuero y Constitución— como frente a las veleidades absolutistas de Fernando VII. Ya a lo largo de las últimas décadas del Antiguo Régimen se había venido produciendo una intensificación en este proceso de redefinición de la foralidad que alcanza su momento más pleno a principios del siglo pasado en el marco del debate mantenido en torno a los fueros —y muy en concreto en torno a los vascos— cuyo paradigma puede ser sin duda la obra de Francisco de Aranguren y Sobrado y de Juan Antonio Llorente¹. Pero independientemente de ello —y reteniendo tan sólo el dato de la previa gestación de lo que puede denominarse una «cultura foral»— lo que aquí importa es considerar el doble proceso de definición que sufre la foralidad vasca entre 1812 y 1833.

Ya ha sido estudiada con cierta profundidad² la nueva relación en la que se involucran los fueros vascos desde 1812 al tener que situarse ahora frente a un elemento tan antagónico en principio como lo era una Constitución política, que, lógicamente, introducía un nuevo parámetro jurídico político fundamental orientado en

rosas y en este lugar no cabe sino mencionar algunas de ellas. Muy especial es la que se tiene con el director de este trabajo el catedrático del departamento de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid Pablo Fernández Albadalejo, así como con otros miembros de este departamento —Carmen Vázquez y Julio A. Pardos. Quisiera mencionar finalmente a Luis Catells, del departamento de Historia Contemporánea del País Vasco, quien realiza verdaderos esfuerzos para la publicación de mi trabajo.

1. F. de ARANGUREN Y SOBRADO, *Demostración del sentido verdadero de las autoridades de que se vale el doctor D. Juan Antonio Llorente en el tomo segundo de las noticias históricas*, 1806, inédito, citamos el ejemplar del (A)rchivo (G)eneral del (S)eñorío de (V)izcaya. La obra de J. A. LLORENTE es *Noticias históricas de las tres provincias vascongadas en que se procura investigar el estado civil antiguo de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya y el origen de sus fueros*, Madrid, 1806. Una aproximación a este debate hemos intentado en nuestro artículo, FRANCISCO DE ARANGUREN Y SOBRADO: en los orígenes intelectuales del fuerismo vasco, *Cuadernos de Sección de Eusko Ikaskuntza, Historia*, n.º 8.

2. Nos referimos fundamentalmente a los trabajos de B. CLAVERO recogidos en *El código y el fuero. De la cuestión regional en la España contemporánea*, Madrid, 1982. También ha considerado la problemática J. CORCUERA, «La constitucionalización de los derechos históricos», *Revista de Derecho Constitucional*, 11, 1984.

base a la supremacía de la ley y la idea de código³. Es por ello que, más que extendernos aquí sobre la excluyente relación establecida en los principios informadores respectivos de Fuero y Constitución, nos interese recoger un aspecto concreto no tan extensamente considerado. En un trabajo al que a lo largo de este artículo habremos de referirnos más de una vez, P. Fernández Albaladejo llamaba la atención sobre el hecho de que en 1812, y sobre todo durante el Trienio, había hecho ya su aparición una «propuesta conciliatoria» entre foralidad vascongada y monarquía constitucional que sería llamada a tener posteriormente importantes consecuencias tras la guerra civil⁴. Esta alternativa que se formula en casos concretos y no como «programa», planteaba en efecto la posibilidad de encontrar un camino intermedio en las provincias vascas en el que, junto a la aceptación de los elementos fundamentales de la nueva monarquía, se respetaran, mediante algún tipo de reconocimiento de la foralidad, determinados aspectos fundamentales del entramado provincial vasco (control de ayuntamientos y peculiaridades fiscales fundamentalmente). Es así que durante las breves experiencias constitucionales de 1812 y 1820, se pudieron ver —con la fugacidad que caracterizó a ambas, especialmente en el País Vasco— dos realidades (y no una) que habrá que tener presentes en adelante: por una parte la contraposición entre Fuero y Constitución no sólo debida a que la segunda suponía como premisa la «unidad de sistema» ignorando los particularismos jurídico-políticos previos⁵, sino a que las provincias por su parte se consideraban «ya constituidas» por sus fueros⁶; por otra parte, la formulación de la posibilidad de una «cohabitación» de la foralidad

3. Cfr. los manuales ya clásicos sobre el tema de G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, vol. I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976, y de A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, vol. I, *Le fonti e il pensiero giuridico*, esp. pp. 252 y ss. y 296 y ss. Más especialmente, L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milán, 1975, pp. 201 y ss., donde se puede apreciar la importancia que la ley y la capacidad legislativa adquieren ahora.

4. P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, «Guipúzcoa, 1839-1869: la recomposición de una sociedad», *Moneda y Crédito*, n.º 155, 1980.

5. Como lo recalcó Agustín de ARGÜELLES, *Discurso preliminar a la Constitución de 1812*, ed. de L. Sánchez Agesta, Madrid, 1981, pág. 100.

6. Así lo hizo saber la junta de Guipúzcoa al Congreso gaditano en 1813.

vasca —o de algunos de los aspectos de la misma— en el nuevo modelo constitucional.

Sin embargo, el mismo carácter efímero de esta experiencia va a imposibilitar el desarrollo de las implicaciones que ambas vías debían haber abierto. En vez de ello, a lo largo de estos veintidós años que median entre 1812 y la muerte de Fernando VII, dieciséis se viven bajo la vigencia oficial del Antiguo Régimen. De este modo la foralidad vasca no sólo tuvo que definirse entre 1812 y 1834 en el proceso de enfrentamiento dialéctico entre Fuero y Constitución, sino que en gran medida la reconversión de la foralidad se operó en el seno de la monarquía tradicional.

En efecto, es durante el reinado de Fernando VII —y muy especialmente en su última década— cuando en las provincias se procedió a un asentamiento más evidente de los pilares sobre los que en adelante se habría de levantar el «edificio foral». No solamente implicaba la nueva lógica que las dos restauraciones fernandinas reintroducían el restablecimiento de la monarquía tradicional de derecho divino, suprimiendo la delimitación precisa y legal del poder real y reponiendo en su plenitud el «principio monárquico» tan querido de Fernando VII⁷, sino que al mismo tiempo, y salvo contadas excepciones, se resucitaban también toda la «pléyade de privilegios y exenciones» generada durante el Antiguo Régimen y que, en definitiva, eran la savia de la que la monarquía tradicional no podía prescindir. De este modo se planteaba entonces una nueva relación fundamental en nuestro ámbito de estudio en sí contradictoria: junto a la aceptación oficial de la especificidad foral vasca⁸, la necesidad de anteponer a los privilegios, exenciones y cortapisas que pudieran suponer, la expansión del interés monárquico que, como es obvio, cada vez hallaba más molestas aquellas situaciones⁹.

7. Sobre tan interesante transmutación véase C. PACHIANI, «Assolutismo e Rivoluzione», inc. en *Il concetto di Rivoluzione*, Bari, 1979, pp. 47 y ss., así como C. SCHMITT, *La dictadura. Desde los comienzos del pensamiento moderno hasta la lucha de clases proletarias*, Madrid, 1985, esp. cap. 4. Referido al caso español, S. M. RETORTILLO, *Administración y Constitución*, Madrid, 1981, cap. 1.

8. De hecho recobran entre 1814 y 1820 y de 1824 a 1834 su calificativo de exentas y forales con la correspondiente sanción real previa de sus fueros.

9. Dada la más que apurada situación financiera de la Corona, cfr. M. AR-

Si bien la monarquía fernandina había de reconocer la vigencia y la operatividad constitutiva del privilegio¹⁰ y por lo tanto no se planteaba ahora —como lo hicieran los liberales del doce y del Trienio— la simple superación de tal esquema, y con él de la foralidad, no era menos cierto que de alguna manera los ministros del rey trataban —especialmente entre 1814 y 1820— de supeditar estas situaciones privilegiadas a los intereses —eminentemente fiscales, pero por ello también de administración— de la Corona¹¹. Sin embargo, y a pesar de esta primera «acometida absolutista», lo que realmente resulta sorprendente —y sobre lo que aquí se quiere insistir— es el fortalecimiento que al fin y al cabo recibió la foralidad en esta relación dialéctica entre absolutismo y particularismo.

Es, como se ha indicado, a lo largo de la década ominosa, cuando el fenómeno enunciado fue más evidente. Efectivamente, a través de una serie de complejos procesos que aquí no se puede entrar a pormenorizar, pero que guardan en sí toda la sustancia de esta consolidación¹², se asiste a una auténtica redefinición foral. El sustancial y común denominador de los referidos procesos es la importancia que adquiere el control administrativo de las provincias por los notables provinciales —quienes, en definitiva, son los que definen la foralidad. De este modo la confirmación, ya desde 1824 —al igual que durante la primera restauración— de la continuidad del donativo como fundamento de una relación fiscal peculiar entre la Real Hacienda y las provincias, el control que las diputaciones consiguen ejercer durante este período en el ramo de policía, pero, ante todo, la consecución del reconocimiento de una foralidad municipal que eximía a los municipios vascongados de la práctica

TOLA, *El Antiguo Régimen y la Revolución*, Barcelona, 1978; J. FONTANA, *La quiebra de la monarquía absoluta 1814-1820*, Barcelona, 1978, y F. TOMÁS Y VALIENTE, *El marco político de la desamortización en España*, Barcelona, 1977.

10. Cfr. B. CLAVERO, «Derecho y Privilegio», *Materiales*, n.º 4, 1977.

11. En efecto, por ejemplo, en 1815 una Real Cédula prohibía terminantemente tomar el uso a los despachos relativos a la Real Hacienda y en 1819 se presentaba el *Informe de la junta reformadora de abusos de la Real Hacienda*, Madrid, 1839, en el que se desmenuzaba en por menor las implicaciones mutuas entre foralidad y desvinculación de la fiscalidad real.

12. Estos aspectos, que a continuación se enumeran, son tratados más *in extenso* en el trabajo del que se extraen esperándose dar de ellos la debida noticia en futuras publicaciones

común de su control por las Chancillerías, establecida por la Real Cédula de 17 de octubre de 1824, para situarlas expresamente bajo control diputacional, son los elementos que, de una forma más pàlmara, indican los fundamentos a que apunta la foralidad vasca: capacidad de dominio provincial asentado sobre un doble pilar, el ayuntamiento y la diputación.

Pero la realidad que de esta manera se ponía de relieve al finalizar la vida de Fernando VII, y con ella la de la monarquía tradicional, era, con relación a las provincias forales, mucho más profunda. El hecho de que la Corona no consiguiera —a pesar de su declarada voluntad absoluta— supeditar las exenciones y privilegios forales a su interés monárquico mediatizando (aunque no negando) la estructura foral vascongada, ponía al desnudo la debilidad endémica del absolutismo fernandino¹³. Fenómeno éste de gran importancia por cuanto que correlativamente patentizaba la consolidación que, hacia 1834, mantenía en plena vigencia política el entramado provincial como orden corporado particular y, hasta cierto punto también, «exento» de las reformas operadas. El orden corporado —la «Provincia»— y no la sociedad provincial era aún en 1834 el punto de relación esencial por el que debía pasar el desenvolvimiento político de las provincias vascongadas y, de hecho, aun tras la sanción del Estatuto Real, los procuradores de las provincias serán enviados por sus juntas —representación corporada de la provincia— y no por los electores facultados por la ley¹⁴. Podemos afirmar, en efecto (y es un dato a nuestro juicio de gran interés), que en el momento de su desaparición la monarquía tradicional no legaba a la monarquía constitucional, que se implanta definitivamente en 1837, un campo despejado de órdenes y poderes corporados intermedios que facilitara y exigiera la implantación de una nueva relación dialéctica que debía animar el desarrollo cons-

13. Téngase presente, en este sentido, la inactividad que caracteriza a esta década ominiosa lo que ha llevado a un conecedor tan profundo del reinado como M. Artola a denominarlo «el tiempo sin historia».

14. Diferencia entre un tipo y otro de representación de gran significación y que no pasó desde luego inadvertida para los autores liberales del momento, cfr. Juan F. PACHECO, *Lecciones de derecho político*, ed. de F. Tomás y Valiente, Madrid, 1984, p. 96.

titucional, cifrada en términos de Estado y Sociedad¹⁵, sino que más bien se posibilitaba, debido precisamente a ese tan poco absoluto comportamiento del absolutismo hispano, la permanencia y plena vigencia no sólo de las provincias como corporaciones con sólidos entramados políticos tradicionales, sino también de un entramado social comunitario, asimismo tradicional y escasamente afectado por una repentina o paulatina desarticulación de sus puntos esenciales de referencia¹⁶. Junto con todo ello hallaba también acomodo dentro del mismo esquema esa «cultura foral» que no había dejado de desarrollarse de un modo empírico en la cotidiana práctica política y que alcanza su expresión máxima en la obra de Pedro Novia de Salcedo escrita en 1829 y en la que se recogen tanto la concepción de la monarquía como conjunto de agregados privilegiados, como la legitimidad de la tradición y el imperio de la costumbre junto a la fuerza de la prescripción frente a cualquier tipo de voluntarismo político o legal¹⁷.

Y es precisamente que invocando esa «costumbre» se llega, tras la guerra civil —y una intensa campaña previa, apoyada por las diputaciones, en tal sentido— a la consecución de una «paz foral»,

15. Cfr. sobre el paradigmático desarrollo de esta lógica, R. KOSELLECK, *Crítica y crisis del mundo burgués*, Madrid, 1965, y J. HABERMAS, *Historia y crítica de la opinión pública*, Barcelona, 1981, esp. cap. 4. Fundamentales también en el mismo sentido, aunque sin agotar una extensa literatura producida en torno a este tema, G. POGGI, *The development of the modern State*, Londres, 1978; D. GERHARD, *Old Europe. A study of continuity 1000-1800*, N. York, 1981. O. BRUNNER, «Il problema di una storia sociale europea», inc. en *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, Milán, 1968, y E. FORSTHOFF, *El Estado de la sociedad industrial*, Madrid, 1975, caps. I y II.

16. Aspecto constatable mediante algunos datos a los que aquí no hay espacio para referirse, pero necesitado de estudios más profundos por lo que a esta época se refiere. Cfr. P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, «El País Vasco: algunas consideraciones sobre su más reciente historiografía», inc. en *La España del siglo XVIII* (homenaje a P. Vilar), Barcelona, 1985, esp. 555 y ss. Sobre el funcionamiento concreto de tales entramados, cfr. J. VIEJO, «Familia y conflictividad interpersonal en Guipúzcoa. Hernani, 1700-1750», de próxima aparición en *Estudios de Historia Social*, ambos trabajos con amplia bibliografía sobre lo aludido en el texto.

17. P. NOVIA DE SALCEDO, *Defensa histórica, legislativa y económica del Señorío de Vizcaya*, Bilbao, 1851

mediante convenio militar¹⁸, y de ahí a la constitucionalización del fenómeno foral mediante su aceptación parlamentaria en la famosa ley del 25 de octubre de 1839. Esta «legalización foral» supuso además la asunción oficial de la existencia de una situación especial en las provincias vascas que se traducía en un concepto que hizo su aparición en los ocho años de la guerra y que los moderados parecen ahora asumir, esto es, la idea de que la foralidad se resolvía en una suerte de «administración interior» provincial bajo control de los notables locales. De la ley del 25 de octubre de 1839 nos conviene en este rápido repaso retener dos importantes características que informan en gran medida el desarrollo político posterior. En primer lugar su propio carácter de ley y no de decreto, disposición o cualquier otra forma reglamentaria, ya que va a permitir su perduración durante todo el siglo pasado, con evidente incidencia política como veremos¹⁹. Su forma de ley otorgaba a esta confirmación de los fueros una serie de características que la diferencian radicalmente de todas las previamente formuladas a pesar del empeño fuerista, y luego nacionalista, de hacer tabla rasa entre unas y otras. Era la primera vez que el problema foral se consideraba en su conjunto y que así se confirmaban conjuntamente los fueros de las cuatro provincias, pero, sobre todo, era la primera vez que se hacía con las formalidades constitucionales de la ley²⁰.

La segunda característica a tener presente se halla en la propia ley que se limita a confirmar «sin perjuicio de la unidad constitu-

18. Recientemente B. CLAVERO ha llamado la atención sobre la trascendencia jurídico política que tendrá en la historia vasca inmediata este hecho, véase, *Fueros vascos. Historia en tiempo de Constitución*, Barcelona, 1985, capítulo I.

19. Incluso la Constitución actual de 1978 se ocupa de su definitiva derogación en la disposición derogatoria apartado segundo, cfr. sobre la interesante consideración del fenómeno foral en nuestra constitución, B. CLAVERO, «El principio de salvedad constitucional en el derecho histórico vasco», *Revista de Estudios Políticos (N.E.)*, n.º 37, 1984, y sus artículos más recientes recogidos en *Fueros vascos*, cit.

20. La importancia que la diferencia entre ley y reglamento tiene en términos de derecho constitucional, la demuestran D. JESCH, *Ley y Administración. Estudio de la evolución del principio de legalidad*, Madrid, 1978, y A. GALLEGU ANABITARTE, *Ley y Reglamento en el derecho público occidental*, Madrid, 1971

cional»²¹ los fueros de las provincias vascongadas y Navarra a la vez que, artículo 2.º, se mandaba hacer una ley de fueros, «resolviendo en tanto provisionalmente» las dudas que se ofrecieren. He aquí el punto sobre el que queremos insistir ya que lo que se toma en la ley por provisional se torna ya definitivo y, no habiendo ley de fueros hasta 1876, la resolución de dudas «dando cuenta a las Cortes» será el mecanismo cotidiano de desarrollo de la foralidad vasca. Como es evidente esto significaba que desde 1839 —y vamos a tener ocasión de comprobarlo inmediatamente en un aspecto fundamental— la foralidad se entendió y desenvolvió administrativamente y, de hecho, tan sólo otra ley, la del 22 de abril de 1842, volverá a ocuparse de la cuestión provincial vasca, para ser olvidada además dos años después. Ejemplo palpable de este desarrollo administrativo de la foralidad será la normativa reglamentaria inmediata a la ley que se produjo en el tiempo que aún restó a los moderados en el gobierno hasta su eliminación en julio de 1840, empezando por el Real Decreto de 16 de noviembre de 1839 que daba carta de naturaleza legal a las diputaciones forales frente a las mermaidas provinciales y —hecho trascendental— a la existencia de un «ayuntamiento foral» en las provincias como formación local peculiar.

Que los ayuntamientos y la estructura diputacional se revelaban ya como los pilares maestros de este «edificio foral» con fachada de «administración interior», lo demostró eficazmente la primera estancia de Espartero en el poder durante los años de la Regencia. Fue éste quizá, junto al período del Trienio, el más duro test que hubo de pasar la foralidad vasca en esta primera mitad de siglo. Una palabra recorre, como fatal fantasma o venturosa esperanza (según se mirara desde la óptica fuerista o desde la liberal no por menos presente inexistente en las provincias), estos tres años. Y esta nivelación precisamente tiene dos objetivos esenciales a atacar: las diputaciones y los ayuntamientos forales. Ayudado por la participación de los dirigentes provinciales e, incluso, de las diputaciones forales como tales en el movimiento iniciado en septiembre de 1842 por O'Donnell y Montes de Oca, Espartero se dispuso,

21. Concepto éste que al parecer sin mayor puntualización legal abrirá un amplio campo a la interpretación, como se podrá comprobar.

con el decreto de 29 de octubre de 1842 a desarrollar un programa de actuación en el ámbito que nos ocupa que, de hecho, significó el último intento de provocar una auténtica revolución en las estructuras provinciales tratando de imponer el también revolucionario precepto de la «unidad de sistema»²². El primer paso fue dado ya en 1841 al eliminar por decreto del 5 de enero el ejercicio del pase foral que ahora —en un medio en el que la ley ha de encontrar un carácter general como «factor cohesionador»—²³ sí adquiriría aquél un claro matiz desafiante de la autoridad estatal que trataba de hallar su expresión en una «unidad constitucional» así en entredicho²⁴.

La desestructuración de la foralidad tuvo, sin embargo, como ya se dijo antes, dos puntos de referencia esenciales. Por lo que al debilitamiento del ayuntamiento foral se refiere, éste se operó mediante dos complejos mecanismos que aquí tan sólo se enumeran: la potenciación del ayuntamiento constitucional frente al foral²⁵, y, sobre todo, la desjudicialización del alcalde foral (pendiente desde la década anterior) lograda no plenamente sin embar-

22. Concibiendo la foralidad en un sentido, como indicó agudamente LUZURIAGA en la discusión de la ley del 25 de octubre, «popular» y en ningún caso «político».

23. En expresión de K. DYSON, *The State tradition in western Europe*, Oxford, 1980, p. 116.

24. Desde un punto de vista radicalmente distinto al aquí expresado, se ocupa el decreto de supresión del pase R. GARCÍA RIVERO, *El pase foral en Guipúzcoa en el siglo XVIII*, San Sebastián, 1982, pp. 29 y ss., y «Análisis histórico jurídico del pase foral en Guipúzcoa», *Cuadernos de Sección de Eusko-Ikaskuntza, Derecho*, n.º 1, 1984.

25. La categoría del ayuntamiento constitucional se analiza, entre otros, en D. CHACÓN ORTIZ, «Notas jurídicas sobre la descentralización y el régimen local español», inc. en J. TUSELL, *La reforma de la administración en España*, Madrid, 1983, pp. 229 y ss., y en L. MORELL OCAÑA, «El alcalde desde la constitución de Cádiz hasta el canovismo», *Homenaje a García Trevijano*, Madrid, 1982.

26. Cfr. J. I. MORILLO VELARDE, *El alcalde en la administración española*, Sevilla, 1977. Esta resistencia local a la desjudicialización del alcalde tiene a su vez que ver con esa cohesión comunitaria aún persistente a la que antes se aludía, cfr. C. J. CALHOUN, «Community: Toward a variable conceptualization for comparative research», *Social History*, n.º 5, 1983, y más consideraciones teóricas en *The Question of class struggle. Social foundation of popular radicalism during the Industrial revolution*, Oxford, 1982, esp. caps. 1 y 2; cfr. así

go y tras encarnizados enfrentamientos locales entre las nuevas figuras judiciales y las tradicionales²⁶. La ley antes aludida de 22 de abril de 1842 se encargó por su parte de liquidar la estructura provincial foral al establecer la creación de las diputaciones provinciales con igual planta que las del resto de la nación. No obstante, este «estado de sitio administrativo» a que Espartero sometió a las provincias no llegó, ni con mucho, a eliminar la cuestión provincial vasca mediante una solución perdurable; el tejido foral se había trabado para 1842 con la suficiente solidez como para ser tan fácilmente descompuesto y la historia inmediata de la que nos ocupamos en este artículo evidenció esta frustración de la «unidad de sistema».

II. EL RESURGIR DE LA FORALIDAD

Todo parece indicar que, a pesar de los esfuerzos progresistas realizados desde octubre de 1841 por dismantelar efectivamente el régimen y con él la cuestión foral, no habían dado, en el momento en que cae la Regencia, los resultados apetecidos. Efectivamente, si puede decirse que para cuando se inician los movimientos de junio de 1843, las provincias vascongadas habían sido «niveladas» institucionalmente con las del resto de la nación, no puede decirse lo mismo, sin embargo, respecto a las pretensiones de los tradicionales dirigentes provinciales, ni de la «conciencia foral» de éstos extendida también entre los alcaldes en su proceso de enfrentamiento a los intentos constitucionalizadores que se impusieron definitivamente en octubre de 1841. Durante los años que duró la nivelación gran número de cargos locales —especialmente en núcleos de la importancia de Tolosa, Azcoitia o Vergara en Guipúzcoa— así como dos de los diputados a Cortes de la misma provincia, eran controlados por el «bloque rural» que deseaba ver restablecida la situación existente en julio de 1840.

El ansia latente de «restauración foral» pudo materializarse en el mismo movimiento de sublevación frente a Espartero al consti-

mismo T. J. A. LE GOFF y D. SUTHERLAND, «The Revolution and the rural community in eighteenth-century Brittany», *Past and Present*, n.º 62, 1974, y más recientemente de los mismos, «The social origins of counterrevolution in western France», *Past and Present*, 99, 1983.

tuirse juntas provinciales que en el caso de las vascongadas, dominadas por los partidarios de aquella restauración, procedieron a recolocar las diputaciones forales e incluso el corregimiento político, en un intento de dejar restablecida, antes de que la normalidad lo impidiera, la situación foral anterior al decreto de Vitoria. La demostración más evidente de que esa «conciencia foral» no había desaparecido, ni mucho menos, la constituye quizá el conflicto que se originó en Vizcaya al ordenar el gobierno de Joaquín María López, tras su establecimiento, la invalidación de las medidas restauradoras de la junta de Vizcaya. La resistencia de la autoinstituida diputación foral a cumplir las órdenes que en este sentido le comunicó el jefe político y el argumento utilizado expresan perfectamente esta vitalidad a que nos referimos:

«Hay que hacer —responde al jefe político— una importante distinción sin embargo. Las obligaciones de V.S. para con él (el gobierno) son de diversa naturaleza, de otra índole diferente que las de esta corporación popular, que se rige por instituciones y costumbres especiales todavía vigentes de derecho según ellas está obligada a obedecer y acatar cuanto el gobierno mande, pero no a cumplirlo como las quebrante»²⁷

Y, tras ofrecerle el ministerio a esta junta-diputación la posibilidad de una permanencia de sus miembros, pero bajo el carácter de diputación provincial, la reacción de aquélla es tan significativa como decidida:

«Bástele manifestar a V.S. que no se conforma en cambiar el título de Diputación general, que *los Fueros* de este solar nobilísimo y el voto de los pueblos le dieron para conservarlo con honra por el de diputación provincial con que *el señor ministro* quiere bautizarla»²⁸.

A pesar de que finalmente fue instituida la diputación provincial, quedó patente que aún existía en las provincias una evidente voluntad foral que impulsaba a la diputación vizcaína a oponerse a su reconversión en provincial, figura al fin y al cabo constitucional y desvinculada de los principios forales de legitimación. Eran éstos, por otra parte, los primeros pasos dados hacia la larga

27. Fidel de SAGARMINAGA, Apéndice de *El gobierno y el régimen foral del Señorío de Vizcaya*, tomo VI, Bilbao, 1928, p 761.

28 Ibidem.

restauración foral que acompañará al prolongado gobierno moderado que se inicia en 1843.

Pronto se ponía, por lo tanto, en evidencia que, desde la misma caída de Espartero, y, sobre todo, tras el rápido acceso de los moderados al gobierno, junto a una reconducción de la cuestión foral a sus anteriores cauces de resolución administrativa, el restablecimiento del régimen foral tenía que chocar con otros modelos que también ahora querían imponerse.

Aunque la trataremos extensamente en el siguiente apartado fue la cuestión de ayuntamientos, por obvias razones, en la que este choque se manifestó primeramente. Como se sabe, una de las primeras medidas de los moderados fue el rápido restablecimiento de su ley de ayuntamientos de 1840 de modo provisional hasta 1845. La rehabilitación de la ley provocó una intensa reacción en las provincias que inmediatamente advirtieron que «si hubiese de tener aplicación en estas provincias —la ley— acabaría con los restos de su antigua administración foral que dejó en pie el decreto de Vitoria de 29 de octubre»²⁹. No obstante, el panorama político había cambiado ya lo suficiente como para reiniciar ese tratamiento administrativo de la de la cuestión vascongada que, resolviendo mediante decretos y órdenes, permitía un mayor juego a la negociación entre las provincias y el gobierno, como recordaba a sus homónimos el diputado alavés.

El primer fruto de este forcejeo fue el decreto (de 24 de enero de 1844) por el que se permitía hacer las elecciones de ayuntamiento en Vizcaya «por el método que se hicieron las últimas», si bien «en todo lo demás» (organización, dependencia, etc.) se observaría el modelo general. Con ser esto importante, ya que ello permitía un efectivo control de las localidades, era notorio que el gobierno con esto no satisfacía las aspiraciones provinciales de recrear el entramado foral que tenían ya diseñado y para el que la forma de elección en los ayuntamientos, que en buena parte con-

29. A.G S.V. (Régimen Foral), R.º 9, L.º 1, 1844. El ayuntamiento de Tolosa era aún más explícito: «Una ley que altera radicalmente sus usos y costumbres, coarta las facultades administrativas de los ayuntamientos y anula sus relaciones inmediatas con la diputación que es su entidad tutelar». (A)rchivo (G)eneral de (G)uipúzcoa 1-11-101, 1843

trolaban con el modelo constitucional o sin él, era sólo un aspecto y no el más importante.

«Precisamente —responde la diputación al ministerio— lo que menos importaba era la forma de elegir los concejales de la ciudad, villas y anteiglesias.. porque todas las partes de ellas entre sí —de las instituciones forales— tienen una trabazón de la cual ha nacido su estabilidad y firmeza.»

Efectivamente, era en definitiva su modelo provincial lo que las diputaciones —aún provinciales— querían ver repuesto en su integridad. Una integridad que afectaba al municipio como la base de una red de relaciones que sin embargo sólo tenía sentido inmersa en ese peculiar entramado provincial que los notables vascongados necesitaban ver restituido. Lo que las provincias querían era, en suma, que no se fueran «arrancando piedras y más piedras del edificio de sus leyes tutelares» aislando unas de otras, ya que lo interesante de este edificio era precisamente «su trabazón y armonía que constituye su admirable fuerza». El significado práctico de todo este planteamiento era —como se vio poco después— poder continuar ejerciendo un control (una «autoridad tutelar» se la llama) sobre unos municipios también controlados, y ello era precisamente lo que impedía la restablecida ley del 14 de julio de 1840 que ataba fuertemente los municipios a la decisión del jefe político y el ministerio.

El apuntalamiento de este edificio ruinoso lo vino a instituir el Real Decreto del 4 de julio de 1844 (con Narváez de presidente y Pedro José Pidal en el ministerio de la gobernación). El decreto de julio tiene una gran importancia al esbozar los fundamentos del tratamiento que se pensaba dar a la cuestión foral³⁰. En mi opinión, lo fundamental del mismo es, junto a la señalización de materias ya «intocables» —aduanas, rentas públicas y administración de justicia— el definitivo «pase» del gobierno —si se nos permite el juego conceptual— al ordenamiento foral por cuyo restablecimiento se venía pugnando desde la liquidación de la Regencia. En efecto, el

30. Cfr. para un análisis del mismo P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, *Guipúzcoa, 1839-1868*, cit. pp. 50-51. Recientemente ha insistido B. CLAVERO en el hecho de que ésta y otras disposiciones se fundamentaran en un tratado militar de paz (Vergara) y no en la constitución o la legalidad de ella emanada, vid *Fueros vascos*, cit., pp. 23 y ss.

artículo 6.º del mismo establecía que las funciones de las que debía ocuparse la diputación foral restablecida, serían todas aquellas que no hicieran relación a elecciones a Cortes o a la ley de imprenta —para la que subsistían unas mermadas diputaciones provinciales. Acto seguido se disponía que los ayuntamientos tendrían «las atribuciones que gozaban antes del decreto del 29 de octubre de 1841 en cuanto no se opongan a este decreto real» exceptuándose a los ayuntamientos que prefirieran seguir las normas generales. Con ello se coronaba esta restauración dando vida de nuevo a la posibilidad material de desarrollar un control provincial desde las diputaciones forales; los ayuntamientos, también de nuevo serían «forales», no sólo por su forma de elegirse, sino —y esto es una importante novedad— por sus atribuciones. Rafael de Navascués, agudo y demoledor crítico de la foralidad que habremos de encontrarnos en más de una ocasión, opinaba de esta forma sobre la trascendencia del decreto:

«Las influencias de los fueristas se hicieron escuchar benévolamente en esa época, consiguiendo un *triunfo completo* con el Real Decreto de 4 de julio de 1844 que galvanizó el cadáver foral, e hizo renacer más fuertes que nunca las exigencias de sus interesados defensores»³¹.

El Real Decreto de 4 de julio puede, en nuestra opinión, considerarse efectivamente, como el definitivo punto de arranque para el establecimiento de la que se venía gestando desde años atrás como la «foralidad vascongada», asistiéndose desde este momento a un continuo reforzamiento de la misma a través de la práctica política provincial. Las posibilidades que la nueva situación ofrecía fueron captadas perfectamente por las tres provincias quienes en noviembre de ese año ya acordaban comportarse como si la especialidad administrativa vasca fuese un hecho derivado naturalmente del nuevo orden de cosas establecido en julio³². El diputado general de Vizcaya confesaba en carta privada a uno de los «contactos» de la diputación en Madrid que gracias al decreto de julio se iba restableciendo la normalidad foral en los ayuntamientos y en sus relaciones con la diputación para añadir seguidamente que «las dis-

31. Rafael de NAVASCUÉS, *Observaciones sobre los fueros de Vizcaya*, Madrid, 1850, pp. 142-143.

32. A.G.G. 1-11-101, 1844.

posiciones que en contravención de nuestro régimen especial se circulan generalmente para las demás provincias del reino nunca en éstas se ejecutan»³³.

Todo ello hay que enmarcarlo en una política de acoso a la Corte tratando de ganar importantes influencias en la misma tan necesarias cuando la cuestión foral, con los moderados gobernando, volvía de nuevo a concebirse y resolverse por vía de decreto y exclusión del parlamento. Esto, hasta cierto punto, podía parecer lógico puesto que existiendo leyes generales, como lo era por ejemplo la de ayuntamientos, su desarrollo y aplicación había de entenderse, lógicamente, materia reglamentaria. Sin embargo, lo importante aquí es que, por esta vía de adaptación de la legislación general a las provincias (por el rasero de la foralidad), se estaba escamoteando la confección de la definitiva ley de Fueros que debía, entre otras cosas y por seguir con el ejemplo, regular la cuestión municipal vasca y las relaciones de los ayuntamientos con las diputaciones. Tanto era esto así que parecía mucho más importante ganarse el favor de las reinas y sus influyentes consejeros³⁴ que pronunciar un convincente discurso ante las Cortes. Hacia el mismo fin se dirigían las diputaciones al tratar de convencer al gobierno de la necesaria relación existente en las provincias entre «gobierno foral» y tranquilidad provincial o al insinuar el sentido en el que se debía dar el arreglo foral, en el que, anuncian, no bastará «creer en las ventajas de un sistema de centralización» para ventilar la cuestión, como habían intentado los progresistas. Ni aun considerarían «como legal» una ley en la que se estableciera «la falsa base del despojo de la posesión de derechos inconcusos», pues en este caso —repito, aun siendo ley— no podrían consentir «en reconocer sus mandatos como obligatorios» y ello por una razón tan sencilla como asombrosa:

33. A.G.S.V. (R.F.), R.º 9, L.º 1, 1844.

34. Cfr. ARTOLA, *La burguesía revolucionaria*, Madrid, 1981, p 208. A este fin fue comisionado por las tres provincias Pedro de Egaña, quien gozaba de un gran ascendiente en la corte, especialmente sobre la reina madre —y que supo utilizar efectivamente, como se verá luego— para solicitar de las reinas. «otros apoyos más eficaces (que) continúe siendo nuestra protectora y nuestra madre. Mire que estamos desamparados y que sin su auxilio somos desvalidos» A.G.G. 1-11-101, 1844.

«pues nada en Vizcaya se reputa eficaz y verdadero que no se admita previamente por su junta general libremente congregada, la cual... rehusa suicidarse»³⁵.

Tanto el decreto de 4 de julio como la forma de enfocar la problemática provincial va a posibilitar, por otra parte, el surgimiento de acuerdos entre el corregidor y la diputación guipuzcoana para repartirse influencia provincial. Aquí es donde se revelan palpablemente las consecuencias del decreto, ya que, liquidada prácticamente la diputación provincial, el corregidor acepta que sea la foral la que asuma las funciones de aquélla —excepto en las reducidas materias que se la asignaban— pudiendo desarrollar por este medio una influencia real sobre la vida municipal que, si bien la había conocido tras el decreto del 16 de noviembre de 1839, no pertenecía —como oportunamente recuerda el corregidor— a sus facultades «históricas». De nuevo, por tanto, asuntos de cuentas y presupuestos municipales, arbitrios, enajenaciones de fincas del común, elecciones, etc., pasan a dictaminarse por la diputación foral, debiendo, teóricamente, dar luego cuenta al corregidor político quien, también en teoría, se reservaba la capacidad decisoria. La realidad, sin embargo y por lo que se deduce de las propias palabras del corregidor, debía ser otra bien distinta tomando la diputación resoluciones por sí y, en ocasiones, contrarias a las emitidas desde el corregimiento³⁶.

Se iba así encarrilando de nuevo la problemática foral por el camino que, tanto los moderados del gobierno como los notables provinciales (también moderados) deseaban, esto es, por la vía administrativa que permitía el arreglo de las cuestiones puntuales (ayuntamientos, fiscalidad, policía...) sin acometer la reforma foral de un modo global. De esta manera también hemos de pensar que los grandes asuntos que en estos años van a surgir en el proceso de construcción estatal, van a recibir un «arreglo» para su adaptación a las provincias en el desarrollo reglamentario de las leyes que los regulaban y para lo cual va a resultar por tanto decisiva la capacidad de presión que pudiera ejercer el «poder foral»

35. A.G.S.V. (R.F.), R.º 9, L.º 3, 1844

36. A G G 1-12-167, 1844.

III. LA PUGNA POR EL CONTROL PROVINCIAL (I)

Durante 1845 los moderados procedieron al establecimiento práctico de aquellos principios que, desarrollados hasta entonces doctrinalmente, y sólo en cierta medida materialmente, constituían los fundamentos del modelo administrativo, y estatal en definitiva, que va a resultar más permanente en nuestro país a lo largo del siglo XIX. Dos leyes del 8 de enero —ayuntamientos y diputaciones provinciales— y otras dos del 2 de abril —Consejos Provinciales y gobierno de las provincias— van a tratar de definir legalmente este modelo. Pretendía éste construir una administración sólidamente vinculada al gobierno, mediante una precisa definición de funciones a cumplimentar, en servicio de esta administración, por cada una de las instancias jerárquicamente dispuestas desde la Corona hasta el secretario de ayuntamiento. Desde un punto de vista jurídico-positivo el diseño moderado no debía ofrecer dudas respecto a la funcionalidad del mismo: la posibilidad para el ejecutivo de intervenir personalmente en el desarrollo de la vida local mediante la designación expresa por él de los alcaldes, no ya sólo en las cabezas de partido y núcleos de cierta importancia, sino en todos a través de su designación en el resto por el jefe político de la provincia³⁷. Junto a ello una concepción bífida del alcalde que se contemplaba como «delegado del gobierno» (art. 73) y como «administrador del pueblo» (art. 74), siendo en el primer caso un simple ejecutor de los mandatos del gobierno y en el segundo un jefe de la administración local dependiente en todo del jefe político. Los ayuntamientos, cuerpo totalmente diferenciado del alcalde, únicamente podían decidir por sí la designación de su personal quedando en todo lo demás —propios, comunales, obras, pósitos...— totalmente dependientes del jefe político cuya presencia aparece metódicamente al final de cada artículo de la ley referido a estas atribuciones (80, 81 y 82 I) y siéndoles expresamente prohibida la ocupación en materias ajenas a las citadas en la ley.

37. Es lo que, con acierto, MORELL OCAÑA, *El alcalde*, cit., p. 364, ha denominado el sistema de las dos confianzas: para ser elegido alcalde no basta ya con contar con la confianza del restringido electorado, sino además es necesaria la confianza del ejecutivo, cfr. también J I MORILLO, *El alcalde*, cit., pp. 75 y ss.

Las diputaciones provinciales —reguladas como decimos por otra ley del mismo día— aparecían ahora como corporaciones para la dirección económica de las provincias —repartimientos, cupos, proposición de nuevos arbitrios— y a la vez como consejeros del jefe político y del gobierno. La nota característica es, de nuevo, la sumisión a la cabeza rectora de las provincias, el jefe político, quien resulta, en efecto, la figura auténticamente reforzada tras la reforma moderada.

Ambas leyes, junto a las otras dos antes citadas y que luego consideraremos, manifestaban una decidida voluntad de coronar la administrativización de la vida pública española mediante la primacía evidente en ella del ejecutivo. Efectivamente, como es de sobra sabido, desde el nuevo ordenamiento constitucional de 1837 —y mucho más acentuadamente en el texto de 1845 que se promulgaría en mayo— la posición del ejecutivo frente al parlamento ganaba en fortaleza al permitirse al primero un mayor peso en la elaboración legislativa³⁸. Esta creciente preponderancia del ejecutivo que culminaría en abril con la institucionalización de los privilegios jurisdiccionales de la administración, conoce ahora un fuerte impulso al someter al control del gobierno el funcionamiento de unos entes que, como los locales y municipales, tan activos se habían venido mostrando en las mudanzas políticas previas. Esto se patentiza en la potestad reglamentaria de los ayuntamientos, no ya sólo sometida a la fiscalización del jefe político (como en 1840), sino ahora predeterminada en su contenido por el ejecutivo. La penetración del ejecutivo en la vida local se hace tan evidente que llega incluso a transformar la esencia del municipio, generando un salto cualitativo que convierte la anterior categoría del «municipio constitucional» en la nueva del «municipio moderado»³⁹, caracterizado especialmente por esa determinación que recibe desde la cúpula de la administración⁴⁰. Las leyes de enero

38 Cfr. A. GALLEGO, *Ley y reglamento*, cit. pp. 212-213.

39. Cfr. CHACÓN ORTIZ, *Notas jurídicas*, cit., pp. 248-252, y GALLEGO, «Notas histórico-jurídicas sobre el régimen local español», *Actas del II Simposium de Historia de la Administración*, Alcalá de Henares, 1969. Sobre la menguada capacidad reglamentaria de los ayuntamientos cfr. A. EMBID IRUJO, *Ordenanzas y reglamentos municipales en el derecho español*, Madrid, 1978, pp. 122 y ss.

40. Cfr. J. A. SANTAMARÍA PASTOR, *Sobre la génesis del derecho administra-*

de 1845 inauguran, pues, un modelo que halla su fundamento en la imposición del Estado sobre la sociedad: el potencial que implicaba la administración como el «organismo de la autodeterminación interna de la voluntad del Estado»⁴¹, fue utilizado a pleno rendimiento durante este gobierno largo moderado, siendo quizá la simbólica presentación del mismo el nacimiento que estas mismas leyes, definidoras del modelo, tuvieron al margen del parlamento⁴².

Era por tanto ahora un verdadero modelo propio, un sistema de administración, lo que los moderados querían construir con el objeto de controlar el país y asegurar su presencia al frente de los asuntos públicos⁴³. Es evidente que esta sumisión local y provincial al mando del ejecutivo, vía jefe político, chocaba enteramente con el régimen que los notables provinciales vascos se habían asegurado desde julio del año anterior. Será precisamente el tratamiento de los asuntos forales administrativamente lo que permitirá el arreglo entre el gobierno y las provincias a través de la adaptación, mediante reglamento, de las leyes de enero a las provincias vascongadas.

Este hecho, la solución reglamentaria, hace que sea a través de la correspondencia entre los comisionados en Corte de las provincias y sus diputaciones, en la que se transcriben las conversaciones con el ministerio, como podemos conocer las intenciones de unos y otros y las negociaciones realizadas. El ánimo de las provincias en estos contactos venía marcado por una instrucción conjunta de las tres provincias a los comisionados. En ella insistían en que «no recibiese la administración municipal de sus pueblos ni la acción de las juntas municipales y diputaciones generales en ella,

tivo español en el siglo XIX (1812-1845), Sevilla, 1973. Administrativización que ha sido estudiada también por S. MARTÍN RETORTILLO, *Administración y Constitución*, cit., pp. 50 y ss.

41. Cfr. L. VON STEIN, *Movimientos sociales y monarquía* (1850), Madrid, 1981, pp. 52 y ss. Un resumen de estos conceptos en la ciencia alemana del derecho en G. LEIBHOLD, *Conceptos fundamentales de la política y de teoría de la constitución*, Madrid, 1964, cap. 1.

42. Dado que su papel se limitó a aprobar la autorización solicitada por Narváez para establecerlos.

43. Sobre la mecánica que lo posibilitaba, cfr. C de CASTRO, *La revolución liberal y los municipios españolas*, Madrid, 1979, cap. 4.

alteración en las funciones que respectivamente hubiesen ejercido siempre con arreglo a sus fueros, buenos usos y costumbres... aplicando muy especial cuidado a que a las diputaciones provinciales no se concedan más facultades ni conocimiento que los señalados en el Real Decreto de 4 de julio».

De las reuniones celebradas se desprende con claridad un hecho: que Pidal estaba dispuesto, desde el momento en que las leyes de ayuntamiento y diputaciones se publicaron, a dictar a los jefes políticos de las provincias vascas reglamentos especiales para la aplicación de las mismas en éstas. En sus conversaciones confesaba el ministro su convencimiento de que en esas provincias «no deben tener aplicación las nuevas leyes municipales y provinciales sino modificadas y acomodadas a sus instituciones peculiares»⁴⁴. Pero es que, además, los poderes provinciales vascos habían adquirido para entonces la suficiente entidad y fuerza como para rechazar el cumplimiento de la ley en las provincias. En concreto, la diputación de Vizcaya, tras la publicación de las leyes de enero y su circulación a los pueblos del Señorío por el corregidor político se permitía a su vez circular a los mismos pueblos un escrito en el que les indicaba que el corregidor político no podía «entender en lo relativo a arbitrios, gastos y demás de todos los pueblos de este Señorío». La reacción de Pidal tan sólo sirvió para demostrar su incapacidad para cumplir la amenaza de proceder, como castigo, a un arreglo foral por propia iniciativa y encausar a la diputación de Vizcaya⁴⁵. Una Real Orden de 17 de febrero suspendía los efectos de las nuevas leyes en las provincias (y Navarra), hasta la elaboración de la pertinente instrucción que las acomodara, en el convencimiento de que su «estado de interinidad... impide que tengan en ellas rigurosa aplicación».

44. A.G.S.V. (R.F.), R.º 4, L.º 6, 1845. Signatura a la que pertenece la información que sigue.

45. Las justificaciones que los comisionados daban a Pidal de la actitud de la diputación son enormemente expresivas: «escudada esa corporación por las instituciones no legalmente derogadas. no pudo prescindir de adoptar el partido que la puntual observancia de los fueros le prescribía como *legítima*» para aludir seguidamente a la necesidad de revestir tales leyes con el pase de la diputación, «pues de otra suerte se considerarían en este país ineficaces y nula de derecho conforme lo eran para los leales habitantes de él»

La instrucción a que se refería la Real Orden anterior se envió al día siguiente y constituye, a nuestro parecer, uno de los mejores documentos para comprender el modo en que los moderados querían ahora en 1845 ensamblar el régimen foral y su modelo de administración. En sus indicaciones a los corregidores políticos procede el ministro en primer término a dejar bien sentado un principio que, ahora que los moderados trataban de establecer un modelo que les sirviera para el control del país, no se debía dejar pasar por alto: los ayuntamientos vascos no pueden escapar al esquema de dependencia del ejecutivo y, como en tal sentido el mayor competidor era la diputación foral, se trataba de demostrar que históricamente,

«el ayuntamiento no dependía de la diputación foral en su organización ni en sus actos y funciones más importantes y ha tenido siempre una intervención protectora, directa, eficaz en las localidades la Autoridad Real»⁴⁶.

De esta forma va exponiendo el ministro perfecta y brevemente cuál había sido el proceso reciente (desde la Real Cédula de 1824) por el que las diputaciones forales han ido entrando en el conocimiento de asuntos locales y vinculándose así ellas mismas al ordenamiento general del reino. Por tanto, parecía que el reparto de funciones lo quería Pidal entre el «ayuntamiento foral» y el jefe político, mas, la diputación foral que había sido sacada de escena con una mano, será recuperada de nuevo con la otra, como veremos enseguida.

Como se viene indicando, procede la instrucción entonces a un reparto de funciones entre el jefe político y los mismos municipios en cada uno de los apartados en que la ley se dividía. En cuanto a la elección de ayuntamiento «no pretende el gobierno que se aplique totalmente» esa parte de la nueva norma y se manda respetar, de momento, las calidades y formalidades exigidas por los fueros. Incluso consciente el ministerio de la «confusión y los abusos del régimen foral en esta materia», los acepta, encomendando al corregidor político de cada provincia una labor proselitista en

46. La instrucción se contiene en la R.O. de 18 de febrero de 1845 recogida por ESTECHA y MARTÍNEZ, *Régimen político y administrativo de las provincias Vasco Navarras*, Bilbao, 1918.

favor del ayuntamiento constitucional, el cual nunca se tiene que ver, se advierte, determinado por la instrucción que se refiere solamente a lo foral, con lo que se recoge, de nuevo, la práctica iniciada durante la Regencia de contraponer el ayuntamiento foral frente al constitucional. Reservándose para sus agentes la revisión de elecciones, mande la instrucción «respetar escrupulosamente la legislación o la práctica vigente (foral) en cuanto a la constitución de los cuerpos municipales», con lo que el ejecutivo renunciaba a una de las funciones que más importantes se habían manifestado en el doloroso parto de la ley moderada: la designación por el jefe político de los alcaldes.

La parte más sustancial de la instrucción es lógicamente aquella que se refiere al alcalde y al ayuntamiento. Siguiendo fielmente la distinción que en la primera de estas figuras se hiciera en la ley, define Pidal al «alcalde foral». En cuanto que delegado en el pueblo de la autoridad gubernamental, no puede «reconocer límite» en los fueros, teniendo que entrar el alcalde, bajo la sumisión al jefe político, en ese mecanismo que le vincula al ejecutivo. Como «administrador del pueblo» es como el ministerio concebía al alcalde foral, ya que «en este aspecto no quiere menguar las atribuciones que según los usos autorizados y conforme al decreto de julio pasado pudieran corresponder a los alcaldes». Esta división se complementa con las atribuciones de los ayuntamientos respecto a las cuales debe también procurarse «anteponer las costumbres, prácticas y usos», salvo en un aspecto principal, la imposición de arbitrios y los negocios relativos a cuentas y gastos que deben ser objeto de una «fiscalización imparcial» en esta época de «publicidad y de examen». Con ello la bipartición del alcalde que se establecía en la ley de ayuntamientos servía para asegurar al gobierno la presencia de «agentes del ejecutivo» en las localidades a la vez que las cuestiones de administración local, en las que los alcaldes tienen una «acción más propia», se permitía que fueran gestionadas por los propios alcaldes junto a los ayuntamientos de manera más «autónoma». En fin, de este modo se proponía intercambiar capacidad de maniobra en los intereses locales por tranquilidad y por fidelidad al ejecutivo.

Es, sin embargo, al tratar de la segunda ley del 8 de enero, relativa a las diputaciones provinciales, cuando se vuelve a dar

entrada en escena la diputación foral al advertir el ministro que, no siendo opuesta la diputación provincial al régimen foral «no puede señalarse una regla general y tan fija (como en ayuntamientos) en lo tocante a atribuciones». Así, la instrucción en este punto se limita a confirmar la existencia de dos diputaciones y a establecer —esto es quizá lo más importante— la capacidad de la provincial en función de la foral («sólo podrá tener efecto lo dispuesto.. cuando no se oponga a ello explícitamente el régimen foral»). El intento de ampliar las facultades de la provincial más allá de las encomendadas el 4 de julio (elecciones a Cortes e imprenta) no pasó de la insinuación. De esta forma en el ámbito provincial, tan importante dentro del proyecto moderado de ejecutivización y control administrativo —y que contaba en la práctica organizativa previa con una configuración más homogénea a la medida de las necesidades del gobierno—⁴⁷ es en donde se planteaba para Pidal el problema. Por una parte no podía renunciar a la preponderancia del jefe político en tanto que representaba la figura clave de la organización administrativa a imponer, ya que a él se remitían en definitiva los asuntos más importantes de la vida local y provincial⁴⁸. Sin embargo, tanto la predisposición del gobierno («ha de ser norma y pauta el decreto del 4 de julio»), como, sobre todo, la patente presencia de las diputaciones forales como corporaciones de los notables provinciales, obligó a considerar éstas en el engranaje provincial y municipal ya adaptado a las provincias.

Pienso, a tenor de las dos partes de la instrucción de febrero, que en la mente del gobierno moderado se contemplaba la posibilidad, sin renunciar a la garantía que suponía para él el corregidor político, de colaborar con la diputación foral en la administración provincial, mediante un reparto en el que los «jaunchos» locales dominarían entanto que «administradores de los pueblos» la administración local, mientras a las diputaciones forales se les confiaban las atribuciones que habían gozado «con arreglo a fuero»⁴⁹, mante-

47. Cfr. CHACÓN, *Notas jurídicas*, cit., p. 254.

48. Cfr. A. EMBID IRUJO, *Ordenanzas y reglamentos*, cit., pp. 98-99 y 106-107.

49. Lo que equivalía, dada la amplitud con que los «oráculos del fuero» —en expresión de Navascués— interpretaban la capacidad práctica de la diputación foral a la casi eliminación de la provincial de todo asunto que se separara de elecciones a Cortes o de imprenta, y aún así habrá entonces intentos de suprimirla totalmente.

niendo el gobierno su control a base de alcaldes fieles sometidos al corregidor político.

Si bien no llenaba este acoplamiento, como es lógico, todas las aspiraciones de las diputaciones, creo que su importancia radica, precisamente, y en primer término, en la necesidad ya asumida de tener que adaptar las leyes generales, para su aplicación en las provincias, y, en segundo lugar, en el reconocimiento que, de nuevo, en consonancia con el decreto de julio, se hace de los ayuntamientos y diputaciones forales. Esto, si tenemos en cuenta la definición que poco después diera Julián Egaña, respetaba totalmente el «sistema administrativo foral», cuyas ruedas, señala Egaña, son «las juntas generales, la diputación ordinaria y extraordinaria y los ayuntamientos», siendo éstos últimos donde menos convienen innovaciones que «desnaturalizan» las demás instituciones⁵⁰.

A pesar del «arreglo», no se piense que por ello las relaciones entre las provincias y el gobierno moderado en materia municipal (y, en definitiva, en materia de control provincial, del que lo municipal no era sino uno de sus principales aspectos) vinieron desde entonces sujetas al fiel cumplimiento de la normativa reglamentaria establecida en febrero para su «adaptación». La propia forma de enfocar la foralidad así como el estilo del gobierno administrativo desplegado por los moderados, llevaban impreso el sello de la provisionalidad, de forma que, mediante sucesivos decretos u órdenes, se podría ir continuamente cambiando según las circunstancias, las normas establecidas. Además, téngase presente que, ahora que los moderados han planteado su modelo de administración que coronarían ese mismo año, hacer dejación del mismo en tres provincias y del consiguiente control desde los municipios hasta el ministerio, no sería probablemente una idea que agradara a sus gobiernos. Por ello, el período 1845-1850 hay que comprenderlo, desde nuestro punto de vista, por lo que se refiere a las relaciones gobierno-provincias, como una relación de fuerzas, una auténtica pugna por el dominio provincial entre el intento de extender el modelo moderado de control administrativo a las provincias (respetando una cierta influencia de la diputación foral y de los «alcal-

50. Julián EGAÑA, *Ensayo sobre la naturaleza y transcendencia de la legislación foral*, Madrid 1850, pp. 194-196

des forales») y la resistencia, por otra parte, de los notables provinciales a ver reducido su protagonismo en la vida política provincial. El mero hecho de tener que adaptar unas leyes de la importancia de las del 8 de enero da idea de la veracidad de esta pugna que se mantendría, sin embargo, mucho más plenamente desde el mes de abril.

IV. LA PUGNA POR EL CONTROL PROVINCIAL (II)

Como se sabe la ley del 2 de abril de 1845 inauguraba en nuestro país la jurisdicción contencioso administrativa, completando con ello el proceso de construcción del modelo moderado de gobierno. Ya ha mostrado Juan A. Santamaría Pastor, en uno de los trabajos más conclusivos sobre esta cuestión, la evolución que conduce desde la situación gaditana en la que, entre un legislativo absolutamente consciente de su «pouvoir constituant»⁵¹, y un poder judicial del todo independiente, es prácticamente nulo el poder del ejecutivo⁵², hasta la situación de absoluta preponderancia del ejecutivo gestada desde el Trienio y manifestada plenamente con la llegada al poder de los moderados; entre tanto se había ido generando una nueva categoría conceptual, un «tertium genus» entre lo gubernativo y lo contencioso que dio vida a lo contencioso administrativo. No significa ello desconocer el dato de la existencia, con anterioridad al constitucionalismo doceañista, de determinados privilegios jurisdiccionales que, como tales jurisdicciones, operaban en determinados ámbitos de la «administración» de Antiguo Régimen⁵³. No obstante, estas especiales jurisdicciones deben ser en-

51. Noción ésta que ayuda bastante a entender el comportamiento de las Cortes de Cádiz y de su famoso «gobierno asambleario», dado que en ese momento: «la Nación está en estado de naturaleza unilateralmente sólo tiene derechos, no obligaciones; el pouvoir constituant no está sujeto a nada, en cambio los pouvoirs constitués sólo tienen obligaciones y no derechos», C. SCHMITT, *La Dictadura*, cit., p. 189.

52. Cfr. J. A. SANTAMARÍA PASTOR, *op. cit.*, *passim*, y GALLECO ANABITARTE, *Ley y Reglamento*, cit., p. 31, donde advierte gráficamente que en 1812 «la reserva de ley era total».

53. Cfr. fundamentalmente la reciente discusión de este punto por J. L. MESTRE, *Introduction historique au droit administratif française*, París, 1985, pp. 181-220. En el ámbito español, A GALLECO ANABITARTE, *Administración y jueces*, Madrid, 1971, *passim*.

marcadas en su propio contexto, el de esa pugna esencial que recorre las monarquías europeas —y entre ellas la hispana— en las décadas finales del Antiguo Régimen entre justicia y administración⁵⁴. Y si bien la creciente tendencia hacia un modelo ejecutivo de monarquía pudo en algún caso conducir a una «monarquía administrativa» que contara incluso con un acabado modelo de jurisdicción contenciosa administrativa⁵⁵, no se trata, en nuestra legítima opinión, de la misma línea evolutiva que la que aquí consideramos, fundamentalmente por la censura, revolucionaria en sí, de la formulación constitucional de la distinción de poderes. El surgimiento de este nuevo concepto administrativo, ahora reflejado en una legislación material, tiene la importancia histórica de marcar el inicio de una capacidad jurisdiccional autónoma de la administración, con la cual la ciencia de la administración, además de una formulación doctrinal, y una actuación administrativa, iba a conocer un nuevo desarrollo jurisprudencial que va a ser además —como oportunamente observa Gianini— el sustituto de una inexistente codificación administrativa⁵⁶. La temprana implantación en España de esta capacidad jurisdiccional autónoma de la adminis-

54. Cfr. E. HINRICHS, «"Giustizia" contro "amministrazione", Aspetti del conflitto politico interno al sistema nella crisi dell'Ancien régime», inc. en la trad. italiana del convenio *Vom Ancien régime zur Französische Revolution, Forschungen und Perspektiven*, Gotinga, 1978 (*La società francese dall'Ancien régime alla rivoluzione*, C. Capra, ed., Bolonia, 1982). Recensionando este último, pero con consideraciones propias de interés, A. ALIMENTO, «Política ed amministrazione: alcune riflessioni sulla monarchia francese d'ancien régime», *Rivista Storica Italiana*, n.º IV, 1985. Planteamiento discutido, por lo que a la monarquía francesa se refiere por F. DÍAZ, «Discorso sulle "lumières" programmi politici e idea-forza della libertà», en *L'eta dei lumi* (Estudios en honor a F. Venturi), Nápoles, 1985, pp. 127 y ss. Referido a la monarquía hispana, cfr. sobre este proceso, P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, «Monarquía ilustrada y haciendas locales en la segunda mitad del siglo XVIII», M. ARTOLA y L. M. BILBAO (eds.), *Estudios de Hacienda: de Ensenada a Mon*, Madrid, 1984, p. 157 ss.

55. Cfr. R. FEOLA, *La monarchia amministrativa. Il sistema del contenzioso nelle sicilie*, Nápoles, 1984, *passim*, más datos sobre el mismo caso en A. de MARTINO, *La nascita dell'intendenza. Problemi dell'amministrazione periferica nel regno di Napoli, 1806-1815*, Nápoles, 1984, y G. REBUFA, *La formazione del diritto amministrativo in Italia. Profili di amministrativisti preorlandini*, Bolonia, 1985, esp. el capítulo dedicado a G. Manna

56. M. S. GIANINI, *Premisas sociológicas e históricas del derecho administrativo*, Madrid, 1980, pp. 55-56

tración, adquiere su significación, precisamente, en los márgenes marcados por el desarrollo del modelo moderado de gobierno, tan generoso en cuanto a la decisonalidad política administrativa.

La especialización del derecho administrativo, dentro del mundo general del derecho, había ya comenzado a tomar cuerpo en España en 1842, año en el que fue establecido por primera vez como asignatura universitaria. Este hecho y la posterior consolidación de la especialidad que se puede considerar ya efectiva cuando escribe Colmeiro, hacia mediados de siglo⁵⁷, tiene una gran trascendencia por cuanto marca la paulatina separación de la «ciencia del derecho administrativo» como un derecho especial al servicio, precisamente, del poder ejecutivo⁵⁸. Separación que, además, se iba convirtiendo en paulatina desvinculación de la justicia ordinaria para los actos que afectaban a este ámbito administrativo, con el fin último de asegurar la ejecutividad de los mismos tratando de evitar su anulación por medio del recurso a la instancia judicial. No obstante, este proceso, vivido bajo la vigencia de la constitución de 1837, no llegó a cuajar en una solución definitiva a pesar de los intentos, como el de la Real Orden del 8 de mayo de 1839, mediante la que se deseaba preservar a los actos de la administración de ese recurso a la justicia ordinaria⁵⁹, a la que desde Cádiz y la consiguiente distinción de poderes se le asignaron todos los asuntos que, de una u otra forma, llegaran a ser contenciosos⁶⁰. Los mismos expertos en la ciencia del derecho administrativo reclamaban desde 1838 una clarificación en este terreno, comenzando

57. Cfr. A. GALLEGO ANABITARTE, «Las asignaturas de derecho político y administrativo: el destino del derecho público español», *Revista de Administración Pública*, n.º 100-102, 1983, de gran utilidad para lo que sigue en el texto.

58. El decreto de creación de la signatura universitaria se proponía textualmente formar «los diferentes agentes del poder ejecutivo a los que han de desempeñar cargos importantes en la administración», citado por GALLEGO, *op. cit., supra*, p. 737. Véase también E. GARCÍA DE ENTERRÍA, «Alejandro Oliván y los orígenes de la administración española contemporánea», en *La administración española*, Madrid (reed.), 1985.

59. Se trataba de potenciar la ejecutividad impidiendo a los tribunales la admisión de interdictos de restitución. Sobre su escasa efectividad, cfr. F. GARCÍA GOYENA y J. AGUIRRE, *Febrero, jurisprudencia administrativa (1842)*, Madrid, 1979, pp. 71-72.

60. Cfr. F. J. JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, «Desamortización y jurisdicción de Hacienda», *Anuario de Historia del Derecho Español*, 1984, p. 67.

por los articulistas de la *Revista Madrid*⁶¹. En 1841 Ortiz de Zúñiga constataba la situación de indeterminación existente en la materia, teniendo que reconocer, al intentar deslindar las atribuciones judiciales de las administrativas, que la imperfección de la legislación y la confusión introducida por continuas reformas, que sin embargo no habían acometido la realización de «un plan metódico y general... apenas permiten trazar con exactitud una línea divisoria»⁶². Además, Ortiz se daba perfecta cuenta de que esta indefinición nacía del mismo aparato conceptual utilizado, basado en lo *contencioso* y lo *gubernativo*; de aquí que su oposición a medidas como la del 8 de mayo de 1839, venga marcada no tanto por su aversión a la capacidad jurisdiccional administrativa (lo que tampoco es su modelo) cuanto por entender que, al plantearse en estos términos autoexcluyentes la solución, se caminaba hacia una continua y simple resolución gubernamental⁶³. Es por ello que solicitaba «la creación de tribunales que, cualesquiera que sea su denominación, puedan resolver estas cuestiones»⁶⁴, esto es, el «*tertium genus*».

La solución que finalmente adoptaron los moderados no será la insinuada por Ortiz de utilizar los tribunales existentes, sino que,

61. Se trata de los artículos de P. de la ESCOSURA, «De las corporaciones populares con atribuciones administrativas», y sobre todo, A. GIL DE ZÁRATE, «Sobre el proyecto de ley de ayuntamientos», ambos en *Revista Madrid*, t. II, 1838.

62. M. ORTIZ DE ZÚÑIGA, *El libro de los alcaldes y ayuntamientos* (1841), Madrid, 1978, p. 429. Algo similar observaba al año siguiente el *Febrero*: «A este estado conduce la obscuridad e indeterminación del derecho público constitucional, en cuanto a los límites hasta dónde cada uno de los poderes extiende sus atribuciones», p. 77.

63. La imposibilidad de solucionar este enfrentamiento entre lo gubernativo y lo contencioso en base a estos mismos conceptos es clara en el mismo *Febrero* que a pesar de querer ser un libro de jurisprudencia administrativa se las ve y se las desea para aclarar las atribuciones administrativas y las judiciales, teniendo finalmente que recurrir a la ley de Silvela de 1840, que no llegó a aprobarse, sobre tribunales administrativos, cfr. pp. 81 y ss.

64. M. ORTIZ DE ZÚÑIGA, *op. cit.*, p. 436. Hay que indicar que el modelo preferido por este tratadista era sin embargo la asignación de esta función especial a los tribunales ya existentes; una solución típica de un juez, a diferencia de Posada Herrera, según GALLEGO, *Administración y Jueces*, cit., pp. 143-44. Sin embargo, lo que queremos subrayar es la conciencia que tenía Ortiz de la necesidad de superar el esquema gubernativo-contencioso en este punto.

por coherencia con su propio modelo, optaron por la generación de un nuevo tipo de tribunales. Esta decisión hay que entenderla teniendo presentes varios factores y, en primer lugar, como ha observado Nieto, que bajo el régimen de la constitución de 1837 (y más bajo la de 1845) no existe una división tan tajante entre el poder ejecutivo y el judicial como en otros países (Francia por ejemplo), concibiéndose por buena parte de la doctrina (Gil de Zárate, Silvela, Colmeiro) que el poder judicial no era propiamente tal poder, sino una ramificación del ejecutivo⁶⁵. Por otra parte, la misma doctrina venía haciendo la pertinente distinción entre la actuación administrativa a través de su mero imperio (formación de reglamentos) o a través de su mixto imperio (decisión de controversias, jurisdicción), es decir, poder administrativo «activo» (actos de imperio) o «contencioso» (actos de jurisdicción) con lo cual se quería sentar el principio, como ha puesto de manifiesto recientemente A. Mozo Seoane, de que juzgar a la administración es también administrar (lo que viene apoyado por la propia concepción de lo judicial a que acabamos de aludir)⁶⁶. Al aplicar estos principios generando los nuevos tribunales se optaba, en suma, por dotar a la administración de esa reclamada capacidad jurisdiccional autónoma que, de alguna forma, venía a sancionar el fin del Estado de Justicia establecido por el constitucionalismo doceañista y, finalmente, por la ruptura del bloque que hasta entonces presentaban el derecho y los juristas unificados en torno al monolítico Poder Judicial⁶⁷.

65. Cfr. A. NIETO, «Los orígenes de lo contencioso administrativo en España», *Revista de Administración Pública*, n.º 50, 1966, pp. 33-38 y en la misma revista, n.º 55, 1968, F. GARRIDO FALLA, «La evolución del recurso contencioso administrativo en España».

66. Doctrina que se irá perfeccionando hasta llegar a formulaciones más precisas como la de Alfaro, ya en 1881, cfr. para todo ello, A. MOZO SEOANE, *La discrecionalidad en la Administración Pública en España. Análisis jurisprudencial, legislativo y doctrinal, 1894-1983*, Madrid, 1985, pp. 70-71 y 79-80.

67. Resulta fundamental aquí a nuestro juicio M. FIORAVANTI, «Storia costituzionale, storia amministrativa e storia della scienza giuridica», *Quaderni Fiorentini*, n.º 13, 1984, esp. 598-608, del mismo autor, con referencias al caso italiano y en especial a la obra de ORLANDO, «La scienza italiana di diritto pubblico del diciannovesimo secolo: bilancio della ricerca storiografica», *Ius Commune*, X, 1983. Cfr. también para la observación acerca del Estado de Justicia, C. SCHMITT, *Teoría de la Constitución*, Madrid, 1982, p. 143

La modalidad escogida por los moderados en la ley del 2 de abril de 1845 para establecer esta nueva jurisdicción tiene sin duda su sello peculiar: los tribunales —Consejos Provinciales que no son únicamente tribunales— se componen tan sólo de miembros nombrados por el gobierno (con la única limitación de que dos de los tres o cinco que los pueden componer han de ser letrados) a quien sirven también de cuerpo consultivo. Estos consejos, además, no tienen facultad para resolver cuestiones con carácter general, sino con referencia expresa a casos concretos⁶⁸, ni pueden, finalmente, «elevar ni apoyar petición alguna» o, lo que es lo mismo, servir de palestra política. Con todo ello se les enmarcaba en sus dos atribuciones esenciales estrechamente controlados además por el ejecutivo. En tanto que «tribunales en los asuntos administrativos» su importancia es evidente ya que a ellos se les encomienda genéricamente «todo lo contencioso de los diferentes ramos de la administración civil», y si bien no se estipula sistemáticamente cuáles han de ser materias propias de su jurisdicción⁶⁹, se señalan ya en la ley las relacionadas con bienes comunales y provinciales, repartimientos de impuestos, contratos con la administración, deslindes y definiciones de términos municipales, ríos, canales, y distribución de riesgos y montes; es decir, materias cuya importancia para los ámbitos locales era manifiesta. Señalemos finalmente que mediante el desarrollo reglamentario posterior de la ley se fue definiendo, aún más precisamente, su dependencia de los agentes del ejecutivo (ministerio y jefe político) fundamentalmente —como indica Gallego— a través del «incidente sobre la presentación de la demanda» que, rizando el rizo, permitía decidir a la administración qué debía remitirse a su jurisdicción y qué se podía resolver gubernativamente sin pleito contencioso administrativo⁷⁰.

En definitiva, y sin entrar en una descripción pormenorizada de la ley del 2 de abril de 1845, nos interesa subrayar de ella la importancia que tenía para el modelo moderado al permitir no sólo la necesaria maniobrabilidad de la administración, sino el control estricto de tan importante institución por el propio ejecutivo. El

68. Es decir, se debía limitar al mixto imperio como oportunamente observa A. Mozo, *op. cit.*, p. 75.

69. Cfr. A. Mozo, *op. cit.*, p. 73.

70. Cfr. A. Gallego, *Administración y jueces*, cit., p. 152

establecimiento de los tribunales administrativos junto a la ley sobre el gobierno de las provincias del mismo día —en la que definitivamente se produce el reforzamiento institucional del jefe político como figura clave del ordenamiento provincial— completaban el ciclo de las leyes administrativas moderadas iniciado en enero. De ellas lo esencial es el reforzamiento del ejecutivo, ignorando en buena parte al parlamento —como ya se dijo—, pero también creando el pertinente privilegio jurisdiccional que le eximiera de la incomodidad de la justicia ordinaria ⁷¹.

Estas rápidas observaciones acerca de la jurisdicción contenciosa administrativa y de su significado dentro del esquema moderado de gobierno, no tienen otra pretensión que poner de relieve la importancia del fenómeno con el fin de calibrar con mayor exactitud la transcendencia de la resistencia de las provincias vascongadas a su implantación en ellas. Es conveniente tener presente que desde abril de 1845 asistimos a un importante forcejeo entablado entre dos modelos que pugnan por el control provincial, ambos dentro de posturas políticamente conservadoras y ambos plenamente definidos en cuanto a sus objetivos ya para estas fechas.

El establecimiento de los Consejos Provinciales significaba para Pidal la posibilidad de recuperar la influencia que había tenido que ceder en febrero de ese mismo año en lo relativo a ayuntamientos y diputaciones, dado que esta nueva institución, por sus características —junto a la no menos importante ley para el gobierno provincial—, permitía un efectivo control material sobre los núcleos municipales a través de su papel de consejo del jefe político y del gobierno y, más que nada, de su capacidad jurisdiccional en las materias antes expresadas. A las diputaciones forales y a los dirigentes de las provincias no se les ocultaba que aceptar el establecimiento de esta institución supondría un constante goteo de la capacidad de control ganada para entonces en beneficio de la absorbente política moderada y en definitiva del gobierno nacional. De esta forma desde que fueron comunicadas a las diputaciones las

71. Para un breve pero excelente análisis del modelo moderado desde el estudio de su propia constitución que, como expresión máxima de desprecio al legislativo, nacerá después de definido el modelo (mayo de 1845), cfr. B. CLAVERO, *Evolución histórica del constitucionalismo español*, Madrid, 1984, pp 65-74

leyes de abril para su cumplimiento, las bases para un duradero conflicto entre ambos modelos estaban echadas. Desde ese momento las diputaciones desplegaron toda una serie de acciones que, acompañadas por la articulación de un discurso argumental muy propio, iban decididamente encaminadas a impedir la aplicación en sus territorios de las nuevas disposiciones.

La primera reacción de las provincias fue, lógicamente, denunciar el carácter «extralegal» y por lo tanto «ilegal» de la ley de Consejos Provinciales. Efectivamente, debido a su especial «legislación y administración» —dicen las diputaciones— no pueden plantearse estas nuevas instituciones sin vulnerar su oficialmente reconocida foralidad. Partiendo del hecho de que la ley vigente del 25 de octubre de 1839 no hace sino reconocer, según los diputados, sus derechos históricos («originados antes de la voluntaria incorporación») reclaman que se les respete lo que ellos consideran su situación legal. Nos hallamos de esta forma de nuevo ante la operativa y peculiar concepción de lo legal que vendría definido en función de su coherencia con el «legítimo» estado foral, y, así, de la misma forma que era «ilegal» la ley de creación de las diputaciones provinciales, en las provincias, de Espartero (22 de abril de 1842), lo son estas leyes moderadas capaces por sí solas de subvertir el sistema. Definida así su «situación legal», oponen a lo establecido por ley, la práctica y la costumbre observadas desde «tiempo inmemorial» en las provincias y recogidas en sus respectivos cuadernos forales. Planteamiento que apoyan en la peculiar evolución del constitucionalismo español que no ha consentido un desarrollo del principio de centralización «tan útil, conveniente y racional en Francia, donde la revolución no ha dejado una sola institución ni creencia en pie, como injusta, perjudicial e ilógica en España tierra de varias monarquías y de diferentes costumbres, donde gracias a Dios subsisten todavía los más sólidos fundamentos del edificio que nos legaron nuestros padres»⁷². Una «práctica de veinte siglos», como

72. Toda la información de archivo referente a los Consejos Provinciales se ha obtenido del A.G.S.V. (R.F.), R.º 9, L.º 1 y 2; R.º 17, L.º 1, 2, 5 y 7, cuya cita continua omitimos. La razón de no contar con documentación del archivo general de Guipúzcoa se debe a su conocido penoso estado de hasta hace bien poco tiempo, no contando con reordenación de documentación desde, precisamente, 1845, situación que sólo se palpa con la atención dedicada por sus archiveras.

escribía la diputación de Guipúzcoa a la reina, permite reclamar el mantenimiento de lo que los diputados consideraban un «sistema completo de gobierno provincial» frente a la ley del 2 de abril que, como ley general, «nunca afecta al gobierno foral de este país, regido por sus peculiares instituciones». La noción de legalidad que utilizaban ahora las provincias la expresó fielmente Pedro de Egaña, auténtica voz orgánica del fuerismo, algunos años después al discutirse el proyecto de reforma de los fueros con Bravo Murillo. Señalaba el comisionado vasco en un pasaje que, en parte, nos ha servido de cita capitular:

«El gobierno y la comisión proceden como si la ley de relaciones entre las provincias vascongadas y el resto de la monarquía fuese una ley de nivelación o IGUALDAD, y precisamente es lo contrario. Lo legal, en lo que atañe a las provincias vascongadas es la DESIGUALDAD. Así lo han querido la naturaleza, la historia, el derecho y los poderes supremos de la nación»⁷³.

Es este planteamiento de su propia legalidad y de la importancia política de la costumbre y los usos lo que ahora posibilita ir construyendo un argumento que permita asegurar el control provincial a las diputaciones no tanto de atribuciones históricamente pertenecientes a ellas, cuanto mediante la inclusión en esos usos y costumbres del «sistema» generado a lo largo del proceso que hemos expuesto hasta aquí. En definitiva se trataba de que la nueva institución adquiriera, lo mismo que ocurriera con los ayuntamientos desde 1839, una legitimidad foral por la cual habría de quedar bajo control del «poder foral» desvinculado de la legislación general y amparado frente a ella por sus propias fuentes de legitimación⁷⁴.

Es de esta forma que no sólo resultan ahora parte integrante de la foralidad y de la tradicional administración provincial, aspectos como los de repartimientos e imposición de tributos, o administración de bienes y aprovechamientos comunales, sino que

73. Pedro de EGAÑA, *Breves apuntes en defensa de las libertades vascongadas*, Madrid, 1870, p. 162.

74. Cfr. C. SCHMITT, *Legalidad y legitimidad*, Madrid, 1971, p. XXIV, así como M. GARCÍA PELAYO, «Esquema general de una introducción a la teoría del poder», en *Idea de la política y otros escritos*, Madrid, 1983, pp. 215-217.

defienden también las diputaciones, como atribución propia (sancionada también por «veinte siglos de práctica») la autonomía jurisdiccional para la administración provincial de las mismas. La reinterpretación del pasado que permite llegar ahora a esta conclusión merece ser reproducida aquí:

«Y no solamente es fuero de la provincia conocer de estos asuntos en el círculo de la escala administrativa, sino también resolver sus debates contenciosamente viniendo esto desde los tiempos más antiguos, habiendo sido así antes de la voluntaria entrega, y después de ella, y señalando la misma ordenanza como caso de hermandad los debates de concejo a concejo, de comunidad a comunidad y aun de persona particular contra concejo o comunidad»⁷⁵.

Lo asombroso de este argumento es el intentar impedir el establecimiento de una nueva jurisdicción administrativa apelando a disposiciones forales del siglo xv en las que los monarcas encargaban —como caso de hermandad— a las juntas la resolución «como deben de justicia» de pleitos ocurridos entre concejos o entre éstos y particulares⁷⁶. Es decir, se procuraba contraponer a una nueva categoría conceptual propia del desarrollo constitucional y del fortalecimiento administrativo, una capacidad juris-

75. El mismo argumento que la diputación alavesa a la que corresponde el texto esgrimen las de Vizcaya y Guipúzcoa. Nos hallamos evidentemente ante el problema que en más de un aspecto y no sólo en España —sino en otros países, como Francia— se plantea entre la ley y su interpretación que en no pocos casos, como el presente, se resolvía, en expresiva frase de D. R. KELLEY, con un asalto de Temis por las fuerzas de Clio, cfr. *Historians and the Law in Postrevolutionary France*, Princeton, 1984, esp. cap. IV y, del mismo, Hermes, Clio, Themis: «Historical Interpretation and legal hermentutics», *Journal of Modern History*, 55, 1983, esp. pp. 651-654. Véase también para más información sobre la fuerza legitimadora de la historia, G. G. IGGERS, *The german conception of history. The national tradition of historical thought from Herder to the present*, Middletown, reed. 1983, y M. FIORAVANTI, *Giuristi e costituzione politica nell'ottocento tedesco*, Milán, 1979.

76. En concreto el fuero guipuzcoano recoge en el cap. VI del Tit. X que data de 1468 este aspecto (p. 176 de la edición que manejamos, San Sebastián, 1919). En el de Vizcaya estableciéndose la capacidad jurisdiccional de la diputación en el Tit. XXIX, leyes III, V, VI y X no se indica la referida a pleitos entre concejos (fols. 76 y ss. de la edición de 1865). En su *Compendio foral de la provincia de Alava* (1858), Vitoria, 1983, recoge R. ORTIZ DE ZÁRATE (cpa. XXI, pp. 74 y ss.) atribuciones similares a las de las juntas de Guipúzcoa.

diccional originada en la Baja Edad Media (e inteligible sólo en base al concepto de iurisdictio propio del derecho común entonces vigente) cuando las referencias bajo las que había que comprender la nueva institución eran radicalmente ajenas a esa capacidad. A pesar de que ya en su momento Pablo de Gorosábel y Ramón de Lizaraburu demostraron exhaustivamente que la capacidad jurisdiccional ejercida por la diputación desde «remotos tiempos» y en especial durante el siglo XVIII había estado reducida a contadísimas materias⁷⁷, no era realmente una demostración histórica racional lo que haría desistir a la diputación en su empeño.

No obstante estos primeros esfuerzos argumentales de las provincias, el gobierno de Narváez no iba a abandonar tan fácilmente en esta ocasión dada la importancia que tenía la cuestión para el esquema que se trataba de imponer. En primer lugar no compartía siquiera Pidal la interpretación que sobre su propio pasado foral hacían las diputaciones y, convencido de que querían «hacer pasar por fuero muchas cosas que no lo son», únicamente se trataba en su opinión de recuperar «las facultades que se reconocían al Supremo Consejo de Castilla, a la dirección general de propios y arbitrios y a la Chancillería de Valladolid». A pesar de esta denodada voluntad de los moderados de ver establecidos los Consejos Provinciales en las provincias forales, como pieza irrenunciable del mecanismo administrativo que habían ideado, todavía en julio se ofrecía una cierta transacción al disponer por Real Orden que los Consejos en las provincias vascongadas habían de entender en todos los asuntos que correspondieran a la «autoridad política superior» sin que de esta forma «puedan por regla general intervenir en asunto alguno de los que con arreglo al decreto de 4 de julio del año anterior se reservaban a la autoridad foral respectiva». Dado que tan inconcreta disposición hacía referencia a otra indefinición (las atribuciones forales según el decreto del 4 de julio) no podemos precisar cuál era realmente la intención de esta real orden. No obstante, si tenemos en cuenta hechos inmediatos parece apuntar hacia un acallamiento de las diputaciones para establecer sin oposición el Consejo Provincial, o al menos, así lo

77. R. LIZARZABURU, P. GOROSÁBEL y F. GUERENDAIN, *Contestación cumplida al folleto titulado refutación del informe dado por el Consejo Provincial, Tolosa, 1848*

vieron las propias diputaciones que se negaron a su reconocimiento ni aun bajo este nuevo supuesto.

Efectivamente, constituidos ya los Consejos en agosto de 1845 —aunque no reconocidos, como se indicó— inicia entonces el gobierno un asedio al «ayuntamiento foral» tratando de recuperar el espacio perdido tras el decreto-instrucción del 18 de febrero de este mismo año. Volviendo contra las provincias sus mismas armas, encuentra Pidal precisamente en la historia la fuente para legitimar su proyecto.

«Los ayuntamientos —señala el ministro— en sus funciones municipales ni han tenido que ver con los fueros ni con la diputación general, pues que siempre han dependido de la autoridad suprema del Estado»⁷⁸.

En base a estos supuestos (que por otra parte no dejaban de suponer una aceptación del terreno de discusión elegido por los dirigentes de las provincias) se comienza a ordenar el sucesivo establecimiento en Vizcaya y Alava de ayuntamientos organizados según las leyes generales e involucrados por tanto en la cadena administrativa según aquéllas disponían, en todos aquellos municipios cuyas ordenanzas o fueros fundacionales hubieran sido dados por diferentes monarcas (lo que volvía a primar el principio de legitimación de la historia y no el de la legalidad constitucional). Esta reabsorción de ayuntamientos forales se irá completando a lo largo de 1846 (con Isturiz en la presidencia y Javier de Burgos en el ministerio de gobernación hasta abril) y en 1847, con los puritanos encabezados por Pacheco, se completa con el informe del Consejo Real sobre los ayuntamientos guipuzcoanos —únicos en que subsistían las formas forales— en el que se observaba,

«que el sistema actual es en su mayor parte procedente de ordenanzas, dadas o aprobadas por la Corona en diferentes épocas, o de costumbre inmemorial introducida por imitación en pueblos que de ella carecían, no de las disposiciones del fuero»⁷⁹.

Este reforzamiento del ayuntamiento moderado realizado a costa del foral estaba, en el contexto en que nos movemos, cargado de

78. A.G.S.V. (R.F.), R.º 9, L.º 6, 1845.

79. Archivo Municipal de Hernani, A-5-1-1, 1847. El mismo año se rechazaban definitivamente las pretensiones de Vizcaya de restablecer la foralidad municipal.

significación: implicaba que tan fundamental apoyatura del sistema foral dejaba de responder a los criterios forales de legitimación para pasar a hallar un fundamento legal constitucional —a pesar de que la reconversión se hubiera fundamentado en un argumento historicista. Pero lo más esencial de la mutación sufrida era que con ella se entraba en la cadena administrativa que suponía la ley de ayuntamientos desvinculándose de la «tutelar vigilancia» de la diputación. De estos hechos se extraía una conclusión evidente: que, para 1846 y 1847 era necesario un respaldamiento estratégico si lo que se quería era salvar el régimen foral. Evidentemente éste había de darse en el sentido de cerrar filas en torno al control de las provincias desde la estructura provincial. A ello responde la intransigencia en la cuestión de los Consejos Provinciales comenzando por el rechazo a la oferta moderada de transacción, conscientes los notables provinciales, como veía Egaña, de que

«Todo está en el primer paso: si se deja constituir y entrar una vez en funciones el Consejo si antes no se ponen tales trabas y dificultades a la autoridad encargada de llevarlo a cabo que le haga desistir. . . cuantos esfuerzos se intenten después serán de todo punto inútiles »

Si bien no pudieron las provincias resistir este primer paso —que como hemos visto se produjo en agosto de aquel año—, sí mantuvieron firme su postura de no reconocer al nuevo tribunal como «legítimamente constituido». Esto que pudiera parecer de escasa relevancia para la efectiva implantación de los Consejos en las provincias, tenía sin embargo un importante valor estratégico por cuanto equivalía a negarse a satisfacer los gastos del mismo, lo cual, si tenemos en cuenta las escasas posibilidades presupuestarias del ministerio para mantenerlo por su cuenta⁸⁰, podía incluso llegar a significar su paralización.

Dentro de este enfoque de la pugna entre gobierno y provincias, es donde adquiere sentido el asedio al municipio foral que vimos iniciarse en 1845 y que, como indicamos entonces, adquiere a lo largo de 1846 y 1847 una especial intensidad. Se trataba, cada vez

80. La participación del ministerio de la gobernación —que contaba con el importante ramo de correos— en los presupuestos era sólo del 8,5 por ciento del total, dato que ofrece D. LÓPEZ GARRIDO, *La guardia Civil y los orígenes del Estado centralista*, Barcelona, 1982, pp. 120 y 139

de una manera más evidente, de restar asideros al «poder foral» en base a los que justifican su oposición a ser absorbido por el modelo moderado. A la actividad respecto a los ayuntamientos añádesse ahora un intento de bloquear precisamente las juntas generales al prohibirles que se ocuparan de otros asuntos que excedieran la designación de comisionados para tratar el arreglo foral y cuestiones menores de administración provincial (ferias, pesos, etc.) con la clara intención de que no se ocuparan de la forma de arbitrar su oposición a la implantación de los Consejos Provinciales. Se procuraba con estas medidas preparar el camino para la total involucración de las provincias en la «administración general del Reino», como lo sancionó claramente la Real Orden de 3 de julio de 1846 en la que el gobierno fundamentaba la necesidad del pleno establecimiento de los Consejos en la existencia de ayuntamientos constitucionales en las tres provincias que, lógicamente, se añade habían de entenderse con una institución de su misma naturaleza, aludiéndose en ella también a la necesidad de una nueva institución para dirimir las controversias de contiendas electorales, tal y como se preveía en la vigente ley electoral del 18 de marzo de ese año. En conclusión, el gobierno estaba empeñado ahora en mostrar que tanto por lo que se refería a los ámbitos locales, como por su participación en la maquinaria parlamentaria con sus diputados a Cortes, las provincias estaban de hecho constitucionalizadas y era por tanto inexcusable en ellas la plena presencia de la administración y por supuesto de los Consejos Provinciales.

Sin embargo, los dirigentes provinciales vascos reconducían una y otra vez la discusión a los términos de la legalidad del «poder foral» y a la ilegalidad de las innovaciones en el régimen de las provincias. Si bien —insisten— se han aceptado tales innovaciones, como las que refería la Real Orden comentada hace un momento, había sido por una cuestión de lealtad a la Corona y no por ello se había reconocido su legitimidad. «Están reconocidas —decía la diputación vizcaína— porque a un país leal no le queda otro remedio», no obstante, se indica en la misma representación, ni en los memoriales elevados a la Corona, ni en los registros de juntas, ni en las conversaciones con los comisionados en Corte se podrá encontrar «una sola frase, una palabra, que indique la aquiescencia y reconocimiento de ninguna de semejantes infracciones». Mayor

importancia tenía la consideración que las provincias hacían de su incorporación a la voluntad legislativa nacional que les vinculaba a las leyes del parlamento:

«Los diputados a Cortes —recordaba la diputación de Vizcaya— *no representan al Señorío*, son una planta exótica en el país foral, no se les reconoce, ni por el país, ni por el gobierno como los comisionados que han de ser oídos.»

Esta interesante observación retomaba una idea ya expresada en los años del Estatuto Real ⁸¹, según la cual los verdaderos representantes de las mismas no son los diputados a Cortes elegidos según las leyes electorales generales, sino los comisionados nombrados en las juntas: no los representantes de la *sociedad* vascongada, sino los comisionados por la *corporación* provincial. Además este hecho demuestra la mayor importancia concedida por las provincias a los comisionados, figura eficaz para moverse en «este elemento corrompido de la Corte» y conseguir un decreto favorable —como vamos a tener ocasión de comprobar en breve— que a diputados a unas Cortes que no se hallaban desde luego en su mejor momento.

Pero, independientemente de ello, el estado legal de las provincias, se dice reiteradamente, no depende en cualquier caso de las leyes emanadas de la voluntad general, de la que participan los diputados a Cortes vascos, sino que, en tanto no se desarrollara el artículo segundo de la ley del 25 de octubre de 1839, no se hallaba el régimen foral legalmente definido y por lo tanto su punto de referencia era la confirmación foral establecida en el primer artículo de la misma, teniéndose, por otra parte, en cuenta que esta ley «es considerada hasta cierto punto una ley constitutiva». Esta «ley constitutiva» era la que tenía que cumplir el papel de freno para evitar que «pudieran introducirse en las provincias vascongadas todas las demás leyes generales que arreglan la administración política, económica, gubernativa y judicial». Estas ideas acerca de las leyes generales en relación a la «especial situación foral» nacían a su vez de una peculiar interpretación de la unidad constitucional, a la que se prestaba su misma indefinición legal, interpretación que refle-

81. Momento en el que las juntas, como ya se dijo, consiguieron hacer el nombramiento de los procuradores.

jan estas palabras de Ramón Ortiz de Zárate y Mateo B. de Moraza escritas pocos años después:

«Una es la Constitución en toda la monarquía, lo mismo en el País Vasco que en las demás provincias, con sola la diferencia de que la aplicación de las leyes que nacen de los diferentes artículos constitucionales sólo pueden tener lugar en las provincias gemelas en todo aquello que no sea contrario al fuero»⁸².

En cierto modo —y en alguna ocasión explícitamente— se entendía que la ley del 25 de octubre no era sino una confirmación foral más al modo de las que realizaban los monarcas durante el Antiguo Régimen⁸³.

Sin embargo, no solamente en términos de derecho se trataba de sustentar el discurso provincial, sino que existía en el mismo otro polo referencial de gran interés que hacía alusión a la peculiar constitución provincial cuya «alma mater» era la foralidad. Solamente una «autoridad foral» era capaz, según este discurso, de mantener un equilibrio provincial que se hace descansar sobre elementos tradicionales, aún subsistentes, de la realidad social provincial concebibles en términos de comunidad más que de sociedad civil. Pedro de Egaña explicaba en 1852 el fundamento de esta «autoridad foral». La «acrisolada moralidad», la «insólita subordinación» y las «costumbres patriarcales» que caracterizan a los habitantes del país y que impregnan sus pueblos, familias y juntas en contraste con «el modo de ser del resto de la península, y aún del mundo civilizado» producen un fenómeno peculiar sólo perdurable en la medida en que sea respetado el «sistema foral».

«La obediencia a las autoridades —continúa Egaña— no es en las montañas vascongadas un tributo arrancado por el temor, sino un movimiento espontáneo tan tradicional y hereditario, como las instituciones de que directamente emana»⁸⁴.

82. R. ORTIZ DE ZÁRATE y M. B. de MORAZA, *Vindicación de los ataques a los fueros de las Provincias Vascongadas insertos en el periódico la Nación*, Madrid, 1852, p. 5.

83. Por ejemplo, en el folleto citado supra (pp. 16-17) se enumera una lista de confirmaciones desde 1332 incluyendo la ley del 25 de octubre sin solución de continuidad.

84. P. de EGAÑA, *Breves apuntes*, cit., p. 3. También Julián EGAÑA poco antes escribía: «¿Cuál, pues, es la causa misteriosa de su bienestar? En vano se

Esta natural obediencia a autoridades también por fuerza naturales —calificativo con el que se quería figurar una cadena de autoridad desde la del padre hasta la del diputado general, pasando por la del alcalde— no tenía otra causa, en este esquema, que la «magnífica y popular CONSTITUCION que gobierna a aquella raza». Tal peculiar constitución era la que generaba un «sistema completo» que, precisaba el propio Egaña,

«arranca en la familia, va al municipio y concluye en la provincia enlazándose de tal manera los eslabones de la influencia del respeto y de la respectiva subordinación social que no puede tocarse a uno sin debilitar o poner en estado de mal servicio toda la cadena»⁸⁵.

Argumento con el que quería Egaña, en definitiva, salvar a las provincias de la revolución iniciada a finales de la anterior centuria en Europa, lo que, entre otras cosas, valía para rechazar la «nive-lación» producto de la racionalidad administrativa del país vecino. «No hemos sido revolucionarios porque éramos españoles» sancionaba conclusivamente este autor⁸⁶. Y, como no podía faltar en el discurso provincial, la alteración brusca de esta «paz foral» puede traer consigo consecuencias imprevistas dado el «apego de los vascongados a sus instituciones», no siendo éste «un argumento ad terrorem, sino eventualidades que todo gobierno prudente debe pesar y prevenir»⁸⁷.

Era de esta manera cómo el hilo argumental llegaba a cerrarse. Junto a la «legalidad» que a sus pretensiones se quería dar en base

buscará aquella causa fuera del espíritu de la libertad sostenido por un gobierno popular . creador de costumbres sencillas, puras y laboriosas y perfeccionado por el ardiente amor que sus naturales profesan a sus instituciones», *op cit.*, p. 8.

85. P. de EGAÑA, *op. cit.*, pp. 159-160.

86. *Ibid.*, p. 12. Lógicamente la baza que los recientes acontecimientos europeos de 1848 permitían jugar ensalzando el control provincial por la autoridad foral, no fue desaprovechada. Resulta verdaderamente significativo, además del discurso provincial, ese rechazo de la «metáfora revolucionaria» para adscribirse a una idea de continuidad histórica, cfr. R. KOSELLECK, «Rivoluzione-scienze sociali, storia dei concetti, metaforica», inc. en *La dinamiche del mutamento. Processi normativi e trasformazione culturale*, Milán, 1985.

87 R. Ortiz de ZÁRATE y M. B. de MORAZA, *Vindicación*, cit., p. 18, y en similar sentido Víctor L. de GAMINDE, *Impugnación al proyecto llamado arreglo de los fueros de las provincias bascongadas*, Bilbao, 1852.

a la ley del 25 de octubre («ley fundamental»), la legitimidad que se reclamaba hallaba un fundamento extra legal en esa «constitución tradicional», en esa «costumbre» que pedía el respeto a la «autoridad foral» capaz de gobernar a las provincias. No es, obviamente, que los notables provinciales reflejaran en este modelo paternalista una realidad social vigente tal y como era pintada, exenta de contradicciones y conflictos⁸⁸, sino que, conocedores del entorno social en el que se movían, hacían abstracción de los elementos definidores del mismo con el fin de proyectarlos hacia el mantenimiento de la «autoridad foral»⁸⁹. Así de la misma manera que se reinterpretaba el pasado provincial para fundamentar la amplitud del «poder foral», se reinterpretaba la realidad social presente eliminando de ella las formas conflictuales que, evidentemente, también conocía la comunidad tradicional⁹⁰. De esta forma también, al inventar la tradición, consolidaban esas estructuras comunitarias vigentes para asentar sobre esta «natural organización» la necesidad de una correspondiente «autoridad natural», estableciendo una consciente contraposición entre un medio tradicional gobernado por una patriarcal autoridad y una sociedad de individuos gobernada por un asocial Estado⁹¹. En suma, y esquematizando

88. Cfr. E. P. THOMPSON, «¿Lucha de clases sin clases?», en *Tradición, revuelta y consciencia de clase*, Barcelona, 1979, esp. pp. 14-20, y del mismo, *Società patrizia, cultura plebea*, inc. en el libro del mismo título, ed. de E. Grendi, Turín, 1981.

89. Cfr. NISBET, *La formación del pensamiento sociológico*, Buenos Aires, 1977, t. I, caps. 3 y 4. Acerca de la perduración de elementos de comunidad tradicional, IVARS y GINER, introducción a F. TÖNNIES, *Comunidad y Asociación*, Barcelona, 1979, pp. 5-22.

90. Cfr. R. WILLIAMS, *Marxismo y literatura*, Barcelona, 1980, pp. 137-142. Acerca de la violencia específica de la comunidad tradicional, CALHOUN, *op. cit.*, n. 26. Referencias de gran valor en este aspecto se deben personalmente a J. Viejo. Era éste además un tema, curiosamente predominante entre los literatos vascos del momento, ocupados muy especialmente en difundir esta visión paternalista de la sociedad vasca, cfr. J. JUARISTI, *Ei linaje de Aitor (la literatura histórico-legendaria en la crisis de la sociedad tradicional vasca, 1839-1893)*, Tesis, Vitoria, 1985.

91. Cfr. E. J. HOBBSAWM y T. RANGER (eds.), *The invention of tradition*, Cambridge, 1983, esp. la introducción de Hobsbawm. Por lo demás estas concepciones orgánicas que conscientemente eludían el planteamiento en términos de sociedad y Estado no eran infrecuentes en medios conservadores, cfr.

este discurso, podemos decir que se trataba con él de no permitir que la constitución formal «verdadera criatura del liberalismo decimonónico» como derecho objetivamente formulado, se sobrepusiera a la constitución material y con ella la legalidad constitucional a la legitimidad foral⁹⁷.

Es éste el nervio central del discurso argumental que las provincias vascongadas utilizaron en su rechazo a la implantación de los Consejos provinciales, que llevaron hasta sus últimas consecuencias. Podemos decir que hasta la llegada al poder del sector puritano del moderantismo en 1847 (con los gobiernos de Pacheco y García Goyena), las diputaciones supieron hábilmente dilatar el cumplimiento de las órdenes de pago de los gastos de los Consejos. Como es bien sabido, este nuevo grupo gobernante va a tener por tarea fundamental el reforzamiento de la administración civil del Estado, lo que implicaba luchar efectivamente por un control de la misma al margen de la potente estructura militar⁹³, pero también, obviamente, por terminar de asentar la obra delincada en 1845. Es en este punto en el que efectivamente se iban a encontrar con la tarea del definitivo reconocimiento de los Consejos en las provincias vascongadas (y de su correspondiente pago por las diputaciones). El nuevo impulso dado por este grupo será recogido por el de Narváez en su segundo gobierno que contó durante dos años con Luis José Sartorius, conde de San Luis, como ministro de gobernación. El nuevo estilo imprimido a la problemática desde el gobierno se dejaba ver en esta escueta pero tajante orden del 30 de noviembre de 1847, que mandaba al corregidor político de Vizcaya «que lleve V.S. inmediatamente a efecto cuanto se le previno... y en el caso, no esperado, de que la diputación general se negase a satisfacer las gratificaciones del Consejo Provincial, desde luego

M. FIORAVANTI, *Giuristi costituzione*, cit. pp. 144 y ss. y, a modo de ejemplo, con consideraciones de gran similitud con las que se vienen viendo, J. J. BACHOFEN, *El derecho natural y el derecho histórico* (1841), Madrid, 1978.

92. Cfr. E. CASTRUCCI, *Tra organicismo e «rechtsidee»*. *Il pensiero giuridico di Erich Kaufmann*, Milán, 1984, esp. pp. 20 y ss., y O. BRUNNER, «Il concetto moderno di costituzione e la storia costituzionale del medioevo», inc. en *Per una nuova storia*, cit., pp. 5-9, a quien sigue Castrucci para la diferencia entre *Kostitution* y *Verfassung*.

93. Cfr. M. BALLBÉ, *Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983)*, Madrid, 1983, pp. 154-159.

retenga en poder del tesoro de la provincia los fondos necesarios».

Esta decisión fue la que mostró hasta qué punto iban a ser capaces de resistirse las diputaciones a cumplir las órdenes para el reconocimiento de los Consejos. En Vizcaya, sin duda, fue donde sucedieron los más graves incidentes y esto porque para hacer cumplir la orden recibida se hallaba al frente del corregimiento político un hombre de gran talla intelectual, nombrado durante el último gobierno de los puritanos, que se dedicó a un concienzudo análisis de la situación provincial y de los supuestos históricos en los que se hacía descansar la legitimidad del «sistema foral», sin admitir los lugares comunes tan usuales en los argumentos de los notables provinciales⁹⁴. Véase, como muestra de la conciencia que del entramado provincial y sus fundamentos adquirió este corregidor político, su opinión sobre aspecto tan central en todo ello como la costumbre:

«En esta parte tropezamos con el mismo gravísimo inconveniente que en todos los demás asuntos forales cuando tratamos de descubrir su origen: oscuridad, ningún documento, falta de pruebas, aun de aquellas que suministra como probables la analogía; esta es la razón porque todos los fueristas se han parapetado siempre en *la costumbre* creada por ellos ad hoc en muchos casos»⁹⁵.

El enfrentamiento entre el nuevo corregidor político y la provincia no se hizo esperar, siendo latente desde la llegada de aquél. El decreto de nombramiento de Navascués fue presentado por éste, tal como ordenaba la legislación vigente, al vicepresidente del Consejo Provincial para su comunicación a la diputación. Sin embargo, al no reconocer ésta la autoridad del Consejo —ni, consecuentemente, la de su vicepresidente— ignoró el nombramiento de Navascués, incluso cuando se sentó por primera vez en la presidencia de la diputación, señalándole Novia de Salcedo —entonces diputado general— que no sería reconocido por la autoridad foral en tanto no le fuera presentado a ésta por el propio Navascués el decreto de su nombramiento. Ante la misma postura de los restantes miem-

94. Lo que él mismo resumía con estas palabras con las que concluía su obra sobre los fueros: «luz para pelear y vencer del mismo modo que el héroe de Homero es lo que tan sólo requiere la añeja y no difícil cuestión de los fueros de Vizcaya», *Observaciones*, cit., p. 211.

95. *Ibid*, p. 113 (subrayado original).

bros de la diputación, decidió Navascués la disolución de ésta. No obstante, y es esto lo remarcable del caso, pocos días después, y tras las oportunas gestiones de Francisco de Hormaeche, secretario de la diputación, en Madrid, se recibió una Real Orden por la que se mandaba a Navascués alzar la suspensión de la diputación, reconociéndole entonces ésta «con el carácter de Corregidor, sin perjuicio de los fueros, derechos, usos y costumbres del país». Como el propio Navascués observaba «todo comentario desvirtuaría el efecto de esta resolución, el lector deducirá las consecuencias que de ello se desprenden» ⁹⁶. Por nuestra parte, únicamente añadiremos que medidas de este tipo preparaban el camino de la solución final que se dio al conflicto de los Consejos Provinciales.

En su voluntad de dar cumplida ejecución a los mandatos del gobierno sobreponiéndose a lo que consideraba ilegales pretensiones de la diputación, encontró Navascués importantes resistencias. Así, para ejecutar el pago de lo adeudado por el mantenimiento de los Consejos tuvo el corregidor político que acudir a la justicia ordinaria, encarcelar al tesorero de la provincia y, finalmente, cerrajar el arca provincial y tomar el dinero, acto que se hubo de repetir en las otras dos provincias. No por ello, sin embargo, se reconoció la autoridad de los Consejos por la diputación y aún en 1848 escribía ésta a Navascués, recordándole las obligaciones que le imponían a ella el origen de su autoridad:

«Si V.S. como corregidor político y delegado del poder real tiene obligaciones que cumplir, también la diputación, como representante del país y custodio fiel de sus más caros intereses, de sus fueros, costumbres y buenos usos, está ligada por compromisos sagrados a que nunca faltará.»

A partir de este punto, como veía la diputación alavesa, las acciones y representaciones de las diputaciones no tenían ya valor y la resolución favorable del asunto tenía que fiarse al informal recurso de los comisionados en la Corte. Realmente, puede asegurarse que la disposición que finalmente tomó el gobierno de Narváez, se debió a la influencia que en ese medio sabían procurarse los comisionados; no en vano las provincias colocaron a sus mejores hombres en Madrid: Egaña, Altuna, Hormaeche y Novia de Salcedo.

⁹⁶. El incidente se halla reproducido en la introducción de su obra.

Ya hemos hecho referencia antes a la importancia que, en un medio en el que se resolvía por decreto, tenía la figura del comisionado, sobre todo en comparación con la del diputado a Cortes (siendo en este sentido de señalar que diputados como Lasala o Sánchez Toca apenas eran llamados por el ministerio), todo lo cual lo vamos a poder constatar ahora en la actividad desplegada por los comisionados citados y especialmente por Egaña el mejor situado en la Corte sin duda para impedir el cumplimiento exacto de la ley del 2 de abril de 1845.

El primer éxito de los mismos fue, precisamente, el traslado del propio Navascués a Toledo, hecho que se producía en mayo de 1848, tras trabajar los comisionados para «hacer salir de ese país a un hombre que parece se deleita en ser su azote». Fue éste un acontecimiento que además de fortalecer sumamente a la diputación, generó una clara conciencia de la debilidad en que se hallaba en las provincias vascongadas el representante del poder real. Tanto fue así que, aun ocho años después, Patricio de Azcárate constataba perfectamente esta situación del jefe político en las provincias vascongadas:

«Viéndose privado de los medios ordinarios para verse obedecido, recurre a medios artificiales, porque no tiene otros, y desde aquel acto incurre en el ridículo, y este ridículo presta materia a las poderosas influencias del país para desacreditarle ante el gobierno, y entre un país entero y un hombre el gobierno irremisiblemente lo sacrifica. Así habrá sucedido y así sucederá, mientras los gobernadores de las provincias vascongadas no respiren en otra atmósfera»⁹⁷

Es a través de la correspondencia reservada de los comisionados y diputados generales como se puede llegar a un conocimiento preciso de la solución a un conflicto que parecía irresoluble por cuanto desde el primer descerrajamiento de las arcas provinciales, este

97 P. de AZCÁRATE, *Exposición a S.M. sobre el arreglo de los fueros de las provincias vascongadas*, León, 1856, p. 21. También F. ALVAREZ DURÁN, *Examen histórico-analítico de los fueros de Vizcaya*, Madrid, 1849, p. 10, constataba, con referencia concreta a Navascués («hombre digno y recomendable por su firmeza»), el hecho de que «el jefe político, privado de este apoyo —el de la diputación provincial—, tiene que competir con el diputado foral cuando entorpece sus determinaciones»

método parecía instituirse como el habitual sistema de cobro dada la obstinación de las diputaciones. La idea de los comisionados para solucionar el conflicto era conseguir del gobierno el nombramiento de los diputados generales y de los consultores de las diputaciones como miembros de los respectivos Consejos Provinciales. Conocedores los comisionados de sus posibilidades, acudieron directamente con la propuesta a la Reina de quien, como sabemos, Egaña tenía ganado el favor, consiguiendo inmediatamente, a pesar de la insistencia en contra del ministro de la gobernación, que fuera remitida la propuesta al Consejo Real. Era éste un paso estratégico dentro de los planes de los comisionados, ya que, como es sabido, los dictámenes del Consejo Real se convertían posteriormente en Reales Decretos y de esta forma, al menos de momento, el que ahora emitiera serviría para zanjar la cuestión. Ganarse a los consejeros era por lo tanto la misión principal que tenían desde entonces que cumplir los comisionados en Corte. Pedro de Egaña pareció hallar el medio eficaz en el duque de Rianzares —al que se refiere siempre Egaña como «nuestro protector»— quien a su vez movía otros importantes hilos en la Corte y en especial en el Consejo Real.

La estrategia desarrollada en la Corte empezó a fructificar en abril de 1848. Es entonces cuando empiezan a aparecer signos de un arreglo al gusto de los comisionados. Juan Felipe Martínez (que fuera ministro de gobernación como subsecretario habilitado el año anterior) comunicaba a Rianzares en esa fecha que «el asunto de las provincias vascongadas que tanto me recomendó se ha resuelto como V. quería, *aunque la justicia quería otra cosa*». Pero también otros miembros del Consejo Real de la talla política de Pedro Sainz de Andino, Martínez Almagro o Donoso se vieron alcanzados por las influencias desplegadas y esto a pesar de ser considerados, en principio, por las provincias como «nuestros mayores enemigos». Todos ellos fueron paulatinamente comunicando a Rianzares que «estaba servido en nuestro asunto». De este juego de influencias no hay que descartar tampoco la simple compra, probablemente dirigida a esa «nube de empleados» que poblaban las oficinas ministeriales, conscientes de que «les sería más favorable —su misión— autorizándonos a librar contra esa tesorería la cantidad que hayamos menester para asegurar el feliz éxito de nuestras gestiones».

Era de este modo como se conducían los asuntos provinciales «en este mundo corrompido de la corte»⁹⁸.

El dictamen del Consejo Real (convertido en Real Decreto del 16 de junio), asumía la denominación de los diputados generales y de los consultores como consejeros de los respectivos Consejos Provinciales, «cesando las diputaciones de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa en la oposición que han manifestado». Dejaba claro, sin embargo, que este nombramiento lo hacía la Reina «en uso de sus prerrogativas reales» y no por «derecho propio» de las provincias, pudiendo renovarlo tantas veces como en el futuro «fuera de su real agrado». A pesar de la alegría con que en las provincias se esperaba, lógicamente, el Real Decreto, que, ya se sabía por los comisionados, iba a ser favorable⁹⁹, existía un punto en el mismo que podía ensombrecer aquel final feliz para las diputaciones, advertido por el mismo Egaña al diputado general de Alava, al hacerle ver que

«si bien se suprimen los Consejos Provinciales y se encomiendan estos cargos a los diputados forales y sus consultores, se hace en tales términos, con tales cortapisas y *ligándolos de tal manera en la cuestión de derecho* que no sé por mi parte si debemos felicitarnos de la concesión o mirarlo como una desgracia »

«La cuestión de derecho» era lógicamente la reserva que se hacía en el Real Decreto de que el nombramiento partía tan sólo de la voluntad real, lo que hacía depender de ésta el funcionamiento de la solución inventada por los comisionados. Sin embargo, la perseverante labor en Madrid, la toma de posesión de los diputados como consejeros, pero, sobre todo, la consecución de la tranquilidad en las provincias (en un año especialmente movido en Europa) al formar las diputaciones «unas partidas de naturales de con-

98. El funcionamiento de la corrupción como sistema se puede seguir en E. P. THOMPSON, *op. cit.*, y W. D. RUBINSTEIN, «The end of "Old Corruption" in Britain, 1780-1860», *Past and Present*, n.º 101, 1983, pp 55-86. Cfr. también, referido al período de la Restauración, J VARELA ORTEGA, *Los amigos políticos*, Madrid, 1977.

99. El diputado alavés proponía a las otras dos provincias la organización con este motivo, además de cohetes de iluminación, de festejos diversos con el fin de «demostrar al gobierno el entusiasmo con que los habitantes miran aún todo lo que tiene relación con sus fueros»

fianza» que impidieron la formación de «todo núcleo de facciosos» y el ofrecimiento y entrega de un donativo de un millón de reales que adquiriría mayor valor «en las circunstancias especiales en que se verifica», consiguieron que, mediante la Real Orden del 22 de agosto del mismo año se diera a los Consejos Provinciales el retoque que ellos deseaban. En efecto, en ésta se recordaba ya que en el Real Decreto de 16 de junio se declaraba la intención del gobierno de que los diputados y consultores fueran siempre consejeros «y esta intención es cada día más firme y decidida», además se indicaba expresamente que por parte del gobierno «se fía todo a la proverbial honradez —de las diputaciones», por lo cual,

«se ha servido nombrar vicepresidente del citado Consejo al Diputado general de turno, y del mismo modo seguirá prefiriendo para dicho cargo a este funcionario, como no se presentase motivo especial y grave... También ha sido del ánimo de S.M. que sean consejeros supernumerarios los que desempeñen el cargo de diputado general y consultor por falta de los propietarios.»

Para agosto de 1848 y mediante las disposiciones citadas las provincias conseguían llenar plenamente sus pretensiones respecto a la ley del 2 de abril de 1845: el diputado general y los consultores serían miembros del citado tribunal, el diputado general, además, sería vicepresidente del mismo, lo que, en función del artículo tercero de la ley para el gobierno de las provincias, le convertía en el encargado de la jefatura provincial en ausencia del corregidor político; se aseguraba además una continuidad en esta política de nombramientos y cierta connaturalidad entre el cargo foral y el de miembro del Consejo al considerar supernumerarios a los que ejercieran estos cargos por falta de los titulares.

Estos cambios introducidos en la finalmente adaptada ley general para su aplicación en las provincias forales, tiene, en nuestra opinión, una gran importancia desde el momento en que, en vez de una supresión de la jurisdicción contenciosa administrativa con remisión a la justicia ordinaria de esos casos, lo que se ha verificado es un control de esta capacidad jurisdiccional autónoma de la administración por parte de los «poderes forales». Las provincias, mediante las soluciones arbitradas, conseguían algo mucho más ventajoso que la supresión de los Consejos Provinciales: su colo-

nización. Y ello era lógico puesto que para 1848 el reordenamiento constitucional y de poderes sufrido aconsejaba más que nunca cifrar el poder provincial en el control administrativo de las provincias; no habría tenido sentido realmente pedir la remisión de los asuntos contenciosos de la administración a la justicia ordinaria que desde principios de la década no controlaban ya los dirigentes provinciales, sino que lo más positivo para ellos era el control de los Consejos Provinciales desde las diputaciones.

Salida tan airosa para las diputaciones de un conflicto que dudaba ya tres años, tenía, entre otros efectos, el del reconocimiento de que los moderados confiaban en el «sistema foral» para la administración interior de las provincias; se renunciaba a ver expresado literalmente en las provincias el modelo ideado para el gobierno de la nación, pero sólo tras la tenaz oposición de unos poderes provinciales que se resistían a ser absorbidos por un modelo general, aunque éste fuera moderado. Por otra parte, el Consejo provincial podía ejercer una influencia sobre la vida local de las provincias que, tras la ofensiva moderada de Pidal en 1845 y de los puritanos en 1847, se había llegado casi a perder. Ahora, mediante la instalación de estos poderes provinciales en una institución constitucional podían recuperar el control de unos municipios reconvertidos en constitucionales —y esto sólo momentáneamente ya que en 1853, siendo Pedro de Egaña ministro de la gobernación, se volvió a establecer el «ayuntamiento foral». Con ello ese que constituyó el auténtico tándem de poder provincial que basculaba entre el municipio y la diputación, volvía, con otra fachada (y quizá más sólida) a reconstruirse: elecciones municipales, arbitrios comunales, cuentas, aguas, etc., serían ahora aspectos vitales del medio local en los que los dirigentes provinciales tradicionales volverían a tener un papel determinante.

Pienso que es ésta en efecto la conclusión más importante a la que se llegaba tras las disposiciones de julio y agosto de 1848: el «provincialismo exacerbado», como lo denominaba Navascués, había triunfado sobre el modelo moderado de control desde el centro, y, al hacerlo, inauguraba ya una nueva etapa en cuanto a las relaciones entre el gobierno y las provincias forales, basadas en el reconocimiento de la existencia de una «administración peculiar» (foral) en las provincias a las que incluso se les ofrece la participa-

ción en la jurisdicción contencioso administrativa. Tengamos presente que desde 1848 hasta 1868 —incluyendo un bienio cuyo comportamiento para con las provincias vascongadas fue bien poco progresista— no acusa el «edificio foral» el más mínimo temblor y que en él el estado de interinidad en el que todo lo foral se desarrollaba va a seguir siendo el habitual en la normalidad provincial, no realizándose por supuesto la definitiva ley de fueros que se ordenó en 1839, sobre todo y fundamentalmente, porque el equilibrio entre las provincias y el gobierno se había hallado por otros caminos que no pasaban, ni de lejos, por el parlamento.

JOSÉ M.^a DEL PORTILLO VALDÉS

LIBRO DO CONSULADO DA MAR (*)

SUMARIO: I. PRANTEXAMENTO. 1. Introducción. 2. Hai un Libro do Consulado da mar o hai Libros dos distintos consulados da mar. 3. O problema da creación do dereito. 4. Os manuscritos empregados po-lo García: criterios de selección. 5. ¿Qué é unha recopilación?—II. A TRADICION MANUSCRITA E EDITORIAL DO LCM. 1. A teoría do Capmany. 2. A teoría do Pardessus. 3. LCM e «Costumes da mar». 4. A tradición editorial do LCM. 5. A tradición manuscrita do LCM. 6. Concrusiós provisionales: unha primeira aprousimación o problema. 7. Algús datos sobor da formación dalgús manuscritos. 8. A formación dos diferentes Libros dos Consulados da mar. 9. Concrusiós.—III. ¿ESISTEU UNHA COMPILACION DE DEREITO MARITIMO MERCANTIL CHAMADA LCM QUE XIROU PO-LO MEDITERRANEO DENDE O SECULO XIII? 1. Precisiós terminolóxicas: o LCM coma unha recopilación. 2. O prantexamento do García.—IV. O NACEMENTO DUNHA COMPILACION. 1. Os criterios direutivos na formación das diferentes compilaciós do LCM. 2. O Problema do ms. V. 3. A chamada redución gamma. 4. A chamada redución beta. 5. Concrusiós.—V. A FORMACION DAS COSTUMES DA MAR. 1. O ms. V e os diferentes fatos de capítulos que compoñe-no. 2. O ms. V e os outros manuscritos. 3. Os coadros do García. 4. A identificación dos diferentes fatos de capítulos. 5. O fato das «Costumes da mar primeiras». 6. O fato das «Costumes da mar segundas». 7. O fato dos «Usos da mar primeiros e segundos». 8. Concrusiós: a) O criterio do García de identificaciós das cláusulas estilísticas. b) O criterio do García de identificación das cláusulas estilísticas dos capítulos. c) As cláusulas estilísticas identificadas po-lo García. d) O problema das cláusulas estilísticas fora do seu fato. e) Divisiós dos capítulos e epígrafes mal postos. f) O problema das interpretaciós e as «Costums de Tortosa» e as «Costumes da mar».—VI. UNHA HIPOTESIS DE TRABALLO SOBOR DA FORMACION DAS COSTUMES DA MAR.

I. PRANTEXAMENTO

1. *Introdución*

O remata-la miña recensión dos dous primeiros volumes da alambizada edición do «Llibre del Consolat de Mar», xermolada no Departamento de Historia do Dereito de Barcelona po-lo desacougo

(*) Un resumen deste traballo espúxose nesa carallada a que chámase hoxe, fachendosamente, concurso oposición; neste caso no concurso oposición pra

do Dr. Font Rius, espresaba os meus devezos de que se non fixera espera-lo derradeiro, que remataría o traballo¹. As miñas espranzas víronse cedo acuguladas, aínda que o volumen esperado, convirtéuse en dous, do que o primeiro, con dúas partes, é o que hoxe da base a estas refreusións, mentras que aínda teremos que esperar po-lo derradeiro volumen do traballo, que será o coarto.

Neste terceiro volumen atópanse o traballo histórico-xurídico do García —é a primeira parte— e un diplomatario, obra do mesmo autor, onde arrecadanse os privilexios —unha selección de privilexios— dos consulados de Barcelona, Valencia, Mallorca e Perpignan². O traballo do García é, ó parecer, a súa tesis doutoral, índa que a meirande parte do mesmo seña xa conocido. Pro non quero eu eiquí poñerme a examinar que afirmacións novas aporta o García ou que correccións fixo a afirmacións antigas, pois quero refreusio- nar sobor da visión de conxunto, que por vez primeira ofrece encol do orixe, formación e cristalización da compilación de dereito marítimo mercantil, que hoxe coñecemos co alcume de «Llibre de Consolat de Mar», dora en diante LCM.

Agora ben, xa que a crítica tense case coma un aldraxe persoal e o non estaren de acordo cos falacios doutros historiadores coma un axe dos mesmos, quixera que quedara ben craro, dende o prin-

cátedra de Historia do Dereito da Universidad de Barcelona. O orixen deste traballo esprica que poidanse atopar nel os refugallos de dúas redaccións, xa que aproveitando o viaxe a Barcelona puiden examina-la reprodución fotomecánica da edición do 1484 e ademáis cheguéi a coñecer-la edición do Ferrando. Os datos do manuscrito valenciano —asi coma fotocopia da bibliografía publicada na RJC— débolla ó Josep M.^a Gai, que mirou por min, tantas veces como fixo falla a reprodución fotomecánica do ms Valenciano.

1. Vid. miña recensión en AHDE 52 (1982) 792.

2. *Llibre del consolat de Mar*. Volum I-II. *Edició del text de la Real de Mallorca amb les variants de tots els manuscrits coneguts*, a cura de Germà Colon amb la collaboració de la Secció Catalana de la Universitat de Basilea (Barcelona 1981-1982). III. 1. *Estudi Juridic*. 2. *Diplomatari*. Arcadi GARCÍA (Barcelona 1984). Dende agora as citas o texto da edició fareinas coa indicación *m* ou *mp* e o número do capítulo; naqueles capítulos non bisados po-lo Colon, pro onde atópanse dous epígrafes, un deles no medio do capítulo, distinguiréi as dúas partes coas letras a-b. Citaréi os volúmenes do García po-lo nome do autor, coa páxina, na primeira parte, e co número do documento, a data e a páxina, na segunda parte. Unha primeira valoración deste traballo do García fíxe-na na miña recensión do derradeiro AHDE 55 (1985).

cipio, que se voume deter de vagar no traballo do García é porque teño pra min que meréceo. Un, que por profesión, ten que perde-lo tempo na leutura de moitos traballos, que non merecen ni-no papel que gastóuse na súa impresión, sinte unha satisfacción profunda, cando pode ocuparse de traballos, que dunha parte enseñanlle moitas cousas e doutra pidenlle un esforzo inteleutual grande. Agora ben, eu quixera que quedaran tamén ben craras as cousas dende o principio: unha cousa é afermar que atopámonos diante dunha obra importante e outra moi distinta afermar que estamos diante dunha obra definitiva. Teño pra min que esta aclaración serve, aínda máis, a sulíña-lo mérito do García, pois xa se sabe que as cousas perfeutas non son deste mundo.

Non quero abaixa-la importancia da obra do García facendo un resumen da mesma; ademái-lo propio autor fixo-o xa e moito millor do que puidera face-lo eu. Abonda sulíñar que estamos diante da contribución máis importante dos derradeiros anos, aínda que, a meu ver, os seus resultados non señan aceptables. Non vou determe sobor de toda a obra do García, poi-lo autor ocúpase, e recollo eiquí os epígrafes dos capítulos da obra, da metodoloxía —«Introducción metodològica»—, da tradición xurídica marítimo mercantil —«La tradició jurídica del Llibre del Consolat de Mar»—, dos tribunales autónomos: os consulados —«La nostra compilació com "ius fori" dels consolats de mar catalans»—, da evolución do LCM —«Els textos constants i les formes de la nostra compilació»—, dos fatos antigos do LCM —«Els nuclis antics de la nostra compilació»—, do dereito mercantil marítimo que atópase neses fatos antigos —«El dret comercial marítim en els nuclis antics del LCM»—, pechando o seu traballo cun capítulo sexto, onde o García recolle as suas concrusiós. Pra poder segui-lo autor ó longo de todos estos apartados sería necesario te-los seus coñecementos e ben sabe Deus que a miña iñorancia desta materia deica pouco é tan profunda coma a mesma mar. Agora ben, o que a min interesa é a formación desa compilación que hoxe chamamos LCM e estou perfectamente dacordo co García que se non pode adiantar nese camiño, se non sentanse ben as bases, isto é, se non aclarase, con base na tradición manuscrita, o orixe, formación e cristalización do que hoxe lumbramos co alcume de Libro do consulado da mar. O García critica, e pode que con razón, o Valls, por non aterva-la tradición manus-

crita e senta coma base de seu traballo o respecto a esa tradición. Pois ben, e encol deste xeito de traballar no que me deteréi, pois coido que todo-los finos análises que o García leva a cabo, poden levar a resultados convincentes e inda diríamos verdadeiros, pro independentes da tradición manuscrita. Neste sentido, coma veremos, teño pra min que o García critica teóricamente o Valls, pro despóis fai, en certo sentido, o mesmo que fixo o Valls e pode sere que seña a úneca maneira de traballar, se queremos coñece-lo dereito marítimo mercantil. Pode sere, pro o que eu quero sulñar é que, en todo caso, unha tal direución vai contra os principios metodolóxicos aceptados; por eso mesmo, eu refreusionaréi sobor destes principios, pois somente cando cheguemos a resultados firmes sobor da tradición manuscrita do LCM e cando poderá comen-zarse a costruir de maneira duradeira.

Eu non penso, ó facer estas refreusiós, ter razón, pro tamen coido que as cousas son coma son e que a practica de cotío deste país de se non daren por enterados das críticas é a millor maneira de aganzar, ó parecer, fama de sabio, pro tamén a millor maneira de continuar a di-las mesmas cousas que xa fai moitos anos dixe-ronse. Quero dir con esto, que non é o meu degaro ter razón frente o García; o que devezó é que se teña en conta que ningunha afir-mación é válida, se non pode comprobarse e xa se sabe que os cotexos levan moito tempo e é millor dar como boa a derradeira afirmación feita con moito aparato testual, canto máis anovadosa, millor, inda que seña un despropósito lóxico. Non é esto o caso do García, xa que toda-las suas afirmaciós so-no froito dunha pro-fonda refreusión, pro esto non quere dir que algunha delas se non poidan ver baixo outra luz e esto é o que quero facer nestas refreusiós: chama-la atención sobor de feitos que o García non tomou, dende o meu punto de vista é natural, na sua xusta importancia.

2. *¿Hai un Libro do Consulado da Mar o hai Libros dos distintos Consulados da mar?*

Partiréi do remate da miña recensión. ¿Hai un libro do consu-lado da mar o hai diversos libros dos diferentes consulados da mar? A resposta ten unha sua importancia, xa que determinará a tarefa a levar a cabo. Se hai un libro de consulado da mar, pódese

chegar a identifica-lo, descartando os elementos propios e específicos dos libros dos diferentes consulados. Se non hai un tal libro, senon que cada consulado te-no seu propio libro de privilexios, aínda que o feito de pertencer a unha mesma coroa os consulados de Barcelona, Valencia, Mallorca e Perpiñán, ter us intereses comús, que os levan a trocarse as practicas, e, de cabo, o feito de estar coutados a unha mesma política rexia xustifican que haxa unha tradición xurídica común a todos eles, non sería entón posibele levar adiante a edición crítica dun libro de consulado da mar, que, como tal, foi sempre unha obra artificial dun editor dos derradeiros do século xv, e tería que levarse a cabo a edición crítica dos distintos libros dos diferentes consulados.

É certo que o que hoxe conocemos baixo o alcuño de «Llibre de Consolat de Mar» é unha compilación, no sentido de se-lo resultado de arrecadar nun mesmo libro unha poulareda de textos independentes. ¿Qué textos son estos? O García aferma que o esamen dos manuscritos medievales leva a descubrir neles unhas obras constantes, que atópanse en todo-los manuscritos, a caron doutras que pódense atopar ou non. «Evidentment, els textos que componen la compilació, diguem general, del *Llibre del Consolat*, són només els textos constants. I és per això que en la resta de l'estudi ens ocuparem només d'aquests»³. Eu non vexo a evidencia, mái-lo García coida que existe e por eso describe o contido desta parte constante dos manuscritos seguindo o orden que da-nos mesmos: «1. Ordre judiciari de la cort dels cònsols de mar de València. 2. Capítols sobre les esportades d'Alexandria. 3. Costumes i usatges de la mar. 4. Costumes de les naus armades i del cors. 5. Capítols del rei En Pere»⁴.

Destos textos us teñen un craro orixe rexio —os «capítulos do rei Pedro»— e outros consular —o «orden xudiciario de Valencia»— entrementes que o gromo da compilación atópase nas duas obras que recollen un dereito marítimo, que non semella ser escrusivamente catalán, pois e mediterráneo, e que non semella agromar dunha aitividade oficial —aínda que haxa dudas sobor das «ordeanzas do corso»—, senon dunha aitividá privada; é a mesma practica

3. GARCÍA 60

4. GARCÍA 60.

do tráfico marítimo do Mediterráneo a que fixo nacer e medrar unhas normas xurídicas, un dereito consuetudinario, que recolléuse un día en dous —ou tres— textos diferentes: no que hoxe conocemos baixo a nomeada de «Costumes da mar», onde atópase o dereito comercial marítimo, e no que conocemos baixo o alcume de «Ordeanzas do curso» —se non queremos distinguir neste texto os ¿seus dous componentes orixenarios?—, onde atópase tamen un dereito marítimo, pro militar. O LCM é así unha compilación onde áchase un dereito común ó Mediterráneo, dende o seu orixe, e un dereito propio dos consulados da coroa de Aragón. Isto véuno moi ben o autor do manuscrito de Valencia (ms. V), cando afermou que os cónsules de Valencia conocen «generalment, de totes altres coses o contractes los quals han acostumat e acostumen fer e conèxer los cònsols de Barchinona e de totes coses contengudes en les Costumes de la Mar e segons que en aquelles és declarat, les quals costumes e capitols se serven per tots los consolats del món»⁵.

3. *O problema da creación do dereito*

Esto lévanos ó problema da creación do dereito. Aínda que modernamente, a meu ver, téndese a tirar por ela sobor das reduciós diferentes dos diferentes textos xurídicos que hastra nosoutros chegaron do medioevo, non pode desconocerse que hai algo de verdá en tales afermacións, pro teño pra min que convén facer algunhas matizacións. Como dinos o prologuista da obra do García, «la nostra compilació participa del fet comú a bona part dels textos jurídics

5. *Orden xudiciario de Valencia V 46* —ed. FERRANDO 25—. *Llibre del Consolat de Mar (Arxiu Municipal de València) Any 1407*. Introducció, transcripció i traducció castellana per Antonio FERRANDO FRANCÉS (Paterna, Valencia, 1979). Téñase en conta que, ó parecer, hai dúas edicións: unha que ten dou volúmenes, un cunha reprodución fotomecánica do manuscrito, e a outra, que é a que emprego eu, que ten un solo volume, onde atópase a edición e a tradución do manuscrito; no futuro citaréi este manuscrito coma V e o número do capítulo cando cite as «Costumes da mar», onde atópanse as «Ordeanzas do curso» e faréi outro tanto coas outras seccións, pro facendo mención das mesmas, o ter numeración propia os textos da cada sección.

medievais —com, per exemple els Usatges de Barcelona, els Furs de València, els d'Aragó, i àdhuc les mateixes Partidas, segons recent opinió— d'acord amb el qual la forma en què ens ha arribat el seu text suposa la cristallització final d'un procés més o menys accidentat de formació, desenrotllament, agregacions de nuclis diversos, etc., des d'un suposat redactat originaria»⁶. Deixo de parte as «Partidas», por razóns craras. Agora ben, non paréceme que poidanse meter no mesmo saco os «Furs de Valencia», por exemplo, e os «Usatges de Barcelona». Os primeiros é un texto legal, promulgado oficialmente nun intre concreto, que sometéuse a unha revisión oficial no 1261 e que volveuse a revisar oficialmente no 1271. Pódese discutir de moitas cousas, pro o que é certo é que, se realmente promulgaronse oficialmente no 1240 e oficialmente correxíronse no 1261 e no 1271, fixéronse entón us testos ó ser promulgados oficialmente e ese texto quedou fixado e cristalizado no 1271, pois dende ese ano, a nova lexislación púxose cabo dos «Furs». Se non pode deci-lo mesmo dos «Usatges», que non abrocharon coma unha obra lexislativa. Pro tampouco so-nos «Usatges» unha obra de creación leteraria; quero dir que os «Usatges» escritos recollen un dereito da prautica, que nun intre determinado consideróuse necesario recoller por escrito. As razóns poden ser moitas, pro matino que non serían, neste caso, moi diferentes das dadas polo Botet, pra face-la redución das «Costums de Lleida».

«ut auferretur quibusdam occasio malignandi qui quando erat pro eis consuetudo et esse consuetudinem affirmabant. Si contra eos in consimili casu allegabatur non esse consuetudinem asserebant. Unde processus causarum probacio consuetudinis retardabat et litigantes inde dispendia graua senciebant».

Se as razóns foro-nas mesmas, non foro-nas mesmas circunstancias as que rodearon a redución dos «Usatges»: non semella que tra-los «Usatges» escritos estivera aitividá oficial algunha. Sendo así —e inda que as cousas non foran así, o exemplo sería válido pra as «costumes da mar»— o trunfo dos «Usatges» escritos dependería da perfeución aganzada polo anónimo redautor. Precisamente por eso, é posibele que non ouvera endexamáis nos primeiros intres

6. FONT RIUS, en GARCÍA 14

ate o reconecimento oficial na época do Alfonso I unha úneca e orixinaria redacción destas coleccións de dereito consuetudinario, senon que as mesmas abrocharan independentemente e que na loita entre as diversas redaccións unha rematara por impoñerse, arredando as outras, aínda que nalgús casos fixerao achegando elementos das redaccións competidoras, que esmoreceronse na longa noite dos séculos. E non debe esquencerse que as «Costumes da mar» recollen un dereito común ós comradeles do Mediterráneo!

Estas redaccións escritas recollen un dereito da práctica, polo que medran coa mesma práctica, anovándose arreo dacordo coas novas necesidades. Voltemos de novo ó Botet, pois cando establece o orden de prelación de fontes en Lérida, di que os leridás prefiren «consuetudines nostras scriptas et non scriptas»; a carón da redacción escrita do dereito consuetudinario, a vida práctica fai agromar amodiño un novo dereito, que máis tarde o máis cedo rematará dentro da antiga redacción. Ademais o dereito consuetudinario ó chegar a Receución, vai sofri-lo aburo do dereito legal. A recolleita do dereito consuetudinario é unha aitividá anónima e non creativa —o autor das modificacións non quere facer unha obra propia orixinal, senon recoller fielmente un dereito preesistente— dirixida a fixa-lo dereito, pra que se non perda a súa lembranza co paso dos anos. Esta aitividá non é unha aitividá centralizada, pro é unha aitividá que modifica necesariamente o contido do dereito recollido nestas redaccións consuetudinarias. Atopámos así no medioevo algunhas coleccións que semellan vivas, pois nelas pódese descubrir un corpo unitario de normas, fixadas nun intre histórico concreto por escrito, pro a caron seu vanse achegando novas normas, fillas da aitividá práctica. ¿Pódese levar a cabo unha edición crítica destas obras da mesma maneira que lévase a cabo a dunha obra lexislativa? Teño pra min que ó masimo pódese levar a cabo edicións dos manuscritos, que recollen versións diferentes, abrochadas en intres distintos. É certo que chega un intre no que a práctica de cotío semella esgotada, xa que a anovación do dereito —o novo dereito— agurgulla agora doutra fonte —a lexislativa—; nese intre é cando derrega unha redacción que podería chamarse definitiva. Os manuscritos do LCM semellan ter unha redacción definitiva das «Costumes da mar» e das «Ordeanzas do corso», pro esta redacción definitiva é o resultado, coma di o propio anónimo redactor, dunha

escolca feita po-los antergos por todo o Mediterráneo, arrecadando as diversas practicas xurídico mercantiles. Sabemos así que xa no remate do século XIII xiraba po-lo Mediterráneo unha redacción escrita das «Costumes da mar», pro a mesma, como amosanas, «Costums de Tortosa» non é a mesma que atópase nos manuscritos do LCM.

É certo que ás veces esta tarefa de fixación pódese trabucar coa laboura de creación, non somente porque o anónimo redactor pode facer algo máis que fixar, xa que non pode prescindir da súa personalidá, isto é, do intre histórico no que vive e da situación social na que móvese, senon po-lo feito que a fixación do dereito da practica pode facerse por medio dunha aitividá oficial. Cando nunha xurisdición autónoma tense que aprica-lo dereito na practica de cotío, tense que xuzgar dacordo cun dereito consuetudinario, hai unha tendencia a que seña-nos propios xueces os que resolvable-nos problemas gurgullados na vida de cotío, que non atopan solución no dereito consuetudinario xa existente. Quíxera lembrar neste intre un solo exemplo do que fala o García. O capítulo 45 do «orden xudiciario de Valencia», conservado no ms. V, non é outra cousa que a reprodución da parte dispositiva dunha sentenza do 1350⁷.

De cabo lembraréi que coa Receución o dereito consuetudinario veuse aburado po-lo dereito rexio, pro esta dialeutica entre o dereito lexislado e o dereito consuetudinario levou consigo tamén que éste vírase moitas veces conformado e compretado po-lo dereito lexislado. Así os mariñeiros e os feireantes viron tamén o seu dereito propio, xaramolado da mesma vida marítimo comercial, perfeucionado po-lo dereito lexislado, que rematou por poñerse ó cabo do dereito consuetudinario. Díno-lo moi craramente o autor do prólogo da compilación que atópase no ms. V:

«E per tal los savis antichs e aprovate hòmes en lo us, exercici e art de navegar, inspirats per Deu, . . han ordenat e en scrit posat e reduhit les ordenacions davall contengudes, les quals per justa e provable rahó apareen e intitularen "Costumes dels feyts de la mar", ab les quals fos donat compliment de justicia als navegants, . les quals costumes e bones ordinacions per lonch us e costum per consentiment dels usants aquelles son estades usades e per leys haüdes e reputades e en contradictori juhí observades e tengudes e les causes e qüestions difinides e

7. GARCÍA 159-161; 69 (23-I-1350) 139-142.

determenalldes moltes e innumerables vegades, e en après per lo molt alt senyor rey d'Aragó ab letres, privilegis e provisions ab sagells reals sagellades son estades roborades, auctorizadas e confermades, segon que per les dites letres e provisions pot apparer en lo present libre per treslats autèntichs de aquelles»⁸.

A eisistencia destas compilaciós, onde samente existía un vincallo esterno po-lo feito de atoparse xuntos nun mesmo manuscrito testos de orixe diferente, provocóu nalgún intre o degaro de darlle a todo aquel material un vincallo non samente esterno, senon tamén interno, de refundir todo aquel material, onde atopábanse ás voltas repeticións inútiles. Moi craramente no-lo di o Botet:

«De donationibus autem et concessionibus regis est uidendum, set quia varie sunt et diuerse et confuse in pluribus instrumentis, quid in eius utilitas comendat breuiter colligere utile fore puto, ne prolixitas leccionis pariter et urietas audienti pariant tedium et lectori.»

E, coma veremos, tamén o ms. V é testemuño deste xeito de traballar.

4. *Os manuscritos empregados po-lo García: criterios de seleucion*

Quixen determe a posta nestas refreusiós, xa que as mesmas so-no fundamento das miñas dudas sobor dos resultados do García. Non quero dir que non perfillo os resultados do García, porque se non atean a estas afirmaciós, non; o que eu quero sulñar é que ó partir destes presupostos pódense interpreta-los datos aportados po-lo García pra chegar a concludións algo diferentes. Agora ben, pra poder chegar a concludións seguras hai que coñece-los manuscritos e neste punto teño que chama-la atención denovamente sobor do feito que tampouco nesta ocasión dase nova algunha dos manuscritos empregados na edición e na construción da súa tesis po-lo García, pois a descrición dos manuscritos «formará part, en el volum IV, del capitol especialment dedicat als manuscrits i edicions

8. Arcadi GARCÍA SANZ, *La datación de la compilación Valenciana del «Llibre del Consolat de mar» en VIII. Congreso de Historia de la Corona de Aragón 1 a 8 de octubre de 1967. II. La Corona de Aragón en el siglo XIV. Volumen Primero (Valencia 1969) 257-271. GARCÍA 59; cd. FERRANDO, 4.*

del LCM»⁹. Non vou a insistir no xa dito; abonda aseñar que o mesmo García ten que reenvia-las novas dadas po-lo Quadrado ou a recente reprodución do manuscrito valenciano, feita po-lo Ferrando, pra quenes queiran coñece-la estrutura dos manuscritos mallorquín (D) e valenciano (V)¹⁰.

E isto é xebre, a meu ver, pra o éxito das demostracións do García, pois éste, dun lado di, sin aportar proba algunha, que do análise dos manuscritos impúxose coma manuscrito base da edición o ms. L¹¹, que, coma veremos, ten unhas características propias dentro da redacción chamada po-lo García redacción gamma, e doutra aferma, tamen sin ningunha proba, que pra analiza-la estrutura da compilación abundan os mss. L, V, F e D¹².

E estas solucións non deixan de ser aqueloutradas, poi-lo mesmo García, coma veremos, insiste unha e outra vez en que o ms. V é o único testemuño da redacción que chama beta, entramentres o ms. L sería un máis —o máis antigo— entre os testemuños da redacción gamma; e estas dúas redaccións —beta e gamma— teñen un mesmo orixe común, unha redacción alfa dous, que atópase refrexada fielmente na redacción beta e po-lo tanto no ms. V. ¿Por qué entón non escolléuse coma manuscrito base o ms. V?

Xa que o García non aporta proba algunha das súas afirmacións, non voume deter nas mesmas, mais quero chama-la atención sobor do feito que coa súa decisión o García fai perder moita da súa forza ás súas argumentacións.

Hai algo que está latente en todo o traballo do García e que eu quero suliñar, xa que coido que é unha afirmación moi importante, coa que podome atopar en parte dacordo, aínda que matino que a mesma prantexa serios reparos a construción do García. O García ven a dir que a medra do dereito marítimo catalán ten lugar dentro da xurisdición propia dos consulados e, neste sentido, o consulado de Valencia, aquel que máis cedo recibeu unha organización definida, unha xurisdición crara e un, coa denominación do García, *ius fori*, xoga un papel decisivo na formación do dereito marítimo

9. GARCÍA 43.

10. GARCÍA 171 n. 62 y 174 n. 63.

11. GARCÍA 37.

12. GARCÍA 158.

catalán. Agora ben, neste consulado pódese distingui-la sua propia organización administrativa, a regulación do procedemento autuado diante da sua xurisdición e, de cabo, o dereito apricado nesa xurisdición; estes tres aspectos esprican que o dereito do consulado non seña un dereito escrusivamente lexislado nin un dereito escrusivamente consuetudinario; a organización do consulado e os grandores da sua xurisdición teñen un craro orixe rexio; esto é, o dereito lexislado é o que determina a organización e a xurisdición do consulado; tamén ese dereito lexislado ten unha parte importante no procedemento seguido na xurisdición, aínda que neste caso xogue un papel —ou pode xogar— importante a propia aitividá dos cónsules; de remate, o dereito apricado po-los cónsules nos diferentes consulados é un dereito orixinariamente consuetudinario xermolado na prautica marítimo-mercanti e non solo catalana, senon tamén mediterránea, que foi perfeucionado e fixado po-la aitividá xurisprudencial dos consules e tamén quizaves po-la intervención lexislativa. Esto supón po-lo tanto que xa agromara un dereito marítimo mercantil inda denantes de agroma-los consulados catalás. Todos estos materiais que, pra simprificare, aínda que non seña moi crara a simprificación, podemos chamar dereito administrativo, dereito procesal e dereito mercantil ten un interés egoal pra o consulado coma tal e por iso mesmo ese dereito debe recollerse no libro do consulado respeutivo (asi pro exemplo no «Liber Privilegiorum Consulatus maris ville Perpiniani», con certas caraiterísticas propias).

No prólogo do ms. V atópanse recollidas, como xa vimos, as razóns que levaro-no a face-lo. Quero dir que non abonda afermar que chegaron ate nosoutros nove manuscritos do LCM, pois é moi importante saber se os manuscritos conservados son manuscritos dalgún consulado concreto, tal como semella se-lo o «Liber Privilegiorum Consulatus maris ville Perpiniani», que, curiosamente, teno «Orden xudiciario de Valencia», pro no-nas «Costumes da mar», ou son manuscritos que pertenceron a compradeles; po-lo momento quero solo lembrar que do século XIV conocemos a existencia de libros das «costumes da mar» propiedade de feireantes.

Ademáis pra face-la edición do LCM como fixoa o Colon, unha edición feita con criterios enxebramente filolóxicos, pódese empregar samente os manuscritos catalás, mais cando quérese discuti-lo

contido do LCM teño pra min que se non debería deixar fora nin unha tradución manuscrita italiana¹³ nin tampouco as primeiras edicións impresas do LCM.

Somente os manuscritos ou as edicións que poden considerarse compilacións oficiais dos diferentes consulados —oficiais ou oficiosas— poden dirnos, de maneira crara, que é o que esos consulados afigurábanse coma o seu libro propio, o libro do consulado da mar. Ademais é preciso saber como fixéronse esos libros e cando fixéronse, xa que somente así poidermos facernos unha idea do seu contido. Os consulados, tras xurdir, deron nacemento dun lado a un feixe de normas, que pertoca a súa propia vida —decisión dos cónsules, sentencias, etc.—, pro doutro lado foro-nos recipendiarios doutro feixe de normas, recibido dos reises que conformaba-na súa propia realidade. É certo que estas normas conserváronse no seu tenor orixinario, pro tamén é certo que pra facilita-lo seu manexo puideron transcribirse en cartularios, en «Llibres». Esto no-lo di o autor do prólogo do ms. V. Ademais outras veces estas normas —xurisdiccionales ou rexias— incorporáronse a algús dos textos que remataron no LCM.

¿Abríronse, por así deci-lo, estos libros dende o mesmo dia do nacementos dos consulados? ¿Fíxéronse estos libros unha vez que o consulado tiña xa unha poula de documentos? ¿Tiñan estos libros un contido fixo dende o principio ou seu contido véuse arrequeado co paso do tempo? ¿Medraron estos libros ó achegarselles novos folios? Ter unha idea destas cousas é importante, xa que somente así pódese discutir sobor da existencia ou non dun LCM tipo.

Estos libros manuscritos dos consulados —e as primeiras traducións e edicións— eran compilacións. Se un, como fai o García, prescinde de analiza-lo seu contido, pra fixarse somente en certos textos, perde a posibilidade de descubrir se dende o século XIII ou, ó máis tardar, dende a metade do século XIV, o que corre po-los consulados é unha compilación, onde atópanse un fato de textos, ou unha

13. PARDESSUS II 41 n. 3. Da clásica obra do PARDESSUS, *Collection des lois maritimes antérieures au XVIII^e siècle*, en seis volumes, emprego a reedición anastática de Torino 1960. Citaréi po-lo nome do autor e indicarei o volume. A obra orixinaria imprimeuse na primeira metade do século XIX. COLÓN I 11 n. 2.

poulareda de textos independentes, que á toa pódense atopar nun manuscrito. E isto lévanos ó lero da recopilación.

5. *¿Qué e unha recopilación*

Perguntarse hoxe po-lo que seña unha recopilación semella unha tarefa de balde. Calquer dicionario pode dirnos que unha compilación ou unha recopilación é unha recolleita de textos, co que suliñase a característica principal das compilacións. Temos, po-lo tanto, que nun intre síntese a necesidade, por razóns diversas, de recoller nun volume unitario, nun feixe, unha poulareda de textos que hastra aquel intre xiraban independentemente.

Cando falamos deste xeito dunha recopilación falamos po-lo tanto dunha compilación concreta, que xurde no mesmo intre no que recollense diferentes textos nunha obra unitaria. As recopilacións teñen tamen unha vida histórica e isto lévanos ó problema da identificación dunha recopilación. Cando falamos de recopilacións xurídicas, pódese afermar que as primeiras e máis antigas na chamada época das recopilacións son aquelas que arrecada-nos textos independentes por orden cronolóxico. Entón pódese identificar cunha certa facilidade estas recopilacións, aínda que na súa vida histórica véxase arrequeitado o seu contido. Aínda que poidase discutir que os «Fueros de Aragón» señan unha recopilación e é fora de dúbidas que os materiais que atopanse no mesmo non foron ordeados cronolóxicamente, pódenos servir coma exemplo. Na súa primeira redacción os «Fueros de Aragón» tiñan oito libros, pro chegaron a tere doce, cando perto dos primeiros oito libros arrecadou a lexislación posterior por orden cronolóxico. Podemos seguir falando dos «Fueros de Aragón», podemos seguir identificando-os, aínda que é craro que os mesmos, en canto recopilación, teñen unha forma diferente a través da súa historia. Mais pode un tamen dir que a compilación dos «Fueros de Aragón» é somente a orixinaria, aquela que tiña oito libros e consideralos outros libros como achegas posteriores, que fan xurdir novas recopilacións.

As posibilidades son moitas e os problemas de identificación dunha compilación poden medrar: nunha orixinaria compilación pódense facer desaparecer algú dos seus orixinaarios elementos e

arrequeenta-la con novos elementos ou pódese manter todo-los antigos elementos e arrequeenta-la con novos elementos, pro dandolle unha nova sistemática ou pódese manter somente unha parte dos antigos elementos aínda que arrequeentados con novos elementos e ordeados us e outros cunha nova sistemática.

E xa nos atopamos diante dun novo lerio. Hastra agora falamos de recolleitas de textos arredados, que manteñen a súa propia identidade ó ser incorporados a unha obra unitaria, inda que nalgús casos tiveran que someterse a certas manipulaciós, pra que a nova obra unitaria puidera ter unha sistemática material. Aínda pódese falar de recopilaciós cando nas mesmas recóllese un material preesistente, que sométese a una reelaboración e sistematización profunda, mais ¿pódense identificar entón estas recopilaciós nas suas ultteriores reduciós?

Un exemplo permeterá acrarar o que quero dir. Temos dun lado a compilación do Montalvo e doutro a «Nova Recopilación», promulgada po-lo Felipe II. As duas recollen leises preesistentes, pro refundéndoas e po-lo tanto modificándoas e someténdoas a unha sistemática propia da compilación. É craro o parentesco entre a obra do Montalvo e a «Nova Recopilación», pro ¿pódese dir que as ordeanzas de Montalvo é a primeira fase da «Nova Recopilación», xa que unha e outra é a mesma recopilación?

Tendo en conta estos problemas solo aseñados, quixera voltar ó LCM. Fálase do LCM coma dunha recopilación onde atopanse —descarto eiquí pra facilita-la esposición os elementos menores— o «orden xudiciario de Valencia», as «Costumes da mar», as «Ordeanzas do curso» e os «Capítulos do rei Pedro», pro é evidente que desta recopilación pódese falar somente ó partir da metade do século XIV, xa que os «Capítulos do rei Pedro» son do 1340 e o «Orden xudiciario de Valencia», tal coma conocemo-lo hoxe, ten que sere algo posterior, ou do 1336-1343 ou do 1343-1345.

Falar así da compilación do LCM leva consigo o ter que xibra-la súa historia en dous intres diferentes: denantes da primeira metade do século XIV e despóis da primeira metade do século XIV.

Denantes do 1340 se queremos falar de recopilación ou ben temos que falar dunha compilación onde atópanse as «costumes da mar» canda ás «Ordeanzas do curso» ou ben temos que afermar que as duas obras son compilaciós. É certo que non habería

problema algún pra afermar que as «Costumes da mar» señan unha recopilación, pro é evidente que tiña que sere entón unha daquelas recopilaciós, onde os seus materiais foron reelaborados. Teño pra min que se as «Costumes da mar» naceron pra recoller un dereito consuetudinario por escrito, sería máis doado falar da formación das «Costumes da mar». Pro nun caso ou noutro, é certo que tendo en conta as «Costums de Tortosa», tense que afermar que o testo que xiraba po-lo Mediterráneo nos derradeiros do século XIII non é o mesmo que atópase hoxe nos manuscritos do LCM.

E neste sentido hai un problema que quero apuntar eiquí. Ate hoxe falábase das «Costumes da mar» e das «Ordeanzas do curso» coma de duas obras independentes, que puideron arrecadarse pra formar unha compilación; esta independencia atopaba testemuño nos manuscritos, onde cada unha delas tiña o seu propio colofón. Agora ben, como veremos, o García di que o ms. V é cuspidiño a redacción beta do LCM, que, a sua volta, é cuspidiña a redacción alfa dous do 1332, pro no manuscrito V as «Costumes da mar» e as «Ordeanzas do curso» se non atopan coma testos arredados, xa que forma-na terceira —ou segunda, se descartamo-la táboa de epígrafes— seución do dito manuscrito, tendo unha numeración unitaria e atopándose as «Ordeanzas do curso» no medio das «Costumes da mar».

Se tivera razón o García, denantes do 1340 non poderíase falar do LCM coma dunha recopilación, onde recolléranse dous testos independentes: «Costumes da mar» e «Ordeanzas do curso»; poderíase falar dunha recopilación noutro sentido, xa que o LCM sería o resultado de recoller un dereito consuetudinario. E certo que sempre poderíase afermar que primeiro «Costumes da mar» e «Ordeanzas do curso» eran dous testos arredados, que arrecadaronse e mesturaronse na redacción beta e voltaron a recupera-la sua independencia na redacción gamma. Seña unha cousa ou a outra, o que é necesario é acrara-los criterios que permétenos identificar tan craramente esa recopilación que ó parecer vai e ven po-lo Mediterráneo baixo formas diferentes. Ademáis ¿esta recopilación das «Costumes da mar» e das «Ordeanzas do curso» é a mesma recopilación que hoxe nembramos LCM e que ten outra composición?

Despois da primeira metade do século XIV pódese xa falar de recopilación no sentido máis enxebre: atopámonos diante dunha

obra onde recóllense textos diferentes, que tiñan hasta aquel intre unha vida independente. Ademáis nestos intres, coma veremos, tanto as «Costumes da mar» como as «Ordeanzas do corso» semellan ter un texto fixo —hai diferencias no contido e na sistematica, pro no fondo todo-los manuscritos teñen unha mesma redacción— e vense arrequeitados por outros textos fixos por razóns diferentes: os «Capítulos do rei Pedro» e o «Orden xudiciario de Valencia», aínda tendo en conta as características do «Orden xudiciario de Valencia» que atópase no ms. V.

Agora ben, pódese identificar esa compilación, xa que é unha recolleita de textos, que poden identificarse sin problemas. Mais pra poder falar desta compilación, que xira po-lo Mediterráneo, coido que é necesario probar que os manuscritos recolle-na mesma e que esa recopilación en tanto recopilación —no-nos textos orixinalmente independentes que recolleronse na mesma— xirou po-lo Mediterráneo. Coma veremos, a meu ver, o García non probou ningunha das dúas cousas.

E esto lévanos a outro problema. Toda recopilación é unha recolleita de textos arredados, po-lo que tra-la mesma hai sempre unha voluntá concreta; alguén quere arrecadar nunha obra unitaria unha founareda de textos ate aquel intre independentes. Esta vontade pode responder a razóns diferentes. Simprificando, ás voltas unha compilación faise a mau tenta e outras veces e o resultado do caso. Tamén eiquí os exempros acraran millor o que eu quero dir. Ninguén pode poñer en duda que tra-las ordeanzas reales de Castilla atopase o esforzo inteleutual cosciente do Montalvo, que quixo arrecadar sistematizando todo o material lexislativo posterior ó ordeamento de Alcalá. ¿Pódese aferma-lo mesmo do ms. N de Paris? Neste manuscrito do LCM atópanse tamén as «Ordinacions den Sancta Cilia» e un pode pensar que o caso determinou a súa incorporación ó dito manuscrito; pode un pensar que o propietario do mesmo, pra non perde-los folios onde atopábanse as ditas «Ordeaciós», decidiu cose-los co orixinario manuscrito N, anque tamén pode un pensar que o manuscrito N fíxose a mau tenta: alguén decidiu axuntar todo-los seus manuscritos de dereito catalán, atopándose asi hoxe xuntos materiais de dereito mercantil e outros materiais.

Con estas refreusiós quero suliñar que denantes de facer certas

afermación, teríase que estudia-la formación dos manuscritos. E que a identificación dunha compilación se non pode facer sin máis porque atopemos certos textos regularmente en certos manuscritos. No baixo medioevo o dereito mercantil interesaba a moitas persoas, que percuraban recolle-los textos onde atopabase o mesmo, xa que a súa aitividade viña condicionada po-lo dereito mercantil común a todo o Mediterráneo, mais tamen po-lo dereito mercantil dunha potencia mercantil como era noutrora a coróa de Aragón. Pra poder falar da existencia dunha compilación non é dabondo, po-lo menos a min parecemo, achar manuscritos onde atópanse textos de dereito mercantil e afermar que aqueles que atópanse en todo-los manuscritos e nun determinado orden so-nos que forman esa compilación, másimo cando nin todo-los manuscritos teñen todos eses textos independentes nin cando os teñen, teñe-nos no mesmo orden.

Pois ben, teño pra min que o García, po-la dificultá evidente, manténse nunha perigrosa ambigoedá. Non é o mesmo dir que o que corre po-los consulados é unha compilación que dir que o que corre é unha poulareda de textos arredados, pois pra aferma-lo primeiro tense que amosa-lo vincallo entre os manuscritos e este se non pode estabrecer reducendo o problema a costatación que nos mesmos atópanse os textos previamente calificados de constantes.

O que é certo é que a mesma vida dos consulados deu axiña nacemento a us libros manuscritos, onde atópanse unha poulareda de textos, que recollía-no dereito do consulado. E estos libros manuscritos, despóis do invento da imprenta, deron nacemento as edicións impresas do LCM. E co nacemento destas edicións xurdiu tamen o lerio do LCM, pois coas edicións te-no seu orixe un libro tipo do LCM, e este feito refrexase aínda hoxe na edición do Colon. Por iso, denantes de ocuparme dos manuscritos e dos falacios do García, quero ocuparme do nacemento das edicións impresas do LCM, poi-las mesmas condicionaron e teño pra min que condicionan aínda hoxe a idea que facémonos desta obra.

II. A TRADICIÓN MANUSCRITA E EDITORIAL DO LCM

1. *A teoría do Capmany*

Mérito do Capmany, a quen débese a primeira importante aportación no estudo esterno do LCM¹⁴ foi decatarse de que o mesmo era unha compilación. Por iso a súa preocupación foi, e o Font considera este resultado definitivo, identifícalo gromo orixinario do mesmo, considerando elementos achegados todo-los demais¹⁵.

O Capmany, que non coñeceu manuscrito ningún do LCM e coñeceu das primeiras edicións a do 1502, aínda que no derradeiro intre chegou a coñecer a edición *princeps* do 1484, tiña po-lo tanto outras preocupacións das que hoxe temos. O que propoñíase levar a cabo o Capmany era unha tradución fiel do chamado vulgarmente Libro do Consulado da Mar —e eiquí o Capmany xoga co título que teña edición do mesmo—. Este libro «consta de un cuerpo de leyes náuticas que al principio del siglo XIII ordenaron los prohombres del mar de Barcelona, para terminar y decidir las cuestiones mercantiles»¹⁶. Pro non debe enganar estas denominacións, poi-lo Capmany aferma arreo o orixe consuetudinario do que hoxe lumbramos «Costumes da mar»¹⁷. Este dereito marítimo consuetudinario necesita un procedemento especial pra súa aplicación —«expedita, llana y sencilla»—, po-lo que creáronse os consulados da mar, xurisdición autónoma, «donde no presidían sino hombres prácticos que determinaban las diferencias verbalmente, la verdad sabida, y la buena fe guardada, y excluido todo escrito de abogado»¹⁸. O Capmany distingue así entre o dereito sostantivo, que existe ou pode existir denantes de que xurda-nas xurisdicións autónomas dos navegantes —os consulados— e o dereito procesal, que xurde coa aparición dos tribunales dos consulados.

Este dereito sostantivo existía de antigo no Mediterráneo e o

14. José María FONT RIUS, *Prólogo*, en Antonio de CAPMANY, *Libro del Consulado del Mar* (Barcelona 1965) IX. A obra do Capmany, que apareceu no 1791, citarei-na, po-la edición citada do 1965, po-lo nome do autor e a páxina.

15. FONT, *Prólogo* cit. X.

16. CAPMANY 9.

17. Vid. p. ex. CAPMANY 10 e passim

18. CAPMANY 13.

que fixero-nos barceloneses foi recolle-los usos e as practicas dos navegantes do Mediterráneo e os diferentes falacios e armoniza-los. Se non limitaron poi-los barceloneses a ordear-lo material recollido, pois tamen incorporaron novas solucións e correccións das antigas costumes¹⁹. O Capmany coida que a redacción desta costumes feitas po-los barceloneses «en la forma e integridad que conservan hoy en la compilación llamada Libro del Consulado»²⁰ é da metade do século XIII. «La Compilación del Libro del Consulado pudo ser anterior al año 1258, mas no posterior al de 1266»²¹. O Capmany caeu eiquí nunha ambigüedad adoita ó parecer no seu tempo e aínda nos tempos posteriores, quizaves po-lo feito de que as «Costumes da mar», ó recoller costumes, é no fondo unha compilación²²; esto é, falabase do «Libro do Consulado» seña pra nembra-la compilación publicada seña pra lumbrar-las «Costumes da mar», que nela atopábanse²³. Pra o Capmany esta confusión pode nacer do feito de acharse as «Costumes da mar» no LCM e abrirse este ó principio co estilo e formulario do consulado de Valencia, pro tamen po-lo feito de se-las «Costumes da mar» o dereito empregado nos consulados da coróa de Aragón. As «Costumes da mar» serían po-lo tanto o libro de consulado, «como quien dice: libro para los consulados». Pro este libro do consulado, a identificar coas «Costumes da mar», é o formado po-los cap. m 46-297, esto é, por un total de 252 capítulos e máis esautamente de 251 capítulos, poi-lo Capmany ten ó m 46 coma un prólogo, e por eso mesmo po-no orden xudiciario non ó principio, senón ó remate das «Costumes da mar»²⁴, coma unha especie de apéndice das mesmas²⁵.

E coma as «Costumes da mar» e o gromo esencial e o «Orden xudiciario de Valencia» e posterior no tempo, o Capmany maxina

19. CAPMANY 16-17.

20. CAPMANY 21.

21. CAPMANY 24.

22. CAPMANY 23: «Sea como fuere, no es verosímil que los barceloneses hiciesen aquella compilación antes del siglo XIII, porque hasta principios de éste no empezaron a navegar al levante, de cuyos países pudiesen traer las observancias y prácticas náuticas.»

23. Vid. CAPMANY, 27 ss., onde poden verse algúns testemuños e o que diremos máis adiante

24. CAPMANY 41-42.

25. Vid. CAPMANY 465 ss, cunha portada propia.

que debería falarse de «Libro del consulado del mar de Barcelona»²⁶.

2. A teoría do Pardessus

O Pardessus móvese na mesma órbita; mantén así a equívoca nomeada de «consulado», pro, o mesmo tempo, a meu ver, da un paso adiante, pois ó longo da súa obra chegou a conocer dous manuscritos —os manuscritos parisinos chamados hoxe N e P—, a edición do 1494 e as traducións italianas do 1539 e do 1549, unha reimpresión da edición do 1544. E creio interesante chama-la atención sobor destes feitos, pois hai moitos autores que maxinan que todo o que dixo o Pardessus encol do LCM atópase nos volumes I, II e V da súa obra, sin decatarse das correucións e achegas que fixo no volumen VI.

O Pardessus falando das coleccións de leises ou de usos de dereito marítimo di que a máis antiga é a que ten por alcuño «Libre appellat Consolat de Mar» e que nas edicións ten doce pezas diferentes, das que non todas pertoca-no dereito marítimo; a primeira destas pezas, que ten 334 capítulos, conocida vulgarmente baixo a nomeada de «Consulat», pódese dividir en tres partes: os coarenta e tres capítulos do «Orden xudiciario de Valencia», tra-los que veñen disposicións de interés local —os capítulos das «sportades»; o «consulado» propriamente dito, que comenza no cap. 45 e remata no cap. 297 e, de cabo, as «ordeanzas do curso» —cap. 298-334—²⁷. O Pardessus voltando o lero dirá que os primeiros coarenta e cinco capítulos non forman parte do «Consulado» = «Costumes da mar», poi-lo cap. 46, primeiro das «Costumes da mar», ven precedido polas palabras «Aci comencen les bones costumes de la mar», mentras

26. CAPMANY 44.

27. PARDESSUS I 10-11. Manteño o texto de Pardessus, inda que seña confuso; na p. 11 n. 1 di que os cap. das «sportades» en toda-las edicións impresas é o cap. 44, mentras que o capítulo 45 está en branco e as «Costumes da mar» comencan no cap. 46. Deixando a un lado a edición do 1484 —vid. máis adiante—, debería dirse que nas edicións impresas, cando impúxose a edición do Celedes, o cap. 43 é o que te-no «xuramento dos abogados de Maorca», que é onde remata o «orden xudiciario»; o cap. das Sportades é o n.º 45 e o n.º 44 está en branco, comenzando as «Costumes da mar» no n.º 46

o ms. N ten «Dels bons stablimens e costumes de la mar». Ademáis este ms. N fai segui-los capítulos do «Orden xudiciario de Valencia» dun folio en branco, que separao do resto da obra. Nas edicións despóis do cap. 297 dise que remata-nas «Costumes da mar» e que comenza outra materia, mentra-lo ms. N —e tamén o ms. P— ten un colofón, inda que despóis veña-nas «Ordeanzas do corso»²⁸. Po-lo tanto as «Costumes da mar» ocupa-nos cap. m 46-297 e tal coma hoxe conocemo-las —«au moins tel que nous le possédons»— teñen que sere posteriores ó 1340, aínda que o Pardessus te-nas suas dudas, pois cítanse por vez primeira nos cap. 3 e 5 das ordeanzas do 1435²⁹.

Estas afirmacións matizadas do Pardessus foro-no aínda máis, o partir da datación do «Orden xudiciario», tal como atópase hoxe nas edicións —esto é, do «Orden xudiciario de Valencia» da forma gamma do García: non pode sere posterior ó 1343, cando un privilexio deste ano, do 31 de maio, recollido nunha colección de privilexios impresos do consulado de Perpiñán, autorizou os consules de Mallorca a emprega-lo orden xudiciario de Valencia³⁰, pro ten que sere posterior ó 1336, cando Pedro IV de Aragón subeu ó trono, poi-lo privilexio do 1343 di que o monarca xurouno e outro privilexio do 21 de outubro do 1336 atópase mencionado no m 36³¹. Pode rematar así o Pardessus que o «Orden xudiciario» nin é anterior ó 1336 nin é posterior ó 1343 e lembrar que o Bosc aferma que escribése no 1343³².

Esto leva o Pardessus a afermar que xa nesa época existe-nas «Costumes da mar», poi-lo demostra o cap. 22 do «Orden xudiciario», e que teñen que sere escritas, como demostra o cap. 41 do

28. PARDESSUS II 2-3 e VI 493-494 e V 328. Vid. máis adiante. Téñase en conta que o Pardessus fala do ms. da Biblioteca Real, fons Cangé n.º 114 —vid. tamén PARDESSUS II 33— e do ms. «anc. fonds, n.º 7805». O primeiro é o que hoxe te-na sinatura Bibl. nat. Paris (Esp. 124) —cf. MOLINÉ (vid. infra n. 39) LIX ss. e o segundo o que ten hoxe a sinatura Bib. Nat. Paris (Esp. 56) —cf. MOLINÉ LXI— e na sua edición chamaos o Colón ms. N e P respectivamente —vid. COLÓN I 12, tendo presente a «fe d'errata» do volumen II.

29. PARDESSUS II 26. Téñase en conta que según a edición do VALLS III (vid. infra n. 138), so-nos cap. 1, 2 e 5. Vid. infra p. 214 ss

30. PARDESSUS V 323-325. Vid. infra

31. PARDESSUS V 325.

32. PARDESSUS V 325.

mesmo «Orden xudiciario». Pra o Pardessus estas «Costumes da mar», anteriores o 1336-1343 nin teñen carauter oficial nin so-nas que hoxe conocemos³³. Atopa agora apoio o Pardessus pra sua afirmación no feito que a tradución italiana do 1539 tivo que facerse sobor da edición do 1484 —o Pardessus somente conocía a descrición feita po-lo Capmany desta edición— ou sobor doutra diferente da do 1494, poi-lo cap. 99 das «Costumes da mar» na sua tradución italiana, que ocupa o posto dos m 154, m 155 e m 156, é o capítulo primeiro dos «Capítulos do rei Pedro» e o cap. 100 = m 157 é o capítulo segundo do mesmo testo³⁴.

O testo máis antigo conocido do «Consulado» = «Costumes da mar» ten que sere po-lo tanto posterior ó 1340: nin esta redacción ni-na impresa no 1494 eran aquelas que tíñanse diante dos ollos ni-no 1283 ni-no 1343. E agora temos eiquí unha afirmación fundamental. O Pardessus di que xa nesas datas hai unha redacción escrita —probao o privilexio de creación do consulado de Valencia—, pro tamén cré que «po-lo efeuto dun gran número de espi-caciós, de medras, de decraraciós, pois é esta a palabra empregada po-lo consulado, chegóuse a forma-la compilación que chegou ate nosoutros»³⁵. Aínda máis, o mesmo «Orden xudiciario» axuda a comprender como fóronse redautando as «Costumes da mar»: os cónsules eran somente os istrutores do proceso, pois era-nos sabidores dos feitos da mar quenes solucionaba-nas cuestiós. Ó ir medrando estas respostas, devezóuse facer un libro coa sua xurisprudencia; no derradeiro estadio do «consulado» = «costumes da mar», na edición do 1494 e nas posteriores, o «Orden xudiciario» formóu os primeiros capítulos das «Costumes da mar». Agora ben, o Pardessus como xa o Capmany, matina que o tal «Orden xudiciario» non formaba parte do «Consulado» = «Costumes da mar», tal como amosao o manuscrito de Paris —ms. N— e a tradución italiana do 1539³⁶.

33. PARDESSUS V 325-326.

34. PARDESSUS V 326-327 e V 12, onde di que manca-nos cap. 154-158 —esto é, m 154-158— e no seu posto atópanse os dous primeiros capítulos do rei Pedro» o que repete en VI 495.

35. PARDESSUS V 327.

36. PARDESSUS V 327-328.

3. LCM e «Costumes da mar»

Se quixen determe sobor destes falacios é porque coido que teñen aínda validez e que aganzan lembrarse. É certo que nestes dous falacios hai unha certa confusión, pro tamén hai unha vision crara dos problemas. Pra o Capmany e pra o Pardessus o lerio fundamental ven determinado po-lo orixe e extensión das «Costumes da mar». O lerio da compilación que hoxe chamamos LCM tiña pra eles pouca importancia³⁷; pra o Pardessus non hai duda algunha sobor do feito de que toda-las doce pezas ditas forman parte do «Libre appellat Consolat de mar»; o que preocúpalle o Pardessus é saber que capítulos dos trescentos trinta e catro que forma-no que conoce baixo o alcume de «Consolat» formaban parte orixina-riamente do mesmo; como xa sabemos pra o Pardessus as «Costu- mes da mar» sólo conteñense nos capítulos 46 a 297. Pra o Par- dessus a tradición manuscrita que conocía e as edicións máis antigas amosaban que o «Orden xudiciario de Valencia» e as «Ordeanzas do curso» achegaronse po-lo editor do 1494, que formou con estos dous textos canda ás «Costumes da mar» unha das doce pezas —aquela que ten 334 capítulos— que arrecadou na súa compilación do «Libre appellat Consolat de mar».

Hoxe esta compilación de doce pezas perdéu interés e os auto- res fíxanse na compilación feita po-lo editor do 1494, unha compi- lación de 334 capítulos, que veuse compretada po-los «Capítulos do rei Pedro», aínda que reciban unha numeración independente, fiel refrexo da súa situación estrana na edición do 1494. Agora ben, unha compilación non é outra cousa que unha recolleita de textos xa existentes. Esta definición chama a atención sobor das duas caraiterísticas fundamentais de toda compilación. Dun lado unha compilación non aporta nada novo, xa que recolle us textos que existían xa, inda que independentemente; doutro lado, unha reco- pilación é sempre o resultado final dunha aitividá coscientemente dirixida cara un fin concreto. Os textos dunha compilación se non

37. Por iso mesmo o Pardessus pode afermar que a coleución máis antiga de dereito marítimo é aquela que te-no alcume de «Libre appellat Consolat de Mar», impresa nos derradeiros do século xv e reimpressa moitas veces, que ten doce pezas diferentes —PARDESSUS I 10-11—.

atopan alí por caso, pois axuntaronse a mau tenta pra satisfacerlos fines que o seu autor prantexouse. Cando non hai unha compilación oficial, o contido dunha compilación de dereito marítimo xunguese ó tempo, ó lugar e ó autor da mesma. Se o tempo, o lugar e o autor xogan un papel decisivo na configuración dunha compilación, tamén é certo que a finalidade que quere atinxir coa compilación determina as semellanzas entre as diferentes compilacións feitas por autores distintos en tempos e lugares diferentes. Por eso mesmo as recopilações que queren recolle-lo dereito marítimo teñen que asemellarse, inda que nas mesmas atopense diferencias gurgulladas dos autores que levan a cabo as mesmas en tempos e lugares diferentes.

Xa sei que non é o mesmo, pro o que eu quero sulñar pódese comprender acodindo a relación que fai o Pardessus das compilacións de dereito marítimo. É certo que non é doado reducir a unidade as mesmas, mais arredando algunha colección, pódese atopar tamen nelas un fato de elementos que puideramos chamar permanentes ou costantes. Se temos en conta que o Pardessus nembra oito compilacións que van dende o 1494 ó 1791 e que recolle-na tradición mediterránea e a tradición atlántica pódese comprender que non seña doado atopar elementos permanentes, pro con todo a chamada compilación de Wisby atópase en seis compilacións, non recolléndose naquelas restrinxidas á tradición mediterránea: a edición do «Libro do consulado da mar» do 1494 e a edición do mesmo libro do Capmany; e certo que a compilación de Wisby é a úneca que atopase nas seis compilacións do Atlántico, pro as ordeanzas das vilas hanseáticas do 1591 atópanse en cinco coleccións e a ordeanza marítima do Felipe II en catro. Doutro lado é aqueloutrado ver coma co paso do tempo deixanse fora algunhas ordeanzas e pónense dentro outras, tal é o caso das ordeanzas marítimas do Carlos V do 1551 e do Felipe II do 1563; aquelas desaparecen cedo, entramentres as derradeiras manteñense máis tempo, inda que teñan que loitar coa influencia das ordeanzas do Luis XIV do 1681. Tamen co paso do tempo pódese ver coma o dereito do Mediterráneo vai atopar acollida nas coleccións de dereito marítimo do Atlántico; curiosamente non so-nos 334 capítulos do que lumbraxa xenéricamente o Pardessus o «consulado» os que recollense, mais os «Capítulos do rei Pedro» e as ordeanzas dos maxistrados de Barcelona pra o

consulado de Sicilia. De cabo direi que o paso de tempo e a maior xeneralidá do contido destas compilacións leva consigo que señan incorporadas ás mesmas —tamen debido a que agora xa non teñen somente un interés prautico, mais tamen científico ou cultural— vellos dereitos marítimos; así comenzan a acharse nestas compilacións o dereito rodio, que atopase nas derradeiras catro coleccións citadas polo Pardessus, e as normas xurídico-marítimas do Teodosiano canda ás da compilación xustiniana.

Deixando a un lado os problemas dos elementos que incorporanse nunha compilación —¿forma-nas «Costumes da mar» e as «Ordeanzas do corso», por exemplo, unha única obra ou son dúas obras diferentes?— quero agora ocuparme do problema da existencia dunha compilación chamada LCM. ¿Hai unha compilación cun material fixo que pode lumbrarse LCM ou hai moitas compilacións, que asemellanse por ter moitos textos en comun, por ter incluso un gromo fixo, constante, pro que cambea no seu contido dunha a outra edición, dun a outro manuscrito?

Pra entede-lo que diréi coa mesma debe terse en conta un feito: a imprenta fixo trunfar un texto do «Libro de consulado da mar» feito polo Celedes no 1494, pro conocido fundamentalmente polas edicións posteriores, que reproducía-no, inda que completando-o³⁸. Neste sentido, pódese dir que o problema da existencia dunha compilación unitaria ten que porse denantes do 1502, inda que esta data seña un tanto arbitraria. Ademais hai que decatarse doutro feito: teño pra min que non é a mesma cousa falar de edicións e inda máis de manuscritos feitos oficial ou oficiosamente que de edicións ou manuscritos feitos privadamente. De eiquí a importancia que doulle ó orixe dos manuscritos, inda que non poida entrar neste problema. Tendo presente este feito, vexamos agora o orixe das edicións.

4. *A tradición editorial do LCM*

As primeiras edicións do LCM prantexan moitos problemas; ó parecer a máis antiga publicouse no ano 1484 polo Spindeler en Barcelona, inda que hai quen di que publicouse en Tarragona, e

38. Vid MOLINÉ (vid n. 39) LXIV ss.

foi seguida dez anos máis tarde, no 1494, por outra edición de Barcelona ³⁹.

Estas dúas edicións son moi raras; o mesmo Capmany, ó parecer, non chegou a coñecer a do 1494 e sómente coñeceu no derradeiro intre a edición do 1484 ⁴⁰, mentras o Pardessus coñecía da edición do 1484 sómente a descrición do Capmany, inda que chegou a coñecer a edición do 1494 ⁴¹. Fóronas edicións do 1502 e posteriores e, ó parecer, as traducións italianas feitas sobor das mesmas, as que estenderon a fama do «Llibre» ⁴².

Quero axustar que hai quen di que hai dúas edicións do 1484, unha a xa mencionada do Spindeler, que é a que considérase a edición «princeps» e outra, do Alemany, da que da novas o Salvá ⁴³.

Pra o Bohigas, que fala tamen do «Llibre del Consolat» pra falar das «costumes da mar», o contido da edición «princeps» é este: «Orden xudicial de Valencia» (cap. 1-40), «Xuramento dos abogados» (cap. 41), «Capítulos da multiplicación das quintaladas» (cap. 42-43), «Costumes da mar» (cap. 44-290), «Ordeanzas do curso» (cap. 291 e seguintes), ordeanzas do concello de Barcelona pra o consulado de Sicilia; ordeanzas de seguros do 14 do mes de San Martiño do 1458 e, xa con outros tipos e despois do colofón, pecha na edición outras ordeanzas de seguros do 3 do mes de San Xoán do 1484 ⁴⁴. O Bohigas suñña que as «Costumes da mar» identifícanse craramente, pois no cap. 44 hai un epigrafe aseñando o seu comenzo, inda que non seña doado xiba-las no remate, pois tra-lo cap. 290 (=m 297) ve-no cap. 291 (=m 298), si-no epigrafe que atópase na edición do 1494, inda que a comparanza cos manuscritos e coas

39. Ernest MOLINÉ Y BRASES, *Les costumes maritimes de Barcelona universalement conegudes per Llibre del Consolat de Mar* (Barcelona LIV ss.; Pedro BOHIGAS, *Prefacio*, en *Llibre del Consolat de Mar*. Reproducción facsímil de la edición príncipe (¿Barcelona, hacia 1484?) 14 ss. Citaréi dora en diante sinxelamente polo nome dos respetivos autores.

40. CAPMANY 65 ss.

41. PARDESSUS I 35 ss.

42. BOHIGAS 21.

43. María del Carmen SIMÓN PALMER, *Bibliografía de Cataluña. Notas para su realización*. Tomo I (1481-1765) 1. Vid. os n.º 4-5. Mentras a edición do Spindeler non ten título, a do Alemany ten, ó parecer, este título: «Consulado de mar». Sobor da edición do Spindeler e dos seus problemas vid BOHIGAS 18 ss.

44. BOHIGAS 17-18.

edición leve ó Bohigas a afirmar que as «Costumes da mar» craramente comenzan nesta edición no cap. 44 e péchanse no cap. 290⁴⁵.

As novas dadas po-lo Bohigas son esautas, mais tamén pouco precisas, po-lo que fixen na miña segunda recensión algunhas afirmacións, que quero correxir agora, xa que puiden ver, fai pouco, a reedición fotomecánica feita po-lo Bohigas desta edición. A edición do 1484 ten unha «taula de capitols», onde estos teñen unha numeración que, en liñas xenerales, cadra coa numeración dos capítulos no texto; agora ben, a numeración dos capítulos no texto ten erros a fatín, xa que hai capítulos sin numerar, números repetidos e outras trabucacións semellantes; non podo chamar eiquí a atención sobor de todos estos defeutos, xa que hai-nos a montes e moreas, e teño que contentarme con suliñar que ás veces hai brincos na numeración, ó deixarse sin numerar algún capítulo, pro non sempre esos brincos modifica-na numeración; así no «Orden xudiciario de Valencia» choutase do cap. 3 ó cap. 8, mais no medio déixanse catro capítulos sin numerar; pro tamen nese mesmo «Orden xudiciario» pásase do cap. 24 ó 25, deixándose sin numerar no medio un capítulo, que ven a se-lo m 25, aínda que torne cedo a equivalencia, xa que na edición do 1484 bríncase do cap. vintecinco ó vinteseite, sin que atópese no medio, neste caso, capítulo algún sin numerar.

Neste sentido quixera suliñar que o derradeiro capítulo numerado no texto do «Orden xudiciario» e o cap. 41, que é o m 41; despóis atópanse sin numerar tres capítulos: o (42)=m 42, o (43), que conteno «Xuramento dos abogados de Mallorca», =m 43 e o (44), que conte-no capítulo «Del multiplicament de quintarades» =m 45 e despóis, xa numerados, atópanse o cap. 43=m 45 bis, isto ó o capítulo que conte-no texto latino do capítulo anterior, e o cap. 44, que é o m 46, onde ten comenzo as «Costumes da mar». Chamo a atención sobor deste feito, pra xustifica-las miñas afirmacións na recensión, poi-lo García e o Colon afirman no prologo, que antepoñen á edición do LCM, que «adoptem en la nostra edición

45. BOHIGAS 15-16; vid. tamén CAPMANY 68, quen suliña que nesta edición do 1484, «que el total de los capítulos de las costumbres marítimas contenidos en este raro libro, no pasa de 290. Y el que sacamos en la presente edición, conforme con el texto de las legítimas y conocidas que he consultado, asciende a 296». Eiquí coma pode verse o Capmany pon dentro das «Costumes» o «orden xudiciario». Pra outros datos, que non interesan eiquí, vid MOLINÉ LXIV-LXVI.

l'ordre que ja imposà la impremta des del primer incunable consular» e no m 44, na nota, dise: «Aquest capitol manca a tot arreu segons la numeració tradicional de m.» O decatarme destes feitos e o maxinar que a edición do 1484 tiña menos capítulos que a edición do 1494 —pechábase co cap. 290—, dudéi se na edición do 1484 atopábase ou non o famoso m 87, duda que escacharrando a edición do 1484 desaparecéu axiña, pois atopeino alí.

Eu prefiro, co gallo dos defeutos na numeración do testo, segui-la numeración da táboa, xa que é máis correuta e permite evita-las trabucaciós xa ditas.

Dacordo coa numeración da táboa, que abre a edición —esta edición non ten portada e po-lo tanto marra o título da obra, inda que na reprodución fotomecánica imprimeuse unha portada dunha edición posterior— esta te-na estrutura seguinte:

«Aci comença la taula del libre del consolat»; este é o título que leva a táboa e despois dun cómaro en branco atópanse os epígrafes cos capítulos numerados e os folios onde atópanse.

«Capitol primer. En qual manera los consols son quascun any alets e lo iutge deles apelacions. en carta primera »

Come pode verse comenza sin máis —non ten título algún— coa enumeración dos capítulos do «Orden xudiciario de Valencia». Atópanse así coarenta e cinco capítulos numerados us tra-los outros, sendo o coarenta e tres o «del iurament que han afer los aduocats per la pragmática del Rey en Jachme», o corenta e catro, «Del multiplicament de quintalades» e o coarenta e cinco: «De quintalades» (testo latino).

Despois segue a numeración, inda que na táboa pódese atopar que no capítulo coarenta e seis comenzaba orixinariamente outra obra:

«Capitol. xxxvi. Aci comencen les bones costumes dela mar en cartes viiiij.»

Esta numeración chega ate o capítulo 303=m 307, que no testo te-no número douscentos tres, xa que a partir do capítulo douscentos un, prescindéuse no testo dunha das —c—, dos centos, po-lo que na realidá repítese a numeración dos centos no testo. Esta numeración continua na táboa ten algún que outro defeuto: o capítulo

centovinteun atópase repetido. Despóis do capítulo cento oitenta atópase un capítulo sin numeraz; despóis do capítulo cento oitenta e un atópase po-lo capítulo cento oitenta dous un novo capítulo cento oitenta, pois despóis ve-no capítulo cento oitenta e tres e asomade un novo capítulo sin numerar. Quere esto dir que os trescentos tres capítulos numerados converteronse en trescentos seis, inda que dous deles esteñan sin numerar e outro recuncou o número centovinteun.

Estos datos aseñan xa o verdadeiro contido desta edición; eu fixe-no cotexo entre esta edición e a edición do Colon e podo afermar que na edición do 1484 atópanse case todo-los capítulos que achanse na edición do Colon. Eu voume deter somete nas diferencias. Non hai nesta edición ningún capítulo en branco po-las razóns xa ditas, aínda que axustarei que eu fixen o cotexo sobor dos textos de ama-las dúas edicións, pro daréi as equivalencias entre o texto do Colon e os epígrafes dos capítulos da táboa da edición do 1484, po-las razóns ditas. Deste xeito cadrán as dúas edicións de fio a fondo hastra o capítulo coarenta e tres, pro ó numerar un tra-lo outro a edición do 1484 os dous capítulos das «sportades», mentras o Colón da un número bis ó texto latino, voltan a cadrar denovamente co cap. 46, inda que coa mesma comenza-nas diferencias: o cap. 47 = m 46 bis, po-lo que dende eiquí vai adiante nun número a edición do 1484; cap. 69 = m 68, m 69 e m 70; dende eiquí vai adiante nun número a edición do Colon; cap. 79 = m. 80-80 bis; cap. 85 = m 86 e 86 bis; cap. 87-88 = m 88; dende eiquí tornan a axeitarse as dúas edicións; cap. 102 = m 101 bis; dende eiquí volta a ir adiante nun número a edición do 1484; cap. 115 = m 113 (segundo epígrafe); dende eiquí vai adiante en dous números a edición do 1484; o primeiro capítulo 121 = m 119; o segundo cap. 121 = m 120; dende eiquí vai adiante nun número a edición do 1484; cap. 130 = m 129, m 130; dende eiquí voltan a cadrar as dúas edicións; cap. 164 = m 164, m 166, m 167, m 168; manca na edición do 1484 o cap. 165; dende eiquí vai catro números adiante a edición do Colon. Capítulo sin numerar despóis do cap. 180 = m 185, po-lo que dende eiquí vai adiante en cinco números a edición do Colon; capítulo sin numerar despois do cap. 183 = m 189, po-lo que dende eiquí vai adiante de seis números a edición do Colon e, pra rematar, se non atopa na edición do 1484 o m 270, po-lo que dende o cap. 264 vai adiante

de sete numeros a edición do Colon, po-lo que o cap. 290 é nesta edición o capítulo derradeiro e correspóndese co m 297, inda que os únecos capítulos que marran na edición do 1484 seña-no m 165 e o m 270.

Despóis do cap. 290 segue a numeración da táboa, onde non hai aquel epigrafe que atópase noutras edicións —e nalgús manuscritos—: «Asi parlem de les naus armades et de les galeas et de les segeties com deuen partir ni com deuen pagar a aquels qui ab eyls hiran», xa que atópase samente:

«Capitol. cclxxxxi. Com deuen iurar lalmirall e capita e armadors en cartes cviiij.»

inda que unha nova división atópase no capítulo 302:

«Capitol. cccij. Aci comencen les costumes del cors. ço es entendre de nau o leyn de rems. en cartes cx.»

e péchase esta numeración co cap. 303:

«Capitol. cciiij. On parla Je notxers en cartes cxii »

que ven a se-lo m 307-8, xa que o m 305 atópase repartido nos cap. 298, 299, 300 e 301 da edición do 1484. Agora ben, despóis deste derradeiro capítulo numerado ven unha poulareda de epígrafes que, numerados por min, ian do cap. (304) ate o cap. (330) e que cadran coma veremos, cos m 309-334. Atópase asomade na táboa os epígrafes: «Ordinacions noues dela ciutat de barcelona sobre los consols. en cartes cxviiiij»⁴⁶; «De cambis donats a arrisch dels nauilis. en cartes cxx.»; «Item altres ordinacions moltes. en cartes. cxx.i.»⁴⁷. «Ordinacions fetes sobre les seguretats maritimes e mercantiouls: quis faran enla ciutat de barcelona. en cartes cxxij»⁴⁸, que ten trinta capítulos, e o seguinte «explicit» pecha a táboa:

«Aci es acabada la taula del libre de consolat.»

Se agora acodimos o testo ¿qué atopamos? O mesmo comenza así:

«En qual manera los Consols son cascun any Elets e lo Jurge de-les appellations, c. 1.»

46. MOLINÉ 209-215.

47. MOLINÉ 211-213.

48. Son as ordeanzas de seguros do 1458.

esto é, cadra de fio a fondo coa táboa, xa que o «orden xuliciario de Valencia» non ten título algún. No cap. 44, que é o coarenta e seis da táboa e o m 46, atópase este epígrafe: «Aci comencen les Bones costumes dela mar. C. xliiii.». Tampouco no testo atópase xebre algun entre o cap. 190, que é o cap. 290 da táboa e o m 297, e o cap. 191, que é o cap. 291 da táboa e o m 298, xa que despois do remate do cap. 190 do testo comenza o 191 do testo co epígrafe normal: «Com deuen iurar lalmirall e capita e armadors. c. cxci.» Tamén atópase no testo o xebre xa visto na táboa: «Aci comencen les costumes del cors ço es entendre de nau o de leny de rems. c. cc.ii», que ven sendo o cap. 302 da táboa e o m 306. Esta frase torna no comenzo do capítulo.

Tamén no testo o derradeiro capítulo numerado é o douscentos tres, isto é o trescentos tres da táboa, que ven sendo os m 307-308: «Aci parla de notxers.» Agora ben, xa neste capítulo e nos capítulos posteriores, que teñen epígrafes, pro non numero, comencen a atoparse epígrafes internos. Poderíamos po-lo tanto dir que dende este capítulo —203 no testo, 303 na táboa, que é o m 307-308— deixa de acharse a aseñación de formar un capítulo, deixa de acharse a numeración e deixan de acharse de cabo capitales, coas que començaba-nos capítulos. Neste sentido o dito capítulo é o derradeiro que ten capitales repinicadas, aínda que ten tamén epígrafes internos.

Esto é, desaparece-nas aseñacións dos capítulos, o número e as capitales repinicadas, pro manteñense os epígrafes, anque de dous tipos:

a) Epígrafes que teñen unha letra meirande da empregada na impresión, en liñas xenerales, do mesmo grandor da empregada nos epígrafes dos capítulos, por exemplo no cap. 203 (=303) e que, como neste capítulo, atopanse no centro dunha liña, arredando así craramente un apartado doutro. Non esquezamos que o libro e impreso a dobre columna.

b) Epígrafes que teñen unha letra do mesmo grandor da empregada na impresión do testo e aínda máis pequena, en liñas xenerales, atopándose case sempre na beira esquerda da columna —a dreita po-lo tanto do leutor—, unhas veces nunha liña en branco, outras veces nunha liña que recolle as derradeiras palabras da liña anterior. Poderíase dir que estos epígrafes veñen a facer párrafos dentro dos apartados, que teñen epígrafes propios.

Estos dous principios non sempre respetanse no testo. De eiquí que teñamos que acodir á táboa, onde áchanse epígrafes que cadran cos apartados; deste xeito, empregando a táboa pra evita-los defeutos no testo pódese face-la aseñación entre apartados e párrafos e manter coma principios xenerales, que non sempre respétanse, os xa estabrecidos.

Atervando este feito, podemos comenazar co cap. derradeiramente numerado: o cap. 203 no testo, que na táboa é o 303 e te-no epígrafe «on parla de notxers». Pois ben no testo, coas caraiteristicas ditas no apartado b), atópanse varios outros epígrafes, a maiores do xeneral «Aci parla de notxer»: cinco con «notxer» e un «De prohers», o que esprica que este capítulo cadre cos m 307-308.

Os epígrafes que atópanse na táboa so-nos seguintes, que numero a partir do 303, inda que non esteñan numerados, coma xa dixen; dou tamén a concordancia coa edición do Colon:

- (304) De ballesters = m 309.
- (305) De homens darmes = m 310.
- (306) De gabiers = m 311.
- (307) De fals pes e mesura = m 312.
- (308) De sobreguardians = m 313.
- (309) De timoners = m 314.
- (310) De Barbers = m 315.
- (311) De Ganfanoners = m 316.
- (312) De barquers = m 317.
- (313) De esuehidors = m 318.
- (314) De afferradors = m 319.
- (315) Com deu esser guardat lalmirall = m 320.
- (316) De escorcolladors = m 321.
- (317) De seruicials = m 322.
- (318) De mestredaxa = m 323.
- (319) De ballesters = m 324.
- (320) De calafats = m 325.
- (321) De Rey de seruicials = m 326.
- (322) Com se leuen consols = m 327.
- (323) De conuinenses com sien tengudes = m 328 l. 3-13.
- (324) De almiralls = m 328 l. 14-83.
- (325) Allo de que es tengut capita e de les coses que deu feu capita e pertanyents a capita = m 329 e m 329 (cont.).

- (326) De escriuans = m 330 e m 330 (cont.).
- (327) Clauaris = m 331.
- (328) Notxer maior = m 332 e m 332 (cont.).
- (329) Com deuen iurar consols = m 333.
- (330) Com se deuen leuar les quintes = m 334.

Voltando sobor dos lerios xa ditos, diréi que no táboa recollense dous epígrafes diferentes, aqueles que teñe-nos números [323] e [324], pro no testo non sería doado facer esta división, pois atópase o epígrafe «de conuinenças com sien tengudes», no centro dunha columna e con letra meirande ca do testo, pro tamen no centro dunha columna, con letra meirande ca do testo e tamen nunha liña en branco atópanse diversos epígrafes, donde áchase normalmente «Almirall», mai-la segunda vez «De almirall», inda que despóis voltase o «almirall», alternando con «Almirall»; neste sentido o terceiro epígrafe é «Almirall», esto é, con maiuscula, pro a letra e do mesmo grandor ca do testo. É a úneca esceución nos primeiros nove epígrafes, pro o décimo epígrafe atópase xa na beira esquerda, nunha liña onde atópase a palabra «uenir», pertencente o apartado anterior, e con maiuscula, mais cunha letra egoal á do testo. Todo o testo baixo estos epígrafes atópase no m 328, pro fixen dous apartados, xa que, coma quedou dito, na táboa fanse os ditos dous apartados.

Tampouco hai no testo un linde craro entre o derradeiro capítulo do que hoxe conocemos coma «Ordeanzas do corso» e a ordeanza dos conselleiros de Barcelona. É certo que déixase unha liña en branco e que nesta ordeanza volvense a atopar as capitales repincadas, que servían pra aseñalos diferentes capítulos, pro non hai ningún colofón, que faga ver que alí remata o «Llibre del consolat de mar». O mesmo procedemento síguese coas outras ordeaciós, inda que as de seguros do 1458 atópanse perfectamente identificadas, xa que practicamente déixase unha columna en branco e despóis atópase un título xeneral no comenzo dun novo folio ⁴⁹:

49. Non teño a miña disposición nestes intres a edición do Bohigas, e inda que teño fotocopias, as mesmas non permitenme dir se hai ou non o verso dun folio en branco. A táboa di que as outras ordeaciós atópanse no folio cxxi. pro non di onde rematan, mentras que as ordenanzas de seguros comenzo no folio cxxij. No peor dos casos déixase, como xa dixen, case unha columna en branco, pois atópanse nela samente dúas liñas escritas.

«Ordinacion fetes sobre les seguretats merities e mercantiuols quis fas en la Ciutat de barchenona.»

Tra-lo capítulo trinta e derradeiro destas ordeaciós, atópase o colofón do libro:

«Este libro ansi hordenado
De doctrina tant perfecta
Todo per su uia recta
Deu benedicto es acabado.»

Lembraréi que o colofón da táboa decía: «Aci es acabada la taula del libre de consolat», frase que viña despóis do capítulo trinta das mencionadas ordeaciós de seguros. Pódese po-lo tanto dir que o «libre de consolat» e aquel que comenza co «orden xudiciario de Valencia» e remata coas «ordeanzas de seguros do 1458». Despóis deste colofón atópase un folio en branco e outro folio reuto en branco e no verso do mesmo comenza-nas «Ordeanzas de seguros do 1484»: «Segueixen se les ordinacions nouament fetes sobre les seguretats marities», onde atópanse diversos capítulos, inda que non todos numerados. O derradeiro é o «capitol. xxv. Del iurament que primerament los consols deuen pendre dels assegurats e aseguradors» e tra-lo escatocolo ve-no seu *explicit* propio: «Açi acaben les ordinacions nouament fetas sobre les seguretats marities.»

Eu non vou a entrar eiquí a discutir se nesta edición hai unha crara aseñación entre os diferentes elementos que forma-no que hoxe chamamos LCM ou non. Se deixamos a un lado as interpretacións é craro que hai nesta edición os acios de unificar baixo unha numeración común un fato de capítulos, que de seguro pertencían ó menos a dúas obras diferentes. Agora ben, este esforzo non trunfóu aínda de fio a fondo, xa que esta numeración interrumpéusc no cap. 303. Sin prexuzgar ren sobor desto, poderíamos dir que neste primeiro intento de dar unidá a un fato de elementos diferentes, fórmase unha obra unitaria co «Orden xudiciario de Valencia», no que podemos incruir o «xuramento dos abogados de Mallorca» e os capítulos das «sportades» (inda que manteña-na sua independencia, xa que, si dou fe ó testo editado po-lo Colon, na edición do 1484 manca aquela frase derradeira que atópase na edición do Moliné —e quizaves na edición do 1494— ó remate do m 43,

que conte-no «xuramento dos abogados»: «Açi acaba lorde iudiciari de la cort dels consols»), as «Costumes da mar» e o que hoxe coñecemos baixo o alcume de «Ordeanzas do corso»; hai que suliñar que as «Costumes da mar» semellan ter unha individualidade propia, xa que vense arredadas polo seu epígrafe propio dos primeiros coarenta e cinco capítulos —o «orden xudiciario de Valencia» e os outros tres capítulos ditos—, anque o seu remate prantexa problemas, coma vamos a ver agora.

No cap. 302 (202 no testo) comenza-nas «Costumes do corso», pro entón teríamos que afermar que as «Costumes da mar» non remataban no cap. 290 (190 no testo)=m 297, mais no cap. 301 (201 no testo)=m 305; desta maneira algúns capítulos, aqueles que na edición do Colon atópanse baixo o epígrafe «Asi parlem de les naus armades...» (m 298-305), e que hoxe maxínanse que forman parte das «Ordeanzas do corso» atoparíanse dentro das «Costumes da mar». A maiores as «ordeanzas do corso» incorporáronse de maneira non perfecta a esta nova unidade, xa que sómente atópanse numerados os dous primeiros capítulos das mesmas —o cap. 302 (202 no testo)=m 306 e o cap. 303 (203 do testo)=m 307-308, pois os outros epígrafes non teñen numeración.

Eiquí sólo quixera suliñar un feito: nin todo-los manuscritos teñen no m 297 o título que deixei recollido nin todo-los manuscritos ofrecen no que hoxe chamamos «Ordeanzas do corso» o mesmo orden; ademáis pódese afermar que os cap. m 298-305 semellan estar fora do seu posto. Se nos decatamos que os manuscritos —na súa meirande parte— e especialmente os máis antigos manteñe-na crara individualidade dos cap. m 46-297 —as «Costumes da mar»—, xa que neles, como se virá, estos capítulos teñen título propio, numeración propia e colofón propio, poderíase quizaves pensar que na tarefa de unificación do material, houbo unha fusión meirande daqueles capítulos que, quizaves por estar fora do seu posto e polo tanto diante do epígrafe da colección —«Costumes do corso»— incorporáronse dentro das «Costumes da mar», inda que remataran por arredarse delas, ben deitar que recibiron un novo título.

Temos polo tanto que nesta edición dentro do LCM atópanse todo-los textos postos diante do colofón. Non é necesario suliñar que se fose este LCM o que trunfara, hoxe os «Capítulos do rei

Pedro» non formarían parte do LCM. Ademáis, a incrusión das ordeanzas do 1484 semella querer siñificar que as mesmas irían a parar co tempo dentro do LCM, botando fora as vellas do 1458.

A primeira edición da tradución italiana de Roma do 1519 dou lugar a unha certa polémica⁵⁰, que non sirveu de moito pra quenes quixeran coñecer o seu contido. Prescindo polo tanto desta edición, xa que da súa parte o Perels aferma, falando do «orden xudiciario de Barcelona», que atópase no ms. F do LCM: «Aquests capitols foren omesos en la traducció italiana de Jacopo Gelli, de Perpinyà, la qual fou presa d'un original desconegut i aparegué a Roma l'any 1519; l'any 1539 fou reimprimida a Venècia»⁵¹ pra ocuparme desta reedición, cos datos do Pardessus.

Da tradución italiana de Venecia do 1539, que ó entender do Pardessus ten que basarse nunha edición anterior á de Barcelona do 1494, teño os datos que da o Pardessus. Ten este título:

«Libro di Consolato nouamente stampato e ricoretto, nel quale sono scritti capitoli e statuti e buone ordinationi che li antichi orderono per li casi de mercantie et di mare et mercante et marinari et patroni di navilio»⁵².

O Pardessus di que este pequeno libro, en coarto, ten 122 folios numerados nos reutos en números romás; despois de dez páxinas

50. Limitome eiquí a Odone SCIOLLA, *Della edizione principe del Consolato del mare*, en *Mostra bibliografica e Convegno internazionale di studi storici del diritto marittimo e medioevale. Amalfi Luglio-ottobre 1934. Atti. Vol. I Relazioni e Comunicazioni al Convegno* (Napoli 1934) 329-334 e Baltasar CARDONER, *L'edició princep del Consolat de Mar*, en *RJC* 41 (1935) 71-72.

51. Leopold PERELS, *L'ordre judiciari mercantil de Barcelona del segle XV*, en *RJC* 37 (1931) 34.

52. PARDESSUS V 11, que di que nesta época, en italiano, a palabra «nuovamente» empregase pra siñificar que a obra publicabase po-la primeira vez, pro tense que ter en conta que hoxe conócese unha edición de Roma do 1519; mais interés ten o contido do título, que semella referirse o dito no prólogo das «Costumes da mar» e do título 27 do libro nove das «Costums de Tortosa». CARDONER, *L'Edicio* cit. 72, di que a edición do 1519 te-no título: «Libro volgare detto consolato novamente stampato et corretto del quale sono scritti gli capitoli ei statuti en bouna ordinatione que gli antichi ordinarono per gli casi de mercia et di mare dove di qua innante potremo trovare»; di tamen que é un volumen en folio a duas columnas de 62 folios e que ten 247 capítulos, recollendo, ó parecer, o que di o Brocá, na súa «Taula de Stampacions», que non vin.

sin numerar de frontispicio, táboa, dedicatoria, comenza coa mesma o consulado, esto é, as «Costumes da mar» no folio primeiro Hai no testo 247 capítulos, pro as «Costumes da mar» ocupanos 226 primeiros, poi-lo derradeiro capítulo das «Costumes da mar» é o 226, que é o m 296. Acrara esta diferenca o Pardessus suliñando que nesta tradución se non atopa o m 46 e o primeiro capítulo da tradución recolle nun solo os m 47-48 e fai outro tanto cos cap. m 118-119; ademais non temos capítulos m 113 e m 297; tampouco temos m 154, 155, 156, 157 e 158, pro no seu posto atópanse os dous primeiros capítulos dos «Capítulos do rei Pedro». Xa fora das «Costumes da mar» o cap. 227 —primeiro, pois recuncase neste número— é o primeiro dunha ordeanza dos cónsules de Barcelona sobor dos feitos da mar, que atópase enteira nas edicións catalás⁵³; dende o 227 —segundo— ate o 246 atópase case toda a ordeanza de seguros do 1484 e, de cabo, o cap. 247 e derradeiro da edición é o estrato dunha ordeanza dos maxistrados sobor das letras de cambio do 1349. Péchase a edición, ó parecer, co cronicón das confirmacións⁵⁴.

Quero suliñar algo sobor do que xa falou o Pardessus: nesta tradución se non atopan ni-no «orden xudiciario», ni-no «Xuramento dos abogados», ni-nos capítulos das «sportades», ni-nas «Ordeanzas do curso» e ni-nos «Capítulos do rei Pedro», agás dos dous capítulos ditos; a súa importancia ven ademais «parce que, à moins qu'elle ne soit un travail arbitraire, ce que je ne crois pas, elle a dû être faite sur un texte du Consolat (=«Costumes da mar»), different de tous ceux qui sont connus, tant manuscrits qu'imprimés»; o seu tradutor foi o Pedrazzano pra o Pardessus, quen tamen voltou a traduci-lo «Libro do Consulado da mar» no 1549, pro esta volta compretou o seu testo, acodindo a edición do 1494 ou a outra posterior segun o Pardessus⁵⁵.

Agora ben, po-la descrición que fai o Pardessus da edición do 1549 da tradución italiana todo leva a pensar que non empregou a edición do 1494. É unha edición en coarto, con 165 folios. Os pri-

53. Vid. MOLINÉ 211 ss.

54. PARDESSUS V 326-327; 11-12; VI 494-495.

55. PARDESSUS V 12-13; VI 494-495 a frase recollida na p. 494. Hoxe —vid. BOHIGAS 20— dise que a tradución e do G. Padoano pra a edición do 1539 e do Pedrezzano pra a do 1544.

meiros coarenta e tres capítulos teñe-no «Orden xudiciario» e os capítulos das «sportades»; as «Costumes» = «Consulado» comenzan no cap. 44 e remata no capítulo 294, e non no adoitado 297. Na paxina 126 comenza-nas «Ordeanzas do curso», pro os seus capítulos non levan adiante a numeración das «Costumes da mar». O Pardessus non di máis, aínda que o principio di que a edición péchase co cronicón das confirmacións ⁵⁶.

Estas primeiras edicións, ou anteriores ó 1494 ou que xúnguense a unha edición —¿ou a un manuscrito?— anterior a do 1494, amosan un LCM que é diferente do contido nas edicións posteriores a partir do 1494, e que tamén é diferente do da edición feita polo Colon, pois non teñen todo-los textos que atópanse nestas dúas. Eu non quero dir con isto que non hai nestas datas compilacións que teña-no alcuño de LCM; o que afermo é que non hai un texto fixo, que poida chamarse de maneira escrusiva LCM, pois toda-las compilacións editadas baixo ese alcume era-no resultado da aitividade do seu editor hastra que rematou por impoñerse a edición do 1494.

¿Qué é o que o Ceelles chamaba «lo libre (vulgarment appellat) de consolat»? Na edición do 1494 hai un prólogo do Ceelles, onde conta as razóns que levaronlle a face-la súa edición. Como di o Ceelles «en lo libre de consolat se trobauen moites corrupcions», polo que con consello dos espertos e «cercant moits originals», esforzouse o Ceelles en correxi-lo «present libre: tant com es stat possible». A primeira tarefa levada a cabo polo Ceelles foi, pois, correxi-lo texto do que él chama «libre de consolat». Pro fixo algo máis: pra repinaca-lo axuntoulle «alguns privilegis e ordinacions e altres cosas condecents a la materia». De cabo, «per raó de la confusió dels capitols qui en dit libre stan dispersos: es stada feta la present taula». Esta táboa e o esquema dunha organización sistemática do libro ⁵⁷.

Atervando a terminoloxía empregada polo Ceelles —fala dun «libre de Consolat», compretado por «privilegis e ordinacions e altres cosas condecents a la materia»— vexamos cal é a partilla da edición: «Segeuix se lo libre de consolat nouament correggit e

56. PARDESSUS II 41-42.

57. MOLINÉ LXVI; tamén p. 3-4

stampat. En lo qual son contengudes les leys e ordinacions dels actes marítims e mercantils. Et primo. En qual manera son elets los consols e lo iutge de les apelacions quascun any. Capitol primer»⁵⁸. Temos, pois, que despóis dese epígrafe xeneral, que fala dun libro de consulado, no que atopanse «leys e ordinacions dels actes marítims e mercantils» comenza a publicarse o «orden xudiciario de Valencia»⁵⁹. Se a edición do Moliné cadra de fio a fondo coa do 1494, nesta primeira parte habería coarenta e tres capítulos, sendo o derradeiro o m 43, que conte-no «xuramento dos abogados de Mallorca», que remata desta maneira: «Açi acaba lorde iudiciari de la cort dels consols». Despóis —o coarenta e catro estaría en branco— viría o cap. m 45: «De sportades de Alexandria» —testo catalán— e no cap. m 46 comenzarían «Costumes da mar»: «Aci comencen les bones costumes de la mar»⁶⁰.

Esta nova parte —as «Costumes da mar»— remataría no cap. m 297, despóis do que atópase o epígrafe: «Fins aci hauen parlat de les leys e ordinacions de actes marítims mercantiuols ara posarem ordinacions en fet de armada marítima»⁶¹. Despóis deste colón atópase o epígrafe: «Ordinacions de tot vexelle que armara per anar en cors e de tota armada: ques faça per mar»; estas ordeanzas

58. MOLINÉ LXVIII.

59. Vid. MOLINÉ 21.

60. MOLINÉ 32. Pra unha descrición desta edición do 1494, vid. MOLINÉ LXVII ss. Cf. BOHIGAS 15-16.

61. MOLINÉ LXVIII e p. 182, onde tamen atópase o epígrafe: «Aci parlarem de les naus armades e de les gualeres e de les sageties com deuen partir ni com deuen pagar a aquells qui ab eys iran», introducido cunha chamada, diante do epígrafe transcrito no testo, pro que non sei de onde procede. O BOHIGAS 16 di: Terminadas estas ordenanzas sobre naves armadas, el corrector Cealles puso el siguiente explicit, que los manuscritos, con mejor acuerdo pusieron delante: Aci acaba lo libre vulgarment apellat de Consolat, en lo qual són los capítulos e eys e bones ordinacions que os antichs ordenaren per los fets marítims e mercantiuols, e encara en fets de cors o armada . Moliné puso un explicit parecido a éste en su verdadero lugar, al fin del capítulo CCXVII de su edición, antes de las ordenanzas de las armadas, que es donde realmente termina el *Llibre del Consolat*. Como digo no testo o Moliné puxo este derradeiro explicit tra-lo cap. m 334, mentras que tra-lo cap. m 297, puxo outro diferente, pro nun caso coma noutro os dous «explicit» so-nos que atópanse na edición do 1494, dacordo coa descrición do d'Abadal, publicada po-lo Moliné.

comenzarian no cap. m 298⁶² e rematarían no cap. m 334, pechándose ó parecer toda esta parte co colofón: «Aci acaba lo libre vulgarment apellat de consolat, en lo qual son los capitols e leys e bones ordinacions, que les antichs ordenaren per los fets maritims e mercantiuols, e encara en fets de cors e armada. Los quals capitols e ordinacions foren loades fermades e promulgares per les senyories daual scrites», po-lo que coa mesma ve-no cronicón das confirmaciós⁶³ e remátase a impresión co colofón: «Fon acabada de stampar la present obra a .xiiij. de Juliol del any .M.CCCC. LXXXIIIIJ. en Barcelona per Pere posa preure e stampador»⁶⁴.

Despóis deste colofón ven outra foulareda de testos —o primeiro deles os «Capitols del rei en Pere»— que remata coas ordinaciós de seguros do 1484: «Aci acaben les ordinacions derrerament fetes sobre les seguretats maritims», tra-las que ven un folio, o centonove, en branco⁶⁵.

Pra o Bohigas o Ceelles puxo o epígrafe onde dise que «Aci acaba lo libre...», que atópase tra-lo cap. m 334, fora do seu posto, pois debería atoparse tra-lo cap. m 297, onde remata o libro do Consulado pra o Bohigas⁶⁶. Agora ben, o que interesa é saber por qué o fixo o Ceelles, poi-lo Bohigas di que nos manuscritos ponse o tal *explicit* diante⁶⁷.

Se un ten en conta as afirmaciós do Ceelles e os epígrafes é craro que a obra prubricada como «Libre de consolat» é, dun lado, unha compilación, onde atópanse os «capitols e leys e bones ordinacions, que los antichs ordenaren per los fets maritims e mercantiuols» mais tamén os («capitols e leys e bones ordinacions) en fets de cors e armada».

62. MOLINÉ LXVIII e 183.

63. MOLINÉ LXVIII e 198-199. Pra o cronicó vid. A. GARCÍA, *Un text medieval inèdit del cronicó dels juraments de les «Costumes de Mar»*, en *EHDAP* 5 (1977) 51-52.

64. MOLINÉ LXVIII, quen recibe a descrición do d'Abadal.

65. MOLINÉ LXVIII e 200 ss.

66. BOHIGAS 16.

67. BOHIGAS 16; coido que eiquí o Bohigas trabucouse un pouco, cousa que é doado de comprender a partir do feito de que o Bohigas identifica «Costumes da mar» e LCM; agora ben, nalgús manuscritos atópanse tra-las «Costumes da mar», asomade do m 297, un colofón, pro o mesmo non é o que atópase na edición do 1494 tra-lo m 334. Vid. supra n. 61.

¿Qué é o que forma parte das normas que regra-nos «fets marítims e mercantiuols»? Aparentemente as normas que atopanse nos primeiros douscentos noventa e sete capítulos, xa que no seu colofón propio dise: «Fins aci hauen parlat de les leys e ordinations marítims mercantiuols» e anúnciase que falaráse despóis das «ordinacions en fet de armada marítima». A maiores tanto o epígrafe da táboa coma o colofón particular desta primeira parte, onde atópanse douscentos noventa e sete capítulos, non semellan estabrecer lindes entre todo-los primeiros douscentos noventa e sete capítulos; mais no epígrafe da testa dise: «segueix se lo libre do consolat», onde atópanse as «leys e ordinations dels actes marítims e mercantils», o que é certo, pois nesta parte atópanse as «Costumes da mar»; pódese pois maxinar que o «Orden xudiciario de Valencia» forma parte do libro do Consulado, mais non dos «capítols e leys e bones ordinations», noutras palabras das «costumes da mar», xa que no cap. m 43 poñíase o remate do «Orden xudiciario».

Neste sentido non debe esquencerse que o Cealles perfeccionou o «Libre de consolat» con «alguns privilegis e ordinations e altres coses condescents a la materia». Teño pra min, que eiquí o Cealles emprega tamen ambigoamente o alcume «Libro de Consolat»; dun lado o emprega pra nembra-las «Costumes da mar» e doutro lado pra lumbra-la compilación, onde as «Costumes da mar», perto doutros textos de dereito marítimo, é o seu gromo fundamental. Fala así o Cealles no prólogo do «Libre de consolat» e pódese pensar que neste prólogo, po-la maneira de describi-la sua tarefa, o Cealles fala samente das «Costumes da mar», pro cando no colofón da compilación, que ven despóis do cap. m 334 o Cealles di: «Aci acaba lo libre vulgarment appellat de consolat», enton fala da compilación, esto é, tamén chámase en catalán «Libre de consolat» aquela obra onde atopanse canda outros textos as «Costumes da mar», que tamen conocense baixo o alcume de «Libre de consolat».

Pódese así afermar que nesta edición «lo libre vulgarment appellat de consolat» formaba-no o «Orden xudiciario de Valencia», onde atopábase a pragmática dos abogados de Mallorca, o capítulo das «sportades», os capítulos das «costumes da mar» e os capítulos das «Ordeanzas do corso». Pechaba este libro o cronicón das confermaciós, onde atopábanse rexistrada-las confermaciós do mesmo, que non formaba parte do «Libre vulgarment appellat de consolat»,

pois ven despóis do colofón do mesmo. Viría este feito a amosar —se esta edición ten un carauter se non oficial ó menos oficiosa— que o «Libre de Consolat de mar» váise perfeccionando co tempo —agora atopámonos xa cunha parte unitaria dividida en 334 capítulos—, po-la incorporación ó mesmo de novos elementos. Pro esto levaría consigo o ter que afermar que no 1494 aínda non formaba parte do «Libre de Consolat de Mar» impreso os «Capítulos do rei Pedro» e que no 1494 non existía aínda un úneco «Libre de Consolat de Mar» impreso e que a aparición desta edición non acabou coa variedá dos libros do consulado da mar.

Agora ben, ¿os documentos publicados tra-lo colofón da edición do 1494 non formaban parte do «Libre de Consolat de mar»? Teño pra min, que se temos xa unha idea feita dun libro tipo, a resposta ten que sere negativa, mais se o que preguntamos é se o Ceelles matinaba que do «Libro de consolado» formaban parte todos aqueles textos que podían ter interés pra o consulado de Barcelona, entón ten que sere afermativa a resposta. Da táboa feita po-lo Ceelles conozo samente o facsímil que reproduxo o Moliné na sua edición, onde atópase esta nota: «Car. xcvi. que per traspostacions a viudes pubills e po. causes nos poden traure etc.». Este reenvio cae fora dos folios que atopanse diante do colofón da edición —este atópase no folio 88—. Coido non trabucarme ó afermar que o reenvio faise o capítulo de corte de oito de outubro do 1481⁶⁸.

O Ceelles fixo a táboa pra arrecadar por materias todo-los capítulos do libro, que estaban espallados po-lo mesmo; quere esto dir, po-lo tanto, que tamen formaban parte do libro, según o Ceelles, todo-los outros textos, que atopábanse na edición do 1494, dacordo coas palabras do prólogo, onde decíase que pra repinica-lo libro incorporáronse outros privilexios e ordeaciós. É evidente que eiquí o Ceelles emprega o término libro pra falar dunha compilación —e agora non xa pra falar das «costumes da mar»— en dous sentidos diferentes: hai o libro do consulado que fora xa publicado e que agora o Ceelles publica de novo, correxido, e hai o que puideramos chama-lo novo libro do consulado correxido e arrequentado po-lo labore do Ceelles. O libro do consulado é asi unha obra viva,

68. Vid. MOLINÉ, 214 máis difícil e identifica-la outra cita que atópase no facsímil, ó non te-la ed do 1494, pro pode sere un reenvio as ordeanzas que rematan en MOLINÉ 212 Falo doutra cita cun reenvio a un folio posterior o fol. 88.

que a modiño vaise arrequentando po-la incorporación de novos textos que primeiro atópanse fora do colofón do libro, pro que rematan por incorporarse drento do propio libro diante do colofón.

A edición do 1502 refrexa aínda esta composición da edición do 1494, pois tra-lo colofón da edición ven agora sin paxinación novos folios, onde atópanse outras ordeanzas, sendo os «Capítulos do rei Pedro» a primeira ⁶⁹.

Nunha edición de Barcelona do 1518 dise xa na portada: «Libre appellat Consolat de Mar. Nouament estampat e corregit. Affegits los capitols e ordinacions dels drets del General. E del dret del pes del senyor Rey. Ab altres coses necessaries: los quals fins al present no eren estades imprimides». E no colofón dise: «Fonch emprimida e acabada la present obra. Intitulada, Consolat de mar: qui tractat dels actes maritims: e mercantiuols: e de les ordinacions e drets del general: de les entrades e exides: del principat de Cathalunya» ⁷⁰; o que calificabase de axuntanza na portada, considérase xa formando parte do libro no colofón, inda que despois deste atópase: «Seguexen se les ordinacions del dret del pes del senyor Rey com e en quina manera se paga lo dit dret del pes» ^{70 bis}, cousa que informa moi ben encol da maneira de pensar dos editores.

Noutra edición de Barcelona, tamén do 1518, esta volta do Amorós, a portada leva o título: «Libre appellat Consolat de mar. Nouament estampat e corregit. Affegits los capitols e ordinacions dels drets del General. E del dret del pes del Senyor Rey. Ab altres coses necessaries; les quals fins al present no eran estades estampades». Agora ben, o curioso desta edición é que ten dous colofós. O primeiro atópase no fol. 104 verso, col. 2, e é o que te-na edición do 1494. Po-los datos dados po-lo Moliné puiderase dir que esternamente nesta primeira parte a edición do Amorós é unha reprodución —deixando a un lado os grabados— da edición do 1494. Despois deste colofón veñen outros folios, que continua-na numeración. que recollen un fato de documentos, principando po-los «Capitulos do rei Pedro». No folio 129 verso atópase o outro colofón:

69. MOLINÉ LXIX-LXXI publica un a caron doutro un facsímil da edición do 1494 e outro da do 1502 pra proba-la sua identidade.

70. MOLINÉ LXXI-LXXIII.

70 bis. MOLINÉ LXXIV.

«Fonch estampada e acabada la present obra. Intitulada. Consolat de Mar: qui tracta: dels actes maritims e mercantiuols: e de les Ordinacions e drets del general: e de les entrades e exides: del principat de Cathalunya. Fonch estampat en la signe (sic) ciutat de Barcelona: per Karles Amoros prouençal. Any M.d.XVIIIj: a sis dies del mes de Agost»⁷¹.

O Amorós fai o mesmo que facían, coma veremos, os copistas dos manuscritos do «Libro do consulado da mar»: manté-nos colofós dos textos independentes que remataban nunha compilación.

É dabondo. Destos datos pódese ver que o LCM é unha obra aberta, que a pouco a pouco vai medrando po-la achega de novos textos. Deixando a un lado a súa definitiva cristalización, o que é evidente é que tan libro de consulado da mar é aquel que atópase na edición do 1484 coma o que atópase na edición do 1518; tanto o da edición do 1494 coma o da tradución italiana do 1539. Tamén podese afermar que do «Libro do consulado da mar» forma parte tanto as «Costumes da mar» coma os «Capítulos do rei Pedro», tanto o «Orden xudiciario de Valencia» coma as «Ordeanzas de seguros» dos maxistrados de Barcelona do 1435. E inda máis, pódese tamén afermar que non samente vanse incorporando nos «Libros do consulado» novos textos; tamén pódese dir que algún texto que ocupou durante algún tempo un posto nun libro do consulado perdéuno, atopándose no seu posto un novo texto. Lembraréi o que pasou na edición do 1484. No corpo do libro e rematando a impresión atopábanse as ordeanzas de seguros dos maxistrados de Barcelona do 1458; despois dun folio en branco e con outros caracteres tipográficos incorporáronse as ordeanzas encol da mesma materia do 1484. Nas edicións posteriores, ó partir do 1494, atópanse xa as ordeanzas do 1484 e desaparece-nas anteriores.

Neste sentido, coido que cando fálase dun úneco «Libre de consulat de mar» fálase dunha entelequia, que non ten unha realidade concreta. Hai, eso si, libros de consulados, que teñen un certo parentesco, xa que todos eles queren recolle-las normas xurídicas que pertoca-no comercio marítimo, pro nesta tarefa é o fin particular que cada autor propónse o que determina o contido destes libros de consulado. O labor do Moliné, dende un punto de vista xurídico, e máis xusto que aquel que fixo o Colon, dende un punto de vista

71. MOLINÉ LXXV-LXXVI.

filolóxico. É certo que o Moliné publicou probablemente un «Libre de Consolat» pantasma, onde recolléu os diferentes materiais que noutrora atopáronse nos diferentes libros de Consulado publicados⁷², pro o que é certo é que recolle un texto cristalizado pola aparición da imprenta. A edición do Colon ofrece un manuscrito do 1385, en canto o texto publicado fíxose naquel ano, pro pódese dudar que o libro do consulado da mar publicado seña o libro do consulado da mar que atópase no manuscrito da Real de Mallorca. O Colon di que adoutou na súa edición «l'ordre que ya imposà la imprenta des del primer incunable consular i que ha estat també seguit per Moliné en la seva edició de 1914»⁷³, afirmación da que teño que dudar, polo razóns ditas, xa que a edición *princeps* do 1484 non ten 334 capítulos numerados coma teña a edición do Colon —e tampouco teñen «Capítulos do rei Pedro»—. Tamén di o Colon que a súa edición contén «el text del nostre codi segons es presenta en el manuscrit més antic, el de la Real de Mallorca, anomenat L», afirmación que debe matizarse polo xa dito da súa maneira de editalo e por non reproducir, coma veremos, o manuscrito enteiro.

O Colon fixo, coma os editores do século xv, unha selección e para facela aceptada ó cabo os criterios do García. E estes levanos ós manuscritos.

5. *A tradición manuscrita*

Como xa vimos o García teñen ideas craras sobre este punto. Do libro do consulado forman parte sómente os textos constantes, que atópanse neste orden na edición do Colon:

- «1. Orde judiciari (caps. *m* 1-44), que designem *o*.
2. Capítols de les esportades d'Alexandria (*m* 45), que designem *s*.
3. Costumes de mar (*m* 46-252), que designem *c*.
4. Usatges de mar (*m* 253-297), que designem *u*.
5. Ordinacions de les armades i del cors (*m* 298-334), que designem *a*. I.

72. Vid. MOLINÉ XCIV s.

73. COLÓN I 14.

6. Capítols del rei En Pere, que designem *p.*»⁷⁴. E coa mesma veñe-nas afirmacións fundamentais:

«Si analizem l'estructura de la nostra compilació, quant a aquestes parts, en els manuscrits més qualificats, que són els L, D, F, i V, hi trobem immediatament una clara diversitat, que permet fer-ne grups o famílies.

Efectivament, l'estructura dels dits manuscrits és la següent:

Manuscrit L: *o s c u a p.*

Manuscrit V: *o s c a u p.*

Manuscrit F: *O s c u a p.*

Manuscrit D: *o p s c u a.*

En un primer examen d'aquesta diversitat, destaca la poca fixesa del text *p*, el qual a D és després d'*o* i a tots els altres manuscrits és al final. I cal precisar que, tant a L com a D, després del text *a* hi ha un colofó, fet indicatiu d'un final de la compilació, després del qual va a estar afegit posteriorment el text *p*.

Si prescindim, doncs, del text *p* que, tal com veurem més avall, es efectivament afegit, resten només dues formes de la compilació: la forma *o s c u a*, que segueixen els manuscrits L, F i D, i la forma *o s c a u*, que segueix el manuscrit V»⁷⁵.

O García selecciona catro manuscritos, pro non xustifica a sua decisión. Non pode se-lo carauter oficial ou oficioso dos manuscritos, poi-lo ms. D é un manuscrito misceláneo e doutra parte, ó menos, o ms. P, ten un carauter oficial, según di o Pardessus⁷⁶. Semella ser que a elección ven determinada po-la vellez dos manuscritos, pro entón teríase que ter en conta que o manuscrito máis antigo non ten sempre a redacción máis antiga. O Bohigas di que o ms. C, inda que seña do século xv, non contén ordeanza algunha posterior ó século xiv, o que fai pensar que copiou outro máis antigo⁷⁷, inda que débese trabucar eiquí o Bohigas, poi-lo García publicou do ms. C unhas ordeanzas de seguros do 1452⁷⁸, pro a sua afirmación poderíase apricar, quizaves, o ms. A, coma veremos.

O García fai ademáis esta división desprezando os datos dos manuscritos, pois na meirande parte deles os «usos da mar» non

74 GARCÍA 158.

75. GARCÍA 158. Non é mais fixo, dito sea de paso, o posto de *á* que o de *p*.

76 PARDESSUS VI 493-495.

77. BOHIGAS 13.

78. GARCÍA, Ordinacions cit. (vid. n. 163) 127 n. 23 Vid infra p. 51 ss.

teñen persoalidade propia. O García emprega o ms. V pra identificarlos e despois fai a mesma identificación nos demais manuscritos, inda que unha tal división se non atopen neles; o mesmo García reconece que os capítulos dos «usos da mar» atopanse mesturados con capítulos das «costumes da mar primeiros e segundos». E eu teño moitas dudas sobor do feito de que no ms. V atópense coma un fato de capítulos ben xibrado os chamados «usos da mar».

De remate o García fai unha tal identificación da ordeación dos manuscritos prescindindo dos textos intermedios, que atópanse entre os textos que considera permanentes, e prescindindo ademais da propia ordeación dos manuscritos. Dunha maneira moi breve darei os datos que teño dos manuscritos utilizados na edición, coas siglas do Colon, e da tradución italiana manuscrita.

Ms. L: táboa de capítulos do libro; documentos doutras maus seguramente posteriores; «orden xudiciario de Valencia», 43 capítulos sin título, sin numeración, sin epígrafes, mais cunha gran inicial repinicada; «costumes da mar», sin título xeneral pro cunha gran inicial; os capítulos teñen numeración e rúbrica e o derradeiro te-no número 258; «ordeanzas do curso», cun título xeneral: «Asi parlem de les naus armades e de les galeas e de les segeties com deuem partir ni com deuen pagar a aquels qui ab eyles hiran»; 43 capítulos con rúbricas, pro sin numeración; teñen iniciais repinicadas e ó remate das ordeanzas atopase unha invocación: «ffacta fine pia, laudetur virgo Maria»; despois, ó parecer, do verso dun folio en branco veñe-nos «Capítulos do rei Pedro», sin título xeneral, mais cunha inicial grande repinicada; 41 capítulos sin numeración nin rúbricas, xibrados e con iniciais repinicadas; rematan ó parecer, no folio 198 reuto e no verso e ate o 204 reuto atópanse sete documentos, us pra o consulado de Mallorca e outros pra o de Valencia, tamen escritos a dobre columna e da mesma letra que o libro; dos folios 204 verso ó 227 verso atopanse escritos doutras maus e a liña continua outros documentos, comenzando po-lo privilexio do trinta e un de maio do 1343⁷⁹.

Ms. D: manuscrito misceláneo, onde atópanse os privilexios de Mallorca. No folio 35 verso comenza-nos «Capitols del Consulat de

79. Arcadio GARCÍA SANZ, *Un nuevo código mallorquín del Llibre del Consolat de Mar*, en *AHDE* 38 (1968) 635-639

mar»; coa mesma comenza o «Orden xudiciario de Valencia», 43 capítulos numerados e con epígrafes. «Ordinationes Petri IV super facto consulatus maris. Barcelona 22 nov. 1343» (sic). Dous capítulos con epígrafes: «De multiplicament de las quintaladas». «Del excés que'l senyor de la nau deu carregar per sportada de las mercaderias dels qui la nolietjan». Despóis «Las bonas costumes e usatges de la mercaderia e de lo que deu fer senyor de nau á mercader, mariner ó pelegri (passatjer) e aquests deuen fer à aquell»; son 256 capítulos numerados e con epígrafes. O m 46, o prólogo, sin numerar. De asomade «De les naus armadas, galeras e satjetias»: 42 capítulos con numeración propia e, de remate, o colofón do manuscrito orixinario ⁸⁰.

Ms. V (1407-1409): Na primeira seución: táboa das rúbricas de todo o libro, prólogo do manuscrito. Segunda seución: coarenta e seis capítulos do «Orden xudiciario de Valencia», sin título e con numeración propia, onde marra-nos m 4 e 18 e ofrece a novidade dos capítulos 41-46, inda que os capítulos 41-42 so-nos capítulos das «sportades»; o cap. 23 ten unha forma diferente da que atópase nas edicións. Terceira seución: «Costumes da mar», sin título propio, 249 capítulos con numeración propia, inda que señan 259, poi-lo manuscrito recunca a numeración dos capítulos 205-214; dentro das «Costumes da mar» atópanse as «ordeanzas do corso». Coarta seución: «Les costumes de Mar de Barchinona»: onde recollense os coarenta e un capítulos dos «Capítulos do rei Pedro»; pechanse co cronicón das confirmacións: «Dels fermaments fets e juraments de les Costumes de la Mar». Quinta e derradeira seución: trinta e dous privilexios, que van dende o 1283 ó 1420, aínda que os dous derradeiros señan unha achega posterior. Estas partes forman cinco

80. José María QUADRADO, *Privilegios y franquicias de Mallorca, cédulas, capítulos, estatutos, órdenes y pragmáticas, otorgadas por los reyes de Mallorca*. (Palma de Mallorca 1894) 47-56. No esencial cadra con esta descripción a do MOLINÉ LIV-LV, inda que di que os «Capítulos do rei Pedro» rematan co capítulo que adoito atópase no LCM co n.º 45 e recolle os epígrafes xa recollidos do cap. das «sportades». O Moliné publica unha lámina onde pode verse o comenzo desta parte do ms.; despóis das correccións feitas ó derradeiro documento transcrito, comenza a metá da liña: «Assi comensen los capitols del consolat dela mar e primerament de la electio del consols e deliutge; cap. Cascun ». Vid. infra n 129.

seuciós ben xibradas, atopándose no inicio de cada unha delas unha miniatura ⁸¹.

O Moliné di que as «Costumes da mar» te-no epígrafe seguinte: «aquestes son les rubriques de les bones costumes els bons usatges de la mar» ⁸², pro é porque copiáu eiquí o epígrafe da táboa, pois no testo as «Costumes da mar» non atopanse baixo un titulo xeneral.

Ms. F: é un manuscrito manco dalgús folios na primeira parte, e hoxe este defeuto e meirande ó parecer; o Brocá di que comenzaba no folio II —a numeración romá é coetánea e continua ate o folio CLVIII, derradeiro do manuscrito—. Comenzaba así pola derradeira parte do capítulo 6 do «Orden xudiciario». O Brocá di somente que rematado o libro de consulado —no sentido da época— comenza nas «Ordeanzas do corso»: «Assi parla de les Naus armades». Non di se estan ou non numeradas de forma independente. Veñen despois dous pautos entre a vila de Barcelona e o conde de Barcelona da mesma data: o 29 de xaneiro do 1373, que atópanse tamen no ms. P. Despois veñen nos «Capítulos do rei Pedro»: «Carta domini Regis super usaticis». Tampouco o Brocá di ren sobor do número de capítulos e da sua numeración. Rematase o manuscrito co «Orden xudiciario de Barcelona»: «Com se elexen los consols de la mar en Barchinona», que ten un preambulo e vinteseite capítulos ⁸³. Algo mais concretas so-nas novas dadas polo Perels ⁸⁴, inda que non teñen pra o noso lerio moito interés. Lembraréis que falando da táboa —tres folios sin numerar e mancando o inicial— di que comenza cunha referencia ó folio CXXII e remata cunha referencia o folio CXLIII, xa que permetenos saber que ó menos un dos pautos ditos era mencionado na táboa. Tamén di o Perels que os capítulos do «orden xudiciario de Valencia» non teñen numeración e que atópanse os capítulos das «sportades» na sua dobre versión.

Ms. N: táboa das rúbricas; «Aci apres apparen ordinacions den Santacili»; «orden xudiciario de Valencia»; cap. das «sportades»;

81. Arcadi GARCÍA SANZ, *La datación* cit 257-271. Vid. tamén a edición do Ferrando. Vid. infra p. 78 ss.

82. MOLINÉ LV-LVIII.

83. G. M. de BROCÁ, *Un manuscrit del «Libre del Consolat de Mar» Creación del Consolat mercantivol a Girona*, en *RJC* 22 (Barcelona, Noviembre-Diciembre 1916) 567-569; descarto eiquí un traballo anterior e as novas do Valls

84. Leopold PERELS, *L'ordre judiciari mercantil de Barcelona del segle XV*, en *RJC* 37 (1931) 1-35.

«dels bons stabliments e costumes de la mar»; colofón: «ffinit es lo libre e acabat gloria e laor sia dada a Jhesu Christ amen»; «Ordeanzas do corso»; colofón: «Ffinito Libro sit laus gloria xpro»; «Aci començen los usatges de Barchinona» (=«Capítulos do rei Pedro»); o que se ten que pagar na insua de Cerdeña; cronicón das confirmaciós; ordeaciós dos conselleiros de Barcelona sobor dos cónsules de Sicilia; ordeaciós de seguros do 1435; outras ordeaciós en forma de pregón; ordeación de Santiago I en latin e outras do mesmo rei e testos do «Recognoverunt proceres»; pragmática do rei Alfonso do 2 de outubro do 1424 e pecha o manuscrito unhas ordeaciós do 1436 dos conselleiros de Barcelona, que rematan no folio 188 reuto, permanecendo en branco o verso ⁸⁵.

Ms. P: incompreto. Século xv a xvi. Táboa, forma de elixi-los consules, esto é o «Orden xudiciario de Valencia», capítulo das «sportades», «De bones costumes e bons stabliments», esto é, «Costumes da mar»; colofón: «ffinit, etc.». Esto é, non copiouse enteiro; «Aci parle de les naus armades e de les galeres e sagetias com deuen partir ne com deuen pagar a aquells qui ab ells van ne stan en campanya lur» (=«ordeanzas do corso»); dous pautos do rei Pedro IV coa vila de Barcelona no 1373, que atópanse xa no ms. F; a parte do manuscrito escrita a liña contina comenza coa «Carta domini regis super vsacius», esto é, os «Capítulos do rei Pedro» e remata o manuscrito coas ordeanzas de seguros do 1458, que finan no capítulo coarto, poi-lo manuscrito e manco ⁸⁶.

Ms. U: s. xv. Táboa; ó parecer despóis veñe-no «orden xudiciario de Valencia», os capítulos das «sportades», as «costumes da mar» e as «ordeanzas do corso»; despóis unhas ordeanzas pra os consulados de Levante e de remate as ordeanzas de seguros do 1436. Os capítulos non teñen numeración. Marran po-lo tanto os «Capítulos do rei Pedro» ⁸⁷.

Dos mss. A e C podo da-las novas que respondendo as miñas preguntas doume o meu compañeiro Montagut ⁸⁸.

85. MOLINÉ LIX ss. Vid. máis adiante p. 69 ss.

86. MOLINÉ LXI-LXII; PARDESSUS VI 493-494; BOHIGAS 16

87. MOLINÉ LVII.

88. Non débese atervar moito as citas, xa que eiquí non quero publica-lo contido destes manuscritos, senon identifíca-lo; neste sentido, e pra evita-lo meo compañeiro críticas parvas, reconozo que trabuquei moitas veces ó lér

Ms. A: o ms. B-80 do Arquivo de Historia da vila de Barcelona é do século xv, segun o Colon. Ten hoxe ó parecer oito folios de epígrafes, cento trinta e seis folios co testo e unha achega de seis folios máis.

Nos primeiros oito folios atópase a táboa de epígrafes, aínda que seña incompreta —xa que perdéuse o primeiro folio antigo— polo que os primeiros epígrafes que atópanse nela son:

«De guarda de pelegrins qui moreran en nau .. a 34»

«De hom qui vage per viatges si mor a 34»

epígrafes que cadran cos do m 118 e do m 119. Este xeito de citar manténse hastra o folio 7 verso, onde deixase de aseña-lo folio:

«Almirall pot fer conestables e pot los millorar

dunha part a 126»

Esto é, hastra o m 305 dase a aseñación do folio, pro despóis sigue-nos epígrafes sin aseñación dos folios onde atópanse os capítulos:

«on parla de notxer» = m 307

«de proher» = m 308

«D'omens darmes» = m 310

.....

«De guardians seneschals» = 333 b (segundo epígrafe).

Nesta táboa manca a indicación do comenzo das «Ordeanzas do curso» que atopase no m 306, pro tamen manca o epígrafe que atópase hoxe no m 298. Os epígrafes da táboa, como é adoito, non sempre cadran cos epígrafes que atopanse no testo.

Resumindo: teríamos que nesta táboa recollense os epígrafes dos capítulos que atopanse no manuscrito, pro manca a aseñación de ser capítulos e a numeración. O defeuto inicial da táboa non permite saber se nela atopábase un título pra todo o manuscrito e se tamen atopabase o título do «Orden xudiciario de Valencia» e o título das «Costumes da mar».

Tampouco o gromo do manuscrito, onde atopáanse os capítulos, resolve o problema, xa que tamen e defeutuoso o folio primeiro, pois no reuto manca a primeira columna e no verso a segunda; coido

os textos trascritos polo Montagut, pro non trabuqueime non datos recibidos quero dir que no testo das trascricións poden atoparse moitas trabucacións, pro os datos son de fiar.

que rachouse o folio po-la metá, po-lo que hoxe atópase do xeito dito. Agora ben, no folio oito reuto, na primeira columna, atópase o epígrafe: «De fermances de dret sobre quals em pares es rebude», que ven sendo o m 42⁸⁹; o resto da columna deixouse en branco e na columna segunda, con capital, atópase a rúbrica: «De multiplicament de quintalades» e no verso, na primeira columna: «De quintalades», co testo latino, e despois xa na segunda columna atópase: «Aci comencen les bones costumes e los bons usatjes de la mar».

Pódese dir po-lo tanto que os capítulos das «sportades» non forman parte do «Orden xudiciario», que pechábase co capítulo que hoxe é o m 42; marraba po-lo tanto o capítulo do xuramento dos abogados de Mallorca.

O xebre, ó parecer, ponse entre o «Orden xudiciario de Valencia» e os «Capítulos das "sportades"», que estan diante das «Costumes da mar»; agora ben, inda que non haxa ningun cómaro en branco entre os ditos capítulos e as «Costumes da mar» ni nas «Costumes da mar» comencen cunha capital como comenza nos ditos capítulos, é tamén certo que os ditos capítulos das «sportades» atópanse fora das «Costumes da mar», pois estas comencen despóis dos dous ditos capítulos, coma amosa o epígrafe recollido. Tampouco atópase nas «Costumes da mar» aseñación de capitulado nin numeración: samente recollense epígrafes e o testo posto baixo os mesmos.

Este feito esprica que non haxa un xebre craro entre o que hoxe conocemos coma «Costumes da mar» e o que hoxe conocemos coma «Ordeanzas do corso»; tra-lo capítulo que leva a rúbrica «De senyor de nau quis straura de anar en lo viatge com sen poden strer los mariners», que ven sendo o m 297, atópase o epígrafe: «Aci comencen les costumes e usances de naus de galers e de sageties armades que van en cors». Neste manuscrito non atópase ningun colofón no remate das «Costumes da mar». Coma xa vimos este epígrafe «Aci comencen...» manca na táboa de epígrafes, pro ó parecer hai un cómaro en branco entre o epígrafe do derradeiro capítulo das «Costumes da mar» = m 297 e o primeiro das «Ordeanzas do corso» = m 298, xa que déixase en branco o resto da primeira columna do folio 7 verso da táboa e coménzase coa primeira rúbrica dos capítulos das «Ordeanzas do corso» na segunda columna.

89. Vid. a edición do Moliné

Tamén atópase no testo, pro non na táboa, o epígrafe que aseña que comenza-nas «Costumes do corso», que está no m 306.

Aínda que na táboa esteña-nos epígrafes das «ordeanzas do corso», se non atopa-nos derradeiros, que atópanse no testo: fol 136 reuto col. 2: «Com se deuen leuar les quintes», «De leuar quintes», «de levar quintes», «De armar la notxeria»; fol. 136 verso col. 1: «De armar a tot plant e a tot seguit», «Com se leuen les quintes», epígrafes que cadran cos seis párrafos que hoxe forma-no m 334, po-lo que o ms. A tería dividido o actual m 334 en seis capítulos.

Todo esto é difícil de interpretar, pro poderíase dir que a fusión que lévase a cabo na táboa —ó menos tal como atópase hoxe— non atopa o seu refrexo no testo, onde inda mántense as lindes entre os distintos elementos que forman este manuscrito. Tra-lo m 334, atópase o colofón:

«Facto fine pia laudetur
Virgo Maria.
Ffinito libro sit laus et gloria
xpo amen.»

Despóis dunha columna en branco, achegáronse outros folios sin numerar, que fórono modernamente, e levan agora os números 137-142, onde atópanse os «Capítulos do rei Pedro», sin numeración; non rexistráronse na táboa. Teño pra min, po-lo tanto, que tampouco neste manuscrito atopábanse orixinariamente; o problema importante e saber cando foron axuntandos e por qué.

Pra rematar direi que no fol. 73 verso columna 2 atópase esta nota: «vacat hic usque in tali signo (x): Senyor de nau o de leny qui manare la sua nau... (x) tots los mariners o de la maior» o que somella querer dir que copiou este manuscrito doutro anterior defeutuoso.

Ms. C: o ms. 989 da Biblioteca de Catalunya é, ó parecer, do século xv e po-las notas que ten na parte interior da cuberta debeu sere de propiedade privada. Ten hoxe cento coarenta folios, numerados modernamente a lapis, pro orixinariamente tería que ter máis, xa que mantén unha numeración antiga esmorecida que chega ate o folio 150: manca-nos folios antigos: 1, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19 e 147; sendo así, teríase que correxi-lo número total de folios antigos do meu informante, xa que terían que sere cento cincuenta e dous. Do antigo folio 147, rachado, quedan restos.

A táboa de epígrafes ocupa os catro primeiros folios da numeración de hoxe, que sería-nos folios 2-5 antigos, pois falla o folio primeiro antigo; non temos así o epígrafe da táboa nin tampouco novas sobor do inicio do «orden xudiciario de Valencia».

Na táboa, no folio II col. 1.^a antigo —fol. 1 de hoxe— atópase a aseñación: «Dels bons costums e usatges de la mar... fol. 14». Este feito leva consigo que se non poida recupera-la composición do «orden xudiciario de Valencia», inda que pódase recupera-las das «Costumes da mar».

A táboa, que infórmanos hoxe do contido do manuscrito a partir polo tanto do folio XIV antigo —que hoxe se non conserva—, sólo ten epígrafes, pois non hai aseñación de capítulos nin hai numeración.

A táboa da-nos novas ate o folio CXXXIII antigo (=132 de hoxe), inda que non sempre compretas, pois da novas continas hastra o folio CXXV antigo (=114 novo), onde do epígrafe «Com mariners son tenguts de sorrar e dessorrar... 125» (=114 novo) (este capítulo é o m 180, pro neste manuscrito C atópase despóis do m 297 e remata as «Costumes da mar») bríncase ó epígrafe: «De patró que no puxa manlevar sobre les parts... 142» (=131 novo), que na realidade é o folio CXLI verso antigo, epígrafe do mp 24. A espricación atópase no feito de que no testo dende o folio CXXVI (=115 novo) se non atopan rúbricas ate o folio CXLI reuto antigo (=130 novo): «que pescador ho altre no gos...» (=mp 22); «que barquer non pense . » (=mp 23); estos dous epígrafes se non atopan aínda na tabóia, pro atópase xa: «De patro que no pusca manllevar...» = mp 24 e os demáis epígrafes hastra o mp 40.

O gromo do manuscrito comenza hoxe —despóis do remate da táboa no fol. de hoxe 4 verso 1.^a columna— no fol. 5, que ven a se-lo folio IX reuto, 1.^a columna na numeración antiga, onde comenza o m 8, polo que perdéronse, ó perderse os folios antigos xa ditos, os primeiros capítulos do «Orden xudiciario de Valencia»; deste xeito nin temos compreto o «Orden xudiciario» nin podemos recupera-lo, xa que manca o folio primeiro antigo, onde atopábase o seu contido; pola mesma razón non podemos saber coma remataba este «Orden xudiciario» e se nel ou despóis del atopábanse ou non os dous capítulos das «sportades», un en catalán e o outro en latín.

Po la mesma razon tampouco sabemos como comenza-nas «Costumes da mar» no testo, aínda que sabemos po-la táboa que comen-zaban co epigrafe «dels bons costums e usatges de la mar».

Despóis destas lagóas o manuscrito conservado comenza no folio XVI reuto antigo, columna primeira, que é o folio 8 reuto primeira columna de hoxe, coa frase: «conagude de homens entesos en aquela raho e qualque enteniment que aquells ne jutiaran que allo sians tenguts los personers comprar e de pendre en llur coarte...», que eu po-lo momento nun fun capaz de identificar. Na sua edición o Colon di na nota 12 o m 39, que «a partir d'aci i fins al capitol m 55 manca el text de C», pro, se non trabúcome, non volven a atoparse variantes do ms. C hastra o m 109.

O que pode afermarse e que no testo impreso do Colon non atopase, nos primeiros capítulos das «Costumes da mar», unha frase semellante a recollida e os datos que envióume o Montagut da táboa, non son nin craros nin compretos, pro pódese afermar que o orden de aparición dos capítulos non é o mesmo que atópase na edición do Colon —nin tampouco na edición do ms. V—, cousa que doutro lado atopa a sua conferma no posto do m 180 neste manuscrito: ó cabo das «Costumes da mar», zarrándoas.

Na primeira parte do testo, onde atópase fragmentariamente o «Orden xudiciario de Valencia» os capítulos non teñen epígrafes, pro están numerados, pechándose, po-la conservación a cachos do manuscrito, co cap. 39 = m 39⁹⁰.

Tamen os capítulos das «Costumes da mar» teñen numeración, mais propia, que debía comenazar co primeiro capítulo, inda que hoxe o primeiro numerado que atópase e o cap. 9, que atópase no fol. xvi verso —non esquencerse que o capítulo que atópase no fol. XVI reuto antigo, que é o fol. 8 novo, te-no epígrafe «Si algu promet de fer part en nau o barque com es mester li o atena», que non é de doada identificación, inda que podería pensarse no m 282— e despóis vai adiante a numeración hastra, ó parecer, o cap. 50, onde remata; neste sentido quero aseñar que o cap. 44 deste manuscrito, que atópase no fol. XXXV reuto, 1.^a columna, da numeración antiga, e que é o novo folio 24, te-na rúbrica: «Senyor de nau no pot prestar mariner ha altra nau», que cadra co do

90. Vid. ed. COLÓN m 39 n. 12.

m 148: «Senyor de nau no pot prestar mariner a altra nau», que teria o numero 111 no ms. L, numerando independentemente as «Costumes da mar».

O primeiro capítulo sin numerar atópase no fol. XXXVI reuto, numeración antiga, 1.^a columna, que é o novo folio 25, e te-na rúbrica: «Per qual raho se pot partir mariner de nau», que podería cadrar coa do m 155.

Esta nova parte remata ó parecer no fol. CXXVI reuto antigo = 115 novo, onde atópase o cap. que leva a rúbrica «Com mariner son tenguts de asorrar e desssorrar», que ven a se-lo m 180, mentras o capítulo anterior, que te-na rúbrica «Mariners qui son acordats ab senyor de nau ho de leny com deuen seguir lo viatge», e atópase no fol. CXXIV verso, 2.^a columna, antigo, que é o novo folio 113, ven a se-lo m 297.

O folio CXXVI antigo que é o folio novo 115 ten no reuto o derradeiro capítulo das «Costumes da mar» deste manuscrito, que é o m 180, mentras a súa segunda columna está en branco e orixina-riamente tamen debeu quedar en branco o verso, onde hoxe atópanse samente probas caligráficas. Por precisión, inda que non sei a razón deste feito, o fol. antigo XXIII verso = 12 novo e o fol. antigo XXIII reuto = 13 novo, deberon quedar en branco e foron empregados pra probas caligráficas. Lembraréi que as «Costumes da mar» comenzaban no folio antigo XIV, hoxe perdido. As «Costumes da mar» non teñen colofón.

No folio antigo CXXVII reuto, primeira columna, que é o novo 116, atópase a rúbrica «De armament»; non atópase po-lo tanto a rúbrica do m 298, inda que si o capítulo: «Primerament deu iurar lo almiraal». Estos capítulos nin teñen rúbricas nin numeración, inda que poden identificarse po-las iniciais capitales e po-los cómaros en branco que xiban us dos outros; o derradeiro capítulo atópase no folio antigo CXXXVI verso que é o novo 125, na segunda columna: «Si algu armara nau ho leny ho gualera», que ven sendo o m 334. Tampouco atópase eiquí colofón algún.

No folio CXXVIII antigo, que é o novo 118, atópase un capítulo, tamén sin rubrica, coma todo-los outros, que comenza así: «Aci comensan las costumes del cors soes ha entendre de nau ho de leny de rems», que ven sendo o m 306. Como xa sabemos e agora conocemo-las razóns, estos capítulos se non atopan rexistrados na

táboa por non tere epígrafes, xa que non hai fundamento serio pra afermar que se non atopan rexistrados, pois non formaban parte orixinariamente do manuscrito.

Po-los datos que teño, inda que non señan moi craros, o m 334 remataba no folio antigo CXXXVII reuto, que é o 126 novo, a metade da primeira columna, xa que o Montagut dime que atópase unha columna e media en branco no folio CXXXVII reuto e no verso atópanse denovamente exercicios caligráficos e o título «Ordinations que feu lo S.R. en P. sobre los acordaments e altres coeses segons en quales apar»; atópase no folio antigo CXXXVIII reuto primeira columna, que é o novo 127, o protocolo en latín, que ven sendo o mp O. Os «Capítulos do rei Pedro» chegan ate o folio antigo CXXXI reuto, que é o novo 130, sin rúbricas nin numeración, inda que comenzan a atoparse rúbricas xa no dito folio como xa dixen. O capítulo mp 40 atópase no folio CXXXIII reuto antigo, que é o 133 novo, e remata na primeira columna; despóis dun cómaro en branco, na columna segunda atópase o xuramento dos abogados, esto é, o m 43, po-lo que non sería esauta a afermación do Colon: o m 43 se non atoparía nese posto no manuscrito C, pro atopariase despóis dos «Capítulos do rei Pedro»⁹¹. Despóis deste xuramento dos abogados, no folio antigo CXXXIV verso, que é o 133 novo, comenzando unha columna, atópase baixo a rúbrica «Conssolatges», seis capítulos sin epígrafes, pro con capitales e comaros brancos entre si, que chegan ate o folio antigo CXXXVI verso 2.^a columna, que é o novo 135. Os datos que teño é que son unhas ordeanzas dadas po-los conselleiros de Barcelona pra os navegantes «del senyor Rey daragó he de Mallorques los quales capitols volen que serven he obtenguan he aproven los Consols de Masina he de Seragossa he de Trapena». Teño pra min que pódense identificar coas ordeanzas pubricadas po-lo Mariné⁹².

O manuscrito remata cos capítulos que baixo a rúbrica «Segu-retats» ocupan dende o folio CXXXVIII antigo que é o 136 novo hastra o remate, e que pubricóu o García, xa que so-nas ordeanzas de seguros do 1452⁹³.

91. Vid. m 43 n. 1 (ed. Colón).

92. MARINÉ 209-211, inda que nestas fálase tamén de Palermo.

93. GARCÍA, *Ordinacions* cit. (vid n 163) 135 ss.

De cabo darei os datos que recolle o Giardina do manuscrito que conte-na tradución italiana⁹⁴. É un manuscrito do século xv, que ten 140 folios é o seguinte título: «Libro de lo officio del consolato et de lo stilo et uso de dicto officio et de le regione et costume del mare», onde, a meu ver, fáise un craro xebre do contido do LCM suliñando así o seu carauter de compilación e distinguendo po-lo tanto entre o «orden xudiciario de Valencia» e as «Costumes da mar».

No seu traballo o Giardina non é sempre moi craro, pro, ó parecer, mentras no folio primeiro atópase o escudo dos Tolomeos de Siena, nos folios 2-7 atopase, inda que feita por maus diferentes e non de maneira correuta, a táboa de epígrafes. O manuscrito péchase no folio 140 reuto con esta iscrición: «Telos. Die decimo mensis Januarii 1479 el presente libro de Consolado, et ragione maritime et mercantevole da Cathalano in italiano idioma per me Francisco Biscontini de papia». Po-lo tanto o remate desta traduciónponse o 10 de xaneiro do 1479 e fíxose por un tal Francesco Biscontini da Pavia, do que o Giardina non pode dir ren.

O Giardina aferma que nesta tradución manca o «Cronicón das aceutaciós» e que o testo no «Consolato» non ten diferencias sustanciales co testo impreso, inda que a voltas hai outra sistemática, po-lo que ofrece os epígrafes dos primeiros coarenta e un capítulos, que cadran cos coarenta e tres ou coarenta e cinco capítulos das edicións impresas, que forma-no «Orden xudiciario de Valencia». Os epígrafes tómaos o Giardina da táboa, xa que recolle o dato seguinte «Incomincia la Taula del presente libro de Consolatu a regione maritima et mercantevole». Agora ben, o Giardina recolle somente coarenta epígrafes, pois o epígrafe recollido non semella sere o epígrafe do primeiro capítulo, que seria o m 1. Deste xeito o primeiro epígrafe da tradución cadra co m 2.

Tendo presente este feito, pódese afermar que nesta tradución—ou millor neste fato de epígrafes dado po-lo Giardina—mancanos cap. m 1, 20, 24, 33 e 43 da ed. de Colon e da ed. do 1484, inda que semella ter un capítulo novo, o (22) desta tradución: «De la jurisdictione de li Consoli in che se estende», que nin cadra co

94. Camillo GIARDINA, *Una traduzione italiana del «Consolato del mare» de 1479*, en *Rivista del diritto della navigazione* II 1 (Roma 1936) 200-205.

m 22, xa que éste é o (20) da tradución nin co m 31, que é o (29) desta tradución; podería quizaves aveciñarse o cap. 46 do ms. V. O derradeiro capítulo desta primeira parte da tradución é o capítulo das «sportades» que é o m 45 ou o cap. 44 da edición do 1484. Ó parecer se non atopa o testo latino.

Coido que o Giardina quere dir que ningún destes capítulos atópanse numerados, pro recolleréi as suas palabras, un tanto equívocas: «Tutti i capitoli non sono numerati». Despóis ten que vi-lo testo das «Costumes da mar», do que o Giardina di samente que este manuscrito no-nos di ren de novo sobor do mesmo. Agora ben, rematado o «Consolat del mare», coa mesma, sin solución de continuidade, atópanse unha poulareda de testos, que atópanse xa nas edicións do LCM, así nas venecianas do 1567, do 1584 e do 1806. Esta afirmación é a de que o derradeiro capítulo do «Consolato» atópase no fol. CXVI r. e te-no epígrafe «Si alcuno Signore de nave o de legno chi avrà acordati marinari, se excuserà per iusta ragione de andare in lo viaggio», sendo o cap. 294 («Del patrone e de' marinari che non si vorranno andare in viaggio») da edición do Casaregis, permetenos facer algunhas concrusiós.

Pra o Giardina, coma pra o Capmany ou o Pardessus o «Consulado» ó parecer sigue sendo as «Costumes da mar», polo que estas péchanse no dito capítulo que é o m 297 ou o cap. 290 da edición do 1484. Tamén pódese dir que tampouco atópanse numerados os capítulos destas «Costumes da mar» e de cabo pódese afirmar que coa mesma, sin solución de continuidade, atópanse outros capítulos, que comenzan no mesmo fol. CXVI r. co que te-no epígrafe: «Come debe iurare l'admiraglio e Capitano et Capitano et armatori», que é o m 298. O Giardina da 38 epígrafes, dos que daréis coa mesma a equivalencia coa edición do Colon⁹⁵.

Cadro os capítulos da edición do Colon cos epígrafes mencionados po-lo Giardina; podése po-lo tanto recuncar un mesmo capítulo da edición do Colon, cando cadre con dous epígrafes diferentes da tradución.

95. Téñase en conta que falaréi por exempro do m 333a e do m 333b, pra lumbra-las duas partes que pódense atopar neste capítulo, xa que nalgús manuscritos formaban non un, senon dous capítulos, comenzando o segundo alí onde atópase un epígrafe intermedio na edición do Colon. Xa se sabe que o Colón unhas veces fixo capítulos bis e outras non

O orden destes epígrafes e o seguinte: m 298; m 300; m 301; m 299; m 303; m 304; m 305; m 305; m 305; m 302; m 307; m 308; m 309; m 310; m 311; m 312; m 313; m 314; m 315; m 316; m 317; m 318; m 320; m 321; m 322; m 323; m 324; m 325; m 326; m 327; m 328; m 329; m 330; m 331; m 332; m 333a; m 333b; m 334.

Unha primeira conxunción: dun lado o m 299 e o m 302 atopanse fora de posto —con respecto a edición do Colon— e doutro lado marra-nos capítulos m 306 e m 319; ademais o m 305 dividéuse en tres capítulos diferentes e o m 333 en dous. Agora ben hai algunhas dúbidas que non podo resolver sin ve-lo texto, poi-los epígrafes non son de fiar, xa que en toda-las edicións e manuscritos atopanse epígrafes recuncados ou fora de posto, po-lo que chamaréi a atención sobor daqueles máis revesados.

Na tradución italiana o coarto epígrafe é «come deve essere computata victuaglia de nave armate» e o décimo: «De convenience a manifestare». Na edición do 1484 atópase «Capitol .cclxxxii. Com deu ésser comptada vianda en nau armada en cartes cvij», que é o m 299: «Capitol de pagar la messió», e «Capitol cclxxxv. De conuinences a manifestar en cartes cviiiij», que é o m 302: «Com deu esser comptada vianda de nau». Da súa parte o Moliné no m 299 te-no epígrafe: «Com deu esser comptada la messio e lo guany en nau armada» e no 302: «De conuinences». Os mss. D e V (eiquí son os cap. 174 e 177) van dacordo coa edición do Colon, isto é, co ms. L, inda que no ms. D o m 302 te-no epígrafe: «Com deu esser comprada vianda de nau».

Teño pra min que seña cal seña a identificación proposta pra «Come deve essere computada victuaglia de nave armata» este epígrafe estaría fora do seu posto —sempre respecto a edición do Colon—, xa que o primeiro epígrafe «Come deve iurare l'admiraglio e Capitano et Capitano et armatari» é o m 298; o segundo «De la quinta de homo che va per se medesimo» é o m 300 e o terceiro, «Del sacramento et homagio del Comito» é o m 301; a identificación deberíase facer dacordo coa edición do 1484 e po-lo tanto o epígrafe de «Come deve essere...» cadraría co m 299 e o epígrafe «De convenience...» co m 302, po-lo que estes dous capítulos terían un posto diferente ó adoito nos outros manuscritos e edicións, pro teríamos ademais que nesta tradución nin atópase o título que pode

verse no m 298 nin atópase tampouco o título do m 306, xa que a tradución non ten este capítulo ó parecer.

Teríamos así que cos datos do Giardina todo-los capítulos que atópanse nesta tradución veñen a oito us despóis dos outros, pro esto debe dirse non samente dos capítulos do «orden xudiciario», das «costumes da mar» e das «ordeanzas do corso», mais tamen dos outros capítulos dos outros testos. Arrecadando as novas dadas po-lo Giardina e decatándose de que algús dos datos proveñen da táboa, xa que o manuscrito e manco dos folios 129-136, e correxindo algunha errata o resto do manuscrito é o seguinte:

Despóis das «Ordeanzas do corso», que remataría no fol. 126 v, no 127 r e ss. atoparíanse os «Capítulos do rei Pedro», despoi-lo que o Giardina maxina que pode identificarse coas «ordeanzas de seguros» do 1458, aínda que coido que quizaves seña-nas do 12 de abril do 1432, aínda que no-nas conozo, po-las razóns que direi coa mesma. Despóis atópanse as «ordeanzas de seguros» do 21 de novembro do 1435 e as do 14 do mes da sega do 1436. No folio 139 atópase a disposición derradeira que recollese nesta tradución: «Ordinatio ni de che casi vicij o infirmitate deli schiavi sia loco et redibitione de quelli et in quale manera in li piayti che ne surtiranno degia essere proceduto» e no folio 140 reuto atópase o colofón, que quedou xa recollido.

6. *Concrusiós provisionales: unha primeira aproximación ó problema*

As ediciós son aqueles testos nos que por vez primeira, ó que conocemos, quere-se facer un texto unitario, cunha mesma numeración, de testos que hastra aquel intre mantiña-na sua propia individualidade; estos testos numerados conxuntamente son, po-lo orden da sua aparición, nas ediciós: o «Orden xudiciario de Valencia», o capítulo onde recollese o xuramento dos abogados, os capítulos das «sportades» as «costumes da mar» e as «Ordeanzas do corso», que forman un conxunto de 334 capítulos na edición do Cealles.

Todos estos testos atópanse nos manuscritos, inda que non en todos, agás o capítulo do xuramento dos abogados de Mallorca, que se non atopa en ningún manuscrito según o Colon, inda que o

Montagut dime que atópase, como xa dixen, no ms. C, mais fora do «Orden xudiciario». Os «Capítulos do rei Pedro» quedaron fora deste esforzo unitario coa úneca esceución da edición *princeps* da tradución italiana do 1519 e da súa reedición do 1539, onde dous capítulos deste texto incorporáronse dentro das «Costumes da mar» no posto dos m 154, m 155, m 156, m 157 e m 158.

Este esforzo unitario nace dun certo degaro de unifica-lo dereito procesal e o dereito material o que pode espricar que as solucións foran diferentes. Na edición do 1484 numéranse somente 303 capítulos, xa que o derradeiro numerado é o cap. 303 (203 no texto), que ven sendo o m 307-308. É certo que despois veñen outros capítulos, que hoxe atópanse nas «ordeanzas do corso», pro xa sin numeración. Ademais mentras os cap. 291-301 (no texto 191-201), que cadran cos m 298-305) semellan formar parte dos capítulos das «Costumes da mar», os cap. 302-303 (no texto 202-203), a identificar cos m 306-308, teñen un título propio, que semella xiba-los dos capítulos anteriores: «Aci comencen les costumes del cors, ço es entendre de nau o leyn de rems».

Somente coa edición do 1494 chegouse a consolidar un texto unitario de 334 capítulos do contido xa dito, inda que non trunfou axiña xa que na tradución italiana do 1519 e na súa reedición do 1539 atópase somente as «Costumes da mar», inda que compretadas cos outros textos xa ditos.

Estos esforzos pra unificar cunha numeración continua textos diferentes, que levaron a numerar unitariamente un feixe de 334 capítulos, non fixo desaparece-los testemuños dun orixe diferente dos seus capítulos. Na edición do 1484 manténse o título das «Costumes da mar» e das «Ordeanzas do corso», aínda que coas características xa ditas. Ademais esta nova unidade compretabase con outros textos pra forma-lo LCM; así esprícase que o colofón da edición do 1484 atópese despois das «ordeanzas de seguros» do 1458, o que te-na súa conferma no colofón da táboa.

Na edición do 1494 rematase o «Orden xudiciario de Valencia» no m 43, atópase coma un capítulo independente o capítulo das «sportades» e atopanse as «Costumes da mar» cun título propio diante do m 46 e cun colofón propio despois do m 297. O mesmo pódese dir das «Ordeanzas do corso», que ten un título propio diante do m 298 e un colofón tra-lo m 334, aínda que tense que

dir que agora aqueles capítulos achegados as «Costumes da mar» —os 291-301 = m 298-305— teñen un título propio: «Ordinacions de tot vexell qui armara per anar en cors e de tota armada ques faça per mar», pro non teñen colofón propio e o seu xebre dos capítulos derradeiros, os m 306-334, tense que facer dunha maneira artificial, xa que no m 306 atópase o epígrafe: «Ordinacions de Cors» e o dito capítulo comenza: «En les costums del cors...», atopándose un colofón tra-lo m 334, colofón que amósase coma o do «libre vulgarment appellat de consolat».

Podérase dir que hai un esforzo pra facer destes capítulos derradeiros, que atopanse tra-las «Costumes da mar» —m 298-334— un texto independente. Xa que o ms. V está pubricado, lembraréi o que sucede neste manuscrito. O cap. 175 = m 298 te-no epígrafe «De cònsols de galeres e de sageties» e comenza «Si algun qui hirà...», pro o V 187 = m 306 te-no epígrafe «Aci començen les costumes de cos» e o capítulo comenza «Aci començen les costumes del cos ço és a entendre, de nau o de leny de rems...». Este feito non débese samente as características deste manuscrito, pois outro tanto sucede coa tradución italiana do 1479, onde nin siquera, ó parecer, atópase o título «Aci començen les costumes de cos». Agora ben, este feito ten un valor diferente nestes dous manuscritos: na tradución italiana serve, a meu ver, pra refrexar a unidade do LCM que atópase na mesma; no manuscrito V pra suliñar o avencellamento entre o que chamamos hoxe «Costumes da mar» e os primeiros capítulos do que chamamos hoxe «Ordeanzas do corso». Eu quero eiquí limitarme a suliñar este problema, inda que o devezos de facer un feixe de 334 capítulos, onde ó mesmo tempo distínguese ben entre «Costumes da mar» e «Ordeanzas do corso», coma tamén sucede na meirande parte dos manuscritos, levame a matinar que é o ms. V o que modificóu o posto das «ordeanzas do corso».

A tradución impresa italiana citada conferma esta idea de que o LCM é o resultado derradeiro dun esforzo editorial, po-lo que nos tempos primeiros non tiña unha individualidade definida, xa que respondía na súa forma ós intereses dos editores e dos consulados. Así na dita tradución se non atopan ni-no «Orden xudiciario de Valencia», ni-nos capítulos das «sportades», ni-nas «Ordeanzas do corso», pra non menciona-lo xuramento dos abogados, atópanse, po-lo tanto, samente as «Costumes da mar», onde incorporanse os

dous primeiros capítulos dos «Capítulos do rei Pedro» canda outros textos xa ditos, que poñense ó remate daquelas, cunha numeración unitaria.

Resumindo: nas edicións téndese a facer un texto unitario con diferente textos hastra chegar a formar un fato de 334 capítulos numerados, inda que manteñanse os ronseles do seu orixe diferente e independente. Este fato de capítulos canda outros textos forman o que chámase «Llibre de Consolat de mar», onde recóllense aqueles textos que interesan a un certo consulado ou a un certo editor; esto esprica que ate o trunfo da edición do Celelles as edicións catalás do 1484 e do 1494 e a tradución italiana do 1519, reimpresa no 1539, non teña-no mesmo LCM, inda que todas elas amósanse como tales.

Quixera suliñar un feito: se contra os datos históricos recollidos queremos dir que o LCM é aquela unidade de 334 capítulos, como faino supoñe-lo colofón da edición do 1494, teríamos que rematar, dunha parte, que os «Capítulos do rei Pedro» non formaban parte do mesmo e doutra parte que o capítulo do xuramento dos abogados de Mallorca formaba parte do LCM. Agora ben, é evidente que temos tres LCM diferentes: o que atópase na edición do 1484, o que atópase na tradución italiana do 1519 e o que rematou por trunfar, o que atópase na edición do Celelles do 1494. Con Celelles nacéu un LCM tipo; agora ben, como xa vimos pódese facer esta afirmación, porque a edición de Celelles trunfóu, inda que o LCM siga medrando, pro agora por axuntarse, asomade da edición do Celelles, novas achegas. O parecer, dende a aparición da edición do Celelles, a súa edición permaneceu intauta, inda que seña arrequeñada con achegas no seu remate. Lémbrese da edición do Amorós.

¿Os manuscritos conservados amosan un libro do Consulado ou amosan, coma as edicións, hastra o trunfo da edición do Celelles, diferentes libros de Consulado? Unha cousa debe terse crara dende o principio: ningún dos dez manuscritos —os nove catalás e a tradución manuscrita italiana— teñen un fato de capítulos unitariamente numerados —esto é unha característica das edicións do LCM—, onde recollanse capítulos de obras independentes, e tampouco ningún dos manuscritos teñen propiamente un LCM onde atópanse samente o «Orden xudiciario de Valencia», os capítulos das «spor-

tades», as «Costumes da mar», as «Ordeanzas do corso» e os «Capítulos do rei Pedro», agás do ms. D e do ms. A, por razóns diferentes.

Tendo esto presente as concursiós que poden aganzarse dos manuscritos son:

Ningún dos dez manuscritos contén algo semellante ó que atópase nas edicións, isto é, un texto unitario onde baixo unha mesma numeración acóllense capítulos de textos hastra aquel intre independentes.

Ningún dos dez manuscritos teñen, inda deixando fora o capítulo que recolle o xuramento dos abogados de Mallorca, escrusivamente os textos que remataron no fato dos 334 capítulos numerados da edición do Ceelles, fora, quizaves, do ms. A.

Todo-los manuscritos teñen canda os textos que remataron por ordearse nunha unidade de 334 capítulos outros que, nalgús casos, pódese afermar que convertíronse en permanentes.

Todo-los manuscritos, coa características propias, teñen craramente xibrado-los distintos textos que ou atópanse nas edicións unidos no fato dos capítulos numerados —dos 334 capítulos numerados na edición do 1494— ou son daqueles elementos que o García chama constantes, seña por ter cada un deles numeración propia, seña por ter numeración propia us e outros non, seña por te-los diferentes textos os seus propios títulos, seña por sulñarse a individualidade destes textos por outros medios escriturarios, seña por te-los diferentes textos o seu propio colofón. A esceución, quizaves, sería a tradución italiana do 1479, que doutro lado nesta característica —os diferentes textos veñen us depois dos outros sin interruciós— se non limita ós textos chamados po-lo García constantes.

Hai un feito evidente, que eu non poido espricar e que non atopo espricado no García. As chamadas «Ordeanzas do corso» sabese, dende o Pardessus, que semellan sere unha refundición de dous textos diferentes, un que te-no título que atópase no m 298 e outro que te-no título que atópase no m 306. Deixando a un lado este problema, tamén semella que os cap. m 298-305 están fora do seu posto, po-lo que podería maxinarse que o título que hoxe atópase no m 298 é serodio. Isto espricaría que se non atope en todos os manuscritos nin en toda-las edicións, o que espricaría que algunhas veces atópanse estes capítulos fundidos cos das «Costumes da mar» seña o rematar estas tal como atópase na edición do 1484 e

quizáves no ms. C; na tradución italiana manuscrita teñen un posto propio, po-las razóns xa ditas, pois nin atópase o título do m 298 ni-no título do m 306; seña na sua metade, como no ms. V, onde ademáis a ordeación dos capítulos é diferente, xa que os m 330-333 —no ms. V teñen a numeración V 182-185— atópanse despóis do cap. V 181 que é o m 305, po-lo tanto diante do epígrafe do título do cap. 187, que é o m 306. Téñase ademáis en conta que o ms. L ten un orden propio non derradeiros capítulos e outro tanto sucede coa tradución italiana manuscrita.

Ningún manuscrito te-no contido permanente que o García identifica co LCM, agás os mss. D e A. Como xa vimos o ms. D é a parte derradeira dun manuscrito misceláneo, onde recollense os privilexios de Mallorca, e teño as miñas dudas que o epígrafe que alí atópase, falando do LCM pertoque a todo aquel material. Agora ben, se aceptamos o falacio do García, o ms. D sería o úneco a te-los «Capítulos do rei Pedro» dentro do LCM, pro fora do seu posto dacordo coa ordeación do García. Ademáis neste manuscrito atoparíase o alcume da compilación, poi-los outros manuscritos, agás a tradución manuscrita italiana, non teñen un título xeneral pra todo o seu contido.

No caso do ms. A, os «Capítulos do rei Pedro» é unha achega serodia; é certo que este feito falaría aparentemente pra a teoría do García, inda que enton debería terse en conta outros feitos, dos que falarei máis adiante. A maiores, eu non nego que haxa compilacións, onde recóllese o dereito mercantil e que arrequentanse co paso do tempo con novos textos, como o amosa tamén este ms. A; o que nego é que haxa unha compilación tipo, que teña arreo o mesmo contido e no mesmo orden hastra a edición do Celedes. Coa edición do Celedes xurde unha compilación tipo, que amosa sempre o mesmo contido e no mesmo orden, inda que medra arreo.

Ó parecer —é esto te-no seu interés pra proba-la existencia dunha compilación— os capítulos das «sportades» non teñen sempre un posto propio, pois ou atópanse coma capítulo primeiro das «Costumes da mar» —así no ms. L— ou forman parte do «orden xudicial de Valencia» ou dentro do mesmo —así no ms. V— ou rematando o mesmo —coma quizaves nalgús manuscritos, coma o confirmaría o traslado enviado a Perpiñan do que falaremos— ou, quizaves, forman parte dos «capítulos do rei Pedro» no ms. D, se ten

razón o Moliné, ou teñen un posto independente, como nos mss. A, N e no D, se ten razón o Quadrado, e na edición do 1494.

Os «Capítulos do rei Pedro» se non atopan sempre asomada das «Ordeanzas do corso»; no ms. D, atópanse despóis do «Orden xudiciario de Valencia» e diante das «Costumes da mar», se os capítulos das «Sportades» forman parte dos ditos «Capítulos»; nos mss. F e P atópanse despóis de dous pautos, que veñen despóis das «Ordeanzas do corso»; no ms. A, atópanse despóis das «Ordeanzas do corso», pro estas péchanse co colofón do libro xa dito, po-lo que despóis axuntaronse outros folios, onde recolléronse os «Capítulos do rei Pedro». Ademais nos mss. V e N forman unha seución independente, que recolle as costumes da mar de Barcelona. O comenzo desa seución quizaves poida verse nos mss. F e P. De remate os «Capítulos do rei Pedro» se non atopan no ms. U. Na tradución italiana manuscrita atópanse despóis das ordeanzas, pro non remata con eles o LCM.

E certo que o García fala de que no ms. L e no ms. D atópanse colofós, pro o seu posto e diferente. Tornaréi sobor do ms. L; quero eiquí dir samente que no ms. D o colofón pecha o manuscrito misceláneo orixinario e que po-lo tanto os «capítulos do rei Pedro» atópanse diante dese colofón. Eu non quero eiquí discuti-los problemas que poden amosarse por este feito, pois abonda pra min dir que neste manuscrito os «capítulos do rei Pedro» atópanse despóis do «Orden xudiciario de Valencia» e diante ou dos capítulos das «sportades» ou das «Costumes da mar».

7. *Algús datos sobor da formación dalgús manuscritos*

As descrições dos manuscritos do García —e as que fixen ate agora— arrincan da situación dos manuscritos hoxe, pro non sempre a forma que hoxe teñe-nos manuscritos é a súa forma orixinaria. E isto é importante, cando fálase dunha compilación que vai e ven po-lo Mediterráneo. Non hai, ó parecer, unha compilación oficial do LCM feita po-los reises da coroa de Aragón, inda que hai manuscritos feitos ou po-los consulados ou po-los particulares dunha maneira ás veces oficiosa. Os datos recollidos samente permiten falar de dous manuscritos —o F e o P— que semellan vir dun manuscrito máis antigo, po-lo que tiña que conter xa unha compi-

lación, onde pode ser que atopáranse o «Orden xudiciario», os capítulos das «sportades», as «Costumes da mar», as «Ordeanzas do corso», os dous pautos do 1373 e xa poderíase discutir se atopábanse ou no-nos «Capítulos do rei Pedro», que no ms. P áchanse escritos a liña continua mentras que no ms. F, ó parecer, escribíronse co mesmo grandor e cores da escritura dos dous pautos ditos e po-lo tanto cunha letra un pouco meirande que a das «Costumes da mar». É craro que a parte derradeira dos dous manuscritos é propia de cada un deles. Po-lo xa dito, podería tamen maximarse que o ms. A copiase outro manuscrito, que contivese xa unha compilación, inda que esta concrusión non seña obrigatoria.

Non vou a entrar a discuti-los moitos problemas que amosa o ms. N e pra chama-la atención sobor dos mesmos, limitaréime a recolle-las palabras do Pardessus:

«A ne s'en tenir qu'a la dernière des pièces qu'il contient, qui est une ordonnance sur les assurances de 1436, additionnelle à celle du 21 novembre 1435, on pourroit croire qu'il n'est pas antérieur à la seconde moitié du XVe siècle mais la copie de ces pièces a pu être faite quelque temps après celle du Consulat, dont l'écriture est certainement plus ancienne et paroît être de la fin du XIVE siècle»⁹⁶.

Deste manuscrito conozo duas descrições estensas: a do Pardessus e a do d'Abadal, que recolle o Moliné. Xa que esta derradeira é mais doado manexala no país, recolleréi eiquí a do Pardessus, inda que as concrusiós que espondréi, básanse nas duas descrições⁹⁷.

Pra entende-lo que diréi, lembraréi que o Pardessus divide este manuscrito parisino (Ms. N), escrito a dúas colunas, en seis partes ben arredadas: na primeira atópanse dez follas sin paxinar, que conteñe-na táboa dos epígrafes; orixinariamente nesta táboa atopábanse samente os epígrafes das partes coarta, quinta e sesta; unha mau posterior achegóu o título da parte terceira a liña continua; na segunda parte, que ten cinco follas sin paxinar, atópanse as «ordinacions d'en Sancta Cilia»; o Pardessus maxina que estas páxinas non formaban parte do manuscrito e achegáronse ó mesmo por erro, pois estas ordeaciós non atopanse aseñadas na táboa de

96. PARDESSUS II 33.

97. Vid. PARDESSUS II 33-35; MOLINÉ LIX-LXI

epígrafes; na terceira parte —oito follas sin paxinación— atópanse os coarenta e dous capítulos do «orden xudiciario de Valencia», tal como atópanse nas edicións, inda que sin epígrafes⁹⁸; a coarta parte, na que comenza a paxinación orixinaria do manuscrito, ten, ó principio, os dous capítulos das «sportades», despóis dos que comenza nas «Costumes da mar», tra-lo título «Dels bons stablimens é costumes de la mar». Os capítulos non teñen numeración, inda que si unha rúbrica, que non cadra coa das edicións. O Pardessus crê que o copista non maxinaba achegar orixinariamente máis textos, pois no verso do folio 148 se non achan máis que as dúas liñas derradeiras do derradeiro capítulo e o colofon seguinte: «Finito es lo libre è acabat. Gloria è laor sia dada à Jehu Christ. Amen.» Ademáis este folio é o derradeiro do seu coaderno e nel se non atopa chamada algunha, pra pregoar, como pasaba nos folios anteriores, que forma un todo cos folios seguintes.

A quinta parte conté-nas «Ordeanzas do curso», cunha escritura millor e máis moderna ca escritura das outras partes, baixo o título «Aci parla de les naus armades è de les galeas è de les sagetias com deuen partir, ne com deuen pagar à aquells qui ab elles hiran». Ten tamén un colofón, que atópase no folio 164 verso, que non enchéuse: «Finito libro, sit laus et gloria Christo». O folio 165 permaneceu en branco.

A derradeira parte, a sesta, comenza no folio 166 e remata no folio 188, que é o derradeiro do manuscrito. Ten este título: «Aci comencen los usatges de Barchinona» e nela áchanse os «capítulos do rei Pedro» do 1340 —fol. 166-174 verso— co preambulo e o mandato de execución en latín, que nas edicións atópanse en catalán. Despóis veñen catro artigos sobor dos dereitos dos cónsules en Cerdeña, que se non atopan nas edicións —fol. 174 verso-175 reuto—; o cronicón das confirmacións —175 reuto-verso—; unha ordeanza pra os consules en Sicilia —fol. 175 verso-178 verso—; unha ordeanza de seguros do 21 do mes de San Martiño do 1435, que se non atopa nas edicións do LCM —fol. 178 verso-182 verso—; unha ordeanza do mesmo día e ano dos maxistrados de Barcelona sobor da policia de navegación —183 reuto-185 verso—; dúas leises do rei

98. Debe entenderse que manca a pragmática do rei «en Jaume» sobor do xuramento dos abogados de Mallorca

«en Jaume» e dous capítulos dos «Recognoverunt proceres» —folio 186 reuto—; unha pragmática do Alfonso V do 1428 —fol. 186 verso— e as ordeanzas de seguros do 14 do mes da sega do 1436⁹⁹.

As concursiós máis importantes seríanas seguintes:

a) Hai unha mau estrana ó manuscrito, que é aquela das «ordinacions d'en sancta Cilia».

b) Hai unha mau moderna, que atópase na táboa, que é aquela que insereu na mesma o título do «Orden xudiciario», pro o Pardessus non di se esta mau é a mesma que escribén o dito orden. O d'Abadal, pola boca do Moliné, di que na táboa atópanse dúas maus diferentes.

c) Hai unha mau máis antiga que copioun as «Costumes da mar» e outra máis moderna que copioun as «Ordeanzas do curso», poi-la sua escritura e millor e máis moderna ca das outras pezas. Pra o Moliné a segunda mau que copiou o remate do manuscrito comenza no fol. 149, onde comenza nas «Ordeanzas do curso». Agora ben, non acrrara se esta mau é aquela que atópase tamen na táboa.

d) Pra o Pardessus a escritura das «Costumes da mar» é máis antiga, e semella sere dos derradeiros do século XIV, que aquela que escribeu as ordeanzas do 1435 e do 1436.

Pardessus garda silencio seña sobor da mau que escribeu a táboa, que ten que sere posterior ou, ó menos, coetánea da que escribeu as «Ordeanzas do curso» e sobor da mau que escribeu as «Costumes de Barcelona», esto é, os «Capítulos do rei Pedro, inda que indireutamente semella dir que esta mau é máis antiga que aquela que copiou as «Ordeanzas do curso»; o d'Abadal, pola boca do Moliné, aferma que a mau que escribeu as «Ordeanzas do curso» e a que escribeu as «Costumes de Barcelona» é a mesma, pois esta mau comenza no fol. 149, onde comenzan as «Ordeanzas do curso»; tamén di que a mau que escribeu o «orden xudiciario» e a mesma que escribeu a meirande parte do manuscrito o que, pra min, ergue moitos problemas, xa que o manuscrito orixinario ten 188 folios, dos que as «costumes da mar» ocupan 148¹⁰⁰.

99. PARDESSUS II 33-35; vid. tamen MOLINÉ LIX-LXI.

100. Coma a táboa incorpora, segun di o Pardessus, alusións á parte derradeira do manuscrito, quero esto dir que tivo que facerse despóis do 1436, pois despóis desa data tivo que facerse o manuscrito, o que fai perguntarse por qué se non incorporou orixinariamente o «orden xudiciario» ó manuscrito, pois

Inda que os silencios na descrición teñan unha grande importancia, pódese, prescindindo das interpretacións hipotéticas, facerse algunhas afirmacións. «Costumes da mar», «Ordeanzas do curso» e «Usatges de Barchinone», isto é, «Capítulos do rei Pedro», son tres textos ben arredados, pois cada un deles teñen neste manuscrito un título propio e un colofón, que serven pra xibra-los entre si. É certo que os «Usatges de Barchinone» non teñen —ou semellan non tere— colofón, pro isto pódese espricar por sere unha seución viva, onde achegábanse novos elementos, coma as ordeanzas de seguros ditas; pro aínda que non tivera colofón, tamén é certo que xibrase craramente das «Ordeanzas do curso» po-lo colofón deste derradeiro texto e po-lo seu propio título: «Aci començen los usatges de Barchinona. Carta del senyor Rey. Petrus...». Coma pode verse o primeiro título é un título xenérico, pra recolle-las costumes de Barcelona, onde atópanse os «capítulos do rei Pedro», pro tamen as ordeanzas de seguros xa ditas.

Este feito pode levar a matinar que o autor desta primeira compilación, puido copia-los textos de manuscritos arredados, o que espricaría a presenza dos colofós. Esta idea refórzase se as «Costumes da mar» e o «Orden xudiciario de Valencia» escribíronse po-la mesma mau, pois non remataron no ms. N no mesmo intre e se a mau que escribeu a parte derradeira do manuscrito orixinario —isto é, dende o fol. 149— e posterior a mau que escribeu as «costumes da mar». E xa lembréi o que maxina o Pardessus. Todo fai matinar, po-lo tanto, que os distintos textos copiáronse un a un e máis tarde arrecadaróñse, probablemente po-la mau que escribeu o manuscrito dende o folio 149 hastra o remate.

foi axustado á táboa, xa que o «Orden xudiciario» tiña que estar escrito, se foi escrito po-la mesma mau que escribén as «Costumes» e esta mau é máis antiga que a mau que escribén as «Ordeanzas do curso», e isto levaría a perguntar por qué quen escribén as «Costumes» e o «Orden xudiciario» no-nos axuntou ó mesmo tempo no manuscrito. Eu resolvería o problema dunha maneira doada, inda que non teño probas; na táboa atópanse dúas maus, que ou non teñen ren que ver coas que escribíron o manuscrito ou das dúas unha é axena ó manuscrito, aquela que incorporou ó índice o «Orden xudiciario». Isto tería unha importancia decisiva, pois demostraría que os textos copiábanse independentemente —conservaban po-lo tanto os seus colofós, coma sucedeu neste manuscrito N e solo máis tarde axuntábanse pra formar unha compilación. O Pardessus o afirma craramente do fato das «Costumes da mar».

Deixando de lado quen levou a cabo o labore, é craro que alguén devezou achegar estas tres obras —«Costumes da mar», «Ordeanzas do curso» e «Usatges de Barchinona»— nun solo volumen, facendo así unha compilación e, pra facilita-lo seu uso, fixo unha táboa, que veu a poñerse ó principio da compilación. Semella lóxico matinar que neste intre paxináronse unitariamente as tres obras, xa que somente así a táboa podería compri-la sua finalidade. Agora ben, se nos decatamos destes feitos —testos diferentes cunha paxinación común achegados nun manuscrito e precedidos dunha táboa común— temos que rematar que, ó menos pra o autor da compilación, todos estos textos que tiñan unha paxinación común e tiñan unha táboa común formaban unha compilación; unha compilación que, ó parecer, non tiña título —as partes que compoñe-na, si— pro que forma unha unidade, que pódese acoller tamén baixo o alcume de «Libro de consulado».

Despóis de terse feita esta compilación, alguén quixo perfeucionala e achegoulle un novo texto, que probablemente achábase noutros manuscritos: o «Orden xudiciario» achegouse así ós outros textos e corrixéuse a táboa pra aseña-lo. Así exprícase que a numeración romana dos folios comence coas «Costumes da mar» e o «Orden xudiciario de Valéncia» atópese nus folios sin paxinación, na época do Pardessus, ou con paxinación arábica, hoxe.

Inda que teña razón o Moliné, pódese dir que o manuscrito orixinario non tiña nun primeiro intre o «Orden xudiciario», inda que fora copiado po-la mesma mau que copiou as «Costumes da mar»; e seña que fose o dito copista seña que fose outra persoa, o que é certo e que este «Orden xudiciario» axuntouse a unha compilación xa esistente nun intre posterior, cando o manuscrito xa tiña unha paxinación propia, pois somente así pódese expricar que o «Orden xudiciario» atópese fora de dita paxinación e que o seu título tivera que incorporarse na táboa.

O que este feito siñifica pra a teoría do García é craro. Eu xa dixen as razóns que levanme a pensar que neste intre non hai un LCM, non hai unha compilación de dereito marítimo mercantil tipo que xire po-lo Mediterráneo; hai, eso si, textos de dereito mercantil, que poden rematar nun libro, nun manuscrito, mais o que xira son estos textos independentes, no-nos libros-manuscritos onde recóllense, inda que non pode negarse que algunha vez poidan servir

de modelos. A formación do ms. N sería o testemuño máis craro. Agora ben, se queremos movernos dentro do prantexamento do García, teríamos que falar dunha nova redacción do LCM, onde atoparíanse as «Costumes da mar», as «Ordeanzas do corso» e os «Capítulos do rei Pedro». Lembremos do que di o García: hai unha redacción alfa dous, que sirveu de modelo seña a redacción beta, que atópase no ms. V, e que te-no «Orden xudiciario de Valencia», as «Costumes da mar» e as «Ordeanzas do corso» na súa particular redacción, e os «capítulos do rei Pedro», e a redacción gamma, que te-no «Orden xudiciario de Valencia», as «Costumes da mar» e as «Ordeanzas do corso». Entrementres a primeira foi fiel o texto da redacción alfa dous, xa que o úneco que fixo foi incorpora-lo «Orden xudiciario de Valencia» ó principio e os «Capítulos do rei Pedro» ó remate, a redacción gamma axustou o «Orden xudiciario de Valencia» ó principio, pro someteu a unha profunda reordeación o texto das «Costumes da mar» e das «Ordeanzas do corso», que atopábanse na redacción alfa dous, xa que xibou-nas craramente, dandolles unha numeración independente e axustando un novo título ó m 298, pro ademáis reordeou o seu contido, coma fixo tamen co texto das «Costumes da mar», e perfeccionou o contido dos dous textos, xa que incorporou novos capítulos, entre eles o 334, que remata-nas «Ordeanzas do corso» e o fato de 334 capítulos numerados da edición do 1494.

O ms. N ten, dun lado, o texto da redacción gamma das «Costumes da mar» e das «Ordeanzas do corso», pro ten tamén os «Capítulos do rei Pedro», que non atopanse na redacción gamma, ó menos nun principio, e non te-no «Orden xudiciario de Valencia», que atópase na redacción gamma. E ademáis ten o cronicón das confirmacións, que é propio da redacción beta.

¿Teríamos así unha nova redacción que derivaría tamen da redacción alfa dous? Se afirmamos que si, ven fora o problema de identidade entre o texto das «Costumes da mar» e as «Ordeanzas do corso» que amosa esta nova redacción e a redacción gamma; se negamos este feito, teríamos que reconocer, unha vez máis, que o que xira nestes intres po-lo Mediterráneo non è unha compilación tipo; en todo caso, é evidente que o autor do ms. N non puido copia-lo texto da compilación contida na redacción gamma.

Tendo en conta que a parte derradeira do manuscrito N era

unha seución viva, onde recollíanse os usos de Barcelona —deiquí o interés que te-no determina-lo orixe do manuscrito— o «Orden xudiciario do consulado de Valencia» tiña que poñerse ó principio do manuscrito. O posto que te-no «Orden xudiciario» neste manuscrito, po-lo tanto, non responde a unha tradición firmemente establecida, mais ó caso.

E certo que sempre pódese afermar que incorporóuse ó principio, a imitación das outras compilacións, pro en todo caso pódese tamén perguntar por qué se non fixo dende o principio. Xa se sabe que este ms. é do século xv e coma di o Moliné «En Pardessus creu que la primera part d'aquest còdech es del segle xiv y lo restant del xv; lo esser dues parts d'epoca distinta ho demostra la falta de reclam en lo fol. 16 abans d'ahont acaba la primera»¹⁰¹. ¿De cando é no século xv? Ten que sere posterior o 1436, pro non sei se pode dirse algo máis; agora ben, abonda recordar que no 1484 aparece xa a primeira edición.

Outro tanto poderíase dir do ms. A, xa que os «Capítulos do rei Pedro» achegáronse ó remate do manuscrito, despóis do colofón. Eiquí nos atopamos diante dun manuscrito pechado, po-lo que é evidente que pra perfecciona-lo, pódese axustar máis doadamente novos folios no remate. Este manuscrito A é do século xv e poderíase aprica-las palabras que o Bohigas apricou, quizáves non ben apricadas, ó ms. C: «Esto hace pensar que este manuscrito es copia de otro algo más antiguo, pues era frecuente en esta clase de códices añadir al cuerpo legal primitivo disposiciones posteriores que lo complementarían»¹⁰². Neste sentido o ms. A amosaría de maneira perfeuta a compilación mallorquina chamada po-lo García gamma: «Orden xudiciario de Valencia», «Costumes da mar», «Ordeanzas do curso», formando unha unidade, pois se ben é certo que as «Costumes da mar» teñe-no seu título e as «Ordeanzas do curso» teñe-nos dous títulos propios, que atópanse hoxe no m 298 e no m 306, tamén é certo que non hai xebre entre estos dous textos, e o non habere numeración, pódese afermar que eiquí comenzaba a unidade que perfeccionóuse coa numeración unitaria en 334 capítulos do Cealles. Agora ben, habería que lembrar que o «Orden

101. MOLINÉ LXI.

102. BOHIGAS 13.

xudiciario de Valencia» atópase neste manuscrito cunha propia individualidade, xa que deíxase despóis do actual m 42 a columna en branco e na outra comenzouse con capital a copia-lo capítulo das «sportades». E agora nos atopamos de novo con este problema, poi-lo capítulo das «sportades» é o primeiro capítulo das «costumes da mar» no manuscrito L e ou é o derradeiro dos «capítulos do rei Pedro» ou ten un posto independente no ms. D, onde ademáis, atópanse xa os «Capítulos do rei Pedro», despóis do «Orden xudiciario» e diante ou dos capítulos das «Sportades» ou diante das «costumes da mar», se o cap. das «Sportades» atópase coma capítulo derradeiro dos «capítulos do rei Pedro», pechando esta selección de textos as «ordeanzas do corso», tra-las que veñe-no colofón do manuscrito orixinario. E aínda teríase que ter en conta o traslado feito ó consulado de Perpiñán, onde o dito capítulo é o derradeiro do «Orden xudiciario de Valencia».

Se aceptamos que o ms. A conserva un texto antigo, xa que orixinalmente non tiña os «Capítulos do rei Pedro», atoparíamonos co feito que os tres manuscritos máis antigos, aqueles que remontan ó século XIV —(o Colon data o m: L no 1385 e o ms. D nos derradeiros do s. XIV ou nos primeiros do século XV, po-lo que o manuscrito modelo do ms. A tiña que sere coetáneo ou anterior o ms. L, xa que este tampouco ten, quivazes, orixinalmente os «Capítulos do rei Pedro», que achegáronse pra o García en Barcelona e despóis achegáronse na illa)— e que po-lo tanto están máis veciños ó intre —1343-1345— no que o García po-na redacción da compilación gamma amosen xa diferencias entre eles.

Hai outro feito importante: o editor suliña o parentesco entre os mss. FAPUe, (a sigla derradeira é a da edición do 1484), pro ó mesmo tempo o García suliña que o ms. L tivo un carauter oficial, xa que fíxose no «Consulado de Mallorca», mais é evidente que o texto que neste manuscrito atópase das «Ordeanzas do corso» ten unhas particularidades propias, que aparta-no dos demais manuscritos da chamada po-lo García redacción gamma, coma amosa a edición do Colon. Ademáis no ms. A brincase, o parecer, do m 308 ó m 310 e o m 333 atópase dividido en dous capítulos e o m 334 en seis. E isto léva-no-lo problema de sempre: a formación das «Ordeanzas do corso». Eiquí o que eu quero suliñar é que, se nestes intres xiraba xa po-lo Mediterráneo esa chamada redacción gamma,

non é doado espricar estas diferencias entre os tres manuscritos ditos, que atoparían unha millor espricación, se os mesmos fose-no resultado de copiar xuntos obras independentes.

O ms. P —e o mesmo podería dirse do ms. F, coas diferencias e dadas aseñadas— semella recoller unha compilación orixinaria. A táboa, que ten numeración arábica, semella abranxer toda-las pezas do manuscrito ¹⁰³.

Nos folios con paxinación romana, no primeiro comenza o «Orden xudiciario», que ó parecer non ten título ¹⁰⁴. Despóis veñe-nos capítulos das «sportades» e as «Costumes da mar»: «De bones costumes e bons stabliments», que rematan co colofón «Ffinit etc.» ¹⁰⁵; po-lo que o Bohigas di que o copista non copiou enteiro o colofón ¹⁰⁶, o que podería facer pensar que o ms. P, dado o seu parentesco co ms. F ¹⁰⁷ depende doutro manuscrito, que quizaves era xa unha compilación e pechábase cos dous pautos do 1373. Este feito é o que pode espricar a tendencia a descartar estes colofós particulares ¹⁰⁸. Despóis deste colofón hai un cómaro en branco e na parte baixa da columna dita atópase a rúbrica das «Ordeanzas do curso»: «Aci parle de les naus armades e de les galeres e sagetias com deuen partir ne com deuen pagar a aquells qui ab ells van ne stan en companyia lur», mentras os pautos xa ditos do 1373 veñen coa mesma, comenzando na mesma columna onde remata-nas «Ordeanzas do curso» ¹⁰⁹.

Este manuscrito amosa que os elementos recollidos no mesmo

103. PARDESSUS VI 493, que fala que na táboa atopase o pauto do 1373 MOLINÉ LXIII, que recolle o título que na táboa teñe-nos capítulos do rei Pedro» Pra o manuscrito F, onde tamen no índice atópase ó menos un dos pautos do 1373 vid. supra p. 50

104. MOLINÉ LXI.

105. PARDESSUS VI 494.

106. BOHIGAS 16.

107. O Brocá e o Perels non din ren sobor deste colofón. Vid. supra.

108. Se no ms. F se non atopa o dito colofón, podería maxinarse que o ms. P non copia o ms. F, mais un e outro copian un mesmo manuscrito, inda que as diferencias entre amos a dous manuscritos poden facer pensar que un e outro copian de manuscritos diferentes, que poderían non ter unha compilación.

109. Tamen o m 306 comenzaba no ms. P e F: «Asi comensen les costumes del cors.» Vid. edición de Colon. O feito de que o ms. P non teña o colofón enteiro demostra que non é modelo do ms. N.

formaban unha unidade, xa que entre os mesmos non hai unha solución de continuidade: us veñen despois dos outros. É certo que as «Costumes da mar» teñen un colofón —pro o copista no-no copiou enteiro— e que despois do mesmo hai un cómaro en branco, pro non penso que esto seña dabondo pra poder afermar un craro xebre. Agora ben, tamén é certo que este degaro de unidades non fixo desaparece-los ronseles da individualidade dos textos recollidos no manuscrito. De todas-las maneiras esta unidade do manuscrito semella romperse no folio 170 verso, onde según o Pardessus, remata o pauto dito entre o rei Pedro e a vila de Barcelona. Tamén dinos o Pardessus que no folio 171 verso comenza-nos «Capítulos do rei Pedro», pro o Moliné di-nos que no folio 171 reuto comenza-nos capítulos. Non podo saber quen ten razón, pro nun caso ou noutro pódese afermar que os «Capítulos do rei Pedro» teñen un posto especial, poi-lo Moliné di que eiquí o manuscrito deixa de ter dúas columnas, pra escribirse a liña continua. Remata-nos capítulos no reuto do folio 179 e áchase en branco o verso do mesmo e no reuto do folio 180 e derradeiro do manuscrito —é defeutuoso, pois marra-nos folios derradeiros— comenza-nas ordeanzas de seguros do 1458 ¹¹⁰.

Sabemos que este manuscrito é defeutuoso e que a táboa semella abranxer todo o manuscrito, pois menciónanse os «Capítulos do rei Pedro» na táboa; tendo en conta estos feitos e tendo en conta que a numeración romá do manuscrito é contemporánea deste, pódese dir que todo él formaba unha unidade e que po-lo tanto se os «Capítulos do rei Pedro» e as ordeanzas do 1458 semellan ser achegas posteriores, xa que escribense a liña continua e déixase un folio ou unha cara dun folio en branco, este feito non permite negar que todo o manuscrito era unha unidades, po-lo que na táboa áchase novas de todo-los seus textos ¹¹¹.

Esta mesma situación atópase tamen no ms. V. Eiquí a táboa

110. Tamén emprego eiquí os datos do PARDESSUS VI 494 e do MOLINÉ LXII-LXIII.

111. É certo, non sei se a táboa di se-la táboa do Libro do Consulado; pro en todo caso o que é certo e que do manuscrito orixinario forman parte os dous pautos do 1373 e no-nos «capítulos do rei Pedro». Tamén eiquí nos atopámos diante dun manuscrito coa súa propia historia: o contido deste manuscrito medra co paso do tempo.

abranxe os epígrafes de todo o libro ¹¹². E tamén eiquí é craro que estos textos teñen unha individualidade propia que non rompe a unidade da compilación formada, según o Moliné, por catro libros ben arredados ¹¹³ ou por catro seucións —prescindindo da táboa do libro— coma máis correutamente di o García ¹¹⁴, inda que os textos non teñan título no corpo do manuscrito, agás a seución dos usos de Barcelona, mais si na táboa.

A edición que manexo deste manuscrito po-na táboa do libro ó remate da edición e o que é peor no-na reproduce esautamente, pois «és esproduída al final del llibre, per bé que la seua lliçó correspon a la de les rúbriques que figuren en cada capítol, i no a les de la taula inicial, les quals difereixen en alguns casos» ¹¹⁵. Tendo esto presente, direi que o «Orden xudiciario» non ten título propio no texto e comenza po-lo tanto co cap. «De la electió...». Os cap. 41-42 desta seución conteñe-nas dúas redaucións —catalana e latina—, do capítulo das «sportades». Outro tanto pasa coas «Costumes», inda que o epígrafe do cap. 1 é «Aci comencen ies bones costumes e els bons usatges de la mar». Nesta mesma seución atópanse as «Ordeanzas do curso», pro o cap. 175 (=m 298) te-no epígrafe: «De cònsols de galeres e de sageties», inda que o cap. 187 (=m 306) te-no epígrafe: «Aci començen les costumes del cos, ço es a entendre de nau o de leny de rems, emperò sia entès que tot leny qui no rem que haja gábies fa aytal copítol com nau. F. naxi fon establít . ». Curiosamente o derradeiro capítulo das «Ordeanzas do curso» no ms. V é o cap. 193, que ven sendo o m 329, remata así: «Emperò, sia entenent que tot leny que no rem fa aytal capítol com nau, salvu leny descubert», párrafo que ó parecer atópase somente neste manuscrito ¹¹⁶.

A coarta seución, se contamos a táboa, ou a terceira, se prescindimos dela, te-no epígrafe xeneral: «Costumes de mar de Barchinona» e comenza suliñando que trasladase un documento do

112. GARCÍA, *La datació* cit 259. MOLINÉ LV-LVI. Vid. a edición Ferrando.

113. MOLINÉ LV-LVII.

114. GARCÍA, *La datació* cit.

115. FERRANDO, ed. cit. XXXIII.

116. Eu teño as miñas dadas, xa que na edición do Colon se non atopa esta variante do ms. V e outras veces mancan na edición do ms. V párrafos que atópanse na edición do Colon. Vid. infra n. 304 e 318

Rei Pedro ¹¹⁷, que ven sendo o que conte-nos «Capítulos do rei Pedro». Os «Capítulos do rei Pedro», pechanse co cronicón das confirmaciós ¹¹⁸.

A derradeira seución non ten epígrafe propio e comenza así: «I. Translat de la clàusu(l)a esplanada de latí en romanç contenguda en un privilegi del rey en Pere, rey d'Aragó e de Cicila, com fon atorgat primerament lo Consolat en la ciutat de València», tendo un total de trinta e un documentos; o documento derradeiro arrecada dous serodios ¹¹⁹, po-lo que temos un total de 32 documentos.

Suliño eiquí dun lado a semellanza co manuscrito parisino N, onde atópase tamen unha seución propia, reservada os usos marítimos de Barcelona, e doutro lado as diferencias, xa que no ms. V esta seución límitase os «Capítulos do rei Pedro», pro en compensación ten unha nova seución pra acolle-los privilexios de Valencia. O feito de que no ms. N, tra-los «Capítulos do rei Pedro» atópanse outros textos de orixen barcelonés —rexios ou dos maxistrados de Barcelona— pode facer pensar que atopámonos diante d'un manuscrito abrochado no xiro do consulado de Barcelona, po-lo que recolle o dereito empregado neste consulado, inda que non pódese prescindir do feito da vellez dos manuscritos.

Atervando todos estos feitos pódese dir que nos manuscritos que vimos, inda que non teñan un título xeneral, atopanse con individualidade propia, máis ou menos esmorecida, os textos seguintes:

- a) «Orden xudiciario de Valencia» e capítulos das «sportades», con certas peculiaridades.
- b) «Costumes da mar».
- c) «Ordeanzas do corso», tamen con certas peculiaridades.
- d) «Usos de Barcelona».
- e) Privilexios dos consulados respeitivos.

Deben matizarse estas afirmaciós, poi-lo capítulo das «sportades» non sempre ten unha posición autónoma e os privilexios dos consulados poden tamen deixar de ter un posto independente, cando o manuscrito procede do consulado de Barcelona, pois entón confondense cos usos de Barcelona. Ademáis os «Capítulos do rei

117. Vid. *infra* p. 148 e n. 268.

118. GARCÍA, *La datació* cit. 259 ss.

119. Vid. *supra* p. 49 e a edición do Ferrando p. 270-272.

Pedro» poden mancar e non teñen un posto fixo, inda que atópese case sempre despóis de a), b) e c), inda que non sempre asomade. De remate, as «Ordeanzas do corso» amosan problemas: o primeiro é que no ms. V atópanse no medio das «Costumes da mar», onde os capítulos 173-186 (=m 298-305; 330-333), veñen sin solución de continuidade despóis do cap. 172 (=m 231), mentras no cap. 187 (=m 306) atópase o epígrafe: «Aci començen les costumes de cos» e comenza da mesma maneira o capítulo; este novo fato de capítulo péchase co 193 (=m 329), po-lo tanto sin solución de continuidade segue o cap. 194 (=m 253), poi-lo párrafo derradeiro xa recollido non semella pechar unha obra independente. No capítulo 192 = m 328 atópase este párrafo derradeiro que, ó parecer, atópase en todo-los manuscritos: «Tot aquell dret fan los cosaris»¹²⁰. Eu quixera lembrar —non resolve-lo problema— que o m 305 = V 180-181— ou non ten epígrafe —coma no ms. L— ou te-nos epígrafes «Almirall pot millorar qui.s volra» e «Almirall» nos cap. 180-181, no que divídese o m 305 no ms. V, mentras o ms. D te-no epígrafe «Amirall ha de poder millorar qui.s volra»¹²¹. Neste m 305 = V 180-181 recóllense os dereitos do almirante e tamen incidentalmente do capitán, pro a regración destes dereitos continan no m 328, onde atópase o epígrafe de «convinences com sien tengudes», do que xa falamos¹²² e é evidente que o m 329 poderíase valorar coma unha continuación desta materia, xa que ocúpase dos dereitos do capitán. Algo xa falamos deste problema e inda teremos que falar.

Debe terse presente outro feito: os manuscritos non teñen un título xeneral; esto sucede nos manuscritos parisinos —N e P— e nos barceloneses —F, A, C— e, ó parecer, tamen no ms. de Cagliari —ms. U— e outro tanto semella suceder no ms. V. Neste manuscrito a táboa ten este epígrafe: «Aquestes son les rubriques del present libre», inda que dous documentos do 1409, que recollen o pago do traballo de quen participóu na copia do manuscrito falen de «Costums de mar» e «Costums de la mar», cousa que non proba moito, xa que estamos diante dun sinedocque¹²³.

120. Vid. edición do Ferrando p. 131 e m 328 (ed. Colón).

121. MOLINÉ 186 (m 305).

122. Vid. supra p. 61.

123. Vid. los documentos en la ed. de Ferrando p. XVI-XVII.

A fórmula da táboa do manuscrito V é tan anodina coma a do colofón do ms. A: «Ffinito libro sit laus et gloria / Christo. amen». É certo que no prólogo do ms. V dise que os sabios antigos fixeron por escrito certas ordeaciós, que atoparíanse máis adiante e que chámense «Costumes dels feyts de la mar», po-las que resolveron toda-las discusión, «segons e per la forma que en lo present libre, per rúbriques, títols e capítols singularment es declarat»; pro dise ademáis que ditas costumes e ordeaciós po-lo seu longo uso tiveronse como leises e máis tarde po-lo rei de Aragón «ab letres, privilegis e provisions ab sagells reais sagellades son estades roborades, auctorizadas e confermades, segons que per les dites letres e provisions pot apparer en lo present libre per treslats autèntichs de aquelles»¹²⁴, o que semella querer dir que no libro atopanse dun lado as «costumes dels feyts de la mar» e doutro lado unha poula-reda de privilexios rexios, po-lo que o dito título non é o título do libro do consulado de Valencia, mais dunha parte recollida nese libro. É certo que ningunha das seuciós nel contidas semellan levallo dito título, pois as «Costumes da mar» na táboa te-no título «Aquestes son les rubriques de les bones costumes els bons usatges de la mar» e os capítulos do rei Pedro o de «Les costumes de mar en Barchinona», pro deixando a parte este problema, é evidente que o dito título non é o do ms. de Valencia.

Unha confirmación de esta afirmación atoparíase na tradución manuscrita italiana, que te-no título, según o Giardina, de «Libro de lo officio del consolato et de lo stilo et uso de dicho officio et de la regione et costume del mare», onde dun lado faise referencia o dereito procesal e administrativo do consulado e doutro as «Costumes da mar»¹²⁵.

O García di que o manuscrito D —manuscrito mallorquín de Sant Pere— ten «com intitulació general «Assi comensen les Capítols del Consolat de Mar»¹²⁶. Agora ben, este é un manuscrito misceláneo¹²⁷, onde despóis dos privilexios rexios e, máis esautamente, das correuciós feitas á copia do derradeiro privilexio, case o principio da liña oito da segunda columna atópase esta frase: «Assi comen-

124. GARCÍA, *La datación* cit. 271. FERRANDO ed. cit 4

125. Vid. supra p. 59.

126. GARCÍA, *La datación* cit. 267.

127. Vid. MOLINÉ LV ss. e QUADRADO, *Privilegios* cit. (vid. supra n. 80).

sen los capitols del consolat dela mar e primerament dela eleccio dels consols e del iutge; cap.», que pecha a liña nove e na liña dez cunha capital comenza o primeiro capítulo do «Orden xudiciario»: «Quiscun any...». Sobor da palabra «comensen» hai unha chamada á beira, onde atopase unha nota en latín sobor do contido do primeiro capítulo «De lectione consulum...» e máis abaixo desta nota hai a numeración do capítulo ¹²⁸.

Pra o García os capítulos do «Consulado da mar» so-nos capítulos do resto do manuscrito ate o folio 70 verso, onde atópase o colofón. Se esto foxe xusto, entón tería que afermarse que o «Libro dos capítulos do consulado da mar (de Mallorca), que atópase neste manuscrito tiña xa os «Capítulos do rei Pedro» e que estos po-lo tanto formaba parte do mesmo e que o «Orden xudiciario de Valencia», que atópase neste manuscrito non ten título propio, mentras recóllense os outros textos co seu propio título. E certo que os datos deste manuscrito non son craros, xa que o Quadrado non semella copia-lo tenor esauto do manuscrito e o Moliné, inda que non dependa escrusivamente do Quadrado, non é sempre moi preciso ¹²⁹.

128. MOLINÉ LIV.

129. Os dous din que depóis dos coarenta e tres capítulos do orden xudiciario, atópanse as «Ordinationes petri IV superfacto consulatus maris Barcelona 22 nov 1343» (sic. con esta datación —QUADRADO, *Privilegios* cit. 49—; comenza no fol. 39 reuto coma unha parte independente, que leva o n.º XLIV da ordeación do Quadrado (atopase impreso XXLIV) o capítulo sin numerar que ten o título «de multiplicament de las quintalades. Del excés que'l senyor de la naudeu carregar per sportada de las mercaderias dels qui la nolietjan»; pro o Moliné di que os «Capítulos do rei Pedro I» «Acaba ab lo cap. que sol figurar ab lo núm. XLV del Consolat: «De multiplicament . » (MOLINÉ LV, cadra co epígrafe anterior). No folio XXXIX, tamén con numeración propia, comenzan «las bonas costumes e usatjes de la mercaderia, e de lo que deu fer senyor de nau a mercader, mariner ó pelegri (passatjer) e aquest deuen fer á aquell» (QUADRADO, *Privilegios* cit. 49; MOLINÉ LV, que non te-no que publica entre parentesis o Quadrado). O Quadrado ve-nos dir que ó prólogo das «Costumes da mar» (=m 46) non ten independencia coma capítulo e por iso o cap 1 das «Costumes da mar» neste manuscrito, según o Quadrado, e o m 47. No folio 67 verso, e tamen con numeración propia, atópanse «De les naus armades, galers e satjetias» (QUADRADO, *Privilegios* cit. 55; MOLINÉ LV) e péchase esta primeira parte do manuscrito tal coma hoxe atópase no fol. LXX verso, co colofón xa conocido, tra-lo que veñen outros 140 folios, escritos por diversas maus a meirande parte do século xv adiantado (QUADRADO, *Privilegios* cit. 56). Agora ben, este colofón non é o colofón desta parte que comenza co

Ademáis ten que sulíñarse que o «Orden xudiciario de Valencia» non ten título nos manuscritos, pro tampouco os manuscrito teñen un título xeneral pra todo o seu contido agás o ms. L e a tradución italiana.

Esta parte derradeira do manuscrito D non é a úneca onde atópanse privilexios referentes o consulado da mar, pois tamen atópanse nos folios precedentes outros privilexios que tamén atópanse no ms. L¹³⁰. Isto é, privilexios que atópanse no ms. L, que leva o título de «Libre de capitols del Consolat de Mallorques», atópanse no ms. D fora do que o García maxina o comenzo do mencionado libro. Temos pois que escoller entre a afirmación do García, e entón o «Orden xudiciario» non tería un título propio, ou a afirmación do Capmany, e entón o título é o do «Orden xudiciario». Esta derradeira posibilidade, o alcume «Libro de Consulado» orixinaríamente era propio do «Orden xudiciario de Valencia», levaría consigo o ter que afirmar que, dacordo co carauter misceláneo do manuscrito D, na sua derradeira parte se non atopa unha obra unitaria, mais unha foulareda de textos recollidos alí po-lo devezos de ofrecer unha ampria compilación dos privilexios mallorquís. A proposta do García ten, ademáis, unhas consecuencias que, a meu ver, topan coa sua teoría, pois viríase amosar que tan «Libro do consulado», e tense que presupoñer que de Mallorca, é o que atópase no ms. D coma o que atópase no ms. L, inda que no primeiro atópense os «capítulos do rei Pedro», pro diante das «Costumes da mar» e no segundo non, ó menos orixinaríamente pra o García, inda que foran achegados máis tarde ó remate do manuscrito, despóis das «Ordeanzas do corso».

E con isto nos achamos diante do ms. L. ¿Qué sucede con este manuscrito? Tampouco eiquí podo chegar a concludión craras, po-lo feito de deixa-la descrición do García —e a edición do Colon—

«Orden xudiciario de Valencia», mai-lo colofón do manuscrito primitivo, que remataba coas «Ordeanzas do corso». Vid. supra n. 80.

130. Falo dos folios 26 ss., que so-nos que conozco po-las fotocopias que teño do Quadrado, onde por exempro atópase no fol. 26 verso un documento que atópase tamen no ms. L —vid. GARCÍA 98 (31-III-1343) 198, fol. 204 v.— e outro no fol. 29 reuto, que tamen atópase no ms. L fol. 204 v. —GARCÍA 99 (11-X-1343) 199 e seguintes (vid. as rexestas por exempro do 100 (12-VII-1344) 199-200 e 108 (30-I-1346) 206-207, pra citar dous documentos que atópanse tamen no ms. L)

moitos puntos no aire. Este manuscrito escribíuse no ano 1385: «En nom de Deu sia e de la Verge Maria, amen. Lo present Libre de Capitols del Consolat de Mallorques fo comensat en l'any de la natiuidad de nostre Senyor M.CCC. huytanta sinch... e finat e acabat a XX e tres de mars del dit ayn. Deo Gratias...» Co paso do tempo achegaronse outros folios na parte dianteira, que perderonse, ó parecer, na sua meirande parte; ademáis todo-los folios orixina-rios se non escribiron nese intre, pois deberon quedar algús en branco, que despóis escribíronse por maus e en épocas diferentes¹³¹, po-lo que atópase incluso unha ordeació do ano 1471. Se deixamos a un lado os folios achegados ó principio e os folios posteriores deixados nun primeiro intre en branco, temos que o libro escrito no ano 1385 é o abranxido entre o folio 11 verso e o 204 reuto, que contén nos folios 12 rº-18 vº unha táboa dos epígrafes dos capítulos do libro; orixinariamente deberon quedar en branco os folios 19 rº-20 vº, que despóis enchéronse por maus diferentes e posteriores; nos folios 21 rº-29 rº atópase o «Orden xudiciario de Valencia», sin título xeneral, que ten un total de coarenta e tres capítulos, que non teñen numeración nin rúbricas; nos folios 29 vº a 175 rº atópanse as «Costumes de la mar», que tampouco teñen título divididas en capítulos numerados cun total de 258. Nos folios 175 rº-190 rº áchanse as «Ordeanzas do corso», que teñen cuarenta e tres capítulos con rúbricas pro sin numerar, cun título xeneral: «Asi parlem de les naus armades e de les galeas e de les segeties com deuen partir ni com deuen pagar a aquls qui ab eyls hiran». O remate das mesmas atópase a invocación «facta fine pia, laudetur virgo Maria». Todos estes tres textos teñen iniciais repinicadas. Nos folios 191 rº-198 rº atópanse os «Capítulos de rei Pedro»; non teñen título xeneral algún, coma as outras obras, agás das «Ordeanzas do corso», pro tamen teñen unha gran inicial repinicada, e atópanse divididas en coarenta e un capítulo, sin numeración nin rúbricas. Nos folios 198 vº-204 rº atópanse sete documentos, us pra o consulado de Mallorca e outros pra o consulado de Valencia «escritos a dos columnas y con la misma letra que el libro del Consulado: incipit: provisión dada por Pedro el Ceremonioso en Barcelona en 12 de julio de 1370. Explicit un traslado de otro tras-

131. Vid. GARCÍA, *Un nuevo* cit. 636-638

lado hecho en 24 de julio de 1343 de varios documentos relativos al consulado de Valencia»¹³².

A vista desta descripción coido que a concurción do García solo pode espricarse por un prexuício:

«De la descripción que precede se desprende claramente que el "Llibre de capitols del consolat de Mallorques" es propiamente el comprendido entre los folios 11 verso a 198 recto, siendo todo lo demás elementos adventicios, muchos de ellos añadidos con posterioridad a la confección de aquél»¹³³.

Cando no 1385 escribése o libro, pra recolle-lo dereito do consulado de Mallorca —«otra particularidad que da a este códice un singular interés es la de haberse redactado en el consulado de Mallorca y haber sido el texto que se aplicaba en dicho consulado durante más de un siglo»¹³⁴ é craro que formaba parte do mesmo e abranxido po-los folios 11 vº-204 rº, se todo o alí contido escribése po-la mesma mau e no mesmo intre.

É certo que despóis das «Ordeanzas do curso» áchase a invocación dita, que pode considerarse coma o colofón da manuscrito, na sua orixinaria redaución. Agora ben, xa vimos que noutros manuscritos —ms. N, P— atópanse tamén estos colofós, que son propios das obras incorporadas nos manuscritos que poden considerarse que conteñen unha compilación, esto é, estos colofós serven pra distingui-las obras unhas doutras incorporadas nun manuscrito que contén unha compilación, pro non rompen a unidade creada po-la sua compilación dentro dun manuscrito. Coido que este é o valor que temos que darlle a este colofón no ms. L, que amosa tamén una certa tendencia a suliña-la unidade esterna da compilación, pois inda que os textos incruídos manteñe-na propia individualidade, os seus títulos particulares esmoreceronse, fora do título das «ordeanzas do curso», que son aquelas, xustamente, que pechase cunha invocación, que atópase noutros manuscritos (ms. N, quizaves A)

132. A. GARCÍA, *Un nuevo* cit. 635-639, de onde tomo os datos; pra sua edición vid. a do Colón onde os datos son outros: as «ordeanzas do curso» rematan no fol. 193 R, onde comenza-nos «Capítulos do rei Pedro», que rematan no fol. 201 R, o que amosaría aínda máis a arbitrariedadá de querer facer pecha-lo ms. L co colofón das «ordeanzas do curso».

133. GARCÍA, *Un nuevo* cit. 638

134. GARCÍA, *Un nuevo* cit. 638

no mesmo posto. Neste sentido o manuscrito non ten craras lindes, fora daquela que atópase entre a táboa e o comenzo da compilación, ó deixarse en branco dous folios, inda que as grandes capitales e a numeración independente das «Costumes da mar» serven pra distingui-los textos us dos outros, a maiores do título xeneral das «Ordeanzas do corso».

No fondo este é tamen o falacio do García, pois aferma que os «Capítulos do rei Pedro» forman parte do manuscrito L, do libro dos capítulos do consulado de Mallorca, po-lo que amosa non dar importancia algunha ó dito colofón. Agora ben, teño pra min que ou decimos que o colofón non é o colofón do manuscrito —cousa que creio seña a xusta— e entón temos que afermar que os «Capítulos do rei Pedro» e os documentos escritos po-la mesma maú que escribén os textos anteriores forman parte dos capítulos do «Libro dos capítulos do consulado de Mallorca» ou decimos que o colofón pechaba o manuscrito orixinario, é entón temos que dir que os «Capítulos do rei Pedro» e os documentos posteriores non formaban parte orixinariamente do ms. L, mais que axuntáronse posteriormente, e tamén eiquí entón o posto dos «Capítulos do rei Pedro» débese ó caso, isto é, escribíronse ó remate do manuscrito, pois no remate do manuscrito atopábanse folios en branco.

Se o colofón pechase o manuscrito orixinario, feito no 1385, teríamos pois coma conclusión que nese ano, inda os «capítulos do rei Pedro» non formaban parte do «Libro dos capítulos do consulado de Mallorca».

O feito de que os ditos capítulos non formaran parte orixinariamente do «Libro do consulado de Mallorca» é importante, mai-lo que eu quero sulñar agora é o feito de que co tempo sintéuse o dezo de face-los entrar no libro do consulado. Neste sentido os «Capítulos do rei Pedro» achegáronse posteriormente da mesma maneira que achegáronse os sete documentos dos folios 198 verso a 204 reuto po-la mesma maú que copiou o libro. Inda que o García non di ren sobor do feito, da súa descrición tense que afermar que despóis da invocación, que atópase no fol. 190 reuto, o verso deste folio tivo que quedar en branco, poi-los capítulos do rei Pedro comenzan no folio 191 reuto; este feito podería conferma-la idea dunha copia posterior dos capítulos, mais leva a perguntarse por qué non incorporáronse xa nun principio no libro, porque unha

cousa é dir que o manuscrito orixinario finaba no colofón dito e outra dir que os «Capítulos do rei Pedro» e os documentos seguintes son axenos o libro. Eiquí samente pódense facer hipótesis. Pódese dir que no intre de copia-lo manuscrito o modelo —dende o punto de vista do García— ou os modelos —teño pra min que o ms. L non copiou un manuscrito onde atopabase unha recopilación, senon que a recopilación do ms. L é obra dos seus redautores— inda non tiña-nos «capítulos do rei Pedro» e que unha copia destes —o que amosaria, coma veremos, que o que xiraba po-lo Mediterráneo nestes intres inda non era unha compilación do LCM— chegou ó poder do consulado nun intre posterior. Dito sea de paso, se teño razón na interpretación da invocación, teríase que dir que o ms. L copiouse de diversos manuscritos independentes, onde atopábanse as diferentes obras que remataron nel. O demostraría pra as «Ordeanzas do corso» os lerios ditos e pra as «Costumes da mar» o feito de ter neste manuscrito, coma capítulo primeiro os capítulos das «Sportades», mentras que o traslado do «Orden xudiciario» que enviouse de Mallorca a Barcelona e rematou en Perpiñán amosa que o dito capítulo atopabase no «Orden xudiciario de Valencia», tal coma tíñase en Mallorca, po-lo que un e outro non poderíase haberse copiado dunha compilación xunguida a chamada po-lo García redacción gamma.

Seña o que seña, o que é craro é que ese intre posterior non debeu ser moi serodio, pois foi o mesmo copista que rematara no 1385 o libro orixinario o que copiou os «Capítulos do rei Pedro» e os sete documentos ditos.

É certo que os «Capítulos do rei Pedro» rematan no fol. 198 rº e os documentos comencan a copiarse no folio 198 vº, pro o García non fala de ningún cómaro en branco, que separe os capítulos dos documentos. Ademáis este feito non creio que teña moita importancia, poi-lo que ten que preguntarse é porqué sintéuse a necesidade de face-las achegas ditas nun manuscrito oficial do consulado, pois non teñe-no carauter de amecedallas. A resposta samente pode ser unha: tíñase que recoller no libro os privilexios que tiñan interés pra o consulado. Neste sentido estas achegas, que deberon facerse neste caso nunha época moi veciña á da redacción do manuscrito ¹³⁵ amosan o degaro de compta-lo libro e neste sentido,

135 Os documentos que atópanse nestes folios pódense ver, salvo erro,

a meu ver, todo-los privilexios que remataron por formar parte do manuscrito, seña-nos privilexios incorporados nos folios dezanove reuto e vinte verso, deixados orixinariamente en branco, cando acometéuse a copia do libro, coma os privilexios incorporados nos folios que axuntáronse ó libro diante dos folios primeiros, seña-nos privilexios copiados nos folios deixados en branco tra-lo fol. 190 vº, todos estos privilexios forman parte do «Libre de Capitols del Consolat de Mallorques» dende o momento da súa incorporación.

Unha crara resposta podería terse ó partir da táboa dos epígrafes, pro mentras teña sobor da mesma samente as novas que da o García: «Contiene una tabla de las rúbricas o capítulos del libro»¹³⁶ non podo dir ren sobor do contido de dita táboa. Agora ben, teño pra min que a concurción non cambearía: o libro do consulado da mar quere recoller o dereito que ten interés pra o consulado concreto, coma xa vimos que sucedeu nos mss. V, N e P.

8. *A formación dos diferentes Libros dos Consulados da mar*

Os devezos de arrecadar nun manuscrito o dereito dun consulado esprican que os manuscritos non señan unha obra pechada, mais aberta, que co paso do tempo vense modificados na súa composición hastra que chega o intre ou ben de facer un novo libro, reorganizando o material recollido no libro antigo, ou ben de axuntar novos libros, a carón do primeiro, pra recolle-lo novo dereito.

Non quero entrar eiquí no problema que pode derivarse do feito de que dentro do LCM impreso terminóu por atoparse o «Orden xudiciario de Valencia» entrementes que tamén no século xv formóuse no Consulado de Barcelona un orden xudiciario propio¹³⁷.

meu, na edición do GARCÍA 62 (4-I-1307) 132; 64 (23-I-1332) 134, 112 (12-VII-1370) 211-212 113 (12-VII-1370) 212-213; 114 (25-X-1371) 213-214; 115 (19-II/19-VII-1373) 215, 116 (11-VII-1375) 216; 119 (21-II-1379) 218-220. Todos eles son anteriores ó 1385, coa úneca esceución do documento 123 (18-XI-1395) 225-226, que é do ano 1395 e atópase seña no fol. 200, seña no fol. 215 v. Se o dato fose esauto, a copia desta derradeira parte do manuscrito tería que sere feita despóis do 1395, pro teño que dir que segun as rexestas do García no folio 200 —ou comenzan ou rematan ou aparecen alí copiados— atópanse tamen os documentos n.º 112, 114, 116 e 119.

136. GARCÍA, *Un nuevo* cit. 637.

137. Vid. E. MOLINÉ Y BRASÉS, *L'antich orde judiciari observat en la Cort dels Cònsols de la mar de Barcelona*, en *RJC* 23 (1917) 233-258; Leopoldo PERELS,

No chamado «Llibre de privilegis del Consolat de Mar de Barcelona» atópase o «Orden judiciari de la cort dels cònsols de mar de València»¹³⁸. Fora, ó parecer, deste «Llibre de privilegis del Consolat de Mar de Barcelona» atópase nun manuscrito conservado na Biblioteca del Col·legi d'Advocats de Barcelona o «Ordre judiciari de la cort dels cònsols de mar de Barcelona», de onde o publicara o Moliné. O que interesame sulñar é a forma de levarse a cabo o tal orden xudiciario; o manuscrito é un traslado feito polo Guillermo de Nadeu, notario público de Barcelona e escriba da curia dos cónsules da mar de dita vila:

«Qui presens translatum factum de mandato eorumden et scriptum a suo originali sumpto ab usibus et stilo capitulis et obseruantiis curiarum dictorum consulum maris et iudicis Barchinone et dependenciis predictorum contentis et specificatis partim in libris uocatis "Albo", "Viridi" et "Rubeo", earumdem curiarum partim auctoritate extra dictos libros antiquitus usitatis et continue seruatis in dictis curiis, uidelicet ab anno M CCCXL, septimo circa in quo anno dominus Petrus .»¹³⁹.

Non entro eiquí nos problemas da autoría e da data de redacción deste orden xudiciario¹⁴⁰, poi-lo que eu quero sulñar e que este orden xudiciario de Barcelona é o resultado de recoller nunha obra todo-los principios xurídicos espallados po-los diferentes libros de privilexios que tiña o Consulado, pro tamen de incorporar novos usos, non recollidos neses libros, coma xa o Perels sulñara. Tamén o Perels amonesta de que «seria temerari que pretinguéssim identificar-lo totseguit amb el "Liber vocatus albus", un dos catro "Llibres dels privilegis" conservats, el qual fou començat al segle XIV. Té unes tapes de pergami blanc»¹⁴¹. O Arcadi García di que la «col·lección documental básica del Consolat de Mar de Barcelona és

Orden judicial del Consulado de Mar de Barcelona, en *RJC* 25 (1919) 289-307; Leopold PERELS, *L'ordre judiciari mercantil de Barcelona del segle XV*, en *RJC* 37 (1931) 1-31, pra os problemas xenerales do testo.

138. *Consolat de Mar*. Volum II: *Elements adicionais (Capitols legals. Estils judicaris. Privilegis)*, a cura de Ferràn Valls i Taverner (Barcelona 1931) 7, onde di que o dito libro era o ms. 989 da BC (=ms. C), afirmación que correxeu no vol. III (Barcelona 1933) 195, pois é o ms. B 192, da mencionada BC, procedente da xunta de comercio.

139. VALLS-TAVERNER, *Consolat* cit. II 98-99.

140. Vid. supra n. 137.

141. PERELS, *Ordre* cit. 14, fala dos catro libros que pertenceron a «Antigua Junta de Comercio» e que atópanse hoxe na Biblioteca de Catalunya.

a un fons documental existent a la Biblioteca de Catalunya, denominat de l'Antiga Junta de Comerç composta per quatre llibres de privilexis, signatures B. 191, B. 192, B. 193 i B. 194»¹⁴², pro estos libros non semellan se-los mencionados po-lo notario barcelonés; agora ben, no Arquivo municipal da vila de Barcelona atópanse outros manuscritos, que conteñe-no «Libre» e outros privilexios, que empregaronse tamén po-lo García. Se un lê por esemplo a rexesta do documento catro do consulado de Barcelona acha estos datos: «AHCB, 1er. Vermell, f. 48, 1er. Vert, f. 375»¹⁴³. Estos alcuños de libro verde e libro vermello cadran cos empregados po-lo notario barcelonés¹⁴⁴.

Vemos así que este orden xudiciario de Barcelona é o resultado de poñer a contribución os privilexios e a forma de autuar —o estilo— dos cónsules de Barcelona e, coma xa sabemos, este orden xudiciario rematou por atopar posto no ms. F, inda que non nas edicións.

Este xeito de autuar non é propio de Barcelona, pois outro tanto debeu suceder no consulado de Valencia. No ms. V, di-no-lo García, recolléuse a colección fundamental dos privilexios do consulado de Valencia¹⁴⁵. Pois ben, o consulado de Mallorca creóuse a imitación do consulado de Valencia. No trinta e un de maio do 1343 o rei Pedro estabreceu consules en Mallorca, «qui determinant questiones et causas hominum maris per modum et forman in civitate Valencia usitatos»¹⁴⁶. O «Orden xudiciario de Valencia» enviouse moi probablemente nese intre a Mallorca ou en data moi veciña, pois no ano 1349 fíxose un traslado «a quodam libro in papiro scripto et inserto, capitula et ordinationes quamplurimas in se continenti super officium consulatus maris civitatis Maioricarum ad

142. GARCÍA 33.

143. GARCÍA 4 (20-II-1348) 13.

144. A «*Guia-Catàleg Institut Municipal d'Història (Casa de l'Ardiaca. Arxiu Històric-Hemeroteca-Biblioteca)* (Barcelona 1983) 54-55, 78, non è daxuda, inda que ten unha bibliografía que non sempre puiden consultar. Tampouco é daxuda o traballo do Juan-F. CABESTANY FORT, *El Archivo del «Consolat de Mar». Noticia de los fondos que se conservan actualmente*, en *Documentos y estudios. Aportaciones a la Historia Económica y Social de la Ciudad*. 13 (Barcelona, julio 1964) 7 ss.

145. GARCÍA 34.

146. GARCÍA 98 (31-V-1343) 198

modum et forman civitatis Valencie» do mencionado orden xudiciario, que enviouse a Barcelona, cando nesta vila restaurouse o consulado, e deste traslado autentico enviado a Barcelona fíxose outro traslado autentico, no ano 1389, que enviouse a Perpiñán, cando estabrecéuse na dita vila o consulado ¹⁴⁷.

O dito orden xudiciario tiña os capítulos que ocupan na edición do Colon os números m 1-m 45 bis; agora ben, o manuscrito de Valencia, que copiouse nos anos 1407-1409 en Valencia, ten un orden xudiciario algo diferente ¹⁴⁸. Quero chama-la atención sobor do feito que despóis do m 45 bis o ms. V ten outros catro capítulos máis ¹⁴⁹. O Arcadi García probou, a meu ver, confermando as afirmacións do Pardessus, que o «Orden xudiciario de Valencia», tal como enviouse a Mallorca, fíxose despóis do 1336, xa que nesta parte —os coarenta e dous primeiros capítulos— os capítulos amosa-no emprego de diversas normas rexias do 1307, 1332 e 1336, inda que por razóns evidentes, o García fala que tivo que facerse no periodo entre o 1343 e o 1345, deixando caer a afirmación do Pardessus, que di que tiña que estar xa redautado no 1343, po-las razóns xa recollidas. Agora ben —e non entro eiquí agora na teoría do García— o cap. 45 do «Orden xudiciario de Valencia», conservado no ms. V, non é outra cousa que a parte dispositiva dunha sentenza do 1350 ¹⁵⁰. Se un examina as rexestas dadas po-lo García nos documentos publicados pertocantes ó consulado de Valencia, acha que os documentos empregados ou mencionados nalgús capítulos do «Orden xudiciario» se non conservan no ms. V; samente a sentenza do 1350 e outros documentos posteriores recollense igualmente no ms. V. Isto esprica un pouco a maneira de traballar dos consulados, que non era diferente da do Botet: as molestias provocadas po-lo feito de ter espallados as normas xurídicas nos diferentes privilexios de reises e de épocas diferentes, levóu a refundi-lo material e a facer

147. GARCÍA 153 (8-III-1389) 274-276. Vid. PARDESSUS V 323-325. Cf. o título da tradución manuscrita italiana (vid. supra n. 94).

148. Vid. a edición do Ferrando e A. GARCÍA, *Estudios sobre los orígenes del derecho marítimo hispano-mediterráneo*, en *AHDE* 39 (1969) 213 ss.; en p. 283 s.a. edición.

149. Vid. GARCÍA 159; téñase en conta que os catro capítulos levan os números 43-46, xa que manca-nos capítulos m 4 e m 19 no ms. V, po-lo que o m 45 bis e no ms. V o cap. 42.

150. Vid. GARCÍA 69 (23-I-1350) 142.

unha nova redacción do «Orden xudiciario» e unha vez feita copiouse nun manuscrito cos outros textos empregados no consulado, ós que co paso do tempo axuntárianse os novos privilexios, mais xa non era necesario copia-los privilexios refundidos. O prólogo do manuscrito valenciano no-lo di craramente ¹⁵¹.

Tra-la creación do consulado de Mallorca éste convirtéuse no modelo dos outros consulados xermolados posteriormente: por eso a documentación do consulado de Mallorca enviouse a Barcelona e despois, dende Barcelona, a Perpiñán; entramentres o estilo dos cónsules valenciás sigue orixinando un novo dereito, coa axuda da xurisprudencia e dos privilexios rexios, que deron lugar a novos capítulos, que non trasmitíronse xa, ó parecer, ós outros consulados. Pro ¿pode alguén dir que estos capítulos do orden xudiciario que atópanse no manuscrito de Valencia non forman parte do «Libre de Consulat de Valencia»? Ademáis, pódese dir que o «Orden xudiciario de Valencia» que estendéuse po-los outros consulados, ben deitar que o consulado de Mallorca convirteuse no modelo dos outros consulados, esgotaba o procedimientto consular nos respectivos consulados?

O m 1 contén a regulación da elección dos cónsules: «Cascun any la vespre de la festa de Nadal...». Agora ben, este capítulo tiña solo aplicación no consulado de Valencia, xa que as eleucións dos cónsules facíanse noutros días e con outros criterios nos outros consulados ¹⁵². Ademáis co paso do tempo ni-nos elutores ni-nos electos era-nos mesmos. Xa fai moitos anos que chamou a atención sobor destes feitos, e moito millor do que o poida facer eu, o Capmany ¹⁵³. Por eso co tempo fíxose no consulado de Barcelona un novo orden xudiciario, que comenza «Cascun any, en la festa de Sant March, les molt honorables cònsols de la ciutat de Barcinona...» ¹⁵⁴.

¿E que este orden xudiciario non forma parte do Libro do Consulado da mar que atópase no ms. F? Deixo no aire estas interrogacións, que amosan xa que se hoxe falamos do LCM é porque a

151. Vid. ed. do Ferrando p. 3-4.

152. GARCÍA 81 ss.

153. CAPMANY 465 ss.

154. VALLS TAVERNER, *Consolat* cit. II 63.

edición do 1494 rematou por impoñerse sobor das diferencias dos manuscritos.

9. *Conclusións*

Resumindo moi brevemente o que deixamos dito, pódese afirmar que tanto a tradición manuscrita coma a tradición editorial amosan que o LCM é unha obra viva, nun dobre sentido. O LCM coma compilación é unha obra aberta, onde atópanse aqueles elementos que os autores dos respectivos manuscritos e edicións recolleron, pois pensaban que eran aqueles que servían pras finalidades que propoñíanse. Isto esprica que os manuscritos e as edicións amosan unha grande semellanza, xa que todas estas recopilacións querían recolle-lo dereito marítimo, mais tamén as finalidades diferentes que se propoñía-nos seus autores esprica-nas diferencias. Ademáis o intre no que lévase a cabo a recopilación xoga un papel moi importante no determina-lo seu contido. Cando comenza a xermola-las primeiras ordeanzas de seguro, os compiladores non ousan deixa-las fora das suas compilacións, e por iso incorpóranse moi cedo as recopilacións do dereito marítimo, inda que os manuscritos e as edicións do século xv non cadren nas ordeanzas recollidas, xa que as posteriores ó refundi-las anteriores determinan que as ordeanzas recollidas dependa do intre no que faise a recopilación. E tamen o lugar onde faise a recopilación xoga o seu papel, coma xa vimos o falar da seución dos usos de Barcelona e da seución onde recóllense os privilexios propios do consulado onde faise o LCM.

Ademáis o contido das recopilacións modifícase co paso do tempo e po-las razóns aseñadas, mais tamen po-lo feito de que os textos que incorpóranse tamen son unha obra aberta. Eu non poño en duda que os manuscritos e as edicións do LCM ofrecen un texto semellante das obras que o García considera permanentes, pro isto pódese afirmar fundamentalmente dos «Capítulos do rei Pedro». Falando do ms. V o García xa dixo que «es aquest —os "capítulos do rei Pedro"—, dels elements constants, el que més conformitat té amb el text de la forma ordinària del Llibre del Consolat de Mar»¹⁵⁵.

Xa que non conozo directamente os manuscritos e dabondo

155. GARCÍA, *La datació* cit. 261.

lembrar eiquí os datos xa recollidos, que amosan diferencias, inda que señan pequenas, entre os manuscritos e as edicións.

Estos feitos, que aumentaréi de pois, e o que dixemos do ms. V amosan, teño pra min, a realidá das obras axuntadas na compilación que hoxe coecemos coma LCM como obras abertas. Non quero dir que hai unha anovación profunda do contido das obras; quero dir que os autores poden modifica-las, inda que seña en moi poucos puntos, pra adauta-las as finalidades que queren aganzar.

O problema está, po-lo tanto, na dificultade de achar esas finalidades, cando nin siquera conocese o orixe dos manuscritos. Agora ben, pódese afermar que os autores das compilacións do dereito marítimo apricado nun consulado concreto, tiña-no degaro de arrecadar nunha obra sola o dereito apricado naquel consulado. Pro este dereito non tiña o mesmo orixe nin tampouco o mesmo valor. Xa sei que é simplificar moito o problema, pro é evidente que nestas compilacións atopábase dun lado o dereito que tiña que apricarse diante dos consulados e doutro lado o dereito que regraba o procedemento a desenrodelarse diante dos ditos consulados pra aprica-las normas de dereito marítimo que poñían remate as controversias.

Cando creóuse o consulado de Valencia o primeiro do mes de nadal do 1283, estabrecéronse dous consules, que «sciant de arte seu usu maris et terminent contractus et discensiones inter homines maris et mercatores, que iuxta Consuetudinem maris fuerint terminanda, prout est in Barchinona fieri assuetum»¹⁵⁶. Eu teño pra min, que o García dun lado probóu que denantes do 1283 hai xa unhas «Costumes da mar» e doutro lado que en Barcelona non hai, ó parecer, unha xurisdición autónoma marítimo mercantil¹⁵⁷. Dito con outra palabras: tíñase xa unhas normas consuetudinarias escritas, inda que se non tiña un dereito procesal, propio dunha xurisdición autónoma marítimo mercantil. Agora ben ¿hai necesidade de envia-lo testo, se existe xa, desas «Costumes da mar» a Valencia? Coido que non. Se no 1283 creóuse o consulado de Valencia foi porque en Valencia existía xa unha aitividade marítimo mercantil. A novidade foi a concesión dunha xurisdición autónoma.

156 GARCÍA 58 (1-XII-1283) 127. Vid. GARCÍA 81 ss.

157. GARCÍA 73 ss

Pro se existía unha aitividade marítimo mercantil, tiña que cono- cerse xa o dereito marítimo mercantil as «Costumes da mar», da mesma maneira que en Barcelona empregábanse as mesmas —ou en Tortosa—, inda que non houbera unha xurisdición independente marítimo mercantil. Isto é, o privilexio do 1283 ven a dir que os cónsules de Valencia deben poñer fin as controversias dacordo coas «Costumes da mar», como facíase xa en Barcelona. Agora ben, ese «in Barchinona fieri assuetum» non pode referirse o procedi- mento, xa que en Barcelona non hai unha xurisdición autónoma; ten que referirse po-lo tanto ó feito de finarse a todo arreo as controversias marítimo mercantiles dacordo cun dereito material que é o da «consuetudo maris», inda que non diante dun tribunal autonomo.

Cando no 1326 creóuse o consulado de Mallorca¹⁵⁸, xa formá- rase no consulado de Valencia unha prautica procesal propia, xer- molada da mesma aitividade do tribunal, inda que tamen confor- mada po-los privilexios rexios, coma vimos. E certo que nun primeiro intre este procedimento non chegou a Mallorca, xa que os cónsules mallorquís tiñan que conocer e xuzga-las causas, «sum- marie et de plano et sine lite ac scriptura» —o que alude o proce- dimento— e dacordo co seu leal saber e entender —«prout ratio- nabile et iustum ac eis melius visum fuerit»— o que alude o dereito a apricar, pro non un dereito consuetudinario existente, as «Costu- mes da mar», senon a concencia de xusticia dos consules, inda que este criterio de xusticia na prautica puidera rematar por identifi- carse nun dereito existente, por esempro nas «Costumes da mar». Esta primeira creación non tivo esito e máis tarde concedéuselle ó consulado de Mallorca, no 1343, que os cónsules rematara-nas causas «per modum et formam in civitate Valencie usitatos»¹⁵⁹. Cando no 1348 creóuse o consulado de Barcelona, creóuse a imaxe e semellanza do de Mallorca, po-lo que os cónsules barceloneses usarían do seu oficio «iuxta usum et exercicium predictum, prout eisdem cum pluribus et diversis provisionibus et cartis nostris con- cessum est»¹⁶⁰. E cando no 1388 creóuse o consulado de Perpiñán, entón os seus cónsules tiñan que usar do seu oficio «usu et exerci-

158. GARCÍA 91 ss.

159. GARCÍA 98 (31-V-1343) 198

160. GARCÍA 4 (20-II-1348) 12-13, vid GARCÍA 102 ss

cio, modo et forma, in omnibus et per omnia, quibus utuntur et uti possunt consules maris et iudex appellationum predictae civitatis Barchinone ac prout in ipsa civitate fit pro nunc et est fieri consuetum»¹⁶¹.

Se non queremos dir que hastra as creaci3s mencionadas en Mallorca, Barcelona e Perpiñán non existía unha aitividade marítimo mercantil, temos que reconocer que a novidade destes privilexios atópase na creaci3n dunha xurisdicci3n autónoma pra as aitividades marítimo mercantiles; pro este feito amosa xa que o máis importante non era te-lo dereito material —xa que este tiña que sere conocido—, mais o dereito procesal, a maneira de proceder, o estilo dos c3nsules. E o modelo tiña que se-lo valenciano. Un documento que hoxe atópase no libro dos privilexios do consulado de Perpiñán testemuña este feito: os mallorquís recibiron de Valencia o «Orden xudiciario de Valencia», que trasladouse autenticamente desp3is a Barcelona e desp3is dende Barcelona envi3use a Perpiñán¹⁶².

Este feito determina unha tradici3n dobre nos libros dos consulados: Temos así que 3 principio do s3culo xv no consulado de Valencia recoll3use todo-lo dereito do mesmo; neste libro manuscrito hai catro seuci3s —descarto a primeira, onde at3pase a t3boa—: na primeira at3pase o «Orden xudiciario de Valencia»; na segunda, as «Costumes da mar» coas «Ordeanzas do corso» incorporadas; na terceira, as «Costumes da mar de Barcelona» e na coarta, os privilexios do Consulado de Valencia. Este libro do consulado de Valencia recollía nun solo volumen o dereito procesal e o dereito material. Agora ben, tamen hai un «Liber privilegiorum consulatus maris ville Perpiniani» onde at3pase o dereito procesal —os primeiros m 45 bis capítulos do que hoxe conocemos baixo o alcuño de LCM—, pro no-no dereito material consuetudinario: neste libro se non atopa ni-nas «costumes da mar» ni-nas «Ordeanzas do corso».

Estos feitos amosan que as compilaci3s de dereito marítimo teñen un craro orixen hist3rico: son fillas do seu tempo e do lugar que véunas nacer e po-lo tanto estas compilaci3s teñen en com3n arrecada-lo dereito marítimo-mercantil, pro non sempre do mesmo

161. GARCÍA 151 (22-XII-1388) 271-272; vid. GARCÍA 111 ss.

162. GARCÍA 153 (8-III-1389) 274-276

xeito. Entre estos dous casos extremos —e non digo que non existan outros máis radicais— que atopamos en Valencia e en Perpiñan hai moitas solucións intermedias. Neste sentido pódese aceptar que facendo unha comparación cos distintos manuscritos chéguese a identificar elementos permanentes e elementos accidentais, pro tamen penso que isto é unha constatación de feito, que non pode levar a escribir da categoría dos libros dos consulados da mar por exemplo o de Perpiñan ou a escribir do libro do consulado elementos que tamén atópanse no mesmo.

Eu non conoco os manuscritos do LCM, pro é evidente que pra determina-lo que son elementos permanentes dos que atópanse na edición do 1494 non poden empregarse todo-los manuscritos que chegaron hasta nosoutros. O mesmo García aferma que as primeiras ordeanzas de seguros feitas en Barcelona son do 12 de abril do 1432; despois destas veñen outras varias; esta aitividade pechóuse coas ordeanzas do 3 do mes de san Xoan do 1484. «Constitueixen tamé unha altra redacción total, que derogà i substitui les anteriors. Sembla que foren objecte de corrección el 1494»¹⁶³. Xa o Pardessus chamou a atención sobor deste feito: as ordeanzas de seguros posteriores poñíanse no posto das anteriores. Neste sentido os manuscritos do que hoxe chamamos LCM amosan este feito: as ordeanzas de seguros que incorporan son aquelas que estaban vixentes no intre de face-lo manuscrito e o interés destas ordeanzas fixo que manuscritos e edicións víranse perfeccionados po-la achega das novas ordeanzas. Dos nove manuscritos, que emprega o García, é craro que non podense tomar en consideración ni-no ms. F, ni-nos dous manuscritos mallorquís ni-no manuscrito valenciano, poi-los catro son anteriores ó abrochar das primeiras ordeanzas. Dos outros manuscritos teñen ordeanzas de seguro os dous parisinos —N e P—, o ms. U de Cagliari, o manuscrito barcelonés C e axusto a tradución manuscrita italiana non empregada po-lo García. A úneca es-ceución é o ms. A, quizaves por depender dun ms. dos derradeiros do século XIV. Tamén as edicións do 1484 e do 1494 e a tradución italiana do 1519 e po-lo tanto a súa reedición do 1539 teñen-as ordeanzas de seguros. ¿Non tería que levar este feito a afermar que

163. Arcadi GARCÍA I SANZ, *Ordinacions inédites de Barcelona i Perpinyà sobre assegurances marítimes (segle XV)*, en *Estudis d'Historia Medieval* 4 (Barcelona 1971) 127-128.

tamen as ordeanzas de seguros é un elemento permanente do LCM? É certo que non son sempre as mesmas, pro tampouco é sempre o mesmo o «orden xudiciario», que doutra parte non sempre atópase nas edicións, así na edición italiana.

Eu non vou discuti-lo dereito a seleccionar us elementos permanentes no LCM e rechaza-los demáis, pro o que me non parece lícito e falar dunha compilación que vai e ven po-lo Mediterráneo e non tratar de identifica-la. Penso que unha cousa é falar dunha compilación e outra moi distinta falar de textos independentes. Hai unha compilación que xira po-lo Mediterráneo, cando xira coma unha unidade, po-lo que os seus distintos elementos copiáanse coma formando parte desa unidade. Neste sentido eu falo de compilacións pra referirme os manuscritos que conozo, pois neles atópanse, arrecadados e formando unha unidade, un fato de textos, que ó parecer xiraban tamen independentemente. O problema está no feito que estos manuscritos poden recoller unha compilación por duas razóns diferentes: ou ben os autores do manuscrito son ó mesmo tempo os autores da compilación, xa que son quen es arrecadaron no manuscrito unha foulareda de textos independentes, ou ben os autores dos manuscritos non fan outra cousa que copia-los manuscritos a partir doutro manuscrito que tiña xa unha compilación, axuntando ás veces novos elementos.

O García demostra que os elementos permanentes aparecen no mesmo orden nos catro manuscritos seleccionados; pra sere máis esautos: O García demostra que nes es catro manuscritos pódense atopar duas maneiras diferentes de amosarse os elementos que considera constantes e po-lo tanto que forman o LCM, mais pra facer esto ten que prescindir —ademáis dos outros manuscritos e das edicións— dun manuscrito —o D— e ten que prescindir da forma real dos manuscritos. Eiquí somente quero chama-la atención sobor deste feito, pois teréi que voltar sobor do mesmo.

O testemuño máis antigo dunha compilación é o ms. L, que é do 1385, pro é evidente po-lo xa dito e po-lo que diréi, que ó mesmo non pode sere modelo dos manuscritos posteriores e moi probablemente non tivo coma modelo unha compilación. Quere esto dir que as compilacións eran inda unha tarefa persoal, xa que inda corrian independentemente os diferentes textos. Non nego que a modiño comenzarían tamen a correr manuscritos que tiñan xa unha com-

pilación e que po-lo tanto poderían servir de modelos pra outros manuscritos.

Do ano 1424 consérvase un inventario de benes dun feireante barcelonés, onde dise:

«Item un altre llibre scrit en paper .. appellat *libre del Consolat*/lo qual comença, ço es en la primera carta: *fforme en qual manera se fa la electio dels consols*. Et feneix lo dit libre en la darrera carta · *Decimo Kalendis Decembris anno Domini M° CCC° XXXX°*»¹⁶⁴.

Este manuscrito comenza co «Orden xudiciario de Valencia» —que ó parecer non ten título— e remata cos «Capítulos do rei Pedro»¹⁶⁵. Eu podo aceptar que o seu contido veríase compretado po-las «Costumes da mar» e po-las «Ordeanzas do corso», pro sería xa arricasdo nega-la posibilidade de que atoparanse tamen outros testos. Nun caso ou noutro, sempre estaríamos diante de hipótesis, que non poderían probarse.

Do ano 1471 atópase outro inventario de bes doutro compradel barcelonés:

«Item un altre libre apellat *libre de Consolat* escrit en paper en vulgar cathalà e comensa en la primera pagina: *Aquesta és la leccio e stil e acaba: se vullen a lur coneguda*»¹⁶⁶.

Este manuscrito do LCM remataba co documento que hoxe na edición do Moliné atópase na páxina douscentos trece: «ho puxen esmenar e declarar e interpretar aytantes vegades com se vullen, a lur coneguda», com xa dixera, a meu ver, o Perels¹⁶⁷, pro como sulíñou o mesmo Perels «I com que, de més, les sis paraules inicials no concorden amb les de l'ordre judiciari valenciá i si amb les del barceloni que ens ocupa, és licit de deudir per aquelles sis paraules el contingut real de tota la primera part del llibre desaparegut. Per aquest procediment reb nova força allò que ja podia hom suposar: que el nostre ordre de jurisdicció mercantil ha estat considerat digne, en més d'una ocasió, d'ésser incorporat al "Llibre"»¹⁶⁸. Esto

164. MOLINÉ LI; tamén agora en Josep M.ª MADURELL I MARIMÓN, *Manuscrits en Català anteriors a la impremta (1321-1474). Contribució al seu estudi* (Barcelona 1974) 52 (20-XII-1423) 46, onde trascribese: «Decimo kalendas ».

165. Vid. MOLINÉ 209.

166. MOLINÉ LII; MADURELL, *Manuscrits* cit 144 (16-VII-1471) 97.

167. Vid. MOLINÉ 213.

168. PERELS, *L'ordre* cit 33.

e, este manuscrito comenzaba, se ten razón o Perels e coído que si, co «Orden xudiciario de Barcelona» e pechábase cun documento que non era-nos «Capítulos do rei Pedro».

Eu non quero hipotetizar sobor do contido; abonda chama-la atención sobor do feito que remataba-nos dous libros con diferentes documentos e comenzaban con «Ordes xudiciarios» diferentes, pro chamábanse «Libre del Consolat»/«Libre de Consolat»; este título, que quizá orixinariamente era o do «Orden xudiciario», como amosaria o ms. D, pasou a denomina-las «Costumes da mar», pro tamen pasou a se-lo título das compilaciós, onde recollíase o dereito dun consulado; esto espricaría que o «Orden xudiciario de Valencia» rematara por perde-lo seu título, po-lo que non atópase ne-nos manuscritos, agás quizaves o ms. D, ne-nas ediciós.

Antes de seguir adiante quixera chama-la atención sobor das diferencias entre o dito po-lo García e o que eu afermo. Non é que o García negue a existencia dunha compilación histórica, esto reconeceo tamén o García: o «Libro do consulado da mar», tal como atópase na edición do 1494, é unha cristalización dun proceso, pro pensa que o LCM é sólo o formado po-los elementos constantes. Como estos elementos constantes teñen un orixe diferente e naceron en intres distintos é evidente que o García pensa que as primeiras compilaciós tiñan un contido máis reducido, pro sempre afermando que hai unha compilación, que é a que ten algún ou todo-los elementos constantes, segun o tempo, e que xira po-lo Mediterráneo.

Eu penso que non hai unha compilación do LCM tipo hastra o trunfo da obra do Cealles; denantes do 1494 atópanse, como xa vimos, compilaciós que dentro dunha tradición común crara, teñen sempre un contido propio, inda que co paso do tempo é evidente que algunhas destas compilacios puideron servir de modelo a outras, sobre todo pra aquelas compilaciós xurdidas nun mesmo consulado e pra aquelas feitas pra compradeles; ademáis estas compilaciós so-nas chamadas nalgún caso co paso do tempo «Libre de Consolat», po-lo que todo o seu contido —costante ou non— forma parte dese libro do consulado. Isto é, non hai un libro do consulado, senon moitos libros dos consulados, que ademáis non teñen unha estrutura fixa, poi-lo seu contido medra cos novos privilexios e costumes. O probaria a primeira mención que conócese do libro do consulado; esta é pra o Perels a que atópase no «Testa-

ment dels consellers» de 1373, onde falándose das dúas avenencias pautadas o 29 de xaneiro do 1373, entre o rei e a vila de Barcelona, dise:

«Ja dels dits privilegis es stat liurat translat al honrat Guillem çà Quintana, pero ço que aquells face metre en lo libre del Consolat de la mar»¹⁶⁹.

E este traslado sirveu pra o seu fin. Lembrei xa que o ms. P, que pra o Pardessus ten carauter oficial, incorpora estos dous pautos do 1373 e outro tanto fai o ms. F¹⁷⁰.

Este feito ten unha sua importancia, mais non interesa pra o que discutimos agora. Teño pra min, ademáis, que pra poder falar dunha compilación que xire po-lo Mediterráneo dende ó menos o 1331 é necesario probar que esa compilación —e eiquí non pode prescindirse dos elementos non constantes— circulou po-lo Mediterráneo e sirveu de base pra face-los manuscritos que hoxe coñecemos. Sobor deste problema falaréi agora.

III. ¿EXISTEU UNHA COMPILACIÓN DE DEREITO MARÍTIMO MERCANTIL CHAMADA LCM QUE XIRÓU PO-LO MEDITERRÁNEO DENDE O SÉCULO XIII?

1. *Precisións terminolóxicas: o LCM coma unha recopilación*

Todo o mundo é dacordo no afermar que o LCM que hoxe coñecemos é unha compilación, pro xa non todos teñe-na mesma idea sobor da formación desda recopilación e da sua expansión.

Falar do LCM coma dunha recopilación que xira po-lo Mediterráneo, como faino o García, supón ter que falar dunha obra que é o froito de arrecadar nun mesmo manuscrito textos diferentes, anteriores e independentes, pro que, ó partir daquel intre, comenzan a xirar po-lo Mediterráneo coma unha obra unitaria.

Neste sentido xa dixen que se non pode falar dun LCM tipo hastra que non trunfou a edición do Cealles. Agora ben, pra evita-

169. PERELS, *Orden cit.* 289-307.

170. Vid. supra p. 50 s. Teríase ademáis que correxi-la afirmación do García, de que o primeiro testemuño que conecese do alcume «Llibre del Consolat de Mar» ou sinxelamente «Llibre del Consolat» seña un documento real do 22 de maio do 1423 —GARCÍA 61—.

las confusiós seguiréi falando do LCM pra falar de recopilaciós onde atópanse en liñas xenerales os chamados po-lo García elementos costantes, pro onde poden tamen non atoparse e onde tamen poden atoparse xeneralmente falando outros elementos, que forman tamén parte desos libros dos consulados da mar. Esto é, denantes da edición do Cealles non hai un libro de consulado da mar, mais moitos libros dos consulados da mar —cada consulado tiña o seu propio e os compradeles tiñan tamen os seus propios libros, quizaves incluso máis estensos, xa que os feireantes tiñan interés en coñece-lo dereito de todo-los consulados onde negociaban—, pro que asemellábanse entre si, seña por que os consulados fixéronse a imaxe e semellanza primeiro do consulado de Valencia e despois dos de Mallorca e Barcelona, seña por que ó estar acadarmado-los consulados ó mesmo rei e o ter us intereses comús, percuraban asemellarse, co troque dos seus respetivos privilexios e practicas, po-lo que rematóuse por formarse un dereito común a todo-los consulados da coróa de Aragón, que púxose a carón do dereito común do Mediterráneo.

Esto supón tamén que en liñas xenerales estas recopilaciós non xiraban po-lo Mediterráneo, pois aínda xiraban independentemente os elementos principais que formaba-nas. Con outras palabras, atópanse recopilaciós —dende o século XIV con seguridade, pois do 1385 é o ms. L— pro estas nacen alí onde alguén arrecadou nun manuscrito diferentes textos de dereito marítimo mercantil, e alí permanecen, onde fixéronse. Non quero dir con esto que co tempo —e fundamentalmente cando estas compilaciós son obra dos feireantes— algús destes manuscritos que conteñen unha compilación non señan copiados —lembrese o dito sobor dos ms. P e F—, pro o que non hai aínda é unha compilación, unha compilación tipo, que poida identificarse po-lo seu contido e que po-lo tanto tamén sería a úneca que levara o alcume de LCM e xirara po-lo Mediterráneo.

Tendo presente estos feitos é craro que seña necesario eiquí distinguir dun lado o problema da formación dos distintos elementos, que hoxe forman parte do LCM, e doutro lado o problema da formación do que hoxe coñecemos coma LCM.

A tradición manuscrita e a tradición editorial independente da obra do Cealles amosan dun lado que os elementos que forman

parte do LCM son textos independentes e doutro lado que o LCM é unha recopilación, que xurde cando axuntáronse diversos textos nun mesmo manuscrito. O García di que «La denominación *Llibre del Consolat de Mar*, o simplemente *Llibre del Consolat*, ab què actualment és universalment coneguda la nostra compilació, no va més enllà del segle xv»¹⁷¹, inda que o documento citado polo Perels amosa que xa ó menos dende o 1373 empregábase esta denominación.

Agora ben, dende o intre que nesta compilación atópanse textos diferentes¹⁷², pódese afermar, coma faino o García, que o LCM «es el que podriem dir l'abast definitiu dels elements constants de la compilació»¹⁷³. Neste sentido pódese falar de compilacións anteriores, onde non atopábanse todo-los elementos que formarán máis tarde o definitivo LCM. Xa que a tradición manuscrita e a editorial en liña xeneral amosan que as «costumes da mar» e as «Ordeanzas do curso» son textos diferentes —coas dudas xa ditas— pode dirse que o LCM é unha compilación, que xurde cando a estos dous textos, os máis antigos, ó parecer, achegáronse outros. É certo que ó ser as «Costumes da mar» e as «Ordeanzas do curso» textos diferentes, poderíase afermar que o primeiro paso da compilación do que hoxe chamamos LCM fíxose cando fundíronse os dous textos mencionados. E aínda máis, xa que nas «Costumes da mar» pódense diferenciar fatos diferentes, pódese afermar, coma faino o García, que as mesmas «Costumes da mar» son unha compilación.

Eu, pra evita-las trabucacións, falaréi sempre das «Costumes da mar» coma dunha obra independente, inda que o seu contido medrou a modiño, fundamentalmente polo labore xurisprudencial dos tribunales —de árbitros e de xueces— que ocupábanse dos negocios marítimo-mercantiles; quero dir polo tanto que as «Costumes da mar» non atopan o seu orixe escrusivamente nos tribunales autónomos dos consulados. Ó parecer en Barcelona non houbo unha xurisdición autónoma marítimo-mercantil denantes do 1348 e outro tanto sucedeu en Tortosa denantes do 1363, e é craro que nestes

171. GARCÍA 61.

172. Vid. GARCÍA 60: «Evidentment, els textos que componen la compilació, diguem general, del *Llibre del Consolat*, són només els textos constants. I és per això que en la resta de l'estudi ens ocuparem només d'aquests».

173. GARCÍA 61

postos conociáanse as «Costumes da mar», denantes de ditas datas. Ademáis, como lembraban, cada un ó seu xeito, o Capmany e o Pardessus, os consules era-nos direutores do proceso, pro era-nos entendidos nos feitos da mar e dos negocios quenes atopaba-nas solucións.

Desta maneira eu falarei dos testos que hoxe atópanse no LCM; e limítome a cita-los fundamentais, aqueles que recolle-no dereito procesal, o dereito marítimo do Mediterráneo e o dereito marítimo de Barcelona: «Orden xudiciario de Valencia», «Costumes da mar», «Ordeanzas do corso» e «Capítulos do rei Pedro», como testos independentes, que sufriron —algús deles— arreo reelaboraciós, xa que ós mesmos achegáronse outros materiais, sin perder por eso a sua condición de obras independentes, o que amósase inda nos manuscritos e nas edicións. Isto é, dun lado falaréi do proceso de formación dunhas redauciós que hoxe conocemos na sua etapa definitiva: as «Costumes da mar», as «Ordeanzas do corso» e o «Orden xudiciario de Valencia», xa que o orixe rexio dos capítulos do rei Pedro otorgan a este testo un seu carauter espacial; e doutro do proceso de formación dunha recopilación que hoxe conocemos baixo o alcume de LCM.

Coido que facendo así pódense evitar algunhas trabucaciós ó manter xibado-lo problema da formación dos elementos que hoxe atópanse no LCM e o problema da formación dunha compilación de dereito propio dos consulados, que co tempo chegaría a te-la forma que hoxe ofrece nas edicións impresas ó partir do 1494.

2. O prantexamento do García

O García, po-lo que deixamos dito, fala sempre de compilación¹⁷⁴, pro con este alcume refírese a cousas diferentes. Dun lado di que «la denominació més antiga del cicle jurídic de la nostra compilació fou *Consuetudo maris* i que les primeres citacions que per ara coneixem, són en uns documents de Vic dels anys 1231 i 1232»¹⁷⁵; doutro di que «les parts o textos constants de la nostra compilació so-no «Orden xudiciario», os capítulos das «sportades», as «Costumes da mar», os «Usos da mar», as «Ordeanzas do corso» e os «capí-

174. Vid. así p. ex. GARCÍA 143.

175 GARCÍA 150.

tulos do rei Pedro»¹⁷⁶ e, de cabo, di que pódese prescindir dos «capítulos do rei Pedro», pois este testo «es efectivamente afegit»¹⁷⁷. Como di o propio García: «En realitat, és massa imprecis parlar només d'una compilació antiga, ja que l'estat i el contingut de la compilació aná creixent, tal com veurem després, de 1272 a 1343; i axò dona almenys tres compilacions antigues de contingut progressiu: 1.^a, l'existent en 1272; 2.^a, la que hem denominat alfa, en 1331, i 3.^a, la que fé de matriu de la gamma, en 1343. I això sense comptar la gamma i la beta pròpiament dites, de les quals ja n'hem parlat abans»¹⁷⁸. E remato po-lo momento decindo que pra o García nas «Costumes da mar» pódense ó parecer xibrar tres fatos de capítulos, que atópanse ben arredados no manuscrito valenciano: «Costumes da mar», «Ordeanzas do curso» e «usos da mar» e ademáis o primeiro fato pódese xa considerar unha compilación, pois nel pódense xibra-la parte máis antiga —as «costumes primeiras da mar» (= c 1)— e a máis moderna —as «Costumes segundas da mar» (= c 2)¹⁷⁹.

Eu non quero discutir eiquí estas afirmacións do García ni-no seu dereito a chamar compilación seña o testo máis antigo seña o testo máis moderno, seña-nos textos intermedios, pro quero evitar trabucacións e, neste sentido, como xa dixen, falaréi de compilación naquel intre no que os elementos —algús ou todos— diferenciados que hoxe compoñe-no LCM atópanse xuntos.

Esta decisión ten que fundamentarse, xa que po-la sua parte o García apoiase no ms. V. Neste manuscrito, coma xa vimos, atópase coma terceira seución do mesmo o que na táboa chámase «Aci comencen les bones costumes els bons usatges de la mar», onde atópanse as «Costumes da mar» e o que hoxe coñecemos baixo o alcuño de «Ordeanzas do curso». Non vou repito-lo xa dito; agora ben, ou maxinamos que orixinariamente as «Ordeanzas do curso» —deixando a un lado o problema da sua propia formación— formaban parte das «Costumes da mar», po-lo que ós poucos co paso do tempo chegaron a ter unha propia individualidade coma por exemplo no ms. N, que tornaron a perder nun certo sentido coa edición

176. GARCÍA 157-158.

177. GARCÍA 158.

178. GARCÍA 169.

179. GARCÍA 168 ss.

do Ceelles, pra prescindir dos intentos anteriores, ou ben maxinamos que as «Costumes da mar» e as «Ordeanzas do corso» orixina-riamente formaban dous textos independentes, que tenderon a axu-garse; neste sentido o ms. V sería un primeiro paso denantes das ediciós.

Eu teño que reconocer que non hai moitos argumentos pra de-fender unha e outra posición. Coas dudas xa aseñadas, é certo que dende as «Costums de Tortosa», inda poñéndose «costumes da mar» e «Ordeanzas do corso» —ou normas que regraban a mesma mate-ria, coma nas «Costums de Tortosa»— baixo un mesmo título, man-tense un certo xebre entre elas, pois cando comenza-nas «Ordean-zas do corso» —seña samente no actual m 306, seña no m 298 e no m 306— faise sempre a aseñación de comenzare alí un novo fato de capítulos. Isto é o que, con moitas dudas, faime elexi-lo falacio de que dende o principio «Costumes da mar» e «Ordeanzas do cor-so» eran dous textos independentes, inda que rematará-nos dous por formar parte dun fato de 334 capítulos numerados unitaria-mente po-lo Ceelles, po-lo que pra min no ms. V pódese ver un primeiro paso pra chegar a dita unidade.

Pra o García o ms. V é cuspidiño a redacción beta do LCM e esta redacción beta é cuspidiña a súa vez a redacción alfa dous, po-lo que pode afermar que nas «Costumes da mar», tal como atópanse no ms. V podese descubri-los fatos das «Costumes primei-ras», das «Costumes segundas», das «Ordeanzas do corso» e dos «usos da mar». Deixando a un lado as «Ordeanzas do corso», po-las razóns ditas, un tal feito autorizaría o García a falar dunha compi-lación. Pro teño pra min que é esta unha afirmación non probada, como intentaréi facer ver.

Tendo en conta estas afirmaciós, vexamos agora o prantexa-mento do García.

O García fai un resumen dos datos históricos que temos sobor das «Costumes da mar». Os testemuños máis antigos son dous documentos de Vic dos anos 1231 e 1232, onde fálase de «Consue-tudo maris»¹⁸⁰. Con razón o García duda que refiranse xa a un texto escrito; neste sentido o primeiro testemuño no que atópase unha mención a unhas «Costumes da mar» escritas, ó que o García chama

180. GARCÍA 150.

ciclo das «Consuetudines et Usus Maris» é o que derivase da concordancia dun fato de capítulos —os das «Costumes primeiras»— do LCM coas «Costums de Tortosa»; pódese datar po-lo tanto esta primeira redacción escrita das «Costumes da mar» denantes do 1272, poi-lo manuscrito das «Costums de Tortosa» dos notarios Tamarit y Gil leva a data do 28 do mes de San Martiño do 1272 ¹⁸¹.

O epígrafe do título vinteseite do libro noveno das «Costums de Tortosa» é: «Iste sunt Consuetudines et usus maris, quibus utuntur homines detursenses» ¹⁸², tra-lo que veñen dous capítulos que regran unha materia semellante da que atópase nas «Ordeanzas do corso», inda que non teña-no mesmo orixe; somente despóis destes dous capítulos, atópase un novo prólogo que lembra o que atópase hoxe no m 46, que abre un fato de capítulos que ten un paralelo certo nas «Costumes da mar» que hoxe conocemos ¹⁸³. O García matina que os redautores das «Costums de Tortosa» fixeron unha selección das «Costumes da mar» e que as coincidencias e as diferencias entre o texto tortosino e o texto das «Costumes da mar» pódense espri-car po-lo feito de traducir amas redaccións un texto latino anterior. «En general, el text del LCM es produeix de forma més concisa i més tècnica, i el texto tortosí és més prolix i explicatiu» ¹⁸⁴. Atopa un exemplo enxebre no m 47, onde o capítulo das «Costums de Tortosa» fala «de la dimensió del *pla*, mesura que és realment insòlita, fins al punt que no sabem què significa» ¹⁸⁵. Eu non conozo estos grandores, pro lembrarei que o m 47, no ms. V, di: «ne quant haurà de *pla* ni e en sentina ne quant obrirà, ne quant haurà per carena», mentras o m 50, que é do fato máis antigo das «Costumes da mar» pra o García, di «Ara parlem del senyor de la nau o del leyn qui començerà la nau en forma pocha e darà més en centina et per carena e de *pla* fer-l'a major...». E certo que o García di que «l'alçada de la sentina... indica la del *pla* del vaixell», pro é evidente que tamen no ms. V e no m 50 fálase, como nas «Costums de Tortosa», «ne quant aurà en *pla*, ne quant en centina».

De toda-las maneiras é evidente que entrementes as «Costums

181. GARCÍA 151.

182. Vid. VALLS II 130 e III 1, 151.

183. GARCÍA 151.

184. GARCÍA 155.

185. GARCÍA 155

de Tortosa» teñe-no término antigo «cartoral», que, como lembra o Corominas, o Miret i Sant prefere o termo «cartulari»¹⁸⁶, este derradeiro é o que atópase no LCM¹⁸⁷. Deixando a un lado algunhas diferencias que, á meu ver, non veñen dunha tradución diferente, o m 58 regra o poder que te-no escribano: ten que estar presente no intre de cargar e descargar, po-lo que ó perderse algunha cousa, que o escribano escribera, «l'escrivà la deu pagar», pro se non pode paga-la, «deu pagar la nau». No capítulo paralelo das «Costums de Tortosa» —9, 27,9— dise que no mesmo caso «lo senyor del leyn e.l dit leyn són tenguts e obligats de menar e de restituir tot so que.e.l cartoral serà trobat escrit que perdut sia». Esto é, diante dos mercadeles non é o escribano o responsabre, mai-lo señor da nave e a mesma nave.

Dito esto, neste intre quero suliña-lo que di o prólogo tortosino:

«Con moltes vegades sia trebal entre.ls seynors dels leyns e de les naus, e els mercaders, e els mariners, e els pegrins, e en la mar aja custumes e usances per si metexes, per les quals plets que sien entr.ls ç'an a determenar e a defenir, són posades en aquest libre les custumes de Tortosa de la usanza de la mar e de la ribera, e de les covinenses fetes entr.els»¹⁸⁸.

Desta maneira atópase diferenciado este novo feixe de capítulos dos dous capítulos primeiros, onde dise que «és custuma de Tortosa que si nul hom ç'adobarà ab lo còmit de galea...». Quixera suliñar certos feitos:

a) Estos dous primeiros capítulos forman un mundo diferente do que atópase no segundo feixe de capítulos, que comenza co capítulo terceiro, onde atópase o testo recollido.

b) Os dous capítulos ditos pertocan unha materia que ten un paralelo nas «Ordeanzas do corso», pro atópanse o principio da selección feita das costumes e dos usos da mar.

c) Estos dous fatos de capítulos atópanse baixo un epigrafe

186. COROMINES s.v. carta.

187. Por comodidae pódese ve-la comparación feita po-lo GARCÍA 153 entre LCM m 57 e C. Tortosa 9,27,3, inda que no testo impreso das «Costums de Tortosa» atópase «cartolari» mentras no ms. Tortosino de Tamarit-Gil ten sempre «cartoral».

188. VALLS III 131-132.

común: «Consuetudines et usus maris», que empregan os homes de Tortosa.

Eu non sei se o feito de falar no capítulo primeiro da costume de Tortosa —como quedou recollido— permite pensar que as «Costumes e usos da mar», aqueles que rixen os feitos da mar, atópanse somente a partir do capítulo terceiro, pois tamen nestes capítulos derradeiros atópanse usos propios de Tortosa, pro o que é certo é que hai dous feixes de capítulos ben arredados e que as «Costumes da mar» pechan o título vinteseite das «Costums de Tortosa», que comenza con dous capítulos que rixen as aitividades militares na mar.

Cando o García aferma que «seguint la cronologia, trobem una altra referència segura i documentada de la nostra compilació en el privilegi d'erecció del Consolat de Mar de Valencia d' 1 de desembre de 1283, el qual prescriu que els nous còsols de mar *terminent contractus et discensiones inter homines maris et mercatores, que iuxta CONSUETUDINEM MARIS fuerint terminanda, prout est in Barchinona fieri assuetum*»¹⁸⁹, o término compilación é dunha ambigoedá grande. Nesta compilación non poden atoparse por razóns cronolóxicas ni-nos «capítulos do rei Pedro» ni-no «Orden xudiciario de Valencia», ni-nos «Capítulos das Sportades»¹⁹⁰.

¿Fala o García dunha compilación porque nela atópanse xa as «Costumes da mar» e as «Ordeanzas do corso»? O documento non permite unha tal conxunción: as solucións das discusións «inter homines maris et mercatores» atópanse —léase o prólogo do título vinteseite das «Costums de Tortosa»— nas «Costumes da mar», non nas «Ordeanzas do Corso»¹⁹¹; ademáis as «Costumes de Tortosa» non permiten afermar que nestes intres «Costumes da mar» e «Ordeanzas do corso» andiveran xuntas e a tradición manuscrita e editorial amosa que, deixando a un lado o caso do ms. V, amos son textos distintos, coas dudas xa ditas, que non sempre atópanse xuntos¹⁹².

É certo que o García fala das «Costumes da mar» e dos «Usos da mar», pro teño pra min que as datacións que o García propón

189. GARCÍA 156

190. Vid. GARCÍA 164 ss.

191. GARCÍA 169.

192. Vid. supra.

non permiten dir que naceran xa os «usos da mar». Por eso mesmo, cando o García 'aferma que este reconecemento oficial levou a tradución do testo latino das «Consuetudines» o que confermariase po-lo feito de atoparse nun inventario do 2 de mes de Nadal do 1331 un «libre ... de les Costumes de ia mar» e noutro inventario, do dezasete do mes da sega do 1333, «*alium librum escriptum... qui incipit in rubro: «Comensa lo Libre de bones costumes, etcètera»*¹⁹³, podo aceptar que nesas datas houbera xa manuscritos das «costumes da mar» en catalán, poi-lo mesmo García suliña que o alcume «bones costumes» é o mesmo que atópase no m 46: «*aquests són los bons stabliments e les bones custumes qui són de fet de mar...*»¹⁹⁴, pro dir que ese libro tiña a forma que amosa hoxe o manuscrito valenciano, parece un brinco arriscado por demáis. E certo, como di o García, que o «Orden xudiciario de Valencia», feito pra él en Mallorca c. 1343-1345, conferma a existencia das «Costumes escritas de la mar»¹⁹⁵, pro non conferma que esas costumes escritas seña-nas que atópanse no manuscrito valenciano, onde aparecen mesturadas «Costumes da mar» e «Ordeanzas do curso».

O inventario do 1333 di que comenza en vermello «Comensa lo libre de bones costumes», pro este epígrafe non cadra de fio a fondo co epígrafe do V 1: «*Aci comencen les bones costumes e els bons usatges de la mar*» (este epígrafe cadra co que atopase na táboa, onde manca a conxunción *e*), capítulo que a sua volta comenza: «*Aquests son les bons stabliments e les bones costumes que son del fet de la mar*»¹⁹⁶.

Ademáis o úneco dato seguro que temos sobor do avencellamento entre as «costumes da mar» e un dereito semellante ó que contense nas «Ordeanzas do curso» é o das «Costums de Tortosa», onde ese dereito vai diante das «Costumes da mar»; tendo esto presente, o manuscrito do 1333 amosaría, po-lo seu comenzo, que ó principio non atopábanse as «Ordeanzas do curso», pro dir que estas atoparíanse ou despóis das «Costumes» ou no medio das mesmas levaría a facer unha afirmación no aire.

193. GARCÍA 157.

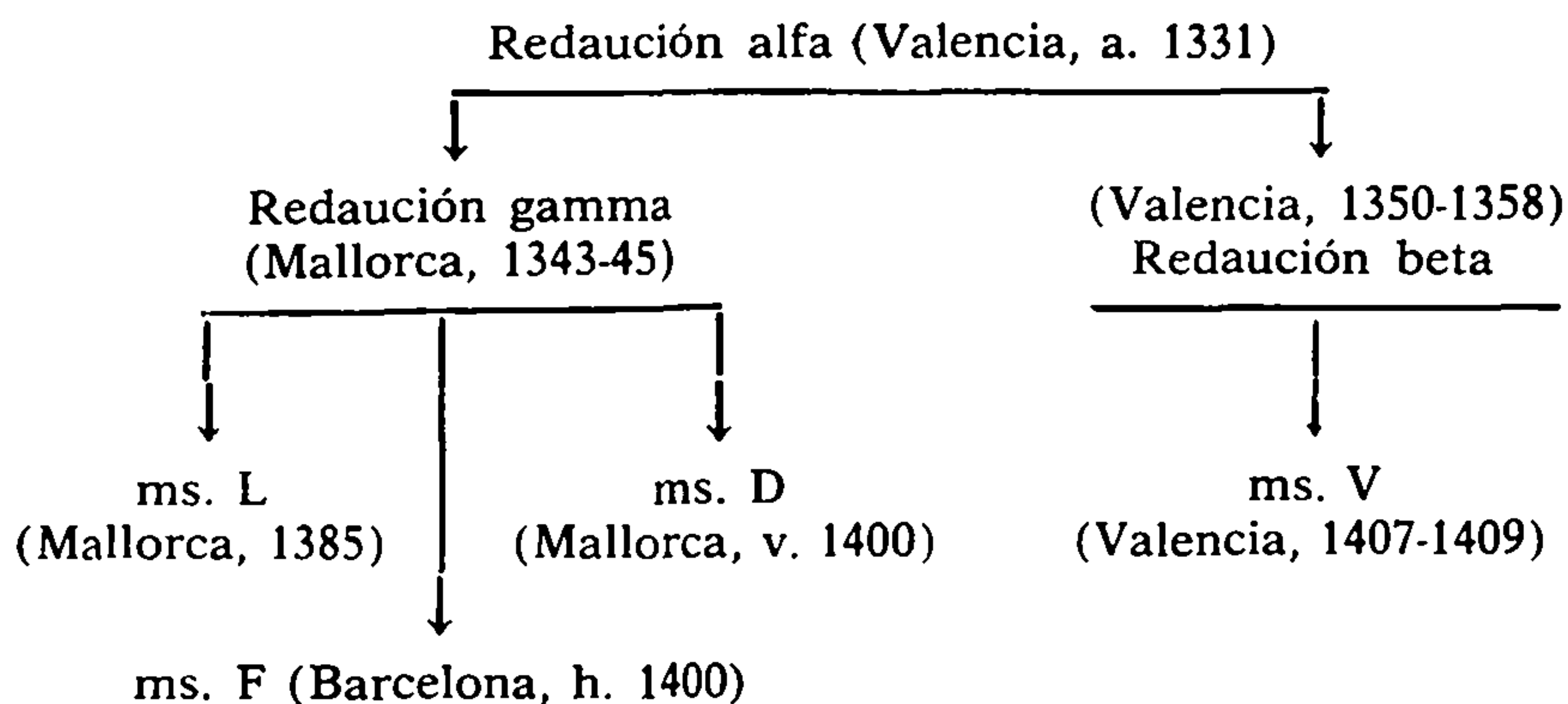
194. GARCÍA 157 n. 25

195. GARCÍA 157.

196. Vid. edición do Ferrando.

A meu ver, o falar nestes casos o García dunha compilación dunha maneira tan ambigüa é o que permetelle data-la, a partir dos manuscritos máis antigos onde xa atópase, agora si, unha compilación. Deste xeito o García, tras confirmar a existencia dunha compilación po-los datos que mencionéi, comenza a escacharrua-la súa tradición manuscrita: «Les formes de la tradició manuscrita de la nostra compilació»¹⁹⁷. Xa falei dos seus criterios e do feito que esta «nostra compilació» é dun lado aquela que contén entre os seus elementos os «Capítulos do rei Pedro», pro é tamen aquela que no-nos contén. Estos manuscritos seleccionados po-lo García amosan dúas redaccións diferentes da mesma compilación, pois cada unha destas redaccións ou familias ten unha maneira diferente de arrecada-los seus elementos. Identificadas estas dúas formas diferentes da mesma compilación —onde po-lo momento se non atopa ó parecer os «Capítulos do rei Pedro», inda que veña a reconocerse despois, que si, que atópase nunha delas— o García esforzase por data-las; agora ben, o García non quere data-los manuscritos, onde atopanse representadas as redaccións ditas, mai-las redaccións mesmas que configu-nas familias: «Establertes ambdues formes de la compilació, ara ens cal establir també llur datació, prescindint de la que figura als manuscrits, els quals es basaven en altres d'anteriors»¹⁹⁸.

E vou comenza-la casa po-lo tellado. O García chega a esta conclusión:



197. GARCÍA 157.

198. GARCÍA 160.

Esto é, hai unha redacción orixinaria —alfa— que atópase testemuñada en Valencia no 1331, polo inventario xa dito, da que veñen fora as dúas redaccións fundamentais, que hoxe podense descubrir nos manuscritos do LCM; da redacción mallorquina —a gamma— veñen fora os tres manuscritos ditos: L, D e F, que, ó parecer, derivan directamente da redacción perdida ou, dito doutra maneira, son independentes entre si; o único testemuño da redacción beta valenciana é o manuscrito V, do 1407-1409¹⁹⁹.

¿Cómo pódese chegar a esta conclusión? A forma Beta «és claramente d'origen valencià, ja que l'únic manuscrit que la conté és el V»²⁰⁰. O García despois desta afirmación, di que dos elementos constantes da compilación —¿dende cando son constantes os elementos?— atópanse o «Orden xudiciario», que tal como atópase no ms. V ten que sere posterior o vintetres de xaneiro do 1350, pois no seu cap. 45, que se non atopa no «Orden xudiciario de Valencia da forma vulgata (m), recolléuse a parte dispositiva dunha sentenza desa data. Doutra parte se non recolle neste «Orden xudiciario»

199. GARCÍA 163. O García amosa unha certa inseguridade, pois eiquí —na p. 163— fala da redacción alfa de Valencia do 1331, mais na p. 211 fala dunha redacción alfa un, do 1283-1331, e dunha redacción alfa dous, do 1332-1343. Xa veremos máis adiante as razóns destas dúas redaccións, pro quero dun lado suññar que inda tendo e conta a identidade entre a alfa un e a alfa dous —a única novidade é a achega de novos capítulos no remate da alfa un polo alfa dous— temos unha certa imprecisión, e doutro lado que o García fala dun inventario do 1331, que testemuña a alfa un, e doutro do 1333, polo que a data do 1332 semella sere artificial, inda que o García invoque o privilexio do 23-I-1332 (GARCÍA 207), e temos eiquí a segunda imprecisión. Preciso: pra o García despois dun longo silencio, comencan a atoparse de novo documentos dende o 23 de xaneiro do 1332, polo que «aquests documents indiquen clarament una represa de la jurisdicció del Consolat de Mar de València, cosa que, a ben segur, motivà la redacció del nucli u 1, que cal datar, per tant, entre 1332 i 1343» (GARCÍA 298). Agora ben, que pasa co inventario do 1333? Se afirmamós que o mesmo testemuña a «alfa un», a alfa dous non pode sere do período 1332-1343, pois aínda non estaba feita no 1333; se decimos que testemuña a alfa dous, enton teríamos que dir que ésta xa estaba feita no 1333. Teño pra min que seña unha coma outra interpretación, seña no inventario do 1331 coma no inventario do 1333 e puramente arbitraria; eu poido ademitir sin traballo algun, que dende o 1332 hai no consulado de Valencia unha nova aitividade, pro non vexo razón algunha pra ter que ademitir que esta rematou nunha nova redacción.

200. GARCÍA 160.

do ms. V «les reformes introduïdes en l'organització del dit Consolat pel privilegi de 25 de febrer de 1358» nin por outros posteriores, po-lo que pódese dir «que recull encara l'estat de dret anterior a l'esmentada reforma de 1358-1362». «En conseqüència, la compilació Beta va ésser feta després del 23 de gener de 1350, i molt probablement també després del 25 de gener de 1351, si bé abans del 25 de febrer de 1358»²⁰¹.

A forma gamma atópase nos manuscritos L, D —mallorquís— e F —barcelonés—, pro o se-los testemuños documentales máis antigos mallorquís, o García aferma o orixe, mallorquín da redacción gamma, que «va ésser feta bé poc abans del 31 de maig de 1343 o bé, més probablemente, entre aquesta data i la del 14 de febrer de 1345»²⁰².

Mentras a forma gamma, «que és l'anterior (1343-1345)» fíxose sobor dunha compilación valenciana anterior, como amosario seña o privilegio do 31 de maio do 1343 seña o traslado do 26 de xaneiro do 1349, a redacción Beta, «que es la posterior (1350-1358)», fíxose tamén sobor dunha compilación valenciana anterior, «ja que introduceix la part c, tot dient que els seus capítols *per orde, són los que.s seguexen*, tal como ho hem vist abans, i aquest *orde* —que és divers del de gamma— no pot ésser cap altre que un orde que era tradicional a València, ja que, tal com hem vist abans, el 1331 és documentada la nostra compilació»²⁰³.

Esta compilación valenciana, na que basáronse seña a redacción beta, seña a redacción gamma, é aquela que o García chama redacción alfa, que tiña que estar xa feita no 1331, po-las razóns ditas²⁰⁴. E pra pechar estas consideraciós, aferma o García: «Els altres manuscrits, que posseïm per ara, segueixen també la forma gamma. Fins i tot el C, que és el més singular, n'és una recensió parcial ja tardana en els capítols relatius als mariners»²⁰⁵.

É certo que da redacción alfa non conservase ningún manuscrito, «tot i això, la forma beta ha conservat un ordre o estructura antic; i com que la nostra compilació és com la tija d'un magalló,

201. GARCÍA 161.

202. GARCÍA 161-162.

203. GARCÍA 163. Cf. supra n 199.

204. GARCÍA 163.

205. GARCÍA 163.

en la qual, si anem arrencant les restes follars més exteriors, podem arribar al nucli de l'arrel, procedirem per aquest mateix mètode, mirant de datar els diversos elements per ordre de modernitat. I això ens donarà no solament el nucli primitiu, sinó el contingut de la compilació en cada época de la seva història»²⁰⁶.

Os «Capítulos do rei Pedro» son do 22 do mes de San Martiño do 1340. ¿Cando incorporaronse á compilación? Nos manuscritos da forma gamma, despóis das «Ordeanzas do curso», esto é, asomado do m 334, atópase un colofón; é certo que este colofón manca nos mss. F, C e P, todos eles barceloneses. A conclusión é clara: na redacción primitiva da forma gamma, aquela feita en Mallorca no 1343-1345, se non atopa-nos «Capítulos do rei Pedro». Agora ben, como tampouco atópase o colofón no ms. V, entón o García afirma que a redacción primitiva da forma Beta, do 1350-1358, tiña xa os capítulos, inda que baixo o título xeneral de «Costumes de mar de Barchinona», que craramente lembra o seu orixe. Este feito e o orixe barcelonés dos mss. F, C e P, levan ó García a afirmar, que os «Capítulos do rei Pedro» incorpóranse á compilación en Barcelona, cando no 1348-1349 recibéuse a compilación mallorquina gamma. «I és per l'exemple del de Barcelona, que les incloguerem també a la compilació els altres dos consolats de mar. Probablement per això, els manuscrits mallorquins L i D inclouen aquest text *p* en llocs tan diversos, tal com hem vist abans»²⁰⁷.

O «Orden xudiciario» atópase en dúas formas diferentes: a propia da redacción Beta e a propia da redacción gamma. A forma documentada de máis antigo é a gamma: citaa espresamente o documento do 14 de febreiro do 1345 e reproducea o traslado notarial do 26 de xaneiro do 1349, «el qual diu claramente que formava part de la compilación atorgada al Consolat de Mallorca pel privilegi de 31 de maig de 1343»²⁰⁸.

A forma beta do «Orden xudiciario» é, como xa vimos, a que serve pra data-la redacción beta da compilación, polo que ten que sere do 1350-1358²⁰⁹.

«El text *o*, en consecuencia, fou redactat per primera volta a

206. GARCÍA 164.

207. GARCÍA 164-165

208. GARCÍA 165.

209. GARCÍA 165.

Mallorca sota la forma gamma i inclòs a la compilació en 1343-45, quan aquesta fou redactada en la dita forma. I posteriorment, quan en 1350-1358 fou redactada a València la compilación sota la forma Beta, fou adoptat el dit text amb les modificacions que són pròpies de la dita forma»²¹⁰.

As concrusiós sobor dos capítulos das «sportades» non son craras: dun lado o García maxina que o feito de atoparse un capítulo en latín, leva a poñe-la sua redacción no s. XIII, traducendose no XIV, doutro lado o tratamento dos capítulos das «sportades» na redacción beta e o mesmo que o do «orden xudiciario», po-lo que pode ter tamen un orixen mallorquin a sua incorporación na compilación, inda que o seu orixe poida ser outro. «La seva situació al ms. L sembla que ho corrobora»²¹¹.

E chegamos así, o núcleo fundamental. «La idea habitual que hom té del LCM, hi veu dues compilacions concèntriques: una, que podriem dir-ne nova, que és la que conté tots els textos constants *o, s, c, u, a* i *p*, i l'altra, que hom en diu antiga, i que comprèn només els textos *c* i *u*»²¹². O García ve no Valls o representante máis arraiado desta posición, que leva a considera-las «Ordeanzas do curso» un testo que axuntóuse as «Costumes da mar», da mesma maneira que axuntáronse o «Orden xudiciario», os capítulos das «sportades» e os «Capítulos do rei Pedro». Eiquí é onde o García suliña a imprecisión de falar dunha compilación, po-lo que distingue fundamentalmente tres²¹³. O García di que a afirmación do Valls, de que as «Ordeanzas do curso» incorporáronse no século XIV é unha afirmación «clarament gratuïta», poi-la tradición manuscrita non apoia tal afirmación, ó contrario, «sembla indicar, tal com ho veurem després amb més detenció, una inclusió anterior en la nostra compilació»²¹⁴.

Tamén o García fala da tricotomia que o Valls crê ver nas «Costumes da mar» —m 46-297—, poi-lo García fala que nesa parte, que ocupa os capítulos m 46-297, pódense xibra-las «Costumes da mar» e os «usos da mar», e «l'una i l'altra són molt ben separades a la

210. GARCÍA 165.

211. GARCÍA 168.

212. GARCÍA 168.

213 Vid. GARCÍA 169.

214. GARCÍA 169.

forma Beta; i la *c* a la dita forma, i fins i tot a la gamma, és clarament divisible en dues parts, que denominem *c-1* i *c-2*»²¹⁵.

A parte orixinaria das «Costumes da mar» sería po-lo tanto a das «Costumes primeiras da mar» que «És determinada per tots aquells capítols que regulen les relacions entre el patró, o *senyor*, del vaixell i els constructors, els mercaders o noliejadors, els pelegrins o passatgers i els mariners», o que confermao o segundo prólogo que xa conocemos que atópase nas «Costums de Tortosa». «El criteri, doncs, és clarament documentat per dues fonts diverses».

Os demáis capítulos, tal como atopanse na redacción Beta das «Costumes da mar», formari-na outra parte —as «costumes segundas da mar»—; estos capítulos «presenten molt sovint una fórmula d'estil molt característica: *E fon fet perço aquest capitol*, seguida de l'exposició d'allò que podriém dir-ne la *ratio legis* del capitol»²¹⁶. Agora ben, este feito leva o García a afermar que o criterio que emprega pra xibar estas partes na redacción Beta, tal como atópase no ms. V, non é un criterio puramente topolóxico —o fato das costumes primeiras ven primeiro, o fato das costumes segundas ven despóis—, pois atópase xa no fato das «Costumes primeiras da mar» capítulos que teñen aquela caiaerística estilística propia dos capítulos do fato das «Costumes segundas da mar». Este feito, di-no-lo García, «sembla indicar que pertanyen a la mateixa tanda redaccional de *c-2*, tot i que són intercalats entre els de la part *c-1*»²¹⁷. Este feito pódese atopar tamen na redacción gamma, onde os capítulos da parte dos usos da mar atópase entre os capítulos do fato das «Costumes da mar»²¹⁸.

Neste sentido o García da unha gran importancia o posto destes fatos de capítulos das «Costumes da mar», dos «Usos da mar» e das «Ordeanzas do corso», que pra el forman o gromo orixinario da compilación, na forma beta —na realidá no ms. V— e na forma gamma —na realidá na edición do Colon—²¹⁹. Deixando a un lado os capítulos mesturados, o ms. V ten nos cento dezaseis primeiros capítulos (V 1-116 = m 46-182) do que hoxe conocemos baixo o al-

215. GARCÍA 169.

216. GARCÍA 169.

217. GARCÍA 169-170

218. GARCÍA 169-170.

219. GARCÍA 171 ss

cuño de «Costumes da mar» os capítulos do fato das «Costumes primeiras da mar»; nos cincuenta e seis capítulos seguintes (V 117-172 = m 183-231) atópanse os capítulos do fato das «Costumes segundas do mar»; nos vinteun capítulos seguintes (V 173-193 = m 298-334) atópanse os capítulos do fato das «Ordeanzas do corso» e nos derradeiros cincuenta e seis capítulos (V 194-249 = m 253-296) atópanse os capítulos do fato dos «Usos primeiros da mar». Téñase presente que a equivalencia coa forma vulgata *m*, isto é, a redacción gamma, é válida pra os capítulos citados, pro non pra todos os comprendidos entre os citados, xa que nesta redacción atopanse mesturados os capítulos dos diferentes fatos, como di o García, agás os capítulos das «Ordeanzas do corso»²²⁰.

O García suliña que aparentemente as diferencias entre as dúas redaccións son moi grandes, mais na realidá no-no son. «En aquestes parts *c*, *a* i *u* de la compilació, tot i que les formes Beta i Gamma, vistas d'antuvi, semblen molt diverses, en realitat són molt semblants: la forma gamma només fa que transportar molts capítols de la part *u* cap a la part *c* i posar la part *a* despres d'*u*»²²¹.

Descartando este feito, «una forma i l'altra són gairebé idèntiques, fins i tot en l'ordenació del capitulat»²²². Agora ben, a redacción Beta, «tot i que és posterior a la gamma», ten un orden máis antigo que o que ofrece a redacción gamma, que semella derivar da redacción alfa, poi-la forma gamma ten máis capítulos; a forma Beta introduce os capítulos de *c*, *a* i *u* coa frase xa vista «E los capítols...», onde «aquesta expressió *per orde* és clarament indicativa d'un ordre que era tradicional a València, on la compilació existia des de l'any 1283» e o trasvase que faise na redacción gamma dos capítulos dos «usos da mar» dentro dos capítulos das «costumes» amosa que é esta redacción a que fixo o cambeo, co fin de axunta-los capítulos que pertocaba-na mesma materia, po-lo que no ms. V, isto é, a redacción Beta os capítulos atópanse «in situ, abans d'haver estat objecte de cap dislocació. I per això mateix Beta precisa que els posa *per orde*»²²³.

O García remata que este feito permite albisca-la forma da

220. Vid. o coadro do GARCÍA 171-173.

221. GARCÍA 175.

222. GARCÍA 176.

223. GARCÍA 176.

redacción alfa, pois se a ordeación da redacción Beta e anterior a da gamma (1343-45), ten que amosa-lo contido da redacción alfa, da que derivan tantgo a redacción beta coma a gamma. Ademáis o García maxina poder rematar escacharrando a redacción alfa —esto é, o manuscrito V, úneco testemuño da redacción Beta, que mantén-na ordeación da redacción alfa— que nesta atópanse dous estados ou intres cronolóxicos sucesivos; fala así dunha redacción alfa un, onde atoparíanse xa os fatos das «costumes primeiras», «costumes segundas» e «ordeanzas do curso»; e outra redacción posterior, alfa dous, que sería a mesma alfa un, pro coa axuntanza dos capítulos dos «usos da mar» no remate. Esta forma alfa dous existía xa no 1343, pois sirveu de base a redacción gamma, e como xa no 1331 hai un testo en catalán a forma ou redacción alfa un tiña que existir denantes do 1331.

Esta redacción alfa un, onde atópanse «costumes primeiras», «costumes segundas» e «ordeanzas do curso», pechábase coas «Ordeanzas do curso», que pechan tamen a redacción gamma. Este feito permite estabrece-lo García un paralelismo entre o proceso de formación da redacción gamma e o proceso de redacción da alfa un. Os capítulos das «Costumes segundas da mar» son craramente espricativos dos das «Costumes primeiras da mar». Na redacción alfa un atópanse xa no fato das «Costumes primeiras» algús capítulos espricativos do fato das «Costumes segundas» do mesmo xeito que na forma gamma, onde as «Ordeanzas do curso» pasaron ó cabo e algús capítulos dos «usos da mar» mesturaronse cos capítulos das «Costumes da mar». O García pensa así nunha redacción anterior a alfa un, onde atoparíanse samente os fatos das «Costumes primeiras» e das «Ordeanzas do curso». «Quant a la part c-1 el fet és documentat a la CT (1272), la qual només té concordances en aquesta part, però no pas en la c-2. I quant a la part a ho fa plausible així el fet de la tendència, que abans hem observat, d'ésser sempre la que tanca la compilació i el de tenir afegits de la C-2.

I amb això arribem ja, no solament al primer text català, sinó als textos llatins que formaven la compilació primitiva, de l'origen dels quals ja en parlarem a la part següent d'aquest estudi, quan els examinem singularment. Mentrestant, ja hem arribat al capda-

«... munt de la història de la nostra compilació com a tal compilació»²²⁴.

Xa que nos atopamos diante dunha reconstrución moi hipotética, por demáis diría eu, quixera, denantes de espoñe-las refreusións que estas páxinas despertanme, chama-la atención sobor de certos puntos fundamentais, nos que o García apoia toda-la súa construción.

O prantexamento do García xira o redor des eixes seguintes:

a) En primeiro lugar o ms. V, inda que máis novo que o ms. L, contén unha redacción máis antiga, que recolle a primitiva ordeación dunha compilación que conócese baixo o nome de «Costumes da mar», seña na súa forma catalana, seña na súa forma latina. Este alcuño pode dar lugar a trabucacións, po-lo que acraró que pra o García estas «Costumes da mar» son xa unha compilación, onde atópanse, dende o seu intre máis antigo conocido, dous elementos: as que hoxe chamamos «Costumes da mar», inda que nos tempos máis antigos somente unha parte das mesmas —as «Costumes primeiras»— e as «Ordeanzas do curso»²²⁵.

b) As «Costums de Tortosa» amosan xa unha selección de capítulos das «Costumes da mar» — neste caso «Costumes da mar» no seu sentido restrinxido — «Costumes primeiras da mar», si-nas «Ordeanzas do curso» — que refrexa-no orden que atópase no ms. V e que permite aferma-la existencia nas mesmas dun fato antigo —Costumes primeiras—, que mesturaronse canda outros elementos nos manuscritos da familia chamada po-lo García Gamma²²⁶, e aínda na mesma redacción alfa cos capítulos das costumes segundas.

c) Estos elementos que hoxe forman o LCM teñen un orixen diferente pro, fora das «Ordeanzas do curso», quizaves, todos eles teñe-no seu orixe no triángulo Barcelona, Valencia e Mallorca, que deu orixe tamén a compilación LCM, que denantes de te-la forma definitiva das edicións pasou por diversas etapas²²⁷.

d) O estudo do ms. V permetelle ó García afermar que no grupo máis antigo do LCM —prescínlese así do «Orden xudiciario» e dos «Capítulos do rei Pedro», así como dos capítulos das «sportades» — pódense atopa-los seguintes fatos de capítulos: «costumes

224. GARCÍA 176-177.

225. GARCÍA 163-164; 156 n. 21; 176.

226. GARCÍA 156 n. 21; 169.

227. GARCÍA 164.

primeiras», «costumes segundas», «ordeanzas do curso» e «usos primeiros da mar», fatos que amósanse así neste orden no dito manuscrito V ²²⁸.

e) A comparanza do úneco manuscrito da chamada familia Beta —o ms. V— cos manuscritos da familia gamma —os demais manuscritos— permetelle ó García identifica-los outros capítulos dun novo fato, que achegáronse máis tarde —os «usos da mar segundos»—, polo que se non atopan na redacción Beta e, polo tanto, tampouco no ms. V ²²⁹. Este é o que esprica que a redacción Beta teña menos capítulos ca redacción gamma, aínda que a redacción gamma seña máis vella ca redacción beta, pois ésta respetou de fio a fondo o orden da compilación máis antiga, a alfa.

f) Esta derradeira identificación do fato dos «usos segundos da mar» é doado face-la, seña por que a comparanza dita permite face-la, seña por que os capítulos do fato dos «usos segundos da mar» teñe-nas características estilísticas dos capítulos do fato dos «usos primeiros da mar»: «e per las raons dites fo fet aquest capitol» ²³⁰.

Hoxe todos estos fatos se non descubren doadamente, pois houbo unha tendencia interna no proceso de redacción, dirixida a arrexunta-los capítulos polo seu contido: así os capítulos dos fatos das «costumes segundas» e dos «usos da mar primeiros e segundos» ó sere aclaraciós e medras dos capítulos do fato das «costumes primeiras» tenderon a mesturarse con estas. Esta tendencia é paralela a outra, que leva a poñer o fato das «Ordeanzas do curso» ó remate das «Costumes da mar» e dos «Usos da mar» ²³¹.

g) A primeira tendencia dita fai así que xa no ms. V atópense mesturados cos capítulos do fato das «Costumes primeiras» algús capítulos do fato das «Costumes segundas». Eiquí non abonda o criterio topolóxico —o posto que ocupan no ms. V—, mais ven na súa axuda o criterio estilístico: «E fon fet perçò aquest capitol. ./ E perçò fon fet aquest capitol...» ²³².

228. GARCÍA 169.

229. GARCÍA 158-159, 173.

230. GARCÍA 205.

231. GARCÍA 176-177.

232. GARCÍA 169. Cf. 182, 190, 195.

h) Este criterio estilístico conferma a sua bondá, ben deitar que a comparanza das «Costumes da mar» coas «Costums de Tortosa» amosa que nestas derradeiras atópanse somente capítulos do fato das «Costumes primeiras da mar» e endexamáis capítulos do fato das «Costumes segundas da mar».

Teño pra min que o García ve no ms. V a chave que pode abri-la caixa dos sagredos do LCM, xa que movéndose o García na mesma liña na que movéuse o Valls afígúrase evita-los farallós nos que aquel naufragóu. O García empregará nos seus análises os dous criterios xa conocidos:

«1er. El criteri primordial consistent en situar cada capítol en el nucli i fins i tot en el lloc que el situa la forma Beta, que és la que dóna l'ordre tradicional del capitulat del LCM.

2er. El criteri de confirmació que consisteix en fer servir les fórmules d'estil de cada capítol que són constants a cada nucli. Això ens permet, en primer lloc, confirmar la situació del capítol en el seu nucli, establerta segons el criteri anterior, i en segon lloc, identificar els capítols dislocats. Normalment, un criteri i l'altre coincideixen exactament. Només hi ha uns pocs casos —caps. m 48, 53, 55, 56, 90, 98, 99, 122, 123, 139, 160, 161 i 169— en els quals llurs dislocacions provenen ja de la forma alfa. Per tant, no hi ha, dins la tradició manuscrita actualment coneguda, cap altre criteri d'identificació, fora de les fórmules d'estil. És per això que aquest criteri confirmatori té un valor certament excepcional, per a la ratificació i correcció del criteri primordial»²³³.

Eu coido que se o criterio estilístico serve non solo pra confirmar, mais tamen pra correxi-lo criterio topolóxico, entón estamos diante do emprego de dous criterios diferentes, que teñe-no mesmo valor. E po-lo tanto tiña tamén razón o Valls ó utiliza-lo criterio estilístico, inda que hoxe, quizaves, correxiríao co criterio topolóxico. Esto é, o García ven a afirmar no fondo que é tan lexítimo emprega-lo criterio topolóxico e correxi-lo co criterio estilístico coma emprega-lo criterio estilístico e correxi-lo co criterio topolóxico. E a razón e moi crara: ningun dos dous criterios permiten chegar a resultados compretos, mai-lo seu emprego pode levar a conflitos entre os dous criterios, po-lo que algún autor pódese incriñar por darlle o criterio topolóxico o primeiro posto e outro autor pode concederlle a sua preferencia o criterio estilístico. O García

233. GARCÍA 182-183.

di que «la resta de c, tal com ès a beta, dóna el contingut de la part c 2, els capítols de la qual presenten molt sovint una fórmula d'estil molt característica: *E fon fet perço aquest capítol*, seguida de l'exposició d'allò que poderiem dir-ne la *ratio legis del capítol*»²³⁴, o que quere dir que se moi amiudo atópase, se non atopa sempre, Tamén o García falando do fato dos «usos da mar» di que atópase no ms. V despóis dos capítulos do fato das «Ordeanzas do curso», inda que hai algús que se non atopan na redacción beta. Isto levo a diferencia-los capítulos do fato dos «usos primeiros», que atópanse nas dúas redaccións, e os capítulos do fato dos «usos segundos», que atópanse samente na redacción gamma. Ademáis o García di que «és característica de molts capítols del nucli *u* una fórmula d'estil, posada normalment al final: «*E per les raons dessus dites fo fet aquest capítol*»²³⁵, onde tamén pode dirse o mesmo: a cláusula de estilo atópase en moitos capítulos, mais non en todos, e se non atopan xustamente, según o García, no m 68, no m 179 e no m 291²³⁶. Agora ben, ¿cales so-nos criterios empregados po-lo García pra dir que estos tres capítulos pertencen ó fato dos «usos da mar segundos»? Non pode se-lo criterio topolóxico, pois se non atopan no ms. V, nin tampouco o criterio estilístico, pois se non atopan neles a cláusula estilística. As razóns do García son craras. Se os ditos capítulos pertenceran ós fatos ou das «Costumes primeiras da mar» ou das «Costumes segundas da mar» ou dos «usos primeiros da mar» teríase que ademitir que o ms. V non é xarado a redacción beta e, a sua volta, que esta enton tampouco é xarada a redacción alfa dous, po-lo que nos manuscritos da chamada redacción gamma poderíanse atopar capítulos que tiñan que estar na redacción alfa, inda que se non atopen na redacción beta²³⁷.

234. GARCÍA 169. Cf. 195.

235. GARCÍA 205.

236. GARCÍA 205.

237. Vid. infra p 188 ss

IV. O NACEMENTO DUNHA COMPILACIÓN

1. *Os criterios direutivos na formación das diferentes compilacións do LCM*

Hai unha cousa crara: o manuscrito máis antigo é aquel do 1385, que atopase na Real de Mallorca, que amosa un orden diferente do que atópase no ms. V, escrito a principios do século xv. Este feito esprica a necesidade de acodir a hipótesis pra poder espricar estas diferencias e pra albisca-lo proceso de formación do LCM. E esta necesidade é maior se pensamos, como no fondo coida o García, que o nacemento da compilación e o nacemento das «Costumes da mar» cadran. Desta maneira o García remontouse dos manuscritos a dúas redaccións diferentes —beta e gamma—, destas dúas a outra redacción anterior —a alfa dous— e desta a outra máis antiga —alfa un— e desta a outra, inda máis antiga, que non ten xa alcu-me, porque é ó parecer a primeira.

E estas compilacións —xa que arrecadan diversos textos— teñen un contido diferente:

Compilación do 1283: costumes primeiras e ordeanzas do curso.

Alfa un (1283-1331): costumes primeiras, costumes segundas e ordeanzas do curso.

Alfa dous (1332-1343): costumes primeiras, costumes segundas, ordeanzas do curso e usos (primeiros).

Gamma (1343-1345): costumes primeiras, costumes segundas, usos primeiros e segundos, ordeanzas do curso²³⁸.

Eiqué o García recolleu samente o gromo da compilación —«Costumes da mar» e «Ordeanzas do curso»— e prescindiu da redacción beta pois é xarada a redacción alfa dous. Axustaréi po-lo tanto que ademáis destes textos na redacción gamma, xa o sabemos, atópase ó principio o «Orden xudiciario de Valencia» e na redacción Beta tamén ó principio o «orden xudiciario de Valencia» e no remate os «Capítulos do rei Pedro».

Toda a argumentación do García xira ó redor da afirmación dos redatores do manuscrito V, que no remata do cap. 46 do seu

238. GARCÍA 211.

«Orden xudiciario» aferman que os cónsules de Valencia fan e conocen de todas aquelas cousas que «han acostumat e acostumen fer e conèxer los cònsols de Barchinona, e de totes coses contengudes en les COSTUMES DE LA MAR e segons que en aquelas és declarat, les quals costumes e capítols se serven per tots los consolats del món; e los capítols dels quals per orde són los que.s seguexen», comenzando coa mesma a terceira seución, onde atópanse as «Costumes da mar», sin epígrafe xeneral, pro onde o epígrafe do capítulo primeiro é: «Aci comencen les bones costumes e els bons usatges de la mar»²³⁹.

Coido que esta afirmación tense que axugar canda outra, que atópase no prólogo do dito manuscrito:

«E per tal, los savis antichs e aprovats homes en lo ús, exercici e art de navegar, inspirats per Déu, del qual los dons, gràcies e perfeccions proceexen, han ordenat e en scrit posat e reduhit les ordenations davall contengudes, les quals per justa e provable rahó apellaren e intitularen COSTUMES DELS FEYTS DE LA MAR, ab les quals fos donat compliment de justícia als navegants, de qualsevol condició e estament fossen, dels contraste e qüestions que entre aquells se sdevendrien, segons e per la forma que en lo present libre, per rúbriques, títols e capítols singularment és declarat»²⁴⁰.

Ese orden que menciónase pra o García non é aquel que atópase no presente manuscrito coma di o prologo, pois pra o García a expresión «*per orde*» es clarament indicativa d'un ordre que era tradicional a València, on la compilación existia des de l'any 1283»²⁴¹, ano no que, como sabemos xa, enviouse, según o García, a compilación a Valencia. Probaríase esto po-lo feito de que seña a redución gamma a que leve a cabo o cambeo de postos dos capítulos, pra aveciñalos máis novos acraratorios ós máis antigos. E este orden no fondo é aquel que tiña a redución alfa primeira, que foi aquela que enviouse dende Barcelona a Valencia no 1283 e que mantívose na alfa dous que fíxose no 1332, pois axustou solo na parte derradeira da alfa un os «usos primeiros» e de cabo na beta que arrequeitou a alfa dous ó principio co orden xudiciario e ó

239. Vid. ed. de FERRANDO.

240. Ed. FERRANDO, prólogo.

241. GARCÍA 176.

remate cos «capítulos do rei Pedro», redacción beta que atópase hoxe refrexada de fio a fondo no ms. V.

E coma este orden da redacción beta «tal com hem vist és anterior a gamma (1343-1345), resulta clar que mostra el contingut d'alfa, que és la compilació de la qual deriven tant Beta com gamma»²⁴². Eu penso que o «tal com hem vist» refírese o dito pouco antes, esto é, que é a redacción gamma a que modificou os postos dos capítulos, «per tal de posar-los al costat d'aquells altres capitols als quals feien referència, bé com interpretacions, be com esmenes o com a textos complementaris»²⁴³.

Denantes dir adiante eu quixera suliñar certas afirmacións hipotéticas por de máis. Innda que as «Costums de Tortosa» non testemuña-na presenza úneca, coma di o García²⁴⁴ das «Costumes primeiras», como veremos, o que é certo e que as mesmas non testemuña-na presencias das «Ordeanzas do curso», poi-los dous primeiros capítulos do título onde atópanse as «Costumes da mar» regran unha materia que atópase tamen regrada nas «Ordeanzas do curso». Po-lo tanto dir que naquela época o que enviouse dende Barcelona a Valencia foi unha compilación —e tampouco hai proba deso— onde atopábanse as «Costumes primeiras» e as «Ordeanzas do curso» non ten base algunha.

O Inventario do 2 do mes de nadal do 1331 describe «un libre de paper ab cubertes vermelles, de les COSTUMES DE LA MAR» e o do 17 do mes da sega do 1333, «Item, alium librum... qui incipit in rubro: «Comensa lo Libre de bones costumes, etcètera»²⁴⁵. Estos dous documentos amosan que hai libros das «Costumes da mar», que teñen un título diferente, do que o segundo non cadra nin co título que atópase no prólogo do ms. V nin co epígrafe do primeiro capítulo das «Costumes da mar» que atópanse no ms. V; somente o título do primeiro inventario cadra co que atópase no cap. 46 do «Orden xudiciario» propio do ms. V.

¿Que razóns hai pra afirmar que o primeiro testemuño, o de 1331, fala dunha compilación, a alfa un, que xa era máis perfeuta que aquela do 1283, pois incorporara xas as «Costumes segundas da

242. GARCÍA 176.

243. GARCÍA 176.

244. GARCÍA 177.

245. GARCÍA 157.

mar», e que o segundo testemuño, o do 1333, fala dunha nova compilación, onde atopábanse xa, despóis das «Ordeanzas do curso» os «Usos primeiros da mar»? Teño pra min que ningún. É certo que o García non di —se non trabúcome— que o inventario do 1333 testemuña a compilación alfa dous, pro a suas afirmaciós levan a estas concursiós. O García xoga con estos dous inventarios, un do 1331 e outro do 1333, e suliña o dito por un privilexio do 1332, xa que maxina que pódese rematar das palabras do privilexio a formación dunha nova redacción, a alfa dous. Coido que é debalde poñerse a discutir desta interpretación; é dabondo suliñar que no millor dos casos é unha hipótesis que ten tanta forza coma a miña afirmación de que o inventario do 1331 testemuña a vella compilación, a alfa un —coma di espresamente o García— e o inventario do 1333 testemuña a nova compilación, a alfa dous —cousa que non di, se non erro, o García—. No fondo, po-las razóns ditas, estos testemuños proban samente que hai nestas épocas libros que conteñen as «Costumes da mar» e ren máis. Con esta especie de demostración «ad absurdum» quero suliñar que a teoría do García non atopa a sua forza nos documentos, mais na brillante, inda que flebe, teoría da existencia dos criterios direutivos que guiaron o proceso de formación da compilación. Por esto mesmo e po-lo que coido que non val a pena deterse nestas probas documentales e é dabondo suliñar que os dous inventarios amosan que no 1331 e no 1333 había mercadeles que tiñan manuscritos das «Costumes da mar» escritos en catalán, pro os mesmos non din ren sobor do contido dos ditos manuscritos, inda que poida pensarse que o inventario do 1333 amose que o libro das «Costumes da mar» comenzaba po-lo actual m 46.

É certo pódese afermar, como faino o García, o que non deixa de sere unha interpretación, que o ms. V testemuña a existencia en Valencia, no 1407, dun orden tradicional valenciano nas «Costumes da mar», pro nadia couta a afermar que ese orden era o que atopábase xa nos manuscritos testemuñados po-los dous inventarios do 1331 e do 1333. Unha hipótesis non atopa a sua conferma noutra hipótesis, po-lo que o esencial é a teoría que leva a falar dos principios direutivos na formación dunha compilación, pois é esa teoría a que da forza a intepretación feita deses dous inventarios.

O García ten un problema: nos manuscritos da forma gamma

atópanse capítulos que se non atopan no ms. V —os «usos segundos da mar»—, pro o resto, fora da ordeación, atópase nas dúas redaccións: beta e gamma; polo tanto amas a dúas redaccións teñen que ter un orixe común, unha redacción máis antiga como modelo; este feito podería facer nacer a idea de que os capítulos dos «usos segundos da mar», que non amosan diferencias estilísticas respecto dos capítulos dos «usos primeiros da mar», atopáranse xa nesa redacción, orixe común da redacción beta e gamma. O mesmo García falando da cláusula de estilo das costumes segundas, suñña que atópase en capítulos mesturados cos do fato das «Costumes primeiras da mar» e reconece que a presenza de dita fórmula «sembla indicar que pertencen a la mateixa tanda redaccional de c-2»²⁴⁶.

Pra solucionar o problema, o García suñña o feito de que é a redacción gamma aquela que modifica o orden da primitiva redacción orixinaria e tamén é aquela que pon no remate da redacción as «Ordeanzas do curso» e, de cabo, é aquela que incorpora novos capítulos, os do fato dos «usos segundos da mar».

Pro pra facer esta construción ten que multiplica-las redaccións, xa que estabreceu pra explicar a redacción gamma os dous principios ditos: a tendencia a mesturar os capítulos dos diferentes fatos e a tendencia a poñer no remate da compilación os capítulos das «Ordeanzas da mar»; e quixera suññar que mesturáranse os outros fatos, pro no-nos das «Ordeanzas do curso», inda que atópanse no medio das «Costumes da mar».

O García supera así o problema da redacción dos capítulos: todos eles, agás os dos «usos segundos da mar», atópanse nas dúas redaccións, inda que pra eso teña que prescindir dun feito sobor do que tornarei: se a cláusula estilística do fato dos «usos segundos da mar» e a mesma do fato dos «usos primeiros da mar», entón teñen que sere da mesma maneira.

Agora ben, xa que estamos no campo das hipóteses, non vou a determe sobor desa formación de redaccións e a súa veciñanza: no 1332-1342 nace a alfa dous, pro xa no período 1343-1345 veuse reformada polo-la gamma, que se non impuxo, polo que inda a alfa dous sería o modelo da redacción beta no 1350-1358. Quero chama-la atención sobor do feito de que os dous principios estabrecidos

246. GARCÍA 169-170.

po-lo García servenlle pra conferma-la historia da compilación do LCM. Isto é, no son principios que describen unha situación que déuse na historia, mais principios que dirixe-no proceso da formación histórica desas compilacións. Dito doutra maneira, se os tales principios non funcionaran, o García non puidera mante-las suas afirmacións principais, pois ó estar mesturados no ms. V os fatos das «Costumes primeiras» e das «Costumes segundas da mar», tivo que afermar que tal mestramento fíxose xa na redacción alfa un, xa que noutro caso o ms. V non podería ter un orden tradicional.

Quen escacharrue as afirmacións do García decatase que os tales principios non son máis que un deus ex machina pra resolver un problema evidente: o ms. V é o único testemuño da chamada po-lo García redacción Beta.

Se os tales principios direutivos funcionaran, é evidente que despóis da compilación do 1283 tería que nacer unha redacción intermedia, onde atoparíanse as «Costumes primeiras da mar», as «Ordeanzas do curso» e as «Costumes segundas da mar» por este orden; sólo máis tarde tería que nace-la redacción alfa un, onde as «Ordeanzas do curso» rematarían a nova redacción e as «Costumes segundas da mar» poñeríanse a carón das primeiras e mesturariáanse con elas nalgus casos.

E tamén é evidente que da redacción alfa dous: «costumes primeiras da mar», «Costumes segundas da mar», «ordeanzas do curso» e «usos primeiros da mar» non puido vir fora a redacción gamma, pois te-nos «usos segundos da mar», que son propios desta redacción gamma pra o García, mesturados xa coas «Costumes da mar» e cos «usos primeiros da mar». A redacción alfa dous pra converterse na redacción gamma tería que pasar por outras etapas intermedias: tería que reorganizarse a redacción alfa dous, pasando as «Ordeanzas do curso» o remate da mesma e mesturándose as outras partes; esta nova redacción: «Costumes primeiras da mar», «Costumes segundas da mar», «usos da mar primeiros» neste orden anque tamén mesturados, e «Ordeanzas do curso» pechandoa, tería que irse perfeccionando co tempo, xa que despóis das «Ordeanzas do curso» achegaríanselle novos capítulos acraratorios, os «usos segundos da mar»; somente a partir deste intre e cando pudo nace-la redacción gamma reorganizando esta hipotética redacción: as «Ordeanzas do curso» tornan a pecha-la nova redau-

ción e os «usos da mar segundos» mesturanse cos capítulos dos outros fatos.

Eu xa sei que esto no-no di o García, pro o que eu quero suliñar é que toda-la sua construción mantense en pé se aceptamos que os ditos principios son principios direutivos, aqueles que determina-na formación da compilación do LCM, pois somente desta maneira podemos aferma-la existencia de recopilaciós, que non atópanse testemuñadas documentalmente. O que non pode facerse, penso eu, é estabrece-los ditos principios, e despóis descarta-los cando non conveñen. É evidente a razón po-lo que faino o García, pro quero suliñar que unha de duas ou as cousas sucederon así —e entón pode, quen queira, dar fe ós ditos principios— ou os chamados «usos segundos da mar» tiñan que existir xa e atoparse na presunta redacción «alfa dous» e po-lo tanto o ms. V non é xarado a redacción beta e ésta non é xarada a redacción alfa dous e entón desmorase toda-la construción do García coma un castelo de aréa.

E así o García ten que reconocer que os ditos principios direutivos deixaron de funcionar, ó afermar que a redacción beta e a mesma que a redacción alfa dous, po-lo que entón ni-nas «Ordeanzas do curso» pasaron a remata-la redacción ni-nos «usos primeiros da mar» puxéronse a beira das «costumes segundas da mar» e mesturaronse con elas. O García ten necesidade desta redacción beta, pois doutra maneira tería que reconocer que a compilación que atópase hoxe no ms. V é obra dos redautores deste manuscrito, feita po-lo tanto no 1407-1409, como teño pra min ven fora craramente do prólogo deste manuscrito, caso esceucional en todo-los manuscritos. Este reconecemento levaría consigo o ter que afermar que as derradeiras palabras do cap. 46 do «Orden xudiciario», xa recollidas, son da colleita dos redautores do manuscrito e que, po-lo tanto, tamen a mesma compilación e obra dos redautores no 1407-1409; ademáis aquel orden tradicional de Valencia das «Costumes da mar» xa non ten por qué sere necesariamente máis antigo que aquel que te-na presunta redacción gamma, se quere continuarse atribuíndo un valor especial as palabras do prólogo.

Ten que nacer así a redacción beta, que dátase co nacemento do «Orden xudiciario de Valencia», escrusivo do consulado de Valencia (1350-1358), pois naquel intre axuntóuse o dito testo á redacción alfa dous pra formar a redacción beta, pro unha redacción

beta que, deixando a unha parte as achegas ditas, tiña que refrexar necesariamente a redacción alfa dous, pra poder así recostruí-la prehistoria do LCM. Non necesito suliñar que estas afirmacións atópanse fundamento no ms. V, po-lo que aférmase tamén que naquela época axuntáronse os «Capítulos do rei Pedro», que atópanse na redacción beta, inda que eiquí non haxa razón algunha, que sosteña esta afirmación. Se o cap. 46 do «Orden xudiciario de Valencia» do ms. V atopábase xa nesa presunta redacción beta, coa mesma redacción, é evidente que despóis de dito texto, tiñan que vi-las «Costumes da mar», pro este argumento non pode estenderse os «Capítulos do rei Pedro», que puideron, coma veremos, axustarse po-los redautores do ms. V. É certo, despóis das «Costumes da mar» non atópase no ms. V ningún colofón, pro despóis dos ditos capítulos atópanse tamen no ms. un feixe de privilexios. ¿Por qué us atopábanse na redacción beta e outros non? O úneco argumento —pois as razos cronolóxicas non serven pra todo-los privilexios— que te-no García, coido eu, é unha afirmación prexudicial: o LCM é samente aquel libro formado po-los elementos constantes, pro esta afirmación é precisamente aquela que discútese. Deixando a un lado estas discusións, o que quero dir é que a afirmación de atoparse ó remate da redacción beta os «Capítulos do rei Pedro» é unha pura hipótesis, que nin tan siquiera te-no apoio que te-na afirmación de atoparse o «Orden xudiciario de Valencia» no texto da redacción beta.

O Vezo do García, como vimos, de data-las redaccións po-la data do «Orden xudiciario» e a costrución da redacción Beta, pra evita-los problemas vistos, levan ó García a un calexon sin saída. Coma veremos ou temos que maxinar que o que enviouse de Valencia a Mallorca é o «Orden xudiciario» samente, co que temos que reco- nocer que inda non había unha compilación en Valencia, ou maxi- uamos que enviouse xa unha compilación, po-lo que entón esta non podería se-la alfa dous, que non tiña o «Orden xudiciario», xa que o documento de creación do consulado de Mallorca non permite afirmar que o que enviouse foi dun lado o «Orden xudiciario de Valencia» e doutro a redacción alfa dous.

2. O problema do ms. V

Toda a construción do García xira ó redor do ms. V, que é o único testemuño da redacción beta. Este feito é o que esprica a afirmación do García: todos aqueles capítulos do fato dos «usos segundos da mar» son novidades da redacción gamma, pois se non atopan no ms. V e po-lo tanto tampouco atópanse na redacción beta e po-lo tanto tampouco atópanse na redacción alfa dous.

Os fundamentos teóricos desta afirmación, teño pra min, non son dinos de ter en conta, pro o ms. V ten un posto propio dentro dos manuscritos, xa que o texto que contén non atopa reflexo en ningún outro manuscrito. Inda que máis adiante ocuparéime do ms. V, quixera eiquí adiantar algunhas refreusións, que suliñan este diferente posto do ms. V e dos outros manuscritos.

Mentras nas edicións atópanse neste orden os capítulos m 166, m 167, m 168 e m 169, no ms. L, di-nos o Colon, o orden é m 167, m 168, m 166 e m 169. A razón é crara: no m 166 mándase que, como di o epígrafe, «mariner non deu exir en terra sens comendament»; no m 169 atópase a correución de dito capítulo: «Segons en que l capitol que dessús és dit...», o que suliña que o orden m 167, m 168, m 166 e m 169, que atópase no ms. L, abrocha pra aproxima-lo capítulo orixinario a súa correución, que pra o García, po-la cláusula estilística que ten, pertence o fato das «Costumes segundas». O que o Colon non di é que este orden novo atópase tamen no ms. V²⁴⁷. Os capítulos m 167 e m 168, que no ms. V son V 104 e V 105 pertence-no fato das «Costumes da mar primeiras», pois ademáis non teñen cláusulas estilísticas. Os capítulos m 166 e m 169 so-no ms. V respectivamente V 106 e V 107. Esto so-nos datos. Un pode hipotetizar sobor das dúas ordeacións, pro tendo en conta que a redacción gamma tende a mestura-los capítulos e que as edicións recollen a dita hipotética redacción, teríase que pensar que a ordeación máis antiga, sería aquela que atópase na edición, por sere menos perfeuta. Pro hai outro feito, que é o que quero suliñar agora, pra o que tense que acodir tamen as edicións do Moliné e do Pardessus, poi-los datos do Colon son incompretos. A ordeación dos capítulos dacordo co orden: m 167, m 168, m 166 e m 169 ató-

247 Vid GARCÍA 172 e 174 n. 63 e os V 104-107.

pase no manuscrito L, mais tamén no V, e no N. Doutra parte os ms. FPAU non teñe-nos m 167-168, po-lo que nestes manuscritos o vincallo entre o m 166 e o m 169 faise po-la ausencia dos dous capítulos ditos.

Estos so-nos feitos; o que non podo é dar espricaciós, xa que samente sei que no ms. C atópanse tamen estos catro capítulos, inda que non sei onde. O que quero suliñar é que a resposta do García é crara: os capítulos que atópanse no ms. V atopábanse xa na redución alfa dous e os que se non atopan no ms V son novos.

Coma pode verse é difícil, se aceptamo-los principios teóricos do García, demostrar que o ms. V non é xarado o seu modelo, pro teño pra min que, ó menos, nalgús casos, pódense descubrir pequenas infidelidades. Se un lê, por exemplo, o V 133 atopará que no mesmo hai dúas clausulas estilísticas, o que fai pensar en dous capítulos, o que confirmaríase cos m 200-202, onde o V 133 atópase dividido en tres capítulos²⁴⁸.

E pra rematar lembraréi que no ms A o derradeiro capítulo do que chamamos «Costumes da mar» non é o m 297, xa que despois do mesmo atópase o m 180, que no ms. V é o V 245 —o ms. valenciano péchase con V 249 = m 296, pois marra o m 297—, esto é, forma parte do fato chamado po-lo García «Usos primeiros da mar».

3. *A chamada redución gamma*

Denantes de falar da mesma lembraréi que pra o García dende o 1332 xira xa a compilación alfa dous, onde atópanse as «Costumes primeiras da mar», as «Costumes segundas da mar» e as «Ordeanzas do curso», rematando o conxunto os «usos primeiros da mar».

Desta primitiva compilación valenciana agromaron dúas reducións diferentes, po-la forma de compila-lo mesmo material e po-la adición de novos materiais. A forma Beta e a propia de Valencia e o seu úneco testemuño e o ms. V. Estaría formada po-lo «Orden xudiciario de Valencia» na forma valenciana, os capítulos das «sportades», as «Costumes primeiras da mar», as «Costumes segundas da mar», as «Ordeanzas do curso», os «usos primeiros da mar» e os «Capítulos do rei Pedro» e pechándoa o cronicón das confirmaciós.

²⁴⁸. Vid. *infra* n. 329.

A forma gamma é a propia de Mallorca e atópase testemuñada polos outros manuscritos; atópanse nela por este orden: o «Orden xudiciario de Valencia», na súa forma mallorquina, os capítulos das «Sportades», as «Costumes da mar» (eiquí atópanse mesturadas as «Costumes primeiras e segundas da mar» e os «usos primeiros e segundos da mar») e as «Ordeanzas do curso».

Identificadas estas dúas formas diferentes da mesma compilación o García esforzase, coma vimos, por data-las²⁴⁹. A meu ver, ó falar o García dunha compilación dunha maneira tan vagarosa e pouco fixada é o que permetelle data-la pola datación dalgus dos elementos que atopanse nos manuscritos, onde atópanse, agora si, compilacións; pro teño pra min que o García estende os resultados achados encol da formación do «orden xudiciario de Valencia» á formación das redacción beta e gamma do LCM.

O García aferma que tanto a redacción beta coma a gamma abrochan da compilación valenciana alfa dous, pro que a redacción gamma é máis antiga, inda que seña a redacción beta a que refrexa a organización da compilación alfa dous. Coido que hai dous puntos fundamentais, que teñen que crarirse. No primeiro lugar, enviouse a redacción alfa dous de Valencia a Mallorca pra face-la redacción gamma ou a redacción é orixinaria de Mallorca, pois foi alí onde axuntaronse por vez primeira unha poulareda de textos independentes. No segundo lugar, se o que enviouse a Mallorca foi a redacción alfa dous ¿cómo espricanse algunha das características dos manuscritos mallorquíis?

A compilación na redacción gamma, inda que atópense en dous manuscritos mallorquíis e un barcelonés —eiquí o García fala dos manuscritos empregados pra determina-lo contido: L, D e F— ten pra o García un craro orixe mallorquíin. O García lembra que esta compilación chámase «Capitols del Consolat» e que mencionase nunha provisión rexia do deceseis do mes da sega do 1359, onde nembrase a «predictam primam nostram concessionem factam», que levanos ó trinta e un de maio do 1343, onde permetese os cónsules de Mallorca xuzgar «per modum et formam in civitate Valencie usitatos»; ademáis «és citada en una provisión real de 14 de febrer de 1345; i el 26 de gener de 1349 en fou fet un trasllat nota-

249 Vid supra p 112 e GARCÍA 160.

rial comprensiu del text *o*, tal com és a la forma gamma, fet que ens corrobora que, efectivament, la dita compilació ja era de la forma gamma. I el dit trasllat ratifica encara que el text fou atorgat pel rei Pere el Cerimoniós en el citat privilegi de 31 de maig de 1343»²⁵⁰.

Eiquí o García recolle algo que afermou xa noutras ocasións: o alcuño do que no século xv —pra o García— comenzou a chamarse «Llibre del Consolat de mar» era, tanto a Barcelona coma a Mallorca, o de «Capitols del Consolat» o «Capitols de Mar», sendo do 14 de febreiro do 1345 o primeiro testemuño, inda que hai outros moitos tamen no século xv²⁵¹. O García reconece que esta nomeada atópase «fins i tot al capitol m 72 del LCM»²⁵², esto é, o alcume de «Capitols de la mar», pro éste áchase nun capítulo que segun o García forma parte do fato das «Costumes primeiras da mar», esto é do fato máis antigo das «Costumes da mar», que atopanse xa na redacción máis antiga, aquela que non ten alcuño e tamen na redacción alfa un da compilación, que tiña que estar xa feita no 1331²⁵³, nun intre po-lo tanto onde aínda se non fixera o «Orden xudiciario de Valencia», que ten que sere posterior ó 1336. Neste sentido o que eu quero sulñar é que a mención do capítulo m 72 fai referencia ós capítulos das «Costumes da mar», non po-lo tanto ós capítulos dunha compilación no sentido dito.

E cando o García di que os privilexios mencionados falan dos capítulos dunha compilación volve a empregar ambigoamente, a meu ver, o término compilación, pois no documento do catorce de febreiro do 1345 faise sempre alusión a leries procesales:

«et quod dicti consules, animose, equitate remota, iniuste et (demum) non servata (debita) forma Consulati eiusdem, contra eum subitam sententiam protulerunt; a qua, licet per eum appellatum fuisset, iudex tamen appellacionis, spretis ipsius Bernardi iuribus et iustis allegacionibus, ex quibus (perpendi) valebat de nullitate et iniquitate sentencie supradicte, seductus suggestionem alterius consulum, et (habito consilio) cum Huguetto Borracii, notario et quasi assessore eorum, qui agenti parti informanda petitione et maliciis patrocini fuerat impartitus, et non servato debito modo in exigendo (consilio) fere ipsam sententiam

250. GARCÍA 161-162.

251. GARCÍA 62-63.

252. GARCÍA 62.

253. GARCÍA 163 e 171.

confirmavit; quarum sententiarum occasione, quia secundum prefati Consulatatus indulta (a nobis) privilegia non est licitum appellare, dicti agentes conantur, quod fiat executio contra ipsum, licet (predicte) sentencie per iuris et (facti) errorem late fuerint, et non servatis eciam Capitulis Consulatatus...»²⁵⁴.

Esto é, os capítulos do consulado so-nos que hoxe forma-no «Orden xudiciario de Valencia». E a proba desto atópase no traslado xa dito do 1349²⁵⁵, onde é certo fálase dun libro:

«a quodam libro in papiro scripto et inserto, capitula et ordinationes quamplurimas in se continenti super officium Consulatatus maris civitatis Maioricarum ad modum et formam civitatis Valencie»

pro tamén é un libro onde recollense as ordeacións e os capítulos «super officium Consulatatus maris» tal como amosa o que trascríbase. Non hai alusión ó dereito que se aplica en todo-los consulados do mundo, mais a forma propia de aplicar o dereito do consulado de Valencia. Lembraréi neste sentido o craro xebre feito na tradución italiana do 1479: «Liber de lo officio del consolato et de lo stilo et uso de dicto officio et de la ragione et costume del mare», polo que o que enviouse, como amosa o mesmo traslado conservado hoxe no libro dos privilexios do consulado de Perpiñán é o orden xudiciario coas características xa ditas. O que enviouse, entón, dende Valencia a Mallorca non foi unha compilación, senon os privilexios de Valencia, pois lembrémonos que os cónsules de Mallorca tiñan que autuar dacordo coa practica valenciana, confermada de maneira auténtica polo-as certificacións das autoridades valencianas²⁵⁶.

Podemos pensar entón que o que enviouse de Valencia a Mallorca non foi unha compilación —o primeiro paso do LCM—, mais os privilexios e a maneira de proceder dos cónsules de Valencia. Decatémonos de que o que sucedeu nestes intreos entre Valencia e Mallorca foi o mesmo que sucedeu, anos despois, entre Mallorca e Barcelona e entre Barcelona e Perpiñán. Tamén nestas vilas, no século catorce, vaise erixir novos consulados, esto é, unhas xurisdic-

254. GARCÍA 104 (14-II-1345) 203.

255. GARCÍA 153 (8-III-1389) 274 ss. Este é o traslado que enviouse de Barcelona e Perpiñán, que contén o traslado que no 1349 enviouse de Mallorca a Barcelona.

256 GARCÍA 107 (31-V-1345) 295-296.

ciós autónomas marítimo-mercantiles; por eso os cónsules de Mallorca enviaron unha copia autenticada dos seus privilexios e da súa maneira de proceder ós cónsules de Barcelona no 1349 e estos, anos máis tarde, no 1389, fixeron outro tanto ós consules de Perpiñán, e o que os cónsules de Barcelona e os cónsules de Perpiñán recibiron non foi outra cousa que o «Orden Xudiciario de Valencia»²⁵⁷.

Neste traslado, onde atópase o «Orden xudiciario de Valencia» o capítulo das «sportades» no testo latino e no testo catalán formaba parte do dito «Orden xudiciario», pois pechábao. Ademáis o testo do xuramento dos abogados de Mallorca non formaba parte do orden xudiciario —se é esauta a nova do García— inda que outra cousa poida maxinarse da tradición editorial do LCM.

O libro dos privilexios do consulado de Perpiñán non conténas «Costumes da mar», pro ten, como xa vimos, o «Orden xudiciario de Valencia». E tendo en conta que este libro recolle un traslado do traslado que recibeu Barcelona, pódese matinar que tamén Barcelona recibeu samente o «Orden xudiciario». Isto amosaría o que xa dixemos: pódese coñecer o dereito marítimo mercantil, isto é, pódese te-las «Costumes da mar» escritas, inda onde se non ten unha xurisdición marítimo-mercantil autónoma. Isto amosao de maneira crara as «Costums de Tortosa», onde recollense cachos das

257. GARCÍA 153 (8-III-1389) 274-276. O García non transcribeu o documento anterior, pois solo reproduce o protocolo e o escatocólo, pro despóis do protocolo di: «(segueix el text dels capitols m 1-45 bis del LCM)», pro que debe matinarse que emprega a edición do Colon pra face-la referencia, o que te-no seu interés pra a fixación do contido. Xa o Pardessus —e agora tamén o García —GARCÍA 165— mostróu que o orden xudiciario, tal como hoxe atópase nas edicións, tiña que estar feito no periodo que vai do 1336 ó 1343, pois no 1343 concedeuno o rei Pedro a Mallorca. Agora ben, deste «Orden xudiciario» hai un traslado autentico, xa mencionado, do 1349, que enviouse a Barcelona e dalí, o oito de marzo do 1389, enviouse a Perpiñán (GARCÍA 162 e 166). Este traslado se non empreou po-lo Colon ó face-la súa edición do LCM, pro a García di que nel atópanse os m 1-45 bis, o que fai supoñer que menciona o contido do orden xudiciario tal coma atópase nos manuscritos da familia gamma na súa edición po-lo Colon (GARCÍA 162): unha confirmación deste feito pódese atopar na parte publicada po-lo García, pois pra evita-las falsificación, os notarios que lexitiman os traslados fan alusións ó testo recollido e destas citas pódese identificar remisións os cap. m 36-37 e inda no derradeiro traslado o contido do traslado de Barcelona.

«Costumes da mar» no 1272, pro onde non hai unha xurisdición autónoma ate o 1363.

A creación dunha xurisdición autónoma fai nacer unha necesidá urxente: non hai un dereito procesal, non hai un procedimento pra aprica-lo dereito, xa que o tribunal que te-no que apricar e novo do triñque. Deiquí a necesidá dun orden procesal e deiquí o feito de ter que aceuta-lo «Orden xudiciario de Valencia». Se o que recibéuse é o «Orden xudiciario de Valencia» a data da sua formación non pode servir pra data-las compilaciós. Se os mallorquís recibiron solo —coma ó parecer sucedéu en Barcelona e en Perpiñán— o «orden xudiciario», pois tiñan xa as «Costumes da mar», que eran un dereito común a todo-os consulados do mundo, pódese dir que nese ano —no 1343— os valencianos tiñan xa un «Orden xudiciario» escrito, mais se non pode rematar que ese «Orden xudiciario» estaba xa cabo das «Costumes da mar», formando unha compilación. É certo que o García aferma que o «Orden xudiciario» fíxose por vez primeira no 1343-1345 en Mallorca, pro sobor desta afirmación teremos que tornar.

O Consulado de Mallorca creóuse o primeiro de febreiro do 1326, inda que ó parecer tívose que espera-la sua restauración do trinta e un de maio do 1343, pra que señan autorizados os cónsules mallorquís a xuzgar «per modum et formam in civitate Valencie usitatos»²⁵⁸. Entre o trinta e un de maio do 1343 e o vintedous de xaneiro do 1349 corren apenas seis anos. Neste tempo o consulado de Mallorca recibeu algús privilexios que arréda-no do de Valencia. Falando destes privilexios e provisiós di o García:

«Una, d'11 d'octubre de 1343, concedia als jurats i prohoms 1 a la ciutat, que la vigilia del dia de sant Joan de Juny (23 del dit mes) de cada any podien els dits jurats elegir cònsols de mar, jutge d'apel.lacions del Consolat i escrivà, els quals havien de presentar al mateix dia al batlle de la ciutat, davant del qual havien de jurar el càrrec. I els concedí igualmet que el salari dels cònsols havia d'ésser només d'un diner per lliura de la quantia del judici. Gairebé no cal dir que tot això eren diferències que separaven aquell nou Consolat mallorquí del seu patró valenciá»²⁵⁹.

258. GARCÍA 91 ss., 94.

259. GARCÍA 95.

Estas diferencias entre o consulado de Mallorca e o Consulado de Valencia tiñan que te-lo seu refrexo no capítulo primeiro do «Orden xudiciario de Valencia»; sendo esto así, ¿Por qué se non modificou o «Orden xudiciario de Valencia» en Mallorca? Esta pregunta te-na sua razón de sere: o «Orden xudiciario de Valencia», coma hoxe atópase no ms. V, ten unha rúbrica no seu capítulo sete, onde dise «aquests stils foren haüts de Mallorques» e o testo atópase tamen nos manuscritos da chamada po-lo García redacción gamma.

¿A aitividá dos cónsules de Mallorca fixo nacer xa no período 1343-1345 un novo estilo? Teño que supoñer que si, se o mesmo capítulo atópase no «Liber Privilegiorum Consulatus Perpiniensis», pro este feito pode tamén iluminarnos sobor da maneira de traballar dos cónsules: o seu labore debéu dirixirse a perfeccionalo «Orden xudiciario de Valencia», mais non a modifica-lo, xa que as certificaciós das autoridades valenciás era-nas que garantizaba-nos cónsules de Mallorca na sua aitividá procesal diante das autoridades rexias de Mallorca²⁶⁰. E certo que tamén os cónsules de Mallorca tiña-nos seus propios privilexios, que modifica-no «Orden xudiciario de Valencia», coma xa vimos, pro hai que pensar que po-las razóns ditas —o seu «orden xudiciario» viña lexitimado po-la certificación das autoridades valencianas, que certificaba-no testo orixinario—, esto é, ó cabo, por razóns practicas deixaro-no «orden xudiciario» no seu tenor orixinario, inda que acodiría-nos seus privilexios pra xustificalas modificaciós que os mesmos infrinxían a aquel; esto é, incorporaro-no testo as novas practicas, que perfeccionaba-no mesmo, pro non correxiro-no testo, cando os seus propios privilexios, modificaba-na regración valenciana.

Eu xa sei que esta afirmación que fixen —o que enviouse de Valencia a Mallorca é somente o «Orden xudiciario» —é unha afirmación que pode non sere convincente, pro menos convincente parece-a afirmación de que o que enviouse neste intre de Valencia a Mallorca foi unha compilación, pois temos testemuños craros do que enviouse de Mallorca a Barcelona e de Barcelona a Perpiñán: o traslado que atópase hoxe no libro do consulado de Perpiñán recolle o «orden xudiciario de Valencia» e inda que seña hipotéticamente semella lóxico rematar que outro tanto foi o que enviouse de

260. Vid. xa as ouservación do Perels (vid. supra n. 137)

Valencia a Mallorca. Isto é, non temos somente a afirmación de que enviouse algunha cousa, conocemos o que enviouse. No caso de maxinar que o que enviouse foi unha compilación, temos solo as frases do privilexio e po-lo tanto temos solo unha interpretación das mesmas.

Agora ben, coma xa sabemos, o García pensa que o que enviouse de Valencia a Mallorca foi unha compilación, pois a compilación gamma feita en Mallorca fíxose sobor da base da redacción alfa dous. As espricaciós a meu ver non son craras. Falando da redacción gamma do «Orden xudiciario» o García repete o que xa dixera noutrora: «En consecuencia, la compilació gamma va ésser feta bé poc abans del 31 de maig de 1343 o bé, més probablement, entre aquesta data i la del 14 febrer de 1345»²⁶¹, inda que un pouco máis adiante di que «El text o, —esto é, o «Orden xudiciario»— en consecuencia, fou redactat per primera volta a Mallorca sota la forma gamma i inclòs a la compilació en 1343-45, quan aquesta fou redactada en la dita forma»^{261 bis}.

Coido que hai eiquí algunhas vacilaciós sobor do intre da formación da compilación gamma e do mesmo «Orden xudiciario». Lembraréi os datos. O trinta e un de maio do 1343 o rei Pedro manda que os cónsules mallorquís «determinent questiones et causas hominum maris per modum et formam in civitate Valencia usitatos»²⁶². Dous anos máis tarde, o catorce de febreiro do 1345 nun documento do Pedro IV dise que das sentencias do xuez de apelaciós «secundum prefati Consulatatos indulta (a nobis) privilegia non est licitum appellare»²⁶³, o que semella ser unha referencia o m 15.

Estos privilexios dos cónsules de Mallorca po-lo tanto en moitas ocasiós era-nos recibidos de maneira xeneral de Valencia. Deiquí que os mesmos tiñan que sere confermados de maneira auténtica po-las certificaciós das autoridades rexias en Valencia:

«Itaque, super hoc provisionis ac iusticie remedio implorato, vobis et cuilibet vestrum expresse dicimus et precipiendo mandamus, quatenus, prout vestro incumbet officio, faciatis privilegia et usus dicte curie consulum maris inviolabiliter observari, secundum quod servatur in

261. GARCÍA 162.

261 bis. GARCÍA 165.

262. GARCÍA 98 (31-V-1343) 108. GARCÍA 94 ss

263 GARCÍA 104 (14-II-1345) 203. GARCÍA 97 ss

civitate Valencie, habita tamen primitus certificatione(m) per literas gubernatoris et baiuli generalis regni Valencie de usu et privilegiis supradictis»²⁶⁴.

Eu xa dixen que pra min o que enviouse no 1343 foi o «Orden xudiciario de Valencia», pro se quere pensarse que enviouse unha compilación hai que tomar unha decisión: ou enviouse a compilación alfa dous dun lado e o «orden xudiciario» doutro e fundíronse en Mallorca ou a compilación alfa dous tiña xa o «orden xudiciario», cos problemas que esto supón, ou enviouse a redacción beta e entón ven fora o problema de te-lo ms. V un «orden xudiciario» que é propio e escrusivo de Valencia.

Hai ademáis outro problema, tendo en conta o que di o documento recollido do ano 1345. A compilación alfa dous, que atopábase en Valencia no fondo é a mesma que a redacción beta e polo tanto que o ms. V, ó menos, nas «costumes da mar», nos «usos primeiros da mar» e nas «Ordeanzas do corso». Agora ben, se foi esta a compilación que enviouse a Mallorca, ¿como alterouse a súa forma, tendo en conta que, se aceptamos o prantexamento do García, a súa aplicación en Mallorca dependía das certificacións das autoridades valencianas? ¿Por que modificáronse «Costumes da mar» e «Ordeanzas do corso» e no-no «Orden xudiciario» coma vimos? Estas preguntas poden ter un interés lóxico, pro non proban de fío en fondo. Po-lo tanto deixando no aire o que trasmitéuse na súa forma perfeuta, podemos dir que o García, inda que coas limitacións ditas, aferma que o que trasmitéuse a Mallorca foi a compilación alfa dous e que o «Orden xudiciario de Valencia» redautouse por vez primeira en Mallorca na forma gamma. Eu penso que con esta afirmación o García quere dir que a Mallorca chegou unha forma do «Orden xudiciario de Valencia», propia do Consulado de Valencia, que hoxe non conocemos, poi-lo que hoxe atópase no ms. V ten influencias da forma gamma. Ademáis este «orden xudiciario» chegou independentemente da compilación alfa dous.

Eu teño que interpretar eiquí o pensamento do García, pois quedou aseñado que nas súas afirmacións hai unha certa vacilación: a afirmación de que a redacción gamma fíxose pouco antes do 31 de maio do 1343 e a afirmación de que o «Orden xudiciario» fíxose

264. GARCÍA 107 (31-V-1345) 205-206. GARCÍA 96 ss.

en Mallorca e incorporouse na compilación cando esta redautouse na forma gamma no 1343-1345 —afermacións todas elas feitas polo García— non cadran. Eu xa sei que a primeira data é hipotética, pro o que é certo é que o privilexio do trinta e un de maio do 1343 é o que autoriza os consules de Mallorca a xuzgar «per modum et formam in civitate Valencie usitatos». Se a redacción gamma é anterior ó 1343, quere esto dir que o seu orixe é valenciano e non mallorquín. Pra o García, coido, o privilexio do 1343 e o que provocou a tarefa redaucional en Mallorca, pro temos que ademitir, po-la maneira que no documento do trinta e un de maio do 1345 régrase o xeito no que os consules de Mallorca poden emprega-los privilexios e usos de Valencia —teñen que hace-lo po-las certificacións das autoridades valenciás—, que tra-lo 1343 chegaron a Mallorca os ditos privilexios e usos; pra min non hai razón algunha pra afirmar que chegou nese intre unha compilación, pro o que quero suliñar é que se o «Orden xudiciario de Valencia», na súa forma mallorquina, fíxose no período 1343-1345, tivo que facerse sobor dun modelo chegado de Valencia e se esa hipotética redacción mallorquina do «Orden xudiciario» incorporouse na compilación na súa forma gamma, quere esto dir que a compilación chegada de Valencia, que sirveu de modelo, non tiña o orden xudiciario e que po-lo tanto chegaron independentemente a Valencia seña o «Orden xudiciario» seña a compilación que tiña que sere a compilación alfa dous.

Entre o 1343 e o 1345, po-lo tanto, faríase a forma gamma da compilación e nela fundíronse o «Orden xudiciario de Valencia» na forma propia de Mallorca, as «Costumes da mar», os «Usos da mar primeiros e segundos» —estos derradeiros son unha novedá desta redacción— e as «ordeanzas do corso». Estas afirmacións pra min fan abrochar maiores problemas dos que resolven. Tornaréi por un intre o «Orden xudiciario de Valencia».

Penso que non forzo o pensamento do García, po-las razóns que dixen, se afermo que existía xa en Valencia, inda que se non atopaba na redacción alfa dous, se o inventario de bés do 1333 amosa que as «Costumes da mar» comenzaban po-lo m 46. Este «Orden xudiciario» enviouse no 1343 a Mallorca, onde revisóuse facendo así a forma gamma do «Orden xudiciario». Poucos anos máis tarde, no período que vai do 1350 ó 1358 fíxose unha nova redacción do

«Orden xudiciario», que hoxe atópase no ms. V e que é propia da redacción beta, redacción que demostraría que xa existía a forma gamma:

«Això té confirmació expressa en la forma Beta del text o, ja que la rubrica que procedeix el capítol m 8 (=V 7) diu clarament, amb referència al dit capítol i als tres següents, *aquests stils foron haiits de Malorques*; i el capítol 46 de la forma Beta, que no és a la gamma, fa referència a la jurisdicció del Consolat de Mar de Barcelona, com pariona a la del de València, referència clarament indicativa de la posterioritat del dit capítol al 20 de febrer de 1348, data del privilegi que atorgà la jurisdicció autònoma al consolat de Mar de Barcelona»²⁶⁵.

O García pensa que cando no 1350-1358 ademiteuse en Valencia a redacción mallorquina, procedéuse a readautalo «Orden xudiciario» valenciano. Teño pra min, que o que debeu pasar e dun lado menos complicado pro doutro máis complicado. Os cónsules valencianos, que tiña-no seu «Orden xudiciario», poi-lo enviaron a Mallorca, compretaro-no mesmo, seña coas adicións mallorquinas, seña coas novas adicións xurdidas no propio consulado, que áchanse nos capítulos derradeiros deste «Orden xudiciario» do ms. V.

Deixo moitos outros problemas sobor dos que tornaréi. A min paréceme este comportamento lóxico, pro teño moitas dúbidas que as cousas sucederan así. O m 30 no ms. L di: «E si lo demanat es de la ciutat de València o de Mallorques», frase onde parece amosarse a tradición mallorquina do «Orden xudiciario de Valencia». Agora ben, mentrala mención de «Mallorques» manca nos mss. D, N, C, P, U e na edición *princeps*, atópase no ms. V, mentras no ms. A dise: «Barchinone». Este feito amosaría que os cónsules de Valencia dependen da tradición mallorquina, pois non semella que poida pensarse que os cónsules valenciás axustaran independentemente a mención dita, polo que debe matinarsse que no intre da súa redacción pasouse-lles por alto, inda que seña unha cousa un pouco estrana nun manuscrito que tiña ó parecer carauter oficial. Tamén pode maxinarsse que un tal feito atoparía a súa espricación na agora necesaria certificación oficial das autoridades mallorquís pra que o estilo mallorquín poida empregarse no consulado de Valencia. Seño que seña, eiquí quero suliñar samente que o ms. A mosa de novo o valor que te-no conoce-lo orixe dos manuscritos.

265 GARCÍA 166.

O problema arrinca po-lo tanto do feito que temos que maxinar que no período que vai entre o 1343 e o 1349 a xurisdición consular mallorquina fixo xa nacer us estilos propios, que incorporáronse máis tarde ás practicas do consulado de Valencia. Agora ben, esto fai dudar que a redacción gamma puidera facerse no período 1343-1345, inda que pode pensarse que esas practicas naceran dende o 1329 e entón, en principio, poderíase manter que nese período fíxo-se a reforma e incorporáronse xa esas novas practicas mallorquís, que atópanse xa na chamada redacción gamma do «Orden xudiciario», feita no 1343-1345 según o García, se hastra nosoutros chegou sin modificación algunha; en todo caso no 1349 os ditos estilos mallorquís tiñan que estar xa recollidos no «Orden xudiciario» que conocemos po-las ediciós —o chamado po-lo García redacción gamma do «Orden xudiciario»—, pois o traslado do mesmo feito dende Mallorca a Barcelona no 1349 e que hoxe atópase no libro dos privilexios do consulado de Perpiñán te-nos capítulos m 1-45 bis, esto é o «orden xudiciario» que atópase na edición do Colon, según di o García. E certo que estas refreusiós non teñen moito valor, poi-las novas practicas poden nacer nun día. Tornemos po-lo tanto a compilación alfa dous.

E craro que dentro do prantexamento do García na chamada redacción gamma, feita en Mallorca no 1343-1345, po-lo notario Huguet Borrell²⁶⁶, po-lo que tería un carauter se non oficial ó menos oficiosa, os capítulos das «sportades» non tiñan unha posición autónoma, pois formaban parte do «Orden xudiciario de Valencia», coma amosa o traslado do 1349. E certo que esto no-no di o García —ou eu non me lembro—, pro é craro que se o consulado de Mallorca tiña xa no 1343-1345 unha recopilación oficial ou oficiosa, onde atopábase o «orden xudiciario», cando no 1349 enviou un traslado autentico do mesmo ó consulado de Barcelona, tivo que face-lo con base na sua compilación. Pois ben, o ms. L do 1385, que presentase coma o libro dos capítulos do consulado da mar de Mallorca, te-nos ditos capítulos das «sportades» incorporados nas «Costumes da mar», pois forma-no capítulo primeiro das mesmas e no ms. D os ditos capítulos ou forman o capítulo derradeiro dos «Capítulos do rei Pedro» (Moliné) ou teñen un posto independente

266. GARCÍA 100.

entre os «Capítulos do rei Pedro» e as «Costumes da mar» (Quadrado). Ademais o ms. D amosa un orden no seu contido diferente do que proqramase propio da redacción gamma e o ms. L ten tamen nas «Ordeanzas do corso» un orden propio nos derradeiros capítulos.

E aínda hai o problema dos «Capítulos do rei Pedro». Pra o García o feito de que nos manuscritos da redacción gamma atópese un colofón despóis das «Ordeanzas do corso» asomade do m 334, colofón que non atópase nos manuscritos barceloneses que conteñen dita redacción (F, C e P) amosa que a redacción orixinaria da redacción gamma non tiña os ditos «Capítulos», que introduxéronse nas outras compilacións a imaxe e semellanza do feito en Barcelona no 1348-49, cando recibéuse na dita vila a compilación gamma mallorquina. E como no ms. V, isto é, na redacción beta tampouco atópase o colofón despóis do remate das «Costumes da mar» (=V 249), entón a redacción beta inseréu xa os «Capítulos do rei Pedro» a imitación da redacción gamma barcelonesa²⁶⁷. Teño pra min que seña necesario precisar algunhas cousas: temos nove manuscritos e unha tradución italiana. Pois ben, no ms. A, ó parecer tamen barcelonés e que pode depender dun manuscrito do século XIV, polas razóns ditas, hai un colofón despóis do m 334 —o colofón do libro— e despóis achegáronse algú folios máis cos «Capítulos do rei Pedro»; tamén no ms. N, barcelonés, atópase un colofón despóis das «Ordeanzas do corso». O ms. U non interesa, xa que non temos ditos capítulos, mentras a tradución italiana do 1479 aliñase cos mss. F, C e P.

Polo que sei, eu non discuto que os «Capítulos do rei Pedro» incorporáranse os «Libros do consulado da mar» que íanse formando nos diferentes consulados e neste sentido pode sere que seña en Barcelona onde, por vez primeira, decidéuse incruirlos «Capítulos do rei Pedro» dentro do «Libro do consulado da mar de Barcelona»; o que discuto e que haxa neste intre unha compilación tipo —a chamada redacción gamma—, que no-no tiña, pro que terminou por te-lo, cando incorporáronse á mesma en Barcelona. E a razón é crara: no ms. L —deixo da parte o intre no que os mesmos incorporáronse— os «Capítulos do rei Pedro» atópanse asomade do

267 Vid GARCÍA 164-165.

actual m 334, que péchase cun colofón, mentras no ms. D os «Capítulos do rei Pedro» atópanse despóis do «Orden xudiciario» e diante ou dos capítulos das «Sportades» ou das «Costumes da mar», despóis das que veñe-nas «Ordeanzas do corso» e o colofón, inda que pra min non é o colofón das «ordeanzas», mai-lo colofón do manuscrito orixinario. Este feito non pode espricarse a partir dunha compilación tipo —a redacción gamma— que xire po-lo Mediterráneo.

Estos feitos espricaríanse moito millor a partir do reconecemento de que nestes intres hai unha foulareda de textos independentes, que poden rematar drento dun «libro do consulado da mar», pro inda non hai unha compilación tipo, un libro do consulado da mar que xire po-lo Mediterráneo, mais moitos libros dos consulados, cada un coa sua respetiva individualidades, drento dunha tradición común. Inda está por vi-la obra do Ceelles.

Se falamos dunha compilación eu coido que temos que afermar que o que copiouse foi esa compilación, po-lo que ou temos que afermar que no 1385 o consulado de Mallorca reformou a sua propia redacción ó face-lo novo libro do consulado da mar —agora os capítulos das «sportades» pasan a se-lo capítulo primeiro das «Costumes da mar»— e nese mesmo ano ou anos máis tarde perfecciónouno coa incrusión dos «Capítulos do rei Pedro» ou temos que poñer en duda que no 1343–1345 houbera xa en Mallorca unha redacción máis ou menos oficial da compilación do LCM, que enviouse máis tarde a Barcelona. Téñase presente que no 1389, isto é, catro anos máis tarde da aparición do ms. L, inda enviase de Barcelona a Perpiñán un orden xudiciario de Valencia rematado po-los capítulos das «sportades».

Coido que o García non toma en consideración o feito que ou ben falamos dunha compilación tipo e po-lo tanto é esta compilación a que vai e ven dun lado pra outro e po-lo tanto os manuscritos que testimuña-na teñen que refrexar un mesmo contido, inda que pouco a pouco o mesmo poida verse arrequentado po-la achega de novos elementos. É certo que non debe maxinarse que esa achega teña que facerse sempre no remate, pois vimos casos nos que as achegas fixéronse ó principio ou no medio, po-la incorporación de novos folios ou po-la utilización de folios deixados nun principio en branco. Este feito é o que pode espricar que un manuscrito inda xaramolado da presunta redacción gamma poida ter algunhas ca-

raiterísticas especiais. Abonda recorda-lo que dixemos dos mss. F e P, pro tamén é necesario suliñar que entramentres se non fagan estas comprobacións, se construe sobor de aréa. Ademáis se falamos dunha compilación que vai e ven po-lo Mediterráneo, non sólo temos que prestar atención ó orden no que atópanse os diferentes textos, tamén hai que prestar atención á forma dos textos incorporados.

Po-los datos axuntados pódese xa adiantar que nin todo-los manuscritos teñe-no mesmo contido ni-nos textos amosan neles as mesmas formas —hai diferencias no número de capítulos e na ordeación dos mesmos—; estas diferencias, en liñas xenerales, son pequenas, pro sin ter presente estos feitos, coido que é moi difícil proba-la existencia das redaccións alfa, beta e gamma.

4. *A chamada redacción beta*

Pra o García no período 1350-1358 foi cando redatouse o novo «Orden xudiciario de Valencia», que atópase hoxe no ms. V e po-lo tanto foi tamen o intre no que formouse a redacción beta. Xurde esta compilación beta dende que na redacción alfa dous incorporouse ó principio o novo «orden xudiciario de Valencia» e púxose ó remate da compilación os «Capítulos do rei Pedro» e o cronicón das confirmacións, que debéu facerse eiquí neste intre.

Estaríamos ante un feito moi aqueloutrado: o gromo da nova compilación é o mesmo da compilación antiga, inda que pra esto téñase que deixar fora de funcionamento os criterios directivos da formación do LCM. Se non fai reforma algunha, po-lo que o García pode dir que a redacción beta é a redacción alfa dous coas achegas ditas. E o feito é aquelado, pois debe maxinarse que nestes intres tivo que chegar a Valencia a redacción gamma mallorquina de máis rico contido. E certo que o García fala sempre desta compilación que vai e ven, pro, a meu ver, fala sin tomar en consideración o que esto supón, xa que esta compilación gamma mallorquina é máis rica que a compilación beta, e cando reformouse a compilación alfa dous, pensouse en modifica-lo «Orden xudiciario» e introduci-los «capítulos do rei Pedro», pro se non sinteu a necesidá de modifica-lo contido das «Costumes da mar».

¿Pódese afermar que existía esa compilación alfa dous en Valencia e que tra-la revisión formouse a redacción beta? O manus-

crito L mallorquín tiña unha redacción característica, seña po-lo posto dos capítulos das «sportades», seña po-lo ordeación das «ordeanzas do corso», seña po-las dudas que hai pra data-la incorporación dos «capítulos do rei Pedro». E certo que o García aferma que estos incorporáronse a imitación da compilación gamma Barcelonesa; po-lo tanto a incorporación dos «Capítulos do rei Pedro» ten que sere posterior o ano 1349, cando erixéuse o consulado de Barcelona —e neste sentido dende o 1385 o ms. L podía ter xa incorporado-los ditos «capítulos»—. Dun lado o «Orden xudiciario» do ms. V fai pensar que a compilación tivo que vir de Mallorca, doutro lado a incorporación dos «Capítulos do rei Pedro» fíxose, segun o García, en Barcelona, po-lo que tería que pensarse que a compilación viría de Barcelona.

Hai, a meu ver, outra solución. Nesta época inda non hai unha compilación tipo que xire po-lo Mediterráneo, mais textos independentes, inda que estos poideran atoparse de vez en cando xuntos canda outros elementos nun manuscrito. Repito de novo pra evita-las trabucaciós: nestes intres inda non hai unha compilación tipo —teña unha ou duas redauciós—; poden haberen —eso si— manuscritos onde recóllense diversos textos e estos manuscritos, onde atópanse recopilacios do dereito dun consulado, dende os derradeiros do século XIV comenzan a chamarse LCM, pro independentemente do seu contido. Non hai un libro do consulado de mar, pois hai moitos libros dos consulados da mar, que teñe-nas suas propias características, drento dunha grande comunidade de dereito.

Eu quixera chama-la atención sobor precisamente de este ir e vir dunha compilación, que xira po-lo Mediterráneo, falando da formación da redacción beta: a meu ver teríase que afigurar que en Valencia achábase a redacción alfa dous e pra perfecciona-la tivo que matinarsen nunha compilación mallorquina, pra incorpora-lo «Orden xudiciario de Valencia», que foi anovado, pro tamen tivo que acudirse a unha compilación barcelonesa, pra poder rematar a nova redacción cos «Capítulos do rei Pedro». E certo que pódese simplifica-lo problema decindo que a compilación mallorquina tra-lo seu paso por Barcelona chegou a Valencia, pro eiquí atopábase a redacción alfa dous! ¿Qué é entón o que xira po-lo Mediterráneo?

Unha cousa é certa: o ms. V non pode derivar dunha compilación beta valenciana, onde atopárase ó remate os «Capítulos do rei

Pedro» e o cronicón das confermaciós; esta incorporación non tivo, ó parecer, o seu orixe nun mandato rexio, senon nos intereses daquelas persoas que encarregaba-na feitura dun manuscrito e así na seución adicada as «Costumes de mar de Barchinona» atópase esta decraración despóis do título recollido:

«Hoc est translatum sumptum fideliter a quadam carta pergamena excellentissimi domini regis Aragonum sigillo pendenti in quadam veta de serico regali sigillata, cuius tenor talis est, ut sequitur»²⁶⁸.

Dito con outras palabras, a incrusión dos «Capítulos do rei Pedro» no ms. V non débese ó feito de copiar este manuscrito outro manuscrito, onde atopárase a presunta redución beta, mais ó feito de que os redautores do ms. V decidiron introduci-los ditos «Capítulos» copiando-os dun traslado do crixinal rexio. E po-lo tanto, se o cronicón fíxose en Valencia non debeúse facer na época do 1350-1358, poi-lo cronicón xúnguese os ditos capítulos.

Aínda hai algo máis. Lembraréi o documento citado po-lo Perels, onde ordéase que os pautos entre a vila de Barcelona e o Rei Pedro do ano 1373 señan incorporados no «Libro do Consulado». Os mss. F e P, os dous barceloneses e os dous emparentados, teñen, despóis das «Ordeanzas do curso», esto é, despóis do m 334, onde, ó parecer, se non atopa colofón algún, os ditos dous pautos do 1373, e, asomade destes dous pautos, atópanse os «Capítulos do rei Pedro». Eu non quixera sere bulidero de máis, pro quixera lembrar que, pra o Pardessus, o ms. P ten carauter oficial. Teríamos así que non coñecemos manuscrito algún —o que non quere dir que no-nos poida habere, pois coñecemos o manuscrito do documento do 29 do mes de Nadal do 1424 rematado po-los ditos «capítulos», inda que se non conserve— que nos permita afermar que denantes do 1373 incorporáranse xa os ditos «Capítulos do rei Pedro» no LCM; tanpouco teremos, teño pra min, endexamáis a posibilidade de determina-lo intre esauto no que os ditos «Capítulos do rei Pedro» incorporáronse nun manuscrito do LCM, pois este feito non semella te-lo seu orixe nun mandado rexio, mais nos mandados daquelas persoas que encarregaba-na feitura dun manuscrito; pro podemos afermar unha cousa: no xiro do Consulado de Barcelona mandóuse que no 1373 metérase dentro do «Libro do Consulado de Barcelona»

268. Vid. a edición do Ferrando p 221.

dous pautos de dita data; dous manuscritos vencellados a Barcelona, un dos cales era unha redacción oficial, pra o Pardessus, do Consulado de Barcelona, teñen despóis das «Ordeanzas do curso» os dous ditos pautos e, asomade, os «Capítulos do rei Pedro». Quere esto dir, a meu ver, que ó menos oficialmente os «Capítulos do rei Pedro» non puideron axuntarse no «Libro do Consulado da mar de Barcelona» denantes do 1373.

Tendo en conta todos estos feitos teño pra min que afermar que en Valencia dende o 1350-1358 existía unha redacción —a redacción beta— que pechábase cos «Capítulos do rei Pedro» é unha afirmación que non ten apoio algún.

O problema fundamental destas dúas redaccións non abrochan destas adicións, xa que a meu ver mentras se non faga un *stemma* dos manuscritos, prescindindo de levar a cabo neles unha selección arbitraria do contido e inútil perde-lo tempo nestas discusións. O problema fundamental atópase na identificación desas «Costumes da mar» e desas «Ordeanzas do curso», que agora amosan unhas características propias, que atópa-no seu fundamento principalmente no ms. V e nas «Costums de Tortosa». Pro denantes de arriscarme neste lerio, quixera fechar esta parte cunhas novas refreusións.

5. Concrusión

Pra pechar este apartado resumiréis as consecuencias que veñen fora de afermar-la existencia, como faino o García, de dúas redaccións —beta e gamma— xermoladas dunha máis antiga: a redacción alfa dous.

No 1332 habería en Valencia unha compilación —alfa dous— formada po-las «Costumes primeiras da mar», po-las «Costumes segundas da mar», po-las «Ordeanzas do curso» e po-lo «Usos primeiros da mar», que atopábanse neste orden dentro da compilación. Po-las mesmas datas habería tamén no consulado de Valencia un «Orden xudiciario» escrito, inda que no-no coecemos. No ano 1343 estes dous textos tiveron que enviarse a Mallorca e no período 1343-1345 fíxose unha nova compilación, a redacción gamma, que tería esta composición: «orden xudiciario de Valencia», «costumes da mar», onde, despóis da reordeación feita, mesturaronse as «Costumes da mar primeiras e segundas» e os «usos da mar primeiros»,

pro tamen os segundos, que, non respeitando os principios directivos da formacións das recopilacións do LCM, non atopáronse endexamais despois das «Ordeanzas do corso»²⁶⁹.

Eu non sei se pra o García nese intre, isto é no 1343-1345, foi cando as «ordeanzas do corso» recuperaron ou conseguiron por vez primeira a súa propia individualidades, que atópase testemuñada, agás o ms. V, na restante tradición manuscrita e na tradición editorial coas dudas ditas.

Dacordo con esta afirmación do García desta redacción gamma agromarónnos mss. D e L, os dous mallorquís, e o derradeiro o «Libro de capítulos do consulado de Mallorca». Pois ben, temos que aceptar que se a redacción gamma existiu e deu lugar o nacemento destes dous manuscritos, os seus autores correxíronna redacción: dun lado —e isto ben confirmado polo traslado do 1349— os «capítulos das sportades» atopábanse no «Orden xudiciario de Valencia», pro no ms. L é o capítulo primeiro das «Costumes da mar»; doutro lado, é evidente que nas «Ordeanzas do corso» o ms. L ten unha ordeación dos derradeiros capítulos que nin atópase no ms. V nin nos outros manuscritos —que conozo— da chamada polo García redacción gamma. Eu limítome a suliñar este feito e abonda dir que os outros manuscritos parecen te-lo mesmo orden que atópase no ms. V, pro no ms. V mancan algú dos capítulos derradeiros en todo ou en parte [vid. m 330 (cont.), m 334] e atópanse noutro orden os m 330-333 = V 182-186. Deixo a un lado o problema dos «Capítulos do rei Pedro», xa que eiquí non podese chegar a conclusións sobor do momento no que incorporáronse ó manuscrito L.

Outro tanto fixo o redactor do ms. D e neste sentido, dado o carácter deste manuscrito, teríamos que dir do autor do/s manuscrito/s empregado/s polo copista do ms. D: dun lado temos que o capítulo das «sportades» ou formaba parte dos «Capítulos do rei Pedro» (Moliné) ou tiña unha posición independente (Cuadrado), pro de toda-las maneiras neste manuscrito atopábase un novo elemento, os «Capítulos do rei Pedro», que atópanse despois do «Orden xudiciario» e diante ou dos capítulos das «sportades» ou das «Costumes da mar». E pra as «Ordeanzas do corso» léase o xa dito.

Pra o García xa sabemos que estes «Capítulos do rei Pedro» incorporáronse en Barcelona na compilación gamma e que a imita-

269. Vid supra p 123 ss.

ción dos manuscritos barceloneses incorporaránse posteriormente nos manuscritos dos consulados de Valencia e Mallorca. Agora ben, estes manuscritos barceloneses, que serviron pra que os mallarqués e os valenciás compretara-no LCM ¿tiñan unha compilación ou tiñan samente algun testo dos que hoxe atópanse no LCM?

Deixo a un lado de novo o ms. L, poi-las hipótesis terían que sere diferentes se a incrusión dos «Capítulos do rei Pedro» ou é orixinaria ou é secundaria. Agora ben, ¿cómo espricase o posto dos mesmos no ms. D? É craro que tanto o ms. D —po-lo posto dos «Capítulos do rei Pedro»— coma o ms. L —po-lo posto dos capítulos das «sportades» e po-lo orden das «ordeanzas do corso»— teñen unhas características propias. ¿De onde veñen, se o que xira é unha compilación? ¿Esta compilación cópiase de maneira selectiva? Isto é, ¿quén copia unha compilación copia fielmente algús dos testos e modifica outros? Se isto é así, é evidente que algús capítulos da presunta redacción gamma puideran non ser recollidos nos manuscritos o que espricaría que o m 87 atópese samente nas ediciós e ó parecer no ms. N, inda que o Pardessus, máis esauto, precisóu que «ce chapitre avoit été omis dans le manuscrit où il a été ajouté en marge d'une main plus récente, probablement après la confection de la table des rubriques, dans laquelle il n'est point indiqué»²⁷⁰. Deixo a un lado este problema, que probablemente tería que resolverse decindo que o m 87 non ten unha tradición manuscrita, pra voltar sobor dos feitos apuntados. ¿Por qué o ms. V é o úneco onde non sucederon estas cousas? Pro hai algo máis e con esto voltamos ó ms. V.

O ms. N é, ó parecer, o úneco dos manuscritos conservados que te-no m 87, inda que seña unha achega, pro tamén é o úneco manuscrito da familia chamada po-lo García gamma que tamen te-no cronicón das confirmaciós. Se un mira o *stemma* do García é evidente que este feito non ten unha espricación, ó menos se un afígúrase unha compilación que xira po-lo Mediterráneo; se o manuscrito N é tamén un manuscrito vencellado a redacción gamma e ademáis de maneira direuta non espricase a presenza do cronicón. É certo que sempre pódense atopar espricación. Pro non é ésto o que discútese: o García límitase a dir que os mss. L, D e F teñe-no

270. PARDESSUS II 87 n. 2

seu orixe na famosa redacción gamma, mais pra poder manter esa afirmación hai que concruir que ningún destes manuscritos pode refrexar fielmente o orden da redacción gamma. Deixo a un lado o problema da individualidade das «ordeanzas do curso» e limítome a suliñar que a súa estrutura é diferente. Neste sentido, xa que entre o 1343-45, data da presunta redacción gamma, e o 1385 data do ms. L corren coarenta anos, teño pra min que é máis lóxico pensar que foi nese ano cando o consulado de Mallorca recolléu o seu dereito nun manuscrito, nacendo así o libro dos capítulos do consulado da mar de Mallorca —o que non quere dir que non puidera habere xa outro máis antigo—, pra o que recolléu dun lado as costumes da mar, doutro as ordeanzas do curso, doutro o orden xudiciario, que enviaran xa no 1349 a Barcelona e, probablemente, doutro os «capítulos do rei Pedro» e algús privilexios propios, facendo algunha pequena corrección nos textos que podían correxirse. Eu suliño este feito, xa que quero eiquí suliñar coma xurdiron estas compilacións propias dos diferentes consulados. É certo que no 1373, ó parecer, xa Barcelona tiña o seu «Libro do consulado da mar», po-lo que tamen pódese pensar que o tivera Mallorca denantes do 1385, pro tamen sabemos que o contido destes libros pode variar. Neste sentido eu incrínome a pensar que o ms. L é o primeiro testemuño dun libro do consulado da mar do consulado de Mallorca, onde atópanse recollidos os textos xa conocidos, e suliño este feito, xa que desta maneira podese pensar que non é o ms. L o primeiro libro que tivo o consulado de Mallorca, inda que si o primeiro libro onde recolléronse os textos ditos.

Lembraréi que foi o que fíxose en Valencia nos primeiros anos do século xv: pra recoller no libro —pra manter a denominación do manuscrito— os «Capítulos do rei Pedro» non acodiron a unha compilación barcelonesa do LCM, pois copiaro-nos dun traslado do privilexio do Rei Pedro. E ademáis axuntóuse ó remate destes capítulos o cronicón das compilacións «de les Costumes de la mar», unha fórmula moi ambigua, pois neste manuscrito na táboa fálase de «Aci comensen les bones costumes els bons usatges de la mar» e de «Costumes de Mar de Barchinona» e no corpo do libro na suas respeitivas seucións dise: «Aci començen les bones costumes e els bons usatges de la mar» —epigrafe do V 1— e «Costumes de mar de Barchinona» —título xeneral da seución—. Agora ben, se este

cronicón naceu en Valencia —e eu teño moitas dudas— e atópase despóis dos «Capítulos do rei Pedro» non é doado espricar que tamén atópese nun manuscrito da presunta redacción gamma que no-no tiña —nin tampouco orixinariamente os «Capítulos do rei Pedro»— e que ademáis atópese no posto no que atópase²⁷¹, se nestes intres vai e ven xa po-lo Mediterráneo unha compilación tipo.

V. A FORMACIÓU DAS COSTUMES DA MAR

1. *O ms. V e os diferentes fatos de capítulos que compoñe-no*

O García di-nos que o núcleo fundamental das «costumes da mar» —«costumes primeiras da mar», «costumes segundas da mar», «ordeanzas do corso» e «usos primeiros da mar»— atópanse no ms. V tal como atopábase na redacción beta e o autor desta derradeira redacción non introduxo modificacións algunhas no orden que o dito núcleo tiña na redacción alfa dous e xa esta refrexaba a redacción alfa unha coa úneca diferenza de axunta-lo remate desta alfa unha os capítulos dos «usos primeiros da mar». Temos así un texto que logrou manterse intauto sin modificacións dende o ano 1283, cando a redacción alfa un recibéuse en Valencia, co úneco arrequeamento dos «usos primeiros da mar» no 1332, que é cando o García po-no nacemento da alfa dous, ate hoxe, pois o ms. V e ó solo testemuño que chegou hastra nosoutros da redacción beta e po-lo tanto conservóu-nos o texto ate hoxe no seu tenor orixinario que viña na súa primeira parte dende o 1283 e na parte derradeira —aquela dos usos da mar primeiros— dende o 1332.

O ms. V ten un texto —e dora en diante falarei solo do núcleo fundamental (costumes primeiras, costumes segundas, ordeanzas do corso, usos da mar primeiros)— onde os diferentes fatos de normas teñen un posto propio dentro do mesmo, po-lo que é doado face-lo xebre entre as «Costumes primeiras» as «costumes segundas», as «Ordeanzas do corso» e os «usos primeiros da mar».

Como xa neste ms. V e po-lo tanto na redacción alfa dous no fato das «Costumes primeiras» atópanse capítulos do fato das «Costumes segundas», dende a redacción alfa un, xa que a redacción alfa dous o úneco que fixo foi achegar no remate do seu modelo

271 Vid supra p. 50-51

os «usos da mar (primeiros)»²⁷², pra confermar e correxi-los resultados achados co criterio topolóxico, o García acode o criterio estilístico²⁷³.

Ademáis coma os capítulos dos «Usos da mar» finaron tamen por atopar acomodo dentro das «Costumes da mar» na redacción gamma, pódense descubrir nela, pois teñen tamén unha cláusula estilística propia²⁷⁴. Esta cláusula non tería maior interés, poi-lo criterio topolóxico servería pra identifica-los capítulos dos «usos da mar», pro debe terse en conta que na redacción gamma atópanse capítulos dos «usos da mar» —os chamados po-lo García «usos da mar segundos»—, que se non atopan na redacción beta, po-lo que sólo poden identificarse cos criterios estilísticos. Agora ben, quixera xa adiantar que o García semella respecta-lo criterio estilístico, pro no fondo a identificación, coma veremos, dos capítulos do fato dos «usos da mar segundos» se non fai po-la presenza nos mesmos de dita cláusula, pois non todo-los ditos capítulos teñe-na, mais po-la sua ausencia do fato dos «usos primeiros da mar» no ms. V.

Este criterio estilístico, complementario, ten, a meu ver, unha falla: non todo-los capítulos das «costumes segundas» e dos «usos da mar» teñe-na cláusula estilística propia, po-lo que, cando o criterio topolóxico non pode empregarse, entón o criterio estilístico non é dabondo. Dito con outras palabras, dende o punto de vista do García, pode suceder que nas «Costumes primeiras» —na redacción beta— atópense capítulos das «Costumes segundas» que se non poden identificar, ó non te-la sua cláusula estilística e na redacción gamma pódense atopar capítulos dos usos segundos, que se non poden identificar po-las mesmas razóns. E eiquí entra en xogo a función lexitimadora do pseudocriterio topolóxico: todo-los capítulos que atópanse no fato das «costumes primeiras» son das mesmas, cando neles se non atope a dita cláusula, e todo-los capítulos

272. GARCÍA 177.

273. A cláusula: «E fon fet perço aquest capitol», seguida po-la *ratio legis* (GARCÍA 169, 190, 195. Cf 187) é a cláusula que servelle pra identifica-los capítulos das «Costumes segundas da mar» que atópanse dentro das «Costumes da mar primeiras».

274. «E per les raons dessús dites fo fet aquest capitol» é a cláusula (GARCÍA 205)

que atópanse no fato das «Costumes segundas da mar» son deste fato, inda que non teña-na cláusula e todo-los capítulos do fato dos «usos primeiros da mar» son deste fato, inda que non teña-na cláusula estilística e, pra rematar, todo-los capítulos do fato dos «usos segundos da mar» son do dito fato, inda que non teña-na cláusula, pois se non atópan no ms. V.

2. *O ms. V e os outros manuscritos*

Po-lo xa dito sabemos cal é a maneira de traballar do García. Se o ms. V ten certas peculiaridades que se non atopan no testo da edición do Colon —emprego este testo pra aludi-los outros manuscritos, xa que é o que fai o García, a meu ver non moi lexitimamente—, entón, dado que o ms. V é xarado a redacción beta e ésta a redacción alfa dous e esta, na sua meirande parte, coa esceución dos «usos primeiros da mar», a redacción alfa un, ten que dirse que estas características da redacción beta non pasaron a redacción gamma ó copiar esta a redacción alfa dous; ó revés, cando nos manuscritos que testemuña-na redacción gamma atópase un capítulo que se non atopa no ms. V, entón ese capítulo é unha novedá da redacción gamma, introducida po-lo redautor da mesma, ó ser un capítulo daquel fato chamado po-lo García «usos segundos da mar».

Eu falo, coma xa dixen, da edición do Colon, xa que o García fai a comparanza da redacción beta e da redacción gamma, pro en realidá faina do ms. V e do testo *m* na edición do Colon, esto é, o testo da vulgata do LCM²⁷⁵.

Quero correxir neste intre unha afirmación da miña segunda recensión. Cando neste cadro de comparanzas o García di: «24 no hi es»²⁷⁶ non quere afirmar, como eu afiguréime, que o V 24 se non atopa na redacción gamma, non; o que quere dir o García e que no ms. V se non atopa o dito capítulo, pois brinca do V 23 ó V 25. Agora cando o García²⁷⁷ afirma que na redacción beta manca, entre outros, o m 87 esconde o grave problema xa dito: ó parecer atópase solo o dito m 87 nas edicións —inda que nadia seguro podo dir da tradución italiana manuscrita—, pois no ms. N é unha achega sero-

275. GARCÍA 171 ss.

276. GARCÍA 171.

277. GARCÍA 173

dia, quizaves —no-no sei nin podo sabe-lo— xunguida as edicións, inda que coído que o mesmo ten un craro antecedente nas mesmas «Costumes da mar», que pode chegar hastra a redución das «Costumes da mar» que atópase nas «Costums de Tortosa»²⁷⁸.

Con esta afirmación quero suñar a simplificación feita polo García ó emprega-la edición do Colon. Non matino que seña necesario recolle-los poucos datos que teño e que quedaron xa ditos ó falar dos manuscritos, pro deles é evidente que o número de capítulos non é o mesmo nin en todo-los textos nin en todo-los manuscritos.

E certo que o García aferma que as diferencias de ordeación dos capítulos nos manuscritos da forma gamma son poucas²⁷⁹ pro unha vez máis o García límitase os catro manuscritos empregados pra sua costrución, poi-las ditas afirmacións non poden ser válidas pra todo-los manuscritos da familia gamma, poi-lo mesmo García reconece que «els altres manuscrites que posseim per ara, segueixen també la forma gamma. Fins i tot el C, que és el més singular, n'es una recensió parcial ja tardana en capítols relatius als mariners»²⁸⁰.

Como dixen non voume deter en recoller eiquí outras diferencias, que quedaron xa rexistrada, pois face-lo levaría máis traballo que froitos daría, xa que por exemplo os datos do Moliné e os do Quadrado sobor do ms. D non sempre cadran. Por iso mesmo, direi que a enumeración do García nin é válida pra todo-los manuscritos nin taupouco é válida pra os manuscritos que menciona. Remítome eiquí a edición das «Ordeanzas do curso» e inda máis concretamente os derradeiros capítulos: ni-no manuscrito L te-no mesmo orden que atópase ó parecer nos outros manuscritos ni-no ms. V, cunha ordeación propia dos capítulos, inda que máis veciña da dos outros manuscritos que da do ms. L, ten todo-los capítulos.

278. Vid infra p 211-212

279. GARCÍA 174 n. 63: «Les del ms. D són comprovables a QUADRADO, J. M., *Privilegios y franquicias de Mallorca*, 47-55. Són també les mateixes dels mmss. L i F: desdoblament en dos de cadascun dels capítols m 80, 86, 93, i 101, absència del m 87, reunió en un sol capítol dels m 127 i 128, ordenació dels m 166-168 per l'ordre m 167, 168, 166 i dels m 221 i 222 per l'ordre m 222, 221. El ms. V també les conté, bo i afegint al m 86 el m 88. Són, doncs, gairebé idèntiques a totes dues formes.»

280. GARCÍA 163.

3. *Os coadros do García*

Denantes de començar quero facer unha declaración xeneral, pra evitar trabucaciós. Eu sei moi ben o traballo que leva face-lo cotexo dos capítulos dun testo e estabrece-las equivalencias e tamen conozo moi ben o sentimento de impotencia que abrocha nun, cando as erratas botan a perde-lo traballo de anos. Quero por eso precisar que eu non quero eiquí correxi-lo traballo do García, mais si o testo impreso do mesmo, pois coido que hai nel algunhas erratas. Vou dar un exemplo que ó meu parecer e craro: no coadro do ms. V danse os capítulos do mesmo po-lo orden que atópanse neste manuscrito; pois ben os cap. V 228-229 atópanse no coadro despóis do cap. V 238 e diante do cap. V 239²⁸¹.

Eu quixera que estas miñas correuciós puideran publicarse sin novas erratas pra evitar novos lerios. Xa se sabe que, da sempre, na historia do dereito —lémbrense as queixas do Mayans— houbo pantasma oficialmente xeniales que «cobdiciosos aparecer sauios en los uellos de las gentes» publicaban e publican vagorosos e repinicados traballos costruidos no aire e co apoio dunha leutura das solapas dos libros no millor dos casos. As veces un destes pantasma, nun intre de xenialidade, anuncia unha nova alborada —fai pouco tivemos unha— na historia do dereito: a descuberta de novos manuscritos non imaxinados nos arquivos arrombará con todo o feito ate aquel intre e permeterá a costrución dunha nova historia, da historia verdadeira non fallaría máis!, pro cando comenzan estes alumiñados a publica-las suas descubertas, o que descubren e a sua propia ñorancia, xa que as suas aportaciós son xa vellas denantes de nacer e samente pódense dar coma novedás, porque os seus autores ou non conoce-no que os outros escribiron ou fan coma se non conocera-no escrito po-los outros.

E digo esto, pois agora, ó parecer, un dos méritos que pódense invocar nos concursos pra chegare a sere profesor numerario é o de saber aproveitarse dos traballos alleos; non pódese dir que seña esta unha novedá e tampouco é unha novedá que nin siquera saiban estos langrás copiar ben o que outros escribiron e deste

281. GARCÍA 173. Véxase por ex. as relacións que fai dos capítulos dos usos da mar segundos na p 173, 176 e 205

xeito rematan por consagra-las erratas, xa que son os sabios oficiais; pode un atopar así que unha errata dun seu traballo convirteuna un destes lacazás en verdade oficial e que o seu degaro por correxi-la sua errata convirteuna, no millor dos casos, nunha nova datación. E non falo por falar, xa que o conto sucedéume a min e inda teño que agradecerlle a este bulideiro o seu agarimo, pois recolleu coma unha miña nova datación o que non era máis que a correución dunha errata.

Estos vellos vezos tiñan, no seu orixe recente, a sua razón de sere nos dous meirandes males das vellas oposicións: o poder mangonea-los memebros dos tribunales dun lado e a irresponsabilidade de quénes exercían lixeiramente o seu oficio de membro dun tribunal, pois xuzgaban, pro se non facían responsabres dos seus xuicios, poi-lo sere sagredos, podían cambea-los dacordo co vento que tiraba. E como agora o vento é outro pro non sempre tira doutro lado, estos dous males mantéñense con todos seus acios e inda máis, pois agora é o mesmo candidato «in pectore» quen tras albiscar ben albiscada a situación elixe dous membros do tribunal e bótase ás costas o traballo de chama-los pra anunciarlles a boa nova e a irresponsabilidade é meirande, ben deitar que agora pode ser xustificada po-la autoridade competente. E coma estos males, ó parecer, oficialmente non son males, senón bés, que teñen que coidarse coma a fror máis preciosa do noso xardin da ciencia, eu non quixera que trabucaranse as miñas afermacións; eu non quero loitar contra o grandioso camiñar da historia cara ó progreso, eu quero sinxelamente loitar contra as erratas pra non encher de trabucacións a historia do dereito. Voltemos, po-lo tanto, as cousas serias, ó traballo do García.

Tomando coma base o coadro primeiro do García, onde atópanse os diferentes fatos de capítulos na forma beta, na realidade no ms. V²⁸², vou aseñar escrusivamente as correucións que deben facerse, dacordo cos criterios do García. Téñase en conta que algunhas das erratas parecen atopa-lo seu orixe no feito de que o García non dispuxo da edición do Colon na sua redacción definitiva. Neste sentido naqueles casos nos que no ms. L atópanse dous epigrafes nun capítulo, que non foi bisado po-lo Colon, eu distinguirei coas letras *a* e *b*, coma xa dixen, as diferentes partes, así por

282. GARCÍA 171-173.

exemplo no m 49, onde hai dous epígrafes: a primeira parte será o m 49a e a segunda o m 49b. Tendo en conta estos datos farei as correucións e aclaracións oportunas:

- V 5 = m 49b.
- V 33 = m 86 bis e 88a.
- V 34 = m 88b.
- V 40 = m 80 bis.
- V 41 = m 95-99.
- V 43 = m 101 bis.
- V 49 = m 106-107.
- V 52 = m 110.
- V 55 = m 113a.
- V 56 = m 113b.
- V 57 = m 114-115.
- V 58 = m 116.
- V 69 = m 127-128.
- V 225 = m 49a.

Desto xeito pódese xa resolver algunhas dudas da miña recensión: ¿onde atopábanse os cap. m 106, 107, 116 e 128 no ms V? Non atopábanse no coadro do García, pro atopábanse no fato das costumes primeiras no manuscrito V.

Ademáis dacordo co criterio das cláusulas estilísticas o V 25 = m 74 teríase que poñer no fato das «Costumes da mar segundas», da mesma maneira que o V 80 = m 140 e, probablemente o V 63 = m 121. De remate direi que na relación dos capítulos dos «usos segundos da mar» que atópanse en *m* e mancan no ms. V debe axustarse o m 286. Pra a identificación dos capítulos do fato das costumes segundas e dos «usos segundos» vexase o que direi máis adiante²⁸³.

Como xa dixen o feito de mencionar o García en postos diferentes as mesmas cousas leva consigo que as erratas medren; polo tanto eu limitareime eiquí, despóis de face-las correucións ditas, a sulñar que o coadro máis correuto, dende o prantexamento do García, e aquel onde o García ofrece o posto dos fatos das «Costumes da mar primeiras e segundas», dos «usos da mar» e das «ordean-

283. Vid. infra.

zas do curso» na redacción gamma, este é na edición do Colon^{283 bis}, inda que tense que facer tamén algunha correución.

Neste coadro o m 48 atópase no fato das «Costumes segundas», cando o García divideuno entre as «Costumes primeiras» e as «Costumes segundas»²⁸⁴; o m 49 atópase no fato dos «Usos da mar», cando o García di que o m 49a = V 225 atópase nos ditos «usos da mar» (primeiros), pro o 49b = V 5 atópase nas «Costumes primeiras da mar»²⁸⁵. A perfeución deste cuadro esprica que millorense certos silencios que atopábanse no coadro onde facíase a comparanza entre a redacción beta e a redacción gamma, isto é, entre o ms. V e a edición do Colon²⁸⁶. De remate direi que as colunas das «Costumes da mar segundas» e «usos da mar» son correutas en certo sentido, pro noutro son incorreutas, xa que se o García fora fiel a presenza das cláusulas estilísticas e a certas afirmacións os m 298, 304, (311)-328 e 329 teríanse que atopar na columna das «Costumes da mar segundas» e o m 334 na columna dos usos e, concretamente, dos «usos da mar segundos»²⁸⁷.

4. *A identificación dos diferentes fatos*

Xa sabemos que son dous os criterios utilizados pra identifica-los diferentes fatos. Neste sentido temo-lo criterio topolóxico e o criterio estilístico. Agora ben, dende o principio quero precisa-lo seu valor.

Xa o Pardessus decatárase de que as «Costumes da mar» —o consulado como decía o Pardessus— tal como chegou ate nosoutros non é unha obra feita dunha sola vez. Atópanse nas «Costumes da

283 bis. GARCÍA 174-175.

284. Vid. GARCÍA 171.

285. Vid. GARCÍA 171.

286. Correutamente poñéñse os m 106-107, 116 e 128 drento das «Costumes primeiras, pois sobor dos mesmos gardabase silencio nas equiparacións co ms. V (vid. GARCÍA 171 ss e 174).

287. GARCÍA 204-205: «Per una part, el capitols que el componen, a la forma beta són darrera del nucli α , de manera que formen un conjunt unitari. Només hi ha l'excepció dels capitols m 68, 179, 254, 291, 292, 294, 295, 297 i 334, que no són a la dita forma, i en canvi, són a la gamma. Per això denominem u_1 el conjunt de capitols d'aquest nucli, que són a totes dues formes, i u_2 aquests nou capitols, que són a la gamma però no pas a la Beta.» Eiqui manca o m 87, aseñado nas p. 173 e 176 e tampuco atópase o m 286.

mar» capítulos que proveñen dunha redacción primitiva e outros que desenrodela-nos. O Pardessus chega a afirmar que cando un lê a derradeira parte das «Costumes da mar», ó partir do m 243, te-na impresión de atoparse diante dunha obra nova, que respeta na sustancia e a voltas cos mesmos términos as disposicións recollidas nos capítulos primeiros²⁸⁸.

Esta afirmación levóume a refreusionar sobor da división establecida po-lo García con base no ms. V. Se un mira o esquema feito po-lo García, pode ver que as «ordeanzas do corso» é o texto que serve pra diferenciar craramente as dúas partes do manuscrito, onde atópanse o que o García chama as «costumes da mar» e os «usos da mar»²⁸⁹.

As «Ordeanzas do corso» é un texto que mante-na sua propia individualidade na meirande parte da tradición manuscrita e editorial, coas dudas xa ditas; o ms. V é un daqueles onde o xebre non é craro, xa que as «Ordeanzas do corso» non comenzan coma noutros manuscritos co epígrafe: «Asi parlem de les naus armades et de les galeas...» (m 298), poi-lo V 173 = m 298 di: «Capitol com deuen jurar l'almirall e el capitani e els armadors», inda que o V 187 = m 306 teña o epígrafe: «Aci començen les costumes de cos». Tense que precisar que diante do m 306 = V 187 no manuscrito valenciano atópanse os V 182-186 que cadran cos m 330-333.

É evidente que a individualidade das «Ordeanzas do corso» é o que permite face-la división do texto que atópase no ms. V. Este feito —nos conocemo-las «Ordeanzas do corso» coma un texto autónomo, conservado nunha compilación— esprica que seña doado xibra-los dous fatos de capítulos: os anteriores e os posteriores ás «Ordeanzas do corso», pro teño pra min que eiquí non atópase un criterio topolóxico; inda máis, o García acocha o problema que deixei recollido, que nace do feito de afirmar que o ms. V e xarado a redacción beta e ésta a sua volta é xarada a redacción alfa dous. Non é licito, parecemo a min, utiliza-la redacción gamma, onde as «Ordeanzas do corso» teñen unha crara individualidade, pra fixar onde comenza-nas «Ordeanzas do corso» e remata-nas «Costumes segundas da mar». E coido que a decisión e inda máis arbitraria, po-lo feito de que dos m 298, 304, (311)-328 e 329, coma reconece o

288. PARDESSUS V 18.

289. GARCÍA 171-173.

propio García²⁹⁰, onde atópase a cláusula estilística propia das «Costumes da mar primeiras» os dous primeiros cadran cos V 173 e 179, isto é, dous capítulos que atópanse entre aqueles capítulos, sin título propio, postos diante do V 187.

¿Cal é o criterio que permite o García xibra-los capítulos do fato das «Costumes da mar primeiras» dos capítulos do fato das «Costumes da mar segundas»? Eu non conozo o ms. V, pro o Josep M.^a Gay miróu por min a reprodución fotomecánica e non atopóu nos capítulos V 116-V 117, onde o García po-no remate das «Costumes da mar primeiras» —V 116— e o comenzo das «Costumes da mar segundas» —V 117— cousa algunha que permita poñer un linde. E a edición do manuscrito conferma este feito. O epígrafe do V 117 = m 183: «Item. Senyor de nau que.. » inda fai pensar ó revés.

O derradeiro capítulo deste fato das «Costumes da mar segundas» e o V 172 = m 231, pro o V 171 = m 252 recolle o número máis alto das equivalencias coa redución gamma o que atopa refrexo no feito que, despois das «ordeanzas do corso» o primeiro capítulo do fato dos «usos primeiros da mar» e o V 194 = m 253.

Cómo pódese ve-la diferencia entre o m 243 do Pardessus e o m 253 non é moi grande. Agora ben, das razóns po-las que pódese diferenciar topolóxicamente as «Costumes segundas» e as «Ordeanzas do corso» xa falamos. E tampouco hai que deterse de vagar no derradeiro xebre: úneca razón que permite face-lo é o feito de conocer onde remata-nas «Ordeanzas do corso».

O mesmo García reconece que nas «Costumes da mar primeiras» atópanse mesturados capítulos das «Costumes da mar segundas», que poden identificarse po-las cláusulas estilísticas. Isto leva-nos o lorio das mesmas, mais este feito, suliña, a meu ver, que o criterio topolóxico é un falso criterio, inda que de grande comodidá: a identificación das «Costumes da mar primeiras» e das «Costumes da mar segundas» faise dacordo coa presenza da cláusula; agora ben, coma non todo-los capítulos das «Costumes da mar segundas» teñe-na dita cláusula, este feito fai entrar en funcionamento o pseudo criterio topolóxico, pois todo-los capítulos que atópanse nos primeiros 116 capítulos, que non teñe-na cláusula dita, teñen que sere

290. GARCÍA 190-191 e 195-196, que non recolle o m 328, onde tamén atópase a clausula, que é no ms. V 192, onde atopanse os m 311-328.

das «Costumes da mar primeiras» e todo-los capítulos que atópanse dende o V 117 ate o comenzo das «Ordeanzas do curso» teñen que sere das «Costumes da mar segundas», teñan ou non teña-na cláusula. A debilidade desta decisión atópase no feito de que nesta parte atópanse capítulos si-na cláusula, po-lo que si mesturáronse os capítulos do fato das «costumes da mar primeiras» e capítulos do fato das «Costumes da mar segundas» o criterio topolóxico non permite identifica-los, pro tampouco sempre o criterio estilístico. Por iso mesmo falo dun pseudocriterio topolóxico, pois non é máis que un *deus ex machina* pra resolve-los problemas aseñados, dende o intre que no manuscrito non hai unha verdadeira diferenca chamemoslle topolóxica entre os diferentes capítulos.

As cláusulas estilísticas —na medida que poidan servir pra identificar no-no autor do capítulo, mai-lo autor da súa redacción actual— pódenos servir pra identifica-lo intre da redacción, pro no-no fato ó que pertence; a proba máis crara desto so-nos mencionados capítulos, que atópanse hoxe nas «Ordeanzas do curso»; se reconecemos que os mesmos, por tere unha cláusula estilística propia das «Costumes da mar segundas» pertencen o fato das mesmas, teremos que reconocer que as «Ordeanzas do curso» non permite-na división nos fatos ditos, xa que tendo en conta que na parte reconecida coma propia das «costumes da mar segundas» todos aqueles capítulos que nela atópanse, inda que non teñen cláusula son das «Costumes da mar segundas», teríamos que rematar que toda-las «Ordeanzas do curso», ó menos ate o V 187, pertence-nas «Costumes da mar segundas»; agora ben, se reconecemos que a dita cláusula non serve pra identifica-los coma propios das «Costumes da mar segundas», entón teríamos que dir outro tanto daqueles que atópanse entre as chamadas «Costumes da mar primeiras».

E os mesmos argumentos pódense empregar pra o fato dos «usos da mar», onde o pseudocriterio topolóxico serve pra lexitimar aqueles capítulos que non teñe-na cláusula estilística propia dos «usos da mar» e inda pra lexitimar aqueles capítulos que atopándose neste fato derradeiro teñe-na cláusula estilística das «Costumes da mar segundas».

Resumindo: o criterio topolóxico non existe, xa que non xustificouse; a presenza das «Ordeanzas do curso» e o que permite diferencia-lo manuscrito nos fatos ditos. O criterios estilístico pode

tere un valor, pro, coma veremos, ten que afinarse e precisarse. Ademáis teño pra min que confúndense dúas cousas diferentes: o momento no que nace unha norma xurídica e o momento no que nesa norma xurídica aganza a súa redacción definitiva; as cláusulas estilísticas poden servire pra identifica-lo momento da redacción, non pra identifica-lo momento do nacemento dunha norma xurídica. É importante ter en conta que todo-los manuscritos ofrecen na súa redacción un texto fixo, inda que poidan ofrecer diferencias na ordeaciós dos capítulos e no número dos capítulos. Dito con outras palabras, hai diferencias entre a redacción das «Costumes da mar» que atópanse nas «Costums de Tortosa» e entre a redacción que atópase na chamada po-lo García redacción gamma; as diferencias de redacción entre o texto do ms. V e o texto dos manuscritos da chamada redacción gamma e doutro carauter, a meu ver, inda que seña-nos lingüistas quenes teñen que falar. Agora ben, se o ms. V e xarado a redacción beta feita no período 1350-1358 e ésta e xarada a redacción alfa dous, que existe xa no 1332 e esta a súa volta é xarada a redacción alfa un, pois foi ésta a que mesturou as «Costumes primeiras e segundas da mar», poi-lo que fixo a redacción alfa dous foi axuntar ó cabo da redacción alfa un un novo fato de capítulos, os «usos primeiros da mar», teríamos que rematar que a redacción do ms. V, ó menos nos primeiros tres fatos —«Costumes primeiras da mar», «Costumes segundas da mar» e «Ordeanzas do curso»— ven do 1283, cando chegou a Valencia a redacción alfa un. Deixo ós lingüistas o dir se o texto que atópase nas «Costums de Tortosa» do 1272 é ou non coetáneo do texto que atópase no ms. V e se o texto da parte primeira do ms. V é ou non coetáneo do ofrecido po-los derradeiros capítulos, os «usos da mar» e, de remate, se o texto do ms. V é ou non coetáneo do texto do ms. L ou de calquer outro manuscrito.

E pra rematar inda temo-lo problema do fato dos «usos da mar segundos»: pra o García todos aqueles capítulos que se non atopan no ms. V, son novedás da redacción gamma e pertence-no fato dos «usos da mar segundos», inda que teña-na cláusula estilística propia dos «usos da mar primeiros». O mesmo García reconece, ó menos ó falar das «Costumes da mar segundas»²⁹¹. que a cláusula

291. GARCÍA 169-170

estilística supón que os capítulos que teñe-na pertenezan ó mesmo intre redacional; se aplicamos esta afirmación os capítulos dos «usos da mar» teríamos que reconocer que us e outros —primeiros e segundos— naceron ou por mellor dir adquiriron a súa redacción actual no mesmo intre, pro entón o ms. V non pode sere xarado o seu modelo, pois tivo que prescindir dos capítulos que hoxe atópanse no LCM. E de remate deste fato de novos capítulos ofrecidos po-la hipotética redacción gamma é o m 334, o que remata hoxe as «Ordeanzas do corso». O García unhas veces di que o m 334 é do fato dos «Usos da mar segundos» e outras veces que é do fato das «Ordeanzas do corso»²⁹². Teño pra min que o que pasa e que se non poden axeita-lo principio topolóxico e o principio estilístico.

E agora si, agora ocupémonos das ditas cláusulas estilísticas.

5. O fato das «Costumes da mar primeiras»

Aplicando o seu pseudoprincipio topolóxico pra o García este primeiro fato é aquel que atópase o principio da sección terceira do ms. V. Agora ben, o problema que presenta este fato é o feito de atoparse mesturados cos capítulos das «Costumes da mar primeiras» algús capítulos das «Costumes da mar segundas», que poden identificarse po-la súa cláusula estilística. Eu suliño dende o principio que eu faréi —co dito criterio do García— as identificacións dos ditos capítulos dentro do ms. V, cousa que non fixo o García, que empregou o testo da edición do Colon, sin decatarse que as cláusulas estilísticas nin atópanse sempre en todo-los manuscritos nin atópanse sempre nos mesmos postos nin teñen sempre a mesma redacción.

Pra o García²⁹³ o fato das costumes primeiras ocuparían os 116 primeiros capítulos das «Costumes da mar», que atópanse no ms. V. Debe terse en conta que no ms. V brincase do V 23 ó V 25, pois se non atopa nel o cap. 24 e que no coadro do García se non atopamos capítulos V 1-2, nos que atópase arredado o m 46. Pra o García este prólogo atópase xa na redacción alfa unha e naceu coas «Cos-

292. Vid. GARCÍA 174 e 204-205, inda que na mesma paxina, o face-lo elenco dos capítulos dos «usos da mar» que non teñe-na cláusula propia dos mesmos non cita o m 334, pro si o m 179.

293 GARCÍA 171-173.

tumes da mar segundas», inda que se non atope nel —ni-nos dous capítulos do ms. V— cláusula estilística algunha ²⁹⁴.

Prescindindo do prólogo e non contando o capítulo do brinco atoparíamonos po-lo tanto dentro do fato das «Costumes da mar primeiras» cento trece capítulos, dos que teñe-na cláusula con certas variantes según o García doce ²⁹⁵. Agora ben, estos doce capítulos non so-nos únecos con cláusula pois atópanse outros tres capítulos máis con ela, inda que un deles cunha cláusula estilística propia:

V 25 = m 74: «Aquest capitol fon feyt perçò que.l...».

V 63 = m 121: «E aquest capitol és axi feyt dels peregrins e dels altres homes qui vagen de un loch en altre axi com dessus ès dit».

V 80 = m 140: «Per ço fon fet aquest capitol: que.l...».

E quero eiqui cita-lo V 107 = m 169, recollido tamen po-lo García:

«Segons que en un capítol és escrit dessus, mariner no deu exir de nau sens paraula e sens volentat del senyor de la nau o sens volentat deu nauer o del scrivà o d'aquell qui romandrà en la nau qui haurà loch de comandament. El capítol qui ja desús ès dit no esclareix ni certifica ja aquella mariner de què ès tengut ni de què no qui sense paraula exirà de nau o de leny.

E per ço que entre los senyors de les naus o dels lenys (s) los mariners que ab ells hiran ni seran, n'i pusquen haver nengun contrast, los nostros antichs ante-çessors aclariren en aquest capitol de mariners qui sens paraula e sens volentat exiran de nau o de leny del senyor o del nauer o d'aquel qui tendra loch de comandament E fon feyt aquest capítol per ço car molt mariner...»

Coma pode verse a especialidá desta cláusua se non atopa na mesma cláusula, mais nos argumentos pra espricar a aclaración feita po-los antergos.

Dacordo con estos datos deben correxirse seña o coadro do García ²⁹⁶, seña algunhas das suas afirmacións ²⁹⁷, pois deben atoparse na columna segunda, reservada as «Costumes da mar segundas» V 25 = m 74; V 63 = m 121 e V 80 = m 140. Ademáis debe correxirse a

294. GARCÍA 209.

295. Vid. GARCÍA 171-172, 177, 183 (con errata m 56 por m 65), 197 Cf. 169 ss.

296. GARCÍA 171-172.

297. GARCÍA 177, 183, 197.

equivalencia do García de V 41 = m 97-98 en V 41 = m 95-98, pois é arbitrario o xebre feito po-lo García dentro do V 41.

Eu digo que o xebre feito po-lo García no V 41 é arbitrario xa que o modelo que permite identifica-los fatos e o ms. V. Neste sentido o V 41 atópase arredado na edición do Colon en cinco capítulos: m 95-99; os tres primeiros —m 95, 96, 97— non teñen cláusulas e son moi breves, po-lo que pra o García —coido eu— teñen que sere do fato das «Costumes primeiras»; o m 98 non ten cláusula estilística, pro o sere daqueles capítulos que teñen interrogaciós, tense que atopar no fato das «Costumes da mar segundas» e o m 99 te-na cláusula «E fo fet per so aquest capitol que.l...». Cando afermo que esta decisión é arbitraria non nego que poida ter razón o García, o que afermo é que a súa decisión non ten fundamento algún nos seus propios principios. E certo que o García aferma que a cláusula atópase no m 98²⁹⁸, pro eu escacharruéi moitas veces o capítulo e no-na atopéi.

Ademáis o importante é o V 41, onde baixo un mesmo capítulo —«De fer git— atópase un feixe de prescriciós sobor do problema de botar po-la borda as mercancias. Se o ms. V é o que determina a identificación destes fatos temos que respeta-lo manuscrito ou estaremos facendo coma o Valls; e o García faino, xa que o non tere cláusula o m 98, tiña que sere do fato das «costumes primeiras», po-lo pseudoprincipio topolóxico, mai-lo García po-no no fato das «Costumes segundas». E teño pra min que á decisión quizaves atópase o seu fundamento no feito de que o m 97 di: «Si nau o leyn qui gitarà roba, axì com demunt se contén, deu ésser comptat...» o que ten sentido no ms. V 41, onde todo forma unha unidade, poi-las alusiós a outro capítulo, fanse aseñando a existencia dun capítulo anterior. Pode sere que seña esta a razón, pro tería que voltar a afermar que no ms. V non hai dous capítulos, un pra os m 95-97 e outro pra os m 98-99, senon un solo e po-lo tanto todo el ten que pertenece-las «Costumes segundas da mar», pois eu non coido que o García queira admitir que, noutro caso, estaríamos diante dunha modificación do modelo: o ms. V reunen nun solo capítulo o que atopabase arredado en cinco capítulos na hipotética redución alfa dous, coma o demostraría a conservación desa orixinaria división na non menos hipotética redución gamma.

²⁹⁸ GARCÍA 195.

De remate direi que inda que poida discutirse sobor do V 63 = m 121, é evidente que ten unha cláusula que debe terse en conta. Eu non digo que serva a mesma pra identifica-las «Costumes da mar segundas», digo somente que o V 63 ten unha cláusula estilística.

Temos así quince capítulos con cláusula sobor dun total de 113, o que quere dir que un 13,27 % dos capítulos que atópanse no manuscrito V drento do fato das «Costumes da mar primeiras» son das «Costumes da mar segundas» ou, pra non provocar trabucaciós, teñen cláusulas estilísticas.

6. *O fato das Costumes da mar segundas*

Pra o García este novo fato vai dende o capítulo V 117 ate o V 172²⁹⁹. Como xa dixen non hai razón algunha —ou po-lo menos o García no-na da— pra facer esta división³⁰⁰. Este fato ten po-lo tanto cincuenta e seis capítulos, que pertence-no dito fato das «Costumes da mar segundos».

A cláusula propia deste fato, deixando a un lado as variantes, atópanse en vinteun capítulos do ms. V. Tamén eiquí voume a reenviala enumeración dos mesmos feita po-lo García³⁰¹, chamando a atención escrusivamente sobor das correuciós que deben facerse.

V 119 = m 184-185.

V 133 = m 200-202.

V 161 = m 238.

Ademáis deben escriuirse da enumeración do García:

V 170 = m 251.

V 173 = m 298.

V 179 = m 304.

V 192 = m 311-328, inda que o García non cite este capítulo.

V 193 = m 329.

299. GARCÍA 172.

300. A edición do Ferrando da a división dos folios, pro a suas novas non son moi craras; o cap. V 117 atópase no fol. 34 R, que ó parecer comenza co V 112; ó rematar o V 117 atópase o epígrafe de V 118 e as tres primeiras liñas do testo impreso, onde indicase o comenzo do folio 34 verso. O V 172 parece ocupar todo o verso do folio 51, poi-la aseñación do folio atópase no epígrafe do capítulo e tamen no epígrafe do capítulo V 173, onde comenza-nas «ordeanzas do corso» atópase a aseñación do folio 52.

301. GARCÍA 195.

Comencemos por estas derradeiras correucións. Os catro derradeiros capítulos —V 173, 179, 192 e 193— atópanse no fato das «Ordeanzas do corso»; isto é, teñe-na cláusula estilística propia das «Costumes da mar segundas», pro o García po-nas no fato das «Ordeanzas do corso»³⁰².

O V 170 = 251 pode sere que seña unha trabucació por V 121 = m 252, onde atoparíase a cláusula do fato dos «usos da mar»³⁰³. Agora ben o V 171 = m 252 te-na cláusula dos «usos da mar» na edición do Colon, pro non no ms. V, coma demostra a edición do Ferrando e a edición do Colon³⁰⁴. O m 251 péchase coa cláusula: «E fo fet per so aquest capitol», que é a dos «usos da mar» tamén, pro dita cláusula se non atopa no ms. V, según as dúas edicións citadas. Ademáis o García po-no m 251 = V 170 dentro do fato das «Costumes da mar segundas»³⁰⁵.

Nos dous casos, seña no V 170 seña no V 171, o que é certo e que no ms. V ningún dos dous capítulos teñen cláusula algunha. Vexamos agora os outros tres capítulos.

O V 161 = m 238 te-na cláusula dita, como testemuña-nas dúas edicións. Máis problemáticos so-nos outros dous capítulos.

No V 119 atópanse dous capítulos da edición do Colon: os m 184-185 o que esprica o feito de que no V 119 atópense dúas cláusulas: «E fon feyt aquest capitol, car molt senyor de nau o de leny fa de paraula la sua nau o.l seu leny major lo terç o.l quart que no serà», que é a que pecha o m 184 e o primeiro párrafo do V 119. Atópase aínda outra cláusula: «E fon feyt aquest capitol per aquella rahó que.s compta en aquell capitol que dit és dessus», que fecha o m 185 c o segundo párrafo do V 119³⁰⁶.

302. Vid. os cadros do García —GARCÍA 172 e 175 pra os m 298, 304 (311)— 328 e 329, que veñen sendo os V 173, 179, 192 e 193.

303. Vid. GARCÍA 175 e 205.

304. Vid. m 252 n. 192. Non fago estas citas por prurito erudito, mais por outras razóns máis fondas; como podrá verse un pouco máis adiante a edición do Ferrando non é moi de fiar e os defectos da do Colon xa os señalei no seu intre.

305. GARCÍA 172 e 175.

306. Vid. GARCÍA 175, onde po-nos m 184-185 no fato das «Costumes segundas», pro o falar do fato das costumes segundas, daquelas que teñena cláusula estilística cita somente o m 185, inda que o falar dos «capítols sencers que componen aquest nucli c 2» torna a menciona-los dous capítulos, xa que aseña os m 183-198 (GARCÍA 195).

Este feito é, a meu ver, importante, pois amosa unha nova modificación do ms. V, xa que é evidente que a cita derradeira da derradeira cláusula suliña que o primeiro párrafo do actual V 119 era un capítulo independente.

O V 133 recolle tres capítulos da edición do Colon: m 200, m 201 e m 202. O primeiro párrafo do V 133, que non ten cláusula cadra co m 200; os párrafos 2.º, 3.º e 4.º do V 133 cadran co m 201, féchanse coa cláusula: «E aquest capitol fon feyt per ço que dessus es dit». Os párrafos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º no V 133 cadran co m 202 e féchanse coa cláusula: «E fon feyt perçò aquest capitol, que cas-cun...»³⁰⁷. Estamos po-lo tanto tamén eiquí no mesmo caso anterior.

De remate quero aseñar, xa por outras razóns, o V 159 = m 235, que te-na cláusula: «E fon feyt aquest capitol per ço car...», pro onde atópase tamen un párrafo xa conocido:

«E los nostres antecessors qui primers començaren a anar per lo món, vegeren e conegueren que aquell dan que entre los mercaders e els senyors de les naus proia ésser que fos mes en coneguda e en egualtat per los bons hòmes de la mar, per ço que negun no sap ni pot saber he aquel destrich ne aquell empayment si serà per son pro u per son dan. Per que és bona la cominalea e la egualtat, o.l temprament de bons homes. E fon feyt aquest capitol ...»

E tamen quero adiantar algo sobor do que tornarei. A cláusula derradeira do V 119 é: «E fon feyt aquest capital per aquella rahò que.s compta en aquell capitol que dit és dessus».

A cláusula intermedia do V 133 é: «E aquest capitol fon feyt per ço que dessus es dit».

E o V 168 remata coa cláusula : «E per aquesta rahò matexa fon feyt aquest capitol».

Tendo en conta as cláusulas que atópanse nos 56 capítulos —conto coma un capítulo e po-lo tanto unha sola cláusula os V 119 e V 133, pois neste manuscrito atópanse cada un deles coma un solo capítulo— teríamos vinteun capítulos con cláusula o que faría atopar un 37,50 % de capítulos coa cláusula; agora ben, se nos fixamos no coadro do García vemos que dende o V 145 é cando comen-

307. Teño pra min que unha trabucación nas fichas foi o que fixo que o García dixera que o m 201-202 «a la forma beta són al nucli u» —GARCÍA 205—, pois correutamente, o ser equivalentes do V 133, atópanse no fato das «costumes da mar segundas »nos coadros —vid. GARCÍA 172 e 175.

zan a aparecer de maneira xeneralizada os capítulos con cláusula; neste sentido nos primeiros vinteoito capítulos —V 117-144— atópanse somente seis capítulos coa cláusula entramentres nos derradeiros vinteoito capítulos —V 145-172— atópanse quince capítulos coa cláusula. Teríamos po-lo tanto que na primeira metade hai un 21,42 % de capítulos coa cláusula do fato das costumes segundas —que non está moi lonxe do 13,37 % dito— e na segunda metade un 53,57 % de capítulos con dita cláusula.

Se fago estos número é por unha razón moi sinxela: teño pra min que os mesmos serven aínda máis pra sulíñala arbitraria decisión do García; coido que mentras non haxa unha fundamentación máis forte da decisión, sería teóricamente máis axustado comenza-lo fato das costumes segundas no V 144. Esta decisión te-na sua importancia, xa que entón todo-los capítulos ate o V 144, que non tivera-na cláusula das «Costumes segundas» conviríanse en capítulos do fato das «Costumes primeiras da mar».

O García aferma que «la *c-1* sembla la part originaria de *c*. Es determinada per tots aquells capitols que regulen les relacions entre el patró, o senyor, del vaixell i els constructors, els mercaders o noliejadors, els pelegrins o passatgers i els mariners. El segon pròleg de la rúbrica 27 del llibre 9 de la CT diu que aquest era el contingut de les Costumes i usances de mar, i ho repeteix també el pròleg mateix de *c*. El criteri, doncs, és clarament documentat per dues fonts diverses»³⁰⁸, pro esto non ten ren que ver nin co criterio topolòxico ni co criterio estilístico³⁰⁹. E o V 117 te-no epígrafe «Ítem senyor de nau qui noliejarà a escar» e destós problemas xurídicos ocupanse os seguintes capítulos.

7. *O fato dos «Usos da mar primeiros e segundos»*

O García, falando do fato dos «Usos da mar» ofrece diversas enumeración. Primeiro cita os capítulos que se non atopan na hipotética redacción beta, isto é, no ms. V, pro si na redacción gamma, isto é, na edición do Colon; este fato de capítulos formamos chamados po-lo García «usos da mar segundos»; despóis cita

308. GARCÍA 169.

309. Vid. GARCÍA 182, onde aferma o respeito ó principio topolòxico e ó principio estilístico.

os capítulos que teñe-na cláusula dos «usos da mar» na edición do Colon e despóilos que no-na teñen na mesma edición e pra rematar fai unha confusa afirmación:

«Aquesta fórmula d'estil confirma la identificació dels capítols del nucli *u-1*, quan són dislocats i intercalats dins els nuclis anteriors *c-1* i *c-2*, cas en que es troben els m. . tots els quals a la forma beta són al nucli *u*, i molts porten la fórmula esmentada. En canvi, a la gamma són intercalats entre els dels nuclis *c-1* i *c-2*»³¹⁰.

E digo confusa, pois se a presenza da cláusula estilística serve pra confermar-la pertencencia ó fato dos «usos da mar» daqueles capítulos que tene-na e atópanse na redacción gamma mesturados cos capítulos das «costumes da mar primeiras e segundas» ¿pode un entón dudar do criterio topolóxico cando os capítulos do fato dos «usos da mar» que atópanse mesturados cos capítulos dos fatos ditos na redacción gamma non teñe-na dita cláusula? ¿É ou non o criterio topolóxico o decisivo? Eu quero eiqui suliña-lo feito que o criterio topolóxico e o criterio estilístico non teñen por qué andar dacordo, se o criterio estilístico serve pra correxi-lo criterio topolóxico; pro se o criterio estilístico servira solo pra confermar-lo criterio topolóxico, sería ben pouca a súa utilidade, xa que a identificación dos capítulos do fato dos «usos da mar primeiros» sólo podería facerse po-lo posto que teñen no ms. V, ó non tere todos ditos capítulos a cláusula de estilo, e a identificación dos capítulos do fato dos «usos da mar segundos» solo podería facerse po-lo feito de se non atopa-los mesmos no ms. V, xa que tampouco todos os capítulos deste novo fato teñe-na cláusula de estilo.

Resumindo: ou a cláusula estilística non ten utilidade pra identificar, se é o criterio topolóxico o que determina o posto dos capítulos dentro dos-fatos, ou a cláusula estilística serve pra a identificación do fato onde teñen que atoparse os capítulos, e entón non pode afirmarse que o criterio topolóxico ten que te-la primacía. Inda que tornaréi sobor do lero lembraréi o problema dos capítulos das «Ordeanzas do curso» xa citados: m 298, 304, (311)-328, 329 e 334. O criterio topolóxico nos catro primeiros obrigan ó García a poñe-los no fato das «Ordeanzas do curso», inda que a cláusula estilística que teñen levaríalle a poñe-los no fato das «Costumes

310. GARCÍA 205.

segundas da mar». ¿Por qué neste caso o criterio estilístico non serve pra correxi-lo criterio topolóxico coma sucede no fato das «costumes da mar primeiras», onde identifícanse os capítulos mesturados das «costumes da mar segundas» po-la cláusula estilística? Inda máis artificial é o posto dado po-lo García o m 334: non atópase no ms. V e por definición ten que sere do fato dos «Usos da mar segundos». ¿Por qué o García pon este capítulo —non así por exemplo o m 179— no fato das «Ordeanzas do curso? Porque neste fato, coido eu, atópase na redacción gamma, pro esta redacción gamma mestura todo-los capítulos! O que quero facer ver con estas refreusións é que no fondo o respecto do García ós manuscritos non é meirande co que tiña o Valls.

Tamén eiquí o García pra identifica-lo fato dos «usos da mar» emprega a edición do Colon e non, como teño pra min que debería facer, o ms. V. Ademáis, o que amosaria no fondo que non hai diferencias entre o fato dos «usos da mar primeiros» e o fato dos «usos da mar segundos», despóis de identifica-lo derradeiro fato, po-no xunto co primeiro nas suas grandes clasificacións: a) capítulos coa cláusula e b) capítulos si-na cláusula. Coido que tampouco eiquí a decisión do García é correuta, xa que o ms. V, aquel que sérvenos pra identifica-lo fato dos «usos da mar primeiros» é aquel que no fondo permétonos identifica-lo fato dos «usos da mar segundos», po-lo que na sua identificación a presenza ou a ausencia da cláusula non ten importancia algunha; o decisivo é que os ditos capítulos se non atopen no ms. V.

Tendo en conta esto as correucións que deben facerse so-nas seguintes, que nalgús casos poden facerse acodindo o mesmo García ³¹¹.

Os capítulos dos «usos da mar segundos» son: m 68, m 87, m 179, m 254, m 286, m 291, m 292, m 294, m 295, m 297 e m 334, onde á enumeración do García deben axustarse, como queda dito, o m 87 e o m 286 ³¹².

311. Cf. GARCÍA 173 e 174-175 e GARCÍA 205.

312. GARCÍA 205, cf. GARCÍA 173, 176, onde atópanse entre os capítulos dos «usos da mar segundos» (vid. tamen p. 158-159) o m 87 e na mesma páxina citada —a p. 205— cítase o m 87 coma capítulo sin cláusula e o m 286 coma capítulo con cláusula, inda que se non suliñe a sua pertencencia o fato dos usos da mar segundos.

O silencio sobor do ms. 286 pódese espricar por trabucación, pois atópase citado xenericamente coma un capítulo con cláusula do fato dos «usos da mar», po-lo tanto sin aseña-lo ós primeiros ou ós segundos. O silencio sobor do m 87, errata evidente, pois citase po-lo García noutras ocasións coma un capítulo do fatos dos «usos da mar segundos» prantexa outro problema, que xa apuntéi: ¿pertenece á hipotética redución gamma?

Tendo presente esta enumeración do García, os ditos capítulos terían que escriurese dos dous apartados seguintes, onde o García po-nos capítulos con e sin cláusula do fato dos «usos da mar primeiros». De todas maneiras diréi que destes once capítulos catro non teñen cláusula algunha (m 68, 87, 179 e 334), po-lo que é evidente que a súa incrusión dentro do fato dos «usos da mar segundos» débese samente o feito de se non atopar no ms. V, e teña-na sete: seis na meirande parte dos manuscritos [m 254, 286, 292 (manca no ms. C), 294, 295 (manca no ms. C), 297] e un nun solo manuscrito, no ms. C (m. 291).

Pasemos agora as correucións. Na enumeración dos capítulos con cláusula teñen que axustarse os m 94 = V 239 e o m 248 = V 218, que se non atopan recollidos po-lo García, inda que no seu cuadro atópanse coma capítulos do fato dos usos da mar³¹³. Do fatos dos «usos da mar» sin cláusula do García teñen que pasarse ó fato dos «usos da mar» con cláusula os seguintes capítulos: m 49a = V 225; m 144 = V 212; m 276 = 226; m 278 = V 229. E pra rematar deste fato de capítulos con cláusulas deben escriurese os cap. m 201-202, pois co m 200 forma-no V 133 e atópanse po-lo tanto no fato das «Costumes da mar segundas»³¹⁴ e débense pasar ó fato dos capítulos dos «usos da mar» sin cláusula os cap. V 238 = m 89 e V 213 = m 265, xa que no ms. valenciano os mesmos non teñen cláusula, inda que a mesma atópase noutros manuscritos.

E inda tense que facerse unha acración. O m 260 = V 203 te-na cláusula estilística, pro a propia do fato das «Costumes da mar segundas» e no-na do fato dos «usos da mar».

As correucións na enumeración dos capítulos sin cláusula aparentemente esta feita: debense pasa-lo fato dos capítulos con cláusula os m 49a, 144, 276 e 278 e deben incorporarse nesta enumera-

313. Vid. GARCÍA 205 e 174-175.

314. Cf. GARCÍA 205 e 172 e 175.

ción de capítulos sin cláusula do fato dos capítulos con cláusula os m 89 e m 265. Pero ademáis deben achegarse dous novos capítulos, os m 111 = V 207 e o m 253 = m 194³¹⁵, que o García non recolléu³¹⁶.

Pra rematar diréi que o García pon entre os capítulos que teñen cláusula o m 56 = V 241³¹⁷. Agora ben, na edición do Ferrando se non atopa a cláusula, inda que o Colon na sua edición da variantes desta cláusula do ms. V. O Josep M.^a Gay miróu por min a reprodución fotomecánica do ms. V e confirmóume que nela áchase a dita cláusula, inda que a edición do Colon non recolle toda-las variantes da mesma³¹⁸.

Suliño de novo que eu limitéime eiquí o examen dos capítulos do fato dos «usos da mar primeiros», pois so-nos únecos que atópanse no ms. V, que é o que permite estabrece-los fatos de capítulos, inda que dexei recollidos xa os capítulos do fatos dos «usos da mar segundos» e as suas características.

Tamén eiqui temos que a cláusula atópase a miudo, pro non sempre e entón o posto dos capítulos no ms. V xoga o seu papel milagreiro. Neste sentido tampouco hai no manuscrito, ó parecer, cousa algunha que permetanos afermar que co V 193 (=m 329) remata o fato das «Ordeanzas do corso» e co V 194 (=m 253) comenza o fato dos «usos da mar». Tamén eiquí, teño pra min, o conocemento que tense das «Ordeanzas do corso» permite face-la división.

Eu quixera suliñar que os primeiros capítulos do fato dos «usos da mar» no manuscrito V non teñen cláusula algunha; dende o V 194 (=m 253) ate o V 202 (=m 259) se non atopa nengún capítulo que teña a dita cláusula dos «usos da mar». É certo que o m 253 te-na cláusula, pro no-no seu equivalente o V 194. O primeiro capítulo da parte derradeira do ms. V que te-na cláusula é o V 203 = m 260: «E fon feyt per ço aquest capitol, que a...», cláusula que non é a propia do fato dos «usos da mar», mais do fato das «Costumes da mar segundas». Os capítulos V 204-207 tornan

315.—Vid. GARCÍA 173 e 175.

316. Vid. GARCÍA 205, onde se non recolle.

317. GARCÍA 205.

318. Tampouco e moi de fia-la tradución do Ferrando, xa que parece depender máis da tradución do Capmany que do testō do ms. V.

a atoparse sin cláusula, que comenza a aparecer, de maneira xeneralizada, inda que non sempre, ó partir do V 209, xa que o V 208 ten unha cláusula, pro con características especiais, coma veremos.

Xa que no equivalente do m 252, o V 170, non atópase a cláusula «E per les rahons dessus dites, fo fet aquest capítol», propia dos «Usos da mar», no-no tomo en consideración, cousa que fai o García, decindo «Curiosament, aquesta fórmula també és inclosa al capítol m 252 que a gamma és l'últim, i a beta és el penúltim del nucli c-2»³¹⁹, inda que pra min o feito é algo máis que curioso, pro citaréi o V 168 = m 249, que remata «E per aquesta raho matexa fon feyt aquest capítol», inda que o García, non sei por qué razón, po-no entre os capítulos que teñe-na cláusula propia do fato das «Costumes da mar segundas»³²⁰, poi-lo m 249 remata así: «E per aquesta rahó fo fet aquest capítol» e por remata-lo capítulo non ven despóis a *ratio legis*, que caracteriza a cláusula dos capítulos do fato das «Costumes da mar segundas».

Agora ben, deixando esta aparición esporádica destes capítulos fora do seu posto —un coa cláusula das «costumes segundas» no fato dos «usos da mar» —o V 203— e outro coa cláusula dos «Usos da mar» no fato das Costumes da mar segundas» —o V 168— é evidente que regularmente, en especial dende o V 145 atópase nesta parte do ms. V, aquela que o García adica ó fato das «costumes segundas da mar», aquela cláusula que o García considera enxebre deste fato: «E fo fet perço aquest capítol, seguida de l'exposició d'allò que podriem dir-ne la *ratio legis* del mateix»³²¹. E esta cláusula atópase no V 173 = m 298, no V 179 = m 304, no V 192 = m 311-328 e no V 193 = m 329. E eiquí quero suliñar samente que no V 192, que te-na cláusula dita, atópanse recollidos dezaoitos capítulos da edición do Colon: m 311-328, onde no m 328 é onde atópase a cláusula. Po-lo tanto sobor dos vinteun capítulos que atópanse no ms. V, que pertenece-nas «Ordeanzas do curso» atópanse catro coa cláusula, o que quere dir que hai un 19,04 % dos mesmos.

O García di «Altra cosa es pot dit d'aquesta clàssica tricotomia, observada en les parts c i u, ja que l'una i l'altra són molt ben separades a la forma Beta; i la c a la dita forma, i fins i tot a la gamma,

319. GARCÍA 205.

320. GARCÍA 195.

321. GARCÍA 195

és clarament divisible en dues parts, que denominem *c 1* i *c 2*», amece que as «Costumes da mar primeiras» semellan se-la parte orixinaria das «Costumes da mar» e determínase po-la materia que regran; o resto das «Costumes da mar», tal coma atópanse na redacción beta, esto é, no ms. V pertencen po-lo tanto as «Costumes da mar segundas», onde atópase a miudo unha cláusula estilística³²².

Tornando sobor do mesmo argumento o García critica os esforzos do Valls, inda que suliña que «la seva tricotomía dels nuclis *c* i *u*, tal com hem vist a la part anterior, és plenament confirmada per la forma beta de la compilació»; pro pra evita-los mesmos erros di o seguinte, que recollo de fio en fondo:

«1er. El criteri primordial, consistent en situar cada capítol en el nucli i fins i tot en el lloc que el situa la forma Beta, que és la que dóna l'orde tradicional del capitulat del LCM.

2.on. El criteri de confirmació que consisteix en fer servir les formules d'estil de cada capítol que són constants a cada nucli. Això ens permet, en primer lloc, confirmar la situación del capítol en el seu nucli, establerta segons el criteri anterior, i en segon lloc, identificar els capítols dislocats. Normalment, un criteri i l'altre coincideixen exactamente. Només hi ha uns pocs casos... en els quals llurs dislocacions provenen ja de la forma alfa. Per tant, no hi ha, dins la tradició manuscrita actualment coneguda, cap altre criteri d'identificació, fora de les fórmules d'estil És per això que aquest criteri confirmatori té un valor certament excepcional, per a la ratificació i correcció del criteri primordial»³²³.

Eu quixera precisar que unha cousa e confermar e outra correxir; se o criterio estilístico serve pra confermar-lo criterio topolóxico, entón hai un respeito ó ms. V, pro o criterio estilístico non serve de moito; se o criterio estilístico serve pra correxi-lo criterio topolóxico, entón o criterio topolóxico perde a sua importancia e perde tamen a sua forza. Teño pra min que o García xoga cos dous criterios segun as suas necesidades.

Eu xa dixen que o García fai o fundamental xebre po-lo posto ocupado po-las «Ordeanzas do curso»: estas serven pra distingui-lo fato das «Costumes da mar» e o fato dos «Usos da mar», pro este

322. GARCÍA 169. Cf. tamen p. 195, que xa recollín. Vid supra no. 308 e n. 321.

323. GARCÍA 182-183.

xebre non te-no seu apoio no manuscrito V, mais nos outros manuscritos. Quero dir con esto, que se o manuscrito V realmente ofrece o orden orixinario da compilación, xa que no fondo remontase á redacción alfa un, o que hai que preguntarse e se o que *hoax* chamamos «Ordeanzas do curso» formaban ou non parte orixinariamente das «Costumes da mar segundas». O mesmo García aferma que foi a redacción gamma a que fai os cambios³²⁴; e certo que o García fala somente dos fatos das «Costumes da mar» e do fato dos «Usos da mar», pro o que tamén é evidente e que nesta hipotética redacción gamma os capítulos das «Ordeanzas do curso» non somente puxéronse ó remate da mesma, pois tamen sufriron unha reordeación: os V 182-186 = m 330-333 puxéronse ó remate e completáronse cun novo capítulo —o m 334— e o mesmo fato divídese en dous fatos, cada un deles co seu propio título, pra non mencionar outros feitos coma a división do V 192 nos m 311-328 e a incorporación dalgún que outro párrafo e incluso capítulo, pra o caso de tomar o ms. L coma testemuño desta nova redacción gamma³²⁵.

Tendo en conta esto o García atópase cun problema que é evidente e que quedou aseñado: coas características ditas —e penso que esta división é artificial— o García fai comenza-lo fato das «Costumes da mar segundas» no V 117 = m 183, onde comencan a atoparse case sempre os capítulos coa cláusula das «costumes da mar segundas»³²⁶, pro esta aparición se non deten no V 173 (=m 298), onde hoxe faise comenza-las «Ordeanzas do curso», xa que dos vinteun capítulos hai catro que teñe-na e neste sentido o derradeiro capítulo que a ten dentro do ms. V é o V 203 = m 260, que atópase no fato dos «usos da mar», tendo ademáis en conta que os demais capítulos, ate chegar ó mesmo V 203 non teñen cláusula, deixando de lado os xa aseñados

E po-lo momento eu insisto somente neste punto: non paréceme

324. GARCÍA 176.

325 Vid. m 330 (cont.).

326. Eu xa dixen que non vexo que no m 117 comence unha materia que non poida acollerse na presunta materia regrada po-las costumes primeiras da mar e ademáis o criterio material e o criterio formal —cales son as materias regradas e se as normas acrarian ou non outras anteriores— no so-no criterio topolóxico.

lícito emprega-los datos da hipotética redacción gamma —a identificación das «ordeanzas do curso», que reorganizou pra o García «orden orixinario, que atópase no ms. Valenciano—, pra xiba-los fatos das «Costumes da mar» e dos «usos da mar», pois vense xa a afermar sin proba algunha que no ms. V as «Ordeanzas do curso» tiña a mesma individualidade que na redacción gamma. Quero de novo lembrar que no ms. V atópase un sólo epígrafe, no V 187 = m 306: «Aci començen les costumes de cos».

8. *Conclusións*

Quixera suliñar que a miña teima fundamental non é tanto dir coma sucedero-nas cousas nin tampouco negar que o García poida ter razón, coma facer ve-los puntos febles da teoría do García, pois coido que se puideranse conferma-las suas afirmacións, teríamos unha nova visión da formación do dereito marítimo mercantil. Por iso mesmo quero eiquí, más que conclusións, facer algunhas reflexións denovamente sobor destes puntos febles.

a) O criterio do García de identificación das cláusulas estilísticas no LCM: Non vou tornar sobor do feito de que o García non emprega o ms. V pra identifica-las cláusulas, manuscrito que é o que permitelle identifica-los diferentes fatos de capítulos. Ademais o García non fai un examen dos diferentes manuscritos, pra poder decidir se a aparición de dita cláusula é ou non orixinaria; no fondo o García emprega a edición do Colon e po-lo tanto o ms. L; pro se o ms. V, máis novo que o ms. L, é o que conte-no orden orixinario, teño pra min que tería que ter tamén o testo orixinario, e neste sentido a aparición ou ausencia das cláusulas tería que regrarse po-lo manuscrito V e non por outros manuscritos. Xa quedaron algúns exemplos de capítulos con cláusulas, onde a mesma podía aparecer na meirande parte dos manuscritos ou ben podía aparecer samente en un manuscrito. Eiquí quero facer samente referencia o problema no ms. V.

Como xa lembréi coido que non poden poñerse coma testemuño de capítulos con cláusula, se nos movemos dentro da orbita do ms. V os capítulos V 238 = m 89; V 213 = m 265; V 170 = m 251 e V 171 = m 252, pois no ms. V se non atopa a cláusula.

b) O criterio do García de identificación das cláusulas estilís-

ticas nos capítulos: Esta ausencia de criterios no intre de determinar cando unha cláusula atópase e cando non (lembraréi o dito xa ó falar dos «usos da mar segundos») lévanos a outro problema. O García enumera unha froulareda de capítulos onde atópanse as diferentes cláusulas, pro non ten en conta que hai certos capítulos nos manuscritos onde non hai unha sola cláusula, pois atópanse máis dunha. Eu eiquí limítome denovamente o ms. V, xa que é éste o que permite a identificación dos diferentes fatos.

O V 119 reúne nun solo capítulo dous da edición do Colon: m 184-185, cada un dos cales te-na sua propia cláusula³²⁷. Coido que eiquí temos o testemuño dunha, inda que seña pequena, infidelidade do ms. V ó seu presunto modelo³²⁸.

Inda que tornaréi sobor do argumento, téñase en conta que a primeira cláusula é craramente das «Costumes da mar segundas» mentras a segunda pode dar lugar a discusiós, xa que zarra o capítulo e puidera matinarse que é a propia dos «Usos da mar». E ademáis seña cal seña o posto da cláusula, teríamos eiquí axuntados dous capítulos, sendo o segundo unha acración do primeiro e sendo o primeiro do fato das «Costumes segundas». Isto é importante, xa que determina as ideas que poidamos ter sobor da maneira de facerse as «Costumes da mar»: teño pra min que o García afigúrase que na alfa dous fóronse axuntando, ó nacer, os capítulos dos «usos da mar», que víñanse facendo; eu matino que as «costumes da mar», coma as conocemos hoxe, inda que os seus capítulos naceron ó longo do tempo, recolléronse todos eles en intres determinados; e inda que matinemos como matina o García, que hai diferentes compilaciós, temos que reconocer que o fato dos «usos da mar» tiveron que axuntarse por alguén, nun intre concreto, po-lo que pódese pensar xa que os mesmos tiveron que sufrir unha certa reordeación e non axuntaronse simplemente na parte derradeira.

327. Vid. supra n. 306. A primeira parte do V 119=m 184 remata: «E fon feyt aquest capítol, car molt senyor de nau o de leny fa de paraula la sua nau o.l seu leny major lo terç o.l quart que no serà», mentras a segunda parte do V 119=m 185 remata: «E fon feyt aquest capítol per aquella rahó que.s compta en aquella capítol que dit és dessús», onde faise referencia o párrafo primeiro do V 119, esto é o m 184.

328. E quero precisar que penso nunha infidelidade no testo das «Costumes da mar», po-lo que non penso nunha compilación.

Outro tanto podería dirse do V 133 = m 200-202. Tamén temos eiquí un capítulo onde atópanse recollidos os tres capítulos da edición do Colon; quero sulñar que a primeira parte do V 133, que cadra co m 200, regra, ó parecer po-la primeira vez, os problemas do amarre dos barcos; non ten cláusula algunha; a parte central do V 133, que cadra co m 202, péchase coa cláusula «E aquest capitol fon feyt per ço que dessus es dit», onde, sulño, non atópase ningunha «ratio legis» e a parte derradeira do V 133, péchase coa cláusula «E fon feyt perço aquest capitol, que cascu...»³²⁹.

Agora ben, eiquí hai outro problema, xa que mentras m 201 comenza «Nau o leny...» o párrafo correspondente no V 133 di: «Encara...» e eu quero lembrar eiquí que esta técnica ou pode facer dos «Encara...» inicios de capítulos ou ben pode servir pra arrecadar diversos párrafos que comencen «Encara...» nun mesmo capítulo: así por exemplo ó V 48, que ocupase dos feireantes segue o V 49 que comenza «Encara» e onde atópase outro párrafo que comenza «encara més», do V 50, que comenza «Encara» e do V 51 «Encara», onde atópase outro párrafo que comenza tamén «Encara». Quero sulñar con esto que moitas veces as diferencias entre os capítulos breves e os capítulos estensos pode ser artificial, e índa máis teño pra min que o dito feito fai difícil decidir se o V 133 reunéu dous capítulos ou tres. Pro non son estos problemas o que eu podo eiquí resolver, xa que chamo a atención sobor dos mesmos seña pra sulñar que eiquí tamén hai unha pequena infidelidade seña pra sulñar que no García se non atopa resposta.

E precisamente por eso vou rematar cun capítulo, que atópase na edición do Colon, o m 144, pro que tamen atópase no V 212. Eiquí atopámonos diante dun capítulo, que amósase como tal tanto na edición do Colon coma no ms. Valenciano, pro que tamen ten dúas cláusulas.

No ms. V o cap. 212 te-no epígrafe «Senyor de nau ha de donar a menjar als mariners si pledeja ab ells», epígrafe que atópase no m 143: «Senyor de nau deu donar a manjar als mariners, si ab eyl pledejaran», que cadra co V 83: «Com deu donar a manjar als mariners senyor de nau», mentras o m 144, que é o equivalente do V 212 non ten epígrafe na edición do Colon, inda que a parte derra-

329. .Vid supra n. 307.

deira do m 143 di: «Esmena de senyor de nau com és tengut de donar a manjar als mariners qui pladejan ab eyl».

A nota do Colon, que atópase o remate do epígrafe do m 143 = V 83 e confusa, xa que di: «Aquest titol de capitol és indicat, ultra al text bàsic L, als manuscrits DV i N, mentre que FPAU non duen cap indicació de nou capitol i fan del text que segueix la continuación de m 142», xa que no ms. V 83 o título é diferente. O que é certo é que m 143 do ms. N te-no epígrafe «Senyor de nau es tengut de dar á menjar à mariners, si ab ell pledeiaran» e o m 144: «Esmena que senyor de nau es tengut de dar a menjar á mariners» e outro tanto, pouco máis ou menos, sucede no ms. D. Teño pra min, po-lo tanto, que a parte derradeira do m 143 na edición do Colon é o título do m 144 no ms. L.

No seu testo dise que o capítulo m 144 naceu pra correxi-lo m 143, pois «per so com en lo capitol dessus dit no esclareix, poria tornar a gran dan als senyors de les naus e dels lenys; per la rahó dessus dita, los bons homès qui aquests establiments o costumes faéran, veéran e conaguéran que gran dan se'n poguera seguir. E per so, sobre alguns capítulos que no son ben clars, eyls faéran esmenas, per so que dan ne trabayl no se'n pusca seguir. E sobre lo capitol dessus dit, dien e declaren que los senyors de la nau o dels leyens són tenguts...» e continua recollendo a corrección. As frases recollidas traen a memoria as afirmacións que atópanse seña no prólogo das «Costums de Tortosa» seña no m 46.

E despóis das correccións ve-na conclusión: «E per les rahons dessus dites, faéran aquesta esmena e aquest declarament los antichs qui primerament anaren per lo mon», pro non remata eiquí o capítulo, pois asomade ven unha pregunta: «Per què? per so cor...» espricandose as causas da decisión e remata esta nova parte: «E per esta manera los nostr(e)s antichs antassasors volgren declarar los casses e les rahons per que los senyors de les naus o dels leyens fossen tenguts de donar a manjar als mariners qui ab eyls pladajaran... E per les rahons dessus dites fo fet aquest capitol». Pro tampoco remata eiquí o capítulo, pois continua: «E si mariner alcú metra lo senyor de la nau o de leny en plet...», pro esta volta o capítulo remata sin cláusula algunha. Agora ben, alí onde atópase a cláusula segunda, atópase no ms. P un novo título: «Esmana com

és tengut senyor de nau dar a manyar als mariners qui ab ell pladeyen».

Eu non devezoo, non conocendo os manuscritos, resolver estos problemas; chamo a atención sobor deles, xa que matino que teñen que atoparse unha resposta os mesmos, antes de afermar sin máis que o ms. V conserva a redacción orixinaria das «Costumes da mar», aquela que remontase, deixando a un lado o fato dos «usos da mar», ó 1283.

c) As cláusulas estilísticas identificadas po-lo García: E hai outro problema: ate agora falamos de duas cláusulas, aínda que xa quedaron recollidas algús testemuños que amosan que atopanse outras, non mencionadas po-lo García.

Cando eu traballaba sobor da edición do Colon, suliñaba xa que hai capítulos que teñe-na cláusula: «E per les rahons dessùs dites, faeran aquesta esmena e aquest aclariment los nostres antecessors, per rahó que contrast no hi puscha haver entre los mercaders e los bonhs hòmes qui van per la mar qui són senyors de les naus o dels leyns», que atopábase no m 66, 71 e 212. E outros que teñe-na cláusula: «Et per los aclariments dessús dits fo fet aquesta esmena»: m 51 e m 158.

Agora ó poder traballar sobor do manuscrito de Valencia, podo aporta-los datos deste manuscrito. Quero suliñar que no fato das chamadas po-lo García «Costumes da mar primeiras» atópase un capítulo onde fálase dos anterros: o V 107 = m 169 (xa non lembro o V 63 = m 121); outro capítulo atópase no fato das «Costumes da mar segundas»: o V 159 = m 235 e oito no fato dos «usos da mar»: V 208 = m 66; V 210 = m 212; V 212 = m 144; V 206 bis = m 51; V 208 bis = m 71; V 211 bis = m 158; V 216 = m 272 e V 222 = m 132, que é onde atópanse a fatín.

Come pode verse atópanse recollidos os cinco capítulos xa ditos.

Nestes capítulos onde faise mención dos anterros, que interveñen pra acrarar e perfecciona-las normas vellas, feitas tamen po-los mesmos anterros, que agora acrára-nas ou perfeccionanas, a cláusula que pechaos non é sempre a mesma: nos m 169 e 235 atópase a cláusula propia das «Costumes da mar segundas»; nos m 132, 144 (segunda cláusula) e 272 a cláusula propia dos «usos da mar», mentras os outros capítulos, con certas variantes, teñe-nas cláusulas que quedaron recollidas; samente tense que axustar que a primeira

cláusula do m 144 é unha variante da que atópase por exemplo no m 66 e que os equivalentes destes capítulos no ms. valenciano teñenas ditas cláusulas.

Teríase que estudar estas menciós que fanse dos antergos máis a fondo, pro en liñas xenerales pode dirse que todas as variantes atopanse no m 144:

«E eneaxi, pero ço con en lo capitol dessús dit no esclareix, pona tornar a gran dan als senyors de les naus o dels lenys; per la rahó dessús dita, los bons hòmes qui aquest establiments o costumes, faéran, veéran e conaguéran que gran dan se'n poguera seguir. E per so, sobre alguns capítols que no són ben clars, eyls faéran esmenas, per so que dan ne trebayl no se'n pusca seguir. E sobre lo capitol dessús dit, dien e declaren E per les rahons dessús dites, fáeran aquesta esmena e aquest declarament los antichs que primerament anaren por lo mon... E per esta manera los nostres antassasors volgren declarar los casses e les rahons per què los senyors de les naus o dels leyns fossen tenguts de donar a menjar .» (m 144).

Esto é, ¿aquele que leva a cabo a reorganización do material? aferma que os antergos, que foro-nos antigos que primeiro viaxaron po-lo mundo e fixero-nas normas que regraba-no tráfico marítimo mercantil, déronse conta que algunhas destas vellas normas tiñan que acrararse ou perfeucionarse, pra evita-los preitos entre os interesados —señores dos barcos, feireantes e mariñeiros—, po-lo que eles mesmos procederon a correxi-la sua laboura primeira.

Neste sentido atópamos no m 144 «bons hòmes qui aquest establiments o costumes fáeran», «antichs que primerament anaren per lo mon», «los nostres antassasors», que teñen que sere «los nostres antecessors qui primers anaren ne comensaren a anar per lo mon» (m 71) ou «los nostres antichs antecessors» (m 169), pois tamen dise «los nostres antichs antecessors veéran et conaguéran... e per les rahons dessús dites féran aquestes esmenes los nostres antecessors... e los nostres antecessors qui primerament començaren anar per lo mon» (m 235; cf. m 272).

Eu coído que todas estas fórmulas identifican, de maneira diferente, os mesmos persoaxes e neste sentido, teño pra min, que a confesión do m 144 ten que tomarse en serio: alguén recolléu a laboura dos antergos, seña a feita nun primeiro intre, seña a feita máis tarde pra correxi-la e perfeuciona-la, e déulle unha nova redacción e ordeación cando xuzgounas necesarias. Neste sentido teríase

que lêr con atención o m 66 e ver se as palabras alí recollidas refrexa-no testo orixinario, que non é esautamente o do m 64.

E esta deccraración do m 144 e aquela que atopamos no m 46: «Aquest són los bons stabliments e les bones custumes qui són de fet de mar que.ls savis hòmens qui van per lo mon e no conmen-saren d'anar els nostres antecessors faéran per los libros de la savietat de les custumes».

O que eu quero eiquí suliñar e dun lado a necesidade de estudar máis a fondo estas cláusulas estilísticas e doutro o feito de que estas menciós dos antergos, que semellan proceder todas elas dunha mesma mau, atópanse, coma xa vimos, nunha primeira aproximación, ó longo de todo o LCM e xa que o que interesa agora e o ms. V empregando a terminoloxía do García, vimos xa que a dita deccración atópase po—lo menos dúas veces nos primeiros 116 capítulos, o fato das «Costumes da mar primeiras» —no prólogo e no V 107 = m 169; unha vez no fato das «Costumes da mar segundas»: V 159 = m 235 e oito veces no fato dos «usos da mar», inda que quero suliñar de novo a necesidade dun estudio máis profundo, tendo en conta toda-las variantes dos manuscritos.

Esto parece amosar que o testo que hoxe conocemos das «Costumes da mar» —e das «Ordeanzas do curso» po-los ditos capítulos coa cláusula das «Costumes da mar segundas»— debense na súa redacción actual a unha mau, que deixou a súa firma no m 46 e no m 144, inda que a súa ordeación non respetóuse, pro non sei xa dir se a mesma refréxase no ms. V ou nos outros manuscritos ou en ningún deles; o que é certo é que todo-los manuscritos semellan ter unha mesma redacción. ¿Anovouse a mesma? Unha resposta non é doada da-la, inda que puidera maxinarse que si, pois o m 87 non ten tradición manuscrita, pro tornarei sobor do mesmo.

E teño pra min que inda é necesario insistir sobor do mesmo argumento. O García fala de dúas cláusulas, pro estas dúas cláusulas semellan ser costruidas un pouco artificialmente. Pra o García e por comodidá repito eiqui o testo das mesmas, a cláusula enxebre das «Costumes da mar segundas» é: «E fo fet perçò aquest capitol, car...» e segue a *ratio legis*³³⁰ e a cláusula dos «usos da mar» e: «E per les raons dessus dites fo fet aquest capitol»³³¹.

330. GARCÍA 195.

331. GARCÍA 205.

Eu voume limitar eiquí a reproducir algunhas cláusulas, tomando coma modelo o ms. V, po-las razóns ditas:

V 119: «E fon feyt aquest capitol per aquela rahó que.s compta en aquela capitol que dit és dessús» (=m 185).

V 133: «E aquest capitol fon feyt per ço que dessús es dit» (=m 201).

V 168: «E per aquesta rahó matexa fon feyt aquest capitol» (=m 249).

V 205 bis: «E perçò que dessús ès dit fon feyt aquest capitol» (=m 237).

E agora dous exempros de capítulos, un que se non atopa no manuscrito valenciano e outro que atópase nel pro sin cláusula:

m 297: «E per les rahons en la capitol dites e declarades fo fet aquest capitol».

«E per les rahons desús dites fon fet aquest capitol» (ms. D).

m 251: «E fo fet per so aquest capitol» (Ms. L).

«E fo fet per so aquest capitol per les rahons desús dites» (ms. D).

«E fo fet per so aquest capitol que cascú se quart de les dites penes» (ms. C) = ms. V 170.

Pra o García V 119 = m 184-185; V 133 = m 200-202; V 168 = m 249 e V 170 = m 251 atópanse no fato das «Costumes da mar segundas», mentras V 205 bis = m 237 e m 297 atópanse no fato dos «Usos da mar»³³².

Teño pra min que abonda-nos datos recollidos, inda que o m 251 = V 170 —o ms. V non te-na cláusula— é o máis craro. No ms. L a cláusula dun lado semella aquela das «Costumes da Mar segundas», pro diferenciase dela e aveciñase á cláusula dos «usos da mar» po-la mancanza de *ratio legis*; o ms. D ten unha cláusula que é a dos «usos da mar», inda que poida dirse que alteróuse o orden das palabras, pro lembraréi por exempro que no V 9 = m 55 dise: «E per ço fen feyt aquest capitol: com...» e no V 25 = m 74: «Aquest capitol fon feyt perço que.l señor...» e no V 80 = m 140: «per ço fon fet aquest capitol: quel. . » e non rematan eiquí as variantes.

332. GARCÍA 174-175; téñase presente que V 170 non te-na cláusula. Cf. GARCÍA 195 e 205

De remate o ms. C ten craramente a cláusula das «Costumes da mar segundas».

d) O problema das cláusulas estilísticas fora do seu fato: E tendo en conta o dito, aínda que sin resolve-los problemas, pois o que eu quero suliñar é que, ó ser tan febles os criterios estilísticos, non é doado poñerse dacordo nestes casos dudosos sobor do valor que debe adicarse a cláusula. Primeiro, coido eu, teríase que profundizarse neste aspecto e despóis estabrece-lo principio estilístico.

Eu vou acepta-las afirmaciós do García e vóume deter somente naqueles casos nos que as dudas son poucas, inda que teréi que facer unha pequena trampa. O García di-nos, falando da cláusula dos «usos da mar», que «curiosament, aquesta formula també és inclosa al capítol m 252 que a gamma és l'últim, i a Beta és el penúltim del nucli c 2»³³³. Como xa dixen o m 252, no seu equivalente o V 171 non ten cláusula. Agora ben, e eiquí está a pequena trampa, eu coido que unha cláusula que pecha o capítulo desta maneira: «E per aquesta rahó matexa fon feyt aquest capitol», coma atópase no V 168 = m 249, inda que o García afigurese que seña a propia das «Costumes da mar segundas»³³⁴ é tan dos «usos da mar» como pode se-la que atópase no m 252: «E per les rahons dessus dites, to fet aquest capitol».

Temos po-lo tanto que no fato dos capítulos das «Costumes da mar segundas» atópase un capítulo coa cláusula dos «Usos da mar»; doutra parte, como xa dixen, no fato dos capítulos dos «Usos da mar» atópase un capítulo, o V 203 = m 260, coa cláusula: «E fon feyt per ço aquest capitol, que a...», que te-na cláusula das «Costumes da mar segundas» inda que o García pónao drento do fato daqueles capítulos que non teñen cláusulas³³⁵ e poña o m 260 no fato dos «usos da mar» nos seus coadros³³⁶. Eiquí non hai nin siquiera unha pequena trampa: a cláusula do m 260 é idéntica a fixada po-lo García pra o fato das «costumes segundas da mar».

Deixando a parte todo-los argumentos espostos é evidente que estos dous feitos amosan xa que a crencia do García na conservación fiel por parte do ms. V da ordeación da hipotética redución

333. GARCÍA 205.

334. Vid. GARCÍA 174-175, 195.

335. GARCÍA 205.

336. GARCÍA 173, 175.

beta, que a sua volta respetaba fielmente a ordeación da redacción alfa dous non mantense en pé; non é un feito curioso, como dixo o García, é a proba de que tamen no ms. V atópanse mesturados no fato das chamadas costumes segundas capítulos dos chamados «usos da mar» e no fato dos «usos da mar» capítulos das chamadas «Costumes da mar segundas».

A brillante construción do García leva a estos resultados: o leutor arrastrado polo labia do García, acepta que o ms. V conserva o orden orixinario e polo tanto que o pseudo criterio topolóxico é lexitimador dos capítulos que atópanse nos fatos construídos polo García sin apoio no manuscrito polas razóns que dixeran. A cláusula confirma os resultados, pero tamen corríxeos, pero os corríxe sómente no caso de atoparse a cláusula, mais non cando se non atopa; entón o efecto lexitimador do posto no que atópase o capítulo lampeixa con todo o seu ampo.

Lembraréi o xa dito: as cláusulas ditas polo García atópanse a miúdo, pero non sempre. ¿Que quere dir isto? Que no fato das «Costumes da mar primeiras» pódense identifica-los capítulos das «Costumes da mar segundas», que teñan-na cláusula, pero non aqueles que non-na teñan; agora ben, ó afirmarse que mesturáronse as «Costumes primeiras» e as «Costumes segundas» o García presupón un feito, que non demostra: o García coída que a vella recopilación do 1283, aquela onda atópanse sómente as «Costumes primeiras» e as «ordeanzas do curso» e que non ten alcuño arrequeñóuse cós capítulos das «Costumes segundas», que puxéronse a somade dos capítulos das «Costumes primeiras» pechando a nova recopilación, a alfa un, as «ordeanzas do curso»; esta nova compilación foi a que chegou a Valencia no 1283; pero o autor desta recopilación, a alfa un, mesturou algúns capítulos pra achega-los que viña a modificar ou compretar, isto é, sómente veuse modificado o fato das «Costumes primeiras», porque alí foron a parar algúns capítulos do fato das «Costumes segundas», que veu sómente diminuído o número dos seus capítulos; puido sere, pero tamen puido sere que o mesturamento fose máis radical, e desta maneira no fato das «Costumes da mar segundas» puideran atoparse tamen capítulos das «Costumes da mar primeiras» que non poden identificarse xa que non teñen unha cláusula propia. Se amecemos que no fato das «Costumes da mar segundas» atópanse —inda que seña un solo capítulo—

capítulos dos «usos da mar» e no fato dos capítulos dos «usos da mar» capítulos das «Costumes da mar segundas» —inda que seña un sólo— teríamos que rematar que a permanencia da alfa un e da alfa dous, que limitóuse a achegar asomade das «ordeanzas do curso» os capítulos dos «usos da mar» non ten base algunha. No fondo o García móvese drento do mesmo tarréo onde movíase o Valls: os capítulos das «Costumes da mar segundas » e dos «usos da mar» veñen a acrarar e desenrodelar os capítulos das «Costumes da mar primeiras»; eu coido que seña lícito adoutar esta hipótesis de traballo, o que non semella lícito é agachar este criterio baixo o criterio topolóxico. Se empregamos o criterio da materia regrada e o carauter orixinario ou non da regramentación, entón o criterio topolóxico tornase, outra vez máis, nun criterio pseudotopolóxico. E esto, teño pra min, é o que virá fora cando falemos, drento dun intre, do m 197.

Se poñemos en duda o carauter lexitimador do principio topolóxico do García, entón podemos evita-lo ampo da brillante construción e acodir a aqueles capítulos lexitimados po-lo principio topolóxico.

No coadro do García, onde distingue os distintos fatos do ms. V, un pode costatar coma os derradeiros capítulos das «Costumes primeiras da mar» cadran perfectamente coa edición do Colon; comenzan a cadrar co V 107 = m 169 e chega a identidade hastra o V 116; mentras o V 115 é o m 178, o V 116 é o m 182. ¿Qué pasou? O m 179 se non atopa no ms. V e pra o García é po-lo tanto un capítulo do fato dos «Usos da mar segundos» e os m 180-181 atópanse no fato dos capítulos dos «usos da mar primeiros»: V 245-246.

Agora ben, vou reproducir eiquí o m 179, pois coido que non necesita máis comentarios:

«Mariners no deuen deranclir la nau.

E los mariners no deuen derelenquir nau o leyn per lo dit temps estant en aquel viatge. E enaxí con la nau o.l leny guanyará del nòlit, e mariner créxer de lur loguer».

É abonda, inda que pódense lêr tamen os m 180-181.

A úneca razón pra afermar que o m 179 é do fato dos «usos da mar segundos» e se non atopar no ms. V e, por definición, o ms. V refrexa perfectamente a redución alfa dous. Agora ben, xa vimos que nos manuscritos se non atopan todo-los capítulos que atópanse

na edición do Celedes. ¿Por qué os outros manuscritos puideron deixar de recoller algún capítulo do seu modelo e o ms. V tivo que recollelos todos?

Penso que seña inútil ir adiante, pois xa quedaron espostos os argumentos que fanme rechaza-los principios direutivos construídos polo García, que levaron a formación das diferentes compilacións, pois ni-no mesmo García os respeta, como tampouco respeta os criterios topolóxico e estilístico. O m 179 regula as relacións entre o mariñeiro e o señor da nave e non semella que acrece ningún capítulo anterior, pro o que quero sinalar é que empregar estes criterios e caer na mesma trabucación na que cae o García: o García pensar evita-los farrallós nos que naufragou o Valls, pro ó cabo rematar por naufragar nos mesmos farallós. Diante dun texto coma o m 179 coido que é demais calquer outra explicación. Quixera sinalar que limitéime ós exemplos máis sinificativos, pro non resistome a sinalar os esforzos do García pra explica-lo feito de se non atopar no fato das «Costumes primeiras da mar» ningún capítulo que regre a comanda ³³⁷.

E pra rematar quixera lembrar que o García fala de que todo aquilo que se non atopa no ms. V é unha novidade, que forma o fato dos «Usos segundos da mar». Agora ben, o García enumera, coma xa vimos, unha poulareda de capítulos, onde algúns teñen-na cláusula dos «usos da mar primeiros» e outros non. Eu non vou a insistir sobor da arbitrariedade que esto supón, pro quero chama-la atención sobor do feito que non marran samente capítulos, pois marran tamen cachos, que no ms. L poden sere capítulos enteiros, coma pode sere o m 330 (cont.), pro outras veces marran párrafos. ¿Tamén terían que sere do fato dos «usos segundos da mar»? Pénsese, por exemplo anecdótico, no m 98 n. 14.

No fondo o García atópase con problemas, que se non poden resolver, polo que déixaos nunha certa sombra. Non pode axeita-lo criterio topolóxico co criterio estilístico no fato das «Ordeanzas do curso»: pois o criterio estilístico levaría consigo o ter que reconecer que certos capítulos das «Ordeanzas do curso» pertencen-nas «Costumes da mar segundas» e isto levaría consigo o ter que reconecer que tamen os demais capítulos pertencen-no mesmo fato e

337. GARCÍA 201 s.

entón desaparecería-nas «ordeanzas do curso» na sua individualidade e viríase abaixo o criterio topolóxico. E este feito esprica as dudas co m 334: este capítulo se non atopa no ms. V, polo que ten que sere do fato dos «usos da mar segundos» e así o reconece o García, pro remata por poñe-lo nas «Ordeanzas do curso», inda que ni-no criterio topolóxico ni-no criterio estilístico autoriza unha tal decisión, ben é verdade que eiquí —no fatc destes capítulos que non teñen cláusula— estes dous criterios non funcionan.

e) Divisiós dos capítulos e epígrafes mal postos: O feito de atoparse no ms. V —coma nos outros manuscritos— capítulos que teñen máis dunha cláusula, ten aínda máis importancia se o vencellamo-lo a outros dous feitos: non todo-los manuscritos teñe-nos mesmos capítulos xibrados do mesmo xeito e nas «Costumes da mar» atópanse epígrafes de capítulos mal postos, inda que non deba esquencerse o arriscado do emprego dos epígrafes.

Pra min estos feitos conferma-na idea que o testo das «Costumes da mar» que temos hoxe é unha redacción definitiva feita por algúen de maneira unitaria, sobor dun material máis antigo, pro esta redacción, que non foi xa modificada en liñas xenerales, some-téuse a reordeaciós, que levou nos diferentes manuscritos a desaparición de certos capítulos, a división diferentes dalgús capítulos e de remate a unha nova ordeación dos mesmos.

O m 77 ten este epígrafe: «Capitol de quina companya és tengut lo senyor de la nau lavar als mercaders» e no m 78 atópase este epígrafe: «Qui deu ésser entès mercader», inda que o contido do mesmo continua ó parecer o anterior, pois o m 78 remata: «per aquesta rahó matexa com dessús és dit». Ademáis o dito po-lo epígrafe —que é o que debe entenderse por mercadel— non atopa un refrexo no contido do capítulo.

O m 46 bis é unha continuación do m 46, feita dunha maneira arbitraria, xa que nestos dous capítulos —m 46, 46 bis— atópanse dous argumentos: dun lado a regración das relacións entre aqueles que van na nave —señor da nave, feireantes, mariñeiros, pasaxeiros—; doutro a definición do que seña pasaxeiro. O cap. m. 46 fala do que o señor da nave ten que face-los seus mariñeiros, feireantes e pasaxeiros, e esta primeira parte segue no m 46 bis: «encara qual cosa deu fer mercader a senyor de nau de mariner al senor de la nau ne a palegri», despois do que comenza o segundo argumento:

«car pelegrí és dit tot hom qui deja donar nòlit de la sua persona sens mercaderia». Esta definición atópase denovamente con variantes no m 113, que te-no epígrafe: «Que deu fer senyor de nau o de ieny a palagrins».

Tamen nas «Costums de Tortosa» as «Costumes da mar» teñen un prologo, onde dise que pra rematar cos problemas que xurden entre o señor da nave, os feireantes, os mariñeiros e os pasaxeiros, e xa que na mar hai usos propios puxéronse no libro das Costums de Tortosa, ditos usos da mar e tamen da ribeira. Neste sentido nos atopamos eiquí co primeiro argumento do m 46-46 bis. Agora ben, despóis deste prólogo e drento do mesmo capítulo atópanse tres párrafos adicados a definición do que seña pasaxeiro, feireante e mariñeiro. Na edición facsímil das «Costumes de Tortosa», onde non poden identificarse as capitales vermellas, estos tres párrafos veñen ben arredados, xa que teñen un calderón, inda que ó parecer deixóuse sin face-lo correspondente ó mariñeiro, xa que comenzaba o párrafo no inicio dunha liña e fíxose comenza-lo párrafo un pouco máis adrento na colona.

Nas autuales «Costumes da mar» hai us apartados ben arredados pra falar do señor da nave, dos feireantes, dos mariñeiros e dos pasaxeiros, pro este xebre fixo desaparecer, ó parecer, as definicións, inda que quede a lembranza das mesmas no epígrafe do m 78 e na definición do m 113. Tamen no ms V = m 46 bis atópase a definición de peregrino e tamen no V 29 = m 78 atópase o epígrafe «Qui deu èsser entès per mercader», inda que o contido do capítulo e o do m 78, e, de remate, tamen no V 61 = m 119 atópase a definición de pasaxeiro. Isto levaría consigo o ter que reconocer que tamen o ms. V tivo que alonxarse da redución orixinaria.

f) O problema das interpretacións e as «Costums de Tortosa» e as «Costumes da mar»: O García critica o Valls, po-lo seu vezo de atopar interpolacións e prescindir das mesmas. Por eso mesmo aferma:

«Es per això que hom no el pot seguir per aquest camí, sinó que cal respecter integrament el test, sense admetre interpolacions, variants ni afegits sense justificació en la tradició manuscrita medieval, perquè la dita admissió menaria a resultas forassenyaats, o almenys gratuïts»³³⁸

338. GARCÍA 182.

Dende este prantexamento o García solo acepta ou o criterio topolóxico ou o criterio estilístico:

«Tant un criteri com l'altre, basats en la tradició manuscrita del LCM, precisament per llur simplicitat, permeten una crítica racional i rigorosa de les raons d'inclusió de cada capítol en el seu nucli i donen a cadascun d'aquests una unitat i una cohesió clares i categoriques»³³⁹.

Se lembro estas afirmacións do García é por un solo feito. Eu non teño unha grande confianza no método do Valls, pro coido que ou se afirma que as «Costumes da mar» é o resultado dunha reelaboración permanente e entón pódense empregar os criterios estilísticos —e tamen os materiais— pra descubri-la mesma, inda que non teñamo-lo apoio manuscrito ou coidamos que temos que seguir los datos que a tradición manuscrita conserva nos, inda que creiamos na dita reelaboración. O García semella seguir este derradeiro criterio, pro, no fondo, alonxase do mesmo, pra mante-la sua afirmación fundamental, que non ten un apoio na tradición manuscrita: o ms. V mante-na redacción beta que a sua vez mantén intacta a redacción alfa dous. Esprícase así unha afirmación do García, que, a meu ver, non é respetuosa cos criterios ditos:

«El capítol m 48 té correlació a CT, fins al^e mots que *aquell li devia fer*. La segunda part d'aquest capítol, fins al seu final, no pertany a c 1, sino a c 2, tal com ho indica la fórmula *E fou fet* perço aquest capítol, que és la pròpia del dit nucli C 2. I com que Beta afegeix encara darrera d'aquest capítol el darrer paràgraf del m 49, des d'*Ara responsam* fins al final, sembla clar també que aquest paràgraf del m 49 és també del nucli c-2. La resta del m 49, que és pràcticament tot el capítol, ja veurem que pertany al nucli u»³⁴⁰.

Inda que seña un pouco longo vou reproducir-lo m 48 e o capítulo correspondente das «Costums de Tortosa».

m. 48. «Capítol de promissió de parsoners.

E si assò farà antanent lo senyor de la nau als parsoners e ls parsoners li prometran de fer part, aquela part que li prometrà de fer lo parsoner, aquela li deu atender. E si lo parsoner no li ho pot atender, ho no ho vol fer so que li haurà convengut, lo senyor de la nau o del leyn lo pot destrènyer ab la senyoria o pot manlevar sobre aquela part que aquel hi devia fer. Fassam compte qu'él hi degués fer una setzena

339. GARCÍA 183.

340. GARCÍA 184.

e no.y agués fet compliment mas a miga setzena, que axi ho puguen fer de una setzena multiplicament con de I quarter. E si ell li deu fer aquela dita part e no la li fa, lo senyor de la nau o del leyn pot empenyorar la sua part complidament a la part que li hauran convenguda de fer. E fo fet aquest capítol, cor aquel qui comensa la nau o leyn no la comensaria, si sebia que.ls personers li deguessen falir ne. o poguessen fer».

m 49b

«Ara responam que la volgués fer, ell no faria tan gran leny, e fer.lia menor, si ell sabés que aquell personer hagués poder que li falia de res que convengut li agués»³⁴¹.

O V 4 é o m 48 que pra o García na sua primeira parte e do fato das «Costumes primeiras» e na sua segunda parte é do fato das «Costumes segundas», mentras que o V 5 atópa o seu equivalente no paragrafo derradeiro do m 49 —no m 49b— e a primeira parte do m 49 —o m 49a— te-na sua equivalencia no V 225. A razón destas espricaciós do García atópase nunha afirmación fundamental do mesmo: o carauter orixinario das «Costumes da mar primeiras» ven determinado po-lo sua posición no ms. V e po-la tradición que atópase nas «Costums de Tortosa»³⁴². Vexámonos agora estas Costumes de Tortosa³⁴³:

CT. 9,27,4-5.

«Con lo seynor vol comensar de fer la nau, o el leyn, o la barcha, deu dir als personers de quin gran, ne quynes mides, ne de quantes goes lo faran, ne quant aurà e.l plan, e quant en sentina, e quant obrirà, ne quant aurà de lonch. (= m 47).

E si assò fa entenent als parsoners, són-li tenguts de fer aquela part que cascun li aurà promesa de fer, sens tota escusació que fer no.n deuen ne poden. E si los parsoners atendre no volen, o no poden, la covinensa que al senyor del leyn auran feta de fer e de conplir cascun

341. Emprego eiquí o testo da edición do Colon, xa que pódese ver nel as variantes; o importante é ter en conta que o m 48 é o V 4 e o m 49a o V 225 e o m 49b o V 5.

342. GARCÍA 169, 183 ss.

343. Emprego, coma o García, a división da edición do Oliver, inda que o testo tomo o da edición do Valls, que fíxose sobor do manuscrito das Costums de Tortosa de Tamarit e Gil; cotexéi a trascrición do Valls coa edición fotomecánica do manuscrito. Téñase en conta que na edición do Valls os capítulos se non atopan; pra os cotexos do Oliver vid. o volumen III 362 ss. da sua obra, inda que debe terse en conta que emprega a numeración do Capmany. Pra as identificaciós do Wagner, vid. o traballo citado infra na nota 355.

ça part, lo seynor del leyn pot manlevar a usura o n'altra forma, segons que podrà, a bona fe, sobr. aquel qui la part li aurà promesa de fer; enaxí que aquel prometedor és tengunt e obligat al senyor del leyn de tot lo deute que manlevarà per aquela part a complir, e de tot lo logre o usura o barata que per aquela part a complir, vara, darà, ne pagarà, sens tota excusa e contrast.

Alò metex és si.l fa menor qu.e.l no.ls aurà dit ne dat a entendre, per so con par ver que qui molt promet a atendre, que atena e conplesca lo meyns; atressí con par ver, e és, que.l senyor del leyn no comensará a ffer aquela obra, si no fos per fe e per esperanza d'aquels que la promesa li feran de fer part e.l dit leyn» (= m 48).

O párrafo «Fassam compte que.l...» do m 48 se non atopa nas «Costums de Tortosa», pro a mesma cláusula estilística atópase no m 88 «Fassam compte que...» e no m 124: «Ara fassam compte que mariner...», dous capítulos que o García afigurase que forman parte do fato das «Costumes da mar primeiras»³⁴⁴. Ademáis, inda que seña unha novedá do LCM, o que é craro e que o párrafo derradeiro do m 48 ten un craro refrexo no párrafo derradeiro das «Costumes de Tortosa» 9,27,5: é certo, se non atopa a cláusula «E fo fet...», pro a norma é a mesma. A maiores, é evidente que a parte derradeira do m 49 —o m 49b— é un capítulo independente no manuscrito V, que atópase na parte das «Costumes da mar primeiras» e non hai po-lo tanto ningunha razón topolóxica —atópase na parte das «Costumes da mar primeiras»— nin estilísticas —non ten cláusula propia— que permita afermar, coma faino o García, que o mesmo teña que pertenece-lo fato das «Costumes da mar segundas». Hai algo máis: como xa vimos despóis da cláusula «E per les rahons desús dites fo fet aquest capitol» atópanse ás veces algús párrafos, que conteñe-na espricación de xa dito, e neste sentido a cláusula das «Costumes da mar segundas» e a cláusula dos «usos da mar» aveciñanse. Agora ben, se tornamos a lêr a parte derradeira do m 48, a do m 49b e a das C. Tortosa 9,27,5 teremos que reconocer, coido eu, que estamos diante da mesma norma, inda que con redaucións diferentes e matices diversos:

m 48

«E fo fet aquest capitol, cor aquel qui comensa la nau o leyn no la comensaria, si sebia que.ls personers li deguessen falir ne o poguessen fer».

344. GARCÍA 171

m 49b

«Ara responam que la volguès fer, ell no faria tan gran leyn et de ferl'ia menor si ell sebia que aquel personer hagués poder que li falís de res que convengut li agués».

C. Tortosa 9,27,5

«atressí con par ver, e és, que.l senyor del leyn no comensaràa a ffer aquela obra, si no fos per fe e per esperanza d'aquels que la promesa li feren de fer part e.l dit leyn».

Eu xa sei que nestos cotexos cada un ve o que quere. Por iso mesmo lembrarei a norma que atópase no m 55, que o García di atoparse no fato das «Costumes da mar segundas», pois te-na cláusula «E per ço fo...». Por esta razón o García non atopa ningunha equivalencias nas «Costums de Tortosa»³⁴⁵ inda que si o Oliver —e ó parecer tamen Wagner—, que sulñou a equivalencia entre o LCM 54 (= m 55) e as «Costums de Tortosa» 9,27,6:

m 55: «De parsoner qui volrà vendra la sua part.

Encara deu saber que si algun personer volrà vendra la part que haurà comensada de fer en la nau, ell ho deu fer saber al senyor de la nau, e tot en aquela guisa que és tengut l'altre. E si lo senyor de la nau no vol que.y entre, no.y pot entrar dentro que la nau haja fet viatge, per so és a entedre que aquel qui la compraria lo'n poria gi ar per mal volensa. E per aquesta rahó no poden encantar los parsoners ab lo senyor de la nau dentro que la nau haja fet viatge. E quant la nau haja fet viatge, ell.s pot encantar del personer al senyor, e del senyor al parsoner. Emperò, lo personer deu donar al senyor de la nau aventatge de donar o de pendre. E sia en volentat del senyor de la nau de dar o de pendre, si donchs encant públich no.y havia E per ço fo fet aquest capitol com lo senyor de la nau hi haurà molta fadiga e molt mal tret et haura començada la nau, que si ell no fos, no fóra feta».

C. Tortosa 9,27,6

«Los parsoners non poden encantar ab lo seynor del leyn, ne.l poden aportar a encant, tro lo leyn ha fet viagie; mas, del primer viagie fet a enant, poden amb el encantar, si.s volen. Però si algun dels parsoners venía la sua part a altre, lo comprador, atressí, no.l pot aportar a encant, tro que.l leyn a fet viagie, per aquesta raon: con lo senyor del leyn, qui molta fadiga a gran trebayl e gran don aurà soffert e.l leyn a fer, e si el no fos lo leyn no fóra fet, n'isca sens algun profit».

É certo, no m 55 fálase «E per ço fo fet aquest capitol» mentras nas «Costums de Tortosa» dise «per aquesta raon», é certo tamén

345. GARCÍA 152 ss, 156 n. 21

que hai diferencias na regulación, pro teño pra min que o parentesco entre os dous textos é crara.

Ten razón o García ó suliña-las cláusulas estilísticas, pro teño pra min que non poden descartarse as outras cláusulas xa ditas e outras características estilísticas. O que quero suliñar e que xa nas «Costums de Tortosa» atópanse capítulos que hoxe no manuscrito V, ó dir do García, forman parte do fato das «Costumes da mar segundas». Esto, coma os outros datos, teño pra min, deberíanos facer menos ousados no intre de facer hipótesis arriscadas.

VI. UNHA HIPÓTESIS DE TRABALLO SOBOR DA FORMACIÓN DAS «COSTUMES DA MAR» E SOBOR DO LCM

Coido que se queremos chegar a comprende-lo proceso de formación das «Costumes da mar», temos que distinguilo intre de aparición das normas e o momento no que estas normas xurídicas adquiren a súa redacción escrita definitiva. Neste sentido pódese dir que hai testemuñados dous intres diferentes: aquel que atópase nas «Costums de Tortosa» e aquel que atópase nas «Costums da mar» conservadas nos manuscritos e nas edicións.

Eu quixera eiquí, dunha maneira moi xeneral e coma unha hipótesis de traballo, suliñar que deixando a un lado modificacións, ordeacións diferentes, número diferente de capítulos, divisións diferentes dos capítulos, etc., todo-los manuscritos amosan a mesma redacción, agás, quizaves, o ms. C, que non conozo, e a tradución italiana por razóns evidentes. Eu non poño en duda que o nacemento histórico dos capítulos é diferente, isto é, us son máis vellos e outros máis novos, pode ser incluso —eu non son lingüista— que pódanse atopar capítulos que teñan unha redacción —non falo agora do contido xurídico— máis antiga que outra, pode sere tamén que as cláusulas estilísticas permitan establecer o intre histórico no que redautaronse os diferentes capítulos que teñe-nas, pro coido que todo isto non permite negar que as «Costumes da mar», como hoxe conocemos-las, é o resultado dun esforzo redaccional unitario.

O dereito consuetudinario, ó ser un dereito sin pai conocido, ten un tempo longo de formación, durante o que a norma consuetudinaria vaise perfeccionando pro tamen cristalizando e non solo no

seu contido xurídico; cando ese dereito consuetudinario chega a redautarse por escrito, non por eso deixa de medrar e a carón dos vellos capítulos xermolan outros novos ate o intre en que alguén fai o esforzo de reorganizar todo aquel material. Eu non penso nunha laboura sistematizadora ó estilo codificador, onde a razón constrúe o propio sistema, nin tan siquera penso nunha sistematización feita por unha razón que descobre no dereito existente os principios que permiten organizalo nun orden natural, penso máis ben nos acios de recoller todo o material existente, prescindindo do que o redautor coida que debe deixarse fora, con finalidade de arrecadar nun manuscrito todo o dereito consuetudinario como unha obra unitaria.

En este sentido eu lembrarei as palabras do prólogo e do m 144, onde fala o anónimo redautor dos antergos, que recorrero-no mundo esculcando os principios xurídicos e unha vez recollidos perfeccionarolos, escollendo as solucións millores. E estes mesmos antergos son aqueles que cando sintéuse a necesidá deron novas solucións, seña pra os puntos oscuros, seña pra os puntos non resoltos. E estas mencións dos antergos, coma xa vimos, atópanse no chamado po-lo García fato das «Costumes primeiras da mar», pro tamén no fato das «Costumes da mar segundas» e no fato dos «usos da mar», onde, é certo, atópanse a fatín. Agora ben, quero suliñar que dun lado temo-los antergos, que son os creadores das «Costumes da mar», xa que foron eles quénes recollero-nas, e doutro o anónimo falador, isto é, aquel que deu a redacción definitiva, pois é a que hoxe conocemos, ós principios xurídicos do dereito marítimo mercantil.

Solo simplificando moito pode reducirse a historia das «Costumes da mar» a dous intres: aquel no que as «Costumes da mar» redautaronse por escrito e aquel outro no que as «Costumes da mar» recibiro-na redacción definitiva, que atopamos nos manuscritos. En certo sentido estes dous intres poderíanse identificar dun lado nas «Costums de Tortosa», pois é o primeiro testemuño da existencia dunha redacción escrita das «Costumes da mar», e suliño a feito de sere unha redacción escrita; hai testemuños de existire xa denantes as «Costumes da mar» e pódese hipotetizar sobor se esas «Costumes» eran ou non escritas, pro o primeiro testemuño dunha redacción escrita so-nas «Costums de Tortosa», que lévanos

po-lo tanto ó ano 1272. Doutra parte as «Costumes da mar» poderíanse identificar co ms. L, aquel máis antigo, onde atópase a redacción definitiva das «Costumes da mar», o que permétenos afermar que no 1385 xa estaba feita a dita redacción.

Agora ben, reducir a estos dous intres a historia das «Costumes da mar» teño pra min que é simplificar por demais a vacenta formación dun dereito mercantil consuetudinario. Pro tamén penso que é necesario distinguir dun lado os datos históricos e doutro as hipótesis, e neste sentido eu quixera acrara-la parte hipotética.

E a parte hipotética depende moito da idea que nos fagamos da creación do dereito consuetudinario do comercio marítimo. Durante moitos anos a historia deste dereito mercantil marítimo véuse aqueixada po-la febre nacionalista, que lévou a discusións inútiles, que non serveron de moito pra permiternos un millor coñecemento do LCM. E esta febre nacionalista, que tiña a súa razón de sere, tamén atopou forza naquela idea do Nietzsche, de que a voltas deben contarselles alburgadas ós pobos pra construílles un pasado brillante e apuxa-los pra dare un paso adiante.

Coido que aquel xeito de pensar hoxe xa non te-na mesma forza —inda que dende os puntos máis insospeitados deféndase hoxe un novo nacionalismo—, pois sábese ben que a nación é filla da Revolución Francesa e foi o xeito que tivo a burguesía de lexítima-lo seu poder frente ó poder do rei e as alburgadas serven non pra que os pobos teñan diante de si un brillante porvir, senon máis ben pra que os mortos de fame de sempre continen a deixarse matar: antes morrían po-lo rei e dende a Revolución Francesa po-la patria, pro seguen morrendo. E certo que a Revolución Francesa estabrecéu o principio da igualdade diante da lei, fundamento teórico pra que a conciencia nacional prenderá tamen na conciencia dos mortos de fame, pro us cincoenta anos máis tarde dito mito entróu en crisis, inda que seña difícil a morrere, po-la idea que vulgarmente recóllese no dito de que todos somos egoales diante da lei, pro us máis que outros.

Coido, po-lo tanto, inda que seña difícil de aceitalo, que pra adiantar no coñecemento do LCM hai que te-lo espírito do anónimo redautor do prólogo das «Costumes da mar», cando reconece que fóro-nos seus antergos quénes recolléro-no dereito marítimo, pro un dereito que non foi obra sua na súa meirande parte, pois atopá-

ro-no nos seus viaxes po-lo mundo, xa que, coma di o prólogo das «Costumes da mar» que atópase nas «Costums de Tortosa», «en la mar aja Costumes e Vsances per si metexes». Non é o dereito das «Costumes da mar» un dereito de ningún, pois é un dereito de todos aqueles que van po-la mar. So-nos antigos quenens fixeron ese dereito que atópase hoxe no «Libro volgare detto Consolato novamente stampato et corretto del quale sono scritti gli capitoli et statuti en buona ordinatione, que gli antichi ordinarono per gli casi de mercancia et di mare», coma reconece a tradución italiana impresa do 1539, e porque é de todos e foi obra dos antergos o Francesco Biscontini da Pavia pon remate a sua tarefa o dez de xaneiro do 1479 coas palabras «Die decimo mensis Januarii 1479 el presente libro de Consolato, et ragione maritime et mercantevole da Cathalano in italiano idioma per me Francisco Biscontini de papia». Dito con outras palabras, se a redacción das «Costumes da mar» e obra dos catalás o dereito recollido nas mesmas e de todos.

A dificultade pra ter este espírito ó doado identifica-la: o redactor do prólogo das «Costumes da mar» non tiña concencia nacional, pois non podia te-la, mentras que nosoutros temos que liberarnos da concencia nacional que hoxe afóganos; e xa se sabe que a liberdade é sempre unha conquista, endexamáis un don; por iso mesmo temos que liberarnos nosoutros da concencia nacional e non esperar que outros ceibenos, coma ós animais, da concencia nacional.

E teño pra min que o García no seu degaro de xungui-la redacción do LCM ós tres consulados da Coroa de Aragón rematou por xunguir tamen a creación do dereito ós ditos tres consulados catalás. Os principios direutivos da formación do LCM tenden dun lado a vencella-la creación do dereito ós consulados e doutro a vencella-la creación de determinados fatos de capítulos a determinados consulados: as «Costumes da mar primeiras» [¿e as «Ordeanzas do corso»?] teria-no seu orixe en Barcelona, as «Costumes segundas» quizaves tamén, inda que o xunguirse na compilación os «usos da mar», de craro orixe valenciano, leva consigo que vencellense en certo modo ó consulado de Valencia e de remate os «usos segundos da mar» naceron en Mallorca, pro ó mesmo tempo o «orden xudicial» tivo o seu orixe en Valencia, inda que a redacción que trun-

fou foi a mallorquina e os «capítulos do rei Pedro» incorporáronse en Barcelona.

Espresamente o García fala do triángulo mediterráneo da coroa de Aragón e no fondo afegúrase así unha creación xornaleira dos «usos primeiros da mar», polo que axuntáronse ó remate da redacción alfa un; agora ben, se nosoutros pensamos no dereito marítimo mercantil coma unha obra común dos homes da mar, entón temos que rematar que as cousas non puideron suceder así. E tornamos a atoparnos diante das palabras do anónimo redactor das «Costumes da mar», que atópanse nos manuscritos, que manifestou craramente que os antergos recolleron un dereito común a todo o Mediterráneo e que os antergos levaron a cabo tamén a corrección do seu primeiro traballo. Teño pra min que o noso anónimo redactor simplificou moito a formación das «Costumes da mar», que conocemos, pro sulinou, pra min moi esautamente, que o traballo de correxir e perfecciona-las «Costumes da mar» foi tamen un traballo de todo-los homes da mar do Mediterráneo.

Agora ben, coido que non é doado face-la historia das «Costumes da mar», inda que probablemente si seña doado face-la historia dos Libros dos consulados da mar.

Eu pensaría que entre o 1272 e o 1385 non hai dato algún que nos permita matinar que haxa diversas redaccións do LCM. Ten razón o García a sulina-la importancia dos consulados, dunha xurisdición autónoma dos consulados, pro a súa existencia non esprica a formación das «Costumes da mar», que eran xa conocidas e tiñan unha redacción escrita no 1272, cando inda non existía dita xurisdición autónoma na coroa de Aragón. Tendo esto presente eu matinaría que neses anos anteriores ó 1272 formouse unha redacción escrita das «Costumes da mar» que ten acollida parcial nas «Costums de Tortosa».

¿Formaban parte xa desas «Costums da mar» as «Ordeanzas do corso»? Hai un feito certo: nas «Costums de Tortosa» antepoñense as «Costumes da mar» dous capítulos, onde régrase unha materia semellante da regrada po-las «Ordeanzas do corso». Dende ese intre hastra o 1385 non hai dato algún que permita afermar ningunha cousa en concreto; nese período mencionáanse as «Costumes da mar», pro non dise ren sobor do seu contido. Ó masimo pódese dir que no 1333 as «Costumes da mar» testemuñadas comenzaba po-lo

actual m 46, esto é, o principio das mesmas non atopabase xa aqueles dous capítulos que atopábanse nas «Costums de Tortosa». Dende o 1385 atópanse manuscritos e edicións que reconocen sempre, inda coas dudas vistas, as «Ordeanzas do corso» coma unha obra independente das «Costumes da mar» fora do manuscrito valenciano, onde incorporanse dentro das «Costumes da mar», coas características vistas, e quizaves a tradución italiana do 1479 polo as razóns xa ditas.

Estos datos levaríanme a unha clarificación terminolóxica. O orixe do termo *codex* exprime a ambigüedad no termo código. Falamos do código teodosiano e do código napoleónico, inda que sabemos que son cousas diferentes. É certo que pódese dir que o primeiro é tecnicamente unha compilación e o segundo un código, pero esta distinción non resolve todos os problemas. ¿Qué facemos co aquelas obras que son resultado de axuntar textos espallados, moi modificados ás veces, que non conservan a afección do seu orixe? ¿Qué facemos cos «Furs de Valencia»? ¿Qué facemos coas «Partidas»? Pódese así exprimir que algúns falen das «Partidas» coma de un código e outros falen delas coma dunha recopilación. Neste sentido eu non vou discutirlo dereito de falar das «Costumes da mar» coma dunha compilación, pero teño para min que é necesario manter claramente xibado o problema das «Costumes da mar» e o problema do «Libro do Consulado da mar». As «Costumes da mar» poden sere unha compilación, pero é tamen unha obra independente, inda que rematará por atoparse dentro dunha compilación que teño alcuño hoxe de Libro do Consulado da mar. Agora ben, cando digo que o LCM é unha compilación nin afirmo, coma xa dixen, que solo son libros do consulado da mar aqueles que teñen os textos constantes na denominación do García, pois hai manuscritos —así o de Cagliari— e edicións —así a *princeps*— e traducións —a italiana do 1539— onde se non atopan todos, sin deixar por eso de sere LCM, nin digo que solo forman parte dos Libros do consulado da mar aqueles textos constantes, pois xa vimos que manuscritos e edicións incorporan outros textos que forman parte dos mesmos co mesmo dereito que os constantes e coa mesma constancia e inda máis ó partir dun intre concreto, como sucedeu coas ordeanzas de seguros.

Tendo presente esta clarificación temos que dir que entre o 1272

e o 1385 sabemos que corre po-lo Mediterráneo as «Costumes da mar», pro non podemos dir se nestas «Costumes da mar» atopábanse ou non as «Ordeanzas do corso». No 1272 as «Ordeanzas do corso» se non recollen nas «Costumes da mar», que atópanse nas «Costums de Tortosa», inda que atópense nestas dous capítulos, postos diante dos das «Costumes da mar», que regra-na mesma materia regrada po-las «Ordeanzas do corso»; no 1385 as «Ordeanzas do corso» recollense coma unha obra independente drento do libro dos capítulos do consulado de Mallorca, asomade das «Costumes da mar» e a súa independencia mantívose co paso do tempo, dentro dos lindeiros xa ditos.

Entre o 1272 e o 1385 as «Costumes da mar» deberon revisarse, inda que se non poida dir cando foro-no e cantas veces. Os criterios estilísticos do García non son, a meu ver, dabondo pra resolver todo-los problemas e a existencia dunha redacción beta e outra gamma semellame pouco probada. A existencia dunha redacción mallorquina das «Costumes da mar» semellame máis ben o refrexo de facer participar a todo-los reinos catalás da coroa de Aragón na redacción das «Costumes da mar» que unha realidá. A famosa redacción gamma pra o García non sería outra cousa que unha reorganización dun material xa existente, ó que axuntó-se once capítulos novos, pro é esta derradeira afirmación a que amosa de maneira máis crara a artificiosidade da construción, poi-los criterios estilísticos levarían consigo necesariamente a negar que puideran ser todos da mesma mau —us teñen cláusula e outros non— e a ter que afirmar que os capítulos dos «usos da mar segundos» coa cláusula estilísticas propia dos capítulos dos «usos da mar primeiros» teñen que sere do mesmo intre redaccional destes derradeiros.

Hai que ter en conta dous problemas: primeiro, a aparición de novos capítulos, e segundo, a aparición de novas redaccións das «Costumes da mar». Quero dir con estas afirmacións que hai capítulos que non teñen ningunha cláusula estilística, no sentido do García, pro é evidente que hai outros criterios estilísticos, que poden levar á identificación de maus diversas nas «Costumes da mar»; pro mantendo-me nas cláusulas estilísticas, é certo que o García non aseñou todas; hai capítulos —e falo moi provisoriamente, onde dise: «E fon fet perço aquest capitol...», hai capítulos que teñen esta outra cláusula: «E per les raons dessús dites fo fet

aquest capitol»; hai outros onde dise «E per l'esclariment dessús dit fo fet aquest capitol» e hai outros que teñen unha espricación máis estensa, que quudou xa rexistrada, pra non citar máis que as cláusulas principais. Nin afermo nin nego que todas estas cláusulas señan da mesma mau, o que afermo é que algunhas veces estas cláusulas axustáronse a unha ordeación máis antiga, coma vimos que sucedeu con certos capítulos das «Costums de Tortosa». Quere esto dir, po-lo tanto que a vellez do material non pode identificarse po-las cláusulas estilísticas, pois, e algunhas destas cláusulas sulíñano, as correucións fixéronas os antergos, aqueles que fixéronas «Costumes da mar», que refreusionaron sobor da súa primeira decisión. E inda teríase que ter tamen en conta o xa aseñado de non sere doado identificar craramente as dúas cláusulas fixadas po-lo García: cunha certa facilidade pódese pasar dunha a outra.

Agora ben, se temos unha primeira redacción conocida —aquela que testemuñase nas «Costumes de Tortosa»— que co paso do tempo quizaves medróu ó achegarselle novos textos, o que ten que preguntarse e se a revisión do material antigo e do novo material —se haino, xa que as «Costums de Tortosa» non conserva-nas «Costumes da mar», mais unha selección— foi obra dunha sola mau. Neste sentido quero sulíñar que teríase que xibar dun lado o problema da creación das normas xurídicas e doutro o problema da redacción definitiva desas normas. Volto de novo as «Costums de Tortosa»: unha norma antiga, recollida neste texto, revisóuse formalmente, inda que ó parecer non materialmente. Neste sentido a práctica de cotío do comerciío e da xurisdición tivo que facer nacer novas normas —é unha hipótesis moi probabre, xa que dende o Pardessus falase de momentos cronolóxicos diferentes—, inda que hoxe conozamo-las samente baixo da forma derradeira dada po-lo redautor das «Costumes da mar» que atópanse nos manuscritos e nas ediciós. ¿Agora ben, esta redacción fíxose dunha sola vez?

Se aquelas cláusulas estilísticas queren empregarse coma testemuños de diferentes maus, teríamos que reconocer que as «Costumes da mar» revisáronse varias veces no periodo que vai dende o 1272 ó 1385; non quero dir que durante todo ese período, quero dir únecamente que no 1385 xa está fixado formalmente o texto que hoxe conocemos.

Ademáis, e a ordeación que atópase por exemplo no ms. V e no

ms. L, na súa parte derradeira, demostra, é tamen posíbele que se leve a cabo unha reordeación do material, sin ter que modifica-la redacción das normas.

O único seguro que pódese dir, a meu ver, e que as «Costumes da mar», coma xa dixo o Pardessus, que xiraban no 1272 non so-nas «Costumes da mar» que hoxe atópanse nos manuscritos. Lembraréi as palabras esautas do Pardessus: «Il est donc naturel d'en conclure que la plus ancienne rédaction connue du *Consulat de la mer* étoit postérieure à 1340. Ce n'est donc ni cette rédaction, ni à plus forte raison celle qui a été imprimée en 1494, qu'on avoit en vue lorque dans les documens de 1283 et de 1343, on parloit des *coutumes écrites de la mer*»³⁴⁶. Pra o que direi máis adiante, quero acrar que o Pardessus non fala eiquí do que chamamos hoxe «Libro do Consulado da mar», mais das «Costumes da mar». E certo, teño pra min, que non é necesario matinar, coma faino o Pardessus, que as «Costumes da mar» tiveron que cristalizar na forma actual despois do 1340; o Pardessus fixo unha tal afirmación xa que matina que denantes do trunfo da edición do 1494 imprimíronse outras edicións do LCM, que tiñan unhas «Costumes da mar» diferentes das que trunfaron no 1494. Así maxinaba que a edición do 1484, que non conocea, conoecía samente a descrición do Capmany, tiña un texto diferente das «Costumes da mar» e afigurábase que sobor desta edición ou doutra semellante fixérase a tradución italiana do 1539, onde incorporáranse ás «Costumes da mar» os dous primeiros capítulos dos «Capítulos do rei Pedro» e botáranse fora os m 154-158. E eu agora ameceréi aínda o m 87, que non conta, ó parecer, con tradución manuscrita algunha.

Eu coído que estas afirmacións do Pardessus non son dabondo pra afirmar que as «Costumes da mar» non tiveran xa un texto cristalizado, como amosa a tradición manuscrito, inda que non nego que poidan facerse neste texto cristalizado algunha anovación, coma as aseñadas, pro tamén coído que estas afirmacións non son dabondo pra rechaza-lo falacio do Pardessus, xa que o primeiro testemuño que temos do texto cristalizado e o ms. L do 1385³⁴⁷.

346. PARDESSUS V 327.

347. WAGNER, *Sobre cit.* (vid. infra n. 355) 265 n. 23 di: «Que això no s'esdevingué fins a 1347 és una suposició que de moment no pot recolzar en el fet que en una de les dues redaccions del Consolat que se'ns han conservat, en

Tornamos así a situación orixinaria: do 1272 temos o testemuño dunhas «Costumes da mar» que non son «Costumes da mar» que atópanse no ms. L do 1385. ¿Que pasou neses cen anos? ¿Que modificacións sofriron as «Costumes da mar»? ¿Cando fíxose a redacción definitiva? Déronse respostas a esta derradeira pregunta, pro todas elas con pouco fundamento, xa que as mesmas vencéllanse, ó cabo, ó xurdimento dos consulados: e eu xa suñí que o dereito procesal xúnguese ó brocho dunha xurisdición autónoma, pro no dereito sostantivo, as «Costumes da mar». Deixando no aire a data, coido que a redacción actual —aquela que atópase en todos os manuscritos e en todas as edicións, prescindindo do número de capítulos e da súa diferente ordeación— é a etapa derradeira dun longo proceso, que débese a unha man —o que non quere dir que seña o autor desta redacción definitiva unha sola persoa—, que levouna a cabo unitariamente. Este anónimo redactor que levou a cabo a redacción unitaria definitiva e que non fixo, isto é claro, desaparecer os testemuños do orixe diferente dos distintos capítulos falou en primeira persoa no prólogo das «Costumes da mar», pro tamen no m 144. E esta redacción puido sufrir inda algunha pequena modificación —¿aquela que atópase na tradución italiana? ¿a do m 87?—, pro ó parecer permaneceu intacta en todos os manuscritos e en todas as edicións, fora das ditas pequenas modificacións.

Eu reconozco que eiqui estou facendo o que fixo o Pardessus: falar sin un coñecemento preciso da tradución italiana do 1539, da tradución manuscrita italiana do 1479 e do ms. C, que ten un posto especial dentro da tradición manuscrita, pro o que eu quero eiqui suñir son dúas cousas: primeira, se os manuscritos e as edicións amosan, agás estas pequenas diferencias ditas, o mesmo texto, pódese afirmar que hai unha redacción definitiva das «Costumes da mar», inda que esceucionalmente poidan facerse algunha pequena modificación nela; segundo, se isto é así, hai que reconecer entón que a data do 1340 non ten o valor que atribúelle o Pardessus, isto é, a redacción definitiva puido facerse despois do 1340, pro tamen antes. Pro tornareis máis adiante sobre este punto.

lloc dels capítols 109 a 113 hi hagin els dos primers capítols d'una ordinació del rei Pere, de l'any 1340 »

Agora ben, ¿por qué a estrana ordeación do manuscrito valenciano? O pensar que este manuscrito refrexa a ordeación orixinaria das «Costumes da mar» ergue máis problemas dos que resolve. Non vou a insistir no xa dito. Quero lembrar que este manuscrito é aquel que amosa unha ordeación máis perfecta, xa que ten unha táboa do seu contido, un prólogo xeneral de toda a obra, un prólogo do libro puidéramos dir coa terminoloxía do manuscrito, úneco caso na tradición manuscrita, unha primeira sección, onde atópase o dereito procesal: o «Orden xudiciario de Valencia» na redacción propia de Valencia; unha segunda sección onde atópase o dereito material de todo-los consulados do mundo, isto é as «Costumes da mar» e as «Ordeanzas do corso» mesturadas nunha obra que no epígrafe do capítulo primeiro chámase: «les bones costumes e els bons usatges de la mar», o que ten un refrexo na táboa; unha terceira sección onde atópase o dereito material dos consulados catalás, isto é os usos da mar de Barcelona, que so-nas decisións reais do Pedro IV, que coñecemos hoxe coma «Capítulos do rei Pedro» e remata cunha cuarta sección onde atópase o dereito propio do consulado de Valencia: os privilexios do Consulado de Valencia, inda que poidan sere compartidos con outros consulados. Pra min é difícil de comprender que quen levóu a cabo esta laboura de reordeación, amosara un respecto tan grande polas «Costumes da mar», que levóulle a mante-lo orden orixinario das mesmas nun intre no que corríanas «Ordeanzas do corso» coma unha obra independente e un texto das «Costumes da mar» máis rico.

Eu xa suliñei, dentro do prantexamento do García, que cando enviáse a compilación valenciana a Mallorca no 1343 e fáise a redacción gamma no 1343-1345, modifícanse as «Costumes da mar» e as «Ordeanzas do corso», pro no-no «Orden xudiciario de Valencia», que contén un capítulo primeiro, que non se emprega en Mallorca, xa que dende o 11 de outubro do 1343, como quedóu dito —a autorización os mallorquís a xuzgar «per modum et formam in civitate Valencie usitatos» e do trinta e un de maio do 1343—, os cónsules de Mallorca elíxense na vixilia do San Xoán, o que non ten espiación, se no privilexio do trinta e un de maio do 1345, mándase polo rei que ouservense os privilexios e os usos da curia dos consules da mar de Mallorca «secundum quod servatur in civitate Valencie, habita tamen primitus certificatione(m) per literas guber-

natoris et baiuli generalis regni Valencia de usu et privilegiis supradictis»³⁴⁸.

Teño pra min que «Costumes da mar» —e no seu caso «Ordeanzas do curso»— non son ni-nos usos do consulado de Valencia —lémbrese o que di o prólogo do ms. V— ni-nos seus privilexios; por iso pódense modificar, entramentres se non pode modifica-lo «Orden xudiciario de Valencia», inda que si arrequeenta-lo con novos estilos o que quizaves permeteríamos recupera-lo orixinario «Orden xudiciario de Valencia» que chegou no 1343 a Mallorca. Quere esto dir, a meu ver, que as «Costumes da mar» se non enviaron oficialmente a Mallorca, entramentres enviouse oficialmente o «Orden xudiciario» pois aquelas eran un patrimonio común a todo-los feireantes e navegantes do Mediterráneo.

Tendo esto presente, comprenderase inda millor a razón da miña impresión: non podo crêr que o redautor do ms. V, que non ten obrigación de respeuta-lo texto das «Costumes da mar» —e das «Ordeanzas do curso»— respetárao de tal xeito que copiáu de fio a fondo a vella compilación beta, que era xarada a compilación alfa dous no seu gromo.

Esta impresión non ten valor algún, pro tampouco paréceme que a formula do manuscrito de Valencia teña o valor que dalle c García. O úneco dato seguro que temos é que nas «Costums de Tortosa» os capítulos que recollía-na regración do dereito marítimo militar —cousa que tamén fa-nas «Ordeanzas do curso»— atopábanse diante das «Costumes da mar» e non despois. Ademáis se o manuscrito V refrexara fielmente o orden orixinario da redacción beta e po-lo tanto da redacción alfa dous, deixariáse sin espricación dun lado o feito de atoparse nos fatos estabrecidos capítulos que tiveron que nacer despois de fixarse os fatos ou que tiveron que nacer denantes e po-lo tanto se non podían atopar nun fato que xurdíu despois. Téñase en conta que esto é necesario mante-lo, se nos movemos no pensamento do García: os capítulos do fato dos «Usos da mar» achegáronse ó remate, po-lo que se non poden atopar diante das «Ordeanzas do curso» e o mesmo ten que dirse pra os capítulos do fato das «Costumes da mar», xa que se non poden atopar no fato dos «Usos da mar». Doutro lado, pra mante-la sua

348 Vid supra p 138 ss.

afermación o García deixa sin espricar por qué no paso da redución alfa dous á beta non funcionaron os principios direutivos da formación das recopilacións. Ademais, e de remate, diréi que tampouco o argumento do García —ningún capítulo das «Costumes da mar segundas» atópase nas «Costums de Tortosa»— semella poderse manter.

Eu deixéi recollidas algunhas identificacións feitas po-lo Oliver e po-lo Wagner que amosan que algún dos capítulos das chamadas po-lo García «Costumes da mar segundas» atopan refrexo nas «Costums de Tortosa», pro a proba máis crara é, a meu ver, o V 4 = m 48. Eu quixera lembrar que o García afermou que somente había dous criterios pra evita-los farallós nos que naufragou o Valls: o criterio topolóxico e o criterio estilístico, e axustou: «Per tant, no hi ha, dins la tradició manuscrita actualment coneguda, cap altre criterio d'identificació, fora de les fórmules d'estil». Drento do prantexamento do García o criterio topolóxico leva a afermar que o V 4 = m 48 atópase no fato das «Costumes primeiras», pro o criterio estilístico leva a correxir esta afermación: a presenza da cláusula estilística propia do fato das «costumes segundas» no V 4 = m 48, leva a poñelo neste fato e, lóxicamente, deberíase concruir que, atopándose —como reconece o García— un paralelo deste capítulo nas «Costums de Tortosa», nestas atopábase testemuña-da unha compilación, onde recollíanse xa as «Costumes da mar primeiras e segundas», co que viríase abaixo toda a construción do García; por iso compréndese que o García aferme que a primeira parte do V 4 = m 48 é do fato das «Costumes primeiras» e a segunda do fato das «Costumes segundas», pro pra face-lo así o seu úneco apoio é a súa propia afermación: nas «Costums de Tortosa» atópanse somente paralelos das «Costumes da mar primeiras».

Hai algo que fáime pensar que no manuscrito V atópase o refrexo, nalgunha ocasión, dun orden máis antigo do que atópase nos outros manuscritos. Pro non so-nos argumentos do García os que convencenme, mais unha afermación feita xa fai moitos anos po-lo Pardessus. Comentando o m 144, onde dise «Lo primer cas ès que si lo senyor de la nau o leny no darà vianda a sos mariners sofiçient, axi com ja es acostumat e en un capitol ja dessus dit és, esclarit e çertificat», o Pardessus di: «Ce n'est point un chapitre

349 PARDESSUS II 134 n. 1.

précédent, mais dans le chap. C [145], qu'il en est question»³⁴⁹. Agora ben, o m 144 é o V 212 e o m 145 é o V 84, po-lo que o ms. V conservaría o orden antigo. É certo que tamen o Pardessus, comentando o m 228, onde atópase un reenvio tamén a un capítulo anterior, di que o reenvio faise o m 238 e eiquí o m 228 é o V 154 e o m 238 é o V 161³⁵⁰, pro teño pra min que o reenvio proposto po-lo Pardessus non é esauto; eu pensaría máis ben no m 138 ou no m 139 = V 78-79.

O feito dito non amosa que o ms. V conserve sempre o orden antigo, e po-lo tanto tampouco amosa que o ms. V teña unha ordeación máis antiga ca do ms. L, por falar do ms. máis antigo. Isto é, teño pra min que todo-los manuscritos teñen unha mesma redacción, inda que teñan unha ordeación diferente; esta ordeación diferente atópase fundamentalmente no ms. V e eu, inda sulñando ás veces certas especialidades, pénsese na parte derradeira do ms. L, aceito que os demais manuscritos (quizavés coa esceución do ms. C, que non conozo, pra non menciona-la tradución italiana) teñen unha mesma ordeación; pro este mesmo feito fáime pensar que é o ms. V o que alónxase da ordeación dos demais manuscritos. Pro non é tanto estas hipótesis o que quero sulñar, mais a necesidade dun traballo meirande sobor dos manuscritos. O ms. V pode modifica-la ordeación do ms. L, pro teño pra min que o ms. L non pode modifica-la redacción do ms. V, poi-los capítulos dos «usos da mar segundos», po-las razóns que dixen, non é unha novedá mallorquina. Pra evitar trabaucaciós, preciso que o falar do ms. V e do ms. L falo dos testos neles contidos. O ms. V e o ms. L puideron facerse sobor dun manuscrito máis antigo, do que o ms. V arredóuse seña por non recoller todo-los capítulos —lembro denovamente ó m 179— seña, po-lo tanto tamén, por non mante-la vella ordeación. E po-lo xa dito, teño pra min que nesta ordeación as «Ordeanzas do corso» remataron por atoparse no posto que hoxe teñen no ms. V.

Se os manuscritos ofrecen a redacción definitiva, inda que seña cunha ordeación diferente, ¿cómo espricar o m 87? Se o dito m 87 é unha achega no ms. N puidérase matinar que non ten tradición manuscrita algunha: é unha novidade das ediciós, da mesma ma-

350. PARDESSUS II 206 n. 5: «Le chapitre auquel celui-ci renvoie est le chapitre CXCIII» (238). ¿Poderíase pensar nunha dobre errata por «chapitre XCIII» (138)?

neira que é unha novidade da edición italiana a incorporación dos dous capítulos dos «Capítulos do rei Pedro» dentro das «Costumes da mar» ou é unha novidade das edicións —agás o ms. C— a incrusión do «xuramento dos abogados de Mallorca».

Dar unha resposta é difícil: cos criterios do García teríamos que afirmar que o m 87 e do fato dos «usos segundos», pro nos atoparíamos diante do feito de non te-lo dito capítulo os manuscritos. É certo que a afirmación do García é de obrigo: se o m 87 non fose do fato dos «usos segundos da mar» entón teríamos que reconocer que o ms. V non é xarado o seu modelo. A outra posibilidade: o autor da edición do 1484 construiu un novo capítulo ó partir de principios antigos. Pro esto nos leva a outro feito. Se prescindimos do criterio topolóxico —non esquencerse de que o m 87 probablemente non ten unha tradición manuscrita— e acodímo-los outros criterios do García: o estilístico —capítulo breve e que non ten cláusula estilística— o material —o m 87 regra as relacións propias das «Costumes da mar primeiras»— e o formal —o m 87 non acrara ningún outro capítulo— teríamos que dir que estamos diante dun capítulo antigo, das «Costumes da mar primeiras» pra mante-la terminoloxía. E un certo apoio teríase no feito que o mesmo non é máis que a xeneralización dun principio xurídico, que atópase noutros capítulos. Xa o Pardessus decia que o principio recollido no m 87 atopábase nos m 100, 114, 115, 187 e 257 e recollía un caso diferente do que atópase no m 83³⁵¹.

¿Foi esta xeneralización obra do editor do 1484 ou atopabase nun manuscrito hoxe perdido? ¿Fíxose a achega do m 87 no ms. N doutro manuscrito ou da edición do 1484? Pode sere que a tradución italiana do 1479 puidera darnos unha resposta, inda que coído que a mesma non ten maior importancia pra o que quero sulñar.

Dende o 1385 temos unha redución das «Costumes da mar» —e tamén das «Ordeanzas do corso»— que atópase testemuñada nos diferentes manuscritos, inda que nin todo-los manuscritos teñen o mesmo número de capítulos (seña por prescindir dalgún capítulo, seña por dividir de maneira diferente os capítulos) nin todo-los manuscritos ofrece-nos capítulos no mesmo orden. Eu non quero dar impresiós trabucadas e po-lo tanto reconozo que é o ms. V

351 PARDESSUS II 877.

o que ten unha ordeación máis enxebre e onde marran tamén —ó parecer— un número meirande de capítulos (non quero hipotetizar sobor do número de capítulos da tradución italiana do 1539), pro tamén engado que este feito vese sulñado po-la edición do Colon: tamen o ms. C ten unha ordeación diferente dos demais manuscritos, como xa quedou dito, inda que non poida dir ren de seguro sobor do seu número de capítulos. E inda reconecendo que os demais manuscritos axeitanse con pequenas diferencias seña na ordeación dos capítulos seña no número de capítulos —máis por necesidade que por outra cousa— teño que sulña-la ordeación especial dos derradeiros capítulos das «Ordeanzas do corso» do ms. L.

Dito esto podo voltar á primeira afirmación: con seguridade pódese dir que dende o 1385 atópase testemuñada unha redución que atópase en todo-los manuscritos conservados e nas edicións, inda que poidanse atopar diferencias nas ordeacións do seu contido e no número dos seus capítulos. ¿Cándo fíxose esta redución? O que eu coido que poida responderse, quedou xa recollido. Fago de novo esta pregunta pra chama-la atención sobor doutro feito, que, a meu ver, e fillo dunha trabucación.

Se vencellamos a redución definitiva das «Costumes da mar» —e das «Ordeanzas do corso»— á aparición do LCM, correse o perigo de fixa-los dous sucesos ó redor do 1370. Agora ben, teño pra min que as dúas cousas non teñen a mesma historia: o LCM é unha recopilación e se non fixo a redución definitiva das «Costumes da mar» pra inseri-la no LCM, pois coido que o LCM non naceu nese intre. E pra comprende-lo que quero dir, hai que face-lo esforzo de arrincarse da cachola o LCM feito po-lo Ceelles e darse conta que os Libros dos consulados da mar da baixa Edade Media non son outra cosa, poderíase dir, que os cartularios dos diferentes consulados, po-lo que cada un tiña o seu. Estos LCM recollía-no dereito da xurisdición autónoma no tráfico mercantil marítimo que era o consulado, o que esprica tamen que os feireantes tiveran tamén interes en te-lo dereito mercantil e non solo o dereito común a todo o Mediterráneo, senon tamen o dereito propio de cada un dos consulados onde negociaban.

Coido po-lo tanto e agora céntrome na coróa de Aragón, que dende antigo tivo que xirar, unha vez redautada por escrito, as «Costumes da mar» e dende o 1272 temos testemuños desta redución

escrita do dereito mercantil marítimo común a todo o Mediterráneo, inda que no-na conocemos, xa que ate nosoutros chegou somente a seleución do seu contido —e non sabemos se feita fielmente— feita nas «Costums de Tortosa». Sabemos tamen que no 1331 e no 1333 corría-nos manuscritos desas «Costumes da mar», pro non sabemos como era-nas redaucións que atopábanse nos mesmos; nin siquiera podemos dir se neses manuscritos atopábanse ou non a carón das «Costumes da mar», deixando a un lado a súa redaución, as chamadas hoxe «Ordeanzas do curso».

Tamén sabemos que no 1283 organizóuse a xurisdiccion autónoma do consulado de Valencia e durante o século XIV, pra citar somente os máis importantes, a dos consulados de Mallorca, Barcelona e Perpiñán. Desde aquel intre —o 1283— puideron nacer xa os LCM, inda que o seu contido non poida determinarse *a priori*. No 1340 nace un dereito común ós consulados da coróa de Aragón, os «Capítulos do rei Pedro» e no período 1336/1343 ou 1343/1345 adequiréu a súa forma trunfante —pra min tivo que tere unha redaución máis antiga en Valencia, inda que hoxe se non conserve— o «Orden xudiciario de Valencia», que atopase nas edicións. Agora ben, dir que dende estes intres pode nace-lo LCM é facer unha afirmación xunghida á edición do Celedes. O testemuño máis antigo que conozo onde fálase dun LCM e o documento do 1373, mencionado po-lo Perels, que no-nos permite saber cal era o seu contido, pro nos permite facernos unha idea do que chamabase LCM: era o libro onde un consulado recollía os seus privilexios, o seu dereito en definitiva. Por esta razón, coido que é unha tarefa inutil determina-lo intre no que nacéu o LCM, empregando pra súa identificación os criterios que proveñen da edición do Celedes.

Eu penso que debemos ter ben craros os diferentes problemas.

Primeiro ¿cando comenzaron a xurdir os Libros dos consulados da Mar? Unha resposta penso que non poida darse, nin hoxe nin endexamáis; pódese dir que dende o intre no que tra-la aparición dun consulado, éste sintéu a necesidade de recoller nun libro o seu dereito —o propio dese consulado, o común os consulados da coróa de Aragón e o común o Mediterráneo— póden nace-los libros dos consulados da mar, que no seu contido depende desa necesidade sentida.

Segundo, ¿cando comenzaron a chamarse esos libros, Libros do

consulado da mar? Tamén eiquí coido que non poida darse endexamáis unha resposta definitiva; é certo que hai sempre un primeiro intre, pro o difícil é atopalo documento que nos permita afirmar que a dita denominación empregouse por vez primeira. Sabemos que utilizouse no 1373, pro non podemos dir que nese ano empregouse por vez primeira.

Terceiro, ¿tiñan estes LCM un contido fixo? O contido destes libros dos consulados da mar ten un condicioamento cronolóxico craro: en teoría solo poden recolle-lo dereito existente no intre da súa aparición; e digo teóricamente, pois non sempre recollen todo o dereito existente. Se nos poñemos na segunda metade do século XIV e nos fixamos nos elementos máis importantes do momento, é evidente que atopamos nese intre un dereito de todo-los consulados do mundo, como diría o redautor do ms. V —as «Costumes da mar» e as «Ordeanzas do curso»—, un dereito común a todo-los consulados da coróa de Aragón —os «capítulos do rei Pedro» e eiquí poderíase axustar o «orden xudiciario de Valencia», que chegou a ter este carauter— e un dereito propio de cada un dos consulados —os seus privilexios e as súas normas, inda que nalgún caso puideran co paso do tempo trocarse nun dereito común a todo-los consulados da coróa de Aragón e inda do Mediterráneo, lembrense as «ordeanzas de seguro» de Barcelona.

Cada consulado, dacordo cos seus intereses, recollía dese tesouro xurídico aqueles elementos que consideraba oportuno e algo desto pode verse seña nos manuscritos conservados seña nalgús manuscritos perdidos, seña nas primeiras edicións. É certo que os manuscritos, po-la maneira da súa edición po-lo Colon, ofrecen unha imaxe uniforme, pois, seguindo a edición do Celles, pubricase po-lo Colon escrusivamente o dereito común ó Mediterráneo e o dereito común os consulados da coróa de Aragón, po-lo que normalmente esos dereitos atópanse en todo-los manuscritos (e inda así vimos que non sempre recolléuse) e prescindese do dereito propio de cada un dos consulados, que é o que da a súa persoalidade ós diferentes libros. Ademáis esta uniformidade sulíñase po-lo feito de presupoñer que o dereito común o Mediterráneo e á coróa de Aragón atópase no mesmo orden nos manuscritos, cousa que sólo pode afirmarse prescindindo seña de outros elementos, que altera-no

dito orden, seña da propia historia dos manuscritos, seña, de cabo, de certos manuscritos que no-no teñen.

Se no-nos deixamos condicionar nin po-la edición do Cealles nin po-la edición do Colon nin po-las afirmacións do García, teríamos que reconecer que os manuscritos conservados ofrecen Libros do Consulado da mar diferentes, inda que cadren na súa meirande parte po-las razóns ditas. E que esta variedade de contido no LCM vencéllase o seu orixe: é necesario identifica-los manuscritos que recollen un LCM oficial ou oficioso dun ou doutro consulado e os manuscritos que naceron —ou puideron nacer— no xiro dun consulado, mais pra satisfacer-los intereses dun feireante.

Neste sentido prantexarse a aparición do LCM paréceme non solo unha tarefa inútil, mais antihistórica. O problema da aparición dos Libros dos consulados da mar —e non do libro— resólvese no problema da aparición do dito alcume que, como xa vimos, pégase a libros de contido moi diferente. E quero sulñar con esto que puido haber libros dos consulados da mar inda denantes de recibilo dito alcuño.

Coarto, ¿xurdiu algunha vez o LCM? Cando un prantéxase esta pregunta, ten xa na mente un tipo ideal do LCM: o LCM é unha compilación onde atópanse os chamados po-lo García elementos constantes, inda que con matizacións. O D. Galo, coa súa precisión, decía que as «Costumes da mar» non deben identificarse co LCM, pois son unha parte do mesmo: o LCM pra o D. Galo son os 334 capítulos numerados e axustaba «Suelen acompañar al Llibre otros documentos, entre ellos los «Capítols del rey en Pere»³⁵², e con esto lévanos de novamente o Cealles. Outros autores, menos precisos, falan das «Costumes da mar», das «Ordeanzas do corso», do «orden xudiciario» e dos «Capítulos do rei Pedro» como elementos do LCM. Nun caso coma noutro estamos diante dunha identificación artificial, que arrinca da edición do Cealles centrandose us nos 334 capítulos primeiros e outros nos elementos máis importantes da edición.

E continuando dentro da influencia do Cealles tratase de atopalo intre no que a dita compilación, así artificialmente identificada, xurdeu. E así dise que ó redor do 1370 fíxose o dito LCM, que non

352. Galo SÁNCHEZ, *Curso de Historia del Derecho* (9.ª ed.) (Madrid) 125 ss.

esisteu endexemais fora da mente dos historiadores. Pro o que en quero agora sulñar é que esa datación do LCM no 1370 é unha trabucación, que atopa o seu orixen no equívoco emprego que fai o Pardessus e o Wagner do término Consulado e libro do consulado da mar: Non quero face-la historia desta trabucación, inda que teño pra min que atopóu se no-no seu orixe, si a maior difusión nestes frases, coas que abrese o apartado adicado a «La recopilación definitiva del *«Libro del Consulado del Mar (siglo XIV). Sus elementos integrantes»*»:

«Llegamos al punto final de este proceso de formación y desarrollo del derecho marítimo barcelonés o, mejor, mediterráneo, iniciado a mediados del siglo XIII. En realidad, si es término en un sentido histórico o cronológico, es punto de partida en el sentido heurístico o documental, por cuanto la evolución anteriormente descrita, se apoya, en definitiva, en el testimonio positivo de la única versión o texto llegado efectivamente hasta nosotros, y conocida universalmente como *Llibre del Consolat de Mar*.

La crítica externa y el análisis interno del mismo coinciden en señalar la segunda mitad del siglo XIV como época segura de composición de este Libro, en la forma actual. Los más antiguos manuscritos se han fechado como de fines de dicho siglo. La penetrante sagacidad de Pardessus pudo advertir, por una parte, en determinados capítulos, la indiscutible huella de una utilización de otros pertenecientes a los *Capitols del rey en Pere* sobre hechos marítimos, promulgados en 1340. También se fijaba en la ausencia, en el código, de toda regulación de *seguros marítimos*, materia que empezaría a ser objeto de tratamiento jurídico en general, a principios del siglo XV, por lo que entendía que de haber sido nuestro Código formado en este siglo hubiera forzosamente incluido aspectos sobre la misma. Concluía, por ello, que la fecha de éste debía situarse entre 1340 y 1400. Wagner estima como época aproximada la de alrededor de 1370, opinión admitida comúnmente por los autores contemporáneos. El reciente hallazgo del manuscrito de la Real en Mallorca, fechado explícitamente en 1375, confirma esta opinión. El propio Wagner ha apuntado que esta composición del *Llibre* sería llevada a cabo, sin duda, por algún Secretario del Consulado del Mar en un sólo libro o manual los diferentes textos normativos de más corriente utilización en el Consulado barcelonés y en los demás consulados mediterráneos»³⁵³.

353. FONT, prólogo en CAPMANY XLV.

Agora ben, o Pardessus afermaba, no volumen segundo da sua crásica obra: «Il me resta à rechercher, au moins par des conjectures, à quelle époque la rédaction du Consolat peut être fixée. Je crois pouvoir assurer qu'elle n'est pas postérieure à 1400», xa que é nos primeiros anos do século xv cando comenza-nas «Ordeanzas de seguros»³⁵⁴. Pro o «Consolat» pra o Pardessus so-nas «Costumes da mar», pois doutra maneira o argumento das ordeanzas de seguros non tería valor algún, pois as mesmas atópanse nas edicións e no ms. N —e no P, que inda non conocía neste intre o Pardessus—. E esto faise evidente cando o Pardessus torna a ocuparse da mesma materia no volumen V da sua obra, como xa quedóu recollido, o falar de tradución italiana do 1539.

Tamén o Wagner axudóu da sua parte a esta trabucación e adquiriu ademáis unha fama que, a meu ver, era doutros, inda que o Wagner non fixo ren pra esta nova trabucación, pois craramente afirmóu:

«Segons les investigations de Pardessus i Twiss, que, ara com ara són concloents per a aquesta qüestió, s'ha de tenir per segur que el llibre del Consolat de Mar, almenys en sa forma actual, no degué ésser redactat abans de la segona meitat del segle XIV, vers l'any 1370, a Barcelona, i ho devia ésser probablement per un Secretari del Tribunal Maritim de la localitat»³⁵⁵.

O Wagner espresamente limitóuse a recoller eiquí os resultados do Pardessus e do Twiss sobor do que chama o Libro do consulado da mar, pro que so-nas «Costumes da mar», como amosa craramente todo o seu traballo, onde da «una comparació del contingut dels capítols de Dret maritim de Tortosa amb els corresponents del Consolat de Mar»³⁵⁶.

354. PARDESSUS II 24 ss.

355. R. WAGNER, *Sobre els Orígens del «Consolat de Mar»*, en *RJC* 37 (1931) 255. Eu non vi-nos traballos do Twiss.

356. WAGNER, *Sobre* cit. 256. Teño pra min que a trabucación atopa o seu orixe no feito de que o Wagner aferma que a redacción máis antiga do Consolat=Costumes da mar debeuse facer pouco despóis do 1258: debeu sere unha «anotación del Dret consuetudinari», que chegou a adequerir fama, incluso fora de Barcelona, pois empregouse nas «Costums de Tortosa»; e di que debeu sere unha «anotación», xa que non habia en Barcelona unha xurisdicion autonoma hastra o 1347: «Fou després, mercès a la tasca dels Secretaris d'aquest Tribunal, que el Consolat (=Costumes da mar») sembla haver obtingut aquella

Tendo presente estas trabucaciós, podemos fixar denovamente ó redor do 1370 a aparición do LCM, xa que no 1385 fíxose o ms. L. ¿Agora ben, que LCM é o que apareceu ó redor do 1370? Facer coma fai D. Galo é reconocer que o tal libro nacéu no-no 1370, mais no 1494, pois, no estado presente dos nosos coñecementos, a primeira vez na que arrecadáronse «orden xudiciario de Valencia», «xuramento dos abogados de Mallorca», capítulo das «sportades», «costumes da mar» e «ordeanzas do corso» nun testo de 334 capítulos unitariamente numerados foi na edición do Celedes do 1494. Facer coma fai o Colon e o García supón partir do Celedes, pro deixando da parte. Os criterios da edición son xa coñecidos; pro isto leva consigo dun lado a incorpora-los «Capítulos do rei Pedro» que se non atopan na edición do 1484 e que na do 1494 atópanse fora dos 334 capítulos ditos e doutro lado a facer desaparecer do testo unitario dos 334 capítulos o «xuramento dos abogados de Mallorca». Pódese así falar dun LCM onde atópanse os textos ditos polo García —«orden xudiciario», cap. das «sportares», «Costumes e usos da mar», «ordeanzas do corso» e «capítulos do rei Pedro»—, polo que dentro do seu prantexamento tería que dirse que tra-lo 1349 foi cando incorporáronse os «Capítulos do rei Pedro» á redacción gamma chegada de Mallorca a Barcelona, pro que no 1350-1358 a imaxe e semellanza do que fíxose en Barcelona, incorporáronse os mesmos na redacción beta Valencia. Como xa dixeran o ms. V do 1407/1409, úneco testemuño da presunta redacción beta, non copiou os ditos «Capítulos do rei Pedro» da presunta redacción beta, pois copiou-nos dun traslado do orixinal e no 1373 incorporáronse no libro do consulado da mar de Barcelona dous pautos do rei Pedro coa vila de Barcelona e nos mss. P e F atópanse os «Capítulos do rei Pedro» despóis dos ditos pautos.

Teríase polo tanto que remaíar que a incorporación tivo que

forma en la qual havia de guanyar fama universal. En efecte, aquella collecció jurídica amb anexos posteriors, disposicions dels reis de la Confederació catalana-aragonesa i bona colla de fonts jurídiques estrangeres, especialment de la costa occidental de França, convertit tot això per ells en Còdig de vastes proporcions (23), feren del Consolat de Mar allò que en son temps li donà preeminència sobre les altres fonts de Dret i, actualment, una vàlua inapreciable per a la Història del Dret.» Eiquí é onde o Wagner fala o mesmo tempo do «Consolat»=Costumes da mar e do LCM coma atópase por exemplo na edición do Celedes. A nota 23 pode verse na miña nota 347.

sere posterior ó 1373. Podemos seguir adiante coas hipótesis e lembrar que no 1385 ou poucos anos máis tarde os «Capítulos do rei Pedro» atopan xa acollida no ms. L: se hipotetizamos que no 1385, ó facerse o ms. L, inda non recolléronse no mesmo os «Capítulos do rei Pedro», poderíamos afermar que tivo que facerse a súa incrucción ó redor do 1385, pois incruíronse algúns anos máis tarde, polo mesma mau que escribén o manuscrito, pro a imaxe e semellanza do feito en Barcelona, segun di o García; se hipotetizamos que o ms. L tiña dende o principio os ditos «Capítulos do rei Pedro», a súa incorporación no LCM tería que poñerse —dentro de prantexamento do García— no período 1373-1385, pois foi en Barcelona onde incorporáronse.

Agora ben, todas estas hipótesis teñen, a meu vez, pouco valor, xa que ni-na tradición manuscrita ni-na editorial amosan ese LCM tipo, que o García hipotetiza. Quero sulñar que somente identificando unha entelequia, isto é, ideando un libro do consulado da mar, podemos chegar a aseña-le unha data de nacemento, xa que endexamáis oubo un tal libro, inda que atopáranse moitos libros dos consulados da mar, ate o momento no que o Cealles fixo a súa edición e esta trunfóu. E neste sentido, coido eu, o D. Galo foi máis aqueloutrado que o García, pois identifica o LCM coa aquela unidade de 334 capítulos, que é obra —po-lo que coñecemos— do Cealles, inda que teña un craro antecedente na edición do 1484.

E certo, o ms. A probaría a existencia dun Libro do consulado da mar, tal como afigúrase o García, po-lo que deixaría así de sere unha entelequia. Non esquencinme do ms. A, non, pro dun lado teño que dir que o ms. A é un testemuño do dito LCM de segunda mau, xa que no primeiro intre non tiña os «Capítulos do rei Pedro»; isto é, naceu coma un manuscrito de dereito mercantil, que convirteuse en LCM ó achegarselle no remate os «Capítulos do rei Pedro»; e doutro lado teño que sulñar que o ms. A é un libro do Consulado da mar, un máis, pro non é «o libro do consulado da mar», pois noutro caso teríamos que reconocer que os outros manuscritos non son manuscritos do Libro do consulado da mar: Téñeno dito imaxinario LCM, pro tamén teñen outros elementos e ás veces no medio do dito imaxinario LCM. E non fai falla lembralo ms. D.

Na realidade dun LCM tipo, esto é, un libro que defínese polo seu contido pódese falar samente tra-lo trunfo da edición do Celedes, inda tendo en conta que os libros posteriores víronse arrequentados no seu remate con novos elementos.

Granada, 8 enero-12 junio 1986.

AQUILINO IGLESIA FERREIRÓS

NOTA DERRADEIRA

O ter agora a miña disposición a edición fotomecánica do Bohigas da edición do LCM do 1484 permítame confirmar algunhas das miñas afirmacións feitas no texto. Nesta edición do 1484, no cap. (43) = m 43, se non atopa a frase que atópase na edición do Moliné: «Açi acaba lorde iudiciari de la cort dels consols» (vid. supra pp. 35-36) e as «Ordeanzas de seguros» do 1458 comenzan na primeira columna do reuto nun novo folio, tras deixarse en branco practicamente toda a segunda columna do verso do folio anteriore. Pra rematar quero siñificar que a afirmación de que foi a edición do Celedes a que trunfou fágoa de acordo cos autores aseñados, pois eu non conozo toda-las edicións; o que é certo é que, polo que conocemos ate agora, hastra o Celedes se non atopa un texto unitario de 334 capítulos —onde recollase o «orden xudiciario de Valencia» pechado co capítulo do xuramento dos abogados de Mallorca (cap. 1-43), o cap. das «sportades» (cap. 45, poi-lo cap. 44 quedou en branco), «Costumes da mar» (cap. 46-297) e «ordeanzas do corso» (cap. 298-334)— arrequentado cou outros textos, contido que mantívose nas edicións posteriores, anque arrequentado; pro co paso do tempo fixéronse edicións que alonxaronse da obra do Celedes, tendo en conta que no LCM do Celedes atopábase tamen o Libro vulgarmente chamado do consulado, identificado coa colección de 334 capítulos, e aínda drento destes 334 capítulos identificáronse os cap. 46-297 co dito libro do consulado (cf. as edicións do Capmany e do Pardessus).

EL SETENARIO:

Ultima e inconclusa refundición alfonsina de la primera Partida

Con rara unanimidad los estudiosos han considerado el *Setenario* como el primer tratado legal o legislativo del rey Alfonso X el Sabio. Recientemente, para no citar más de un ejemplo, Rafael Lapesa publicó un análisis concienzudo de su estructura y estilo, dando por sentado que se trata de una «obra temprana de la producción alfonsí»¹. En este ensayo quisiera replantear el problema del lugar que ocupa el *Setenario* dentro del conjunto de los cuerpos legislativos patrocinados por el Rey Sabio, con la intención de demostrar que textualmente tiene el carácter de una reelaboración de la versión más reciente de la primera *Partida*; por consiguiente nos vemos obligados a declararlo la postrimera de las obras legales alfonsinas, sin perder de vista que no fue concebido como algo independiente del gran código alfonsino.

De toda la producción legislativa alfonsina, sólo el *Setenario* ha merecido una edición crítica moderna, a cura de Kenneth H. Vanderford². En su introducción se adhirió a la doctrina prevaliente, aceptando sin discusión siquiera la prioridad cronológica del *Setenario* con respecto a la primera *Partida*. Por eso en su concepto cualquier coincidencia textual entre las dos obras se explicaba necesariamente como una influencia de aquél sobre ésta. El cotejo más extenso que practicó Vanderford se hizo con respecto a la ley de *Partidas* 1,4,30 («quién puede fazer la crisma»), según

1. «Símbolos y palabras en el *Setenario* de Alfonso X», *Nueva revista de filología hispánica*, 29 (1980), 247-261.

2. Alfonso el Sabio, *Setenario*, edición e introducción de Kenneth H. Vanderford. Buenos Aires: Instituto de Filología, 1945. Se ha reimpresso con un estudio preliminar de Lapesa, el mismo señalado en la nota 1, en la colección *Lecturas de filología*, dirigida por Francisco Rico Barcelona: Editorial Crítica, 1984.

la numeración de la edición académica³. El texto de la ley aludida, que versa sobre cuáles prelados están autorizados a consagrar el crisma, corresponde literalmente, con relativamente pocas diferencias, a gran parte de la sección o «ley» 89 del *Setenario* (páginas 155-157 de la edición citada). Lo que importa recordar ahora es la discusión que dedica Vanderford a este asunto en las páginas xxxii-xxxvi de su introducción, donde confronta los dos textos en columnas paralelas. Esta confrontación le permitió descubrir dos haplografías de cierta extensión en el pasaje del *Setenario*, ya que los trozos omitidos pueden suplirse con referencia al pasaje paralelo de las *Partidas*. Para comodidad del lector, vuelvo a citar los pasajes que interesan en este contexto, imprimiendo en bastardilla los trozos de las *Partidas* que corresponden a lo omitido en el *Setenario*⁴:

(*Setenario*, ed. Vanderford, p. 156.15, omitidos los acentos)

Et el dixo non, mas despues del uernie aquel que ffuera ffecho ante que el, del qual el non era digno de descalçar la correa del ssu çapato. Et otrosi dio este testimonio de la Trinidad...

(SP 1,4,30, copiado de la ed. crítica impresa en el apéndice, 1. 31)

e el dixo que non mas que despues del uernie aquel que fuera fecho ante que el del qual el non era digno de desatar la correa del su çapato e en esto mostro la trinidad en que dixo que despues del uernie aquel que fuera fecho ante que el e al qual el non era digno sola mjentre de tanner los sus pies. Otrosi dio este testimonio de la trinidad...

Según Vanderford, hay que suponer en primer lugar que en el

3. Real Academia de la Historia, ed., *Las Siete Partidas del Rey don Alfonso el Sabio, cotejadas con varios códices antiguos...* 3 vols. Madrid: Imprenta Real, 1807 (reimpr. Madrid: Atlas, 1972). Consúltese el tomo 1, págs. 79-80.

4. En su edición Vanderford restauró entre corchetes cuadrados los trozos omitidos, valiéndose del texto de la primera *Partida*; desde luego que para ilustrar las dos haplografías del *Setenario* hago caso omiso de las restauraciones.

Setenario la palabra *pies* se alteró en *çapatos*; luego saltó el ojo del copista de la primera instancia de la palabra a la segunda, omitiéndose todo lo que va entre *çapato* y *pies* en las *Partidas*.

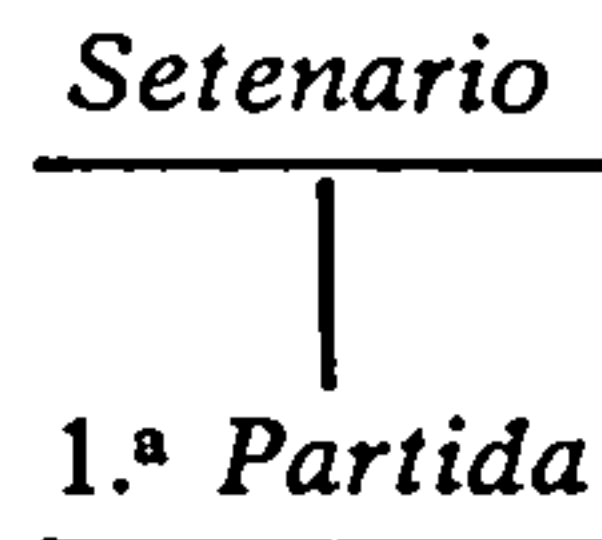
(*Setenario*, pág. 156.26)

(SP 1,4,30, l. 45)

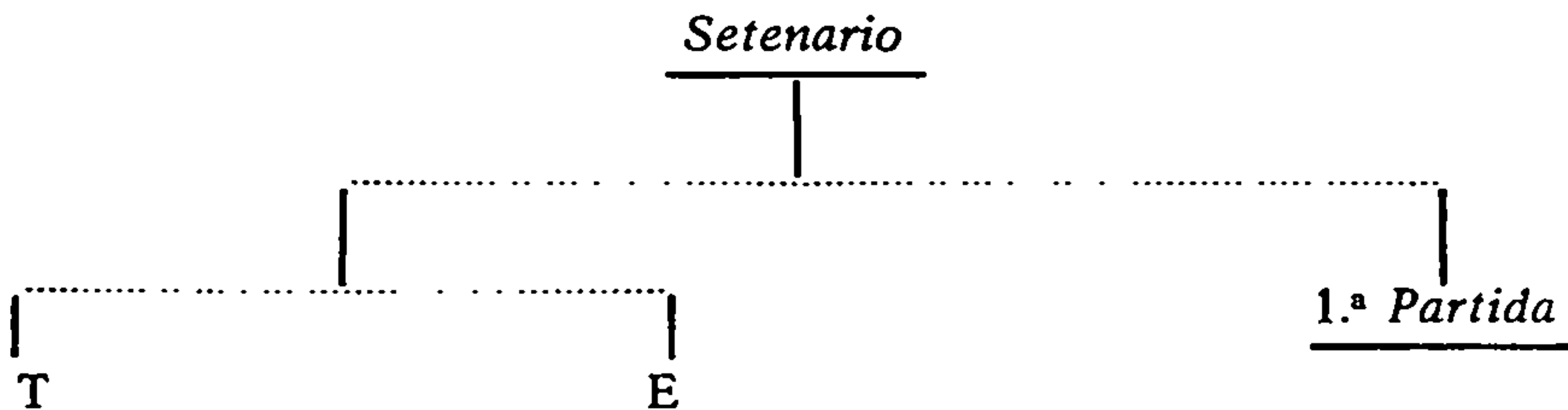
ca alli do lo alçaron en la cruz
e le pusieron corona de espi-
nas por desonrra, quandol dio
poder sobre todas cosas...

ca alli o lo alçaron en la cruz
el pusieron corona de espinas
por desonrra *alli fue alçado*
de dios su padre por onrra
quandol dio poder sobre todas
las cosas...

Vanderford comenta las dos haplografías como sigue: «Que esta [la primera] cita de la *Primera partida* se remonta al *Setenario* (no a un manuscrito existente del *Setenario*, sino a uno perdido) se confirma por el hecho de que suple líneas realmente esenciales para el presente texto. La primera parte en cursiva [primera haplografía]... pertenece muy probablemente al *Setenario*, pues de otra manera el «otrossí dió este testimonio de la Trinidad» que va inmediatamente después parece enteramente inexplicable. La última parte en cursiva [segunda haplografía] representa un caso indudable de omisión homeográfica en la familia de manuscritos existentes del *Setenario*». En otras palabras, en vez de una relación directa entre la primera *Partida* y el *Setenario*, o sea:

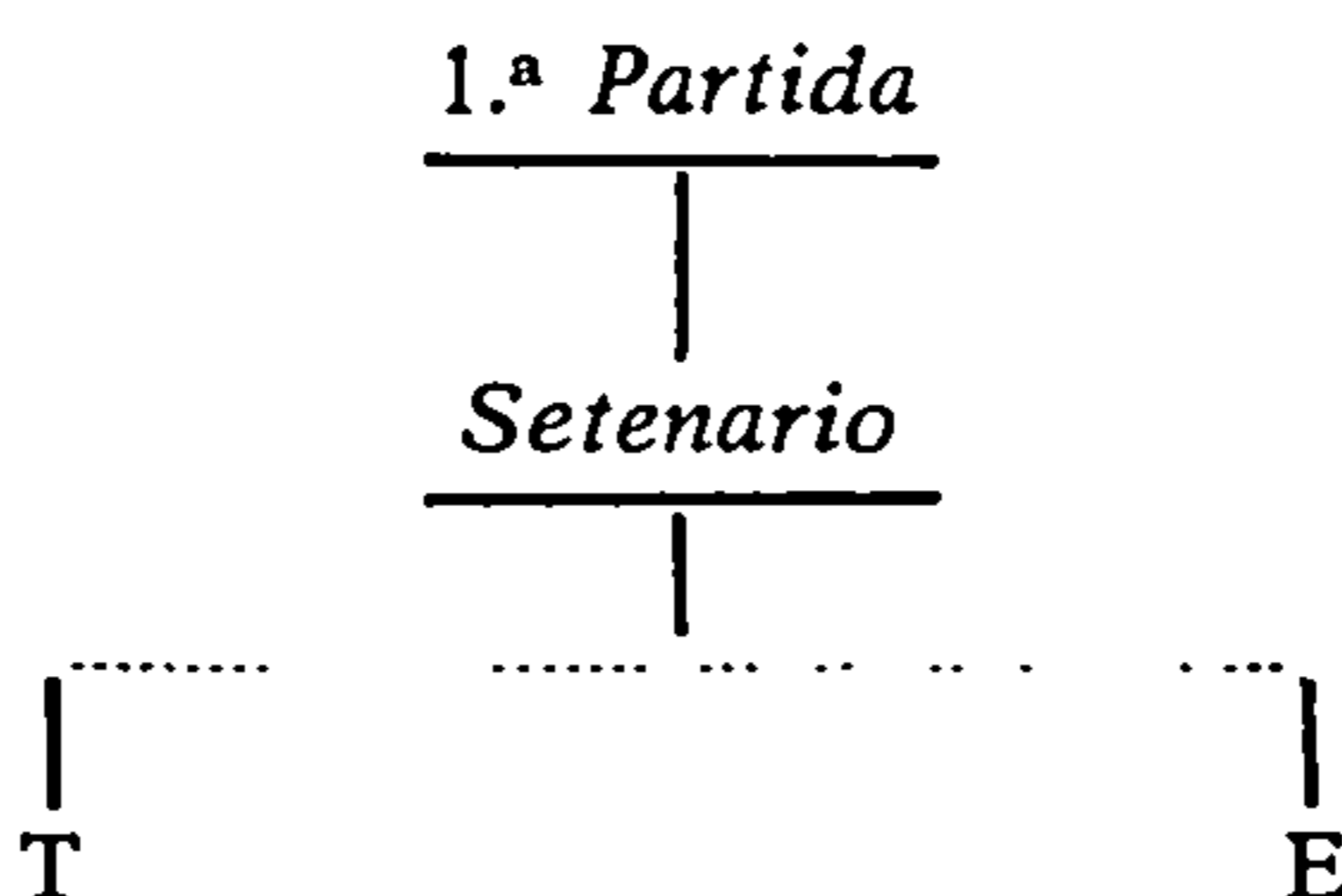


hay que suponer una relación indirecta entre la primera *Partida* y los manuscritos del *Setenario*, o sea:



donde T y E representan los dos MSS que contienen el *Setenario*.

Ahora bien, si el crítico textual no se encuentra totalmente deslumbrado por la tradición multiseular de la prioridad del *Setenario*, observará en seguida la existencia de una explicación más sencilla de las dos haplografías aludidas: basta suponer que el *Setenario* descende de la primera *Partida* y no al revés:



Aisladamente, no parecerá argumento contundente la mera simplicidad del esquema que se acaba de diseñar. Sin embargo, existe otra consideración que casi obliga a la conclusión de que el *Setenario* es posterior a la primera *Partida*: la ley 1,4,30 sólo aparece en la última redacción de la misma. Por consiguiente, la relación textual exigida por la tradición de que el *Setenario* precede y es fuente de la primera *Partida* es mucho más compleja de lo que se ha imaginado hasta ahora.

Nadie duda ya de que el *Espéculo*, terminado o promulgado en los meses de mayo y junio de 1255, es anterior y al mismo tiempo fuente de las *Partidas*⁵. Estas existen ahora en tres estados textuales que se suceden en orden cronológico estricto: (1) Con el título del *Libro del fuero de las leyes*, fechado entre el 23 de junio de 1256 y el 28 de agosto de 1265, el primer estado

5. Para más datos acerca del esquema cronológico que presento aquí en forma muy resumida, véanse mis trabajos «La cronología de las obras legislativas de Alfonso X el Sabio», *Anuario de historia del derecho español*, 51 (1981), 365-418 y «La nota cronológica inserta en el prólogo de las *Siete Partidas*», *Al-Andalus*, 39 (1974), 363-390. Para la fecha del *Espéculo* consúltese también Evelyn S. PROCTER, *Curia and Cortes in Leon and Castile 1072-1295* (Cambridge: University Press, 1980), pág. 122, y Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «Fuero Real y *Espéculo*», *Anuario de historia del derecho español*, 52 (1982), 111-191. Este último intenta rebatir esta fechación del *Espéculo*, pero sus argumentos, aun de aceptarse en su totalidad, no afectarían la secuencia cronológica relativa del *Espéculo* y las *Partidas*.

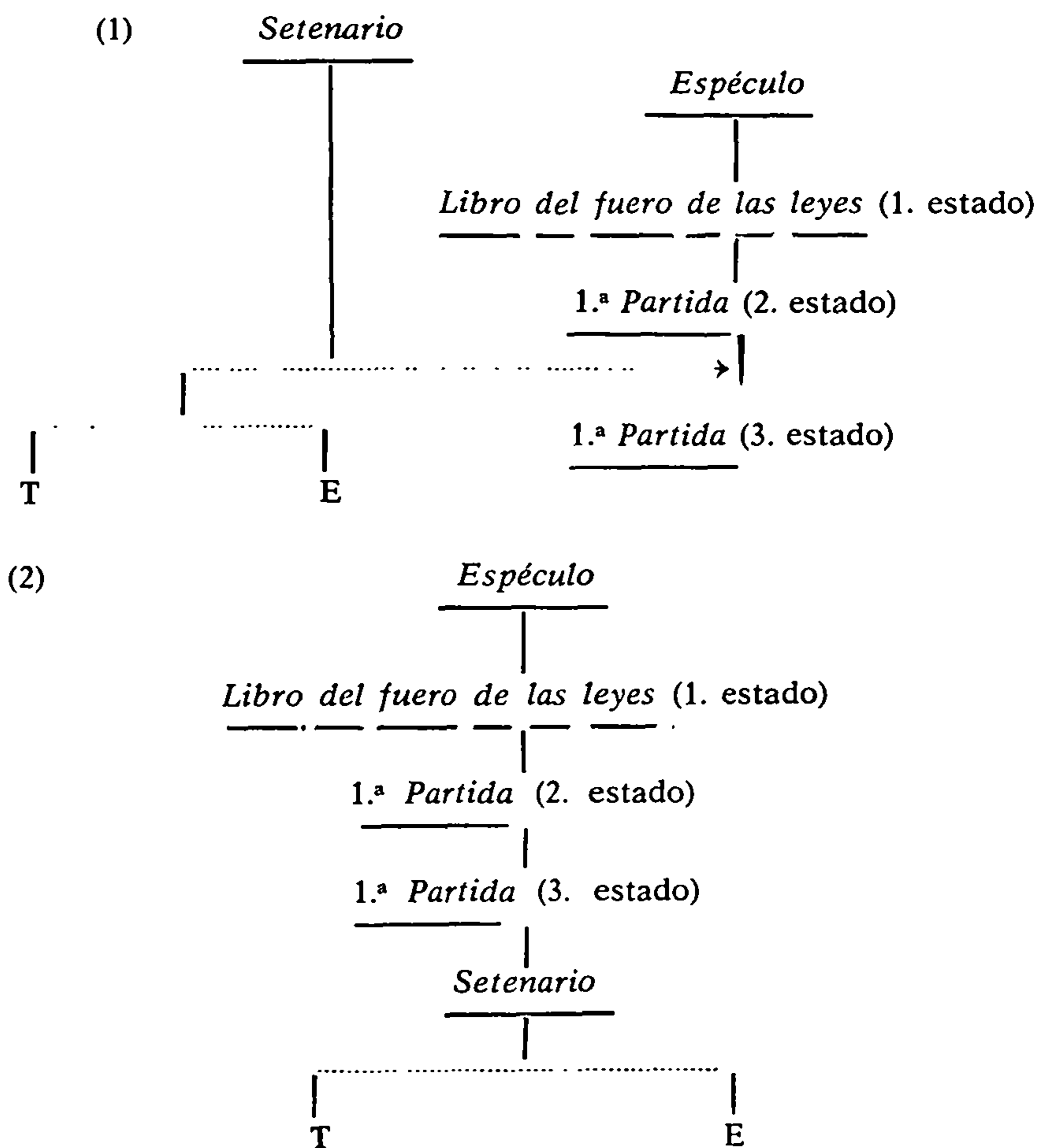
se ha conservado en un solo manuscrito, el Add. 20787 de la Biblioteca Británica, que no contiene más que el material correspondiente a lo que después llegó a titularse «primera *Partida*». Como he sostenido en otro lugar, no conviene darle a este texto el nombre de «primera *Partida*», pues no hay indicación alguna de que entonces la obra entera constara de siete partes ni se llaman *partidas* las divisiones del cuerpo de la obra, sino *libros*⁶. (2) El segundo estado, en que aparece por primera vez la organización septipartita, anunciada en el prólogo como cosa nueva, es probablemente posterior al año 1272. En cuanto a la primera *Partida*, constituye la versión difundida en las ediciones de Montalvo y López⁷. (3) El prólogo del tercer estado permite establecer un *terminus post quem* bastante seguro del año ya aludido de 1272. Este estado presenta una refundición profunda de los cuatro primeros títulos de la primera *Partida*. Está a la base de la edición académica mencionada arriba, publicada en 1807, cuyas diferencias frente a la edición oficial de López sobre todo con respecto al texto de la primera *Partida* fueron motivo de escándalo entre juristas y teólogos. El lector recordará que la ley 1,4,30 discutida arriba sólo apareció en este estado, el tercero, del texto.

Ahora bien, si el *Setenario* es el primer tratado legal patrocinado por el Monarca Sabio, ¿cómo se explica que después de componer el texto sobre la crisma en los primeros años del reina-

6. Véase mi contribución, titulada «How Many *Partidas* in the *Siete Partidas*?», que forma parte del homenaje *Hispanic Studies in Honor of Alan D. Deyermond: A North American Tribute*, a cura del profesor John S. Milcitch, Universidad de Utah (Madison, Wisconsin: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1986), págs. 83-92. Disponemos ahora de dos transcripciones del MS. Add. 20787, la harto defectuosa de Juan Antonio ARIAS BONET, *Primera Partida*, Valladolid: Universidad, 1975, y la de Lloyd KASTEN y John NITTI en su gran colección de microfichas alfonsinas, *Concordances and Texts of the Royal Scriptorium Manuscripts of Alonso X, el Sabio*, Madison, Wisconsin: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1978. Hago una comparación de las dos ediciones en una reseña de las microfichas publicada en *Romance Philology*, 39 (1985-86), 462-472.

7. ALFONSO DÍAZ DE MONTALVO, ed., *Las Siete Partidas* Sevilla: UNGUT y POLONO, 1491. GREGORIO LÓPEZ, ed., *Las Siete Partidas*. Salamanca: Andrea de PORTONARIIS, 1955 (reimp. en tres tomos; Madrid: *Boletín Oficial del Estado*, 1974). No descubro ninguna alusión a estas ediciones en el prólogo de la edición de Vanderford.

do, su equipo de canonistas y juristas lo dejara olvidado a través de toda la evolución del código de las *Partidas* hasta llegar a la última versión (o sea, tercer estado del texto)? En cambio, si se adopta el criterio, que creo que se impone, de que el *Setenario* mismo no es más que un último esfuerzo de refundición de la primera *Partida*, o sea que ésta constituye la fuente principal de aquél, no sólo resulta más lógica la secuencia cronológica de las obras legislativas sino que se explican sin más las dos haplografías analizadas arriba. Compárense los dos diagramas impresos a continuación:



La lógica estricta exige que se acepte el esquema más sencillo si no hay pruebas formales del esquema más complicado.

No encuentro nada en el análisis de la relación entre los dos textos desarrollado por Vanderford en el prólogo de su edición que no se compagine bien con la suposición de la anterioridad de la primera *Partida* frente al *Setenario*. Caso muy llamativo lo constituye una alusión en el *Setenario* a «la ssetena partida deste libro o ffabla de los escarmientos» (Vanderford, *ed. cit.*, xxxvii; pág. 243.13-14 del texto)⁸. ¿Es de veras razonable suponer que Alfonso y su equipo ya pensaban en un «proyectado final del *Setenario*» cuando este final no se realiza ni en el *Espéculo* ni en el *Libro del fuero de las leyes* sino sólo después de 1272, en lo que llamo «segundo estado» del texto? En realidad, la alusión sugiere a las claras la presencia de una séptima *Partida* ya existente y que en el concepto de los redactores del texto hoy llamado el *Setenario* formaba parte de una y la misma obra, sugerencia que no tiene nada de extraño si se admite que el *Setenario* se ideó como una refundición más de la primera *Partida*.

Hace ya veinte años se descubrió otro testigo textual de gran parte del texto del *Setenario* en el MS. HC397/573 de la Hispanic Society of America, que contiene una versión idiosincrática de la primera *Partida*⁹. Este manuscrito híbrido no sólo incluye leyes que pertenecen al *Libro del fuero de las leyes* y a la última redacción de la primera *Partida* (o sea, el primer y el tercer estado del

8. Alusión al título 31, «De las penas et de las naturas dellas», cuyo prólogo comienza así: «Escarmentados deben seer los homes por los yerros que facen...», según la ed. académica, vol. 3, págs. 707 y ss. VANDERFORD, *loc. cit.*, señala otras dos alusiones a un lugar de «este libro» (= *Setenario*) donde se habla de «las penas temporales», sin especificar la *partida*.

9. Descrito con abundantes detalles por Antonio GARCÍA Y GARCÍA, «Un nuevo código de la primera *Partida* de Alfonso X el Sabio», *Anuario de historia del derecho español*, 33 (1963), 267-343; el primero en observar las correspondencias textuales con el *Setenario* fue Juan Antonio ARIAS BONET, «Notas sobre el código neoyorkino de la primera *Partida*», *ibid.*, 42 (1972), 753-755; véase también lo que digo en «La nota», pág. 364. Una descripción formal del MS figura en Charles B. FAULHABER, *Medieval Manuscripts in the Library of the Hispanic Society of America*, 2 tomos, New York: Hispanic Society of America, 1983. Véase vol. 1, págs. 225-227. Puede consultarse ahora la transcripción de Francisco RAMOS BOSSINI, *Alfonso X el Sabio, Primera Partida*, Granada: Caja General de Ahorros, 1984.

texto), llegando al extremo de repetir series enteras de leyes porque ocupan títulos distintos en el *Libro* y en la primera *Partida*¹⁰, sino también abarca materiales tratados en el *Setenario*. Desde luego no falta la ley 1,4,30 (numerada 1,5,30); lo importante es que ya patentiza algunos, pero no todos, los cambios que se hicieron al adaptar esta ley para el *Setenario*. Presenta, por ejemplo, la primera haplografía apuntada por Vanderford pero no la segunda¹¹. Tiene todas las características de una versión transicional intermedia entre el tercer estado de la primera *Partida* y el *Setenario* y constituye a mi parecer una prueba difícil de rebatir de que los juristas y canonistas empleados por el Rey Sabio formaron el *Setenario* refundiendo y adaptando materiales ya existentes en la primera *Partida* (tercer estado, si no un cuarto estado representado por MS. HC397/573)¹².

No hay duda de que si se imponen los razonamientos presentados en este artículo habrá que leer el *Setenario* con nuevos ojos, trabajo ya comenzado por dos colegas¹³. Por mi parte, propongo lo siguiente: en los últimos años de su reinado, Alfonso X se puso

10 Se trata de una serie de leyes sobre la limosna que en este MS son 1,6,55-63 y 1,23,7-13; la primera colocación coincide más o menos con la del *Libro del fuero de las leyes* (primer estado), la segunda con la de la primera *Partida*, estados segundo y tercero.

11. En el tercer apéndice de este trabajo, véase HC f. 27r48 para la primera haplografía y f. 27v3-4 para la segunda

12. El argumento que acabo de enunciar carecerá de fuerza si el material del *Setenario* aparece en este MS por efecto de una contaminación; desde luego que para determinar las relaciones textuales relevantes, habrá que llevar a cabo un cotejo completo de los MSS de la primera *Partida*, inclusive el MS. HC3979/573, y los del *Setenario*, tarea que tengo entre manos. Quizá no esté de más anticipar que los cotejos ya hechos revelan la debilidad de muchas preferencias editoriales de Vanderford en su edición del *Setenario*. Sería recomendable una nueva edición, pero ya no como obra aislada; el *Setenario* (del s. XX) es parte integral de las *Partidas*, esto es, el *Setenario* del s. XIII.

13. La posible fecha tardía del *Setenario* atrajo el interés de Gregory P. Andrachuk y Peter Linehan con ocasión del *Congreso Internacional Séptimo Centenario de Alfonso X el Sabio*, Universidad de Carleton, Ottawa, Canadá, 19-22 de abril de 1984; véanse sus ponencias respectivas «Alfonso el Sabio: Courtier and Codifier» y «Alfonso X and the Question of Sacral Monarchy». El profesor Linehan también ventila la cuestión en su ensayo inédito «The Politics of Piety: Aspects of the Castilian Monarchy from Alfonso X to Alfonso XI».

a refundir, una vez más, el texto de la primera *Partida*, dándole un título nuevo al código entero, el *Setenario*. Siguiendo unas agudas observaciones de Linehan («The Politics of Piety», nota 14 del manuscrito inédito), creo que el elogio fervoroso de la ciudad de Sevilla¹⁴ y la intensidad con que habla el rey acerca de la traición¹⁵ indican que el *Setenario* se compuso en esa ciudad después de estallar la rebelión de su hijo don Sancho el Bravo, que culminó en la destitución de Alfonso X del ejercicio de la autoridad real en las cortes de Valladolid de abril de 1282. La evolución del gran código alfonsino a partir del *Libro del fuero de las leyes* revela una mentalidad progresivamente obsesionada con las virtudes del número siete. Ni en el *Espéculo* ni en el *Libro del fuero de las leyes* se encuentra rastro de esta manía numerológica. Como ya se ha indicado, ni fueron siete ni se llamaron *partidas* las divisiones principales del *Libro del fuero*. Pero después de 1272, el cuerpo del código se divide en siete partes, llamadas *partidas* por su autor, cada una de las cuales empieza con una letra de su nombre (A-L-F-O-N-S-O) y se añade un segundo prólogo cuya primera palabra «Setenario es cuento muy noble...» suplió el nombre definitivo del código. Así el *Setenario* constituye el último eslabón en un proceso de elaboración textual, en que la preocupación del Rey Sabio con el número siete llega a adquirir proporciones extravagantes. Recuérdese que para reducirlo todo a cómputos de siete, estropea no sólo el nombre de su padre, dándole siete letras (*ferando*)¹⁶, sino también el de Dios, practicando una abreviación oportuna: *alfa et omega* se convierte absurdamente en *alfa et o*. Desde luego no desperdicia el Rey numerólogo la ocasión de observar la coincidencia entre su propio nombre y el de la divinidad con respecto al número de letras y a la identidad de las primeras y últimas letras¹⁷.

14. Ed. de Vanderford, págs. 19-20.

15. Por ejemplo, en la ed. cit., pág. 121.10: «El peccado [de Adam] ffue traición contra ssennorio, por que han de auer pena non tan ssolamente los que lo ffazen o lo consseian o ayudan a ello, mas los otros que desçenden de ssu linaje, e nunca pueden sser perdonados de aquella culpa nin sser heredados nin sser par de otros ffasta que los perdone aquel contra quien ffizieron el yerro». He suprimido los acentos

16. Ed. cit., pág. 8.

17. Ed. cit., pág. 7.

Con lo dicho queda explicado sin más un pequeño misterio, o sea la referencia en el segundo testamento del Rey a «... illum librum quem nos fieri fecimus, *Septenarius* appellatus...»¹⁸. Si se tratara de un borrador incompleto de las *Partidas* formado en los primeros años del reinado y luego abandonado, difícilmente se comprendería la importancia que le concede el Monarca Sabio en el momento solemne de redactar su última voluntad. Si en cambio el *Setenario* representa la manifestación definitiva de los esfuerzos legislativos de Alfonso X, una elaboración de lo que ahora llamamos las *Partidas*, entonces la alusión testamentaria resulta perfectamente comprensible, pues está claro que se refiere a un conjunto del que el texto ahora llamado *Setenario* es sólo una parte inicial.

Si he acertado en mi intento de demostrar el carácter relativamente tardío del *Setenario* dentro del conjunto de las obras legislativas alfonsinas, entonces caen por su base dos teorías muy difundidas: (1) la suposición de que los últimos estados de las *Partidas* sean posteriores a la muerte de Alfonso X; (2) la supuesta autoría de Fernando III del *Setenario* y su pretendida intervención en el comienzo de la redacción de las *Partidas*.

Por lo que a (1) atañe, basta observar que si el *Setenario* es obra de Alfonso X, y para dudar de la autoría alfonsina, haría falta incurrir en una hipercrítica realmente insensata, y si es en efecto una refundición del tercer estado textual de la primera *Partida*, entonces todas las versiones de las *Partidas* son anteriores, o sea se hicieron en vida del Rey Sabio¹⁹.

En cuanto a (2), sospecho que la presunta actuación de Fer-

18. Véanse VANDERFORD, ed. cit., págs. XLI-XLIII, y para el texto latino del testamento, GEORGES DAUMET, «Les testaments d'Alphonse X le Savant, roi de Castille», *Bibliothèque de l'École des chartes*, 67 (1906), 70-99, en la pág. 91.

19. Fue el profesor Alfonso García-Gallo quien desarrolló la teoría de la cronología tardía de las obras legislativas alfonsinas; a pesar de su agudo sentido crítico y enorme erudición creo que su teoría está ahora definitivamente superada. Véanse sus dos trabajos fundamentales: «El Libro de las leyes de Alfonso el Sabio: del *Espéculo* a las *Partidas*», *Anuario de historia del derecho español*, 21-22 (1951-52), 345-528, y «Nuevas observaciones sobre la obra legislativa de Alfonso X», *Ibid.*, 46 (1976), 609-670. Para un resumen reciente de sus puntos de vista, consúltese «La obra legislativa de Alfonso X: hechos e hipótesis», *Ibid.*, 54 (1984), 96-161.

nando III no es más que un mito propagado por un Rey deseoso de justificarse ante la estrepitosa derrota de toda su política legislativa. El *Setenario* aparte, la primera mención de Fernando III como promotor de la codificación alfonsina ocurre en el prólogo de la primera *Partida*, segundo estado, o sea, probablemente después de 1272, año en que el Rey se vio obligado a desistir a su intento de uniformar la legislación de sus reinos²⁰. Sería entonces una fábula pía con que Alfonso X aspiró a hacerles creer a sus súbditos revoltosos que oponiéndose a él faltaban al respeto y devoción que merecía la memoria de su bienaventurado padre²¹. No deja de causar admiración el éxito que obtuvo Alfonso X en sorprender así la buena fe de una posterioridad crédula; sus contemporáneos se mostraron mucho más escépticos²².

JERRY R. CRADDOCK

Departamento de Español y Portugués
Universidad de California
Berkeley, California

20. Véase CRADDOCK, «La cronología», pág. 397, y «La nota», págs 379-380

21. La difusión posterior del mito se debe sobre todo a la *Crónica particular de Alfonso X*, que parece haber recogido la versión del *Setenario*, según el análisis sugestivo y pormenorizado de Aquilino IGLESIAS FERREIRÓS, «Alfonso X, su labor legislativa y los historiadores», *Historia, Instituciones, Documentos*, 9 (1982), 9-112.

22. A instancias del profesor Anthony J. Cárdenas, University of Wichita, Kansas, se leyó una versión inglesa preliminar de este trabajo ante una de las cuatro sesiones del XIX Congreso Internacional de Medievalistas dedicadas al séptimo centenario de Alfonso X, Kalamazoo, Michigan, el 12 de mayo de 1984, con el título «The *Setenario*: Alfonso X's Final Legislative Legacy». Quiero dejar aquí constancia del profundo agradecimiento de que son acreedores los amigos y colegas que generosamente leyeron y criticaron la ponencia que se acaba de mencionar: Gregory Peter Andrachuk, University of Victoria, Canadá; Arthur L.-F. Askins y Charles B. Faulhaber, University of California, Berkeley; Dwayne E. Carpenter, Columbia University; Alberto Blecua, Universidad Autónoma de Barcelona; Alan Deyermond, Westfield College, University of London; Henry A. Kelly, University of California, Los Angeles; Peter A. Linehan, St. John's College, Cambridge. Agustín Boyer, Universidad de California, revisó con gran pericia la redacción española del presente trabajo.

A P E N D I C E S

En estos apéndices presento (1) una edición crítica de la ley 1,4,30 de la primera *Partida*, (2) una transcripción de la ley correspondiente en el MS. HC397/573 de la Hispanic Society of America y (3) transcripciones del texto correspondiente en los dos MSS medievales del *Setenario*²³

Aquí quiero incluir algunas observaciones sobre la manera en que la ley 1,4,30 fue adaptada para su inclusión en el *Setenario*. Tanto en la primera *Partida* como en el *Setenario*, la discusión o reglamentación de la crisma aparece como apéndice de las leyes dedicadas al sacramento del bautismo. El tercer estado de la primera *Partida* presenta una profunda refundición y

(23) Para las transcripciones paleográficas, sigo el método de David MACKENZIE, *A Manual of Manuscript Transcription for the Dictionary of the Old Spanish Language*, 3.^a ed. con trad. esp. de José Luis Moure, Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1984, aunque prefiero numerar cada renglón de la transcripción en vez de numerarlos de cinco en cinco. Otras diferencias menudas se deben a la falta de ciertos caracteres especiales en la fundición del impresor. Hay dos ediciones de la traducción medieval portuguesa de la primera *Partida*, la de José de Azevedo FERREIRA, *Alphonse X Primeyra Partida. Edition et Étude*, Braga: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1980, y la inédita de Alexander F. CASKEY, «An Edition, Study and Glossary of the Old Portuguese Translations of *Partidas* I and III of the Alfonsine *Siete Partidas*», tesis doctoral, University of Wisconsin, 1979.

La edición sigue básicamente el sistema empleado en las ediciones precedentes del Seminario Hispánico de Wisconsin. Todas las enmiendas editoriales van entre corchetes cuadrados, inclusive las supresiones, indicadas con tres puntos ([.]). Adopté el MS. esp. 440 como base bajo la influencia de las consideraciones que imprimió Arias Bonet en el prólogo de su edición de la *Primera Partida* (= *Libro del fuero de las leyes*), mencionada en la nota 5. Resulta que el MS parisiense (*olim* silense) no merece el aprecio que le prodiga el profesor vallisoletano, pues presenta un texto no sólo estropeado al principio y falto al final sino que deja mucho que desear la calidad de sus lecciones frente a las de los otros MSS. Decidí no alterar la edición de la ley 1,4,30 ya elaborada porque dentro del contexto de la discusión de Arias Bonet, es sumamente instructivo ver a las claras sus muchos defectos textuales, que pueden verificarse siempre que aparezcan los corchetes cuadrados en el texto crítico. También ilustra el hecho de que cualquier MS, por defectuoso que sea, puede utilizarse como base de una edición crítica con tal que se corrija cumplidamente a base de los materiales que suple la tradición textual.

extraordinaria ampliación de este tema frente al segundo estado, que con respecto al tema de la crisma no se distancia mucho de la versión del *Libro del fuero de las leyes* (= primer estado). A su vez en el *Setenario* se refunde y se amplía el texto del tercer estado de la primera *Partida*. La Ley 1,4,30 quedó combinada con la ley 1,4,29 («por que ha nombre asi la crisma») para formar lo que figura como «ley» 89 de la edición de Vanderford («de como estableçieron los santos padres la crisma»).

Para efectuar la refundición de la ley 1,4,30, en primer lugar la cláusula dispositiva final «E por ende ordeno .. a semeiante del» (edición crítica [= CR], renglones 54-57) pasó al interior de la «ley» 89, véase el MS. 43-20 de la BCT (= T), f. 47r35-39, interrumpiendo el sentido de la exposición. Donde CR tiene «con que sagran otras cosas. E esto solien fazer. a los reyes e a los sacerdotes...» se ve que *esto* tiene función apodéctica; en la «ley» 89, se salda la ligazón sintáctica con una conjunción adverbial vaga: «q<ue> sagra las otras cosas [cláusula dispositiva] Q<ue> alos rreyes & alos ssaçerdotes ssolia<n> untar » En este mismo contexto se halla en la «ley» 89 un eco o anticipación de una frase que ocurre hacia el final de la misma «ley» 89 y de la ley 1,4,30: «onde fue el [Cristo] cubierto e untado desde [somo] de la cabeça fa[s]ta [en fondon de] los pies» (CR, 49-51; T, 47v15-17); compárese este aserto de la «ley» 89: Et esto [untar alos rreyes & alos saçerdotes] no<n> tan ssola mje<n>te g<e>lo ffazia<n> en la ffrue<n>te & en las espallas co<m>mo vnta<n> los de agora mas de ssomo d<c>la cabeça ffasta ffondon d<e> las piernas [E pies]» (T, 47r41-44). Es de notarse que en estos dos casos HC concuerda con CR en el primero, pero con el *Setenario* en el segundo (véase f. 27r26 y 27r28-31, resp.).

Para terminar esta digresión, dejando sin comentario muchas diferencias menudas entre la «ley» 89 y la ley 1,4,30, señalaré una omisión que no sé si fue accidental o deliberada. Donde 1,4,30 dice «aquel era el que babtizaua el spiritu santo e sin esto dio testimonio del [de Cristo] de quando el babtizaua a ihesu xpisto que oyo la boz del padre quel dixo que aquel era su fijo que el mucho amaua E desta guisa fue nuestro sennor ihesu xpisto sagrado spiritual mjent[r]e por mayor sacerdote mas temporal mjent[r]e segunt rey fue sagrado rescibiendo muerte e passion por nos» (CR, 39-44), la «ley» 89 sólo tiene: «aq<ue>l era el q<ue> baptizaua en sp<iri>tu s<an>c<t>o % Q<ue> tenporal mje<n>te ffue ssagrado... ih<es>u xp<ist>o ssegu<n>t Rey muestra q<ue> ffue rreçibiendo muerte & passion por nos» (T, 47v6-10). Con la frase «muestra q<ue> ffue rreçibiendo », se ha intentado torpemente remediar la falta de ligazón sintáctica que presenta la cláusula Q<ue> tenporal mje<n>te. », solución que me parece semánticamente floja. Ahora bien, la última cláusula de la «ley» 89 y la penúltima de la ley 1,4,30 se refieren justamente a la consagración dual de Cristo, espiritual y temporal: «Onde por todas estas rrazon<e>s q<ue> auemos dicho ffue n<uest>ro sse<n>or ssagrado ssegu<n>t ob<is>po en ss<an>c<t>idat & en saber [E &] ssegu<n>t Rey en [E poder] &

en justicia» (T 47v17-20; texto semejante en CR, 51-53). Aquí HC va de acuerdo con CR.

Sumados a las dos haplografías discutidas en la parte principal de este trabajo, los cambios practicados en la ley 1,4,30 para formar la «ley» 89 del *Setenario* constituyen un deterioro notable en la trabazón intelectual y lingüística del texto de la primera *Partida*. Sería acaso lícito atribuir este fenómeno a las circunstancias difíciles en que se compilaba el *Setenario* y al agotamiento de las fuerzas físicas y morales del Rey Sabio ya anciano, suponiéndose, claro está, que esto ocurría en los últimos años de su reinado. Lo que me parece ahora punto menos que imposible es que la «ley» 89 haya servido de fuente de la ley 1,4,30 y no al revés.

Edición crítica a base del MS esp 440 de la Bibliothèque Nationale, Paris.

- Siglas: P40 = BNP MS esp 440 (s XIV).
 T11 = BCT MS. 43-11 (s. XV).
 T13 = BCT MS 43-13 (s. XIV -- 4III-1344).
 EY19 = Esc MS Y.III 19 (s XV).
 M93 = BNM MS. 12793 (s. XIV).
 Alc = ANTT MS alc. 324 (s. XIV; trad portuguesa)
 HC = HSA MS. HC 397/573 (s XIV).
 Set = *Setenario*, ley 89 (ed. Vanderford, pp 155-157)
 T = BCT MS. 43-20 (s. XIV).
 E = Esc. MS P II.20 (s XIV)

- Abreviaturas: ANTT = Arquivo Nacional da Tôrre do Tombo
 BCT = Biblioteca Capitular de Toledo.
 BNM = Biblioteca Nacional, Madrid.
 BNP = Bibliothèque Nationale, Paris
 Esc. = Biblioteca del Escorial.
 HSA = Hispanic Society of America.

- 1 Lex xxx. quien puede fazer la crisma.
- 2 Poder de fazer la crisma non es dado a otri sinon a los prelados
- 3 mayores assi commo [...] apostoligo o patriarca o primado
- 4 o arçobispo o obispo. E esto es por que ellos tienen el
- 5 lugar de los apostoles [que] fueron companeros de nuestro sennor

-
- 1) xxx]treynnta T11, ij EY19 (1.7.2), ij M 93 (1.6.2), ija' Alc (1.4 2); puede]ha poder de EY19, HC; fazer]fazel T11; la om EY19, Alc
 - 2) dado]dada T11; otri]otre T11, ot<r>o EY19, M93.
 - 3) may. om M993; assi] asi EY19, HC, asy M93; commo + al P40, + el M93, + ao Alc; apo.]ap<osto>licos T11; o(1)]a EY19, + a Alc
 - 4) o(1) om T11; e *ilegible* T13; que ellos] q<ue>llos HC
 - 5) lug.]logar EY19, llogar HC; ap.]apostoligos T13, Alc; que]& P40, con.] companeros T11, compa<n>on<e>s HC; nue. sen. ih xp]jh<es>u x<pist>o' n<uest>ro se<n>nor HC.

6 ihesu xpisto e vieron todo su fecho e entendieron spiritual
 7 mjent[r]e las sus obras [a] que auien a recodir. E connoscieron que
 8 el suor e el trabajo e la su sangre que [el esparzio] sufriendo
 9 penas e en cabo muerte en la cruz por nos fue unguento
 10 por que fuessemos sanos e redemidos de nuestros pecados
 11 e que a semeiante de aquell[o] fiziessen este otro que es
 12 llamado crisma por que son los xpistianos sagrados
 13 e an el nonbre de ihesu xpisto ca tanto quier dezir crisma
 14 en griego commo unguento sagrado [en si] e con que sagan otras
 15 cosas. E esto solien fazer antigua mjent[r]e a los reyes e a los
 16 sacerdotes ca les untauan las cabeças con olio e con
 17 otros unguentos preciados e moysem mismo lo fizo a aron

6) e(1) *om.* HC (espacio dejado en blanco); su]so EY19; spi.]espiritual M93
 7) mjentre]mjent<e> P40, me<n>te T11, HC, ment<e> T13, M93, +
 q<ue> T13, + todas M93; las] todas HC; sus *om.* T11; a(1)] en P40, *om.*
 T13; auien]aujan EY19, M93; a(2)]de M993, HC; rec.]recudir T11, HC,
 con.] conościero<n> EY19, M93, HC, *om.* T11; que]q<ua>l T11, *om.* HC;
 que el]q<ue>l EY19.

8) el(1)]su T11, + era M93 + su HC + ssa Alc; suor]sudor T11, T13, HC,
 su se<n>nor M93; el(2) + su T11, M93; e el trabaio *om.* Alc; el esparzio]sse
 derramo P40, se derramo EY19, es derramada T13.

9) en la cruz por nos]por nos en la cruz HC; fue]fuese T11; ung.]vnge<n>to
 EY19, enguento M93.

10) por *om.* T13; fue]somos EY19, fuésemos M93, seamos HC, sanos]ssaluos
 T13; san, e red]Redemjdos et saluos HC; de]dos Alc.

11) e]por HC; que (1) *om.* T13; a *om.* Alc; qu.]aq<ue>lla P40; fiz]fezjesen
 EY19, teziesen M93, ficiese HC; este otro]esta pro T13; que es]qu<e>s HC.

12) lla.]llamada T13, lamado EY19; son *om.* HC; los *om.* T11.

13) el *om.* T13, M93, HC, Alc; ihesu xpisto]x<pi>stos M93; ca]& T13, Et
 EY19, M93, quier]q<u>ere T11, EY19, M93; qujere HC; crisma *om.* HC.

14) ung.]vnge<n>to EY19, enguento M93; en si *om.* P40, T13, EY19; e *om.*
 HC; sag. + las HC.

15) sol.]solia<n> T11, M93, ssuelc<n> T13, suelen EY19, sol. faz.] faziam
 Alc; ant.]antiga HC; mje.]mjent<e> P40, T13, mjente M93, me<n>te T11,
 HC; a(1)]& Alc; reyes]Reys EY19.

16) ca cab. *om.* HC; les]los T11; unt.]vnta<n> T13; con(2) + los HC.

17) ung.]vnmentos EY19, enguentos M93; e + no<n> tan solame<n>te
 los vntaua<n> en la frue<n>te & en las espaldas co<m>mo los unta<n>
 agora mas de somo d<e>la cabeça fata en fondo<n> d<e>los pies % Et
 HC (= *Setenario*); moy.]moyssen T13; mismo]mesmo EY19, M93; aron + su
 h<er>mano M93.

18 quando lo ungio por sacerdote en la iglesia de dios que
 19 era estonce por que fiziesse el su sacrificio e samuel
 20 propheta unto a saul que fue primera mjent[r]e rey del pueblo
 21 de israel por mandado de dios e otrosi fizo el rey dauit
 22 e [n]atan [. .] propheta unto a sal[a]mon. Mas la unçion de
 23 nuestro sennor ihesu xpisto fue mas noble e mas conplida
 24 que todas ca si los otros lo rescibieron por omes
 25 el rescibiolo por dios su padre e si lo ouieron rescebido
 26 por ayuntamiento de confeciones el rescibiolo por ayuntança
 27 de la santa trinidad que se ayunto en el. E por ende [a]
 28 sant iohan babtsta por quien dixo nuestro sennor
 29 ihesu xpisto que era propheta e mas de propheta vinieron []
 30 preguntar los judios a que dizien fariseos si era el xpisto

- 18) quando]q<ua>ndol T11; ung.]??gio EY19; egl]ygl<es>ia EY19, que era]q<ue>ra HC.
- 19) est.]entonçe EY19; fiz.]fezjese EY19, feziese M93, ficiese HC; el *om.* Alc.
- 20) unto]ungio HC; pri. mje.]p<r>imeyro Alc; mje]mjent<e> P40, me<n>te T11, HC, ment<e> T13, mente EY19, M93.
- 21) isr.]yrael HC; e *om.* HC; otr.]ot<r>osi EY19, ot<r>o'si HC, eso mismo M93; fizo]unto T11; el]al T11, HC; dauit]dauit T11, M93, HC.
- 22) nat]mata<n> P40, EY19, mathan T11, + el P40, EY19, + un T11; sal]salomo<n> P40, lamo<n> T11.
- 24) todas]todos HC, + las otras T13; ca *om.* EY19, lo]la T13, HC, *om* EY19, resc.]recibiero<n> T11, T13, HC, Resçebire<n> EY19, rreçebiero<n> M93; por + los T11, mano de HC; cmcs]om<n>es T11, hom<n>es HC.
- 25) el]& elle Alc; rescibio-]Reçibio T13, M93, Resçebio EY19; rescibiolo]la recibio HC; lo(1)]la T13; su *om.* Alc; padre + que era seu padre Alc; si]assi T13, esses Alc; lo(2)]la HC; oui. res]rreçibieron<n> M93; rescebido]recebido T11, HC, *om* T13.
- 26) por] q<ue> Alc; ayu. de *om.* EY19; conf.]confessiones T11, co<n>fession<e>s T13, co<n>fession<e>s EY19, co<n>fesor<e>s M93, + E Alc; rescibio-]recibio T11, rreçibio T13, M93, Reçebjo EY19, rescibiolo]la Recibio HC; ayu.]ayu<n>tamje<n>o T11, ayuntamje<n>to T13, HC, ayuntança EY19, Ayuntença M93, junçã Alc.
- 27) la *om* Alc; san. tri.]t<ri>njdat santa EY19, tri.]trenjdat M93; ayunto]ayunta M93; en]con M93; a *om.* P40, EY19, Alc.
- 28) ioh.]Jua<n> EY19; bab.]bautista EY19; quien xpisto (29) *om.* Alc; nue. scn. . . e el dixo (31) *om.* HC (se suple en el margen inferior).
- 29) e mas de pro. *om.* T11, Alc; mas de pro. *om.* M93, mas]demas T13, del]que HC; vin.]veniero<n> EY19, venjero<n> M93, + —le P40, + —o Alc, + a EY19, M93.
- 30) pre. + a M93; jud.]jodios HC; a *om.* T13; a que diz.]& los HC; que]q<ui>en M93; diz.]dezjen T11, dize<n> T13, dezja<n> EY19, dezian M93, dizê Alc.

31 e el dixo que non mas que de[s]pues del uerni[e aquel] que fuera
 32 fecho ante que el del qual [el non era] digno de desatar la correa
 33 de[l] su çapato e en esto mostro la trinidad en que dixo que
 34 de[s]pues del uerni[e] aquel que fuera fecho ante que el
 35 e al qual el non era digno sola mjent[r]e de tanner los sus pies.
 36 Otrossi dio este testimonio de la trinidad alli o mostro
 37 que sopiera por dios que sobre aquel que uiesse descender
 38 el spiritu santo en figura de paloma que aquel era
 39 el que babtizaua el spiriu santo e sin esto dio testimonio
 40 del de quando el babtizaua a ihesu xpisto que oyo la boz
 41 del padre quel dixo que aquel era su fijo que el mucho amaua.
 42 E desta guisa fue nuestro sennor ihesu xpisto sagrado

- 31) que(1) *om.* HC; non + era Alc; des.]depues P40, HC; del uerni]u<er>nja del T13; uerni]uernja P40, vernja EY19, M93; aqu.]& P40, EY19, aq<ue>ll HC; aqu. que *om.* T13; fuera]fuer<e> T13, era M93, Alc.
- 32) que el]q<ue>l T11, EY19; el(2) *om.* T13, HC; el non era] no<n> era el P40; dig]dipno EY19, + sola ment<e> de ta<n>ner ni<n> M93; la cor.]las correas M93; cor.]correa HC.
- 33) del]de P40; del su çap.]delos sus çapatos M93; çap.]çabato T13; e en esto sus pies (35) *om.* HC; en(1) *om.* Alc; mos.]se entie<n>de T11; tri.]trenjdat EY19, M93; en que]onde T11, do M93; en que dixo que]ca Alc.
- 34) des.]depues P40; del]el Alc; uer.]uernja P40, T11, u<er>nja T13, vernja EY19, M93; aquel que fuera fecho ante que el *om.* T13; que(1) *om.* Alc; que el]q<ue>l EY19.
- 35) e *om.* T11, T13, M93, e al]do Alc; al]el T13, *om.* T11; el *om.* T13, M93, Alc, dig.]dipno EY19, + ta<n> EY19, tan M93, Alc, sola mje, de tan]de ta<n>ner ssolamjent<e> T13; mje.]mjent<e> P40, T13, M93, me<n>te T11; de]en T11, *om.* Alc; tan.]taner EY19; pies]pes T11, + E T11, + & T13, + Et M93.
- 36) Otr.]Ot<r>osi EY19, ot<r>osy M93, Ot<r>o'si asi HC; dio]dixo T13, EY19; tes.]testemonjo EY19; tri]trenjdat EY19, M93; alli]ali HC; o]do T11, EY19, M93; + p<er> E19.
- 37) sobre aquel]sobrel T11; aqu. + en HC; uie]uinessc T11, uenjese EY19, viesse<n> T13, viese M93, ujese HC; des]deçender EY19, deçe<n>der M93.
- 38) spi.]sp<iri>to EY19, esp<iri>tu M93; santo *om.* T11, M93; pal.]palomba EY19; aqu.]aq<ue>ll HC.
- 39) el que... aquel era (41) *om.* T13; bab]bautizaua T11, M93 batizaua EY19, bap̄ticaua HC el(2)]en M93, HC, + en T11; es]testemo <n>io HC.
- 40) del]dende M93; del de]dende T11, onde HC, *om.* Alc; de]que EY19; el *om.* M93, HC; bab.]bautizaua T11, M93, batizaua EY19; bap̄ticaua HC, + n<uest>ro se<n>or HC; a *om.* HC; que]q<u>a<n>do Alc; oyo *om.* HC; boz]uoz EY19, HC.
- 41) que]que HC aqu.]aq<ue>ll HC; era + el M93, + o Alc; su]el T11; fijo + el HC; que el]q<ue>l T11, EY19
- 42) guisa]gisa EY19.

43 spiritual mjen[r]e por mayor sacerdote mas tenporal mjent[r]e
 44 segunt rey fue sagrado rescibiendo muerte e passion por nos
 45 ca allí o lo alçaron en la cruz el pusieron conora
 46 de espinas por desonrra alli fue alçado de dios su padre
 47 por onrra quandol dio poder sobre todas las cosas el coronó
 48 en los cielos el dio regno p[o]ra siempre. E la untura sagrada
 49 desto fue la sangre que sallio del cuerpo onde fue el cubierto
 50 e untado desde [somo] de la cabeça fa[s]ta [en fondon de]
 51 los pies. Onde por todas estas razones que auemos dichas
 52. fue nuestro sennor ihesu xpisto sagrado segunt obispo
 53 en santidat e en saber e segunt rey en poder e en justicia.
 54 E por ende ordeno santa eglesia que non ouiesse otri poder

-
- 43) spi.]esp<iri>tual M93; mje (1)]mjent <e> P40, me<n>te T11, HC, ment<e> T13, mente M93; may. *om.* HC; mas *om.* M93; mje(2)]mjent<e> P40, T13, M93, me<n>te T11, me<n>t HC.
- 44) sg.]segu<n>d T11; seg. rey fue sag.] foy sagrado segundo rrey & Alc; rey *om.* EY19; resc.]recibie<n>do T11, HC, rrecibiendo T13, Resçebjendo EY19, q<ue> rreçibio M93; muerte e passion]passio<n> & muert<e> T13, payxō & morte Alc; pas.]pasion EY19.
- 45) ca]E T11; alli]alla EY19; o]do M93, *om.* T11, EY19; alç.]alcaro<n> HC; el]& le T11, & li T13, Et EY19, le HC; (cruz simbólica) le M93, el pus] & poserã lhy Alc, pus.]posieron EY19, M93, posiero<n> HC, cor]coro<n>as HC, + enla cabeça EY19.
- 46) de esp.]despinas HC; alli]ali HC; alli fue .. por onrra (47) *om.* T13; fue + el T11, M93, Alc; alç.]alc HC, + por desonrra ally fue el alçado T11; de dios *om.* HC; su padre *om.* T11.
- 47) quandol]q<ua>ndo le T11, EY19, ca HC; dio]diol HC; el]& lo T11, T13 EY19, M93 & o Alc; coronó]torno T11.
- 48) el]& le T11] T13, EY19, M93, dio + el EY19, HC; pora]p<ar>a P40, EY19, HC, para T11, por T13, M93; E]ca M93, + en T11; unt.]uent<ur>a T11, T13, uestidura EY19, + era T13.
- 49) desto]deste T11, M93, esta HC; fue(1) + so EY19; sallio]salio T11, saljo EY19, sallo M93, e saiu Alc; sal. del cue.d<e>l su cuerpo salio HC; del]do seu Alc, + su T11, M93 (HC); onde]donde T11, M93; fue el]el foy Alc; cub. e unt.]vntado & cobierto M93.
- 50) desde + e<n> T13, en M93, HC; somo]ffondon P40; fas.]ffata P40, HC; en fondon de *om.* P40
- 51) est. + cousas & Alc; raz.]racones HC; dichas]dicho HC.
- 52) seg.]segu<n>d T11.
- 53) e(2) *om.* M93; seg.]segu<n>d T11; rey + & enp<er>ador Alc; en poder *om.* M93; jus.]jati;ia T13.
- 54) ord + a Alc; oui]oviese EY19, ouiese M93, oujese HC; otri]otro T11, EY19

55 de fazer la crisma que es el su unguento sinon los prelados
 56 mayores segunt diximos en el comienço desta ley
 57 porque ellos tienen las sus uezes en tierra a semeiante del

55) faz.]facer HC, que es el su ung. *om.* M93; el su ung]vngue<n>to suyo T13; ung.]vngento EY19.

56) seg.]segu<n>d T11; dix.]dixemos T13, deximos M93, + de ssuso T13; el *om.* M93; com.]comie<n>co HC.

57) sus *om.* T13, HC; a]en T11; sem]semaja<n>ca HC.

(2) TEXTO TRANSICIONAL ENTRER LA 1.^a PARTIDA Y EL SETENARIO

MS HC397/573, Hispanic Society of America (s. XIV) SP 1 Texto transcrito SP 1,5,30 (= 1,4,30).

[fol. 27r]

[HD. vo' d<e>los sac<ra>me<n>tos de santa egl<es>ia]

(CB2.

— — — — —

6 .. [RUB. Ley xxxa' quie<n> ha pod<er> de ftacer
 7 la c<r>i'sma [SYMB.] [BLNK.]
 8 [IN2.] [P]oder de facer la c<r>i'sma no<n> es dado a ot<n>'
 9 sino<n> alos p<re>lados mayor<e>s asi co<m>mo
 10 apostoligo o pat<r>i'arca o p<r>i'mado o arcebispo
 11 o ob<is>po % Et esto es por q<ue>llos tiene<n> el llo-
 12 gar d<e>los apostol<e>s que fuero<n> conpa<n>on<e>s
 13 de jh<es>u x<pisto> n<uest>ro se<n>nor [&] viero<n> todo su
 fecho.
 14 & entendiero<n> sp<irit>ual me<n>te todas sus o-
 15 bras a que auje<n> de recudir % conosci-
 16 ero<n> el sudor & el t<r>a'baio & la su sangre
 17 que el esparc'io sufrie<n>do penas & en ca-
 18 bo muerte por nos en la cruz que fue
 19 vngue<n>to por que seamos Redemjdos et
 20 saluos de n<uest>ros pecc<ad>os por que aseme
 21 ja<n>te de aq<ue>llo ficiese este ot<r>o' qu<c>s lla-
 22 mado c<r>i'sma por que los x<pist>i'anos sa-
 23 grados han el nombr<e> de jh<es>u x<pist>o' % Ca
 24 tanta quiere dczir en g<r>i'ego co<m>mo ungue<n>to
 25 sagrado en si con que sagr<n> las ot<r>a's

26 cosas & esto solie<n> facer antigame<n>te a los
 27 Reyes & a los sacerdot<e>s co<n> olio & con los ot<r>o's
 28 vngue<n>tos p<re>ciados & no<n> tan solame<n>te los
 29 vntaua<n> en la frue<n>te & en las espaldas]

[CB2.

30 co<m>mo los vnta<n> agora mas de somo d<e> la ca-
 31 bec'a fata en fondo<n> d<e> los pies % Et moyse<n>
 32 mesmo lo fizo a aro<n> qua<n>do lo ungio por
 33 sacerdote en la egl<es>ia de dios q<ue>ra estonc'e
 34 por que ficese el su sac<r>a'ficio % Et samu<e>l
 35 p<ro>ph<et>a ungio asaul que p<r>i'm<er>a me<n>te fue Rey
 36 d<e>l pueblo de yrael por ma[<n>]dado de dios ot<r>o'
 37 si fizo al Rey daujd & Natha<n> p<ro>ph<et>a vnto
 38 asalomo<n> % Mas la uncio<n> de n<uest>ro se<n>nor jh<es>u
 39 x<pist>o' fue mas nobl<e> & mas complida q<ue> todos
 40 ca silos ot<r>o's la recibiero<n> por mano de hom<n>es
 41 el la recibio por dios su padre & [l]a ouje-
 42 ro<n> Recebido por ayuntamie<n>to de confeci-
 43 on<e>s el la Recibio por ayuntamje<n>to d<e> la s<an>c<t>a
 44 t<r>i'njdat que se ayunto en<e>l % Et por end<e> a sa<n>t
 45 joh<a>n b<a>b<tist>a por queje<n> dixo
 (58) [n<uest>ro se<n>or ih<es>u xp<ist>o que era p<ro>pheta &
 mas que
 (59) p<ro>ph<et>a vinjero<n> p<re>gu[<n>]tar los jodios & los
 phari-
 (60) seos si era el xp<ist>o & el dixo]
 que no<n> mas de
 46 pues d<e>l v<er>nje aq<ue>ll que fuera fecho ant<e> q<ue>
 47 el d<e>l qual no<n> era digno de desatar la corr[e]-
 48 ya d<e>l su c'apato % Ot<r>o'si asi dio testimo<n>io
 49 d<e> la t<r>i'njdat ali omostro que sopiera por [??]
 50 dios que sobr<e> aq<ue>ll enque ujese descend<e>r
 51 el sp<irit>u s<an>c<t>o en figura de paloma que aq<ue>ll
 52 era el que bapteaua en sp<irit>u s<an>c<t>o % Et sin
 53 esto dio testemo<n>io onde qua<n>do baptec'aua
 54 n<uest>ro se<n>or ih<es>u x<pist>o' la uoz d<e>l padre que
 dixo
 55 que aq<ue>ll era su fijo el que e mucho amaua
 56 % Es desta' g<u>i'sa fue n<uest>ro'<n>or jh<es>u x<pist>o' sa-
 57 grado sp<irit>ual me<n>te por sacerdot<e> mas tp<o>ral

[fol. 27v]

[CB2

1 me<n>t segu<n>t Rey fue sagrado Recibie<n>do muerte
 2 et pasio<n> por nos ca alli olo alc'aro<n> en la cruz
 3 le posiero<n> coro<n>as despinas por desonra &
 4 ali fue al[c'ado] de su padre % Por honra ca diol
 5 pod<e>r sobr<e> todas las cosas el coro<n>o en los
 6 cielos el dio el Reg<n>o p<ar>a siemp<re> % Et la
 7 vntura sagrada esta fue la sangr<e> que
 8 d<e>l su cuerpo salio ond<e> fue el cubjerto
 9 & vntado desde en somo d<e>la cabec'a ffata
 10 en fondo<n> d<e>los pies % Ond<e> por todas
 11 estas Racon<e>s que auemos dicho fue n<uest>ro
 12 se<n>nor ih<es>u x<pisto>o' sagrado segu<n>t ob<is>po en
 s<an>tidat et
 13 en sab<c>r & segun<n>t Rey enpod<e>r & en justicia
 14 % Et porend<e> orde<n>o s<an>c<t>a egl<es>ia q<ue>non
 oujese
 15 ot<r>i' pod<er> de faer la c<r>i'sma que es el su
 16 vngue<n>to sino<n> los p<re>lados mayor<es> segu<n>t dixiemos
 17 en<e>l comie<n>co desta ley por que ellos tiene<n> las uez<e>s
 18 en t<ie>rra ascmaja<n>ca del ..
 ————]

4) MANUSCRITOS DEL SETENARIO.

MS 43-20 Biblioteca Capitular de Toledo (s. XIV).

Setenario, SP 1, etc. Texto transcrito: *Setenario*, parte dela ley 89

[fol. 47r]

[CB2.

————
 18 ... % po-
 19 der de ffaze<r> la c<r>i'sma esto es dado ssino<n> a
 20 los p<re>lados mayor<e>s assi co<m>mo apostoligos o
 21 pat<r>i'archas o p<r>i'mados . o arc'ob<is>po . o ob<is>po por
 22 q<ue> ellos tiene<n> logar de ap<osto>les q<ue> ffuero<n>
 co<n>-
 23 pan<er>os de n<uest>ro sse<n>or ih<es>u xp<ist>o Et vicro<n>
 todo
 24 ssu ffecho Et entendiero<n> sp<irit>ual mje<n>te las sus

25 obras aq<ue> ouyero<n> a rrecudir Et conosc'iero<n>
 26 por el ssu ssuor & ssu trabaio & la ssangre
 27 q<ue> esparzio ssuffriendo penas & encabo muerte
 28 en la cruz por nos q<ue> ffue vnguento por
 29 q<ue> ffuemos ssanos & rredemjdos de n<uest>ros p<e>ccados]

[CB2

30 Et q<ue> assemeia<n>te de aq<ue>llo q<ue> ffue establec'ido
 31 ffiziessen este otro q<ue> es llamado c<r>i'sma por q<ue>
 32 los xp<ist>ianos sson ssagrados & an no<n>bre de x<rist>o'
 33 % Ca c<r>i'ssma tanto q<u>i'ere dez<ir> en g<r>i'ego co<m>mo
 34 vngue<n>to sag<rado> en ssi q<ue> sagra las otras co-
 35 sas % Et por ende ordeno s<an>c<t>a egl<es>ia q<ue> otro
 36 no<n> ouyese poder de ffaz<e>r c<r>i'sma q<ue> es el ssu
 37 vngue<n>to ssino<n> los p<re>lados mayor<es> por <ue>
 38 ellos tiene<n> las ssus vezes en t<ie>rra asseme-
 39 iante del % Q<ue> alos rreyes & alos ssac'rdo-
 40 tes ssolia<n> untar antig<u>a' mje<n>te con olio & co <n>
 41 otros vngue<n>tos p<re>c'iados Et esto no<n> tan sso-
 42 la mje<n>te g<e>lo ffazia<n> en la frue<n>te & en las
 43 espallas co<m>mo unta<n> los de agora . mas de
 44 ssomo d<c>la cabec'a ffasta ffondon d<e>las piernas
 45 % Et moyses mismo lo ffizo aaron q<u>a'ndo sse
 46 vngio por ssac'erdote en la egl<es>ia de dios <que>
 47 era entonc'e por q<ue> ffiziese el ssu ssac<r>i'ffic'io
 48 % Et ssamuel el p<ro>ph<et>a vnto a ssaul q<ue> ffue
 49 el p<r>i'mero Rey d<e>los judios por mandado de
 50 dios Et ot<r>o'ssi lo ffizo [??] al Rey d<au>i>d % Et
 51 Natan el p<ro>ph<et>a vnto a ssalamo<n> q<ue> ffue mas
 52 noble & mas conplida la vnc'io<n> de ih<es>u xp<ist>o
 53 q<ue> todas las otras % Et esto ffue por q<ue>
 54 todos los otros lo rrec'ibiero<n> por mano de
 55 om<e>s % Et el rrec'ibiolo por dios ssu padre %
 58 Et ssi ellos lo ouyero<n> rrec'ebido por ayu<n>ta-
 59 mje<n>to de co<n>ffecc'ion<e>s el rrec'ibiolo por ayu<n>-
 60 tamje<n>to d<e> la ss<an>c<t>a t<r>i'njdat q<ue> sse
 ayu<n>to en el
 61 % Et por ende a sa<n>t ioh<a>n b<a>b<tist>a por q<u>i'en
 dix<o>
 62 n<uest>ro sse<n>nor ih<es>u xp<ist>o <que> era
 p<ro>ph<et>a vinjero<n> p<re>gu<n>-
 63 tar los judios aq<ue> dizia<n> phariseos ssi era
 64 el xp<ist>o Et el dixo no<n> Mas despues del uer-nje]

[fol. 47v]

[CB2

1 aq<ue>l q<ue> ffuera ffecho ant[<c>] q<ue> el del q<u>a'l
 2 el no<n> era digno de descalc'ar la correa del
 3 ssu c'apato % Et ot<r>o'ssi dio este testimonjo d<c>la
 4 t<r>i'njdat alli do mostro q<ue> ssopiera por dios q<ue>
 5 ssobre aq<ue>l q<ue> viesse desc'ender el sp<irit>u
 s<an>c<t>o en
 6 ffigura de paloma q<ue> aq<ue>l era el q<ue> bap-
 7 zaua en sp<irit>u s<an>c<t>o % Q<ue> tenporal mje<n>te ffue
 8 ssagrado n<uest>ro sse<n>nor ih<es>u xp<ist>o ssegu<n>t
 Rey mu-
 9 estra q<ue> ffue rrec'ibiendo muerte & passion
 10 por nos % Ca alli dolo alc'aro<n> en la cruz
 11 & le pusiero<n> corona de espinas por deson-
 12 rra q<u>a'ndol dio poder ssobre todas [las] cosas & le
 13 corono en los c'iclos & le dio el rregno por
 14 ssiempre % Et la vntura sagr<a>da desto ffue
 15 la ssang<r>e' q<ue> ssalio del ssu cuerpo de q<ue> ffue
 16 cubierto % vntado de ssomo d<c>la cabec'a fasta
 17 ffondon d<c>los pies % Onde por todas estas
 18 rrazo<c>s q<ue> auemos dicho ffue n<uest>ro sse<n>nor
 19 ssagrado ssegu<n>t ob<is>po en ss<an>c<t>idat & en ssaber
 20 ssegu<n>t Rey en ssaber & en justici'a
 ————]

MS. PII.20, Biblioteca del Monasterio del Escorial (s. XIV). *Setenario* Texto transcrito: parte de la ley 89.

[fol. 66v]

[CB2.

19 ... Et poder de faz'er la
 20 crisma Esto no<n> es dado A
 21 otre sino<n> alos p<re>lados mayor<e>s
 22 asy co<m>mo apostoligos e apat<ri>-
 23 archas & ap<ri>mados o aarc'ob<is>po
 24 o ob<is>po porque ellos tiene<n> lu-
 25 gar dclos apostolos q<ue> fucron
 26 conpaneros de n<uest>ro se<n>nor ih<es>u
 27 xp<pist>o & viero<n> todo su fecho & en-
 28 tendiero<n> sp<irit>ual me<n>te las sus
 29 obras aq<ue> oujero<n> A Recodir Et
 30 conosc'ieron que el su suor]

[CB2.

31 / & su trabajo & la su sangre que
 32 esp<ar>c'io sufriendo penas & en cabo
 33 muerte en la cruz' por nos que /
 34 fue vntado por que fuésemos /
 35 sanos & Redemjdos de n<uest>ros pecados
 36 & que asemejante de aq<ue>llo que fue
 37 establesc'ido este otro que es lla-
 38 mado crisma porque son x<risti>anos
 39 sagrados & han nonbre de xp<ist>o
 40 Ca crisma tanto qujere dez'jr
 41 en griego co<m>mo vngue<n>to sag<r>a'do
 42 ensy que sacr<a>n las otras cosas /
 43 Et por ende hordeno santa igl<es>ia
 44 que no<n> oviese poder otrie de faz<e>r'
 45 crisma que es el su vngue<n>to sy
 46 non p<re>lados mayores por q<ue> ellos
 47 tienen las sus vezes en t<ie>rra
 48 a' semejante del Ca alos Reys / &
 49 alos sacerdotes solien vntar
 50 antigua me<n>te con / olio Et con
 51 ot<r>o's vnguentos / presc'iados Et
 52 esto no<n> tan sola me<n>te gelo fa-
 53 zien enla fuente & enlas espal-
 54 das co<m>mo vntan los de agora mas'
 55 de somo dela cabec'a sta en fondo<n>
 56 delos pies Et moyse<n> mesmo lo
 57 fiz'o a aro<n> q<u>a'ndo lo vnguio por
 58 sac'erdote enla igl<es>ia de dios q<ue> cra
 59 entonc'es porque fez'iese el su
 60 sac<r>i'fic'io Et samuel el p<ro>fecta]

[fol. 67r]

[CB2.

1 vnto A saul que fue el p<ri>m<er>o Rey
 2 delos judios por mandado de dios
 3 Etotrosy fiz'o al Rey daujd Et
 4 nata<n> el profecta vnto a salamo<n>
 5 que fue mas noble Et mas con-
 6 plida fue la vnc'ion<n> de n<uest>ro se<n>nor
 7 ih<es>u xp<ist>o que todas las otras Et
 8 esto fue por que todos los ot<r>o's
 9 lo Rescebiero<n> por mano de om<n>es
 10 Et el Resc'ebio por dios su pad<r>e'

11 Et si ellos lo oujero<n> Resc'ebido por
 12 ayu<n>tamjento de confac'ion<es> el Res-
 13 c'ebiollo por ayu<n>tamj<ent>o' de la santa' t<r>i'-
 14 njdad que se ayunto enel Et por
 15 ende a sa<n>t Jua<n> baptista por q<u>en
 16 dixo n<uest>ro se<n>nor ih<es>u xp<ist>o q<ue> cra p<ro>-
 17 fecta Et mas de p<ro>fecta vinjero<n>
 18 preguntar los judios a que dizie<n>
 19 fariseos sy era el xp<ist>o Et el dixo
 20 que no<n> mas que despues del ver-
 21 nje aq<ue>l que fuera fecho ante q<ue>
 22 el del qual el no<n> no<n> era digno de
 23 desatar la correa del su c'apato
 24 Et otrosy dio este testimonjo dela
 25 t<r>i'njidad allj do mostro q<ue> supiera
 26 por dios que sobre aq<ue>l que viese
 27 desc'ender el spi<ritu> santo en fig<u>r'a
 28 de paloma que aq<ue>l era el que ba-
 29 utiz'aua en sp<irit>u sa<n>to que te<n>poral
 30 me<n>te fue sagrado n<uest>ro se<n>nor ih<es>u xp<ist>o']

[CB2.

31 segu<n>t Rey muestra que fue Resc'e-
 32 biendo pasion Et muerte por nos
 33 Et allj do lo alc'aro<n> enla cruz' & le
 34 posiero<n> corona de espinas por des-
 35 honrra q<u>a'ndo dio poder sobre todas'
 36 las cosas & el coronó en los c'ielos
 37 Et le dio el Regno p<ar>a sienpre Et
 38 la vntura sagrada desto fue /
 39 la sangre quel salio del su cuer-
 40 po de q<ue> fue cubierto & vntado /
 41 desde somo dela cabec'a fasta en
 42 fondon delos pies. Onde
 43 por todas estas Raz'ones que /.
 44 Auemos dicho fue n<uest>ro se<n>nor ih<es>u
 45 xp<ist>o sagrado segu<n>t ob<is>po en
 46 santidad & en saber segu<n>t Rey
 47 en poder & en Justic'ia
 — — — —]

ENFITEUSIS, ¿QUE HAY EN UN NOMBRE?

«What's in a name? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet.»

Julieta, aún inocente:
acto II, escena II

1. ENTRE EXTREMADURA Y BALEARES: DUDAS E INTERROGANTES CON LA ENFITEUSIS

Segunda mitad del siglo XVIII, señoríos extremeños de Feria y de Villalba pertenecientes al ducado de Medinaceli, problemas relativos a la calificación de las rentas agrarias; resultan ciertas en cuanto a su determinación material: «la novena parte, tras haber exigido el diezmo, de todos los granos que se cogiesen y ganados que se criasen», pero inciertas en cuanto a su identificación jurídica: «por razón de terrazgo y en virtud de escritura de concordia», mas no sabiéndose bien si constituyen «arrendamiento» o «locación», de una parte, o, de otra, «enfiteusis». Esto último supondría que «como en el duque reside el dominio directo de las tierras, en el labrador el que puede residir es el dominio útil», esto es, propiedad, pero en un grado ya inferior, subordinada con ello mismo al dominio del señor¹.

Finales del siglo XIX, Comisión de Reformas Sociales, encuesta sobre la condición de las clases trabajadoras, preguntas relativas a «instituciones censuales»; respuesta de la comisión de Cáceres: aquí «tiene poco influjo la enfiteusis... y menos los establecimientos *a rabassa morta*», catalanes como la denominación indica, aunque no por ello dejan de existir «algunas prestaciones que pueden llamarse señoriales, provenientes del censo enfitéutico, que por su

1. Alfonso OTAZU, *La reforma fiscal de 1749-1779 en Extremadura*, Madrid 1978, págs. 91-92, debiéndole al autor transcripciones más completas de la documentación del caso.

moderación y ser pagadas en especie influyen poderosamente en beneficio del cultivador, tanto más cuanto que en ellas no existe laudemio, comiso ni tanteo, pagamentos, reversiones y preferencias que siempre son de mal efecto en la suerte de tales instituciones». No parece sino que, por historia o por geografía, alguna transmutación se ha producido de una institución señorial a otra que no lo resulta tanto, o que incluso, con toda su procedencia de señorío, se dice mecanismo de promoción campesina.

Seguimos en el mismo tiempo, ocasión y territorio; otra comisión extremeña, ésta de Plasencia, sube en dicha línea de tono: «La enfiteusis y sus similares, los foros, subforos, treduos, etc., tan frecuentes en Galicia, Asturias y Aragón, han debido producir y producen aún en la actualidad grandes beneficios a los cultivadores del suelo, a la vez que notable aumento en la riqueza rústica. Para persuadirse de ello debe observarse que estos contratos han convertido en labriegos o propietarios a multitud de obreros, que de esta manera pudieron emanciparse del terruño o dependencia señorial», gracias esto más concretamente al efecto que se dice típicamente enfitéutico de la obtención «a perpetuidad» de aquel «dominio útil». Con ello, según categóricamente se nos asegura, allí donde éstas «instituciones censuales» predominan, «los extensos terrenos pertenecientes a la nobleza y al señorío encontraron una forma de desamortización más justa» que la que en estas otras latitudes ha servido «para crear grandes capitales y recargar al Estado con muchas y costosas obligaciones»².

Segunda mitad del siglo xx, *Compilación de Derecho civil especial o derecho foral de las Islas Baleares*, capítulo de la división enfitéutica de dominios, con una regulación que tiende a liquidarla; comentario foralista o de los expertos en este tipo de derechos: «Cuando el censo enfitéutico, que supone la existencia de dos propietarios, uno que percibe los frutos y cultiva la tierra y otro que ostenta el dominio eminente y recibe una pensión del primero; cuando (decimos) el censo enfitéutico se haya en trance de desaparecer en casi todas las regiones españolas, y en el resto del mundo constituye un objeto de arqueología, nos encontramos con un

2. Comisión de Reformas Sociales, *Información Oral y Escrita*, Madrid 1884-1893 (rep. 1985), IV, págs. 480 y 541, Cáceres y Plasencia.

arrendamiento al que paulatinamente el legislador ha ido atribuyendo todas las características de la enfiteusis, y así, de nuevo, con otro propietario junto al antiguo propietario exclusivo»³. La enfiteusis, con todas sus virtudes, ya no podría cobrar vida porque el arrendamiento la habría suplantado, como si todas las implicaciones anteriores, salvo la de división del dominio, carecieran finalmente de sentido.

¿Qué ha ocurrido? La necrología de la enfiteusis anuncia su reencarnación: enfiteutas somos, sin saberlo, todos, o al menos los arrendatarios; la incertidumbre extremeña se demuestra persistente, bien que en el XVIII se sabía de la subordinación que la enfiteusis ya implicaba. ¿Ha crecido nuestra ignorancia? O, si las cosas han cambiado, ¿qué clase de misterio se encierra en esta figura enfitéutica que es en un siglo instrumento de supeditación social; en el siguiente, mecanismo de desamortización popular, y, ya en el nuestro, relación que pacíficamente confluye en la más común de arrendamiento? ¿Qué se esconde bajo este nombre de institución que, ya por jugarse en él la propiedad de la tierra y la explotación también del campesinado, o tal vez como se nos dice su emancipación, no parece desde luego una bagatela o, por mejor decir, no es por supuesto una banalidad? Lo que se pagaba al señor estaba claro, pero no su identificación jurídica, y en este nombre de derecho se dilucidaba si los campesinos tenían o no algún título a la tierra, resultando además luego decisivo para la suerte final de la propiedad, ya sin señorío sobre ella.

El nombre de la rosa ya discutirán los poetas si de por sí representa algo, pero lo nuestro tampoco es la poesía: por palabras el derecho es que se impone. Cuando unas mismas resisten en la historia, más se cargan de sentido, o más opacas y equívocas devienen. Y nada valen diccionarios, o aún menos manuales; definir las, desentrañarlas, ya es un problema histórico: a la historia debe concernir, y al historiador, importar. La competencia se le supone, ya que la especialidad existe, al del derecho.

3. Enrique LALAGUNA, *La enfiteusis en el Derecho civil de Baleares*, Pamplona 1968, pág. 80, que es cita de autoridad de José Luis Lacruz

2. DE GRECIA HACIA EL INFINITO: SUERTE Y TRIUNFO DE LA ENFITEUSIS

Grecia, edad antigua: más allá del siglo XVIII habremos de remontarnos, como a otra extremadura europea desplazarnos. De allí procede un término cuyo mismo exotismo en ámbitos latinos ya podría explicar algo de su éxito. Antes de que se cargue de misterio, no significaba la verdad gran cosa: era *emfyteusis* plantación o, mejor, acción nueva de plantar, viniendo entonces a aplicarse a especie de concesión estable de terrenos sin dejación entera de dominio, o a especie así de derecho de disposición de la tierra a dicho efecto de cultivo⁴.

La práctica de la *emfyteusis*, acogida en el derecho romano, encajaba mal en un cuadro caracterizado por una institución de *dominium* que, antes o más que propiedad sobre las cosas, representaba poder político en el ámbito doméstico, como tal parcialmente intransferible; su misma figura típica de *locatio et conductio* o arrendamiento era cesión temporal de cosas singulares que no podía transmitir derecho real o directo sobre ellas. Prácticas de concesión más estables entraban especialmente mal en el campo de las propiedades de los ciudadanos, no imperiales o no eclesiásticas; en estas otras en cambio pudieron mejor irse introduciendo, mas sin vencerse tampoco completamente dichas dificultades de encaje. Ya aparece la *emfyteusis* asimilada a la *locatio*, sin posibilidad así de transferir algún derecho sobre el bien, ya aparece el *emfyteuta* o concesionario asimilado al *dominus*, con la insinuación así exactamente contraria, pero, en uno u otro extremo, de igual modo se entiende que los términos se utilizaban en sentido impropio: ni una cosa ni otra rigurosamente se establece. La perplejidad también entonces se refleja con la sugerencia de concebirse el *ius emfyteutecarium* como tercer género o *ius tertium* entre arrendamiento y dominio, pero ello tampoco sabe fundamentarse y desarrollarse en este contexto de aquel derecho antiguo⁵.

4. Werner KAMPS, *L'emphytéose en droit grec et sa réception en droit romain*, en *Recueils de la Société Jean Bodin*, III. *La Tenure*, 1938 (rep 1983), págs. 67-121.

5. Paolo GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, Padua 1968, págs. 17-18, que es la mejor introducción al conjunto de nuestra problemática.

La *emfyteusis* constituía un derecho estable sobre la tierra en manos del concesionario, pero no tampoco perpetuo ni de plena disposición; aparte la obligación básica de atenderse una *pensio* o renta, o *canon* como también se decía con término griego, el *emfyteuta* quedaba subordinado respecto al *dominus*, con cuyo consentimiento no gratuito y opción preferente había de contar para disponer de su propio derecho, que además podía más expeditivamente perder de descuidar durante un trienio la atención de la renta. Así efectivamente subordinado, el derecho del *emfyteuta* no parecía tampoco permanente; entre otras figuras de perfiles igualmente poco nítidos que incidían en su mismo campo, se mantuvo junto a la *emfyteusis* una distinta de más específico *ius perpetuum* sobre la tierra sin título tampoco propio de *dominium*. Con tales condicionamientos, adquiriría en todo caso nuestro *emfyteuta* un derecho estable a su cultivo y disposición, acercándose ciertamente su posición a la de un derecho dominical, como hubo de quedar reflejado en los mismos textos de derecho romano, o romano-bizantino, que se transmitirán a otras épocas⁶. En ellos echa realmente la enfiteusis sus raíces como, de momento, una planta exótica y mal aclimatada.

En unos primeros siglos medievales y en nuestra zona occidental, el término arraigaba muy irregularmente; entre otros muchos que denotan relaciones agrarias de creciente composición señorial, comparece el de enfiteusis; tampoco es que se le encuentre entre los de curso más común, documentándosele más raramente fuera de dominios eclesiásticos. Con toda la diversificación de prácticas y usos locales, al núcleo semántico de la enfiteusis, de por sí mal demarcado y bien compartido, pueden brotarle las más variadas

6. Carlo Augusto CANNATA, «*Possessio*», «*Possessor*», «*Possidere*» nelle fonti del Basso Impero Romano, Milán 1962, págs. 160-166, con sus indicaciones bibliográficas. Se cumple aquí una regla tan curiosa como probada en la historia del derecho: el volumen de la bibliografía resulta proporcional inversamente al grado de posibilidad del conocimiento o directamente al de carencias de la documentación; cómo cabe así progresarse ya se comprueba: todavía debe citarse no sólo como «fundamental», sino también como «difícilmente superable» el estudio *Zur Geschichte der Erbpacht in Altertum* de Ludwig Mitteis, Leipzig 1901. Para no alimentar regla tan poco económica, aunque por lo que se ve académicamente todavía rentable, pasaremos de largo, que ya volverán los textos.

adherencias que interesan a obligaciones y derechos campesinos. En estas circunstancias, querer reconstruir ya para entonces un concepto de la figura de aplicación general, no tiene mayor sentido, bien que sea empeño tradicional de la historia del derecho⁷; a la misma variedad de la documentación, con toda su penuria y avaricia, habrá entonces de estarse. La investigación, ya perjudicada por dicho anacrónico empeño de tipificación contractual, tampoco se beneficia del también clásico abordaje de los orígenes del feudalismo en clave predominantemente política, sin suficiente distinción ni tratamiento de las relaciones agrarias⁸.

Para nosotros, que acudimos a problemas más limitados y menos remotos, nos bastará con saber que el término no se perdía y que su significado se mantenía en el terreno de estas relaciones. Mas para la historia posterior, que ya habrá más sustancialmente de interesarnos, resultará de importancia superior a este mismo hecho de su supervivencia en la vida agraria medieval, el de su conservación en aquellos textos de derecho romano, los cuales, a partir del siglo XII, volverán más ampliamente a utilizarse, y ahora para reducirse y controlarse esta variopinta vida medieval. Estos textos, como bien se sabe, efectivamente servirán, y con ellos la enfiteusis, para el entendimiento y la conformación, para la manipulación y el encauzamiento, de sus relaciones sociales.

Desde ahora adquirirá su relieve la enfiteusis. Lo adquirirá ante

7. Silvio PIVANO, *Precarie e livelli*, Turín 1962, con su entrada a la enfiteusis, que se debate con la literatura posterior a sus juveniles y más osados *I contratti agrari in Italia nell'Alto Medioevo*, Turín 1904 (rep. 1969). Para otros debates clásicos de este momento, M. J. B. de ALMEIDA COSTA, *Origem de enfiteuse no direito português*, Coimbra 1957, págs. 31-47; P. W. A. IMMINK, *Propriété ou seigneurie?*, en *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, 29, 1961, págs. 416-431. Aquí destacó la aportación de las *Notas para la historia de la enfiteusis* de Raimundo NOGUERA, en *Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos*, 2, 1950, págs. 151-274, que también escapó a Pivani, considerando especialmente otra española de arte menor (ya a juicio del interesado: *Revista de Política Social*, 101, 1974, pág. 6): Rafael GIBERT, *Los contratos agrarios en el derecho medieval*, en *Boletín de la Universidad de Granada*, 89, 1950, páginas 305-330.

8. Para noticia crítica pero desde tales mismos planteamientos: Abilio BARBERO y Marcelo VIGIL, *La formación del feudalismo en la Península Ibérica*, Barcelona 1978, págs. 76-79, respecto a relaciones agrarias.

todo y sobre todo en el lenguaje común de la cultura jurídica de extensión europea que imperará hasta el siglo XVIII, en esta cultura que, con su propio lenguaje latino, se superpone a las que se sirven del romance, más vinculadas a dicha vida altomedieval. En una se construirá un concepto general de enfiteusis, o un doble concepto como veremos; en las otras podrán resistir estilos más variados; pero no son tampoco culturas incomunicadas. Moviéndose en un mismo campo y contemplando ya la una los supuestos de las otras, intentará someterlas, como mejor podrá verse en los momentos de intervención judicial y de alteración legislativa que con el tiempo vendrán; mas tampoco las elimina. Son advertencias que conviene ir dejando registradas: los conceptos más formados de enfiteusis todavía operarán durante siglos, como el conjunto de esta cultura jurídica, más por inducción social que por imposición normativa, pudiendo localmente subsistir la mayor variedad de usos, también léxicos. Estos conceptos todavía no resuelven suficientemente durante siglos los problemas de inteligencia de los términos que rinde la documentación, aunque no por ello tampoco dejarán de aportar su clarificación. Veamos.

Pasajes secundarios del derecho romano adquieren ahora un sentido inesperado, brindando base para la atención de problemas nuevos y fundamentales. Aquella perplejidad de los tiempos antiguos ahora se desvanece, revelándose unos conceptos ya por los apremios de la realidad. Se trata ahora de asegurar y ordenar la articulación respecto a la tierra de una estructura o jerarquía de carácter feudoseñorial, a cuyo efecto vendrán divisiones y distinciones de un dominio ya plural. Llega ahora a concebirse incluso un *dominium utile* o derecho a la tierra del campesino, atribuyéndosele al señor, como título a sus rentas y servicios, un *dominium directum*, dominio propiamente tal: *directum* o *derecho*, mientras que «*utile, id est efficax*» o práctico⁹.

Para su misma reproducción y estabilidad, se trata de configurar como derechos dominicales distintos las diversas situaciones presentes, sin merma ni alteración. Especialmente para el campe-

9. P. GROSSI, *Situazioni reali*, págs. 190-191, aun teniendo el calificativo «*utile*», ya al pertenecer a diverso capítulo, otra connotación en el texto romano de base.

sino, en el derecho va la obligación, o va muy particularmente su subordinación, venciendo las mismas resistencias que no dejaron de suscitarse para este reconocimiento de su dominio, que ya vino en último lugar, tras el modelo del vasallo noble. La división de dominios se concibió primeramente en el ámbito de la relación estrictamente feudal, correspondiéndole el *directum* o derecho al señor superior, *dominus* en el sentido más propio y genuino, y el *utile* al vasallo concesionario del *beneficium* o señorío; bajo estos presupuestos, se proyectó ulteriormente la misma idea a la propia relación señorial inferior, con dicho resultado de asignación de un diverso *dominium utile* al campesino, como bien se nos decía en Extremadura ¹⁰.

Ya de entrada conviene advertirse la complejidad del cuadro en el que vendrá a incardinarse la enfiteusis. La división del dominio que interesa al campesino ya cuenta con otra superior, que no se desplaza en caso alguno por su reconocimiento. El sistema no responde a una simple partición dual, como pudiera hacer creer el juego sólo binario de calificativos, sino que se escalona en más grados. Cada división de dominios se produce y despliega efectos en su propio ámbito; al señor superior corresponderá el dominio directo del feudo; al vasallo noble o señor intermedio, su dominio útil, del mismo feudo, y el directo a su vez del señorío, así coincidentes, pero guardando cada uno su distinción de subordinación o de superioridad según la vertiente de su ejercicio, con su diversidad de obligaciones y de derechos; el campesino finalmente se encontrará con el dominio útil en el ámbito del señorío o con este derecho ya a la tierra, con todo este gravamen, o servidumbre si quiere decirse, que sobre ella pesa.

Sobre todo en lo que interesaba a las relaciones agrarias, se debatió la inclusión de unas u otras prácticas en este cuadro de la división del dominio, llegándose en el siglo XIV a una cierta tipifi-

10. Para el conjunto de la operación, superándose la ficticia contraposición que todavía en algo resiste entre un germanismo de participaciones dominicales y un romanismo de propiedad privada, Edmond MEYNIAL, *Notes sur la formation de la théorie du domaine divisé*, en *Mélanges Fitting*, Montpellier 1908 (rep. 1969), II, págs. 409-461, con las puntualizaciones de Robert FEENSTRA, *Les origines du dominium utile chez les glossateurs*, en sus *Fata Iuris Romani*, Leyden 1974, págs. 215-259.

cación. Con el criterio más realista, entrarían aquellas que, con independencia de calificaciones y pudiéndose así también comprender el arrendamiento, se caracterizaran por el *longum tempus* o simple estabilidad:

«Sex dicunt esse contractus ex quibus transfertur dominium utile et non directum, sicut contractus superficiarius, contractus locationis ad longum tempus, contractus emphyteuticus, contractus qui dicitur precaria in genere foemenino, contractus livellarius et contractus feudalis»¹¹.

Más singular y menos discutido, el término de *feudum* presidía el ámbito de las relaciones interseñoriales, con la correspondiente partición de dominios más nobles; aunque tampoco hay que descartar que los otros supuestos incidan a este nivel, como veremos, el *feudum* en todo caso se destacaba con dicho sentido más general. Pero esto a su vez también ocurría con la *emphyteusis*, notándose un uso más genérico de su término respecto al campo de las relaciones internas del señorío que producían división del dominio, ya quizá también por el mismo exotismo del vocablo en el seno de una cultura latina. El término de *emphyteusis* tendería a cubrir en un ámbito inferior la acepción más general que desempeñaba el de *feudum* en el superior:

«Pactiones emphyteuticae diversis nominibus nuncupantur, aliqui appellant precariam, aliqui ad firmam, aliqui libellariam, et semper appellatur contractus emphyteuticus»¹².

Flatos tales prácticas de un mismo concepto, su diferencia sólo radicaría «in sono vocis». Durante la edad moderna, mientras que el epígrafe *de feudo* sigue usualmente anunciando la materia interseñorial, el *de emphyteusi* no es raro que presida este otro objeto también general de relación agraria estable, con el punto de definición de un *longum tempus* que suele cifrarse en el superior a una década como base de una división de dominio entre las partes¹³.

11. P. GROSSI, *Situazioni reali*, pág. 210; *Locatio ad longum tempus*, Nápoles 1963, pág. 11.

12. P. GROSSI, *Locatio*, págs. 269-270, aun aceptando menos la asimilación por cuanto ahora veremos.

13. P. GROSSI, *Locatio*, págs. 149-153.

Si se producen mixturas y confusiones, como hemos de ver, no será todavía en detrimento de este más general capítulo enfiteútico o de esta más global y comprensiva significación de la enfiteusis.

Sobre una misma tierra podía elevarse una pirámide de derechos trufados de obligaciones, cada cual con su propio contenido político, social, económico o mixto de todo ello. Dada la más formal semejanza, la comunicación cupo. Los propios juristas subrayarían expresamente la analogía, admitiendo argumentaciones y proyecciones entre unos y otros niveles tras la de la misma división del dominio, lo cual seguiría especialmente sirviendo para resolverse problemas de la relación enfiteútica a partir o bajo el modelo de la feudal. El feudo se había conformado jurídicamente con anterioridad, habiéndose también desarrollado en su ámbito una variedad de prácticas sociales sobre el supuesto de la participación en los derechos; los problemas no poco complejos que el reconocimiento de una correspondiente partición de dominios en el ámbito agrario había de suscitar, así por ejemplo en materia sucesoria, pudieron en buena parte solventarse con la adopción y adaptación de reglas antes definidas para el caso del feudo. Ya el deslizamiento de calificativos como el de *vassallus* desde el noble subordinado al campesino sometido es síntoma de una proyección que no sólo resulta semántica. Pero, mediando sus adaptaciones, son las palabras las que se degradan y no los campesinos los que se ennoblecen.

Una cosa es también esta comunicación, y otra bien distinta las confusiones que en la investigación suelen producirse por la misma dificultad de remisión de datos a uno u otro ámbito de las relaciones sociales. Se producen sobre todo desplazamientos más sustantivos al campo señorial o agrario desde el más documentado feudal o de relaciones entre rentistas, aplicándose al vasallo campesino los términos más convencionales, o contractuales si se quiere, de unas prácticas sociales superiores. Es el caso más extremo de la historia de Castilla el que puede servir mejor de ejemplo, con la beligerancia de unas teorías de libertad campesina medieval que no resultan ajenas a este género de distorsiones, haciéndose regularmente pasar por relación agraria índices de convenciones feudales o de un feudalismo cuya misma existencia aquí con su lógica se desprecia; no es su factor único ni tampoco determinante, precediendo ya la teoría a la documentación, pero en todo caso

nos interesa por la misma facilidad como en el ejemplo el equívoco historiográficamente opera¹⁴. A tamaña confusión nunca llegaron los juristas medievales, ya menos imaginativos u obligadamente más realistas.

Mas no descendamos todavía a casos particulares; sigamos con las categorías de escala europea. El concepto de enfiteusis se ha definido así de un modo muy general, como relación agraria estable, pero tampoco será ésta su única acepción, o ni siquiera la más característica; entre el conjunto de los términos que, sin entrarse todavía en particularidades geográficas, indican este tipo de relación, también el de enfiteusis, para complicarnos más las cosas, mantendrá una significación más específica, que además a la larga prevalecerá.

Ya, postrimeramente, se nos señalaban desde Extremadura algunos de sus rasgos así más distintivos, que allí precisamente faltaban; son en efecto los que desde tiempo medieval vienen específicamente caracterizando a la enfiteusis: «laudemio, comiso (y tanteo)», esto era, «pagamentos, reversiones y preferencias»; pagos de tributos al señor, aparte de la pensión o renta, por actos de disposición o transmisión de la tierra o de su propio derecho sobre ella por parte del enfiteuta; reversión de la plenitud del dominio al señor, o pérdida del útil por el vasallo, por determinados incumplimientos de obligaciones enfiteúticas, como el ya sabido del impago durante tres años de la renta, y posibilidad finalmente de retracto o adquisición excluyente del mismo dominio útil, con su

14. B. CLAVERO, *Behetría, 1255-1356*, pág. 222, en este *Anuario*, 44, 1974, páginas 201-342, respecto naturalmente a Sánchez Albornoz, insistiendo en este desplazamiento de evidencias en recensión a Salustiano MORETA, *Rentas monásticas en Castilla*, Salamanca 1974, en *Moneda y Crédito*, 132, 1975, págs. 111-117. La construcción más elaborada de una figura de relación agraria en base a otra feudal como el prestimonio la ha efectuado para el espacio leonés Alfonso GARCÍA GALLO, *Estudios de Historia del Derecho Privado*, Sevilla 1982, págs. 207-250, presentándose a sí mismo el trabajo además como modelo para la formación de investigadores. Para visión realista de la normalidad castellana en vísperas de la singularización que veremos, con unas relaciones agrarias todavía de impronta enfiteútica aun junto a otras menos consolidadas entre rentistas que ya pueden hacer uso de arrendamientos cortos, de la significación ulterior que también veremos: Angel BARRIOS, *Estructuras agrarias y de poder en Castilla, 1085-1320*, Salamanca 1984, II, págs. 234-259.

efecto también de recuperación o consolidación del pleno o de nueva concesión con su elección así de enfiteuta, por la ocasión de dichos actos de disposición de parte del campesino, ante los que el señor tiene de este modo derecho a un impuesto de transmisiones y opción a subrogarse en el lugar del adquirente, gravándose suplementariamente y devaluándose con todo ello el dominio útil campesino sobre la tierra.

Estos pagos, reversiones y preferencias más definitivos de la enfiteusis ya sabemos que sustancialmente se encuentran en el texto romano que sirve para la construcción medieval, pero allí no podían estructurarse en base a la división del dominio que mejor responde a una situación cuyas propias realidades de derechos campesinos señorialmente intervenidos así se encauzan y regulan; términos más característicos ya son medievales, y no antiguos, como el de *laudemium*, ahora usualmente además elevado, representando un derecho más sustantivo que el que se reflejaba en aquel texto sin merecer siquiera identificación; se acuñan otros como el de *fatiga* o *fadiga* para el derecho de preferencia, así también concebido más singularizadamente.

Bajo diversas denominaciones, expresivas también siempre de la subsistente variedad de prácticas locales, eran todos éstos ahora rasgos bien típicos de las realidades del señorío, proyectadas y articuladas sobre la guía más autorizada del susodicho texto romano. De unos y otros mimbres se compuso la figura, o propiamente sólo ahora la misma realmente se construye. En su línea más sustantiva de carácter señorial, podrá ahora llegarse a presumir jurisdicción aparejada a la misma enfiteusis, que ya se ejercería mediante usos como el de no requerirse intervención judicial para el comiso o como el de registrarse derechos propios, delimitándose obligaciones ajenas, por autoridad también del señor, a lo que prestan nombre expresiones como la de *capbreve* o cabreo consecuentemente medievales. Sirviendo mejor para generalidades el léxico clásico, se habla de *contractus*, *emphyteuticus* o *emphyteuticarius*, pero estos mismos términos más concretos, consagrando relaciones dadas y reduciendo su campo de determinación, definen realmente una figura que fuera de institución señorial.

Otras definiciones de la enfiteusis específica no dejaron de apuntarse, como una particularmente que ha traído su secuela:

«*Ius emphyteuticarium, id est meliorationis*», esto es, obligación de puesta o de mejora en cultivo, o contrato destinado a tal finalidad, con lo que el mismo índice señorial ciertamente remitiría. Era definición de indudable base etimológica y algún apoyo también en las prácticas de la época, por lo que puede resultar más bien llamativo que no se desarrollase su doctrina, quedando en indicación¹⁵. La exigencia de cultivo, caso de darse, ya tenía además un fundamento que desborda el campo de la enfiteusis aún en su sentido más general: la forma comúnmente proporcional de determinación de la renta, en la que así repercute. Es lo primero que en nuestro recorrido encontramos: el noveno extremeño acompañado del más católico diezmo. Aún apreciándose ventajas en la fijación de la renta, la proporcionalidad de la enfitéutica podía efectivamente relacionarse con la misma característica ya definitoria del más básico diezmo¹⁶.

Como relación social, género y especie, «*verbum emphyteusis est aequivocum*», ya pudo diagnosticarse en la época y no es todavía raro que se repita para salirse del atolladero de su definición; pero el propio equívoco o duplicidad de sentidos reviste su importancia. La tiene ante todo el concepto más genérico, que ya tiende

15. Sin la sorpresa, P. GROSSI, *Situazioni reali*, págs. 214-215; *Locatio*, páginas 238-239. En la historiografía tradicional, entre los historiadores juristas más en particular (valgan las remisiones de nuestra voz *enfiteusi* en P. FIORELLI, M. BANDINI y P. GROSSI, *Bibliografía del derecho agrario intermedio*, Milán 1962), éste suele ser ciertamente punto bien considerado y mejor debatido, como los relacionados: si fuera la enfiteusis característica de las roturaciones, si el canon debiera ser módico, mero reconocimiento del dominio superior, ya por incorporarse las mejoras, etc. El principal predecesor de Grossi en este capítulo, Giorgio CENCETTI, *Il contratto di enfiteusi nella dottrina dei glossatori e dei commentatori*, Bolonia 1939, págs. 14-15 y 50, al resaltar también más la valencia general de la enfiteusis, ya había considerado requisito más aleatorio para su definición éste de la obligación mejoraticia; a esto segundo, descuidándose ahora a su vez lo primero y con ello en mayor medida el encuadramiento señorial, retorna R. FEENSTRA, *L'emphytéose et les problèmes des droits réels*, págs. 1305-1309, en AA. VV., *La formazione del Diritto Moderno in Europa*, Florencia 1977, III, págs. 1295-1320. Y ya veremos cuándo y cómo esta problemática realmente se desarrolló.

16. Sigán también apareciendo nuestros casos, que ya veremos: M.^a Xose RODRÍGUEZ GALDO, *Señores y campesino en Galicia, siglos XV-XVI*, Santiago 1976, pág. 243.

a eclipsarse en las transposiciones de la lengua franca latina a la pluralidad de lenguas particulares, con su mundo éstas más variado de prácticas y expresiones; sólo quizá en alemán, con su empeño por crear vocablos de raíces propias, se conservará mejor la noción más general de la enfiteusis, con su traducción como *Erbpacht* o arrendamiento hereditario¹⁷. Pero tampoco conviene precisamente olvidar que sigue el latín constituyendo durante siglos el lenguaje técnico de la cultura jurídica, subordinándosele en su órbita las otras lenguas: «emphyteusis, vulgo» *aforamento, prazo, fateosi* u otros términos en romance, portugués en el caso, ya solían decir los juristas con independencia de variedades y con su efecto así de mantenimiento de un concepto general; o también decían la inversa, que aquí equivale: tal término «id est emphyteusis». No sólo problemas de traducción se ventilaban en estas ecuaciones¹⁸.

En su acepción general tanto como en la específica, los entendimientos que operativamente prevalecían se vinculaban al señorío. Algo más que un encuentro ocasional o que un acercamiento circunstancial existe; una entrañable afinidad históricamente tenemos. El señorío ha significado a la enfiteusis, que en otro caso ya se hubiera perdido entre curiosidades antiguas. Quizá por esta razón juristas de sensibilidad más distantes de las realidades señoriales durante la edad moderna pudieron preferir otros entre aquellos tipos de relación agraria con análogo efecto de división del dominio, pero inferior carga de señorío, como principalmente el de arrendamiento *ad longum tempus*, aunque también éste atravesase ahora su crisis por otro orden de motivos, por resultar figura aberrante desde la perspectiva de los textos romanos de los que todas

17. F. KLEIN-BRUCKSCHWAIGER, voz *Erbleihe*, en A. Erler y E. Kaufmann (eds.), *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, I, Berlín 1971. Pero Marcel MARION, *Dictionnaire des Institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles*, París 1923 (rep. 1979), recoge el sentido más genérico de la voz *emphytéose*.

18. P. GROSSI, *La proprietà nel sistema privatistico della seconda scolastica*, pág. 193, en AA. VV., *La Seconda Scolastica nella formazione del Diritto Privato Moderno*, Milán 1973, págs. 117-222, para el ejemplo portugués desde testimonios castellanos, contando además Portugal con una doctrina enfitéutica muy desarrollada y que no sólo a ella interesa, como tal por estudiar. Pero prosigamos todavía con cuestiones generales

estas construcciones traían su autoridad¹⁹. La enfiteusis con todo permanecía como la figura que, con su mismo doble sentido y aun cediendo el de alcance general, mejor podía jurídicamente corresponderse con la relación señorial.

Frente a lo que suele especialmente entre nosotros creerse, o frente a la idea que según veremos se impondrá aquí durante el siglo XIX, no caracterizaba en cambio a la enfiteusis, como relación agraria específica, la perpetuidad; era ciertamente estable, pero no por ello perpetua; podía ser fácilmente indefinida, pero no por esto permanente. Aparte la misma incidencia del comiso, que ya le restaba permanencia, no se concebía en sí la enfiteusis como una relación sin término. A ello se tendía, ya también entonces por confusión entre su figura y aquella también romana del *ius perpetuum*, pero sin imponerse la perpetuidad; la misma se presumía, así favoreciéndose, pero no se entendía como requisito necesario; cabía determinación en contrario e incluso plazos implícitos, pudiendo la misma costumbre ya limitarla. El dominio campesino, además de en todo inferior y en algo precario, podía ser así también temporal.

Sobre todo la iglesia mantuvo particularmente la idea de temporalidad de la enfiteusis, con un plazo máximo en principio de tres generaciones que ya se había registrado en un texto bizantino incorporado al derecho romano, como los cánones conciliares griegos también venían, definiéndola, a la religión romana. Y todavía quiso la iglesia controlar en mayor medida el dominio de la tierra dentro de sus señoríos; desde el siglo XIII, va concretándose más estrictamente un principio de conservación de los bienes eclesiásticos: queda prohibida no sólo la venta, donación, permuta u otra forma de alienación plena, sino también el «*emphyteusis perpetuus contractus*» o incluso, más radicalmente, la «*locatio et conductio ultra trienium*», cualquier cesión que, por su *longum tempus*, divida dominio, aún salvándose costumbre local en contrario o, más llanamente, resistencia campesina ante tamaña novedad. La iglesia pugnó así ahora por imponer un *breve o modicum tempus* en el ámbito de sus relaciones agrarias: el tiempo de los tres años sobre el que

19. Son evidencias también de la *Locatio* de GROSSI, aun con su argumento de que pasa el tiempo de las roturaciones, a las que más ha vinculado la figura de la enfiteusis.

no cabían dudas que se retenía enteramente el dominio. En aras de la imagen de tradición canónica, los mismos errores filológicos entonces nada inusuales podían resultar providenciales: «conditio» en vez de «venditio» en unos primeros textos ya permitía considerar, como mejor lectura, la prohibición de la «conductio»²⁰.

Pero en líneas generales, en lo que respecta más específicamente a la enfiteusis, la idea de temporalidad irá contrariamente oscureciéndose; durante la edad moderna, la propia noción más singularizada de dominio de la tierra irá progresivamente basculando hacia la parte del enfiteuta, insinuándose una consideración de propiedad para el dominio inferior, más relacionado efectivamente con la tierra. El mismo carácter originalmente nobiliario, más personal, de la relación superior, ya podía ofrecer su base para esta afirmación como derecho más real del último dominio útil²¹; la propia pérdida ulterior de entidad política de dicha relación superior, con el decaimiento del feudalismo vasallático, puede llevarla también más fácilmente a derivar hacia el terreno más económico del arrendamiento a breve plazo, sin división de dominio, con el consiguiente realce del susodicho derecho inferior²². Mas, en todo caso, los principios de pluralidad de dominios siguen reiterándose, no concibiéndose tampoco durante esta época, mientras perdura el sistema señorial, un derecho singularizado de propiedad, para el dominio útil como para ningún otro; permanece, con sus deslizamientos de un centro de gravedad, este cuadro de articulaciones de dominios que aún responden a una determinada jerarquía social²³.

20. P. GROSSI, *Locatio*, págs. 101-136, mejor que la historiografía canonística.

21. P. GROSSI, *Situazioni reali*, págs. 210-211.

22. Ya hemos visto, y volveremos a encontrar, esta derivación de la relación feudal que, ya por el prejuicio de la falta de continuidad del feudalismo durante la edad moderna, suele poco considerarse, o menos desde luego que la línea ya también indicada de dirección inversa entre las relaciones feudales y las agrarias; advertida en todo caso se encuentra: Guido ASTUTI, *I contratti obbligatori nella storia del diritto italiano*, Milán 1952, págs. 343-344. La insuficiente distinción de esta esfera de relaciones entre rentistas ya también produce, como en época anterior la de las agrarias, sus confusiones.

23. P. GROSSI, *Seconda Scolastica*, págs. 188-200; *Un paradiso per Pothier*, en *Quaderni Fiorentini*, 14, 1985, págs. 401-456, con su polémica este capítulo del XVIII, pues entre los mismos especialistas imperan otras ideas

El dominio del enfiteuta se va afirmando como un derecho menos precario dentro de sus propios términos de división; otros factores inciden, como así, primordialmente, la tendencia también moderna, y de manifestación igualmente irregular, a asimilarse el supuesto más general de la enfiteusis con el de los censos o rentas crediticias que gravaban la misma tierra. Era el *census* sustancialmente otro caso, con su origen ya crediticio, y no señorial. Dada la prohibición eclesiástica de la usura, entendida como beneficio o provecho sin procedencia de señorío, las operaciones de préstamo entre no comerciantes habían debido organizarse de forma mimética a la propia relación señorial, configurándose como enajenación de rentas consignadas a una tierra; en su supuesto, ésta lógicamente de antemano pertenecía a quien así, a cambio del capital prestado, podía gravarla con esta nueva renta, y no por lo tanto a su perceptor, con lo que el dominio del censatario estaba bien fundado. Por el juego de dicha prohibición canónica, al acreedor generalmente además se le impedía que pudiera instar a la devolución del capital o que por su causa pudiera producirse ejecución sobre la propiedad, con lo que el mismo derecho dominical del censatario seguía bien establecido²⁴. Se conciben aún otras especies de censos, que también tienden a reforzar la posición del censatario, pero son estos crediticios los que adquieren relevancia en la sociedad de la época y los que pueden más especialmente llegar a interesar a la misma evolución de la relación enfiteútica²⁵.

Y le puede interesar porque se insinúa la asimilación de sus diversos supuestos, atrayéndose la enfiteusis al terreno del censo de forma que podría efectivamente redundar en el afianzamiento de la posición del enfiteuta. *De censibus* también podrá ser rótulo que más generalmente anuncie el tratamiento, no sólo del censo propiamente dicho, sino también de la enfiteusis, englobándose la materia de las rentas, tanto señoriales como crediticias, y admitiendo los juristas el correspondiente cruce o préstamo de argumentos. El mismo término censual no es raro que aparezca y que se asiente en el campo enfiteútico, aun guardándose entonces la distinción con otros todavía más inespecíficos, tocantes a renta,

24. B. CLAVERO, *Usura*, Madrid 1985, págs. 45-47.

25. B. CLAVERO, *El Código y el Fuero*, Madrid 1982, págs. 85-93.

para el censo consignativo; así se encuentran en francés, entre otros usos, el de *censive*, enfiteútica, y el de *rente*, censual. La asimilación en caso alguno es completa, no llegando tampoco a configurarse la enfiteusis como una especie de censo.

Y las resistencias interesan tanto como la tendencia. La asimilación completa la impedían las mismas implicaciones más señoriales de la enfiteusis: derechos como el laudemio la diferenciaban, o también la distinguía la posibilidad del comiso o pérdida de su dominio por incumplimiento del enfiteuta, lo que en principio no cabía en la institución del censo. Por impago de las rentas, correspondía en éste la intervención, ya judicial, del dominio a los efectos exclusivos de garantizarse su percibo, y no de ejecución del préstamo, cuya devolución ya veíamos que no podía provocar el censualista; en la enfiteusis, el comiso en cambio se produce, y pudiendo prescindirse de mediación judicial; ya veíamos que al señor enfiteútico se le presumía jurisdicción, para lo que no había base en el caso del censualista. Respecto a duración, para el censatario el censo es perpetuo, quedando la resolución a su voluntad; para el enfiteuta no lo era; y en la enfiteusis no cabía en caso alguno liberación de su dominio por voluntad del enfiteuta, a lo que procedía precisamente el censatario cuando podía y decidía devolver el capital, redimiendo de esta renta su tierra. Perpetuo, en la enfiteusis, era el dominio señorial superior, o *derecho* dominical genuino como también veíamos; y lo seguía siendo aún con el reforzamiento del dominio útil.

Todo esto, como ya advertíamos, constituye un cuadro general de la que decíamos cultura superior a escala europea; bajo ella, podía subsistir la diversidad más variopinta de relaciones agrarias, que ya intentaban los juristas acercar y reducir al mundo de sus propias categorías. Aquellas mismas ecuaciones que veíamos entre enfiteusis y prácticas locales aportarían su presión homogeneizadora, con su éxito también variable. Pero tampoco solamente existían este par de polos de más problemática relación directa; entre uno y otro se daba una escala intermedia, regional podemos decir, que ya ofrecía su conexión, relacionando mejor los extremos. En España, y en la materia, particularmente se significarán tres espacios jurídicos: el de Castilla, con Andalucía y Extremadura, el de

Galicia, junto a Asturias y parte de León, y el de Cataluña. Conviene considerarlos.

Castilla ya se singulariza porque su nobleza hace suya, y con mayor éxito, aquella política eclesiástica en materia de relaciones agrarias tendente a la eliminación del dominio útil, imponiendo en sus tierras la figura del arrendamiento corto que impedía cualquier reconocimiento de derecho campesino²⁶. No es que desaparezca totalmente la enfiteusis; aparte las excepciones ya previstas por la iglesia, lo que ya interesará a Galicia, podrá encontrarse bajo diversos nombres; así, con el de *censo* en aquellos señoríos extremeños donde precisamente, en medio extraño, se discutiría luego su existencia²⁷; o también en latitudes más propiamente castellanas bajo términos no tan desfigurados como el de *fetosín*²⁸; mas es la difusión del arrendamiento corto que impide la división del dominio lo que caracteriza el caso de Castilla.

De hecho, además, en la jurisprudencia castellana puede detectarse una más marcada asimilación entre censo y enfiteusis, lo cual no puede ya así operar generalmente en beneficio del enfiteuta, sino que asume otra dimensión bien diversa: cabrá aquí la exten-

26. B. CLAVERO, *Mayorazgo*, Madrid 1974, págs. 102-121, pues principalmente tal política se impuso mediante estas fundaciones.

27. Fernando MAZO, *Los Suárez de Figueroa y el Señorío de Feria*, páginas 163-164, en *Historia. Instituciones. Documentos*, 1, 1974, págs. 111-164; *El Condado de Feria, 1394-1505*, Badajoz 1980. Hay más todavía últimamente sobre este señorío a fines de la época medieval (Marie-Claude GERBERT, *Majorat, stratégie familiale et pouvoir royal en Castille*, pág. 274, en *Mélanges Gautier-Dalché*, Niza 1983, págs. 257-276), faltando naturalmente la continuación; ya se sabe que aquí establece una frontera el capricho de las especialidades y que no es de modernistas hacer historia de señoríos, aunque hay unas páginas que no he visto: Marcelino CARDALLIAGUET, *Las rentas señoriales del ducado de Feria a finales del Antiguo Régimen*, en las actas de las II Jornadas de Metodología y Didáctica de la Historia, Cáceres 1983, págs. 177-190. La incertidumbre para esta época ya quedó reflejada en M. ARTOLA (ed.), *La España del Antiguo Régimen*, VI; M.^a Dolores MARCO, *Castilla la Nueva y Extremadura*, Salamanca 1971, págs. 41-43 y 54.

28. Angel GARCÍA SANZ, *Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja*, Madrid 1977, págs. 286-294. Y los casos de incertidumbre han querido resolverse, ante datos similares a los extremeños, figurándose terceros géneros entre enfiteusis y arrendamiento: Antonio M. BERNAL, *La lucha por la tierra en la crisis del Antiguo Régimen*, Madrid 1979, págs. 142-143

sión del derecho enfitéutico de comiso al supuesto del censo crediticio, funcionando como vía adicional de expropiación campesina²⁹. En este se nos ha transmutado la libertad castellana. La rareza de derechos como el laudemio y el retracto, que ya enorgullecía en Extremadura, también tiene aquí su explicación: no cediéndose dominio, tales expedientes resultaban innecesarios, o incluso faltaba su supuesto de aplicación; el mismo comiso específicamente enfitéutico ya representaría un progreso desde la perspectiva más precaria del arrendamiento castellano.

Hay casos en la misma corona de Castilla en los que, por el propio mantenimiento de la relación enfitéutica, dicha asimilación operará en otro sentido, con afianzamiento del dominio útil; así se significa su espacio nordoccidental, particularmente Galicia. Aparece aquí dicha relación con la denominación en principio acumulativa de *foro y arrendo*: «arrendamos et aforamos», este llamado fuero o aforamiento como constitución bajo jurisdicción señorial y aquel dicho arrendamiento como concesión agraria por tiempo estable, originalmente en unidad de acto, con desplazamiento ulterior del primer término hacia el segundo elemento, o hacia el conjunto de la operación, a la par que ésta especialmente se consolidaba con la práctica eclesiástica de las tres generaciones³⁰.

En la segunda mitad del XVIII podrá notarse y hacerse valer dicho efecto de afianzamiento del dominio útil; ante su presión y con su reacción frente a una nueva ofensiva señorial por el corto plazo, acabará aquí imponiéndose como un hecho consumado la perpetuidad del foro, o de un derecho así en esto asimilado al del censatario, sin hacerse cuestión de otros capítulos como el de la garantía de irredimibilidad para el dominio superior, esto es, de su propia y más genuina perpetuidad³¹. La tensión entre arrenda-

29. B. CLAVERO, *Usura*, págs. 48-49.

30. José BONET, *Del contrato al derecho real de foro*, en este *Anuario*, 23, 1953, págs. 161-189. M.^o X. RODRÍGUEZ GALDO, *Señores y campesinos*, págs. 193-197; Baudilio BARREIRO, *Los contratos de foro y arrendamiento en los siglos XVII y XVIII*, en A. ERIAS ROEL (ed.), *La historia social de Galicia en sus fuentes de protocolos*, Santiago 1981, págs. 275-289.

31. B. BARREIRO, *La pragmática de «perpetuación de foros»*, en *Compostellanum*, 17, 1972, págs. 73-116; Fausto DOPICO, *A Ilustración e a sociedade galega*, Vigo 1978, págs. 205-220; Ramón VILLARES, *La propiedad de la tierra en*

miento corto y enfiteusis perpetua también se detecta por estos años en tierra de régimen castellano, llegándose incluso en algún caso a producirse un verdadero salto del uno al otro extremo, aprovechándose la ocupación tradicional de unas mismas tierras aun bajo la precariedad del arrendamiento³².

Cataluña es otro caso; ya menos se produce aquí confusión entre censos o *censals*, crediticios, y relaciones enfitéuticas, agrarias; si alguna peculiaridad entre los primeros aquí se encuentra, abunda en la distinción, por llegar a admitirse censos personales, con hipoteca general o sin consignación expresa a una tierra concreta. Y en lo que toca a las segundas, que más nos interesan, se establece y sabe resistir aquí la relación de dominio dividido estable y no perpetua bajo diversas denominaciones que encerrarían sus modalidades y entre las cuales acabará destacando la nativa de *a rabassa morta* con la castellana equivalente de *a primeras cepas*, que ya semánticamente se sitúan en el terreno de la enfiteusis; no era la expresión de procedencia culta: «parceria vulgo rabassa morta» o participación así más sustantivamente, con la referencia poco definida a término que añade la expresión vulgar. Ocurre de diverso modo como en Galicia; las calificaciones van imponiéndose a lo largo de la edad moderna para definir unas prácticas agrarias antes más controladas por el poder señorial, o que antes por ello precisaban menos de estas especificaciones³³.

A finales del siglo XVIII, también presionará aquí el dominio útil, y alegando el caso gallego, para hacerse con la perpetuidad, pero resisten mejor los intereses del dominio rentista, que defenderán con éxito el carácter de «enfiteusis temporal» de los establecimien-

Galicia, 1500-1936, Madrid 1982, págs. 127-136; Pegerto SAAVEDRA, *Economía, política y sociedad en Galicia, 1480-1830*, Madrid 1985, págs. 407-412, y otras referencias de mi *Código y Fuero*, pág. 94.

32. A. GARCÍA SANZ, *Desarrollo y crisis*, págs. 304-307; Gonzalo ANES, *Las crisis agrarias en la España moderna*, Madrid 1970, págs. 285-289.

33. Josep M.ª TORRAS, *Evolución de las cláusulas de «rabassa morta» en una propiedad de la comarca de Anoia*, en *Hispania*, 134, 1976, págs. 663-690; Elisa BADOSA, *Explotació agrícola i contractes de conreu, 1670-1840*, Barcelona 1985, págs. págs. 241-259, y las aportaciones de Rosa CONGOST y de Enric VICEDO a R. GARRABOU (ed.), *Terra, treball i propietat*, Barcelona 1986, págs. 247-301. El caso no debe ser exclusivo: M.ª Teresa PÉREZ PICAZO y GUY LEMEUNIER, *La cuestión agraria en el reino de Murcia*, pág. 140, en *Areas*, 5, 1985, págs. 97-168.

tos catalanes; jurisprudencialmente se va a una mayor determinación ahora del mismo plazo, con presunciones como la de cincuenta años³⁴. En otros territorios de la corona de Aragón, también aparecen sus instituciones enfitéuticas, con su propia diversidad de modalidades y denominaciones, pero, y ya también por lo que se comprobará durante los conflictos del XIX, constituyen casos tanto menos característicos como menos relevantes³⁵.

Como el arrendamiento corto no excluía totalmente a la enfiteusis, igual tenemos la viceversa; la cohabitación puede ser además no sólo horizontal o al mismo nivel agrario, sino también, subsistiendo la pirámide medieval, vertical, con preferencia más generalizada por el arrendamiento al nivel que antes fuera feudal. Rentistas de diverso rango podrán relacionarse mediante arrendamientos cortos, sin partición del dominio, mientras que la enfiteusis puede mejor permanecer en el grado inferior que interesa al campesino, con su exclusiva así de dominio útil como ya decíamos³⁶. Y dicha

34. Pierra VILAR, *La Catalogne dans l'Espagne Moderne*, ed. París 1962, II, págs. 504-515; Emili GIRALT, *El conflicto rabassaire y la cuestión agraria en Cataluña hasta 1936*, págs. 52-62, en *Revista de trabajo*, 7, 1964, págs. 51-71, E. BADOSA, *Contractes de conreu*, págs. 260-270.

35. El caso ahora más estudiado es el valenciano, incidiéndose, con sus mismos contrastes comarcales, en nuestro capítulo de enfiteusis y arrendamiento; recapitula, y no sólo informa, Pedro RUIZ TORRES, *Los señoríos valencianos en la crisis del Antiguo Régimen*, págs. 51-70, en *Estudis d'Història Contemporània del País Valencià*, 5, 1984, págs. 23-79.

36. Para el caso valenciano en efecto más estudiado, P. RUIZ TORRES, *Señores y campesinos, 1650-1850*, Valencia 1981, págs. 114-126 y 307-336; Isabel MORANT, *El declive del señorío, 1705-1837*, Valencia 1984, págs. 54-61 y 153-155; Jesús MILLÁN, *Rentistas y campesinos, 1680-1840*, Valencia 1984, págs. 226-235 y 279-288 Carmen GARCÍA MONERRIS, *Rey y Señor, 1761-1836*, Valencia 1985, págs. 181-197. Y la misma superposición de arrendamientos cabe perfectamente en latitudes más enfitéuticas: M. CAMINAL, E. CANALES, A. SOLÀ y J. TORRAS, *Movimiento del ingreso señorial en Cataluña, 1770-1835*, ahora en A. GARCÍA SANZ y R. GARRABOU (eds.), *Historia Agraria de la España Contemporánea*, I, Barcelona 1985, págs. 433-462. Y todavía se contempla esta práctica de arrendamientos señoriales subrogados en la relación feudal como «capitalista»: A. M. BERNAL, *Lucha por la tierra*, págs. 144-147; para el mismo espacio no enfitéutico, más prudentemente, Josefina CRUZ, *Propiedad y uso de la tierra en la Baja Andalucía*, Madrid 1980, págs. 112 y 142-152; el propio Bernal confesaría que, para facilitar el cálculo económico, simplemente prescinde del elemento señorial en su abordaje de la renta: M. ARTOLA y otros, *El latifundio*, Madrid 1978, pág. 122.

derivación tampoco resultaría indiferente a la misma enfiteusis agraria; la situación más regular de solapamiento de *foros* rentistas y, entonces, *subforos* campesinos en el caso gallego hubo de favorecer la misma perpetuidad; en Cataluña el dominio señorial superior ya se defendería también mejor limitando o no admitiendo desdoblamientos enfitéuticos. Del *foro*, y no de la *rabassa*, podría decirse que era un híbrido entre feudo y enfiteusis ³⁷.

Entre tanta variedad, a finales del XVIII, unos polos, positivo y negativo para la misma enfiteusis, especialmente se definen y contraponen: Cataluña y Castilla, afirmándose nuestra institución como clave de la prosperidad de la primera, aun con toda la evidencia que bien consta y también se debate de su carga señorial ³⁸, al tiempo que se mira su carencia como causa de la situación más postrada de la segunda. En Castilla también a su modo se idealiza, por contraste, la enfiteusis, cuyo remedio ahora se reclamaba frente a la precariedad del arrendamiento corto. Ilustrados y reformistas, aun con alguna notable excepción de sensibilidad más liberal, presentan «el enfiteusis perpetuo» como panacea para acabar con los males crónicos de la agricultura castellana ³⁹. Se va forjando un mito con la enfiteusis que, pese a todas las contradicciones de la propia experiencia, superará como veremos, o como en Extremadura ya hemos visto, los tiempos de la sociedad señorial.

Una figura señorial parece así poder recobrar vida, pero la historia a estas alturas tampoco le será tan agradecida; suficiente ya lo ha sido. La cuestión, que seguía siendo europea, sufrirá otro giro. La presión favorable al dominio útil en las postrimerías de la edad moderna tampoco era sólo española; no sería una mera

37. J. BONET, *Derecho real de foro*, pág. 179. Y la cuestión puede no ser nueva, pues ya hemos detectado que en el caso de Castilla la práctica de arrendamientos cortos pudo anticiparse en el ámbito feudal; con todo su interés, el problema lógicamente no resulta abordable, o ni siquiera identificable, en una historia de los contratos que no quiere hacer otra distinción social que la mercantil.

38. Ernest LLUCH, *El pensament econòmic a Catalunya, 1760-1840*, Barcelona 1973, págs. 85-90, 108-111, 207-210, 247-251 y 328-331; Pablo SALVADOR, *La Compilación y su historia*, Barcelona 1985, págs. 27-28 y 32-44.

39. Antonio ELORZA (ed.), *El expediente de la reforma agraria en el siglo XVIII*, en *Revista de Trabajo*, 17, 1967, págs. 113-409; Gonzalo ANES, *Crisis agrarias*, págs. 274-285.

anécdota que la evidencia de indefensión de un enfiteuta ante su señor censalista provocara en la Prusia ilustrada un serio enfrentamiento entre la monarquía y una magistratura empeñada en mantener principios más tradicionales de jurisdicción enfitéutica⁴⁰. Una evolución ciertamente se movía a escala europea, pero sobre ella se precipitará, y con otro tipo más eficiente de favor para el dominio útil, la revolución.

Otra será la historia. La *emphyteusis* volverá a su posición marginal y la *locatio* al centro, o bajo su denominación otra clase de arrendamiento. Llegará ahora frente a la enfiteusis el arrendamiento como figura típica de concesión agraria que no cede derecho en defensa, no de un *dominium* de entidad política o señorial, sino de una propiedad de esencia más económica. Ya también por nuevas razones la vieja enfiteusis sufrirá sus transformaciones.

3. DESDE FRANCIA PARA EL LIMBO: MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE LA ENFITEUSIS

Finales del siglo XVIII, Francia: nuestra historia parece llegar a su fin; será afirmación común durante el XIX que la Revolución Francesa, con sus protagonistas mayúsculas, acabó, y para toda Europa, con la enfiteusis. Pero no fue ésta ya una operación decidida ni inmediata de la misma, con unos primeros pasos menos resueltos que más interesarán a otros casos como el español. Sus medidas en principio distinguieron entre unos derechos más estrictamente señoriales que eran los únicos en merecer abolición y otros de carácter más bien dominical que podrían todavía, con determinadas modificaciones, subsistir. Y entre éstos se encontraba la enfiteusis.

Para ella las modificaciones ya resultarían de alcance; había de desaparecer tanto el dominio dividido como otras implicaciones ciertamente señoriales: *laudemio*, *retracto*, *comiso* y, por supuesto, jurisdicción propia. Es el canon o renta lo que se conserva, y no ya con todo bajo título dominical, sino como gravamen que puede ser redimido, capitalizándose su valor, por el antiguo dominio útil,

40. Hans HATTENHAUER, *Los fundamentos histórico-ideológicos del derecho alemán*, Madrid 1981, pág. 150, versando sobre enfiteusis el asunto Arnold de referencia, que suele comparecer en las historias del derecho alemanas ya con tendencia a exagerarse sus consecuencias.

ahora la propiedad. Dicho de una forma: la *enfiteusis* señorial deviene finalmente *censo* consignado; con términos franceses: la *censive* enfitéutica, *rente* censual. Dicho de otra forma, menos peculiar: el dominio útil se convierte efectivamente en propiedad, bien que hipotecada.

Concretamente, los famosos decretos revolucionarios de agosto de 1789 distinguen, entre los derechos «tant féudax que censuels» que deben de diversa forma extinguirse, aquellos de carácter más propiamente señorial o serviles, que quedan sin indemnización automáticamente suprimidos, y un resto peor definido, pero en el que entran las rentas de concesiones agrarias estables, que debe todavía recibir su indemnización, a cargo del particular interesado:

«Tous les autres sont déclarés rachetables et les prix et le mode de rachat seront fixés par l'Assemblée nationale. Ceux desdits droits que ne sont pas supprimés continueront néanmoins à être perçus jusqu'au remboursement»⁴¹.

Otra medida de marzo de 1790 precisará que estos otros derechos resultan «assimilés aux simples rentes et charges foncières»; por la misma variedad que ha persistido, también procura añadirse relación que mejor identifique estos derechos para cuya desaparición todavía se requiere redención o dicha forma de indemnización a cargo del dominio inferior, ya propiedad en la misma expresión de estas disposiciones. Tampoco la relación es definitiva ni inimpugnable; se trata de presunciones, «sauf preuve contraire». También se regula por diversas medidas de 1790 y 1791 la referida cuestión pendiente del coste y el procedimiento de la redención; se establece el precio básico por el valor de la pensión de veinte años, pero más sería excepción que regla, requiriéndose renta en metálico y ausencia de derechos eventuales; era en realidad un mínimo, recargado por las operaciones que se añadían para determinarse el valor de las rentas en especie y para incluirse el cálculo del de dichos otros derechos como el *laudemio*, cuya forzosa pérdida también quiere así compensarse⁴².

Y la *enfiteusis* puede con todo subsistir, o pueden ahora encon-

41. Marcel GARAUD, *La Révolution et la propriété foncière*, París, 1959, páginas 182 y 258, que es el libro preciso al efecto.

42. M. GARAUD, *Révolution et propriété*, págs. 186-193.

trarse dos especies distintas de enfiteusis. Una es la histórica a la que esta legislación se aplica, ya reducida a carga de una propiedad que recae en el antiguo dominio útil. Otra será la nuevamente constituida, en la que, aun cediéndose derecho sobre la cosa, se retiene la propiedad en manos en cambio del que antes hubiera sido el dominio directo; sin división del dominio, tampoco se admite que pueda ser de tiempo indefinido, fijándose un máximo por la regla clásica de las tres generaciones, o noventa y nueve años como ahora se especifica; queda como figura definitivamente singular, sin interés frente al arrendamiento, al menos para el rentista al que la opción corresponde, una vez que la enfiteusis ha dejado de ser pieza del dominio señorial⁴³. Y es aquella histórica, lógicamente, la que guarda también para nosotros su interés.

La carga debía para su extinción redimirse, o también cabía probarse su carácter más intrínsecamente señorial, con lo que quedaba sin indemnización abolida. Mas pocos medios de prueba tendría a su alcance el campesino. La quema de archivos señoriales, que ahora así recobran importancia, ya había comenzado; y no era la única manifestación de resistencia a este planteamiento de la liquidación de los derechos señoriales. Tuvieron que seguir otras medidas, en junio y agosto de 1792, revisando la relación de cargas cuyo mantenimiento se presumía y rectificando las reglas del procedimiento para el caso de contradicción; se carga ahora con la prueba más justamente al acreedor, al antiguo señor. O todavía más, en julio de 1793 se extiende a las obligaciones de tipo enfitéutico el capítulo de los derechos que son objeto de directa abolición y aún se dispone por la misma ley la destrucción de títulos y registros señoriales, lo que también arrastraría rentas. La abolición de las enfitéuticas debe igualmente aplicarse a tierras nacionalizadas, que así, en su caso, pasan directamente ahora a manos de los enfitéutas; antes de julio de 1793, se les había estado también ofreciendo a dicho precio básico de redención de veinte anualidades⁴⁴.

No faltará la contraofensiva, con argumentos como el de que podía producirse una masiva expropiación de rentistas de condición no siempre señorial en aquellas regiones «où la emphytéose était

43. M. GARAUD, *Révolution et propriété*, págs. 258-263.

44. M. GARAUD, *Révolution et propriété*, págs. 219-233 y 315.

d'un usage presque universel», pero esta legislación ya no se toca ⁴⁵; si la quema de documentos se detuvo, también fue, más que por dejar trabajo a los historiadores, por defenderse otros derechos, pues ya servirían como prueba, y a menudo única, de la nueva propiedad, cuando no de pretensiones del Estado ⁴⁶. Final y consecuentemente, el Código Napoleón, monumento de esta flamante propiedad, ignorará olímpicamente a la enfiteusis. Y los juristas no sólo franceses de sensibilidad más liberal ya irán propagando una doctrina de la propiedad incompatible con la de división del dominio, pudiéndose anticipar a la recepción e implantación en los diversos países de este modelo así diseñado en Francia y que en sus fronteras no se contuvo ⁴⁷.

Y el silencio del Código era todo un programa a voces: sería una de las principales causas de la oposición señorial a su difusión por Europa ⁴⁸. Y todo el estruendo de una revolución debía ciertamente

45. M. GARAUD, *Révolution et propriété*, págs. 233-242.

46. M. GARAUD, *Révolution et propriété*, págs. 229-230; Albert SOBOUL, *Problemas campesinos de la Revolución, 1789-1848*, Madrid 1980, págs. 34-44.

47. R. FEENSTRA, *L'emphytéose*, págs. 1317-1320; P. GROSSI, *Tradizioni e modelli nella sistemazione postunitaria della proprietà*, págs. 201-209, en *Quaderni Fiorentini*, 5-6, 1976-1977, págs. 201-338, que es monográfico sobre el derecho contemporáneo de propiedad; Wolfgang WIEGAND, *Zur theoretischen Begründung der Bodenmobilisierung in der Rechtswissenschaft*, en H. COING y W. WILHELM (eds), *Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert*, III, Frankfurt am Main 1976, págs. 118-155, igualmente monográfico, sobre propiedad territorial y crédito inmobiliario. Aparte el mismo Código de 1804, la referencia común obligada, y especialmente atendida por el último, es la del ataque de A. F. J. THIBAUT, *Über dominium directum et utile*, en sus *Versuche über einzelne Theile der Theorie des Rechts*, II, Jena 1801 y 1817, págs. 67-99 en la segunda edición (rep. 1970), quien no en vano también se significó por su defensa de la codificación.

48. Elisabeth FEHRENBACH, *Sociedad tradicional y Derecho moderno*, Buenos Aires 1980, págs. 220-221 y 226, para el caso muy ilustrativo alemán, o más circunscritamente renano; para el no menos plural italiano, una visión más general y también, con su optimismo liberal, más improbable: Carlo GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, Bari 1979, págs. 177-179 y 286. Se precisa para nuestras cuestiones por supuesto la historia europea, cuyas bases sienta el *Handbuch der Quellen und Literatur der europäischen Privatrechtsgeschichte* dirigido por Helmut Coing y elaborado en el Max Planck Institut de Francfort, en publicación desde 1973; para la legislación agraria alemana del XIX, en capítulo de Stephan Buchholz, III-2 (1982), pági-

precederle; en nuestro caso, menos ruidosa, mal alcanzará a la relación enfiteútica; ésta prácticamente escapa a la legislación equivalente que, con todas sus suspensiones y vacilaciones, aquí no falta a partir de 1811. El decreto de 6 de agosto, o ley del 19, que nacionaliza jurisdicciones y proscribire privilegios y dictados de vasallaje, ya sienta un principio:

«Los contratos, pactos o convenios que se hayan hecho en razón de aprovechamientos, arriendos de terrenos, censos u otros de esta especie, celebrados entre los llamados señores y vasallos, se deberán considerar desde ahora como contratos de particular a particular.»

Especificaciones llegan en la ley interpretativa de 3 de mayo de 1823; se rebaja el laudemio al tipo romano que sabemos más módico, exactamente del 2 por ciento, y con criterio de reciprocidad se concede al enfiteuta el derecho de fadiga; éste además será, para uno como para otro dominio, intransferible, presumiblemente por favorecerse la consolidación del derecho de propiedad. Pero todo esto, que ya sería una reforma, sólo se establece respecto a «los enfiteusis de señorío», y no a otros:

«Lo que queda prevenido no se entiende con respecto a los cánones o pensiones anuales que según los contratos existentes se pagan por los foros o subforos de dominio particular, ni a lo que se satisface con arreglo a los mismos contratos por reconocimiento del dominio directo o por laudemio en los enfiteusis puramente alodiales.»

Así que no todas las enfiteusis resultan afectadas o vienen a ser objeto de la reforma; los derechos de dominio dividido a nivel feudal, entre rentistas, son los que sustancialmente se modifican, y con la excepción además expresa de los foros entre los que ya sabemos que fundamentalmente el caso se daba. Esta dilatación del concepto, que ya servía para eludir la reforma y para salvar derechos del referido nivel feudal, pudo también prestarse a otras interpretaciones, siempre favorables a los antiguos señores; bajo la categoría enfiteútica pudieron ampararse censos más puramente señoriales, con sus propios privilegios de intervención en la economía campesina, tal vez reformados, pero con ello también salvados

nas 1721-1757; para la italiana, en parte de Filippo Ranieri, III-1 (1982), páginas 365-373, con su bibliografía, y con sus apartados vecinos de codificación desde luego.

y suponiendo además título que abría el acceso a la propiedad o, en otro caso, a compensaciones a cargo de los campesinos, siendo renta mientras tanto.

Tienen también su importancia a estos efectos las reglas procesales de esta ley, que tampoco facilitan la extinción de derechos. Si se carga con la prueba en principio a los señores, ello es en favor, no de los campesinos, sino del Estado, para comprobación y acotamiento de derechos nacionalizados y para reconocimiento y fijación de indemnizaciones públicas que aquí pueden compensar la pérdida de las mismas jurisdicciones. Se procede además a la relación casuística de prestaciones señoriales para admitirse contra su desaparición prueba de carácter enfiteútico, y no otra cosa; en las previsiones de la ley no entra la de alegación y prueba directa de propiedad campesina.

Esta ley de 1823, con su mismo amago de reforma, no puede eludir el capítulo del derecho de redención, pero en esto también demostrará que no le faltan recursos. Evita pronunciamientos directos, remitiéndose a un reglamento de 1805 de supuestos bien distintos al de liquidación de derechos señoriales y de un régimen además que poco facilitaba la misma redención, como aún comprobaremos. A lo que ahora nos interesa, con esto, y con el silencio de la ley que sigue, pudo entenderse que el derecho de redención tampoco quedaba con carácter general establecido. Esta siguiente ley, nuevamente interpretativa, última de la serie y la de más peso en definitiva, de 26 de agosto de 1837, sobre los términos de la reforma nada piensa efectivamente que deba aclararse; parece empero reparar en derechos campesinos, ofreciendo seguridades:

«Cuando los predios que fueron de señorío se hayan dado a foro, censo o enfiteusis, aunque el señorío sea reversible o incorporable a la nación, continuará el dominio útil en los que lo hayan adquirido, considerándose como propiedad particular.»

Se asegura la permanencia del dominio útil, pero a la declaración ya también se procede bajo el entendimiento de que era este derecho, y no el directo, el que peligraba por la supresión del régimen señorial; en el horizonte de esta legislación nunca asoma, ni de grado ni por fuerza, un interés campesino. Este aseguramiento del dominio dividido más crudamente también significa la inexis-

tencia de un derecho general de redención. Y esta ley en cambio retoca las reglas procesales, con criterio de favor a los antiguos señores; algún derecho como el *terratge* merece incluso artículo especial para conservársele como enfitéutico o dominical. Lo que cada vez estaba más lejos de preverse es que la incertidumbre extremeña pudiera resolverse mediante prueba del carácter señorial del derecho de terrazgo, con su conscuencia de propiedad campesina.

El viaje nos ha devuelto al principio, ya formulado en 1811 y reiterado por estas leyes: la relación enfitéutica subsiste so capa de contrato, o incluso permanecen con su amparo derechos señoriales. A lo que a ella importa, puede subsistir no sólo la renta, sino también, y sin reforma, los derechos anexos, inclusive probablemente alguna de sus manifestaciones de jurisdicción, como la de competencia registral, pese a la propia abolición de las jurisdicciones señoriales desde 1811. Los silencios también guardaban su intención⁴⁹.

Por su lenguaje, la composición pudiera parecer la primera francesa: la enfiteusis queda como «contrato de particular a particular» en virtud de la desaparición de unos derechos que indistintamente se llaman feudales o señoriales; la enfiteusis aparece como censo y, más expresamente, el dominio útil como propiedad; pero nada de ello implica las transformaciones que ya desde un primer momento constatábamos en Francia. Aquí, con su propio respaldo en el uso castellano, se impondrá especialmente la expresión de *censo enfitéutico*, pero el sintagma resulta más bien un camuflaje, como más deliberadamente ya lo eran los subterfugios de las leyes, también léxicos. No se produce ni entiende por ello la equiparación al censo crediticio, con sus corolarios de conversión en propiedad del dominio útil y de reducción del directo a simple carga hipotecaria, libremente redimible por el censatario. Ello constaba como un mínimo⁵⁰, pero no se contiene en esta legis-

49. Para todo ello, aparte las mismas normas (Gacetas de 12 de septiembre de 1811, 6 de mayo de 1823 y 6 de septiembre de 1837), B. CLAVERO, *Código y Fuero*, págs. 101-113; H. COING (ed.), *Handbuch*, III-1, págs. 631-636, en capítulo de Johannes-Michael SCHOLZ.

50. En la entonces todavía vecina Portugal, ya una disposición de 1822, aun pronto suspendida por su reacción de 1823, adoptaba una política de re-

lación. El dominio superior, lejos como tal de desaparecer, sigue siendo perpetuo, como derecho de propiedad de grado cuando menos no inferior al dominio útil, a su vez también perpetuo en unos casos, así el *foro*, o temporal para mayor distancia en otros, como la *rabassa*.

Las medidas francesas tampoco eran un dechado de precisión, pero la confusión de las españolas ya es también más intencionada. Hay siempre su parte de inocencia, o si se prefiere de inconsciencia, pues la incertidumbre no sólo era extremeña, pero tampoco falta la de malicia, que aquí ya se creció. El casuismo que mal delimita supuestos no podía evitarse y el mismo concepto más general de relación enfiteútica, que quería diferenciarse entre el derecho señorial no derivado de dominio territorial y el de disposición no compartida de la tierra, andaba bastante perdido, tanto al menos como el latín medieval, pero todo ello aquí también sirvió para una operación nada inocente de transmutación de derecho señorial. Si la enfiteusis había servido durante siglos al señorío, no es de extrañar que todavía pueda rendirle un último servicio.

Queriéndose establecer una regulación diferenciada para una relación enfiteútica situada entre el señorío y la propiedad, tanto en Francia como en España la deficiencia de su concepto pudo especialmente notarse; con independencia de la evolución final tan divergente de uno y otro caso, la necesidad hubo de sentirse en ambos. Diversas concepciones podrán ensayarse para la recuperación de esta categoría, más cercanas sintomáticamente a una idea de *féodalité* en Francia, a la de propiedad en España, pero, con su

dención de las enfiteusis en tierras públicas y de señorío, con la capitalización de las veinte anualidades; otra de 1832 parte del supuesto de la abolición de las cargas enfiteúticas como derechos señoriales, aun no siendo la resolución definitiva, pues todavía se restablecerían, pero ya también siempre con carácter redimible: H. COING (ed.), *Handbuch*, III-1, págs. 805-827, en sección de J. M. Scholz; Albert SILBERT, *Do Portugal de antigo regime ao Portugal oitocentista*, Lisboa 1977, págs. 91-100, de su contribución al magno congreso de 1968 sobre *L'abolition de la féodalité dans le monde occidental* que también tiene, aunque no todas sus actas, traducción castellana, de 1979; las aportaciones al mismo de Antonio Domínguez Ortiz y Pierre Vilar no ofrecían base para una comparación en este capítulo

también común tendencia aun de diverso modo liquidatoria, mal identifican y peor elevan sobre el casuismo⁵¹.

Los conceptos podían andar confusos, pero menos las realidades; en España, resiste a la revolución la enfiteusis, o censo enfiteútico si se quiere, como relación de dominio dividido, derechos anexos y carácter irredimible. Conviene subrayarlo, puesto que constituye un capítulo, con toda su significación, muy descuidado en nuestra historiografía⁵². Cuando mejor se le considera, no acaban tampoco de precisarse sus términos, mezclándose la evolución general de la enfiteusis con las incidencias particulares de la desamortización, por la que cupieron redenciones⁵³; respecto a los territorios donde se presenta una mayor variedad de situaciones censuales, enfiteúticas y arrendaticias, la confusión parece acrecentarse, magnificándose el propio dato de las redenciones⁵⁴. Es un

51. M. GARAUD, *Révolution et propriété*, pág. 185, adoptando la distinción así, y aunque no sean expresiones estrictamente de la legislación revolucionaria, entre una «féodalité dominante» y otra «contractante» que sería la enfiteútica, con el efecto de escasa recuperación de su concepto más general y relativa dispersión de su problemática. Pero más ha pesado en nuestra historiografía la tendencia de la revolución española, y especialmente por obra de la monografía que ahora recordamos, como también de los escritos metodológicos de su autor.

52. En especial por la incomprensión e infravaloración de Salvador de Moxó, *La disolución del régimen señorial en España*, Madrid 1965, con sus secuelas de desapercibimiento y silencio: B. CLAVERO, *Código y Fuero*, páginas 84-85, que siguen: compruébese en los artículos tituladamente agrarios de *Papeles de Economía Española*, 20, 1984, que es número de estado de nuestra historiografía económica. Y el tema había sido comprendido y valorado por el principal predecesor de Moxó en el estudio de la materia, con quien no será de extrañar que se mostrara particularmente injusto: Rafael GARCÍA ORMAECHA, *Supervivencias feudales en España*, Madrid 1932.

53. Mariano PESET, *Derecho y propiedad en la España liberal*, págs. 476-478, en *Quaderni Fiorentini*, 5-6, 1976-1977, págs. 463-507; *Dos ensayos sobre la historia de la propiedad en España*, Madrid 1982, págs. 96-103.

54. Puede comprobarse en Juan ROMERO, *Propiedad agraria y sociedad rural en la España mediterránea*, Madrid 1983, págs. 281-289, que manifiesta seguir a Antonio GIL OLCINA, *La propiedad señorial en tierras valencianas*, Valencia 1979, págs. 142-147, ajenos a la línea de estudios valencianos antes referida. Sobre el descubrimiento por esta otra escuela del mediterráneo de la enfiteusis, la recensión al primero de Ramón GARRABOU en *Revista de Historia Económica*, 2, 1984, págs. 195-198; aunque tampoco falta en ella mayor discer-

capítulo secundario, pero que aquí adquirió relevancia precisamente por faltar la redimibilidad. Merece su consideración.

Desde temprano, desde 1805 como por la ley de 1823 se nos indicara, se regula efectivamente la redención, dándose pie a la confusión por unas disposiciones que ya no eran un prodigio de exactitud, pero sobre cuya finalidad al menos no caben dudas; por causa de apuros financieros, se ofrece la redención en tierras públicas y aún se la induce en otras con los objetivos de recuperar papel de la deuda, darle curso forzoso o captar valores menos devaluados; todas las operaciones habrían de hacerse bajo la condición de utilizarse como medio de pago dicho papel o la de imponerse los capitales resultantes en las cajas de amortización de la deuda. Su principal supuesto era el del censo consignativo, permitiéndosele al censalista que instara su redención, para lo que no estaba generalmente facultado como ya sabemos; pero el arbitrio también expresamente se extiende a «contratos enfiteúticos», surgiendo aquí las dudas.

Dada la propia finalidad de la medida, no se trataba tanto de facultar al enfiteuta para redimir como de instar al dominio superior a que le ofreciese la posibilidad; se cuenta con el interés y la resolución de la parte rentista, y no del campesinado, por lo que puede también pensarse que se miraba a las enfiteusis de renta más devaluada; el propio tipo de capitalización que supletoriamente se establece, que sitúa el precio de redención por encima de las sesenta y cinco anualidades, la haría impensable en otros casos tanto como la animaría en éstos. De todas formas, se está también muy lejos de establecer con carácter general una política, aunque fuera ésta, de fomento de redenciones de tierras enfiteúticas; ya se dieron expresamente sus exclusiones, que sirvieron como guía del juego de regla y excepción que conocemos de la ley de 1823.

Esta misma ley agravó nada inocentemente la confusión; su remisión, que ya pudiera retener sus excepciones en el capítulo de la redención y en todo caso mantener un tipo de capitalización

nimiento en este punto: Armando ALBEROLA, *Jurisdicción y propiedad de la tierra de Alicante, siglos XVII y XVIII*, Alicante 1984, págs. 278-311 y 367-409, reflejando la circunstancia que puede explicar la confusión en esta hora de la verdad a la que no llega: el predominio de la enfiteusis en tierras precisamente públicas, de importancia desde antes en la zona

sumamente provechoso para el dominio superior, también ha servido luego para imponerse una imagen pionera, y no crepuscular, de las medidas de 1805. El equívoco ha llegado al extremo de que encuentre todavía curso en nuestra historiografía la especie de que desde entonces, entre estas medidas de lo que ya considera una desamortización, quedó establecida la redimibilidad de los censos enfitéuticos, con lo que la cuestión entraría resuelta en la misma revolución y no se sabría a qué viene toda la lucha campesina posterior precisamente por el derecho de redención. No hay motivo para el desconcierto cuando tal no hubo⁵⁵.

Particularmente respecto a tierras públicas, como las recibidas entonces mediante acuerdo de la iglesia, pudo ya ciertamente definirse una política de redención de enfiteusis, bien que con criterios así también no precisamente de favor para el dominio útil y que luego pesarán realmente en su corte. El mantenimiento en vigor por la misma revolución de la regulación de 1805 no significa que desde entonces el derecho de redención existe, sino que a la verdadera desamortización, con su expropiación de tierras que permite la liquidación de derechos señoriales, le servirá para restringir las redenciones.

A la redención efectivamente en su momento también se recurre como procedimiento especial de desamortización, excluyente en su caso de la oferta en subasta de las tierras enfitéuticas expropiadas o nacionalizadas; no sólo se aplica además a los casos más estrictos o menos discutibles de enfiteusis, sino que también se le extiende por la misma legislación desamortizadora expresamente a los de arrendamientos u otras concesiones por largo tiempo, anteriores a 1800, resucitando así en estas postrimerías su entendimiento más general bien que sin nombre para su identificación. Con esto, podemos imaginar que los enfiteutas se sentirían investidos con un derecho de propiedad bajo carga ahora tan sólo hipotecaria.

Al reconocer el derecho de redención, el Estado otorga efectiva-

55. P. SALVADOR, *Compilación e historia*, págs. 28-31; B. CLAVERO, *Código y Fuero*, págs. 97-100; R. VILLARES, *Propiedad en Galicia*, págs. 141-150 (también en A. GARCÍA SANZ y R. GARRABOU, eds., *Historia Agraria*, I, págs. 380-194). Precizando todavía la cuestión indudablemente estudio; Richard Herr tiene anunciado un libro sobre *Rural Change and Royal Finances in Spain at the End of the Old Regime*

mente a sus enfiteutas la consideración de propietarios, pero con efectos sólo transitorios; de no aprovecharse la ocasión para redimirse la carga, se retornaba a la situación enfiteútica de menor derecho, con su mantenimiento del dominio dividido como se registrara en la ley de 1837. Ya es importante que sea el Estado quien tenga esta consideración, pero la misma ni es general para toda enfiteusis ni duradera para las suyas; podrá tener este acontecimiento su influencia en la evolución que ya hemos visto iniciarse y seguiremos contemplando de asimilación social entre dominio útil y propiedad, pero no produce su identificación; no actúa el Estado en esto como legislador que reforma el régimen general de la enfiteusis, sino como propietario que mediante ley dispone de sus derechos de este carácter enfiteútico.

La cuestión resulta con todo de significación, aunque tampoco tanta como acomplejadamente se pensaba por tierras extremeñas hace un siglo, cuando se envidiaba la enfiteusis que en otras regiones habría producido «una forma de desamortización más justa». Merece desde luego mayor consideración que la que ha venido desde entonces deparándosele⁵⁶, aunque tampoco tanta como para descuidarse la importancia siempre mayor para la suerte de la enfiteusis de aquella otra legislación sobre régimen señorial o para pensarse que la de desamortización pudiera interesar a su evolución como institución o como relación social. Otra desamortización para tierras de enfiteusis ya no hubo, sino tan sólo adaptación de una misma a la contrariedad que supuso la interposición de dere-

56 FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE, *Desamortización y Hacienda Pública*, página 24, en *Hacienda Pública Española*, 77, 1982, págs. 15-31, refiriéndose a comunicaciones de unas Jornadas cuyas actas por fin se anuncian: *Desamortización y Hacienda Pública*, Madrid 1986. Y ya llegan investigaciones que cuidan bien el asunto: José M.^o MORO, *La desamortización en Asturias*, Oviedo 1981 (la de Mendizábal), págs. 225-238 y 276-284, y *La desamortización de Madoz en Asturias*, págs. 133-156, en *Estudios de Historia Social*, 18-19, 1981, págs. 85-165; o que también lo consideran para tierras menos enfiteúticas y aún en sus implicaciones más generales: José Ramón Díez Espinosa, *Estructura de la propiedad y desamortización*, en *Hacienda Pública Española*, 87, 1984, págs. 231-240; *Desamortización y economía agraria castellana*, Valladolid 1986, págs. 273-336, y su capítulo —págs. 76-84 y 116-132— en G. RUEDA y otros, *La desamortización de Mendizábal y Espartero en España*, Madrid 1986, también informativo acerca del tradicional tratamiento descuidado del asunto.

chos campesinos, o a la circunstancia de que así sólo se expropiaba un dominio superior o derecho sobre otros dominios no menos establecidos en la misma tierra. Y hubo todavía más.

Ni siquiera por la ocasión se fomentaron las redenciones. Se ha mantenido la vigencia de la reglamentación de 1805, partiéndose con ello de precios de redención realmente prohibitivos, con condiciones de pago muy discriminatorias ahora respecto a las generales de las subastas; aparecen además requisitos o exigencias de adhesión política, con su especial temor frente al carlismo campesino; se rechazan expresamente otras posibilidades que abría la ocasión para que el campesino se hiciera con la propiedad, como la de reconocérsele ulteriormente un derecho de tanteo ante la subasta; ni siquiera se considera su caso entre las propuestas y debates de creación de instituciones crediticias para apoyo de la misma desamortización, barajándose exigencias en las operaciones hipotecarias que cerraban la posibilidad de concesión de crédito para la redención de tierras enfitéuticas, etc.⁵⁷.

Las mismas rectificaciones que hubieron de producirse en esta política tampoco parece que miraran precisamente al interés campesino, aunque pudieran redundar a su favor o en cierta corrección al menos del disfavor. Las sucesivas subidas del tipo de capitalización de la renta, o efectivas rebajas del precio de redención de la tierra, que entre Mendizábal y Madoz se dieron, pudieron ya más deberse a la conveniencia de evitarse su repercusión en una artificial elevación de la tasación en subasta, con la correspondiente dificultad de enajenación por cualquier medio, que a la intención de

57 J. M.^a MORO, *Desamortización de Mendizábal*, págs. 93-99, XAN CARMONA y XOSE CORDERO, *Introducción á análise de redención foral de Mendizábal en Galicia*, en *Revista Galega de Estudos Agrarios*, 3, 1980, págs. 37-55; Manuel FERNÁNDEZ TRILLO, *Bancos hipotecarios y desamortización*, en *Agricultura y Sociedad*, 25, 1982, págs. 195-206, aun no detectando éste el problema.

58. J. M.^a MORO, *Desamortización de Mendizábal*, págs. 91-93 y 99-103; *Desamortización de Madoz*, págs. 107-109. El tipo de capitalización en la desamortización de Mendizábal osciló entre el 1,5 por 100 heredado del régimen de 1805 (las más de sesenta y cinco anualidades que decimos) y el 3 por 100 (por debajo de las treinta y cinco) inicialmente adoptado para el caso de censos consignativos sin constancia de capital; en la de Madoz se produjo la rebaja, entre el más regular del 5 por 100 (veinte anualidades) y, como prima de pago al contado, el 10 por 100 (mismo número de anualidades)

favorecerse a los campesinos que a la postre pudieran redimir⁵⁸. De hecho, lo que hubo fue una deliberada política de impedimento y cerrazón ante la misma posibilidad abierta de una propiedad campesina⁵⁹.

Tampoco podrían redimir todos los enfiteutas de tierras nacionalizadas, o no tenía por qué siquiera ser campesino quien finalmente se beneficiara, como también no tenían por qué concluir con la situación enfiteútica las redenciones efectivamente habidas. La legislación antiseñorial no ha sido para acabar con las enfiteusis superiores o feudales; en caso de solapamiento, la redención sólo estará al alcance del dominio inmediato al desamortizado; cabe así que el campesino, además de no contar con el derecho de redimir su tierra por el régimen general de la enfiteusis, no se encuentre tampoco con la opción de hacerlo por el particular de la desamortización; se le interpone un rentista enfiteuta, o arrendatario a largo plazo, de dominio ya no nacionalizado. La cuestión resultará más problemática en zonas de cohabitación vertical de arrendamientos a corto plazo de derecho, pero estables de hecho, y enfiteusis, pero, donde relaciones tenidas por enfiteúticas se superponen, con la generosidad de la ley para con los rentistas también en este punto, no saca el campesino tal provecho de la desamortización.

Podía sacar otros, ya más modestos. El reconocimiento singular expreso de dominio útil por parte del Estado, que había de producirse con miras no sólo a la redención sino también a la subasta, ya serviría para el aseguramiento de su propio derecho dominical⁶⁰, lo que no es de despreciar por aquello de que la incertidumbre no sólo fuera extremeña. En fin, las cuestiones son varias, presentando ya su estudio en lo que a nuestros puntos toca su especial dificultad; como no requiere la redención subasta, no aparece reflejada en la documentación más específica y frecuentada del proceso

59. Lo que ya se detecta sin necesidad de analizarse nuestro punto: F. TOMÁS Y VALIENTE, *La obra legislativa y el desmantelamiento del Antiguo Régimen*, págs. 170-172, en *Historia de España Menéndez Pidal*, XXXIV, Madrid, 1981, págs. 140-193; Josep FONTANA, *La crisis del Antiguo Régimen en España*, páginas 52-56, en *Papeles de Economía Española*, 20, 1984, págs. 49-61, o más esencialmente, de alcance no sólo para su momento previo, Jaume TORRAS, *Liberalismo y rebeldía campesina, 1820-1823*, Barcelona 1976, págs. 7-31.

60. J. M^a MORO, *Desamortización de Mendizábal*, págs. 234-235 y 256-258.

desamortizador, debiendo perseguírsele en otras que tampoco siempre debidamente comunican la posición efectiva del redimente respecto a la tierra ⁶¹. En Francia ya todo resultó más fácil: las rentas enfitéuticas de bienes desamortizados corrieron desde 1793 la suerte de la abolición, cerrándose en mayor medida el paso a las subastas ⁶².

Desde nuestras tierras de enfiteusis, con tales circunstancias, debían de resultar cuanto menos extravagantes las propuestas de reconducir la desamortización, no mediante la programación y el fomento de la liberación de cargas enfitéuticas, ya que no por su supresión, sino con una generalización de la enfiteusis que convirtiera al Estado en el gran censualista que suma a sus impuestos las rentas de un medio derecho de propiedad sobre la tierra; se proponía ya por supuesto a este propósito una enfiteusis depurada o reducida a censo, pero, eligiéndose su figura, algún designio subyacería de transferirse limpiamente al Estado el tradicional sometimiento campesino ⁶³. El mito de la enfiteusis, que reverdecerá, tam-

61. M.^a del Carmen QUINTANS, *El dominio de San Martín Pinario ante la desamortización*, Santiago 1972, págs. 77-88 y 101-103; J. M.^a MORO, *Desamortización de Mendizábal*, págs. 33-34 y 207-212; J. R. Díez ESPINOSA, *Desamortización y economía*, págs. 301-304.

62. Ya suele faltar en las comparaciones el factor esencial de esta posible transformación previa de las relaciones agrarias, como puede aquí comprobarse en el planteamiento de Germán RUEDA, *Estudio comparativo de las consecuencias de la desamortización en tres zonas de Europa*, en *Hacienda Pública Española*, 69, 1981, págs. 107-123.

63. Joaquín ARANGO, *La crítica de Flórez Estrada a la desamortización de Mendizábal*, en *Revista de Trabajo*, 31, 1970, págs. 113-256; F. TOMÁS Y VALIENTE, *El marco político de la desamortización en España*, Barcelona 1971, págs. 90-94; J. FONTANA, *Cambio económico y actitudes políticas en la España del XIX*, Barcelona 1973, págs. 166-170 y 181-182; F. TOMÁS Y VALIENTE, *Recientes investigaciones sobre la desamortización*, págs. 142-145, en *Moneda y Crédito*, 131, 1974, págs. 95-160; J. FONTANA, *La Revolución Liberal, 1833-1845*, Madrid 1977, págs. 269-271; Jordi MALUQUER, *El socialismo en España, 1833-1868*, Barcelona 1977, págs. 91-96; Salvador ALMENAR, *El pensamiento económico de Flórez Estrada*, págs. XLI-XLII y XCVII-CVII, que sirve de introducción a su *Curso de Economía Política*, Madrid 1980, págs. XXXV-CXV. Pero la polémica ya se mantuvo sin entrar en el mecanismo de la proposición de enfiteusis que se entendía clave, así como sin acabar de centrarse, ya que Fontana, en la posición más convincente de partida, no aprecia la dimensión jurídica, eludiendo este frente, o prefiriendo otros de mayor interés político como menor científico.

bién ya se alimentaba de las frustraciones sociales, deficiencias económicas y arbitristos políticos de la desamortización.

Redenciones, en todo caso, caben, y no sólo por el régimen especial de la desamortización, o no solamente en tierras públicas. Podrían alcanzar aplicación fuera de ellas las medidas de 1805 mediante especialmente la remisión de la ley de 1823, que era de abolición de derechos señoriales y no de desamortización; podrían también a efectos de redención asimilarse censos enfitéuticos a los crediticios en los que, ya de tiempo agrarizados, no constase capital e igualmente hubiera de presumírseles; éstos además podían venir resultando irredimibles por causa extrínseca de vinculación, que también desaparece; podrían lógicamente en fin producirse redenciones por acuerdo del dominio superior; éste además podía verse movido a ello al peligrar sus rentas en los casos de censos enfitéuticos a su vez desagrarizados, por circunstancias como la de ser colectivos, gravando a toda la comunidad campesina, o genéricos, sin derechos anexos. Pero, y aun con la importancia que todo ello pueda alcanzar en algunas regiones, sigue como tal la enfiteusis irredenta⁶⁴.

Tras la desamortización y la desvinculación, tras la misma legislación antiseñorial, tras toda la revolución, perfectamente cabe que campesinos españoles con su derecho a la tierra siguiesen sin disponer, no sólo de los medios económicos para alzarse con la entera propiedad, sino tan siquiera de la facultad jurídica de hacerlo. Y con este escollo debe enfrentarse aquí el Código, cuyos sucesivos proyectos tendrían que vérselas todavía con aquellos primeros imperativos de redimibilidad y depuración; repetidamente frustrado, sólo una ley especial, en 1873, estuvo cerca del objetivo, fracasando también. La codificación tenía aquí estos compromisos⁶⁵.

64. B. CLAVERO, *Mayorazgo*, págs. 331-337 y 361-392, por sus referencias a desvinculación de censos. Este panorama de posibilidades y vías de redención creo que sólo podrá aclararse con investigaciones locales más cuidadosas de los conceptos, o menos confiadas en las más simples distinciones de los manuales; ni siquiera el dato más primario de si la redención resulta ahora obligada o es todavía voluntaria para el dominio rentista, suele sopesarse, como si sólo fuera relevante su realización material o económica. Y sobran ciertamente trabajos sobre desamortización, como faltan sobre desaparición o transformación de derechos señoriales y sobre desvinculación.

65. B. CLAVERO, *Código y Fuero*, págs. 113-128; Pilar LÓPEZ RODRÍGUEZ, *Cam-*

Pero no todas las regiones eran enfitéuticas; en el área de orden castellano, con su predominio de arrendamientos cortos que no cedían dominio, ha podido precisamente imponerse la propiedad privada de la tierra por efecto de la legislación abolutiva del sistema señorial, desvinculación y desamortización comprendidas, y no por supuesto en manos campesinas. El señorío que venía atribuyéndose el dominio vierte más fácilmente en propiedad y aún conserva con cierta comodidad su control de la tierra mediante la misma práctica de arrendamientos cortos que mantiene al campesino en la posición más dependiente y precaria⁶⁶. De hecho, dado el mismo carácter general de la legislación, tampoco debe descartarse la conexión del éxito castellano de la propiedad con la derrota de las tierras de enfitéusis, o viceversa tal vez mejor; la renta de un dominio directo de cimientos ya minados desde antes de la revolución puede mejor defenderse con el derecho concebido desde las posiciones castellanas de la propiedad derivada de señorío, terreno también de este dominio. Una unidad legislativa puede construirse con la complicidad de unos particularismos.

Así encontraba el dominio superior una base de resistencia ante el mismo empuje como propiedad del dominio útil. Ya incluso esta tendencia, de raíces anteriores a la propia revolución, podía estarse infiltrando en el mismo derecho general o común; ocurría en especial esto por el establecimiento desde mediados de siglo del registro de la propiedad, que había de concluir con los regímenes especiales de los anteriores oficios de hipotecas y también definitivamente con la competencia registral de los rentistas enfitéuticos; abría este registro la posibilidad de inscripción principal o inmatriculación del dominio útil, asemejándosele formalmente a la propiedad y re-

pesinos propietarios, Lugo 1985, sobre los meses de redención de la I República.

66. Ricardo ROBLEDÓ, *Los arrendamientos castellanos antes y después de la crisis de fines del siglo XIX*, en R. GARRABOU y J. SANZ (eds.), *Historia Agraria de la España Contemporánea*, II, Barcelona 1985, págs. 369-411, que en éste como en los otros casos citados recopila material editado en otras sedes, facilitando su conocimiento; y puede ser también un síntoma que, atendándose así apropiadamente los arrendamientos, siga en cambio descuidándose durante estos primeros volúmenes del XIX el capítulo de los censos, todas las enfitéusis comprendidas.

valorizándosele materialmente con su acceso al crédito⁶⁷. Se crearían sus graves problemas, como el de la suerte de las hipotecas de este dominio en caso de comiso, y sus reacciones se producirían, con algún retorno de disposiciones especiales para la inscripción y garantía del dominio directo, pero las posiciones de la propiedad y del dominio útil seguían con todo irremisiblemente acercándose. Los rentistas catalanes, con sus *rabassas* temporales, se defenderían también mejor en estos frentes que sus congéneres gallegos, con sus *foros* perpetuos, pero la evolución a todos afectaba.

Ya también el progreso de la doctrina de la propiedad privada, o aquí mejor sería decir de momento la decadencia de la de división del dominio, perjudicaba menos al campesino gallego que al catalán. En el caso del *foro*, por su perpetuidad, mejor se admitiría que se compartiera internamente la propiedad; más difícilmente en cambio se asimilaba la idea respecto a derechos de carácter temporal, encima de divididos, como los de los *rabassaires* catalanes. Se asienta ahora el concepto de que era concesión necesariamente perpetua la enfiteusis, fundamentándose en ello su mismo efecto mantenido de división dominical, con lo cual resulta la *rabassa* institución más bien singular. El término de enfiteusis finalmente excluye la figura histórica más típica de enfiteusis catalana.

Ahora se genera un debate doctrinal sobre la naturaleza jurídica de la *rabassa* que, con todas las confusiones del nuevo contexto, no dejará de proyectarse en la historia, o querrá precisamente resolverse mediante ella. Sobre todo se le quiere nada inocentemente conducir, con la base que ya sabemos en la historia, hacia terrenos como el de la aparcería o el del arrendamiento, más adversos bajo

67. R. VILLARES, *Propiedad en Galicia*, págs. 297-308. Aun permaneciendo en la época anterior: Sebastián PARÈS, *Reminiscencias feudales en un capbreu del siglo XVII*, en *Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos*, 2, 1950, págs. 275-295; Manuel RIU, *Els capbreus font important per a la història sócio-econòmica dels senyorijs laics e eclesiàstics*, en tales mismos *Estudios*, 5, 1977, págs. 101-128; Gaspar FELIU, *L'estudi serial dels capbreus com a font per a la història agrària*, en las actas del *I Col·loqui d'Història Agrària*, Valencia 1983, págs. 213-228. Y quedándose a las puertas: Marina LÓPEZ y Mercé TATJER, *Observaciones sobre la historia de los Oficios de Hipotecas en Cataluña*, en *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, 560, 1984, págs. 131-150. Ilustrativos aquéllos de la competencia señorial y éstas de la especialidad regional, cuyos estudios realmente se precisan

doctrinas contractuales a la admisión de algún dominio campesino. A efectos más inmediatos y sustantivos, con la peculiaridad que ahora supone la temporalidad de un derecho dominical, queda la *rabassa* como el supuesto que peor encaja en los mismos proyectos que se suceden de redención de censos o asignación de la propiedad, mediante su hipoteca, al censatario; se le encuentra a estas alturas coexistiendo en su mismo medio con enfiteusis propiamente dichas, o tenidas ahora por tales ⁶⁸.

Mas la posición del censatario, *rabassaire* comprendido, puede todavía resultar envidiable en comparación con la del arrendatario; de esto al menos entonces, con el embate de nuevas crisis agrarias, no se dudaba. El contraste entre Cataluña y Castilla vuelve al orden del día. Con ello, y con su desprecio de evidencias, llega la mitificación definitiva, aquella idealización fina! que veíamos patéticamente manifestarse en la Extremadura de finales de siglo. Como a Electra el luto, le sientan a la enfiteusis bien las crisis. Pero tampoco hay que dejarse sorprender; a partir de ahora arreciarán tanto la presión de larga marcha campesina ⁶⁹, como la crítica a menor distancia, si en general a la propiedad, con mayor razón en particular a sus formas más emparentadas con dominio señorial ⁷⁰; la mitificación al fin responderá a reacción inducida, bien que con su parte siempre de inocencia.

La Academia de Ciencias Morales y Políticas convocaba en 1872 un concurso sobre «la legitimidad del arrendamiento, de la renta y del interés de la propiedad considerada como capital»; era época de rico rebate, recrudescido a continuación en nuestro capítulo con el sobresalto de las medidas de redención de censos de 1873; en seguida éstas suspendidas y el debate acallado, llega por fin en 1889 el Código para arreglar las cosas, dejándolas como estaban; acto seguido, en 1891, la misma Academia ofrece su aval, con un con-

68. P. SALVADOR, *Compilación e historia*, págs. 44-66, 91-96 y 101-110.

69. J. A. DURÁN, *Agrarismo y movilización campesina en el País Gallego, 1875-1912*, Madrid 1977; Albert BALCELLS, *El problema agrari a Catalunya, 1890-1936*, Barcelona 1983, ed. ampliada.

70. P. GROSSI, *Historia del derecho de propiedad*, Barcelona 1986; B. CLAVERO, *La propiedad considerada como capital*, en *Quaderni Fiorentini*, 5-6, 1976-1977, págs. 509-548; para el caso todavía vecino, A. SILBERT, *Do Portugal*, págs. 199-281.

curso ahora sobre «historia jurídica de las diversas especies de censos» que, según la propia convocatoria, debería aplicarse a la «justificación del enfiteútico en sus orígenes y en la actualidad contra los que lo impugnaron y excluyeron de algunos códigos modernos como institución feudal». Otros concursos posteriores podrán abundar más pacíficamente en el asunto, ya asimilado al menos en el mundo de cultura que esta Academia representa ⁷¹.

Que parece ser el de los juristas, efectivamente comprometidos por esta época en la predicación de las virtudes de una «figura de progenie tan ilustre e historia tan preclara» como la enfiteusis; injustificadamente, por confundirla con el feudo, la Revolución francesa la habría atacado, como no menos injustamente despreciado el Código francés. Ahora se desenvuelve una doctrina de los censos que, entre especies ya cadáveres, mantiene vivo el cuerpo de la enfiteusis. Ya vimos cómo entonces tranquilamente aparece entre las «instituciones censuales» aún a sabiendas de que puede conservar sus ingredientes «señoriales»: «laudemio, comiso (y) tanteo». De la composición se vale el propio Código español, así como de la categoría de *derechos forales* que sirve para respetar, en su tracto histórico o realidad heredada, instituciones regionales como éstas dichas censuales. Nuestro Código regula la enfiteusis, y con un derecho de redención que parece ya inexcusable, mas esto no aprovecha a nuestros casos, exceptuados en lo que a la redención toca con una mentida promesa de ley especial; una sección sobre *rabassas y foros venideros*, que no sobre los existentes, mal disimula también su rendición ante estas concretas enfiteusis ⁷².

71. Del de 1891, con toda su hipoteca, ya proceden Arturo CORBELLA, *Historia jurídica de las diferentes especies de censos*, y Ramón SÁNCHEZ OCAÑA, *Estudio crítico de las diversas especies de censo*, ambos editados en 1892; a falta de algo mejor a mano, todavía se toman como guía.

72. B. CLAVERO, *Código y Fuero*, págs. 128-136; y pertenecen las expresiones citadas precisamente al principal responsable final del Código civil español, a Manuel Alonso Martínez. De la asimilación entre censos, se sacaron otros provechos, como el de establecerse el tipo de redención al 3 por 100 que venía supletoriamente aplicándose a censos consignativos; aun gravoso, pudo todavía reanimarse el proceso redencionista en casos marginales a finales de siglo, uniéndose ésta a las otras vías que decíamos y a una ley de 11 de julio de 1878 de liquidación de censos públicos. Mas el Código todavía pesará en casos como el catalán, según veremos

El derecho por definición ahora se impone, pero también la cultura todavía pesa, y no sólo en el mundo de los juristas. La medida de pura abolición de cargas adoptada en Francia en 1793, parecería más bien impensable al cabo de más de un siglo al mismo socialismo español organizado, cuyo programa agrario se contentaría con reclamar indecisamente «abolición o redención» de rentas de enfiteusis perpetuas⁷³. Al menos los socialistas no se hacían ilusiones como los regeneracionistas; su propuesta podría sintonizar con aspiraciones campesinas, mientras que en estos medios rurales ya sonaría a pesada broma aquella rehabilitación de la enfiteusis como arma de emancipación campesina que tampoco era ocurrencia exclusiva de unas comisiones extremeñas; la misma Comisión de Reformas Sociales, o el posterior Instituto, ya tendría ocasión de afrontarlo de modo más realista⁷⁴.

Las bromas llegan, con la inercia de una cultura y el empuje de un nacionalismo, hasta hoy; hay todavía quien atribuye al Código español «la gloria» de haber rescatado para el mundo la enfiteusis, tras el golpe casi definitivo que le asestara el francés⁷⁵. Y otros nacionalismos aportan su contribución; el que predominara en Cataluña adoptó entre sus señas de identidad una imagen idealizada de su propia enfiteusis que, ya encubriendo su más prosaica realidad, pudo a su nivel jugar un papel de bloqueo comple-

73. Paloma BIBLINO, *Cuestión agraria y «marxismo»*, pág. 313, en *Estudios de Historia Social*, 26-27, 1983, págs. 257-331.

74. Instituto de Reformas Sociales, *El problema de los foros en el noroeste de España*, y *La «rabassa morta» y su reforma*, Madrid 1923, bajo la responsabilidad de Adolfo Posada, como titular de la Dirección General de Legislación y Acción Social del Instituto, y Constanza Bernaldo de Quirós, como jefe a su vez de su Sección Agrosocial, y con método más contrastado o menos fiado a la pura encuesta. Las respuestas de la de 1885 procedentes de territorios enfitéuticos, que en su día no se editaron, tampoco aparecen ahora en el reprint citado de celebración del centenario, que se limita a reproducir lo conocido.

75 Manuel FAIRÉN, anotaciones a P. OURLIAC y J. MALAFOSSE, *Derecho romano y francés histórico*, Barcelona 1960-1963, II, pág. 637; y contrástese sobre todo lo que luego indicaremos sobre el Código civil italiano, no sólo sobre fecha, sino también respecto a derecho de redención. La unidad en un sitio puede forjarse contra la enfiteusis señorial, como en otro frustrarse por la redención. Son evidencias que ya veíamos resistirse en relación al propio empuje europeo del Código francés

mentario al del Código. Se mantuvo en la materia una complicidad entre nacionalismos que ya vimos forjarse en tiempos de la revolución ⁷⁶.

Pero entre imaginaciones también cabe discernirse; los mismos alejados extremeños sabían distinguir la idea de la enfiteusis depurada, «sin pagamentos, reversiones y preferencias que siempre son de mal efecto», que habría de ser la que sirviera como instrumento de emancipación campesina, progreso económico y estabilidad social; había sido también la que, con menor sentido todavía de la oportunidad, fuera propuesta como alternativa a la desamortización. De estas idealizaciones también se nutre ahora una doctrina de la enfiteusis como contrato por encima de toda su historia; borrándose sus distintivos señoriales, se prefiere y se impone la noción mejoraticia; late en ella todavía el sueño de un campesinado vinculado a la gleba, ahora por contrato, ya que no por servidumbre, y con un medio derecho que sigue conteniendo obligación, ahora de productividad ⁷⁷.

76. M. PESET, *Una nota sobre Duran i Bas y la enfiteusis catalana*, en AA. VV., *La reforma de la compilació: el sistema successori*, Barcelona 1985, págs. 193-210 B. CLAVERO, *La primogenitura de la libertad*, págs. 32-33, en el mismo volumen, págs. 9-37, que también para el punto es una nota, sobre Prat de la Riba, con su continuidad en estas materias jurídicas o sociales respecto precisamente a Duran i Bas. Y ya es curioso, pero nada raro, que denuncien las desfiguraciones de este nacionalismo quienes más hacen suyas las del otro: M. FAIRÉN, en sus anotaciones citadas a *Derecho romano y francés*, II, págs. 631-632.

77. No es desde luego un fenómeno peculiar español: la misma exposición juvenil de Pivano, o buena parte de las remisiones de la bibliografía de Fiorelli, Bandini y Grossi, se sitúan en estas coordenadas, informando su problemática; y no hay que decir que la revisión al cabo del tiempo del propio Pivano sigue debatiéndola como si siempre hubiera sido desinteresadamente científica. Uno de los principales relanzadores del tema, Vincenzo Simoncelli, partía del Código civil italiano, de 1865, que regulaba la enfiteusis con derecho efectivo de redención, y de leyes posteriores de colonización, que la utilizaban, para construir, desde 1888, toda una doctrina del principio de trabajo componiéndose con el más primario de propiedad como fundamento de la presunta naturaleza mejoraticia de una relación agraria que, aun con su indefinición todavía romana y con lo que luego aparecía como corrupción del tiempo feudal, habría sido más constantemente contrato cuyo sinalagma de contraprestaciones ya reducía y marginaba la temática señorial; bajo dicho prisma, el interés definitivo de Biagio Bruggi, quien se ocupó de reeditar y completar

Y en realidad, entre ensoñaciones doctrinales y defecciones legislativas, no puede decirse que aquí el bloqueo no haya funcionado; la liquidación de estos censos enfitéuticos no ha llegado hasta bien entrado nuestro siglo, mediante redenciones sujetas a plazos y de tipos no muy favorables, entre treinta y tres y dieciséis anualidades más sus recargos también por la compensación de derechos eventuales como el laudemio, y con la posibilidad final todavía de conseguir la propiedad el dominio directo, con su correspondiente indemnización al útil. Sólo medidas dictatoriales, de 1926 para Galicia y 1945 para Cataluña, trajeron aquí, tras frustraciones parlamentarias de toda especie, este desbloqueo⁷⁸. Y el advenimiento de una enfiteusis depurada no se ha producido, viniendo en su lugar reformas, parlamentarias y dictatoriales, del mismo régimen de arrendamientos, superándose su precariedad⁷⁹.

la obra final de SIMONCELLI, *Della enfiteusi*, Nápoles 1922-1929, ya sólo era el de la formación de un derecho agrario actual, a cuyo servicio quedaba con todo la historia. Lo que dijimos de L. Mitteis, podría todavía repetirse de Simoncelli, pues su obra sigue prestándose, y no sólo en Italia, a la cumplimentación de este capítulo, bien que en su caso, ya por fuentes, peor podría añadirse lo de difícilmente superable. Si quiere comprobarse la herencia en tratamientos más especializados y cercanos: M. J. B. de ALMEIDA COSTA, *Os contratos agrarios e a vida economica em Portugal na idade media*, en este *Anuario*, 49, 1979, págs. 141-163.

78. R. VILLARES, *Propiedad en Galicia*, págs. 319-322, y *Foros, Frades e Fidalgos*, Vigo 1982, págs. 221-243; A. BALLCELLS, *El problema agrari*, págs. 185-228; Edward C. HANSEN, *Rural Catalonia under the Franco Regime*, Cambridge 1977, págs. 56-83. Pero es punto especialmente necesitado de estudio jurídico conjunto, la capitalización más gravosa se aplica en Cataluña, con el tipo del 3 por 100 que había consagrado el Código, pero que no era como tal aquí de aplicación y que tampoco vinculaba en caso alguno al legislador; si falta hiciera, había probado que otra cosa cabría la legislación catalana de la república; en ella, ya por vencida, no ha habido aquí precisión de entrar, desafortunadamente se concederá por lo menos que para los campesinos.

79. Ya que apuntamos algunas necesidades, tampoco estará fuera de lugar la indicación de que carecemos de alguna reconstrucción jurídica de esta evolución del régimen de arrendamientos que ya interesaría a los propios efectos de contraste. La cuestión ya también es más compleja durante toda la edad contemporánea de lo que suele presumirse; así por ejemplo tiene también desde 1861 acceso en teoría al registro de la propiedad el derecho del arrendatario, con requisitos de plazo del contrato que, para evitarse por parte de la propiedad esta garantía, no dejarían tampoco de influir en su brevedad; y la complejidad obviamente se acentúa con las reformas.

Aquellos derechos forales en los que se conservaban las enfiteusis se han codificado también sabidamente durante la época dictatorial, tratándose sus redenciones. Y finalmente vendrían los foralistas con aquella celebración de una muerte transida de victoria; paradójico punto muerto; curiosa necrología. Un acercamiento entre las respectivas situaciones del arrendatario y del enfiteuta es indudable que se ha producido, pero tampoco nuestra historia merece dicho epílogo. En la doctrina foralista vienen a cifrarse todos los equívocos encontrados, así desembocando el ancho río y los variados afluentes de la mitología de la enfiteusis, con toda la confusión de historia y derecho que convino a la renta, sostuvo el Código, consagró un nacionalismo y el final desinterés de todos no basta para despejar.

Ya dicha misma idea de acercamiento entre arrendatario y enfiteuta no se predica sin su intención. Sigue defendiéndose la enfiteusis frente al régimen reformado del arrendamiento ya por entenderse que éste se debe a la intervención impositiva del Estado mientras que aquélla genuinamente «se basa en un sistema de libertad»; posiciones conocidas así quieren reanimarse: el derecho de redención ya sería una imposición, implicando una verdadera expropiación del dominio rentista y suponiéndole una auténtica herida de muerte a la institución⁸⁰. La propia idea de acercamiento gravitaba sobre estas presuposiciones: dado que el arrendamiento defiende mejor, aun con todas sus reformas, el derecho de propiedad, la asimilación ya perseguía un reforzamiento parejo del dominio directo o superior. El arrendatario ya se califica exageradamente como propietario por el resquemor ante el afianzamiento de la posición de quien no tiene este derecho. Poco importa ya el rigor de las palabras: todo se ha desfigurado.

80. E. LALAGUNA, *Enfiteusis de Baleares*, págs. 102-108; y confróntese, aun centrados en otros puntos de la cuestión foral agraria, José Luis de los Mozos y otros, *Propiedad, herencia y división de la explotación agraria*, Madrid 1977, de crítica que especialmente ha de dirigirse a José Luis Lacruz, cuya autoridad servía a la celebración y apología de la enfiteusis foral. Para la balear en cuestión, confróntese a su vez la aportación de Isabel MOLL y Jaume SUAÚ en R. GARRABOU (ed.), *Terra i propietat*, págs. 66-106. Y el mito ha tenido alguna otra versión regional bien curiosa incluso en tierras menos enfitéuticas y no forales: la confrontación de A. GARCÍA SANZ, *Desarrollo y crisis*, págs. 294-296.

4. DE VUELTA DE HISTORIAS Y MITOS: PAZ Y DESCANSO PARA LA ENFITEUSIS

En algo ha de concedérsele a nuestros foralistas la razón: es «arqueología», aunque también les pese, la enfiteusis; a la historia efectivamente pertenece, a cuyas manos ciertamente vuelve de respetarse derecho tan elemental como el de cada época a sus conceptos. En esto el atentado del foralismo no es más grave, o ni siquiera otro, que el del nacionalismo.

La advertencia ya estaba realmente hecha en nuestro capítulo; resultando especialmente factible tras haberse comprobado que no hay en el texto romano base para la presunción de una naturaleza mejoraticia de la enfiteusis o cualquier otro concepto que ya la dejara definida e identificada para los restos: «Existen, junto a la enfiteusis romana, la de formación medieval como también la enfiteusis contemporánea, y cada cual con sus características tan particulares como para ser de estructuras no sólo accidentalmente diversas.» Pero comprobación y aviso tampoco bastan: ya sus distintas identidades institucionales y funciones sociales constituyen problemas⁸¹. La relativa continuidad de su presencia, también durante nuestra época comprometiéndose a la historia, sólo constituye una primera y menos seria dificultad⁸².

Un problema ya sustantivo es el de la identidad de cada enfiteusis, de suyo varias, y no todas bien cognoscibles, lo que ya brinda su ventaja: la postrera se proyectaba en la primitiva reduciendo literalmente a la única que resultaba importante, sin parangón

81. P. GROSSI, *Locatio*, pág. 247, que acentuaba para la enfiteusis que se dice medieval más la condición de mejora mediante el cultivo que alguna correspondencia estructural con la sociedad señorial.

82. Con la misma resistencia de la institución, la problemática enfitéutica siguió presente a lo largo del XIX en Italia como en Alemania la propia obra de Simoncelli no vino a descubrirla, sino a reciclarla. En Francia en cambio pudo producirse una recuperación de perspectivas ya más históricas: Eugène GARSONNET, *Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée*, París 1879, pero también de más persistente pérdida de sus extremos jurídicos, como podrán incluso ilustrar textos especializados: Joseph BALON, *Les fondements du régime foncier au Moyen Age*, Lovaina 1954, más bien insensible a nuestros problemas.

posible de las otras. La imagen de continuidad ya se gestó en época medieval por sus propias necesidades culturales de fundación del orden social en la tradición de unos textos; el ídolo resucita por razones no tan diversas, pese a la propia transformación de la cultura y del derecho. Los motivos tan queridos para la historia jurídica de continuidad o de retorno no son sino criaturas propias o fantasmas que ya nacen de un temor por las evidencias, frente a cambios que puedan barruntarse, como ha ocurrido aquí con la enfiteusis, y ante los ya acontecidos, como es más generalmente el caso, con la revolución que la atacara. Contra los ulteriores cambios de nuestro siglo, la misma historia del derecho ha querido todavía reafirmarse y definirse como una disciplina del éxtasis institucional; en su terreno, se comprenderá que merezca subrayarse una conclusión tan elemental y primaria como la de diversidad histórica de nuestra institución⁸³.

Y sus figuras podían efectivamente haberse sucedido, incluida la última. De no existir todavía la enfiteusis de procedencia medieval, como aquí ocurriera, ya podría cobrar alguna vida la enfiteusis contemporánea, como en otros ordenamientos se procurara, comprendido en nuestro siglo el francés⁸⁴; tal vez incluso, de haberse producido alguna depuración, tampoco hubiese fenecido, siendo ya en todo caso llamativo que sin ella resista a la revolución durante más de un siglo. Otros problemas se añaden: quizá la historia no fuera tan irremisible; puede que la nueva sociedad tampoco necesariamente requiriese el modelo concreto de propiedad privada de la tierra representado por el Código francés; u otros que también garantizaran una renta privada podrían igualmente servirle; ya sería ilustrativo el contraste, al que no suele procederse, de otro caso como el inglés, donde tal modelo de propiedad privada no existe al menos todavía durante el XIX, dándose en su lugar otros expedientes de origen feudal y cierto fondo enfitéutico⁸⁵.

83. Y en esto poco añadido, concluyendo donde comenzaba P. GROSSI, *Situazioni reali*, págs. 3-6, manteniendo también la regla de atenernos aquí a la bibliografía más específica, casi sin excepciones.

84. R. FEENSTRA, *L'emphytéose*, págs. 1295-1297, lo que aquí ya se quería en su momento aprovechar: A. CORBELLA, *Historia jurídica*, págs. 260-269, R. SÁNCHEZ OCAÑA, *Estudio crítico*, págs. 88-93; Gabriel BONILLA, *La propiedad dividida*, Granada 1920, págs. 38-48.

85. Con su estilo más historicista, esto todavía se aprecia en los tratados

No se tome la sucesión de acontecimientos por necesidad que explica la historia; otros desarrollos, no tan contrafactuales, ya hubieran cabido; la posibilidad de una renovación autónoma a su tiempo de los derechos españoles no castellanos ya habría generado algún régimen diverso sobre la tierra, como el inglés lo fuera⁸⁶. La historia es la que ha sido, mas el tratamiento comparativo puede salvar a su ciencia de tan manida falacia. El derecho a la renta es más sustantivo que el de propiedad y ambos mejor se distinguen en otros modelos que el francés; de no tomarse éste como exponente de una necesidad histórica, dejarían de considerarse nuestros censos como vestigios de una historia ya condenada, sin mayor significación⁸⁷. Son problemas que decíamos añadidos, aunque tal vez no lo sean tanto; desbordan en todo caso los límites de una intervención que eran los de la voz de una enciclopedia o los del capítulo de un tratado. Guardemos las proporciones; o no pretendamos extraer de nuestro recorrido histórico más de lo que su planteamiento panorámico permite.

más actuales, aun habiendo desaparecido con el *Law of Property Act* o código de la propiedad de 1922 figuras más enfitéuticas como la de *copyhold*: J. G. RIDDALL, *Introduction to Land Law*, Londres 1974; para planteamiento más histórico, los artículos sobre propiedad de G. R. RUBIN y D. SUGARMAN (eds.), *Law, Economy and Society*, Oxford 1984, o las consideraciones al respecto de los editores: págs. 23-42.

86. B. CLAVERO, *Autonomía regional y reforma agraria*, Jerez 1984, páginas 24-42, sobre el episodio nada contrafactual, pero ya tardío, de la II República. Aborda el mismo binomio, pero menospreciando precisamente el factor regional al ignorar la misma entidad de su problema agrario, Alejandro LÓPEZ, *El boicot de la derecha a las reformas de la Segunda República*, Madrid 1984, págs. 305-315.

87. Alguna consideración menos negativa ya arriesgué en *Código y Fuero*, págs. 137-154, encontrando serias reticencias (P. RUIZ TORRES, *Crisis señorial y transformación agraria en la España de principios del siglo XIX*, pág. 102, en *Hispania*, 43, 1983, págs. 89-128; R. ROBLEDO, *La renta de la tierra en la crisis de fines del siglo XIX*, pág. 329, en AA. VV., *La España de la Restauración*, Madrid 1985, págs. 311-329), pero sólo de momento incidentales, no sabiendo tampoco por mi parte añadir todavía algo más sustancioso. Poco podría figurarse Immink que su interrogante altomedieval *Propriété ou seigneurie?* descendería en la historia hasta llegar prácticamente a nuestra época. Unas Jornadas sobre Censos Agrarios que se preparan para el mes de septiembre de este año de 1986, y cuyos papeles está previsto que se publiquen en la revista *Estudis d'Història Agrària*, ya animarán la prosecución del debate.

¿Cuestión, en fin, modesta? ¿Tan sólo cuestión de nombres? Difícilmente parece y, aunque así lo fuera, ya una constante bien expresiva se ha revelado: ha sido signo en nuestra historia la enfiteusis de un empeño mantenido de sometimiento campesino, con la continuidad que en esto cabe entre la sociedad señorial y la que ha venido a sucederle. Pero ¿qué se hace con un significado como éste? ¿De qué le sirven al historiador evidencias tan sabidas, aunque ya a menudo inoperantes? Pueden desde luego corregirnos, aunque, para enmendarnos, algo más haría falta todavía en nuestro mismo terreno de conceptos.

El reconocimiento de los distintos casos en los términos de la documentación ni siquiera está resuelto, y no digamos de la dificultad de modularse la misma correspondencia entre la expresión particular rendida por el documento y la categoría general acuñada por la doctrina, una tendiendo a la diversidad tanto como la otra a la unidad y con numerosos falsos testigos además de por medio. No parece sino que no supiéramos escapar de una cámara de espejos, multiplicándose y confundiéndose apariciones. Pero ya será un consuelo saber que en el mismo juego de imágenes se encierran sus cuestiones sustantivas.

El engaño de testigos y de espejos ya responde a una realidad histórica; durante todo el largo período de la sociedad señorial, lo que fundamentalmente tenemos en la materia son unos derechos de prácticas comarcales, antes incluso que el otro derecho de escala europea que en estos capítulos sólo vendrá a poner un cierto orden; ya menos sustantivo, aunque en casos crecido, un derecho intermedio regional, como el castellano, el catalán o el gallego, terciaba entre ellos⁸⁸. El estudioso ya suele de entrada extraviarse por ser su composición de lugar distinta, como en un corredor de sentido

88. Y adviértase algo que en este como en otros puntos no suele ciertamente subrayarse: el derecho catalán no regulaba las rabassas, como tampoco el castellano los arrendamientos cortos, o un derecho gallego los foros; constituían prácticas sociales que más bien se conformaban comarcal o jurisdiccionalmente. Y aquí no puede haber una guía como la que ahora diremos para el otro polo del derecho europeo; aquí ya de entrada es inexcusable este otro tipo de investigación a ras de tierra que la propia historia del derecho ya rehuye con coartada tan floja como la de la simple negación de la existencia de estos derechos locales durante la edad moderna.

único y luces menos extrañas: el sentido que conduce a su propio mundo y las luces que despide su propia idea del derecho.

El estudioso anacrónicamente busca sus conceptos al nivel que le es familiar de otro carácter regional, como el español, el francés o el alemán; tampoco hay que culparle; ya en esto la historia del derecho, comenzando por sus manuales, ofrece toda su desorientación; su brújula ya también le conduce a leyes en busca de noticias cuya fuente estaba en la doctrina⁸⁹. Tampoco aquí hemos interrogado a todos los testigos ni mirado en todos los espejos; nos acercamos a la superficie del europeo, bastándonos además con las miradas ajenas; ante los otros más de mano, con distintas contemplaciones no nos hemos andado. Tampoco extrañe que disten los problemas de estar identificados⁹⁰.

No se ha mirado a resolver el abanico de problemas preliminares, ni siquiera de concepto, que encara en este capítulo la investigación; aún menos por supuesto a suplantarla, lo que conviene también advertir por ser presunción normal en la historia del derecho. Se ha querido tan sólo ofrecer un recordatorio de que las cuestio-

89 Con la que el panorama ya mejora bastante; española históricamente no la hay, pero sí del otro nivel más apropiadamente regional, con toda su capacidad de mediación; la hay para nuestras materias catalanas, como también, para sus cuestiones, castellana, aunque no, o prácticamente nada, gallega. ¿O tal vez sí? Tal vez, pues tampoco la doctrina se sujetaba entonces a fronteras políticas, y menos a nuestros anacronismos nacionalistas, Galicia no sólo compartiera lengua propia con Portugal, que ya decíamos que contaba con una doctrina muy desenvuelta en el terreno enfitéutico. Son cuestiones, como tantas, por ver, y por aprovechar. La guía que anunciábamos para esta literatura es desde luego la del *Handbuch* dirigido por Coing, con sus catálogos por grupos de países y materias, II-1 (1977), págs. 354-362, para nuestros autores y cuestiones, en capítulo de Ernst Holthöfer.

90. Abundar en confrontaciones, desde por ejemplo para el caso de Cataluña las páginas ensayísticas de Pierre Vilar sobre la *rabassa* del XVIII hasta las no menos a su modo impresionistas de Hansen sobre estos usos agrarios bajo el franquismo, habría recargado las notas sin aportar mayor esclarecimiento; y ello aparte también, conviene decirlo, de que no cuento para los diversos casos con la experiencia de investigación directa que ya se dice imprescindible a los mismos efectos de las precisiones de concepto. El fondo del problema ya de sobra por lo demás se sabe: el desprecio tanto de la historia que el uno representa como de la sociología que ejerce el otro por unas cuestiones técnicamente jurídicas que a la postre resultan socialmente bien relevantes.

nes más enrevesadas de raíz señorial tratables se vuelven de comenzar por atenderse su determinada doctrina. Y no hay excusas: los documentos serán singulares, mas no la literatura; la jurídica fue además bien editada entonces y las bibliotecas no se hallan de ella mal surtidas. Ignorándola, todas las figuras se confunden; extendiéndose el desprecio a los archivos, como tampoco raro resulta en la propia historia del derecho, todas las desfiguraciones se imponen.

La doctrina brinda una guía que normalmente se desprecia para luego extrañarse y, no sabiéndose recuperar, sufrirse la abstinencia; puede no sólo enmarcar el estudio de las relaciones constitutivas de aquella sociedad señorial, sino también, y antes de que otra entre en escena, asistir al abordaje de la revolución que acabó con ella. Puede introducir en el conocimiento no sólo de las instituciones agrarias de aquellos dilatados tiempos, sino también de las transformaciones que destronaron a sus figuras más eminentes, como la enfiteusis, clave en toda esta historia de ruido, furia y apaciguamiento, de señorío de unos, política de los mismos o de otros y cultura que a todos quiere más generosamente encubrir. Cómplice, su papel le toca, no sólo al derecho, sino también a su historia. Y la inocencia nunca enteramente tenida, ¿cabe que se procure?

BARTOLOMÉ CLAVERO

DON PEDRO FRASSO Y LA INMUNIDAD ECLESIASTICA (1684 - 1685)

SUMARIO: a) Introducción. b) La controversia. c) El motivo: los abusos de los curas. d) La postura de la Iglesia. e) El derecho de patronato y su aplicación al caso. f) Las atribuciones de los corregidores y demás justicias. g) Alcance y carácter de las sumarias. h) Conclusión.

a) *Introducción*

1. Es de sobra conocida la controversia que tuvo lugar en el Perú entre su virrey don Melchor de Navarra, y los obispos de Lima, Arequipa y Quito sobre la inmunidad de los eclesiásticos, entre 1684 y 1685. M. GRAHAM le ha dedicado dos estudios¹ —uno de ellos su tesis doctoral— si bien dentro de una cronología más amplia. Algún otro autor, más moderno², dedica a la cuestión unas páginas que parecen de una parcialidad deliberada. Sobra, por tanto, un análisis pormenorizado de este asunto, sobre el que se darán tan sólo algunos datos que permiten introducir al objeto de estas líneas: el papel de don Pedro Frasso como asesor del duque de la Palata.

Los personajes que tienen un papel activo en el conflicto se agrupan en dos bandos, irreductibles en sus posiciones, en base al convencimiento que cada una tiene de ser asistida por toda la razón. Por parte eclesiástica, están don Melchor de Liñán, arzobispo de Lima, don Antonio de León, obispo de Arequipa, y don Francisco de la Peña Montenegro, de Quito. Aunque aparece algún otro per-

1. Margaret M. GRAHAM, *Clerical immunity in the viceroyalty of Peru (1684-1692). A study of civil & ecclesiastical relations*. Columbia University (New York 1967). ID, *The administration of don Melchor de Navarra y Rocafull, duque de la Palata, viceroy of Peru (1681-1689)*, en *The Americas* 27 (Washington DC) 389-412.

2. Rubén VARGAS UGARTE, S. I., *Historia General del Perú. Virreinato (1596-1689)* III (Lima 1971) 344 s.

sonaje, éste actúa por encargo episcopal, y en su apoyo. Por la administración indiana, están el virrey y sus asesores Juan Luis López y Pedro Frasso.

El primero es conocido de sobra. Era alcalde del crimen de la Audiencia de Lima por aquellos años y gobernador de Huencavélica (1683-1689)³. Compuso —como es sabido— unos comentarios al libro I de la Recopilación indiana, junto con Frasso, hoy desconocidos⁴. Y apoyó al virrey con un largo dictamen impreso precisamente en esta controversia⁵.

Pedro Frasso es el personaje central de este estudio. Gran jurista, cuya obra *De regio patronatu Indiarum* se halla todavía a falta de un estudio monográfico⁶. Su carrera en las Indias transcurre entre 1660 y 1691⁷. En 1684 era oidor de Lima, cargo al que había accedido en 1679, después de ser nombrado fiscal de esta misma Audiencia. Saltó a la palestra defendiendo la Ordenanza de 20 de febrero de 1684. En general, se supone que por su excelente preparación en materia de inmunidad eclesiástica. Cabe preguntarse, sin embargo, si había alguna otra razón. Parece muy verosímil que Frasso hubiese tenido un papel directo en la elaboración de la Ordenanza, por lo que su asesoramiento se convierte en un alegato en favor de sus propias tesis.

2. Este despacho —como usualmente se le llama— emanado del propio virrey, es una ordenanza, cuyos epígrafes⁸ dan una idea

3. Lewis HANKE (ed.), *Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la casa de Austria. Perú VI* (Madrid 1980) 9 s.

4. Ismael SÁNCHEZ BELLA, *Los comentarios a las leyes de Indias*, AHDE XXXIV (Madrid 1954) 381-541, en especial 439 y 443.

5. Se conserva en AGI, *Audiencia de Lima*, leg. 296.

6. Como introducción, ver mi estudio *El pensamiento regalista de don Pedro Frasso en su obra «De regio patronatu Indiarum»*, en prensa en las Actas del VIII Congreso del Instituto internacional de Historia del Derecho Indiano, celebrado en Santiago de Chile en septiembre de 1985.

7. Me remito a los datos biográficos que allí publico. Acerca de su muerte, el prof. Tau Anzoátegui probó en dicho Congreso que Frasso había muerto para 1694, y que los cuadernos en que se conservaban sus comentarios al libro I de la Recopilación no se habían enviado en esa fecha a la Corte por temor a su pérdida. Estos comentarios, obviamente, son distintos de los dictámenes acerca de los cuales versa este artículo.

8. I, 5 (ver explicación de estas siglas en notas 10 a 13): «Que los Corregidores no consientan que los Curas ocupen y se apoderen de los bienes de

muy clara del fin que pretende: evitar las conductas reprobables de los curas y doctrineros quienes, por una parte, abusan de los indios; y por otra, se ausentan de las doctrinas y pretenden luego que se les paguen los días de ausencia.

Estos abusos, además de alguna corruptela en la administración sacramental, se centraban en la *exigencia* de limosnas; en solicitar trabajo en favor del cura sin mediar salario; en la cobranza del *peso ensayado* a los indios forasteros; y en la incautación de los bienes de los indios muertos *ab intestato*.

El virrey hubo de actuar contra estas prácticas viciosas en nombre del soberano, usando de su obligación de *naturalis deffensio et tuitio* en favor de sus súbditos. Incluso algún obispo⁹ está completamente de acuerdo en que se repriman tales abusos. Las discrepancias no estaban en el problema material, sino en el procedimiento establecido para su averiguación; pues la Ordenanza comete a los corregidores y demás justicias para que efectúen informaciones sumarias en estos supuestos y las comuniquen a la autoridad. Esta sería la encargada de transmitir la queja a la autoridad eclesiástica para que corrigiese la situación.

los indios que mueren, sino que queden para sus hijos y herederos. Que no permitan que lleven derechos de los casamientos, entierros o bautismos. Que cuiden que se guarden los Aranceles pasados por el Gobierno. Que procuren que se enseñe la doctrina cristiana a los indios. Que esten con cuidado si los curas dan el S/antissi/mo Sacramento a los indios capaces, y si los disponen para ello, y si por via de Viatico se les suministran en sus casas, sin obligar a traerlos a la Iglesia para ello. Que tengan cuidado no sean apremiados los indios a ofrecer en las misas. Que no los nombren alfez en las cofradias. Que no ocupen indios los corregidores ni los curas sin pagarles su trabajo. Que del Sinodo se descuente y pague al indio su ocupacion y las cosas de comer que hubieren llevado. Que no se pague Sinodo al Cura que no tiene presentación real y canonica institucion. Que del Sinodo se rebaje el peso ensayado que el cura cobrare de los indios forasteros.»

9. IV, 87. Así opinaba el obispo de Arequipa: «Los puntos, pues que contiene aquel despacho, parece corren felizmente sin tropiezo, porque sobre no haberse opuesto cosa alguna contra su justicia, llego a confesar el Señor Obispo de Arequipa, que, por convenientes y útiles, eran santos. Estas son sus palabras: 'Yo siempre he dicho que son santos los mandatos de aquel despacho'. y no hubiera fundamento para lo contrario, cuando están acordados y resueltos en diferentes Concilios, Sínodos, Cédulas Reales y Ordenanzas. Y sólo añadió que a lo que se había opuesto era a la ejecución que se cometió a los Corregidores cuando hubiere contravención a los puntos del despacho.»

Naturalmente, que un laico tuviese la facultad y aun la obligación de fiscalizar a un eclesiástico, tenía en principio toda la apariencia de un atentado contra la inmunidad de este estamento. La Iglesia diocesana así lo entendió, lo que dio motivo a una larga disputa con cruces sucesivos de dictámenes, que van a examinarse a continuación.

3. En el Archivo General de Indias, sección *Audiencia de Lima*, leg. 196, se conservan, además de los *Comentarios* de Juan Luis López, a los que se ha aludido antes, cuatro importantes documentos.

El primero¹⁰ es un informe de Frasso, fechado en 3 de septiembre de 1684. Se halla impreso, y está dirigido al virrey. Consta de 144 párrafos numerados. El segundo es otro dictamen del sardo, con fecha 31 de diciembre de ese mismo año. También está impreso, y consta de 133 párrafos¹¹. El tercer documento es la respuesta eclesiástica a los dictámenes de López y Frasso. Está impreso y es de considerable extensión: 323 párrafos no numerados. No lleva fecha, pero de su título se infiere que es de 1685. Para facilitar las citas, se han numerado los párrafos¹². El cuarto y último, es otro

10. Se citará en adelante por el ordinal I, seguido del párrafo correspondiente. Su título completo es: «Consulta y parecer del señor don Pedro Frasso, oydor de esta Real Audiencia de los Reyes, y assessor general del Gobierno al Excmo. Señor Don Melchor de Navarra y Rocafull, del Consejo de Estado de su Magestad, virrey y capitán general del Peru, Tierra firme y Chile, sobre las dudas que han movido en la inteligencia del despacho para remediar el exceso con que los Curas y Doctrineros cobran de los Indios derechos prohibidos por Concilios, Sinodales y Cédulas Reales.»

11. Se citará en adelante por el ordinal II, seguido del párrafo correspondiente. Su título completo es: «Consulta y parecer del señor don Pedro Frasso, oydor de esta Real Audiencia de los Reyes, y assessor general del Gobierno al Excmo. Señor don Melchor de Navarra y Rocafull, duque de la Palata, del Consejo de Estado de Su Magestad, virrey y capitán General del Perú, Tierra Firme y Chile; en satisfacion de las dudas que se han propuesto sobre la explicacion y defensa del despacho de 20 de febrero.»

12. Se citará por el ordinal III, seguido del párrafo correspondiente. Su título es el siguiente: «Verdad eclesiastica, satisfacion demandada y repulsa juridica a los Manifiestos publicados en 3 de septiembre, 13 de Noviembre y 31 de diciembre del passado año 1684, por los señores don Pedro Frasso, oydor de esta Real Audiencia de la Ciudad de los Reyes, y D. Juan Luis López, alcalde de corte de la Real Sala del Crimen y governador de la villa de Guancavelica, sobre la facultad que se da a todos los corregidores y justicias de este Reyno para hazer sumarias contra los eclesiasticos, por el despacho de 20 de

dictamen de Frasso, manuscrito y de 94 párrafos numerados. Su fecha es el 26 de abril de 1684 ¹³.

No se conservan en esta sección más papeles que hagan referencia a este asunto, al menos, que yo sepa. BRUNO, en su clásica obra, los había citado de manera genérica ¹⁴; tanto es así que daba la impresión de que se trataba de algo mucho más importante: los *Comentarios* de López y Frasso a la Recopilación de Leyes de Indias.

Sí debió existir algún otro documento de origen eclesiástico que no se conserva. El propio Frasso, en su último dictamen ¹⁵ cita un *Apologético Manifiesto* de autor desconocido, que constaba de 39 párrafos. Y, naturalmente, alude a las representaciones de los obispos de Lima y Arequipa ¹⁶, a las que se respondió con el primer dictamen. Se cita un *papel* del primero fechado en 3 de agosto de ese mismo año, y otro del segundo, de 16 de octubre. Estos documentos eclesiásticos se hayan hoy perdidos.

b) *La controversia*

4. El arzobispo de Lima, una vez medido el alcance del despacho, reclamó ante el virrey con fecha 3 de agosto de 1684. El duque se limitó a pasar la representación a Frasso, quien contestó el 24 de ese mismo mes. Sabemos que se demoró en su respuesta por encontrarse enfermo en cama. Estando en prensa su primer dictamen —que se imprimiría por orden del virrey ¹⁷—, el obispo de Quito se unió a la queja del arzobispo limeño, lo cual obligó al sardo a ampliar su respuesta ¹⁸.

febrero del mismo año, y otros puntos concernientes al estado eclesiástico.» Comprende un total de 65 folios en numeraciones recto/verso. Los 15 primeros corresponden a la contestación a López. A partir del 16 r. se contesta a Frasso, a quien se le da el respetuoso título de «el señor don Pedro» La numeración corresponde a esta parte del dictamen.

13. Se citará por el ordinal IV, seguido del párrafo correspondiente. No lleva título.

14. Cayetano BRUNO, *El Derecho público de la Iglesia en Indias* (Salamanca 1967) 217, nota 39.

15. En IV, 3 da a entender que su autor es un eclesiástico que lo ha compuesto por encargo ¿del obispo de Lima? No lo sabemos.

16. I, 6 y II, 1.

17. I, 1.

18. I, de los números 113 al final, se contesta al obispo de Quito

Los ánimos, sin embargo, estaban lejos de serenarse. Misteriosamente, apareció en Lima un libro titulado *Lima Limata*¹⁹, impreso en Roma en 1673, y cuyo autor era un franciscano: Fr. Francisco Haroldo de la Recolección de San Francisco. Su aparición causó no pocos revuelos, pues publicaba las actas de tres concilios y diez sínodos celebrados en tiempo de santo Toribio de Mogrovejo.

Frasso formuló muy serios reparos al contenido de esta obra. En primer lugar, mantenía que en Lima no se habían celebrado más de tres concilios: el Limense I, en 1552, que no tuvo ejecución; el Limense II y el III, de 1567 y 1583, respectivamente. El único sínodo de que se tenía memoria era el celebrado en 1613, en tiempos del obispo Lobo Guerrero²⁰. Por lo demás, el libro era muy confuso, y debía —a su juicio— ser retirado de la circulación, en base a tres razones. La primera, por carecer de licencia real para imprimirse y circular. La segunda, porque esos concilios y sínodos no fueron visados por el Consejo de Indias, con lo que se violó esa regalía. Por último, porque en las actas de los concilios II y III, según la numeración del libro, se contenían muchas cosas contrarias a las normas reales²¹.

Este libro, y la representación enviada por el obispo de Arequipa —en parecidos términos que el de Lima— obligaron a Frasso a la elaboración del segundo dictamen²², publicado en 31 de diciembre de 1684. Si hemos de hacer caso a la reseña biográfica que sobre Frasso se contiene en la obra de MENDIBURU²³, estos dos documentos tuvieron mucho eco en la Ciudad de los Reyes.

Quizá la reacción favorable de una parte de la población civil limeña, amén del nulo convencimiento que en el ánimo del alto clero produjeron los papeles de Frasso, llevó a la publicación de largo manifiesto titulado *Verdad Eclesiástica*, ya mencionado, y obra probable del arzobispo de Lima²⁴. Después debieron apare-

19. II, 3.

20. II, 4.

21. II, 5-6.

22. II, 1.

23. Manuel de MENDIBURU, *Diccionario histórico-biográfico del Perú* V (Lima 1933) 306.

24. III, 1. A Frasso se le llama «oydor desta Real Audiencia . ». Eso induce a pensar en la autoría del arzobispo limeño, pero sin poder afirmarlo con rotundidad. Ver nota 12.

cer otros papeles eclesiásticos que no se conservan, como se ha dicho.

Pero don Pedro volvió a la carga en 26 de abril de 1685, para contestar al *Apologético Manifiesto* de autor anónimo. Se pudo saber que había circulado en la ciudad con mucha reserva, y que su autor era un franciscano que escribía por mandato del arzobispo²⁵. Como ya se dijo, este último dictamen no se publicó.

Entretanto, en la ciudad se habían sucedido acontecimientos importantes. El 21 de marzo de 1685, el arzobispo pronunció en la catedral un sermón, según el sardo muy injurioso para el virrey; a quien pidió que le reprendiese en el acto²⁶. Al día siguiente, el duque siguió su consejo, y envió el escrito reprensorio, que desconocemos casi en su totalidad. No transcribe el sardo más que un párrafo de muy refrescante ironía²⁷. Incluso, Frasso llegó a suponer

25. AGI, *Audiencia de Lima*, leg. 296. Oficio a S.M. del duque de la Palata. Está mutilado en su parte inferior, pero se transcribe por su evidente interés: «Señor. Despues de haver dado cuenta a V/uestra/ M/agestad/ de la controversia que se tiene con los Prelados sobre la Provisión despachada por este Gobierno para que los Curas no excedan en la cobranza de las obenziones y otros derechos que les estan prohibidos, y remitido todos los papeles de la materia, llego a manos de don Pedro Frasso, oydor de esta Real Audiencia, un papel escrito por un Religioso de San Francisco a instancia del Arzobispo, pero con tanta reserva y secreto, que a costado diligencia el tenerle, y quando se deseava que se escribiese el punto publicamente, porque disputadas las Doctrinas y respondidas pudiesen conozer todos los fundamentos, y el derecho con que el Gobierno a puesto la mano en esta materia, se sabe que se han escrito diferentes papeles, y aqui se han tenido ocultos, con que se juzga que sera para representarl (blanco) Consexo sin la respuesta (blanco) dar: Por cuyo motibo (blanco) Don Pedro Frasso (blanco) que remito a V/uestra/ M/agestad/ para que se junte con los demas de la materia. Guarde Dios la C/atolica/ R/eal/ P/ersona/ de V/uestra/ M/agestad como la Christiandad a menester. Lima y Junio a 9 de 1685. El duque de la Palata.»

Al margen, se lee: «Num. 25. El virrey del Perú. Acompaña el papel que a formado el Liz/encia/do don Pedro Frasso, oydor de esta Real Audiencia con toticia que tuvo del que se havia escrito contra la Provision de 20 de febrero, en que satisfaze a los puntos que se contiene, defendiendo la Jurisdizion Real, para que quando se tome expediente en este juyzio, se tenga presente con los demas de la materia.»

26. IV, 64.

27. IV, 66. Así dice el virrey: «Se ha podido despachar tanto V.E. que se arreglase desde el púlpito a padecer tan gran descalabro en la opinion de

signos de locura en el arzobispo²⁸, ya que éste dejó caer en su sermón alguna frase que al celoso asesor virreinal se le antojó vaticinio, y por tanto, prohibido por bula de León X. La exageración notoria del sardo no hace sino probar hasta qué punto andaban soliviantados los ánimos.

También en 1685, el obispo de Arequipa hizo publicar en toda la diócesis la bula *In Coena Domini*, sin que mediase el *regium exequatur*; lo cual desde luego, no hizo sino avivar la discordia²⁹.

El asunto no tuvo final, ya que el expediente se envió al Consejo de Indias³⁰ y éste no resolvió. Pero mientras tanto, se aplicaba la Ordenanza. Esta cautela administrativa es interpretada por VARGAS UGARTE³¹ como falta de apoyo en la Corte a la política del virrey; tras cuyo mandato, las aguas volvieron a su cauce.

c) *El motivo: los abusos de los curas*

5. El decreto virreinal no había nacido al socaire de un capricho. Efectivamente, se daban abusos por parte de los curas, que la norma en cuestión trataba de remediar. En primer lugar, los referentes a la condición del sacerdote encargado de una doctrina. La accesión a ésta no era libre, sino que conllevaba el cumplimiento de ciertas condiciones; y las más importantes eran el no ausentarse de ella y el no aprovecharse del trabajo de los indios sin pagarles. Por tanto, que el corregidor estuviese en la obligación de descontar las ausencias del salario del cura no presentaba agravio alguno: en realidad, ese no devengó el dinero detraído³².

Además, en el ejercicio del curato, se daban ciertas prácticas vituperables. Por ejemplo, la llamada del manípulo³³, que consistía en exigir al indio una ofrenda, mientras el cura, a la salida de la

todos, aun de los mas afectos a V.E. que, encogidos de hombros, salieron diciendo: 'Dios ha dejado de la mano a este señor'.»

28. IV, 67. La frase arzobispal que, para Frasso, era vaticinio era ésta; elegiaca si se quiere, pero no pecaminosa: «Ah. Lima, Lima! lo que me debes y lo que yo he hecho por tí, y cómo desde luego lloro los malos sucesos que te esperan por mar y tierra.»

29. VARGAS UGARTE, III, 376.

30. Ver nota 25.

31. VARGAS UGARTE, III, 377.

32. II, 2.

33. IV, 43.

misa, le daba a besar el manípulo. Esta petición era acompañada, en caso de negativa, por la reclusión del indio dentro del templo³⁴.

6. Naturalmente, estos abusos debían ser corregidos por la autoridad eclesiástica. Pero eso suponía que, previamente, el obispo estuviese enterado. Y a ello iba encaminada la sumaria del juez laico³⁵. Podría darse también el supuesto de que el obispo, aun sabiendo la realidad del abuso, no acudiese a remediarlo, ya por no querer, ya por obtener algún provecho de la contravención³⁶. El corregidor, o quien hiciese la sumaria, debía excitarle con ella a deponer su actitud. Aunque estos supuestos son planteados en un plano meramente teórico, da la impresión de que se trata de una cortesía de Frasso, para disfrazar, con un supuesto irrealizable —el provecho del obispo— otro que sí debía darse en la práctica: su actitud pasiva mediando conocimiento del hecho.

d) *La postura de la Iglesia*

7. En un nivel más general que el que supone esta norma concreta, hay que tener en cuenta que la Iglesia goza de la necesaria libertad para cumplir sus fines. Y uno de los pilares de esa libertad es la inmunidad de los eclesiásticos, que se concreta en el privilegio de no ser juzgados por jueces laicos. En efecto, así lo dispone la bula *In Coena Domini* en su canon 15, estableciendo la prohibición de promulgar normas civiles que atenten contra la libertad eclesiástica.

No es éste el lugar de estudiar este controvertido documento pontificio, del que Frasso se ocupó en su obra³⁷. Dejando, pues, de lado la cuestión de si la bula tiene o no vigencia en las Indias, los obispos se cuidarán de aducirla en apoyo de su inmunidad; de la misma manera que don Pedro se afanará en probar, al margen de la cuestión de la vigencia, que no hay atentado alguno contra la bula en el mandato virreinal de que se está haciendo cuestión.

La bula excomulga a los jueces laicos que *quomodolibet* actúen

34. I, 129.

35. IV, 42 y 43.

36. IV, 45.

37. Así, al tratar de los recursos de fuerza. Ver mi trabajo citado, n.º 6

contra los eclesiásticos³⁸. Claro está que la objeción se salvaría probando que el corregidor o demás justicias, cuando instruyen una información sumaria contra un eclesiástico, actúan *extrajudicialmente*: no para juzgar, sino para informar³⁹. Pero llegar a esta conclusión no es nada fácil, y Frasso se enzarzará en una guerra de alegaciones contra los obispos. Estos sostendrán, como ha de verse, que el juez, aunque informe y no juzgue, actúa *judicialmente*, quedando incurso en las censuras canónicas; como queda también reprobada por ellas la norma que sirve de fundamento a las sumarias.

8. Los obispos, en su oposición a la ordenanza, comienzan haciendo gala de un acatamiento general, tanto por emanar de la autoridad delegada del rey, como por ser sus preceptos oportunos *per se*⁴⁰. Sin embargo, y hecha esta protesta de contenido más bien formulario, pasan a formular un reproche —también de alcance general—: si la norma es buena por el fin que pretende, es inadmisiblesu forma.

Esta discrepancia se pormenoriza luego en puntos concretos. El primero de ellos se refiere a las misas. La ordenanza disponía para el caso del indio muerto sin disponer de sus bienes (y por tanto, sin ordenar sufragios) que sólo se le pudiesen decir de 4 a 6 misas y si era curaca o indio rico, hasta 40 y no más. El obispo de Quito sostiene que esta disposición atenta contra lo dispuesto en el II Concilio de Lima, quien deja al prudente juicio del ordinario la determinación de las misas. Frasso rebate fácilmente el argumento, demostrando que lo dispuesto por las sinodales limenses y el propio concilio invocado no se refieren al indio muerto *ab intestato*, sino al clérigo o laico españoles⁴¹; con lo que, lejos de atentar contra la inmunidad eclesiástica, se va en obsequio de la ley canónica.

Sostiene el obispo de Quito que sacar a un indio de la iglesia contra su voluntad es una violación del derecho de asilo. El sardo se muestra en todo conforme con este aserto, pero, delicadamente, hacer ver la audacia del obispo, ya que el juez laico no merece sino

38. III, 86.

39. I, 9.

40. I, 6 s. Ver también la nota 9, en la que se transcriben las palabras del obispo de Arequipa sobre la *santidad* de los preceptos de la norma virreinal.

41. I, 114.

elogios por liberar a un indio retenido por el cura en la iglesia contra la voluntad de aquél por no haber ofrecido manipulo⁴².

El obispo mantiene que el despojo que comete un eclesiástico debe ser deshecho por otro eclesiástico, y no por un juez civil⁴³. Don Pedro cita más de noventa autores que avalan la práctica común de las Indias, rebatiendo el reproche que le hicieran los obispos, en el sentido de apoyarse en la *communis opinio*, pero sin concretar autores y citas de sus obras. En efecto, el obispo de Lima le había reprochado el emplear «teólogos estipendiarios y de alquiler»⁴⁴, es decir: siendo sumamente parcial en la utilización de las citas. El mismo arzobispo critica la ligereza de Frasso al aducir obras impresas en Roma y dedicadas al Papa, como si por esto sólo se pudiesen considerar dignas de sentar autoridad⁴⁵.

e) *El derecho de patronato y su aplicación al caso*

9. Es el apoyo más firme de la norma virreinal. Y Frasso, como persona muy versada en esta cuestión, no deja de invocarlo. Tras sentar que el patronato universal de las Indias le viene al rey por concesión pontificia⁴⁶, afirma que el rey es comisario y delegado del Papa según los vicarialistas más conocidos (Miranda, Focher, Veracruz, etc.)⁴⁷.

42. I, 129 s. Frasso, tras dudar de que tal argumento haya podido emanar del obispo, dice: «De este sentir, se saca legítimamente, o que los indios encerrados en la iglesia de orden del cura por no aver ofrecido manipulo, son verdaderos deudores de lo que se les quiere quitar con prision y violencia, o que cometieron delito en no ofrecer, y se constituyen reos por ello, pues se asienta que deven gozar de la inmunidad de la Iglesia concedida a los delincuentes, que ellos ni la piden ni la han menester, antes quieren salir de la inmunidad que no les sirve de refugio, sino de calabozo y carcel.»

43. I, 138.

44. II, 41.

45. III, 113 s. El obispo entiende «que los eclesiasticos, aunque se reputan por Angeles para el respeto, no lo son en la sabiduría, y assi no estan libres de ignorar algo de lo mucho que hay que saber.

»El dedicar obras a los grandes Patronos tampoco es circunstancia, porque esta calidad añade renglones a la dedicatoria, no razones a la opinion, y el lugar donde se imprime no adelanta la certidumbre de lo que se dice».

46. I, 87.

47. I, 88. En *De Regio Patronatu* I (Madrid 1775) 164, Frasso acepta la proposición de Solorzano: «D. Solorzan docet, hanc iurisdictionem, a Rege nostro,

Por tanto, toda norma real que tienda a la conversión o conservación de la Fe de los indios, ha de tenerse como emanada del propio Papa, puesto que en su nombre, y por su delegación, se concede ⁴⁸.

10. Por otra parte, si bien el estado eclesiástico es más excelso que el secular, no por ello sus miembros dejan de estar subordinados a sus gobernantes, que actúan en nombre del rey, de quien son vasallos ⁴⁹. Así pues, es lógico que el virrey haga uso de su autoridad en supuestos de abuso, sobre todo si son tan viejos que se tienen por incurables ⁵⁰, sin que baste la visita del obispo para remediarlos.

Cuando concurren estos abusos, condenados repetidamente por la Iglesia, pero no remediados por ella ⁵¹, puede el rey «dar providencia, por edicto o provisión general, para que totalmente cesen, y se arranquen del uso y práctica común estos delitos y fraudes». Los clérigos, en cuanto vasallos, cuando ocupan cargos de gobierno, pese al sacerdocio son sometidos a juicio de residencia ⁵².

11. No cabe, por tanto, discutir la licitud jurídica de la ordenanza. Pero sí cabe hacer un juicio político sobre la conveniencia. Para Frasso, éste es completamente favorable a la norma: es útil para el gobierno temporal, pero lo es más para la Iglesia y los obispos en particular, pues son ayudados por los corregidores en su misión pastoral ⁵³.

quasi Delegato Apostolico exercendam esse». Pero en este dictamen, no destinado al público en general, ha retirado este adverbio dulcificador, para situarse en la más rancia postura vicarial.

48. I, 91.

49. *De Regio Patronatu* I, 288 s.: «Procedunt maxime in superioribus allata, ex eo quod Ecclesiastici omnes quatenus sunt cives Reipublicae sicut alii laici principi suo supremo obedire tenentur».

50. I, 102. Comenta Frasso que la provincia de los Yungas Chapes de Cicaica, situada a doce leguas de La Paz, sólo recibió una única visita episcopal. «Es cierto que los caminos son muy malos, pero yo entré y salí por ellos, y los Corregidores no les excusan.»

51. II, 72.

52. II, 101.

53. II, 120

f) *Las atribuciones de los corregidores y demás justicias*

12. Según la ordenanza, los corregidores y demás justicias pueden hacer *información sumaria* en supuestos de abuso de los curas hacia los indios. Los obispos entienden que esto está prohibido, tanto por la bula de la Cena, como por el Decho Canónico⁵⁴. Pero Frasso entiende que los corregidores *no procesan*, sino que únicamente se informan secretamente para dar cuenta a sus superiores. Y, al no tratarse de un proceso, no se emplaza al cura ni se le concede audiencia⁵⁵. Como se verá, el carácter procesal o no de estas informaciones sumarias, es en realidad el fundamento jurídico de las pretensiones de una y otra parte.

Ad probandum, aduce Frasso que los corregidores pueden retener los salarios no devengados por los curas en caso de ausencia del curato. Si, como pretenden los obispos, esta práctica está prohibida por el Concilio de Trento, no tiene tal prohibición virtualidad en las Indias, ya que dicho Concilio no quiso perjudicar al patronato y demás regalías que el rey tiene en estos territorios⁵⁶.

Entienden los obispos que esta facultad, al margen de si está prohibida o no, se trata de un acto judicial condenatorio, y, si el sardo lo aduce en abundamiento del carácter no judicial de las facultades del corregidor, su argumento queda totalmente dañado⁵⁷.

Es sabido que, por disposición real, los virreyes, presidentes y audiencias, pueden realizar informaciones sumarias en casos públicos y escandalosos, como se verá más adelante. Si por ello no incurrirán en las censuras de la bula de la Cena, ¿incurrirán los corregidores por hacer las sumarias? Don Pedro piensa que no, ya que esta actuación no pertenece a la bula en cuestión, sino a las regalías de S.M.⁵⁸.

54. I, 7.

55. I, 9 s.

56. II, 12 y III, 300

57. III, 301. Dice el obispo de Lima: «Nadie puede ignorar que el averiguar con particular cuydado la deuda del Doctrinero, pagar al acreedor, y compensar lo que se paga con el Synodo, que se debe, todo esta pidiendo y brotando un acto contencioso judicial condenatorio y absolutorio del Cura, y mucho menos han menester los Corregidores, si no tienen buena intencion, para que- darse con todo.»

58. II, 91.

13. Porque, además, si bien el corregidor es juez, no es judicial todo lo que hace; pues algunos actos serán judiciales y otros extrajudiciales⁵⁹. Naturalmente, todo el problema estriba en saber si las informaciones sumarias se encuadran dentro de los actos judiciales, o en los extrajudiciales.

Para los obispos, el poder que la norma otorga a los corregidores es «una facultad general de recibir sumarias contra eclesiásticos, sin distinción de causas, personas, tiempos ni lugares»⁶⁰. Es general, porque la ordenanza se refiere a los corregidores y demás justicias, *ergo* también incluso a los alcaldes de indios.

El obispo de Lima, que maneja muy bien tanto el silogismo como el sorites, razona de esta manera: si se dijere que los alcaldes de indios no son justicias de españoles, tampoco los corregidores son justicias de clérigos; luego, o todos pueden hacer las sumarias, o no las pueden hacer los corregidores⁶¹.

Para la Iglesia, no puede caber duda de que el corregidor actúa como juez en todo momento: ya sea de oficio, porque tiene esa potestad, ya a petición de parte. Pero éstas, cuando postulan su intervención, sólo pueden hacerlo porque el órgano requerido ha recibido ya potestad jurisdiccional⁶². Por tanto, si el corregidor —que es juez— actúa de oficio, realiza un acto judicial que perjudica la inmunidad eclesiástica, y queda sujeto a las censuras de la bula de la Cena⁶³.

Por bien trabado que parezca este argumento, el meollo del asunto sigue siendo insalvable. Para los obispos, todo acto emanado del corregidor es judicial, por ser éste juez. Para Frasso, no empece que el corregidor lo sea para que, cuando se informe, no actúe judicialmente: pues no es con vistas a *dictar sentencia*, sino a informar al superior.

14. En realidad, hay que clarificar en qué sentido se habla de un acto judicial. Si es simplemente el que proviene de un juez, cualquiera que sea el fin al que tienda, tendrían razón los obispos. Si, por el contrario, únicamente son actos judiciales los que van

59. II, 51.

60. III, 7.

61. III, 4.

62. III, 24.

63. III, 25.

encaminados directamente a dictar sentencia, tendría razón el sardo.

Esta distinción se encuentra recogida en la argumentación del arzobispo de Lima ⁶⁴, aunque no con absoluta imparcialidad. El acto puede ser judicial —dice— de dos maneras *a iudice*, por su origen y *a iuditio*, por su finalidad. Pero, en vez de seguir con la argumentación de que todo acto emanado de un juez es judicial, y justificarlo, el prelado cambia de objetivos: la actuación del corregidor resulta viciosa, porque la inmunidad de los eclesiásticos no está en que no sean éstos juzgados, sino en que el juez no sea laico ⁶⁵.

Y sin embargo, no tiene empacho en reconocer que el recurso en vía de fuerza es extrajudicial, pero la actuación de los corregidores no, porque son justicias aunque no juzguen. No obstante, son los tribunales reales quienes intervienen en el recurso formulado en vía de fuerza ⁶⁶. La parcialidad episcopal aparece aquí bastante manifiesta.

También se aducen otros argumentos de índole política. Así, la sentencia ambrosiana en el sentido de que los desemejantes no deben averiguar ni conocer causas de los desemejantes ni más excelentes por su estado ⁶⁷. Y que, finalmente, los jueces laicos no deben entrometerse en estas cuestiones, para que no queden de manifiesto a los legos los excesos de los eclesiásticos, y sobre todo a base de sumarias, en las que no hay citación ni cabe defensa ⁶⁸. Son argumentos que se colocan al final, pero quizá encierran más importancia de la que en apariencia les concede el alegato episcopal.

15. Tanto Frasso como los obispos, de una manera tangencial evocan a otra persona que sí tiene poder de hacer informaciones sumarias, con el objeto de arrojar luz sobre la licitud de las actuaciones del corregidor: se trata del encomendero. Aceptando la opinión del P. Avendaño —a quien todos tienen por doctísimo— el encomendero, en orden al bien espiritual de los indios de su enco-

64. III, 26.

65. III, 51.

66. Frasso trató largamente de los recursos de fuerza en su obra sobre el patronato indiano. Me remito al análisis que hago de esta cuestión en mi trabajo citado, n.º 6.

67. III, 51.

68. III, 53.

mienda, puede hacer información extrajudicial para dar cuenta al prelado ⁶⁹.

Según el sardo, los corregidores son en muchos casos encomenderos, y no se les puede impedir que —siendo corregidores— cumplan a la vez sus funciones de encomenderos. Es así que como encomendero puede hacer información sumaria —pues no es judicial—; *ergo* también podrá hacerla en cuanto corregidor por la misma razón.

El arzobispo aduce que el silogismo de Frasso está mal planteado ⁷⁰. Debería decir así: el encomendero puede hacer sumarias porque no las hace *ex auctoritate iudicis*; los corregidores las hacen *ex officio*, luego el P. Avendaño no apoyaría la norma virreinal, pues entiende que es judicial lo que se hace por autoridad del juez ⁷¹.

En definitiva, la comparación con el encomendero no servía para nada. Cada parte sigue aferrada a su idea.

g) Alcance y carácter de las sumarias

16. En realidad, este es el punto fundamental de la discusión. ¿Qué son las informaciones sumarias?, ¿qué fin pretenden? No puede responderse a estas dos preguntas directamente, sino que hay que partir de más atrás: del poder que el rey tiene para permitir las.

Para Frasso, son una facultad derivada del real patronato, que el rey puede ejercitar discrecionalmente. Y, en cuanto uso de sus facultades, no puede ser atacado por la bula *In Coena Domini* ⁷². Si el rey las autoriza, es porque no van contra la inmunidad eclesiástica. En efecto, esta cuestión está reservada al Papa, y el rey no tiene interés alguno en invadir la jurisdicción eclesiástica ⁷³. Otra cosa distinta es que en realidad se trate de un remedio enérgico

69. I, 21 s.

70. III, 165-170. El arzobispo propone un silogismo erróneo basado —según él— en los mismos parámetros que el de Frasso: un sacerdote puede celebrar misa y administrar los sacramentos; un ministro del rey puede ser a la vez sacerdote, luego *cualquier* ministro del rey puede celebrar y administrar los sacramentos. Para el arzobispo, es falso el *cualquier*.

71. III, 171.

72. I, 38.

73. I, 57.

contra los abusos de los curas; pero no es culpa del rey la ley dura que repara excesos, sino de los eclesiásticos que los causan ⁷⁴.

La Iglesia, por su parte, no discute el poder real, siempre y cuando se ejercite dentro de su esfera. Pero si el rey *permite* ⁷⁵ las sumarias, no las impone, porque entiende que no son seculares, sino eclesiásticas. No es necesario poner de relieve lo exagerado de esta conclusión episcopal.

Veamos ahora las normas reales en las que se explaya tal potestad. La más citada por ambas partes es una R.C. de 5 de julio de 1564 ⁷⁶, la cual, con carácter general, prohíbe las sumarias, excepto en casos públicos, escandalosos y perturbadores de la paz pública. Se permiten entonces, pero han de hacerse secretamente. Otra norma invocada es la R.C. de 3 de julio de 1627 ⁷⁷, la cual declara que es *escándalo notable* que los curas doctrineros, cuando se desplazan, hagan ir a los indios cargados con su equipaje sin pagarles. Este abuso se pena con la pérdida de la doctrina. Por último, la Ordenanza del duque de la Palata de 20 de febrero de 1684 autoriza las sumarias en casos conocidos, pero no ordena ni permite que los jueces seculares procesen a los eclesiásticos.

17. Los obispos son muy rigurosos a la hora de admitir las sumarias. El de Lima no deja de advertir del peligro político que conlleva el uso de tal expediente: autorizar la murmuración de los indios contra los clérigos, además apadrinada por la Audiencia. Recuerdan el caso de la murmuración de los levitas Datán y Abiron contra Moisés, así como Part. I, 6,62, que prohíbe difamar a los clérigos ⁷⁸.

Para que la sumaria sea jurídica y éticamente admisible, tiene que darse, ante todo, un caso irregular. En los casos normales (de los curas contra los curas) nunca se ha discutido acerca de su licitud. La cuestión es saber qué se entiende por caso irregular. La Iglesia concluye que puede ser la falta de juez eclesiástico, o que por otras razones graves, se haga ante un laico. En todo caso, debe

74. I, 69.

75. III, 210 s

76. I, 30.

77. I, 53.

78. III, 43.

siempre tratarse de un caso irregular *particular* y no de carácter general⁷⁹.

Además, este caso ha de ser público y escandaloso. Es decir, conocido por todos y que produzca escándalo en su acepción moral: la conducta que induce a otros a caer en pecado. Para Frasso, en el caso concreto contemplado por la Ordenanza, se dan los dos requisitos: cualquier exceso de los curas es con noticia de los indios, y estos abusos, por contravenir las disposiciones reales, convierten en *público* el delito⁸⁰. Nadie dudará de que es escandaloso *per se* apoderarse de los bienes del indio muerto *ab intestato* en perjuicio de los hijos, o encerrarles en la iglesia por no ofrecer el manipulo⁸¹.

Ahora bien, la cuestión estriba en determinar exactamente el alcance de la publicidad, el escándalo y la perturbación de la paz pública. El arzobispo de Lima exige simultáneamente los tres requisitos, y en grado superlativo, pues de la existencia de uno no se derivan necesariamente los otros dos⁸². Frasso, más realista, entiende que estos requisitos deben darse únicamente en el pueblo en que tenga lugar el abuso⁸³.

Ambas partes están de acuerdo en lo siguiente: es ilegítimo que cualquier juez, por cualquier motivo, se permita hacer informaciones sumarias contra eclesiásticos⁸⁴. Pero el arzobispo va más allá, al entender que el único fundamento de las mismas es la perturbación general de la paz pública, que por sí misma tiene que ser excepcional, y no puede dar fundamento a la generalidad de las sumarias⁸⁵. Cabría objetar entonces, que si la paz de todo el reino está perturbada, no hacen falta sumarias, que son secretas, pues todo el mundo conoce los hechos.

18. ¿Tienen las sumarias carácter procesal? También aquí las

79. III, 10 s.

80. I, 51.

81. I, 55.

82. III, 238 s. El obispo entiende que el escándalo debe ser el mayor que pueda darse, que sea conocido en todo el reino y que perturbe la paz de todo él.

83. IV, 20 s.

84. III, 12 y 14.

85. III, 64.

opiniones son contrapuestas. Para don Pedro —apoyándose en el cardenal De Lucca— es posible que un laico procese a un eclesiástico —al menos en teoría, si cuenta con la debida autorización papal—⁸⁶. Pero con las sumarias no se trata de procesar, sino de obtener una información extrajudicial, por lo que, siguiendo al cardenal, sería suficiente una delegación del obispo⁸⁷. Luego no puede darse un *proceso extrajudicial* porque son términos contradictorios y conducen al absurdo, y porque ningún proceso puede empezar sin emplazamiento o citación del procesado⁸⁸.

Así pues, no es lo mismo hacer inquisición que información sumaria extrajudicial. La inquisición se desarrolla ante juez competente, es decir, que goza de jurisdicción sobre aquél de quien se inquiera, tiende a descubrir el delito y a castigar a su autor. Por el contrario, la sumaria no tiene en absoluto esta finalidad, sino únicamente la averiguación de los hechos para informar al superior eclesiástico, que será quien deba corregir los abusos⁸⁹.

El arzobispo de Lima, naturalmente, piensa de muy distinta manera. Un acto puede ser judicial de dos maneras: o porque tiene origen en un acto contencioso, o porque proviene *a potestate iudicis*. De lo cual se deduce fácilmente que la sumaria es siempre judicial, porque proviene de un juez, y porque su finalidad es preparar el juicio⁹⁰.

Si se argumenta la parcialidad de este punto de vista, pues el

86. IV, 12. Citando al Cardenal de Lucca, y partiendo de que el permiso para que un laico procese a un eclesiástico debe venir del Papa, entiende Frasso que un obispo puede cometer a un juez laico la ejecución del nudo hecho de sus mandatos (por ejemplo, dar tormento a un eclesiástico), de lo que se deduce que podrá autorizar la información sumaria extrajudicial de un laico contra un eclesiástico. Lo que Frasso no consigue es enlazar estas deducciones con la ordenanza del virrey, ya que en ella para nada se habla de delegación episcopal, sino de sumarias ordenadas por el virrey en base a las facultades reales. A lo más, habría que remontarse a la posición vicarial de éste para hablar de delegación.

87. IV, 13. Dice Delbene: «capere informationem sumariam in casu delicti non est processare».

88. IV, 19. Según declaró la Congregación de Cardenales, «processus est prima citatio».

89. IV, 78.

90. III, 22 s

juicio puede seguirse o no de la información sumaria, el obispo refuta que basta con que la sumaria sea acto judicial *a iudice* aunque no lo sea *a iudicio*. Por tanto, no se da ninguna extrajudicialidad en la sumaria, porque, en todo caso, siempre proviene de un órgano jurisdiccional⁹¹, que es el corregidor, y que no puede llevar a cabo actos no jurisdiccionales.

Realmente, es imposible avanzar mucho más, cuando cada parte mantiene tesis antagónicas. La jurisdicción secular, y Frasso con ella, contemplan únicamente el proceso contencioso. Los obispos entienden que la judicialidad se predica de todo acto emanado de un juez en el ejercicio de su cargo, es decir, según el origen del acto en cuestión, sin mirar su contenido ni finalidad. Con las espadas en alto, cada parte prueba lo que le interesa. Pero no repara el obispo en que aquí estamos en sede de real patronato. Si los curas se ausentan, si cometen faltas contra los indios (encierros, apropiaciones indebidas, etc.), y la jurisdicción real actúa, es por dos razones: a) jurídica, ya que el rey entiende que tiene derecho a hacerlo, en base al patronato y a la *naturalis deffensio et tuitio* que se concreta en el impedir cualquier abuso de un súbdito entre otro. Y b) política, porque los obispos no quieren o no saben corregir los abusos. Y, si se paga al cura del real erario, también es justo y lógico en buena política que, quien paga, controle si las obligaciones, por él impuestas, se cumplen.

h) *Conclusión*

19. De todo este cúmulo de argumentos, de citas y de papeles, cada parte llega a la idea que mantenía antes de entrar en polémicas. Para Frasso, las sumarias no atentan contra la inmunidad eclesiástica, sino que no le pertenecen⁹². Por el contrario, para los obispos son inadmisibles. El de Lima, a mayor abundamiento, aplica el argumento teológico de la opinión probable pero no admisible. Aunque hubiera argumentos (que no los hay) para mantener la licitud, como el clero está en la cuasiposesión de que se le conserve

91. III, 26 y 176. En este último párrafo, el arzobispo enumera las dos extrajudicialidades que se corresponden con lo dicho en el texto en forma positiva: extrajudicialidad *extra iudicium* (fuera del proceso) y *extra iudicem* (que proviene de órgano no jurisdiccional).

92. II, 28.

su fuero; como resulta que un juez laico actúa contra un eclesiástico, y el pueblo no distinguiría lo judicial de lo extrajudicial; el resultado, aunque fuese lícito, sería inadmisibile por novedad escandalosa: poner en manos de legos tan sumamente legos la averiguación de los delitos de los clérigos, como son los tenientes de corregidor y demás justicias⁹³.

Además, Frasso fue acusado por el autor anónimo del que habla en su tercer dictamen, de no seguir el ejemplo de Hernán Cortés, que se dejó azotar públicamente por un clérigo por haber faltado a la Doctrina. El genio del sardo no habría de dejar pasar por alto esta acusación tan exagerada, y luciría muy bellamente sus dotes de polemista⁹⁴.

FERNANDO DE ARVIZU

93. III, 286.

94 IV, 94: «A lo que se dice de Fernando Cortés, se responde que lo que obró este héroe insigne en la acción que hizo, es digno de eterna memoria, y de que se repita con otros, siempre que fuere menester para este fin.

»En aquella ocasión, fue necesaria la demostración de dejarse castigar del religioso, afectando para ello que había errado en la doctrina christiana, para afirmar y confirmar a los indios acabados de convertir a la Fe, en la inteligencia y constancia de sus artículos y en la veneración de los curas y sacerdotes. Y siempre que para esto tomase el azote el cura, sería para diligencia propia del ministerio.

»Fernando Cortés puso el azote en la mano del religioso para que le corrigiese en lo que había errado en la doctrina cristiana. Pero en nuestro caso el cura, revestido con las vestiduras sagradas, parado a un lado de la puerta de la iglesia, pone el azote en manos de su fiscal al otro lado, para castigar al indio que sale por cortadero si no ofrece el manípulo.

»Lo que obró Cortés fue medio santo para el fin que se deseaba, y esto es contrario a él, inicuo y violento. Aquello miraba a confirmar y promover a los indios en los misterios de nuestra Santa Fe Católica. Esto a ahuyentarlos, escarmentarlos y desviarlos del camino de la virtud y de la salvación. Aquello era instruir y enseñar a los indios, y acudir a la obligación del oficio, y esto es saltar a él y a la Doctrina de San Pablo, que hablando en boca de los preladados y curas, refiere su oficio diciendo: 'secundum potestatem quam dedit mihi Dominus in aedificationem, et non in destructionem' »

LA RESPONSABILIDAD DE LOS MINISTROS EN LA ESPAÑA CONSTITUCIONAL

I. ORIGENES (1808-1836)

SUMARIO: Introducción.—1. Control y responsabilidad de los oficiales y agentes del poder en el Estado moderno.—2. Secretarios del Despacho y ministros.—3. El principio constitucional de la responsabilidad de los ministros: A) Introducción; B) La constitución de Bayona; C) La constitución de Cádiz: Regencia, Cortes de Cádiz y Constitución.—4. La responsabilidad ministerial en el período fernandino: A) El sexenio absolutista; B) El trienio constitucional; C) La década absolutista.—5. La responsabilidad ministerial en la época del Estatuto Real.—6. El proyecto de ley de responsabilidad ministerial (18 de diciembre de 1835).—7. El fin del Estatuto y del primer proyecto de regulación de la responsabilidad ministerial..

INTRODUCCION

La responsabilidad política, principio fundamental del régimen parlamentario de gobierno, ha informado la actuación pública y en especial el ejercicio ordenado del poder en la España contemporánea. Su expresión más significativa, la responsabilidad de los ministros, suscitó desde un primer momento la atención legal y parlamentaria. Desde las primeras constituciones de 1808 y 1812 hasta la vigente de 1978, la persona del monarca se ha declarado inviolable y no sujeta a responsabilidad, siendo en su lugar responsables los ministros¹. De esta forma, como corolario y complemento de la irresponsabilidad del monarca de poder limitado del sistema constitucional², se fue forjando una experiencia his-

1. Constitución de 1812, art. 168: «La persona del Rey es sagrada e inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Constitución de 1837, art. 44; Constitución de 1845, art. 42; Constitución de 1856, art. 48; Constitución de 1869, art. 67; Constitución de 1876; Constitución de 1978, art. 56.3.

2. F. de LEÓN Y CASTILLO (*La responsabilidad del rey y la responsabilidad de los ministros en los países de representación falseada*). Discurso de recep-

tórica en nuestro país digna de ser tomada en consideración al lado de las ya clásicas experiencias de Inglaterra y Francia³.

Esta responsabilidad ministerial, según se ha puesto de manifiesto recientemente, nace política y permanece política a través de los siglos⁴. Incluso la responsabilidad penal de los ministros siempre presente en la teoría legal del régimen parlamentario⁵,

ción leído ante la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, tomo VII, Madrid, 1908, pág. 169. Otros autores en nuestra doctrina han preferido acentuar la necesaria vinculación de la responsabilidad con la libertad. F. BERGAMIN, *La responsabilidad de los ministros en nuestro régimen constitucional*. (Discurso pronunciado en la sesión inaugural del curso 1922-23 en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación). Madrid, 1922, pág. 10; J. A. UBIERNA, *De la responsabilidad de los órganos del Estado*, Madrid, s.f. (1915), pág. 17.

3. Vid. entre otros los trabajos representativos de ADAMS, N., *Magna Carta and the responsible ministry*, en *The american historical review*, XX, 1915, 744 ss. ARSEL, I., *La responsabilité politique ministerielle et la Chambre des Lords*, Montrange, 1948; ROBERTS, P., *The growth of responsible government in Stuart En England*, Cambridge, 1966; TANNER, J. R., *English constitutional conflicts of the seventeenth century (1603-1689)*, Cambridge, 1960; TODD, *On parliamentary Government in England, its origin, development, and practical operation*, I, 1867; II, 1869; MAITLAND, F. W., *The constitutional history of England*, Cambridge, 1955; ARIES, F., *La responsabilité pénale des ministres dans le droit français moderne*, Montpellier, 1920; BEL, A. G., *La responsabilité pénale des ministres d'après le droit français actuellement en vigueur*, París, 1899; CLOS, J., *De la responsabilité des ministres*, París, 1886; CRAYSSAC, A., *De la responsabilité des ministres*, Bordeaux, 1890; FERSTEL, L.: *Histoire de la responsabilité criminelle des ministres en France depuis 1789 jusqu'à nos jours*, París, 1889; INQUINBERT, L., *De la responsabilité pénale et civile des ministres*, París, 1891; LAIR, A. E., *Des Hautes Cours politiques en France et à l'étranger, et de la mise en accusation du Président de la République et des ministres*, París, 1945; PERRIN, F., *De la responsabilité pénale du chef de l'Etat et des ministres en France depuis la chute de l'ancien régime jusqu'à nos jours*, Grenoble, 1900; POPESCO, M., *La responsabilité pénale des ministres devant la Haute Cour de justice en France*, Bordeaux, 1933; VANDE-VELDE, P., *De la responsabilité du pouvoir exécutif au point de vue politique et pénale dans la constitution de 1875*, Rennes, 1893.

4. P. DESMOTIES, *De la responsabilité penale des ministres en régime parlementaire français*, París, 1968.

5. La obra más completa de nuestra bibliografía sobre el tema, la de Miguel JIMÉNEZ AQUINO, *La responsabilidad ante el Parlamento*, Madrid, 1901, se limitó voluntariamente —según consta en la advertencia previa— a la responsabilidad penal exigible ante el parlamento, dejando el autor (oficial mayor del senado, literato distinguido, inspirado poeta, helenista insigne, en palabras

parece que debe ser entendida más como una variante reforzada de la responsabilidad política que como una categoría separada, en atención a sus fines, a su método y aún a la libertad con que se determinan los delitos y las penas⁶.

Esta responsabilidad ministerial que por su determinación relativa se sitúa, como la política en general, a medio camino entre la responsabilidad moral y la jurídica⁷, sufrió el riesgo, permanente en nuestra historia parlamentaria, de desvirtuar su esencia con una representación electoral falseada. Esta circunstancia, de crear «mayorías parlamentarias a hechura del propio ministerio... encargadas en el simulacro parlamentario de fiscalizar y censurar a los gobiernos» difería a la revolución, según un diputado de las Cortes en 1854, el juicio de los ministros pasados⁸.

Más circunspecto en la forma, un gran diccionario del siglo XIX consideraba la responsabilidad ministerial como una ficción⁹. En todo caso, como ficción política o realidad cuestionable, la responsabilidad de los ministros fue un elemento dinamizador de la vida política española de los siglos XIX y XX. El presente estudio está dedicado a los orígenes de la institución y a su primer desarrollo legislativo en la España constitucional.

de Saracibar) para un eventual estudio ulterior no realizado la parte puramente política de la responsabilidad ministerial. J. de SARACÍBAR, *Del Senado que desapareció. Memorias de un funcionario senatorial ya casi setentón (1897-1931)*, Madrid, 1932. La obra de Jiménez Aquino es ampliamente tributaria en relación con los datos comparados de la anterior de L. DUPRIER, *Les ministres dans les principaux pays d'Europe et d'Amérique*, 2 vols., París, 1892-1893.

6. DESMOTTES, *De la responsabilité*, passim.

7. G. UGO RESCIGNO, *La responsabilité política*, Milán, 1967, págs. 148-151.

8. JIMÉNEZ AQUINO, *La responsabilidad*, pág. 152.

9. *Grand Dictionnaire Universel du XIX siècle*, París, 1874, t. XI, sv. ministre. Veinte años atrás Juan RICO Y AMAT, en su *Diccionario de los políticos (1855)* (reed. en Madrid, 1976, con un Estudio preliminar, notas y comentarios por D. Sevilla Andrés), consideraba a la responsabilidad ministerial como «una de las más hermosas mentiras del gobierno representativo» (pág. 297). «Freno de seda que en nada mortifica al caballo sigue y sigue desbocado hasta estrellarse en el muro de la opinión pública o en la puerta de la confianza de la Corona »

1. *Control y responsabilidad de los oficiales y agentes del poder en el Estado moderno*

A pesar del estrecho paralelismo que en nuestro país guarda la responsabilidad política con el sistema de valores propios del constitucionalismo, fundamentalmente con los de libertad de crítica política, de imprenta, de reunión y asociación, etc.¹⁰, existía, con antelación, un cierto control y responsabilidad de los oficiales y agentes del poder, conforme al nivel de evolución cultural y político alcanzado. Un paso importante en la configuración de esta responsabilidad se dio con la objetivación de las tareas encomendadas a los agentes del poder, dentro del proceso de conformación del oficio público en los albores del Estado moderno¹¹. Pese a ello, la condición esencial para su nacimiento fue, según un reciente análisis, la convicción generalizada de ser el poder político un poder que deriva de otros hombres y no de Dios o de sí mismo¹². Esta idea, de resonancias clásicas, iluminó toda una corriente de pensamiento político medieval sin llegar a obstaculizar por ello el predominio de la contraria que hacía depender todo el poder de Dios. Es esta idea por más general la que debe ser tenida en cuenta a la hora de esbozar los orígenes de la institución, sin olvidar aquella primera que actuó a manera de contrapunto racional, digna en todo caso de un análisis complementario, nunca exclusivo.

10. RESCIGNO, *La responsabilidad política*.

11. J. M.^a GARCÍA MARÍN, *El oficio político en Castilla durante la Baja Edad Media*, Sevilla, 1974; del mismo, *La burocracia castellana bajo los Austrias*, Jerez de la Frontera, 1977, págs. 797 y ss., 117 y ss.; J. A. MARAVALL, *Estado moderno y mentalidad social*, 2 vols., Madrid, 1972, I, 33 y ss.; II, 458 y ss.; J. GAUDEMET, *La contribución des romanistes et des canonistes médiévaux à la théorie moderne de l'Etat. Diritto e potere nella storia europea*. Atti in onore di Bruno Paradisi, Firenze, 1982, 1-36. Sobre el concepto de Estado moderno utilizado en el texto en su más amplia expresión histórica, vid. las recientes posturas críticas de B. CLAVERO, *Institución política y Derecho: acerca del concepto historiográfico de «Estado Moderno»*, *Revista de Estudios Políticos*, 19, 1981; J. LALINDE, *Depuración histórica del concepto de Estado*, en la obra colectiva *El Estado español en su dimensión histórica*, Barcelona, 1984, páginas 17-54; W. NAEF, *La idea del Estado en la Edad Moderna*, trad. esp. de V. González Vicen, Madrid, 1973.

12. RESCIGNO, *La responsabilidad política*

En el círculo teológico político del pensamiento escolástico medieval, el rey ocupaba el centro como punto de confluencia de ambos órdenes, divino y humano. Al margen de los sentimientos primitivos que encierra, esta concepción entronca con una tradición que se remonta a los tiempos bíblicos, ampliamente confirmada luego por la doctrina cristiana¹³.

Esta tradición se recuperó políticamente en el medievo con motivo de las luchas entre el Papado y el Imperio. Sucesivamente se desarrolló una teoría del derecho divino de los papas, de los emperadores y, por último, de los reyes, como expresión de una idea incipiente de soberanía¹⁴. Tal y como se formuló en su tiempo esta teoría implicaba, entre otras, la proposición de que los reyes eran responsables sólo ante Dios. A pesar de las correcciones introducidas por los teóricos promotores de una mediación de la comunidad, esta doctrina de la designación divina se mantuvo vigente hasta el final del Antiguo Régimen.

El rey así concebido es fuente de toda potestad y justicia como nos recuerdan nuestros clásicos y como tal, cabeza del reino, de la comunidad, en uno de los símiles orgánicos más repetidos de nuestra literatura política y aún de la legislación fundamental¹⁵. Para regir convenientemente la comunidad, procurando el bien común, el rey necesita de colaboradores, oficiales y ministros, designados libremente por él en virtud de sus regalías esenciales. Es esta una tarea delicada, pues es responsabilidad suya, ética y religiosa, la elección de buenos ministros que procuren ese bien co-

13. «Por Mi reinan los reyes». Proverbios, c. VIII: «Ninguna potestad tendrías sobre Mi si no te hubiera sido dada de lo alto» S. Juan, c. XIX, v. 11; «nan est potestas nisi a Deo», San Pablo ad Rom. XII, 1.

14. J. N. FIGGIS, *El derecho divino de los reyes*, trad. esp. de E. O'Gazman, México, D.F., 1942; W. ULLMANN, *The growth of papal government in the Middle Ages. A study in the ideological relation of clerical to lay power*, Londres, 1965; F. CALASSO, *I glossatori e la teoria della sovranita*, Milán, 1951.

15. GARCÍA GALLO, *Manual de Historia del Derecho español*, Madrid, 1979, I, 743-745. G. MARÍN, *La burocracia castellana*, 28-29 recoge asimismo los textos bien expresivos de Avilés («quia iurisdictio est apud regem tanquam apud fontem, a quo fluunt aquae tanquam flumen a mare fluit»), Avendaño, Bovedilla, Alfaro, así como la conocida ley 2,1,5 de Partidas «vicarios de Dios son los reyes cada uno en su reino»

mún¹⁶. Siendo los ministros retratos del rey, reflejos de su poder, sus competencias son en principio un calco de las de éste. Sin embargo, el rey, aunque posee la suprema dirección del reino no se inmiscuye en las tareas de sus ministros, pues su oficio es más elevado. De este modo se produce una doble instancia de poder: de un lado el efectivo y problemático de los ministros; de otro, el supremo e idealizado del rey. Con cierto maquiavelismo táctico una larga serie de autores, Saavedra Fajardo, Márquez, Laynez, Bermúdez de Pedraza, Rivadeneyra, aconsejan al monarca dispensar los favores, premios y mercedes así como el empleo de la benignidad y la clemencia, dejando para sus ministros la imposición de penas y castigos¹⁷. Esta actitud, celosamente observada por los monarcas en todo tiempo, propició la paulatina conversión de los ministros en presuntos autores de los males del país. «El uso viejo de ser los ministros murmurados del pueblo»¹⁸ se agudizará con el criticismo del siglo xvii que encuentra en los males de una administración corrupta, una de sus razones de ser. El grito común de motines y asonadas ¡Viva el rey, muera el mal gobierno! evidencia ya por esta época el alcance de este sentimiento de animadversión popular del que por entonces se libraba el rey¹⁹.

El anquilosamiento progresivo de los órganos políticos de expresión popular y la insuficiencia de los procedimientos ordinarios de exigencia de responsabilidad, fuera ésta la residencia castellana, la

16. GARCÍA MARÍN, *La burocracia castellana*, págs. 40-189.

17. GARCÍA MARÍN, *ibidem*, pág. 63. Con insuperable claridad lo expresa Saavedra Fajardo: «las resoluciones ásperas o las sentencias penales passen por la mano de los ministros, y encubra la suya el Príncipe. Caiga sobre ellos la aversión y odio natural al rigor y la pena y no sobre él. Esté en los ministros la opinión de rigurosos y en el Príncipe a de clemente. Dellos es el acusar y condenar, del Príncipe absolver y perdonar». Cf. T. DOWLING, *El pensamiento político-filosófico de Saavedra Fajardo*, Taos, N. México, 195 y ss. F. MURILLO FERROL, *Saavedra Fajardo y la Política del Barroco*, Madrid, 1957, 273 y ss.

18. A. PÉREZ, *Norte de príncipes, virreyes, presidentes, consejeros, gobernadores y advertimiento políticos*, Madrid, 1788, pág. 56 (cit. GARCÍA MARÍN, *La burocracia*, pág. 63, n. 76).

19. J. A. MARAVALL, *La oposición política bajo los austrias*, Barcelona, 1974, 53 y 11, 211 y ss.; J. VILAR, *Formes et tendences de l'opposition sous Olivares: Lisón y Biedman, defensor de la patria* Mélanges de la Casa de Velázquez, VII, 1971; J. A. ESCUDERO, *Rey, ministros y grupos políticos en la España de los Austrias*, Santander, 1979.

inquisición aragonesa o valenciana o el juicio de purgar taula catalán, reducidos en su virtualidad, por lo general, a unos mismos niveles secundarios de la administración de justicia (corregidores en Castilla; sobrejunteros, zalmedinas y sesmeros en Aragón; ve-gueres y bayles en Cataluña o justicias, asesores y mustasafs en Valencia²⁰, impidieron una correcta manifestación de los males del país, dando lugar a explosiones de descontento que afectaban en primer lugar a los ministros del rey. Sin embargo, también ellos estaban sometidos en el Antiguo Régimen a un cierto control no regular como eran la veeduría o la visita, convertidas, en especial esta última, en el medio adecuado para luchar contra la corrupción en los altos niveles político-administrativos²¹.

El profesor Escudero, en su monumental obra sobre los Secretarios de Estado y del Despacho, nos ha dejado un cuadro vivo de las corruptelas que asediaban la actividad de los Secretarios de Estado, dada su proximidad al Monarca, titular del primer Consejo de la Monarquía, y la proclividad de alguno de ellos a la malversación y al cohecho²². Los procesos de Juan Alemán, secretario del Emperador; de Antonio Pérez, de Pedro Franqueza, Secretario de Estado y también de los Consejos de Aragón e Inquisición, o de Jerónimo Villanueva, ilustran sin embargo el alcance limitado de su responsabilidad en una época no propicia para su exigencia²³.

20. J. LALINDE, *Los medios personales de gestión del poder público en la Historia española*, Madrid, 1970, págs. 175 y ss. Vid. del mismo, *La purga de taula*, en Homenaje a J. Vicens Vives, Barcelona, 1965, págs. 499-523, y *La jurisdicción real inferior en Cataluña*, Barcelona, 1966; cf. L. G. de VALDEAVELLANO, *Las Partidas y los orígenes medievales del juicio de residencia*, en Boletín de la Real Academia de Historia, CLIII, 1963, págs. 205-246; B. GONZÁLEZ ALONSO, *El juicio de residencia en Castilla*, I, Origen y evolución hasta 1480, en Anuario de Historia del Derecho español (AHDE), 48, 1978, págs. 193-247, del mismo autor, *Control y responsabilidad de los oficiales reales: Notas en torno a una pesquisa del siglo XVIII*. Actas del III Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1971, págs. 393 y ss.; I. de la CONCHA, *Un dictamen de don José Carvajal y Lancaster sobre el Juicio de Residencia*, AHDE, 14, 1942-43, págs. 635-638.

21. LALINDE, *Los medios personales*, pág. 193, S de DIOS, *El Consejo Real de Castilla (1385-1522)*, págs. 292 y ss.

22. *Los Secretarios de Estado y del Despacho*, 4 vols., Madrid, 1969, II, 341 y ss.; 401-407, 548-553; III, 787 y ss.; 819-820.

23. J. M. PELORSÓN, *Para una reinterpretación de la Junta de Desempeño*

La privación del oficio, el destierro de la Corte, la confiscación de bienes o la devolución de lo indebidamente retenido son algunas de las penas impuestas por los jueces de los Consejos, en especial el de Castilla, delegados por el monarca para sustanciar estos procesos, nacidos en algún caso como el de Pedro Franqueza de una visita o, en ocasiones, de una instrucción secreta previa, y en las que el propio rey actúa y acusa a través de su promotor fiscal²⁴.

2. *Secretarios del Despacho y ministros*

Aunque el sistema de gobierno de la Monarquía austríaca descansa sobre una base polisinodial (al margen del concurso de validos y secretarios privados del rey), es en tiempos de Felipe IV cuando se esboza, en sustitución del cargo político del valido, el burocrático del Secretario del Despacho Universal, llamado a vertebrar en el futuro la administración central del Estado, a partir de un progresivo desdoblamiento que lleva en sí el germen del nuevo régimen ministerial²⁵. Este desdoblamiento en dos, cuatro, cinco Secretarías, tuvo lugar en el primer cuarto del siglo XVIII, tras un cambio de dinastía que potenció, en sincronía con Europa, el régimen ministerial²⁶. Desde 1721 aparece perfectamente consolidada una compleja estructura ministerial superpuesta

General (1603-1606) a la luz de la visita de Alonso Ramírez de Prado y de don Pedro Franqueza, conde de Villalonga, en *Actos del IV SHA*, Madrid, 1983, págs. 613-627; R. EZQUERRA, *La conspiración del duque de Híjar*, Madrid, 1934; A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, *La conspiración del duque de Medina-Sidonia y el marqués de Ayamonte*, en *Crisis y decadencia de la España de los Austrias*, Barcelona, 1973, 113-153. Para una época anterior, vid. J. GUERRERO NAVARRETE, *Proceso y sentencia contra Ruy López Dávalos, Condestable de Castilla*, Jaén, 1982.

24. Ver en J. A. ESCUDERO, *Los Secretarios de Estado*, documentos relativos a procesos y prisión de secretarios, III, 787-824.

25. J. VICENS VIVES, *Estructura administrativa estatal en los siglos XVI y XVII*, en *Obra dispersa*, II, Barcelona, 1967, págs. 359-377; F. TOMÁS Y VALIENTE, *Los validos en la monarquía española del siglo XVII*, Madrid, 1963; J. A. ESCUDERO, *Los orígenes del Consejo de Ministros en España*, 2 vols., Madrid, 1979, pág. 355; J. L. BERMEJO, *Estudios sobre la Administración central española (siglos XVII y XVIII)*, Madrid, 1982, págs. 17-43

26. ESCUDERO, *Los Secretarios*, I, 295 y ss.; del mismo, *Los orígenes del Consejo de Ministros*, 40 y ss.; BERMEJO, *Estudios*, 40 y ss

políticamente al sistema de Consejos de la Monarquía austriaca. Aunque oficialmente se sigue utilizando el título de Secretario de Estado y del Despacho del ramo administrativo correspondiente, Guerra, Marina e Indias, Hacienda, Estado o Justicia según la reforma citada de 1721, ya por entonces se generaliza la denominación de ministros con un sentido político específico que lo diferencia del administrativo y burocrático de la etapa anterior. Al igual que sus predecesores, estos Secretarios del Despacho permanecen vinculados al rey y, a su servicio, despliegan su gestión político-administrativa transida por los nuevos ideales de la sociedad reformista borbónica. A ellos, a ese conjunto de buenos ministros dieciochescos, corresponde la racionalización progresiva de la Administración del Estado y aún su misma orientación hacia los nuevos fines marcados por la ideología ilustrada: educación popular, mejora económica y social de las clases campesinas, mayor tolerancia religiosa con un efecto atenuante sobre el fervor religioso de las pasadas centurias²⁷. El viejo fin escolástico del bien común cede paso a la consecución del más concreto ideal de «felicidad pública», al tiempo que la figura simbólica del príncipe cristiano se diluye en la «razón de Estado». Con ello se avanzó hacia la disolución del propio orden social, profundamente irracional a los ojos ilustrados. Autores de esta política fueron los Secretarios del Despacho o ministros borbónicos, hombres de clase media acomodada que pronto concitaron sobre sí, pese a su probidad y laboriosidad ejemplares, la enemiga política de las clases privilegiadas y la animadversión popular²⁸.

Los nombres conspicuos de un Patiño, Campillo o Carvajal en la primera mitad del siglo o de un Esquilache, Grimaldi, Roda o Floridablanca en su segunda mitad, no consiguieron acallar las críticas de una sociedad acuciada por la crisis de sus valores tradicionales. A la escasa implantación afectiva de la dinastía francesa se sumó la prevención contra sus ministros extranjeros, Orry, Wall,

27. ESCUDERO, *Los orígenes del Consejo de Ministros*, 603; A. ELORZA, *La ideología liberal en la Ilustración española*, Madrid, 1970; J. A. MARAVALL, *Las tendencias de reforma política en el XVIII español*, *Revista de Occidente*, 52, 1967, 53-82; L. SÁNCHEZ AGESTA, *El pensamiento político del despotismo ilustrado*, Madrid, 1953.

28. ESCUDERO, *Los orígenes del Consejo de Ministros*, 493

Esquilache o Grimaldi, primeros y fáciles blancos de la xenofobia nacional. Esta prevención en un momento propicio para ello, de escasez alimentaria y resistencia popular al cambio de arraigadas costumbres y hábitos, degeneró en odio violento manifestado en el motín de Esquilache, precursor hasta cierto punto de las convulsiones políticas ulteriores²⁹. La aparente conjura contra Esquilache, ministro de Hacienda y Guerra con atribuciones en lo Interior (abastos, policía y orden público), reveló la fuerza popular, capaz de obligar al rey a sustituir a su muy querido ministro siciliano por otro español³⁰.

Aunque las medidas posteriores del enérgico conde Aranda, como Presidente del Consejo de Castilla, auxiliado por el capaz ministro de Justicia, el también aragonés Roda, consiguieron restablecer el orden y extinguir prontamente los focos de sedición, los efectos del motín fueron perdurables en el ámbito político. De un lado el rey, vivamente impresionado por las escenas de revolución popular (que llegaron a aconsejar el traslado de la Corte a Sevilla y en todo caso retrasaron ocho meses su regreso del Real Sitio a Madrid), vio rebajada su autoridad al tener que acceder a las pretensiones de los amotinados; de otro, los ministros se vieron sometidos desde entonces a un seguimiento popular mucho más vivo, estimulado en parte por el principal grupo de oposición política, el partido aragonés del Conde Aranda³¹. A él se debe en buena medida la explotación de la malograda expedición a Argel de O'Reilly que forzó la dimisión del único ministro extranjero que quedaba a Carlos III, el genovés Grimaldi, y asimismo la enemiga constante que encontró su sucesor, el conde de Floridablanca, acusado por sus detractores de dictador y despótico por la acumulación de poder conseguida con la doble titularidad de la Secretaría de Estado (1777) y Justicia (desde 1782), aparte de su influencia en

29. P. VILAR, *El motín de Esquilache y la crisis del Antiguo Régimen*, *Revista de Occidente*, 107, 1972, págs. 199-249; vid. en A. RISCO, *Flujos y reflujos del «motín de Esquilache»*, en *Cuadernos de Historia moderna y contemporánea*, 5, 1984, págs. 11-36, un excelente estado de la cuestión.

30. ESCUDERO, *Los orígenes del Consejo de Ministros*, 308.

31. V. RODRÍGUEZ CASADO, *La política y los políticos en el reinado de Carlos III*, Madrid, 1962. E. OLAECHEA y J. A. FERRER, *El conde de Aranda*, Zaragoza, 1978; R. OLAECHEA, *El conde de Aranda y el «partido aragonés»*, Zaragoza, 1969.

las restantes Secretarías a través de la Junta Suprema de Estado³². El poder de este ministro omnipresente se tildaba de corrupto como señala un libelo de junio de 1789: en uno de los cargos allí recogidos se le acusa de dictador por «no querer hacerse responsable de sus negocios, aparentando ventilarlos entre muchos», en injusta referencia a su papel en la Junta³³.

Aunque Floridablanca pudo contrarrestar la fuerza de estas críticas con su talla de gran estadista y la ayuda complementaria de la corriente de simpatía que suscitó hacia su persona el atentado contra su vida, sin embargo, su difícil posición ante el Gobierno revolucionario francés, iba a costarle finalmente el cargo. Signo de las pasiones concitadas contra él, su caída dio paso a un proceso de depuración de responsabilidades instado por los autores del libelo citado, agentes ahora del rencor oficial del nuevo Secretario interino de Estado, el conde de Aranda, como antes lo fueran de su partido en la oposición y ello a pesar del perdón que en su día les dispensara Floridablanca³⁴. La revisión del antiguo pleito por Real Orden de 23 de junio de 1792 motivó una extensa Defensa legal de Floridablanca sobre sus presuntas irregularidades políticas y administrativas. Sin embargo, la rápida exoneración de Aranda como ministro (1792) y el curso tomado por los sucesos franceses paralizó la acción emprendida contra él, declarándole primero absuelto de toda responsabilidad (25 septiembre 1795) y luego, casi al final de su vida (28 marzo 1808), poco antes de presidir la Junta Central, injusto y arbitrario su confinamiento murciano³⁵.

32. ESCUDERO, *Los orígenes del Consejo de Ministros*, 344 y ss.; BERMEJO, *Estudios*, 81 y ss.

33. *Confesión del conde de Floridablanca Copia de un papel que se cayó de la manga al padre comisario general de los franciscos, vulgo*, en *Obras originales del conde de Floridablanca y escritos referentes a su persona*, Colección hecha e ilustrada por A. Ferrer del Río, Biblioteca de Autores Españoles, LIX, 280-289. Ref. en ESCUDERO, *Los orígenes del Consejo*, pág. 431, cf. 458 y ss.; BERMEJO, *Estudios*, 133 y ss.

34. P. ALCÁZAR MOLINA, *España en 1792 Floridablanca, su derrumbamiento del Gobierno y sus procesos de responsabilidad política*, *Revista de Estudios Políticos*, 71, 1953, 93-138; del mismo, *Los hombres del despotismo ilustrado: el conde de Floridablanca*, Murcia, 1934. Vid. la observación a la primera de BERMEJO, *Estudios*, 134.

35. ESCUDERO, *Los orígenes del Consejo de Ministros*, 552-554

Mientras ocurrían estos hechos, la irregular ascensión del favorito Godoy al ministerio de Estado hizo palidecer las críticas vertidas antes contra Floridablanca al tiempo que aumentó su talla de estadista; ello en contraste con el desairado papel asignado a Aranda, cuyos ocho meses en la Secretaría de Estado se interpretó a nivel popular como un intento de atemperar el ascenso fulgurante de Godoy al primer cargo de la Monarquía, aparte de envilecer su condición política transigiendo con una ilícita relación cortesana desaprobada por Floridablanca con su retiro³⁶.

Así se llegó al final de un régimen en el que los ministros, representantes de un poder absoluto, sufrieron las consecuencias de su invertebración política. Carentes de atractivo popular, solícitos únicamente ante el rey su promotor y valedor último ante quien respondían de su gestión, los ministros se enfrentan en esta hora a una situación nueva en la que el pueblo por medio de motines, asonadas y revoluciones adquiere un protagonismo insólito. A él comenzará a referirse el poder y la soberanía y con ello brotará un nuevo concepto de la gestión ministerial transida por la idea de responsabilidad ante los nuevos órganos rectores de la comunidad.

3. *El principio constitucional de la responsabilidad de los ministros*

A) Introducción

A diferencia de la tradición política inglesa, la formulación técnica de la responsabilidad ministerial precedió en nuestro país a la práctica de su exigencia. El ejemplo provenía de la revolucionaria Francia que la impuso legalmente, a pesar de las dificultades que la estricta separación de poderes, aceptada por la Asamblea Constituyente, planteó a su formulación constitucional.

Así la Constitución de 1791 limitó su reconocimiento a la responsabilidad penal y civil de los ministros, dejando a un lado, pese a las propuestas hechas a la Comisión de Constitución, su

36. ESCUDERO, *Los orígenes del Consejo de Ministros*, 550-551, recoge anónimos muy significativos en este sentido

fundamental responsabilidad política³⁷. Por eso se ha dicho que una verdadera historia de la responsabilidad institucionalizada comienza en Francia con la Restauración de 1814, cuando la existencia de un parlamento y unos ministros constitucionales abonan una construcción doctrinal (B. Constant, Guizot, Chateaubriand) y legal (proyectos de 1814, 1816, 1817, 1818) de la responsabilidad política de los ministros distinta de la civil y penal ya reconocida³⁸.

B) La Constitución de Bayona

Este principio «revolucionario» de la responsabilidad ministerial fue incorporado, en distinta medida, en nuestros primeros textos constitucionales. La Constitución de Bayona inaugura el régimen constitucional *Del ministerio* con una fijación estricta de su responsabilidad³⁹. Tras disponer que un Secretario de Estado con la calidad de ministro refrendará todos los decretos del rey (art. 28; cf. art. 86), se sienta el principio fundamental de que «los ministros, cada uno en la parte que le toca, serán responsables de la ejecución de las leyes y de las ordenes del Rei» (art. 31'). Aunque en el texto constitucional se omite la referencia complementaria a la irresponsabilidad del rey, se declara, sin embargo, al regente «no personalmente responsable de los actos de su administración» (art. 13)⁴⁰.

La responsabilidad de los ministros no es en este texto una mera declaración de principio; la propia Constitución asigna a las Cortes el deber de manifestar las quejas, que deberían ser graves y motivadas, sobre la conducta de un ministro y una vez votada su representación presentada al trono por una diputación. Por orden del rey una comisión compuesta de seis consejeros de Estado y seis miem-

37. DESMOTTES, *La responsabilité penale*, 87 y ss., RESCIGNO, *La responsabilité política*, 171 y ss.

38. RESCIGNO, *La responsabilité política*, 177-178.

39. El título VI de la Constitución, *Del ministerio*, fijaba el número de ministerios (Justicia, Negocios, Eclesiásticos, Negocios Extranjeros, Interior, Hacienda, Guerra, Marina, Indias y Policía General (art. 27); el artículo 29 facultaba al rey para reunir cuando lo tuviera por conveniente, el Ministerio de Negocios Eclesiásticos al de Justicia, y el de Policía General al de Interior) su igualdad («no habrá otra preferencia entre los ministros que la de la antigüedad de su nombramiento», art. 30) y, por último, su responsabilidad

40. C. SANZ CID, *La constitución de Bayona*, Madrid, 1922

bros del Consejo Real examinaría esta representación (art. 85), que, de ser estimada, pasaría finalmente al conocimiento de la Alta Corte Real, tribunal político de la monarquía bonapartista encargado del conocimiento de los delitos personales cometidos por los individuos de la familia real, los ministros, los senadores y los consejeros de Estado (art. 108) ⁴¹. De esta forma la Constitución de Bayona estructuró un régimen completo de responsabilidad ministerial —principio, procedimiento y jurisdicción— referido inicialmente en correcta teoría parlamentaria a las Cortes o Juntas de la nación (tít. IX, arts. 61 a 86) ⁴². El desarrollo legislativo ulterior prestó atención preferente a los aspectos orgánicos y funcionales de los ministerios (R. Decreto de 6 y 10 de febrero de 1809), en detrimento de su ordenación política, poco avenida con la crisis permanente del Estado bonapartista ⁴³.

C) La Constitución de Cádiz: Regencia, Cortes de Cádiz y Constitución

La responsabilidad de los ministros suscitó una temprana atención oficial en la España nacional libre de la ocupación francesa. Una vez que la Junta Central resignó sus poderes en el nuevo órgano ejecutivo, el Consejo de Regencia (31 de enero de 1810), se declaró a sus miembros, de acuerdo con el Reglamento de 29 del mismo mes, elaborado por Jovellanos y Martín de Garay, «responsables ante la nación de su conducta en el desempeño de sus funciones al igual que los ministros» ⁴⁴. La sencilla formulación del

41. S. M. CORONAS, *Jurisdicciones especiales de carácter político en el tránsito del Antiguo Régimen al nuevo constitucional*, en Libro Homenaje al profesor Font Rius, Barcelona, 1984, págs. 95-111.

42. Estas Cortes, divididas en tres estamentos al estilo tradicional, clero, nobleza y pueblo, contaban con una mayoritaria composición popular: 122 diputados de las provincias, ciudades principales, negociantes y personas de mérito frente a 25 nobles y 25 arzobispos y obispos. Vid. artículos 61 a 64 de la Constitución.

43. *Prontuario de las leyes y decretos del rey nuestro señor don José Napoleón I, desde el año 1808*, 3 vols., Madrid, 1810-1812, I, 83-96. Cf. J. MERCADER, *José Bonaparte, rey de España, 1808-1813. Estructura del Estado español bonapartista*, Madrid, 1983.

44. FERNÁNDEZ MARTÍN, *Derecho parlamentario español, Colección de constituciones, disposiciones de carácter constitucional, leyes y decretos electorales para diputados y senadores y reglamentos de las Cortes que han regido en*

principio no oculta su profundo significado político: la nación y no el rey, a través de su representación oficial en aquellas circunstancias extraordinarias, pasó a ser la depositaria de la soberanía y la encargada de velar por la conducta del órgano ejecutivo.

Una Diputación celadora de la observancia del Reglamento y de los derechos de la nación, compuesta de ocho individuos nombrados por el mismo Consejo de Regencia, vigilaría su actuación, reclamando cualquier providencia contraria a aquellos derechos o a las leyes fundamentales del reino; caso de no ser atendida ni satisfecha sería renovada en las primeras Cortes como cargo de responsabilidad⁴⁵. Este Reglamento fue el primer eslabón de una larga cadena de normas tendentes a configurar el régimen de responsabilidad del ejecutivo en la España nacional

En la práctica, sin embargo, esta primera Regencia supo desviar, en un primer momento, hacia los antiguos miembros de la Junta Central Suprema la exigencia efectiva de responsabilidad, acusándoles públicamente de conspirar contra la seguridad interior del Estado. El conde de Tilly, presunto instigador de las revueltas americanas, y Lorenzo Calvo, acusado de malversar fondos públicos confiados a su custodia, fueron los reos principales de esta campaña de difamación que finalmente acabó afectando a la misma Regencia por las irregularidades advertidas en la tramitación de los procesos, oportunamente desveladas por una comisión de Cortes, aunque sin mayores consecuencias políticas^{45 bis}.

Una vez constituidas las Cortes generales y extraordinarias del reino en la Isla de León, su primer decreto de 24 de septiembre de 1810, dispuso que las personas en quienes se delegara el poder ejecutivo en ausencia del rey, quedaban «responsables a la nación por el tiempo de su administración, con arreglo a las leyes⁴⁶.

España en el presente siglo, t. I-II, Madrid, 1885; t. III, Madrid, 1900, I, 607. Cf. M. ARTOLA, *Los orígenes de la España contemporánea*, 2 vols., Madrid, 1959, I, 373 y ss.; A. DEROZIER, *M. J. Quintana y el nacimiento del liberalismo en España*, trad. M. Moya, Madrid, 1978, 583 y ss.

45. FERNÁNDEZ MARTÍN, *Derecho parlamentario español*, I, 612-613.

45 bis. DEROZIER, *Quintana y el nacimiento del liberalismo*, I, 606 y ss.

46. Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde su instalación de 24 de septiembre de 1810 hasta igual fecha de 1811, Madrid, 1820, I, 1-3

Aunque esta redacción reproducía fundamentalmente la del Reglamento antes citado, la referencia a una legislación provocó la inmediata consulta del Consejo de Regencia sobre los límites de su responsabilidad al no estar contempladas sus obligaciones y las facultades ministeriales en la antigua legislación. Las Cortes declararon en su respuesta contemporalizadora no haber puesto límites a las facultades del *poder ejecutivo*, que serían señaladas por un nuevo Reglamento, pudiendo entretanto usar el Consejo de todo el poder necesario para la defensa, seguridad y administración del Estado. Únicamente se precisaba que de la responsabilidad exigida se eximía al rey aludiendo expresamente a «la inviolabilidad absoluta que corresponde a la persona sagrada del rey»⁴⁷. De este modo se prefiguraba ya la redacción de uno de los más importantes artículos de la futura Constitución (art. 168).

Este nuevo Reglamento del poder ejecutivo, anunciado por las Cortes y aprobado cuatro meses después (16 de enero de 1811)⁴⁸, acotó efectivamente las obligaciones y facultades del Consejo de Regencia, así como, de modo implícito, su responsabilidad y la de los ministros. En este sentido recoge algunos aspectos que definirían luego en la Constitución el papel de los Secretarios del Estado y del Despacho: así su nombramiento por el Consejo de Regencia a quien serían responsables del desempeño de su cargo (art. 8, ap. 1); igualmente su responsabilidad por las resoluciones tomadas por sí que no llevaran la firma de uno de los individuos del Consejo de Regencia (art. 4). Sólo en un caso se alude expresamente a la responsabilidad de este Consejo en relación con la infracción del artículo que prohíbe detener a un individuo por más de cuarenta y ocho horas sin remitirle dentro de dicho plazo al tribunal competente; esta infracción que sería reputada como «un atentado contra la libertad de los ciudadanos» autorizaba a cualquiera «para recurrir con queja ante las Cortes» (cap. 3, art. 3) que de este modo se prefigura como el órgano encargado de hacer efectiva la responsabilidad política.

47. Decreto de 27 de septiembre de 1810. Declaración de las facultades y responsabilidad del Poder ejecutivo y del modo con que éste debe comunicarse con las Cortes, en consecuencia de las dudas que el Consejo de Regencia expuso a los mismos. *Colección de Decretos*, I, 7-9.

48. *Colección de Decretos*, I, 50-58.

Con el propósito de dar «un movimiento y dirección uniforme a la máquina del Estado y de dirigir a un fin los esfuerzos de todos» sendos decretos de 14 de julio y 11 de noviembre de 1811 generalizaron la exigencia de responsabilidad a toda clase de autoridad militar, judicial y política (generales, Juntas, Audiencias), castigando el primero de los decretos citados la omisión, negligencia o tolerancia en el cumplimiento de las órdenes superiores con la privación del oficio y encomendando el segundo a los Secretarios del Despacho la misma puntual observancia por parte de todos los empleados públicos, civiles o militares, «bajo la efectiva responsabilidad de ser separados de sus empleos»⁴⁹.

Si en la sesión de Cortes de 19 de noviembre de 1810 se había aprobado la proposición del Sr. Zorraquín por la que se mandaba a los individuos que fueron de la Junta Central presentar en las Cortes en el plazo de dos meses cuenta de su administración y conducta, en la de 29 de noviembre acordaron extender esta misma proposición a los miembros de la anterior Regencia⁵⁰.

Sin embargo, antes de expirar este plazo las Cortes acordaron en su sesión secreta de 17 de diciembre pasar aviso a la Regencia para que separase de la Isla y de Cádiz a los cuatro ex regentes, Castaños, Saavedra, Escaño y Lardizábal. La respuesta de este último en forma de manifiesto a la nación «sobre su conducta política en la noche del 24 de septiembre de 1810», en el que se cuestionaba la legitimidad de las Cortes y la propia soberanía nacional, dio lugar a la apertura de un nuevo proceso por parte del Tribunal especial creado por las Cortes, el mismo órgano que un año atrás conociera el primer proceso incoado por las Cortes, precisamente contra el obispo de Orense, presidente del Consejo de Regencia

49. *Colección de Decretos*, I, 176-177; II, 28-29.

50. *Diario de las discusiones y actas de las Cortes*. S. 19-XI-1810, Cádiz, 1811, I, pág. 96; S. 28-XI-1810, ibidem, págs. 109-110. En esta última sesión los diputados discutieron sobre la conveniencia y aun el alcance de la residencia propuesta. Residencia y no visita como creía conveniente hacer el Sr. Cañedo, es el término frecuentemente utilizado en el debate. Aunque en la propuesta de García Quintana se mandaba residenciar a los miembros de la anterior Regencia y a los Secretarios del Despacho, estos últimos quedaron finalmente excluidos de esta exigencia al imponerse el criterio contrario de Dou, Creus y Luxan, basado en el argumento de éste de que «siendo responsable el Consejo de Regencia no podían serlo los ministros» (pág. 110)

que en tal concepto presidiera la constitución de las mismas Cortes ⁵¹.

Tras la creación de una nueva Regencia conforme al proyecto de Constitución, aprobado ya en su mayor parte, las Cortes acordaron por Decreto de 26 de enero de 1812 un nuevo Reglamento del poder ejecutivo que venía a derogar el anterior ⁵². Aparte de las modificaciones introducidas en el régimen del Despacho y las formales de su contenido, más preciso y mejor sistematizado, la mayor novedad del Reglamento estribaba en haber dedicado todo un capítulo a la responsabilidad de la Regencia y de los Secretarios del Despacho. Una y otros serían responsables a las Cortes, y no los Secretarios a la Regencia como en el anterior Reglamento por su conducta en el ejercicio de sus funciones (cap. IV, art. 1). Estos Secretarios, nombrados y, en su caso, separados libremente por la Regencia, (cap. III, art. 20), llevarían un libro registro de los despachos por ésta (cap. III, art. 2), en el que figuraría su dictamen rubricado y a continuación la resolución de la Regencia (cap. III, art. 3). En base a lo allí escrito, las Cortes sancionarían o no, según el caso, la conducta de los Regentes o la de los Secretarios, haciendo en este último supuesto, efectiva su responsabilidad y decretando haber lugar a la formación de la causa (cap. IV, arts. 3 y 4). Esta responsabilidad de índole administrativa deja paso a otra de naturaleza claramente política al exigirla a los Secretarios del Despacho que diesen órdenes que «autoricen o sugieran» contra la Constitución o alguna de sus leyes, sin que pudiera servirles de excusa el haberlo exigido la Regencia (cap. IV, art. 2). Todavía se haría efectiva la responsabilidad de los Secretarios si a tenor de sus exposiciones reglamentarias a las Cortes, éstas lo creyeran conveniente, (cap. IV, art. 5, en relación con cap. III, art. 9). Dos meses más tarde se sancionó y promulgó la Constitución de Cádiz, elevando a categoría de ley fundamental muchos de los preceptos hasta aquí reseñados ⁵³.

51. Vid. sobre estas cuestiones S. M. CORONAS, *Jurisdicciones especiales*, cit. en nota 41.

52. *Colección de Decretos*, II, 64-71; II, 61-62 (Nueva Regencia, Decreto de 22 de enero de 1812).

53. Este exigente Reglamento fue aligerado de su excesivo formalismo por Decreto de 13 de marzo de 1813, con el fin de hacer más fácil y operativa la labor de la Regencia. *Colección de Decretos*, II, 92-94.

Declarada la persona del rey sagrada e inviolable y no sujeta a responsabilidad (art. 168)⁵⁴, se disponía por el artículo 225 que todas sus órdenes debían ir firmadas por el Secretario del Despacho del ramo a que el asunto correspondiere, declarándoles responsables ante las Cortes de las órdenes que hubiesen autorizado contra la Constitución o las leyes, sin que pudiera servirles de excusa el mandato del rey (art. 226)⁵⁵. Otro supuesto de responsabilidad pa-

54. «El Rey, como Jefe del Gobierno y primer magistrado de la Nación, necesita estar revestido de una autoridad verdaderamente poderosa para que al paso que sea querido y venerado dentro de su reino, sea respetado y temido fuera de él de las naciones amigas y enemigas. Toda la potestad ejecutiva la deposita la Nación por medio de la Constitución en sus manos, para que el orden y la justicia reinen en todas partes, y para que la libertad y seguridad de los ciudadanos pueda ser protegida a cada instante contra la violencia o las malas artes de los enemigos del bien público. Este inmenso poder, de que el Monarca se halla revestido, sería ineficaz e ilusorio si su persona no estuviese a cubierto de una inmediata responsabilidad. La historia de la sociedad humana, la prudencia y la sabiduría de los hombres y escritores más profundos ponen fuera de toda duda la necesidad de que el entendimiento humano se rinda a la experiencia, y haga al costoso sacrificio de declarar suelta de todo cargo la persona del Rey, que por tanto debe ser sagrada e inviolable en obsequio del orden público, de la tranquilidad del Estado, y de toda la posible duración de la institución magnífica de una monarquía moderada. Búsquense en otra parte los medios de asegurar el fiel desempeño de la autoridad pública sin exponer a la Nación a los riesgos de una convulsión interior.» *Discurso preliminar a la Constitución de 1812*, en D. SEVILLA ANDRÉS, *Constituciones y otras leyes y proyectos políticos de España*, Madrid, 1969, I, 131-132. Vid. A. ARGÜELLES, *Discurso preliminar a la Constitución de 1812*, con una introducción de L. Sánchez Agesta, Madrid, 1981.

55. «Como el órgano inmediato del Rey lo forman los Secretarios del Despacho, aquí es donde es necesario hacer efectiva la responsabilidad del Gobierno para asegurar el buen desempeño de la inmensa autoridad depositada en la sagrada persona del Rey, pues que en el hecho existe toda en manos de los ministros. El medio más seguro y sencillo, el que facilita a la Nación poderse enterar a cada instante del origen de los males que pueden manifestarse en cualquiera ramo de la administración es el de obligar a los Secretarios del Despacho a autorizar con su firma cualquiera orden del Rey. La benéfica intención, que no puede menos de animar siempre sus providencias, hace inverosímil que el Monarca se aparte jamás del camino de la razón y de la justicia; y si tal vez apareciere en sus órdenes que se desvía de aquella senda, será sólo por haber sido inducido a ello contra sus paternas designios por el influjo o mal consejo de los que olvidados de lo que deben a Dios, a la patria y a sí mismos, hayan osado abusar del sagrado lugar, en que no debe oírse sino el

rece deducirse de su obligación legal de rendir cuentas de los gastos de administración en su ramo respectivo (art. 227) y, ya claramente formulado, por sancionar con su firma la orden de privación de libertad o imposición de penas por parte del rey, expresamente prohibida por la Constitución (art. 172). En este caso concreto se le declara responsable a la nación castigándole como reo de atentado contra la libertad individual. Las Cortes son las encargadas por la Constitución de «hacer efectiva la responsabilidad de los Secretarios del Despacho y demás empleados públicos» (art. 131) por más que la resolución definitiva corresponda al Tribunal Superior de Justicia. El procedimiento a seguir lo fijan básicamente los artículos 228 y 229 de la Constitución: ante todo las Cortes deben decretar que ha lugar a la formación de la causa y, tras ello, remitir al Tribunal Supremo de Justicia todos los documentos concernientes a la causa que sería sustanciada y decidida conforme a las leyes. Al distinguir el artículo 229 entre las causas criminales de los Secretarios del Despacho (ap. 4) y las causas decretadas por las Cortes contra ellas, presumiblemente por infracción de Constitución o de ley (ap. 2) se distingue de modo implícito entre una responsabilidad penal y otra política. Esta diferencia por entonces no tendría mayor virtualidad.

Curiosamente estos artículos apenas suscitaron discusión parlamentaria. Salvo el artículo 228 relativo a la decisión previa de las Cortes de haber lugar a la formación de la causa, devuelto a la comisión de Constitución para que lo rectificase conforme a las ideas expuestas («ligeras reflexiones»), los demás artículos fueron aprobados sin discusión⁵⁶. Es posible que la causa de esta singular actitud de las Cortes fuera la general admisión de un principio incorporado desde el primer momento a la organización legal del

lenguaje respetuoso de la verdad, de la prudencia y del patriotismo. De este modo, las Cortes tendrán en cualquier caso un testimonio auténtico para pedir cuenta a los ministros de la administración respectiva de sus ramos. Y para asegurar por otra parte el fiel desempeño de sus cargos, y protegerlos contra el resentimiento, la rivalidad y demás enemigos de la rectitud, entereza y justificación que deben constituir el carácter público de los hombres de Estado, los ministros no podrán ser juzgados, sin que previamente resuelvan las Cortes haber lugar a la formación de causa. *Discurso preliminar.*» Ibidem, 134.

56. Sesión 24 de octubre de 1811, en *Diario sesiones Cortes Generales y extraordinarias*, 1810-1813 (Madrid, 1870), 2144-2157.

poder ejecutivo en la España nacional. Señalado el principio de responsabilidad del ejecutivo en el primer decreto de las Cortes generales y extraordinarias y aún antes en el primer Reglamento de la Regencia, desarrollado luego por otras normas posteriores, podía considerarse su formulación una cuestión resuelta al tiempo de discutirse el proyecto de Constitución. La aportación de la misma en este sentido fue el haber fijado para el futuro este principio fundamental.

Paralelamente a la regulación constitucional de las Secretarías del Despacho se atendió por una comisión de Cortes, a partir del 10 de abril de 1811, un *Ensayo de nueva organización de ministerios*, elaborado en su día por el Secretario de Estado, Eusebio Bardají (28 de noviembre de 1810) y asumido tras los correspondientes informes de los distintos Secretarios por el Consejo de Regencia el cual lo remitió a las Cortes para su aprobación el 9 de abril de 1811⁵⁷.

Al coincidir la discusión del dictamen de la comisión, iniciada en la sesión del 11 de noviembre de 1811, con la deliberación de las Cortes sobre la parte del proyecto de Constitución relativo a los Secretarios del Despacho, se acordó su suspensión hasta el fin de la misma (23 de enero de 1812) presentando entonces la comisión un nuevo dictamen acomodado ya a la nueva regulación constitucional (7 de marzo de 1812). La discusión de este dictamen dio lugar a la redacción del Decreto de 6 de abril de 1812, réplica del decretado tres años antes en la España bonapartista⁵⁸.

En el Ensayo original se partía de una idea central: la necesidad de clarificar y ordenar el despacho de los asuntos administrativos para lo cual se estimaba básico de un lado el reparto estricto de competencias y de otro el análisis conjunto por los ministros, reunidos en «consejo privado del rey» de los asuntos de mayor interés. Por lo demás el Ensayo pretendía desvanecer la prevención popular frente a los ministros evidenciando su necesidad y la

57. *Un plan de nueva organización de los ministerios*, formado por el Consejo de Regencia en 1811. Edición y estudio preliminar de M. A. PÉREZ DE LA CANAL en *Documentación administrativa*, 194, 1982, págs. 213-267.

58. *Colección de Decretos*, II, 177-182; *Prontuario de las leyes y decretos del Rey nuestro señor don José Napoleón I, desde el año de 1808*, Madrid, 1810-1812, I, 83-94

nota de responsabilidad que definía a los ministros constitucionales⁵⁹.

Una vez promulgada la Constitución se dictó un nuevo Reglamento de la Regencia del Reino (Decreto 8 de abril de 1813)⁶⁰ cuya principal novedad respecto al anterior de 1812, es la de concentrar toda la responsabilidad por los actos de gobierno en las Secretarías del Despacho, eximiendo de ella de acuerdo con el texto constitucional a los Regentes (cap. V, art. 1). Más interés, por tanto, tiene el *Reglamento para el gobierno interior de las Cortes* (Decreto 4 de septiembre de 1813), cuyo capítulo XII, *Del modo de exigir la responsabilidad de los Secretarios del Despacho*, tiende a hacer viable la aplicación del artículo 228 de la Constitución⁶¹. Son ocho artículos (118-125) que fijan el procedimiento parlamentario de exigencia de responsabilidad ministerial. Siendo responsables en principio los Secretarios del Despacho a ellos dirigían sus reconvenciones los diputados: tras ellas podrían venir las proposiciones, motivadas y fundadas documentalmente, exigiendo responsabilidad a uno o varios Secretarios, que serían leídas por dos veces en diferentes sesiones públicas de las Cortes. Estas, después de la discusión declararán si ha lugar o no a tomar en consideración la proposición. Si hubiera lugar, se pasarían todos los documentos y la exposición motivada a la Comisión correspondiente por la naturaleza del asunto para que los examinara y formalizase finalmente los cargos. Esta comisión daría su parecer a las Cortes y juzgado por éstas suficiente, se pasaría el expediente al Secretario del Despacho inculgado para que contestase dentro del plazo prescrito por las Cortes, que a su vez señalarían día para la discusión. En ella el Secretario

59. «Que el Gobierno sea bien constituido o, para decirlo en una palabra, que haya una constitución y responsabilidad en los ministros; y cada agente del Gobierno estará en su lugar y cumplirá su deber o perderá el honor y el puesto. Elíjanse bien las personas, destrúyase el pernicioso flujo de las pretensiones y de los pretendientes, que los ministros responsables a la nación de su conducta ministerial, tendrán a raya a los dependientes, y establecerán entre ellos aquella respectiva responsabilidad que debe ligar a todo funcionario público.» *Un plan de nueva organización*, pág. 224.

60. *Colección de Decretos*, IV, 35-42.

61. *Reglamentos* (Del Congreso de los Diputados y de las Cortes), Madrid, 1977, págs. 23-60; M. del C. CILLÁN G. DE ITURROSPE, *Historia de los reglamentos parlamentarios en España, 1810-1936*, Madrid, 1985.

del Despacho podría hablar libremente cuantas veces quisiera para responder sobre los cargos hechos por los diputados. Una vez declarado el asunto suficientemente debatido, se retiraría el Secretario procediéndose a votar, conforme al artículo 228 de la Constitución, si ha lugar a la formación de la causa, en cuyo caso se remitirían los cargos al Tribunal Supremo de Justicia.

Aunque nada de esto se decía en el primer Reglamento para el Gobierno interior de las Cortes de 24 de enero de 1810, una vez que se reguló por éste el modo de exigir la responsabilidad de los Secretarios del Despacho, se perpetuó su normativa apenas sin variación en el ulterior Reglamento de 29 de junio de 1821 (cap. XII, arts. 137-144) ⁶².

4. *La responsabilidad ministerial en el período fernandino*

El fin del primer ensayo constitucional en mayo de 1814 abrió un nuevo período de régimen autocrático en el que se difuminó de nuevo la responsabilidad de los ministros, a salvo su dependencia general del monarca. Nota característica de la institución ministerial en su conjunto, en esta etapa de transición del Antiguo al nuevo Régimen constitucional, es su inestabilidad que contrasta con el marcado inmovilismo de épocas anteriores. Esta inestabilidad comenzó en tiempos de Carlos IV y se acentuó de manera llamativa con posterioridad. Son muchos los Secretarios del Despacho que no llegaron al año en el desempeño del cargo, aún a pesar de su talla política, Aranda, Jovellanos, Canga Argüelles; otros, más fugaces, apenas si duraron tres meses, como Company y algunos tan sólo unos días, como O'Donojú al frente de la Secretaría de Estado ⁶³. Esta inestabilidad que alcanzó tanto a los ministerios absolutistas como constitucionales del reinado de Fernando VII, se proyectó hacia la vida política española como una pesada herencia histórica, signo y causa a la vez de la crisis política permanente de nuestro siglo XIX.

El largo reinado fernandino permite seguir la doble línea divergente de la responsabilidad ministerial, condicionada por el dis-

62. *Reglamentos*, ibidem, págs 61-107

63. J. A. ESCUDERO, *Los cambios ministeriales a fines del Antiguo Régimen*, Sevilla, 1975.

tinto régimen político que la hace casi inviable en las épocas absolutistas y la impulsa, por el contrario, hasta el conflicto y el caos en el trienio constitucional.

A) El sexenio absolutista

Con Fernando VII regresó la España del antiguo Régimen caracterizada a nivel ministerial por las notas de confusión administrativa e irresponsabilidad institucional, a salvo la dependencia orgánica del monarca. Esta caracterización negativa todavía se agravó por la falta de un programa coordinado de gobierno capaz de dar un mínimo de cohesión a su gestión política ⁶⁴. La inestabilidad de los cargos (precursora de la inestabilidad ministerial del siglo XIX) y la política indecisa del rey acentuaron aún más estas notas negativas vivamente sentidas en la España de entonces. La imposible revitalización de los viejos esquemas administrativos generó, entre otras causas, un descontento social que de nuevo se intentó canalizar hacia la gestión de los ministros, acusados de corrupción, al igual que los restantes altos cargos administrativos ⁶⁵.

Esta palabra, corrupción, personalizada más en un régimen político-administrativo que en unos ministros cuya propia fugacidad exoneraba un tanto de culpa, vino a simbolizar en el primer sexenio absolutista el mal gobierno de la nación. Esta circunstancia, unida a otras de corte ideológico y político, propició un cambio de régimen llevado a cabo, gracias a la actitud claudicante de Fernando VII, con notable moderación.

B) El trienio constitucional

Una vez producido este cambio de régimen, la responsabilidad de los ministros, configurada por la Constitución doceañista y la legislación subsiguiente, no tuvo una adecuada consolidación política. La propia crisis de la institución ministerial durante el trienio

64. P. GONZÁLEZ MARIÑAS, *La institución ministerial en los orígenes del constitucionalismo español*, en *Revista de Derecho Administrativo y Fiscal*, 1974, págs. 271-302, 279-187.

65. J. L. COMELLAS, *El sexenio de plena soberanía (1814-1820)*, en *Historia General de España y América*, XII, Madrid, 1981, 353-366; M.ª C. PINTOS VIEITES, *La política de Fernando VII entre 1814 y 1820*, Pamplona, 1958, 132 y ss. En general, M. ARTOLA, *La España de Fernando VII*, en *Historia de España*, dirigida por Ramón Menéndez Pidal, Madrid, 1968.

constitucional, impidió un efectivo desarrollo de la misma. De un lado, la propia inestabilidad ministerial que llevó a una rápida sucesión de ministerios, desde el doceañista de Argüelles hasta el exaltado de San Miguel pasando por el moderado de Bardají, enfrentados en todos los casos a una caótica situación política, social y económica que obstaculizó cualquier labor efectiva de gobierno. De otro lado, la crisis suscitada por la actitud del rey reacia en algún caso a ejercer su prerrogativa constitucional de libre designación de ministros, en la delicada coyuntura política de entonces.

Fue precisamente con ocasión de su mensaje a las Cortes en la apertura de su segunda legislatura (3 de marzo de 1821) cuando se perfiló por el propio rey la necesidad que tenía el ministerio de contar con una amplia mayoría parlamentaria: «Bien sé que ésta es prerrogativa mía; pero también conozco que al ejercicio de ella no se opone que las Cortes me indiquen y aun me designen las personas que más merecen la confianza pública y que a su juicio son más a propósito para desempeñar con aceptación y utilidad común tan interesantes destinos»⁶⁶. Aunque las Cortes, haciendo suyo el criterio del Conde de Toreno opuesto a esta actitud del rey que contrastaba con su falta de consulta para remover el anterior ministerio que «había tenido la confianza de la nación, teniendo además una mayoría constante en el cuerpo legislativo»⁶⁷, rechazaron este ofrecimiento por considerar esta tarea no propia suya, sino, de acuerdo con la Constitución, del Consejo de Estado (artículo 236), que fue quien finalmente elaboró la lista electoral; en todo caso se perfiló ya desde entonces la necesidad del ejecutivo de contar con un amplio respaldo parlamentario.

Una cuestión incidental de desacato a la autoridad del Ministerio Bardají planteó en el trienio constitucional, a nivel parlamentario, la presunta responsabilidad de los Secretarios del Despacho. La oposición de las autoridades de Cádiz a la recepción del nuevo comandante general de la provincia, nombrado por el rey el 27 de octubre de 1821, en base a su pretendida colaboración con la antigua represión liberal, motivó una amarga carta del rey a las Cortes

66. *Diario Sesiones Cortes*, leg. 1821 (Madrid, 1871), 36-37.

67. *Diario Sesiones Cortes*, leg. 1821, 37-54.

en la que recababa su apoyo en el mantenimiento del orden constitucional ⁶⁸.

La comisión nombrada para redactar la minuta de contestación al mensaje del rey distinguió desde un primer momento dos cuestiones: la desobediencia a la autoridad constitucional del rey y el juicio sobre la actuación de sus ministros que se reservó para un examen posterior. Para la primera expresó una condena rotunda: «Las Cortes, Señor, por tanto no pueden menos de manifestar a V.M. y a la Nación del modo más terminante, que desaprueban altamente unos sucesos que podrán mirarse como precursores de males incalculables si no se atajan en su origen», al tiempo que se manifestaba el deber de los jefes políticos y de las autoridades militares de obedecer las providencias reales. Esta exposición, con el voto en contra de algunos diputados y ciertas correcciones de detalle, fue aprobada en la misma sesión que se nombrara a la comisión encargada de responder al rey (26 de noviembre de 1821), si bien ya en el curso de las discusiones se hizo patente la enemiga de ciertos diputados contra el ministerio Bardají, acusado por Flórez Estrada de tener «harto preparada» la guerra civil ⁶⁹.

El mismo dictamen de la comisión, en su parte relativa al análisis de la situación del país, achacaba a los Secretarios del Despacho de este ministerio parte de la culpa en los sucesos relatados por no ser, en su criterio «los más a propósito para adquirir la confianza pública». Tras relatar los principales actos de su gestión política, no bien avenidos con la defensa del orden constitucional y la adecuada administración financiera, la Comisión propuso a las Cortes enviar al rey un mensaje en el que se expusiera la conveniencia de reformar el ministerio «para calmar los temores y la desconfianza pública y para dar al Gobierno toda la fuerza que necesita» (Sesión de 12 de diciembre de 1821) ⁷⁰. El Secretario del Despacho de Estado, en la sesión del día siguiente, rechazó los motivos en que la comisión fundara su dictamen «motivos vagos e indeterminados y la mayor parte de pura presunción», anunciando que sólo respondería a sus cargos cuando se exigiese su res-

68. Sesión de 26 de noviembre de 1821, *Diario Sesiones Cortes*, leg. extraordinario de 1821-1822 (Madrid, 1871), 977.

69. *Diario Sesiones Cortes* (1821-1822), 1195-1198.

70. *Diario Sesiones Cortes* (1821-1822), 1241.

ponsabilidad en los términos previstos en la ley y en la Constitución.

El debate parlamentario, sumamente desagradable desde el punto de vista personal, se convirtió sin embargo en un muestrario de los males que aquejaban por entonces la vida social y política del país. Con gran franqueza se expusieron las causas de estos males desde la óptica oficial de los Secretarios del Despacho y de la a veces más radical y partidista de algunos diputados. Pero al tiempo, en diversas ocasiones, se intentó centrar el debate en su cuestión principal: la responsabilidad de los ministros. Son dignas de cita en este sentido las palabras del Secretario del Despacho de la Gobernación de la Península en las que se precisa el alcance de esta responsabilidad «la verdadera cuestión, la cuestión política es la de que en naciones constituidas, en que el Gobierno tiene más garantías que en España, el derecho de exigir la responsabilidad a los ministros se limita a sólo dos casos; y allí mismo para que este derecho de exigir la responsabilidad legal no puede ceder en mengua y detrimento del poder ejecutivo, es necesario que este mismo poder esté legalmente provisto de otro medio que no tiene el Rey entre nosotros: esto es, cuando la responsabilidad versa sólo sobre delitos de traición o de concusión. Por consiguiente cuanto más extenso es el ámbito dentro del cual se puede exigir la responsabilidad al poder ejecutivo, tanto más hay que temer por su estabilidad»⁷¹.

Pese a esta llamada a la concreción el debate discurrió, sin embargo, por los cauces más amplios, llegando a desecharse finalmente por una cuestión de fondo y forma, la exigencia efectiva de responsabilidad a los Secretarios del Despacho del ministerio Bardají. Como dijera Calatrava en la sesión de 15 de diciembre, sintetizando las largas intervenciones de los diputados a Cortes, del expediente no resultaban méritos para exigir dicha responsabilidad que por otro lado, desde un punto de vista formal, sería «cosa muy larga» («y para convencerse de ello —añadía—, no hay más que leer el Reglamento o recordar los trámites y formalidades que prescribe. Yo estoy seguro de que llegaría el mes de marzo, y aún no se habría instruido el expediente. Por eso en la absoluta imposibi-

71. *Diario Sesiones Cortes* (1821-1822), 1248.

lidad de apelar al medio de la responsabilidad; en el convencimiento que tienen las Cortes de que la situación del Ministerio no le permite continuar, no hay más recurso que adoptar el único medio que queda conforme a las leyes, a saber: la petición al rey»⁷². Las Cortes, secundando esta iniciativa, acordaron enviar un mensaje al Rey en el que se consideraba al ministerio Bardají carente «de la fuerza moral necesaria para dirigir felizmente el gobierno de la nación y sostener y hacer respetar la dignidad y prerrogativas del trono por lo que esperaban y rogaban al Rey, que en uso de sus facultades, tomase las providencias exigidas por la situación del Estado»⁷³. De este modo quedó resuelta, por inviabilidad práctica, la principal cuestión de responsabilidad ministerial suscitada en el trienio. En fechas posteriores, la Comisión de casos de responsabilidad creada por el Reglamento del gobierno interior de las Cortes (art. 85) conoció, sin mayores consecuencias, nuevas exposiciones sobre exigencia de responsabilidad a diversos Secretarios del Despacho: así una del general Riego contra el Secretario del Despacho de la Gobernación, Ramón Felíu⁷⁴; otra contra el Secretario del Despacho de la Guerra, a instancias de Manuel Beltrán de Lis, desechada finalmente por las Cortes⁷⁵, y aún otra contra el Secretario del Despacho de Hacienda que simplemente pasó a la comisión de casos de responsabilidad⁷⁶.

C) La década absolutista

Con la reimplantación del absolutismo fernandino, la institución ministerial volvió a perder su incipiente caracterización autónoma respecto del rey, con lo que de nuevo su responsabilidad se desdibujó tras la persona del monarca. Declarados una vez más «nulos y de ningún valor todos los actos del Gobierno llamado constitucional» (R.D. 1 de octubre de 1823), se reinició la política emprendida en 1814 con la salvedad, a nivel ministerial, de la creación legal del Consejo de Ministros, como órgano asesor del rey en la misma línea de los Consejos restablecidos (R.D. 19 de noviem-

72. *Diario Sesiones Cortes* (1821-1822), 1308-1309.

73. *Diario Sesiones Cortes* (1821-1822), 1308-1309.

74. *Diario Sesiones Cortes* (1821-1822), 1841; 1878.

75. *Diario Sesiones Cortes* (1821-1822), 1731-1734; 1751.

76. *Diario Sesiones Cortes* (1821-1822), 2151.

bre de 1823)⁷⁷. Sin embargo, al igual que ocurriera en la primera etapa absolutista, una misma falta de continuidad y coherencia afectó de nuevo la marcha de esta institución colegiada: al Consejo de Ministros sucedió un mes más tarde el restablecimiento del Consejo de Estado (R.D. 3 de diciembre de 1823), suspendido por su inoperancia poco tiempo después, creándose en su lugar la Junta Consultiva de Gobierno (13 de septiembre de 1825)⁷⁸, cuyo fracaso hizo renacer al Consejo de Estado, encargado ahora «de arreglar la administración total de los diversos ramos de mis Reinos» (R.D. 28 de diciembre de 1825), en unos términos tan amplios que anuló el papel del Consejo de Ministros, suspendido por ello el 8 de febrero de 1826, aunque restablecido pronto en agosto del mismo año, ante las reiteradas exposiciones de los ministros en favor de un órgano que facilitase su coordinación. En la medida que subsistía el Consejo de Estado como órgano asesor del monarca y el Consejo de Ministros, este último fue perfilando más su naturaleza resolutoria (R.D. 31 de diciembre de 1824) la misma que alcanzara plenamente en la etapa posterior⁷⁹.

La vida política de José García de León y Pizarro, Secretario del Despacho de Estado en dos ocasiones, 1812 y 1816-1818 y aún de la Gobernación de la Península (23 de junio de 1812-14 de enero de 1814), ilustra con cierta claridad sobre la difícil posición de un ministro fernandino en la etapa absolutista⁸⁰.

Perdido el favor real y exonerado de su último cargo de Secretario del Despacho de Estado el 14 de septiembre de 1818, este hombre político inició una singular pugna dialéctica con el poder a fin de obtener su reintegración en el favor real, previa la depu-

77. J. A. ESCUDERO, *La creación de la Presidencia del Consejo de Ministros*, AHDE, 42, 1972, págs. 757-767; P. GONZÁLEZ MARIÑAS, *Génesis y evolución de la Presidencia del Consejo de Ministros en España (1800-1875)*, Madrid, 1974, 76-81 (este trabajo reproduce el anteriormente citado del autor); J. M.^a GARCÍA MADARIA, *Estructura de la administración central (1808-1931)*, Madrid, 1982; A. GUAITA, *El Consejo de Ministros*, Madrid, 1967.

78. J. A. ESCUDERO, *La Real Junta Consultiva de Gobierno (1825)*, Madrid, 1973

79. GONZÁLEZ MARIÑAS, *Génesis y evolución*, 91-101.

80. Reconstruimos las vicisitudes personales de su trayectoria política en base a la obra de J. A. ESCUDERO, *Los cambios ministeriales*, apéndice documental, págs. 87-143

ración, a propia instancia, de sus presuntas responsabilidades. En una de las primeras instancias de José Pizarro solicitando el favor del rey (1818) le manifiesta su pronta disposición a satisfacer cualquier cargo que se le hiciera sobre su empleo: «yo estoi pronto a responder y a dar quenta de mi conducta ministerial, de mi sistema político y aun de los expedientes más menudos; sé que en todos aparecerá ardiente celo por el servicio de V.M. y la más estricta honradez política. Mi anhelo no es otro que el de que no se desfigure mi mérito moral con respecto a V.M.»⁸¹. En memoriales posteriores de 1820 y 1823, manteniendo esta misma pretensión clarificadora adelanta sin embargo algunas posibles causas de su caída en desgracia: la conjura de pérfidos consejeros contrarios a su política ministerial de indulgencia o amnistía general (a los cuales, por ésta y otras intrigas, les hace «responsables a la nación»); la «malhadada guerra de empleos» a la que acusa de ser instigadora de absurdas calumnias, etc.⁸². A partir de 1823, perdida la esperanza de recobrar el favor real por medio de súplicas y memoriales, cambia de táctica y pide que se le «purifique» en causa legal: «contra mí nada haí, nada; pero si se quiere hacer una singularidad conmigo, purifíquese qualquiera duda (injusta) en una causa legal»⁸³.

Dos años de instancias y representaciones lograron que finalmente por Real Orden de 10 de marzo de 1825, el Consejo Real elevara consulta al rey, previo dictamen, sobre el tribunal que debía conocer «la causa legal sobre la conducta política» del citado ex ministro⁸⁴. Como se deduce de esta Real Orden, en el complejo institucional de la monarquía absoluta no estaba previsto un trámite semejante, por lo que el desconcierto oficial, plasmado en la consulta, constituyó la primera reacción a la insólita pretensión del ex ministro. Aunque en consideración al objeto específico de la consulta y las circunstancias que concurrían en la persona del

81. Ibidem, pág. 100.

82. Ibidem, pág. 114.

83. Ibidem, pág. 116.

84. El Consejo en Sala Primera, 20 de abril de 1825. Consulta a V.M. su dictamen a consecuencia de la Real Orden de 10 de marzo último en razón del tribunal que debe conocer de la causa que sobre su conducta política ha pretendido se le abra D. José Pizarro, ESCUDERO, *Los cambios ministeriales*, 119-121

solicitante, el fiscal del Consejo dictaminó ser el propio Consejo el único tribunal que en principio resultaba idóneo, apuntaba ya en su informe que, por tratarse de averiguar la opinión política del interesado, debería someterse el caso a las reglas prescritas para la purificación de los empleados en la Administración civil del Estado. Y éste fue el parecer del Consejo y el criterio adoptado: someterle al juicio de purificación, bien en la forma usual aplicada a todas las clases del Estado o en la especial que se hubiese dispuesto para los consejeros de Estado⁸⁵. Siete meses más tarde (23 de octubre de 1825), la mujer de José Pizarro, en su calidad de apoderada, presentó una detallada exposición de la trayectoria política del mismo ante la Junta de Purificaciones de Consejeros de Estado. Aunque no procede entrar aquí en el análisis de los informes de los miembros de la Junta que finalmente declaró impurificado al ex Secretario de Estado (Resolución de 10 de septiembre de 1827), merece sin embargo una mención especial el voto particular favorable a aquél de su Presidente, Antonio Gómez Calderón, admirable por su ponderación, el cual años más tarde llegaría a imponerse al adoptar el Consejo de Ministros de 10 de febrero de 1830 el acuerdo unánime de su purificación «por no resultar contra él cargo legítimo ni fundado en ley ni en justicia»⁸⁶. Así terminaba, tras más de dos lustros de pugna con las instancias de poder político y judicial de la monarquía absoluta fernandina, la singular peripecia de un ex ministro por recobrar su honor y buen nombre político.

5. *La responsabilidad ministerial en la época del Estatuto Real*

Las conocidas reformas operadas en la Administración central a la muerte de Fernando VII, en especial la supresión de los antiguos Consejos de Castilla, Indias, Guerra y Hacienda (R.D. 24 de marzo de 1834)⁸⁷, repercutieron favorablemente en la progresiva afirmación de la institución ministerial. De esta época data la efec-

85. J. A. ESCUDERO, *La Real Junta Consultiva de Gobierno*, 97 y ss. cf. P. PEGENANTE, *Represión política en el reinado de Fernando VII*, Las comisiones militares (1824-1825), Pamplona, 1974.

86. En J. A. ESCUDERO, *Los cambios ministeriales*, pág. 139.

87. I. SÁNCHEZ BELLA, *La reforma de la Administración central en 1834*, en Actos del III Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 655-688.

tiva existencia de la Presidencia del Consejo de Ministros, con su influencia en la configuración del régimen parlamentario, personificada entonces por Martínez de la Rosa, Toreno, Mendizábal e Istúriz⁸⁸. De entonces data también la creación de las Subsecretarías para aligerar a los Secretarios del Despacho de la ingente tarea que les supuso la extinción de los Consejos, permitiéndoles dedicarse con mayor empeño a la alta política de reformas y a la acción parlamentaria (R.D. 16 de junio de 1834)⁸⁹. Finalmente por esta época y ello guarda estrecho contacto con el tema de la responsabilidad ministerial, se generalizaron las mociones de censura y los votos de confianza, las «cuestiones de Gabinete», que revelaban un progresivo afianzamiento del régimen parlamentario⁹⁰.

A la muerte de Fernando VII se abrió en el país un período de incertidumbre política que el manifiesto de la reina gobernadora, de 4 de octubre de 1833, no pudo cerrar. Dentro de una línea de continuidad con el reinado precedente se fijaba en él un doble principio de gobierno: el mantenimiento de la antigua soberanía real absoluta y las reformas administrativas, «únicas que producen inmediatamente la prosperidad y la dicha, que son el solo bien de un valor positivo para el pueblo»⁹¹. Este manifiesto, que a la vez expresaba el pensamiento del ministerio Cea Bermúdez orillaba, siquiera pasajeramente, los consejos de reforma política de personajes tan allegados a la Corte como el marqués de Miraflores o el General Quesada⁹². Aún contando con el refuerzo importante del hombre capaz de hacer viable tal mensaje administrativo, Javier de Burgos, el ministerio de Cea tenía los días contados por la ene-

88 Vid. supra nota 72.

89. *Gaceta de Madrid* del 17; también en J. M. NIEVA, *Colección de Decretos*, XIX, págs. 309-310.

90. GONZÁLEZ MARIÑAS, *Génesis y evolución*, 103-127; J. SEVILLA MERINO, *El impeachment en el Derecho español del siglo XIX*, en *El control parlamentario del gobierno en las democracias pluralistas*, ed. M. Ramírez, Barcelona, 1978, 149-159.

91. J. TOMÁS VILLARROYA, *El sistema político del Estatuto Real (1834-1836)*, Madrid, 1968, 19-27; Javier de BURGOS, *Anales del reinado de Doña Isabel II*, tomos I-III, Madrid, 1850; Tomos IV-V, Madrid, 1851, I, 152-156; 343-344 (manifiesto); A. PIRALA, *Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista*, tomo II, Madrid, 1984, I, 191-193; 652-654.

92. J. de Burgos, *Anales*, I, 151-152.

miga de los liberales. Las exposiciones de los generales Llauder y Quesada fueron el detonante de una situación de descontento y crítica generalizada que, como allí se indicaba, comenzaba a resultar peligrosa para el mismo trono de Isabel⁹³. El dictamen del Consejo de Gobierno favorable a la tesis de Quesada, sobre la necesidad de reunir «una verdadera representación nacional», llevaba aparejado el cese de Cea y la formación de un nuevo ministerio, capaz de afrontarla. Martínez de la Rosa, el veterano liberal, antiguo ministro de Estado durante el trienio constitucional, fue el elegido para esta misión desde su cargo de nuevo ministro de Estado⁹⁴. Acogido con esperanza y satisfacción por la prensa en general y con expectación por todos los que creían en la posible realización de las mejoras anunciadas por las doctrinas liberales, el ministerio de Martínez de la Rosa se orientó desde un primer momento a la formación de un nuevo pacto político sancionado por la reina gobernadora el 10 de abril de 1834, y promulgado solemnemente bajo la denominación de *Estatuto Real para la convocación de las Cortes Generales del Reino*.

Esta «especie de constitución» basada explícitamente en las antiguas leyes fundamentales de la Monarquía, venía a cubrir el anhelo de reforma de los liberales moderados, no así de los doceañistas, los cuales desde un primer momento manifestaron su enemiga al nuevo texto constitucional, calificándolo de anacrónico y engendro político, si bien se le reconocía el mérito de haber roto «el largo silencio impuesto a la España por la violencia»⁹⁵. Desde el punto de vista de la responsabilidad ministerial tuvo asimismo el mérito de hacer posible su regulación.

Por más que el Estatuto, destinado a restaurar las leyes fundamentales de la Monarquía, comenzando por convocar las Cortes generales del Reino, no contemplaba ésta ni otras cuestiones centrales de gobierno, fue bajo su vigencia teórica cuando se llevó a cabo el ensayo más serio de nuestra historia constitucional de regular la responsabilidad de los ministros. Remitidas muchas de estas cuestiones por el propio Estatuto a sendos reglamentos para el

93. En J. de BURGOS, *Anales*, I, 345-351 (Llauder); 352-357 (Quesada).

94. Tomás VILLARROYA, *El sistema político*, 43-50; cf. P. SARRAILH, *Martínez de la Rosa, un homme d'Etat espagnol*, Burdeos, 1930.

95. PIRALA, *Historia de la guerra civil*, I, 461.

régimen y gobierno del Estamento de Próceres y Procuradores (promulgados tres meses más tarde, el 18 de julio de 1834)⁹⁶ en sendos artículos de estos Reglamentos se prefiguraba la ley de responsabilidad. Así el artículo 119 del Reglamento del Estamento de Próceres confería al mismo atribuciones judiciales, entre otras cosas, «cuando juzgue a los Secretarios del Despacho en virtud de una acusación entablada por el Estamento de procuradores del reino con arreglo a la ley de responsabilidad, y según los trámites que ésta señale». En el mismo sentido, el artículo 139 del Reglamento de procuradores disponía que dicho Estamento podría «ejercer una atribución judicial cuando promueva la acusación contra algún Secretario del Despacho por los delitos que prefije la ley de responsabilidad y según los trámites que ésta señale». Esta cuestión, pues, iba a ser una de las primeras a examinar por las Cortes, convocadas, a pesar de la escalada carlista de Zumalacárregui, para el 24 de julio.

En medio de una terrible epidemia de cólera, la reina Gobernadora abrió ese día en Madrid las Cortes generales del reino. En su discurso de apertura expuso el noble objeto propuesto: unir el trono con los derechos de la nación, «dando a unos y otros por común cimiento las antiguas instituciones de estos reinos», presentando a continuación el panorama de la situación interior e internacional, con el cólera y su secuela de desorden social (asesinato de frailes, quema de conventos, omitidos sin embargo en una referencia imprecisa a los «lamentables desórdenes»), la guerra civil con los carlistas, el estado de las relaciones diplomáticas, y el papel crucial del ejército. El discurso terminaba con una referencia a las reformas practicadas en varios ramos de la administración por sus Secretarios del Despacho (entre los cuales se citaba, la división del territorio, la reparación y deslinde entre la parte administrativa y judicial, la supresión de antiguos Consejos, y las nuevas audiencias creadas en beneficio de algunas provincias), terminando con estas palabras: «El Estatuto Real ha echado ya el cimiento, a vosotros corresponde, Ilustres Próceres y señores Procuradores del Reino,

96. Real Decreto que contiene los Reglamentos para el régimen y gobierno de los Estamentos de Próceres y Procuradores del Reino, Madrid, 1834. Reglamentos (del Congreso de los Diputados y de las Cortes), Madrid, 1977, 109-137

concurrir a que se levante la obra en aquella regularidad y concierto que son prendas de estabilidad y firmeza»⁹⁷.

El discurso de contestación a la Corona fue el primer tema a tratar por ambas Cámaras colegisladoras. Si en el Estamento de Próceres el proyecto de contestación fue aprobado sin mayores dificultades no ocurrió lo mismo en el Estamento de Procuradores. El dictamen de la comisión, aunque aprobado en su totalidad, sufrió modificaciones y retoques que corregían la fuerza de algunas expresiones. Pese a ello se mantenían párrafos virulentos contra la situación interior heredada⁹⁸ y, a la vez, se trazaba el cuadro de los principios a que ajustaría su acción la Cámara; eran éstos la protección igualitaria de los derechos sociales, la libertad de imprenta, el fomento y mejora organizativa de la milicia urbana, la igualdad de derechos ante la ley, la libertad civil, la seguridad personal y la inviolabilidad de la propiedad. A estos principios se añadía la independencia y responsabilidad del poder judicial en todas sus clases y la responsabilidad de los ministros «igual responsabilidad en el poder ministerial» de tal forma que «los pueblos... conocerán la diferencia entre un gobierno absoluto que todo lo atropella y un sistema paternal que sólo usa de la autoridad para promover la felicidad común».

En todo caso en el seno del Estamento de Procuradores bullía una oposición al Estatuto que se manifestó tempranamente en la extemporánea fijación de sus principios de acción legislativa y, a poco, en la presentación inmoderada de peticiones, previstas por otro lado en el artículo 32 del Estatuto, entre las que destacó por su importancia la llamada tabla de *derechos fundamentales*. Los doce artículos de que se componía esta tabla de derechos reproducía en parte los principios antes reseñados. El artículo 11 decía a este respecto: «Los Secretarios del Despacho son responsables

97. J. de BURGOS, *Anales*, I, 383, cf. I, 298.

98. 6. «El cuadro que presenta la situación interior del reino «nos ha dicho V.M.), está lejos de ser tan halagüeño como vuestro patriotismo deseara. Es muy cierto, señora: este cuadro no es halagüeño, es bien triste. Muchos años de un sistema desacertado, de una administración arbitraria y de una reacción obstinada contra los principios reconocidos como axiomas en toda buena organización social, nos han traído por una progresión descendente a un notable estado de depresión y de miseria». Apud. J. de BURGOS, *Anales*, I, 391-396; 392-393.

por las infracciones de las leyes fundamentales, por los delitos de traición y concusión y por los atentados contra la libertad individual, seguridad personal, y derecho de propiedad.» En la exposición que precedía al proyecto de derechos fundamentales se hacía mención a su conveniencia indiscutible: «bastaría solamente indicar que es muy fácil que los Ministros abusen de sus vastas atribuciones y autoridad inmensa y que conviertan contra la nación los medios y recursos de que dispone el poder y, sobre todo, su consecuencia con lo prevenido por el artículo 139 del Reglamento del Estamento de Procuradores»⁹⁹.

Votada favorablemente la totalidad de la petición por el Estamento de Procuradores, a pesar de la buena argumentación en contra de algunos procuradores y ministros, se entró en la discusión por artículos y en relación con el 11 que nos ocupa, uno de los firmantes de la petición, el Sr. Caballero, propuso la supresión de la última parte del mismo, presentando la siguiente redacción: «Los Secretarios del Despacho son responsables por las infracciones de las leyes fundamentales y los delitos de traición y concusión.» La razón aducida fue la de haberse acogido en artículos anteriores que formulaban principios fundamentales su responsabilidad por los ataques contra las personas y propiedades. En contra de la supresión y proponiendo aun su ampliación al supuesto de los atentados que cometiesen contra el honor, habló brevemente el Sr. Vega y Río, por más que su observación no fue aceptada, por estimarla contraria a los fines perseguidos de garantizar explícitamente los derechos del hombre en sociedad. Dándose por suficientemente discutido quedó aprobado el artículo con aquella supresión¹⁰⁰.

Esta «especie de constitución en doce artículos», como llamaba Pirala a esta petición de la oposición de la Cámara, tuvo el efecto inmediato de destruir la base parlamentaria del Estatuto que descansaba sobre la prohibición de que las Cortes deliberasen sobre asunto alguno que no hubiera sido sometido expresamente a su

99. Sesión de 28 de agosto de 1834. *Diario de las Sesiones de Cortes*. Estamento de Procuradores, leg. 1834-1835 (Madrid, 1867), págs. 93-96.

100. Sesión de 10 de septiembre de 1834. *Diario de las Sesiones de Cortes*. Estamento de Procuradores, leg 1834-1835, pág 285.

examen en virtud de un decreto real (art. 31 del Estatuto Real). Pero, a la vez, esta petición fue el precedente de infinitas proposiciones de reformas, que se complicaron con nuevos sucesos como el de la insurrección de 18 de enero de 1835 que, aunque terminó con capitulación, produjo un gran descrédito al gobierno, motivando la dimisión del ministro de la Guerra, Llauder, a quien en el Estamento de Próceres se le llegó a exigir responsabilidad ¹⁰¹.

El golpe de gracia para el ministerio de Martínez de la Rosa vino curiosamente, en una época transida de conspiraciones y revueltas, de un intento por restablecer ciertas condiciones humanitarias en el desarrollo de la guerra civil. El tratado llamado de Elliot, por la mediación de este representante del gobierno inglés en las estipulaciones entre el general Valdés y Zumalacárregui, provocó una tormenta parlamentaria en la que Argüelles pidió explicaciones al gobierno y Caballero le exigió responsabilidad. Aunque la lenta lectura del tratado por Martínez de la Rosa ante el Estamento de Procuradores conjuró el dictamen de la comisión sobre esta proposición de responsabilidad, que no llegó siquiera a ser votado, el grito «muera el traidor» le acompañó hasta su cese en el cargo ¹⁰².

No por ello cesó la revolución. Su sucesor, el conde de Toreno, se encontró a la altura de agosto con una revolución generalizada que si en unos casos pretendía el restablecimiento de la Constitución de Cádiz o la convocatoria de nuevas Cortes constituyentes, en todas reclamaba la formación de un nuevo ministerio. La enemiga de las Juntas —la de Badajoz llegó a pedir la formación de causa a todos los ministros habidos desde 1834 y la de Cádiz declaró al conde de Toreno reo de alta traición— precipitó la caída del fugaz ministerio ¹⁰³. Su sucesor, Mendizábal, saludado por la prensa liberal como el salvador y regenerador de la patria, se hizo cargo el 14 de septiembre de 1835 del gobierno de la nación. Su manifiesto político, presentado a la reina y publicado ese mismo día en la «Gaceta» para general información, contenía una vaga

101. PIRALA, *Historia de la guerra civil*, II, 114.

102. J. de BURGOS, *Anales*, II, 121-139; PIRALA, *Historia de la guerra civil*, I, 578; II, 119.

103. J. de BURGOS, *Anales*, II, 190; IV, 236-241, PIRALA, *Historia de la guerra civil*, II, 168.

referencia a los perentorios problemas nacionales, guerra civil, suerte de las corporaciones religiosas, crédito público, derechos y deberes populares, cuya solución se confiaba al nuevo gobierno; a «un ministerio compacto, fuerte, homogéneo y sobre todo responsable, que se robustezca con las simpatías y el apoyo de la representación nacional»¹⁰⁴..

Sometidas las Juntas y aliadas al esfuerzo bélico del Gobierno a través de las recién creadas Diputaciones provinciales (R.D. 21 de septiembre de 1835) y las transitorias Comisiones de armamento y defensa, la reina gobernadora pudo firmar el decreto de convocatoria de nuevas Cortes para el 16 de noviembre, a las cuales expresamente se recomendaba la revisión del Estatuto «para asegurar de una manera estable el entero cumplimiento de las antiguas leyes fundamentales de la monarquía» y el desarrollo de los principios programáticos del mensaje de Mendizábal. En relación con éstos, la reina gobernadora en su discurso de apertura decía: «tres proyectos de los más importantes se presentarán a vuestra deliberación: el de elecciones, base del gobierno representativo; el de la libertad de imprenta, que es su alma, y el de la responsabilidad ministerial, que es su complemento, asegurando y al mismo tiempo haciendo compatibles la inviolabilidad del monarca y los derechos de la nación»¹⁰⁵. Estas y otras cuestiones importantes (arreglo de la Hacienda, de las comunicaciones, del clero regular, de la administración municipal, de los bienes de propios), serían sometidos a la consideración de las Cortes en esta segunda legislatura.

En la discusión de los párrafos del proyecto de contestación al discurso de la Corona se suscitó un interesante debate en el Estamento de Procuradores sobre la responsabilidad ministerial. Calderón Collantes consideraba esta ley de menor urgencia y de difícil definición y aplicación por lo que solicitaba su deliberación en otras Cortes posteriores a las cuales se les debía encomendar el enlace de esta cuestión con la ley fundamental. López, por su parte, aún

104. J. de BURGOS, *Anales*, V, 404-405; PIRALA, *Historia de la guerra civil*, II, 353-356; 649-650; P. JANKE, *Mendizábal y la instauración de la Monarquía constitucional en España (1790-1853)*, Madrid, 1974; A. GARCÍA TEJERO, *Historia político-administrativa de Mendizábal*, Madrid, 1858.

105. PIRALA, *Historia de la guerra civil*, II, 653

admitiendo la dificultad de hacer efectiva esta responsabilidad recogida en un dicho popular («los ministros son muchas veces acusados, menos juzgados, pocos sentenciados y ninguna sentencia ejecutada») ¹⁰⁶, pedía que al estilo francés fuese consignada esta ley y la de la libertad de imprenta en la Constitución. La oposición de Acevedo y Vega y Río de trasladar esta cuestión a unas Cortes nuevas, formadas según la nueva ley electoral, no mereció la aprobación de la Cámara y el párrafo de la comisión se aprobó sin

6. *El proyecto de ley de responsabilidad ministerial* (18-XII-1835; 29-IV-1836)

La ley de responsabilidad ministerial prevista por los reglamentos para el régimen y gobierno de los Estamentos de próceres y procuradores del reino y urgida en diferentes ocasiones por éstos, sufrió el retraso inherente a la inestabilidad ministerial de la época del Estatuto. Aunque el gobierno de Martínez de la Rosa, recogiendo aquel mandato legal y aquellas peticiones parlamentarias, nombró una comisión de próceres y procuradores con el fin de preparar una ley sustantiva y de procedimiento sobre la responsabilidad ministerial, esta ley no llegó a redactarse. Fue mérito del gobierno Mendizábal el haber presentado el 18 de diciembre de 1835 en el estamento de próceres un proyecto de ley sobre responsabilidad de los Secretarios del Despacho que desarrollaba uno de los principios programáticos de su manifiesto político ¹⁰⁸.

El proyecto contaba con 41 artículos distribuidos en tres títulos referidos respectivamente a disposiciones generales (arts. 1 a 8); a la acusación de los Secretarios del Despacho en el Estamento de Procuradores (arts. 9 a 20) y, por último, al modo de proceder del Tribunal de Próceres (arts. 21 a 41). Casi coetáneas al proyecto son las *Cuestiones de responsabilidad* de Joaquín Francisco Pacheco, recogidas luego en sus Estudios de legislación y Jurisprudencia.

106. *Diario Sesiones Cortes*, Estamento de Procuradores, leg. de 1835-1836 (Madrid, 1869), pág. 75.

107. *Diario Sesiones Cortes*, Estamento de Procuradores, leg. de 1835-1836, pág. 77; cf. 28-30.

108. Tomás VILLARROYA, *El sistema político del Estatuto Real*, 372-375. El texto del proyecto en *Diario Sesiones Cortes*, Estamento de Ilustres Próceres, 1835-1836 (Madrid, 1869), 43-49.

Divididas en dos apartados: De la responsabilidad ministerial y De la responsabilidad administrativa, la primera lleva fecha de 1836 y representa un comentario autorizado, a veces crítico, del proyecto de ley ya aprobado por el Estamento de Próceres. Es de advertir que este comentario es el de un jurista positivo que prescinde sistemáticamente de cualquier consideración metajurídica sea de índole histórica o sociológica. De ahí su relativo valor interpretativo, casi exclusivamente técnico, que lo hace más bien secundario en orden a la comprensión general del mismo ¹⁰⁹.

En la exposición de motivos del proyecto inicial del gobierno se destacaba ya la inexistencia de una ley adecuada de responsabilidad en los países más avanzados políticamente como consecuencia de la dificultad de hallar un punto de equilibrio entre la libertad y la fuerza conveniente del poder ejecutivo. Si a la vista de esta dificultad podría estimarse «ridícula» la presunción de desempeñar con acierto tamaña tarea legislativa y aun considerarse prematura su redacción, el gobierno, sin embargo, valorando otras causas, no lo entendió así. La principal fue pensar que «para asegurar el principio de inviolabilidad de la persona del monarca, era urgente no dejar en el aire el modo de exigir y de afirmar la responsabilidad ministerial». El alcance de este objetivo hacía secundarias las omisiones y defectos del proyecto de ley que, en todo caso, en su criterio, podrían ser enmendadas por la labor de los cuerpos colegisladores.

Esta ley que procuraba evitar las formulaciones generales poco avenidas con su propia índole, según el proyecto, se encontró con una dificultad técnica «insuperable»: decidir si se debía exigir sólo responsabilidad penal a los ministros o también a civil.

La cuestión se dejó sin resolver, traspasando a las Cortes la solución del problema. Por lo demás se reconocía poca originalidad en el proyecto gubernamental: «el gobierno no tiene la pretensión de haber sido creador en materia tan debatida por jurisconsultos eminentes y por las asambleas legislativas de naciones muy cultas, tanto es así que confiesa que en algunas cosas *casi ha copiado artículos de proyectos de ley en países extranjeros* cuando le ha parecido que se han acercado todo lo posible a la mayor perfección

109. J. F. PACHECO, *Estudios de legislación y de jurisprudencia*, Madrid, 1843, 75-88; 89-114.

apetecida»¹¹⁰. Esta referencia a la legislación extranjera se circunscribía fundamentalmente a Francia en donde, desde 1814, se habían redactado diversos proyectos de ley que, a pesar de informes y debates en las asambleas parlamentarias, no llegaron a cuajar en una ley de responsabilidad¹¹¹.

Una vez terminada la lectura del proyecto, en la misma sesión de su presentación parlamentaria (18 de diciembre de 1835), el Presidente del Estamento de Próceres consultó a la Cámara, si debía pasar a una comisión especial, lo que así se acordó. Esta comisión, formada por nueve próceres, presentó cuatro meses después, el 20 de abril de 1836, un dictamen que en esencia recogía, mejorando con diversas adicciones, supresiones y aclaraciones, el proyecto del gobierno¹¹². Así lo reconocía el propio Secretario de la Comisión Nicolás María Garelly, quien tras referirse a las razones legales del proyecto (mandato del art. 119 del Reglamento orgánico del Estamento) y políticas (sustraer la figura del rey de las campañas políticas por exigencias de responsabilidad), se centró en el análisis de su objeto y naturaleza.

En relación con el discutido tema de su naturaleza, era criterio de la comisión que, por estar los actos de los ministros sometidos al derecho común, sólo aquellos que emanasen del ejercicio de su autoridad, hechos susceptibles de varia calificación: ineptitud conocida, omisión culpable, abierta transgresión de la ley, etc., deberían ser objeto de responsabilidad, por lo que entendía debía excluirse la responsabilidad civil, si bien, en previsión de una interpretación contraria, se daba una redacción amplia al artículo 2.º que regulaba esta cuestión de naturaleza. En relación con la responsabilidad penal emanada fundamentalmente de los abusos de poder, se estimaba conveniente circunscribirla a un ámbito muy estrecho, delineado con claridad: delitos de traición, peculado o concusión y prevaricación. Esta era la principal novedad del dictamen de la comisión respecto al proyecto del gobierno, novedad que éste hizo suya una vez iniciada la discusión parlamentaria del mismo (sesión de 29 de abril de 1836), al aceptar el gobierno el proyecto de la comisión por entender que mejoraba formal y técnicamente su propio proyecto.

110. *Diario Sesiones Cortes*, Estamento de Ilustres Próceres, 1835-1836, 46.

111. Vid. *Supra* nota 38

112. *Diario Sesiones Cortes*, Estamento de Ilustres Próceres, 1835-1836, 63-66

En efecto el proyecto gubernamental sujetaba a responsabilidad *todos* los actos de los ministros, genérica e indistintamente, como recordaba el Secretario de Gracia y Justicia, Mendizábal, dando con ello amplia competencia judicial al Estamento de Próceres convertido de este modo en tribunal o «Gran jurado» primordialmente. El secretario de la comisión, Garely, justificó la lectura restrictiva del proyecto de la comisión en base a la situación del país y su misma legislación.

Por razones no tanto de principio como de aplicación efectiva de la responsabilidad ministerial, se opuso a la totalidad del proyecto el marqués de Miraflores. Tomando en consideración el ejemplo extranjero, caso de Francia, cuya Cámara de los Pares seguía ocupándose sin éxito del tema tras varios años de gobierno representativo, y, sobre todo, observando el estado social y jurídico de nuestro país, con una guerra civil que atacaba la idea misma de Estado representativo y con una falta de códigos que impedía a esta ley ser su complemento solicitaba la suspensión del proyecto legal «hasta que tengamos códigos»¹¹³. En su contestación por la comisión, Garely recordó que una vez admitido el principio de responsabilidad ministerial lo único pertinente era limitar legalmente su exigencia, siendo precisamente para evitar «el caos de nuestra legislación actual» que la comisión hubiera formado una especie de «código de responsabilidad» de interés para la monarquía, el gobierno y la nación.

De más alcance fue la intervención en contra de la totalidad del proyecto del conde de Parsent, el cual rehuyendo expresamente su consideración teórica¹¹⁴, solicitó, por ser a su juicio más operativa

113. *Diario Sesiones Cortes*, Estamento de Ilustres Próceres, 1835-1836, 125-126.

114. «Al tomar pues la palabra, no ha sido precisamente mi objeto engolfarme en los racionios que he leído en los más famosos publicistas que han tratado este punto tan arduo de la política constitucional y especialmente el famoso Benjamin Constant». *Ibidem*, 129.

En efecto, a este autor se debía la primera exposición sistemática sobre el tema de la responsabilidad ministerial, y en unos términos no muy avenidos con la precisa delimitación de responsabilidad aprobada por el Estamento de Próceres. En efecto su tesis central de que «los actos ilegales, perjudiciales al interés público, sin relación causal directa con los particulares, y el mal uso del poder ministerial legalmente investido» constituyen el eje de la responsabilidad ministerial debiendo ser denunciados y perseguidos por las asam-

y urgente, una inmediata corrección del sistema administrativo en su conjunto que hiciera efectiva la responsabilidad de los agentes subalternos del gobierno ¹¹⁵. La intervención del conde de Ofalia por la comisión, limitada a una mera recapitulación de las ideas antes expuestas por Garelly, cerró el debate sobre la totalidad, tras el cual se votó a favor de entrar en el análisis de sus disposiciones particulares (sesión de 29 de abril de 1836).

En la discusión por artículos se repitieron algunos argumentos utilizados en el debate sobre la totalidad. Así, al discutirse el artículo 1.º relativo a la responsabilidad de los Secretarios del Despacho ¹¹⁶, Gil de la Cuadra, como hiciera antes el conde de Parsent,

bleas representativas, tenía el contrapunto de que como hay mil maneras de perjudicar al Estado, de modo que si hubiera que especificarlas por ley «el código de responsabilidad se convertiría en un tratado de historia y de política», abogaba en favor de una cierta arbitrariedad en la apreciación de su responsabilidad, al estilo de la ambigüedad que encierran los términos *high crimes and misdemeanours* de la práctica inglesa, que sin embargo no encierra ningún peligro por la moderación que entraña «la solemnidad del proceso, el carácter augusto de los jueces, la moderación de las penas». Esta doctrina, considerada un tanto abusivamente luego como de absoluta arbitrariedad en la apreciación de la responsabilidad ministerial, triunfó en la práctica al no llegar a fijarse en una ley especial, como disponía el artículo 3 del proyecto de ley de 1835-36, los supuestos concretos que la ocasionaban. B. CONSTANT, *De la responsabilité des ministres*. Ensayo publicado a fines de 1814 o comienzos de 1815. Asimismo su cap. IX de *Les principes de politique*, publicados en mayo de 1815. Estas obras y algunas otras se reunieron y reeditaron en 1820 bajo el título de *Cours de politique constitutionnelle*. Esta obra, condenada en nuestro país por el Santo Oficio, fue traducida libremente al castellano en 1820 por M. A. López, vid. F. L. YTURBE, prólogo a su versión castellana del *Curso de Política constitucional*, de B. Constant, Madrid, 1968.

115. *Diario Sesiones Cortes*, Estamento Ilustres Próceres, 1836, 127.

116. «Los Secretarios del Despacho son responsables si abusasen de su poder refrendando decretos de S.M., firmando resoluciones, órdenes, reglamentos u otras providencias que emanen de la autoridad real, apoyando medidas o dejando de tomarlas en los casos y modo que se expresa en esta ley» (Redacción de la Comisión D.S.C., Estamento de Ilustres Próceres, 1836, 122). El proyecto de ley gubernamental decía: «Los Secretarios del Despacho, obligados a firmar o refrendar todas las leyes que se promulgan, y todos los decretos, reglamentos órdenes y demás providencias que emanen de la autoridad real, están sujetos a responsabilidad si hacen ejecutar o consienten que se ejecute alguna sin estar firmada o refrendada por alguno de ellos» (*ibidem*, 46)

aludió a la incongruencia de contar con una ley que exigiere responsabilidad a los ministros, algo por lo demás fácilmente salvable por la censura de los Estamentos, en tanto que no se exigía allí donde más eficaz podía resultar de cara a una renovación administrativa, judicial, económica o militar¹¹⁷. La comisión respondió con cierta elíptica argumentación no ser ésta la cuestión a dilucidar cuando se trataba de la responsabilidad ministerial y que, en todo caso, nada impedía que en el futuro se atendiese la responsabilidad de los segundos agentes de la autoridad real, «objeto de otra ley de más difícil examen que la actual» diría el conde de Ofalia.

El artículo 2.º que sentaba el conocido principio de la responsabilidad peculiar del Secretario del Despacho que abusase de su poder refrendando decretos del rey o firmando órdenes o providencias emanadas de la autoridad real, apoyando medidas o dejando de tomarlas en los casos y modos expresados por la ley, apenas suscitó discusión. Solamente el marqués de San Felices propuso una redacción más severa que obligase a los ministros no partidarios de las medidas adoptadas, a dimitir «como prueba inexcusable de que no tomó parte en aquella deliberación», propuesta no admitida por el daño político que tal medida podía acarrear en la marcha de cualquier gobierno.

Si en la primera sesión de la discusión por artículos se aprobaron tan sólo dos del proyecto, en los siguientes se dio un curso rapidísimo a su discusión y aprobación. Así en la sesión del 30 de abril se aprobaron un total de 20 artículos, debido probablemente al fuerte carácter técnico de los mismos que limitó en gran medida el debate parlamentario. En esta sesión se discutió y aprobó conforme a la redacción de la comisión el artículo 3.º que limitaba la responsabilidad individual o colectiva de los Secretarios de Despacho, a los delitos de traición, peculado o concusión y prevaricación¹¹⁸. En su discusión el marqués de San Felices abogó por una

117. *Diario Sesiones Cortes*, Estamento de Ilustres Próceres, 1836, 129.

118. Art. 3. La responsabilidad de los Secretarios del Despacho, individual o colectiva, sólo tiene lugar en los delitos de traición, de peculado y de prevaricación, perpetrados por medio de algunos de los siguientes hechos:

1. Si atentaren contra la persona del Rey ó la del Regente ó gobernador del Reino, ó contra la seguridad interior o exterior del Estado, ó contra el orden de sucesión en el Trono, ó contra la autoridad del Rey ó la de los Esta-

eliminación de las causas enumeradas de responsabilidad en favor de una consideración genérica de las mismas al estilo de los «high-crimes and desmeanor» del sistema inglés («yo quisiera que se adoptase aquí el método de Inglaterra: que pudieran ser acusados los Secretarios del Despacho por todas las providencias desacertadas que tomasen»), dejando a los Estamentos gran libertad para acusar y juzgar los abusos de poder. En defensa del proyecto habló atinadamente el Secretario de Gracia y Justicia, Mendizábal, limitándose el Secretario de la comisión a explicar la semántica de los términos utilizados, en cuyas amplias categorías delictuales se acogían los diferentes supuestos de responsabilidad incluso los citados por el marqués de San Felices ¹¹⁹.

El artículo 4.º que marcaba un límite temporal a la exigencia de responsabilidad, dos años si la ejecución de los actos que la provocaban tuvo lugar en la Península y cuatro si se verificó en las provincias de Ultramar, fue modificado a instancia del propio Secretario de Gracia y Justicia teniendo en cuenta de manera más acabada la gradación según las distancias: Un año si la ejecución de los actos por los que se exige responsabilidad tuvo lugar en la Península; dos años, si fue en La Habana y cuatro en las restantes provincias de Ultramar ¹²⁰.

Los artículos 5 a 23, de acusado carácter técnico referidos a la preparación, instrucción y fallo de las causas de responsabilidad de los Secretarios del Despacho, fueron aprobados apenas sin dis-

mentos que haya sido reconocida por las leyes fundamentales, bien sea por medio de consejos, actos, órdenes dadas o planes concertados, bien por omisión de providencias cuando las exigiese notoriamente el buen uso de su autoridad.

2. Si ordenasen ó tolerasen á sabiendas el cobro de rentas, contribuciones ó impuestos no establecidos legalmente, ó distrajesen los caudales del Estado de los objetos á que se hallen aplicados por los Cuerpos colegisladores, ó se excedieren de los créditos abiertos á sus departamentos respectivos, ó abusan de su autoridad para el acrecentamiento notorio de sus intereses particulares por sí ó por interpuesta persona ó autorizasen empréstitos o reconociesen créditos contra el Estado sin anuencia de los Estamentos.

3. Si comprometiesen á sabiendas los intereses del Estado, infringiendo las leyes, ó descuidando abiertamente su ejecución por medio de actos cuya gravedad pueda considerarse como una violación positiva de los derechos públicos generales.

119. *Diario Sesiones Cortes*, Estamento de Ilustres Próceres, 1836, 135

120. *Diario Sesiones Cortes*, Estamento de Ilustres Próceres, 1836, 139.

cusión, y esta misma celeridad se mantuvo en la sesión siguiente de 3 de mayo, en la que se aprobaron sin mayor oposición los restantes artículos del proyecto, 24 a 40 ¹²¹. Al discutirse el artículo 24 se suscitó la posible redundancia de la expresión tribunal de Justicia que figuraba en el mismo, defendida por la comisión desde el momento en que en el reino había otros tribunales, de comercio, de cuentas, que podían inducir a confusión. En este sentido el título oficial del tribunal especial competente en las causas del Secretario del Despacho sería el de *tribunal de Justicia de Próceres del Reino* (arts. 19, 24, 27). Los artículos, 25 a 30, que sentaban meras reglas procesales, se leyeron y aprobaron sin discusión. El artículo 32 que regulaba la vista de la causa y las condiciones exigidas a los Próceres para formar parte del tribunal (exigiendo la asistencia de dos terceras partes de los Próceres hábiles, es decir, nombrados seis meses antes de haberse promovido la acusación, residentes en el lugar donde se hallase el tribunal y que no se hubiesen excusado por causas legítimas) fue objeto de una larga discusión que no sirvió para modificar, sin embargo, su redacción. El artículo 33 que garantizaba el derecho a recusar, sin expresión de causa, la octava parte de los próceres que asistiesen a la vista, fue devuelto a la comisión para una nueva redacción que aclarase la cuestión, poco matizada en el texto, de la recusación en el caso de que la responsabilidad fuese colectiva. El artículo 34 relativo a la defensa libre del acusado, fue objeto de enmiendas que pretendían fijar la condición letrada de sus defensores, con el fin declarado (por el conde de Montijo) de restar pasión política a los debates. En su contestación por la comisión, el conde de Ofalia recordó que, pudiendo valerse el acusado de tantos defensores cuantos fuesen los comisarios nombrados por el Estamento de Procuradores, siempre podría elegir un defensor letrado para la parte técnica del juicio y otro lego en derecho pero apto para tratar la parte política del mismo, sin contar con la posibilidad, siempre presente, de la politización de la defensa de la causa para la cual un letrado contaba en principio con mejores armas que un lego. El artículo se aprobó sin modificación y sin discusión se aprobaron asimismo los siguientes, el 35 y 36, que señalaban la forma de la vista y decisión de

121. *Diario Sesiones Cortes*, Estamento de Ilustres Próceres, 1836, 145-154.

la causa. El artículo 37, relativo a las penas aplicables, dio lugar a una ardua discusión sobre la conveniencia de mantener o suprimir la pena de muerte o de incluir otras no previstas, como la de multa o deportación, que finalmente se cerró con la adición de estas últimas aunque mantuvo el criterio de la comisión favorable a la pena de muerte. El artículo 38 fijaba brevemente el principio de no separación del tribunal sin haberse votado la causa y haber firmado la sentencia todos los jueces. El artículo 39 relativo a la publicidad de la sentencia y a su ejecución por el Gobierno, fue devuelto a la comisión para corregir su redacción parcialmente defectuosa. El artículo 40, último del proyecto, referido a la nueva audiencia del acusado rebelde, fue aprobado sin discusión.

Diez días después en la sesión del 13 de mayo de 1836 el secretario de la comisión Garelly, leyó el dictamen sobre las adiciones presentadas al proyecto de ley de responsabilidad ministerial que en su mayor parte fueron rechazadas.

7. El fin del Estatuto y del primer proyecto de regulación de la responsabilidad ministerial

Si en la breve legislatura de 1835-1836 el estamento de procuradores llegó a conocer dos de los tres proyectos anunciados por la reina gobernadora en su discurso de apertura de las Cortes, el electoral y el de libertad de imprenta (que quedaron pendientes de discusión), en la siguiente legislatura, comenzada el 22 de marzo de 1836, hubo de dejar pendiente del dictamen de la comisión el proyecto de ley de responsabilidad ministerial remitido por el estamento de próceres. La crisis del gobierno Mendizábal en mayo de dicho año, provocada por la destitución de varios jefes militares no aceptada de buen grado por la reina gobernadora, dio paso a la formación de un nuevo gabinete presidido por el moderado Istúriz¹²². La enemiga inmediata de parte del estamento de procuradores contra el nuevo gobierno, desembocó tras varias sesiones de acoso parlamentario, en la presentación el 21 de mayo, por 78 procuradores de una proposición de declaración de no merecer el go-

122 P. JANKE, *Mendizábal*, 215.

bierno Istúriz la confianza de la nación¹²³, la cual forzó a la disolución de las Cortes dos meses justos después de su comienzo. Enfrentados los grupos liberales entre sí, lograron los exaltados extender la insurrección provincial al aire de la bandera de la constitución de Cádiz frente al nuevo propósito oficial de hacer revisar el Estatuto por las Cortes convocadas para el 24 de agosto¹²⁴. El decreto de la reina gobernadora de 13 de agosto de 1836, tras los sucesos de La Granja, mandando publicar la constitución política de 1812¹²⁵, puso fin a la vigencia del Estatuto y con él, al primer ensayo de regulación de la responsabilidad de los ministros en la España constitucional.

SANTOS M. CORONAS GONZÁLEZ
Catedrático de Historia del Derecho
Universidad de Oviedo

123. *Diario Sesiones de Cortes*. Estamento de Procuradores, leg. de 1836, págs. 497 y ss.

124. Por estas fechas centrales del verano, poco antes de la sargentada, menudearon las exposiciones de las Juntas Provinciales a la reina Gobernadora. La de Zaragoza, de 1 de agosto, iniciaba su exposición con estas palabras: «Hay épocas funestas, en que los pueblos pierden la confianza que debieran inspirarles sus gobiernos... Tal es la situación de España desde mediados de mayo. La nación conoce las circunstancias que han elevado a la cumbre del poder a estos ministros. El sentimiento de reprobación con que fueron recibidos es bien notorio y la franca manifestación con que se quejó a V.M. el Estamento popular, fue casi unánime. La disolución de las Cortes fue un acto de violencia y de venganza, y aumentó considerablemente la irritación de los ánimos. La convocación de las Cortes Constituyentes calmó algún tanto nuestra indignación: mas los actos sucesivos de arbitrariedad y violencia, las destituciones marcadas con el sello de resentimientos personales, disiparon pronto la ilusión, e hicieron ver en los actuales ministros, no unos funcionarios firmes y enérgicos, sino unos hombres irascibles y vengativos. Señora: esta provincia acaba de declararse independiente del gobierno de V.M., y bajo la égida de la Constitución del año 12, y perseverará en la resolución de gobernarse por sí misma, por no dejar su dirección en manos de un gobierno tan incapaz y tan inepto.» PIRALA, *Historia de la guerra civil*, III, 396. Cf. La exposición de la Junta de Málaga de 28 de junio, en la que considera el restablecimiento de la Constitución de Cádiz «el término de la revolución española», III, 687-690.

(125. «Como reina Gobernadora de España, ordeno y mando que se publique la Constitución política de 1812, en el ínterin que, reunida la nación en Cortes manifieste expresamente su voluntad ó dé otra Constitución conforme a las necesidades de la misma.» A este decreto sucedió un Manifiesto de la reina Gobernadora a la nación española de 22 de agosto por el que se justificaba la medida adoptada PIRALA, *Historia de la guerra civil*, III, 408; 701-702

LA SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCION NAVAL Y FOMENTO FORESTAL EN GUIPUZCOA (1598-1611)

INTRODUCCION

Como ha puesto de relieve recientemente Bermejo Cabrero, existen superintendencias en la Corona de Castilla durante el Antiguo Régimen, al margen de la aparición de los intendentes de clara raigambre borbónica¹. Las superintendencias, de neto cuño austríaco, apenas han sido objeto de atención por la historiografía². Se

1. BERMEJO CABRERO, J. L., «Superintendencias en la Hacienda del Antiguo Régimen», en AHDE (1984), págs. 409 y 429.

2. Son muchos los tipos de Superintendencia que surgen en los siglos XVI y XVII, pero debido a la precariedad de las investigaciones en esta parcela, se hace difícil el tipificar cada uno de los superintendentes que existieron en la Corona de Castilla, a lo largo del Antiguo Régimen. Sin ánimo de cerrar la lista destacamos, aparte de los mencionados por Bermejo Cabrero —en obra citada en nota anterior—, los siguientes superintendentes: el del corso, el de la fábrica de armas de Cantabria, el de fábrica de navíos, el de montes, etc.

Parker, en su documentada obra *El ejército de Flandes y el camino español*, Madrid, 1985, nos señala, aunque apenas se detiene en su estudio, una serie de Superintendentes en el ejército de Flandes. Así, Ambrosio Spinola, maestro de campo general, fue superintendente del tesoro militar desde 1608 a 1628 (pág. 147). También existió el superintendente de las contribuciones. Hasta 1575 fue Chiappino Vitelli, y posteriormente Juan Andrea Cigogna desempeñó la Superintendencia de las contribuciones «de las ciudades y de la región sometidas a la obediencia de Su Magestad» (págs. 182-183). Asimismo en el alto mando del ejército de Flandes estaban encuadrados una serie de superintendentes: el de la Junta de Hacienda, el de la Armada y el de la Justicia Militar (1595). A todos estos oficiales los designaba el monarca (pág. 326).

Qué duda cabe que el origen del término superintendente proviene de Francia. En este país surgirán en el siglo XVI diversos superintendentes encargados de la gestión de diversos ramos de la administración. Cronológicamente, el primero de ellos será el de finanzas. No reina acuerdo historiográfico respecto a la fecha en que surge este tipo de superintendente. Boislisle supuso que fue Semblançay el primero que ocupó la Superintendencia de finanzas en 1518 (BOISLISLE, A. de, «Semblançay et la Surintendance des finances»,

hace necesario, por tanto, el estudio institucional de cada Superintendencia para posteriormente analizarla globalmente a lo largo del Antiguo Régimen, desde que surge en el siglo XVI. El presente trabajo no pretende más que estudiar una de estas superintendencias, la de fábrica de navíos y conservación de plantíos, pero limitando su estudio tanto espacial como temporal. Espacial, porque la circunscribiremos a un territorio de la Corona de Castilla: Guipúzcoa; y, temporal, porque abarcará únicamente el período comprendido entre 1598-1611, dejando para otro momento el análisis del resto del siglo XVII³.

ORIGEN

Felipe II creó, en la segunda mitad del siglo XVI⁴, el oficio de superintendente de fábrica de navíos y plantíos. El motivo por el

en *Annuaire Bulletin de la Société de l'Histoire de France*, 1881, pág. 230). Bajot, por el contrario, traslada a 1523 el año de creación de esta Superintendencia, desempeñándola una tal Babou (BAJOT, M., *Cronologie ministérielle de trois siècles*, París, 1844, pág. 44). Otros, en fin, dicen que fue Cossé, en 1562, el primer superintendente (BRUGUIERE, M.-B., GILLES, H. y SICARD, G., *Introduction a l'histoire des institutions françaises*, Toulouse, 1986, pág. 195; Garrison retrasa en dos años la entrada de Artus de Cossé en la Superintendencia financiera, en *Histoire du droit et des institutions*, París, 1984, T. I, página 232).

Junto al de finanzas aparecerán posteriormente otros superintendentes: el de bastimentos, el de fortificaciones y el de aguas y bosques. La lista de superintendentes de bastimentos se remonta a 1529, fecha en que Nicolás de Neuville, señor de Villeroy, entró en calidad de «surintendant des bâtiments de Fointenebleau, Saint-Germain, Villers-Cotterets, le Louvre et Madrid» (VIOLLET, P., *Le roi et ses ministres*, París, 1912, pág. 506). Enrique II creó en 1558 el cargo de superintendente de fortificaciones de Francia (DARESTE DE LA CHAVANNE, M. C., *Histoire de l'administration en France et des progrès du pouvoir royal depuis la règne de Philippe Auguste jusqu'à la mort de Louis XIV*, París, 1848, T. II, pág. 309). Y, por último, en 1597 Enrique IV hizo lo propio con el «surintendant des eaux et forêts» (*Ibidem*, pág. 21)

3. En este siglo, fueron superintendentes en el ramo de construcción naval y forestal, aparte de los que estudiamos, los siguientes: Alonso de Idiaquez, desde 1618 a 1646, y Luis de Neolalde, a partir de 1647 y hasta 1670.

4. No sabemos exactamente, ya que desborda nuestro cometido, la fecha del nombramiento del primer superintendente de este tipo. Fernández Duro nos dice que Cristóbal de Barros fue superintendente de este ramo en la costa cantábrica. Aunque no especifica el año, de su contexto se deduce que ejerció

cual el monarca creó este empleo fue por el especial interés que tenía en la conservación y en el aumento de los montes para la construcción de navíos destinados a la armada real⁵. La Superintendencia de este ramo no fue exclusiva ni peculiar de Guipúzcoa: en otros lugares también se conoció⁶.

la Superintendencia de fábrica de navíos y plantíos antes de 1598 [FERNÁNDEZ DURO, C., *La Armada española. Desde la unión de los reinos de Castilla y de Aragón*, Madrid, 1972, T. II, cap. X (1556-1598)].

5. «Porque es cierto —expresaba en 1669 el superintendente Luis de Necolalde— que el aumento de plantíos y conserbación de montes es la Hacienda mas efectiva y segura que V.S. (la provincia de Guipúzcoa) tiene y este conocimiento y la suma ymportancia de acrecentar los plantíos a obligado a V.S. en todos tiempos a procurarlos con particular cuidado como se reconoce por diferentes ordenanzas . y por este mismo fin y intento en que tan inmediatamente se incluye el servicio de S.M. fue servido de criar el oficio de superintendente de fábricas y plantíos» (Oficio escrito en Villarreal el 1 de mayo de 1669, en A.G.G., Sec. 2.ª, Neg. 17, Leg. 10).

Olesa dice que Felipe II creó el cargo de superintendente de fábricas y plantíos para la promoción y control de la construcción naval (OLESA MUÑIDO, F.-F., *La organización naval de los Estados mediterráneos y en especial de España durante los siglos XVI y XVII*, Madrid, 1968, T. I, pág. 403).

6. En el Señorío de Vizcaya, Principado de Asturias, «La Montaña y otras muchas partes» (A.G.G., Sec. 2.ª, Neg. 17, Leg. 10).

Tenemos constancia de la existencia de este superintendente en alguno de esos lugares.

Por lo que respecta al Señorío de Vizcaya, en 1617 era superintendente de fábricas, conservación de montes y plantíos el capitán Agustín de Hojeda (Museo Naval, Colección Vargas Ponce, T. IX, Doc. 24). En ese mismo lugar, en 1657, ocurrió un suceso bastante ruidoso con este oficial. En efecto, en vista de las molestias y extorsiones que cometía el superintendente de fábricas y plantíos y «mandaba prender a los hijos naturales de su Señoría, despachando para el efecto diferentes alguaciles», todo ello contraviniendo las leyes, fueros, franquicias y libertades, la Diputación general dispuso, el 16 de septiembre de aquel año, que se despacharan mandamientos a las repúblicas, villas, encartaciones y merindad de Durango, para que en el momento que dicho superintendente instruyera causa contra sus naturales y enviara alguaciles para prenderlos, diesen cuenta inmediata al Regimiento General, para que pusiera el oportuno remedio; pues, además de recabar falsos impuestos, se conducía de modo despótico y caprichoso en sus disposiciones (LABAYRU, E. de, *Historia General del Señorío de Bizcaya*, Bilbao, 1895-1903, T. V, pág. 408). Por esta época debía ser superintendente de fábricas y plantíos en el Señorío de Vizcaya, Martín de Vallecilla. A éste sustituyó, en 1668, el general de mar Francisco Díaz Pimienta, nieto materno de Martín, y famoso constructor y renovador del arte naval militar (GUIARD, T., *La industria naval vizcaína*, Bilbao, 1968, pág. 122).

El primer dato que poseemos del nombramiento de un oficial para desempeñar la ocupación de construcción naval y fomento forestal en la provincia de Guipúzcoa es, como luego veremos, de 1598.

LOS TITULOS DE NOMBRAMIENTO DE SUPERINTENDENTE

En los primeros títulos de nombramiento de superintendente no aparece esta última palabra: a los distintos funcionarios se les designará para ocupar la «fábrica de navíos y arqueamientos de los de la provincia de Guipúzcoa y conservación de los plantíos de los montes de ella»⁷.

La voz superintendente surgirá de la práctica habitual de este funcionario. Y así tenemos que para la primera década del siglo XVII, Idiáquez, ha incorporado en sus órdenes el dictado de «superyntendente de fábricas y plantíos de esta provincia por el rey nuestro señor»⁸.

En los nombramientos de superintendentes se regulan el cuadro de sus facultades. Estas se orientan en un doble plano; en primer lugar, ejercen una función típicamente administrativa: la conservación y el fomento de los montes. Para su consecución debería cuidar

En cuanto a Cantabria, en 1650 era superintendente Toribio Pérez de Bustamante (GIBERT, R., «Ordenanzas reales de montes en Castilla (1496-1803)», Estudios de Historia de la Administración, Actos del II Simposio, Madrid, 1971, pág. 318). El 24 de marzo de 1653 se nombró a Antonio de Velasco Cevallos, superintendente de plantíos y montes en ausencia o enfermedad de aquél (Museo Naval, Colección Guillén, LXXXIV, doc. 45, fol. 49).

También por decreto del 20 de junio de 1698 se concedió la superintendencia de los astilleros de Santoña y Guarnizo a Bernabé de Goitia (Museo Naval, Colección Sans de Barutell, art. 2.º, núm. 508). Sobre los fondos de este Museo véase VIGON, A. M.ª, «Los manuscritos del Museo Naval», en *Revista de Historia Naval*, 5 (1984), pp. 65-88.

7. Véase la cédula de nombramiento de Domingo de Idiáquez como superintendente en el apéndice documental núm. 2.

8. A.G.G., Secc. 2.ª, Neg. 13, Leg. 12; Museo Naval, Col. Vargas Ponce, T. 11, Doc. n.º 18, fols. 37-58. Tenemos nuestras dudas sobre las fuentes a las que acudirá este funcionario para autodenominarse superintendente. Nos inclinamos a pensar que Idiáquez comenzó a utilizar el término de superintendente cuando vio que la provincia, a través de varios acuerdos de Juntas y Diputaciones (como, por ejemplo, el del 4 de mayo de 1599, en Cestona), designaba a estos oficiales como superintendentes

de que nadie talara ningún árbol y, en caso contrario, obligarle a plantar otro en su lugar. Los alcaldes ordinarios y regidores de las villas⁹ eran los encargados de llevar a efecto el plantío que les asignara el superintendente. Para ello repartirían entre sus vecinos la cantidad de árboles mandados por el superintendente para que los plantaran de acuerdo con la extensión de terreno que cada uno tuviere. La oficialidad de los ayuntamientos también estaba obligada a hacer plantones en las tierras concejiles.

El superintendente estaba facultado para imponer la multa de un real por cada árbol que cualquier vecino dejara de plantar¹⁰. En la misma pena incurrirían los alcaldes o regidores que no plantasen los que al concejo le correspondieren¹¹. En la cédula real de nombramiento de este comisario¹² se regulaba el destino que debería darse al dinero que se recaudara por el procedimiento punitivo¹³.

La segunda competencia del superintendente, directiva, era hacerse cargo de todo lo referente a la construcción naval¹⁴. En este

9. No de todas, sino únicamente de aquéllas cuyos términos concejiles se hallaren situados dentro de dos leguas de la costa o que tuvieran ríos navegables. (Véase el apéndice documental núm. 2).

10. Esta multa no sufrió incremento con el transcurso del tiempo. Así, en el primer tercio del siglo XVIII, seguía siendo la misma. [Véase GÓMEZ RIVERO, R., «Superintendente de plantíos de montes de la provincia de Guipúzcoa (siglo XVIII)», en *Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián*, 18 (1984), pp. 353-361].

11. Esta pena tenían que satisfacerla de su propio peculio y no de los propios concejiles (A.G.G., Sec. 2.ª, Neg. 13, Leg. 12).

12. En la instrucción que dio la Junta General de Zarauz de 1609 al agente en corte se dice que no es necesario que «aya superintendente ni comisario» (A.G.G., Caja 58, Leg. 2).

13. Habría de repartirse de la siguiente forma: un tercio para el denunciador, otro para los gastos que se ocasionaron por las visitas del superintendente y el tercio restante para la Cámara real (A.G.G., Secc. 2.ª, Neg. 13, Leg. 12).

14. No pretendemos detenernos en el análisis de la construcción naval, sobre todo teniendo en cuenta, como veremos en su momento oportuno, que en esta materia el superintendente no tuvo problemas con la provincia de Guipúzcoa. En cualquier caso, puede manejarse para el País Vasco la bibliografía siguiente: ACEDO, J. A., *La construcción naval en Vizcaya*, Bilbao, 1975; ALZOLA, O., *Estudio relativo a los recursos que la industria nacional dispone para las construcciones y armamentos navales*, Madrid, 1888; ARRATEGUI, F.,

sentido, autorizaba la concesión de préstamos a todos aquellos armadores que desearan construir naos¹⁵; asimismo abonaba primas de construcción a los que fabricaran navíos superiores a 300 toneladas. Finalmente, el superintendente realizaba la medición y arqueamiento de las naves destinadas a la armada real¹⁶.

En cuanto al salario diremos que cuando la Superintendencia de fábrica de navíos y plantíos se desempeñaba con el carácter de propietario, entonces el superintendente percibía un salario de 800 ducados anuales¹⁷. Si la ocupación de la Superintendencia era interinamente, esta cantidad se veía reducida a la mitad¹⁸. Este salario lo cobraba del pagador de la gente de guerra, armadas y fábricas de la provincia de Guipúzcoa¹⁹. Una vez cobrado, el superintendente extendía al pagador una carta de pago en la que se consignaba la cantidad que había recibido²⁰. No siempre percibía el superintendente su sueldo con regularidad: habrá ocasiones en que en un corto espacio de tiempo cobrará el salario perteneciente a casi tres años²¹. Otras veces, por el contrario, le serán abonadas pequeñas cantidades de su retribución anual²².

«Los astilleros de San Sebastián», *Vida Vasca*, XXXIX (1962), 111; CIRIOUAIN GAIZTARRO, M., *Los puertos marítimos vascongados*, San Sebastián, 1951; ESCAGUES DE JAVIERRE, I., «Los astilleros viscaínos», *Vida Vasca*, XII (1964), XII, 201-205; GUIARD, T., *La industria naval vizcaína*, Bilbao, 1917, y SEOANE y FERRER, R., *Navegantes guipuzcoanos*, Madrid, 1903.

15. Sobre la devolución y formas de estos empréstitos véase el apéndice documental n.º 2.

16. En cuanto al modo en que se debería practicar la medición véase el apéndice documental n.º 2.

17. A razón de 11 reales cada ducado. Véase el nombramiento de Domingo de Idiáquez en el apéndice documental n.º 2.

18. Con un sueldo de 400 ducados anuales sirvió desde 1611 Domingo de Echeverri el empleo de superintendente de fábricas de navíos y plantíos de montes (Museo Naval, Colec. Vargas Ponce, T. X, Doc. 81).

19. En tiempos del superintendente Domingo de Idiáquez era pagador Juan de Olano (A.G.G., Sec. 2.ª, Neg. 13, Leg. 12). Martín de Careaga, fallecido en 1633, fue pagador durante las superintendencias de Domingo de Echeverri y Alonso de Idiáquez (A.G.S., C.M.C., 3.ª época, legajos 809, 914, 661 y 3.259).

20. A.G.S., C.M.C., 3.ª época, leg. 914, fol. 48 rº y vto.

21. Así, en el período comprendido entre 21 de mayo y 19 de julio de 1614 Echeverri cobró un total de 11.900 reales, que a razón de 11 reales el ducado vendría a ser el sueldo de casi tres años. En efecto, por carta de pago de 21 de mayo de 1614 se le pagaron a Domingo de Echeverri la cantidad de

LOS SUPERINTENDENTES DEL PERIODO 1598-1611: APUNTES BIOGRAFICOS

A continuación vamos a analizar los superintendentes que ejercieron la ocupación de la fabricación de navíos y plantíos en Guipúzcoa en el período comprendido entre 1598-1611, adjuntando algunos datos biográficos, para en un momento posterior estudiar individualmente el paso de cada uno de ellos por la Superintendencia.

En el mencionado período desempeñaron la Superintendencia de construcción naval y fomento forestal Antonio de Urquiola, Domingo de Idiáquez y Domingo de Echeverri. Los dos primeros procedían del ejército y el tercero era secretario.

ANTONIO DE URQUIOLA nació en la primera mitad del siglo XVI en Guetaria. Se casó con Francisca de Lerchundi²³. Dirigió los astilleros de Santiago (Urola) y Pasajes y construyó el navío San Juan Bautista, insignia del almirante Aramburu²⁴. Fue General de la escuadra de Cantabria²⁵. Falleció en Madrid, en 1600. Su testamento lo otorgó con fecha del 28 de agosto de aquel año²⁶. Se le nombró

4 400 reales, equivalentes a 149.600 maravedís, es decir, su sueldo anual de 400 ducados. En las cuentas del pagador Martín de Careaga no se especifica a qué año pertenecía ese salario. Teniendo en cuenta que aquel superintendente comenzó a ejercer su oficio a mediados de 1611, es de suponer que esos 4.400 reales fueran su salario de 1612. Asimismo, mediante carta de pago de 6 de junio de 1614 el mismo Echeverri cobró 3.300 reales (102.442 maravedís). Nuevamente aquí era un salario atrasado correspondiente quizás a 1613. Y, finalmente, por carta de pago de 19 de julio de 1614 se le pagaron al superintendente la cantidad de 4 200 reales (=142.800 maravedís), casi el salario de un año que bien podría haber sido el correspondiente a la mitad de 1611 y a lo transcurrido de 1614 (A.G.S., C.M.C., 3.ª época, Leg. 914).

22. Por carta de pago de 21 de julio de 1615 consta que se le pagaron a Echeverri 313 reales y 8 maravedís, es decir, 10.650 maravedís. Al mismo Echeverri se le abonaron, por carta de pago de 4 de noviembre de aquel año, 574 reales correspondientes a 19.200 maravedís (A.G.S., C.M.C., 3.ª época, Leg. 914, fol. 48 vto.).

23. Tuvieron como hijo al capitán Baltasar de Urquiola, fallecido el 11 de mayo de 1648. Este casó con Magdalena de Ugarte y murió sin descendencia (URQUIJO, A. de, *Casas y linajes de Echave y Laurcain*, San Sebastián, 1928, T. I, pág. 74).

24. CEREZO HIJANO, F., *Guetaria*, San Sebastián, 1970, pág. 90.

25. SEOANE y FERRER, R., *Navegantes guipuzcoanos*, Madrid, 1903, pág. 89.

26. Museo Naval, Colección Vargas Ponce, Leg. 15, n.º 113; cfr por SEOANE.

superintendente de fábrica de navíos y plantíos en la provincia de Guipúzcoa hacia agosto de 1598²⁷.

DOMINGO DE IDIÁQUEZ GOICOECHEA, nació a mediados del siglo XVI en el valle y alcaldía mayor de Arería²⁸. Era hijo natural de Francisco de Idiáquez, vecino de Azcoitia, y de Catalina de Goicoechea, natural de Astigarraga²⁹. Se casó con María Camarena y San Juan, natural de Amberes e hija de Juan López de Camarena, natural de Teruel, y de María de San Juan, de Santander³⁰. Domingo tuvo cuatro hijos: Martín, Alonso, Ursula y Ana³¹. Idiáquez falleció en Pamplona en abril de 1619³².

y FERRER, R., en *Indice de los documentos que existen en la Dirección de Hidrografía referentes a la Historia de Guipúzcoa*, manuscrito en el que no consta el año aunque debe ser de primeros de siglo y que se conserva en la Sociedad de Estudios Vascos.

27. No sabemos a ciencia cierta de cuándo es el título de nombramiento del general Urquiola. Lo que sí está claro es que para primeros de septiembre de 1598 ya se hallaba desempeñando su oficio. Concretamente, el 9 de septiembre de ese año hizo un repartimiento al concejo de Astigarraga de 1.000 pies de robles (A.G.G., Junta General de Guetaria del 20 de noviembre de 1598).

28. ECHEGARAY, C., «Documentos curiosos. Domingo de Idiáquez», en *Euskalerrriaren Alde*, T. IX (1919), pág. 267. Los hermanos Carraffa, autores llenos de gran confusión, dicen que nació en Azcoitia (GARCÍA CARRAFFA, A. y A., *Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos*, Madrid, 1954, T. 43, pág. 34).

29. ECHEGARAY, C., «Documentos curiosos», en *Euskalerrriaren Alde*, T. IX (1919), pág. 267. Nuevamente aquí los hermanos Carraffa incurren en error al decir que su madre había nacido en Arería (GARCÍA CARRAFFA, A. y A., *Diccionario*, T. 43, pág. 34).

30. GARCÍA CARRAFFA, A. y A., *Diccionario*, T. 43, pág. 34. Una vez más tenemos que tomar estos datos con escrupulosidad porque Del Valle Lersundi, especialista en la familia de los Idiáquez, dice que se casó con Magdalena de Camarena y Santa Cruz, hija legítima de Juan López de Camarena y de María de San Juan y nieta legítima de Juan López de Camarena y de María Pérez de Santa Cruz [DEL VALLE LERSUNDI, F., «Apuntes para un nobiliario de Guipúzcoa. Tratado primero. Casa solar y palacio de Idiáquez», en *Euskal Erria*, T. LXVIII (1913), pág. 313].

Por su parte, Gaytan de Ayala dice que se casó con Magdalena de Camarena y San Juan («Parientes mayores de Guipúzcoa. Señores de la casafuerte de Munguía en Astigarraga», en *RIEV*, T. XXV (1934), págs. 369-370).

31. De sus hijos nos interesa Alonso que, al igual que su padre, fue superintendente de fábrica de navíos y plantíos en la provincia de Guipúzcoa. Pero de él ya tendremos ocasión de hablar en otro lugar.

32. GAYTAN DE AYALA, A., «Parientes mayores de Guipúzcoa. Señores de la casafuerte de Munguía en Astigarraga», en *RIEV*, T. XXV (1934), pág. 369.

Idiáquez, en su dilatada vida profesional, sirvió al monarca durante 44 años³³. En 1575, siendo muy joven, se alistó en el ejército como soldado de Flandes³⁴. A fines de junio de 1580 el Duque de Alba invade Portugal con un fuerte ejército. En esta campaña participa con el rango de alférez Domingo de Idiáquez³⁵. A partir del 20 de marzo de 1581, en atención al comportamiento del alférez Idiáquez en la jornada de Portugal, se le hizo merced, además de su paga ordinaria, de 10 escudos mensuales de ventaja³⁶. Estando ya en Flandes Idiáquez, se le nombraría en 1583 capitán de la compañía de Infantería Española del Tercio del maestro de campo Pedro de la Paz³⁷. En 1588, Alejandro Farnesio³⁸ designó al capitán Idiáquez como teniente del Castillo de Amberes. La razón de ello

33. De los cuales 23 fueron en Flandes, 11 en la Superintendencia de la fábrica de galeones, 6 en la alcaldía y gobierno de Melilla y, finalmente, como castellano en la ciudadela de Pamplona (Archivo del Marqués de Valdeespina, en Astigarraga, en adelante A.M.V.E.; cfr. ECHEGARAY, C., «Documentos curiosos», en *Euskalerraren Alde*, T. IX (1919), pp. 294-295).

34. En una patente, otorgada en Hipre, el 1 de octubre de 1583, se dice textualmente: «por lo bien que habeis servido a su Magestad en estos estados y fuera de ellos de más de ocho años a esta parte» (A.M.V.E.; cfr. ECHEGARAY, C., «Documentos curiosos», en *Euskalerraren Alde*, T. IX (1919), pág. 269).

35. Prestó sus servicios, como alférez (teniente de compañía) del capitán Juan Pérez Cuenca perteneciente al Tercio del maestro de campo Enriquez, hasta el 8 de febrero de 1581 en que por orden real se reformó la compañía de dicho Tercio [Certificación dada en Lisboa, a 20 de febrero de 1581, en A.M.V.E.; cfr. ECHEGARAY, C., «Documentos curiosos», en *Euskalerraren Alde*, T. IX (1919), pág. 268].

El maestro de campo era el jefe de un tercio. Y éste era una unidad compuesta por doce compañías aproximadamente y de unos 2 500 hombres (PARKER, G., *El ejército de Flandes y el Camino Español*, Madrid, 1985, pág. 21).

36. A. M. V. E.; cfr. ECHEGARAY, C., «Documentos curiosos», en *Euskalerraren Alde*, T. IX (1919), pp. 267-268. Ventaja era la bonificación que se otorgaba a un soldado por servicios prolongados y valerosos (PARKER, G., *El ejército de Flandes*, pág. 21).

37. En Hipre, a primero de octubre del referido año. El sueldo de capitán se le comenzó a satisfacer, con efectos retroactivos, a partir del uno de mayo. Se le designó por estar vacante la plaza del capitán Gaspar de Herrera «por haberle espirado el tiempo de tres meses que se le dió de licencia con otros ocho más» (A.M.V.E.; cfr. ECHEGARAY, C., «Documentos curiosos», en *Euskalerraren Alde*, T. IX (1919), pp. 268-269).

38. Fue capitán general del ejército de Flandes desde octubre de 1578 hasta diciembre de 1592 (PARKER, G., *El ejército de Flandes*, pág. 331).

estribaba en que tenía quebrantada la salud y le impedía «el servir mas en campaña»³⁹.

Posteriormente, hacia 1593, el conde de Mansfelt⁴⁰ le nombró como gobernador de la villa de Terramunda⁴¹. Al año siguiente, el Archiduque de Austria⁴² le confirió el empleo de capitán de la compañía de picas del Tercio de Infantería Española del maestro de campo Agustín Mexía⁴³.

Debió de continuar en Flandes hasta 1601, llegando a alcanzar el grado de coronel⁴⁴. De regreso a España, en 1601, ocupará la Superintendencia de fábrica de navíos e plantíos en la provincia de Guipúzcoa hasta 1611, fecha esta última en la que se designará a Idiáquez para ocupar la plaza de Gobernador de Melilla. En esta última ciudad permanecerá hasta 1617, año en que pasará al castillo de Pamplona.

No acabará en esta fortaleza su carrera ascendente, ya que en 1618 ocupará interinamente el cargo de capitán general del Reino de Navarra⁴⁵.

39. Brujas, 26 de abril de 1588 [A.M.V.E.; cfr. ECHEGARAY, C., «Documentos curiosos», en *Euskalerrriaren Alde*, T. IX (1919), pág. 270]. Mientras fue teniente de castellano de Amberes, gozó del sueldo de maestro de campo. En la fortaleza de Amberes prestó sus servicios en tiempos del coronel Mondragón [A.M.V.E.; ECHEGARAY, C., «Documentos curiosos», en *Euskalerrriaren Alde*, T. IX (1919), pág. 239]. Sobre el coronel Mondragón véase el trabajo biográfico de SALCEDO RUIZ, A., *El Coronel Cristóbal de Mondragón: apuntes para su biografía*, Madrid, 1905.

40. Peter-Ernest, conde Mansfelt, fue capitán general del ejército de Flandes desde diciembre de 1592 hasta febrero de 1594, en calidad de interino (PARKER, G., *El ejército de Flandes*, pág. 331).

41. A.M.V.E., Vínculo de Echániz.

42. Ernesto, que fue capitán general del ejército de Flandes desde febrero de 1594 hasta febrero de 1595 (PARKER, G., *El ejército de Flandes*, pág. 331).

43. Al estar vacante por habersele concedido licencia al capitán Miguel de Esquivel para ir a España (Bruselas, 17-XII-1594, en A.M.V.E., Vínculo de Echániz).

44. De un Regimiento de Caballería [DEL VALLE LERSUNDI, F., «Apuntes para un nobiliario de Guipúzcoa. Tratado primero. Casa solar y palacio de Idiáquez», en *Euskal Erria*, T. LXVIII (1913), pág. 313].

45. Le nombró su titular, el Duque de Ciudad-Real, para que le sustituyera, ya que a éste el monarca le había designado como maestro de campo general de los ejércitos de Lombardía y Castellano de Milán (Pamplona, 27-VI-1618, en A.M.V.E., Vínculo de Echániz).

DOMINGO DE ECHEVERRI CELAYANDÍA, era natural de la villa de Ezquioga, en la Alcaldía mayor de Arería⁴⁶. Tuvo su vecindad y domicilio en la ciudad de San Sebastián, y contrajo matrimonio con Mariana de Rober Salina y Arbolancha, natural de la villa de Bilbao⁴⁷. Fue superintendente de fábricas y plantíos, con carácter interino, desde 1611 hasta 1618⁴⁸. Asimismo fue también administrador general del nuevo derecho de lanas en los puertos de Guipúzcoa⁴⁹. Nuevamente, en 1626, sería otra vez superintendente interino⁵⁰. Domingo de Echeverri falleció en Briviesca, el 8 de julio de 1630⁵¹.

LA SUPERINTENDENCIA DE ANTONIO DE URQUIOLA (1598-1600)

Al general Urquiola se le nombró para desempeñar el cargo referente a fábricas de navíos, su arqueamiento, y plantíos de robles, viveros y fresnos, hacia el mes de agosto de 1598. No sabemos por tanto de qué fecha es su título de nombramiento de superintendente. Sin embargo, el que no hayamos encontrado su título no es

46. Al igual que Idiáquez fue hijo natural de Martín de Echeverri y de María de Celayandía, natural de la villa de Usurbil, hija legítima de Martín Arano de Celayandía y María de Portu y Soroa (LIZASO, D. de, *Nobiliario de los palacios, casas solares y linajes nobles de la provincia de Guipúzcoa*, San Sebastián, 1901, pág. 78).

47. LIZASO, D. de, *Nobiliario*, pág. 78; cfr. GARCÍA CARRAFFA, A. y A., *Diccionario*, T. 28, pág. 63.

48. Museo Naval, Colec. Vargas Ponce, T. X, Doc. 81.

49. LIZASO, D. de, *Nobiliario*, pág. 78; cfr. GARCÍA CARRAFFA, A. y A., *Diccionario*, T. 28, pág. 63.

50. Durante la ausencia del propietario en la Superintendencia, que era Alonso de Idiáquez. Este tuvo que ausentarse porque el monarca le mandó que sirviera en los 40 bageles que se habían fabricado en la provincia (Pasajes, 13-XI-1626, en Museo Naval, Colec. Vargas Ponce. T. X, Doc. 15, fol. 16). Partieron de Pasajes el 24 de noviembre de aquel año, nos relata Aguilar —testigo presencial del suceso—, 36 zabras o pataches de 60 toneladas, armados por Alonso de Idiáquez, con la orden de llevar a Flandes 14 compañías de Infantería. Esta expedición fue un desastre (Véase AGUILAR y PRADO, J., *Compendio histórico de diversos escritos de diferentes asuntos*, Pamplona, 1629, fols. 24-44; cfr. FERNÁNDEZ DURO, C., *La Armada española*, T. IV, 84-85).

51. Museo Naval, Colec. Vargas Ponce, T. XI, Doc. 30.

óbice para conocer su contenido. En efecto, la comisión de Urquiola era idéntica a la de su sucesor Idiáquez, del que nos consta su nombramiento, si creemos lo que dijo el licenciado Mendiola, en 1605⁵². Lo que sí está claro es que para primeros de septiembre de 1598 ya se hallaba desempeñando sus funciones. A tal objeto repartió a las villas la cantidad de robles que deberían de plantar. Fueron muy pocas las villas que cumplieron lo ordenado por el general. Hubo alguna que otra queja de los concejos al órgano representativo provincial. Veámoslo.

En la Junta de Guetaria, del 20 de noviembre de 1598, se presentó una petición del concejo de Astigarraga en la que manifestaba que el general Urquiola le había hecho un repartimiento, el 9 de septiembre de aquel año, de los plantíos que debería de hacer en sus términos concejiles. Asimismo decía el concejo que no poseía rentas ni propios, ni siquiera lugar en el que poder plantar los pies de robles ordenados por el general. A continuación solicitaba el referido concejo que mientras se informara al monarca sobre este punto la Junta decretara que el general no apremiara a dicho concejo a que plantara los robles que le había asignado⁵³.

La mencionada petición se leyó en la Junta, la cual, después de discutir largamente sobre este asunto, acordó que en virtud de diferentes disposiciones del monarca Felipe II se había ordenado a la provincia de Guipúzcoa que sus villas plantaran la cantidad de robles, castaños y otros árboles que aparecían en ellas⁵⁴. Asimismo

52. En un parecer de Mendiola, presidente de la Junta, que se vio en la Junta de San Sebastián, el 3 de mayo de 1605, se expresaba: «Vistas las comisiones dadas por su magestad, la una el año de noventa y ocho, al general Antonio de Urquiola, y la otra el año de seiscientos uno al coronel Domingo Perez de Ydiaquez, allo que ambas son de un tenor y sustancia y contienen una misma cosa tanto que la una es traslado de la otra a la letra, sin discrepar» (A.G.G., Junta General de San Sebastián de abril de 1605).

53. A.G.G., J. G. de Guetaria, 20-XI-1598.

54. Tenemos que hacer algunas críticas al secretario provincial, ya que apenas puso por registro lo estrictamente acordado. Todo acuerdo de la Junta tenía un previo debate, que no se ha plasmado documentalmente. Y en la época que estudiamos nos encontramos muchas veces con estas lagunas en la documentación. Es por ello que tenemos que acudir a otros cauces diferentes a los registros de Juntas. En el caso que nos ocupa el secretario se limitó únicamente a transcribir que en virtud de diferentes disposiciones reales se ordenó a las villas que plantaran la cantidad que en ellas aparecían, sin decir

que todo esto se había cumplido en los últimos años, y que las villas mandaban testimonios de lo que habían plantado a las Juntas veraniegas anuales.

En vista de las causas antecedentes la Junta reunida en Guetaria decretó obedecer la real cédula de plantíos con acatamiento y reverencia, y en cuanto a su cumplimiento acordó suplicarla para que no se aplicara en la provincia⁵⁵. En la misma reunión, Guetaria, lugar en donde se celebraba la Junta, manifestó su postura contraria frente a todas las demás villas⁵⁶.

Tres días después, el general Urquiola mandó una carta a la Junta para que ésta ordenara a las villas que le enviaran el número de repartimientos hechos a los particulares. La Junta, no solamente

de qué época son aquéllas, y sin explayarse más en el contenido de ellas. A pesar de ello trataremos, por nuestra parte, de completar las lagunas en que consciente y voluntariamente incurrió el secretario.

Se debe de estar refiriendo el secretario al decir disposiciones a una ordenanza provincial confirmada por una Real Provisión, en 1548. Analicémosla.

En la Junta General de Guetaria, el 20 de abril de 1548, se decretó que por cada árbol que se talare se deberían de plantar un mínimo de dos. Asimismo, que cada concejo plantara anualmente 500 pies de robles y castaños en su término bajo pena, en caso contrario, de 10.000 maravedís. [A.G.G., J. G. de Zumaya, fols. 19 vto.-21 rº; cfr. ECHEGARAY, C. de, *Compendio de las Instituciones forales de Guipúzcoa*, San Sebastián, 1924, págs. 255, y DÍEZ DE SALAZAR, L. M., *Ferrerías de Guipúzcoa (siglos XIV-XVI)*, San Sebastián, 1983, Vol. I, pág. 149].

Esta ordenanza se confirmó por Real Provisión del 6 de junio del mismo año (A.G.G., Sec. 2.ª, Neg. 17, Leg. 3; cfr. DÍEZ DE SALAZAR, L. M., *Ibidem*).

55. Esta es la aplicación práctica de la fórmula «obedézcase, pero no se cumpla». Para el estudio de esta cláusula en Guipúzcoa, véase GÓMEZ RIVERO, R., *El pase foral en Guipúzcoa en el siglo XVIII*, San Sebastián, 1982.

La misma Junta acordó nombrar a una serie de personas para que en la súplica insertaran, además de las causas vistas, cualquier otra que creyeran conveniente para que el monarca «sin obligar a la dicha provincia, villas y lugares della ni otro ningún vecino particular como lo a fecho y aze el dicho general Urquiola, a mas de lo que puede, pues cumple con su obligación ha-ziendo el servicio de su magestad como es mucha razón se mande reparar la dicha cédula». Para lo antedicho se designaron a los procuradores junteros de San Sebastián, Deva, Motrico, Fuenterrabía, Segura y Hernani para que junto con el presidente de la Junta pusieran debajo del obedecimiento las causas de la súplica (A.G.G., J. G. de Guetaria, 20-XI-1598).

56. Esta villa, no sabemos por qué motivo, dijo que obedecía la real cédula y «que está presto a facer y cumplir lo que por ella se le manda» (A.G.G., J. G. de Guetaria, 20-XI-1598)

no accedió a lo solicitado por el superintendente, sino que, en su vista y con dictamen de asesores, acordó recurrir al rey para que remitiera la orden de los plantíos a la provincia para que los hiciera por sí misma y que la comisión de Urquiola, así como las demás que se otorgaren, no se entendieran con la provincia⁵⁷.

Junto a los motivos que expuso la provincia en la Junta del 20 de noviembre de 1598, también se incluyó en la súplica que el monarca mandara que los escribanos de la provincia no fueren desposeídos de los autos originales por «los generales y otros ministros de guerra», sino que éstos llevaran traslados «signados para que en todo aya siempre, cuenta y raçon»⁵⁸. El mismo día, 23 de noviembre de 1598, la Junta acordó una providencia en materia de plantíos. En ella se ordenaba que los alcaldes ordinarios enviaran a las Juntas del verano los testimonios de los plantíos que habían realizado en su jurisdicción⁵⁹.

Estando así las cosas, el monarca expidió una Real Cédula referente a los plantíos⁶⁰. En ella decía el rey que el general Urquiola le había advertido cómo la provincia quería hacerse cargo de la ejecución de las ordenanzas en esta materia. Asimismo manifestaba

57. Es decir, que estuviera la provincia exenta de comisiones de este tipo. Asimismo se acordó en esta Junta que para suplicar esto al monarca «en las villas a quienes se a repartido por el dicho Urquiola, el dicho plantío, se reciban ynformación por la persona que Guipúzcoa nombrare para acudir por el remedio de todo lo referido y demás ynconvenientes y se agan las diligencias necesarias por villa e diputado, a ordenación sus letrados, en corte su agente, poniéndose para ello capítulo de ynstrucción al dicho diputado y agente para conseguir todo ello» (A.G.G., J. G. de Guetaria, 23-XI-1598).

58. El motivo de esta petición tenía su origen en que el superintendente había hecho el repartimiento de plantíos, por presencia de Pedro del Puerto, escribano numeral de Guetaria, y se había llevado originalmente los autos del repartimiento (A G.G., J. G. de Guetaria, 23-XI-1598).

59. Mandó que las villas «y lugares desta provincia tengan cuidado de hacer plantíos cada uno en los términos de su villa, conforme a la orden que está dada y que las justicias apremien a los que en los de su jurisdicción al cumplimiento de lo susodicho y de aberlo ansi cumplido, ynbien testimonio auténtico a las juntas de verano, so pena de cada, diez mil maravedís para los reparos de la dicha provincia, lo qual yo el dicho secretario les notifiqué a la dicha Junta y procuradores junteros de ella» (A.G.G., J. G. de Guetaria, 23-XI-1598).

60. El original en A.G.G., Sec. 2.ª, Neg. 17, Leg. 11 Existe copia de ella en Museo Naval, Colec. Vargas Ponce, T. 3a, Doc. 31, fols. 167 rº-168 rº

la disposición que Urquiola platicara con la Junta la forma en que lo anterior debería hacerse. Finalmente, expresaba la disposición real que se cumplieran las órdenes referentes a los plantíos con la mayor brevedad y «menos pessadumbre de los vezinos».

Vemos, pues, por esta cédula la buena disposición del monarca en el tema de los plantíos. El únicamente desea que se hagan los plantíos, pero sin causar agravios a los guipuzcoanos. Esta disposición regia se analizó en la Diputación de Azcoitia⁶¹, la cual acordó que se enviara una copia de ella a las villas, alcaldías y valles de la provincia para que con su vista remitieran su parecer⁶².

Una de las primeras medidas en torno a los plantíos de la Junta de Cestona será mandar, el 26 de abril de 1599, que los procuradores lleven a esa Junta los testimonios de los plantíos que se hubieran hecho en su jurisdicción en el referido año. De ello se desprende que la provincia no tenía intención de remitir los testimonios al general, como disponía su comisión.

Unos días más tarde, el 3 de mayo, se personó en la Junta el general y exhibió la orden referente a plantíos, así como la Real Cédula del 5 de enero de 1599⁶³. Estas disposiciones se leyeron en la Junta, la cual acordó que más adelante trataría y proveería acerca de ello⁶⁴. Fue al día siguiente cuando la Junta proveyó en este asunto.

En la Junta de Cestona, del 4 de mayo, se aprobó un decreto importantísimo ya que era la primera vez que se utilizaba la categoría conceptual de superintendente para designar a los encargados de las fábricas de navíos y de la conservación y fomento forestal⁶⁵.

Mediante este decreto se acordó escribir al monarca la orden que tenía la provincia dada a cada villa para que cada año plantara

61. Del 5-II-1599.

62. La Diputación referida también acordó que las villas enviaran los testimonios de los plantíos a la Junta de verano que se iba a celebrar en Cestona (A.G.G., Registro de actas de la Diputación desde 29-XI-1598 hasta el 24-III-1599).

63. En ningún momento se señala en el registro de Juntas la fecha de la orden de plantíos. Lo mismo cabría decir respecto de la Real Cédula en la que el monarca se daba por notificado que la provincia quería encargarse de los plantíos.

64. A.G.G., J. G. de Cestona, 3-V-1599.

65. Véase este acuerdo en el apéndice documental núm 1.

por lo menos 500 robles y enviara los testimonios de haberlo hecho así⁶⁶. Asimismo se dispuso que se suplicara al rey que no hubiera superintendente «alguno» y que cuando el monarca lo requiriese se le enviarían los testimonios justificativos del cumplimiento de aquella orden.

No hubo ninguna resolución del monarca a la súplica de la provincia para que no hubiera superintendente. De todas formas a Urquiola le quedaba poco tiempo de gestión en la construcción naval y en el fomento forestal⁶⁷. Y en ese tiempo no se planteó ningún tipo de conflicto entre el superintendente y la provincia de Guipúzcoa⁶⁸.

Después de fallecer Urquiola, la provincia continuó observando su antigua ordenanza de 1548. A tal efecto, las villas, alcaldías y valles enviaron los testimonios de los plantíos a la Junta de verano⁶⁹.

LA SUPERINTENDENCIA DE DOMINGO DE IDIAQUEZ

En 1601, al hallarse vacante la ocupación de la fábrica de navíos y conservación de los montes de la provincia de Guipúzcoa, se nombró para su gobierno y administración, el 21 de julio, al coronel Idiáquez⁷⁰. En cuanto a sus funciones son las genéricas que ya vimos anteriormente en el título de nombramiento. Simplemente destacar ahora la obligación que tenía el superintendente de enviar al monarca anualmente una relación de los árboles que hubiera repartido en cada término concejil. Dicha relación la podría obte-

66. Sobre las penas en que incurrirían los alcaldes que no lo cumplieren, véase el apéndice documental núm. 1.

67. Ya vimos anteriormente cómo Urquiola falleció, en Madrid, en el verano de 1600.

68. Por lo menos no se refleja nada de ello en los registros de Juntas y Diputaciones desde mayo de 1599 hasta mayo del año siguiente.

69. Los originales de los testimonios que se remitieron a la Junta de abril de 1601 se encuentran en A.G.G., Caja 48, Leg. 3.

70. Mediante Real Cédula, otorgada en Valladolid. Dicho nombramiento se hizo en atención a lo bien que «de veinte y dos años a esta parte me aveis servido en la guerra allándoos en diversas ocasiones, donde según estoy ynformado, aveis derramado vuestra sangre y cumplido con las obligaciones de mi servicio» (A.G.G., Sec. 2.ª, Neg. 13, Leg. 12).

ner de los alcaldes respectivos, los cuales deberían de entregarle los testimonios de lo que se hubiera plantado en su jurisdicción, para que a su vez el coronel los remitiera a Martín de Aróstegui ⁷¹.

El coronel, para el mes de septiembre, ya se hallaba desempeñando sus funciones en el ámbito forestal. Efectivamente Idiáquez, en ejecución de su comisión ⁷², recorrería las villas y lugares situados dos leguas a la mar y ordenaría a los alcaldes y regimiento que repartieran al concejo y vecinos de dichas tierras los robles y fresnos que les había asignado; éstos deberían estar plantados para el mes de marzo de 1602, en que volvería a hacer la visita a los concejos. En cuanto a la forma del plantío tenía que hacerse con una separación de ocho codos el uno del otro y desde abajo para que crecieran rectos. A tal objeto se escogerían los mejores plantones que hubiera en los viveros. Asimismo en la orden el coronel mandaba que tanto el concejo como los particulares que cortaren o hubieren cortado robles viejos para fábricas de casas, naos u otra obra, plantaran en su lugar dos por cada uno de los que hubieren cortado.

Finalmente, Idiáquez apercibía en su mandato que cuando hiciera nuevamente la visita, a fines de marzo de 1602, ejecutaría las penas dispuestas en su comisión en aquellos que fueran remisos en cumplirlo ⁷³.

No debieron estar algunas villas muy conformes con la visita que les hizo el superintendente. Prueba de ello es que elevaron a la Diputación sus quejas Oyarzun y San Sebastián. En cuanto a la primera de ellas, por carta del 14 de septiembre, comunicaba a la Diputación que el coronel había estado en el valle y después de haber exhibido su comisión, pidió verbalmente que dijera cuántos árboles podían plantar el concejo y los particulares. Asimismo refería el valle de Oyarzun que no había querido resolver ni dar respuesta al superintendente hasta que tuviera noticia de ello la Diputación. Finalmente, exponía el valle que mandaba junto con su carta

71. Era veedor y contador de la gente de guerra de las villas de San Sebastián y Fuenterrabía. (Véase el apéndice documental núm. 2)

72. Idiáquez comenzó a ejercer su oficio, sin presentar a la Diputación su título de nombramiento para que en su caso ésta le diera el pase, conforme a la Real Cédula de 27 de noviembre de 1473.

73. A.G.G., Diputación de Tolosa, 18-IX-1601.

el traslado de la comisión de Idiáquez⁷⁴. Esta carta se vería en la Diputación de Tolosa el día siguiente. Sin embargo, la Diputación no pudo adoptar ningún acuerdo porque a Oyarzun se le olvidó remitir la copia del título de Domingo de Idiáquez⁷⁵.

Ese mismo día, el 15 de septiembre, la villa de San Sebastián también escribía a la Diputación diciendo que Domingo de Idiáquez le había dado una orden referente a los plantíos. También manifestaba que con la referida carta enviaba a Antonio de Luscano con los traslados de la cédula real y de lo que en su ejecución ordenaba el superintendente, con los apercibimientos hechos a la villa para todos aquellos que fueren remisos en cumplir su orden⁷⁶.

El 18 de septiembre de 1601 se leyó en la Diputación la carta de San Sebastián, en cuya vista acordó aquélla que se escribiera al coronel Idiáquez para que suspendiera la ejecución de su comisión hasta la próxima Junta que se iba a celebrar en Azcoitia, en la cual se trataría el tema y se daría la orden más conveniente⁷⁷.

Es importante observar cómo el coronel Idiáquez no presenta la cédula real de su oficio al uso o pase de la provincia, conforme a la ordenanza de Usarraga de 10 de noviembre de 1473. La provincia tiene que conformarse con un traslado de la comisión que le remite la villa de San Sebastián. En ningún momento, por ahora, la Diputación recaba del coronel la cédula original para, en su caso, darla el uso. Sin embargo de todo esto, el superintendente sí que exhibe su comisión en aquellas villas en las que va a hacer el repartimiento de robles. En la misma Diputación de Tolosa del 18 de septiembre también se vio una relación de lo que estimaba la villa

74. A.G.G., Sec. 2.ª, Neg. 13, Leg. 12.

75 En efecto, en el registro de la Diputación consta lo siguiente: «E leída la dicha carta y visto que no imbía con ella el tanto de la cédula que dize tiene el coronel. Se acordó e mandó que se scriva al dicho balle que no biene con su carta el tanto de la cédula e comisión que dize tiene el dicho coronel, se envíe luego porque sin su vista no se puede prover cosa ninguna» (A.G.G., Diputación de Tolosa, 15-IX-1601).

76. A.G.G., Sec. 2.ª, Neg. 13, Leg. 12.

77. Al «servicio de su magestad e bien de esta república», decía la Diputación. Asimismo mandó ésta que la carta que se escribiera a Idiáquez se enviara a Juan Ochoa de Aguirre, ex-fiel de Tolosa, que se encontraba en San Sebastián, para que se la entregara al coronel y le solicitara su «respuesta de donde resultará lo demás que huviere de prover cerca de lo susodicho» (A.G.G., Diputación de Tolosa, 18-IX-1601).

de San Sebastián que se debería de hacer respecto de los plantíos⁷⁸. En el mismo sentido, se recibió una segunda carta del valle de Oyarzun⁷⁹.

A finales de septiembre todavía no se había entregado a Idiáquez la carta que le había escrito la Diputación. La causa de esta dilación era que el coronel no se encontraba en el lugar a donde se había dirigido la carta⁸⁰. Por ello, la Diputación encargó al diputado de Azcoitia que entregara la carta a Idiáquez⁸¹. Asimismo la Diputación ordenó al diputado azcoitarra que dijera al coronel el sentimiento que tenía la provincia porque no había exhibido su comisión⁸².

78. Esta relación constaba de tres puntos:

1. Que al alcalde y regimiento no se les podía compeler a la ejecución del repartimiento que se hacía a los particulares porque era el coronel, en virtud de su comisión, quien tenía que encargarse de dicha ejecución. Por ello se debía de suplicar al Consejo de Guerra en este asunto.

2. Que los árboles se plantaran por lo menos a 10 codos de distancia y no a ocho como proponía Idiáquez.

3. Que cuando se cortaran robles viejos, sería suficiente que se plantara uno en lugar del que se cortara (A.G.G., Diputación de Tolosa, 18-IX-1601).

79. Así, en la referida Diputación se «abrió» una carta de Oyarzun en la que se hacía la misma relación que la villa de San Sebastián. Asimismo se refería el valle a otra carta que escribió en razón de la orden que Idiáquez le dio para hacer los plantíos. Una vez leída se acordó responder al dicho valle conforme a lo decretado a la carta que sobre lo mismo escribió San Sebastián (A.G.G., Diputación de Tolosa, 18-IX-1601).

80. En la Diputación del 28 de septiembre de 1601 se haya registrado un acuerdo que textualmente dice: «Este día el dicho diputado entregó en el dicho Ayuntamiento una carta del jurado Luis de Liçarça, vecino de San Sebastián, scripta al escrivano fiel, en que dize que Antonio de Luscano bino a la Diputación con carta de aquella villa sobre lo del coronel Domingo de Ydiaquez, aviendo traído la carta de la Diputación para el dicho Domingo Perez. Y que a causa de no estar en San Sevastián no se le havia dado» (A.G.G., Diputación de Tolosa, 28-IX-1601)

81. Diputación de Tolosa, 28-IX-1601. Tal vez la razón de que se diera la carta al diputado de Azcoitia estribe en que la familia Idiáquez era natural de esta villa.

82. «Como lo an echo los antepasados —decía la Diputación—, estando como el estava obligado a azerlo como hijo natural de esta provincia» (A.G.G., Diputación de Tolosa, 28-IX-1601). Habría que hacerle un reparo a lo que dijo la Diputación. Y es que antes que Idiáquez únicamente estuvo en la Superintendencia Urquiola; por tanto, la Diputación tenía que haber dicho su antecesor y no «los antepasados».

Desde luego, Idiáquez no contestó a la Diputación. Tal vez sabiendo que ya estaba cercano el día en que se iba a celebrar la Junta, optó por esperar a que en ésta se analizara toda la problemática. Y así ocurrió. Estando reunida la Junta en Azcoitia, el 16 de noviembre de 1601, se estudiaron las cartas que vimos antes de las villas de San Sebastián y Oyarzun⁸³. Asimismo el coronel Idiáquez, que estaba presente en la Junta, solicitó que se le señalara día para tratar acerca de su comisión⁸⁴. Finalmente, la Junta⁸⁵ mandó a algunos procuradores que dieran su parecer en este punto y señaló fecha para su visita⁸⁶.

Cuatro días después, el 20 de noviembre, la Junta trataba el asunto de montes. Sus procuradores debatieron tanto la orden que tenía el coronel Idiáquez en torno a los plantíos como lo decretado en la Junta de Cestona el 4 de mayo de 1599⁸⁷. Estos debates no se han conservado, ya que el secretario no los puso por registro. Lo único que se ha plasmado por escrito fue lo que acordó la Junta, a saber: escribir al rey acerca de las providencias adoptadas por la provincia en lo referente a los plantíos⁸⁸, y suplicarle para que resolviera que no hubiera superintendente.

83 En torno al «reclamo de que el coronel Domingo de Ydiaquez avía ydo a executar una comisión que tiene de su magestad para azer plantíos en esta provincia» (A.G.G., J.G. de 16-XI-1601).

84. El referido coronel «propuso y dixo que el rey nuestro señor le ha hecho merced de que tenga quanto de los plantíos e fábricas de sus galeones reales en esta provincia por muerte del general Antonio de Urquiola, y que a estimado esa por servir a su magestad y a esta provincia como hijo della a que atenderá con el cuidado beraz y voluntad que (ROTO)» (A.G.G., J.G. de 16-XI-1601).

85. Agradeciendo la voluntad de Idiáquez y dándole las gracias de lo que «sofrecía» (A.G.G., J.G. de 16-XI-1601).

86. «Del día lunes primero» dice el decreto de la Junta. Los procuradores que tenían que dar el dictamen eran los de las villas de San Sebastián, Tolosa, Azpeitia y Mondragón, junto con los presidentes de la Junta (A.G.G., J.G. de 16-XI-1601).

87. En la que se mandó guardar y cumplir, como vimos, el tenor de una ordenanza provincial en la que se disponía que los alcaldes ordinarios hicieran plantar en sus respectivas villas 500 pies de robles, que en toda Guipúzcoa supondría el monto de 15.000 pies anuales

88. Así, la orden que la provincia tenía dada a sus villas, alcaldías y valles para que cada año plantaren por lo menos el número mencionado en la nota anterior Y también que enviaran testimonio a cada junta de verano de haber-

A pesar de que la provincia no quería superintendente, sin embargo no era ésta la intención real. En efecto, unos días después se expidió una Real Cédula reafirmando la figura del superintendente⁸⁹. En su parte expositiva esta disposición regia decía que la villa de San Sebastián no había cumplido el repartimiento que le había ordenado Idiáquez, porque se oponía a una ordenanza provincial; y, en la parte dispositiva se descalificaba la legislación provincial, al mandar que la provincia cumpliera puntualmente las órdenes que tenía Idiáquez, sin que pudiera interpretar ni alegar dicha ordenanza⁹⁰.

Esta disposición real, tan lesiva a los intereses provinciales, fue objeto de una Junta particular. En efecto, tamaño asunto no podía tratarse en una Diputación y todavía quedaban cuatro meses para que se celebrara la Junta de verano. Así que se convocó en el lugar de Basarte, dos días después del Año Nuevo de 1602, una Junta particular con el fin de analizar la carta real de 29 de noviembre del año anterior.

La provincia, desde luego, se mantuvo firme en sus anteriores posturas, no estando por tanto dispuesta a cumplir las disposiciones reales referentes a plantíos. De esta forma, los junteros, aplicando la fórmula del pase foral, acordaron obedecer la referida carta real, pero que en cuanto a su cumplimiento, dijeron que suplicaban de ella⁹¹.

lo cumplido, «so pena de los diez mil maravedís de la dicha ordenança que ynbiolablemente se execute y que el diputado cobre de los alcaldes que no lo cumplieren para cada la Junta de verano, con capítulo de su instrucción que para ello se deve a lo que cobrare lo llebe a la Junta del ynbierno so pena que se cobrará de sus bienes» (A.G.G., J.G. de 20-XI-1601). Véase, en este mismo sentido, el acuerdo de la Junta General de Guetaria del 23 de noviembre de 1598.

89. Otorgada en Valladolid, el 29 de noviembre de 1601 (A.G.G., Sec. 2.ª, Neg. 17, Leg. 11).

90 Finalmente, la cédula expresaba que «mando que en esta conformidad hagais de vuestra parte el esfuerço neçesario para ello asistiendo al dicho coronel con el favor y ayuda y los otros medios que para este efecto os pidieeres y le pudieredes dar, conforme al amor y zelo que teneis a mi serviçio» (A.G.G., Sec. 2.ª, Neg. 17, Leg. 11).

91. «Y en su parecer —manifestaban los procuradores— que se guarde y cumpla lo decretado cerca de lo susodicho en la última Junta General de la villa de Azcoitia», es decir, que se cumpliera la ordenanza provincial de montes

Para marzo de 1602 el coronel tenía que haber realizado la segunda visita a las villas situadas en la costa, pero no lo había hecho. La razón de ello era que Idiáquez prefirió esperar a la celebración de la Junta de Zumaya de abril, por si acaso había algún acuerdo en este negocio. Sin embargo, se observa claramente que el ánimo de Domingo de Idiáquez es cumplir con el mandato real, a pesar de los acuerdos contrarios de la Junta. Así que, escribe a la Junta diciendo que no puede aguardar más tiempo sin cumplir la orden real, ya que necesita enviar al monarca los testimonios de los plantíos⁹². Pero, en contra de lo que pretende Idiáquez, los alcaldes no le darán dichos testimonios, sino que los presentarán en la Junta⁹³. De esta forma, al no entregarle los testimonios, le obstaculizarán el ejercicio de la Superintendencia.

Pero Idiáquez, que no es hombre que se amedrente fácilmente, a pesar de las adversidades, optará por cumplir lo más fielmente posible su cargo, sin importarle mayormente los acuerdos junteros. Antepondrá siempre su deber real a las obligaciones que, como guipuzcoano, le corresponden. Así que, cansado de esperar, decide hacer la visita, aunque con cierto retraso, por las diferentes villas. Y en aquellos posibles lugares en que no se hallan cumplido sus órdenes no dudará en actuar con rigor. Así ocurrirá, por ejemplo, cuando a primeros de julio de 1602 se presente en Azpeitia y multe a los oficiales de su regimiento con 1.000 reales por no haber realizado el plantío en el lugar que les ordenó⁹⁴.

de 1548. Asimismo los procuradores encargaron a Pedro García de Albizu que suplicara al rey lo así acordado. Para que este negocio se despachara mejor ordenó la Junta que las villas y lugares sitios dos leguas a la mar remitieran los testimonios que habían hecho en los últimos años. Las villas, alcaldías y valles deberían de enviar la referida información en el término que fijó la Junta, que se encuentra en el registro manuscrito de ésta, bajo pena de 50 000 maravedís para quien no lo cumpliera (A.G.G., Registro de la Junta Particular de Basarte de 3 de enero de 1602).

92. La Junta leerá su carta y acordará que «del descargo de Pedro García de Albizu resultaría lo que avia sobre lo susodicho» (A.G.G., J.G. de 22-IV-1602).

93. Véanse las Juntas del 22, 23 y 30 de abril de 1602.

94. A.G.G., Sec. 2.ª, Neg. 13, Leg. 12. La villa de Azpeitia en vista del comportamiento de Idiáquez consultó a la Diputación sobre el particular. Esta mandará al doctor Zarauz que dé su parecer sobre lo que la provincia debe hacer y que lo que dicho doctor ordene que se envíe al agente en corte para

El superintendente acudirá durante el verano de 1602 varias veces a las villas y lugares de la provincia con el objeto de cumplir la orden de plantíos, pero se encontrará con muchos obstáculos. Por ello escribirá, en noviembre, a la Junta de Fuenterrabía para que decrete que le coadyuven las villas en la ejecución de su mandato⁹⁵. Sin embargo, la provincia no querrá colaborar y responderá negativamente a la petición del superintendente al decirle que sus villas seguirán enviando los testimonios de los plantíos a la Junta de verano, como siempre lo han hecho⁹⁶.

En vista de lo anterior, es decir, de la falta de cooperación provincial, el superintendente escribirá al monarca quejándose de que no puede ejercer su oficio. El rey responderá que la provincia no impida al coronel el ejercicio de su «ministerio»⁹⁷. Nuevamente esta disposición imperativa no será óbice para que la provincia persista en su actitud. En efecto, Idiáquez escribirá a la Junta de Vergara, enviando copia de la carta real, y suplicando que tome resolución para que él pueda cumplir con su comisión «sin disgusto de las villas». Las dos cartas, la del monarca y la del coronel, se leyeron en la Junta la cual dijo que «en vista del despacho de Yçaguirre, su agente en corte, resultará la provisión y respuesta desta carta»⁹⁸.

También en esta Junta de Vergara las villas entregaron los testimonios de los plantíos⁹⁹, en vez de al superintendente. De esta forma se le pondrán a éste nuevamente trabas en el desempeño de su

que haga las diligencias convenientes (A.G.G., Diputación de San Sebastián, 10-VII-1602).

95. A.G.G., J.G. de Fuenterrabía, 23-XI-1602.

96. Así, la Junta acordará responder al coronel que la provincia tiene dada orden a sus villas de lo que tienen que hacer en este asunto, por lo «que tanto—expresaba aquélla— importa al servicio de su magestad y al bien desta república y propio interés de los vezinos della a que se acudirá con la voluntad y beras que el caso requiere y se a echo siempre» (A.G.G., J.G. de 23-XI-1602).

97. Real Cédula, dada en Valladolid, el 30 de enero de 1603 (A.G.G., J.G. de 17-IV-1603)

98. A.G.G., J.G. de Vergara, de 17-IV-1603. El secretario juntero ha sido muy parco en transcribir el acuerdo de la Junta y se ha limitado a decir que en el despacho del agente en corte se encuentra la respuesta. Son tan pocos los datos que nos facilita que es prácticamente imposible saber a qué despacho se refiere. Nosotros, desde luego, no lo hemos hallado.

99 Véanse los acuerdos del 19, 21 y 22 de abril de 1603.

cargo, al no poder remitir los referidos testimonios al monarca, como era su deber.

Los constantes enfrentamientos entre el superintendente y la provincia irán tomando un cariz molesto. De una parte, Idiáquez obstinado en cumplir con su mandato; de otra, la provincia tratando por todos los medios de impedirselo, hasta el punto de que la Junta de Tolosa, en mayo de 1604 escribirá nuevamente al monarca suplicándole que sobresea al coronel en el ejercicio de sus funciones dentro de los límites de Guipúzcoa ¹⁰⁰.

Estas súplicas serán desatendidas por el rey, ya que no se producirá resolución alguna. Mientras, el superintendente intentará cumplir con su obligación, pero hallará nuevas dificultades y obstáculos. Finalmente, el coronel que era un hombre recto y celoso en el cumplimiento de su cargo, al no poder desarrollar adecuadamente su oficio, por las constantes oposiciones de la provincia, optará por ir a la corte para poner fin a esta situación de zozobra. Una vez en la corte su intención será suplicar al monarca para que mande cometer la superintendencia de los plantíos a otra persona ¹⁰¹. En el caso de que el rey estimara que Idiáquez continuara en ella, entonces le pediría que proveyera para que cesaran todos los inconvenientes. Estos deseos que tenía el coronel de ir a la corte para renunciar a la Superintendencia de los plantíos se los comunicó a la provincia ¹⁰², la cual se reunió en Diputación, el 10 de octu-

100. Esta Junta puso en noticia del monarca, el cuidado que tenía la provincia en el tema de los plantíos, y para que esto le constara le envió los testimonios que en ese año se habían hecho. Asimismo acordó la Junta que si el coronel procediera contra alguna villa, sus oficiales o los particulares, saliera la provincia en su defensa. También acordó escribir al agente en corte para que agilizara las diligencias en este aspecto. El decreto decía en este punto que «al dicho agente —se le escriba— para que con más cuidado que asta aquí acuda a este negocio, sin que aya tanta remisión como le ha auido por las bexaciones y moléstias que cada día se ban aumentado» (A.G.G., J.G. de Tolosa, de 8-V-1604)

101. «Que sepa daros mas gusto», manifestaba Idiáquez a la provincia en una carta fechada en Azcoitia, el 3 de octubre de 1604 (A.G.G., Sec. 2.ª, Neg. 13, Leg. 12).

102. «Para si gustare adbertir —escribía el superintendente a la Diputación— algo sobre el remedio desto a su agente o otra persona lo aga con tiempo, que como hijo de V.S. desseo tenga todo gusto y acudir como tal al servicio de su magestad y de V.S.» (carta del coronel, de 3 de octubre de 1604, en A.G.G., Sec. 2.ª, Neg. 13, Leg. 14).

bre de 1604, para tratar como único punto del orden del día este asunto. En ella se acordaría remitir al agente en corte una copia de esta carta para que se pudiera despachar mejor el negocio de los plantíos ¹⁰³.

No sabemos ciertamente si Idiáquez fue a la corte a renunciar de su cargo, o si por el contrario fue una medida de presión para que la provincia le aceptara como superintendente. En el caso de que hubiera ido a Madrid a poner en manos del monarca su oficio, este le debió de ratificar en él. Está claro que para la primavera de 1606 el coronel se halla solicitando la cooperación de la provincia para que pueda desempeñar adecuadamente la Superintendencia. Efectivamente, el 13 de abril de aquel año, se personó el coronel Idiáquez en la Junta de Elgoibar y entregó una carta real ¹⁰⁴ en la que se mandaba que la provincia de Guipúzcoa coadyuvara al referido coronel en el cumplimiento de todo lo referente a plantíos. Una vez leída esta carta, Idiáquez exhibió en la misma Junta dos cédulas reales. En la primera ¹⁰⁵ se cometía al coronel, como responsable de la fábrica de navíos y de la visita de los montes de Guipúzcoa, que observara lo dispuesto en las cédulas que tenía referentes a los plantíos y, singularmente, que remitiera, al veedor Aróstegui, los testimonios que de aquéllos le entregaran los alcaldes ¹⁰⁶. En la segunda cédula ¹⁰⁷ se ordenaba al superintendente que hiciera plantar a los concejos y lugares sitios cinco seis leguas de la fábrica de Placencia, fresnos y nogales ¹⁰⁸.

103. El acuerdo de la Diputación decía textualmente: «que un tanto desta carta se enbie a Domingo de Yçaguirre, agente de la dicha provincia en corte, sin embargo de que se le an ynviado los testimonios de los dichos plantíos y la ordenança dellos para que acuda al Consejo y procure se remita esta causa a esta provincia» (A.G.G., Diputación de Azcoitia, de 10-X-1604).

104. Madrid, 17-III-1606 (A.G.G., Sec. 2.ª, Neg. 13, Leg. 12).

105. Expedida, también, en Madrid, el 17 de marzo de 1606 (Archivo de la Diputación de San Sebastián, en adelante A.D.S.S., Junta General de Elgoibar de abril de 1606).

106. Asimismo le encargaba el monarca que las justicias «os acudan con los testimonios que os deben dar», a finales de mayo de cada año, «sin réplica ni dilación alguna» (A.D.S.S., J.G. de Elgoibar, de 13-IV-1606, pág. 21).

107. Igual que la anterior, de fecha 17 de marzo de 1606.

108. Porque hacía mucha falta la madera de nogal y fresno, para cajas de arcabuces y mosquetes (A.D.S.S., J.G. de Elgoibar, de 13-IV-1606, pág. 22). Para el estudio de la fábrica de armas de Placencia, véase LARRAÑAGA, R., *Síntesis histórica de la armería vasca*, San Sebastián, 1981.

Estas dos cédulas se leyeron en la Junta y se obedecieron por ella con acatamiento y reverencia, pero en cuanto a su cumplimiento aquélla acordó recabar dictamen¹⁰⁹ sobre lo que debería obrar en dicho asunto¹¹⁰.

He manejado el registro de estas Juntas y no aparece por ninguna parte el dictamen solicitado por la Junta del 13 de abril. Nos inclinamos a pensar que la Junta, siguiendo su anterior política de no admitir al superintendente, suplicaría de estas disposiciones regias y escribiría al rey para que proveyera que no hubiera funcionario en este ramo forestal. A lo largo de aquella Junta, otra vez más, los alcaldes remitirían los testimonios de los plañtíos, dificultando nuevamente el que Idiáquez pudiera ejercer su oficio¹¹¹.

Idiáquez ya llevaba cinco años en la Superintendencia y todavía no había tenido un momento de sosiego y tranquilidad. Esta situación se le debe de haber hecho insostenible porque, en septiembre de 1606, escribe una carta desesperada a la provincia. En ella manifiesta que ejecutará su orden con rigor en aquellos que no le entreguen los testimonios¹¹². Sin embargo, esta amenaza

109. Vemos una vez más aplicar por la Junta la cláusula del pase foral, «obedézcase, pero no se cumpla». El dictamen se solicitó a los presidentes de la Junta, junto con el doctor Plazaola y Juan López de Ondarza y Pedro García de Albizu (A.D.S.S., J.G. de Elgoibar, de 13-IV-1606, pág. 22).

110. «Y responder a las dichas células —dice el acuerdo juntero— debajo del obedecimiento y de todo hagan relación y den su parecer» (A.D.S.S., J.G. de Elgoibar, de 13-IV-1606, pág. 22).

111. Véanse, en este aspecto, las Juntas de Elgoibar de 1606 siguientes: III, VI, VII, VIII, IX y X, del 11, 14, 15, 16, 17 y 18 de abril, respectivamente.

112. En una carta del 12 de septiembre de 1606, Idiáquez expresaba que «con licencia de V.S. me es fuerça bolber por mi reputación y obligación y dar la buena quenta que he dado toda la vida, de lo que tengo a cargo y su magestad me manda. Y que si yo yçiere algunos papeles, en raçón desto, y acudiere a sacar prendas para las penas que su magestad tiene mandado, y yçiere otras diligencias que me tocan y se inbiaren a su magestad para que mande probeer lo que mas su servicio fuere, se sirva V.S. del enorme por escusado y disuel (ROTO), pues de mi parte ha avido toda la buena correspondencia que soi obligado y devo a yjo de V.S. Y de la de los que han faltado de cumplir con las ordenes de su magestad, y no han querido acudir con los testimonios, no avrá disculpa, pues no lo es el deçir que los an embiado a V.S., ni con esto cumplen con la boluntad de su magestad, de que a mi me pasa en el alma y de que me obliguen a executar mi orden por rigor» (A G G, Sec. 2ª, Neg 13, Leg 12).

no da los frutos esperados, pues los alcaldes se esconderán y argüirán mil excusas para no darle los testimonios ¹¹³.

En la primavera de 1607, el superintendente visitará los concejos y asignará nuevas cantidades de robles para su plantación ¹¹⁴. También en ese año, como estaba decretado por la provincia y siempre había sucedido así, los alcaldes remitirán la razón de lo plantado a la Junta veraniega ¹¹⁵.

Este punto tan conflictivo y base de los enfrentamientos entre Idiáquez y la provincia, como es el de la entrega de los testimonios se tratará en sucesivas ocasiones. Así, por ejemplo, la Junta de Segura, en diciembre de 1608, acordará que se tenga especial cuidado de enviar los testimonios a ella y no, al superintendente. Asimismo escribirá la Junta al coronel para que no cause agravios a ningún concejo ni particular ¹¹⁶.

1609 es año decisivo en el aspecto testimonial. La provincia cederá ante las pretensiones del superintendente. Sin embargo, esta cesión no será voluntaria sino coactiva. En efecto, Idiáquez, actuará con dureza contra aquellos alcaldes que sean remisos en entregarle los testimonios, hasta el punto de que apresará al alcalde de Asteasu por negarse a darle los testimonios de los plantíos realizados en su demarcación. El coronel se mantendrá firme en su postura, y no dejará en libertad al alcalde hasta que le entregue los referidos testimonios ¹¹⁷.

A partir de este momento se puede ya decir que los alcaldes colaborarán con el superintendente, aunque no lo harán todos.

113. A.G.G., Sec. 2.^a, Neg. 13, Leg. 12.

114. Así, por ejemplo, a Aguinaga le mandó que plantara 1/3 de los 700 robles que había repartido a Usurbil. Como Aguinaga no tenía ni sitio ni términos para ello, se quejó a la Junta con el objeto de que diera la orden que más conviniera «para que el dicho lugar no sea vexado ni padezca» (A.G.G., Caja 56, Leg. 1). La Junta acordó escribir a Idiáquez diciéndole que se contentara con lo que Guipúzcoa tenía ordenado conforme a su ordenanza provincial de 1548, es decir, que se plantaran únicamente 500 robles (A.G.G., J.G. de Rentería, de 8-V-1607).

115. Véase, en este sentido, los acuerdos de la Junta General de Rentería de mayo de 1607.

116. A.G.G., J.G. de Segura, de 5-XII-1608

117. Véase, a este respecto, los acuerdos de Diputación siguientes: 21-II, 23-II y 7-III-1609. El alcalde de Asteasu, Domingo de Lizarraga, estuvo encarcelado por espacio de 14 días (A.G.G., Caja 58, Leg. 2).

La excepción la constituye el Regimiento de San Sebastián. En efecto, el 17 de marzo de 1609 el superintendente otorgó comisión a Cristóbal de Egusquiza ¹¹⁸ para que requiriese a los alcaldes de aquel Regimiento a que entregaren los testimonios de lo plantado en los cuatro años anteriores. Sin embargo, San Sebastián no se los dará. Lo único que dirá el Ayuntamiento es que había plantado algo más de 2.000 robles cada uno de aquellos años y que correspondía al coronel el levantar los testimonios ¹¹⁹. En vista de esta respuesta negativa el superintendente dictará un nuevo auto, en tonos muy imperativos, para que los alcaldes y Regimiento de San Sebastián cumplieran prontamente, «sin réplica alguna», la orden que les había notificado anteriormente ¹²⁰. Sin embargo, a pesar de la imperatividad de este auto, no surtirá los efectos esperados ¹²¹.

Se seguirá produciendo un cruce de misivas entre el Ayuntamiento de San Sebastián y el superintendente durante algún tiempo, hasta que finalmente el Ayuntamiento, siguiendo las instrucciones de la Diputación, entregará a Idiáquez los testimonios de los plantíos ¹²².

Para finalizar la Superintendencia de Domingo de Idiáquez, diremos que cuando ya había conseguido, después de nueve largos años, que los alcaldes se sometieran a sus mandatos, se le designará para la gobernación y alcaldía de Melilla. Esto ocurrirá a

118. Era escribano numeral de la villa de Hernani, así como de las fábricas, arqueamientos y plantíos de la provincia de Guipúzcoa (M N , Colec. Vargas Ponce, T. 11, Doc. n.º 18).

119. Respuesta del 4-IV-1609 (M.N., Colec. Vargas Ponce, T. 11, Doc. n.º 18).

120. Lezo, 5-IV-1609 (A.G.G., Sec. 2.ª, Neg. 12, Leg. 12).

121. En efecto, el Ayuntamiento se reafirmará, el 30-IV-1609, en su postura anterior (A.G.G., Sec. 2.ª, Neg. 13, Leg. 12).

122. Nos encontramos ya en 1610. El 16 de julio de este año el alcalde donostiarra, Juan López de Reyar, suplica a la Diputación qué es lo que debe de hacer ya que el coronel Idiáquez le ha pedido los testimonios de los plantíos de los últimos años (A.G.G., Caja 24, Leg. 1). Al día siguiente, la Diputación acuerda que se cumpla el dictamen que sobre los testimonios de los plantíos tenía dado el licenciado Armendía «al tiempo que estuvo preso sobre lo mismo el alcalde Asteasu» (A.G.G., Diputación de 17-VII-1610). En aquel dictamen Armendía era de la opinión de que se entregaran los referidos testimonios.

finés de marzo de 1611¹²³. Cuando tuvo noticia de ello la Junta, acordó darle la enhorabuena¹²⁴.

Esta misma Junta decretó, el 23 de abril, poner un capítulo en la instrucción al agente en corte para que hiciera diligencias de que no se nombrara un nuevo superintendente¹²⁵. Sin embargo, como veremos en seguida, estas gestiones no fructificaron ya que el monarca designó otro nuevo superintendente: Domingo de Echeverri, del que pasamos a ocuparnos.

DOMINGO DE ECHEVERRI, COMO SUPERINTENDENTE

El mismo día en que Domingo de Echeverri, secretario real y residente en San Sebastián, se enteró de la provisión designando a Domingo Pérez de Idiáquez como gobernador de Melilla, escribió a Juan de Idiáquez^{125 bis} solicitándole el empleo de superintendente de fábrica de navíos y plantación forestal. Esto sucedió el 3 de abril de 1611¹²⁶.

Del escrito de Echeverri se desprende que el cargo de superintendente era hereditario, y que le correspondía por tanto desempeñarlo al hijo de Domingo de Idiáquez, Alonso¹²⁷. Pero éste no

123. M N, Colec Vargas Ponce, T. V, Doc 99, Fol. 123.

124. A.G.G., J.G. de Zumaya, de 18-IV-1611.

125. A G.G., J.G. de Zumaya, de 23-IV-1611

125 bis. Juan de Idiáquez era hijo de Alonso de Idiáquez, que sirvió a Carlos V como Secretario de Estado. Ocupó desde 1579 hasta 1587 las Secretarías de Estado de Italia y del Norte. Posteriormente fue consejero de Estado y, en 1599, se le nombró presidente del Consejo de Ordenes. Falleció el 12 de octubre de 1614, a la edad de 75 años (ESCUDERO, J. A., *Los Secretarios de Estado y del Despacho*, Madrid, 1969, T. I, págs. 156-166).

126. M.N., Colec. Vargas Ponce, T. V, Doc. 99, Fol. 123.

127. Como ha apuntado recientemente Zudaire, la nota biográfica de Alonso de Idiáquez está por hacerse (ZUDAIRE HUARTE, E., «Don Tiburcio Redín, Técnico Naval», *Príncipe de Viana*, Año XLVI, mayo-agosto 1985, pág. 495).

Alonso de Idiáquez, héroe de Nordlinghen, maestre de campo, caballero de la Orden de Santiago, nació en Amberes entre 1594-1596, en donde su padre era teniente de la fortaleza. Luchó en la guerra de Flandes alcanzando el grado de capitán. Posteriormente se trasladó a casa de sus padres en Azcoitia. Se casó con Margarita de Gainza, natural de Azcoitia. Fue jefe de corsarios de Cantabria. En 1626 se encargó de llevar a Flandes, en 36 ó 40 zabras, 14 compañías de Infantería. Diez años después apoyó con 20 zabras la operación de San Juan de Luz y cooperó en 1638 en el socorro de Fuenterrabía. Debió de fallecer en 1646 ó 1647 (AGUILAR Y PRADO, J, *Compendio histórico de diversos*

podía por el momento hacerse cargo de la Superintendencia, porque se hallaba prestando sus servicios en la armada real. Así que su padre, antes de partir para Melilla, escribió a Domingo de Echeverri ofreciéndole la ocupación de construcción naval y fomento forestal con el salario de 300 ducados anuales, mientras su hijo Alonso estuviera ausente. Sin embargo, al secretario no le satisfizo la forma de este pequeño arreglo, ya que supondría la repartición del sueldo, correspondiéndole a él, que al fin y al cabo era quien iba a desempeñar el oficio, la menor cantidad ¹²⁸.

Por estas causas, es posible que Echeverri pensara que lo mejor sería que se le designara interinamente desde Madrid, que el que lo hiciera Idiáquez, por que de esta forma cobraría mayor sueldo del que le proponía éste. Así que no dudó ni un instante en dirigirse a Juan de Idiáquez para pedirle el empleo de superintendente con carácter interino, «mientras el propietario (Alonso de Idiáquez) llega a edad de poderlo hazer por sí» ¹²⁹.

Unos días más tarde la Junta de Zumaya operaba en sentido escritos de diferentes asuntos, Pamplona, 1629, fols. 24-44; ASPURZ, P., *Redín soldado y misionero*, Madrid, 1951, pág. 81; BASTIDA, P., *Puntual y cierta relación del suceso feliz de las armas victoriosas de su Magestad en el Ejército de Navarra*, Valladolid, 1636, Ap.; DEL VALLE LERSUNDI, F., «Apuntes de un Nobiliario de Guipúzcoa», *Euskal Erria*, 68, San Sebastián, 1913, II, pág. 313; FERNÁNDEZ DURO, C., *Armada española. Desde la unión de los reinos de Castilla y de Aragón*, Madrid, 1972, T. IV, págs. 84-85; GARCÍA CARRAFFA, A. y A., *Diccionario heráldico de apellidos españoles y americanos*, Madrid, 1954, t. 43, pág. 34; MORET, J., *Empeños del valor y bizarros Desempeños o Sitio de Fuente-Rabia. Sucedió el año 1638*, Pamplona, 1763. Libro Segundo, y Museo Naval. Colec Vargas Ponce, T. X, Doc. 15, fol 16).

Finalmente, Alonso de Idiáquez fue superintendente de la fábrica de navíos y montes en la provincia de Guipúzcoa a partir de 1618 (M.N., Colec. Vargas Ponce, T. X, Doc. 81). Erra, por tanto, Fernández Duro cuando dice que se le nombró como superintendente de la fábrica de naos en 1626 (FERNÁNDEZ DURO, C., *La Armada española*, nota 1 de la pág. 85). En esta fecha lo que ocurrió es que Idiáquez nombró superintendente interino a Echeverri. (Véase la nota 50 de este mismo artículo).

128. San Sebastián, 3-IV-1611 (M.N., Colec. Vargas Ponce, T. V, Doc. 99, fol. 123, y T. X, Doc. 15, fol. 16). Por lo visto, el astuto de Domingo de Idiáquez, pretendía seguir cobrando los 800 ducados anuales que se le atribúan como salario en su título de nombramiento. De ellos, únicamente detraería 300 para pagarle a Domingo de Echeverri si ejercía interinamente la Superintendencia

129. M.N., Colec Vargas Ponce, T. V, Doc 99, fol. 123.

contrario a Echeverri, al encargar al agente en corte que hiciera las diligencias necesarias para que no se nombrara un nuevo superintendente ¹³⁰.

Fueron las gestiones de Echeverri, y no las de Guipúzcoa, las que dieron los frutos esperados: así, se le nombrará interinamente el 9 de julio de 1611, para ocupar la Superintendencia ¹³¹.

El nuevo superintendente comenzará ese mismo mes a desempeñar sus funciones en el ámbito de la construcción naval ¹³². Sin embargo, en materia forestal no lo hará hasta el mes de noviembre, en espera de que se convoque la Junta para notificárselo.

Cuando esté reunida la Junta de Fuenterrabía, el 17 de noviembre, se personará en ella Don Domingo de Echeverri y entregará un memorial firmado por él mismo, en el que expondrá lo que estima que la provincia debe de hacer para el fomento de los montes, así como su conservación para la fábrica de naos y provisión de las herrerías ¹³³. Echeverri solicitó a la Junta que se leyera el referido memorial y que en su razón acordara lo más conveniente a los intereses reales y al bien provincial. Asimismo pidió que la Junta ordenara a las villas, alcaldías y valles que le entregaran los testimonios de lo plantado ¹³⁴, protestando, que, de lo contrario, usaría los recursos necesarios.

La mencionada Junta ordenó a los procuradores de las villas de San Sebastián, Deva y Oyarzun que vieran el referido memorial y dieran su parecer, para que en su vista aquella proveyera lo más conveniente ¹³⁵.

130. A.G.G., J.G., de 23-IV-1611.

131. M.N., Colec. Vargas Ponce, T. X, Doc 81. No nos ha sido posible localizar su título de nombramiento. Echeverri sirvió en el empleo, con un sueldo de 400 ducados anuales, hasta el 20 de junio de 1618 (ibidem).

132. Efectivamente, el mes de julio dio cuenta al Consejo de Guerra de los navíos que se habían comenzado a fabricar en la provincia de Guipúzcoa (M.N., Colec. Vargas Ponce, T. II, Doc. 55, fol. 82).

133. Sobre las herrerías en Guipúzcoa, véase la obra reciente de L. M. Díez de Salazar, *Ferrerías de Guipúzcoa (siglos XIV-XVI)*, San Sebastián, 1983.

134. «En conformidad —decía Echeverri— de lo que ha acostumbrado con sus predecesores» (A.D.S.S., J.G. de Fuenterrabía, 17-XI-1611, pág. 17). Lo que manifestaba Echeverri no era cierto. Ya hemos visto anteriormente cómo las villas no remitieron dichos testimonios, hasta prácticamente el final de la primera década del siglo XVII.

135. Previamente a este acuerdo, la Junta dio gracias a Echeverri por el

El 19 de noviembre en la Junta se leyó el parecer emitido por los junteros en razón del memorial de Echeverri, el cual se mandó cumplir¹³⁶. En esta misma Junta se acordó un decreto muy importante en torno a los testimonios de los plantíos, que zanjaría definitivamente la controversia que ya duraba muchos años entre el superintendente y la provincia. En efecto, la Junta decretó, conforme a un dictamen que habían emitido los abogados asalariados dos años antes¹³⁷, que las villas, alcaldías y valles entregaran a Domingo de Echeverri los testimonios de los plantíos. Todo ello se acordó sin perjuicio del derecho¹³⁸, que decía tener la provincia, para cumplir las reales cédulas y comisiones del superintendente¹³⁹.

Se puede decir que es a partir de 1611 cuando la provincia acepta el que exista un funcionario regio que se encargue de la Superintendencia de construcción naval y fomento forestal. Después de Echeverri, se nombrarán otros superintendentes a los cuales Guipúzcoa no pondrá obstáculos en el desempeño de su cometido. Pero su análisis lo dejamos para otro momento .

CONCLUSIONES

La creación de superintendentes en Guipúzcoa se remonta a fines de siglo XVII. 1598 será el año en que por primera vez se nombre con carácter específico para la provincia de Guipúzcoa

cuidado que había tenido «en hacer merced» a la provincia con las advertencias de dicho memorial, «acudiendo a esta Junta como tan buen hijo de esta provincia» (A.D.S.S., J.G. de Fuenterrabía, de 17-XI-1611, págs. 17-18).

136. También se dispuso que a las villas que quisieran «se les de traslado del dicho memorial y parecer, por ser tan largo y no se poder ingerir con presteza en este registro» (A.D.S.S., J.G. de Fuenterrabía, 19-XI-1611, pág. 29) En el dictamen que evacuaron los junteros se conformaron con el memorial de Echeverri, estimando que todo su contenido era muy conveniente a «la utilidad y observancia de los hijos de V.S.» (M.N., Colec. Vargas Ponce, T. V, Doc. 118, fol. 155).

137. «Al tiempo», expresaba la Junta, que el coronel Idiáquez prendió a Domingo de Lizarraga, alcalde de Asteasu, por no haberle entregado éste a aquél los referidos testimonios (A.D.S.S., J.G. de Fuenterrabía, de 19-XI-1611, pág. 30).

138. Los junteros decían, incomprensiblemente, que era adquirido.

139. A.D.S.S. J.G. de Fuenterrabía, 19-XI-1611, pág. 30.

un superintendente que se encargará del gobierno y administración de las fábricas reales de navíos y de los plantíos de montes. Dicho nombramiento recaerá en un técnico naval: Antonio de Urquiola. Este tendrá problemas con la provincia cuando trate de cumplir sus funciones en el ámbito forestal, más no en materia de construcción naval, porque Guipúzcoa tenía cierta ordenanza, de 1548, que se contraponía a lo que el monarca mandaba a Urquiola. Sin embargo, en la fábrica real de navíos desarrolló su cargo sin ninguna traba por parte de la provincia, tal vez por eso de los posibles beneficios que redundarían en favor de los guipuzcoanos que construyeran naves.

El segundo superintendente de este tipo que se designe para Guipúzcoa será Domingo Pérez de Idiáquez, en 1611. Al igual que había ocurrido con su antecesor, aquélla no verá con buenos ojos el nombramiento de este nuevo funcionario. Las villas, siguiendo los acuerdos de la Junta y Diputación, le impedirán que ejerza sus funciones en el aspecto forestal. Sin embargo, Idiáquez, hombre que siempre se distinguió por rectitud y buena disposición en el ejercicio de los cargos que se le encomendaron, pondrá todo su empeño para que la provincia obedezca las órdenes reales referentes a montes. Actuará con dureza contra aquellos que sean remisos en cumplir sus mandatos, hasta el extremo de que llegará a detener al alcalde de Asteasu por no haberle entregado los testimonios de los plantíos realizados en su demarcación. Finalmente, el coronel Idiáquez afianzará la Superintendencia de fábricas reales y plantíos en la provincia de Guipúzcoa.

Con Echeverri, tercero de los superintendentes, se puede decir que llega el pacifismo en el desarrollo de la Superintendencia. A partir del momento en que aquél entre en el cargo, 1611, la provincia comprenderá que no hay más remedio que aceptar a estos oficiales, hasta el punto de que se sustraerá la materia forestal de la competencia provincial, siendo los superintendentes quienes en lo sucesivo dirijan y administren la planificación forestal.

RICARDO GÓMEZ-RIVERO

Profesor Titular de Historia del Derecho

Documento n.º 1

1599 Mayo 4

Cestona

Acuerdo de la Junta en torno a los plantíos. Este Decreto es el primer documento en que aparece por vez primera el término Superintendente.

Archivo General de Gulpúzcoa, Registro de Juntas de Cestona de mayo de 1599.

Este día la Junta con parecer de las personas nombradas para lo tocante a los plantíos, aviendo visto la orden confirmada que para ello la dicha provincia tiene por la que dispone y manda que los alcaldes hordinarios en cada villa con la jurisdicción plante quinientos pies de robles, que en toda la dicha provincia bienen a montar quinze mil pies cada año. Se acordó e mandó que con relación de los plantíos que este año se an fecho se escriba a su magestad la horden que tiene dada a cada villa y lugares para que cada año planten por lo menos el dicho número y que parte dello que sean de fresnos en las partes donde huviere comodidad y enbien testimonio a cada junta de verano, so la pena de los diez mil maravedís de la dicha hordenança que ynbiolablemente se execute y que el diputado cobre de los alcaldes que no lo cunplieren, pasada la junta de verano, con capítulo de ynstrucción para ello y lo que cobrare lo llebe a la Junta de ynbierno, so pena que se cobrarian de sus bienes y para ello desde luego se le mande librar mandamiento dirigido a los alcaldes de la hermandad y que a los pueblos que no han ynviado el dicho testimonio y a los que a visto han ynviado sin espresar número cierto, que un alcalde de hermandad compela y apremie a sus alcaldes y a su costa después que hubieren pasado quinze días que se les dan de término para que lleben dichos testimonios a villa y diputado y que así mismo en los pueblos que no hubieren cumplido, de su alcaldes cobre los dichos diez mil maravedís y los lleben a villa y diputado y que se suplique a su magestad que teniéndose por servido de la orden que así ha dado, como quier que se plantarán más número se sirva de que no aya *superyntendente* alguno y que cada y quando que su magestad fuere servido se ynbiarán testimonios de que se cumple la dicha orden y que a los particulares se sirva de no compeler a plantío forçoso, pues los que pueden lo hazen por su provecho con mucho cuydado, en mucha más cantidad de lo que la dicha ordenança dispone, por que no entran en ella los plantíos de los dichos particulares el número de la ordenança. E si se compeliesen sería causa de que sus casas perdiesen los que no pueden hazer los dichos plantíos.

Y así mismo se suplique a su magestad se sirva de que cada y quando de que algunos maderos de particulares fuere necesario para su fábrica real

se baluen en el puesto donde estuviere antes de cortar por sendas personas nombradas por el que tuviere a su cargo la dicha fábrica y por el dueño de los tales maderos. Y lo que se baluaren se les pague sin que sean obligados a acarrear ni hazer otra manufatura alguna como algunos de los que han tenido la dicha fábrica lo han querido yntentar de compelerlos y que en esta sustancia se escriba a su magestad y el diputado también satisfaga al dicho general Antonio de Urquiola, e para en caso que él o otro yntentare contra-venir a ello para que ayude a los dueños de los maderos, en nombre y boz desta provincia, se ponga capítulo de ynstrucción al dicho diputado y sus agentes. E para hazer la diligencia referida de suso, al agente en corte y que los procuradores desta Junta den noticia e notifiquen este decreto a sus alcaldes, so la misma pena, lo qual por mi el dicho escribano fiel se notificó a la dicha Junta.

Y porque se adelante el dicho plantío se acordó que si en un año plantare más número de lo repartido con lo tal aya cunplido y cunpla para lo del año siguiente asta el número que así se cedió y que los alcaldes ordinarios, cada uno en su jurisdicción agan publicar lo susodicho por las yglesias e pueblos de su jurisdicción.

Documento n.º 2

1601 Julio 21

Valladolid

Real Cédula por la que se nombra al coronel Domingo de Idiáquez como Superintendente de fábrica de navíos, de arqueamientos y de conservación de plantíos de los montes de la Provincia de Guipúzcoa.

Archivo del Marqués de Valde-Espina, Vínculo de Echániz, en Astigarraga. Archivo General de Guipúzcoa, Sec. 2.ª, Neg. 13, Leg. 12.

Museo Naval, Colec. Vargas Ponce, Tomo 31, Documento 31, Fols. 170 rº-174 rº. Publ. ECHEGARAY, C., «Documentos curiosos», en Euskalerriaren Alde, T. IX (1919), pp. 430-436.

El Rey

Por quanto por muerte del general Antonio de Urquiola está baca la ocupación que tenía en la fábrica de navíos y arqueamientos de los de la provincia de Guipúzcoa y conservación de los de plantíos de los montes de ella. Y siendo necesario que cosas tan ynportantes tengan dueño que las gobierne y administre en mi nombre y que sea persona práctica de ellas, y de mucha retitud y zelo a mi servicio. Y concurriendo estas y otras muy buenas partes, en vos el coronel Domingo de Idiáquez, y por lo bien que de veinte y dos años a esta parte me aveis servido en la guerra allándose en diversas ocasiones donde según estoy ynformado, aveis derramado vuestra sangre y cumplido con las obligaciones de mi servicio, he avido por bien de os cometer y encargar la dicha ocupación de fábricas de navíos, arquamiento dellos y conservación de los dichos plantíos.

Por tanto, por la presente os ordeno y mando que por el tiempo que fuere mi voluntad e hasta que otra cosa yo hordene y mande residais en la dicha provincia de Guipúzcoa, y tengais todos los años cuidado de visitar dos vezes por lo menos a los tiempos que os pareciere mas necesario todas las billas y lugares y jurisdicciones della que estuvieren dos leguas a la mar e tuvieren ríos navegables, y que juntándoos con la justicia hordinaria de los lugares para que os muestren el término dellos en las partes que está declarado y havida buena consideración de la calidad y cantidad del término que cada lugar tuviere señaleis y repartais la cantidad de árboles robles y fresnos si la tierra fuere dispuesta para este género de árboles que pareciere, que cada año se deven plantar declarando el tiempo dentro del qual an de hazer los dichos plantíos y qué cantidad en cada un año y el tamaño y el grandor de los árboles según la disposición y calidad de la tierra donde se an de plantar lo pidiere, y haviéndoles adbertido los que os pareciere combenir para la

conservación de los que se plantare y estuviere plantado para escussa de daño que de los ganados y pastos pueden recibir los tales plantíos y que en las cortas no los desmochen y que tengan cuidado con los desmochos que se hicieren, de guardar las púas y guías y encargándoles con particular cuydado que quando alguno cortare algún pie para fábrica de casa o nao, le tengan de obligarle a plantar algunos en su lugar para que se puedan conservar los plantíos, dexeis a cargo de la justicia hordinaria y regidores de la tal billa e lugar la execución de los plantíos, los quales mande que agan repartimiento en particular entre sus bezinos de los árboles que vos les repartieredes, ordenando a los tales vezinos que conforme a la cantidad de términos y tierras que cada uno tuviere plante los dichos árboles y asimismo que en los términos y tierras concegiles que la tal billa e lugar tuviere agan plantar a costa de los propios de dicho concejo la cantidad de robles y fresnos que le repartieredes, de manera que bengan a cumplir el número de repartimiento y tomareis testimonio de la cantidad de árboles que a cada lugar repartieredes para que quando bolbais a hazer la visita podais tomar y tomeis quenta a la dicha justicia y regidores de si an cumplido o no el dicho repartimiento, aperciviéndoles que el que no cumpliere por cada árbol que dexare de plantar yncurra en pena de un real y en la misma el alcalde y regidores que dexare de plantar los que al concejo se repartieren, la qual pena an de pagar de sus propios bienes y no de los del concejo. Y mando que repartais las dichas penas por tercias partes, la una para el denunciador, otra para los gastos que se hizieren en las dichas bisitas y la otra para mi Cámara. Y en las partes que no huviere plantíos areis que se lleven de donde los huviere pagando por ellos las personas que los hovieren de rescivir lo que os pareciere que puedan valer a un justo y medrado precio. Y echa y acavada la bisita me ynviéis cada año una relación de los árboles que huvieredes repartido a cada lugar, la qual podreis haber por el testimonio que en cada parte aveis de tomar. Y estos los entregareis a Martín de Arostegui, mi beedor y contador de la gente de guerra de las villas de San Sebastián y Fuenterravía, para que tengan razón dello en sus libros.

Ha de estar tanvién a vuestro cargo lo que toca a los empréstitos, y así hordeno y mando que de el dinero que para este efecto mandare que entre en poder de Joan de Olano, mi pagador de la gente de guerra de la dicha provincia de Guipúzcoa, libreis y agais socorrer y prestar a todas las personas que quisieren y se ofrecieren a fabricar naos de porte de trescientos toneles y dende arriva al respecto que le provador Cristobal de Varros, a cuyo cargo estuvo esta ocupación y el dicho general Antonio de Urquiola, les solían dar por cada tonelada y un tercio más, conforme a una cédula firmada de mi mano y refrendada de Juan de Ybarra, mi secretario, fecha en Madrid a veinte y cinco de febrero del año pasado de ochenta y siete, de que se os entregará con esta copia firmada de Estevan de Ybarra, mi secretario, asentando primero y ante todas cosas con las tales personas el navío o navíos que huvieren de fabricar y el porte y toneladas que huvieren de tener, y obligando sus personas y bienes ante escribano, y tomando de

cada una la seguridad que os pareciere conviniente a vuestra satisfacción de que fabricaran conforme al porte y medidas y perfección que los dieredes sin alterar ni mengoar cossa de consideración y para este efecto les dareis las medidas y traça que la nao huviere de tener, advirtiendo que sean bien proporcionadas, de buen gálivo y forma, fuerte y ligeras, llevando la mira a los dos presupuestos dichos, que sean aptas y acomodadas para su grangería y contratación y capaces para de armada, y que volverán el dinero que les prestaredes luego que vendieren la nao o naos para cuya fábrica recibieron el empréstico, según lo tengo concedido en la dicha cédula de veinte y cinco de febrero, y que donde no los podais executar por ello como maravedís y haver míos, y a los que haviendo vendido la nao no pagaren les executareis como queda dicho sus personas y bienes o las de sus fiadores, si los tuvieren, y harcis que buelvan y entreguen lo que huvieren recibido a poder del dicho pagador para que siempre esté en ser y no se consuma de ninguna manera y buelto a su poder si luego o después se ofreciere quienquiera fabricar lo bolvereis a prestar porque mi voluntad es que la cantidad de dinero que para los dichos empréstidos mandare proveer la presteis toda entera y cumplidamente, haviendo personas que quieran fabricar y que cobrados unos empréstidos bolvais a hazer otros de nuevo, de suerte que el dinero no esté en las arcas mas del tiempo que no huviere quien se ofrezca a fabricar y al dicho pagador, mando que cumpla y pague las libranzas que le dieredes de los empréstidos que hizieredes, declando en ellas la nao o naos para cuiá fábrica hizieredes el tal empréstido y las condiciones con que las huvieren de fabricar, siendo hechas y tomada la razón dellas por el dicho beedor Martín de Aroztegui, con cuya interbención y asistencia haveis de hazer todos los conciertos y empréstidos. Y mando que con las dichas libranzas y recados que en ellas se acusaren se le reciva y pase en quenta al pagador lo que del dinero de los dichos empréstidos pagare siendo por bia de empréstido para fabricar naos y no para ninguna otra cossa, aunque sea de mi servicio; porque este dinero no a de servir ni se a de tocarle para otro ningún efecto. Y porque olgare saver el dinero que se a prestado y el que ay en ser, y las naos que se fabrican, de que porte y por quienes, os ordeno y mando que cada año dos bezes de seis en seis meses me ynvieis relación firmada de vuestro nombre y del dicho beedor, en manos de mi secretario de guerra de todo lo referido con mucha puntualidad y distinción. Y si entendieredes que ay algunas personas que quisieren fabricar naos o otros navíos, sin balerse del empréstido que por mi quenta se haze procurareis hazer con ellos que fabriquen de buena traça y forma, de manera que se enmienden los hierros que por lo pasado en esto a avido y se mejore en todo la fábrica y se consigan los dos fines que se pretenden de su comodidad y grangería y el de mi servicio, la otra parte principal que tiene este negocio y a de estar a vuestro cargo y os cometo a de ser el arqueamiento de todas las naos de trescientas toneladas y dende arriba, cuyos dueños pretendieren goçar de los diez mil maravedís de acostamiento de que por premáticas y cédulas más les tengo hecha merced por cada cien toneladas, para mas ani-

marlos a que fabriquen naos gruesas, y de las naos que en la dicha provincia se enbargaren y tomaren a sueldo para mi servicio, y así os horden y mando que de todas las bezes que fueredes requeridos por alguna persona que aya fabricado o fabricare navío que pretenda goçar de la dicha merçed que juntandos con el mi corregidor de la dicha provincia de Guipúzcoa o con la justicia hordinaria de la jurisdicción donde estuviere el dicho navío le beais, y vos por vuestra persona le midais y sino pudieredes le hagais medir en vuestra presencia y de la justicia por dos personas de esperiencia y de quien le tengais satisfacción, tomándoles primero juramento en forma de derecho, que harán el arqueamiento bien y fielmente y por ante mi servicio público con el codo y medida, que los dichos Cristobal de Barros y Antonio de Urquiola husaron y acostumbraron medir las naos que a de tener dos tercios de vara de medir castellana y más un treinta y dos avo de los dichos tercios, y conforme a la memoria tirmada del dicho secretario que con esta se os entregará y constandos que es de trescientos toneles machos y dende arriva deis el arqueamiento al dueño de el tal navío signado de escrivano, cerrado y sellado para que le presente ante los mis contadores mayores, y por ellos visto, pareciendo que está conforme a la horden que cerca desto está dada le asienten los mis libros que tienen y le libren los diez mil maravedís que por cada cien toneladas huviere de haver según se contiene en la cédula dirigida a los dichos contadores que sobre esto ay, y advirtiendoseos que este arqueamiento le haveis de hazer estando el navío puesto para hazerse a la bela armado, adresçado y a punto de navegar, y para poderme servir al tiempo que se os ofrezca ocasión. Y asimismo horden y mando que a vos el dicho coronel Domingo de Idiaquez y a la justicia que con vos se allare a hazer el arqueamiento que deis al dueño certificación firmada de vuestros nombres por donde conste que el tal navío es suyo propio, y que por tal le a tenido y tiene y mantiene habiendo primero hecho de esto cumplida ynformación para que con ella y vuestra certificación y el dicho arqueamiento se le asiente en mis libros y se le livre su acostamiento, demás de lo qual os ordeno y mando que todas las bezes que yo mandare enbargar y juntar naos a sueldo estranjeras o naturales para mi servicio en la dicha provincia, que vos el dicho Domingo de Ydiaquez, y no otra persona, las arqueis y midais con el dicho codo, tomando las medidas conforme a la dicha memoria, en presencia de sus dueños y con intervención del dicho Martín de Aroztegui y del contador o persona que tuviere la quenta y razón de las dichas naves, para que cada uno dellos conforme a la medida que tomaredes y a vuestra declaración, asiente en sus libros el porte y toneladas que tuviere cada uno y pueda dar certificación si se la pidieren dello, y no pudiendo vos por vuestra persona medir el arqueamiento nombrareis personas en la forma que queda dicho, que lo miran en vuestra presencia adbertiendolos unos y los otros que se haga de suerte que los dueños de las naves no sean agraviados, ni mi hazienda dañificada, y tomadas las medidas declareis las que son y las toneladas que conforme a ellas tuviere cada navío y los porneis por scripto y lo firmareis vos y el dicho contador o beedor en

cuyo poder a de quedar esta declaración, y sino hizieredes por vuestra mano el arqueamiento y las personas que lo hizieren supieren scrivir le firmarán tanvién. Y quiero y es mi voluntad que agais y lleveis de salario por el trabajo y ocupación que aveis de tener en el gobierno, cuydado y execución de todo lo referido, con obligación de asistir y servirme en las fábricas de navíos que se hazen y yo mandare hazer en la dicha provincia de Guipúzcoa, sin pretender ni pedir por ello otro, a razón de ochocientos ducados de a honze reales cada ducado al año, y que os hagais pagado dellos del dinero que mandare prover y proveyere para la fábrica de mis galeones o de otros qualquier navíos que por mi quenta os mandare fabricar y fabricaredes en la dicha provincia o de otro qualquier dinero mío que tuviere de la vuestra distribución como no sea desde los empréstidos, y que goçeis dellos desde la data, desta mi cédula en adelante. Y mando al pagador o a la persona en cuyo poder entrare el dinero que para la dicha fabrica provereré que os pague los dichos ochocientos ducados al año, todo el tiempo que me sirvieredes en las cossas referidas y a las personas que le tomaren sus quantas que la recivan y passen en ellas lo que os pagare con un traslado autorizado descrivano desta mi cédula y vuestra carta de pago, sin otro recado alguno, y a vos el dicho coronel Domingo de Ydiaquez, advierto que de ninguna manera os haveis de hazer pagado de vuestro sueldo del dinero que fuere de los empréstidos porque se a de estar sienpre para sólo este efecto, y al dicho pagador que si os los pagare los perderá y mandaré que se cobre de su hazienda. Y siendo necesario, en virtud de esta mi cédula, os doy poder y facultad tan cunplido como de derecho se requiere en tal cassos para todo lo referido y para cada cossa, parte de ello y para poder executar las penas declaradas en los que fueren remisos y descuidados en el plantío de los árboles que los repartieredes y repartirlar, por tercias partes como dicho es, y para poder cobrar de las personas a quienes hizieredes empréstidos, en bendiendo sus navíos y no pagando buenamente, executarlos sus personas e bienes como por maravedies. Y haver míos. Y ordeno y mando a los mi capitán general y corregidor de la dicha provincia y a su teniente y a todos los alcaldes hordinarios de las villas y lugares della que no sólo no ynpidan el gobierno y execución de ninguna de las cossas en esta mi cédula contenidas antes, os den y hagan dar todo el favor y ayuda que les pidieredes que así es mi voluntad y conviene a mi servicio. Y mando que tome la razón desta mi cédula y de los recados en ella caussados, el dicho Martín de Aroztegui, y que vos el dicho Domingo de Idiaquez hagais publicar por todos los lugares de la dicha provincia la horden que en ella os mando dar para los enprestidos y arqueamientos para que los que quisieren fabricar naos acudan a vos y tomen la medida y traça que en fábrica an de guardar. Dada en Valladolid, el veinte y uno de julio de mil y seiscientos y un años. = Yo el Rey. Por mandado del rey nuestro señor, Estevan de Ybarra. Por la ocupación que tuvo en Guipúzcoa, el general Urquiola, en la fábrica y arqueamiento de los navíos y conservación de los plantíos de los montes de aquella provincia, provee v. mad. al coronel Domingo de Idiaquez con ochocientos ducados de salario al año.

Documento n.º 3

1609 Marzo 7

Diputación/San Sebastián

Proposición presentada en la Diputación por el alcalde de Asteasu, Domingo de Lizarraga, sobre la prisión que padeció por no haber entregado al Superintendente Idiáquez los testimonios de los plantíos. A continuación el Decreto que en su vista proveyó la Diputación.

Archivo General de Guipúzcoa, Registro de actas de la Diputación desde el 20 de diciembre de 1608 hasta el 15 de abril de 1609.

En San Sebastián, a 7 de marzo de 1609. Se juntaron en Diputación, con el señor corregidor, los señores alcaldes y Joan Ochoa de Ybarbia, sustituto del diputado general y el jurado mayor Domingo de Caldías, Antonio de Luscano y Joan de Ben, regidores. Y estando ansí juntos pareció Domingo de Lizarraga, alcalde de Asteasu, e hizo relación que el coronel Domingo Perez de Ydiaquez, a procedido contra el por no haverle entregado los testimonios de plantíos que le pidió y en conformidad del parecer que dieron los letrados salariados por redimir bexación y molestia sin atribuyrle mas jurisdicción de la que de derecho le pertenesçe, sin perjuicio del derecho desta provincia y haciendo sus protestos en forma le entregó los dichos testimonios al dicho coronel, el qual retenéndole en prisión le a condenado en seis mill maravedís para los salarios del comisario y escrivano que fueron a Asteasu a haçer las diligencias en virtud de su comisión y en otros 24 reales para el escrivano ante quien a probeydo sus autos. Y por no le querer soltar a menos que pagase las dichas costas las a pagado haciendo sus protestos y apelaciones de lo qual le da parte a su señoría para que decrete y probea lo que más conbenga al bien huniversal desta provincia. Y pues las dichas costas se le an crescido por haver cunplido con el decreto de la Junta general de Segura, pide y suplica se sirba de que en la primera Junta general se le satisfaga todo ello con más sus ocupaciones.

Su señoría acordó y mandó que yo el presente escrivano tome los testimonios y recados que trae el dicho alcalde, en razón de la proposición y relación que haçe y con ellos se acuda al agente de corte de suso, por el diputado general desta provincia para que se hagan las diligencias que convengan para reparo del agravio echo al dicho alcalde y para que adelante el dicho coronel no pueda proceder ni proceda en la dicha comisión, antes se cometa por su magestad y su Real Consejo a su señoría desta provincia el

dicho plantío y satisfacción con testimonios de como se cumple lo que su magestad manda y sobre todo se hagan las diligencias necesarias a costa desta provincia y que para que así se ponga por registro, para que en la primera Junta general se le haga la cobrança que pide el dicho alcalde y así lo decretaron y mandaron.

Ante mí

Antonio de Olaverría (RUBRICADO)

Documento n.º 4

1609 Marzo 17

Astilleros de Lezo

Comisión otorgada por Domingo de Idiáquez, Superintendente de fábrica de navíos y plantíos, a Cristóbal de Egusquiza para que requiriese a los alcaldes y demás oficiales del Regimiento de San Sebastián, que habían sido durante los años 1605, 1606, 1607 y 1608, a que entregaran los testimonios de los árboles plantados durante esos años.

Archivo General de Guipúzcoa, Sec. 2.º, Neg. 13, Leg. 12.

Museo Naval, Colección Vargas Ponce, T. 11, Doc. n.º 18. Es copia.

El coronel Domingo de Ydiaquez, superintendente de fábricas, arqueamientos y plantíos de esta provincia de Guipúzcoa, por el Rey nuestro señor.

Por quanto por diversas cédulas y cartas reales me tiene mandado su magestad que tenga por muy encomendado la observancia de los plantíos de esta provincia de Guipúzcoa, en particular en las villas y lugares della que están dos leguas y media a la mar, de cuyo tenor de las dichas reales cédulas e dado noticia diversas vezes a las dichas villas y lugares, exiviéndolas en las Juntas generales de esta dicha provincia, e por ello no ban aquí ynsertas y porque conforme lo que por ellas se me manda se me an de entregar por las dichas villas y lugares y de las personas a cuyo cargo tienen de dar los testimonios de lo que en cada año an plantado y saver si cunplen con las cantidades que se les están por mí repartidas a cada villa y lugar de las conprehensas en las dichas dos leguas y media a la mar, para que haga de los dichos testimonios lo que su magestad me tiene hordenado e mandado por las dichas sus hordenes reales, e porque la villa de San Sebastián no me a entregado ningunos testimonios desde el año pasado de mil y seiscientos y cinco, que entregó el último a esta parte y me deve entregar los que de los quatro años después que son los de seiscientos y seis, y siete, ocho y el presente de seiscientos y nueve para cobrarlos de la dicha villa o de quien derecho devieredes hordeno a vos Xristoval de Egusquiça, criado de su magestad y su escrivano de los arqueamientos y fábrica que pidais y requirais con esta mi horden y comisión a los alcaldes y demás personas del regimiento que an sido y son de los dichos quatro años últimos y a las demás personas a cuyo cargo a sido y es o puede ser el dar y entregar de los dichos testimonios, os los den y entreguen haciendo fee y en devida forma los quales traereis ante mí para los juntar con los demás de las dichas villas y lugares y hazer dellos según y de la forma que su magestad me tiene mandado y si para los dar y entregar pusieren dificultades, lo asentareis lo que cada uno a quien se los pidieredes fuere

respondiendo haciendo autos dello para que por mí visto provea lo que mas fuere de justicia, asta que se aya cumplido el servicio de su magestad y cumplimiento de las dichas sus Reales Cédulas que para ello y lo dello anexo y dependiense, bos doy poder y comisión en forma que es. Fecho en los Reales astilleros de Lezo, a diez y siete días del mes de marzo de mil y seiscientos e nueve años. Domingo de Ydiaquez. Por mandado del señor coronel Joanes de Chipres. E yo el dicho Joanes de Chipres, escrivano del rey nuestro señor e público del número, de la villa de Rentería, lo escriví por mandado del señor coronel Domingo de Ydiaquez e por ende fize mi signo en testimonio de verdad, Joanes de Chipres.

Documento n.º 5

1611 Noviembre 17

IV Junta/Fuenterrabía

Memorial presentado en la Junta por Domingo de Echeverri, Superintendente de las fábricas y plantíos de la Provincia de Guipúzcoa, para el fomento forestal.

Archivo de la Diputación de San Sebastián, Registro Impreso de la Junta General de Fuenterrabía de noviembre de 1611, pp. 17-18.

Este día Domingo de Echeberri, vecino de la villa de San Sebastián, superintendente de las fábricas y arqueamientos y plantíos de esta provincia por S. M., habiendo entrado en la dicha junta, entregó memorial firmado de su nombre en que hace larga relación de lo que le parece que esta provincia debe hacer para el aumento de los montes y plantíos y su conservación para la fábrica de las naos y provisión de las herrierías y pidió a la dicha Junta se sirva de que se lea el dicho memorial y con su vista acuerden lo que mas convenga al servicio de S. M. y bien universal de esta provincia y dé la orden para que a él, como a tal superintendente, en conformidad de lo que a acostumbrado con sus predecesores entreguen los testimonios de los plantíos las villas, alcaldías y valles de esta provincia para que conforme a las ordenes que tiene de S. M. acuda a su real servicio con la puntualidad que es razón, con protestación de que usará de los remedios necesarios, y leído el dicho memorial, rindieron las gracias al dicho Domingo de Echeberri por el cuidado que ha tenido en hacer merced a esta provincia con los advertimientos de dicho memorial, acudiendo a esta Junta como tan buen hijo de esta provincia y en razón de lo que refiere en el dicho memorial y lo que ha propuesto para que se mande que se le entreguen los dichos testimonios, la Junta mandó que las villas de San Sebastián, Deva y Oyarzun vean el dicho memorial y den su parecer y con su vista proveerán lo que mas convenga.

Documento n.º 6

1611 Diciembre 14

San Sebastián

Certificación dada por Domingo de Echeverri, Superintendente de fábricas y plantíos de la Provincia de Guipúzcoa, sobre las medidas de unos navíos que en dicha provincia se fabricaron.

Museo Naval, Colección Vargas Ponce, T. II, Doc. 55, fol. 82.

Domingo de Hechavarri, superintendente de las fábricas y plantíos de esta provincia de Guipúzcoa por el Rey nuestro señor.

Certifico que al tiempo que por título y horden de su Magestad comencé a servir el officio de la dicha superyntendencia, que fue por el mes de julio de mill y seisçientos y onze, le dí quenta en su Consejo de Guerra de los nabíos que allé començado a fabricarsse en esta provinçia de Guipúzcoa, para que se sirbiera darme horden para la forma en que me havia de haver con las dichas fábricas y sus dueños a lo que se me mandó responder en carta de veinte y dos de ottubre del dicho año de mill y seis cientos y onze que en el ynterin que se me ynbiassen las nuevas hordenanzas hiziesse que las dichas fábricas fuesen lo mas a las hordenanças viejas que fuesse possible = Y por quanto entre las demás fábricas de este dicho tiempo hera la de una nao de quatroçientas toneladas poco más, o, menos de Sevastián de Liçaranzu, vecino de Alçola, en esta dicha provinçia que fabricaba en la villa de Mottrico, la qual según sus medidas y pitasca, se ajustó mucho con las dichas hordenanzas según por ella misma se verá, certifico ser esta nao de las comprehendidas en la dicha permisión de su Magestad y de su Consejo en la forma sobredicha para que su dueño pueda hazer testimonio de ser berdad a los señores que ubieren de enterarse della, dí la presente, fecha en la villa de San Sebastián, a catorze de deziembre de mill y seisçientos y onze años.

REPRODUCCION Y RENOVACION DE UNA OLIGARQUIA URBANA: LOS REGIDORES DE MADRID EN EL SIGLO XVIII

El dominio oligárquico en los ayuntamientos castellanos de la época moderna no es un hecho nuevo, como tampoco lo es el papel que en este dominio jugaron las ventas de oficios. Estas se han convertido de unos años a esta parte en foco de atención de historiadores procedentes de diversos campos. Los de la hacienda han examinado los beneficios que reportó a la fiscalidad real la enajenación de oficios públicos —como la de hidalguías, hábitos de órdenes militares, rentas, vasallos...— y han contribuido no poco a establecer los ritmos y las causas de los procesos de ventas. Desde la historia del derecho se indagan las ventas como un fenómeno derivado de la indefinición de la función pública y, en cierto sentido, de su feudalización, con fuentes jurídicas y esa prosa afinada que caracteriza al gremio. Aún son escasas las contribuciones de la historia urbana, pero comienza ya a prestarse atención a la incidencia de la venalidad allí donde se cebó con más saña y mayores consecuencias tuvo: en las corporaciones locales. Contamos además con alguna visión general del tema, aunque se echa en falta la obra que desde antiguo tiene prometida Tomás y Valiente.

Se diría que, en una disciplina tan aparentemente reacia a las modas como es la nuestra, el tema está de moda. No debe de ser ajeno a ello, aparte del atractivo propio de tan singular método de provisión de cargos, la posibilidad que ofrece de atacar el estudio de un campo de tanta complejidad como el de las estructuras administrativas por un flanco cuando menos delimitado. En especial si lo que se pretende es un análisis social de la administración —local y estatal— o lo que, desde otro punto de vista, Molas ha llamado «biografía social del poder». Tal es, a mi entender, el interés fundamental de las ventas de oficios y, en el caso

concreto de mi trabajo, del estudio de los mecanismos de reproducción de una oligarquía local en el siglo XVIII, cuando esos mecanismos se hallaban plenamente consolidados.

Porque pese al innegable buen momento de los estudios sobre ventas de oficios, suele dejarse de lado la situación que se generó una vez enajenados éstos de la Corona, la total patrimonialización de los cargos públicos que sólo la revolución liberal del XIX lograría atajar. Sabemos que la Monarquía, desde tiempos de Carlos V, vendía oficios de diverso tipo en momentos de apuros financieros, y sabemos que muchos de ellos —en especial a partir del siglo siguiente— se vendían a título de perpetuos y por juro de heredad. Tal perpetuidad significaba «la plena propiedad sobre el mismo, incluida desde luego la plena disponibilidad *inter vivos* o *mortis causa*, a título oneroso o lucrativo»¹. El oficio perpetuo es, lisa y llanamente, patrimonio privado de su propietario, que podía venderlo, cederlo en dote o legarlo en herencia, designar quien lo sirviera, arrendarlo —obviando las reiteradas prohibiciones— o incluso, y había quien lo hacía, desempeñarlo en persona. Pero es que también los oficios renunciables, cuya disponibilidad legal era más restringida, estaban sujetos a tales prácticas. Esto, en el gobierno local y concretamente en los oficios de regidores, resultaba en una patrimonialización casi absoluta de los concejos, en los que no ya los vecinos —privados desde antiguo de participar en el gobierno municipal en la mayor parte de los territorios de la monarquía hispana—, sino incluso la Corona carecía del poder de designar los cargos municipales. Claro que ésta al menos disponía de diversos instrumentos —corregidores, consejos, legislación— para intervenir en la gestión de los concejos, algo a lo que raramente podían aspirar los vecinos. Con todo y eso, no deja de ser significativo que, al plantearse la reforma municipal, la Corona hubiera de recurrir a yuxtaponer nuevos oficiales —diputados del común y personeros— ante la imposibilidad de modificar la extracción de los existentes.

Mi trabajo no es, pues, en sentido estricto, una investigación sobre las ventas de oficios —aunque sean éstas el imprescindible telón de fondo—, sino sobre su patrimonialización y sobre los

1. TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, *La venta de oficios en Indias (1492-1606)*, INAP, Madrid, 1972, pág. 40.

mecanismos de transmisión privada de los regimientos. Las ventas son sólo una parte de las transmisiones, quizá la más llamativa, pero no la principal. El haber escogido los regimientos de Madrid en el siglo XVIII limita seriamente las posibilidades de extraer conclusiones generales; no es ya sólo que la villa fuera además Corte, con las peculiaridades de estructura social que ello implica, sino que al tratarse de regimientos, los oficios de poder por excelencia, no puede ignorarse el carácter excepcional del concejo madrileño, supervisado muy de cerca por las instancias reales, con las que entra en continuos conflictos de competencias. En cualquier caso, su propia excepcionalidad hace de Madrid un apasionante tema de estudio, o al menos eso consideramos el grupo de historiadores que desde hace unos años nos dedicamos en la Universidad Autónoma a trabajar para el mejor conocimiento de la mayor ciudad de la España moderna. En ese sentido, no quiero dejar de hacer hincapié en que, aunque me he visto obligado a indagar en los mecanismos jurídicos de reproducción de la oligarquía municipal madrileña, lo que fundamentalmente me interesa es la definición de este grupo oligárquico, sus resortes de poder y su articulación con las clases dominantes de la España del Antiguo Régimen. Ni que decir tiene que estas aportaciones no son sino los primeros pasos de una andadura más larga.

El proceso de patrimonialización de los oficios públicos en Castilla —lo ha descrito Tomás y Valiente— arranca de época bajomedieval, pero es sin duda bajo los monarcas de la casa de Austria cuando se sientan las bases de la conversión de determinados oficios públicos en bienes privados. Los apuros fiscales de la monarquía desencadenaron a partir del reinado de Carlos V, pero en especial desde el de Felipe II, una oleada de ventas de oficios que afectó particularmente a los regimientos de las ciudades castellanas. La tarea emprendida por los Reyes Católicos para poner coto al desarrollo de un mercado privado de oficios, y su empeño en no echar mano de las enajenaciones para sufragar gastos o premiar servicios se truncaron bajo sus sucesores. Los regimientos se prestaban particularmente bien a la enajenación: por un lado, no representaban carga ulterior alguna para la hacienda real, al correr los concejos con el pago de los salarios, y

su carácter colegiado, por otro, minoraba los costes políticos de la privatización. La Corona contaba además con otros mecanismos de intervención en los ayuntamientos —fundamentalmente los corregidores, presentes en Madrid desde 1464—, que permitían compensar la pérdida de la regalía de designar a los oficiales concejales. La evolución del proceso de ventas nos es conocida, cuando menos en sus rasgos más generales². Para lo que atañe a nuestro asunto, nos basta en cualquier caso con desarrollar brevemente dos aspectos: el acrecentamiento de oficios y la concesión de perpetuidades.

La urgencia de fondos que iba unida a la decisión de poner en venta determinados oficios aconsejaba recurrir al acrecentamiento —la creación de oficios *ex novo*— en lugar de esperar la aparición de vacantes, harto escasas además a causa de la extensión de las renunciaciones. La práctica está documentada ya desde tiempos de los primeros Trastámara. En la época moderna, la resistencia de las Cortes a los cada vez más frecuentes acrecentamientos fue permanente y casi «heroica»; claro que los procuradores, salidos en su mayoría de concejos oligárquicos, no hacían sino salvaguardar su coto. Las protestas iban acompañadas de medidas prácticas, como las dirigidas al tanteo y consumo de los oficios mediante el cual los concejos —es decir, los regidores— aceptaban

2. Para no repetir cosas ya escritas me limito a apuntar la bibliografía básica. Sobre todo, F. TOMÁS Y VALIENTE, amén de la obra citada, «Origen bajomedieval de la patrimonialización y enajenación de oficios públicos en Castilla», en *Actas del I Symposium de Historia de la Administración*, I.E.A., Madrid, 1970, págs. 125-159; «Las ventas de oficios de regidores y la formación de oligarquías urbanas en Castilla (siglos XVII y XVIII)», en *Historia. Instituciones. Documentos*, 2, págs. 525-547; «Ventas de oficios públicos en Castilla durante los siglos XVII y XVIII», en *Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen*, Alianza Ed., Madrid, 1982, págs. 159-178. También Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, «La venta de cargos y oficios públicos en Castilla y sus consecuencias económicas y sociales», recogido en *Instituciones y sociedad en la España de los Austrias*, Ariel, Barcelona, 1985, págs. 146-183; Margarita CUARTAS RIVERO, «La venta de oficios públicos en el siglo XVI», en *Actas del IV Symposium de H.^a de la Administración*, INAP, Madrid, 1983, págs. 225-280; y, en la misma publicación (págs. 725-748), J. M. TORRAS I RIBE, «La venta de oficios municipales en Cataluña (1739-1741), una operación especulativa del Gobierno de Felipe V».

compensar económicamente a la Corona —a costa de los vecinos— para que no se creasen nuevos cargos³.

En Madrid, el número de regidores creado inicialmente por Alfonso XI era de 12; en 1442 sabemos que Juan II lo redujo a ocho. En 1502 eran ya 24, según se deduce de una real provisión de los Reyes Católicos con motivo de la muerte del príncipe Don Juan⁴. No obstante, el auge de los acrecentamientos se sitúa en un período de cincuenta años a caballo entre los siglos XVI y XVII. Hacia 1575, según un informe municipal de 1768, eran aún 25 los capitulares. Entre 1596 y 1600 aparecen en las cuentas de pago de salarios 34 regidores. En 1616 eran 36, tras la concesión de un regimiento perpetuo al Duque de Lerma, a instancias de Madrid. En 1621 se había alcanzado el número de 40, que perduraría hasta el siglo XIX. Los causantes de tamaña floración de oficios fueron diversos acrecentamientos, tanto generales como particulares. En ocasiones, Madrid pudo impedirlos mediante el desembolso de cuantiosas sumas, hasta que, en 1666, obtuvo de la Corona el compromiso de abstenerse en lo sucesivo de acrecentar oficios de regidores, alféreces mayores y jurados. La concesión, junto con la confirmación de sus privilegios, le salieron a la villa por 150.000 ducados⁵.

La resistencia oligárquica adoptó, sin embargo, otras vías, ante los riesgos que para su predominio representaba la entrada de nuevos individuos en el concejo. Ya que difícilmente podían evitar que aumentase el número, dirigieron sus esfuerzos a limitar la extracción social de los recién llegados. En 1603 Madrid obtiene la concesión del «estatuto», es decir, la exigencia de hidalguía y limpieza de sangre a sus regidores, excluyendo a quienes hubieran tenido tienda abierta u oficio mecánico «indecente». Una real cédula confirma dos acuerdos del concejo, y será ratificada de nuevo en 1638 por Felipe IV —ocasión en que se imprime el *Privilegio de las calidades que han de tener los que huvieren de*

3 La legislación sobre tanteos y consumo, en *Novísima Recopilación*, VII/7.

4 Rafael GIBERT Y SÁNCHEZ DE LA VEGA, *El concejo de Madrid. Su organización en los siglos XIII a XV*, IEAL, Madrid, 1949, y M. ESPADAS BURGOS, *Ceremonial del Ayuntamiento de Madrid*, I.E.M., Madrid, 1968.

5. Archivo de la Villa de Madrid, Sección Secretaría (en adelante, AVM/Sec.), 2-247-93.

ser Regidores de la Villa de Madrid ⁶—, y por Felipe V en 1715. El estatuto no era privativo de Madrid —muchas otras ciudades castellanas lo tenían, o lo obtuvieron más tarde— ni era tampoco una idea nueva. Desde hacía años las Cortes venían reclamando la imposición de restricciones de este tipo, cuando menos para las ciudades de voto en Cortes, dirigidas fundamentalmente a los compradores de oficios, descritos como mercaderes y gentes de pocos escrúpulos que se introducían en los concejos para hacer negocio a su costa ⁷. La Corona se negó a aplicar medidas de tipo general, pero aceptó la implantación del estatuto a título particular en numerosas ciudades. Es cierto que en ocasiones el estatuto precedió a la oleada de enajenaciones —es el caso de Sevilla—, pero no parece descabellado ligar su difusión, como mecanismo de defensa estamental, a los temores que se despertaron en los grupos oligárquicos de que las ventas abrieran las puertas de los concejos a elementos no nobiliarios.

Por el contrario, no fueron resistencias ni temores lo que provocaron en los concejos la concesión y venta de perpetuidades. Para los regidores propietarios, significaba consolidar definitivamente la privatización de sus oficios; la merma de poder que suponían para la monarquía explica la tardanza con que se emprendió la venta de perpetuidades. Al final, entrado ya el XVII y de la mano de la costosa política de Felipe IV y su valido, la necesidad se impuso a la conveniencia. Por lo demás, nada hace suponer que los concejos constituyeran focos de oposición política. Antes bien, las oligarquías ciudadanas se mostraron bastante generosas a la hora de votar unos tributos que no pagaban —caso de las ciudades de voto en Cortes, como lo era Madrid— o incluso de hipotecar las haciendas locales para sufragar los gastos de la monarquía ⁸. Bajo Felipe IV, la venta de perpetuidades, a la que tan renuente había

6. La cédula original en AVM/Sec. 2-306-22; del *Privilegio* hay numerosas copias, entre ellas AVM/Sec 2-247-6, con la confirmación de Felipe V.

7. Por ejemplo, *Actas de las Cortes de Castilla*, vol. III (1570). págs. 408-409.

8. Carlos DE LA HOZ GARCÍA en «Fiscalía y Hacienda municipal en el Madrid del Antiguo Régimen: las sisas (1680-1808)», memoria de licenciatura leída en septiembre de 1985 en el Departamento de Historia Moderna de la U.A.M., demuestra cómo el endeudamiento originado por los apuros de la Corona se convirtió, a través de los títulos de deuda, en un instrumento de extracción de renta para los grupos privilegiados

sido hasta entonces la Corona —entre otras razones porque cortaba cualquier posibilidad futura de sacar beneficios de aquellos cargos—, cobró auge ante la saturación del mercado de oficios. En Madrid, de los 31 regimientos para los que conocemos la fecha de la cédula de perpetuidad, 21 corresponden a este reinado (véase gráfico 1). Antes, bajo Felipe III, habíanse perpetuado tres de ellos, entre los que se contaba el ofrecido a Lerma, creado perpetuo; otros tantos lo fueron bajo Carlos II. A lo largo de todo el XVIII sólo se perpetuaron cuatro regimientos; claro que al iniciarse el siglo eran sólo cinco los regimientos renunciables.

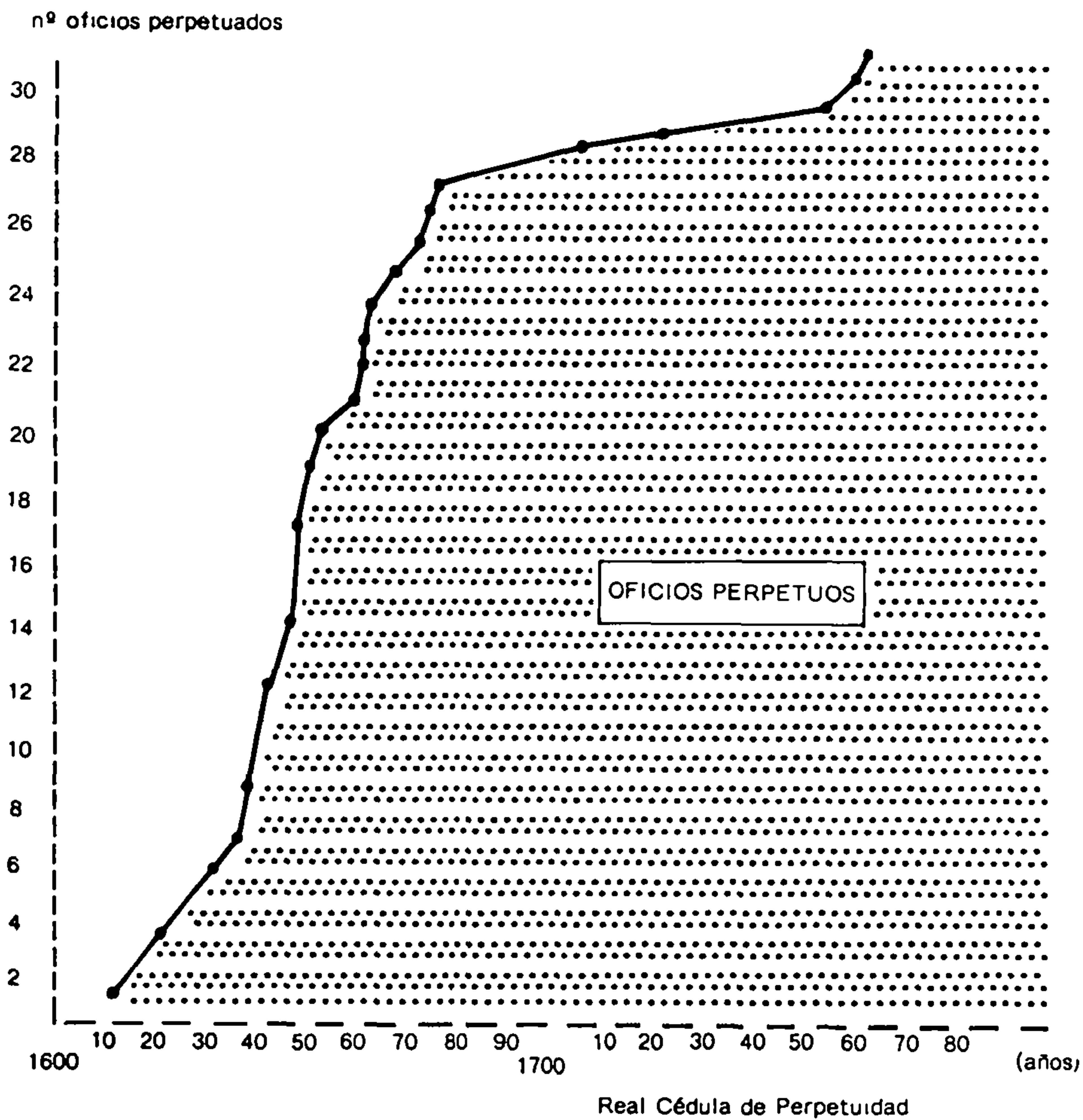
A partir de mediados del XVII, el proceso de patrimonialización de los regimientos —de oligarquización de los concejos— quedaba prácticamente cerrado. Ni la tímida política de Carlos II, ni la aparentemente más resuelta de Felipe V —la famosa Junta de Incorporación— alteraron el panorama. Sólo en 1797, de la mano de Godoy, pareció la Corona tomar de nuevo la iniciativa en la lucha contra la patrimonialización, confiada anteriormente a los concejos a través del tanteo, mediante una real orden que dictaba la «incorporación a la corona de los oficios enajenados, sin desembolso de ésta y con calidad de servirse por los días de la vida» de sus propietarios. La operación, sin embargo, se reconvirtió dos años más tarde en un mero instrumento fiscal, al derogarse la orden y obligarse a cambio a los propietarios a contribuir a la hacienda real con un tercio del valor de sus oficios⁹. Sólo a cuenta de los regimientos de Madrid, la Corona ingresó casi un millón de reales¹⁰, pero de ahí no pasó la cosa.

El municipio que surge de este proceso es una entidad de cabeza hinchada y pies de barro. La ruina de las haciendas locales —y muy notablemente la madrileña—, empujadas al endeudamiento por las necesidades de la Corona y puestas en manos de grupos de poder restringidos y muy afianzados son probablemente las causas más visibles de la postración de los ayuntamientos. Es el madrileño un concejo de propiedad privada en el que el absentismo y la escasa capacidad de sus miembros —cuando no la pura corrupción— hacen mella en el buen gobierno, donde los corregidores parecen hacer uso de sus amplias atribuciones sin

9. *Nov. Recop.* VII/8/14 y 15

10. AVM/Contaduría 1-553-2.

Gráfico 1
PERPETUACIONES DE REGIMIENTOS DE MADRID



encontrar más resistencias que las de unos regidores más preocupados por los conflictos de protocolo, el cobro puntual de gajes y salarios y, en ocasiones, el manejo poco cuidadoso de los bienes y caudales del común. Un concejo, pues, continua y fácilmente tutelado por el poder del estado, ineficaz en el servicio de los vecinos, alejado completamente de los intereses de la población.

LOS REGIDORES DE MADRID EN EL XVIII. FUNCIONES Y ACCESO AL CARGO

Aunque el estudio de las atribuciones de los regidores está aún en buena parte por hacer —y resulta casi doloroso confesarlo, pues sólo este conocimiento nos permitirá entender cabalmente el significado de la patrimonialización—, no podemos dejar de apuntar al menos algunos aspectos generales.

Desde el siglo XIV el ayuntamiento se erigió en cúpula de la administración local en Castilla. Por ayuntamiento debemos entender, más que la institución, que solía entonces denominarse concejo, el acto mismo de la reunión en capítulo de quienes estaban designados para gestionar los asuntos de la vida de la ciudad. Tal reunión se formaba de los regidores —los que asistieran—, el alférez mayor, los dos secretarios de ayuntamiento y el corregidor, o en su ausencia uno de sus dos tenientes.

El corregidor gobernaba el desarrollo de las juntas, incluidas la convocatoria y votaciones, lo que le daba un considerable peso, aunque careciera de voto más que para deshacer empates. Por lo demás, sus atribuciones eran privativas en lo gubernativo, como autoridad delegada de la Corona, y constituía la primera instancia judicial en su partido. Sin embargo, eso no quiere decir que las funciones de los regidores fueran meramente deliberativas; su ámbito de actuación concreta, empero, radicaba en las juntas o comisiones.

Ni que decir tiene que las competencias de éstas, como las del propio ayuntamiento, sufrieron notables modificaciones a lo largo de la Edad Moderna, debidas en muchos casos a la ampliación de las atribuciones del Consejo de Castilla, y en particular de su Sala de Alcaldes de Casa y Corte. En términos generales, estas competencias abarcaban los campos de la fiscalidad —re-

caudación de los impuestos reales y sisas municipales—, los abastos —destacan las comisiones del pósito y abastos, muy tuteladas por el Consejo—, los propios —velando por el mantenimiento y explotación de los mermados bienes concejiles—, la asistencia —escasa, y que incluía tanto los hospitales municipales como las cárceles—, las celebraciones y actos solemnes —la organización de festejos, hoy como ayer, función principalísima de las corporaciones locales—, y el empedrado y limpieza de las calles —muy escasos de fondos, con los resultados que describen los textos¹¹—. A éstas se añadían la actividad de la comisión de vecinos, encargada de conceder la vecindad a los pobladores de la villa que lo solicitaran, amén de confeccionar los padrones de hidalgos; la comisión del estatuto, por último, era la encargada de velar por la nobleza de los aspirantes a regidores¹². No menor importancia tenía la vigilancia de los precios de los alimentos, que estaba a cargo de los regidores fieles ejecutores, que se turnaban semanalmente para asistir a los diversos repesos. En todas estas tareas participaba el corregidor, en su calidad de presidente nato de todas las comisiones, pero eran los regidores quienes estaban en contacto directo con la gestión diaria de los asuntos, lo que les confería un poder cierto.

¿Cómo se accedía entonces al cargo de regidor? Completada como estaba la patrimonialización, el pretendiente había de superar tres instancias. En primer lugar debía poseer unos títulos que le dieran derecho a desempeñar uno de los cuarenta regimientos, ya fuera que lo tuviese en propiedad o por ser el beneficiario de una renuncia o un nombramiento del anterior propietario. Este era el paso fundamental, y en ninguno de los casos que he examinado se le negó el título a quien disponía de un oficio o un nombramiento, aun cuando no acabara de reunir todos los requisitos del estatuto o las leyes del reino. La segunda instancia era la Cámara de Castilla, cogollo del Consejo Supremo, entre cuyas funciones se contaba la de expedir los títulos —designación de los oficiales, habría que decir, pero la patrimonialización resta

11. Valgan de ejemplo los del Marqués de Villa de San Andrés, recogidos en A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, *Hechos y figuras del siglo XVIII español*, Siglo XXI, Madrid, 1980, págs. 151-176.

12. Sobre competencias, AVM/Sec. Libros manuscritos 150

todo sentido al término. En la Cámara se emprendían diligencias para comprobar la legitimidad de los títulos entregados por el pretendiente, y si éste reunía las condiciones requeridas. En este momento entra en juego la tercera instancia, el ayuntamiento de Madrid, cuya comisión del estatuto —formada por el corregidor y dos regidores— examinaba testigos para verificar que el candidato era quien decía ser, hijo legítimo de legítimos padres, de sangre limpia e hidalga y, *last and indeed least*, si era apto y capaz para el puesto. El interrogatorio, ciertamente protocolario, se convertía en un desfile de relaciones del candidato, harto impresionantes a veces: consejeros de Castilla y Hacienda, grandes de España, caballeros de hábito... El ayuntamiento procedía a continuación a enviar su informe a la Cámara que, tras el pago de los derechos de media anata, pasaba a despachar el título —para los propietarios— o la llamada cédula de ínterin —para los designados por nombramiento del propietario—. Al ya regidor no le restaba más que jurar su cargo en el concejo, e iniciar el desempeño de sus funciones.

REPRODUCCION Y RENOVACION DE LA OLIGARQUIA MUNICIPAL MADRILEÑA EN EL XVIII

Al comenzar el siglo XVIII Madrid contaba con cuarenta y un capitulares —los regidores más el Alférez Mayor—; treinta y seis de estos oficios eran perpetuos por juro de heredad, y cinco tan solo tenían la calidad de renunciables. La patrimonialización de los regimientos era, en cualquier caso, prácticamente completa; lo cual quiere decir que cada regidor elegía su propio sucesor en el cargo. El grupo oligárquico se reproducía, pues, de forma autónoma, sin intervención de la Corona o, discúlpeleme el «presentismo», de los vecinos.

Las formas de transmisión de los oficios pueden englobarse en dos grandes bloques: las familiares, gratuitas, y las venales, contra pago. En términos generales, cabe identificar las primeras con formas de reproducción —en un sentido casi biológico— de la oligarquía, mientras que las segundas responderían a mecanismos de renovación. Ahora bien, hay que manejarse con cierta prudencia al hablar de renovación. Es evidente que las transmi-

siones venales suponían el ingreso de nuevos linajes en el concejo, pero tal renovación ¿significaba la entrada de grupos sociales no nobiliarios, o respondía tan solo a desplazamientos de personal en el seno de un mismo sector social? El interrogante se ha planteado a menudo, a nivel general, respecto al significado social de las ventas de oficios: ¿fueron éstas un medio de ascenso para la burguesía del Antiguo Régimen? No basta con responder que el de Madrid era un concejo nobiliario, por más que el estatuto lo consagrara legalmente como tal; la diversidad de extracciones y fortunas, aunque limitada, nos invita a profundizar en el asunto. Por otro lado, ni siquiera conocemos suficientemente la estructura de clases de la sociedad madrileña como para avanzar sobre terreno firme. La devaluación de las hidalguías y aun de los hábitos de órdenes militares como atributos de nobleza abonan la tesis de la insuficiencia de la definición nobiliaria, cuando menos para el XVIII. Además, ¿puede considerarse la compra de un regimiento en una ciudad como Madrid un mero instrumento de ascenso social? Las cantidades más que cuantiosas que llegaron a desembolsarse en tales operaciones parecen desautorizar tal enfoque; tampoco se debe olvidar que comprar un regimiento era comprar poder. Con mi trabajo he pretendido aportar datos que aclaren tanto la indefinición jurídica de las transmisiones privadas de oficios como, sobre todo, la indefinición de su significado social y consecuencias políticas.

1. *Las transmisiones familiares.*

«El buen linaje —escribe Castillo de Bobadilla— incita a fortaleza, a lealtad, a generosidad y a las otras virtudes, y el malo a faltas y fealdades; y (...) así como la heredad se encomienda bien a los naturales para ser cultivada, porque conocen bien la propiedad y calidad y temperie della, y del cielo, y del sol, así los hijos de los Regidores y senadores son a propósito para serlo ellos también. Y el pueblo tolera mejor su imperio, acordándose que sus padres ejercieron aquellos mismos oficios»¹³. La idea es central en el orden social feudal: las virtudes personales se trans-

13. Gerónimo CASTILLO DE BOBADILLA, *Política para Corregidores y Señores de Vasallos* (1597), edición facsímil sobre una impresión de 1704, en IEAL, Madrid, 1978. II vols.; libro III/ capítulo 8/ párrafos 7 y 8.

miten con la sangre; pero en el texto de Castillo aparece también, como en segundo plano, un pueblo no siempre dispuesto a tolerar imperios. De todas formas, con legitimación ideológica o sin ella, la hereditariad de los oficios concejiles era un hecho absolutamente común en la España del XVIII. El caso de Madrid puede servirnos de ejemplo.

En el Archivo Histórico Nacional, la serie «Renunciaciones» conserva, entre miles de expedientes referentes a transmisiones de oficios en toda la corona de Castilla, 140 casos de regimientos madrileños en el XVIII. De ellos, 47 —algo más de un tercio— corresponden a herencias; si les sumamos los traspasos por dotes, renunciaciones y nombramientos a favor de familiares, hallamos que un 60 por 100 del total corresponden a transmisiones en el seno de la misma familia (véanse cuadro 1 y gráfico 2). El oficio, fuente de poder, de renta, de exenciones, honras y privilegios se define así como un patrimonio netamente familiar. La oligarquía municipal madrileña se configura por tanto como un núcleo que se perpetúa fundamentalmente a través de lazos de sangre.

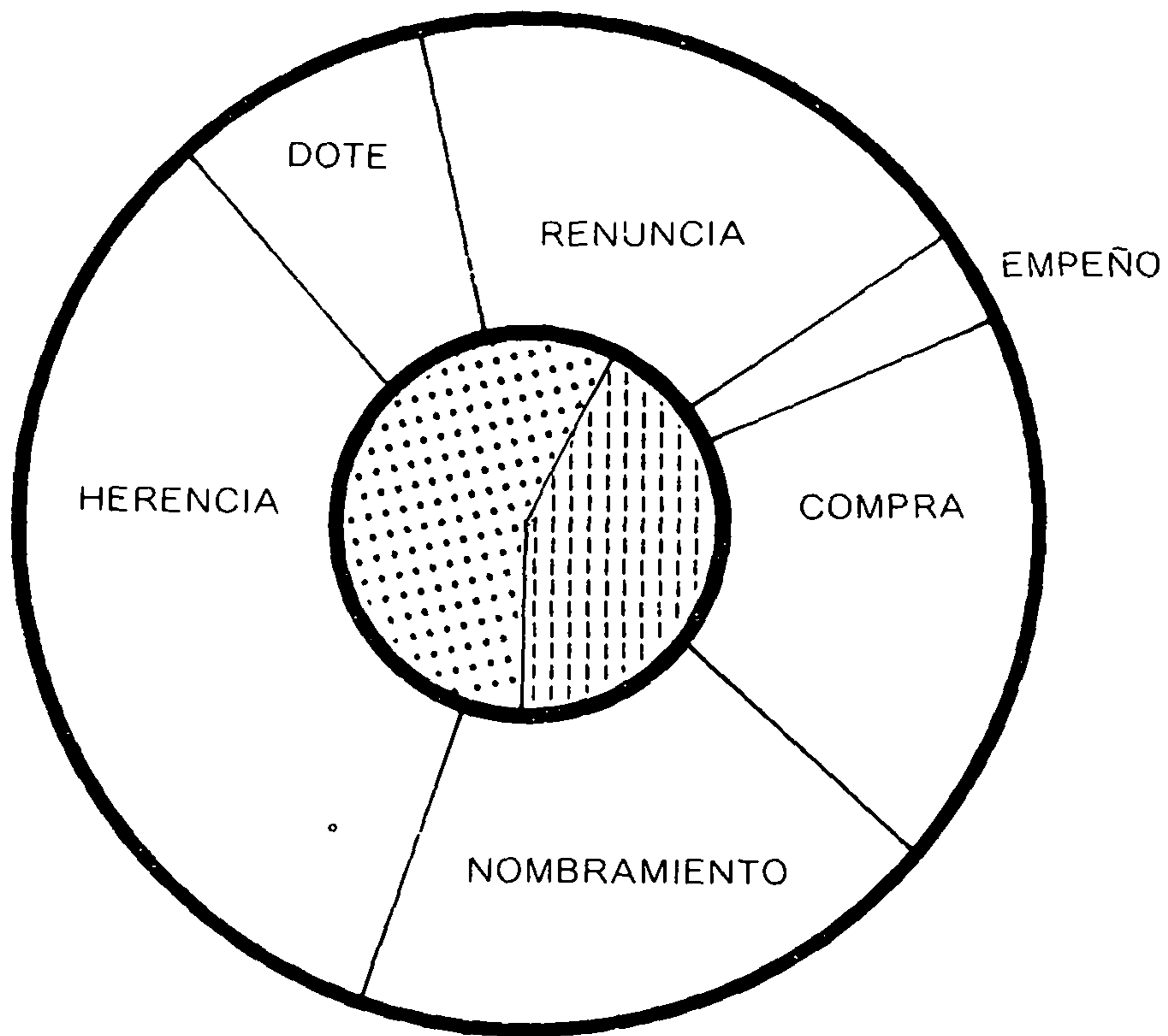
Otra prueba de ello es la vinculación de los oficios a mayorazgos. En el siglo XVIII —y parece que ya desde el anterior— aproximadamente la mitad de los regimientos madrileños estaban vinculados. En 1714 eran 21 —a los que hay que añadir el del alférez mayor, propiedad del estado de Altamira—, y al finalizar el siglo llegaban a 24. La vinculación aparece como una forma de asegurar la adscripción permanente del oficio al patrimonio, una forma típicamente feudal de propiedad y, por ende, de detentación del poder. Se trata básicamente de un instrumento de defensa frente a los riesgos de desmembración del patrimonio nacidos de la mala gestión y las reclamaciones de terceros. De hecho, la disponibilidad del oficio era mayor de lo que puede deducirse de tales afirmaciones generales; la posibilidad de desvincular el oficio, mediante una licencia real, existía y era utilizada en ocasiones por los propietarios de regimientos¹⁴. Parece claro, en cualquier caso, que el amayorazgamiento ofrecía, con el apoyo de las instancias judiciales, una notable eficacia a la hora de asegurar la transmisión de la hacienda familiar frente a las reclamaciones de los

14. Un par de casos en Archivo Histórico Nacional sección Consejos Suprimidos (en adelante AHN/ Cons.) legs. 14.157; febrero 2 y 14-169; oct 14.

CUADRO 1: TRANSMISIONES DE REGIMIENTOS EN MADRID (siglo XVIII)

<i>Forma de transmisión</i>	<i>Felipe V (1701-1746)</i>	<i>Fernando VI (1746-1759)</i>	<i>Carlos III (1759-1788)</i>	<i>Carlos IV (1788-1808)</i>	<i>Total (siglo XVIII)</i>	
Renuncias						%
Familiares .	7	2	4	2	26	18,5 %
Extrafamiliares ...	11	—	—	—		
Nombramientos						
Familiares . . .	5	—	1	1	26	18,5 %
Extrafamiliares	10	2	6	1		
Herencias	24	3	15	5	47	33 %
Ventas ..	9	3	10	3	25	18 %
Empeños	3	1	—	—	4	3 %
Dotes ..	6	3	2	1	12	8,5 %
			TOTAL	. . .	140	99,5 %

Gráfico 2
INCIDENCIA DE LAS DIVERSAS FORMAS DE TRANSMISION.
REGIDORES DE MADRID (1701-1800)



 Transmisiones familiares

 Transmisiones venales

acreedores¹⁵. De la eficacia de la vinculación —no sólo a mayorazgos, sino también, aunque más raramente, a patronatos y memorias de misas— hablan los datos sobre la diferente incidencia de los distintos tipos de transmisión sobre los oficios según estuvieran o no vinculados (véase gráfico 3); los primeros se transmitían en la mayor parte de los casos en herencia, mientras que las ventas afectaban de forma más aguda a los regimientos libres. Así pues, el mayorazgo unía a su papel de signo de status notables virtudes en su función de defensa del patrimonio familiar.

Las herencias, dotes, renunciaciones y nombramientos componen el espectro de las formas de transmisión familiar de los oficios. Las primeras constituían por sí solas un tercio de las transmisiones; el procedimiento era tan sencillo como un testamento otorgado ante notario, que en el caso de los oficios vinculados iba acompañado de una toma de posesión del mayorazgo ante la justicia ordinaria. La incidencia de la dote es considerablemente menor, en cambio: apenas doce casos, que no alcanzan el 9 por 100 del total. El instrumento notarial eran en este caso las capitulaciones matrimoniales, suscritas prácticamente siempre que había dineros de por medio. En este apartado se incluyen además los casos en que, celebrado ya el matrimonio, la esposa entraba en posesión de un oficio, generalmente por herencia. La última posibilidad era que la mujer poseyera un oficio para el cual hubiera designado un teniente, que quedaba automáticamente destituido al cesar el celibato¹⁶. En todos los casos, el oficio era considerado como un bien dotal, y por tanto los derechos del marido cesaban en el momento mismo en que se rompía el vínculo. Al fallecer la esposa, el oficio pasaba a los hijos o, en su defecto, a sus herederos.

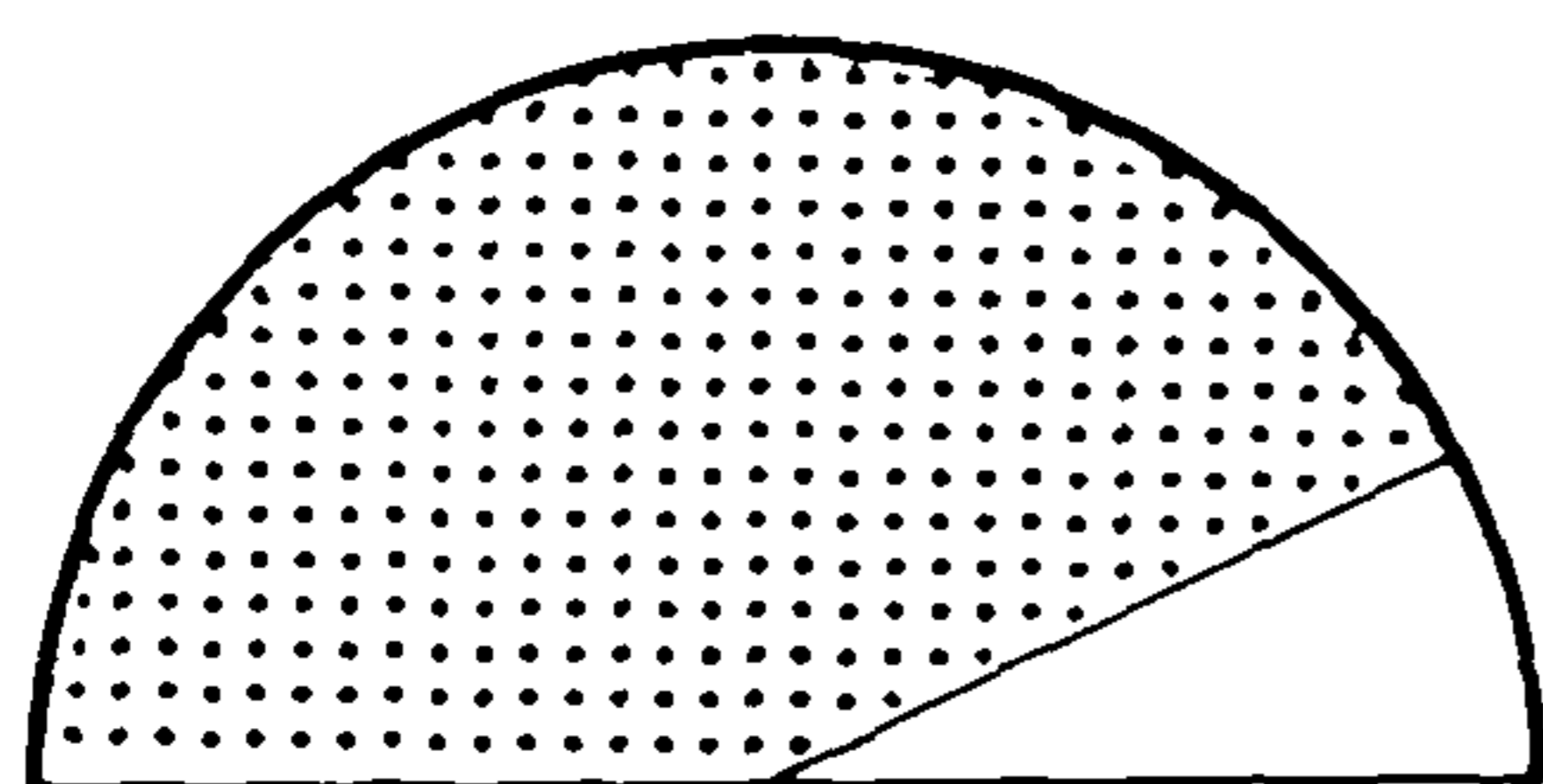
Cualquier persona, física o jurídica, podía poseer un oficio; otra cosa, en cambio, era que pudiera ejercerlo, y de ahí la posibilidad del nombramiento, signo máximo de la separación entre

15. El único caso de un secuestro judicial de un oficio, el del Marqués de Yebra, a instancias de sus acreedores, se saldó en 1694 con una sentencia que anula la fundación del vínculo, pero adjudica el regimiento —el bien más valioso— a la marquesa viuda. AHN/ Cons. leg. 13.971; dic. 10.

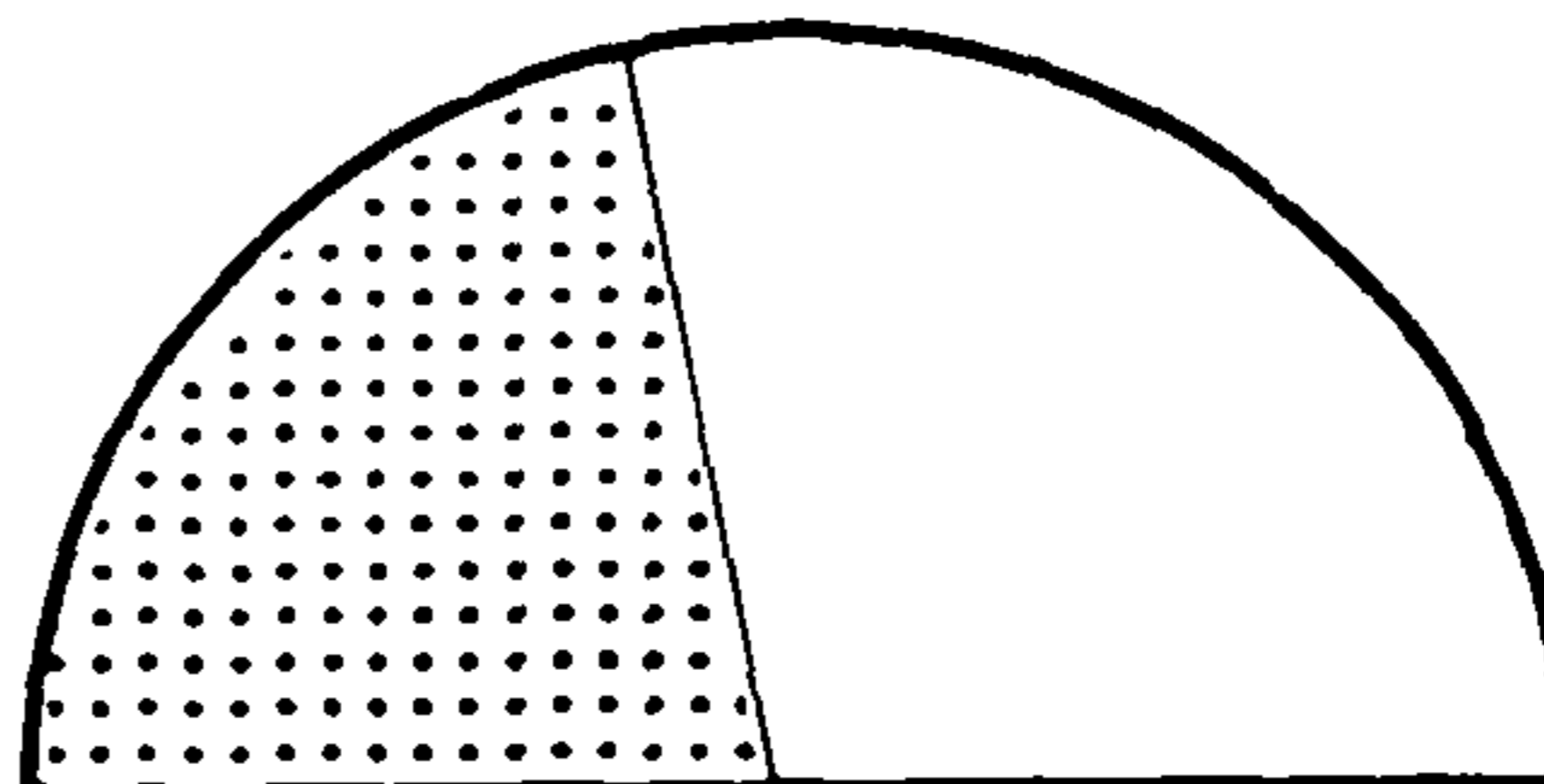
16. En ocasiones el cesionario se resistía, como hizo en 1733 Tomás I. Padilla, a quien le constaba que el marido de la propietaria anulaba su contrato de arrendamiento para arrendarle el oficio a otro (AHN/ Cons. leg. 13.897; ene. 11).

Gráfico 3

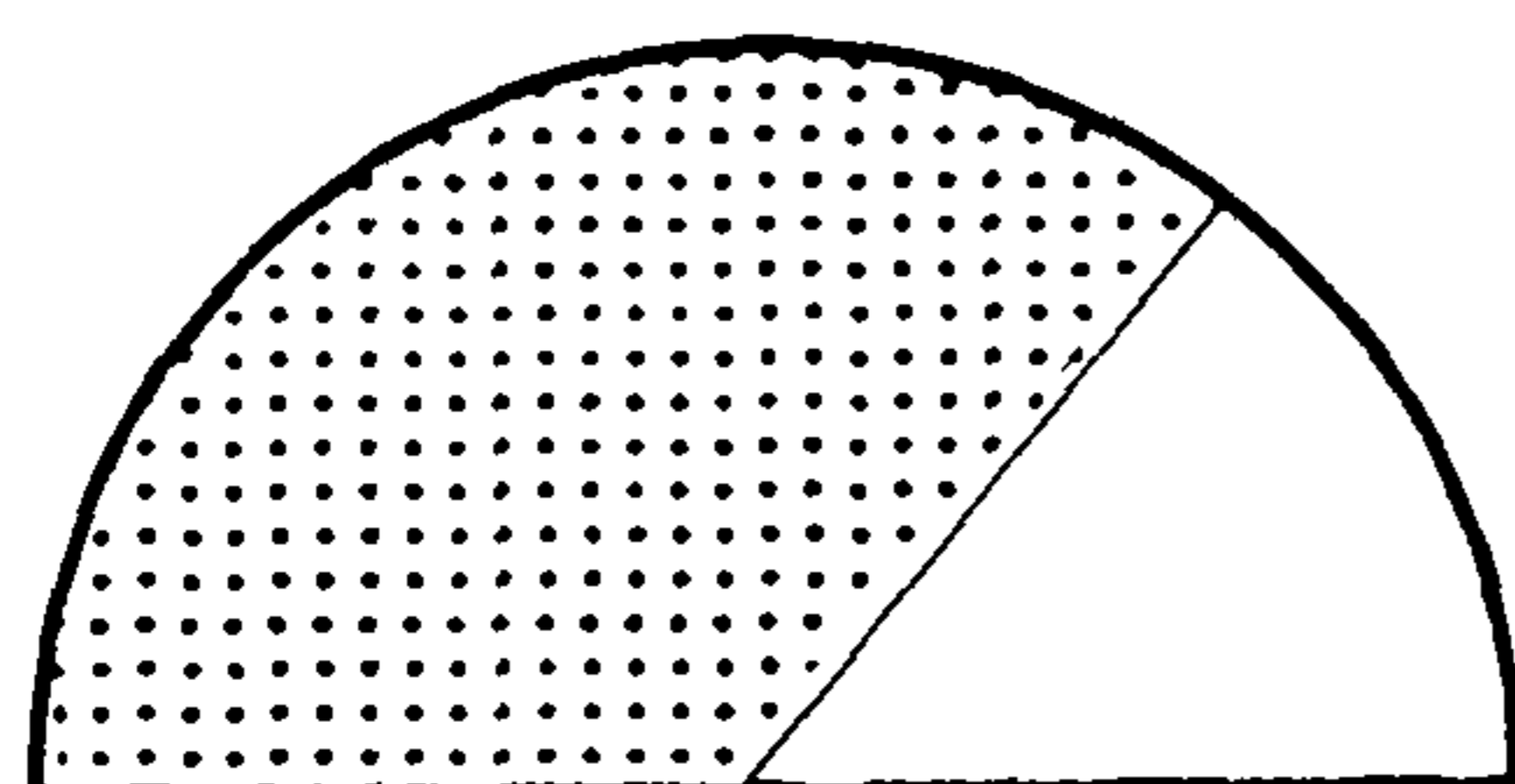
INCIDENCIA DEL AMAYORAZGAMIENTO
EN LAS TRANSMISIONES DE OFICIOS



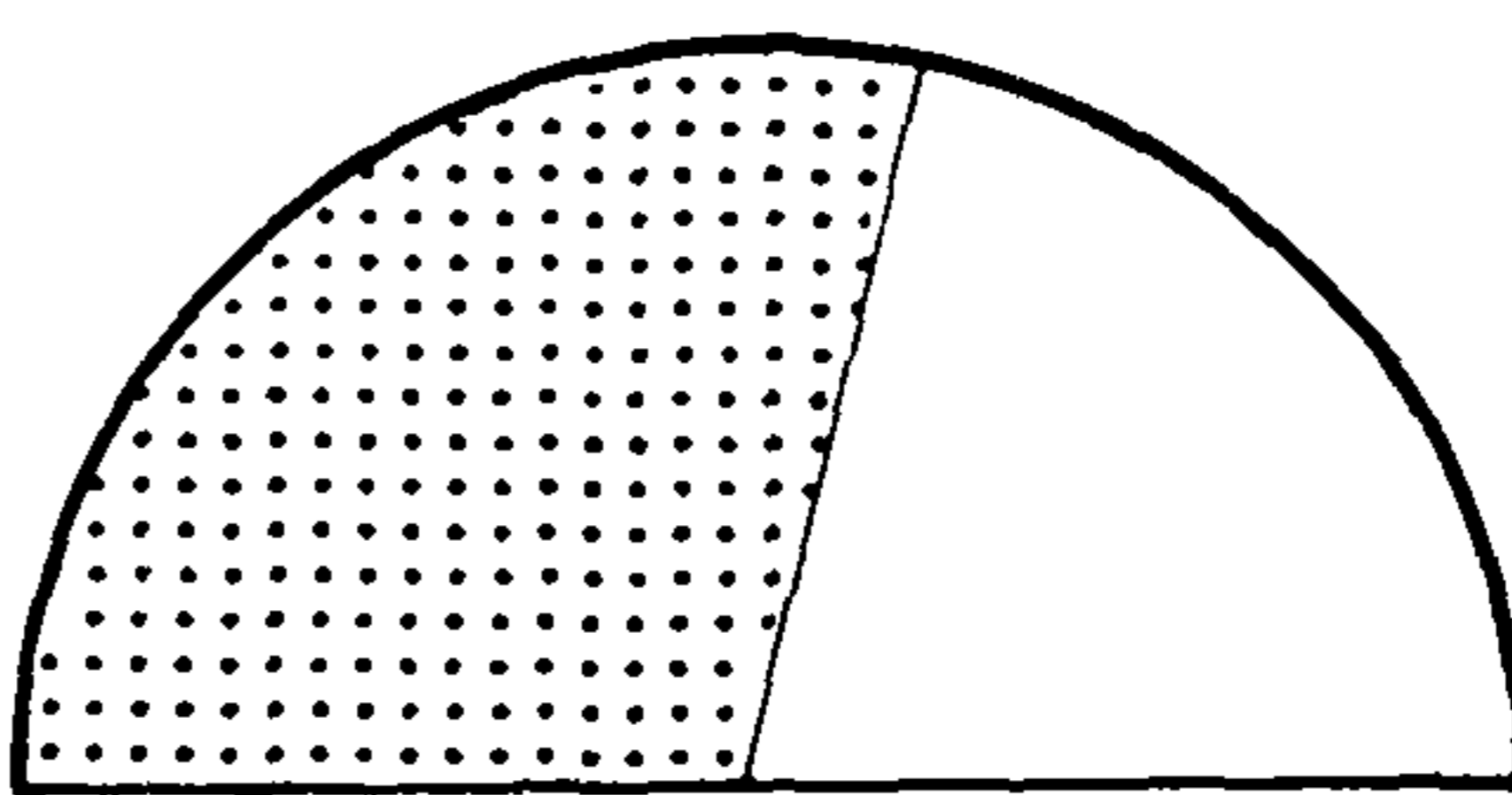
HERENCIAS



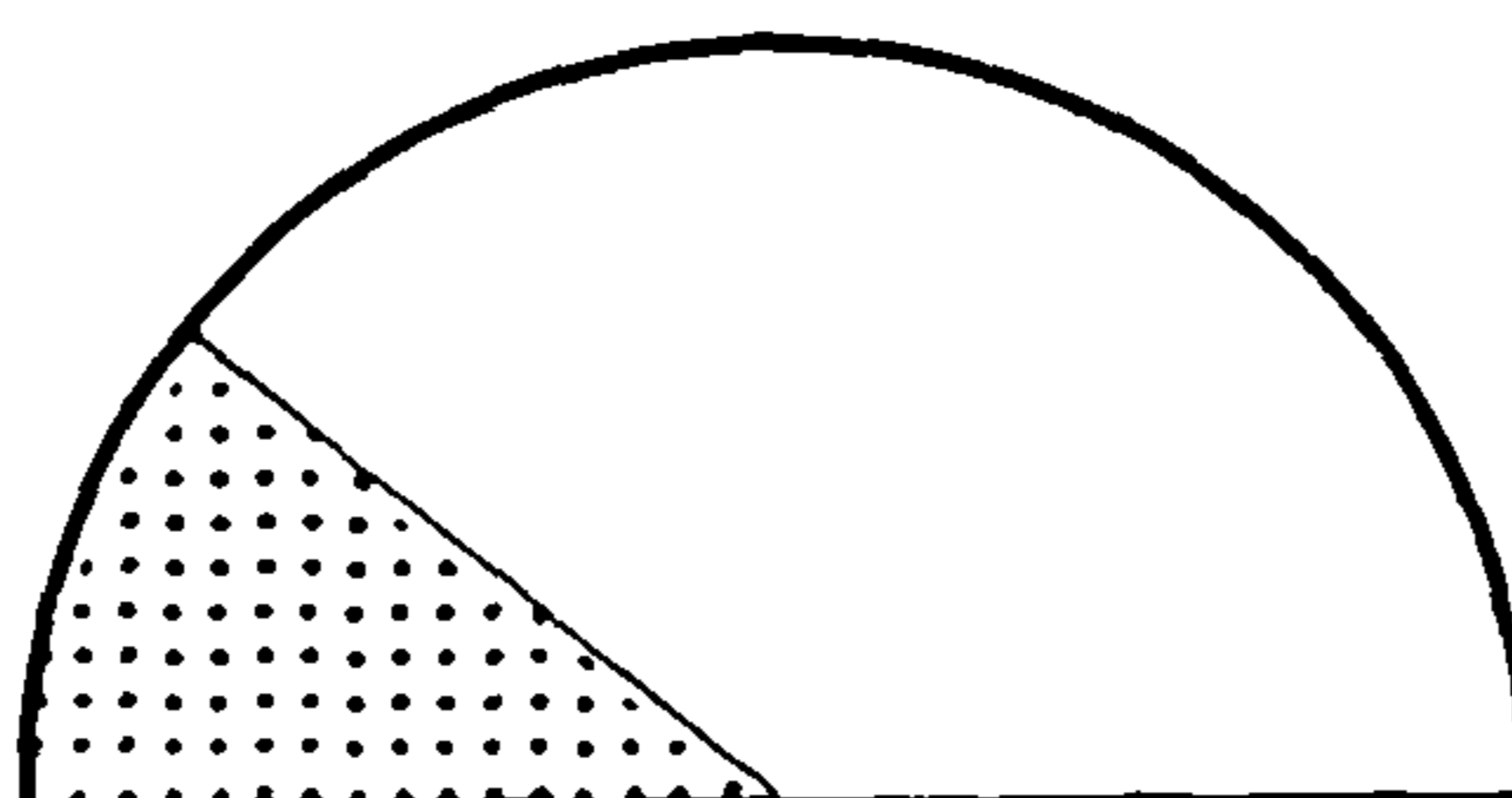
DOTES



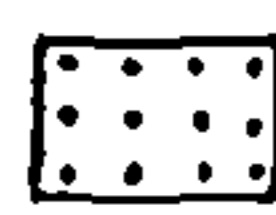
NOMBRAMIENTOS



RENUNCIAS



VENTAS

 Oficios amayorazgados

 Oficios libres

el oficio y su ejercicio consustancial a la patrimonialización. Todos los regimientos perpetuos llevaban aparejado el derecho a nombrar un teniente que sirviera el cargo en el caso de que la propiedad recayera en una mujer o un menor —legalmente incapacitados para ser regidores—, o de quien por otras razones no pudiera ejercerlo. El nombramiento —gajes de la mermada esperanza de vida de la época— era un procedimiento usual, y a menudo encubría un contrato de arrendamiento del oficio. En ocasiones, sin embargo, era un familiar el designado para ejercerlo; a éste la Cámara le despachaba una cédula de ínterin, que le acreditaba para hacerlo mientras durase la minoría de edad del propietario o el «estado honesto» si era mujer.

La renuncia era la fórmula que hacía posible el traspaso en vida del oficio a un familiar —o a un extraño—. En el caso de los oficios renunciables, siempre la excepción, era además la única modalidad legítima de transmisión. La única cortapisa a la renuncia era la necesidad —impuesta por ley de los Reyes Católicos— de que el renunciante sobreviviese veinte días al acto de la renuncia, lo cual exigía cierta previsión a la hora de legar el oficio en «herencia», pero no planteaba mayores problemas en el resto de los casos¹⁷. Existía también la posibilidad de renunciar un oficio perpetuo: excepcionalmente se trata de donaciones que hacen las veces de anticipos a cuenta de herencias, o de una dote —pues la renuncia era legalmente una cesión perfecta—; más comúnmente, sin embargo, es un mero traspaso por tiempo limitado y a menudo contra pago. Del total de las 26 renunciaciones registradas, quince se hacen a favor de familiares, lo que induce a suponer que esta fuera la fórmula empleada para la transmisión familiar *inter vivos*, como el nombramiento lo era para la extrafamiliar.

2. Las transmisiones venales.

Las formas venales de transmisión de los regimientos son el aspecto más interesante del estudio de los mecanismos de reproducción de la oligarquía municipal. Cerrada ya la gran oleada de

¹⁷ Claro que podían obviarse los obstáculos con una dispensa del rey Véase AHN/ Cons. leg 13.858; sept 5.

ventas del XVII, nos encontramos ante una situación en la que las transacciones privadas son moneda corriente. Y sin embargo, es raro encontrar en el XVIII las encendidas críticas a la venalidad que menudeaban en el siglo anterior. No deja de ser significativo el silencio de Lorenzo de Santayana, autor de uno de los pocos textos jurídicos sobre gobierno local publicados en el XVIII¹⁸. Un silencio que se repite en la legislación. Las ventas privadas de oficios se desenvuelven en el marco de la falta de regulación legal. Ciertamente existían disposiciones prohibitorias de tiempos de los Reyes Católicos, que incluso se vuelven a recopilar en 1805, pero la práctica desmentía una y otra vez el contenido de tales leyes. La propia Corona, al emprender desde mediados del XVI sucesivas operaciones masivas de ventas había contribuido no poco a engendrar la tolerancia hacia semejantes prácticas. Ya en 1597 Castillo sugiere que sería bueno «quitar también la dicha ley que no ocupe el libro de la recopilación en balde, pues ya no se guarda, y se venden los dichos oficios [de regidores] por culpa de los tiempos (...), y por ventura por culpa también de los ingenios y por las grandes obligaciones y necesidades de su Majestad, y como dice Cipiano (.) ya comenzó a ser lícito lo que es público»¹⁹. Sólo en 1795 se promulga una disposición que regula las transmisiones privadas de oficios, incluidas las ventas²⁰, haciendo en definitiva lícito lo que de tiempo atrás era público.

Los arrendamientos de oficios estaban en cambio sujetos a tajante prohibición. Esta se reducía, en lo fundamental, a una ley dada en 1480 en Toledo —de nuevo los Reyes Católicos— que prohibía el arrendamiento de los oficios de justicia en los pueblos, so pena de pérdida de los mismos²¹. La prohibición se reiteró en el XVII y, ya en el XVIII, una real orden de 1750 y una provisión de 1768 reproducían y mandaban guardar la ley en lo tocante a los

18 La ausencia ha sido señalada por TOMÁS Y VALIENTE en su prólogo (págs. XLI-XLIII) al libro de Lorenzo de SANTAYANA Y BUSTILLO, *Gobierno político de los pueblos de España* (1742), IEAL, Madrid, 1979. Contrasta este silencio con la decidida toma de partido contra la venalidad de CASTILLO, antecedente y origen de la obra de SANTAYANA

19. CASTILLO, *op. cit.*, III/ 8/ 287

20. *Nov Recop* VII/ 8/ 12.

21. *Nov Recop*. VII/ 6/ 4

regimientos, obligando a sus propietarios a servirlos en persona²². Su cumplimiento, no obstante, dejaba mucho que desear, hecho que no ignoraban los concejos ni la Corona.

Las ventas representan la partida más importante de las transmisiones venales. En los registros de la Cámara se conserva un buen número de escrituras que reflejan la tolerancia estatal ante una práctica no regulada; normalmente se trata de simples contratos de compra-venta, semejantes a los de cualquier otro bien. También aparecen casos en los que intervenía directamente la Corona, a través de una subasta judicial; tal era la situación de los oficios amayorazgados. Excepcionalmente, podía ser el propio concejo quien enajenara los oficios²³.

En cuanto a los precios, más que sus oscilaciones —entre los 13.000 y los 32.000 ducados— llama la atención lo elevado de los importes. Las primeras pueden explicarse por las peculiaridades de un mercado de oferta tan limitada; además, los casos extremos son la excepción, vendiéndose la mayor parte a precios en torno a los 22.000 ducados. En lo que a los precios se refiere, valga la comparación con los que se pagaron por los regimientos vendidos en Cataluña a raíz de la operación emprendida por Felipe V en 1739. El más caro, un regimiento perpetuo de Barcelona con calidad de poder nombrar teniente se vendió en 76.000 reales, menos de 7.000 ducados. Para comprar uno en Madrid hubieran tenido que juntarse tres barceloneses en comandita, y eso que los oficios de la capital del principado eran, con mucho, los más caros²⁴. Compárense si no los precios de los regimientos madrileños con los 22.000 ducados que pagó a fines del xvii Martín Fernández de Tejada por la Depositaria de la Cámara de Castilla, un cargo de

22. AHN/ Cons. leg. 14.161; oct. 19.

23. En 1724 el ayuntamiento tanteó el oficio de Depositario General de Madrid, financiando la operación mediante la venta de la voz y voto de regidor que llevaba anejo el cargo a D. José Negrete. Como se ve, el tanteo no siempre redundaba en una disminución del número de oficios (AHN/ Cons. leg. 13.849; abril 3).

24. Para otras poblaciones catalanas, los regimientos perpetuos y con «calidad de teniente» valían 22 000 (Lérida), 15.000 (Balaguer y Mataró) o 10 000 *reales*, y aún menos en localidades más pequeñas. TORRAS I RIBE, artículo cit., pág. 735.

más fuste, dotado con 30.000 reales de salario anual y no colegiado con otros cuarenta individuos²⁵.

Cierto también que junto a los precios es necesario considerar las formas de pago. En primer lugar, el descuento de los censos que hipotecaban el oficio alteraba en ocasiones notablemente la cantidad a pagar (véase tabla 1). Los más de 20.000 ducados que montaba el principal de los ocho censos que pesaban sobre el regimiento de don Juan Antonio Ruiz Sarmiento le valieron al comprador liquidar la operación con un desembolso en metálico de tan solo 42.000 reales. Otra modalidad, aunque rara, era constituir un censo reservativo para la compra. Eso fue lo que hizo en 1784 Francisco Albo, que ofreció al patronato propietario del regimiento la constitución de un censo cuyo capital fuera el precio del oficio —22.000 ducados— hipotecando el propio oficio y unas casas que poseía. Con este arreglo, Albo entregaría anualmente al patronato unos intereses del 2,5 por 100 —6.050 reales— hasta saldar el total. Nuestro hombre entraba así en posesión de un regimiento mediante un desembolso anual más o menos equivalente al importe de un arrendamiento²⁶. Ventajas de la venta a plazos.

Aunque tampoco era barato el arrendamiento; ni, a lo que parece, demasiado legal. A diferencia de lo que ocurría con las ventas, que se realizaban de forma abierta —y aun a grito de pregonero—, el arrendamiento se encubría bajo modalidades legales de transmisión —renuncias y nombramientos— que ocultaban contratos privados. Pese a las prohibiciones, la existencia de esta práctica era pública y notoria y sus peligros bien conocidos. Sacristán, con la agudeza que le distingue, los describe así:

«Más peligrosa era aun para el bienestar y los intereses de los pueblos la viciosa costumbre introducida de arrendar los oficios, asegurándose de esta manera una renta el propietario sin llenar ninguna de las obligaciones de su destino, y dejando lugar a la codicia del arrendador, precisado a cometer exacciones para

25. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., *Política fiscal y cambio social*, I.E.F., Madrid, 1984, págs. 182-183

26. AHN/ Cons. le. 14.259; nov. 3. La misma fórmula empleó Angel González Barrero para otro oficio del mismo patronato (Biblioteca Municipal de Madrid, Manuscritos, MA/ 2258).

TABLA 1 VENTAS DE OFICIOS DE REGIDOR EN MADRID

Año	Comprador	Vendedor	Precio (en ducs.)	Censos a descontar (en ducs.)
1656	Mateo Saenz de Erquiñigo	Test. de F ^{co} Martínez Espinosa	16 000	No consta
1669	Felipe Rubio	D. José de Ochoa	20.000	n.c.
1674	D. José Noriega y Posada	Test. de Damián Vela	18 000	n.c.
1684	D. Gerónimo de Miranda	D. Juan Andrés del Valle	22 000 *	
1704	D. Juan de Prats	D. ^a María Francisca de Iruño	17.000	- - - - -
1715	D. José Felipe de Pinedo	D. ^a Paula de Vela	13.500	1.790
1719	D. José de Arriola	D. Manuel de Alcedo	13.554	3.590
1726	D. José Negrete	Ayuntamiento de Madrid	32 000	- - - - -
1730	D. Antonio de Bengoa	Test. de D. ^a M. ^a de los Ríos	24.000	5.100
1733	D. José de Negrete	D. ^a M. ^a Marcela Román	27.545	9.250
1737	D. Julián Moret	D. Diego A. ^o de Arce **	26 000	18.088
1739	D. ^a Isabel Josefa de Ayala	Memorias de Felipe Escobar **	26 000	4.379
1745	D. ^a Angela de Cisneros	D. Francisco A. ^o Montenegro **	25.000	- - - - -
1745	D. Antonio Moreno Negrete	D. Miguel Bentura Zorrilla	n.c.	n.c.
1748	D. José Clemente Leoz //	Francisco Medrano Mendoza	24.000	
1751	D. Diego Bozmediano ***	D. Juan G. Cristóbal de Barcos	19 000	- - - - -
1754	Sr. Marqués de la Regalía	D. Juan A. ^o Juez Sarmiento	24.000	20 190
1761	Sr. Marqués de Terán	Test. de Juan de Miranda	22.000	- - - - -
1765	D. Manuel de Santa Clara	D. Gaspar Afán de Ribera **	20.366	8.366
1766	Sr. Marqués de Perales	Conde de Barajas **	26.000	- - - - -
1766	D. Antonio Benito de Cariga ***	D. ^a Francisca y D. ^a Josefa del Yermo	26 000	n.c.
1772	D. Agustín de la Cana ***	Condesa de Villariego **	22 000	- - - - -
1773	Sr. Marqués de Portago	D. Mateo José de Negrete	21 000	9.250
1773	D. Ventura de San Juan	Marquesa de Sotelo **	16.350	- - - - -
1775	D. Antonio M. ^a de Quijada ***	Marquesa del Palacio	21.000	11.500
1779	D. Manuel M. ^a Basarán ***	Marqués de la Regalía	20.000	- - - - -
1783	D. Angel González Barrero	Memorias de D. ^a A. de Cisneros	21.000	- - - - -
1784	D. Juan Francisco Albo	Mems. de A. de Cisneros **	22.000	- - - - -
1790	D. José de Allende y Salazar	D. Agustín de la Cana **	22 000	- - - - -
1790	D. José Pérez Roldán	Vizconde de Huerta **	13 636	- - - - -
1794	D. ^a Josefa Garrido Díaz	Marquesa de Portago	22.000	- - - - -
1799	D. Francisco de Berindoaga	Francisco Martínez Delloz **	22 000	- - - - -

Fuente: expedientes de la serie «Renunciaciones», salvo:

- * A.V.M. Secretaría 2-246-99
- // Oficio renunciante; fuente A.V.M. Secretaría 2-247-33
- ** Oficio comprado de mayorazgos o patronatos.
- *** Oficio comprado para mayorazgos o patronatos.

poder cumplir sus compromisos y realizar una ganancia, casi siempre por medios ilícitos. Cuando el cargo estaba retribuido con un salario fijo, las condiciones del contrato eran más apreciables, y sólo podían temerse confabulaciones y poca pureza en la administración que le estaba confiada»²⁷

El mismo razonamiento, bien es cierto, cabía hacerse para las ventas de oficios, pero hay que reconocer que la codicia había de ser mayor por fuerza en quien no disponía de una eternidad «por juro de heredad» para lucrarse.

El procedimiento para burlar las prohibiciones era tan sencillo como suscribir una doble escritura. «Por honestar y decir que no van contra este decreto --escribe en 1679 el gobernador del Consejo de Castilla, refiriéndose a una prohibición de Felipe IV— hacen escritura de arrendamiento primero, y luego hacen otra que sólo suena a traspaso llano de que no le puede servir el propietario por estar ausente o impedido, para que con esto la Cámara no les embarace el título»²⁸. No es como para elogiar la astucia del inventor, y el propio testimonio muestra que fue más la negligencia que el desconocimiento de quien debía frenarlas lo que impidió poner fin a estas prácticas. A decir verdad, los compradores no se recataban de suscribir ambas escrituras el mismo día y ante un sólo escribano, lo cual ha facilitado la tarea de localizar los contratos de arrendamiento. Estos diversos indicios indirectos me han llevado a establecer que el 90 por 100 de las renunciaciones y nombramientos extrafamiliares venían en realidad a encubrir arriendos; suponen por tanto unas 30 transmisiones, un 20 por 100 del total de las registradas.

Los contratos de arriendo de un oficio siguen el mismo modelo que cualquier otro: se determina la renta, la duración, los plazos y formas de pago —siempre un año de anticipo— y las cláusulas de garantía. Los plazos de duración vienen a oscilar entre los dos años y el contrato vitalicio, muy excepcional²⁹. En general se trata de plazos cortos; en el caso de los nombramientos, lo normal es que se fije el plazo de éste, es decir, hasta que el propie-

²⁷ ANTONIO SACRISTÁN Y MARTÍNEZ, *Municipalidades de Castilla y León*, reed en IEAL, Madrid, 1981, págs. 462-463.

²⁸ AHN/ Cons. leg. 7.222/ exp. 4.

²⁹ AHN/ Cons leg. 14 138; jun 16; Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM), prot 14 887, fols 981-985.

tario alcance la mayoría de edad o la mujer abandone el celibato. En cuanto al importe, no aparecen grandes oscilaciones: suele moverse entre los 400 y los 600 ducados anuales, como se ve en la tabla 2. Las cantidades eran considerables, teniendo en cuenta que el salario era de 400 ducados, y hay que suponer que, a falta de otras fuentes de renta, los arrendatarios habían de considerar posible la obtención de algunos beneficios económicos de un cargo que, cuando se ejercía, requería una dedicación prácticamente exclusiva. También al respecto tenía formado juicio el gobernador del Consejo: «También otros han hecho compras de por vida, aventurando diez o doce mil ducados, que no los dieran a no tener entendido cómo los han de sacar muy en breve»³⁰.

La última modalidad de transmisión venal de los regimientos era el empeño, la cesión de un bien mueble —en este caso el oficio— por tiempo indefinido, como garantía de un préstamo, con el compromiso de que será devuelto cuando se haya reintegrado el dinero. Es lo que los documentos llaman un «pacto de retrovendendo». La incidencia de esta modalidad es marginal: unos pocos casos y todos referidos sólo a dos oficios, perteneciente uno al estado de Barajas y otro al mayorazgo que fundó Jerónimo de Villanueva. Al estar vinculados, los trámites para el empeño y el desempeño habían de llevarse a cabo ante instancias judiciales, una vez obtenidas las correspondientes licencias.

El importe del empeño venía a situarse en torno a los 13.000 ducados, más o menos la mitad del precio de venta; se diría que corresponde al carácter de la operación, a medio camino entre la compra y el arrendamiento. Para quien tomaba el oficio «en peño» —otra denominación de la época— presentaba la ventaja de una seguridad que no tenía el arrendamiento; el contrato se prolongaba mientras el propietario no devolviese el préstamo, cosa en la que solía demorarse. Además, para mayor garantía, solía fijarse un plazo mínimo en el cual no podía procederse al desempeño. El costo, por otra parte, era menor que el de la compra, con la ventaja de que podía recuperarse la inversión, ya fuera por vía de desempeño o por subrogación del empeño a un tercero. Para el propietario, representaba la posibilidad de allegar

30. AHN/ Cons leg 7 222/ 4

TABLA 2: ARRENDAMIENTOS DE REGIMIENTOS MADRILEÑOS

Año	Arrendatario	Arrendador	Renta (reales/año)	Fuentes
1712	D. Francisco Lorenzo Venegas	D.ª Catalina M.ª Sanguineto	5.500	AHPM; Prot. 14880, fs. 292-304
1721	D. Manuel Gómez Castel	D. Antonio Reinalte	6.000	AHPM, 14887, fols. 981-985
1731	D. Tomás II de Padilla	D.ª M.ª Mayor de Montalbo	6.600	AHPM, 14851, fo's. 758-763
1735	D. Pedro José del Termo	D. Juan Jorge Zoalli	5.500	AVM /Sec. 2-247-33
1735	D. Luis de Castilla	D. Fernando Afán de Ribera	n.c	AHN, Cons. 14138; 16 Jun
1739	D. Gaspar A.º Calderón	D. José Manuel de Olivares	5.500	AHPM; 16005, fols. 9-12
1744	D. Juan José de las Peñas	Marqués de Hermosilla	5.500	AHN, Cons 14138; 16 Jun
1744	D. Mateo José de Ayora	D. Pedro Afán de Ribera	5.500	AVN /Cont. 3-342-1
1747	D. Francisco de Milla	D.ª Casilda Manuela Coello	5.500	AHPM; 16342, fols. 557-559
1749	D. Agustín Gómez Lozano	D. Antonio Valcárcel Pastor	4.400	AHN. Cons. 14021; 5 Mayo
1756	D. Juan José de las Peñas	Marqués de Hermosilla	6.000	AHN, Cons 14138; 16 Jun
1758	D. Félix de Yanguas	Conde de Altamira	2.200	AVM / Cont 3-342-1
1778	D. Manuel José Alebio	D. Juan Antonio Mombelli	4.950	AHPM; 18508, fols. 162-164
1791	D. Agustín de la Cana	D. Joaquín Tomás de Lara	4.400	AVM /Cont. 1-553-2

unas cantidades sustanciosas en momentos de falta de liquidez. Amén de ello, siempre podía encontrar a alguien dispuesto a rescatar el empeño, aportando además un pequeño beneficio añadido para el propietario. Claro que, por los casos vistos, parece que los apuros de quienes procedían a empeñar un regimiento (como quien hoy empeña un reloj o una bicicleta) no cesaban pronto, y los empeños se prolongaban o se repetían.

El por qué de las compras

«Pregunto yo, en qué se funda el que vende toda su hacienda para comprar un regimiento? Y el que no tiene qué vender, si toma el dinero a censo para ello, no siendo el salario del oficio, a lo más, de dos o tres mil maravedís? Para qué tanto precio por tan poco estipendio? Para qué tanto empeño por tan poco estipendio? Fácil es de responder, que lo hace para traer sus ganados por los cotos, cazar y pescar libremente, para tener apensionados y por indios a los bastecedores y a los oficiales de la República, para ser regatones de los mantenimientos y otras cosas, en que ellos ponen los precios, para vender su vino malo por bueno, y más caro, y primero para usurpar los propios y pósitos y ocupar los baldíos, para pedir prestado a nunca pagar, para no guardar tasa ni postura común, para vivir suelta y licenciosamente, sin temor de la justicia, y para tener los primeros asientos en los actos públicos y usurpar indignamente los ajenos honores»³¹.

Castillo lo tenía bien claro: no en vano había sido corregidor durante muchos años, y hay que suponer que no era gratuito el mal concepto en que tenía a los regidores. Las denuncias de la venalidad constituyen, por desgracia, la única fuente disponible para conocer las motivaciones de los compradores, pero hace falta tratarlas con precaución. En términos muy sintéticos, tales motivaciones pueden reducirse a un sencillo tríptico: *poder, dinero, honor*. Un tríptico en el que no se sabe a veces dónde acaba una tabla y comienza otra, tan ligados estaban sus componentes; examinémoslos con un poco de detalle.

31. CASTILLO, *op cit*, III/ 8/ 286.

1. *Unos ingresos no despreciables.*

Aduce Castillo que el sueldo de regidor es escaso, y Tomás y Valiente avala tal opinión. Para el caso de Madrid, sin embargo, no es del todo cierto. Sabemos que hasta 1714 el salario de los regidores no eran más que 48 reales, pero con los extras —demasiá de conejos, colación de tablados, propina de Corpus, almuerzos, propinas ordinarias y cera— se alcanzaban los 2.874 reales, y quizás más. En 1720 se aumenta el sueldo a 400 ducados anuales, a los que habían de sumarse las propinas y los gajes por desempeño de comisiones³².

Pero no hay que olvidar que el oficio era un bien caro: unos 21.000 ducados de media; un simple cálculo revela que la rentabilidad del capital no superaba el 2 por 100, y había que trabajar para sacársela, dato a tener en cuenta si sabemos que el tipo usual de interés en el XVIII era del 3 por 100. La operación está al alcance de cualquier fortuna —o de cualquiera que tuviera fortuna— y no cabe duda de que influiría en el ánimo de los vendedores. Los compradores, en cambio, gozaban de unos ingresos no desdeñables, pero sí inferiores a la estricta rentabilidad de los capitales. Claro que si hablamos de dinero no hemos de referirnos sólo a las ganancias estipuladas.

Las atribuciones de los regidores en el gobierno económico de las poblaciones eran muy amplias, y dejaban abiertas unas ciertas posibilidades de lucro. La supervisión de la recaudación y el gasto municipal, tasa de precios, control de los abastos, gestión de los propios, aprovechamiento de los comunales y vigilancia de los tráficos eran los campos de este gobierno, donde un regidor poco escrupuloso podía hacer valer su poder en beneficio propio. La prohibición de ingreso en los concejos de individuos dedicados al comercio, y más concretamente a los abastos, así como las de que los regidores intervinieran a título particular en el arrendamiento de los propios y la recaudación de las sisas municipales y cargas reales se repitieron desde muy temprano³³, no siempre con consecuencias prácticas. Los pocos indicios que he podido detectar

32. AVM/ Sec 4-127-1

33. *Nov. Recop* VII/ 9/ 7,9,10 y 11

confirman que los regidores no siempre se comportaban con la limpieza que su noble sangre exigía³⁴.

2. *Un prestigio entre comillas.*

No es la figura del regidor de las más prestigiadas de la administración pública; antes al contrario, las sospechas de corrupción —la ineficacia se les da por supuesta, como el valor al soldado— recaían a menudo sobre unos individuos que habían entregado elevadas sumas por sus oficios. Un *Memorial burlesco* compara a los de Madrid, en un irreverente símil, con los apóstoles, «pues si aquellos por seguir a su maestro dejaron sus redes, ellos hacen más, que las llevan tendidas, y van pescando y le siguen»³⁵. Claro que el honor es algo muy distinto, en el que nada, o casi nada, pesa la voz pública, y el honor era inseparable de un regimiento, y más si era de una ciudad de voto en Cortes. ¿Qué decir entonces de un regimiento en la mismísima Corte? Los regidores participaban en las funciones solemnes que se celebraban en Madrid, acudían a homenajear al Rey en sus entradas y salidas de la Corte, así como a otros personajes principales, ocupaban un lugar destacado en la jerarquía urbana. Tenían además poder, lo que les hacía acreedores a honras y privilegios. Y el honor no dejaba de tener un considerable valor de uso.

Un buen ejemplo de ello son las exenciones y privilegios de diverso tipo que acompañan al cargo. Santayana, que resume a Castillo, los enumera: «se le ha de examinar en su casa, cuando le presentan testigo. Son preferidos en la compra de abastos. Son exentos de las cargas personales y humildes, de la cuestión del tormento, sino es que sea por crimen de lesa majestad divina y humana, y el pecado nefando; las leyes Romanas los eximen de la

34 En 1791 el Consejo investiga unos abusos por parte de los regidores fieles ejecutores, acusados de exigir multas muy crecidas a los comerciantes y embolsarse su importe; nada pudo probarse (AHN/ Cons. leg. 863/ 2). Otras acusaciones menores aparecen en los juicios de residencia, con parecido resultado. Más interesantes, sin embargo, resultan los lazos de ciertos regidores con los abastos de la Villa

35 Biblioteca Nacional, ms. 18.717⁶¹

pena de azotes y galeras, y de la muerte sin consulta del príncipe»³⁶. No se cuentan entre éstos la exención de pechos, que Castillo rechaza explícitamente, ni la de servicios de armas. Domínguez Ortiz ha señalado estas exenciones, o la posibilidad cuando menos de esquivar las obligaciones —las militares en concreto— como un factor que indujo a determinadas personas a comprar oficios³⁷. Por mi parte no he encontrado ninguna referencia al respecto, y cabe pensar que gentes de tan acomodada posición tendrían otros medios de escurrir el bulto. En cuanto a los privilegios fiscales, penales y procesales, a los regidores de Madrid les estaban garantizados por el mero hecho de su hidalguía, requisito previo para entrar al ayuntamiento. Así pues, en el caso de Madrid tampoco cabe darle mayor importancia a unas exenciones que parecen superfluas.

3. *Un poder cierto.*

El municipio castellano había visto mermadas sus atribuciones desde fecha tan temprana como el siglo xv. La patrimonialización de los oficios había ido acompañada de un reforzamiento del poder de los corregidores, netamente incrementado en el xviii, cuando el corregidor de las poblaciones que eran cabeza de intendencia acumula el cargo de intendente³⁸. A ello se añadió una tutela aún más próxima del Consejo, sobre todo en Madrid a través de la Sala de Alcaldes. Además, la colegialidad del cargo mermaba en parte el ámbito de poder individual de cada regidor, aunque el absentismo a su vez actuaba como factor de corrección.

Con todo, las atribuciones de los regidores eran más que suficientes para justificar los deseos de comprar un oficio de tantos individuos: designación de los empleados del concejo, establecimiento de las tasas de diversos productos, gobierno económico de la ciudad. Estaban además ligados al corregidor y a los órganos de poder de la Corona, por más que las relaciones fueran en ocasiones conflictivas. Todo ello les daba un poder cierto, cuyo ejercicio podía resultar enormemente remunerador.

36. SANTAYANA, *op. cit.*, pág. 41

37. DOMÍNGUEZ ORTIZ, *art. cit.*, págs. 162-163.

38. B. GONZÁLEZ ALONSO, *El corregidor castellano (1348-1808)*, Madrid, 1970, especialmente págs. 247 y ss.

A falta de una explicación más detallada, que habrá de esperar a un examen del funcionamiento del municipio sobre la base de los libros de acuerdos, tendremos que contentarnos con estas observaciones. Y sin embargo, queda por explicar la otra cara de la moneda: ¿por qué estos empleos, que tantos beneficios podían reportar a sus detentadores, eran vendidos por sus propietarios? No vale la respuesta de que era la nobleza, media o alta, falta de liquidez, la que procedía a pignorar parte de su patrimonio, pues hemos visto que muchos de los vendedores habían adquirido el oficio unas décadas o unos años antes. Creo que la respuesta radica en la capacidad y la voluntad de *ejercer* el oficio; no era la mera posesión, sino el ejercicio de un regimiento lo que proporcionaba tales beneficios. Un regimiento era una finca que había que explotar personalmente. De ahí que hubiera quienes, incapaces o poco deseosos de afrontar las obligaciones del cargo, sin duda penosas, procedieran a su conversión en mera, aunque saneada, fuente de renta.

De ahí la consideración del oficio por parte de algunos ricos propietarios como un bien de segundo orden; de ahí que el Marqués de Hermosilla arrendase su oficio a Juan José de las Peñas para más tarde, necesitado de dotar a su hermano con una renta que le sirviese de los alimentos a los que tenía derecho como sucesor del mayorazgo, le renunciase el oficio³⁹. De ahí las dos facetas que presentan los regimientos patrimonializados: el poder y la renta.

Los compradores

¿Quiénes compraban los regimientos en el Madrid del siglo XVIII? Dar respuesta a esta pregunta debería servirnos para contestar a la que, con más ambición, plantean diversos autores: ¿quiénes compraban oficios en Castilla? Desgraciadamente, de momento no podemos dar una respuesta completa ni siquiera a la primera; la documentación, de una locuacidad hasta cargante en lo que toca a hidalguías y linajes, no nos habla apenas de las calidades, recursos y empleos de los compradores.

39 AHN/ Cons. leg. 14.138, jun. 16

Tomás y Valiente ha apuntado hacia la nobleza media y baja como principal beneficiaria de las ventas de oficios que él denomina «de poder», los más importantes de los cuales son los regimientos; Domínguez Ortiz, con más amplio criterio, sugiere que «para las grandes familias fue motivo de lustre y provecho tener incorporados a sus mayorazgos cargos eminentes, regidurías de ciudades de voto en Cortes, alferrezagos y otros similares», pero añade que «fue sin duda la burguesía rural y urbana la que más se aprovechó de ellas [las ventas] con el doble fin de procurar su ascensión social mediante el poder y la influencia que procuraban los cargos y el provecho económico que de ellos extraían»⁴⁰. El peso de la gente de curia (abogados, notarios, escribanos, jueces, licenciados, doctores) que sor Laura Fernández ha detectado en la transmisión de oficios en Santiago caracteriza ciertamente un caso muy distinto del madrileño⁴¹. Más acorde a lo que ocurría en esta villa resulta la constatación por Margarita Cuartas de la presencia de funcionarios y empleados de la administración central o local, y también de sectores burgueses que se valen de los oficios para llegar a controlar el gobierno concejil⁴².

En cualquier caso, hay un dato en las ventas de regimientos madrileños que marca definitivamente la extracción social de los compradores y no es otra que el precio. Los requisitos de hidalguía que marca el estatuto podían, en un momento dado, obviarse con relativa facilidad, por más que se viviera en una «sociedad del honor»; algo muy distinto era, en cambio, tener que aforar 18.000 ó 20.000 ducados. De ahí que los dos casos de compras en que no consta una considerable fortuna de los adquirentes, sino más bien una cierta «profesionalización» en la gestión municipal —hablamos de Angel González Barrero y Juan Francisco Albo— se realizan mediante la constitución de censos reservativos; una función similar parecen cumplir los arrendamientos. Así pues, en el Madrid del XVIII no podían comprar regimientos los miembros

40. DOMÍNGUEZ ORTIZ, art. cit., pág. 179.

41. LAURA FERNÁNDEZ VEGA, «Ventas, arriendos y renunciaciones de oficios en la ciudad de Santiago durante los siglos XVII y XVIII». en A. EIRAS ROEL (ed.), *La historia social de Galicia en sus fuentes de protocolos*, Universidad de Santiago, 1981; págs. 409-430.

42. M. CUARTAS RIVERO, art. cit., págs. 254-258

de una nobleza local algo cortos de liquidez; así lo hacían, en cambio, nobles titulados, ricos comerciantes como José Negrete, altos funcionarios y otros menos altos.

Una dificultad adicional para esclarecer quiénes eran los compradores viene dada por la práctica frecuente de comprar un oficio para ceder su uso a un hijo, un sobrino, un yerno o un marido. La edad media de los regidores al ingreso era bastante baja —unos treinta y tres años, con un tercio de los recién llegados entre los dieciocho y los veinticinco años—, y a menudo hay que preguntarse más por su origen familiar que por la fortuna personal. De los casos de compras registrados, en diez ocasiones ésta corre a cargo de familiares de quien luego desempeñará el oficio, en lo que parece un intento de dotar a su descendencia con una fuente de ingresos con la cual lanzarse a la vida activa y, caso de que se manejaran bien en el desempeño del oficio, de un trampolín para acceder a niveles más altos de la administración central o de la corte. En este mismo capítulo podemos situar a don Antonio Bengoa, que compra un regimiento con capitales de —y para vincular a— un patronato de legos, del que serían patronos sus descendientes⁴³; también don Juan de Basarán, que deja en su testamento cierta cantidad a su sobrino para comprar un regimiento, encaja en este apartado, con don Pedro Berindoaga, comisario de Guerra, que lo lega a su hijo⁴⁴.

La nobleza titulada representa un capítulo importante entre los compradores: en 1754 el Marqués de la Regalía (consejero de Indias y miembro de las Juntas Generales de Tabaco, Comercio y Minas), en 1761 el Marqués de Terán (secretario del Consejo de Inquisición), en 1766 el Marqués de Perales (gentilhombre de cámara del rey, *con ejercicio* como recalca), siete años más tarde al Marqués de Portago y en 1790 don José de Allende y Salazar, Marqués de Prado Alegre⁴⁵. También el alférez mayor, Conde de Altamira, había comprado su oficio. No obstante, el peso de los titulados en el concejo no aumentó, aunque su presencia llama la atención en las listas de regidores de la segunda mitad de siglo, y

43. AHN/ Cons. leg. 13.873; mayo 4.

44. AHN/ Cons. leg. 14.213; mayo 20 y 14 360; abril 4.

45. AHN/ Cons. 14.032; marzo 1// 14.079; jun. 5 // 14.118; oct 3// 14 169; oct 7// 14 294; dic. 10.

ello por dos razones: en primer lugar porque también la nobleza ocupa un puesto destacado entre los que venden oficios (de los seis citados, tres fueron vendidos antes de que doblara el siglo por los titulares o sus herederos), con lo que la presencia nobiliaria se mantenía más o menos estable. El segundo factor es un contumaz absentismo de estos titulados, fruto las más de las veces de sus ocupaciones en el ejército, los altos puestos del gobierno o los no menos altos de la corte. Pero además la nobleza presente en el concejo madrileño en esta época es de un tipo bastante determinado. Gran parte de los titulados pertenecían a linajes ennoblecidos por Carlos II o los borbones por sus servicios a la corona, en particular en el campo de las finanzas, como culminación de un proceso de ascenso social sólidamente cimentado en la riqueza. El título de José Gómez Terán, primer Marqués de Portago, le fue creado al padre del regidor madrileño por Felipe V, como recompensa a sus servicios como Tesorero General de la Guerra; su hijo casó con una Negrete, hija de don Ambrosio de Negrete, primer Conde de Campo Alange desde 1762, gracias a sus servicios a la Corona en el Consejo de Hacienda y la Junta de Abastos. Desde 1726 Ambrosio Negrete era regidor de Madrid, en un oficio que le compró su padre; su hijo Manuel, regidor como él, adquiriría al casarse el título de Marqués de Torremanzanal, que el rey había otorgado a su suegro en premio a sus servicios como consejero de Castilla. Méritos de la misma índole le valieron su título al Marqués de la Regalía, bien significativo por sí mismo⁴⁶. Pero no eran los únicos casos: otros titulados que entraron en el concejo por vías no venales tenían orígenes similares, como los marqueses de la Torrecilla y Valdeolmos⁴⁷. Parece claro que no era la búsqueda de poder —ya que, salvo excepciones, no ejercían los oficios—, ni de ganancias —que obtenían sobradas en otros negocios— lo que empujaba a estos individuos a comprar un regimiento. Habría que pensar más bien, con Domínguez Ortiz, en el lustre que desprendían estos cargos, en la esperanza que

46. Sobre éstos, hay breves semblanzas en J. A. ALVAREZ Y BAENA, *Hijos de Madrid Ilustres*, Madrid, 1789-1791, 4 vols.

47. De ellos se ha ocupado J. CARO BAROJA en *La hora navarra del XVIII*, Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1969.

viniera a respaldar un ascenso social a menudo vertiginoso. Claro que si un marquesado no daba bastante lustre...

También ingresaron en el ayuntamiento gentes del mundo de los negocios: los hijos de José Negrete, posteriormente ennoblecidos, o a finales de siglo el hijo de José Pérez Roldán, uno de los dos diputados-directores de los Cinco Gremios⁴⁸ son los ejemplos más claros. Aparte de estos auténticos potentados, hay otros nombres —José Clemente Leoz— de quienes ignoramos de dónde sacaron los caudales para comprar el oficio, y es más que probable que fuera de operaciones mercantiles. Resulta sin embargo difícil evaluar el acceso de elementos burgueses al ayuntamiento, que en cualquier caso no aparece como rasgo marcado en el estudio de las transmisiones.

Hay también entre los compradores individuos ligados ya al ayuntamiento, y este patrón se repite más frecuentemente entre los arrendatarios de regimientos. Ya hemos mencionado los casos de Angel González Barrero y Juan Francisco Albo en 1783 y 1784; les había precedido en 1745 don Julián Moreno de Villodas, secretario del ayuntamiento, quien compró un oficio para su hijo Antonio⁴⁹; el cargo de secretario mayor, importante y bien remunerado (25.000 reales al año desde 1715) le debió sugerir la conveniencia de que su hijo entrara en el concejo, tanto más cuanto existía la costumbre de que los que iban a ser secretarios sirvieran primero como regidores. También aparecen regidores de otras ciudades que luego compran un oficio en Madrid, como Diego Vozmediano, que lo había sido en Valladolid.

El último grupo es el de las gentes ligadas a la administración o a la corte: D. Felipe de Pinedo, oficial de la Secretaría de Indias; Manuel Pardo, hijo de un consejero de Castilla, igual que Manuel de Santa Clara; don Agustín de la Cana, que en 1772 era oficial de la Secretaría de Guerra y a su muerte en 1791 había llegado a ayuda de cámara del rey y caballero de la orden de Carlos III; don Lucas de San Juan, hijo del Procurador General de la Orden de Calatrava; Manuel de Basarán, sobrino de un tal don

48 Sobre Pérez Roldán, ver las escasamente enjundiosas menciones que le dedican Miguel CAPELLA y Antonio MATILLA en *Los Cinco Gremios de Madrid*, Madrid, 1957.

49 AHN/ Cons leg. 13 972; mayo 2.

Juan, del Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas; doña Josefa Garrido, viuda de un agente del número del Consejo de Indias, que en 1784 compró un oficio para entregárselo a su hijo como parte de la legítima paterna; Francisco de Berindoaga, hijo de un Comisario de Guerra de Carlos IV y miembro de la Matritense. La lista, como se ve es larga.

Con estos pocos datos vemos configurarse el grupo de compradores, si es que puede hablarse de algo parecido, como un conglomerado de nobleza de finanzas, algún rico comerciante o financiero, funcionarios reales de los más diversos rangos y «profesionales» del municipio. En común tienen disponer de fortunas más que medianas; las motivaciones que les impulsan a comprar el oficio en cambio son diversas, como el uso que de él hacen. En realidad, no se diferencian gran cosa del resto de los regidores, de los que no compraron sus oficios. Al fin y al cabo eran a menudo hijos o nietos de éstos, formando un conglomerado que podríamos calificar de oligarquía mesocrática. Conviene por tanto ofrecer algunos datos más sobre el común de los regidores de Madrid.

Datos para la definición de la oligarquía madrileña

El concejo de regidores vitalicios sienta las bases de un gobierno oligárquico en las ciudades castellanas. La patrimonialización de los oficios afianza el carácter oligárquico, dotándole de instrumentos para su reproducción, al tiempo que, a través de las ventas, permite el acceso de ciudadanos enriquecidos. Los arrendamientos, en fin, abren las puertas a quienes disponían de medios para pagarlos y la voluntad de resarcirse. Sin embargo, es poco lo que sabemos de los gobernantes del concejo madrileño del XVIII. La documentación, de sesgo marcadamente protocolario, ofrece algunos datos, sobre los que habrá que seguir profundizando.

1. Regidores madrileños y regidores de Madrid: origen geográfico.

No todos los regidores de Madrid eran madrileños. Tampoco la legislación lo exigía, y sin duda la patrimonialización hacía posible una diversidad notable. Sin embargo, la gran mayoría de

los regidores (un 55 por 100) eran naturales de la ciudad. El porcentaje desciende algo en la segunda mitad del siglo XVIII, pero ello podría tener más que ver con el número de casos registrados que con flujo migratorio alguno (véase cuadro 2). En cualquier caso, es la corona de Castilla el principal «vivero» de regidores; de los tres de origen aragonés hay dos que son del propio reino de Aragón y apenas uno nacido en Cataluña⁵⁰.

El panorama varía un tanto cuando se acude a la generación de los padres de los capitulares. La presencia de los madrileños sigue siendo predominante (40 por 100); los orígenes del resto siguen centrándose sobre todo en la corona de Castilla, con especial presencia —por este orden— de Castilla la Nueva, Andalucía, Castilla la Vieja y reino de León (sobre todo familias vallisoletanas). Como se ve, no hay una oligarquía exclusivamente madrileña, aunque en general los regidores eran gente arraigada en la villa; cierto que en esta Corte tampoco entonces abundan los que pudieran presumir de tener dos abuelos gatos.

2. *Una entrada temprana para una presencia larga.*

Otro factor que hay que destacar es la juventud de los regidores a su ingreso en el concejo (ver gráfico 4). Aparte de algunos casos de individuos que mediante dispensa real acceden al cargo antes de cumplir los dieciocho, casi un tercio de los regidores acceden al cargo entre los dieciocho y los veinticinco años. No era este un empleo para viejos, ni en este sentido se halla nada que justifique la analogía que establece Castillo con los senadores. ¿Quiere decir esto que fuera un cargo de segundo orden? Hoy, cuando ser joven no es precisamente un aval, tendemos a olvidar que siempre ha habido factores más importantes que la edad: la posición, el privilegio... La respuesta por tanto no puede ser afirmativa: es evidente que una regiduría, visto lo que era la administración local, no significaba la culminación de una carrera profesional y política, como podía serlo para un letrado llegar al Consejo de Castilla. Pero también está claro que no pueden apli-

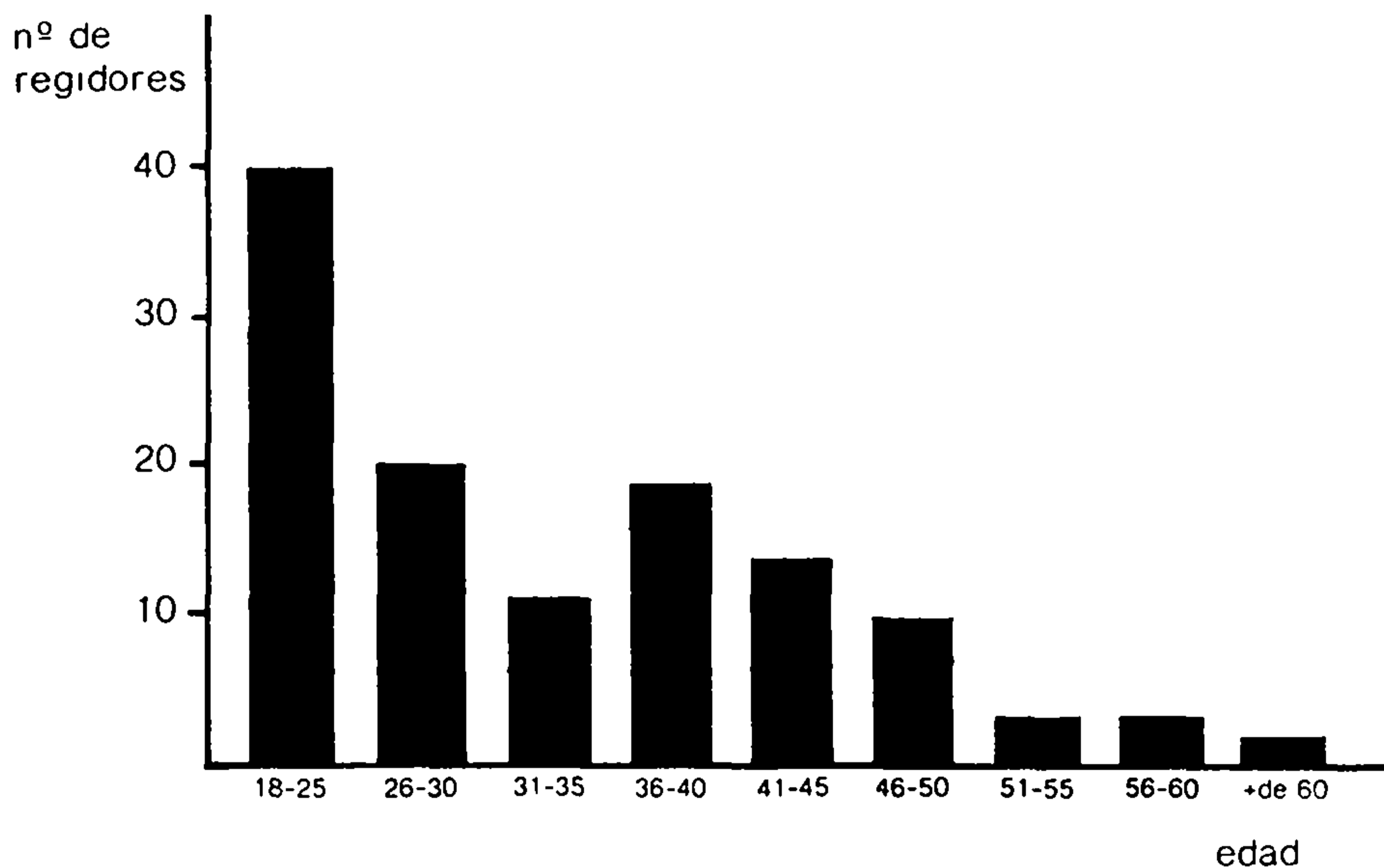
⁵⁰ A modo de comparación, pueden verse los mapas y cuadros de Janine FAYARD sobre los consejeros de Castilla, en *Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746)*, Siglo XXI, Madrid, 1982; págs. 207-224.

CUADRO 2: ORIGEN GEOGRAFICO DE LOS REGIDORES DE MADRID

Origen	1701-46	1746-59	1759-88	1788-1800	Total
Galicia	—	—	—	—	—
León	2	1	2	2	7
Provincias vascas	—	—	1	1	2
Navarra	1	—	1	—	2
Castilla la Vieja	2	—	3	—	5
Castilla la Nueva	3	1	5	2	11
Extremadura	—	—	—	—	—
Andalucía	3	6	5	2	16
Aragón	2	—	1	—	3
Murcia	2	1	—	—	3
Italia	—	—	3	—	3
América	—	1	1	—	2
MADRID	45	4	12	6	67 (48 %)
		n.c. y repetidos			21
		<i>Total</i>			140

Gráfico 4

EDAD DE LOS REGIDORES AL INGRESO



los hombres de los siglos xvii y xviii que después»⁵¹. Las órdenes militares habían perdido ya hacía mucho tiempo su significado guerrero, por no hablar del religioso, para convertirse en un signo de honor, en un *status symbol*. «El tener una cruz en los pechos es cosa de mucha honra temporal, la cual no está esencialmente conexas ni dependiente de la Religión, en cuanto tal», escribe en 1643 un autor de la Compañía de Jesús citado por Maravall⁵². La presencia de caballeros de órdenes es importante en la primera mitad del xviii, y a lo que parece más aún en el xvii; de los treinta y cinco hábitos contabilizados —que aumentarían si dispusiésemos de otra documentación, por cuanto los datos sólo se refieren a los que vestían la cruz al entrar en el concejo, a menudo jóvenes— veintisiete pertenecen a la primera mitad del siglo, y de ellos dieciocho a las tres primeras décadas. ¿Se puede apuntar por tanto una decadencia de la estimación de los hábitos a partir de 1750? Creo que es ésta, y no la entrada de elementos de menor rango en la corporación municipal, la respuesta a la drástica disminución de cruces en el concejo madrileño.

4. *Cuando la bolsa suena: definición socio-económica.*

He empleado antes la expresión «oligarquía mesocrática» para referirme al grupo de poder del concejo madrileño, y es este el lugar para aportar los datos que me impulsaron a buscar la palabra. Pero hay que destacar que nos enfrentamos a un conjunto heterogéneo de personas; todos son regidores de Madrid, pero lo que en unos es un rasgo sustantivo no es en otros más que algo adjetivo. Trataremos en lo posible de distinguir entre unos y otros.

Destaca en primer lugar el peso de la nobleza. Madrid, como ciudad de estatuto, tenía un capítulo nobiliario, pero no hay que olvidar que la hidalguía no era sino el estrato inferior de la nobleza. González Alonso ha señalado, para épocas anteriores a la que nos ocupa, el error de considerar que las oligarquías urbanas castellanas fueran estrictamente nobiliarias, apuntando precisa-

51. CARO BAROJA, *op. cit.*, pág. 72.

52. Citado por J. A. MARAVALL en *Poder, honor y élites en el siglo XVII*, Siglo XXI, Madrid, 1979, pág. 169.

mente la venta de oficios como el mecanismo primordial de renovación de tales oligarquías⁵³. En lo que al Madrid del XVIII se refiere, ni la exigencia de hidalguía ni la presencia notable de titulados desmienten al autor. En primer lugar, el concejo nunca fue monopolio de los titulados; en todo el siglo fueron regidores 19 titulados, muchos de ellos de la misma casa: los marqueses de Hermosilla, de Valdeolmos, de San Antonio de Miralrío, del Palacio, o el conde de la Vega del Pozo son títulos que se repiten a lo largo del siglo. En el momento de máxima concentración, hacia 1780, había diez de ellos, una cuarta parte de los regidores; a comienzos del XVIII, sin embargo, apenas si había dos o tres. Nada, sin embargo, que permita hablar de una aristocratización del concejo, de una «reacción nobiliaria» a escala local. En primer lugar, está el dato de la abrumadora presencia de títulos de escaso abolengo y creación reciente: buena parte de ellos, como ya mencionamos, fueron creados en recompensa a los servicios de sus titulares a Carlos II y los borbones. A éstos habría que añadir los concedidos por Felipe V a diversos regidores para premiar su actuación durante la segunda ocupación austríaca de la Corte: Diego Antonio de Noriega recibió en 1711 el rango de Marqués de Hermosilla «por haber servido al señor D. Felipe V en varios encargos, y particularmente en el empleo de Regidor de la Villa de Madrid, en que mostró gran dedicación y amor»; don Antonio de Sanguineto, regidor perpetuo y corregidor interino del ayuntamiento durante «la infeliz turbación del año pasado», recibió entonces el título de Marqués de San Antonio de Miralrío que llevaron varios de sus descendientes, también regidores; don José Vicente de Borja, por fin, se convirtió en Vizconde de Huerta⁵⁴.

Contamos además con algunos datos sobre la fortuna de estos nobles de nuevo cuño, aunque referidos sólo a los propietarios de rebaños. En 1756 el Marqués de Torremanzanal —D. Ambrosio José Negrete— era el mayor propietario de la cabaña madrileña,

53. B. GONZÁLEZ ALONSO, «Sociedad urbana y gobierno municipal en Castilla (1450-1600)», en *Sobre el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen*, Siglo XXI, Madrid, 1981, págs. 57-83

54. AVM/ Sec. 2-246-101.

con 40.000 cabezas; el Marqués de Perales poseía unas 29 ó 30.000; la Marquesa viuda de Portago, madre de unos de nuestros regidores, poseía de 12 a 13.000 cabezas⁵⁵. En 1771 la Condesa viuda de Campo Alange, que fuera mujer de Ambrosio Negrete, tenía casi 43.000 ovejas, un 7 % de la cabaña propiedad de madrileños, y casi 3.000 cabras. El Marqués de Perales tenía 32.755 ovejas y unas 2.000 cabras. Portago, que ya había heredado a su madre, tenía rebaños de 32.500 cabezas de lanar y 3.400 de cabrío. Entre todos estos personajes, ligados al concejo madrileño, poseían una quinta parte de la cabaña lanar de Madrid⁵⁶ y no eran los únicos regidores que poseían rebaños. No es de extrañar que el Marqués de Perales encargara la construcción de su palacio, en la calle de la Magdalena, a Pedro de Ribera, como lo hizo también el Marqués de Ugena, de los famosos Goyeneche. Era gente de posibles.

Otro factor que matiza la presencia nobiliaria en el concejo es la incidencia del absentismo, particularmente agudo entre los titulados, a menudo debido a sus obligaciones al real servicio. Entre 1776 y 1777, por ejemplo, cuando mayor es el número de titulados en el capítulo —eran, contando al alférez mayor, 10—, el «peso de la nobleza» era en la práctica muy distinto. El oficio del Vizconde de Huerta, para empezar, llevaba vacante diez años; del resto, excusaban su asistencia el Conde de Altamira, alférez mayor, como caballerizo mayor de la Princesa de Asturias, los marqueses de Valdeolmos y Perales (mayordomos de semana del rey), y los de San Antonio (capitán de milicias en Granada) y Torremanzanal (brigadier del Regimiento de Voluntarios Extranjeros), así como el Conde de Cazalla (coronel de milicias en Jaén). A los ayuntamientos, pues, asistían sólo los marqueses de Portago y la Regalía, y el Conde de la Vega del Pozo⁵⁷. Esto parece indicar que para estos nobles la presencia en el ayuntamiento era secundaria, comple-

55. Los datos en la pág. 513 de A. MATILLA TASCÓN, «El primer catastro de la Villa de Madrid», en la *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, tomo LXIX, 2 (1964); págs. 463-530.

56. Del *Memorial ajustado* de la Mesta, citado por J. M. MANGAS NAVAS, *El régimen comunal agrario de los concejos de Castilla*, Ministerio de Agricultura, Madrid, 1981; pág. 283.

57. AVM/ Sec. 1-100-27.

mentaria, un título más de lustre, pero no una actividad primordial.

Otro grupo importante es el de los militares: 19 regidores lo fueron, y nueve de ellos hijos de militar. Estos comparten con los anteriores el absentismo, forzado a menudo por destinos alejados de la capital, y la nobleza de muchos de sus miembros. En cuanto al resto, hay que destacar el grupo de funcionarios, encabezados por ocho consejeros, parte de ellos nobles, formado por oficiales de las secretarías, de los consejos, contadurías y tesorerías, un alguacil mayor del Consejo de Inquisición y un teniente de canciller del rey. Hay también cargos cortesanos: caballerizos, ayudas de cámara y gentileshombres de boca. Destaca, en cambio, el escaso número de letrados, apenas cinco en todo el siglo (y cuatro hijos de letrados). Aparecen también señores de vasallos y un corto número de individuos ligados a actividades mercantiles: Ambrosio de Negrete, Pedro Pérez Roldán y Mateo José Larrea, miembro de la Junta de Comisión de la Compañía de La Habana. También hay regidores de otras ciudades (Guadalajara, Valladolid o Toledo) o pueblos (Torrelaguna), todos ellos por el estado noble, claro está. Había por último quien además del regimiento poseía otros oficios enajenados: los Reinalte tenían la Contaduría de Millones y Cientos de la Villa, cuya utilidad anual se calculaba en 1756 en 2.833 reales; Blas Ruiz Baillo heredó de su padre la Tesorería del Papel Sellado, con una renta de 14.850 reales; por último, la Escribanía de Cartas de Pago de Madrid pertenecía al regidor Juan José de las Peñas, proporcionándole 57.439 reales al año. Por fin, José Pacheco, regidor entre 1742 y 1784 se une con sus 15.500 cabezas de lanar al grupo ganadero del ayuntamiento, aunque desde el flanco de los no titulados⁵⁸.

Estos datos quedan sintetizados, mejor o peor, en el cuadro 4; sobre ellos hemos pergeñado una definición de la oligarquía municipal madrileña. Salta a la vista, sin embargo, que en el cuadro la partida principal corresponde a los «No consta». Parte de ellos quizá fueran hombres sin otros atributos que el de regidores de Madrid, que no era poco; la cifra, en cualquier caso, ilustra sobradamente la provisionalidad de nuestras conclusiones.

58. Datos de MATILLA TASCÓN, art. cit., págs. 505-507, y MANGAS NAVAS, *op. cit.*, pág. 287

CUADRO 4: DEFINICION SOCIO-PROFESIONAL DE LOS REGIDORES DE MADRID

	1701-46	1746-59	1759-88	1788-1800	Total
Nobleza titulada	6	2	10	1	19
Funcionarios . .	7	1	3	—	11
Consejos:					
Nobles	—	2	2	—	
No nobles	2	—	2	—	4
Militares.					
Nobles	2	—	4	1	
No nobles	2	2	5	3	12
Letrados	—	1	2	2	5
Regidores:					
Nobles	3	1	1	—	
No nobles	2	1	—	—	3
Señores de vasallos *	1	1	3	1	6
Corte ** . .	3	1	—	1	5
			No consta		67
			Repetidos		8
			<i>Total</i>		140

* No nobles.

** Caballerizos, ayudas de cámara y gentileshombres de S. M.

Tales conclusiones, si es que puede dárseles ese nombre, consisten en la conveniencia de matizar el carácter oligárquico del concejo madrileño en el XVIII. Porque si lo que caracteriza a una oligarquía, aparte de lo reducido de sus filas, es el ejercicio del poder, en el ámbito que sea, de forma exclusiva y autónoma, por sí y en su beneficio, hay rasgos que desaconsejan aplicar tal denominación al conjunto de los capitulares de Madrid. En primer lugar, su actuación distaba mucho de ser autónoma: el corregidor, el Consejo, las juntas dirigen a menudo su actuación. Piénsese que los propios presupuestos municipales emanaban del Consejo, y se discutían —y acataban— en el ayuntamiento. En la corta me-

dida en que he podido examinar la actuación concreta del concejo, he visto a sus miembros plegarse una y otra vez a las indicaciones de la corona; protestan con vehemencia si se les posterga en el protocolo, o se les rasca el sueldo, pero no hacen frente al Consejo cuando éste decide intervenir en la organización y gestión de los abastos, o cuando en 1766 procede a implantar a los nuevos personeros y diputados del común. No debe de ser ajena esta falta de peso político a la ausencia de un peso social definido de los regidores. Tal situación sin duda ofrecía ventajas para la Corona, que desde las Comunidades —y aun antes— había luchado por desactivar la autonomía política de las ciudades castellanas. Pero al tiempo presentaba graves defectos en la gestión administrativa, lo que condujo a las reformas de 1766.

Tampoco en sus mecanismos de reproducción aparece el grupo de poder madrileño como una oligarquía en sentido estricto. Es cierto que la transmisión familiar de los oficios —y su amayorazgamiento— constituye un rasgo netamente oligárquico, por cuanto garantiza el monopolio del gobierno local a un grupo restringido de familias. Pero las ventas, los empeños, los arrendamientos, las transmisiones venales, en suma, arrojan una luz diferente sobre el tema. ¿Qué oligarquía es esa que enajena sus resortes de poder? La respuesta está ligada a la cuestión anterior; no se vendía tanto poder municipal, como una participación en la gestión de los asuntos locales, que podía resultar muy rentable para quien la disfrutara y de la cual se derivaba cierto poder: limitado y dependiente, eso sí.

La composición del concejo madrileño responde así a esta caracterización: el ayuntamiento no estaba en manos de los grandes de la ciudad, de los patricios, de los *magnati*, sino de un grupo peculiar, de extracción media-alta, profesionalizado en el gobierno local, dependiente del estado y parasitario respecto a los ciudadanos. Sus intereses propios no se definen en términos de clase —aunque participan en primera línea en la defensa del orden feudal—, sino como explotación de su parcela de poder. Pero se trata siempre de una explotación tutelada por la Corona y al servicio de los grupos privilegiados, no sólo urbanos.

Y sin embargo siguen existiendo rasgos netamente oligárquicos: la propia patrimonialización de los regimientos y las restricciones

de acceso que plantean por un lado el estatuto y por otro el precio de los oficios definen a un grupo situado en los estratos superiores de la jerarquía social y económica de Madrid. La práctica exclusión de cualquier criterio de capacidad individual a la hora del ingreso en el cuerpo capitular nos recuerda que los regidores salen de las filas del privilegio y la riqueza. Sólo un examen pormenorizado de su actuación en el ayuntamiento podrá iluminar el carácter y significación —social, económica, ideológica— del grupo de poder en el concejo madrileño del siglo XVIII.

Mauro HERNÁNDEZ BENÍTEZ
«EQUIPO MADRID» (U.A.M.)

TORMENTOS, APREMIOS, CARCELES Y PATIBULOS A FINALES DEL ANTIGUO REGIMEN

SUMARIO: 1. Introducción.—2. Sobre la abolición de la tortura.—3. Reforma de los establecimientos penitenciarios (datos y proyectos en torno a una amplia encuesta).—4. Sustitución de la pena de horca por la de garrote.—5. Algunas consideraciones finales.

INTRODUCCION

Todo lo relacionado con la aplicación de las penas o con el mundo de las cárceles ha tenido una animada publicística, enriquecida en los últimos años con análisis muy precisos o métodos de mayor alcance. Se ha pasado a veces —por referirnos a los aspectos menos elaborados— de un relato de curiosidades, más o menos atroces, a escribir obras de amplia repercusión doctrinal y de muy grata acogida por los medios de comunicación. El caso de Foucault —agigantada bibliográficamente su figura al morir— es bien representativo. Pero, como en tantos otros temas, si atendemos a nuestra materia de índole jurídica-institucional, queda mucho trabajo por hacer, especialmente al tomar en cuenta la masa de documentación aun no bien explorada.

Nuestro trabajo se basa en documentación de tal especie. Y en buena parte ha sido redactado con pretensiones deliberadamente descriptivas, bajo la idea de que cuando es muy rica, varia y expresiva la documentación, no viene mal exponer a la llana los datos o dejar hablar directamente a los textos antes de aventurarse en tareas de mayor nivel de abstracción. Y aún habría mucho que decir de una crítica un tanto pedante y bastante extendida por nuestros pagos hispánicos frente a lo que se ha venido en llamar descripción; pero este es otro tema.

Nuestra documentación se centra en dos grandes temas que en

la época van a lo postre unidos por decisión político-administrativa, a saber: la abolición de la tortura y la reforma de los establecimientos penitenciarios. Para lo primero se siguió lentamente, despaciosamente —sin que tantos implicados pudieran llegar a vislumbrar un final feliz— la conocida vía ejecutiva al cargo del Consejo de Castilla con consulta final al rey y una teoría previa de informes de diversos organismos y autoridades judiciales. Pero cuando por fin se alcanzó la deseada y definitiva abolición se entró —en el mismo real decreto de abolición con su correspondiente cédula— en el otro tema; y aquí la documentación se convirtió en un océano, procedente de los más diversos rincones de la Monarquía.

En efecto, antes de introducir reformas en los establecimientos penitenciarios se pensó contar con información suficiente. Y como las cárceles y demás institutos de reformatión se hallaban dispersos por toda la geografía, en ciudades, villas, lugares y lugarejos, hubo que recibir una ingente masa de papeles, y legajos, para luego devolverlos a su sede de origen, entre otras razones —nos atreveríamos a decir— por la propia dificultad de almacenar y ordenar tanto papel escrito. Afortunadamente con independencia de las devoluciones se hicieron resúmenes de las encuestas, que es el material sobre el que fundamentalmente hemos trabajado.

Junto a estos dos grandes temas, haremos aquí algunas puntualizaciones sobre la sustitución de un método de ejecución penal considerado muy duro y causante de afrentas —la horca— por otro tenido por más suave y presentable —el garrote—.

En cuanto a la época, no hay que extrañarse de que las reformas y los intentos de reforma —aunque tan lentamente— se hicieran en plena etapa absolutista. La crítica de los ilustrados y gente de bien frente a la dureza e ineficacia de los métodos de tortura o de ciertas fórmulas de reclusión había sido tan intensa e importante que el absolutismo más exacerbado hubo de ceder en este punto, antes de verse rebasado por los acontecimientos o los niveles de mentalidad, como hoy diríamos.

Finalmente, ante tal tipo de temas, no necesita de muchas explicaciones las menciones que hacemos a lo largo del trabajo a la administración de justicia, no sólo por las relaciones estrechas entre unos y otros campos, sino porque la propia documentación de la época aquí manejada queda inserta en una amplia concepción

de tal género de administración a través de múltiples referencias a lo que se entendía por una recta y pronta administración de justicia. Ni que decir tiene que hemos procurado en la medida de lo posible hacernos eco de esas referencias. Pasemos, pues, a desarrollar los temas.

2. SOBRE LA ABOLICION DE LA TORTURA

No ha sido desatendida por la investigación la última etapa de la tortura judicial hasta su abolicin, primero por las Cortes de Cádiz y luego por el propio Fernando VII, a su vuelta al poder¹. Podemos comprobar así la profunda crisis del sistema que cabía advertir ya en la implacable crítica de los ilustrados frente a los dolorosos e inhumanos medios de prueba ante los tribunales. Pero si el cuadro general sobre el particular es hoy por hoy conocido, quedan aún interesantes aspectos por destacar, sobre todo en lo tocante a la actitud adoptada por la Monarquía absoluta en punto a abolición. Una importante documentación inédita —como hemos apuntado ya— nos puede permitir en esta ocasión hilvanar ciertos datos o realizar algunas comprobaciones sobre el particular, según vamos a ver a continuación.

Ya en fechas tempranas se había planteado la cuestión de la dureza de medios de prueba empleados por los tribunales que resultaban incompatibles con los principios de humanidad, reforma e ilustración de los que tanto se hablaba. Fue así como un abogado de los reales Consejos, Jerónimo de Cubas, elevaría una representación —a lo que parece muy vehemente y razonada— en contra de los métodos utilizados en la cárcel de la Corte. Desgraciadamente el escrito del abogado madrileño no se conserva; pero sí la

1. Para todo lo relacionado con la tortura es fundamental el libro de F. TOMÁS VALIENTE, *La tortura en España*, Estudios históricos (Madrid, 1976). La documentación sobre la que basamos nuestra exposición se contiene fundamentalmente en el amplio expediente del AHN: «Expediente formado en virtud de Orden de Consejo en 6 de Marzo de 1798 . » (AHN, *Consejos*, leg. 3860) Citaremos el legajo por *Expediente sobre apremios*

respuesta al escrito por parte de la Sala de alcaldes de casa y corte².

La Sala de Alcaldes tuvo que pronunciarse en 1784 sobre el tema, con un informe del pleno de la sala a lo que parece no menos vehemente, y que viene a ser toda una defensa del sistema. Interesa reparar brevemente en el informe por representar la opinión de un alto tribunal, en buena parte distinta a lo que se suele decir en relación con la mentalidad de la época en punto a tortura.

La Sala de alcaldes se enfrenta críticamente al escrito del abogado Cubas al no ajustarse a la evolución histórica, que desde época romana, pasando por las Partidas, mantuvo estrecha continuidad, con diversos métodos de apremio, pero no en la forma dura y exorbitante, como quiere hacer ver el abogado Cubas³.

«Los apremios —dirá la Sala— no se ponen sino en las causas graves de muertes, asesinatos, parricidios, robos y crímenes de lesa magestad divina y humana. Siempre han de proceder signos probables del delito o por la naturaleza de la causa o por aserciones de testigos y no es posible verificarse las mortificaciones corporales de los reos antes de haber indicios.»

Reconoce la Sala que ciertos excesos pudieran cometerse, como en un caso citado por el propio abogado con las consiguientes exageraciones, pero ello no deja de ser sino una excepción a la regla

«Los apremios —seguirá diciendo la Sala— han producido saludables efectos para descubrir los verdaderos agresores en causas de el interés público y privado que sin este arbitrio permanecerían ocultos y los autores impugnes.»

Son rechazados asimismo algunos otros planteamientos de índole procesal, defendidos por el abogado abolicionista. Y por supuesto, tampoco convencen a la sala los argumentos de Jerónimo de Cubas basados en el derecho natural. El tormento ha sido y es de derecho natural, al ser admitido y practicado por tantos pueblos y naciones, «donde no se siguen las abstracciones filosóficas de los escritores peregrinos, y las novedades del autor de la representación, sino las

2. No se conoce directamente la representación del abogado; pero se pueden reconstruir sus líneas generales a través de la puntual respuesta de la Sala, a la que nos referimos a continuación.

3. El informe de la Sala de alcaldes lleva fecha de 27 de septiembre de 1786, en *Expediente sobre apremios*, fols. 9-12.

reglas que acomodan mejor a la sana administración de justicia enseñada por el uso y experiencia que domina en las facultades».

En cuanto a la forma de aplicar los tormentos, no corre peligro la vida de las personas. Y en caso de admitirse la propuesta de supresión del apasionado abogado «se destruiría el régimen de las cárceles, el orden de los sumarios y la justicia criminal».

Como puede comprobarse la Sala de alcaldes mantiene una postura poco flexible en relación con cualquier propuesta abolicionista. Ni en la teoría ni en la práctica cabe pensar en cambiar el sistema establecido. El sistema funciona a la perfección; y debe seguir funcionando, si no se quieren poner cortapisas a una recta, pronta y efecta administración de justicia.

En 1786, pues —a pesar de lo que se viene diciendo—, no hay duda de que en su modalidad de apremios existía la tortura en las cárceles del reino, como reconoce paladinamente uno de los más altos tribunales.

Pero no todo el mundo pensaba como los confiados alcaldes de casa y corte. La opinión pública iba tomando muy serias posiciones en pro de la abolición. Y el propio Consejo de Castilla —con planteamientos tradicionales en tantos aspectos— tuvo que mandar abrir un expediente a fin de conocer y valorar el sistema de apremios hasta entonces practicado. Para ello hubo que pedir información a la Sala de alcaldes, bajo la sospecha de posibles corrupelas en el sistema. Y en tal sentido el 6 de marzo de 1784 se dictó la siguiente carta orden:

«Dígase al señor gobernador de la Sala que habiendo entendido el Consejo que en las cárceles reales se valen los jueces de varias mortificaciones para estrechar los reos por vía de apremio a que declaren, quiere que la Sala la explique e informe con distinción y claridad y con la brevedad posible todos y cada uno de los apremios que se practican, el modo de su ejecución, con qué formalidades y por quien se dictan»⁴.

No debió gustar en la Sala la medida adoptada por el Consejo; se tardó en contestar; y hubo que expedir nuevos mandamientos. Al final la Sala envió al Consejo de Castilla un informe en un sentido ya muy distinto al emitido unos años antes, que ya hemos re-

4. El documento lleva fecha de 6 de marzo de 1798.

señado⁵. La Sala ahora se limitaría a facilitar puntual información sobre los métodos de apremio a la sazón utilizados, sin entrar apenas en valoraciones ni en enojosas y arriesgadas tomas de postura aunque procurando sobre la marcha excusar a sus miembros sobre cualquier tipo de excesos. La información que ofrece la Sala es de un gran interés para conocer la situación real por la que atravesaba en aquel momento la tortura, desde el ángulo de los apremios.

Según la Sala hay cuatro formas de practicar apremios por la Sala. El más común es el de los grillos, conocido también con el nombre de «salto de trucha»; el más duro y de más reciente creación es el de llave o prensa, consistente en oprimir intensamente con un aparato los dedos pulgares, hasta en ocasiones hacerlos sangrar. Se trata sin embargo, de un método que lleva en la cárcel de Corte algo más de dos años sin utilizarse y al que ni una sola vez han acudido los alcaldes de Corte existentes a la sazón. Y la Sala no sólo llegará a exculparse de cualquier tipo de responsabilidad en tal sentido, sino que terminará por recomendar su abolición.

En cuanto al procedimiento empleado, según la Sala, se suele practicar en la fase sumaria por orden del juez instructor —que a su arbitrio determina el método utilizado y la duración— encargándose de la ejecución material el alcaide o el llavero; y en caso de producirse alguna incidencia hay que pasar aviso inmediato al juez instructor que supervisa el desarrollo del procedimiento.

Ninguna crítica, pues, de la Sala frente al sistema general de apremios practicado, salvo en el caso de la llave o prensa, caracterizada por su especial crueldad y peligro para la integridad física de los procesados.

La representación de la Sala pasó a informe fiscal en el que se hace una especie de glosa a la representación con algunas nuevas puntualizaciones que ensombrecen el cuadro, como en lo referente al método de la «llave», a base de «sugetarle los dos pulgares con cierta argolla de yerro que se aprieta más o menos con un tornillo

5. Al no haber contestado la Sala a la carta orden del Concejo hubo que expedir un decreto de fecha 30 de abril de 1798. «Hágase recuerdo a la Sala por medio del señor gobernador de ella para que excute el informe que le está mandado en providencia de seis de Marzo y orden comunicada en su virtud con el siguiente día con la brevedad más posible».

hasta poderle hacer saltar la sangre de las yemas de los dedos, que por la sensibilidad extraordinaria de aquellas partes no puede ciertamente ser sin gravísimo dolor». O como en lo referente al amplio arbitrio del juzgador que puede llegar a dilatar el tiempo del tormento: «reos ha havido —se añadirá en el informe— que han estado apremiados a salto de trucha y con esposas ocho días, quince y aun hasta veinte días; no así con el apremio de la llave que sin duda no podrá llevarse por muchas oras sin grave riesgo, pues que a quantos reos se los ha puesto en él, han confesado sus delitos o ha sido forzoso levantársele».

Por lo demás el propio fiscal reconoce que se ejerce estrecha vigilancia por parte del órgano judicial para no sobrepasarse en la aplicación del denominado tormento de la llave. Pero a pesar de la mayor o menor vigilancia ha habido excesos: «algunos padeciendo en ella grabemente quedando estropeados en sus miembros, según los informes del cirujano de la cárcel»⁶.

Paralelamente el Consejo pediría informes al corregidor y a los dos tenientes puestos a sus órdenes. Aquí el panorama difiere notablemente. La postura de los tenientes es claramente abolicionista, con significativas coincidencias en sus escritos, como al indicar que no hay ley ni fundamento jurídico que permita la utilización de los tormentos, tal y como se practican. Por lo demás, uno de los tenientes apunta interesantes datos sobre la práctica de apremios en la cárcel de la villa.

Se trata de métodos de reciente utilización y de efectos muy perniciosos. Recuerda un caso en el que el encausado en caso de robo no sólo quedó, tras el tormento «imposibilitado, sino es que falleció en el hospital general, habiéndose verificado después su inculpabilidad»⁷.

6. El informe del fiscal —de fecha 18 de septiembre del 98— en *Expediente sobre apremios*, fols. 13-17.

7. Los informes de los tenientes del corregidor en *Expediente sobre apremios*, fols. 24-27. Resulta curioso señalar que el Consejo al pedir los informes recordó que ya lo había hecho con anterioridad. En su respuesta uno de los tenientes advierte que el informe había sido remitido en su momento; alguien procuró deshacerse del informe dado su tono crítico. En documentación posterior se dirá —a la manera de nuestros días— que el informe se había «tras-papelado».

El corregidor incluso llegará mucho más allá en su respuesta montando todo un discurso frente a la tortura, que pudiera pasar por un pequeño tratadito abolicionista al gusto de la época.

No es que sea original el informe, pero ofrece interés a la hora de calibrar la diversidad de opiniones y actitudes por parte de órganos oficiales en torno al tema que nos ocupa. El corregidor, profundamente afectado, se lamenta por la triste situación existente, con «tantos infelices que habrán sido víctimas de una arbitrariedad repugnante a la razón y a la humanidad». Y hasta las propias leyes, atentamente examinadas, están en contra de la utilización de premios y procedimientos de tortura. Se comprende que en semejante línea abolicionista se invoque el espíritu del siglo y la consiguiente ilustración. «La razón y la filosofía que ha entrado e ilustra el santuario de la justicia y ha hecho ver quan fatal y funesto puede ser a la humanidad el uso del tormento, lo han casi abolido».

Según el informado corregidor se trata asimismo de métodos de nueva invención por parte de unos ministros que «haciéndose legisladores arbitran el criterio de la verdad».

No faltan en el discurso del corregidor invocaciones a conocidos autores: un Farinacio y otros doctores, cuyos libros «aunque llenos de errores y de confusión formaron la práctica de nuestros tribunales adquiriendo sus decisiones fuerza de ley». Ni faltan tampoco duras críticas a la perniciosa influencia del Derecho romano en una línea bien conocida de la época. Pero sobre todo frente a la filosofía de las tinieblas, se trata de alcanzar el esplendor de las luces, conforme a los principios de humanidad y solidaridad.

Hay que enfrentarse decididamente a los siglos oscuros y a la nefasta influencia de la religión en los medios de prueba judiciales, con la utilización de todo tipo de ordalías y juicios de Dios, de carácter absurdo y peregrino. Y la propia filosofía viene a confirmar esta postura: «Parece que no hemos llegado a conocer —seguirá diciendo el corregidor— la naturaleza del hombre pues que aun se quiere dar relación entre el dolor y la verdad, a pesar de ser cosas eterogenia naturaleza, pues el dolor solo tiene relación con la voluntad y la verdad con el entendimiento. Què livertad pues podía haber para decir la verdad entre conbulsiones y dolores ni como se podrían impedir los efectos del fuego y agua irbiendo sin que interbiniera fraude.»

Tal viene a ser el tono del escrito del corregidor⁸. No hace falta apurar sus argumentos. La conclusión de todo el discurso es bien clara: Hay que abolir la tortura lo antes posible; y buscar otros métodos probatorios conforme a los nuevos dictados de la Filosofía y de la práctica penal más avanzada.

La documentación obtenida por la doble vía de la Sala de Alcaldes y del corregidor, con sus tenientes, pasaría a informe de los fiscales del Consejo, al objeto de ofrecer una síntesis sobre el tema y una propuesta conjunta de medidas a tomar. Por una parte los fiscales proponen la medida ecléctica de mantener tan sólo dos géneros de apremios en la cárcel de corte y villa: dobles grillos y peal. Sólo que en ambos casos hay que proceder con orden y medida, a tenor de lo dispuesto por las leyes. Y si se quiere dar una regla general al tema habrá que ampliar la información con la práctica seguida sobre apremios en las chancillerías de Valladolid y Granada⁹.

Hubo que esperar cerca de tres años a que el Consejo de Castilla se pronunciase sobre la propuesta del fiscal. Se trataba de un tema muy delicado y el Consejo debió de pensárselo mucho. Por fin el 5 de febrero de 1803 se dictó una orden, comunicada a la Sala y al corregidor que viene a recoger los puntos esenciales del informe de los fiscales. Sólo se mantendrían los dos procedimientos de apremio más suaves, al tiempo que se ampliaría la información a las dos Chancillerías para poder proponer medidas de carácter más general. He aquí el acuerdo del Consejo:

«Comuníquese la orden correspondiente a la Sala de Alcaldes de corte para que por ahora use solamente con los reos de los dos apremios de dobles grillos y peal, cesando absolutamente el uso de los demás que se conocen y de cualquier otro que pueda mortificarles más que los dos insinuados; decretando el apremio en el tiempo y forma que prescriben las leyes, dando cuenta antes de ejecutarlo a la Sala y poniéndolo también en noticia de los señores del Consejo el día que concurren en la semana a visitar las cárce-

8. Fechado el 26 de enero de 1799, el informe del corregidor puede verse en *Expediente sobre apremios*, fols. 28-38.

9. El informe de los fiscales —en Madrid a 22 de diciembre de 1800— en *Expediente sobre apremios*, fols. 40-41.

les. Hágase saver igualmente esta providencia al señor corregidor y tenientes para que se cumplan en la parte que les toca. Sin perjuicio de esto dígase a las chancillerías de Valladolid y Granada que informen sobre el particular lo que las ofrezca y parezca, manifestando con distinción y claridad todos y cada uno de los apremios que en ella se usan con los reos y el modo de su ejecución, con qué formalidades, en qué estado de la causa y por quien se decretan, con todo lo demás que estimasen conveniente para el mayor acierto encargando a dichos tribunales que practiquen el informe a la mayor brevedad y con preferencia a otro cualquiera negocio. Venidas que sean estas diligencias vuelva el expediente a los tres señores fiscales. Madrid cinco de Febrero de 1803»¹⁰.

Después de tanta expectación la abolición no resultaría completa. Se mantenían dos viejos métodos de apremio, aplicados convenientemente y bajo una estricta vigilancia de los tribunales. Sólo faltaban los informes de las Chancillerías para redondear el cuadro.

Los informes de las Chancillerías no tardarían en llegar. Contestaría primero Valladolid a través de la documentación elaborada por las dos Salas del crimen. Se trata de un informe fundamentalmente descriptivo sin apenas entrar en valoraciones ni en propuestas de abolición. Según el informe, el régimen de apremios utilizados ofrece analogías y diferencias con los de otras sedes. El denominado de «perrillos», recuerda el método de la llave, practicado en Madrid, aunque fuera aplicado con una menor dosis de dureza. Pero ya no se utilizaba al ser un «invento» de uno de los alcaldes coyunturalmente introducido en las cárceles vallisoletanas en un momento especialmente delicado cuando el número de delinquentes y su alto grado de peligrosidad así lo aconsejaban.

Se utilizaban en cambio métodos de apremio que son sólo una variante de los conocidos, como el poner doble juego de esposas o el tener sujetos con grillos por la noche a los presos.

Eran conocidos asimismo el cepo y el brete de los que se dirá: «ambos vienen a ser una misma cosa con la sola diferencia de que el cepo es de madera y se le entra en el reo los piés, pudiendo estar sentado o de pie; y el brete es de yerro, y teniendo el reo metido

10. *Expediente sobre apremios*, fol. 42. Se trata de un auto del Consejo. Sobre las órdenes y avisos correspondientes, *ibid.*, fols 44-46.

en él los pies solo puede estar sentado o hechado de espaldas, lo qual se hace por uno o dos días hasta evacuar la confesión»¹¹.

Por su parte la Chancillería de Valladolid enviaría un escrito complementario al informe elaborado por los alcaldes del crimen, con propuestas abolicionistas y una cierta justificación sobre el régimen utilizado de apremios. Las cárceles —según se opina desde el alto tribunal de Valladolid— están tan mal acondicionadas y faltas de seguridad que se hacen necesarios los apremios; las propias leyes de Partidas las justifican, siempre que se utilicen con moderación, pero el ideal es alcanzar una situación en la que no sea necesario ningún tipo de apremio.

«Sería, pues, conveniente en el concepto de este acuerdo que encargándose a las Salas del crimen y ministros de justicia estuviesen a la vista de que no se mortificase a los reos en las cárceles con otras prisiones que las precisas e indispensables para su seguridad se aboliese y desterrase enteramente de la práctica de nuestros tribunales el uso de los apremios y todo género de tortura subsistiendo en su lugar el de las simples confrontaciones cuando la contradicción está entre los testigos o el de las recombenciones judiciales, cuando está en sus mismas deposiciones»¹².

En cuanto a la Chancillería de Granada, al retrasarse los informes, el Consejo se vio precisado a recordar la obligación de remitir los informes a la mayor brevedad, aunque según parece la documentación estaba ya en camino. Se trataba de un breve informe en el que se reconoce asimismo la existencia de apremios, aunque aplicados con cierta suavidad: algún calabozo más estrecho o un par de grillos de más; todo ello bajo la mirada vigilante de la Sala¹³. Se comprende así que la propia Chancillería se adelantase a las posibles críticas abolicionistas, «porque la calidad de las mortificaciones, los derechos de la sociedad para descubrir los graves delinquentes, la experiencia de lo mucho que se suele adelantar y la benigna circunstancia con que procede la ponen a cubierto las

11. El informe de la Chancillería de Valladolid a través de las Salas del crimen, de 28 de agosto del 83, en fols. 50-53 del *Expediente* citado.

12. *Expediente sobre apremios*, fol. 54.

13. Fecha del informe de la Chancillería: 29 de febrero de 1804 (*Expediente sobre apremios*, fols. 59-60).

invectivas de cruel, de injusta y de inútil con que algunos escritores modernos la atacan desde el gabinete».

A la vista de la documentación recibida, el Consejo pidió informes a los fiscales (5 de mayo de 1804), que asimismo se tomaron algún tiempo en evacuarlos.

Los fiscales desde un primer momento tomaron postura ante el tormento. Tras concretar la falta de unanimidad de los organismos informantes —con posturas a favor y en contra de la abolición— se declaran decididos partidarios de la abolición; y ello por diversas razones, incluidas la de tipo humanitario. Se trata de infringir un sufrimiento inútil y hasta contraproducente. Con métodos que no esclarecen la verdad: sólo los más fuertes logran aguantar el sufrimiento; y los débiles —tantas veces— terminan por declararse culpables, sea o no cierta la acusación.

Los fiscales llegan a recordar el juicio de Salomón, en donde la verdad en un principio, resultaba trastocada (la verdadera madre, para salvar a su hijo, tuvo en principio que ocultar la verdad). Y a ello cabe añadir el testimonio de las leyes —y en concreto de las Partidas que se pronuncian por la sumariedad y moderación en el empleo de semejantes medios, en forma bien distinta a lo que en ocasiones se viene practicando.

Especial énfasis ponen los fiscales en la utilización de los calabozos a efectos probatorios, en unas condiciones que chocan con los más elementales principios de la humanidad e higiene.

En el sentir de los fiscales, los tormentos no sirven más que para aumentar el sufrimiento o trastocar la verdad. Como dirán al final de su informe en relación con semejantes medidas, «deven impedirse para evitar los fatales efectos que ha demostrado la experiencia»¹⁴.

Pero no bastó el informe de los fiscales para pronunciarse sobre el expediente. El Consejo quiso ampliar su información, a través de la opinión de las Audiencias, a la manera como lo habían hecho las Chancillerías (20 de septiembre de 1805). Pero hubo que volver a recordar al año siguiente a tres de las Audiencias que cumplieran el encargo (28 de julio de 1806); y como el tiempo pasaba y no se

14. El informe de los fiscales lleva fecha de 21 de agosto de 1804. Puede verse en nuestro apéndice.

obtenía respuesta, se volvió a reiterar la petición de informes por dos veces (28 de enero y 30 de julio).

Pero la documentación emanada de las Audiencias no se conserva en el expediente. Como en los casos anteriores, sólo se recogieron los avisos indicativos de haber recibido los acuerdos del Consejo de Castilla. A lo que cabe añadir un valioso testimonio del fiscal de Sevilla, en dura réplica a las maniobras de la Audiencia, que no quiso incorporar su escrito —claramente abolicionista y de denuncia de abusos— en contra de los planteamientos utilizados por la propia Audiencia en otras ocasiones.

Se conserva asimismo el informe de los fiscales del Consejo en base a la documentación emanada de las Audiencias; a través del cual se puede comprobar cómo en el ámbito de las Audiencias se hallaba también muy extendida la utilización de apremios¹⁵.

Tras el informe de los fiscales se tuvo que paralizar el expediente y no por razones técnicas o por añadir nuevas demoras a las ya existentes, sino por los trascendentales cambios políticos que se desarrollaron.

No es este momento de abrir un paréntesis para tratar el tema de la abolición a través de las Cortes de Cádiz, tras ponerse en juego todo un mundo de ideas de signo completamente distinto al aquí examinado, hasta el punto de que en la propia sesión de las Cortes dedicadas al tema de la abolición los oradores para no sentirse mancillados ni siquiera querían pronunciar las palabras tortura o tormento. Tras recordar los abusos cometidos a través de los apremios, se pasó directamente a la abolición.

A la vuelta de Fernando VII los trámites se aceleraron. En base a la documentación obrada unos años antes (y sin más informes y averiguaciones el Consejo redactó una consulta en la que se hace resumen de todo el expediente y se dan noticias sobre las diversas y contrapuestas posturas mantenidas en torno a los apremios —incluidas las de las Audiencias, cuya documentación no se conserva—. Tras ponderar en la consulta los principios de humanidad que habían llevado en algunas zonas, como en Cataluña, a desterrar todo tipo de apremios se formulará la opinión de la abolición radical y completa. Y es ahora, en base a algunas opiniones mantenidas

15. El informe de los fiscales es de 20 de febrero de 1808.

con anterioridad cuando explícitamente se señala la conveniencia de extender las reformas al sistema carcelario, tan estrechamente ligado al mundo de la tortura. El rey aceptaría la propuesta, no sin antes indicar que los fiscales del Consejo emitieran informes sobre el particular. Pero del informe de los fiscales trataremos en el apartado siguiente ¹⁶.

Fue así como se redactaría la real cédula de abolición de la tortura de 25 de julio de 1814, de la que no vamos a tratar aquí por haber sido en otras ocasiones ampliamente comentada y valorada. Digamos tan sólo que con esta cédula se inicia oficialmente el proyecto de reforma del sistema penitenciario, según vamos a ver a continuación ¹⁷.

3. REFORMA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

Como hemos tenido ocasión de advertir, un gran proyecto de reforma y acondicionamiento de las cárceles de todo el país se iba a desarrollar al finalizar el expediente de supresión de los apremios tal como se indica ya en la real cédula de 1814.

En el Consejo de Castilla se empezó muy pronto a trabajar en el proyecto de reforma del sistema penitenciario. Reunido el Consejo pleno, se acuerda cumplir la orden del rey y pasar el tema a informe de los fiscales. Pensaron los fiscales que lo más oportuno era iniciar un amplio proceso de recogida de datos a través de los altos organismos judiciales, antes de acometer las posibles medidas de reforma que habían de desplegarse, «tanto en lo físico como en lo espiritual» ¹⁸.

16. Fecha de la consulta: 2 de julio. El informe de los fiscales aparece fechado el 12 de noviembre.

17. En *Expediente sobre apremios*, 111-112. Se inserta la real cédula de 25 de julio de 1814.

18. La amplia documentación sobre la situación penitenciaria aparece recogida en varios expedientes del AHN, *Consejos*, leg. 3860. Baste esta referencia de tipo general al objeto de no sobrecargar las notas en lo que viene a continuación. El informe de los fiscales del Consejo lleva fecha de 12 de noviembre de 1814 (*Expediente sobre apremios*, 108-109). La bibliografía sobre cárceles es muy amplia. Como moderna orientación puede servir, Francisco

No se cumplieron las previsiones del fiscal en cuanto al tiempo y modo de hacer las remisiones de la documentación por parte de los altos tribunales —Chancillerías y Audiencias— requeridos al efecto. Era muy difícil poner en marcha todo el aparato dependiente de los altos tribunales para evacuar una especie de encuesta de tan amplias dimensiones. Audiencias y Chancillerías pidieron oportunamente la documentación necesaria a sus subordinados; pero hubo corregidores, gobernadores, alcaldes mayores o justicias —que tal fue en síntesis la teoría de autoridades que hicieron de informantes— que no pudieron enviar a tiempo los informes.

Y en algunos puntos hubo que recordarles su obligación de mandar las noticias requeridas a sus tribunales superiores. De esta forma fueron llegando las remisiones de documentación al Consejo de Castilla escalonadamente. Y hasta el año 1718 no se pudo dar por terminada en el Consejo la operación de recepción documental.

Era una masa impresionante de documentos —a pesar de las precauciones tomadas— que no guardaban orden ni relación entre sí. En base a la documentación original se hicieron relaciones más breves a modo de resumen del amplio caudal de datos junto a una sucinta valoración del tema por parte de los altos tribunales. Tras una primera valoración de tanto informe y documento, se acordó en el Consejo proceder a la devolución de los materiales originales a sus receptivos lugares de origen, guardando copia de lo redactado a modo de síntesis, que es el material fundamentalmente conservado hoy en el AHN y sobre el que venimos trabajando.

Aun descontando la documentación original —cuyo paradero tal vez algún día podrá localizarse— a través de las síntesis obradas al efecto se ofrece toda una amplitud de datos, de una riqueza inigualable, no sólo para la historia penitenciaria, o la propia administración de justicia, sino para otros muchos campos históricos, como puedan ser los de la propia historia social o la historia de las mentalidades. Son datos y más datos recogidos al pie del lugar, en la línea de la información pedida por el Consejo —aunque en

BUENO ARUS, *Historia del Derecho penitenciario español*, en *Lecciones de Derecho Penitenciario* (Alcalá de Henares, 1986), 9-29. (Bibliografía en págs. 27-29). Como síntesis de amplia divulgación puede consultarse el número monográfico de *Historia* 16, n.º 6, dedicado a las *Cárceles en España*

ocasiones sin ceñirse a los estrictos criterios marcados inicialmente— que resulten hoy por hoy difíciles de abarcar en una valoración de conjunto.

La información se suele verter en los informes, según los distritos puestos a cargo de cada uno de los altos tribunales. Y dentro de los distritos los datos se procuran recoger puntualmente lugar por lugar. A veces en los resúmenes propios faltan informes de pueblos o distritos; y los altos tribunales fijan su atención en los datos disponibles que suelen referirse a los lugares más importantes o de más alta demografía. Se trata, por tanto, de una información amplísima y de gran valor, aunque desigual.

Tal vez sería posible llegar a cierto tipo de tabulación, utilizando incluso ordenadores. A tal nivel de abundancia y pormenorización llega la serie de datos disponibles.

Aquí nos limitaremos a recoger algunos datos de conjunto, en ocasiones proyectados a través de sus correspondientes cuadros, y a ir destacando particularidades o aspectos dignos de recordación en punto a situación penitenciaria y administración de justicia, según el criterio marcado por la distribución de los propios altos tribunales. Para agrupar de algún modo los datos hemos diferenciado los territorios de las antiguas Corona de Castilla y Corona de Aragón. Madrid con un importante núcleo penitenciario tiene en muchos aspectos personalidad independiente; y así lo reflejamos en nuestro trabajo con un tratamiento independiente del tema.

Hay que advertir que los fiscales del Consejo de Castilla —como tendremos ocasión de comprobar con más detalle— a la vista de los datos recogidos, hicieron una oportuna valoración del tema, que se llegaría a publicar en edición restringida¹⁹. Con independencia de la apreciación, valoración y propuestas de los fiscales conviene recordar que en la parte central del escrito hicieron una interesante recogida de datos, al hilo de los resúmenes enviados por los altos tribunales, que puede servir a modo de amplia muestra de la situación penitenciaria del país. No podemos olvidar estos «resúmenes de resúmenes» de los fiscales a la hora de trazar aquí una aproximación al tema, por mucho que los fiscales aquí y allá

19. Algunos ejemplares de los publicados pueden verse cosidos o intercalados en los distintos expedientes de la amplia encuesta. La minuta manuscrita en *Expediente sobre apremios* (201-225).

cargen las tintas o ensombrezcan aun más el cuadro original trazado al pie del lugar.

Como vamos a ver a continuación, la situación penitenciaria del país era muy grave, aunque no a los extremos que quieren llegar los fiscales, movidos por una fina sensibilidad, sin duda encomiable, pero que pudo servir para radicalizar los planteamientos originales marcados desde cada uno de los distintos territorios. Los fiscales del Consejo procuraron, entre tanta casuística información, buscar una especie de denominador común que viene marcado por un radical pesimismo. En el mundo de las cárceles todo está muy mal, mírese por donde se mire. Y los datos, según los fiscales, no hacen más que comprobar semejante situación por la que atraviesan unos y otros lugares. Tal viene a ser el tono general marcado por los fiscales, que en ocasiones no se acomoda muy bien con los datos recogidos. Unos datos —insistimos— que ya fueron «filtrados» en la misma línea prevista desde los propios altos tribunales, al hacer previamente los extractos.

Y es que —con independencia de que más adelante volvamos sobre el tema— partir de la base de que cada lugar por pequeño y falto de medios que fuese, tuviera una cárcel convenientemente dotada, era una empresa —vista desde nuestra actual perspectiva— de muy difícil realización. Las cárceles con las que se contaba, por muchos defectos que presentasen, iban más allá de las posibilidades económicas y de planificación de la época. En un principio se partía de la base de que cualquier lugarejo pudiese contar con suficientes medios penitenciarios, bajo la idea de que la justicia —pronta y expedita— debía administrarse y ejecutarse al pie del lugar. No es extraño, por eso que según las relaciones sobre las que trabajamos, hubiese lugares que contaban con cárceles suficientes, pero que no albergaban ni un solo preso. Ambiciosa, inútil y costosa tarea en la que andaban metidos los hombres del Antiguo Régimen, sin posibilidades de futuro. Pero vayamos a los datos ofrecidos por las fuentes de información, comenzando por la Corona de Aragón.

Audiencia de Valencia

La situación de las cárceles de Valencia no es tan desesperada como dan a entender los informes fiscales. A través de la documentación enviada por la Audiencia se puede advertir que casi la mitad de los núcleos de población cuentan con cárceles en buenas condiciones. Con la particularidad de que muchas de estas cárceles no albergan preso. Hay otras cárceles que presentan deficiencias, ya sea de capacidad, higiene o salubridad. He aquí el cuadro que recoge el extracto:

Cárceles corrientes	199
Inseguras y que necesitan composición	..	211
Inútiles	55
Pueblos en donde no hay cárceles	47

En base a estos datos el fiscal de la Audiencia montó un informe en tono declamatorio y lleno de vehemencia sobre el triste destino de los presos, las condiciones miserables de su vida, la falta de expectativas y el grado de desesperación a que han llegado. Y para remediar la situación propone un proyecto de reforma a base de poner el acento en las cárceles de la capital y lugares de mayor población, con cárceles limpias e higiénicas, distribución de los presos en calabozos con la debida separación, trabajo digno, comida suficiente y trato adecuado, con el consiguiente control de los alcaydes —muy dados a los abusos— por parte de la administración de justicia. Por su parte la Audiencia, sin desautorizar el informe fiscal, por tratarse de temas puramente fácticos, se ciñe a los hechos, con la única propuesta de que la reforma a falta de medios deba centrarse en la capital y lugares de mayor población.

Audiencia de Aragón

El extracto del reino de Aragón es muy reducido, tanto en el número de páginas como en el de lugares que comprende la encuesta. La mayor parte de los lugares de corto vecindario quedan fuera del análisis pormenorizado, al no haber contestado suficiente número de lugares a las comunicaciones enviadas por la Audiencia de Zaragoza. Pero lo que resta, según el informe de la propia

Audiencia es suficiente para poder marcar algunas líneas generales.

Cárceles en buenas condiciones hay pocas. Sólo Zaragoza, Alcañiz y Calatayud cuentan con cárceles adecuadas. Existen capitales de provincias que presentan un estado deplorable de abandono o incluso de destrucción; la intervención francesa fue decisiva al respecto.

En el extracto y en el informe fiscal se pone el acento en la descripción de las cárceles de Zaragoza. Las de la corte —bajo la directa «protección de la Audiencia»— reunían aceptables condiciones. «En todas había seguridad, luz y ventilación en las prisiones, solidez en puertas, rejas y paredes ... tenían enfermería, capilla, sala de visita, y demás estancias útiles». Había también una importante dotación de personal: alcaide, médico, «cirujano», boticario, procurador de presos. Un llavero y dos sirvientes. Para sufragar los gastos se disponía de dotaciones conseguidas por diversas vías, entre las cuales las asociaciones de caridad. Peor situación presentaba la cárcel de la ciudad, muy castigada por los bombardeos franceses, con poca capacidad para el número de reclusos —unos 160—. «Pero estaban aseadas y limpias, porque el alcaide cuidaba de que los presos las barrieran dos o tres veces al día».

Zaragoza contaba también con una casa galera, la única «casa de reclusión de mujeres» existente en Aragón, con capacidad normal de ocupación de 90 a 100 reclusas, entre las que había que contar las procedentes de Navarra y Provincias Vascas. En la casa galera —deteriorada por los estragos franceses— había incluso «dos laboratorios», con sus tornos de hilar, dos dormitorios, con sus correspondientes camas y aderezos; «un comedor capaz de 100 personas con las demás oficinas correspondientes». Las condiciones de higiene y salubridad no eran despreciables: «que todas las viviendas tenían luces y ventilación, eran saludables y se cuidaba mucho del aseo y limpieza hasta de las presidiarias». Sólo fallaba la seguridad, a juzgar por las fugas de mujeres que se habían registrado.

El contraste con otras poblaciones es, pues, muy notorio. Y todo parece indicar que influyó en el tema la posición asumida por la Audiencia de Zaragoza en estrecho contacto con las cárceles de la capital.

En Alcañiz los edificios amenazan ruina y la insuficiente dotación de medios corría a cargo de los vecinos; en Benavarre hay

asimismo ruina y humedades. En Borja, con una cárcel muy extensa, había que realizar muchos gastos de acondicionamiento. En Huesca, con más de 160 presos al año, fallaban las «rentas para mantenerlas», y había que tomarlas de los propios presos o de los lugares de origen. Y así sucesivamente. Por lo general las cabeceras de partido solían presentar una media de unos diez presos por cárcel.

En cuanto a los lugares dependientes y de escasa población ascendían a 1.280, de los que se hace una mención genérica para destacar la ruina y falta de existencia de cárceles o el empleo de simples habitaciones para custodiar a los presos.

Las fiscalías de la Audiencia de Zaragoza aprovechó la ocasión para montar todo un discurso sobre política penitenciaria y administración de justicia, conforme a la máxima de que la cárcel no ha de ser «sepultura de vivientes sino custodia segura de delincuentes». Según los fiscales las cárceles habían de reducirse a las capitales de partido para poderlas dotar convenientemente, y la propia administración de justicia debía centralizarse a fin de «que sólo los alcaldes mayores de las capitales ejercieran la jurisdicción criminal, deviendo los de los pueblos comenzar las sumarias, prender los delincuentes, tomarles inmediatamente declaración instructiva o para inquirir o trasladar los presos a las cárceles de las capitales, considerándose en esta parte como jueces pedáneos». Pero ante semejantes proyectos innovadores de los fiscales, la Sala del crimen de la Audiencia presentó sus reparos —pasando de los principios a la práctica de cada día— en una línea mucho más tradicional.

Audiencia de Barcelona

La documentación sobre Cataluña, aunque breve, contiene detallada información en torno al Principado, en una línea que a veces va más allá de lo pedido al confeccionar la encuesta. A las noticias aportadas a modo de encuesta, cabe señalar los informes remitidos por algunos particulares y ayuntamientos, con propuestas de mejoras y hasta con proyectos concretos y planos sobre los edificios destinados a prisiones.

Hay aquí un contraste notable entre las capitales de partido y las poblaciones dependientes, por lo general, sin cárcel, o con

un simple «cepo» para custodia provisional de delincuentes. Precisamente esta situación permitió a los fiscales del Consejo hacer hincapié en la muy deficiente situación del Principado.

Pero los contrastes se advierten también entre importantes poblaciones; y en este sentido son bien notorias las diferencias que cabe establecer entre, por ejemplo, Barcelona y Gerona.

Barcelona cuenta con cárcel «segura, cómoda, capaz». Tiene rentas proporcionadas; no faltan limosnas. En cuanto a la comida de los presos: «el alimento diario es una sopa económica bastante substancial, y una libra de pan de buena calidad, que solo una vez al día se da a los presos». Hay una enfermería; y hasta una fundación para vestir a «los presos que lo necesiten».

En Gerona en cambio no hay ni siquiera cárcel, «pues existe inhabitable una horrorosa e inhumana». Para guarda de presos se utiliza un convento, «en donde pueden vivir [los presos], aunque con alguna incomodidad».

Otro rasgo importante del Principado —aparte de la destrucción causada por la guerra de la Independencia— es la influencia residual del régimen señorial, bajo cuya dependencia habían estado bastantes cárceles del Principado. Al ser suprimida la jurisdicción señorial —por el conocido decreto de 1811— los señores abandonaron el cuidado de los presos y se desentendieron de la reparación de los edificios. En algunos casos incluso no permitieron siquiera el paso a los edificios para evacuar la encuesta, al considerar las antiguas prisiones como propiedad individual. Sirva de ejemplo el partido de Monblach a través de la siguiente relación:

Civera: Tiene cárcel; es de señorío y se halla algo inutilizada.

Conesa: Hay una cárcel: es de señorío bastante segura, pero sin rentas.

Prades: «En esta villa hay dos cárceles de señorío: una grande y otra más pequeña, esta última más pequeña que la anterior». Tiene incluso carcelero, con su correspondiente salario.

Vallvano: Hay una cárcel de señorío en buena situación y bastante capaz; no tiene rentas ni dependientes.

En otras antiguas cárceles de señorío del mismo partido la situación es mucho más deficiente. En Lobella no se pudo obtener cumplida información: «tiene dos cárceles —dirá el informe— bastante seguras; son de señorío; pero a causa de no ejercer dicho señor

ninguna jurisdicción, parece no quiere su protector entregar las llaves de ellas, por cuya causa se queda este pueblo como si no tubiese cárcel alguna».

Audiencia de Mallorca

En cuanto a las Islas Baleares es bien significativo lo que dicen los fiscales del Consejo en su informe:

«Ni capacidad, ni ventilación, ni comodidad alguna se encuentra en la de Ibiza, según informa su gobernador; antes sí la supone húmeda y mal sana, considerando absolutamente necesaria la aplicación de otro edificio a este objeto, no ofreciendo tampoco ninguna ventaja en cuanto a su dotación. El de Mahón no hace descripción más favorable a la de esta capital, suponiéndola muy estrecha, incómoda, mal sana y segura, así bien que indotada y nada susceptible de mejoras, que serían tan costosas como su nueva construcción. Las demás de la isla son estancias, si no iguales, peores aunque las de Mahón, aunque no tan perjudiciales, por no ser más que depósitos provisionales, mientras que los reos se trasladan a la de la ciudad. La cárcel de Palma no se halla en tan mal estado, según informa la Real Audiencia, sin embargo de que también cree necesario hacer en ella nuevas distribuciones, para las cuales sin duda tenga el edificio la conveniente extensión, y más si hubiese de continuar sirviendo como en el día sirve de casa de corrección».

Pasemos a la Corona de Castilla, comenzando por la *Audiencia de Galicia*.

La situación de Galicia es bastante singular. Y no sólo por lo tocante a las cárceles donde predominan las notas negativas, sino por el complicado y dispar estado de la administración de justicia, —aunque resultaba muy difícil de constatar incluso para la propia Audiencia—. Era tal la multiplicidad de cotos, jurisdicciones, aldeas, feligresías, etc., de unas a otras provincias —La Coruña, Lugo, Orense, Tuy, Santiago, Betanzos y Mondoñedo— que los informes aquí se limitan a unas cuantas líneas generales y a la propuesta de interesantes y muy curiosos planes de reforma, inspirados en una línea bastante moderna.

No hace falta en este caso insistir en el estado de las cárceles, sin medios, como no sean las aportaciones de los eclesiásticos

—obispados de Santiago y Mondoñedo— algunos de los cuales se terminaron por perder, como la competente y considerable dotación en acciones del Banco Nacional de San Carlos; con edificios destruidos o «quemados por el vandalismo» y con muchos lugares, incluso importantes, que disponían sólo de simples casas vecinales para la custodia de presos.

Otro rasgo importante es el de la colaboración vecinal para la custodia de presos. Son los propios vecinos los que se encargan de semejantes funciones en detrimento de sus propios negocios. En Santiago se custodiaba a los presos por su propio vecindario «cuya onerosa ocupación —advertirá la Audiencia en su informe— ocasionaba los mayores daños y perjuicios a la industria y colonos del campo de los mismos pueblos». En Tuy, «los vecinos se veían comprometidos a una total ruina de sus bienes y familia por las fugas de los presos que les ponían a su cuidado y especialmente por las noches que rendidos de sus labores tenían que velar la seguridad de los presos». Y como la falta de seguridad de las cárceles era tan patente, había lugares —como el propio Tuy— donde se veían forzados «por falta de seguridad de las cárceles a ponerlos grillos cargándolos de cadenas, cepos y otras semejantes prisiones, haciéndoles sufrir una pena anticipada acaso mayor de la que merecían sus delitos».

Pero lo más curioso de los informes remitidos por la Audiencia de Galicia son los planteamientos reformistas de los fiscales, a los que hay que añadir los mantenidos por la propia Audiencia. Interesa reparar en el tema.

Piensan los fiscales, a la vista de los informes, y muy especialmente de «las infinitas jurisdicciones en que está dividido este dilatado Reino», y de la miseria y grado de protección existente, que lo mejor es articular un plan de radical reforma: una nueva planta en base a los principios y máximas reconocidos por las naciones cultas para evitar los males existentes, entre los cuales cabe señalar algunos que ya conocemos

f) «El azote sobre los naturales de tener que costear el alimento de los reos aprendidos en sus jurisdicciones conducidos y custodiados muchas veces en sus propias casas, traiedo estas gabelas no solo la ruina de sus casas y familias, sino el abandono de sus trabajos y labores del campo, en perjuicio de sus economías».

De lo cual se desprende otro mal de no menor gravedad: «qual es la fuga y escarcelamiento de los delincuentes, unas veces por la inconsistencia de las cárceles o casas erigidas en prisiones, otras por el disimulo de los labradores o artesanos, pensionados con custodiarles».

A lo que se añade las posibles represalias de los delincuentes, la incidencia de los destrozos franceses y la miseria económica, agravada por el corto rendimiento de las cosechas. Todos deben contribuir a la nueva planta penitenciaria sin escatimar esfuerzos, y el Estado debe ayudar con los mecanismos necesarios de índole económica y judicial. En Galicia se necesitan asimismo casas de corrección e incluso casas de amparo de niños expósitos. «En algunas naciones —se dirá en el informe— cultas de Europa se hallan de todos estos establecimientos modelos inestimables, y aun entre nuestras leyes se encuentran algunas que no han desatendido los mismos objetos».

En cuanto a las cárceles, los fiscales consideran que han sido «echas para la custodia de los reos, y no para su pena y castigo, como lo dicen la Ley de Partida y la de Estilo, no deben ser horrosas, sino cómodas, sanas y seguras».

Contribuía a aumentar la situación de abandono y falta de medios la abolición reciente del régimen señorial; al ser suprimidas las jurisdicciones quedaban convertidas muchas prisiones en propiedad particular, produciéndose un vacío de medios materiales y financieros —el sustento de los presos corría en buena parte antiguamente a cargo de la economía señorial— muy difícil de superar, por necesaria que fuera la abolición.

Pero fue sobre todo la Sala del Crimen de la Audiencia de Galicia la que llevó las nuevas teorías a su más cumplido desarrollo, como se advierte ya desde un principio en su informe al invocar «los principios más sublimes de la Economía y de la Política».

Hay en Galicia, según el informe, un conjunto de jurisdicciones —más de 800— al frente de las cuales existen personas carentes de una mínima preparación y como son escasas las ciudades es imposible pensar en la posibilidad de construir una cárcel por cada jurisdicción. Hay que hacer una nueva ordenación administrativa, racional, moderna; y proceder en conformidad en el ámbito penitenciario. Así «se purgaría el Reino de la pestífera polilla de tanto

juez inepto, perverso y desconocido a quien no es posible nunca hacer responsable de una mala administración».

Para las nuevas cárceles —que quedan reducidas en principio a las grandes capitales— «como para todas las demás de la provincia», piensa la Sala «en las ideas adoptadas por el ministerio y parlamento inglés»; y que en París dieron lugar también a un conocido proyecto; proyecto que, según la Sala, no es otro que el «Panóptico del célebre Bentham». Ante la cita de Bentham, podemos ver hacia dónde apuntan las ideas de la Sala.

Es cierto, según la Sala, que el proyecto en cuestión aun no se ha podido trasladar de la teoría a la realidad». Y no «pasa en verdad —reconocerá la Sala— de una mera teoría hasta el presente, pues que sin embargo de los decretos del Parlamento inglés no se ha adelantado un paso en su planificación, ni hay noticia de que se haya realizado en ninguna parte». Pero a lo que parece a los fiscales, en Galicia puede intentarse poner en marcha el proyecto, a base de establecimientos en donde los presos contribuyen a su subsistencia con su propio cuerpo en fábricas adaptadas a las particularidades de la zona. Eso sí, con unos directores nombrados al principio por el Gobierno, para luego poderse poner en marcha las ideas de Bentham con una decisiva participación de los «empresarios vajo la inspección del público, a quien deberían estar francas el domingo de cada semana y también podrían nombrarse por el gobierno anualmente visitadores celosos que las reconociesen detenida y escrupulosamente».

En cuanto a la situación de los presos hay que distinguir entre los preventivos y los rematados o condenados a pena corporal, a los que había que tratar mucho más estrictamente. Pero todos han de respirar «el ayre libre y de hacer ejercicio todos los días», como hombres acostumbrados, por lo general a vivir en el campo y sin ataduras.

Finalmente considera la Sala que el Estado ha de financiar los establecimientos penitenciarios, sin utilizar arbitrios ocasionales; «ojalá que no hubiera en todo el Reino un arbitrio o impuesto particular y que todos los gastos de administración pública en todos los ramos corriesen a cargo del gobierno».

Chancillería de Valladolid

Amplísima es la información conservada sobre el distrito de la Chancillería de Valladolid. A la enorme extensión territorial del distrito se añade la circunstancia de haberse conservado, al lado del tradicional extracto —en este caso muy breve— la propia documentación remitida por la Audiencia, a través de la cual queda reflejado puntualmente el estado no sólo de los grandes núcleos locales, sino de poblaciones de escasa entidad. Ante tanta información acumulada, fijaremos nuestra atención en algunos de los rasgos más característicos.

A la vista de la documentación, los fiscales del Consejo de Castilla hicieron un balance muy pesimista: de 1.285 lugares, sólo disponían de cárceles en buen estado, 167. Y lo peor era que muchas de las cárceles en malas condiciones correspondían a núcleos importantes.

Los contrastes surgían en la propia sede de la Chancillería. Valladolid contaba con tres importantes institutos penitenciarios: la cárcel de Corte, la cárcel de la ciudad y la casa galera. Mientras las dos primeras presentan defectos de espacio o dotación de medios, la casa galera formaba un conjunto mejorable, pero capaz y seguro.

Y esos contrastes se acentuaban si comparamos los más importantes núcleos habitados. Frente a la serie de defectos que cabe detectar en la mayoría, no faltan ejemplos de núcleos bien dotados penitencialmente —como Segovia—, con una cárcel muy capaz, «no sólo para los presos de la ciudad, sino para todos los del partido, que tiene todas las oficinas y mansiones necesarias cuales son: patio, capilla, sala de presentados, de Audiencias, calabozos, más o menos rugorosos, buena fuente, enfermería, avitación para el alcayde». Las condiciones de higiene y salubridad resultan asimismo favorables y se dispone de fondos para atender a remuneración del alcayde y para la alimentación de los presos²⁰.

20. Por su curiosidad recogemos los siguientes datos sobre la dieta: «medio pan quartel y una comida caliente al día de garbanzos y tocino o alubias con alguna verdura».

Algunas poblaciones sufrieron los estragos de la guerra con los franceses, como sucede con el Espinar «por donde pasan las cadenas de presos». Y la contraposición existe entre los núcleos de mayor y menor población²¹.

Audiencia de Extremadura

Extremadura contaba con 14 cabeceras de partido en las que solía haber cárceles de distintas dimensiones: La mayor concentración —alrededor de 100 presos— se daba en Badajoz y Mérida; la mitad aproximadamente se registraba en poblaciones como Cáceres y Plasencia. Y el resto de cárceles albergaban escasa población reclusa, de seis a doce presos por población.

Había un sistema específico de dotación de las cárceles, con sistemas originales de financiación, como en Trujillo, donde corrían con los gastos los «ganaderos de cerda».

En cuanto al estado de las cárceles era, como en tantas otras ocasiones, muy desigual: Frente a la por lo general admisible situación de los núcleos de población más importantes, los lugares de escasa densidad presentaban muy notorias deficiencias, acentuadas por los estragos de la reciente guerra de la Independencia.

En base a los datos facilitados por corregidores, alcaldes mayores y justicias, la Audiencia de Extremadura montaría todo un

21. Hay asimismo pequeños lugares del distrito que cuenta con suficientes medios penitenciarios. Así, por ejemplo:

Real Encartación de Cruño:

«La justicia de esta encartación dice que la cárcel tiene dos mansiones, que son seguras y sanas, sin necesidad de reparos»

Abelgas:

«La justicia de la villa dice que la cárcel tiene una sola mansión para los presos que es suficiente y bastante segura y sana».

Algo parecido sucede en Castro Palame y Posada del Río. Pero en otros muchos lugares se indica que no hay cárceles ni fondos o arbitrios para su dotación. Y hay muchas ocasiones en que se ponderan los problemas existentes, especialmente de falta de seguridad, como sucede en Villacastín, importante cruce de caminos, donde los presos fácilmente se escapan

Los datos remitidos por la Chancillería fueron resumidos y valorados en sentido muy negativo por la Sala del Crimen de la Chancillería, lo que facilitaría la labor de los fiscales del Consejo, proclives, como venimos diciendo, a acentuar las notas negativas.

discurso de signo reformista en el que advierte la situación en extremo negativa: sufren los presos continuas mortificaciones, hasta el extremo de tenerse noticia de haberse producido muertes de reclusos por falta de cuidados o de asistencia; y no es más halagüeña la situación de sus cuidadores, dadas «las frecuentes estafas de los alcaides, necesitados y ambrientos que por el interés facilitaban las fugas». Y la Audiencia para ensombrecer más el cuadro, ni siquiera llega a fiarse de la información recibida, hasta el extremo de buscar contradicciones o errores entre el caudal de datos aportados ²².

Chancillería de Granada

En Granada a consecuencia de las órdenes del Consejo para realizar la encuesta, se recibieron 39 informes de autoridades intermedias situadas al frente de partidos —corregidores, alcaldes mayores y justicias— correspondientes a 551 pueblos del distrito a lo que hubo que añadir los informes de otros 12 pueblos que resultaron incompletos al no haber sido suministradas las correspondientes noticias a los lugares cabeceras de partido una información en conjunto bastante completa aunque muy desigual, al ser «por distinto método y orden las diligencias que cada uno practico para evacuar su informe». Ante tanta variedad «causante de no poca confusión» la chancillería se limitó a poner por orden alfabético la información, a modo de resumen, y a suministrar algunos datos de tipo general.

La situación de las cárceles del distrito era desigual. Había capitales de partidos con cárceles muy bien dotadas al lado de otras que estaban destruidas en mal estado de conservación.

La capacidad de las cárceles variaba de unos casos a otros. Muchas cabeceras de partido contaban con cárceles que albergaban una media de seis a doce presos. Otras cárceles tenían mayor capacidad: Almería con 180 presos y una cárcel con «solidez, capacidad y seguridad»; Córdoba con una cárcel muy bien dotada donde se

22. Como sucede con la información tocante a Villanueva de la Serena: «Parece que desconoce su verdadera situación; pues sin embargo de confesar que algunos de los calabozos no tienen ventilación alguna, la supone salubre, al mismo tiempo que la considera capaz para el corto número de sus presos ordinarios».

solían mantener unos 100 presos; un número parecido de presos se asignaba en los informes como media de Granada. Había otras cárceles de dimensiones intermedias con capacidad para unos 50 presos; Málaga o Murcia en cambio tenían cárceles muy reducidas para la media de su población reclusa.

En cuanto a la dotación variaba de unos a otros casos. En Almería había una fundación particular que entregaba algún dinero; en la Carolina con una cárcel muy segura y en buen estado de conservación, se pagaban los gastos a costa de la real hacienda; y en Málaga había mejor dotación, al contar con un «vínculo» de un vecino de Ubeda que corría con los gastos de mantenimiento. Por su parte Villanueva de los Infantes por insuficiente que fuera su cárcel no tenía problemas de dotación, al utilizar el «fondo cuantioso de pastos».

Contrastaban con las cárceles de los partidos las de las poblaciones dependientes que o carecían de cárceles o utilizaban simples habitaciones para la guarda de los presos. Y en muchas ocasiones carecían incluso de cárcel por mantener las poblaciones sólo la jurisdicción pedánea.

Como se ve la situación no era tan alarmante: buenas cárceles por lo general en las cabezas de partidos y desigualdad o falta de medios de las poblaciones pequeñas.

Pero la Chancillería y luego los fiscales del Consejo acentuarían los defectos, la vista puesta en los lugares de escasa población. Desde el plano institucional interesa destacar la participación vecinal en el nombramiento de alcaides que unas veces eran cargos reservados a los propios particulares con carácter provisional y en otras ocasiones se nombraban alcaides perpetuos.

Finalmente la Chancillería ponderará la necesidad de dedicar los presos al trabajo con las ventajas que ello reportaba para «que despertasen en su corazón las olvidadas máximas de la moral cristiana e inspirándoles respeto a las leyes sufocasen los principios de corrupción que por desgracia se hubieren apoderado de su alma».

Audiencia de Sevilla

La cárcel de Sevilla, famosa por tantos conceptos, fue objeto de minuciosa inspección por parte de los delegados de la Audiencia. Había en ella notables contrastes entre unas y otras dependencias. Las de mayor capacidad presentaban defectos muy notorios; mientras ciertos calabozos «eran ventilados y buenos y apenas había una cárcel donde con más comodidad estuvieran los reos incomunicados».

Al frente de la cárcel había un teniente de alcayde, que servía el oficio «sin percibir renat ni sueldo alguno», pagando una cantidad al alcayde propietario, Duque de Medinasidonia. Se comprenden las consecuencias que se habían de derivar de semejante situación: el dinero, al final, por una u otra vía, había que sacarlo de los propios presos, «para que se mantuviese el alcayde recompensándole de su trabajo penoso». Se producía así una cierta jerarquización de los presos en función de las aportaciones económicas. Había presos que ocupaban los lugares más cómodos y acondicionados —«habitaciones de preferencia»— a cambio de aportar sumas que en su situación resultaban elevadas; por debajo quedaban los de menores posibilidades económicas; y, en la escala inferior, se situaban los numerosos presos carentes de recursos. Aquello era como una empresa, en la que había que calcular ingresos y gastos, según fórmulas tan atípicas como aleatorias. La corrupción se advertía a cada paso, como señala el informe de la Audiencia: muchos alcaydes, «venían a ser unos tiranos de los reos, sin haber más ley que su voluntad, llenándolos de prisiones, que no se desterraban sino a fuerza de dádivas. En todas inmediateamente que entraba un reo, aunque fuere de levísimo delito, era conducido al sitio donde se ponían los grillos y de allí no salía sin ellos a no dar cierta cantidad que cada alcayde establecía, y los mozos que hacían esta operación la volvían más horrorosa, pues cuando calculaban por el vestido del reo que podía pagar los grillos y no quería, le presentaban los más grandes y pesados, a cuya vista se estremecía y buscaba recursos para librarse de molestia tan grande»... Que asimismo las amplitudes, condescendencias y consideraciones se concedían solamente derramando dinero de suerte que cuando un

reo sale absuelto o condenado había consumido la mayor parte de sus bienes en hacerse más tolerable la prisión».

Mucho había que reformar en la cárcel sevillana. La Audiencia haría propuestas de reforma, no sólo en el ámbito material, sino en lo tocante a la organización, con el establecimiento de una precisa reglamentación, sometimiento de los alcaydes y una mayor intervención de la autoridad judicial en la vida penitenciaria.

Audiencia de Canarias

Los informes de Canarias se dilatarán y no pudieron incorporarse a los resúmenes de los fiscales publicados por el Consejo de Castilla. La distancia y la falta de recursos explican la situación. Una situación que no puede ser más deficiente. Y no sólo en el ámbito penitenciario, sino en todo lo tocante a la administración de justicia. No hay apenas cárceles en las islas, y las pocas existentes carecen de las condiciones y grado de dotación necesarios. Sólo Tenerife cuenta con medios suficientes para poder pensar en construir una cárcel —cuyo plano se adjunta al informe de la Audiencia.

Pero es que además la administración de justicia en su conjunto es lenta, ineficaz y sin las suficientes garantías, por descansar en buena parte en personas iletradas. En la isla de Gran Canaria «no hay mas jueces que un corregidor político y un alcalde mayor...». Un territorio escabroso y de 55.000 almas es acreedor a que se le den, no jueces nominales, sino efectivos y verdaderos». Pero aun es peor la situación de otras islas. «Las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gomera y Hierro, amás de carecer de abogados no tiene ninguna de ellas jueces que sea letrado; todas sus causas criminales se desprecian y eternizan; y a todo ello hay que añadir la pobreza de la población, que apenas subsiste con lo mínimo necesario, y no se puede poner remedio a la situación desde las islas, sin contar con la ayuda necesaria del gobierno de la Nación.

MADRID Y SU ENTORNO

Sobre las cárceles de Madrid y su entorno —al cuidado de la Sala de alcaldes de casa y corte— se dispone sólo de información directa, al haberse retrasado la recogida de datos, sin poder pasar la documentación a informe de los fiscales del Consejo, como en

otras ocasiones. Por la misma razón tampoco disponemos del puntual extracto de los fiscales que facilita la valoración y más fácil manejo de los datos disponibles.

Entre los establecimientos penitenciarios situados en la capital tiene decisiva importancia la denominada cárcel de corte. No es éste el momento de insistir sobre el tema, al tratar de ceñirnos al tipo de documentación que venimos manejando.

Los informes evacuados por la Sala de Alcaldes llegaron al Consejo en 1819. Hubo por esto que recordar la obligación que tenían los organismos competentes de despachar los datos que se indican en la encuesta. En contrapartida el tipo de información recogida presenta rasgos peculiares y de gran interés, según veremos a continuación.

Primero se elaboró un informe sobre la situación de los edificios y sus posibilidades de remodelación. Se trata de un detallado informe de tipo descriptivo, planta por planta, en el que se van anotando las particularidades técnicas del edificio y los fallos advertidos en punto a seguridad, estado de conservación y salubridad. Y a esta descripción general —en la que se advierten luces y sombras— acompaña una valoración global sobre la situación de muy marcado carácter crítico. Con independencia del anterior informe, se hizo un pormenorizado análisis de la prisión desde el ángulo del personal disponible.

Acompañan a la información cuadros sobre sueldos y propinas de los dependientes, relación de ingresos y gastos entre los años —1804-1808— y número aproximado de presos, según los años y las autoridades que habían realizado las remisiones de los presos. Con toda esta información se pueden trazar algunas líneas generales sobre el particular.

La cárcel albergaba alrededor de 2.000 presos al año. Y frente a tan amplio número, los encargados directos de velar por la seguridad eran muy escasos, con el alcaide al frente. El peso principal de la vigilancia estaba a cargo de tres porteros que se tenían que turnar para poder tomarse un descanso. había también otro portero que estaba encargado de cuidar de una gran puerta de separación de las dos divisorias del edificio y poder vigilar que los presos al franquear la puerta no llevaran objetos peligrosos ni levantasen sospechas. Al cuidado de las llaves había un encargado (llavero).

Los salarios eran escasos. Se necesitaba un personal colaborador para muy diversos menesteres, desde llevar los mensajes de los presos o repartir la comida, hasta transportar los cubos de agua y hacer la limpieza. Gran parte de estas operaciones corrían a cargo de un personal sin dotación o con una dotación proveniente de las aportaciones de los propios presos. Juzguese —como indica el alcaide— la serie de irregularidades y corruptelas a que se prestaba el sistema. Existía, por ejemplo, una «mandadera de mujeres», que al cumplir gratis sus funciones, había cobrado tal grado de independencia y de predicamento en la cárcel, que el alcaide se veía impotente a la hora de controlarla. Y si a ello se añade que alguno de los cargos de menos relieve eran ocupados por los propios presos, se comprende el difícil estado por el que atravesaba la cárcel de la corte en punto a personal.

En lo que se refiere a la cárcel de la villa, puesta al cuidado del Concejo de Madrid, la información facilitada por el corregidor se atiene a los mismos criterios, tanto en lo referente a las edificaciones como en el plano de la organización.

En cuanto a la circunscripción de Madrid, hay una gran variedad, desde poblaciones como Fuensalida, sin graves problemas, hasta lugares que carecen de la mínima infraestructura penitenciaria. Pero, por lo general, los presos son escasos y las sanciones impuestas, de poca relevancia. Sin duda la proximidad de la Corte aligeraba los problemas penitenciarios de la circunscripción madrileña. Pero de todos estos y otros temas en torno a Madrid nos ocupamos más ampliamente en otra ocasión ²³.

Tras haber expuesto a grandes rasgos la situación penitenciaria por la que atravesaba el país, volvamos a la actuación del Consejo de Castilla. Ya hemos señalado que los fiscales elevaron un amplio informe que fue mandado publicar por el Consejo, en el que se resumían los datos y se hacía un balance negativo de la situación.

23. En varios lugares se indica que no hay presos. Y cuando los hubo, eran de escasa entidad, como en Perales de Tajuña: «quando más se han solido juntar de ocho a diez complicados por denuncia de daños en el campo, quimeras y cosas lebes».

Para un más amplio conocimiento de la situación penitenciaria de Madrid en esta época puede verse nuestro trabajo *Situación penitenciaria de Madrid y su entorno a fines del Antiguo Régimen*, en *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos del Ayuntamiento de Madrid*. (En prensa).

Paralelamente proponían los fiscales un esquema de posibles medidas de reforma que en síntesis venían a consistir en lo siguiente:

— Reducción y potenciación de las cárceles a las sedes de tribunales y cabezas de partido conservando el resto de los establecimientos un carácter meramente residual.

— Formación de Juntas provinciales que vigilen y fomenten todo lo relacionado con una adecuada política penitenciaria.

— Realización de obras de nueva planta o de acondicionamiento de acuerdo con unos planteamientos generales, bajo la supervisión del Consejo de Castilla.

— Señalización de los fondos necesarios para cubrir los gastos según una graduación que va de los gastos de justicia a los sobrantes de propios y a una buena parte del producto de expolios, vacantes y del fondo pío benéfico.

— Contribución especial sobre espectáculos y diversiones públicas para atender las necesidades de las cárceles.

— Búsqueda de otros medios en caso de necesidad, con una flexibilización en cuanto a su gestión.

— Fomento de la caridad y de las asociaciones con fines benéficos, con particular atención a las denominadas asociación del buen Pastor, «destinada al alivio y consuelo de los pobres encarcelados», y que es declarada obligatoria en el ámbito provincial; junto a unas «asociaciones de señoras», para análogos fines en el ámbito femenino.

— Fomento del trabajo en las cárceles.

— Potenciación de los establecimientos penitenciarios en las cabezas de partido según el modelo oportunamente adaptado que hemos visto para las «capitales» de provincia.

— Establecer y aplicar normas sobre policía, limpieza y buen trato en las cárceles.

Para confeccionar este programa tuvieron los fiscales muy presente la normativa tradicional, tratando de aplicar disposiciones que estaban olvidadas o no se cumplían, como se advierte con sólo reparar en la profusión de citas de la Novísima Recopilación. No se trataba, por tanto, de introducir bruscas reformas, sino de poner en práctica lo que las sabias leyes del pasado habían dispuesto, sin encontrar cumplida ejecución. No hubo necesidad de acudir a los modernos autores —algunos de los cuales habían inspirado a

los ilustrados redactores de los informes enviados al Consejo—, sin duda bajo la idea de que muchas de las pretendidas innovaciones venían de atrás, por más que no hubieran encontrado la oportuna aplicación.

No hace falta decir que el amplio y cuidado informe fiscal fue bien acogido en el Consejo de Castilla, como se demuestra con sólo cotejar dicho informe con la consulta dimanada del Consejo, que sigue puntualmente las líneas maestras del informe, especialmente en lo que se refiere a la propuesta de medidas²⁴. Pero no quedaba mucho tiempo para poner en práctica la política de reformas —la consulta es de fines de 1818— sobre todo si se tiene en cuenta el lento laborar de los órganos de la Monarquía. Y eso sin contar los deliberados retrasos que ciertos órganos o individuos procuraran fomentar. Los cambios políticos que se avecinaban llevarían la política de reformas por otros derroteros.

4. SUSTITUCION DE LA PENA DE HORCA POR LA DE GARROTE

No hubo que esperar a la reinstauración del Régimen constitucional para que se produjese la ansiada abolición de la pena de horca. La fecha elegida para llevar adelante la medida fue la de 1832 (y no 1828, como se ha venido diciendo) a través de un decreto inserto en una real cédula al modo practicado en el Antiguo Régimen²⁵. Conocemos el proceso de elaboración de ambas disposiciones, por documentación de archivo, de la que vamos hacer uso a continuación.

El punto inicial de la reforma es bien curioso, con independencia de los aspectos un tanto anecdóticos que puedan detectarse

24. La consulta del Consejo lleva fecha de 13 de octubre de 1818 (puede verse en *Expediente sobre apremios*, 227-228).

En los folios siguientes se inserta documentación sobre efímeras medidas de puesta en práctica de la consulta.

25. Véase por ejemplo la reciente síntesis de C. GARCÍA VALDÉS, *Teoría de la pena* (Madrid, 1985), 44, que describe la parte dispositiva de la norma fechando el decreto a «24 de abril de 1828 y Real Cédula del día 28 de idéntico mes y año»

en el tema. El 15 de junio de 1828 había tenido lugar en Madrid una pública ejecución de ocho delincuentes. Entre los asistentes había dos sacerdotes que se sintieron profundamente afectados por tan macabro espectáculo. Y acto seguido elevaron una vehemente instancia al rey pidiendo la sustitución de la pena de horca por otra más suave y humanitaria, como pudiera ser la del garrote²⁶.

Conviene reparar en los argumentos empleados en el escrito de los sacerdotes, que apuntan a una doble vertiente: «El suplicio de horca, señor —dirán los sacerdotes—, es a la verdad ultrajante a la humanidad y poco decoroso a la casta modestia de nuestra sacrosanta religión».

Resulta ultrajante al ser el hombre imagen de Dios, expuesto al público «colgado de un palo como un gajo de uvas»; tras haber sido directamente ajusticiado por mano de un verdugo, con una terrible agonía que parecía no tener fin. Y en cuanto a la forma concreta de ejecución —entrelazada la cabeza del reo entre las piernas del verdugo— va en contra de los dictados de la propia religión.

Frente a métodos tan tortuosos y carentes de los mínimos principios, los eclesiásticos se inclinarán por un procedimiento de ejecución más adecuado: el garrote. Bien curiosa resulta asimismo la argumentación que emplean, de marcado carácter estamental:

«El suplicio del garrote que conocemos es el más a propósito y que aventaja a los de todas las naciones en la prontitud de su ejecución y de la imponente perspectiva que presenta al pueblo. Si el delito no debe borrar las gerarquías pudiera V.M. establecer o que el plebeyo lo sufriera de pie y el noble sentado, o que ambos estuvieran sentados y a este se le pusiese esta u otra insignia».

No sabemos si el escrito de los eclesiásticos turbaría el ánimo —de por sí tan poco sensible— del monarca. Lo cierto es que a los cuatro días Calomarde envió una comunicación al Consejo de Castilla, de orden del rey, a fin de elevar consultas sobre el particular. Como en otras ocasiones, en el Consejo se pasó la documentación con los antecedentes a informe fiscal²⁷.

El fiscal, en vista de los antecedentes —a los que hicimos referencia— pensó en la conveniencia de plantear la consulta según los

26. La documentación sobre el particular en AHN Consejo, Leg. 3885-1.

27. Acuerdo de la sala de gobierno del Consejo de 27 de junio.

términos de una antigua consulta sobre el particular de 1816; consulta que aunque no fuera cumplidamente formalizada aún sería recordada por algunos miembros del propio Consejo. Pero la Sala de gobierno del Consejo acordó pasar el expediente a nuevo informe fiscal, para luego dar cuenta de todo lo obrado al pleno del Consejo²⁸.

En este segundo informe fiscal se mantendrá la idea de que seguían teniendo valor los planteamientos expuestos en la consulta anterior de 1816. Y muy especialmente el dictamen de los fiscales emitido al elaborar la consulta. Sin que pudiera faltar la intervención de un órgano tan especializado y capaz como la Junta creada para la formación del Código Criminal, a la que habrá que remitir toda la documentación elaborada al efecto²⁹.

El Consejo de Castilla en sesión plenaria —5 febrero 1830— acordó elevar consulta al rey, siguiendo las pautas del segundo informe fiscal. Y el rey se conformó con la consulta, según advertirá Calomarde en una comunicación enviada al decano del Consejo de Castilla³⁰. A continuación la documentación fue enviada a la Junta; pero aun hubo que esperar dos años a que se abriera nuevo expediente en el Consejo de Castilla para redactar la Real Cédula de abolición de 28 de abril de 1832.

No vamos a detenernos en el proceso de formación de este expediente que se ajusta en todo a los estilos practicados en el Consejo. El Real decreto sería elaborado en el Ministerio —Secretaría de Gracia y Justicia— y el Consejo se encargará sólo de redactar la minuta de la Real Cédula y de cuidar de su impresión y posterior circulación a los tribunales y organismos situados bajo su dependencia. En cuanto al contenido de la disposición, es suficientemente conocido como para no entrar ahora en su análisis³¹.

28. En Acuerdo de la sala es del 7 de agosto de 1829.

29. Informe fiscal con fecha 3 de noviembre de 1829.

30. La consulta lleva fecha de 17 de febrero de 1830 y la Comunicación de Calomarde: 28 de marzo de 1830.

31. Véase sobre el particular el breve resumen de GARCÍA VALDÉS, *Teoría de la pena*, 44.

5. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

Hemos llegado al final de nuestro minucioso y casuístico recorrido, y no quisiéramos terminar sin antes hacer aquí algunas observaciones que nos han ido surgiendo al hilo de los documentos y hemos dejado para el final por no introducir cortes en la narración. No se trata de montar ahora todo un discurso, en materia muy dada a discursar, sino como decimos, de recoger algunas observaciones de conjunto —insistimos en lo de algunas— o al margen del orden cronológico que hemos procurado respetar. Creemos que la documentación manejada es suficientemente importante como para contentarnos con darla a conocer en la forma sumaria aquí seguida. Nuevos y renovadores trabajos podrán emprenderse cuando se apuren más y mejor los datos aquí esbozados; que la riqueza del material y el interés de los temas se lo merecen.

Por de pronto, hemos tenido ocasión de ver la reacción de la Monarquía absoluta en sus postrimerías ante unos problemas enormemente conflictivos y que, por decirlo en imágenes, podían irse de las manos. Al tema del tormento y de las prisiones había que darle una solución antes de que fuera demasiado tarde. Y fue así como se puso en marcha la lentísima maquinaria de los altos tribunales de la Monarquía con el Consejo de Castilla al frente.

Era una forma de operar que se concebía como garantía de justicia y precisión en las medidas tomadas. Cuanto más ajustada información, tanto mejor a la hora de buscar soluciones. Sólo que, desde la apertura al cierre de los expedientes, media larga distancia, sin tener en cuenta el desgaste personal y el sufrimiento de tantos infelices: En el caso de la tortura —o de los apremios, simples variantes de la tortura como luego veremos, más de cuarenta largos años. Y eso que el intermedio de las Cortes de Cádiz serviría sin duda como punto de referencia para acelerar los trámites. Y en cuanto a la reforma de los establecimientos penitenciarios todo se quedó en un simple proyecto tras mover montañas de papeles.

Obsérvese también que los expedientes no se inician de oficio sino a instancia de parte, denunciando abusos o corrupción en el sistema. Y en el caso de las cárceles aunque la reforma peniten-

ciaria fue iniciada a impulsos del propio Consejo de Castilla, venía propiciada por el largo expediente sobre la supresión de apremios.

Ha quedado claro que en tan avanzadas fechas se seguían practicando apremios. Y no sólo en el tribunal al que hacía referencia la denuncia —la sala de alcaldes—, sino en la mayor parte de los tribunales que fueron consultados, ya fueran Chancillerías o Audiencias. Y aunque los defensores del sistema señalasen que se practicaban los apremios conforme a las reglas —tras mediar indicios suficientes, con moderación y bajo vigilancia del tribunal o juez— lo cierto es que no pudo evitarse algún fallecimiento a resultas de su aplicación. Llevaban, pues, razón las Cortes de Cádiz al denunciar la perduración y peligrosidad de semejantes prácticas de atormentar procesados. Y el nombre —tortura, tormento o apremio— venía a ser en tal sentido indiferente. Con tal de causar sufrimiento, venía a ser indiferente que el tormento quedase localizado en determinadas partes del cuerpo, fundamentalmente pies y manos. Tal sería uno de los principales argumentos del grupo abolicionista, al servicio o bajo la dependencia de los altos tribunales, especialmente entre la gente más joven, fiscales y algún corregidor. Y no faltan argumentos tomados de los autores más modernos e ilustrados. Se produce así una división a favor y en contra de la abolición. Pero después de las Cortes de Cádiz, en el seno de los tribunales, ya nadie se podía tomar en serio la defensa de los apremios.

La reforma de las cárceles en un principio se sujetaba a un programa anclado en el pasado. Había tal número de cárceles y de tan varia configuración que resultaba muy difícil introducir en ellas una especie de denominador común, como punto de partida para la renovación. Según hemos podido comprobar, muchas cárceles tenían un inmediato pasado señorial; había otras en la que participaban organismos religiosos. Sin olvidar aquellos casos en que los mismos particulares debían facilitar sus propios edificios como morada provisional de arrestados. Pero el contraste más notorio se marcaba entre los grandes núcleos de población y los dispersos y numerosos lugares que albergaban algún establecimiento penitenciario, por pequeño e insignificante que fuese. Y no digamos nada en punto a financiación, con un sistema complejísimo donde la caridad privada desempeñaba importante papel. El programa

de «para cada lugar una cárcel», además de costoso e inoperante, venía a resultar inviable. De ahí que sobre la marcha los grandes organismos judiciales se viesen obligados a proponer la reducción de los establecimientos penales a sólo los lugares más importantes, única forma de poderlos dotar convenientemente de medios y personal con dinero público, aunque sin despreñar otras fuentes de financiación.

Se trataba de una reforma eminentemente técnica, esbozada desde la cúspide del poder: Alcanzar un nivel penitenciario adecuado en punto a seguridad, higiene, capacidad y dotación económica. No se iban aquí a producir las discrepancias que veíamos frente a los métodos de apremio. Pero también hubo quien llegó a proponer reformas radicales del sistema invocando a los escritores más progresistas. Para nosotros no es lo más importante el planteamiento de la reforma y su falta de realización final, sino la impresionante encuesta en la que se basaba y que podrá servirnos en otras ocasiones para seguir ampliando nuestros conocimientos sobre el sistema penitenciario del Antiguo régimen, tan complejo y variado.

JOSÉ LUIS BERMEJO CABRERO

APENDICE

1

1804, Agosto, 21. Madrid

[Informe fiscal sobre supresión de apremios]

Los fiscales enterados de este expediente, dicen que en ellos se halla la misma diversidad de opiniones que hasta la presente época ha versado en la materia de apremios o tormentos; porque al paso que la Sala de Alcaldes y la Chancillería de Granada estiman por conveniente que se continúe su moderado uso; la de Valladolid y el corregidor de esta Corte con particularidad claman por su extinción, sin exceptuar alguno de los quatro apremios que se han usado más o menos frecuentes solo en las cárceles de esta Corte y villa, pues aunque en la de Valladolid y por su alcaide parece que para evitar rompimientos y fugas se havia inventado e hizo por si solo y sin noticia de las Salas, unas pequeñas esposas tituladas perrillos, a semejanza, aunque más suaves, que el que la Sala de Alcaldes titula llave o prensa, poniéndolas por las noches en cualquiera dedo a algunos reos, acordaron las Salas, luego que se les notició por los presos, se recogieran y guardaran, porque atormentaban más de lo regular.

Las Chancillerías, ni corregidor de Madrid parece han conocido las quatro clases de apremios que usan los Alcaldes de Corte, aun en la cárcel de villa a efecto de que los reos declaren la verdad de sus excesos o de los cómplices que para ellos han tenido, pues aunque las Chancillerías usan de aumentar algún par de grillos puestos en la forma regular y la de Valladolid hacer que permanezcan encerrados algunos días más y en caso muy preciso el cepo, o el del brete, nunca han usado otros apremios para apurar la verdad, viniendo por lo mismo a resultar que solo la Sala de Alcaldes de esta Corte o por su orden en la cárcel de esta villa, se han usado los apremios y esto en el estado de sumario de la causa y quando resultan algunos indicios contra la persona o reo a quien se impone el apremio.

Si estas aflicciones demostraran la verdad a que por su medio se quiere aspirar, ciertamente que los fiscales se atemperarían a su uso, como pretende la Sala de Alcaldes, para no dar lugar a que los delitos quedasen sin el castigo que merecen, pero como encuentran en ellas unos medios seductores (en realidad) para que se declare, no pueden consentirlos. Si el apremio de que Salomón usó en el juicio con las que se decían madres de el hijo, mandándole dividir, hubiera descubierto la verdad de la afirmativa que ambas proponían, pudiera muy bien la Sala de Alcaldes traerle para confirmación de que el conflicto y la mayor sensivilidad excitan a no salir de los términos de lo cierto; pero fue muy al contrario quando la madre verdadera aun disimuló la verdad que había sostenido porque no tubo valor de sufrir el martirio que preparaban a su hijo quando la que no era madre no alteró la aserción de que lo era. Y de este hecho se convence que no los apremios, sino la mayor o menor sensivilidad o valor para resistirlos servirá para que declaren con objeto a livertarse de ellos.

El corregidor de esta villa, refiriendo su informe a el que le dio su primer teniente, presenta un caso en que se dio tormento a uno, que fue causa de su muerte, asegurándose después de ella que le padeció siendo inocente. Y a la verdad que estremece el oirlo quando los preceptos de leyes de partida que son las que más tratan de este particular, se dirigen a que en los apremios no se causen heridas que mueran por ende, nin queden lisiados, y con más razón quando los legisladores han estimado como cosa más derecha, según dice la ley 9, tít. 31 de la Partida 7^a de quitar al home de la pena que mereciesse, que darla al que non la mereciesse.

Ni la antigüedad de las leyes, ni menos de el uso, que como se ha visto en el caso que dice el corregidor de Madrid y que sin duda hay otros muchos, podrán evitar que para librarse de déviles oprimidos con el tormento o apremios de el inmediato dolor, o aflicción que les causan, falten a la verdad, mirando como remotas las penas que pueden recibir por sus declaraciones, quando los robustos y que tengan ánimo para sufrirlos se obstinaron en sus asertos para librarse de las penas que teman de declarar sus delitos. Y la antigüedad misma y las circunstancias con que aquellas se establecieron, diversas de las presentes, en que la mayor esperiencia e ilustración convencen lo inútil de los apremios para descubrir la

verdad, contribuyen sobremanera para que en la duda se entienda por mucho más acertado el quitar a el home la pena que mereciere, que el darla al que no la mereciere.

Los mejores conocimientos de el hombre y de la dévil supletoria prueba de los apremios, que para serlo según ley, necesita ser ratificada sin ellos, hace comprender su poco mérito, y que con efecto se hallan casos en que perjudican. Y si se unen las circunstancias de que por su gravedad, y que los pacientes no reciban mayor daño, se dejan a el cuidado de alcaydes y porteros de la cárcel, jente por lo común imbestidos de poca piedad, como endurecidos con la aflicción; presentan las ideas más eficaces de abolir estos apremios, que si bien podrían ser útiles en algún caso particular, serán en los más sumamente perjudiciales.

Lo son también aquellos que con oprobio de la humanidad se usan en las cárceles de esta Corte y villa, de los encierros excesivamente estrechos, sin ventilación, sin luz y sin que puedan limpiarse aquellos calavozos, cepos, y aun bretes, que también usa la Chancillería de Valladolid, y en que se pone a los hombres por tres, quatro y aun nueve días sin más arbitrio que estar en pie, sentados o echados de espaldas, y sin poder evitar la ediondez de las operaciones inevitables para la vida, porque como quiera que la fragilidad humana aspira (por lo común) a evitar el daño presente que le aflige más que a preparar defensas, para no sufrir el que por esperarle cree dudoso por infinitas disposiciones de el acaso, no se detiene en más que en vencer la inmediata opresión declarando o confesando lo que entiende o le persuaden será medio para conseguirlo, aunque falte a la verdad.

Y en el caso de que haya persona verdaderamente delinvente que endurecido en sus delitos y cuerpo se contemple con robusted para sufrir los apremios que le imponen a fin de que declare, no será mucho que los tolere, confiado en que por este medio se librá de los mayores males que deve esperar de la confesión verdadera de sus indudables delitos, cuyos extremos serán siempre muy contrarios a la humana sensibilidad y dignos de que se reformen sus efectos con la abolición de los apremios, y que se impida el uso de todo calabozo y encierro de suma estrechez, sin luz, ni ventilación, interin que no se haviliten en forma regular, porque siendo demasiado notorio que ninguno de estos usos son suficien-

tes a demostrar la certeza de los hechos a que se dirigen, deben impedirse para evitar los fatales efectos que ha demostrado la experiencia y que tanto repugna la ley de Partida, con apoyo de la recta razón; así lo entienden los fiscales o el Consejo resolverá lo más acertado. Madrid y Agosto, 21 de 1804.

(*Expediente sobre apremios*, AHN, *Consejos*, leg. 3860, fol. 62-65).

2

1814, Noviembre, 12. Madrid

[Informe fiscal sobre policía de cárceles]

[Los fiscales] han visto este expediente en el que después de haberse abolido con tino y sabiduría la pena de tormento y los apremios, se trata unicamente de mexorar la policía de las cárceles del reyno y dicen: que dificilmente puede ofrecerse a la consideración del Consexo un obxeto más propio de su piedad, ni más acrehedor a su vigilancia, nunca mexor empleada que quando cuida de alibiar la suerte de los desgraciados y desvalidos.

A esta clase ciertamente pertenecen los presos, no por el recuerdo de sus crímenes que deben a su tiempo expiar con la pena, sino por las pribaciones y penalidades que anticipadamente sufren en las cárceles sin utilidad pública y en cierta manera con mengua del gobierno.

Verdad es que cuesta mucho lebantar de planta estos establecimientos y mucho también el sostenerlos, no tanto para repararlos en lo material de sus edificios mal construidos por lo general, como por los gastos de la manutención de los mismos presos que por lo común son personas del todo miserables; y no es menos cierto por desgracia que el instituto de cárceles no ha excitado tanto la caridad cristiana como otros de hospitalidad y beneficencia que hemos visto bien dotados y enriquecidos por fundaciones particulares. Sea como quiera, ahora que una feroz invasión ha destruido varios edificios de cárceles, y se han disminuido los arvitrios, conviene hacer un esfuerzo, que si no alcanza a perfeccionar estos establecimientos, contribuya de pronto a mexorarlos en los

artículos de mayor necesidad, y prepare para lo sucesivo todas las ventaxas de que sean susceptibles.

Estas empresas nunca fueron del momento, pero tampoco deben desalentar por graves y difíciles que parezcan. Se sabe por experiencia que un zelo ilustrado y sostenido las lleva con el tiempo a su fin venciendo quantos obstáculos se oponen, y nada se acaba que no se empieza.

Para lograr, pues, tan importantes objetos, previa la conveniente instrucción, son de sentir los fiscales que por medio de las Chancillerías y Audiencias se pida a los pueblos de su distrito una relación exacta y circunstanciada del estado actual de la cárceles, de la extensión y capacidad de sus edificios, de su forma y solidez, de la mayor extensión o anchura de que sean susceptibles por su localidad, de la disposición, aseo y salubridad de sus estancias, de su seguridad para la custodia de los reos, del número ordinario de estos, de las rentas y arvitrios con que se mantienen, de su recaudación y administración, del número de dependientes y sus dotaciones o salarios, de las raciones de los presos, y ultimamente de su gobierno y policía, indicando las mexoras de que sean capaces tanto en lo físico, como en lo moral.

Estas noticias pueden adquirirlas en breve tiempo valiéndose de los corregidores y alcaldes mayores y pasándolas a las respectivas Salas del Crimen para que propongan en su razón con audiencia de los fiscales de S.M. quanto crean conveniente y pueda serbir de instrucción para la formación del plan y reglamento general que haya de darse en la materia, remitiéndolo todo al Consejo, cuya sabiduría dispondrá lo que juzgue más conforme. Madrid, 12 de Noviembre de 1814.

(Expedientes sobre apremios AHN, Consejos, leg. 3860, fol. 108-109).

DOCUMENTOS

I

ORDENANZAS DEL CONCEJO DE CANTALEJO AÑO 1550

El manuscrito en letra procesal comprende nueve folios, se conserva en el Archivo municipal de Sepúlveda, su signatura antigua es Caxon 3.º, Legaxo 2.º, Número 8, y su signatura moderna es la siguiente: Archivo Municipal de Sepúlveda: Comunidad de Villa y Tierra, legajo 11, n.º 69.

Cantalejo, concejo a que se refieren estas ordenanzas, pertenece al partido judicial de Sepúlveda, provincia de Segovia.

En la transcripción he respetado la ortografía original, he unido y separado las palabras, he puntuado el texto y he puesto los acentos necesarios para la más fácil comprensión del documento. Entre corchetes va incluida la numeración de títulos y capítulos omitida por el escribano. Como figura en el documento, el título séptimo precede al título sexto.

Nos el conçejo, alcalde, regidores, diputados, procurador, ofiçiales, omes buenos deste lugar de cantalejo, aldea, término e juridiçion de la real villa de sepulveda, estando juntos e ayuntados a canpana tañida, según que lo avemos de vso e costunbre de nos ayuntar para semejantes cosas, en la casa del conçejo que son en la plaça del dicho lugar, çerca de la yglesia de señor sant andres, conviene a saber: françisco de mate sanz el viejo, alcalde hordinario del dicho lugar, e christoual blazquez e juan de la escoriala e andres bayon, regidores, e anton de blasco, procurador, e juan de contreras e juan serrezin e françisco delvira e andres de las heras e mateo de arevalillo e frutos de mate sanz e andres del carpio e andres de juan casado, pedro de frutos del herrero, françisco de miranda, juan de françisco, juan de areualillo, andres herrero el moço, juan de alonso de miranda, juan de christoual, andres de arevalillo, pedro de mingo fernandez, lucas de

badaxoz, pedro blasco, yague de bayon, juan de frutos escorial, andres yzquierdo, juan casado el moço, juan hernanz, bartolome sanchez carpintero, frutos de lloreynre, juan de carravillan, pedro de la biuda, juan de miranda el moço, frutos de badaxoz, françisco de lloreynre, andres calero e otros muchos vezinos del dicho lugar, en cantidad de la mayor parte dél, acordamos de reformar y enmendar e añadir las hordenanças del dicho lugar e algunas cosas que no estan puestas por hordenança e se suelen guardar por costunbre ponerlo por escrito, para que todos los vezinos del dicho lugar, dende en adelante, mejor sepan lo que deven hazer e guardar e las cosas que se deben apartar e les son defendidas y el dicho lugar mejor sea governado. Aviendo muchas vezes platicado e conferido sobre lo uno e lo otro e auido consejo e paresçer de lo que conviene al bien de la republica e conformandonos en quanto se puede alcançar con la razon e la justiçia e justo e razonable e vsos e costunbres del dicho lugar, estatuymos e hordenamos lo que de yuso sera contenido a seruiçio de dios nuestro señor e de la gloriosa siempre virgen santa maria nuestra señora e del bienaventurado señor sant andres, apostol de nuestro señor jhesuchristo, e queremos que por estas dichas hordenanças se juzgue libre e determine lo que por ellas sera declarado e los negoçios e causas que tocaren e acaçieren, sin que el que la alegare quede obligado agora ni en tiempo alguno a probar el vso e guarda dellas, porque por la presente las damos por vsadas e guardadas sin otra sentençia ni declaracion.

Titulo primero. De la eleçion de los ofiçiales.

Capitulo primero.

Primeramente es costunbre ynmemorial que el primer dia del año nuevo de cada un año, despues de misa, se junten los ofiçiales del año pasado, conviene a saber: alcalde y regidores, y eligan entre si çinco onbres del conçejo, quales les paresçiere, de manera que son nueve: vn alcalde e tres regidores e çinco eletores, a canpana tañida, en las casas del conçejo e juran todos nueve de elegir para el año que viene ofiçiales para la administracion de la justiçia e gouernacion del pueblo e otros ofiçios, conviene a saber: alcalde hordinario, tres regidores, çinco diputados, quatro apreçadores de los daños de los panes e viñas e mayordomos de la yglesia y de santa maria y escriuano del conçejo; y de elegir aquellos que en dios y en sus conçien-

çias les paresçiere que conviene al bien de la republica, sin pasion ni afiçion; mandamos que ansi se guarde.

Capitulo segundo.

Yten que si discordaren en los botos, se está e suele estar a la mayor parte, que lo escribe como pasa el escriuano del conçejo; y, ansi fecha la dicha eleçion, tornan a repicar a conçejo, para que todo el pueblo se junte y que, ansi junto el pueblo, se publican los ofiçios y resçiben juramento de las personas que los an de vsar en forma.

Capitulo terçero.

Yten es costunbre çerca de las personas que an de ser elegidas, que un año sea el alcalde del estado de los hijosdalgo e otro año del estado de los buenos onbres pecheros; y el año que fuere alcalde del estado de los hijosdalgo a de ser un regidor ansimismo del estado de los hijosdalgo e dos del estado de los pecheros; e al contrario, el año que fuere el alcalde del estado de los pecheros a de ser vn rregidor del mismo estado, e dos del estado de los pecheros; e ansi suçesivamente en cada un año; e los apreçiadores an de ser los dos del barrio de arriba e los dos del barrio de abaxo; e los mayordomos de las yglesias, como se ban casando.

Capitulo quarto.

Yten que si algunos de los ofiçiales nonbrados en la manera que dicha es no quiere açebtar el ofiçio, que todas las costas e caminos que se hizieren para que sea conpelido por la justiçia las pague al conçejo e si las oviere gastado el mayordomo del conçejo las cobre dél, sin que el conçejo quede con daño ni costa alguna, siendo condenado a que sirba el ofiçio e más pague çien marauedis para los gastos del conçejo.

Capitulo quinto.

Yten es costunbre que el que sale por alcalde nonbra alguazil del estado quel quiere y es su voluntad, del qual resçibe juramento ante los regidores y escriuano del conçejo; y el alcalde suele solamente yr a jurar el ofiçio ante la justiçia de la uilla; y si el alcalde por su persona quiere vsar el ofiçio del alguazil lo puede hazer; e que ansi se a usado.

Capitulo sexto.

Yten se suele e acostunbra nonbrar alcaldes de la hermandad el dia de señor san juan de junio de cada año en esta manera: que a canpana tañida, despues de misa, se juntan en la dicha casa del conçejo el alcalde e rregidores e nonbran alcaldes de la hermandad para un año, el vno' del estado de los hijosdalgo y el otro del estado de los buenos omes pecheros, en la forma susochicha e asientan la eleccion antel dicho escriuano e despues, a canpana tañida, se junta el conçejo a las espaldas de la yglesia e los publican e mandan que vayan a jurar el ofiçio a la uilla; y éstos ni el alcalde no vsan el ofiçio hasta aver jurado en la uilla, y entretanto que vienen con la uaras vsan los pasados e, si son negligentes, queda a su cargo la culpa o pena; e, venidos los alcaldes de la hermandad, nonbran quadrilleros del estado de los buenos omes pecheros a su voluntad e juran antel escriuano.

Capitulo setimo.

Yten es costunbre, en el dicho dia de señor san juan, en publico conçejo poner en pregon el quartillo de la yglesia e se rremate el dia que despues acuerdan, e ponen boerizo e bezerrero e porquero e renteros e guardas para rastrojar e panes e viñas e otras cosas semejantes; y el lunes de pasqua de resureçion, en santa maria del pinar, se suelen juntar el alcalde e çinco onbres quel alcalde e regidor nonbran con el cura o sin el cura, y el alcalde e çinco onbres nonbran terçero, el qual son obligados a nonbrar como se van casando; y e que ningun onbre casado se uenga hasta ser elegido e publicado so pena de diez marauedis.

Titulo segundo. Del ayuntamiento.

Capitulo primero.

Yten quel dia de año nuevo e el dia de señor san juan y el segundo dia de pasqua, quando se hazen las dichas eleçiones, ninguno de los ofiçiales que las an de hazer en la forma susodicha sin causa ligitima falte, so pena de çien marauedis; e que cada un mes, nesçesariamente el primer domingo dél, se junten alcalde e regidores e diputados y escriuano en las casas del conçejo a ver e proueber en las cosas tocantes a la buena governaçion, so pena de un real al que faltare; el qual

ayuntamiento se haga despues de comer e que los que vinieren gasten el real al que faltare sin causa ligitima; e quando otras vezes conuiniere hazer ayuntamiento, quel mayordomo haga tañer por mandado del alcalde o regidores e no de otra manera, e se junten las personas susodichas, so pena de medio real a cada uno que faltare para los que vinieren; e si repicando al conçejo alguno se estubiere jugando e no viniere o mirando cómo juegan, paguen de pena diez marauedis; e si paresçiere que es tan nesçesario, puedan mandar, so la pena que paresçiere a los alcalde e regidores, que venga.

Capitulo segundo.

Yten que porque algunas cosas se ofresçen en que es nesçesario llamar todo el pueblo y es justo que sepan cuándo se repica para que se junten alcalde e los del ayuntamiento e cuándo para todo el pueblo, hordenamos que para que sepan que solamente se rrepica al ayuntamiento den vn rrepique con la canpana mayor e, quando llamaren todo el pueblo, den tres repiques, como se suele hazer.

Titulo terçero. Del juzgado del alcalde.

Yten que, por quanto conforme a las leyes del reyno, el dicho alcalde hordinario puede juzgar e sentençiar hasta en cantidad de çien marauedis e la ley que çerca desto dispone es prouechosa mayormente a este lugar, que está tres leguas de la dicha uilla, hordenamos quel alcalde que es o fuere tenga mucho cuydado de guardar e cunplir y executar la dicha ley e, para que mejor sea guardada, se asiente a juzgar publicamente por la mañana, antes que la gente vaya a su trabajo; e que qualquiera persona que çitare o enplazare a otro o le demandare fuera del dicho lugar, de los dicho çien marauedis ayuso, que pague otros çiento de pena, la mitad para la parte a quien çitare o demandare e la mitad para el alcalde, y que todabia se haga justiçia en el dicho lugar; e rogamos e pedimos por merçed a los señores corregidor e otras justiçias de la villa que en los mandamientos çitatorios que dieren pongan e manden poner condiçion si la causa fuere de çien marauedis arriba; e que, si estando en visitaçion o en otra manera conosçiere della en el dicho lugar, la remita con el estado que la dexare, con el proçeso si se hiziere, al alcalde del lugar.

Titulo quarto. De los propios e rentas.

Capitulo primero.

Yten que cada un año los alcaldes e regidores de cada un año, luego como entraren en los ofiços, nonbren çinco personas del conçejo, aquellos que les parezcan que lo haran mejor, e resçiban dellos juramento para que, juntamente con el alcalde del dicho año, tomen cuenta al alcalde e regidores y mayordomo y ofiçiales del año pasado de todos los bienes propios e rentas y prouechos del conçejo, cargandoles lo que oviere valido y rentado, tomando e pasando solamente en cuenta aquello que se oviere gastado en pro e vtilidad y honrra del conçejo conforme a las leyes del rreyno, la qual tengan fecha e fenesçida hasta mediado el mes de henero de cada un año.

Capitulo segundo.

Yten que para que mejor se haga la cuenta, al prinçipio del libro della se ponga por ynventario las tierras e prados y casas y heredades y rentas que son propios del conçejo y los bienes muebles, ansi como pesos y medidas y pesas y prisiones y fragua e marcos y libros e otros qualesquier bienes muebles del conçejo y a cuyo cargo estan para que den cuenta dello.

Capitulo terçero.

Yten para que la dicha cuenta se haga mejor, el escriuano del conçejo dé una fee firmada de su nonbre en que se contenga los remates y arrendamientos de las rentas cada uno por sí, en cuánto y en quién se remataron y con qué prometido y a qué plazos, de manera que se sepa la verdad; y ansimismo dé copia de las penas y almonedas y otros cualesquier prouechos que el conçejo aya tenido aquel año; y ansimismo, si oviere avido repartimiento o derrama, se haga lo mesmo; y de todo se haga libro o se tenga un libro enquadernado donde se asienten las cuentas de cada un año; e tengan vn arca de conçejo con dos llabes, de las quales tenga la una el escriuano de conçejo y la otra el alcalde, y el arca que esté depositada en la sacristia de la plata de la yglesia y que dentro della se ençierren los preuilegios y prouisiones reales e cartas de çensos y apeos y estas hordenanças originales e las cuentas fenesçidas de cada un años e otras qualesquier escrituras tocantes al conçejo y se pongan por ynventario en el dicho libro de cuentas como los otros bienes muebles e, quando se sacare

alguna para la presentar en algun pleyto o otra cosa que al conçejo toque, quede asentado en el dicho libro quién la sacó e por cuyo mandato e para qué, porque desta manera aya cuenta e razon de todo.

Capitulo quarto.

Yten que por quanto la casta de los ganados vacunos es pequeña y de pequeño cuerpo y se cree e tiene por çierto que es por falta de toros de buena casta, hordenamos e mandamos que de los primeros dineros que el conçejo tenga se conpre vn toro castizo, qual conviene para enmendar la dicha casta, y se encargue al vaquero del conçejo o boyero; y el alcalde e regidores tengan cargo de lo sustentar e administrar para que se conserbe y, quando sea viejo, se aproveche e renueve, porque ansi nos paresçe que conviene al bien desta republica.

Titulo quinto. De los mantenimientos.

Capitulo primero. Del carnisçero.

Yten ques costunbre de andar la carnisçeria de pasqua a parqua, hordenamos e mandamos que el alcalde y regidores de cada un año tengan cargo de hazer poner en pregon la dicha carnisçeria desde el domingo de carnes tollendas y se pregone en publico conçejo el mismo domingo y martes adelante y todos los otros domingos e fiestas hasta ser rematada, y pongan condiciones claras e convenientes segun el tiempo e rrazon, y entrellas las siguientes:

Lo uno, que dé baca e carnero e cordero abasto todos los dias de carne en esta manera: carnero todo el año y cordero desde pasqua a pasqua, poco mas o menos, y baca desde pasqua despiritu santo a carrastollendas.

Yten, que mate e pese la carne publicamente de dia e noche en la carniçeria publica deste lugar y que sea buena carne de dar y de tomar; y el que lo contrario hiziere que lo castiguen los alcaldes y rregidores como les paresçiere y dén horden cómo aya repeso y ellos visiten hordinariamente la dicha carniçeria, porquello vean las carnes que se matan y los pesos que se hazen y enmienden e castiguen lo que mal se hiziere y den horden cómo tengan buenos pesos e pesas y se corrigan den quatro en quatro meses y antes, si antes les paresçiere, y den horden cómo se pese a oras convenientes ansi por la mañana como por la tarde.

Yten, que pongan preçio a los vientres y asaduras y menudos y quel higado y libianos de la vaca se dé por peso y que si algun vezino quisiere vn biente entero, que se le dé al preçio que le tubiere vendido a la tripera.

Yten, que saque por condiçion quel ganado que metiere en la devisa e término deste lugar no lo pueda vender fuera, salbo que se gaste en el proveymiento de la carneria; e, si al fin del tiempo le sobrare algun ganado e no quedare con la carneria, que sea obligado a lo dar al conçejo, tasado en lo que dos personas nonbradas por las partes apreçiaren, y en discordia, que la justiçia nonbre vn terçero; e porque el dicho ganado de la carneria a de pastar en partes defendidas a otros, procuren que no puedan traer de çiento e çinquenta carneros arriba, poco mas o menos.

Capitulo segundo. De la pescaderia.

Yten hordenamos e mandamos que los dichos alcaldes e rregidores e oficiales de cada un año hagan proveher de pescaderos e panaderos y taberneros que sirban los ofiçios e den los dichos mantenimientos abastos en esta manera: el pescadero, de carnes tollendas a carrastollendas e tenga continuamente azeyte, vinagre y sal y sogas y yerro e azerõ; y los dias de vigilia, de ayuno y quaresma y viernes e sabado, demás de lo que dicho es, tenga hordinariamente pescado çeçial, sardinas y otros pescados, declarando los pescados y preçios y condiçiones lo mejor que les paresçiere según el tiempo que les paresçiere, proueyendo ansimesmo cómo las medidas esten justas e fieles, segun que va dicho en lo de carneria, y que las balanças esten oracadas y el pescado mojado en agua clara y que no esté molido ni tan remojado que pase de la rrazon, y al tiempo del pesar esté escorrida el agua y en vna gamella horacada; y que los dichos oficiales visiten la dicha pescaderia y enmienden e castiguen lo que mal hizieren y lo pongan en pregones desde prinçipio de diziembre y se rematen el dia de año nuevo, porquel ofiçial tenga tienpo para se proveher.

Capitulo terçero. De la panaderia.

Yten que de la misma manera y por el mismo tiempo se ponga en pregon la panaderia, para que dé pan abasto desde año nuevo a año nuevo, y se rremate el dia de año nuevo en la persona que mejores preçios pusiere y que aya de dos panaderos o tres arriba y que, a lo

menos en las dos casas dellos, aya siempre pan con que den buen pan, bien masado e bien cozido e bien sazonado y de peso en que aya quartal e medio quartal, el quartal de dos libras e media; y los dichos alcalde e regidores castiguen y enmienden lo que mal se hiziere y el pan falto sea perdido y lo repartan a los pobres; y otro alguno no pueda vender pan cozido aviendo obligados y tiniendo ellos pan, eçebto si no fuere que viniendo alguno de fuera pueda vender vna blanca menos del que está obligado; y el que contra esto vendiere por la primera vez cayga en pena de çinquenta marauedis y el pan perdido e, por la segunda, doblado; la mitad de la qual dicha pena sea para los obligados y lo otro para quien lo esecutare.

Capitulo quarto. Del tabernero.

Yten que ansimesmo hagan pregonar la taberna por el dicho tiempo y rematarla el dicho dia de año nuevo a los mejores preçios que pudieren de henero a henero, y se obligue de dar siempre vino abasto blanco y tinto, de donde le mandaren los regidores, y que cada camino jure el preçio a cómo le cuesta y el lugar e persona donde lo compró y que no resçibió hoque ni sobornal, a lo menos que pase de vna azunbre en diez cantaras; y que el alcalde y regidores tengan cuidado de enbiar a hazer pesquisa quando le paresçiere para quel tabernero sea castigado, si oviere fecho cosa que no deba, y que tenga buenas medidas e justas y se las visiten, a lo menos vna bez en cada mes, y saber si los ponedores y los taberneros hazen lo que deuen y enmendar y castigar lo que mal se hiziere; y que ningun vezino del lugar pueda vender uino de fuera, salbo de su cosecha, por menudo ni por cantara, so pena de çien marauedis por la primera e, por la segunda, doblada, la mitad para el tabernero y la otra mitad para el que lo executare; y que el forastero pueda vender acantarado. Y que siendo señalado dia de remate de qualquier ofiçio y rematado en publico conçejo, que no se resçiba baxa.

Capitulo quinto. Del meson.

Yten que los dichos alcaldes e rregidores hagan probeher cómo aya meson, donde se acogan los caminantes, que esté basteçido de camas y caballerizas y lo nesçesario.

Capitulo sexto. De las fuentes y caminos y exidos e abrebaderos

Yten quel dicho alcalde e rregidores e ofiçiales cada un año tengan cargo de visitar las fuentes e pozos de veber y limpiarlos e hazerlos linpiar e adereçar y hechar sus brocales, de manera que no aya peligro ni daño y las aguas esten linpias; y visiten los mojones de la devisa y los renueben y ansimismo visiten el exido y caminos y heras y prados y dehesas y pinares del conçejo y renueben los mojones y miren si está algo ocupado o entrado de lo ualdio o conçe gil o en los caminos y lo hagan todo enmendar e castigar; e hagan publicar el conçejo para el dia que an de estar barridas e linpias las heras para el dia de san miguel y executar la pena de çinquenta marauedis a la persona que tubiere por barrer aquel dia su hera y que lo hagan linpiar a su costa e lo hagan hazer y castiguen la rebeldia.

Titulo setimo. De los negligentes.

Yten que el alcalde e regidores e diputados de cada un año, den en todo el mes de henero a prinçipio del año, sean obligados de se ynformar si los ofiçiales pasados hizieron e cumplieron lo que de suso es dicho y lo que por estas hordenanças va encargado e, no lo aviendo hecho ni cunplido, los castiguen llevando de pena a cada uno dellos çien marauedis y se los executen luego y en publico conçejo, el dia de nuestra señora de las candelas, se les gaste la dicha pena por conçejo y eligan çinco onbres que a su costa lo bayan a hazer; y si ovieren bien fecho e cumplido lo que en estas hordenanças es contenido, ansimesmo en publico conçejo les den las graçias y los loen el bien hecho.

Titulo sexto. De la guarda de los panes.

Capitulo primero.

Yten que por quanto de senbrar fuera de adra viene gran daño a la rrepublica, ansi porque se ocupa la tierra que se a de quedar para pasto como porque senbrando vnos a vna parte e otros a otra no se podria defender lo senbrado ni guiar los ganados, y por tanto, de tiempo antiguo, se suele e acostunbra senbrar por adra, por ende hordenamos e mandamos que ninguno sea osado en nuestra devisa senbrar fuera de adra e que, si alguno senbrare fuera de adra, que lo defienda por su çerradura e no pueda preñar ni acorrallar en tiempo alguno ni correr el ganado que tomare o entrare en lo que ansi tubiere senbrado fuera de adra, so pena de çien marauedis por cada vez para

el conçejo e más que pague el daño que hiziere en el tal ganado, conforme a derecho.

Capitulo segundo.

Yten que porque al tiempo del arar algunos se atreben a llevar con el arado el mojon e otros se entran en la tierra ajena, de donde naçen pleytos, debates e diferencias al tienpo del segar, y de hechar surco entre la una tierra e la otra en algunas tierras ay ynconviniente, porque por el tal surco se arroya el pan, hordenamos e mandamos, por quitar los dichos ynconvinientes, que en las tierras de herençia y de mojon ninguno desaga ni desbarate mojon; que cualquiera que ansi lo desbaratare, deshiziere o ronpiere o pasare el arado por él cayga en pena de çien marauedis, la mitad para el conçejo y la mitad para la parte y para el que lo executare, y esto por cada mojon; y se torne a rehazer y enmendar a su costa y que el alcalde lo execute con todo rigor y que los linderos se junten y hordenen su mojonera y hechen los mojones tan espesos que se pueda bien conosçer lo que es de cada uno.

Capitulo terçero.

Yten que los dichos alcaldes e regidores tengan cargo de poner mesguero que guarden los panes desde que se comiençan a senbrar hasta que se cogan, el qual se suele coger en publico conçejo; hordenamos e mandamos que ansi se haga e cunpla y tengan cuydado de saber cómo y de qué manera guarda los dichos panes e procurar cómo se guarden con toda diligençia y resçiban dél juramento en conçejo, para que guarde bien e fiel e diligentemente y dé penas çiertas e verdaderas; y el tal mesguero quede obligado a dar dañador del tal pan dentro del terçero dia de como fuere hecho el daño y dé lo dicho al dueño, so pena quel tal mesguero pague el daño, y el tal mesguero a de ser creydo por su juramento; y el tal mesguero aya de pena, desde el dia que se senbrare el pan hasta fin de hebrero, de las rres mayor, que se entiende vacuna, cauallar o mular o asnal o puercos, a blanca de dia y de noche el doble, y de ganado menor de cada rrabaño, desde diez cabeças arriba, çinco blancas de dia e çinco marauedis de noche. y ay ayuso, como de rres mayor; y esta pena sea para el dicho mesguero. Pero que si el ganado andubiere apastorado, que es comiendo el pan a sabiendas, que, demas de la pena del derecho, pague de pena para el conçejo çinquenta marauedis por la primera vez e por segunda,

çiento, e por la terçera, a merçed del conçejo, y que de noche sea la pena doblada; y el que dos vezes fuere tomado el ganado en la semana cayga en rebeldia e pague por ella al conçejo çinquenta marauedis y, si dos vezes, a merçed del conçejo.

Yten que desde primero de março adelante llebe el meseguero las penas dobladas y el ganado apastorado ansimesmo tenga las penas dobladas para el conçejo y, demas desto, se pague al dueño el daño que fue apreçiado por los apreçadores que de yuso hará mençion.

Yten que para apreçiar los daños se nonbren quatro apreçadores, segun de suso es dicho, y que dentro del terçero dia de como fuere fecho el daño el dueño requiera a los tales apreçadores y ellos sean obligados, luego que fueren requeridos, lo apreçien, tasan e moderen so cargo del juramento que tienen fecho; y ansi la guarda como ellos declaren antel escriuano del conçejo y el dicho escriuano asiente el dicho de la guarda, el qual declara el dia que tomó el ganado y de qué manera lo halló y cuyo era e quién estaba delante, si alguno se hallare presente, y los apreçadores ansimismo en lo que tasan y moderan el tal daño so cargo del juramento que tienen fecho; y que por la declaracion de la dicha guarda y apreçadores se haga pagar el daño, avnque las partes no ayan sido presentes ni çitados para uer jurar ni declarar, y haga tanta fee e valga como si fueran çitados para ello; y que el dueño del pan pague a los dichos apreçadores a cada uno quatro marauedis por cada vez de cada apreçio y quel dueño del pan lo cobre del dañador; y que si el apreçador no quisiere yr, siendo requerido apreçiar, que pague al dueño del pan el daño tasado por otros dos apreçadores que el alcalde enbie a su costa.

Yten que la misma pena que por estas hordenanças va puesta de los panes para el conçejo e para el meseguero se entienda y aya lugar contra los que entraren a pastar entre los entrepanes.

Yten que, allende del dicho meseguero, los regidores son obligados a visitar los panes y prados y dehesas del conçejo y qualquiera dellos sean creydos por su juramento; y cayga en pena el ganado que tomare el regidor, desde primero de hebrero hasta primero de março, de la rrex mayor çinco blancas de dia y çinco marauedis de noche y de la rrex menor a blanca y a marauedi de noche, e de diez arriba, çinco blancas y çinco marauedis; y desde primero de março las penas dobla-

das e, si andubiere apastorado o rebelde, çinquenta marauedis por la primera vez y por la segunda quede la pena a merçed del conçejo.

Capitulo quarto.

Yten por quanto de las espigaderas naçen muchos daños, ansi porque so color despigar algunas hurtan el pan ageno e otros se hazen halgazanes y vagamundos, e sobresto ay vna ley del rrey don enrique, su tenor de la qual es este que se sigue: porque las espigaderas hazen grandes daños y lleban el pan de las fazinas e de los restroxos a pesar de sus dueños, mandamos que de aqui adelante no espiguen las mugeres que fueren para ganar jornales, salbo las mugeres viejas e flacas y las menores que no son para ganar jornal, so pena que lo tornen como de furto lo que ansi espigaren a su dueño. Por ende hordenamos e mandamos que las personas que contra la disposiçion de la dicha ley espigaren, que los unos y los otros antes de segado el pan y de sacar la mies del rrestrojo, caygan en pena de çinquenta marauedis para el conçejo e que buelban el pan a su dueño.

Capitulo quinto.

Yten es contunbre que ninguno puede comer su restrojo, porque alçado el fruto queda el pasto comun; pero suele paçer cada uno entretanto que saca la mies con las bestias o bueyes con que acarrea la mies del tal restrojo. Por ende hordenamos e mandamos, conformandonos con la dicha costunbre, que ansi se guarde y que el alcalde e regidores señalen plana delde cuándo, por dónde y hasta dónde a de entrar el boherizo a comer los dichos restrojos y que tras él, despues que lo aya hollado el dicho boherizo, pueda entrar cada uno con sus ganados domados y de trabajo y que no pueda entrar ningun ganado holgon hasta que por los dichos justiçia e regidores sea desvedado, so pena que caygan en pena por cada buey veynte e çinco marauedis y lo mesmo por cada rex mayor, y el rebaño de las obejas que es de diez cabeças arriba a çinco marauedis de dia y de noche doblado; y tomandole dos vezes en la semana o dende en adelante es rebeldia y queda la pena a merçed del conçejo; y de la rrex menor, a blanca e a marauedi.

Capitulo sexto.

Yten que qualquiera persona que atrabesare por el pan ageno, desde primero dia del mes de junio, cayga en pena yendo la persona

sola de çinco marauedis y con bestia diez marauedis e con carreta vn rreal; pero que para segar cada uno en su pan pueda entrar con su persona por la linde y, si hiziere daño, que pague el daño; pero que con liçençia de su dueño pueda entrar como quisiere

Capitulo setimo.

Yten porque las heras do se coge el pan son valdias e conçeçibles, que estan en los exidos e salidas del conçeço, eçebto los que las quieren asentar en sus propios prados, e conviene la guarda de las dichas heras al bien de la rrepublica e los ganados que mas daño hazen en ellas son los puercos, hordenamos e mandamos que ningun tiempo del año puedan los dichos puercos paçer en las dichas heras, si no fuere yendo de paso sin detenerse, y que qualquier vezino lo pueda prender y llevar a la taberna y hacharles de pena a blanca de dia e a marauedi de noche y sea para el que las prendare; y desde que se asentare el pan en las heras hasta ser alçado el fruto la pena doblado y, si fuere tomado dos vezes en la semana, quede la pena a merçed del conçeço; y que el día de san miguel las tengan todas barridas y hechados los pajageros en sus corrales o fuera de los exidos y heras donde no aya yerba.

Titulo [octavo]. De las viñas.

Capítulo primero.

Yten es costunbre que cada un año el alcalde e regidores hazen paresçer ante sí los alcaldes de las viñas pasados por el mes de hebrero, e los dichos alcaldes pasados nonbran otros dos alcaldes de las viñas y los toman juramento; y es cargo de los dichos alcaldes coger viñaderos para todas las viñas e pagos de la deuisa y estos dichos alcaldes hazen tasar los daños a los apreçiadores nonbrados por el conçeço, de que en estas hordenanças se haze mençion, e nonbran ansimismo dos onbres que llaman caluñeros y tienen cargo de coger y cobrar las penas y calunias de las viñas; y estos dichos alcaldes hazen quenta de las dichas penas y caluñas y dellas hazen pagar la soldada de los viñaderos y, si falta, repartenlo por los herederos de las viñas y, si sobra, queda para pagar los viñaderos de otro año. Hordenamos e mandamos que ansi se guarde e cunpla e que las penas de los majuelos sean para los majuelos çinquenta marauedis por la primera vez e por la segunda doblado e por la terçera a merçed del conçeço e, si entra con ganado

a lo pastar adrede, que cayga en pena por cada rex mayor diez maravedis e veynte de noche e, si no truxere çençerro o trayendole le traxere atapado, que pague la pena doblada e, si fuere tomado el ganado en los dichos entrepanes porque se presume que estará escondidos o que lo hechó a sabiendas, que pague la mesma pena.

Titulo [novenos]. De las dehesas de monte.

[Capitulo primero].

Yten tiene este dicho conçejo vna dehesa de monte que se dize el pinarejo junto al lugar, según que está deslindada por sus mojones, y las dehesas que dizen de abaxo que es de senovilla hasta el camino que va a la serreta que es hazia fuenterrebollo, segun que está deslindada e amojonada por sus deslindos, hitos e mojones de tiempo ynmemorial, las quales son m(u)y neçesarias y paresçen que abido algun descuydo en conserbar los montes dellas y por esta causa tiene neçesidad de remedio; y conformandonos con las costunbres antiguas y con las cartas e prouisiones reales que disponen çerca de la conseruaçion de los montes, hordenamos e mandamos que cada e quando que algun vezino del lugar tubiere neçesidad de maderá para casa que se aya de hazer en el dicho lugar, que no la pueda cortar sin que tenga liçençia del alcalde y de los regidores, a lo menos de dos dellos; y que los dichos alcalde y regidores, so cargo del juramento que tienen fecho, no den la dicha liçençia sin que vean o entiendan vesimillmente que el que la pide la a menester y quiere para la obra que la pide, teniendo la obra abierta o començada o en estado que parezca que la quiere hazer, y que jure primero cómo quiere la dicha maderá para la obra que declara y que entiende que la a menester y que no la pide con fraude ni por engaño y que no la venderá en manera alguna a ninguna persona de ninguna condiçion que sea ni la aserrará para tablas ni quartones ni la dará a ningun vezino del lugar, avunque sea para hedifiçio que se haya de hazer en el dicho lugar, si no fuere con liçençia de los dichos alcalde e regidores; y que fuera del lugar ni la pueda vender ni donar ni enagenar, so cargo del dicho juramento y más de las penas que se ponen contra los que cortan arboles sin liçençia; e que no se dé liçençia sino para casa de morada e no para casa de ganados e que si la quiere hazer la trayga de otros montes.

[Capítulo segundo].

Yten que el dicho alcalde e regidores no puedan dar la dicha liçençia sin que a lo menos esten presentes vn alcalde e dos regidores y que la den firmada de los que dellos supieren firmar y del escriuano del conçejo, quedando primeramente asentada en el libro del conçejo, y que pague por cada pino de los contenidos en la dicha liçençia medio real para gastos del conçejo.

Yten que el que sacare la dicha liçençia no oviere de cortar por su persona la dicha madera; que él y los que lo ovieren de cortar lo vengán a jurar segun dicho es y de no cortar más de lo contenido en la dicha liçençia; y que, después de fecha la madera, vaya el dueño della con la dicha liçençia antel escriuano del conçejo y declare la madera que por virtud della hizo y la asyente el escriuano en el dicho libro

[Capítulo tercero].

Yten quel dicho alcalde e regidores no pueden dar la dicha liçençia, si no fuere para uigas muelles e gateras y sobregateras y lazos y hilas, como hasta aqui se suele hazer, y los postes que salieren de las dichas vigas y pinos; conque no se pueda derrocar pino para solamente postes ni madero menor de veynte pies abaxo. Y porque de cortar soleras y antelatas viene gran daño al monte y son maderos que se pueden remediar en otra parte y son de poco valor y de mucho daño, hordenamos e mandamos que de ninguna manera se pueda cortar de las dichas dehesas ni dar liçençia para ello.

[Capítulo cuarto].

Yten que el que ansi cortare la dicha madera con la dicha liçençia sea obligado a la tener sacada del pinar e puesta al pie de la obra dentro de dos meses, contados desde el día que se sacó la liçençia, so pena de dos reales por cada madero de los que dexare de sacar en el dicho tiempo para el conçejo; e, si dentro de otros treynta dias no la sacare, que la pierda y el conçejo disponga della como convenga, dandola por solamente la hechura e liçençia a otro vezino del lugar que della tenga neçesidad para hazer casa en el dicho lugar. Pero que no se pueda dar al mesmo que la perdió ni liçençia para cortar otra y que la persona a quien se diere la reçiba con las mismas condiçiones con que se dio al primero.

Yten que la persona a quien se diere la dicha liçençia sea obligado a tener puesta la dicha madera en la obra dentro de un año e, no la teniendo puesta, quel alcalde e regidores le lleven la pena y dispongan de la madera como les paresçiere, teniendo respeto a la causa o ynpedimiento que tubo para no lo poner en la obra; e, no abiendo tenido justo ynpedimiento, le lleven la pena, como por esta hordenança va dicho, que se le a de dar al que no sacare la madera del pinar dentro de los dos meses.

[Capítulo quinto].

Yten que qualquiera persona que por pesquisa o en otra qualquier manera fuere fallado que cortó o hizo cortar qualquier pie de pino sin la dicha liçençia cayga e yncurra en pena de seysçientos marauedis y el pino para el conçejo; e, si deçentare pino para rrasinero, que pague treçientos marauedis e, si començado a hazer el rasinero, el que le començó o otro alguno proçediere cayga en pena de doçientos marauedis e, si se cayere el pino, seysçientos marauedis y el pino para el conçejo; e, si cortare rayzes de pino, por cada rayz de pino un rreal; y el que cortare rama verde, un rreal de cada una, y de cada rrama deseca, la mitad; y el que bareare piña o derrocare almuerçago cayga en pena, de cada pino, de çinquenta marauedis; y el que metiere pala o açadon o gajo de yerro o palo que cayga en pena de çinquenta marauedis por cada cosa dellas; y el que hiziere hoya para carbon que cayga en pena de çinquenta marauedis; y el que sacare çespedes para qualquier cosa pague de pena por cada çesped çinco marauedis; y el que mogueare sin liçençia pague de pena çinquenta marauedis y que no pueda traer la leña, so pena de diez marauedis por cada carga, y que todo el remanente y despojo de los pinos que se les pidiere y de las mogueras quede para el conçejo, eçebto las astillas; e que ninguna rrama verde ni seca trayga, so pena de diez marauedis por cada rrama de las cogolladas; e que de ninguna manera se pueda hazer corral en ella.

Yten que caygan en pena por cualquier robre que cortaren por el pie de doçientos marauedis y por cada rrama un rreal y, si estubiere seca, diez marauedis; y del tocon de el robre seco o verde vn rreal y, si tubiere rrama verde, doçientos marauedis.

[Capítulo sexto].

Yten se puede cortar de los dichos pinos e montes timones e camizos de ramas solamente y no de pie, y ansimismo pueden cortar hastillas de robre para hachas o açadones y horcas y palones y estebas y orejeras de rramas, conque no lo puedan cortar los que no fueren vezinos del lugar ni los vezinos menos puedan vender los que ansi cortaren a personas de fuera del lugar; e que para dentales y camas y exes quel alcalde e regidores puedan dar liçençia. De las quales dichas penas, si vezinos de fuera del lugar cayeren en pena, llebe el denunciador la terçera parte y lo demas el conçejo e, si fuere del lugar el que cayere en pena, lleve el denunciador la quarta parte.

Yten que sobre las dichas penas de las dichas dehesas del monte sea obligado el señor por el criado y el padre por el hijo y el marido por la muger y la muger por el marido, y se haga pesquisa por el alcalde e regidores cada uez que les paresçiere y nesçesariamente den tres en tres meses, y que todos traygan a jurar sus criados e hijos so las penas que el alcalde e regidores les pusieren.

[Capítulo séptimo].

Yten porque las dichas dehesas estan muy despobladas e no ay pinos pequeños ni los dexan creçer los ganados y, si en esto no se probeyere, en pocos años se asolarian las dichas dehesas e no quedaria montes ni pinos en todas ellas, como por uista de ojos paresçe, y auido nuestro acuerdo con personas de espirinçia e de buen zelo, hallamos que el rremedio seria rronper la tierra para que se rebolbiese e aocase e la yerba se matase e las çespederas se ablandasen y el pasto se defendiese y que desta manera los piñones nasçerian y los arboles creçerian y, quando fuesen en algun creçimiento tal que quedasen seguros para que los ganados no los paçiesen, se podrian adereçar los pinos que saliesen derechos, se podrian guardar y se podria tornar a pastar, y que desta manera se podria en otra temporada hazer otra parte del monte y que çesarian los daños e ynconbinientes susodichos. Por ende horde-namos e mandamos que el pinarejo susodicho se are e guarde en esta manera: que lo primero se amojone la mitad por la parte que paresçiere al conçejo e alcalde e regidores e diputados en su nonbre hazia la parte de la talaya, porque hazia aquella parte se a de senbrar al año que viene la hoja y estará mas guardado; y por conçejo se are y se sienbre de piñones albares y se acote y quede acotado hasta tanto que

los pinos estén tanto nascidos e tan crecidos que se pueda desacotar sin perjuyzio del monte y, allende de lo que se oviere de arar, se le dé coto como paresçiere a los dichos ofiçiales del conçejo, e que durante el dicho coto se lleve de pena a qualquier rex mayor dos marauedis de dia e quatro de noche e, si fuere dos vezes en la semana, la pena doblada y, si tres a merçed del conçejo; y el ganado menor del rabaño que es de diez cabeças arriba se les lleve de pena diez marauedis de dia e veynte marauedis de noche e, si dos vezes fuere tomado en la semana, la pena doblada e, si los tomare tres vezes, a merçed del conçejo; e de diez cabeças ayuso a marauedi y a dos, por quanto se halla que el dicho ganado es de más daño para el dicho monte que otro alguno. Y que de el coto que se a de hechar a lo vedado se lleve la mitad de la dicha pena; y que, fecho el monte y desacotado por la misma horden, se acote y defienda e are la otra parte del pinarejo, hasta tanto que sea fecho monte en la manera que de suso es dicho: el puerco queda por rex menor.

[Capítulo octavo].

Yten que en la dehesa de abaxo susodichas donde algunos aran, hordenamos e mandamos que de nuevo no se rronpa ni are cosa alguna sin liçençia del conçejo e que, si alguno fuere o pasare contra lo que dicho es, no se le guarde lo que senbrare en ello e se pueda comer sin pena alguna e pague de pena al conçejo por la osadia çien marauedis e más la pena de los arboles que dañare; y en quanto lo arado fasta aqui, que el alcalde e regidores de cada un año tengan cuydado de visitarlo y verlo lo que es para pan y es bueno para monte y lo acoten y defiendan so las penas que ellos hordenaren; y en quanto a los corrales, que no se haga corral entre los robres con veynte pasos alderredor, so pena de çien marauedis, e que a su costa lo hagan desazer el alcalde e regidores, si dentro de terçero dia de como le fuere mandado no lo desiziere, e si porfiare le doblen la pena, allende las penas estatuydas por las hordenanças susodichas; e que si fuere hallado con algunas ramas de pino o robre en el dicho corral o alrededor dél, siendo de la dicha dehesa, pague la pena que está hordenada contra los que cortan ramas con el doble; y que si le dixere que truxo las ramas de fuera de la dehesa, que lo prueue y que, probandolo con un testigo, su juramento es salbo.

[Capítulo noveno].

Yten que por quanto de dar liçençia que se trayga despojo de robre a venido e viene mucho daño y destruyen las dehesas, hordenamos e mandamos que no se trayga, so pena que el que lo truxere cayga en pena, por cada carga, de çien marauedis y, si lo truxere en carreta, doçientos marauedis ansi en el monte como por los caminos e en casa; e que cada uez que oviere vellota la ueden los ofiçiales e pongan pena contra los que la cogieren fuera de su defendimiento.

Titulo [décimo]. De los regatones.

Yten que ningun ofiçial de los obligados ni otro vezino del dicho lugar pueda conprar los mantenimientos que al dicho lugar se vinieren a vender para lo tornar a reuender, so pena de çien marauedis por cada uez; y que se le tome lo que conprare por el tanto y que se reparta por los vezinos del lugar que lo quisieren por el tanto.

Titulo [undécimo]. De la linpieça del lugar.

Yten que ninguno pueda hazer muladar dentro del lugar, si no fuere en su propio corral y tiniendolo çerrado y çercado; y que si alguno hiziere hoyo cabo la casa que hedificare o en otra parte para el edifiçio della, que lo torne a hazer enchir y allanar dentro del termino que le fuere mandado por el alcalde o regidores, so pena de çinquenta marauedis; e, si fuere rebelde, que le crezcan la pena e lo hagan a su costa

Titulo [duodécimo]. De los solares y datas.

[Capítulo primero].

Yten que ninguno pueda tomar solar por su propia avtoridad ni acreçentar poco ni mucho, so pena de çien marauedis y más que pierda todo lo que en él hedificare o se le derribe; y que el solar que se diere sea medido e señalado por el alcalde e regidores e çinco onbres señalados por ellos, como se suele hazer, y que se escriba en el libro del conçejo espaçificadamente, declarando quién le da el solar y para qué y cuántos pies tiene y las condiçiones con que se lo da y entre otras se le dé con condiçion que lo tenga hedificado dentro del termino que le señalaren; y que no lo puedan enagenar lo que en ello se hedificare a yglesia ni monesterio ni persona de horden ni de fuera del lugar; e que si lo dexare caher, quel conçejo lo pueda tornar a dar e quien lo hedificare e que, como quiera que el hedifiçio se dexe

caher o perder, quede por valdio o conçeçgil, como de primero se hera, para que el dicho conçeço disponga dello como fuere su voluntad.

[Capítulo segundo].

Yten que por quanto a pedimiento deste conçeço en la devisa dél, a do dizen la mata del oregano, se dio a çierto sitio para uiñas y la yntençion del conçeço fue que, pues era en su devisa y de lo escarido e valdio della, no las pudiese tener ni aver persona alguna que no fuese vezino del dicho lugar e ansi era rrazon e justiçia, pues ninguno de fuera del dicho lugar puede labrar en lo escarido de nuestra devisa, e de algunos años a esta parte algunos se an atreuido a enagenar algunas suertes a vezinos de fuera del lugar, hordenamos e mandamos que los alcaldes e regidores lo defiendan conforme a la data, según de suso va dicho, e que dende en adelante ningun vezino deste dicho lugar pueda dar y enagenar suerte alguna de los dichos majuelos a persona de fuera dél, so pena de çien marauedis e pierda el majuelo y quede por escarido e valdio e conçeçgil como de primero era; y desde el punto que pusiere platica para lo enagenar, contra lo que dicho es, cayga en la dicha pena e quede por ualdio y pase la posesion y señorío en el conçeço sin ningun avto de posesion, que desde agora para entonçes y desde entonçes para agora nos constituymos por posehedores en nonbre deste conçeço.

Yten que si en qualquier tiempo el tal majuelo dexare de ser viña o se perdiere o desçepare, quede la tierra por escarida e valdia, como de primero, y que qualquier vezino la pueda entrar, conforme a la costunbre de los escaridos.

Titulo [decimotercero]. De los que cogen ganados de fuera.

Yten que ningun vezino ni morador deste lugar sea osado a acoger ganados algunos de los vezinos de fuera del dicho lugar para los traer por las planas y dehesas y pastos deste dicho lugar ni entrepanes dél, publica ni secretamente, so pena de çien marauedis por cada vez que fuere hallado en ello, e que para otro dia lo heche fuera de los dichos pastos; y que tantas vezes cayga en la dicha pena quantas vezes fuere hallado con ello.

Titulo [decimocuarto]. De los puercos que andan en el pinar.

Yten es costunbre que los puercos que andan al pinar, desde el dia de san juan hasta cogido el pan e vino, se traygan al lugar por

rrazon que (que)dando fuera se suelen hazer grandes daños en los panes e viñas. Hordenamos que ansi se guarde, so pena de çien marauedis por cada uez; e, si quedaren en los comunes, que queden de noche acorralados en corral donde no se puedan salir e, si tal corral no tuvieran o fueren hallados de noche fuera del corral, caygan en la dicha pena; e si fueren hallados en alguna tierra que tenga açinas o hazes de noche o de dia, çien marauedis por cada vez demas del daño; e quel que no hechare los puercos al porquero quede obligado de pagar como si se los guardase el porquero, porque ansi se a vsado e conviene.

[Título decimoquinto]. De la teja.

Yten que por causa de no aber teja en este dicho lugar ay muchas casas paxizas y, demas de ser malas y de poco prouecho y de poca duracion e valor, afean la postura e adorno del dicho lugar y se gasta en ellas mejor madera que en las casas tejadas; hordenamos e mandamos que el alcalde e regidores hagan buscar tierra en estos terminos de que se pueda hazer teja y ladrillo y dar tal horden cómo este pueblo esté bastecido de teja y que para este efeto se gaste de los propios del conçejo lo que les paresçiere que conviene.

Titulo [decimosexto]). Del peso de la harina.

Yten hordenamos e mandamos que se conserve el peso de la harina y se guarden las hordenanças de la villa y se trasladen y se pongan en estas hordenanças.

[Título decimosétimo]. De la guarda deste libro.

Yten que el original destas hordenanças, signado e avtorizado, quede en la arca del conçejo y dél se saque traslado que trayan los alcaldes e regidores para juzgar por él; y si se rronpiere o dañare, se pueda sacar del original cada uez que sea menester.

[Título decimooctavo]. De la uellota.

Yten que por quanto en las dichas dehesas ay vellota, más vnos años que otros, hordenamos e mandamos que los dichos alcaldes e regidores la acoten e pongan penas segun que les paresçiere y, entretanto que otra cosa no declaren, paguen de pena a dos marauedis de dia e quatro marauedis de noche; y el rebaño del ganado ovejuno e cabruno pague diez marauedis de dia e veynte de noche siendo de diez cabeças arriba y, dende abaxo, a marauedi e a dos; e, si

fueren tomados dos vezes en la semana, doblada la pena; y, si fueren tomado tres vezes, por la rebeldia, a merçed del conçejo; y qualquiera que vareare de dia, çinquenta maravedis, y de noche, çiento; y qualquier que hallaren trayendo vellota pague la mesma pena. Aplicadas la mitad para el conçejo e la otra mitad para el denunçador.

En el lugar de cantalexo, aldea e termino e juridiçion de la villa de sepulveda, a treze dias del mes de setiembre, año del nasçimiento de nuestro saluador jesuchristo de mill e quinientos e çinquenta años, estando dentro en la casa del conçejo del dicho lugar ques en la plaça publica dél, çerca de la yglesia del dicho lugar a canpana tañida, todos los contenidos en la caveza destas hordenanças y estando todos los susodichos juntos en presencia de mí, pedro dies gallego, escriuano publico del numero de la villa de sepulveda y su tierra por su magstad y escriuano publico del conçejo de la dicha villa y ante los testigos de yuso escriptos, el dicho alcalde e regidores e deputados e procurador e los demas de suso contenidos presentaron ante mi las hordenanças que de suso van encorporadas, que dixeron aver hecho e mandado hazer en nonbre del dicho conçejo para la buena governaçion del pueblo, las quales pidieron a mi el dicho escriuano las leyese e publicase publicamente para que se guardasen y cunpliesen, las quales yo el dicho escriuano ley e publiqué presentes todos los susodichos; e, leydas e publicadas, todos a vna boz dixeron que las dichas hordenanças heran buenas y justas e convenientes e muy provechosas al dicho conçejo e vezinos dél, e querian que se guardasen y cumpliesen en todo e por todo como en ellas y en cada vna dellas se contiene. E ansi dixeron que las otorgavan e otorgaron ante mi el dicho escriuano e testigos que fueron presentes, juan de la oliua e diego perez, escriuano e bartolome de valverde, vezinos de la dicha villa de sepulveda, y los dichos françisco de mate sanz e juan de contreras e andres vayon e juan de miguel sanz e pedro blasco lo firmaron de sus nonbres por ellos e por los demas vezinos del dicho lugar que presentes estaban que no supieron escrevir.

Francisco sanz (rubricado) juan de contreras (rubricado) juan de miguel (rubricado) andres vayon (rubricado) pedro velasco (rubricado).

FRANCISCO FUENTENEbro ZAMARRO

II

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS PROTOCOLOS NOTARIALES CASTELLANOS (Traslado de una nota de un registro de escribano de 1389)

El protocolo propiamente dicho nació en el reino de Castilla con la pragmática sanción dada por Isabel la Católica en Alcalá de Henares el 7 de junio de 1503. En ella se ordenaba que todos los escribanos tuvieran «un libro de prothocolo encuadernado de pliegos de papel entero» en el que se registraran «por extenso» las notas de los negocios jurídicos que ante ellos pasaren¹. Pero hasta llegar aquí, fue necesario un largo proceso evolutivo de varias centurias.

En la Alta Edad Media los notarios extendían los documentos ayudándose para su redacción de los formularios y de unos «apuntes» o «notas» que contenían lo esencial del acto jurídico, a saber, fecha, lugar, partes, estipulaciones del negocio y testigos. Según su posición en el dorso o margen del pergamino, esta «minuta» recibe el nombre de noticia «dorsal» o «marginal»². Un segundo paso se dio cuando, desde el siglo XI, se introdujo la práctica de escribir la noticia en una hoja aparte conservada por el notario: es la «scheda» o «schedula»³. A partir de mediados del siglo XII, los notarios no se limitaron a extender una mera «minuta» o esbozo, sino una redacción previa extractada del documento definitivo, como muy bien indica su nombre, «abbreviatura» o «imbreviatura», que aparecen sueltas («in cartulis») o en libros («in libris»), «notularium» o «protocollum», conservados por el notario

1. ARRIBAS ARRANZ, Filemón, «Escribanos públicos en Castilla durante el s. XV», en *Centenario de la ley del Notariado*, Madrid, 1964, págs. 219 y 220

2. BONO, José, *Historia del Derecho Notarial español*, vol. I, Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España, Madrid, 1979, pág. 182.

3. NÚÑEZ LAGOS, Rafael, *El documento medieval y Rolandino (notas de historia)*, Madrid, 1981, pág. 94.

como matriz del instrumento⁴. El punto de llegada de esta evolución histórica es el protocolo, cuyas características principales están contenidas en el Capítulo I de la pragmática de 1503⁵: que la nota «contenga toda la escritura que se hoviere de otorgar por extenso» y «que en las escrituras que ansi dieren signadas, ni quiten ni añadan palabra alguna de lo que estuviere en el registro, salvo la suscripción».

Si bien son relativamente abundantes los protocolos conservados en la Península Ibérica desde el reinado de los Reyes Católicos, por las leyes dadas al respecto, escasean los ejemplos de las «imbreviaturas» que los precedieron. Por ello nosotros deseamos contribuir al mejor conocimiento de esta etapa con la publicación de dos documentos inéditos del último cuarto del siglo XIV, concretamente del año 1389. Pertenecen a la colección diplomática del convento de «Santo Domingo» de Benavente (Zamora) y se hallan en el pergamino número 18 de la Carpeta núm. 3.526 de la sección de Clero del Archivo Histórico Nacional.

El documento núm. 2⁶, fechado el 14 de junio de 1389, contiene el acta del traslado público de una nota del registro de Antón Fernández, notario de Villalobos (Zamora) a petición del convento de Santo Domingo. Así, Juan Fernández de Villalobos y el prior fray Alfonso de la Cuesta, procuradores del convento, piden a Lorenzo Martínez, alcalde de Villalobos, que extendiera su mandato a Fernando Alvarez, notario del mismo lugar, para que les diese un traslado de la nota del protocolo de Antón Fernández, otro notario público de Villalobos, ante quien María Alfonso había hecho una donación al convento el 19 de marzo del mismo año⁷. El tal Antón Fernández se había ido «non saben para onde», y los Predicadores, que «nunca pedier de él la dicha carta de la dicha donación signada», solicitaban ahora, casi tres meses después de que fuera hecha la donación un documento que garantizase su propiedad. La «escritura» de Antón Fernández estaba «en fialdat» en casa de Alvar Fernández, librero morador en Villalobos, quien

4. BONO, José, *op. cit.*, pág. 184.

5. MATILLA TASCÓN, Antonio, «Escribanos, Notarios y Archivos de Protocolos en España», en *BDGAB XIV*, b.º 84-85 (1965), pág. 19.

6. Ver apéndice

7. Ver doc n.º 1.

la tenía en «una arca çerrada con llave e çerradura de fierro». Allí acuden alcalde, notario, solicitantes y testigos. En el interior del arca había un «cartapel» en el que estaban escritas las contratas pasadas aquel año ante Antón Fernández, y entre ellas, la donación de María Alfonso a los Predicadores de Benavente. Tras las pertinentes comprobaciones, el alcalde dio autoridad a Fernando Alvarez para «que trasladase la dicha nota verbo por verbo commo en el dicho cartapel se contenía e que non cresçiese nin menguase en ella ninguna razón nin palabra». Suponemos que se realiza este traslado y no un documento «in extenso», algo factible, ya que la matriz del documento es el registro, porque el notario no había fallecido (de hecho este dato no aparece reflejado en el documento), su puesto no estaba vacante y sólo fuera una ausencia temporal. En tal caso, otro notario no podía emplear su registro para emitir documentos, pero sí hacer traslados de él, con la correspondiente intervención de la autoridad.

Diplomáticamente, el documento es un acta de traslado y como tal comienza por la fecha crónica completa (año según la era cristiana⁸, día de la semana y día de del mes) seguida de una notificación de carácter universal⁹ y el expositivo, en el que se narra la comparecencia ante el alcalde de Villalobos de los dos frailes y su petición. Una vez en la casa del librero que custodiaba la «pieça de escriptura que fincó del dicho Antón Ferrández» se transcribe íntegra la nota tras la frase «fecha en esta manera que se sigue». Una vez inserta, el portavoz del convento solicita del alcalde el decreto para que el notario trasladase públicamente la nota y la signase con su signo con el fin de que «el trasllado o trasllados . valyesen e feziesen fee en juizio e fuera de él en todo lugar do paresçiesen asy commo sy fuese escripta e signada de mano del dicho Antón Ferrández, notario, e assy commo escripta de notario público debe valer e fazer fee». Continúa el anuncio de la validación, en el que se alude al ruego de los Predicadores, la enumeración de los testigos y la suscripción del notario con su signo.

8. En las Cortes de Segovia de 1348 se ordenó utilizar el cómputo de la era cristiana para fechar los documentos, sustituyendo al de la era hispánica, empleado hasta entonces.

9. «Sepan quantos esta carta vieren».

La nota (doc. núm. 1), como «imbreviatura» que es, contiene lo esencial del negocio jurídico. Comienza por la fecha, día de la semana y día del mes, no expresándose el año, innecesario por la estructura cronológica del registro. Está redactado de forma indirecta y consta de los datos personales de la donante (nombre y apellido, nombre del marido, lugar y barrio de vecindad), objeto de la donación (una viña, debidamente delimitada), donatario («los frayres del convento del monesterio de Santo Domingo») y expositivo de tipo espiritual («por amor de Dios e por su alma»). Las cláusulas corrientes en las donaciones están etceteradas, terminando con la consignación de los testigos, únicamente dos, pese a que el Fuero Real prescribía la intervención de «tres testigos al menos». Es probable que en el momento de extender el documento, se añadiera un tercero, quizá el mismo amanuense, siendo un claro indicio de que ya en el siglo XIV la fuerza probatoria del documento no residía en la presencia de los testigos, sino en la suscripción y signo notariales.

RAQUEL DEL CARMEN FERNÁNDEZ

APENDICE

1

1389, marzo, 19

Nota de un registro de escribano en la que María Alfonso dona una viña al convento de Santo Domingo de Benavente.

B, inserto en el doc. n.º 2

Viernes, diez e nueve dias de março.

Commo María Alfonso, muger que fue de Fernand Gill, moradora en Çerezinos, barrio de la ordende San Johán, da / una vina que ella ha en término de Villalobos, a do dizen Carrera de Villaseca, fronteras dos vinas de Alvar Pérez Osorio e el camino de Villaseca. Esta dicha vina da a los frayres del / convento del monesterio de Santo Domingo por amor de Dios e por su alma, para que la ayan por juro de heradat para sienpre jamás, con entradas e con salydas e con todos sus derechos etcétera.

Testigos: /¹⁸ Johán Fernández de Villalobos e Fernand Joháncz Callado.

2

1389, junio, 14

Acta del traslado del protocolo de Antón Fernández, notario de Villalobos, a petición del monasterio de Santo Domingo de Benavente.

A, A.H.N , Clero, carpeta 3526 n.º 18. Pergamino, 175 mm × 360 mm. Buena calidad, buen estado de conservación. Margen superior 8 mm, margen izquierdo 10 mm, margen derecho 3 mm, margen inferior 34 mm, separación entre renglones 6 mm. No es totalmente rectangular. Tinta color ocre. Letra precortesana.

Notas: en el ángulo inferior izquierdo, bajo el tenor documental, hay en tinta ocre oscura una «d» mayúscula con dos puntos debajo, uno delante y otro detrás. Dorso: en letra coetánea y tinta ocre: «(Calderón) Carta de donación de los frayres con abtoridat de / allcalde. XVI maravedises». En letra cortesana y tinta ocre muy clara hay una anotación de la que sólo se lee: «Villalobos [..] / donación (que) fuera de huna vyna. Año 1389. Escrivano: Fernán Alvarez». En letra del s. XVIII y tinta ocre oscuro: «Viña en Villalobos. Debajo, en tinta negra y letra del s. XIX: Año de 1389».

En el anno del nascimiento del nuestro Salvador Jhesu Christo de mill e tresientos e ochenta e nueve annos, lunes, catoreze dias de junio.

Sepan quantos esta carta vieren commo en presençia de mí, Fernand / Alvarez, notario público en Villalobos e en todo su condado por Alvar Pérez Osorio, sennor de Villalobos, en lugar de Ruy Ferrández Cantón e de los testigos de yuso escriptos, este dicho día, en este dicho lugar ante Lorenço / Martínez allcalde en este dicho lugar por el dicho sennor Alvar Pérez, vy que paresçieron ante el dicho allcalde Johán Ferrández de Villalobos e frey Alfonso de la Cuesta, frayre de la orden de Santo Domingo e su prior del convento / to del monesterio de Santo Domingo de Benavente, e procuradores que son del dicho convento segund que fezieron çierto al dicho allcalde por una carta de procuraçión signada de escrivano público que luego mostraron ante dicho / allcalde, et fezieron leer por mí, el dicho notario, la qual carta de procuraçión levaron para guarda de su derecho. E dexieron al dicho allcalde en que en este anno en que ora estamos, en el mes de marçio que ora pasó de la /⁶ era de esta carta, que María Alfonso, muger que fue de Fernand Gill, moradora en Çerezinos, barrio de la orden de San Johán, que feziera donaçión de una vna que ella avía en término de Villalobos al dicho / convento de Santo Domingo de Benavente por Dios e por su alma, e que pasara la carta de la dicha donaçión e estava escripta por Antón Ferrández, notario que era en este dicho lugar de Villalobos a la sazón, e que nunca / pedier de él /de él/ la dicha carta de la dicha donaçión signada. E agora que el dicho Antón Ferrández que se fuera, non saben para onde, e que lles fezieran saber que la escriptura del dicho Antón Ferrández que quedava aquí en este /⁹ dicho lugar e que la posieran en fialdat en mano e en poder de Alvar Ferrández, lybrero, morador en este dicho lugar. E pedyeron al dicho allcalde que fuese a las casas del dicho Alvar Ferrández o catase omna / dize catar la dicha escriptura que fincó del dicho Antón Ferrández notario, e sy fallase la nota de la dicha carta de donaçión, que diese abtoridat a mí, el dicho Fernand Alvarez, nota-

rio sobredicho, para que la traslada- / se e ge la diese escripta o signada de mío signo. E luego el dicho alcalde fue a las casas en morava el dicho Alvar Ferrández, e mandó al dicho Alvar Ferrández que estava y presente, que apresentase ante él la /¹² dicha escriptura que fincó del dicho Antón Ferrández, notario. E luego el dicho Alvar Gonçález presentó ante el dicho alcalde de una arca çerrada con llave e çerradura de fierro en que estava pieça de escriptura que fincó del / dicho Antón Ferrández segund que por él paresçia e se en él contenía, en el qual dicho cartapel estavan escriptas notas / de contrabtas que pasaran este anno en que estamos de la era sobredicha por el dicho Antón Ferrández, notario, entre las quales notas que estavan en el dicho cartapel, estava una nota escripta de la dicha /¹⁵ donaçion, fecha en esta manera que se sigue:

(Aquí se inserta el doc. n.º 1)

E la qual nota leyda, el dicho frey Alfonso, asy commo procurador del dicho convento dixo e pidió al dicho alcalde que diese abtoridat e derecho a mí, el dicho / Fernand Alvarez, notario e me mandase que traslladase la dicha nota segund que estava escripta en el dicho cartapel e que la diese escripta e signada de mío signo e interposiese su deçleto e manda- / se que valyese e feziere fee en juyzio e fuera de él e en todo lugar do paresçiese, assy commo escripta de notario público. E luego, el dicho alcalde, vista la dicha nota en el dicho cartapel, fecha /²¹ en el tenor sobredicho, e visto el dicho pedemento, dixo que por quanto el conosçia la dicha escriptura e sabía que quedó del dicho Antón Ferrández, notario, que mandava e mandó a mí, el dicho Fernand / Alvarez, notario sobredicho, que trasladase la dicha nota verbo por verbo commo en el dicho cartapel se contenía e que non cresçiese nin menguase en ella ninguna razón nin palabra, e que la diese escripta / e signada de mío signo al dicho frey Alfonso. E interpuso su deçleto en el traslado o trasllados que yo asy de ella feziessen o mandase fazer, signados de mío signo para que valyessen e /²⁴ feziere fee en juyzio e fuera de él en todo lugar do paresçiesen asy commo sy fuese escripta e signada de mano del dicho Antón Ferrández, notario, e assy commo escripta de notario público / deve valer e fazer fee. E de esto en commo pasó por ante mí, el dicho Fernand Alvarez, notario sobredicho, el dicho frey Alfonso pedyóme que lle diese de ello carta pública con tras- / lado de la dicha nota signada de mío signo, para guarda del derecho del dicho convento e suyo en su nonbre.

Testigos que fueron presentes: Garçia Alfonso de la Plaça e Pero Ferrández, fijo de Lo- /²⁷ renço Yuánez e Johán Ferrández Privado, moradores en Villalobos e otros omnes.

E yo, Fernando Alvarez, notario público sobredicho, fuy presente a esto que sobredicho es, e por mandado e abtoridat / del dicho alcalde e al dicho pedimento del dicho frey Alfonso escriví ende esta carta con el traslado de la dicha nota e fize en ella mío signo tal (signo) en testimonio / de verdat /³⁰ Fernand Alvarez.

III

LA LIBRERIA DE DON TOMAS DE LA TAJADA, ABOGADO DE LOS REALES CONSEJOS DURANTE LOS REINADOS DE CARLOS II Y FELIPE V (1714)

De todos es conocida la complicada, lenta y anquilosada burocracia que movía la administración española durante el gobierno de la Casa de Austria, compuesta por un numeroso funcionario que iba desde los soberbios y ostentosos presidentes de los distintos Consejos hasta los simples porteros, pasando por un sinfín de abogados, juristas, escribanos, oidores, relatores, notarios, etc., que pululaban por los patios y otras dependencias del desaparecido Alcázar de Madrid, sede de las oficinas reales. Sin embargo es muy poco lo que conocemos sobre esos cientos de funcionarios —auténtica nobleza de toga—, que tan destacada participación tuvieron en la administración y gobierno de los inmensos territorios que llegó a poseer la Casa de Austria española. En efecto, nada sabemos sobre los gustos, formación, cultura, economía, etc., de esa importante clase social, tal vez la más representativa de la España de la época. Para tratar de llenar en parte ese vacío informativo, vamos a dar a conocer la importante librería de un abogado de los Reales Consejos, el vizcaíno don Tomás de la Tajada Quintana, que ocupó ese cargo durante el reinado de Carlos II y primeros años del de Felipe V, y que constituye un valiosísimo testimonio sobre la formación intelectual y profesional de un jurista del siglo xvii. Pero antes de ello vamos a esbozar un breve esquema de su vida, con noticias extraídas de su testamento, otorgado en Madrid el 13 de octubre de 1714.

Don Tomás de la Tajada Quintana nació en «el lugar de veci de las encartaciones del señorío de vizcaya», fruto del matrimonio formado por don Tomás de la Tajada Hoz Samaniego y doña María de la Quintana, ambos naturales de la citada población de Beci y de condición hidalga. El joven Tomás debió recibir una

sólida formación jurídica y humanística, trasladándose después a Madrid al igual que otros muchos vascos de la época que en la capital de la Monarquía encontraron fortuna y posición social. Precisamente la abundancia de «vizcaínos», como se denominaban en el siglo XVII a todos los vascos, en altos puestos de la administración española a partir del reinado de Felipe II ha tentado la curiosidad de los historiadores que han tratado de explicarla con distintas y variadas teorías. Para G. Muro la respuesta hay que buscarla en la decisión de Felipe II de elegir secretarios vascos, ya que por el hecho de serlos eran extranjeros en Castilla y por ello se sentían muy vinculados al monarca, al que servían con toda fidelidad¹. El duque de Maura piensa que los vascos eran elegidos por su condición de hidalgos y su rectitud². José Antonio Escudero cree que el origen del fenómeno hay que buscarlo en la aparición de los primeros vascos en la administración real, ya que éstos crearon una suerte de nepotismo al pasar los cargos de un familiar a otro³. Por su parte Janine Fayard opina que los vascos eran elegidos por sus cualidades personales⁴.

Una vez establecido en Madrid y con una posición económica desahogada, don Tomás de la Tajada contrajo matrimonio con doña Juana Micaela Rey, camarista de la reina María Luisa de Orleans, primera esposa de Carlos II, de cuyo matrimonio nacieron dos hijos Manuel Urban y Tomás Francisco.

El día 13 de octubre de 1714 y ya sintiéndose muy enfermo, don Tomás de la Tajada Quintana otorgaba su testamento⁵. En el pedía ser amortajado con el hábito de San Francisco y sepultado en la capilla de Nuestra Señora de los Remedios sita en el madrileño y desaparecido convento de la Merced Calzada. Ordenaba se dijese por su alma 500 misas rezadas y dejaban como here-

1. G. MURO, «Vida de la princesa de Eboli». Madrid, 1877, 20.

2. Duque de MAURA, «Vida y reinado de Carlos II». Madrid, 1954 Tomo I, 63.

3. José Antonio ESCUDERO, «Los secretarios de Estado y del Despacho». Madrid, 1969. Tomo III, 382.

4. Janine FAYARD, «Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746)». Madrid, 1982, 222

5. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 10517. Sin foliar.

deros de sus bienes a sus dos hijos, bajo la tutela de su madre «por hallarse en edad pupilar».

Don Tomás de Tajada Quintana murió en Madrid el 23 de octubre de 1714, comenzando el 10 de noviembre el inventario de sus bienes, para una vez concluido proceder a la tasación de los mismos⁶. De esta manera el 3 de diciembre de 1714 el pintor Antonio Julián Antón, «de edad de treinta y cinco años poco mas o menos» evaluaba las pinturas y esculturas del difunto, entre las que destacaban las siguientes:

— Dos retratos, uno de su Magd. el sr. rey Don Phelipe quinto y la otra de la sr^a. reyna doña Maria Luisa Gariela que esta en el cielo con sus marcos negros y tarjetas doradas, 720 rs.

— Otros dos retratos, el uno de la reyna francesa y el otro de doña Juana Rey su camarista, de medio cuerpo con sus marcos negros y tarjetas doradas, 120 rs.

— Dos retratos de medio cuerpo de alabastro de Carlos quinto y su muger, 15 rs.

También el mismo día 3, el ebanista Pedro Acevedo tasaba «las alajas de madera y otras cosas», entre las que se incluía «una cruz de concha con su peana de los mismo», valorada en 150 reales. El 4 de diciembre del contraste Juan Muñoz tasaba los objetos de plata.

El 6 de diciembre de 1714 Juan Rodríguez de Cisneros, mercader de libros que dijo ser de treinta y quatro años poco mas o menos», valoraba la importante biblioteca del abogado vizcaíno, que comprendía las obras más representativas de los más ilustres juristas españoles y extranjeros de los siglos XVI y XVII, entre ellos el holandés Hugo Grocio, los portugueses Antonio y Pedro Barbosa, los italianos Prospero Fagnano, José Mascardi, Juan Esteban Menochio, Juan Bautista Lanceloto y Julio Chiaro, y los españoles Diego Antonio Yáñez, Tomás Cerdán de Tallada, Diego Collantes de Avellaneda, Diego Saavedra y Fajardo, José Vela, Francisco Amaya, Antonio Pichiardo, Pablo Durán, Tomás Mieres, Juan Matienzo, Tomás Carloval, Gaspar Baeza, Francisco Alfaro, Francisco Ramos del Manzano, Hermenegildo Rojas, Lorenzo Matheu, Ro-

6. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 10516 Sin foliar.

drigo Suárez, Juan Solórzano Pereira, Juan Velázquez de Acevedo, Juan Pablo Fontanella, Andrés Mendo, Tomás Sánchez, Miguel Cortiada, Cristóbal Paz y Luis Peguera. Poseía además algunas importantes obras teológicas de autores tan significativos como los españoles Juan Gil Trullench, Antonio Calderón y Pedro de Hermosilla, el alemán Hermann Busembaum y los italianos Ascanio Tamburius, Roberto Belarmino y el cardenal de Luca.

Don Tomas de la Tajada debió ser muy aficionado a la Historia y así en su librería se contaban dos ejemplares de los Anales de Cornelio Tácito y las obras de Juan de Ferrera, Lucas Montoya, Juan de Mariana y Esteban de Garibay. Tenía además las obras de Cicerón y Casiodoro, la Filosofía secreta, de Pérez de Moya, el Quitador de oro y plata, de Juan de Arfe, el Examen de Ingenios de Huarte de San Juan, La Numancia, de Cervantes, y otras varias de Juan Eusebio Nieremberg, José de Aguilar, Santa Teresa de Jesús, la monja mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, Calderón de la Barca, Sebastián de Covarrubias, Lope de Vega, Ludovico Blosio, Juan Márquez, etc.

Digamos por último que la correcta identificación de títulos y autores no resulta tarea fácil, ya que dictados por un escribano y copiados por otro los errores son numerosos, complicado aún más cuando se trata de autores extranjeros y por aparecer, a veces, en abreviatura. La tasación se realizó de la manera siguiente:

— Primeramente taso un juego con veinte tomos del cardenal Luca, los dize y nueve ympresion de Roma, primero y segundo de Deciss. ympresion de Lyon (Juan Bautista Cardenal de Luca.—Opera Vareia), 850 rs.

— Otro juego con quatro tomos de Savelli ympresion de Venecia, 200 rs.

— Otro juego con cinco tomos del Bullario ympresion de leon, 350 rs.

— Otro juego con veinte tomos de Barbosa, los diez y nueve ympresion de leon y la Summa Apostolica ympresion de Geneoba (Agustín Barbosa.—Opera omnia. Lyon 1657), 600 rs.

— Asismismo taso otro Juego con ocho tomos de González ympresion de leon, 290 rs.

— Otro juego con nueve tomos de fagnano ympresion de colonia (Prospero Fagnano.—Sobre las Decretales. Colonia 1676), 240 rs.

— Otro juego con quatro tomos de Cortiada ympresion de leon (Miguel Cortiada.—Obras, varias ediciones), 170 rs.

— Otro juego con quatro tomos de tamburius ympresion de colonia (Ascanio Tamburius), 130 rs.

— Otro juego con quatro tomos de Donatos ympresion de Colonia, 130 rs.

— Otro tomo Concilio Lusitano adicionado de Mendoza y González ympresion de leon, 60 rs.

— Otro tomo Joseph de Angelis de ofiz. Bar. ympresion de Napoles, 30 rs.

— Mas taso un tomo de Tiraquell ympresion de leon, 80 rs.

— Otro juego de tres tomos de Busat ympresion de leon, 90 rs.

— Otro Código fabr. ympresion de Colonia, 20 rs.

— Otro juego de tres tomos de Zevallos ympresion de anyuerpia, 100 rs.

— Un juego con quatro tomos de Tondictos, los tres ympresion de leon y el otro de antuerpia, 180 rs.

— Otro juego de seis tomos de Sánchez, los cinco ympresion de leon y el primero yn decalogo ympresion de Madrid (Tomás Sánchez.—Opera omnia. Lyon 1690), 200 rs.

— Un juego con tres tomos de fiasco ympresion de Madrid, 200 rs.

— Otro juego con quatro tomos de Mendo ympresion de leon (Andrés Mendo.—Epitome opinionum moraliun. Lyon 1674), 480 rs.

— Un juego con trece tomos de fermesinos ympresion de leon, 480 rs.

— Otro tomo Amiden de estilo Dataria ympresion de voencia, 15 rs.

— Un juego de dos tomos de Castejón ympresion de Madrid, 45 rs.

— Otro juego con diez tomos de Castillos ympresion de leon, 150 rs.

— Un juego con tres tomos de fragosos ympresion de leon, 150 rs.

- Un juego con seis tomos de Salg. ympresion de leon, 220 rs.
- Un juego de nueve tomos de Gutiérrez, los siete ympresion de leon y los dos de francfort, 420 rs.
- Un juego con cinco tomos de corbans con faria su adic., los dos ympresion de jenoba y los tres de faria en leon, 150 rs.
- Otro juego con quatro tomos de Marini ympresion de leon, 170 rs.
- Un juego de cinco tomos de Giurba, los quatro ympresion de leon y el otro de Jenoba, 150 rs.
- Un juego con quatro tomos de fortanela ympresion de leon (Juan Pablo Fontanella), 220 rs.
- Otro juego de cinco tomos de Julio caponio ympresion de leon, 220 rs.
- Otro juego de quatro tomos de patros, los tres ympresion de Jenciba y el otro de leon, 120 rs.
- Otro juego de siete tomos de Sardes, los tres ympresion de venecia, tres de fancfort y un adicionador, 85 rs.
- Otro juego con tres tomos de Mascardo de aprobaciones, los dos ympresion de leon y el otro de Venecia (José Mascardi.—Conclusiones omnium probationuh. Venecia 1588), 60 rs.
- Otro juego con trece tomos de Menorchios ympresion de francfort (Juan Esteban Menochio), 160 rs.
- Asimismo taso otro juego con tres tomos de la Nueva recopilación ympresion de Madrid, 180 rs.
- Otro juego de Acevedo con siete tomos ympresion de Salamanca y Madrid (Juan Velázquez Acevedo), 80 rs.
- Otro juego con quatro tomos recopilacion de las yndias y casa de la contratación de Sevilla hechas por el señor dn. Phelipe quarto, 25 rs.
- Un tomo Leyes de la Mesta, 8 rs.
- Otro tomo Codigo de teodosio ympresion de leon, 24 rs.
- Dos tomos concordancias de Jiménez ympresion de toledo, 24 rs.
- Asimismo taso otro tomo Sinodales de toledo ympresion de Madrid, 15 rs.
- Otro tomo Sinodales de Burgos ympresion de aquella ciudad, 15 rs.

— Otros tomos estatutos de Salamanca ympresion de aquella ciudad, 10 rs.

— Otro tomo escritura de millones ympresion de Madrid, 36 rs.

— Otro tomo practica de rentas reales ympresion de Madrid, 15 rs.

— Otro tomo Fuero Juzgo ympresion de Madrid, 24 rs.

— Otro tomo fuero real de españa ympresion de Salamanca, 15 rs.

— Otro tomo Paz leyes de estilo ympresion de Madrid (Cristóbal Paz.—Scholia in leyes regias Styli. Madrid 1608), 10 rs.

— Otro tomo hordenamiento real ympresion de Salamanca, 20 rs.

— Otro tomo hordenanzas de la chancilleria de Granada ympresion de aquella ciudad, 12 rs.

— Mas taso dos tomos Consejos de Valenzuela ympresion de Madrid, 55 rs.

— Otros dos tomos Disertaciones de Vela ympresion de Granada (José Vela.—Disertaciones de Derecho. Granada 1638), 44 rs.

— Otros dos tomos hermosilla ympresion de Madrid (Pedro de Hermosilla), 50 rs.

-- Otros dos tomos Antunez ympresion de Lisboa, 60 rs.

— Otros dos tomos Politica de bobadilla ympresion de Madrid, 100 rs.

— Otros dos tomos Pichiardo sobre la Ynstittut. ympresion de Valladolid (Antonio Pichiardi.—In quator Institutionum. Salamanca 1618), 30 rs.

— Mas taso un juego con seis tomos de Mario Cutillo ympresion de Palermo, 150 rs.

— Otros dos tomos de Canzerio ympresion de Barcelona, 50 rs.

— Un juego de Salcedo con seis tomos, dos de la Politica, ydem theatrum honoris, ydem yn recop., ydem examen de la verdad, ydem de contrabando ympresion de Madrid, 100 rs.

— Otro tomo Practica economica civil de Ignacio lopez de salcedo ympresion de alcala, 16 rs.

— Tres tomos de Narbona opera ympresion del reyno, 36 rs.

— Un juego de cinco tomos de Molina ympresion de Venecia, 80 rs.

— Un juego de cinco tomos de Solorzano ympresion de Madrid (Juan Solorzano Pereira.—Obras póstumas. Salamanca 1654, Madrid 1676), 300 rs.

— Tres tomos roderici ympresion de Salamanca (Rodrigo Suárez o Juárez), 120 rs.

— Cinco tomos Decissiones de Coccines ympresion de Roma, 180 rs.

— Tres tomos sorto ympresion de Salamanca, los dos yn quarto sentetiarum y otro de Justitias et jure (Domingo Soto.—Comentariorum in quartum Sententiarum. Salamanca 1596; idem.—De Justitia et jure. Salamanca 1569), 30 rs.

— Otros quatro tomos de Mandorsio ympresion de venecia, los dos de ynrrég^a. cancelaria, otro de monitor y otro pragis signatura, 60 rs.

— Asimismo taso un juego con dos tomos de Juan Bapt^a. carlini controbersis juris ympresion de leon, 40 rs.

— Otro juego con dos tomos Deciss. de Serafin ympresion de Colonia, 60 rs.

— Otro juego con dos tomos sporelli deciss. ympresion de colonia, 50 rs.

— Un tomo Loterius de re veneficiari ympresion de leon, 40 rs.

— Dos tomos Mortaro de Causas pias ympresion de Genova, 55 rs.

— Un tomo leies de Justitia et jure ympresion de antuerpia, 30 rs.

— Tres tomos Garcia de veneficis ympresion de jenoba, 55 rs.

— Otro tomo Roderici Suarez opera ympresion de Antuerpia (Rodrigo Suarez), 24 rs.

— Otro tomo Leotardo de Usuris ympresion de leon, 50 rs.

— Dos tomos Peña Deciss. ympresion de leon, 50 rs.

— Un tomo Gonzalez yn regna cancelari ympresion de roma, 36 rs.

— Otro tomo Lara de anibers. et capellan ympresion de Madrid, 12 rs.

— Otros dos tomos Parissys de resignat. venefizis ympresion de roma, 24 rs.

— Otro tomo pwro Corrado de veneficis ympresion de Napoles, 30 rs.

- Otro tomo Deciss, de Jacobo Put ympresion de venecia, 15 rs.
- Otro tomo Deciss. de manzanero ympresion de Roma, 20 rs.
- Otros dos tomos Matheu de re criminalia, ydem de regimine rerum Valencia ympresion de leon (Lorenzo Matheu y Sanz.—Tractatus derre criminali. Lyon 1676, ydem.—Tratado de la celebración de Cortes del reino de Valencia. Madrid 1677), 120 rs.
- Un juego con tres tomos de tores de sucess. mayorat, ympresion de leon, 150 rs.
- Un tomo Parix de ynstromentorum e ditt. ympresion de leon, 66 rs.
- Otros dos tomos Donelus ympresion de leon, 44 rs.
- Dos tomos Legunes de fructibus ympresion de Madrid, 55 rs.
- Otros dos tomos olea ympresion de leon y las adiciones de Madrid, 80 rs.
- Otros dos tomos Otero de pasquis y dem. de officis ympresion de leon, 45 rs.
- Otros tres tomos Molina ympresion de leon, dos y otro de Madrid, 44 rs.
- Otros dos tomos pablo zachias questiones medico legal ympresion de leon, 60 rs.
- Otro tomo Valeron de transacizs. ympresion de leon, 36 rs.
- Asimismo taso otros dos tomos Rojas de ynconpatib. y su adicionador ympresion de leon (Hermenegildo Rojas.—Tractactus posthumus de incompatibilitate Regnorum ac Majoratum. Lyon 1669), 70 rs.
- Otro tomo Murga de veneficis ympresion de leon, 30 rs.
- Dos tomos Ramos ad leg. juridici ympresion de Madrid (Francisco Ramos del Manzano.—Ad legen julian), 40 rs.
- Otro tomo Velasco Jure perfect. ympresion de leon, 33 rs.
- Otro tomo Escobar de purit et nobil. ympresion turnani (Juan Escobar del Corro.—De puritate et nobilitate. Lyon 1637), 33 rs.
- Otro tomo rossa de execut. ympresion de venecia, 50 rs.
- Otro tomo Albaro velasco de consultaciones, 18 rs.
- Otro tomo Amaia yn codicis ympresion de leon, 33 rs.
- Asimismo taso cinco tomos escarzea de judicis ympresion de francfort, 120 rs.

- Otro tomo Crespi ympresion de leon, 50 rs.
- Otro tomo Henrique de utriusque fori ympresion de roma, 30 rs.
- Otro tomo Marta de juriditione ympresion de leon (Jaime Antonio Marta.—Tractatus de jurisdicione. Moglia 1609), 20 rs.
- Un juego con quatro tomos de los arcanos ympresion de jenoba, 160 rs.
- Otro tomo Pegas compet. ympresion de venecia, 24 rs.
- Otro tomo Palacios rubios (Juan López de Viveros, llamado Palacios Rubios.—Obras. Valladolid 1503, Colonia 1590), 18 rs.
- Otro tomo Morla emporium juri ympresion de venecia (Pedro Agustín Morla.—Emporium utriusque Juris. Valencia 1599), 18 rs.
- Otro tomo Molino de pactis ympresion de varcelona, 24 rs.
- Otro tomo Altamirano yn codicis ympresion de Madrid, 12 rs.
- Dos tomos Antonio Amato ympresion de Palermo, 24 rs.
- Otros dos tomos carlos gras ympresión de Barcelona, 18 rs.
- Otro tomo Guzman de ventat juris, 18 rs.
- Otro tomo acosta opera ympresion de Salamanca, 30 rs.
- Otro tomo Valdes dignit, regum ympresion de Granada, 12 rs.
- Asimismo taso otro tomo Ramirez de leg. regias ympresion de Zaragoza, 12 rs.
- Otro tomo Salazar de usut. et consuetud. ympresion de granada, 12 rs.
- Otro tomo Navarro de espol, eccº. ympresion de roma, 15 rs.
- Otro tomo Lanceloto ympresion de venecia (Juan Bautista Lanceloto.—Opera. Venecia 1593), 10 rs.
- Otro tomo Mesia yn causa panis ympresion de sevilla, 10 rs.
- Otro tomo Gironda de alcavalas ympresion de Madrid (García Gironda.—Degabellis. Madrid 1596), 10 rs.
- Otro tomo Alfaro de ofiz. fiscalies ympresion de Madrid (Francisco Alfaro.—De officio fiscalis. Madrid 1606), 16 rs.
- Otro tomo García de expensis ympresion de francfort, 15 rs.
- Otro tomo Mena var. quaest. ympresion de Salamanca, 10 rs.
- Otro tomo Vaeza Decima tut. ympresion de Granada (Gaspar Baeza), 12 rs.

— Otros dos tomos Sarmiento opera ympresion de burgos y astorga, 20 rs.

— Otro tomo Brito de loc. et conduc. ympresion de lisboa, 12 rs.

— Otro tomo feliz de zensis ympresion de Alcala, 22 rs.

— Dos tomos An.º Gomez faltos de portada, 20 rs.

— Otro tomo Cerlebal de Judicis primera y segunda parte (Tomás Carleval.—Disputationem Juris. Nápoles 1631), 20 rs.

— Otro tomo noguerol alega. ympresion de Mantua, 24 rs.

— Otro tomo Matienzo yn recopl. ympresion de Mantua, 24 rs (Juan Matienzo).

— Asimismo taso seis tomos discerpt. de Garciano y el escopa, los cinco de disertaciones, 90 rs y el escopa en 55 rs, ympresion de Colonia y el otro en Napoles, 140 rs.

— Dos tomos Barbossa de Martini ympresion de Madrid, 24 rs.

— Un juego con quatro tomos de ciceronis ympresion de venecia, 78 rs.

— Otro tomo Morquecho de deb. bon. ympresion de madrid, 18 rs.

— Otro tomo Bolero de conz. ympresion de Madrid, 20 rs.

— Dos tomos Velasco de privilexis primera, segunda y tercera, ympresion de Madrid, 30 rs.

— Otros seis tomos de Retes, dos en folio ynpresion de Salamanca, tres de quartilla de Venecia y uno de leon, 66 rs.

— Asimismo taso un tomo primero de Mieres con su adiciodador ympresion de Granada y Barcelona (Tomás Mieres), 18 rs.

— Otro tomo Peregrin de juri furi ympresion de Venecia, 14 rs.

— Otro tomo de Pinelo de bon. materna ympresion de Coimbra (Lucas Pinelli), 12 rs.

— Otro tomo Galbano de usufructus ympreso en flandes, 18 rs.

— Otro tomo escobar de razs. ympresión del reyno, 14 rs.

— Otro tomo Rodríguez de animis reditt. ympresion del reyno, 24 rs.

— Otro tomo espino de testamentis ympresion de Medina del campo, 18 rs.

— Otro tomo carrasco yn recop. ympresion de sevilla (Francisco Carrasco del Say.—In aliquas legis recopilationes regni Castillae. Sevilla 1620), 12 rs.

- Otro tomo Garcia de nobilit. ympresion de Alcala, 12 rs.
- Otro tomo porladori opera, primero, segundo y tercero, ympresion de Valladolid, 12 rs.
- Otro tomo Messa Bas. resol. ympresion de Napoles, 20 rs.
- Otro tomo Lasarte de alcavalas ympresion de Alcala (Ignacio de Lasarte.—De alcabala. Alcalá de Henares 1589), 8 rs.
- Otro tomo Albarado de conyucturis ympresion de Sevilla, 8 rs.
- Asimismo taso otro tomo Curia filipica primera y segunda, ympresion de Madrid, 15 rs.
- Otro tomo practica de paz ympresion de valladolid, 33 rs.
- Otro tomo Anguiano de leg. ympresion de Granada (Cristóbal Anguiano y Sedano.—De legibus et constitutionibus principum. Sevilla 1620), 12 rs.
- Otro tomo Silba responsorium ympresion de Madrid, 10 rs.
- Otros dos tomos Burgos de Paz consil et ad lege tursi ympresion de Medina del campo, 20 rs.
- Otro tomo Castillo yn leg. tauri (Diego del Castillo.—Las leyes de Toro glosadas. Burgos 1527), 4 rs.
- Otro tomo Cifuentes yn leg. tauri, 4 rs.
- Otro tomo Zervantes in leg. tauri, 10 rs.
- Otro tomo tello ad leg. tauri ympresion de Granada, 10 rs.
- Mas taso quatro tomos Avendaño, los dos ympresion de Salamanca y los otros dos en Alcala, 45 rs.
- Otro tomo Carpio de testamentis ympresion de Urosa (Francisco del Carpio.—De exequutoribus et comisariis testamentis libri IV. Osuna 1638), 33 rs.
- Otro tomo Matienzo yn decalog. relat ympresion de Valladolid (Juan Matienzo. Dialogus reatoris ad advocati. Valladolid 1559), 30 rs.
- Otro tomo Guacino de ynquisitt. ympresion de Genova, 30 rs.
- Otro tomo San lexiario resol. leg. ympresion de leon, 30 rs.
- Dos tomos Anxelo de adquir. poeses. et lexm^a contradictore, ympresion de leon, y jenoba, 40 rs.
- Otro tomo ernix. de fideyus ympresion de salamanca, 20 rs.
- Otro tomo Decus de Matheu de afflictis ympresion de Venecia, 20 rs.

- Otro tomo Paulo de remilio deciss. rota ympresion de francfort, 18 rs.
- Otro tomo Vinzenz. fuss^o cons^o ympresion de colonia, 15 rs.
- Otro tomo Peguera practica criminal ympresion de varcelona (Luis Peguera.—Liber quartienum criminalium in actu practico. Barcelona 1585, 1605, 1611), 8 rs.
- Otro tomo Deciss. de Boerio ympresion de francfort, 15 rs.
- Otro tomo Gaito de credito ympresión de Colonia, 20 rs.
- Otro tomo Paz de tenuta primero y segundo ympresion de Valladolid (Cristóbal Paz.—De tenuta seu interduto et remedio posesorio summarissimo. Valladolid 1615), 20 rs.
- Otro tomo Cantera quaestions. crims. ympresion de Salamanca, 12 rs.
- Otro tomo Deciss. de Gama ympresion de lisboa, 15 rs.
- Tres tomos carzprou prax. crims. ympresion de francfort, 60 rs.
- Otro tomo Julio claro cum boyardo de leon (julio Chiaro.—Jul. Clari Alexandrini opera omnia, sive practica civilius et criminalis cun adiciones de Bayardo. Leyon 1672), 30 rs.
- Otro tomo Deciss. de Paul duran ympresion de leon (Pablo Durán.—Decissiones sacrae rotae romanae. Zaragoza 1635), 30 rs.
- Mas taso seis tomos del derecho civil ympresion de leon, 8 rs.
- Otro tomo Acuña deciss. sac. rot. ympresion de leon, 8 rs.
- Otro juego con quatro tomos del derecho canónico, los dos ympresion de leon y el otro de paris, 60 rs.
- Otro juego con quatro tomos de las Partidas de gregorio lopez, los tres ympresion de Salamanca y el otro de madrid, 120 rs.
- Un tomo crespelio Summa ecc^a. ympresion de leon (Pedro Crespet.—Summa catholicae fidei. Lyon 1598), 20 rs.
- Quatro tomos Navarro opera ympresion de leon, 66 rs.
- Cinco tomos Pedro Gregorio opera, los tres primeros ympresion de leon y los dos de francfort, 80 rs.
- Otro tomo actos de la Corte del reyno de Aragon ympresion de Zaragoza, 6 rs.
- Otro tomo quesada Cuest. juris, ympresion de Salamanca, 6 rs.
- Otro tomo Alejandro juri adiss. ad Ramos Manzano ympresion de Madrid, 8 rs.

- Otro tomo fueros de vizcaia, 4 rs.
- Quatro tomos de alegaciones, 24 rs.
- Otras alegaciones duplicadas en tres legajos, 6 rs.
- Otro papel sobre la veatificación de frai francisco zuns., 6 rs.
- Otro tomo fueros de Vizcaia, 4 rs.
- Otro tomo reformaciones que hizo Su Magd. de la Unibersidad de Alcala de henares, 6 rs.
- Otro tomo Privilegios de la horden de la trinidad, 3 rs.
- Asimismo taso otro tomo Basily Ponty de sacramento matrimonio, ynpresion de leon, 33 rs.
- Otro tomo rocaberti de ynfalitat, ympresion de salamanca, 15 rs.
- Otro tomo oliverio deciss. de Gregorio XV ympresion de leon, 22 rs.
- Asimismo taso un juego con veinte y tres tomos de farina-
cio ympresio de leon y antuerpia, 400 rs.
- Otro tomo Lambertino de juri patron, ympresion de leon,
22 rs.
- Otros dos tomos Corpus juris canonici ympresion de leon,
60 rs.
- Otro tomo Ynformaciones juris, 10 rs.
- Otro juego con siete tomos de alegaciones diferentes, 42 rs.
- Otros dos tomos Amato ympresión de Napoles, 12 rs.
- Otros tomos pargamanticas diferentes.

LIBROS DE A FOLIO

- Asimismo taso tres tomos obras del padre eusebio ympre-
sion de madrid (Juan Eusebio Nieremberg.—Obras. Madrid), 80 rs.
- Otro tomo de ludobico Blosio ympresion de Sevilla (Ludo-
vico Blosio.—Obras, muchas ediciones), 30 rs.
- Otro tomo Castro de los privilegios, 6 rs.
- Otro tomo Cronica de san francisco de paula por el padre
Montoya, ympresion de Madrid (Lucas Montoya.—Historia gene-
ral de la orden de San Francisco. Madrid 1619), 20 rs.
- Otro tomo Definiciones de Calatrava, 6 rs.

— Otro tomo gobernador christiano (Juan Márquez.—El gobernador cristiano deducido de las vidas de Moises y Josue. Salamanca 1612, Pamplona 1615), 14 rs.

— Otro tomo Historia de Asturias de Caravallo ympresion de Madrid (Luis Alfonso de Caravallo.—Historia de las antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias. Madrid 1613), 18 rs.

— Otro tomo leyes capitulares de la horden de Santiago ympresion de Madrid, 15 rs.

— Otro tomo Aguilar defense del veato exidio ympresion de Madrid, 15 rs.

— Otro tomo vida de San francº., de Borja escrito por el padre eusebio (fray Juan Eusebio Nieremberg.—Vida del santo padre y gran siervo de Dios el B. Francisco de Borja. Madrid 1644), 24 rs.

— Otro tomo origen y milagros de nuestra señora de Gracia, 12 rs.

— Otro tomo respuesta de España a francia de ramos del manzano (francisco Ramos del Manzano.—Respuesta de España al manifiesto de Francia. Madrid 1668), 18 rs.

— Otro tomo historia de la reina Ester ympresion de Sevilla, 15 rs.

— Tres tomos Historia de Garibay ympresion de Barcelona (Esteban de Garibay. Historia universal de todos los reinos de España. Amberes 1571), 80 rs.

— Otro tomo fiestas de San Fernando ympresion de Sevilla, 8 rs.

— Otro tomo vida del padre Rojas primera parte ympresion de Madrid, 8 rs.

— Dos tomos Summa moral de Villalobos, ympresion de Madrid, 45 rs.

LIBROS EN CUARTO

— Asimismo taso otro libro de Anelo de Judicis debitorum ympresion de venecia, 6 rs.

— Otro libro Decreta concilis del padre Marcilla ympresion de Salamanca, 8 rs.

— Otro libro opera de accionibus ympresion de antuerpia, 15 rs.

— Otro libro Grocio de Jure belli ympresion de Absterdam (Hugo Groot o Grocio.—De Jure belli ac pacis libri tres. Paris 1613), 16 rs.

— Otro libro Raphael de Santo de eleccioni canonici ympresion de Madrid, 4 rs.

— Otro libro Deciss. persianas ympresion de venecia, 4 rs.

— Otro libro Bazquez de uco cap. et precept. ympresion de Madrid, 5 rs.

— Otro tomo Pinelo de rescendenda vende ympresion de venecia, 8 rs.

— Mas taso tres tomos de Pichiardo lecciones des. de Mora y otro ympreso en Salamanca (Antonio Pichardi.—De morae commissione et enmedatiane. Salamanca 1589), 15 rs.

— Otro libro Basilis de ynpedimentis matrimonio ympresion de Salamanca, 8 rs.

— Otro libro Barbossa yn concilis ympresion de turriam, 15 rs.

— Otro libro tractus yn legs. ympresion de colonia, 15 rs.

— Otro libro Pantoja de aleator ympresion de Madrid, 6 rs.

— Otro libro Angulo de mejoras ympresion de Madrid, 8 rs.

— Otro libro observaciones de Amaya ympresion de Madrid (Francisco Amaya.—Observationum juris libri III, 1.^a ed. Salamanca 1625), 10 rs.

— Otro libro Conclusiones de Mascardo ympresion de francfort (José Mascardi.—Conclusiones omnium probationum, Venecia 1588), 7 rs.

— Otro libro Lopez Bravo de rege et rexendo ympresion de Madrid, 4 rs.

— Otro libro Julio Claro opera ympresion de Venecia (Julio Chiaro), 4 rs.

— Otro libro formulación ynstrumentorum ympresion de Roma, 8 rs.

— Otro libro Navarro de restitut. ympresion de Toledo, 15 rs.

— Otro libro Meneses repetit. prab.^o ympresion de Salamanca, 3 rs.

— Otro libro Vela penas y delitos (José Vela.—Tratado del poder de los obispos para la pesquisa y castigo de los crímenes cometidos en sus diócesis y la apelación al brazo secular), 6 rs.

— Otro libro Curia Persiana ympresion de Salamanca, 6 rs.

- Otro libro Ripia de simonia ympresion de roma, 8 rs.
- Otro libro Ursilis aditts. a Matheo de afflictis ympresion de venecia, 4 rs.
- Mas taso dos tomos Collantes yn pragc.^a ympresion de Madrid (Diego Collantes de Avellaneda.—Comentario a la pragmática en favor de la agricultura. Madrid 1606), 12 rs.
- Otro libro Barbossa de campaniis et crims. ympresion de Madrid, 4 rs.
- Asimismo taso otro libro Casiodori opera ympresion de Genoba, 8 rs.
- Otro libro serafino de sreiras de Justa Ymperio ympresion de Valladolid, 4 rs.
- Otro libro Mendez de Anomis ympresion de Madrid, 4 rs.
- Otro libro Calderon de immt.^a concept. ympresion de Madrid (Antonio Calderón.—De Virginis immaculate conceptu), 6 rs.
- Otro libro fabricio Praxis veneficis ympresion de turnum, 10 rs.
- Tres tomos Curso de philosphia del padre Aguilar ympresion de Lima (José de Aguilar.—Cursus philosophicus. Sevilla 1701), 36 rs.
- Dos tomos Summa Silvestrina ympresion de roma, 8 rs.
- Otro libro Axiomata Juris ympresion de Madrid, 6 rs.
- Otro libro speculum Prim. ympresion de Madrid, 8 rs.
- Otro libro scoreia Consts. Pontif. ympresion de leon, 8 rs.
- Otro libro Summa Polinar cun notiis ympresion de Paris, 8 rs.
- Otro libro Torrensis de Aut. Pontif. ympresion de floren-
cia, 10 rs.
- Otro libro trullench in bulla cruz ympresion de Valencia (Juan Gil Trullench.—Bullae Sanctae Cruciate exposito. Valencia 1626), 8 rs.
- Otro libro Pract. de Yndultos ympresion de Pamplona, 6 rs.
- Otro libro otalora de irregularit. ympresion de Salamanca, 4 rs.
- Otro libro Amadeo Gimeno ympresion de Palermo (Amadeo Gimeno —Oposculum. Valencia 1654), 6 rs.
- Otro libro Peria de probabilit. opiniom. ympreso en Sala-
manca, 4 rs.

— Otro libro Abila de cens. ympresion de leon (Esteban Avila.—*De censuris ecclesiastica*. Colonia 1641), 12 rs.

— Asimismo taso quatro tomos obras de senere Maria del Alma ympresion de Madrid, 28 rs.

— Otros dos tomos suma de ledesma ympresion de salamanca (Pedro de Ledesma.—*Primera parte de la Summa*. Salamanca 1598), 30 rs.

— Tres tomos suma de Rodriguez ympresion de Salamanca, 15 rs.

— Otro libro expresion de la Bulla ympresion de Salamanca, 15 rs.

— Otro libro Manl. de Navarro ympresion de Salamanca, 6 rs.

— Otro libro Mercados de contratos ympresion de sevilla, 6 rs.

— Otro libro resoluciones practicas de ezpeleta ympresion de Madrid, 5 rs.

— Otro libro cerdan visita de carcel ympresion de salamanca (Tomás Cerdan de Tallada.—*Vista de cárcel y de los presos*. Valencia 1574), 4 rs.

— Otro libro Noboa Apologia ympresion de Salamanca, 8 rs.

— Quatro tomos obras de Santa Theresa ympresion de Madrid, 32 rs.

— Tres tomos obras de la monja de Méjico ympresion de Madrid (Sor Juana Inés de la Cruz), 36 rs.

— Aritmética de Ortega ympresion de Madrid (Juan de Ortega.—*Tratado sutilísimo de Aritmética*. Granada 1563), 6 rs.

— Leyes de la Caza ympresion de Madrid, 8 rs.

— Historia de lugo ympresion de Santiago, 8 rs.

— Examen de yngenios ympresion de Madrid (Juan Huarte de San Juan.—*Examen de Ingenios*. Baeza 1575), 6 rs.

— Vega de Santis ympresion de Madrid, 5 rs.

— Excelencias de la castidad ympresion de Madrid, 6 rs.

— Reglas generales de música ympresion de Madrid, 6 rs.

— Disposición para comulgar ympresion de Madrid, 3 rs.

— Vida del santo negro de Palermo ympresion de Madrid, 3 rs.

— Adbertencias a la historia del padre Mariana ympresion de Madrid, 6 rs.

— Privilegios de la congregación de san Benito de Valladolid ympresion de aquella ciudad, 4 rs.

- Elementos militares de Henríquez ympresion de Madrid, 5 rs.
- La Numancia ympresion de Madrid (Miguel de Cervantes.—La Numancia. Madrid 1615), 12 rs.
- Quilator de oro ympresion de Madrid (Juan de Arfe y Villafañe.—Quilatador de oro y plata. Valladolid 1572), 5 rs.
- Philosophia secreta de Moya ympresion de Alcala, 6 rs.
- Concordia y discurso de la concepción ympresion de Madrid, 4 rs.
- Velasco colegio de Polonia ympresion de Jaen, 4 rs.
- Perez destreza de las armas ympresion de Madrid, 4 rs.
- Cómputo general de los tiempos ympresion de Madrid, 6 rs.
- Dios contemplado ympresion de Madrid, 4 rs.
- Epítome de los señores de Vizcaya ympresion de Madrid, 2 rs.
- Pardo tratado del vino aguado ympresion de Valencia (Jerónimo Pardo.—Tratado del vino aguado y agua envinada. Valencia), 4 rs.
- Mas taso dos tomos de ferreras sinopsis histórico ympresion de Madrid (Juan de Ferreras García.—Sinopsis histórica cronología de España. Madrid 1700), 12 rs.
- Honrras de phelipe quarto ympresion de Madrid, 10 rs.
- Tres tomos Corona Gótica ympresion de Madrid (Diego Saavedra y Fajardo.—Corona Gótica Castellana y Austríaca. Munster 1646), 24 rs.
- Tres tomos Comedias de Calderón tercera, sexta y séptima parte ympresion de Madrid, 30 rs.
- Escuela espiritual de Villalob. ympresion de Madrid, 6 rs.
- Firtificacion de henriquez ympresion de Madrid, 10 rs.
- Catecismo romano ympresion de Valencia, 6 rs.
- Corona gótica de la vida de la reyna de Escocia ympresion de Madrid (Lope de Vega.—Corona trágica. Madrid 1627), 6 rs.
- Abissos de gente recojida impresion de Madrid, 6 rs.
- Emblemas de Cobarrubias ympresion de Madrid (Sebastián de Covarrubias y Orozco.—Emblemas morales. Madrid 1610), 10 rs.
- Historia de la rioja, 10 rs.
- Cuéllar práctica de yndultos, 6 rs.
- Leyes Penales ympresion de Madrid, 8 rs.

- Tres tomos Mastrillos un ympresion de leon, y los dos de venecia, 30 rs.
- Pontifiz et rex juridit. ympresion de Madrid, 8 rs.
- Pente contartus de ramirez ympresion de antuerpia, 10 rs.
- Asimismo taso otro libro Lara de vita hominis ympresion de leon, 15 rs.
- Otro Rossa de Antiquitate romanorum ympresion de Ginebra, 20 rs.
- Barbossa Judicis ympresion de leon (Pedro Barbosa.—De judicis. Lyon 1622), 18 rs.
- Ynestrossa de ymperis ympresion de Madrid, 8 rs.
- Petri Placentini de Poitest. ympresion de francfort, 12 rs.
- Ramos de substitut. ympresion de Madrid, 12 rs.
- Dos tomos Binios super ynstituta ympresion de leon, 36 rs.
- Yañez de legitimacione (Diego Antonio Yañez Fajardo.—Tractatus de legitimacione. Madrid 1632), 4 rs.
- Tres tomos Valenzuela, los dos ympresion de Valencia y el otro de Nápoles, 36 rs.
- Tres tomos de Balenz.^a ympresion de Salamanca, 40 rs.
- Dos tomos Ansixeros super ynstitut. maltratados ympresion de salamanca, 10 rs.
- Geronimo Gatic. de lib. ecclesia en Polonia, 8 rs.
- Franc.^o larreatig de contract en Valladolid, 6 rs.
- Concilio ympresion de antuerpia, 4 rs.
- Concilio con declaración de Barbossa, 16 rs.
- Roberto rerum judicat ympresion de Genoba, 6 rs.
- Cornelio tac. ympresion de Paris, 6 rs.
- Paz quaest. civs., 4 rs.
- Historia Apostolica, 4 rs.
- Zechino de reppc.^a ecc.^a ympresion de leon, 10 rs.
- Medula de la theologia moral de busembaum ympresion de Mantua (Hermann Busembaum.—Medula theologiae moralis. Munster 1645), 6 rs.
- Borcontel ympresion de Madrid, 4 rs.
- Gomez yn reg. canz.^a ympresion de leon, 10 rs.
- Jacobo Nivelio de ventione omnium reorum, 4 rs.
- Sebastian vant. de nulit ympresion de colonia, 10 rs.

- Maranta de ord. judizs. ympresion de leon, 6 rs.
 - Bulengerio con bibis ympresion de leon, 6 rs.
 - Ayala de jure vele ympresion de Lobayna, 6 rs.
 - Tractatus de finib. regund. ympresion de leon, 6 rs.
 - Yubero de yncendio ympresion de colonia, 8 rs.
 - Roberto velarm. de potest. pontif ympresion de Colonia (Roberto Belarmino.—De potestate Summi Pontificiis in rebus temporalis, 1610), 8 rs.
 - Ynstitut Bit escrips. ympresion de leon, 4 rs.
 - Ynstitut ymperial en salamanca, 3 rs.
 - Buenserbechio ympresion de Benecia, 6 rs.
 - Notas del vin. sobre la ynstitut. ympresion de leon, 6 rs.
- Por último el día 10 de diciembre de 1714, Francisco Lucero, «maestro relojero», tasaba lo siguiente:
- Un reloj de campana con su caja de peral moldeada y bronceada de una tercia de alto, 360 rs.

La enumeración de la riquísima biblioteca de don Tomás de la Tajada Quintana nos habla de la profunda formación jurídica de su propietario, y nos indica, además, el deseo del mismo por estar a la hora de lo último que se publicaba sobre Derecho. Con respecto a esto es curioso constatar que la obra más moderna de la biblioteca del abogado difunto estaba editada en 1700, y ello era lógico ya que en ese año comenzó en España la larga Guerra de Sucesión (1700-1712), época poco propicia para escribir y publicar libros.

Para acabar digamos que el estudio y análisis de las grandes bibliotecas hispanas del siglo xvii están conociendo en la actualidad un notable interés por parte de los investigadores, ya que los últimos trabajos publicados están demostrando que la sociedad de aquella época leía más de lo que generalmente se cree. Así lo prueban las bibliotecas de los nobles, como el conde duque de Olivares⁷, del marqués de Mondéjar⁸ o la condesa de Oñate⁹;

7. Gregorio de ANDRÉS, «Historia de la biblioteca del conde-duque de Olivares», en Cuadernos Bibliográficos, XXVII (1972) y XXX (1973).

8. Gregorio de ANDRÉS, «La biblioteca del marqués de Mondéjar», en Primeras Jornadas de Bibliofilia. Madrid, 1977.

9 José Luis BARRIO MOYA, «La gran biblioteca de la condesa de Oñate», en Analecta Calasanciana, n° 54 (1985), 421-433

la de los eruditos como Ramírez de Prado¹⁰ o Vicencio Lastanosa¹¹, o en fin las de numerosos artistas, como el escultor Monegro¹², el platero Luis de Zabalza¹³, los pintores Diego Velázquez¹⁴ o Francisco Rizi¹⁵ o la del librero Sebastián de Robles¹⁶.

José Luis BARRIO MOYA

10. Joaquín de ENTRAMBASAGUAS, «La biblioteca de Ramírez de Prado», 2 vols. Madrid, 1943.

11. Ricardo del ARCO, «Noticias acerca de la famosa biblioteca de Don Vincencio Juan de Lastanosa», en Boletín de la Real Academia de la Historia. LXV, 1914.

12. Fernando MARÍAS, «Juan Bautista de Monegro, su biblioteca y «De Divina proporcione», en Academia, n.º 53 (1981), 91-117.

13. José Luis BARRIO MOYA, «La librería de Luis de Zabalza, platero de cámara de Felipe IV», en Revista de Llibreria Antiquaria, n.º 11. Barcelona, 1986, 24-27.

14. Francisco José SÁNCHEZ CANTÓN, «La librería de Velázquez», en Homenaje a Menéndez Pidal III. Madrid, 1925, 379-406.

15. José Luis BARRIO MOYA, «Los bienes del pintor Francisco Rizi», en Archivo Español de Arte. Tomo LVI, n.º 221 (1983), 39-46.

16. Christian PELIGRY, «El inventario de San Sebastián de Robles, librero madrileño del siglo XVII», en Cuadernos Bibliográficos, n.º 32 (1975), 181-188.

IV

FUERO GENERAL DE NAVARRA. UNA REDACCION ARCAICA

(Manuscrito 0.31 de la Real Academia de la Historia)

En su metódica e infatigable labor de búsqueda, acopio y clasificación de manuscritos del Fuero General de Navarra, el Prof. José M.^o Lacarra acertó como brillante colofón a identificar en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia el que excepcionalmente contiene una versión todavía embrionaria de aquella gran compilación. Y hace un lustro anticipó ya (J. M. Lacarra, *En torno a la formación del Fuero General de Navarra*, «Anuario de Historia del Derecho Español», 51, 1980, pp. 93-110 y, en especial, 108-110) la descripción de aquel códice, 0.31 de la Colección Salazar, y algunas de las características generales de su singular contenido, cuya edición me encomendó con la magnanimidad distintiva del auténtico maestro. Aunque no anterior a 1270, se trata de una versión arcaica, probablemente uno de los ensayos de acoplamiento progresivo de material jurídico que en el tribunal navarro de la Cort condujeron gradualmente a la plasmación —entrado ya el siglo XIV— de las tres redacciones extensas en que, como demostró el mismo Prof. J. M. Lacarra, quedan estructuralmente afiliados los manuscritos hasta ahora conocidos.

El cotejo minucioso del texto alumbrado por 0.31 con el de las piezas más representativas de dichas redacciones me ha permitido apreciar que la denominada en un principio A por el Prof. J. M. Lacarra, supuestamente la más antigua de las tres, parece el producto tardío —quizá de finales del siglo XIV— de un esfuerzo de erudición jurídica aplicada a todas las compilaciones entonces existentes, incluida la transmitida por 0.31 y acaso otra muy cercana a ella y hoy desaparecida. Se intentaría así refrescar el léxico, aclarar o bien eliminar los pasajes oscuros y reinterpretar e incluso glosar determinados preceptos. Las otras dos versiones guardan estrecha relación entre sí; su principal diferencia consiste en que una —la llamada B por dicho Profesor—, más próxima a 0.31, no alcanzó el grado de sistematización logrado poco después en la otra —la C—, la cual se convirtió por ello, aunque no antes de 1337, en el repertorio de consulta habitual en la Cort. Su más genuino manuscrito (Archivo General de Navarra, *Códices jurídicos*,

núm. 1) ha sido, por otra parte, el manejado por los historiadores del derecho durante la última centuria a través de la edición, evidentemente anticuada y defectuosa, de P. Ilarregui y S. Lapuerta (*Fuero General de Navarra*, Pamplona, 1869, reimpreso en 1964).

El texto de O.31 que ahora presento y la próxima publicación de las redacciones A y B, esmeradamente preparada por el Dr. Juan F. Utrilla, que ya ofreció una somera noticia de su considerable trabajo (*Las series asistemáticas del Fuero General de Navarra: Estudio y edición crítica. Resumen de tesis doctoral*, Universidad de Zaragoza, 1981), van a permitirnos abordar con información caudalosa y el debido rigor crítico una moderna edición de la redacción C, que deparará a los estudiosos del derecho histórico navarro numerosas e interesantes novedades.

Para facilitar ya el análisis de los capítulos del manuscrito aquí editado, incluyo a continuación la tabla de equivalencias de sus preceptos (1 a 252) con los correspondientes de la edición de P. Ilarregui, indicando para estos últimos el número seguido (1 a 531) que para mayor comodidad de las citas se les ha asignado, junto con la notación —cifras arábicas entre paréntesis— de la organización del propio texto en libros, títulos y capítulos.

TABLA DE CORRESPONDENCIAS

O 31	AGN, C 1	O. 31	AGN, C 1
1-2-3	. 340 (5 2.4)	22	69 (2.4.10)
4-5-6	3 (1.1 3)	23-24	306 (4 2.3)
6 bis	133 (3.4.3)	25	298 (4.1 2)
7-8	. 132 (3 4 2)	25 bis	313 (4.3.5)
8 bis-9	. . 131 (3 4.1)	26	179 (3.8.5)
9 bis	373 (5.4.11)	27	178 (3.8.4)
10 (cf 207)	220 (3.15 2)	28	78 (2.4 19)
11	4 (1.1 4)	29	80 (2.4.21)
11 bis	58 (2.3.1)	30-36 bis	319 (4 3.11)
12	26 (1.5.3)	31	502 (6.3.4)
13	134 (3.4 4)	32	501 (6 3.3)
14	135 (3.4.5)	33	324 (5.1.2)
15-16	136 (3.4 6)	34	cf. 161 (3 5 20)
17	139 (3 4.9)	35	494 (6 2 8)
18	496 (6 2.10)	36	250 (3.16 3)
19	11 (1.2 2)	37	520 (6.7.1)
	= 137 (3 4 7)	38	cf. 67,1 (2.4.8,1) y 95,2 (2.6.1,2)
20	297 (4.1.1)	39	112 (2 7 2)
21	303 (4.1.7)		

O 31	AGN, C 1	O. 31	AGN, C 1
40 ..	8 (1.1.8)	81 . .	—
41	349 (5.3.5)	82	283 (3.20.1)
42 . . .	235 (3.15.17)	83	344 (5.2.8)
43 .. .	309 (4.3.1)	84	197 (3.12.3)
44 . ..	310 (4.3.2)	84 bis .	—
45	84 (2.5.2)	85 . . .	177 (3.8.3)
46	317 (4.3.9)	86 .. .	274 (3.19.3)
46 bis ..	299 (4.1.3)	87 .. .	315 (4.3.7)
47	316 (4.3.8)	88 . . .	472 (6.1.8)
48	244 (3.15.26)	89 .. .	345 (5.3.1)
49	460 (5.12.5)	90	49 (2.2.1)
50	293 (3.22.1)	91	208 (3.12.14)
51 . . .	516 (6.6.4)	92 .. .	30 (1.5.7)
52	506 (6.4.1)	93	281 (3.19.10)
53	509 (6.4.4.1)	94	148 (3.5.7)
54	266 (3.17.15)	94 bis .	147 (3.5.6)
55	227 (3.15.9)	95 .. .	393 (5.7.1)
56 . . .	301 (4.1.5)	95 bis	397 (5.7.5)
57	356 (5.3.12)	96 . . .	224 (3.15.6)
58	16 (1.3.1)	97 . . .	—
59	441 (5.11.7)	97 bis .. .	217 (3.14.1)
60 . . .	120 (3.1.4)	98	23 (1.4.4)
61 .. . cf.	437 (5.11.3)	99	22 (1.4.3)
62	325 (5.1.3.1)	100 . . .	9 (1.1.9)
63	241 (3.15.23)	101	20 (1.4.1)
64	40 (2.1.4)	102	21 (1.4.2)
65	487 (6.2.1)	103 . . .	484 (6.1.20)
66	88 (2.5.6)	104	483 (6.1.19)
67	29 (1.5.6)	105	486 (6.1.22)
68	444 (5.11.10)	106	—
69	365 (5.4.3)	107	143 (3.5.2)
70	243 (3.15.25)	107 bis	144 (3.5.3)
71	242 (3.15.24.1)	108	145 (3.5.4)
72	31 (1.5.8)	109	142 (3.5.1)
73	436 (5.11.2)	110	—
74	264 (3.17.13)	111 .. . cf.	35 (1.5.12)
75	400 (5.7.8)	112	257 (3.17.6)
75 bis . .	401 (5.7.9)	113 . . .	507 (6.4.2)
76	402 (5.7.10)	114	391 (5.6.2)
77	439 (5.11.5)	115	96 (2.6.2)
78	265 (3.17.14)	116	—
79	205 (3.12.11)	117	13 (1.2.4)
80	290 (3.20.8)	118	515 (6.6.3)

O. 31	AGN, C 1	O 31	AGN, C 1
119 (cf. 121) .	200 (3.12.6)	164	408 (5.7.16)
120	478 (6 1.14)	165	339 (5.2.3)
121 (cf. 119) .	—	166	368 (5 4.6)
122-123	479 (6 1.15)	167	422 (5.9 1) y
124	480 (6.1.16)		423 (5.9.2)
124 bis	390 (5.6.1)	168	260 (3 17.9)
125-126	395 (5.7.3)	169	360 (5.3.16)
127	347 (5 3.3)	170	119 (3.1.3)
128	239 (3.15.21)	171	338 (5.2.2)
129	305 (4.2 2)	172	104 (2.6.10)
130	116 (2 8.3)	173	456 (5.12.1)
131	363 (5.4 1)	174	68 (2.4 9)
132	223 (3.15.5)	175	357 (5.3.13)
133	225 (3.15.7)	176	398 (5.7.6)
134	207 (3 12 13)	177	85 (2.5.3)
135	392 (5.6.3)	178	337 (5.2.1)
136	228 (3.15.10)	179	—
137	269 (3 17.18)	180	490 (6.2 4)
138 (cf. 236) ...	—	181	261 (3.17.10)
139-140	232 (3.15.14)	182	196 (3.12 2)
141	97 (2.6 3)	183	12 (1 2.3)
142 cf.	56 (2 2.8)		= 190 (3.10.6)
143	83 (2.5 1)	184	350 (5 3.6)
144	90 (2.5.8)	185	355 (5 3.11)
145	175 (3.8.1)	186	362 (5.3.18)
146	189 (3 10.5)	187	6 (1.1.6)
147	421 (5 8.2)	188	194 (3 11.4)
148	336 (5.1.14)	189	503 (6 3.5)
149	—	190	499 (6 3.1)
150	—	191	343 (5.2.7)
151	379 (5.4.17)	192 †	278 (3.19.7)
152	2 (1.1.2)	193	457 (5 12.2)
153	130 (3 3.5)	194	369 (5.4.7) y
154	181 (3.9.1)		358 (5 3.14)
155	435 (5.11.1)	195	172 (3.7.8)
156	—	196	504 (6.3.6)
157	182 (3.9.2)	197	464 (5.13 1)
158	323 (5 1.1)	198	300 (4.1.4)
159	348 (5.3.4)	199	92 (2.5.10)
160	295 (3 22.3)	200	485 (6.1.21)
161	331 (5.1.9)	201	482 (6.1.18)
162	277 (3.19 6)	202	118 (3.1.2)
163	212 (3 12 18)	203	521 (6.7 2)

O. 31	AGN, C 1	O. 31	AGN, C.1
204 .	314 (4.3.6)	229 99 (2.6.5) y
205	312 (4 3 4)		cf 98 (2 6.4)
206	318 (4.3.10)	230	458 (5 12.3)
207 (cf 10) .	24 (1.5.1,2) y	231 ..	384 (5.5.1)
	220 (3.15.2)	232 ...	377 (5.4 15)
208 .	467 (6.1.3)	233 ..	164 (3 6.2)
209 .	468 (6.1 4)	234 .	405 (5.7.13)
210 .	465 (6 1.1)	235 . .	53 (2 2.5)
211 ...	27 (1 5.4)	236 (cf. 138)	267 (3 17 16)
212-213-214-215 .	245 (3.15.27)	237 .	193 (3.11.3)
216 .	28 (1.5.5)	238	446 (5 11.12)
217 .	430 (5.10 6)	239 .	66 (2.4.7)
218 .	429 (5.10.5)	240	—
219	451 (5.11.17)	241 .	424 (5 9.3)
220 .	452 (5.11.18)	242 .	311 (4.3.3)
221	413 (5.7.21) y	243-244	383 (5.4.21)
	414 (5.7.22)	245 .	412 (5.7 20)
222	415 (5.7.23)	246	cf 524 (6 8.1)
223 .	219 (3.15.1)	247	238 (3.15.20)
224	438 (5.11.4)	248 .	280 (3.19.9) y
225 .	117 (3 1.1)		51 (2.2.3)
226 .	474 (6.1 10)	249	cf 214 (3.12.20)
227	.. 366 (5 4 4) y	250	498 (6.2.12)
	cf. 343 (5.2.7)	251 ..	440 (5.11.6)
228	354 (5 3 10)	252 .	—

Por razones de economía de tiempo y espacio, mas sobre todo considerando la inmediata impresión del mencionado trabajo de J. F. Utrilla —a cargo de la Institución Príncipe de Viana del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra—, se ha descargado el aparato crítico de las cuantiosas variantes registradas en los prototipos manuscritos de las tres redacciones evolucionadas (A, B y C). Sólo se anotan las obligadas puntualizaciones textuales, las escasas lecturas aberrantes y las mínimas interpolaciones y lagunas, resueltas estas últimas mediante el cotejo con aquellos manuscritos.

ANGEL J. MARTÍN DUQUE

1. *Esta es la memoria de los fueros de Nauarra, et son CCº. et .Lº. capitulas.*

Sepan todos los omes qui son et seran que io don Sancho, por la gracia de Dios rey de Nauarra et ierno del emperador, con atorgamiento et con uoluntat de ricos omes et con uoluntat de caualleros et de yfançones, et todos los otros qui son en mi regno, establezco et confirmo [est] ¹ fuero que por todos tiempos sean durables todas las cosas que de iuso son escriptas en la present carta.

2. *.IIº capitula. No envayr a ome de linage.*

. Si algun ome de linage enuayere o feriere o matare en el mi regno ad otro ome de linage, asi que primero non desafie a eil delant mi et .Vº cauaylleros otros hi seyendo, o en el mercado ante mio alcalde et .VI. cauaylleros otros, et si por aventura aqueyl /^{1r(b)} enbaymiento o ferimiento o matamiento non fuere en baraylla subdosa, et que auienga de malqueriença de antes, sea tal traydor que non se pueda d'ent saluar; et d'aylli adenant no aya bienfeytura de mi ni de alguno de mis ricos omes, ni de nenguno que mio bien tenga, et adu deue seer encorrido de quanto ouiere.

Et demas quando ome de linage fuere desafiado en mercado delant mi alcalde et VI cauaylleros otros, el alcalde faga pregonar aqueyllo luego en mercado; et esto feyto, desd'adelant tengase por desafiado, maguer que non sea aylli delant el desafiado.

Enpero el omne de linage, maguer aya desafiado al otro de linage o delant mi o en el mercado ante mio alcalde, asi como de ssuso es escripto, non enuayezca nin fiera nin mate al desafiado ata .X. /^{1v(a)} dias passen del desafiamiento pregonado en el mercado. Et si por aventura enuayere o feriere o matare ante que passen los .X. dias, sea tal traydor que non se pueda d'ent saluar, et d'aylli adenant no aya bienfeytura de mi ni de algunos de mis ricos omes ni de aqueyllos qui prenden el mio bien.

3. *IIIº capitula¹. Fuero de no captener a traydor.*

Si algun ifançon quoaquíere sea, en estas cosas enuayere o feriere o matare ad alguno noble por linage, non feyto desafiamiento denant mi o en el mercado delant mi alcalde en la manera que suso es dita, et si alguno defendiere o enparare ad'quest malfeyto, no auiendo pelea subdosa que non auienga por malqueriença de antes, si enuayere o feriere o matare, aqueyl qui lo capterra o lo defendra sea /^{1v(b)} tal traydor qual seria si el mismo sines desafiamiento lo ouiesse enuaydo o ferido [o] ² con sus manos muerto.

Et sobre esto establecio que si alguno de linage mas rico o mas poderoso del otro que sea de linage assi como eil, falliere en el sobredito et establecido fuero contra al menos poderoso et menos noble, non demande par en defendi-

1. ¹ est] *ms.* en.

3 ¹ IIIº capitula] *al margen en el ms* —² o] *omite el ms*

miento de su malfeyto si non con su egoal, no auiendo catamiento a las riqueças ni a mayor nobleça.

Et esta carta fo feyta en Pomplona, en la calaustra, en la era de mil et CC. et .XXX. aynos

4. *Fuero de los nauarros. IIII^a. capitula*¹.

Dizir uos emos la memoria de los fueros que ha el rei de Nauarra con sus nauarros et los nauarros con el rey: que eyllos sieruan como buenos /^{2r(a)} uassayllos a buen seynor, et el rey que lis faga bien como buen seynor a buenos uassayllos; a quantos omnes ha en su regno, a todos lis face [bien, da-lis]² mercados o fagan lures mercadurias.

5. *V^a capitula*¹. *Fuero de dar alcaldes e mercados.*

Nuyl omne si contienda ha con otro omne por amor de trayer contienda et baraylla entre eyllos, da-lis alcaldes en sus mercados, buenos et membrados et sabidores de los fueros, que lis iudguen los dreytos.

Enpero es en el mandamiento del rey por dar alcaldes quoaless eil quisiere en [Nauarra]² en los mercados.

Otrosi es en el mandamiento del rey de dar mercados ho eyl quisiere en Nauarra.

Otrosi [es]³ en el mandamiento del rey, si ningun fidalgo fiziere embargo, por que sos alcaldes en sus mercados non lis iudguen ad aqueyllos infanzones. [Adelant uos contaremos por quoaless embargos]⁴

6. *Iudgar*/^{2r(b)} *a malfechores*¹. *VI^a capitula*².

Otrosi es en el mandamiento del rey. Si fuere traydor o ladron o robador o nuyl malfeytor en sua tierra, si fuere preso, que lo lieuen a iudgo del rey; e'l rey. aduziendo el alcalde de la comarca et al menos .III. ricos omnes de sua tierra et infanzones bonos et membrados, auiendo partida, deue oyr la quereylla de entrambas las partidas; et si el malfeytor cayere en culpa, la iusticia es en mandamiento del rey Si el rey fiziere iusticia del malfeytor ninguno, que non sea prouado a menos de iudgo del alcalde assi como es sobreescrito; e'l rey terra tuerto al malfeytor et a todos sus parientes.

Mas lis da adu el rey a los omnes de linage de sua tierra, a uiduas et a uieyllas et a donçeyllas que non sean casadas et ayan uezin-/^{2r(a)}-dat, et a los abades seglares que sean fillos de cauaylleros et de dueynas, todos estos sobreescritos que ayan uezindat, da-lis el rey escusados caseros, claueros, iuueros, mancebos, solda-

4. ¹ III^a capitula] al margen en el ms —² bien, da-lis] interlineado en el ms

5. ¹ V^a capitula] al margen en el ms —² Nauarra] ms Narra, enmendado —³ es] interlineado —⁴ Adelant... embargos] copiado en el ms a continuación del cap siguiente

6. ¹ malfechores] sigue en el ms el final, ya anotado, del cap anterior —² VI^a capitula] al margen en el ms —³ Et el omne de linage] repetido en el ms y tachado. —⁴ Empero] ms Epero.

deros, de sus uillanos que dan peyta al rey, de los fillos et de las fillas de los uillanos. Por estos sobrescriptos el omne de linage puede dar fiança de tanto como el alcalde mandare, et defender tanto como s'ouiere en su pan.

Et el omne de linage³ de que non los puede defender uos contaremos: Si el uillano es peytero conoçudo, de la cena del rey non los puede defender; otrosi de la cena de saluedat, non; otrosi del omicidio, non; otrosi de la pidicion de la ceuada, non. [Empero]⁴ si non son peyteros conoçudos o non tienen tierra del rey, bien los pueden defender

6 bis

Quoanta es la pidicion de /^{2a}(b) la ceuada: .VI. arrouos de auena que sea medida con el rouo de trigo raso de quoyal comarca el rouo de la sied. Sied clama omne o creman las candelas o lieuan fierro o fazen bataylla de escut et baston. Et aquesta auena sia medida con el rouo de trigo et non calcado.

D'aquestos .VI. arrouos de auena elos uillanos quitios del rey deuen al rico omne .I. [kafiz]¹, al prestamero .II. arrouos. Si uillano solarigo es, al rico omne .II. arroos, al prestamero I. [rrouo]², a los solarigos .III [arrouos]³ Si seynores solarigos ouiere el uillano doblados, en casa de quien s'ouiere deue auer la meatat de los .III. [arrouos]³ de auena; la otra meatat deuen partir todos los otros solarigos.

Si omicidio acayere, los que son escusados et los que non son escusados por engoal peyten todos. Duas /^{3ra}(a) muylleres que non sean casadas tanto peyten como .I. uaron. Todo omne que contreyto sea en toda fazienda, passe a rrazon de una muyller. Otrosi el moço passe a rrazon de una muyller entroa que sea ueyloso en su natura. Si demandare el sayon de la uezindat que sea por suert, al moço d'aqua peyta que «ueyloso eras en tua natura», et dice el moço que no es ueyloso en la natura, que «non uos deuo dar peita», manda el fuero que el sayon uea sua natura con la mano et que mida con el polgar de la mano⁴ el pelo de la natura; et si passare la unglá del polgar de la mano, deue pagar, et si non passare el pelo, peyta non deue pagar.

7. VIIª capitula¹. Cena de saluedat.

Agora uos contaremos quoyal es la cena de saluedat. Antes de la Nadal si el rico omne entridiere en /^{3ra}(b) la honor et si ouiere .X. casas en la uilla de peyteros o XX o C, den-li la carne de VI [rrouos]² de trigo comprando por en mano; et si depues de la Nadal entridiere, den-li la carne comprada por .VI. [rrouos]² de trigo pora miesses.

Et si menos ouiere de .X. casas de peyteros que sean, o .Vº. o .III. o .II., et el rico omne entridiere antes de la Nadal, si .Vº. casas peyteras fueren, compren con .III. [arrouos]³ de trigo por en mano; por aqueylla manera partan la carne

6 bis. ¹ kafiz] *ms.* k.—² rrouo] *ms.* rro.—³ arrouos] *ms.* arro—⁴ mano] *ei ms.* añade deue pagar et si, tachado.

7. ¹ VIIª capitula] *al margen en el ms*—² rrouos] *ms.* rro—³ arrouos] *ms.* arro

de .X. casas peyteras en a iuso quantas casas fueren. Et si depues la Nadal en-
tridiere el rico homne en sua honor ho ouiere de .X. casas peyteras en a iuso, asi
como sobrescripto sea comprada la carne pora miesses.

Con esta carne et con sendas arinçadas de uino et con sendos arrouos de
aüena, et con sendos panes que sean /^{3r(a)} feytos con sendos coartales de farina,
con esto uayan al rico omne et den-li, et el qui quisiere cene con eil.

En esta cena peyten duas muylleres non casadas tanto como .I. omne peytero
E los uillanos quitios del rey den esta cena.

Si algun uillano dissiere que seynor solarigo ha et no ajudare peitar en esta
cena, sacando el arinçada de uino et el coartal de farina deue ajudar en todas las
otras peytas sobrescriptas.

8. VIIIª capitula¹ Como deuen partir el rei et los solarigos.

El rey ouiendo la cena de saluedat et los solarigos ouiendo la torta et la
arinçada de uino, todas las otras peytas, omicidio et todas las colonias deuen
partir el rey et los solarigos ensemble.

8 bis

Et es a ssaber que logares ha que peytan por la cena del rei trigo et ceuada,
e'n logares peitan /^{3v(b)} dineros. Et e'stos logares que peytan pan et dineros los
uillanos solarigos peyten la meatat de la peita al rey et la otra meatat a los so-
larigos. En esta cena peiten duas muyllés non casadas tanto como .I. assandero,
dos assanderos peiten tanto como .I. peitero qui tiene .I. iugo de buyes Aquesta
es la cena.

9. Defender escusado IXª capitula¹

Aquestos escusados non son dados por toda la tierra tierras ha que el rei lis
dio escusados, tierras ha que non dio escusados.

9 bis.

Al rey li demandaron el fuero et fizo-lis cartas; assi como lures cartas han,
assi deuen ser iudgados en la sied del rey o anda su iuueria por omicidios et por
muytas cosas rienden hi los captiuos; et por esso nuyt ome del mundo non deue
auer escusados que deuen ser a la labor del rey et catar los captiuos /^{4r(a)}

10. Xª capitula¹. Non deue pendrar en la sied.

Agora uos contaremos que fueros ha en la sied del rey. nuyt ome si fayllare
so marquero et eyl pendrare, los peynnos entroa al tercer dia non los tray d'ent.
et si los traye deue peytar LX. [soltz]² de colonia.

8. ¹ VIIIª capitula] al margen en el ms

9. ¹ IXª capitula] al margen en el ms

10. ¹ Xª capitula] al margen en el ms —² soltz] ms sl.

11. *XI capitula*¹. *Como deuen ir en uest.*

Si al rey de Nauarra huest li entridiere en sua tierra et si passare la huest Ebro et Aragon contra Nauarra, deuen issir caueros et infançones de Nauarra, por fuero, et ir al rey et ser con eyl con el conduyto de .III. dias.

Enpero si fuere el rey d'aquent Hebro o d'aquent Aragon², al tercer dia demanden-li conduyto al rey; et si el rey no lis diere conduyto como conuiene a cauero pora a ssi et pora a ssus omes e pora todas las bestias suyas, et si fuere escudero como a escudero, et si fue-/^{4r(b)}-re infançon laurador como a infançon, deue seer con eil entroa .III. dias. De .III. dias en a suso³ si fuere a sua casa, non deue auer quereylla el rey; et al qui el rey non quisiere dar conduyto, por que fuere a la su casa, el rey non deue auer clamos d'eil. Et si algun fidalgo quisiere fer sobra conplimiento, que faga .IX. dias con su conduyto; por que a su casa fuere, non deue auer clamos el rey.

Et si al rey de Nauarra cercaren castieylo o uilla en estos sobrescriptos .IX. dias, dando-lis el rey conduyto deuen seer con eyl entroa que cobre el rey sua uilla o su castieylo, e'ntroa que se parta el rey a non poder de su uilla o de su castieylo.

Et si el rey ho otro omne qui traye la huest ouiere bataylla, deuen entrar con eil en batailla et ajudar-li; qui esto non quisiere fer, non deue dar el /^{4r(a)} rei alcalde ni mercado ni cabtenedor por si nin por otro.

Et si por aventura algun fidalgo fuere por buscar sua pro et fuere⁴ de partes de la huest, deue dessar a su seynor a so bien et passar et ajudar al rey de Nauarra como a su seynor natural.

Et si por aventura irado o itado del rey fuere el infançon de partes de la huest, deue uenir al rey et dizir-li que'l ajudara en aqueylla batailla et que aya merce sobre eil; el rey dando amor, si'l tiene algunas heredades dando-li lo suyo el rey, deue'l ajudar al rey en aqueylla bataylla. Si el rey non li diere amor [ni]⁵ lo suio, fiziendo a ssaber a otros infançones que sean en aqueil lugar, al menos .III. et al mas .VI, que non faylle por eil de ajudar en aqueilla bataylla, et si quereylla ha el rey d'eil que /^{4v(b)} fara tanto como sua cort mandare, et si non li diere amor, deue passar a su seynnor et deue fer d'i adelant todo lo que podiere a la huest et al rey en la tierra et en castieylos et en mueble et en toda ren si no es a su cuerpo; et el infançon no es tenuto de dar emienda de malfeyto ninguno que sea en sua tierra Dando el rey amor al fidalgo quando ouiere sabor et uoluntat [et]⁶ dando suas heredades con suas presas, deue el fidalgo render castieylo ho otra tierra, si la ouiere, al rey, porque el fidalgo no es tenuto de render la presa o el malfeyto por que prometia que faria tanto como la sua cort mandasse o su alcalde. Et el rey es tenuto al fidalgo de render todas suas presas con toda sua heredit, porque non queria prender drei-/^{5r(a)}-to a la sazón que el fidalgo prometia. Et el rey dando-li amor al fidalgo, que torne a la tierra et que'l dara lo suio. Et [si]⁷ non quisiere el fidalgo tornar, el rey deue auer

11. ¹ *XI capitula*] al margen en el ms.—² Aragon] el ms. añade et.—³ suso] el ms. añade et.—⁴ fuere] el ms. añade de la huest, tachado—⁵ ni] ms. no.—⁶ et] omite el ms—⁷ si] omite el ms—⁸ sea como sobrescripto es] omite el ms

todas las presas que prendra en suas heredades pora si, et non deue dar al fidalgo sinon solament suas heredades quando diere amor el rey; et esto porque non quiso tornar quando el rei li mandaua que tornasse a la tierra

11 bis

Si el rey inbiare por algun fidalgo que aia quereylla d'eil et non uiniere, estando en la tierra, entroa X. dias, el rey puede enparar lo suio. Et si otro mal non cuiere feyto, quando uiniere dando fiador de dreyto a iudicio de la cort, deue cobrar lo suio. Et si fuere el fidalgo fuera de la tierra, deue uenir entroa cabo de .XXX^a. dias; et si non /^{5r(b)} mostrare tal razon o tal ocasion a conociença de la cort por que non podio uenir, [sea como sobrescripto es] ⁸

12. *Por ir a otro regno non seer desheredado. XII capitula* ¹

Homne de linage porque fuere a otro regno por buscar bien, por esso el rei non lo deue desheredar, por fuero. Si los reies se pararen unos con otros mal, con el seynor faga lo que podiere; sin seinnor si fiziere, deue seer desheredado. A la uilla o el rei s'ouiere, si su seynor correr quisiere o asailir quisiere, deue hir con su seynor; et si passare ante el seynor, deue ser desheredado. Si ningun castiello de regno de Nauarra combatieren, uaya con so seynor, si ante el seynor passare, deue ser desheredado. De aquestas cosas, si se podiere catar, que scriptas son, non deue ser desheredado.

Pues que con so seynor a otro regno /^{5v(a)} issiere et pleyto li cayere, prenga iudgo quanto el rey et sus alcaldes [uieren] ² por bien, si quisieren quanto el meanedo mandare.

Si los regnos mal se pararen, aqueil qui el rey hito de tierra faga lo que podiere. Aqueil qui el rey non hito de tierra et [fo] ³ de cabo a fer mal a su uezino et aura feyto mal et aroberia, en coalque hora en la tierra tornare, a quien que eyl aura feito mal, faga¹ peytar como si en la tierra estando li ouiesen feito, que assi es el fuero.

13. *XIII capitula* ¹. *Infançon como deue deffender*

Si en la uilla real quar fueren muytos infançones, a todos los uillanos non deuen prender por escusados o por claueros; et si los prisieren, el merino del rey o el rico homne de la honor o el prestamero deuen prender quoualque casa quisieren de los uillanos por /^{5v(b)} posar et por albergar et por demandar los dreytos del rey que non sean perdudos.

Quoal se quisiere infançon que prenga casero, si las casas son del rey, deuen las casas fer-lis tener al uillano en pie en tal estado como eran en el dia que eil los priso por caseros

12. ¹ XII capitula] al margen en el ms.—² uieren] ms uiereren —³ fo] ms fe.

13. ¹ XIII capitula] al margen en el ms —² la] ms a la —³ el] ms al —⁴ sobrescripto] omite el ms

Et si el uillano del rey casal uieillo ouiere de las eras en a entro, deue-la fer entroa .III. aynos asi como era antes, cubierta de losa, en tal manera como d'antes era feita, et tener-la feita en pie todauia. Et si fuere la casa de pailla et cayere, deue-la fer de paylla en .II. aynos et tener-la feita todauia. Et deue'l dar al sayon que es por suert fiança que la faga en aquellos aynos que sobrescripto es.

Si el uillano casal uieillo non ouiere et dize'l la ² seynal o el ³ solarigo: «fes-me casa», /^{6r(a)} diziendo el uillano que no a casal, la seynal o el solariego deuen-li dar casal de las eras en a entro en la uilla ouiendo issida a la quintana, atal casal que estos sobreditos seynores puedan albergar et, si ouiere cuyta, sobre su cauayllo teniendo suas armas con sua lança pueda uoluerse en III. uezes derredor en est casal que'l daran

Quoal se quisiere d'estos seynores tanto deue auer part quanto el otro. Esta casa deue ser asi como sobrescripto es e'l sayon qui es por suert deue prender fiador que faga fer la casa asi como [sobrescripto] ⁴ es

14. XIII capitula¹. Villano solarigo sines creatura.

Villano solarigo si muriere o si se pierde sines creatura o sines parient prouano, et es a ssaber quoal es el parient del auuelo entroa primo cormano, deue auer la heredat et el mueble et todo lo /^{6r(b)} que ouiere el solarigo sines rey o sines la seynal Et el solarigo si cobra la heredat del uillano en roturas et en pasçturas e'n toda uezindat, deue auer el solarigo en su tiempo quanto I. uillano; enpues la sua muert o depues que ay no et dia faga en aqueylla heredat, a quien que el solarigo lessare la heredat parient [o no] ² deue auer en pasçturas et en roturas et en toda uezindat tanto como I infançon. Maguer que aya parientes el uillano, el mueble deue ser del solarigo e la heredat de los parientes, enpero dando al uillano muerto en so terrario quanto el fuero mandar; et la heredat deue ser de los mas [prosmenos] ³ parientes

Si por auentura el uillano solarigo fuere a otra uilla et non quiera ser en la casa del solarigo, que tenga fuego /^{6v(a)} quando el rey o la seynal o el solarigo uinieren a'lbergar o por demandar lures dreytos

Et si el uillano solarigo fuere a perderse o si fuere a otra tierra por non dar al rey et a la seynal et al solarigo lures dreytos, el solarigo diga al rey o a la seynal que'l fagan prender sus dreitos como sobrescripto es; et si non los li fizieren dar, si el solarigo fayllare al uillano en uilla real o en logar que'l pueda prender, prengalo et tiengalo preso, que por esso non tiene tuerto al rey ni a la seynal. El solarigo teniendo preso al uillano, si el uillano dissiere: «Por aqueylla heredat uestra non uos puedo tenir peita nin labor nin uestros dreytos, que quitar uos he la heredad uestra peytando la torta et la arinçada de uino», de'l fermes de la heredat al so-/^{6v(b)}-larigo en la glesia uezinal d'ont es la heredat; et est ferme sea infançon de la uilla, que assi es el fuero de tierra; si infançon non ouiere en la uilla que pueda ser ferme, sea est infançon de las mas cercanas uillas; et el uillano dessisca de la uilla et uaia o quisiere Et faziendo esto el

¹ XIII capitula] al margen en el ms — ² o no] borrado en el ms — ³ prosmenos] ms promanos

uillano en esta manera que de suso es dita, el solarigo non lo enbargue al uillano; et si fermes prisiere el solarigo, aya por sí esta heredat, et es a ssaber que sines fermes esta heredat pora sí no la puede auer.

15. Villano solarigo. XV capitula¹.

Si uillano solarigo deue hir a labrar .V. dias; al primer ayno deue hir los .III. dias pora la seynal, pora al solarigo II. dias; d'ent al otro ayno pora'l solarigo .III. dias, pora la seynal II. dias Et esta labor /^{7r(a)} fagan en tal logar los uillanos que con sol iscan de lures casas.

Estos uillanos solarigos asi deuen issir en huest como aqueyllos qui son quitios del rei, et el qui non quisiere yssir en huest² pague .LX^a. [soltz]³ de calonia; et esta calonia la meatat deue ser del rey, la otra meatat del solarigo.

Los uillanos qui son estageros de la uilla, aqueillos que son uarones et deuen fossadera complida et han casas conoçudas, et los uillanos solarigos et los uillanos quitios del rey que son estageros en la uilla, deuen itar suert et aqueil qui la suert li diere deue seer posada de la seynal et del solarigo. Quoa se quisiere d'estos uillanos sobreditos que sea por suert, deue fer prender a la seynal todos los dreytos; otrosi a los solarigos. Et /^{7r(b)} est uillano [que's]⁴ por suert, deue ser defendudo de fonsadera et de toda labor⁵ et de toda ren fueras del omicidio; et deue seer de mayo a mayo assi quis cada uno d'eillos deuen ser en su ayno. Enpero si en la uilla no ouiere mas de .I. uillano solarigo, en el .I. ayno deue seer posada del rey et en el otro non deue seer posada.

En aquesta posada de la seynal et del solarigo deue auer .III. estacas bien ficadas en las tierra en el corral, en quis cada una d'estas estacas deue auer quada III trauas. Et si aduxiere peynos uiuos, deue-los tener en aqueillas trauas et catar que non los lieue alguno; et si morieren algunos peynos estando en aqueyllas trauas, el sayon non es tenuto de peytar aqueyllos peynos. Et si /^{7v(a)} los peynos touiere en otra manera, tenuto es de peytar.

Si prisieren peynos de los uillanos, conducto o ropa, deue-los alçar entro en casa que non se pierdan; e por estis si se perdieren, tenuto es de peytar. Enpero si'l foradaren la casa de nuyt o de dia en manera que conoscan los uezinos que eyl non tiene culpa, et que's pierda algo de la casa con de so, aqueyllos peynos non los deue peytar; et si's perdieren los peynos et non otra cosa de lo suio, es tenuto de peytar los peynos.

Si el uillano qui perdio los peynos dissiere al sayon: «Sabidor eras de mis peynos et fes-me dreyto», saluese el sayon como por furto otro. Si cayere el sayon, peyte los peynos et peyte .LX^a. [soltz]³ et .LX^a. dineros et .LX^a. meayllas. E'l uillano sabiendo que /^{7v(b)} non tiene tuerto el sayon et faz fer salua al sayon, si cayere, deue peytar otro tanto de calonia como de suso es dito. Si el uillano fuere solarigo, la meatat d'esta calonia deue seer del solarigo et la otra meatat

15. ¹ XV capitula] al margen en el ms.—² huest] el ms añade como, tachado y subpuntuado.—³ soltz] ms. ss.—⁴ que's] ms quest, con la t borrada—⁵ et de toda labor] repetido en el ms, tachado y subpuntuado

de la seynal. Et si el uillano fuere del rey et caye en la salua, toda la calonia deue seer del rey o pora aqueyl qui terrá la tierra por eyl.

Et si la seynal o el solariego quisiere leuar a los uillanos a las labores deuant ditas, el sayon deue hir con eillos et fer-lis labrar estando sobre eyllor; et el sayon non deue fer ninguna labor. Et el sayon deue comandar ad aqueil seynor qui los fiziere labrar, yantar o cena quoaunque ouieren menester.

Et quada ayno deuense cambiar los sayones.

Et si algun la-/^{8r(a)}-brador faylle que non uaya ad esta labor estando enfermo, o estando costiero de la uilla o uaquero de los uezinos de la uilla, otrosi al pastor de todos los uezinos; estos .IIII sobrescriptos por que non fueren a labrar non deuen calonia. Et si otro uillano fayllere que sea en la nuyt en la uilla, en aquei-lla nuyt que el sayon fiziere a saber que uayan a la labor del rei, si non fuere, deue peytar .XII. dineros. Et si non fuere en la uilla, non deue calonia.

Et si los solarigos dissieren a los otros uillanos: «Hi queremos seer al itar de la suert», prengan plazto de .VIII. dias et iten los uillanos, et a quoaunque escayere la suert sea entroa .I. ayno. Et si los uillanos non quisieren esperar a los solarigos entroa al plazto que de su-/^{8r(b)}-so es dito, los solarigos fagan-lis hitar suert de cabo.

16. *Nuyl omne non saque peynos de uillano solarigo. XVI capitula*¹.

Los peynos del uillano solarigo nin el rey ni la seynal nin el merino del rey, nin el seynor de la honor nin el sayon que es por suert, non deuen trayer fueras de la uilla. Si los sacassen los peynnos fuera de la uilla, terran tuerto al seynnor solarigo, porque ha tanta de part quanto la seynal.

17. *Como deuen enseynnar eredat los solarigos XVII capitula*¹.

Si el seynor solarigo dissiere al uillano solarigo: «Enseyname mia heredat por quoaunque me deues peyta», deue'l enseynnar quada ayno toda la heredat entegrament. Et si dixiere el seynor solarigo al uillano: «Toda la heredat non me has mostrada entegrament», el /^{8v(a)} uillano con otros infançones et labradores et uezinos de la uilla deue'l apear toda heredat. [Con tanto]² el uillano si non fuere creudo, el uillano teniendo la heredat que'l aura apeada, de mas de tierra que non ha, si el solarigo ouiere quereylla, deue'l dar ferme infançon d'aqueil logar d'ont aqueylla heredat fue, en el portegado de la eglesia uezinal, de lo sobreplus que el solarigo fayllare d'aqueilla heredat, d'ali adenant deue auer aqueilla tierra infançona

18. *XVIII capitula*¹. *Fuero de fruytal.*

Si infançon o uillano quoaunque sea, si ouiere algun fruytal en el huerto o en [el]² corral, o en la gotera de su uezino o en quoaunque se quiere de logar de las

16. ¹ XVI capitula] al margen en el ms.—² tanto] ms. contando.

17. ¹ XVII capitula] al margen en el ms.—² Con tanto] ms. contando.

18. ¹ XVIII capitula] al margen en el ms.—² el] tachado y subpuntuado

heras en a entro, que faga enbargo a ningun otro uezino, /^{8v(b)} prengua una segur que el mango aya .I. cobdo raso, aqueyl qui prende el dayno, et párese en sua tierra a genoyllas teniendo el .I. pie en sua tierra et el otro o quisiere, et taylle quanto mas podiere con segur al arbor; e'l tayllador non tiene tuerto. Et quada ayno puede fer esto.

Et si arbor ho otro fruytal fuere fueras de las heras, o en uinna o en pieça o en tierra conoçuda de algun ome, et fiziere sombra a las tierras que son aderedor, deue deuayllar la fruta con una pertiga del fruytal a las [tierras]³ que dan sonbra.

Quoanto fruyto cayere en la stieras d'eillos deuen partir por medios con los seynores de las tierras, a quis quada uno de eylos como cayere el fruyto en las tierras deuen partir por medio; /^{9r(a)} et el fruyto que cayere en sua tierra deue seer suyo. Et si algun seynor del fruytal quisiere cuyllir el fruyto con las manos por non dar part ad estos sobreditos seynores que façe [sombra]⁴ a las tierras el fruytal, si cayere del fruytal, trauando con eyl iaziendo en tierra, deue medio omicidio, qualque fuere en la comarca el omizidio. Et si fuere diziendo que non cayo ni trauo d'eil, el seynor del fruytal si fuere infançon, proue con .II. infançones, et si uillano es con .II. uillanos que ayan uezindat entegrament; et si no lo podiere prouar, iure en l'altar sobre sanctos que non cayo, et con tanto sea saluo.

Otro si algun seynor superbioso fuere que non quiera dar fruyto pora la sombra que faze el fruytal a las tierras aderedor, los seynores de las tierras [prengan]⁵ en quoa tiempo /^{9r(b)} eylos sabor ouieren a uoluntat de si, con sierço et con buytorno, al [primer]⁶ ayno .I. fayssos de restoyllo, al II. ayno .II. fayssos, al tercer ayno .III. fayssos, al quarto ayno .III. fayssos, al .V.º ayno .V. fayssos, al .VI.º ayno .VI. fayssos, al seten ayno .VII. fayssos, et non puye el conto de .VII. aynos adelant; et passe el conto como sobrescripto es, .I., II., .III., quada ayno entroa .VII. aynos. E'stos fayssos sean tales quoaes los omes fazen en uerano en los rostoyllares et aduzen las bestias [et]⁷ los asnos a casa Et den-li fuego al fruytal los seynores deuantitos que han las tierras aderedor del fruytal, el rostoyllo teniendo en lures tierras; maguer que el fruytal ensecare o prenga enbargo, el qui faz el fuego non tiene tuerto. Et si en /^{9v(a)} la uilla non ouiere restoyllo, los seynores de las tierras prengan de las illagas quanto .I. muler podiere leuar en la cabeça, et de-li [fuego]⁸ quada ayno; enpero la ilagua queme en sua tierra.

Et si el fruytal s'ouiere en prado o en campo o en yssida de uilla, et el seynor del fruytal quisiere enparar la fruyta, non puede apremiar o peyndrar a sos uezinos, mas el fruytal es suyo por tayllar et por tener quanto eyl sabor aya. Et si arbor fuere o robre atal que ninguna fruyta non aduze, pude defender el seynor del arbor ramos et todo el cuerpo del arbor entegrament. Si algun homne dissiere: «En est arbor tanta de part he yo quanto tu, porque esta en la yssida de la uilla», et tayllare, quoa se quisiere omne qui tayllare el arbor, deue dar quada ayno .V. [soltz]⁹ de colonia por las ramas; si fruytal es, por la fruyta /^{9v(b)} .V. [solz]⁹, entroa que li plante tamayno arbor como el suyo era en aqueyl logar;

en el ms.—³ tierras] omite el ms —⁴ sombra] ms. sobra —⁵ prengan] ms pregan —
⁶ primer] ms primel —⁷ et] ms con.—⁸ fuego] ms fugo.—⁹ soltz] ms sl.

aqueyl qui tayllo parando aylli algun arbor, por non pagar los .V [soltz] ⁹ quada ayno, et diziendo que tamayno es como era el suyo, et prent iurando sobre sanctos que tamayno es como era el su arbor, deuelo prender.

19. *Rico omne albergar en honor. XVIII capitula* ¹

Si rico omne fuere a sua honor et en la uilla ouiere mont en su terminado, d'ent deue aduzir leyra pora al fuego et faylla pora alumpnar. Quando se assentare a comer el rico omne, el su huespet li deue alumpnar con la faylla ata que cenado aya; et quando cenado ouiere, si'l fiziere dar a comer, deue'l fer aquest seruicio quanto en sua casa s'ouiere. Si non li fiziere dar a comer, no'l deue aduzir leyra nin faylla.

En la uilla ho el rey ha sua /^{10r(a)}seynal et han seynores solarigos, .XXX. dias deue seer el rico omne et albergar, et el prestamero .XV. dias. Et si mont ouiere en la uilla o en el terminado de la uilla, el rico omne deue tayllar quanto hi s'ouiere, cada dia .II. cargas de leyra, et el prestamero .I. carga.

Et si la uilla fuere de .I. solarigo, el solarigo deue tayllar quanto el rico omne e'l prestamero. Et si en la uilla fueren solarigos, unos et otros quada uno d'eyllos quantas opilarinçadas ouieren tantas cargas de leyra deuen tayllar si mont ouiere

En la uilla que fuere del rey senes solarigo, el rico omne deue hi albergar .XV. dias et el prestamero .I. mes; et deuen tayllar leyra como de suso es dito. Et por esso los infançones nin los uillanos d'aqueylla uilla non deuen uedar que non tayllen, nin a porfidia d'eyllos non deuen ta-/^{10r(b)}-yllar.

Et a las bestias d'estos seynores sobrescriptos los uillanos deuen dar quada nuyt, mentre hi s'ouieren, .I. cueuano de paylla; et en la maynana quando uengan de abeurar, entre .II. bestias .I. cueuano de paylla. Et est cueuano deue ser d'aqueyllos cueuanos que los asnos suelen aduzir con huuas de la uinna a la uilla.

Et estos seynores deuant ditos deuen aduzir esta leyra sobredita con aqueylla bestia que su huespet ouiere en casa; pero el huespet si non ouiere bestia ninguna, fagan aduzir con aqueylla bestia que mas quieran de alguno de los uillanos de la uilla.

20. *Fuero de casar. XX capitula* ¹.

Est es el fuero que han infançones et labradores de Navarra por casar ensemble fillos et fillas.

Los parientes, segunt fuero de tierra, los parientes deuen /^{10r(a)} auer bonos omes et prender plazto. Auenidos ensemble los parientes de la esposa, demandan arras en .I. logar o en .II. logares o en .III. logares nompnados; et si non ouiere en .III. logares, dé en .II. logares, al menos en .I. logar; diziendo si Dios li diere que'l compliria entroa .III. logares, dé fiança de coto de buyes ad eylla infançon o a parient [prosmo] ² d'eylla que los porrá con fermes dreytureros

19. ¹ XVIII capitula] al margen en el ms

20. ¹ XX capitula] al margen en el ms — ² prosmo] ms prosmos — ³ esposo] ms. elposo.

de las uillas o las arras son, ad eylla o a creaturas que fagan ensemble eyl et eylla. Estas arras son dadas a infançones et non a ningun uillano.

Esto feyto, dé fiança a su esposo, la fiança que sea de la comarca del esposo, que'l terrá por marido et por seynor, et que'l agoardara ad eyl a todas suas cosas, sano et enfermo. Otrosi el esposo dé ad eylla otra fiança de su comarca d'e-/10v(b). ylla, que la terrá ad eylla por muyller et que l'agordara sana et enferma ad eylla et a todas suas cosas. Et la esposa dé .III. fianças que sean de la comarca del esposo asi como es sobrescripto de suso; e'l [esposo]³ dé otra tal fiança, así como de suso es dito, a la esposa.

Et esto feyto, dé'l el esposo ad eylla fiança que no'l faga hitar ferme d'estas fiaduras ad eylla, nin por falago ni por menaça, asi que non sean al menos .III. parientes prouanos del padre o de la madre d'eylla. Todas estas fianças sean dadas con coto de buyes.

Partida de tiempo passado, si enbrauiere eylla que se fuere sua uia, peyndre el esposo a sus fianças .III. et aduganla a la casa o eyl quisiere, et ponganla al limdar de la casa en a entro, sabiendo uezinos de la uilla et de la comarca. E si por aventura de cabo quiera enbrauir, eyl /11r(a) pensando d'eylla assi como conuiene, aduganla los fiadores de cabo como de primero en aqueylla misma casa o en otra casa en quoyal eyl quisiere, sabiendo uezinos et buenos omes de la comarca que aduyta la han et puesta en casa del limdar en a entro en su poder.

Et des'i adelant marido et muyllar uiuiendo ensemble en I^a. casa et manteniendose al millor que pueden, si'l semeyllare que eylla non quiera ficar con eyl, enbie por parientes d'eylla, al menos III., et por otros III. de los mas cuerdos de la comarca, et faga entender a todos estos buenos omes sua uida et sua maniença de si et d'eylla, asi como de suso es scripto. Et si los podieren auenir, bien; et si non, partan-los en esta manera que el marido aya suas heredades et eylla las suas. Et si heradat ouieren comprada alguna o algunas ganadas, que partan por me-/11r(b).dio. Et el mueble et las deudas otrosi que partan por medio. Et si por aventura creaturas dobladas ouieren, el padre prenga las meas de las creaturas et la madre las otras meyas. Et si .I. creatura fuere de mas, crien entrambos, diziendo estos buenos omes: «por criar estas creaturas mas ual que se aiuden ensemble». Por mandamiento d'eyllos uiuiendo ensemble, de cabo si la muyller enbrauiere, peyndrando las fianças aduganla ad eylla a una casa de sos heredades et, eyl delant seyendo al dia que'l daran, mostre-lis so leyto; e'yillos de partes de los pies del leyto ligen el .I. pie d'eylla al pie del leyto, el otro pie d'eylla al otro pie del escayno, la una mano d'eylla al .I. banço del leyto, la otra mano al otro banço del leyto. Des'i adelant non son tenidos de aduzir ad eylla, et prengan ferme de lures /11v(a) fiaduras et partanse en esta manera como de suso es dita. Et las creaturas que son feytas en est comeyo, son de pareylla, maguer eyllos se partan, deuen-los criar et deuen-los heredar lures heredades depues lur uida.

21. *Infançon*

Infançon ninguno maguer que's parta de su muyller, non deue calonia ninguna. Et todo omne peytero que sea, si's parte de sua muyller, deue .I. buy. Et est

buy deue ser atal d'ont est homne et esta muyller son; enbien a los mas cercanos .III. bustos et esleyan de quada busto los millores II. buyes, et estos .VI. buyes lessar los millores .II. buyes et los .II. peyores, et de los meyanos quoyal esleyeren peyten al seynor.

Todo omne qui d'esta guisa se parte de sua muyller, Glesia non ha mandamiento e'l bon rey don Sancho et el bispo don Pedro de Paris seyendo ensen- /11r(b)-ble, uenieron marido et muyller por partir con lures creaturas. Sobre esto rogo el bispo don Pedro de Paris al rey que non sofriesse en sua tierra tales casamientos que eran a perdicion de las almas. E'l rey sobre esto puso dia de cort con sus ricos omes et con sus infançones en Pamplona et, auido el conseyllo, dissieron que lur fuero que non dessaran; maguera si ninguno odiesse missa o prisiessse sortieyllas por mano de missacantano, otorgaron que fuesse casamiento, et estos atales que fuessen a fuero de Glesia, maguera reteniendo fermes et fiadores et arras segunt lur fuero.

22. *Infançones casar.*

Marido et muyller infançones casados ensemble si fizieren creaturas, fillos o fillas, dobladas, uiuiendo eyllos si muere alguna creatura d'estas, ermano ni ermana /12r(a) non pueden demandar suert d'aquest qui es muerto, porque eyllos son uiuos et poderosos et seynores de lures heredades.

Mas quando morra el padre o la madre, si quisieren bien pueden partir todas las heredades del padre o de la madre por meyo, et ytar suert quoyal sera la suert del uiuo o del muerto

Ermano ninguno que muera des'i adelant, el ermano mayor deue prender suert por eyl, asi [como si] ¹ uiuiesse, en las heredades del parient muerto. Otrosi ermana ninguna que muera, la ermana mayor deue prender sua suert asi como si uiuiesse En uida d'est parient que finca uiuo, si muere alguna creatura d'estas, las otras creaturas non pueden demandar suert, porque eyl es sano et poderoso de sua hereditat.

Si por auentura todas las er-12r(b)-manas mueren sines creaturas, el hermano mayor deue heredar todas las heredades de estas ermanas.

Otro si por auentura mueren los ermanos todos sines creaturas, lures heredades deuen fincar a la mayor ermana.

Moriendo estos ermanos et estas ermanas con creaturas, si por auentura fincare .I. ermano et una ermana et si muere la ermana sines creaturas, suas heredades deue auer el ermano. Otrosi si muriere el ermano ante de la hermana, suas heredades deue auer la ermana et non ninguno de los sobrinos, porque eyllos son mas cercanos parientes.

Moriendo algunos d'estos primos cormanos sines ermandat et sines creaturas, lures heredades deue heredar el fillo ² del ermano mayor, maguer sea menor de dias que todas suas ermanas; et si fillo non ha, /12s(a) la filla mayor O si mo-

22. ¹ como si] *ms* como assi como — ² fillo] *el ms* añade mayor, *tachado* — ³ las] *ms.* la.

rieren todos los primos cormanos sines creaturas, lures heredades deue auer el fillo de la ermana mayor si fillos ha e, si non, la filla mayor.

Estos primos cormanos que heredan estas heredades auiendo creaturas de pareylla et de ganancia, maguer que los de pareylla sean menores de dias, deuen heredar, et non los de ganancia. Enpero si creaturas de pareylla non ouiere, bien pueden heredar [las]³ de ganancia, segunt que escripto es de suso de las creaturas de pareylla.

Si algunos d'estos ermanos o ermanas o primos cormanos o primas cormanas quisieren uender o cambiar o ayllenar, aqueylos que los unos moriendo los otros deuen heredar, aqueylos deuen comprar o cobrar del primo cormano a iuso; et del auuelo a suso ninguno non puede demandar por uoz de parentesco. Adelant non aya por que demandar, por amor que /12^v(b) ayan paz et finamiento de guerra entre si.

23. *Agoardar fealdat XXIII capitula*¹.

Infançon casado con sua mulier ouiendo creaturas, si moriere la mulier, el marido deue tener las heredades de la mulier et las suas teniendo fealdat; et todo mueble et toda deuda en quanto fealdat touiere, crear et aconseyllar suas creaturas.

Fealdat deue tener d'esta manera: non casando, non uendiendo, non cambiando, non ayllenando, las uinnas podando et cauando todas de cabo a cabo, arbores et fruytales que sean en las uinnas que non tayllen; et si por auentura ouiere casa o ceyllero o payllar ho otra casa que aya portal, que la mantengua en pie que non se desfaga.

Et si por auentura quoaunque quiere cosa d'estas que de suso son escriptas faylleciere, por ayno et dia pierde por eyllo fealdat. Et si por auentura casare a furto por non perder las fealdades, a iuras o de otra /13^r(a) manera, que la tiene por clauera et por manceba diziendo, et podieren prouar con omes que fueron en la iura o en el casamiento, pierda fealdat; et si non podieren prouar, prenguan sua iura quada ayno et dessenlo en paz.

24. *XXIII capitula*¹. *Viduo casar.*

Si est infançon dissiere a suas creaturas: «Non puedo ser que non case, et prendet uuestra suert», si quisieren prendran, si non quisieren prender, el padre non los puede costreyner, mas casará et terrá casa con muyller et con los fillos. Et tiempo passado, si las creaturas quisieren et dissiere al padre: «Dat-nos nuestro dreyto», deue-lis dar el padre, si arras ha, las arras por suert; et si no, la meatat de todas las heredades a lur esleyta de los fillos. Et si las heredades ouieren a partir, uayan a cada uilla o las heredades son et iten suert quoaunque sera la part de la madre et quoaunque sea la suert del padre. Prendiendo la /13^r(b) suert de la madre, los fillos den ferme al padre que non demanden hereditat ninguna en uoç de lur madre. Otrosi el padre de-lis ferme a suas creaturas que non lis demande hereditat ni particion.

23. ¹ *XXIII capitula*] al margen en el ms

24. ¹ *XXIII capitula*] al margen en el ms

E si por aventura de la secunda mulier ouiere creaturas et, muerta eylla, quisiere el padre casar, parta con las creaturas secundas asi como con las primeras.

Et si el marido muere et finca la mulier, asi ha de tener fealdat como el marido, segunt que de suso es escripto.

Marido et muyller casados ensenble non ouiendo creaturas, muerta la mulier, el marido puede tener suas fealdades mientras uiua, et non puede uender nin cambiar nin ayllenar de las heredades de la muyller. Mas si ouiere menester, de suas heredades uenda; esto puede fer porque non ha creaturas. Quando moriere el marido, las heredades de la mulier deuen tor-/13v(a)-nar al parentesco de la mulier. Otrosi las heredades del marido deuen tornar a los parientes prouanos suyos.

Est infançon que caso .II. o III. o .IIII. uezes, quando morra, las primeras creaturas prengan la meatat de suas heredades, et las otras creaturas la otra meya de las heredades. La postremera meatat que fincara, quoantas muylleres ouo fagan tantas suertes, si uezindat ouieren bien; si no, sean pagados con atanto.

Otrosi las dueynas si quisieren casar .I. uez o II. uezes, casen como sobrescripto es

25. XXV capitula¹. Por escosa casar sua parienta

Si algun infançon quisiere casar sua filla por escosa et ha precio con otro uaron el padre prengua .II. de los parientes suyos et [d'eylla]² prosmedanos, al mas III, et diga'l ad eylla con estos parientes: «Casarte queremos con fulan, omne qui conuenient es a ti», bien puede /13v(b) desitar eylla ad eyl et aun otro que'l prometan por marido; mas el tercero que eyllos li querran dar, por fuerça ha de prender, e'l tercero que aduzen el padre et los parientes, que case con eylla.

Et dize el esposo al padre et a los parientes: «De grado casaria con eylla si non fuesse por el precio malo que ha»; et dize el padre con los parientes: «El nompne si, que non ha en eylla tal feyto» Faga fiadurias el padre con el esposo que si fuere el feyto como el precio es, que non case con eylla; et si el feyto no hi fuere fueras el dito, que case con eylla. E'l padre et el esposo con otros parientes prengan III o .V. echandras de creyer, et prengan la esposa et ponganla en casa, et baynenla et den-li en las manos goantes, et ligen ad eylla estas echandras sobre [los]³ goantes en las muynecas con sendas cuerdas en manera que non se /14r(a) pueda soltar, et si quisiere eylla misma soltar, uedando eyllas que non se suelte; que si non, en culpa [sera]⁴. Fagan-li otrosi el leyto et iten en el leyto ad eylla, catando en el cuerpo et en los cabeyllos et en los otros miembros si tiene aguylla nin otra cosa atal que non pueda sacar sangne; et adugan al esposo et fagan itar con eylla al esposo, et [los]⁵ fideles iagan en aqueylla misma casa et, eylla leuantando, caten el leyto; si las demas dissieren que non tresso sauana, sea eylla desheredada, et el esposo prenga fermes de suas fiadurias et uaya su carera, et eylla romanga desheredada.

25. ¹ XXV capitula] al margen en el ms —² d'eylla] ms eylla.—³ los] ms las —⁴ sera] ms seras —⁵ los] ms las.

Enpero est desheredamiento non es dado a padre nin a madre, nin a ermanas nin a fillos de ermanas, nin a fillo de barragana, mas es dado al fillo mayor de pareylla o a so fillo, o a primo cormano al mayor de pare-/14r(b)-ylla, et a parientes prouanos del padre; et non ouiendo prosmanos parientes del padre, leys-senla en paz. Ermanas de pareylla nin creaturas d'eyllas non han dreyto por desheredar la .I. a la otra, nin ninguna parienta.

Si es infançon non ouiendo sinon fillas, el ermano mayor del padre puede demandar tan bien como el ermano mayor de pareylla, todos los dreytos que sobrescriptos son, si no ouieren otro parient prosmano

Creaturas de ganancia, si fizieren putage, deuen seer deseredadas.

25 bis.

Muyller infançona uidua non ouiendo creaturas, si fiziere putage por que se enpreyne, el ermano mayor de pareylla si dissiere: «Ermana, dizen-me que sodes preygná», fuero es que en loguar aguisado deue uer con la mano en el uentre ad eylla si es pregná o non. Creyendo que's preigná, deue inbiar por /14v(a) parientes de partes de su padre et de ssi et d'eylla los mas cercanos, et con estos parientes deuela prender et leuarla de las .III. heredades o de las .II. heredades o de la una heredat, quoyal eyl mas quisiere que sea de la natura de entranbos Agoardela de dia et de nuyt muyt bien ata al tiempo de parto; estonces sopiendo el ermano que eylla quiere parir, enbie por parientes cercanos de si et eylla, et con conseyllo d'eyllos aduga buenas echandras III. o .V. Quoando eylla ouiere a parir, estas .V. echandras aduytas, eyllas ueyendo yssir la creatura del uentre, con estos parientes que uean entre piernas la creatura, con atanto deue seer desheredada.

26. XXVI capitula¹ Infançon en uillana

Si infançon fiziere creaturas en uillana realenca o de orden o de ninguna uilla que peyta aya dada al seynor, et estas creaturas quisieren uiuir en aqueyl /14v(b) logar o en otro loguar que est seynor aya uezindaz, diziendo el seynor que [fillos]² son de sua uillana que ad eyl daua peyta, [dar-li han]³; et en otra uilla si ouieren la uida, bien se pueden defender, ho el seynor non ha que uer, non lis puede demandar peyta a las creaturas. Et seyendo uezinos en alguna uilla ante que el seynor, enparar se pueden; et si el seynor fuere primero uezino en la uilla, demandar [puede]⁴ peyta

27. Infançon en uillana. XXVII capitula¹.

Si est infançon faz creaturas de uillana que no aya peytado peyta, non prendiendo algo de partes del padre nin de la madre d'eylla, nin heredat nin mueble, las creaturas d'eylla seran infançones por todo logar. Si ad esta mulier dissiere el

26. ¹ XXVI capitula] al margen en el ms —² fillos] ms fillas —³ dar li han] omite el ms.—⁴ puede] ms. pude.

27. ¹ XXVII capitula] al margen en el ms

seynor: «Da-me peyta, que filla eras de mi uillano et de mi uillana», el infançon que tiene ad eylla en casa deue dar fi-/15r(a)-ança sobre eylla diziendo que es sua mulier o sua manceba soldada, et bien la puede defender.

Si infançona faz creaturas de uillano, por todo logar que est seynor aya que uer, seran uillanas estas creaturas

28. *XXVIII capitula*¹ *Marido et muyller uillanos*

Marido et muyller uillanos casados ensemble, si moriere la mulier creaturas ouiendo de edat es a saber de .VII. aynos, estas creaturas luego pueden demandar suert de madre; et si creaturas non [ouieren]² los parientes de la mulier pueden cobrar [et]³ demandar el dreyto de la muyller. Si estas creaturas non ouieren hedat, tenga las creaturas el padre d'aquí a que ayan hedat las creaturas.

La espensa del enterramiento d'esta mulier sea .VI. [arrouos]⁴ de trigo et una coqua de uino et, pora offrienda nouena, .II. [arrouos]⁴ de trigo et .II. arinçadas de uino, entroa tan-/15r(b)-to puedan peyndrar los parientes de la muyller, et si mas espendieren, non son tenudos de peytar si non quisieren

29. *Si muere uillano XXIX capitula*¹.

Si el marido muere uiuiendo la muyller et ouiendo creaturas que non ayan edat, los parientes del padre pueden toyller las creaturas et todo lo del padre, et criar las creaturas d'aquí a que ayan .VII. aynos complidos, los .VII. aynos pasados, uayan o quisieren. Et la particion deue seer atal que la meatat de todas las heredades del padre deuen prender et de la madre estas creaturas, eylla prendiendo unos uestidos pora ssi, et lo al partir lo [de]² est marido et d'esta mulier heredat et mueble partan por meyo.

Quoalque muera sines creaturas, las heredades del muerto deuen tornar a sua natura

30. *Fuero de puteria. XXXª capitula*¹.

Marido et muyller infanço-/15v(a)-nes seyendo casados e'nsenble ouiendo creaturas, si alguno d'eyllos faze creatura en otro logar en putage, esta creatura non la deue criar ningun del parentesco, ni las creaturas de pareylla [non]² la deuen tener por ermano, et non deue heredar en lo de su padre nin de la madre. Quando fuere grant, non deue seer recebudo ni por fiança ni por ferme ni por testimonianç, ni por jurador en hueyl de glesia.

28. ¹ *XXVIII capitula*] al margen en el ms.—² ouieren] ms. uieren.—³ et] omite el ms.—⁴ arrouos] ms. arro

29. ¹ *XXIX capitula*] al margen en el ms.—² de] ms. deue.

30. ¹ *XXXª capitula*] al margen en el ms.—² non] ms. ni

30 bis. *De puteria de uillano.*

Otrosi marido et muyller uillanos casados ensenble, si fizieren creatura en otro logar, non deue seer recebudo mas que el del infançon en ninguna cosa, et demas deuen al seynor meyo omizidio atal quoyal es en la tierra ont eyllos son

31. XXXI capitula¹. *En quoyal manera faran costiero.*

Ninguna uilla realenca o aya infançones et uillanos de rey o de orden o /15r(b) de encartados, por la Sant Miguel deuen dizir los infançones a los peyteros que lis den costiero, «si non peyndrar uos emos». Queriendo et non queriendo, a dia sabuda deuen itar suert [et ad aqueyl a quien cayere la suert]² d'stos peyteros, deue seer costiero. Et si por aventura algun infançon dissiese: «Io [en]³ todo uezino so et cabet-me en a suert», si los peyteros quisieren, prender lo an, et si non quisieren, por fuero non lo prendran.

Et est costiero deue catar el termino de la Sant Miguel ata Sancta Maria Candelera d'esta manera: Leuantarse deue el costiero a la alba del dia et aguoardar el terminado ata que todos los ganados yscan a pascer, et des'i adelant puede laurar o fer otro message ata ora de uiespras; des'i adelant cate su terminado ata la nuyt escura Et de la Sancta Maria Candelera en a suso deue catar su termino todo el dia, de maynana /16r(a) ata la nuyt, et non deuen fer otra cosa. Et si por aventura fuesse en otro logar fuera de su termino, cada dia deue .I. [rouo]⁴ de trigo por calonia.

E la yssida del costiero deue seer prouada d'esta manera: De las heras alguno creyendo que el costiero non sea en el termino, uaya a logar ho el costiero suele seer mas et clame .III. uezes por su nombre et, si non respondi, peyte la calonia Si por aventura dissiese: «Yo fu al extremo del terminado a los ganados que pascian et por esço non uos odia et non uos respondi», iurando que non era fueras del terminado, non deue peytar calonia.

Est costiero deue prender atal calonia de Sant Miguel ata la Sancta Maria Candelera quoyal los uezinos paren entre si; de la Sancta Maria Candelera ata la Sancta Cruz de mayo deue prender de todo ganado .I. almut /16r(b) de tal pan de quoyal fuere el dayno; de Sancta Cruz ata o sieguen o ranquen, .I. quoartal de tal pan de quoyal fuere el dayno Et esta calonia es de las bestias domadas que prenden dogal en la cabeça. Puercos et oueyllas et gegoas brauas, si entran de dia entre miesses, han por calonia .I. [rrouo]⁵ de trigo. Et todas estas calonias son puestas por el dayno del dia. Los ganados mayores han de nuytes sendos [rrouos]⁶ de trigo de calonia.

En los restoyllares o senpnan fauys, si ombre sempnare [trigo]⁷ o comuyna o ordio o auena, el costiero non es tenuto de goardar si non li dieren soldada sabuda por eyllo, por goardar esto .IIII. fruytos. Enpero rogaria non es uedada

Si algunos de los uezi-/16r(a)-nos han preso dayno en lur pan al tiempo de

31. ¹ XXXI capitula] al margen en el ms —² et ad .. suert] laguna en el ms.—
³ en] ms e —⁴ rouo] ms ro —⁵ rrouo] ms rro.—⁶ rrouos] ms rro —
⁷ trigo] omite el ms

segar o de arranquar al dia d'antes, deue prender est qui dayno ha preso uno de los uezinos o .III. faziendo saber al costiero. Si uenir quisiere, bien; et si non, quanto preciaren estos tanto peyte el costiero. Si por auentura est costiero dissiesse: «Mal me queredes et por esso me auedes a tuerto caloniado», iurando el dueyno de la mies que tanto bien es perdida, peyte el costiero. Maguera d'esta colonia dando fiança al seynor del dayno, deue auer plazto entroa las miesses tri-ladas. El omne qui a preso el dayno, si creyere al costiero et non prisiere fiança et passare la Nadal, d'aqui adelant no es tenuto de peytar

Otrosi el costiero si ha de prender algunas colonias d'estas que de suso son scriptas, non prendiendo fiança, si passare la Nadal, des'i adelant non son te- /16v(b)-nidos de pagar.

32. *Villano por costeria .I. coartal de trigo*

Todo uillano realenco o de orden deue por costeria .I. coartal de trigo et una coarta de uino. Enpero si el uillano fuere uezino en .II. uillas o en .III. uillas, uuelua al coartal de trigo otro coartal de ordio o de faua, e'nbuelos ensemble, pague con aqueyl pan en las .III. uillas por costeria.

Si el uillano uinnas ouiere en las .III. uillas, en quada uilla sendas coartas de uino por costeria.

Maguer que infançon o uillano ayan pieças et uinnas et non ouieren casa o casal uieylo, que digan que non son uezinos, por estas tierras non deuen costeria.

Del tiempo de la Sancta Maria Candelera entroa la Sancta Cruz de mayo, si oueyllas o puercos entridieren pasciendo circa las miesses, .III. o .IIII. o .X.¹ cabeças, la colonia es .I. coartal de trigo; et de .X. /17r(a) cabeças en a suso quantas quisieren que [sean]², la colonia es .I. rouo de trigo.

33. *Ferir ante reyna.*

Si algun homne fiere a otro homne delant la reyna, el qui fiere deue por colonia: atal goarnimiento deue guoarnir la cambra de la reyna como la tenia eylla guoarnida a la ora que'l ferio.

34. *Villano realeno.*

Todo homne uillano realenco o de orden que da peyta al seynor, demandando el seynor la peyta, el uillano sabidor diziendo: «Feyt-me plaçto¹ en-/17r(b)-troa al agosto», est seynor bien puede fer plaç, fiança prendiendo de su peyta; et non prendiendo fiança, si'l faz plaçto et passa Sancta Cruz de maio, si non quiere el uillano, des'i adelant non dara peyta, quar perdida la ha, por fuero, porque la Sancta Cruz de may es passado.

32. ¹ pasciendo circa... o .X.] repetido en el ms al comienzo de folio *Cambia la mano* —² sean] ms. sea.

34 ¹ plaçto] ms paçto.

35. *Non cortar arbor de bustaliza.*

Ningun homne qui en bustaliza de montayna cortare arbor conoçuda de bustaliza, I buey nouieylo deve por colonia, que assi es el fuero.

36. *Heredat empeynar.*

Todo infançon que quiera sua hereditat empeynar, entregrament todo lo que ha en la uilla, deve empeynar por fuero de genero a genero.

Al qui prende la hereditat deve dar /17v(a) ferme de la uilla, en uoç de peynos, ont la hereditat es, et que sea ueçino; et la fiança de coto de buyes sea d'ont se quiere. Si [alguno]¹ li fiziere enbargo, que li riedre todo enbargo teniendo est ferme et esta fiança en uoç de peynos. Esta fiança si non podiesse aquedar, deve-li dar otra fiança de su auer planament. Et si [semnado]² hi ha en esta hereditat, el fruyto deve seer d'aqueyll qui prende en peynos.

Si otro paramiento non façen, est peynal deve seer rendudo quitio al dia de Sancta Maria de febrero, por fuero. El qui empeyno esta hereditat deve aduçir el auer por quoval empeyno, si trigo es, trigo, o dineros, al porteguado de la uezin-/17v(b)-dat d'ont la hereditat es, en el dia de la Santa Maria de febrero; et mesurar todo el trigo o contar todos los [dineros]³ delant .IV. uezinos et, si non son hi, adugua de las mas prosmanas uillas o de la ledania. Mesurado el trigo et contado el auer ante estos testiguos, por quoval puedan abneçer estos testigos, eyl esto fiziendo ad aqueyll qui la hereditat preso, non li deve ualer por que quiera diçir: «Non uos deuo abrir ata al otro genero, que non me paguastes como pagar me deuiades». E'l seynor abonendosi de como sobrescripto es con estos .VI. uezinos, entre en sua hereditat, que no'l /18r(a) deve ualer teniença ninguna. Et si est seynor d'esta hereditat non aduze todo el auer complido, que menguoe poco ni muyto, non li ha porque abrir esta hereditat si non quisiere.

Est qui prende est peynal, quando lo prende, deve demandar fiança ad aquel qui empeyno, que al dia que'l [diere su auer, que'l]⁴ soltara sua hereditat; si menester ouiere ferme o fiança, eyll ye-los trobe. Est qui empeyna deve mostrar suas casas en quoval estado las empeyno, en tal que las tenga. Otrosi si fuere casal, que non se apeore. Et si ouiere huerto que fruytales aya, et si uinnas ouiere, en tal estado que las tienga como las /18r(b) empeyno. Et si por aventura en su teniença se apeoraren, deuelos emendar et tener su peynal d'aqui a que cobre su auer.

Si alguno quisiere empeynar⁵ vinna o pieça o campo, enseynando et apeando lo deve empeynar⁵, asi como de suso es escripto.

37. *Heredat qui da a laurar.*

Todo homne qui da sua hereditat a laurador por laurança, deuela dar de ge-

36 ¹ alguno] *ms* alguono.—² semnado] *ms* semnado—³ dineros] *ms* d *interlineado*—⁴ diere su auer que'l] *omite el ms*—⁵ empeynar] *ms* en peynal

nero a genero, faziendo laurador cada ayno; que [si] ¹ est laurador touiere esta heredat del ayno primero adelant et leyso al otro ayno el seynor de la heredat et non renouando cada ayno, puede diçir, si quiere: «Mia es esta heredat. que ayno et dia so tenient», e'l seynor bien puede /^{18v(a)} perder sua heredat.

Es a saber qui prende esta eredat por laurar deuela semnar trigo [o ordio] ² o comuyna o auena; et si otro semient quisiere semnar, deuela semnar con sabiduria del seynor. Et el seynor deue dar d'estos .IIII. panes la semient ata al dia de Sant Johan entroa que entre el sol en el portegado de la glesia uezinal d'ont es la heredat; et [si] ¹ no'l diere ata al dia de Sant Johan, des'i adelant espere al quarto del fruyto. Et el seynor de la heredat ³ dando la semient de como es escripto ata al dia de Sant Johan, si el laurador se espartasse por maleza por no prender la semient [et] ⁴ passare el dia de Sant Johan, diziendo: «Non me diestes la semient en el tiempo que dar me [deuiades] ⁵», aboniendose el seynor de la heredat con /^{18v(b)} .VI. uezinos que assi adusso la semient por dar al laurador, prenga la semient.

Et est laurador si deysare algunas pieças de las que deue semnar et non semnare, el seynor de la heredat deue prender otra tal tierra de la semnada como la leyssso

Est laurador diziendo et faziendo a saber al seynor de la heredat que non ha semient que pueda semnar, si paramiento non ouieren, non li iaze en culpa

38. *Con mano irada matar padre.*

Todo homne qui infançon sea et matare padre o madre con mano irada, o si feriere con mano irada, o si clamare traydor prouado [o mesielo] ¹, en el conseylo o ante buenos homes ² deue seer desheredado. Otrosi si a sua madre clamare puta prouada, ante buenos homes deue /^{19r(a)} seer desheredado

39. *Non deue iurar ome en Coaresma.*

Nuyll homne non deue iurar de Septuagesima ata X dias de Pascoa de Quaresma passadas. Otrosi en Aliento non deue iurar ata la fiesta de Sant Iiarii passada. Otrosi del dia de Santa Cruz de mayo entroa al tercer dia de Sant Miguel non deuen iurar, si non fuere por [omizidio] ¹ o por traycion o por onta

40. *Camio fer con el rey*

Todo fidalguo puede fer camio con el rey iurando a sus parientes, si clamos an d'eyll, que non faç por cubierta nin por barata ninguna, [fuera] ¹ dreytament por su pro.

37. ¹ si] *omite el ms*—² o ordio] *ms. ouiendo.*—³ heredat] *el ms añade et.*—

⁴ et] *omite el ms.*—⁵ deuiades] *ms. uiades.*

38. ¹ o mesielo] *omite aquí el ms*—² homes] *o mesielo añade el ms*

39. ¹ omizidio] *ms omizido.*

40 ¹ fuera] *omite el ms*

41. *Reptar conceyllo.*

Ninguno qui quisiere reptar a todo el conseyllo de la uilla non son tenudos de saluarse nin de responder los de la uilla por eyllo, mas /19r(b) a uno o a .II. por nopne, si lis dissiere, saluarse deuen.

42. *Clamos de la orden*

Si alguno ouiere clamos del conuent de Santa Maria de Ponplona o de Sant Çaluador o de Iraçh o de Iranç o de Oliua o de Ronçasuaylles o de Belat, peyndrar puede otros peynos, mas non las açenblas que carrean el pertreyto pora los conuentes et por los pobres. Et eyll qui peyndrare d'estas bestias trayendo [campaniella] ¹, es la colonia .M¹¹. [soltz] ²; et non traiendo campanieylla, conociendo las bestias, si peyndrare, la colonia es .CCC. [soltz] ²

Est donatio et esta merce et esta almosna dio el rey don Sancho el Bueno por pregaria del bispo don Pedro de [Paris] ³, qui edifico Iranç.

Et si campanieylla non trayen et non /19v(a) conoçe las bestias, iurando que non las cognoscia, non [ha] ⁴ colonia.

Enpero si ninguno ouiere clamos d'estas ordenes sobreditas, prendre'n heredades, coyllaços, mueble, de todo lo que han

43. *Por fuerça leuar duyna.*

Dueyna si se fuere con fidalgo ninguno, diçiendo los parientes d'eylla. «Por fuerça la lieua», diziendo el infançon: «[Non] ¹ por fuerça, mas con su plaçer d'eylla», deue seer puesta en meanedo d'esta manera: Los parientes d'evll et eylla deuen poner bonos homes por fielles, .III. o .V., prometiendo plaçto en loguar sabudo [entrambas] ² las partidas; et deuen poner ad eylla estos fideles en meanedo, entre los parientes d'eylla et de aqueyll qui la leuo, et deuen mos-/19v(b)-trar el padre o la madre, si los ha, et si non, a los mas cercanos parientes d'eylla, et desent ad [aqueyll] ³ qui la leuo; et desent [deuenla] ⁴ tornar de cara que sea por comunal a [entrambas] ² las partidas et, si se fuere a los parientes, deue issir por enemigo el infançon et el rey deuelo itar de tierra et enparar todo lo suyo; et si se fuere con aqueyll qui la leuo, el ermano deue enparar todo lo suyo et desheredarla, et si ermano no ouiere, el mas cercano parient de partes del padre deue auer lo suyo et deseredarla

44. *Fuero de infançon pobre.*

Infançon pobre enemizado de muytas partes [prende] ¹ .I. dueyna rabida et ua-sse desterrar con eylla, 'est infançon andando con esta /20r(a) dueyna uiene en

42. ¹ campaniella] *ms.* capaniella —² soltz] *ms.* ss.—³ Paris] *ms.* Parus.—⁴ ha] *omite el ms.*

43. ¹ Non] *interlineado en el ms*—² entrambas] *ms* entrabas.—³ aqueyll] *ms* queyll.—⁴ deuenla] *ms.* debela.

44. ¹ prende] *ms.* prender.—² otros] *ms* otras—³ aprenqua] *ms* d'aprenqua.—⁴ quieran] *omite el ms*

tal pobreça que non li finca mas de una bestia et, non ouiendo que comer nin otro conseyllo, [prende] ¹ sua dueyna en la seylla de sua bestia et eyll mismo en las trosas siegue al seynor cada dia; en quoaunque uilla o el sennor, prengua posada pora ssi et pora sua dueyna, dando el seynor tal racion como a [otros] ² [aprengua] ³ et coma con eylla en sua posada. Uuiendo en esta manera con eylla, enemigos otros et non los parientes d'eylla si dan salto que lo [quieren] ⁴ matar, non deseparando ad eylla, si lo matan, tan bien pueden los parientes d'eylla quereyllar sua muert, como los suyos mismos; et si por auentura est infançon /^{20r(b)} por miedo de la muert la desepara ad esta dueyna, los coynados nin los parientes d'eylla non deuen quereyllar la muert d'est infançon, porque desepará.

Esta dueyna fincada sin conseyllo torna a la tierra et dize al rey: «Seynor, dame conseyllo, que por fuerça hee andadada et non por grado, et dat-me conseyllo en que uiua en uuestra tierra entre mios parientes», dando el rey conseyllo con placenteria de los parientes, deuen-li dar ad eylla en que pueda uiuir; mas si creaturas ha, busque conseyllo o pueda uiuir a otra part.

45. Orden parar cruz.

Si la orden cobra alguna heredat o por compra o por cambio o por almario en alguna uilla, et esta orden algun /^{20v(a)} freire por uoç de la orden ua ad aqueylla uilla d'ont la heredat es, deue aplegar al [menos] ¹ .VI ueçinos ifançones o lauradores del rey o de la orden que sean de la uilla, et si non son en la uilla, de la uilla mas cercana, diziendo a eyllos: «Esta heredat es nuestra por esta manera, et paro la cruz por esta manera sobre la casa», si la ha; e si non ouiere casa, en el casal uieyllo, e si casal no ha, en el huerto o en la hera o en quoaunque tierra ouiere de las heras en a dentro ponga la cruz. Esta cruz estando en .XXX dias sin mala uoç, d'ent adelant por ninguno que mala uoz pongua, non deue responder, si non quiere, a fuero seglar, sinon a fuero de elesia.

Enpero si la cruz toyllire algun /^{20v(b)} omne ante que compleçca .XXX dias, entroa que la cruz torne a su logar, aqueyll qui toyllio tornando la cruz a su logar, deue la orden ir a fuero seglar, diziendo est omne qui la toyllio la cruz que l'a puesta en su logar a la orden et «toylllet la cruz primero et despues uayamus a fuero», la orden deue toyller la cruz e seguir al fuero seglar.

Manda el fuero que la orden et est infançon que ponguan .III. o .V fideles, et ante estos fideles la orden adugua .I. rouo raso de tierra de aqueyllas sobre que es el pleito, et ponguan sobre el altar et iure el infançon que non ha dreito la orden en aqueyllas heredades d'ont aqueylla tierra adussieron. Est ² infançon saque esta tierra fueras de /^{21r(a)} limdar de la puerta de la elesia, et si saca, sea suya, et si'l cayere, sea de la orden esta heredat. Si est infançon fuere tan ninno que non haya .XII. aynos, et tan flaco que non pueda sacar esta tierra ³, los fiedes fagan .III. partes de esta tierra et saque por .III. uezes, [contando] ⁴ los fieles cada ueç. Et si fuere encara tan flaco que eyll mismo non pueda cargar, .I de los mas prouanos parientes deue'l ajudar a cargar con la una mano.

45 ¹ menos] *ms* me interlineado.—² Est] *el ms* añade in.—³ tierra] *el ms* añade el.—⁴ contando] *ms* cantando

46. *Forçar [a] ¹ muller casada.*

Nuyll homne casado si forçare a mulier casada o la leuare por fuerça o por grado, deuelo itar el rey de tierra et perder todo quanto ouiere. Enpero las arras que dio con fermes a sua muyller en casamiento, non [deuen] ² seer enparadas a la /21r(b) muyller nin a las creaturas que faran ensemble. Et si arras non ouiere la muyller, eylla et suas creaturas prenguan la meatat de todas las heredades del marido et de la muyller et de las compras; las otras meyas de las heredadas deue enparar el rey. Et el marido non deue tornar entroa que aya amor del rey et de sua muyller a la tierra; e si por aventura est marido ganare amor del rey, deue cobrar todas suas heredades.

[Ad] ³ aquest omne que faz la fuerça, los parientes de eylla deuen desafiar et matar si non rendiere ad eylla. Los parientes suyos no'l deuen alberguar nin dar-li conseyllo nin ajuda. El qui fezo la fuerça et aqueylla /21v(a) muyller si fizieren creatura ensenble assi andando, non deuen heredar en las heredades d'eyllos aqueylla creatura, nin la deuen criar parientes d'eyll o de eylla, e'n ningun fuero seglar esta creatura non deue seer recebuda.

46 bis.

Todo homne casado que a sua muyller tiene en el termino de la uila, non deue iazer si non es con eylla, et deue iazer a menos de braguas.

47. *Muyller casada por fuerça leuar.*

Homne qui [non] ¹ fuere casado, si leuare por fuerça o por grado a muyller casada, deue seer encorrudo de quanto que ha; otrosi itado de ² tierra, et perder todo quanto ha entroa que aya amor del rey et de su marido. Enpero creyendo el marido que por fuerça l'a leuada, si po-/21v(b)-diere cobrar a sua muyller, deuela tener assi como nuyll malestar non ouiesse feito.

48. *Peyndrar el uno al otro*

Si ningun homne peyndrare a otro por [quoalque] ¹ quiere raçon, et el peyndrado li quisiere dar fiador de dreito sobre los peynos, si en el loguar fiador non ouiere, deue'l seguir el peyndrador a las mas prouanas uyllas; et si aylli fiador non li podiere dar, deue poner los peynos entroa al tercer dia en mano de fiel, et ata el tercer dia quoalque hora li diere fiador de dreito, uaya el peyndrado con sus peynos. Et si no li podiere dar fiador, el peyndrador dando fiador de conoçudo lieue los peynos. Et si por aventura el peyndra-/22r(a)-dor non li quisiere dar fiador de abonimiento que eyll tiene los peynos, el seynor de la bestia et el

46. ¹ a] *ms* ha.—² deuen] *ms* deue.—³ Ad] *interlineado en el ms*

47. ¹ non] *omite el ms*.—² de] *repetido en el ms*

48. ¹ quoalque] *ms* quoaque.

peyndrador paren la bestia en man de fidel, et fagua'l dreito el uno al otro los peynos estando en aqueyll logar; et si los peynos son de otro homne, aduga el seynor de la bestia et fagua'l dreito.

49. *Guapho non aya uida con otro ueçino*

Infançon o uillano si tornare guafo, en glesia o en abrigo de la uilla non deve seer con los otros ueçinos, mas que uaya a las otras guaferias. Et [si]¹ dissiere el guapho que «en mi hereditat quiero uiuir, que non ire a otras tierras», issca de la uilla et todos los ueçinos de la uilla fagan-li la casa fuera de las heras de la uil-/22r(b)-la en logar que los ueçinos uean por bien.

Est gapho meçquino que non puede aiudarse con lo suyo, uaya demandar almosnas en la uilla, et demande almosna fueras de las puertas de los corrales con suas tabletas; et non aya solaç con los ninos ni con los homes iouenes quando anda en la uilla almosna pidiendo, et los ueçinos de la uilla deuieden a lures creaturas que non uayan a su casa por auer solaç con eyll. Eyll non dando solaç, si dayno uenire, el gapho non tiene tuerto

50. *Entrar en orden.*

El rey don Sancho el Bueno et el bispo don Pedro qui edificó Iranç, con autor-gamiento de todas las ordenes et de ricos homes et de caueros que eran en aqueyll tiempo en ¹ /22v(a) Navarra, mandaron et establicieron que nuyll homne o nuylla muyller que quiera entrar en orden, pague todas suas queyreyllas primero et despues entre en orden. Est homne estando en la orden, si uenire alguna quereylla o deutor et dize a la orden: «Uestro homne ordenado me tiene tuerto et endreçat-melo, si non peyndrar uos e si no me lo endreçades», faga la orden ad est deutor sines quereylla de la orden.

Estando en la orden est homne simple que non [ha]² seinorio ninguno de la orden et muere, et uienen sus deutores a la orden que paguen suas deudas, prengua la orden .X. [soltz]³ et paren aquestos dineros a todos sus deutores, et de mas por demandar quereylla non ayan de la orden. Est homne de orden si fuere /22v(b) seynor de alguna casa de la orden et si fiziere deuda asi que non sepa la orden, et si muriere et uenieren sus deutores a la orden por demandar suas deudas, la orden prengua .C. [soltz]³ et partanlos a todos sus deutores de la orden; con atanto non deuen auer quereylla de la orden. Enpero si ouiere feyta la deuda con mandamiento de su prior o de su conuent, a toda la deuda que eyll fiziere se pare la orden, que assi es el fuero.

51. *Leuar ceuera al molino.*

Si homne ninguno leuare ceuera a molino o a rueda por moler o qualque pan se quiera, deuelo dar mesurado; et si mesurado non lo da, «a tanto pan te desso

49. ¹ si] omite el ms.

50. ¹ en] el ms. añade Na—² ha] omite el ms—³ soltz] ms sl

aqui», et si lo trobare menguado, demande al rodero /^{23r(a)} lo que menguara a qui la lessó. El rodero deve se salvar con sua iura que d'aqueylla ceuera que adusso a sua rueda ata que sacasse, que no'l aueno aqueylla perdida. Enpero la perdida si fuere entro a .I. rouo de trigo o mas de un rouo, iure sobre santos el rodero; et si menos fuere de .I. rouo, deve iurar la cabeça del mayestro de quien se confiessa, o de su compadre o de su padrino. Estas iuras asi como sobrescriptas son de suso, sean en mano del rodero; si mas quisiere iurar, iure, et sea quitio. Et si quisiere peytar la ceuera, peyte el rodero. Si quisiere el rodero, prengua la iura del perdidoso que tanto perdio. Todo esto sea en mano del rodero. Por auer paç, el rodero lieue el /^{23r(b)} pan mesurado et torne mesurado.

52 [Camino] ¹ non sea cerrado

Nuyll camino que sea clamado del rey, non sea cerrado en tanto quanto el alcalde passe, si tercero de caualgant entenc que non se toquen las estriberas. Qui que la cerrare o rompiere, peyte LX [soltz] ² de colonia, que assi es el fuero.

53 .IIII pies es sendero

Todo sendero de uilla deve seer en anplo .IIII. piedras. Enpero aquest sendero si fuere escontra al termino semnado, bien [pueden] ¹ passar los homnes, mas guanado ninguno no, quoanto las miesses fueren.

54. Itar el rey de tierra

Si infançones el rey itare de tierra, lures fiadurias deuen auer plazto entro que ayan l'amor del rey et [tornen] ¹ a la tierra. Qui en las heredades d'a-/^{23v(a)}-queyllos irados entridiere despues que el rey los ito de tierra, et por lo que dissieren: «Ayno et dia so tenient», non lis deve ualer por fuero teniença de ayno et dia, nin deuen auer aqueyllas heredades.

55. Peyndrar heredat.

Nuyll homne por quereylla que [aya] ¹ de otro homne et non aya otros peynos sinon heredat, al labrador suyo lo que ouiere labrado no'l puede enbargar; lo que non fuere laurado, bien li puede uedar. El laurador semnando las tierras lauradas, al tienpo de coyllir prengua todo su dreyto; et el dreyto de aqueyll de quien es esta heredat, non deve dar-li assi que [entrambos] ² non los aplegue e' stando [ensemble] ³ el dueyno et el quereyllant, adugan el fruyto et acordense ensemble, con atanto es el laurador quitio.

52. ¹ Camino] *ms* Camio — ² soltz] *ms* sl

53. ¹ pueden] *ms.* puede.

54. ¹ tornen] *ms.* torne

55. ¹ aya] *ms* ayan — ² entrambos] *ms* entrabos — ³ ensemble] *ms* enseble

56. *Muyller casada non deue maleuar.*

[Nuylla] ¹ muyller casada non deue maleuar sines sabiduria o autorgamiento de so marido; enpero bien puede maleuar II. rouos de farina o .II. arrouos de trigo o la ualia por comer en casa Et si por auentura mas [maleuasse] ², el marido non sabiendo, non sea tenido de pagar el marido otra deuda ninguna d'eylla

57. *Fer bataylla.*

Si al fidalguo se li perdiere alguna cosa en sua casa, bien puede fer facient bataylla a los homes de su pan que estan en sua casa; por esso non deue dar nin deue peitar calonia.

Todos los otros que fazen batayllas, deuen fer en la sied del rey, et aqueyll qui /^{24r(a)} fuere uençudo, deue peytar .LX^a. [soltz] ¹ et .LX^a. dineros et LX^a [meayllas] ² de calonia, et d'estos dineros el tierço deue seer del rey, et el otro tierço del alcalde, et el otro tierço de [aqueyll] ³ qui uenciere la bataylla.

Et si en otro loguar fizieren bataylla si non en la sied, el uencedor deue pagar .LX^a. [soltz] ¹ et .LX^a. dineros et .LX^a. [obolos] ⁴ de calonia; e'l uençudo deue peytar por lo que cayo, otro tanto, et por lo que fizo bataylla en otro logar si no es en la sied, otro tanto; et la calonia d'estos dineros deue seer partido assi como sobrescripto es

58. *En uilla realenca non fagan fortaleça.*

Nuyll homne non deue fer fortaleça en uilla realenca si non es con sabiduria et con amor del rey. Otro-^{24r(b)}-si en la uilla encartada, porque sea ueçino de la uilla, non deue fer casa nin fortaleça con muros o con barbacana o con palenç, senes uoluntat del seynor de la uilla.

59. *Por quereylla non crebantar molino.*

Si nuyll homne crebantare molinos por [quereylla] ¹ que aya del seynor del molino o por alguna manera, deue'l los fer .XXX. dias et peytar .LX^a. [soltz] ² de calonia por lo que los pecio, et deue emendar toda la perdida que los molinos aurian a ganar del dia que los pecio entroa que los fagua. En quoaunque tienpo sea el crebantamiento de los molinos, el seynor de los molinos et el crebantador parando buenos homes, deue'l seer emendado el dayno como eyllos uieren por bien Enpero si el seynor del molino /^{24v(a)} li tuuesse tuerto ad algun otro homne, bien li puede peyndrar, si quisiere, los fierros et las puertas del molino, et non dcara por [esto] ³ caonia ninguna.

56. ¹ Nuylla] *ms* Nylla.—² maleuasse] *ms* maleuassen.

57. ¹ soltz] *ms*. sl.—² meayllas] *ms* meyllas.—³ aqueyll] *ms* queyll —⁴ LX^a dineros et LX^a obolos] *ms*. LX^a ob. et LX^a dineros.

59. ¹ quereylla] *ms* aqueylla —² soltz] *ms* sl.—³ esto] *ms* es

60. *De eglesia¹ non sea treito.*

Si algun malfeytor entridiere en glesia o en palacio de infançon, non deue seer sacado si non fuere ladron manifiesto, o traïdor prouado, o preso si s'ouiere et pleyteado aya su redemcion et dado fiador; enpero el fiador deue et puede sacar de glesia o de palacio ad aqueyll malfeitor [que'l]² ito fiança.

61. *De glesia sagrada non sea [treito]¹ ninguno.*

Si ningun /^{24v(b)} homne prissiere alguno de glesia sagrada por roberia o por fuerça, deue peytar .DCCCC. [soltz]² por calonia; et de la glesia non sagrada, por roberia o por fuerça, deue peytar .CCC. [soltz]² de calonia

62. *Non [ferir]¹ ante dueyna.*

Si algun homne fiere otro ante duevna filla de cauero et de dueyna, peyte .D. [soltz]² de calonia o iure mano sobre sanctos que non lo ferio a onta d'eylla.

Encara si alguno peyndrare en la uilla estando dueyna atal que en ayño se canbie ad .III. heredades suyas, deue aduzir los peynos a la uilla d'on los prese et iurar sobre santos que non lo sabia que eylla s'ouiesse hi; con a tanto es quitio /^{25r(a)} el peyndrador; si non quisiere iurar, rendiendo los peynos, la calonia es .D. [soltz]². Et si fuere atal dueyna que non se canbie en ayño ad .III. heredades suyas, non se deue tener por ontada, ni deue calonia

63. *El homne enfermo.*

Si algun homne enfermare et deue algo, et sua fiança fuere peyndrada que non quiera fer plaçto el peyndrador entroa que se leuante el enfermo, diziendo la fiança: «Enfermo es aqueyll qui metio fiador, et non uos dare peynos», el deudor diziendo: «Darne deuedes peynos», entranbos eyllos [esleyan]¹. III. o .V. homes menbrados et vayan estos al enfermo, et fagan el leyto de paylla et den-li fuego. Et de los .III. o /^{25r(b)} de los .V. homes menbrados que auran puesto, si uieren quemar se puede el enfermo, deuen auer plaçto los [peynos]² del fiador entroa que sane o muera el deudor; et si la mayor partida d'eyllos dissieren que leuantar se puede el enfermo, non deuen auer plaçto los peynos de la fiança.

64. *Fuero de traydor.*

Todo homne qui por traïdor fuere iurgado en cort de rey, deue seer encorruído de todo lo que ha de heredades et de mueble, et el cuerpo iusticiado; et todo lo que ouiere deue seer del rey.

60 ¹ eglesia] *el ms. añade por* —² que'l] *ms qual*

61 ¹ treito] *ms teito.* —² soltz] *ms sl.*

62. ¹ ferir] *ms fer.* —² soltz] *ms sl.*

63 ¹ esleyan] *ms. esleya* —² peynos] *omite el ms*

65. *Fer rotura.*

En la uillas del rey ho erbatguo non ha et o quinta no ha, infançones herederos quoando [quisieren] ¹ en terminado fer rotura por uoluntad [de] ² infançones et lauradores, el infançon deue auer tales dos como /25v(a) .I. laurador peytero. Enpero en querer de los lauradores es por tayllar en los montes; quoantos eyllos querran, en las III pascoas deuen tayllar assi como los labradores uieren por bien. Roturas e todo rompan a querer de los labradores; maguer el infançon deue auer en roturas et en tayllaçon de montes tales dos como .I. laurador peytero

66 *Teniença non uale.*

En la heredat del fidalgo que el rey sea tenient por quereylla que aya d'eyll, por fuero non deue ualer teniença de ayno et dia. Testimonias o prueuas o abondores non son dados ni deuen ualer al rey por tal teniença.

Otrosi non deue ualer a fidalgo teniença de ayno et de dia en heredat propria del rey, si non fuere en heredat sobre que /25v(b) pleyto aya infançon con uillano o uillano con fidalgo.

Et si uillano ouiere pleyto con fidalgo ninguno, al rey non responda ni a rico homne ni a merino ni a otro bayle de rey, si non li da clamant parient prouano de la heredat. Et si el rey o uillano del rey ouiere pleyto con uillano encartado de fidalgo, deue responder al seynor cuyo es el uillano et non a otro ninguno.

67. *Infançon non aiude cerra uilla*

Si el rey o francos o lauradores quisieren que aiude fidalgo ninguno a ssarraçon de uilla, por fuero non deue ajudar a ssarraçon de uilla nin a ninguna fazienda de uilla. Enpero si el fidalgo ajudare con amor de fer el muro, tenuto es de ajudar en el /26r(a) sarraçon del muro. Si por auentura casa ouiere el fidalgo ateniendose al muro, por auer amor con sus uezinos, deue fer, si quisiere, el muro quanto la casa tiene, et fer cubierta et sua pro de ius el muro non ouiendo dayno la uilla. Et si no quisiere el fidalgo ajudar a la sarraçon de la uilla, leysse tanta de plaça entre la casa et el muro quanto el cauero guoarnido en so cauayllo pueda tornar aderedor. Demas no es tenuto de fer el muro ni de ajudar

68. *Por mal feito de creatura.*

Por mal feito que faga creatura de fidalgo al rey o a infançon o a lauradós, non deuen tornar al padre ni a la madre, mas deue sperar la suerte del malfeitor que de-/26r(h)-ue auer enpues los dias del [padre] ¹ et de la madre. Et si la creatura tornare con el mal feito a casa del padre et de la madre, bien puede

65. ¹ quisieren] *ms.* quisiere—² de] *omite el ms*

68. ¹ padre] *omite el ms*—² quitios] *ms* quitio.

tornar ad eyllos el qui ha preso el dayno, entro que fagan emenda el dayno. Et si por auentura aquest malfeitor assi que no emienda el dayno, si entridiere a furto o a paladino en casa del padre o de la madre, deue poner uoçes et apeyllido que sepan los uezinos que a lur grado no es entrado en aqueylla casa aqueylla creatura; et con a tanto deuen ser [quitios]² el padre et la madre, e los que han preso el dayno non deuen auer clamor d'eyllos.

69. *Por omizidio.*

Si fidalgo ninguno matare franco o uillano del rey o moro o iudio, deue auer le rey o /^{26v(a)}-mizidio d'aqueyll qui lo mato, et enparar lo so. Enpero dando el omicidio, no'l deuen enbargar lo so Maguer adest omiciero consiguiendo si entridiere en alguna casa, el seynor de casa non lo [enparando]¹ non deue omizidio. Enpero parientes o estraynios, si quisieren enparar dentro en casa al omiciero, todos peytando .I. omicidio deuen seer quitos de todo enbargo². La calonia es .D. [soltz]³.

70. *Qui ua al mercado non deue ser prendado*

Todo home qui isse a mercado sabudo non deue ser prendado del dia que isse de casa entroa que torne de cabo en sua casa. Enpero con el uaylle del rey bien puede pendrar con aquel uaylle que manda e'l mercado. Otrosi en la carrera Asi que non aya d'estos /^{26v(b)} uaylles del rey, si prendrare, torne todo entregament, et deue calonia LX [soltz]¹. Esta calonia del mercado es del rey. La calonia de la carrera es del rico home qui tiene la comarca

71. *Quando isse en uest non deue ser prendado.*

Ningun home qui prendra su deudor por alguna quereylla que aya del otro homne, quando el rey ysse en huest, entroa que torne la huest. si pevndrare, la calonia es .LX. [soltz]¹.

72. *Qui prisiere soldada.*

Nuyf fidalgo qui prisiere soldada de rey o de otro seynor et non li seruiere, que'l torne la soldada al rey o a otro seynor. Si por auentura el rico home o el cauero enfermasse e'l inuiasse por el cauero o por el rico homne, el rico home inbie sus caueros con su mayordompne, e'l cauayllero con su parient o con su escudero todo su /^{27r(a)} adobo en seruicio de su seynor, et fagan aqueyl seruicio que los seynores aurian a façer.

Et pues que el rico homne ha' seruir con todos sus caueros, el rey li deue

69 ¹ enparando] *ms* enparado.—² *Cambia la mano*—³ soltz] *ms* sl

70. ¹ soltz] *ms* ss.

71 ¹ soltz] *ms* sl

tener casa et, si non, deue'l dar honor entegrament, con los omiçidios et con todas las calonias. Otrosi el cauero, si ha a seruir al rico home, deue-li dar entegrament toda su soldada

73. *Peciar casa.*

Nuyll homne qui pecia casa de rey o de infançon en alcaldia de Pampolona o d'Esteylla, es la calonia .XX.V. [soltz] ¹. En las siedes o façen batayllas, es la calonia .LX. [soltz] ¹. Enpero si ha feyto dayno a la casa, torne entegrament todo el dayno.

74. *Rencura de rey.*

Si el rey ouiere rencura de ningun fidalgo que fiador li demande, /27r(b) et el fidalgo non li puede dar fiança, iurando sobre el libro et la cruz que non puede auer fiador, deue-li ytar el rey en el pie una cadena, e'n el otro cabo de la cadena ponga .I. su homne qui lo cate el rey; et preso seyendo, compla iudicio delant el alcalde de la tierra o de so cort.

Otrosi si fidalgo ouiere quereylla de otro fidalgo et fiança non podiere auer, faga'l atal dereyto como sobrescripto es

75. *De cabayna de vacas.*

Si nuyll homne fuere a la cabayna que es de uacas, en la primera nuyt si'l dieren carne de uaca a comer, porque fuere de furto no es ladron. Si'l dieren de otra carne segurando-lo que no es de furto, comala; et si fuere de furto, non la coma, et si la comiere sopiendo que es de furto, asi [pueden] ¹ /27v(a) demandar ad [eyll] ² como a los ladrones.

75 bis. [*Qui fuere a la cabayna de oueyllas*] ¹

Otro tal en la cabayna de oueyllas, a la primera nuyt si'l dieren carne de carnero, porque fuere de furto non deue seer ladron. Si'l dieren de otra carne segurando-lo que no es de furto, comala; et si fuere de furto, sipiendo que es de furto, si comiere, tan bien pueden demandar ad eyll como a los ladrones.

76. *De cabaynna de puercos.*

Si nuyll homne a la cabayna de los puercos fuere e'n la primera nuyt si'l dieren carne de puerco, bien la puede comer; por que fuere de furto, non sea ladron. Et si'l dieren de otra carne segurandolo que non es de furto, comala; et si fuere de furto, non la coma, et si comiere sapiendo que es de furto, tan bien pueden demandar ad eyll como /27v(b) a los ladrones.

73. ¹ soltz] *ms.* ss

75. ¹ pueden] *ms.* puede —² eyll] *ms.* eyllos.

75 bis ¹ Qui oueyllas] *omite el ms.*

77. *Calonia de bustos.*

Nuyll home qui crebanta cabayna de bacas o de oueyllas o de puercos o de geguoas brauas, es la calonia .LX [soltz] ¹, emendando lo que aura preso Et si por aventura algun fidalgo huuiare [a la] ² cauayna de nuyetes, que a poblado non pueda hir, deue prender escassament lo que menester ha en la nueyt, dando buen seguramiento hi ayluego de lo que prendra; e comiendo con los homes que seran en la cabayna et dessando los cueros en la cabayna, non deue calonia. Et si prisiere et leuare a otro loguar, deue la calonia que de suso es escripto.

78. *Rencura de fidalgo.*

Si fidalgo ouiere rencura de uillano de rey o de orden [et] ¹ non podiere auer fiador, iurando que non puede auer, yche'l una soga al cueyllo e, asi presso estando, lie-/28r(a)-ue iudicio con l'ifançon et conpla iudicio delant l'alcalde.

79. *Fuero de buey uender.*

Nuyll homne quy buey uende et fiador [non] ¹ prende del precio, et façe'l conueniença ² que bono es el buey, et non ysse bueno, lieuelo a prouar a la sied del rey et con el iuero del rey uayan a la sierna del rey; e'l comprador e'l uendedor entranbos paguen de peynos al iuero, et iunguan al buey con el buey del ³ rey, et si conuenient faç por aradro et conuenient faç pora cueytre. Et passen .III. uegadas a la .I.^a part et .III. uegadas a la otra part, et si bien passare, de-li su precio et retienga el buey; et si non podiere bien passar, de-li fermes del precio et el uendedor lieue su buey. Et por lo que la labor del rey sera estoruada, el quy compro non dé nada e'l uençudo dé .I. [rrouo] ⁴ de trigo por al rey et saque sus peynos. /28r(b).

80. *Fidalgo non destinar.*

Si algun fidalgo moriere sines destin et dessare creaturas de pareylla o de barragana, las creaturas de pareylla deuen auer las arras sines las creaturas de barragana, enpero si las arras fueren en III ueçindades et las fouiere la madre con fermes dreytureros; et si non, las [creaturas] ¹ de pareylla non pueden demandar en uoç de arras aqueyllas heredades. Non prouando que sean arras, deuen prender la meatat de todas las heredades de lur padre et de lur madre por uoç de suert de madre; et de las otras heredades que fincan, en uoç de padre deuen prender otrasi la meatat, porque son de pareylla. Et las otras heredades que [fincan] ² encara, las creaturas de pareylla et las de barragana deuen partir co-

77. ¹ soltz] *ms.* ss.—² a la] *ms.* al.

78. ¹ et] *omite el ms.*

79. ¹ non] *omite el ms*—² conueniença] *ms* conueniencia.—³ sigue en el *ms* espacio en blanco donde se borraron varias letras—⁴ rrouo] *ms* rro.

80. ¹ creaturas] *ms* creaturaras—² fincan] *ms* finca

munalment; et las creaturas de barragana con estas heredades que han preso, que ayan /28v(a) ueçindat o non ayan, con aqueylla suert deuen ser pagados

81. *Fuero de estinar.*

Todo fidalgo que quiera estinar, deue auer .III. ueçinos infançones por cabeçaleros et .VI. ueçinos o al menos .III. por testigos; et deue estinar esto en su logar proprio. E los cabeçaleros que sean rogados d'est infançon et por mano presos; otrosi los testigos que lis otorguen a los cabeçaleros que los testigoaran d'aqueyll estin.

82. *Fuero de destinar.*

Si algun infançon fuere enfermo e quiere destinar a las creaturas de pareylla et a las creaturas de barragana, non puede heredar en las arras sines placenteria de la muyller et sines creaturas de pareylla. Enpero si otras heredades ouiere, a todas las [creaturas]¹ de barragana deue /28v(b) dar entegrament una ueçindat al menos. Et si [non]² ouiere otras heredades sinon las arras, deue dar de las arras a las creaturas de barragana al menos tanta quoaanta es una ueçindat. Est mandamiento del padre que da a las creaturas de barragana en las arras, non es en su mandamiento del padre de dar heredades a creaturas de barraganas ho eyll ouiere sabor, mas es en el mandamiento de la muyller et de las creaturas de pareylla por dar hereditat ho eyllos ouieren sabor, et dar-lis ueçindat en las arras sobreditas en quoaunque logar eyllos sabor ayan.

Et esto es a saber quoaanta es la ueçindat: una casa cubierta con .III. uigas en luengo que sea X. cobdos en los cantos de las paredes, et si no otra tal de casal uieylo que aya estado /29r(a) cubierta, ouiendo entrada et issida a la quintana; a semnadura de .II. rouos de trigo al menos a entranbas partes, e'l demas semnadura de .I. [kafiz]³ de trigo; las medias tierras deuen ser cerca la uilla, las otras meyas o quieren las creaturas de pareylla en el termino de la uilla. Et si uinnas ouiere en la uilla, una arinçada de uinna o quisieren las creaturas de pareylla dar; et si en la uilla uinnas non ouiere, non son tenidos de dar uinna. Et el uerto sea al menos en que puedan seer .XIII. cabeças de colles quando sean grandes asi que las rayçes non se toquen el uno al otro. La era sea tan grand en que puedan trillar; una ueç de que los ueçinos enpeçaren trillar, entroa que todos los ueçinos trillen, que eyllos puedan trillar u-/29r(b)-na ueç. Todas las creaturas de barragana deuen seer pagadas con atanto de ueçindat.

Aquest sobredito enfermo si dessare alguna creatura de pareylla o de barragana por oblido o por non querer que no'l dio a'lguño, et muere el padre asi que no'l dé algo, et si fuere la creatura de pareylla, deue prender sua suert entegrament en las heredades que auran las creaturas de pareylla; et si fuere de barragana, deue heredar con las creaturas de barragana.

Enpero el padre bien puede [desheredar]⁴ a creatura de pareylla o de ba-

82. ¹ creaturas] *ms.* creturas.—² non] *omite el ms.*—³ kafiz] *ms.* k.—⁴ desheredar] *ms.* desheredad.—⁵ ante] *ms.* antes.

rragana si al padre fiere con mano yrada del puyno o lo clama traydor prouado o mesieylo [ante]⁵ homes; otrosi si clamare a sua madre puta prouada o mesieylla ante homes, deue seer desheredado.

83. *Fuero de dar dreyto.*

Si ningun fidalgo acusado /^{29v(a)} o blasmado fuere de muert de ninguno, de que diere a los parientes prosmanos dreyto, non deuen por fuero ya mas acusar nin diçir-li mal los parientes ni otro homne. Ee est dreyto deue prender el parient mas prosmano, asi como fillo o ermano o sobrino o primo cormano; et si d'estos no ouiere, prenga el tio de partes del padre. Por mengoa de otro parient prouano recibe dreyto el parient del grado susano, pero nin a padre ni auuelo non deue dar dreyto

84. *Fuero de franco.*

Si ningun franco de rua comprare casas o heredades ueçindat entegra en uilla reallenca o de fidalgo o de orden, si ningun ueçino d'aqueylla uilla ouiere clamor d'eyl por tierra o por alguna cosa, deue oyr el alcalde del rey del mercado en quaal comarca /^{29v(b)} fuere.

84 bis.

Enpero uillas ha cabdales como Panplona et Esteylla, que han lures fueros por rey et por carta; si conpraren tierras ateniendose a lures terminos o a lures uillas, deuen auer el fuero de lures uillas si ayno et dia son tenientes de las heredades.

85. *Infançona ser con uillano.*

Si infançona s'ouiere con uillano et fuere [acusada]¹ o [blasmada]², que sea o que non sea casada con el uillano, si por tal raçon li demandaren peyta porque esta con el uillano, deue cada ayno una ueç iurar que no es casada, et con tanto non li deuen demandar peyta, por fuero. Pero si ouiere creaturas del uillano [e si]³ uiuieren las creaturas en las ueçindades d'aqueyll seynor, deuen peyta et seer coyllaços d'eyll.

86. *Rey dar heredat.*

Si eyl rey de Navarra da /^{30r(a)} heredat [a]¹ fidalgo ninguno con carta, non la deue toyller, por fuero, ni rey ni otro homne niguno.

85. ¹ acusada] *ms.* acusado — ² blasmada] *ms.* blasmado. — ³ e si] *interlineado en el ms.*

86. ¹ a] *ms.* al con la l expuntuada.

87. *Fuero de muyller casada*

Si nuylla mulier casada se fuere con otro marido, lessando so marido, el su heredamiento deue tener el marido primero con qui eylla caso primerament; e'ylla ni otros por eylla non deuen nin pueden demandar arras ningunas ni heredades d'eylla. Enpero si creaturas ouiere del marido primero, las creaturas non deuen perder aqueyllas arras, maguer el marido dando baraylla a eylla.

Si por [desparamiento]¹ o por miedo de su marido se cambiare de [la]² casa de su marido a casa de algun su parient o de su ueçino et non fiçiere enemiga de su cuerpo, tornando a eyll, por esso non deue perder suas arras et el marido deue tener todas las heredades ata que eylla torne /^{30r(b)} a su marido

88. *De pasçer ganados.*

En las uillas façeras los ganados de la una uilla pueden pasçer despues y que ysse el sol ata que entre el sol, entroa [las]¹ heras de la otra uilla quitament, por fuero; et tornen a lur termino con sol.

Enpero oueyllas, puercos, gegoas brauas, non passen por ont las mieses son et, si passaren, non tornen por aqueylla carrera

89. *Fuero de reptar*

Si fidalgo ninguno fuere reptado en cort, [et]¹ a iudicio o a bien uista de cort fuere .I.^a uegada saluado o la palabra desdita, et demanda ha fillo aqueyll por qui es reptado, et fuere dito que no ha fillo, non es tenido por fuero de responder ya mas a fillo nin a parient otro; ni puede ningun home diçir-li mal por aqueylla raçon por que fo reptado, que no es fuero

90. *Fuero de los hiermos.* /^{30r(a)}

Si entre dos uillas o entre dos tierras ouiere hiermos, non deue el rey por fuero toyller a la una uilla et dar a la otra uilla; otrosi non deue toyller a la una tierra et dar a la otra tierra. Enpero si el rey diere d'estos hiermos a home estranio, et si ouiere infançones ueçinos poblados ateniendose a los hiermos, terran-se por desheredados del rey; mas si se leuantare contienda entre eyllos, deuenlos auenyr con buenos homes, et si non con bataylla.

91. *Vender heredat.*

Nuyll fidalgo qui quiera uender sua heredat, deuela pregonar en .III. dias tocando las campanas et diçiendo si ha algun parient que la quiera comprar, si non que la uendra al estranio; et si ueniere el parient et quiere dar quo- /^{30r(b)}.

87. ¹ desparamiento] *ms* despamiento.—² la] *corregido sobre sa.*

88. ¹ las] *añadido al margen en el ms.*

89. ¹ et] *ms. o.*

-anto el estranio, deuela auer. Enpero si rencura ouiere que li faç cubierta, jurando que tanto li da el estranio, deue seer creudo. Et si non quisiere dar tanto quanto aqueyll qui no es parient, puede uender d'aylli adelant a qui quisiere; maguera de que ouiere iurar por aqueylo que non deue seer la paga de la otra part.

Et si fuere casado, non puede uender a menos de aytorgamiento de sua muller ni lo que conprare ni lo que ganare con eylla, nin lo que uiene de partes d'eylla. Otrosi la muyller que ha marido, non puede uender hereditat suya ni ayllenar ni fer maliuda nin fiançeria, si no quanto la ualia de .II. roguos de trigo o de .II. rrogos de farina pora en casa.

Al primer dia que ha a pregonar sua hereditat a /^{31r(a)} uender, ha mester VI ueçinos infançones de la uilla; et si non fueren en la uilla, de la mas prouana uilla. Est pregon .II°. faga otra ueç al quarto dia; e'l tercer pregon otrosi al quarto dia. Con estos .VI. ueçinos que los aya a sos plaçtos, que lo aboneçcan que en .III dias como ua pregonando su hereditat asi como fuero e:

92. *Cauero con su seynor auer palauras.*

Si cauero ouiere palauras con su seynor que li aya de dar sua soldada et non la puede complir, puede-se partir de su seynor con lo que houiere preso; et non ie-lo puede demandar por fuero si por su cosiment no li quisiere [arendar] ¹.

93. *Tierras que non [han] ¹ quinta.*

En toda uilla ho ouiere [infançones] ² et uillanos, o el rey non ha quinta o erbatgo, pueden en hiermo dar a infançon /^{31r(b)} o a uillano algun logar aguisado o pueda fer pieza et uinna o que quiere en aqueyll logar.

94. *El rey o non es ueçino non puede auer uillano*

En uilla de fillos d'algo o el rey no es ueçino, non puede demandar el rey a nuyll home por su uillano.

94 bis.

En uilla de cauaylleros, porque la mayor partida sea de caueros, si el rey ouiere entrada de coyllaços, puede el rey demandar peyta al uillano que esta por infançon, et no [los] ¹ cauaylleros si non fuere fillo de su uillano encartado o nieta d'aqueyll qui sera heredero del logar.

92. ¹ arendar] *en el ms. parece leerse atender.*

93. ¹ han] *ms. ha.*—² infançones] *ms. infaçones*

94 bis ¹ los] *ms. elos.*

95. *Por furto villano demandar ha infançon.*

Si uillano demandare algo por furto al infançon, deue-se saluar en la primera ueç con iura; de la primera adelant con bataylla de candela et depues a /^{31v(a)} escudo et baston con su consenble. Si caydo fuere de la bataylla, peyte la calonia LX. [soltz] ¹ et .LX. dineros et .LX. [obolos] ², e'l uillano non peyte ren.

95 bis.

Otrosi si el uillano furtare al fidalgo alguna cosa, deue se saluar por bataylla de candela. Quoalque cayere d'eyllos peyte la callonia como de suso es escripto.

96. *Non trauar a cauero por algo.*

Si cauero deue algo a franco de rua, por aqueylla deuda ni por otra cosa ninguna non traue de la bestia que el cauero caualgare, ni de las riendas; et si lo fiçiere, peyte .D. [soltz] ¹ por callonia, et los .CC. et .L. [soltz] ¹ pora al rey et los otros que fincan pora al cauero, por la onta que aura recebuda. El cauero descaualgado de la bestia, si'l prendaren, no an ninguna calonia.

97. *Enpeynamiento de bestia /^{31v(b)}.*

Si uno a otro enpeynare bestia, et si fiçiere de mas de quanto conuenient ouo al enpeynamiento et aqueylla bestia recibiere muert o otro dayno por que menos ualla, si prouar li podiere el seynor de la bestia qui la enpeyno, la bestia deue'l ser [enmendada] ¹; si prouar non lo podiere, prenga la iura ad aqueyll qui tiene la bestia.

97 bis.

Et si muere o la leuaren por furto con alguna cosa de lo suyo, o prisiere otro dayno, aqueyl qui la alogo la bestia non deue emendar, si non [la] ¹ leuare mas adelant de quanto conuenyença ouo o non cargare mas de quanto conuenient ouo, si non fuere capa o ceuada pora en la nuyt et pan pora en aqueyll dia que coma. E si por auentura renqura ouiere que de mas /^{32r(a)} li ha feyto, et si prouar non lo podiere, iure'l que de mas no l'a feyto de quanto conuenient ouo, et ualdra-li por fuero.

98. *Fuero de tener castieylo.*

Si rico homne diere castieylo a fidalgo ninguno, quando quiere que demande, deuelo render irado e pagado; enpero deue'l dar .IX. dias de plaçto ata que esconbre el castieylo de las cosas que tiene dentro. Et si se alçare con el caetieylo, que non lo quisiere render, finque por traydor, que asi es el fuero.

95. ¹ soltz] *ms.* ss.—² obolos] *ms.* ob.

96. ¹ soltz] *ms.* ss.

97. ¹ enmendada] *ms.* enmendado

97 bis. ¹ la] *añadido al margen en el ms.*

El fidalgo quy touiere el castieylo, en denfendimiento del castieylo deue prender muert o cayda de tor, o golpe atal que uea todo home que mas non puede.

99. *Fuero de castieylo.*

Si fidalgo touiere castieylo de rey o de rico homne, et ouiere /^{32r(b)} cumplido el ayno en que auia el conduyto preso, et quisiere el fidalgo render el castieylo et non ie-lo quisiere prender el seynor, deuelo tener .IX. dias; si non ie-lo quisiere prender, deue cerrar la puerta del castieylo et poner-li i .I. can ligado et .I. gato con una sogua en la puerta, e yrse su carrera. Dessado el castieylo, non li pueden diçir mal si por su cosiment non lo touiere mas.

100. *Fuero de ryco home preso.*

Si fidalgo prisiere ho rico home o mesnadero, presa que uala mil morauidis; de otro reyno deuelo render al rey dando-li el rey .C. morauidis.

101. *Qui diere castieylo.*

Si rey diere castieylo a rico homne et el rico home non da a fidalgo natural /^{32v(a)} de Nauarra, et el castieylo lo perdiere, puede'l diçir mal el rey al rico homne et peyndrar por eylo.

102. *Qui castieylo ouiere.*

Si fidalgo touiere castieylo de rico home e lo demandare el rey, non lo deue dar si no es a su seynor de qui lo tiene. Enpero deue'l recibir al rey con si tercero en el castieylo, que uea el castieylo como tiene; et si cueyta ouiere de enemigos el rey, deue'l cuyllir con toda su compayna. Maguera si moriere el seynor de quien touiere el castieylo, deuelo render al rey, et el rey deue seer pagado de so seynor

103. *Quinta de puercos.*

Todo fidalgo qui heredero es por auollorio en las Montaynas o quinta corre, quantos puercos que aya puede engrossar, et .LX. puercos /^{32v(b)} sobre los suyos. Et si fuere heredero por compra et cumplimiento de uecindat ouiere, como fuero es, otrosi sobre los suyos .LX. puede engrossar. Enpero los reyes no aytorgaron est fuero.

104. *Creaturas que non han uecindat.*

Si fidalgo ouiere creaturas que non ayan ueçindat conoçuda en otro logar, et los touiere en su casa, si puercos [ouieren]¹ pora engrossar, pueden los lures engrossar et non otros, por fuero.

104. ¹ ouieren] *ms.* ouiere.

105. *Quintar puercos.*

Merinos o baylles de rey los puercos d'ont deuen auer quinta, deuen poner los puercos sub fiador enpues la Sant Martin entroa Sant Andreo, et quintar; et ante de Sant Martin non los deuen subfiaduriar, e depues Sant Andreo non los deuen quintar ni poner so fiador, que assi es el fuero. /^{33r(a)}

106. *El fuero [que] ¹ dio [el rey] ² don Tibalt.*

Nos [don] ³ Tibalt, por la gracia de Dios rey de Nauarra, conde de [Champayna] ⁴, palaçin de Bria, damus et establecemos por fuero et façemus gracia, en remission de nuestros pecados et de nuestros antecessores et de los que [reynnaran] ⁵ enpues nos en todo el reyno de Nauarra, que todos los omiçidios que auengan por las cosas suççessiuas que no auengan por mano de home, por cayda de casa, o de la casa que caya algo, o por caydas de bestia, o por ferida de bestia, o por morder, que por ninguna achaquia que auenga que no les sea demandado omiçidio. E qui fuere contra este nuestro feycho, sea maldicho de Dios o de nos, e no aya part en paradiso, amen. Esto /^{33r(b)} por fuero el rey don Tibalt que morio en Trapana, al quoyal dé Dios paradiso a la su alma Ano Domini M°.CC.LXX.

107. *De heredit uillana.*

Si uillano de rey qui peyta aya tenuta al rey, si las peytas se perdieren en la sua heredit, si infançon o qui se quiere que touiere, si el merino del rey o el rico homne de la honor uenieren a demandar la peyta, el ermano o primo cormano bien puede heredar; et si estranio fuere, lesse la heredit; si lessar non quisiere, el qui tenient es dé fiador de iudiçio. Si el merino dissiere: «Muerto es aqueyll qui a mi solia dar la peyta», el alcalde et algun otro conpaynero que'l den, que demanden en la uilla si esta /^{33v(a)} heredit es d'aqueyll uillano muerto o no. Si [sopyeren] ¹ que d'aqueil uillano es en las otras tierras, deue dessar la heredit con calonia de .V. [soltz] ², e'n la sied del rey con calonia de .LX. [soltz] ²

107 bis.

Los uillanos et las uillanas solian auer por fuero: aqueylos que morian sin creatura, de lur mueble ante que malaudia d'ont a morir ouiessen, no auian poder de afillar a ninguno; aquest mueble romania en manos de los seynores [de qui] ¹ eran los uillanos. Ad aqueylos parientes que romaynian uiuos, demandauan el mueble que auian, achaqueauan los seynores et, por lo que no auian, prendian a los uillanos /^{33v(b)} et trayan-los mal.

106. ¹ que] *interlineado en el ms* —²el rey] *interlineado en el ms.* —³ don] *ms. dont* —⁴ Champayna] *ms. Chapanyna.* —⁵ reynnaran] *ms. reynnar.*

107. ¹ sopyeren] *ms. sopoyeren* —² soltz] *ms. sl.*

107 bis. ¹ de qui] *omite el ms.* —² acomendadas] *el ms. añade et.* —³ es] *omite el ms.*

E ouo duelo de los uillanos e'l rey don Sancho el Bono de Nauarra, el que fo yerno del enperador; por su alma et por aqueyllas animas que ad eyll eran acomendadas², solto aquest mueble de los uillanos que morian sines creaturas, et fiçolos soltar a sus monasterios en tal conueniença que aquest mueble que era de los uillanos, que romanesse a los uillanos. Otrosi que romanesse a los uillanos de los monasterios et non a otro home, fueras quanto fuero es «espenden al soterrar».

Fuero [es]³ que espiendan los parientes al soterrar .VI. arrogos de trigo pora pan, et pora endreçar la ofrienda .II. de trigo et .II. arinçadas de uino, et .VI. /^{34r(a)} arinçadas de uino pora beuer. Atanto deue seer la espensa de soterrar sobre el cuerpo del uillano, por fuero.

E los uillanos solarigos non soltoron fueras la espensa de soterrar et prender lur meatat. Asi façen en las otras tierras que el rey torno a dineros su meatat.

108. *Villano realenco.*

Si su uillano ueniere a la uilla realenca et fayllaren hi estando por infançon, bien puede toyller lo que ha, por fuero. Maguer que esto asi es, en aqueylla uilla si peyta li prisiere, el seynor de los coyllaços deue auer quanto a la seynal pertayneçe.

109. [De]¹ heredat far coyllaços.

Si null infançon qui heredat linpia /^{34r(b)} aya et con su heredat coillaço fiçiere en uilla realenca o en uilla encartada, el seynor de los coyllaços deue auer en aqueyll coillaço [quanto pertaynesce al que ha la seynal; aqueyll]² que con su heredat fiço el uillano, deue auer quanto al solarigo pertaneçe.

110. *Ladron casado.*

A nuyll ladron que casado es et ha mulier a fuero de tierra, si furtare algo et leuare a sua muyller, si otra guisa no es eylla ladrona, por aqueylo que [adussiere]¹ su marido non deue seer ladrona, por fuero.

111. *Mancebo soldadado.*

Ningun seynor que se auienga con mancebo soldadado, deue-se auenir de Sant Iohan a Sant Iohan, o de quoualque tiempo se auienga entroa a cabo de su ayno, et dar-li fiança /^{34v(a)} de sua soldada. Et otrosi el mancebo de'l fiança que'l conplira su ayno sano seyendo.

Est mancebo ueniendo a casa et façiendo su seruicio al meyllor que puede, maguer que el seynor ouiere despaguamiento que no'l sierue bien, deue'l fer conplir su ayno

109. ¹ De] *ilegible en el ms*, puede ser un adorno de la inicial de si —² quanto... aqueyll] *laguna en el ms.*

110. ¹ adussiere] *ms adussieere.*

Otro si el mancebo si ouiere despagamiento de su seynor que non li quiere seruir, que quiera ir su carrera, deue'l tornar toda la soldada al seynor et con atanto puede ir si quisiere.

Et puede ir de otra manera con toda la soldada que aura mereçuda, esto es en cassamiento; et conuiene que al dia que içtra de sua casa, que compleçca el casamien-/^{34r(b)}-to Et si non quisiere seruir o casar como dito es, torne al seruido de su seynor, e si non, la soldada que ha presa torne doblado.

112. *Entrar fiança.*

Todo homne pare mientes a quien entrara fiança, que grant afayno es et grant greueça es.

A ueçes estando sus peynos en el corral non los querra sacar et, si muito lo aprofare, diçir-l'a que no es fiança. Toda fiança es tenuto de mostrar peynos a su deudor; et leuando estos peynos, al otro dia uiene por otros peynos. Et los segundos peynos deue dar ante .III. homes buenos, prendiendo fiança que asi lo aboneçca el /^{35r(a)} deudor, si mester li fuere, que los peynos tiene por su fiaduria Et el fiador con la grant cueyta ua al credor que'l saque sus peynos, et el credor non dando-li recaudo, est fiador puede aducir al menos .III. ueçinos de la uilla, si los ha, que sean infançones, et si non, de las may prouanas uillas d'ont el credor es ueçino; et deue ir con estos ueçinos a la puerta del corral, si lo ha, et si no, a la puerta de la casa, et poner el pie diestro sobre el lindar de la puerta eyll mismo de fueras estando, et clamar por su nombre al credor, et digua: «Uos, fulan, saltat-me mis peynos, que estan por uos en corral por uestra /^{35r(b)} fiaduria»; esta palaura sea dicta .III. ueçes. Si non, iure por la cabeça del rey benedito que «por cuyta que'stan mis peynos en corral fago esta iura»; e otrosi diga: «Uos, fulan, priego-uos que seades fiança de .LX. [soltz]»¹, et diçiendo el fiador: «Io fiança», priegue a los otros .III. que sean abonidores et sabidores et testimonios d'esta iura et d'esta fiaduria que eyl la ha feyta. Et asi como fiço la primera ueç, fagua en la .II ueç, otrosi la .III. ueç, rogando a estos homnes et façiendo sus testimonios; et si non li da recaudo, uayasse con esto. E d'aqui adelant o quiere que trobe a su credor, con estos .IIII. homnes si los puede auer; et si non, prenga /^{35v(a)} otros .IIII. que sean infançones, et traue de la manga de la saya e ligue con la suya, e si mangua no ouiere la saya, la falda con la suya falda, et si saya non, de la falda de quoaunque uestido uiesta; et iure'l la cabeça del rey benedito, asi como fiço de primero, otorgando la fiança et los .III. testimonios como los primeros. Est credor por los primeros peynos no es tenuto de dar colonia, sinon tan solament los peynos deue areytar, o los sus peynos [o]² atales como los sus peynos, por la iura del rey benedito que es feyta; o la fiança o el credor coalque cayere, deue peytar .LX. [soltz]¹ al seynor o ad aqueyllos qui tienen la tierra por el seynor.

De cabo, est qui presto /^{35v(b)} aquest auer demanda'l ad est fiador mas de peynos, esta fiança dando'l su asno con fiança et con testimonios como de primero,

112. ¹ soltz] *ms* sl.—² o] *omite el ms.*—³ engueras] *ms* magueras—⁴ dineros] *ms.* d

que asi lo tenga de conoçudo, al otro dia dar-li la leytera con que se cuebre a si et a sua mulier, et a postremeras da-li la caldera en que caliente la agoa por amassar el pan que come et de nuytes, pues que cantaren gayllos, por calentar l'agua; et es a saber que coalque se quiere d'estos peynos ha [engueras] ³ de dia .XVIII. [dineros] ⁴, et de nueytes otro tanto.

E qui iurare la cabeça del rey benedito a l'indar de la puerta, non traue del cuerpo; et qui iurare e'l cuerpo, non iure la cabeça, que la .I^a. iura abunda. /^{36r(a)}.

113. *Calonia de camino.*

Augora uos contaremus de camino françisco. Si ua por uilla realenca o por uilla encartada, et si passare por ont quisiere uaya, toda la calonia es del rey.

114. *Robar mercado.*

Si nuyll homne robare a mercadero qui portago dé al rey, o a romero, los otros ladrones deuen peytar el cabdal e amigadura o nouena; o, si no, renderse eyll eness con fermes, que nuyll home non demande su cuerpo así que non peyte lo que es sobrescripto; maguer bien pueden pregar que ayan merce en eyll.

Enpero la roberia si es feyta en camino françes a mercadero o a rumeo, es la bataylla con su consenble; si /^{36r(b)} cayere en la bataylla, escontra todo deuese render al rey con fermes, porque nuyll homne non es sabidor el rey si prendra auer o si fara iusticia.

Est camino françes si fuere crebantado a la nuyt o maynana así que non es home sabidor, uaya ad aqueyl logar o la roberia es feyta el alcalde del rey [et] ¹ otros dos conpayneros et demanden la roberia; si trobaren los homnes, aduganlos al rey et sean en la iusticia del rey.

115. *Dar prueuas.*

Nuyll infançon que prueuas diere a otri, deue cobrar su auer en quanto a las prueuas pertayeneçe, con .V. [soltz] ¹ de calonia.

Nuyll uillano de rey o de monasterio si prueuas da al uillano /^{36v(a)} del rey o de su monasterio, deue cobrar: aylli ho el omiçidio es de bueyes, el buey debdor por calonia de las prueuas; aylli o el omiçidio es de pan, deue cobrar con .V. mesuras por calonia. Aquestas .V. mesuras sean a tierças: la tierça part de trigo, la tierça part de ordio, la tierça part de uino. Aquestas calonias que el uillano dio por prueuas, deuen seer del seynor de quien el uillano fuere.

116. *Qui prende iura del alcalde.*

A nauarros dan-lis auantayllas a merino mayor del rey et al alcalde mayor del rey et al clauero del rei, e'l auer deuen cobrar quanto a las prueuas pertayeneçe

114. ¹ et] *omite el ms.*

115. ¹ soltz] *ms. sl.*

116. ¹ soltz] *ms. sl.*

con lur iura. Quy la iura del merino /^{36v(b)} mayor prisiere, peyte .LX. [soltz] ¹; otrosi qui la iura del alcalde mayor prisiere, peyte .LX [soltz] ¹; otrosi quy la iura del clauero del rey prisiere, peyte .XX. [soltz] ¹ de calonia. Si aqueyllos demandaren auer o iuraren, non deuen calonia ninguna. El clauero del infançon quanto a la meatat de las prueuas pertayneçe deue cobrar con sua iura, et non ha calonia ninguna.

117. *Dar honor.*

El rey pare mientes a quoyal rico home dara honor, et el rico home deue parar mientes [en] ¹ los dreytos del rey. Enpero el rico home si robare o fiçiere algun embargo et si perdiere la honor, no es tenuto de dar enmienda a nangun quereyllant. Otrosi el rico-/^{37r(a)}-home si diere a cauero honor, et [maleuare] ² o robare algo et perdiere la honor, no es tenuto de dar enmienda a nangun quereyllant

118. *Rueda fer.*

Si alguno fiçiere rueda o molino nueuo, et si huuyare a dar-li agoa como se pueda la muella aderedor tornar .III. ueçes, et si depues alguno ouiere clamor d'eyll sobre la casa o sobre la carrera del agoa, deue'l dar fiador de iudicio et leuar pleyto, moliendo la rueda.

E si ninguno home fiçiere presa de ius rueda o molino uieylo, e'l seynor de la rueda o del molino uieylo ha clamor d'aqueyll quy faç presa de iuso la rueda o del molino /^{37r(b)} uieylo, el seynor de la rueda o del molino uieylo deue itar I. cueuano pleno de paila de suso la presa; e si esta paylla fuere a la cenia de la rueda o del molino uieylo que aura molido [e] ¹ yaga yermo por muytos de aynos, ninguno no li puede toyller de sus carreras si no ouyere iagudo tanto que sea passado en auollorio.

119. *Qui compra bestia.*

Todo homne qui compra bestia de .IIII. pides en Nauarra, conprela con ferme Si nynguno enbargare en esta bestia, dé fiança de octor; dando esta fiança [deue] ¹ ir con la bestia et al plaçto que porran, deue auer el comprador de la bestia dellant el octor, e deue /^{37r(a)} yssir ayli o la bestia fue presa primero, o ante el alcalde en el mercado en quoyal comarca fuere. El octor dando fiança que fara dreyto d'aqueylla bestia quanto el alcalde mandare, el quy compro la bestia prenga ferme de su pleyto de sua bestia. Por iugo del alcalde prenga-li fiança el octor que'l dara otro otor en aqueyll logar; como las uoçes [leuaran] ², adugua el otro en aqueyll plaçto. Dando fiança el otor como sobrescrito es, prengan fermes del pleyto de la bestia. Enpero ouyendo la bestia en los plaçtos, todauia el tercer otor dé-l' fiador de iudicio de la uilla o de la ledanya o de las prouanas

117. ¹ en] *ms.* et.—² maleuare] *ms.* maleuaren.

118. ¹ e] *omite el ms.*

119. ¹ deue] *ms.* de.—² leuaran] *ms.* leuaram.—³ deue] *ms.* de.

uillas ad aqueyl /^{37v(b)} qui de la bestia trauo en sua puerta. E'l otor si'l disiere que compro en otro reyno, prenga iutguo del meanedo. Et el comprador si no'l fiçiere buena la bestia et ad aqueyllos que mouieron el pleyto, es tenuto de peytar al quy perdio la bestia; et si otra cosa o todo perdio con la bestia, [deue] ³ dar-li recaudo.

120. *Si ganados enfermaren.*

Si ganados enfermaren, [ad aqueyll qui los] ¹ ueçinos acusaren que su ganado es enfermo, deuen-li dar pastura a espart o poeda pascer su ganado. Si disieren los ueçinos que la malautia de la polmonera ha en aqueyl logar que los ueçinos li auran dado paçtura, tenga /^{38r(a)} su ganado en .III. [mengoans] ² et en .III. crescientes asi que non uelua con otro ganado. Si disieren los ueçinos que la malautia de la garraca ha su ganado, tiengualo en aquel loguar que los ueçinos li auran dado, en .I. mengoa et en .I. crescient asi que non se uelua con otro ganado. E si disieren los ueçinos que la malautia de la naciença ha, tenga en aqueylla pastura que los ueçinos li auran dado, entroa cabo de .XX. dias asi que non uelua con otro ganado. Et aquesta pastura sea dada como el termino es et como el ganado por segunt raçon, que asi es el fuero.

Depues que los ueçinos li dieren pastura al /^{38r(b)} ganado enfermo, por dreyto deue tener hi su ganado; e si d'ayli sacaren el ganado suyo et se enuoluere con otro ganado et passaren a las yeruas uedadas, et enfermaren a otro ganado et moriere, bien li pueden demandar la perdida que li aura auenido por eyllo, porque uoluyo el ganado enfermo con el sano. Enpero con la cubdicia de pascer si al termino del ganado enfermo adussieren el ganado sano, el dueyno del ganado enfermo non es tenuto de peytar.

121. *Ganado de .IIII. pies*

Todo ganado de .IIII. pides conpre home con fermes.

Enpero ropa o moble otrosi conpre o se quissiere; /^{38v(a)} dando otor de recaudo, la ropa deue seer suia. Et si non sopiere de quien compro la ropa, iure sobre santos nomnando por quanto la conpro et non lo sabe de quien, e'l dueyno de la ropa pague la meatat de lo que costo et uaya con su ropa.

122. *Partir puertos.*

Aguora uos contaremos el fuero de los puertos et de los homes que son d'aylent puertos, partieron el puerto. Maguer que el puerto partieron, en dias de uerano lures ganados tienen y [que's] ¹ cada .I. en lures pasturas, et pueden tenerlos hi los ganados entroa la Sant Martin; entroa al março deue seer ayllubre

120. ¹ ad aqueyll qui los] *ms* aqueyllos — ² mengoans] *ms* mengoas

122. ¹ que's] *ms* que.

123. *Qui prende venado.*/^{38r(b)}.

Si home parare geyno ninguno por prender uenados et cayere hi otro ganado ninguno, aqueyll qui el geyno paró non deve peytar; et en dias de uerano, de março entoa a la Sant Martin, si cayere et moriere, peyte el dayno con sua calonia, et la calonia sea .V. [soltz]¹ Et si buey cayere e moriere, autorguando el quy paró el engeyno, peyte el buey; et si negare et da fiador de niego, e si fuere prouado por bataylla o por testimonias, peyte mil [soltz]¹, et d'estos mil [soltz]¹ los medios sean del rey², si el rey diere batayllero, e los otros medios sean del dueyno del buey si infançon es.

Maguera que e'l /^{3r(a)} puerto partieron las tierras, si uillano moriere en el puerto o por colpe que prisiere hi moriere, por lo que el omiçero non prisieron los homes de las tierras, non deuen peytar omiçidio; mas peyte aqueyll qui lo mato.

124. *En yermo cabayna.*

Si home suberuiosso ueniere con sus guanados et si cabayna quisiere parar en el terminado de alguna uilla que cerca'l sea al puerto, et dissieren los de la uilla que lur terminado es, e'l dueyno del ganado dissiere que terminado es del puerto, paren fideles .III. homes o .V dreytureros et trayan el ganado de la uilla et lessen pascen en contra /^{39r(b)} ad aqueyll loguar o esta la cabayna, et ad est guanado nin tiengua nin refiera ninguno. E los ganados de las uillas han tal costunbre que iran pasciendo entoa al cabo del terminado escontra a la tardi que querran uenir a la uilla, e'n quanto el ganado pleguo contra la uilla pasciendo, por uoç de puerto non deve parar aylli cabayna, que deve seer pasçtura de los guanados de la uilla.

124 bis.

Si la cabayna fuere de uacas o de oueyas o de quoaunque quiera guanado, en los dias de yuerno o de uerano si a la cabayna ueniere algun home et quisiere robar el guanado de la cabayna, et si'l demandare /^{39v(a)} el dueyno de la cabayna la roberia et si'l neguare, entoa a la ualia de .I buey proue con testimonias estas prueuas; et estas testimonias deuen seer d'aqueylla heredit d'ont la nafegua solia leuar a la cabayna. Et si estas prueuas non podiere dar, si uillano fuere e'l robador, iure de no et sea saluo Et si fuere home de linage el robador, entoa a la ualia de .I buey deve dar .I. iurador de niego et sea saluo; de la ualia de .I. buey en arriba iure eyll mismo con sua boca et sea saluo.

125. *De furto saluar.*

Aguora uos contaremus el fuero de todo uillano. /^{39v(b)}. Todo uillano se salue con bataylla de candela. Todo infançon al primer furto, con sua iura, por furto si no ha iurado o en huiç de glesia no ha seido por iurar; et por furto si

123. ¹ soltz] *ms* sl.—² rey] *el ms* añade et.

a iurado, si a seudo en huyç de glesia por iurar, saluese con batailla. Et si disiere el qui es acusado: «Por malqueriença me pones, que n'as perdudo nada», aboneçcase con .VI. ueçinos d'ont la nafegua solia inbiar a la cabayna; ante que fiador dé los abonidores, prenga recaudo de su perdida, porque su auer li furta-ron, feço el reclamo hi, /^{40r(a)} en aquella heredit d'ont la nafega solia inbiar a la cabayna; et estos abonidores si podieren seer de la heredit d'ont la nafegua solia inbiar a la cabayna, bien, et si non, los .III. sean de la uilla et los otros .III. de la ledania. Pues que estos abonidores fueren dados, peyte toda la perdida et issca por ladron; et si non podieren dar abonidores, [sea] ¹ quyto

126. *Si el ladron muere so fiaduria.*

Si el ladron muere de ius fiança, la fiança deue seer quita. Si disiere el dueyno del auer al fiador que no es muerto el ladron, segueçca'l al fiador aylla o yaçe el cuerpo en quanto el reyno tiene; et si fueras del /^{40r(b)} regno iaçe el cuerpo, el fiador segure'l que non li fagua mal et que'l tornara en el resmo sano et saluo de [do es] ¹ aca; et segueçca'l aylla o yaç el cuerpo et enseyne-li la fuessa, e'l fiador con la açhada fiera .III. ueçes ad aqueylla fuessa o el cuerpo iaze, et uayan a la glesia mas prosmana o las iuras se suelen dar, et iure'l el fiador al dueyno que el ladron muerto iaze aylli o eyll ferio los .III. colpes con açhada; et con atanto deue seer quito el fiador. Et si non podiere asegurar la fiança por ir ad otro reismo, de los peynos non li fagua plaçto entroa que'l fagua prender dreyto; esto feyto, si el /^{40v(a)} ladron pareciere, que sea esperiurado el fiador, que en testimoniança ni en abonimiento ni en prueua non sea recibido; et al dueyno del auer fagua'l prender dreyto et, si non podiere fer-li prender dreyto, peyte eyll mismo el auer.

127. *Fuero de castieyllo.*

Si natural ninguno del rey de Navarra fuere reptado por furto de castieyllo o por otra tradicion, el rey deue'l segurar de yda et de torna et dar-li captenedor et uoçero quoyal eyll esleiere en sua cort. Et aquest quy es reptado deue recibir iudicio del alcalde et de la cort del rey de Navarra. Et si el rey ¹ lo quisiere forçar de quanto la cort et el alcalde iutguaren, o no'l /^{40v(b)} quisiere segurar nin dar captenedor nin uoçero, puedese alçar a otra tierra, que fuero es.

128. *Peyndrar bestia.*

Si ningun homne pendrare a su deudor o a su fiador alguna bestia, et si la bestia quisiere render sobre fiador de rendida, dé-la con su freno o con el cabestro o como la peyndro; et al plaçto si uiua o sana fuere la bestia, el fiador deuela fer render asi como a eyl la dio, o a otra bestia que tanto uala al dia

125. ¹ sea] *ms* seas

126. ¹ do es] *ms*. Dius.

127. ¹ rey] *el ms*. añade non

que fo rendida la bestia. Et si por aventura en la primera nueyt que la prendro a la bestia si'l dio a comer, deue'l dar que coma aduçiendo su seynor de mientre que prendrada la tiene.

Et si quisiere tener /^{41r(a)} la bestia, como fuero es, en peynos en logar que la bestia h'a tener, pare .I. estaco firmo en tierra, et ligue'l una biluerta al pescueço de la bestia, e'l otro cabo de la biluerta ligue'l al estaco; et esta biluerta non sean sinon .I. cobdo raso en luengo del estaco entroa al pescueço de la bestia. Et non den a esta bestia comer ni beuer. Et est logar que'sta la bestia, fagua escobar a dia .II. uegadas, al sol yssient et al sol entrant, si paylla cayere o la bestia, o lo estercol, que non coma.

Muerta la bestia, aqueyll qui la peyndro faguala desoyllar, asi que el cuerpo et la cabeça et las oreyllas et [la] ¹ crin et la coa e todos .IIII. pides se atenguan en cuerpo, /^{41r(b)} por que la pueda a mostrar al seynor de la bestia.

Et si por aventura d'esto non fuere creudo el peyndrador, por fuero deue iurar que aqueyll es el cuero de sua bestia, en la glesia o suelen iurar los otros en coal comarca fuere; el cuero iaciendo ante el [altar] ² e'l peyndrador teniendo los pides sobre el cuero, sea dada esta iura. Con atanto deue seer el dueyno de la bestia paguado; d'aylli adellant puede peyndrar otros peynos, et tener los peynos asi como sobrescrito es.

Enpero el dueyno de la bestia uea el cuero de sua bestia ante que prengua estz iura, si alguno miembro ha menos en el cuero de sua bestia; et si ouiere menos alguno /^{41v(a)} miembro, el dueyno de la bestia diçiendo que «por mengua d'aquest miembro es muerta mia bestia, que no es muerta como bestia [prendrada]» ³, por fuero el prendrador li deue sua bestia al prendrado peytar.

129. *Quitamiento de arras.*

Quytamiento de arras que ninguna muyller infançona fagua a su marido nin a otro home ninguno, con fiadores nin con fermes ni por otra manera ninguna, por fuero non ualgua si al menos estos [.III.] ¹ parientes non fueron al quitamiento: padre, si lo ouiere; et si padre non ouiere, el mayor tio de partes del padre; et si tio non ouiere, el mayor primo cormano de partes de padre, con .II. de los mas pros-/^{41v(b)}-manos parientes. Non ouiendo, non ualgua

130. *Pleito infançon con uillano.*

Si pleyto ouiere infançon con uillano, si del iudiçio que diere el alcalde alguno d'eyllos non se autare, puedese [alçar] ¹, si quisiere, de todos los mercados que son en regno de Nauarra, al alcalde de Panplona que es por el rey en el mercado, et d'aili se puede alçar al rey et finar el pleyto.

128. ¹ la] *ms* ela.—² altar] *ms*. alatar.—³ prendada] *ms*. prendrada

129. ¹ .III.] *ms*. IIII *enmendado*

130. ¹ alçar] *ms* alcar.

131. *Non deue homicidio.*

Si fidalguo matare a otro fidalgo, non deue omicidio al rey; maguera pare [myentes]¹ si lo ha muerto dessafiado o en otra manera. Enpero si matare a franco o a moro² o a iudio o a uillano, deue omicidio.

Et si algun ganado matare al-/^{42r(a)}guno d'estos sobrescritos, el omiciero riendan en la sied del rey con ferme en coal comarca fuere. Si algun ganado matare a otro ganado, el omiciero dando non ayan quereila del seynor

132. *Quando fiança non tienga peynos.*

Si fidalguo peyndrare franco o uillano o moro o iudio, dando fiança de dreyto quanto mande la cort del rey o el alcalde del rey, et trasnuytaren los peynos con eil que non ie-los quisiere dar, deue por calonia .LX. [soltz]¹ al rey

133. *Peynos isscan con fiança.*

Si franco [o uillano]¹ o moro o iudio pendrare a infançon, e'l infançon dando fiador de dreyto quanto mandare la cort o el alcalde del rey, et /^{42r(b)} non ie-los quisiere dar et trasnuytaren los peynos con el prendrador, deue por calonia .LX. [soltz]² et pagar a'l infançon que sera [peyndrado]³.

134. *Orden non puede uender collaços*

Nuylla orden non puede uender coyllaços ningunos a menos de carta de rey, por fuero Enpero heredat plana puede uender et canbiar, a menos de carta de rey.

135. *Fidalgo non mate a otro.*

Si fidalguo ninguno ha enemistat con otro fidalguo, non deue robar .I. a otro; et si robare, deue ir al rey el robado et peyndrar con el homne del rey e fer-li dar lo suyo quanto ouiere robado, e'l rey deue fer-li peytar por calonia quanto la roberia. D'esta calonia la /^{42v(a)} meatat sea del rey, la otra meatat del robado. Si dissiere el robado «tanto me han preso» et non fuere creudo, deue iurar con su tercero que atanto ha perdudo, [et]¹ deue seer emendado de toda la roberia.

136. *Peyndrar heredat*

Si nuyll fiador que'l aura itado el fidalguo, si ueniene preñar a la heredat d'aqueyll qui lo ito fiador, et est ermano que la tiene la heredat por raçon que non aura partido con sus ermanos, non sea osado de diçir quoa es la sua part; o saluese que non han part o, si non, de-li de los fruytos la sua part en uoç de peyndra, eyll faciendose fiança.

131. ¹ myentes] *ms* myetes.—² moro] *el ms. añade a.*

132. ¹ soltz] *ms* sl

133. ¹ o uillano] *omite el ms*—² soltz] *ms. sl.*—³ peyndrado] *ms* peydrado

135. ¹ et] *omite el ms*

137. *La fiança pagar por otro.*

Nuylla fiança quy peytar quiere aque-/42v(b)-illo por que fiador es, peyte eyll; et el otro qui priso el auer de'l fiador de abonimyento, e la fiança torne ad est qui fiador lo aura ytado.

138. *Demandar mueble.*

Todo homne qui demanda mueble a otro, el qui demanda deue dar ferme por si et por todos los homnes que demandaren aquest mueble; e sea de la comarca el ferme.

139. *Peyndrar uno a otro.*

Si ninguno uiene peyndrar a otro de quien ha quereyllas, et eyll reuelare peynos et no'l quisiere dar fiador de dreyto, quoaque ora otra ueç li pueda peyndrar, no'l deue prender fiador de dreyto ata que los aya en su poder.

140. *Prendrar bestias de .II homes.*

Si por auentura acayeçe que .II homes o tres homes hayan part en .I^a bestia, aqueyl qui que-/43r(a)-reylla ouiere, de ninguno d'eyllos puede peyndrar la bestia, por fuero, ata que li complan dreyto aqueillos de quien clamos ouiere.

141. *Dar prueuas.*

Quoando alguno por mandamiento del alcalde ha de dar prueuas o testigos sobre coal se quiere cosa, es a saber que .II. testigos complan con la principal pura, abundan; pero es a saber que fillo ni yerno ni home qui atienda part en aqueylla heredat, non deue ser testigo ni prueua en coal se quiere cosa, por fuero

142. *Mala uoç en heredat.*

Si alguno metiere mala uoç en la heredat que es tenient ayno e dia, et otro faç mala uoç, et non quiere recibir dreyto aqueyll qui tiene la heredat, et de ay-/43r(b)-no e dia passe sobre la heredat que es el pleyto, peyndrara por fuero ad equeyll que ponio en mala uoç la heredat, que prengua dreyto d'eil o, si non, que'l dé ferme de la heredat que demanda.

Es a saber que coalque fuere la heredat sobre que es el pleyto, que tal deue seer el ferme. Et los testimonios et ferme [deuen]¹ seer d'ont la heredat es si .III. ueçinos ay pora ferme en la uilla, d'aqueyllos dé; e si por auentura non hay .III. ueçinos en la uilla pora fermes, iurando que non puede auer d'aqueylla uilla, aduga el ferme de las prouanas uillas del termino o de la ledania. Et si ouiere ningunas testimonias menester pora esta heredat, el .I^o aya de la uilla, los otros de la ledania /43v(a).

142. ¹ deuen] *ms* deue.

143. *Teniença de .XL. aynos.*

Todo homne qui .XL. aynos tiene sin mala uoç la sua heredit, el demandador entrando et issiendo en el reysmo de Navarra, el qui la heredit tiene non sea tenuto de responder a nul homne del mundo por quoaquiere cosa.

144 *Apear heredit*

Si algun homne que demanda casas o hotras heredades et li fuere iutgado que apee lo que demanda, por fuero deue primero apear las casas; et aqueyll qui las casas tiene, deue'l abrir las puertas et deue'l segurar por fuero que non li uengua mal en aqueylla entrada nin en aqueylla issida; et el qui apea las casas, deue'l dar otrosi seguramiento que [no]¹ se'n alçe con las casas. Et quo-/^{43v(b)}-ando ouiere pasado todo aqueyllo que demanda, deue'l dar ferme en el termino de aqueylla uilla que no'l apee nin demande mas.

[Et]² si aventura diçe el qui tiene la heredit, que esti ferme non es dreyturero ni no es atal como fuero manda, el alcalde del rey de la comarca con aqueylos .II. cauaylleros qui la pesquisa fiçieron sobre la teniença, o'tros quoaes las partidas nomnaron si pesquisa de la teniença non ha feyta, pesquisen en el lugar como sobrescripto es. E si fayllan que el ferme es dreyturero, el qui contradisso peyte por calonia .LX. [soltz]³, et partanlos como sobredito es; e si el ferme non es dreyturero, el qui tal ferme prometio et no'l quiso ameyo-/^{44r(a)}-rar, peyte por calonia .LX. [soltz]³, et dé ferme dreiturero como segunt fuero.

Dado el ferme asi como dito es, deuense aplaçtar pora al primer dia del [mercado]⁴; et si en aqueyll dia uenieren anbos [al]⁵ mercado, lieuen lur pleyto Et si al primer plaçto non uenieren, uenguan al segundo; et si non uenieren al segundo⁶, non faylleça el tercero. Et si el [tenedor]⁷ fayllece e'l tercero mercado, non ouiendo enbarguo por que por fuero deua seer escusado, el qui demanda, si el tercero plaçto touo, peyndre el fiador de dreyto que tiene et, peynos en corral teniendo, lieue fuero ata que sea acabado el pleyto.

145. *Posada del alcalde*

Toda posada del alcalde del rey del mercado, en quoa se quyere /^{44r(b)} comarca sea, ha atal fuero: esta posada non ha poder de uender nin de dar nin de canbiar, nin [en]¹ ninguna guisa de ayllenar tierra que sea del [alcalde]² Mas ouiendo creaturas dobladas, bien pueden partir casas et todo lo que han, solament que la issida ayan .I.^a por la puerta del corral por ont solian auer; mas partiendo [si]³ façen ninguna otra issida et poblaren en la uilla o en otro lugar, deuen sendas peytas al alcalde. E pueden conprar toda tierra que sea uillana, si non de la del rey. Si por aventura merino o uaylle del rey podiere saber que ha conprada tierra del rey, o lessen la tierra o dé peyta al rey por eylla.

144. ¹ no] *interlineado en el ms* —² Et] *ms Est* —³ soltz] *ms ss* —⁴ mercado] *ms março.* —⁵ al] *ms ar.* —⁶ et si no uenieren al segundo] *repetido en el ms.* —⁷ tenedor] *ms tercero.*

145 ¹ en] *ms e.* —² alcalde] *ms alcade* —³ si] *omite el ms* —⁴ et] *omite el ms*

Esta posada atal es escusada de toda labor del /^{44v(a)} rey, et de pidicion et de huest [et]⁴ de toda otra cosa si no es del omicidio. Todas las posadas de los alcaldes de Navarra es a saber que han atal fuero como sobrescripto es.

146. *Deuda de .XII. dineros.*

Si la deuda es de .XII dineros o de .I. rogo de trigo, si negare que no lo deue, iure la cabeça del padrino que'l tresso de fuentes, o del mayestro qui'l suele confessar de sus pecados, o la cabeça de su compadre; estando areyto a la paret de la glessia ueçinal de fueras [con]¹ las espaldas fagua esta iura.

147. *Deuda de logro.*

Toda deuda que a logro sea presa, de que tanto como el medio subiere el logro, non deue subir mas el logro; ata que pagado sea non deue lograr. /^{44v(b)}

148. *El can morder.*

Si algun home ha en sua casa can que muerda a escuso, su seynor li deue dar al pescueço .I. campaneta o .I. dogual, por amor que caten los homes del can quando odran la campaneta o el cencerro. E si esto non façe et plaga ad algun home, el seynor del can deue render ad aqueyll que mordio el can, que faga del can lo que se quiere.

149. *Fuero de sortieylla.*

Cosa [acostupnada]¹ si alguno prende en enpresto o en peynos o en comanda sortieylla de oro con piedra preciosa, et si por auentura se pierde ad aqueyll que tiene en peynos, que quiere uala la sortieylla, al seynor de la sortieylla peyte .C. [soltz]², o'tra tal sortieylla /^{45r(a)} d'oro con sua iura que ual tanto quanto la suya. Et si fuere la sortieylla de plata con piedra preciosa et si perdiere el qui tiene en peynos, peyte .L. [soltz]².

150. *Espada dorada*

Si alguno tiene espada que sea dorada en peynos o en comanda o en priesto, e si perdiere por auentura ela espada aqueyll qui la tenia en peynos, al seynor de la espada deue-li dar .C. [soltz]¹. Et si la espada fuere argentada e si la perdiere el qui tenia en peynos, peyte .L. [soltz]¹.

146. ¹ con] *ms* co

149. ¹ acostupnada] *ms* acostupada—² soltz] *ms* ss.

150. ¹ soltz] *ms* ss

151. *Infançones pelear.*

Si algunos infançones pelean ensenbl'e cauayllo o bestia muere en aqueylla pelea, por fuero por el cauayllo peyte .C. [soltz] ¹ et por otra bestia .L. [soltz] ¹.

Otrosi qui prende loriga en peynos ² /45r(b) et pierde, con iura que l'a perdida, peyte .C. [soltz] ¹. Otrosi quy loriguon prisiere en peynos et lo pierde, con sua iura que l'a perdida, peyte L. [soltz] ¹ por fuero

152. *Moneda cambiar.*

Fuero antiguo es que en regno de Nauarra, que non ha otra cibdat si no es Panplona, quando ouieren a leuantar rey, en Sancta Maria de Pamplona deuen leuantar en manera como han feyto muytas ueçes. E si el rey ouyere a itar moneda, deue itar en Sancta Maria de Panplona.

Sabuda casa et sabuda tabla deue auer en que tiengua la nueua moneda pora cambiar con la uieylla; esta tabla deue seer .XL. dias con la moneda nueua et non mas Otrosi en uilla ssarada puede parar esta tabla en estos .XL. dias o eyll quisiere /45v(a)

153. *Fillo de uillano non sea cauero.*

Nuyll rico home o ningun cauero non sea osado de fer cauero a fillo de uillano. Aqueyll quy es feyto cauero en esta manera, sopiendo que es fillo de uillano, pierda el cauayllo et las armas et omne uillano por todauia asi como era de primero.

154. *Prendrar por çes*

Si alguno da casas o heredat a çes, et non quyere pagar el çes a su plaçto, el seynor de la casa bien puede prender peynos uiuos en aquella casa et, si quiere, ssarar las puertas o ytar en tierra.

E si aqueyll qui tiene la heredat a çes, non quisiere issir por mandamiento de la casa, el seynor de la heredat bien puede'n peyndrar, asi como sobrescripto es, entroa'queyll dé su trebudo. /45v(b).

155. *Por albergar e'ntrar en sua casa.*

Quoando algun homne entra en sua casa por alberguar et diçe uno otro que ha clamor [d'aqueyll] ¹ su huespet, si no es ladron prouado, non li dessara entrar en sua casa el seynor de la casa; mas catelo quando ystra fueras de sua casa et prenga [dreyto] ² d'eyll si podiere.

151. ¹ soltz] *ms.* sl.—² peynos] *el ms. añade* et peynos.

155. ¹ d'aqueyll] *ms.* d'aqueyllo.—² dreyto] *ms.* dreytro.

156. *Fuero de homicidio.*

Si alguno homne casado troba a .I. otro iaciendo con sua muyler de nuytes, si lo matare, non deve por dreyto omicidio, nin los parientes del muerto non deuen quereyllar sua muert.

Mas si lo prende de dia dentro en casa iaciendo con sua mulier, sopiendo al menos .II. homes de creyer, no lo mate si es infançon o, si es uillano, rienda al scynor; /^{46r(a)} la iusticia sea en eyll

157. *Heredat dar a trebudo.*

Si algunos homes d'orden dan hereditat a trebudo o en peynos, et si'l dan carta por conuent, et si la horden il faç enbarguo por fuero seglar, la carta teniendo en sua mano iure que asi'l dieron aqueylla hereditat a trebudo con aqueylla carta; ualer li deve por fuero.

158. *Estas son las palauras por que pelean.*

Estas son las parabras por que los homnes [pelean]¹ ensenble: quando'l diçe ladrón prouado o traydor prouado o itadiço malaudo o boca fedient. Si estas diçe con ira en conseyllo o ante buenos homes, et si aquel quy disso el mal negare, prouando con .II. ueçinos, por calonia peyte .LX. [soltz]²; et si non puede prouar, /^{46r(b)} iure que nunca'l disso aqueylla palabra, e sea sines quereylla

159. *Reptamiento de conceylo.*

Si ad alguno repta su seynor sobre alguna cosa, o el conceylo de la uilla repta, por fuero non se deve salvar si no es ad alguno que por si enes lo repte.

Otrosi si el seynor lo repta por alguna honor que aya tenuta, non se saluara por fuero; enpero si el uasayllo es tenyent d'aqueylla honor asi como era de primero, deuese salvar e'mendar todas las quereyllas que d'eyl [ha]¹ el seynor

160. *Qui es rendudo en orden*

Tode homne que diçe que rendudo se's a ospital o [a otra]¹ religion, si non traye la seinal de la orden a que se's dado, si por aventura alguno /^{46v(a)} demanda alguna cosa et eyll niegua el feyto, por fuero non deve seer creudo por sinpla palaura, porque non traye abito; mas si quisiere el qui ha quereylla d'eil puede demandar por fuero seglar.

158. ¹ pelean] *ms* pelan.—² soltz] *ms* sl

159. ¹ ha] *omite el ms*

160 ¹ a otra] *ms*. atro.

161. *De mancebo soldadado como deue ser.*

Si alguno prende en sua casa mancebo o manceba entroa .I. plaçto sabudo que sierua, si el mancebo [non]¹ sierue al seynor bien, o li faç o li diç algun pesar, por eso el seynor no lo deue mayllar nin trayerlo por los cabeyllos; mas peyndre fiança que tiene que'l fagua seruir lealmientre et en paç, assi como prometio. Quar si otramēt lo fiçiere e'l seynor que fierā con mano irado, el qui es ferido se clama al li-/46^(b)-nage et puede seer prouada la ferida, si el mancebo fuere uillano, su seynor demande sua ferida; e si el mancebo es infançon, demande la quereylla eyll enes con sus parientes.

162. *Prometer algo.*

Si alguno promete a otro alguna cosa et si es infançon el qui prometio, si non quisiere, non dara; mas si uillano [es]¹ et promete, deue dar Maguer ad [aqueyll qui prometio por cuyta o por seruicio que ouieron menester]², aquey-llos qui prometieron, deuen-li dar

163. *Los homes que carrear uino*

Los homes que carrear uino d'una uilla a la otra, segunt costupne antiguo non mas caro uenden que los otros. Mas si los ueçinos de la uilla et los herederos que cuillen las huas en lures proprias heredades, pueden si quisieren uender mas caro el uino segunt el tiempo que sera /47^(a).

164. *Qui furta el carnero que traie campaneta.*

Si alguno furta de las oueyllas el carnero que traie al pescueço la campaneta por amor que furte de las oueyllas, et esto [puede]¹ seer prouado por bonos homes, el ladron deue poner los dedos de sua mano diestra, quiera o non quiera, dentro en la campaneta tanto como entrar pueda; e'l uaylle del seynor de la tierra deue fer tayllar tanto quanto entridieren en la canpaneta dentro de los dedos. Encara puede iurguar en otra manera, que fagua implir la campaneta de mierda de home que sea rasa, et fagua implir en la boca al ladron d'aqueilla merda.

165. *Homne que da poçones.*

Quy poçones dara a ningun home et muere, d'aqueylla muert deue seer iusticiado a malla muert. Et si por auentura [es-/47^(b)-capa]¹ d'aqueilla muert el enpoçonado, deue seer liurado ad eyll el enpoçonador, que fagua lo que querra.

161. ¹ non] *omite el ms*

162. ¹ es] *omite el ms* —² aqueyll qui... menester] *omite el ms*

164. ¹ puede] *ms pude.*

165. ¹ escapa] *ms espa.*

166. *Mayestro que tiene scuela.*

Si mayestro que tiene escuela a escolanos et fiere a escolano en manera que muere, non ouiendo uoluntat de matarlo nin de fer-lo mal, non deue omicidio nin deuen [quereillar] ¹ los parientes la sua muert.

Otrosi al mege de las plaguas si aducen algun plaguado que tenga fierro en el cuerpo, et fende al plaguado por amor de sanar, si muere el plaguado, non es tenuto de dar omicidio el mege nin deuen querellar sos parientes del muerto.

167. *Qui falso nompne se metra.*

Qui falso nompne se metra a si mismo et se façe fillo d'aqueylos de qui non es fillo, por falso /^{47v(a)} sera tenuto.

Que asi encarga a otro et non puede prouar con buenos homes, suefra tales penas coales auia a sofrir el acusado.

168. *Fianza non dene seer noçero.*

Si algun homne es fiança de otro, de auer o de hereditat o de otra cosa. non puede seer uoçero en aqueylla cosa, porque es fiança, d'ont diçe el antiguo. «fianza no ha palabra».

169. *Façer creaturas ho non deue.*

Si muyller que no ha marido. faç creatura en algun loguar d'algun home et diçe eylla que de tal home lo a la creatura e'l home diçe de non, si ela mulier es uillana, conuiene con .III. fideles que uaya a la sied del rey et que ueylle hi .I.^a nuyt, como costupne es. E la muyler haya las .II^{as}. partes de .I. cobdo /^{47v(b)} de trapo de lino con que li liguen los fieles la mano diestra; leuado el fierro et liguado en la mano, a cabo de .III. dias pues que aura leuado el fierro, el alcalde con los fieles cate bien la mano d'eylla e, si ueden que la mano es sana, la mulier rienda sua creatura ad aqueyll padre, quar si li plaçe o non li plaçe, la creatura es suya; mas si el padre li faç ayuda, si quesiere, bien podra crear. Enpero si la madre se quema en la mano, cree sines aqueyll padre. Enpero en coal manera auienga, non deue [ninguno] ¹ d'eyllos calonia

170. *Qui quiere seder clerigo*

Si homne letrado que quiere seer clerigo et es fillo de uillano encartado, conuiene que aya amor et merce de quien es uillano; et con so sey-/^{48r(a)}-nor que uaya al bispo, et priegue el seynor al bispo que lo ordene, e'l bispo deue ordenar, dando ferme de su cuerpo que non demande por uoç que se's fillo de so uillano Est ferme sea infançon et d'ont se quyere, [porque] ¹ es el cuerpo mueble.

166. ¹ quereillar] *ms.* quereillar.

169. ¹ ninguno] *ms.* niguno.

170 ¹ porque] *ms.* por.—² soltz] *ms.* ss —³ soltz] *ms.* sl.—⁴ si] *omite el ms*

Si est letrado fuere missacantano, e si algun homne lo mayllare, deue por calonia .DCCCC. [soltz] ²; et si fuere euangelistero, .DCC. [soltz] ³; et [si] ⁴ fuere epistollero, .D. [soltz] ³. Estas calonias son del bispo, porque el bispo tiene ferme de los cuerpos.

Si por auentura el bispo ordenare ad aquest fillo del uillano encartado, terra tuerto al seynor del uillano; por que el seynor prisiere ad aquest clerigo, non terra tuerto al bispo, porque no ha itado ferme del cuerpo. Et si auiene que alguno /^{48r(b)} maylle ad aquest clerigo, la calonia es del seynor del uillano. assi como sobrescrito es. El seynor del uillano puede peyndrar al bispo, si quisiere, porque ordeno el fillo de so uillano sines so mandamiento.

171. *Matar enemigo.*

Quando mata alguno a su enemigo, non prengua ren de lo suyo. Si prisiere algo d'eyll, semeillar li a que mas lo mataua por cupdicia del auer que por su enemidad.

172. *En testimoniança non son presos.*

Los homiçieros ni los malfeytores nin los ¹ ladrones manifiestos nin los lo-gradores nin los poçonadores nin los falsos testimonios que son prouados en dito, non son recibidos en testimoniança.

Segunt el mandamiento de los /^{48v(a)} buenos homes, los testimonios que han a testimoniari alguna cosa, antes que ren diguan de la cosa, deuen iurar que diran uerdat et non ninguna falsedat. Mandan [unque] ² mas sean creydos en testimoniança las honestas personas que [las uilles] ³. Establieron encara et dieron por fuero que la testimoniança de .I. home, maguer que sea de grant parentesco et conuenyble persona, no haya ualor.

173. *A cauero toyller espada.*

[Nuestro] ¹ seynor Dios mando e'establio que qui's cada uno manteniense bien sua orden, los cleriguos que en todo el dia seruiessen a Dios et mantengan bien lur orden. Si por auentura algun clerigo quisiere sua dignidat desondrar, /^{48v(b)} matando homes o furtando cosa prouada, lieuenlo al pispo et pregun-li que lo desordene, e'l bispo desordenandolo fagan iusticia d'eyl, o ande como .I. otro seglar et non espere bien de glesia.

Otrosi los cauaylleros, que deurian defender los furtos et toda locura; tales hi ha d'eyllos que dessan lur menester et roban et façen muytos males, et por esto que no an uerguença desordenar lur dignidat, et el mal que los unos façen nueçe a los otros. Dan iutguo por fuero: quando algun cauayllero tan grant mal querra fer por que de sua dignidat deua seer despuesta, et eyll mismo se cingua de la espada; coando esto aura feyto, el /^{49r(a)} seynor de la tierra prenga .I.

172. ¹ los] *repetido en el ms.*—² aunque] *ms.* auque.—³ las uilles] *ms.* los uieyllos

173. ¹ Nuestro] *ms.* Nron.

cutieyllo et sobre suas renas taylle la correa de la espada, assi que la correa taylada caya la espada en tierra, et assi aqueil que ante auia seydo cauero, por suas folias sea daynado et despuesto por yamas.

174. *Cosa que no han partida.*

A cosa que alguno demanda a sos ermanos o sos parientes part que li den de las heredades que han et que uienen de lur auolorio, et eyllos no li quieren dar part, ante li nieguan et diçen-li que non deue auer part con eyllos en aqueylla heredat; sobre esto prometen-li fiança de dreyto. Contra esto diçe el fuero: en las heredades que uienen de patrimonio o de auollorio, si el I. ermano demanda al otro, o el .I. parient al otro, en tales /49r^(b) fianças non ha loguar; e si alguno d'eyllos promete fiança a los ermanos o a los parientes, en tales casos por fuero la fiança non deuen reçeber, si non es assi que aqueill que tiene la heredat digua al demandador: «Sobre esto que demandas a mi de mia heredat, te do fiança que enseynare que no as raçon nin dreyto por auer part en aqueilla heredat que tu demandas». Mandamus por iutguo si ermanos son, lieuen pleyto entrambos estando en la heredat o estando entrambos fueras de la heredat, e'l tenedor de la heredat enseyne raçon por qu non deua auer part, e aya la heredat; si non puede enseynar raçon, dé-li sua part entegrament.

175. *Leuar fierro calient.*

Sobre alguna demanda es iutgado ad /49v^(a) alguno que lieue fierro calient, entranbas las partidas que han el pleyto deuen yr al alcalde; con sua sabiduria del alcalde esleyan los fideles atales que sean comonales pora entranbas las partidas, e'l alcalde con estos fieles deue dar por iutguo sabudo dia en la sied del rey que lieuen el fierro calient. El quy a' leuar el fierro adugua el trapo de lino, las doas partes del cobdo; el acusador que demanda el pleyto, adugua sarmientos secos o leyna seca pora calentar el fierro en la sied del rey. Deuen fayllar el fierro tan anplo como la palma del homne; la palma sea mesurada escontra el polgar; en luenguo sea quoanto .I. fulco, e'n espeso el fierro quanto el dedo me-/49v^(b)-nor. El alcalde deue mandar al tercero dia d'antes que pareçqua ad eyll e a los fielles el que ha de leuar fierro con su trapo de lino. Cate'l el alcalde con sus fieles la sua mano diestra si alguna mançieylla ha o alguna bissigua en la mano; si ouiere algunos enbarguos d'estos, faga'l seynal con tinta o con alguna otra cosa, e ligue'l con el trapo de lino en la mano en manera uedando que non se suelte entro al dia que h'a leuar el fierro.

Entrambas las partidas en la nueyt d'ante que h'a leuar el fierro, uayan a la sied del rey. Et al dia que h'a leuar el fierro, suelten-li ela mano, e'l alcalde con los fieles uea la sua mano en que color fayllara. E den entrambas las partidas recaudo /50r^(a) de callonia al baylle del rey. E los fieles con las tenaças prenguan el fierro calient, e ponguanlo sobre el altar los fieles con el capeyllano sobre .II. piedras; prengua el fierro et fagua .II. pasos et al tercero itelo. Et ligenlo en

175. ¹ si non se.. fierro] laguna en el ms —² lino] ms. fierro.—³ soltz] ms. ss.

la mano con el trapo de lino que adusso con si, en manera que non aya enguaino ninguno. Sobre el nudo en la cuerda pongua el alcalde el suo sigilo de cera que sea creudo. Al tercer dia el alcalde et los fieles suelten-li la mano et caten por aqueylla maçieylla o por aqueylla bissigua si ha enbarguo ninguno; otrosi por el fierro calient si a enbarguo o non ha. Si enbarguo ouiere del fierro, punguanlo con la aguylla e, si issiere agua, caydo es; otrosi por eyll si leua otro el fierro, /^{50r(b)} caydo es. Enpero quando el fierro sera en el fuego calient o el prestre lo aura benedito, el alcalde deue tocar con .I. çerro de lino al fierro calient con el lino; si començare quemar el lino, el fierro non es liguado; maguera quando tocara con el lino al fierro [si non se aprende el fuego, el fierro] ¹ es liguado. El fuego deue fer en otro loguar et tocar con el lino quando sera el fierro calient; si non se aprende el fuego en el [lino] ², fagua el fuego en el tercer loguar, e'l fierro quando fuere calient, si por aventura depues non se prende en el fierro el lino, el fierro es liguado, e por esto es caudo aqueyll qui deue leuar el fierro, quar por proueyto de eyll fue liguado el fierro. Asi creden el alcalde e los fieles. Et peyte /^{50r(a)} por calonia .LX. [soltz] ³ et .LX. deneros et .LX. meayllas. Aqueyll qui demandaua el pleyto, non peyte ninguna calonia et uaya a sua via.

176 *De calcatrepas*

Todo homne qui mete en sua uinna o en su huerto o en sua pieça calcatrepas, et alguno quiere entrar por furtar et caye en eyllas, a ssi mismo blasme de esto, que se plaguo porque la cosa de otri quiso furtar.

177. *De plantar vinna.*

Si algun home planta uinna et laura ata que sea de .III. fueyllas, et depues mete otro mala uoç et diçe que en sua tierra es plantada, el tenedor de la uinna si puede prouar con buenos homes que mientras eyll façia plantar et laurar, el clamant [entraua] ¹ et issia muytas ueçes en la uilla d'ont es la uinna, et entre tanto mientras que /^{50r(b)} deuia et podia, non hi metio mala uoç, nin por eyll otro parient, non deue demandar aqueylla uinna ni ha dreyto ninguno por demandar, por fuero.

178. *Rey matar.*

Ningun infançon non deue seer en conseyllo ni en feyto por que el rey aya de seer muerto o preso. Et si el rey ouiere cueyta atal o en bataylla o en torneamient por que'l maten el cauayllo, el infançon es tenuto de dar-li su cauayllo por que pueda issir d'aqueylla cuyta.

Otrosi todo infançon qui prende soldada de su seynor, es tenuto a su seynor de dar-li el cauayllo si lo uede en cueyta. Otrosi es tenuto ad aqueyll qui lo fiço cauayllero, maguera que non sea su seynor et eyll non sea su uasayllo.

177. ¹ entraua] *ms* entaua

179. *Ladron que destina en sua muert.*/^{51r(a)}.

Si el ladron en sua muert da lo suyo o manda ad alguno, aquel qui prende lo suyo deve pagar los daynos que eyll aura feytos; et non es tenuto de pagar calonia. Et si non quysiere pagar, deve dessar elo d'est ladron; et uiengan todos los quereyllantes et partan lo suyo segunt raçon, qui mas et qui menos.

180. *Tayllar arbol.*

Si algun omne conmença a tayllar arbor en el mont et lo leyssa seynalado, e depues uiene otro et lo tailla de todo et lo ita en tierra, et en esto uiene el primero e diç: «Io auia començado a tayllar et auia seynalado ante que tu, et mio deve ser», manda el fuero que aqueyll qui lo tayllo et lo ito en tierra que /^{51r(b)} aqueyl lo deve auer, quar el primero dreyto non ha por lo que seynalo.

181. *Abonir a sua fiança.*

Aqui enseyna el fuero en coal manera deve home abonir aqueyll qui peindra sua fiança. Nuyll home non deve abonir sua fiança entroa que'l fagua pagar sua deuda; mas quando la fiança rendra o li fara render su auer, e'l qui prende dara fiança a sua fiança [peyndro]¹, que li aboneça et que'l sera manifiesto de todo coanto peyndro, et deuelo abonir. E si diçe la fiança ad aqueyll qui lo peyndro: «Tu non matest mios peynos assi como fuero es», el abonidor deve iurar teniendo los pieses sobre los cueros de los peynos que son muertos, que, assi como fuero es, touo los /^{51v(a)} peynos que son muertos; et depues lo emendara todo el dayno que ha preso la fiança. E si non quiere abonir, emendar lo aura toda la perdida; todo esto el otro qui lo puso fiança, la aura enmendar de todo embargo.

182. *Conprar bestia de romeo.*

Si alguno compra bestia de rumeros o de mercadero, et non demanda autor et aya testimonios que iuren, ualer li deve; de mercadero que anda de regno [en regno]¹, ouiendo homnes sabidores, ualer li deve; otrosi lo que compra de rumeo que traye sportieylla al pescueço e bordon, ualer li deve. Masi si compra de los homes de la tierra, a menester ferme. Et si alguno'l fiçiere embargo en esta bestia, el primer octor a mes-/^{51v(b)}-ter a .XV. dias, el segunt octor .IX. dias, et tercer octor a .III. dias; aqui fina el pleyto. Mas si la bestia ha en presto e muere en su poder, si el seynor de la bestia quisiere, bien li puede demandar

183. *Enprestar pora miesses.*

Cosa acostupnada et por fuero establida: Todo home qui enpriesta su auer pora miesses, depues que passa la fiesta de la Sancta Maria de meyo agosto puede demandar so auer.

181. ¹ peyndro] *ms.* peyndro.

182. ¹ en regno] *omite el ms.*

Otrosi rico home del rey de Nauarra que tiene honor por el rey, depues que passa la fiesta de Sancta Maria de meyo agosto puede espleytar sua honor

Otrosi el uassayllo del rico home puede espleytar sua honor.

Otrosi mesnadero del rey de Nauarra si tiene alguna honor, /52r(a) puede espleytar assi como sobredito es.

Todos estos que son sobrescriptos, depues que passa la fiesta de la Sancta Maria de meyo agosto, porque espleytaren lures honores non terran tuerto al rey. Enpero si el rey lis deuedo antes de la fiesta que non espleytassen las honores, si espleytaren, peyten lo que auran preso.

Otrosi todo uillano realenco o de orden depues que passa la fiesta de la Sancta Maria de meyo agosto, si no es con uoluntat del seynor, non aya plaçto de su peyta.

184. *Qui bataylla ha de fer.*

Homne que bataylla a' fer et demanda su coigoal, deue seer mesurado con eyll en el peçcueço, en las espaldas con los peytos ensenble, en los braços cerca el cuer-/52r(b)-po, en la muyneca de las manos, en las piernas cerca el cuerpo, e'n as guarras sobre los torteruelos Non demande parentesco nin riqueza

185. *Quemar candelas.*

Todo homne que ha a quemar las candelas en bataylla, deuen seer .III. fielles en la sied del rey, et aducir de la cera del pascoal, et fer .II. pesos comunales de la cera; et estos fideles deuen fer .II. pauiles comunales; las barbas de los pauiles deuen seer o entrambas iuso o entrambas suso. Los .III. [fideles] ¹ deuen fer las candelas comunales en peso et itar suert quoyal sera la cera de la del ladron et quoyal sera la candela del acusador. Et paren las candelas sobre el altar en sendas losas, et sobre las losas sendas aguyllas comunales; /52v(a) et faguan-li iurar al ladron sobre el altar teniendo el libro et la cruç que digua uerdat. Otrosi faguan-li iurar al acusador que digua uerdat. Los fideles aciendan estas candelas; quoualque se quemare mas ante, sea caudo et peyte la calonia .LX [soltz] ²; e'l otro non peyte nada

186. *De caldera trayer gleras.*

A nuyll homne que h'a trayer gleras de la caldera, el agoa deue seer feruient, et las gleras deuen seer IX. ligadas en .I. trapo de ligno et ligadas con .I. fillo delgado e'l .I. cabo, e'l otro cabo a la anssa de la caldera; e las gleras toquen al fondon de la caldera E la agoa calient sea tanto en la caldera de la muyneca de la mano entrea la iuntura del cobdo. Et liguen-/52v(b)-lo con .I. trapo de ligno, e'l trapo sea las .II. partes del cobdo, et sea ligado en .IX. dias; a cabo de .VIII. dias los fieles caten-li la mano et, si'l fayllaren quemadura, peyte la perdida con las calonias.

185 ¹ fideles] *ms.* fides.—² soltz] *ms.* sl.

Los fieles d'estas gleras deuen ser .II. et el tercero el capeyllano qui bendissa las gleras e'l agoa. Enpero uedado fo en Roma a todo clerigo ordenado que non bendissan estas cleras nin el fierro calient. Si non pueden auer clerigo, ayan el alcalde del rey del mercado o el merino que bendissa las cleras; si non pueden auer d'eyllos, .I. bendissca estas cleras, et passen por hi.

Est homne que h'a trayer las cleras de la caldera, pongua la mano en el fillo que es ligado /^{53r(a)} cerca la ansa de la caldera; entre los dedos teniendo el fillo, deuaylle la mano al fondon de la caldera et saque las gleras.

En est fuego aya de los ramos que suelen bendicir en dia de Ramos en la glesia. Liguenlo en manera con sigillo sabudo que non se suelte entroa que los fieles lo suelten a cabo de IX. dias.

187. *Pregon de issir a uest*

Quando preguonan que isscan en huest, enbargos ay muytos por que non puede home issir, por enfermedat de si o de sua muyler, o de padre o de madre, o de ermano o de ermana, o de parient prouano que tengua en su pan. A ningun home que aquestos enbargos sobrescriptos auengua, a franco o a uillano realenco o de /^{53r(b)} orden, non ha calonia.

Mientras que el rey es en la huest, nuyll uaylle del rey non deue peyndrar a ningun home que sea en la huest, por deuda o por fiaduria, entro que torne a sua casa ata que .X. dias sean pasados

188. *Abat seglar.*

Todo homne que es clama abat de ueçinal glesia, teniendo la abadía, si faç compras en aqueylla uilla, quando eyll moriere, por fuero toda sua compra deue romanir a la glesia. Enpero si ouiere en aqueylla uilla alguna heredat por natura o por afillamiento o por compra d'antes que fuesse abbat, todo lo que ouiere comprado o conquerido, puede dar o querra, et non terra tuerto a sua eglezia por fuero seglar. /^{53v(a)}

189. *Si non sepnare.*

Ningun home, maguer que sea ueçino, si non sepnare en sua heredat, porque no aya fruyto, non deue costeria. Enpero en sua heredat sepnando et la piedra toylliendo todo asi que pueda aduçir el fruyto en l'onbro, deue costeria. Et si a las uinnas fuere con la cesta que traye en la mano, deue costeria.

Otrosi todo uillano realenco o de orden si perdiere el fruyto asi como sobrescripto es, deue costeria et peyta a su seynor, si fruyto aduçe en l'onbro o la cesta uuas; et si non aduçe fruyto, non deue costeria nin peyta

190. *Costeria de infançon.*

Todo infançon por costeria de las uinnas deue una arinçada de uino. Todo uillano [realenco] ¹ /^{53v(b)} o de orden deue por costeria una coarta de uino

190. ¹ realenco] *omite el ms*

Todo infançon por costeria de la mieses deue .I. rouo de trigo, si uecino es en la uilla; si non sepnare trigo, de quoaunque pan sepnare .I. roguo; et si non sepnare ningun fruto, non deue costeria. Todo uillano realenco o de orden por costeria de mieses deue I coartal de trigo.

191. *En uillaua por omiçidio.*

En todo el reyno de Nauarra el qui ha de prender iura o dreito por omizidio, deue prender en Uillaua cerca Pomplona. En el dia que ha de prender dreyto, el quy es prendedor del dreyto deue seer al cimyterio de la glesia; et el qui ha de dar dreyto, deue seer en [el] ¹ camino mayor cerca la uil-/^{54r(a)}-la. Et estos asi seyendo, deuen esleyer .III. homes buenos [entrambas] ² las partidas que sean fieles et comunales. Et estos III. fieles deuen prender de la partida que esta en el cimeterio, primero ferme que non fagan dayno ni embargo en lures cuerpos ni [en] ³ lures cosas Et feyto esto, [deuen] ⁴ ir a los del camino, et deuen prender otro tal ferme que non fagan dayno nin mal en lures cuerpos nin en lures cosas por [aquesta] ⁵ enemixtat, e por atal ferme como est diçe el nauarro «guayçes berme». Esto feyto, [uienguan] ⁶ entrambas las partidas al cimeterio Esto feyto, el qui ha de prender dreyto dé ferme ad aqueill qui h'a iurar prendiendo la iura, que nunquas li fagua mal ni enbar-/^{54r(b)}-guo en su cuerpo ni en sus cosas por [esta] ⁷ enemixtat. Otrosi el qui iura dé ferme al prendedor que nunquas fagua mal ni embargo ni en cuerpo ni en sus cosas por esta enemixtat, d'ont diçe el nauarro «hones berme».

Et si por auentura los bonos homs qui seran en loguar diçiendo: «Asaç auedes feyto, et [dessar-li] ⁸ la iura», et si lessare por su cosiment o por roguaria d'estos, si podiere et si quisiere, bien lo puede matar, et non sera traydor por eyllo por lo que [non] ⁹ preso la iura; mas si prisiere la iura et matare, fincara por traydor Et si por auentura conteciesse que alguno d'eyllos por enemixtat ficiesse algun mal desguisado, el qui aura recebido el daino peyndre su ferme /^{54v(a)} e adugua d'estos fieles alguno, e aquest fiel pongua los IIII. dedos al pescueço del ferme cerca la cabeça, et tan anpla como los .IIII. dedos saque la correya por el espinnaço quanto aturare el cuerpo, et des'i adelant parta esta correya por medio, .II. dedos a la una part de la una pierna et otros dos dedos a la otra pierna, ata iuso a los talones; et atales son los peynos del ferme por fuero.

Por fuero antiguo, qui da dreyto, en otro logar enartado puede seer.

192. *Como dara fuego.*

En el reysmo de Nauarra loguares ha que non han leyna et en loguares [pocos] ¹ montes et poca leyna Maguer que ha poca leyna, homs han menester mantener el fuego. Manda el /^{54v(b)} fuero que aqueill qui aura aguisado, que tienga al menos .III. tiçones al fuego; et si algun ueçino uiniere por fuego a sua

191. ¹ el] *omite el ms*—² entrambas] *ms* entrabas.—³ en] *ms*. e—⁴ deuen] *ms* deue.—⁵ aquesta] *ms* aquestas.—⁶ uiengan] *ms* uieguan—⁷ esta] *ms* estas.—⁸ dessat-li] *ms* dessaldo.—⁹ non] *omite el ms*

192. ¹ pocos] *ms* poccus—² soltz] *ms* sl.

casa, deue venir con el tiesto de la oylla, teniendo alguna poca de paylla menuda, et deue lessar el tiesto, si corral ha, en la puerta del corral de fueras; et si corral non ha, en la puerta de la casa de fueras. Et uaya a la foguera et auieue el fuego de los tres tiçonez, et desse por manera por que non muera en aqueill loguar el fuego, et prenga de la cenisa en la palma de la mano et ponga del fueguo de suso atal tiesto, e lieue a sua casa. E si por aventura en esta manera non quisiere dar fueguo el un ueçino al otro, si fuere prouada la quereylla, .LX. [soltz] ² ha de calonia /^{55r(a)}.

193. *De ueçindat itar.*

Si uezinos de alguna uilla itaren algun ueçino de ueçindat, por lo que non quisiere auenir con eyllos en algunos paramyentos, si peleare con algunos otros de fueras o lo plaguaren o lo mataren, los ueçinos no'l ajudaran. E si peleare con alguno de la uilla, los uezinos se deuen ajudar ensenble. E si enfermare, nin parient ni [otro] ¹ estranio que sea uezino, no'l ira ha ueer; demandando fiança quando iaçdra enfermo, si non diere fiança, uezino ninguno no'l ira a ueer.

Estas son las palauras por quoaales home non deue ser desitado de ueçindat: deuen-li dar al menos .I. home en la glesia que'l dé paç; e deuen-li mostrar al menos .I. casa que'l den cedaço pora cerner la farina que coma; et fueguo que'l saque en /^{55r(b)} la palma de la mano, como fuero manda. E sinon de estas .III cosas, en toda ren lo pueden itar de ueçindat.

194. *Fuero de omiçidio.*

Si ad algun home auiene en la cuenqua de Pomplona que aya ha peytar omiçidio, deue peytar mil [soltz] ¹ [o] ² .C.XX mesuras. Et estas .C. et .XX. mesuras sean a tierças .XL. [kafices] ³ de trigo et .XL. [kafices] ³ de ordio et .XL. cocas de uino. El qui ha de peytar el omiçidio, peyte los dineros o [las] ⁴ .C. et .XX. mesuras, quoaales eyl quisiere, que asi es el fuero.

En el tiempo que Semen Martineyç de Motiloa fo alcalde en Nauarra, et d'antes que eyll fuesse alcalde, qui fierro calient leuasse en la mano, solian ser ligados en nueu dias. Otrosi qui sacase las gleras de la caldera, /^{55v(a)} solian seer ligados en .IX. dias.

En el tiempo que eyll era alcalde eran suas posadas: Mutiloa de Iuso, Gorriçlucea, Elcano, Ipatat, Driapegui, Artaçcoz, Sarassat, Ouanos, Oylleta, Eslaua, Sauayça, Lonbier, Ayessu, Orotz-Botelu, Nagore Aspirotz, Anozyuar, en Bal d'Orua Sanssoayn, en Bal d'Araquil Arrayçagua.

195. *Vilano encartado.*

Todo infançon que ha uillano encartado, en aqueylla uilla o el uillano es ¹, puede seer ferme et fiança et testimonia. si el uillano ha tanta de heredat por que

193. ¹ otro] *ms* otros.

194. ¹ soltz] *ms* sl.—² o] *ms* et —³ kafices] *ms* k.—⁴ las] *ms* la

195. ¹ es] *repetido en el ms*

ueçino deua seer. Si por aventura no ha tanta de heredat, el infançon no es pora testimonio nin pora ferme, mas en toda otra cosa es ueçino

E si por auen-/55v(b)-tura est uillano ouiere dos o mas de seynores, non partiendo la heredat, todos los seynores auran una ueçindat, maguera non sea pora ferme nin pora testimonio.

E ninguno por otro uilano que aya, si non fuere por encartado, no puede seer ferme nin testimonio.

196. *Costiero de las uinnas.*

El costiero que es en las uinnas por los ueçinos, si faylla algun ladron qui furta huuas delant si, si el ladron niegua que non las ha furtadas, por fuero el costiero deue prouar el furto et, las huuas furtadas teniendo en las manos, iurara sobre el libro et la cruç que «fulan por nomne aqueyllas huuas furto en tal uinna de fulan», et sera uençido el ladron et peytara .I. [kafiz] ¹ de trigo por /56r(a) calonia. E si el costiero quiere diçir al mayoral de la uilla que iure, et el pecado sea sobre eyll, iurando el mayoral deue por calonia .II. [kafices] ² de trigo; et el .I. [kafiz] ¹ deue seer de los ueçinos et el otro [kafiz] ¹ del costiero. Enpero cosa sabuda es que esto deue seer feyto ante que uendemas passen, quar el dreyto del costiero non es tenuto depues que las uinnas non son en su mandar ni en sua guarda.

197. *Home escomengado.*

Si el homne escomengado fuere a la glesia quando tocare la canpana, et non quiere issir por los clerigos, los ueçinos otros qui uerran a las horas lo deuen sacar al escomengado. E si los ueçinos no lo sacaren, los clerigos no han calonia ni malestar porque non dissieren horas mientras /56r(b) eyll estidiere en la glessia dentro.

198. *Vestir a sua muyler.*

Todo homne que es infançon, por fuero deue uestir a sua muyller segunt que eylla es. Al ayno una ueç .I. çurapme de ensay et una saya ampla de fustayn con manguas; e al otro ayno deue dar peynas ad estos uestidos de corderunas de ierba que matan ¹ por Sant Iohan, e una cinta que es feyta de lana en dos ainos. Nafega pora eylla ad .XX. dias .I. [arrouo] ² de trigo, et otro tanto pora la manceba; conduyto pora entrambas .I. tocino que coste .VI. arogos de trigo pora en mano. Et con atanto se deue tener por pagada.

199. *Pleyto de uillano.*

Quando .II. lauradores realencos ouieren pleyto ensenble, /56v(a) deuen yr al alcalde del rey al mercado en quoaunque comarca fueren; et ditas lures quereyllas,

196. ¹ kafiz] *ms* k.—² kafices] *ms*. k.

198. ¹ matan] *ms* manteran (o mantan).—² arrouo] *ms* arro.

da por iutgo el alcalde que fagan pesquissa si así es o non. Et deue dar día quando faran esta pesquysa. Estos dos lauradores deuen itar suert qui adura el alcalde e qui el merino, et deuen fer a ssaber al sayon de la uila quy es por suert. Et est sayon deue fer a ssaber a todos los [estageros]¹ de la uila; aduga a los caseros et lauradores de los foranos que uienguan a dar testimoniança de uerdat, et el que non ueniere ha LX. [soltz]² de calonia, si non es por enfermedat o por muert de parient prosmano. E en est plaçto el alcalde et el merino prenguan /56v(b) por tercero al capeyllano de la uila, et iuren todos .III. sobre el libro e la cruç que ren que se digua en aqueylla pesquisa non descubran; et prenguan fianç d'aqueillos lauradores que han el pleyto, de sendos [kafices]³ de trigo. E feyto esto⁴ iuren en la eglesia, et clamen a los ueçinos uno a uno, et fagan-lis iurar que diguan uerdat, et lo que disieren que tienguan poridat. Feyta la pesquisa, faguan-li prender ferme ad aqueyll que tiene dreyto del qui tiene tuerto de la quereylla; et pague I. [kafiz]⁵ de trigo al alcalde et al merino, por lo que es uençudo; e'l qui tiene dreyto non deue pagar trigo ninguno /57r(a)

200. *Los mayoresales de puercos.*

Merinos o baylles quando uan a quintar a las Montaynas o los puercos son, si [fuere]¹ hi el seynor de los puercos, deue fer dreyto eyl mismo que no ha en sus puercos sobre los .LX. de nuyll home d'ont el rey deua auer quinta. Et si por auentura non fuere hi el seynor, aquest dreyto deue fer aqueyl qui mayoral es de los puercos, et prende el merino o el uaylle que non tiene tuerto a rey ni a ningun homne

201. *Como imbiara puercos a mont.*

El fidalguo quando inbia sus puercos a mont, deuelos inbiar a la uilla por coal ueçindat ha a pascer en los montes, et deue hi tener los puercos en .III. nuytes et iaçer parsciendo; et tornandose a casa, si casa ouie-/57r(b)-re cubierta, en la casa; et si no ouiere casa, en el casal que aya estado cubierta, si ouyere, deue de seto çarrar deredor et fer-los hi iaçer .III. nuytes; d'aqueyllos dias adelant iaguan o podieren, et pasçcan a podieren, en aqueylla ueçindat. Et si d'esta guisa non fiçiere, puede el rey demandar quinta.

202. *Canpana tocar .III. ueçes.*

En las uillas realencas, en los dias que fiestas no han de tener, deuen tocar a missa la canpana .III. ueçes, façiendo folgança en .III. ueces entre el .I. toco et el otro, por tal que si el rico home o el prestamero fueren en la uilla, que uengan a oyr la missa; et si uenieren, bien, et si non, non los pueden itar en callonia

199. ¹ estageros] *ms* estagero —² soltz] *ms* sl.—³ kafices] *ms* k —⁴ esto] *el ms añade e.*—⁵ kafiz] *ms* k

200 ¹ fuere] *ms* fiçiere

a los lauradores, porque los tocos son feytos por ma-/57v(a)-nera que fuero manda. Et si por aventura estos tocos de la canpana non son feytos como de suso manda, e'st rico home et est prestamero non ouiere a oyr la misa, deuen los ueçinos por calonya .LX. [soltz] ¹.

Est rico home et est prestamero estando en la glesia, si por aventura li cayere desteyllo et li afuyllaren su uestido, deuen-li emendar so uestido [de] ² bona manera.

Quando est rico homne o est prestamero comieren, deue hir el preste con su escolano a bendiçir la mesa et, si'l dan a comer, deue ir mientre hi fuere cada dia; et si no'l dieren a comer, non deue ir del primer dia adelant si non quisiere, por fuero.

Si en esta glesia ouiere algun embargo, los uillanos realencos e los encartados todos en-/57v(b)-senble lo deuen fer, et infançon non es tenido de ajudar si non quisiere; enpero si el infançon ajudare a desfer, ninguna ueç des'i adelant es tenuto de ajudar d'aqui a que sea feyta aqueylla glesia.

Est rico home o est prestamero qui tienen logar de rey, deuen et pueden catar las isidas et las carreras et los prados de la uilla. Et si ningun infançon prisiere issido de la uilla, fagan-li lessar; et si laurador prisiere, [fagan-li] ³ peytar .LX. [soltz] ¹ de calonia

Et si en las issidas de la uilla ningun peytero faç hera, si çarrare con seto o con uiga o con madera, deue peytar LX. [soltz] ¹ de calonia. En essa hera atal que es feyta en la issida de la uilla, si façen los ganados embargo, deue-los sacar /58r(a) [mansament] ⁴ et inbiarlos su carrera. Mas en su tierra puede fer hera et çarrar con que quisiere, et si'l façen embargo los ganados, puedelos pendrar et poner en corral, que asi es el fuero

203. Laurar uynnas.

Todo homne qui da a laurança suas uinnas, el laurador deuelas al menos poder et cauar et edrar; d'estas .III. labores si faylliere que non las edre, el laurador aplegue las huuas en la uinna, e'l seynor de las uinnas et el laurador lieuen las huuas ensenble a un logar et [fagan] ¹ uino d'eyllas. Et quando ouieren feyto el uino, por lo que no edro el laurador las uinnas, el seynor de las uinnas deue auer el mosto et el laurador la primera agoa; e lo al partan en-/58r(b)-senble, que asi manda el fuero.

204. Villano forçar a filla d'algo.

Uillano [ninguno] ¹ si forçare a filla d'algo et si se prouare la fuerça por .I. infançon et por .I. uillano, deue seer leuado al rey et ser iusticiado como el rey mandare.

202 ¹ soltz] *ms.* ss.—² de] *ms.* deuen, *enmendado*.—³ fagan-li] *ms.* fangan-li —
⁴ mansament] *ms.* masament

203. ¹ fagan] *ms.* fer.

204. ¹ ninguno] *ms.* ninno; y go *al margen*

205. *Fidalgo forçar a uillana.*

Si fidalgo forçare a uillana que traya al menos una moça que sepa fablar consigo, si fuere prouada la fuerça con .I. infançon et con .I. uillano, deue peytar medio omiçidio. Si prouar non se puede, dé la sua iura que non la fodio, et sea quito; et si dar non quisiere iura, peyte medio omiçidio, quoyal es en la comarca o la fuerça es feyta Empero si eylla sola fuere, non deue calonia nin salua.

206. *Fidalgo con uillana casada.* /^{58v(a)}

Si fidalgo con uillana casada et faç creatura en eylla por fuerça o por grado, deue peytar meyo omiçidio entegrado, si se prouare como dito es de suso; enpero atal omiçidio quoyal es en la comarca o la fuerça es feyta.

207. *En la sied non deue auer escusado.*

En nuylla uilla o sied ha el rey, non deue auer fidalgo ninguno casero nin clauero.

Si nuyll homne trobare so marquero en la sied del rey, non deue pevndrar; si peyndrare, los peynos deue tener en la sied entroa tercer dia. Et si sacare los peynos de la sied entroa que passe el tercer dia, ha de peytar al rey .LX. [soltz] ¹ por calonia; et de .III. dias en a suso puede los peynos o quisiere leuar. /^{58v(b)}

208. *Buey de infançon paçta en uedado.*

Todo buey domado de infançon deue pesçer en el uedado de bueyes, issiendo de la uilla et ueniendo de otra uilla como quisiere. Et el buey del laurador puede pascer estando et laurando en la uilla et non ueniendo de otra part. Es a saber que en est uedado deue sseer costiero laurador o infançon de los [que an] ¹ bueyes, quoualque uieren por meyllor. Et buey ninguno non deue pascer d'aqui a que sea de primer arado; maguer que sea de primer aradro, non deue pascer d'aqui a que aya acuytrado o sempnado con su copaynero semnadura de .I. [kafiz] ² de trigo.

Et si estos que han los bueyes, quisieren poner otras bestias o ganados ningunos en estos /^{59r(a)} uedados, pueden pascer todas las otras bestias et los ganados de la uilla.

La calonia es d'estos uedados. de dia .I. rouo de trigo, et de nueytes .I. [kafiz] ² de trigo.

209. *Vedado de bueyes ronper.*

Si todos los ueçinos infançones et uillanos quisieren ronper el uedado de los bueyes [et] ¹ .I.º solo de los ueçinos, infançon o uillano, [contradiese] ² et uieda

207. ¹ soltz] *ms.* ss.

208. ¹ que an] *añadido al margen en el ms* —² kafiz] *ms* k

209. ¹ et] *omite el ms.* —² contradiese] *ms* contradiesen —³ los] *añadido al margen en el ms.* —⁴ tiengan] *ms.* tienga

que non se ronpa, non se deue romper. Si todos [los] ³ ueçinos quisieren fer uedado de nueuo, uayan a la sied del rey et [tiengan] ⁴ el amor del iuero del rey, et ganen la piertega con su fierro et lieuen al prado que quieren fer uedado; et con la piertega asientese en meyo et ite cada .XII. uegadas quanto /^{59r(b)} podiere a cada part la piertega con su fierro en luengo et en anplo, a cada part cada XII. uegadas; et aqueyll qui ouiere itar la piertega en el uedado, sea si quisiere infançon, si quisiere uillano.

En est uedado de los bueyes non deuen entrar otros ganados ningunos et, si entraren ningunos, pueden entrar todos los ganados quantos ouiere en la uilla Vedado de buyes deue seer del primer dia de la Sancta Maria Candelera entroa a la Sant Martin ata que los gayllos canten; et de que los gayllos cantaren al dia de Sant Martin, entroa al dia de la Sancta Maria Candelera, puede pascer todo el ganado

210. Prado de cauayllos.

A los infançones si quisieren fer uedado /^{59v(a)} de cauayllos nueuo, deuen ir a la sied del rey et guanar la piertega del iuero a menos de fierro; et en el logar o quieren fer la defesa, deue ser en medio logar algun infançon et itar d'ayli la piertega a menos de fierro a cada part en luengo quada .XII. uegadas, et en anplo quada XII. uegadas; si de la .I.^a part non ha tantas piertegas como manda, prenga de la otra part atantas coantas escriptas son.

E la defesa deue ser uedada de la Sancta Maria Candelera ata la Sant Iohan entroa que gayllos canten; et de que gayllos cantaren al dia de Sant Iohan entroa ¹ al dia de la Sancta Maria Cendellera, puede pascer /^{59v(b)} todo el ganado Est [prado] ² si quisieren ronper todos los infançones et uno solo de los infançones diçe de no, non deuen ronper. Maguera bestia que sea plagada de atarry soç [la coa] ³, o que sea plagada en el pescueço, non deue pasçer entroa que sane; et quando fuere goarida, depues pasçca. Otrosi bestia ninguna non deue pasçer entroa que sea de primera sieylla, e'sta bestia seyllar andando quada dia tanta de tierra quanto dos legoas en .VIII. dias; depues pasca en el prado. Si los infançones quisieren pasçer de otro ganado sino estas bestias que de suso son ditas, todos los guanados de los laurado-^{60r(a)}-res tambien pueden pascer.

Los infançones que han bestias, deuen fer .I. costyero que cate al prado. La calonia d'aquest prado es: de dia .I. rouo de ordio, et de nueytes .I. [kafiz] ⁴ de ordio.

211. Infançon mercadero.

Infançon ninguno por aiudarse en Nauarra qui anda en mercadurias, conprando et uendiendo suas mercadurias, non deue portatgo ninguno en reyno de Nauarra.

210. ¹ entroa] *el ms añade* que —² prado] *ms. pradro.*—³ la coa] *ms coa la.*—
⁴ kafiz] *ms k.*

212. *Qui ua en romeria.*

Toda homne quy ua en romeria a Sant Iame de Galiçia, sopiendo sus ueçinos que ua en romeria, todas suas deubdas et deubdores et fianças deuen auer plaçto entroa que torne; et si fu-/^{60r(b)}ere sano et fincare hy muyto, .I. mes si que non deuen auer plaçto.

213. *Qui ua a Roqueamador*

Quy fuere a Santa Maria de Rocomador en romeria, todas suas [debdas]¹ et debdores et fianças .XX. dias deue auer plaçto.

214. *Qui ua a Roma.*

Qui fuere a Roma en romeria, todas suas deudas et deudores et fianças .III. meses deuen auer plaçto.

215. *Qui ua a Oltramar*

Quy fuere a Oltramar en romeria, todas suas debdas et deudores et fianças .I. ayno deuen auer plaçto

216. *Trayer fierro.*

Todo infançon puede traier fierro et aduçir d'ont quiere que pueda, et non deue seer enbargado en ningun lugar. Et si en /^{60v(a)} su heredat podiere sacar fierro, non deue al rey calonia ninguna nin deue enbargar, por fuero; et puede fer toda minera en sua heredat.

217. *Ret de palombas.*

Todo homne qui para ret palombera, deue peytar .LX. [soltz]¹ de calonia; et si palompas ouiere presas, por cada palonpa .V. [soltz]¹ de calonia, et si ouiere alguna palonba mansa bragada qui prende, .LX. [soltz]¹ de calonia; palonba que traya cascauel, .LX. [soltz]¹ de calonia. Si esta palonba conoçuda es de infançon, la calonia es de infançon. Enpero es a saber que si infançon o uillano fuere qui para atal ret et fuere trobado, la meatat de /^{60v(b)} la calonia deue seer del prendedor et la otra meatat del rey

218. *Parar laços.*

Hotrosi todo home qui para laços por prender palonbas, por calonia deue peytar .V. [soltz]¹, et por cada palonba .V. [soltz]¹. Et otro tal la meatat d'esta calonia deue seer del rey et la otra meatat d'aqueyll qui prisiere

213. ¹ debdas] *ms.* debduas

217. ¹ soltz] *ms.* ss.

218. ¹ soltz] *ms.* ss

219. *Qui sube a palonbar.*

E otrosi qui sube a palonbar aylleno sen uoluntat del seynor, por calonia deue peytar .LX. [soltz]¹, et por cada palonba que prisiere .V. [soltz]¹. Et si el palonbar fuere de infançon, la calonia es del infançon.

220. *Tirar de bayllesta.*

Qui tira de bayllesta en palonbar aylleno, deue por calonia .LX. [soltz]¹, et por cada /^{61r(a)} palonba .V. [soltz]¹. Et quy tira de arco, .X [soltz]¹. Todas estas colonias son de peytar asi como sobrescripto es.

221. *Furtar açtor.*

Todo home qui furta açtor desatando de percha o sacando de casa, deue por calonia .C. [soltz]¹; et si fuere mudado, por cada muda centen [soltz]¹. El falcon, .L. [soltz]¹; et si mudado fuere, por quada muda .C. [soltz]² de calonia.

Todo homne qui furta guauyllan, deue por calonia .XX. [soltz]², et por cada muda LX. [soltz]¹.

222. *Hau de gayola.*

Todo home quy furta hau de cayolla, si fabla, deue peytar por calonia .LX. [soltz]¹, et quoyntos aynos ouiere fablado, por cada ayno .LX. [soltz]¹; et si fablado no ouiere .XX. [soltz]¹, et quantos aynos ouiere seudo en gayo-/^{61r(b)}-lla, por cada ayno .XX. [soltz]¹.

223. *Peciar tregoa de rey.*

En nuyllas tregoa que el rey pone con otro rey, si ueniere homne de otro regno, non deue seer peyndrado si non fuere malfeytor eyll enes por su mano

224. *Vedamiento de rey non sea crebantado.*

Si el rey acotare en su tierra pan o otra cosa, et nuyll homne que sea de su reygno si leuare fuera de su reygno cosa que sea acotada, deue perder quanto que traye; et si fuere de otro reygno el qui crebanta el coto, deuen-li toyller lo que lieua del reygno e'l acotado, et lo al non, que asi es el fuero.

225. *Clerigo deue ser abat.*

En uilla reallenca, de orden o encartada /^{61v(a)} deue seer abat clerigo que sea ueçino de la uilla o, si no, fillo de ueçino clerigo que sea ordenado Todos los

219. ¹ soltz] *ms* ss.

220. ¹ soltz] *ms*. ss.

221. ¹ soltz] *ms* sl.—² soltz] *ms* ss.

222. ¹ soltz] *ms* sl.

ueçinos qui suefren al bispo o al rey o ad arcidiano o ad rico home o a otro home que estranio aya ad auer la glesia, desheredan a si et a [toda] ¹ la ueçindat.

Si ad est clerigo que's ueçino et tiene la glesia et la heredat de la abadia, li dissieren los ueçinos: «Tu tienes .II. heredades et queremos que nos fagas .II. costerias et .II. facenderas en quoaunque cosa sea», en quanto eyll sea tenient de la abadia, deue passar como .I. ueçino en toda façenderia.

Et quando est abat enfermare, pensando algun ueçino: «Fare ueçino et a quantos /^{61v(b)} quiere por que, quando morra, pueda fer al que querre abad», estos ueçinos atales deuen seer en toda ren ueçinos, mas en presentacion non d'aqueylla uegada, porque fueron feytos depues que el abat enfermo.

226. *En laurado entrar oueyllas.*

Si entrieren greyes de oueyllas, o .I. o .II. greyes o mas, depues que entriere septiembre, seyendo la tierra muyllada de pluua, en los barueytos que son pora semnar, si entridieren con uiento de cierço, el seynor d'esta grey o d'estas oueyllas deue acuytrar .I.^a ueç estos barueytos [por] ¹ ont pasien ² las oueyllas; et si con buytorno entridieren, deuen /^{62r(a)} acuytrar .II. ueçes estos barueytos por quoaunque lugar pasan las oueyllas, el seynor d'aquest ganado, que asi manda el fuero. Esto es en el tienpo que los maruecos itan a las oueyllas.

227. *Deue dar querellant parient prouano.*

Si fidalgo ninguno ¹ matare a uillano de rey o de orden o de encartado, et si por auentura omiçidio li quisieren pidir, deuen-li dar quereyllant parient prouano del muerto; et si prouare el parient, deue peytar el omiçidio; et si non lo podiere prouar, deue passar por su iura. Et compliendo el dreyto asi como sobrescripto es, deuen-li finar su enemigtat.

Et todos los nauarros por omiçidio en Uillaua deuen /^{62r(b)} iurar. Et todos los nauarros de la Cuenca de Pomplona por heredat et por mueble deuen iurar en Mendiolorri

228. *Por muert de uillano infançon non reutar.*

Si fidalgo matare el uillano, non lo pueden reptar por traydor, si no lo matare en tregoas, que non auemus dreyto en desfiar a uillano.

Enpero tregoando como se quiere, si lo matare, deue omiçidio al seynor del uillano.

229. *Contienda de nauarro et franco.*

En todo pleyto que sea en Pomplona de franco et de nauarro, deue seer el testimonio de anbas las [partidas] ¹, de la postremera cruç en adentro de las

225. ¹ toda] *ms.* todas.

226. ¹ por] *ms.* pont.—² pasien] *parece enmendado para restituir pascen.*

227. ¹ ninguno] *repetido en el ms*

uillas d'ont uienen las cruçes a Sancta Maria de Panplona al miercoles /62v(a) en la uiespra de Sant Çaluador; et deue seer casa tenient el ueçino [entegro] ², et que aya peynos uiuos et que sea abonido por sus ueçinos en el portegado.

Et otrosi deuemus diçir el testimonio de los francos coal deue seer: aqueyl qui sera prouado de los .XII. de la uilla que ueçino es, casa tenient ayno et dia

230. *Fuero de entrar en carçer.*

Nuyll homne que sea metudo en carçer, si por buen dreyto yssiere de la carçer, non deue carçerero peytar.

231. *Abat seglar.*

Nuill clerigo non deue forçar a lego sobre teniença de glesia por braço seglar, si non fuere por mandamiento del bispo o qui tenga logar del bispo; /62v(b) et si lo fiçiere, deue desfer por braço seglar.

232. *Si cayere home de la bestia, non es omiciero.*

Nuylla bestia que homne caualgare et fuere en poder del homne, porque el homne cayere con la bestia o sines la bestia et moriere el home, la bestia non es omiciera.

Otro si la bestia muere andando en el camino, non façiendo de mas, tuelga¹ el cuero con todos sus mienbros e, los piesdes teniendo sobre el cuero, ante el altar iure sobre santos que por embargo que a feyto eyll a la bestia, que non es muerta; et sea's quyto.

233. *Fuero de infaçon d'auarca.*

Infaçon de auarca deue .II. mesuras de ordio, [otra] ¹ de uino; et non deue al sino que uaya con el rey a huest./63r(a) Nin los fillos nin los nietos, porque partieren esta heredat, non deuen de mas de .I. peyta entroa que passe el auolorio.

234. *Furtar puerco.*

Todo homne qui furtare o rrobare puerco aylleno, si fuere de .II. aynos el puerco, deue peytar .II. [kafices] ¹ de trigo; si mas iouen fuere, puerco de su edat, iurando que atanto uale como el suyo, et sea's quito; et si non quisiere iurar, peyte .II. [kafices] ¹ de trigo.

229. ¹ partidas] *ms.* partididas.—² entegro] *ms.* engro

233. ¹ otra] *ms.* otro.

234. ¹ kafices] *ms.* k.

235. *Fuero de franco*

Con todo franco de rua auemus nos fueros por mueble et por hereditat que se constrenga por seynal del amirat. Deuemus leuar fuero ante el nuestro alcalde et el suyo en el portal /^{63r(b)} de la uilla d'ont el franco es; el alcalde ruano sea dentro al portal de sua uilla, e'l alcalde del mercado fueras del portal de la uilla

236. *Ferme d'ont auer pueda.*

Por mueble que de .I. logar a otro se puede canbiar, por demanda que fagan por mueble, non deuen demandar ferme de la uilla, mas de toda la tierra d'ont aqueyll alcaldyo es

237. *A onbre de orden demandar algo.*

Nuyll homne que sea de orden, si'l¹ piden algo que lo fiçieron alçado o que li enprestaron, si lo quisiere negar, deue'l dar II. prueuas: el .I. deue seer missa-cantano o, si no, onbre de orden; el otro deue seer home de seglar

238. *Al buey crebantar cuerno.*/^{63v(a)}.

Todo home qui a buey crebanta cuerno por rayç, [deue]¹ .VI. arrouos de trigo et .VI. de ordio; et si non fuere salido por rayç, deue .III. arrouos de trigo et .III. de ordio

239. *Creatura que no ha hereditat.*

Todo fidalgo qui faç creatura de infançona, si non la ouiere a [fuero]¹ de tierra et si muere el padre o la madre entroa que la creatura aya .VII. aynos, no deue demandar heredamiento. Enpero el parient prouano de la creatura puede demandar todos los dreytos de la creatura.

240. *El ferme de la uila.*

Nuyll fidalgo que sobre heredamiento demanda: «Da-me ferme que non pas-ses mas en el termy-/^{63v(b)}-no de la uilla», et si dissiere el tenedor de la he-redat que no es ferme dreyturero, fagua'l ferme como fuero es. Et si non diere ferme dreyturero el tenedor de la hereditat, ni'l deue iurar ni'l deue dar hereda-miento.

241. *Qui falsa mesura tiene.*

Nuyll home quy rouo et gaylleta tiene en sa casa por midir, tan grandes las deue tener como el rey tiene en la sied. Villano de rey o uillano de su monas-

237. ¹ si'l] *repetido en el ms*

238. ¹ deue] *ms. de.*

239. ¹ fuero] *ms. furto.*

terio si d'aqueyll grant non [tuuiere]¹, peyte .LX. [soltz]² de calonia; et quoad se quyere d'aqueyll grant non touiere, que tenga mayor o menor, en falsedat es trobado.

242. *A mulier fer fuerça.*

Si null home a mu-/^{64r(a)}-yller non casada forçare, que sea infançona et menos ualiere eylla que aqueyll qui la forço, deue casar con eylla; et si [casar]¹ non quisiere, itelo el rey de la tierra et pare lo suyo quanto ouiere, et espere et suefra enemichat de los parientes. Et si forçare [mellor]² de si, deue peytar por calonia .DC. [soltz]³: los meyoys pora al rey, et los otros meyoys pora la forçada; et el rey sobre esto deuelo itar de tierra et sofrir enemichat de los parientes d'eylla, si la fuerça podiere seer prouada con fidalgos que sean creuderos. Si non podiere seer prouada la fuerça como dito es de suso, puede escapar con sua iura, que iure ni la fodio ni la frego; e'l rey non lo deue itar de /^{64r(b)} de tierra ad aquest qui la forço, si querelant no ouiere, ni enparar lo suyo. La quereylla deue fer por esta infançona padre o madre o parient prouano qui deue [heredar]⁴ elo d'eylla. El rey por dito de otros homes non lo deue ytar de tierra ni enparar lo suyo. Aqueyll infançon qui fiço la fuerça ualiendo mas que eylla e diciendo a los parientes prouanos de eylla: «Aiudar uos é et casarla en logar que podiades casar ante que feyta fuesse la fuerça», eyll esto conpliendo, non [deuen]⁵ que-reyllar al rey ni a otro home ninguno

243 *Por omiçidio.*

En uilla de rey si uillano de rey matare a otro, los ui-/^{64v(a)}-llanos deuen trauar del omiçiero et leuar a la sied del rey ante que passe tercer dia. Et si el merino del rey fayllaren, riendanlo ad eyll; et si non fayllaren, toquen las campanas de la sied con sabiduria de los ueçinos, e los unos uaian en busca del merino e los otros tengan hi el omiçiero. E si se rendiere alabando al menos .III. uegadas que eyl lo mato, con ferme recibanlo; sino otra guissa, no lo reciban. Et si por auentura el merino del rey non fayllaren, al tercer dia paren el ferme, et metanlo en el cepo del rey et cierran el cepo; al .I. cueyno fieran .III. ueçes et al otro .II. ueçes, et toquen las /^{64v(b)} campanas con sabiduria de los ueçinos de la sied, et uayan lur uia. Con esto feyto, los uillanos del rey por fuero non deuen omiçidio.

Et si infançon lo matare [o si de nuyt lo mataren]¹, o si se matare eyl eness, o la cenia de la rueda lo matare que de fueras anda, [los uillanos]² de rev por lo que omiçiero non prisieren, por muert d'aquestas .IIII maneras por fuero omiçidio non deuen.

241. ¹ tuuiere] *ms* tuuere.—² soltz] *ms*. sl.

242. ¹ casar] *ms*. casare.—² mellor] *ms*. menor.—³ soltz] *ms* sl.—⁴ heredar] *ms* heredat.—⁵ deuen] *ms*. deue.

243. ¹ o si de nuyt lo mataren] *omite el ms* —² los uillanos] *ms* uillano

244. *Fuero de omicidio.*

Si bestia o guanado o otra guisa si'l mataren, prengan el omiciero entroa que passe tercer dia, riendanlo el omiciero con fermes en la sied del rey; et si esto non figieren, en cuy termino moriere los uillanos del rey omicidio deuen. /^{65r(a)}

245. *De gato furtado.*

Aqueyll qui trobara su gato furtado en mano del ladron, deue fincar en una plaça plana que aya .IX. pies en anplo a todas partes, una estaca, e ligar el gato a la estaca con una cuerda d'un palmo solament; et ladron deue echar tanto de millo sobre el gato assi como caye en el molino, entroa que el gato sea todo cubierto de millo. Esto feycho, el ladron no aura otra pena; el millo deue ser assi partido como otra calonia de dineros. Mas si el ladron fuere pobre assi que millo non pueda auer, liguen-li el gato al cueyllo desnudo e corra del .I. cabo de la uilla ata'l otro, el sayon feriendo lo en las espaldas asi que el ladron e el gato fieran con l'açot. /^{65r(b)}

246. *Fuero de las eras*

Si por aventura alguno façe casa en'a drecha d'alguna era anciana, de la part del çierço derecho o de la part del butorno derecho, et diçe el seynor de la era: «Non fagas cassa en esse logar, que menos ualdra la mi¹ era por aqueylla casa», et diçe el otro que sí, de'l fiador que si por aventura le enbargare el uiento a la era, que la desfaga la cassa; et dando este fiador, faga la casa. Esto sea catado por bonos homs si'l fara enbargo o no; en esta era sea puesta la parua por los .IIII. quantos, et que la ablienten, et si podieren ablentar, no la desfaga la casa; et si non podieren ablentar, desfaga la casa, que asi manda el fuero.

247. *De non prenderar.*

Nuyll hombre que prendra en las comarcas, si es a saber: Lerin, et Baçtan, et Ual d'Erro, e Aeçcoa, e Saraçayz, e Roncal, e Ual de Echo, e otras muchas uaylles que non se acuerda /^{65v(a)} ome de nombrar, qui prendrare ueniendo al mercado, es la calonia .LX. [soltz]¹.

248. *Cosa de contienda.*

La cosa de contienda non sea dada ni uendida ni ayllenada entroa que sea prouada de quien deue ser.

246. ¹ era] *el ms repite aquí:* et dice el seynor de la era: Non fagas cassa en este logar.

247. ¹ soltz] *ms. sl.*

249. *Heredat non ayllenar.*

Todas las heredades [que] ¹ uienen a llos fillos de padre o de madre despues muert de padre o de la madre, ninguno de los fillos ni ninguna de las fillas non puede uender ni enpeynar ni dar ni ayllenar la part que deue auer de la heredat, ata que cada uno aya conoçuda su part e las partidas sean firmadas segunt fuero manda.

E los ermanos e las ermanas quoando auran conoçudas las heredades et uerran assi que dos a dos o tres a tres, si tantos son ayan las heredades partidas. Et [uienen] ² assi que el uno muere ante /65^v(b) que el otro, ante que su part connoscan, los otros ermanos non deuen demandar la part del muerto por mayorio ni por otra raçon ninguna; sino aqueyll o aqueilla con qui aura particion, cada uno deue auer con qui feço ermandat quoando se partieron. Esto manda el [fuero] ³.

250. *Tayllar uyt.*

Todo ombre qui tayllare uyt agena, deue pechar por cañonia V. [soltz]. Otrosi qui tayllare uimme agena, por cada uimme .V. [soltz].

251. *Fuero de uerto.*

Todo onbre qui crebantare uerto con portal, o parral o uinna, deue pechar por el crebantamiento .V. [soltz] ¹, e deue pechar el dayno.

252. *Como leuaran la pecha de rey.*

Si por auentura quisiere diçir el rey de Nauarra o el ricombre que terra la honor, o el merino, a los ¹.

249. ¹ que] repetido en el ms.—² uienen] con signo abreviativo en el ms—
³ fuero] ms fero.
 250. ¹ soltz] ms. sl.
 251. ¹ soltz] ms. sl
 252 ¹ los] aquí acaba el ms

MISCELANEA

I

MANUSCRITOS E INCUNABLES JURIDICOS DE SANTO TOMAS DE AVILA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

En el llamado fondo de Santo Tomás de Avila¹ de la Biblioteca Nacional, que se compone de 320 manuscritos y 315 incunables y ediciones raras del siglo XVI, una parte importante del mismo la constituyen 115 manuscritos y 160 incunables, todos ellos de contenido jurídico. Por el número e importancia de estos manuscritos e incunables jurídicos hemos creído necesario dedicarles un estudio aparte del resto del fondo, a fin de que sean mejor conocidos por los especialistas de esta materia. Pero a fin de que se entienda mejor la historia del fondo del que estos manuscritos e incunables son parte, daremos una noticia previa del convento-universidad de Santo Tomás de Avila, a la que pertenecieron anteriormente.

I. EL CONVENTO-UNIVERSIDAD DE SANTO TOMAS

La construcción de este convento la comenzó por el año 1478 la ilustre dama D.^o María Dávila para cumplir una disposición testamentaria de su difunto primer esposo Hernán Núñez de Arnalte, contador de los Reyes Católicos. Pero fundada la Inquisición en España en 1478 y nombrado primer Inquisidor General el dominico Fr. Tomás de Torquemada, éste obtuvo de los Reyes Católicos permiso para dedicar muchos de los bienes de los judíos y herejes condenados a la construcción del convento de dominicos de Avila, con lo que el primitivo proyecto resultó muy ampliado. Las obras para esta ampliación duraron de 1482 a 1493 y su estilo es un gótico tardío. Estaba situado extramuros de la ciudad. En el crucero de su iglesia fue enterrado el malogrado infante D. Juan, hijo de los mencionados Reyes, en un sepulcro labrado por el italiano Fancelli. En el convento, una parte estaba dedicada a palacio de verano de los mismos Reyes².

1. Noticia de la procedencia de este fondo en B. N., ms 18.841, ff. 314-336, donde se contiene una lista bajo este título: *Libros traídos de Avila los siguientes...*

2. J. MARTÍN CARRAMOLINO, *Historia de Avila, su provincia y obispado* (1872, 2 vols.), vol. I, pp. 512-518; *Encicl. Cult. Española*, I, p. 597, s. v. *Avila*. 3 *Monumentos*

En este convento se había de fundar una universidad, que sería una de las muchas existentes en la España del siglo xvi³. El general de los dominicos Vandello de Castronuovo estableció en este convento de Santo Tomás un «Estudio General de Teología y Artes» por letras dadas en Avila, el 27 de mayo de 1504, y una de las razones que le movieron a ello fue el aprovechamiento de la copiosa biblioteca que ya poseía por entonces el citado convento.

Pero el «Estudio» fundado consistía en un estudio interno de la Orden Dominicana, esto es, para uso exclusivo de sus miembros. Este «Estudio General» fue elevado a universidad —sin base legal, a lo que parece— por el legado pontificio Poggio hacia mediados del siglo xvi, con facultad de conferir grados en Teología, Cánones y Leyes y Medicina. Estos grados eran admitidos por las otras universidades españolas, catedrales y reyes, y así continuó a lo largo del siglo xvi.

Sin embargo, en la última parte del siglo se hicieron gestiones en Roma y, como resultado de las mismas, el Papa Gregorio XIII dio una bula en 4 de abril de 1576 por la que confirmaba la erección y privilegios de esta universidad y, en consecuencia, pudo conferir grados en Artes, Teología, Derecho y Medicina.

Durante el siglo xvii sus grados ya eran reconocidos e incorporados por Salamanca, y en 1638 fue confirmada por el rey de España a través de una Real Pragmática, en la que se dice «se tenga y sea tenida por universidad aprobada, como las demás de estos nuestros reinos».

No obstante, esta universidad no llegó a tener nunca enseñanzas ni de Medicina ni de Derecho. Por ello, en las reformas habidas durante el siglo xviii se le prohibió conferir grados en ninguna de estas dos materias, puesto que no se impartían las correspondientes enseñanzas. Por último, en 1807 fue suprimida como tal universidad.

Dos figuras ilustres enseñaron Teología en esta universidad en el siglo xvi: los dominicos Fr. Domingo Báñez (n. 1528-m. 1604) y Fr. Pedro Ibáñez (n. 1500-m. 1565). El primero⁴, muy conocido por su intervención en las polémicas sobre la doctrina de la gracia, fue catedrático de Teología desde 1561 hasta 1567, inclusive, y en 1569 vuelve a figurar como regente, o sea, director de Estudios. Durante este tiempo fue confesor y director espiritual de Santa Teresa de Jesús, a la que defendió y apoyó en su reforma del Carmelo. El segundo, o Fr. Pedro Ibáñez⁵, también fue confesor y director espiritual de la Santa de Avila, a la que también ayudó en la reforma de la Orden.

3 Vid C AJO GONZÁLEZ, *Historia de las Universidades Hispánicas*, 11 vols. (Madrid, 1957-1979); sobre universidad de Avila en. II, pp. 103-106; III, pp. 334-342; V, pp. 529-535; docum en: IV, p. 73; 555-557; VI, pp. 98-102

4. Vid. ALDEA-MARÍN-VIVES, *Dic. Hist. Ecles.*, I, s. v, y bibliografía allí citada.

5 Fr. Pedro Ibáñez nace en Calahorra, muere en el convento de Santa María de Trianos, como teólogo enseñó en S Pablo de Valladolid y en Santo Tomás de Avila

II. SU BIBLIOTECA

La biblioteca del convento de Santo Tomás de Avila ya era buena antes de la erección de la universidad, puesto que una de las razones que se dieron para la fundación del «Estudio General» fue el aprovechamiento de la nutrida biblioteca del convento⁶. Es posible que después de la fundación de la universidad se incrementasen sus fondos, si bien hasta ahora no conocemos documentación ni sobre el origen ni sobre el desarrollo de esta biblioteca. En todo caso resulta evidente que en el primer tercio del siglo XVIII esta biblioteca era notable por la parte de autores medievales de Teología, Filosofía, Derecho civil y canónico y Medicina que poseía, que hoy constituyen lo que llamamos «fondo de Santo Tomás de Avila de la B. N.».

Ahora bien, el gran número de manuscritos y de incunables que contiene el fondo de Santo Tomás, cuya data es anterior en muchos casos a la fundación del convento del mismo nombre en Avila, nos hace creer que la biblioteca de Santo Tomás de Avila no se formó —al menos en su mayor parte— por un proceso natural, esto es, poco a poco y por adquisiciones aisladas de manuscritos y libros, sino que inicialmente debió de constituirse con fondos trasladados en bloque a ella desde otra u otras bibliotecas pertenecientes a conventos de la misma Orden o también de bibliotecas de particulares, pero que en todo caso debieron de entrar no mucho después de la fundación del convento a finales del siglo XV, puesto que —según dijimos anteriormente— ya en 1504 era considerada como una buena biblioteca. La abundancia en ella de obras medievales de Teología, Filosofía y ambos Derechos, e incluso de Medicina, es sorprendente y llamó la atención del bibliotecario mayor de la R. B. en el siglo XVIII, quien a la postre conseguiría, mediante una permuta de fondos entre ambas instituciones, incorporarlas a aquélla, donde hoy constituyen el fondo que nos ocupa.

En cambio, parece que la biblioteca de Santo Tomás de Avila no siguió creciendo al compás del tiempo en los siglos XVI, XVII y XVIII —lo que en cierto modo parece abonar nuestra hipótesis sobre el origen de la misma— pues cuando en 1735 se realiza la aludida permuta de fondos con la R. B. —según veremos— los libros que piden a cambio los dominicos de Santo Tomás son publicaciones de aquellos últimos siglos, lo que revela que carecían de ellas y que no podían adquirirlas.

Lo dicho hasta ahora no excluye que algunos de los manuscritos e incunables del fondo que estudiamos hayan sido adquisiciones aisladas, de algunas de las cuales nos informan las suscripciones y alguna nota de poseedor.

6 Vid. supra p 2

Por consiguiente, careciendo hasta ahora de documentación directa sobre el origen y formación de esta biblioteca, debemos contentarnos con los datos aislados consignados en cierto número de manuscritos y de incunables de este fondo, como son las notas de poseedor, pero sobre todo trataremos de poner a contribución, por una parte, una firma monogramática a modo de ex-libris que se repite en muchos manuscritos e incunables, y por otra, ciertas notas de contenido añadidas por una misma mano en cierto número de incunables. Todo ello nos permitirá, basados en estos elementos, establecer tres grupos de manuscritos e incunables, bastante nutridos, que muy bien podrían representar otras tantas bibliotecas que pasaron, total o parcialmente, a formar parte de la de Santo Tomás de Avila.

Algunas notas de poseedor

Creando posible que se hayan perdido algunas notas de poseedor, tanto en los manuscritos como en los incunables de este fondo que fueron reencuadrados al ingresar en la R. B., vamos a citar aquellas conservadas.

En el manuscrito 580 (Alfonso X, *Partidas*), en el folio 176^v hay una nota que dice: «Esta sexta y séptima Partidas son del monasterio de Santo Thomas de Avila, de la orden de los Predicadores». En el incunable I/1.352 (*Biblia Sacra latine*) se encuentra en la 3.^a hoja de guarda anterior, verso, esta nota: *hanc biblior(um) chartam donat / cenobio huic Regio ipsi(us) fu(n)dator / inq(ui)ssitor g(e)n(er)alis hispaniar(um) p(ri)m(us) / fr Th(om)as de Torquemada, / prior sancte Crucis Segobie(n)sis / ordinis p(rae)dicator(um), vir benemerit(us)*, o sea, que fue regalada al convento de Santo Tomás por el célebre Inquisidor General, que tanto contribuyó a la fundación de este convento. Otro incunable con nota de poseedor es el I/1 700 (Paulus Venerus, *Sophismata Aurea*, 1483), el cual contiene en el folio 1: *Hic liber est conventus s(anc)ti th(oma)e abulensis, cui fuit datus in pignus quarundam pecuniarum*, o lo que es lo mismo, en prenda de dinero debido al monasterio. El incunable I/264 (A. Gutiérrez, *Gramática Latina*, Burgis, 1485) perteneció, según nos dice una nota⁷, al convento de San Pablo de Burgos, pero más tarde debió de pasar a Santo Tomás de Avila, pues de aquí salió para la R. B. en 1735.

Como vemos, en todas las notas que acabamos de citar⁸ no se alude a ninguna biblioteca ni a ningún grupo de manuscritos o de incunables

7. En f. 106^v *hec ars competit (conven)tui Sancti pauli b(ur)gen(sis) ordinis fratru(m) p(rae)dicator(um) et ut veru(m) e(st) / proprio no(m)i(n)e sigilauit .. Comutata fuit pro alia arte / nebrisensi ex mandato R(everend)i p(at)ris f(rat)ris / bartho(lomae)i de Torres p(ri)oris (con)ve(n)t(us).*

8. Hemos de añadir a esta serie: I/2.338 (*S Antonini Florentini Summa Theologiae*, 3.^a pars), en cuyo folio 1 dice, aunque tachado: *hic est (conven)t(us) s(anc)ti th(oma)e Abule(n)sis.*

y, en consecuencia, cada una vale sólo para el manuscrito o incunable que la contiene.

Manuscritos e incunables del doctor Cota

Un cierto número de los incunables y algún manuscrito del fondo de Santo Tomás de Avila proceden de la biblioteca del doctor A. Cota de Avila, de la que pasaron a la biblioteca de Santo Tomás, tal vez a su muerte. La noticia de esta procedencia nos la suministran dos notas de poseedor que vamos a analizar:

Una de ellas se encuentra en el manuscrito 691 (*Fuero de las Leyes, Ordenamientos y Glosas*), en cuyo folio 2, ángulo externo inferior, se lee: «Este libro ove en Avila cu(m) essem / p(r)ior ciuitat(is), q(ue) lo ove en / XXVI de setie(m)bre de LXXIII an / nos deste MD». Pero además en los folios 317^v-318 de este mismo manuscrito hay una lista encabezada con este título: «Los libros de mi el doctor A(lons^o) Cota q(ue) q(ue)dan en mi casa son los siguientes», y sigue la lista que contiene 53 títulos, uno de los cuales, el núm. 25, dice: «Este libro del Fuero de Leys y Ordenami(ent)os y Glosas», que es, por consiguiente, el mismo manuscrito 691. Los restantes libros y manuscritos reseñados son casi todos de Derecho romano o canónico.

La otra nota está en el incunable I/1.231 (Bartholus de Saxoferrato, *Super Digesto Novo*, Venet., 1478), en el verso del último folio, ángulo externo inferior, y dice: «Conpre este libro yo el doctor Cota / en la çibdad de Toledo a XV dias / del mes de abril anno del nascimiento del n(uest)ro Salvador Ihesuch(rit)o de mill / e quatroçientos e ochenta y / çinco annos. / Doctor Cota [Rubricado]».

De estas dos notas podemos extraer algunas conclusiones para nuestro objeto. En primer lugar, sobre el poseedor de esta pequeña biblioteca, el doctor A(lons)o Cota, quien, a juzgar por las fechas citadas, es un personaje que vive durante el segundo y tercer tercio del siglo xv, que se intitula doctor —sin duda lo era en Derecho, pues su biblioteca es totalmente jurídica— y que desempeña un cargo importante (*prior civitatis*) en la ciudad de Avila por los años 1473; finalmente, que por el año 1485 se encontraba en Toledo, de paso o de asiento, donde adquiere uno de sus libros. También resulta cierto que algunos de sus libros, por lo menos el manuscrito y el incunable en que se encuentran las notas que hemos transcrito, fueron a parar más tarde a la biblioteca de Santo Tomás. Pero nosotros creemos muy probable que también pasaron a Santo Tomás la totalidad, o la mayoría al menos, de los restantes libros y manuscritos de su biblioteca, tal como se contienen en la lista del manuscrito 691 de este fondo. En efecto, muchos de los títulos de esta lista coinciden con otros tantos del fondo de Santo Tomás, especialmente incunables, si bien la suma concisión con que están reseñados en la lista del manuscrito 691 no permite una absoluta certeza en la identificación, por lo que sería necesario

encontrar otro criterio de identificación o bien una prueba documental, hasta ahora no hallada. Con todo, nosotros señalamos en la lista del manuscrito 691, que transcribimos al final⁹, algunas coincidencias con incunables y manuscritos del fondo de Santo Tomás, si bien dejamos que el lector juzgue por cuenta propia sobre esta cuestión.

Manuscritos e incunables con ex-libris

Hay en el fondo de Santo Tomás de Avila un grupo de 22 manuscritos y 10 incunables¹⁰, por lo menos, que presentan ya sea en el primer folio ya en el último una firma monogramática, igual en todos, que parece servir de ex-libris. Este ex-libris va acompañado en los incunables I/223, I/713 y I/1931 de otra rúbrica, también igual para los tres.

No hemos podido identificar ni lo que llamamos ex-libris ni la rúbrica que le acompaña en los tres casos citados, pero, sin embargo, podemos afirmar que todos los manuscritos e incunables que presentan este ex-libris formaron parte un día de una misma biblioteca, aunque desconocemos cuándo y cómo pudieron pasar a la de Santo Tomás de Avila.

En cuanto al contenido de este grupo de manuscritos e incunables, digamos que predominan los que tratan de Medicina, a los que siguen los de Filosofía, textos clásicos latinos y los de Derecho romano y canónico.

Incunables con nota de contenido

Hay unos 30 incunables jurídicos¹¹ que llevan todos ellos en el primer folio, margen inferior, una nota de contenido que da el autor y título de la obra y el número de tomos que comprende. Esta nota está escrita por una misma mano en todos, la cual parece ser de finales del siglo XVII o principios del XVIII.

Pues bien, esta mano no creemos que sea de la biblioteca de Santo Tomás, porque entonces no sabríamos explicar por qué la llevan estos 30 incunables y no los restantes, más de un centenar. Por ello, nos inclinamos a creer que esta nota es anterior a su entrada en Santo Tomás y que fue escrita en otra biblioteca de la que estos incunables formaron parte. De ser esto cierto, los incunables con esta nota representarían una tercera biblioteca, al lado de la del doctor Cota y de la otra constituida por los manuscritos e incunables con ex-libris antes citada, que se incorporó con el tiempo a la de Santo Tomás de Avila.

9 P. 23-24, *Apéndice I*.

10. Lista en p. 24, *Apéndice II*.

11 Lista en p. 25, *Apéndice III*.

III. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE MANUSCRITOS JURIDICOS

Hemos dicho que los manuscritos de contenido jurídico existentes en el fondo de Santo Tomás son 115. Vamos a señalar ahora algunas características externas generales de los mismos¹².

Generalidades

Por lo que toca a su data, la mayor parte son de los siglos XIV y XV, aunque unos pocos del XIII y del XVI¹³.

En cuanto a la materia escritoria hay una serie de ellos en papel y otra algo menor en pergamino o en vitela¹⁴; finalmente, se encuentran varios de materia mixta, esto es, pergamino o vitela y papel (mss. 579, 7.532, 12.149).

Otros son mixtos no sólo por la materia escritoria, sino también por la letra, ya que una parte es manuscrita y otra impresa. Este es el caso del ya citado manuscrito 691, cuyos folios 90-251, de una parte, y 308-316, de otra, constituían sendos incunables, los cuales en 1923 fueron separados del resto y transferidos como tales a la Sección de Raros e incunables (I/2.535: los dos juntos). Estructura mixta presenta también el manuscrito 12.151, cuyos folios 1-45 constituyen un incunable (Venetiis, 1475)¹⁵, mientras los folios 46-93 son manuscritos del siglo XV.

Respecto a las dimensiones, los hay de gran tamaño o folio máximo (mss. 387, 2.259, 12.145), en tanto los menores llegan a 8.º y a 16.º (mss. 167, 866), pero la mayor parte presenta tamaños intermedios entre éstos.

En general, no presentan riqueza de ornamentación, sin embargo hay unos cuantos que tienen iniciales iluminadas, las cuales en algunos de ellos aparecen cortadas, como es el caso de los mss. 1.148 y 2.137.

Por último, queremos hacer notar la existencia de algún manuscrito facticio en este grupo, el cual habría sido hecho en la R. B., cuando

12. Las de los mss. de esta serie hasta el 2 263 pueden verse también en la descripción de cada uno en *Inv Gral de Manusc de la B N.*, I-VI (Madrid, 1955-1962), si bien advertimos que en ninguna de estas descripciones se indica la procedencia de Santo Tomás de Avila, con excepción del ms. 580, porque está expresa en el propio ms. Un pequeño número de estos mss. están descritos también en A. GARCÍA Y GARCÍA, *Codices operum Bartoli e Saxoferrato recensiti Iter Hispanicum* (Firenze, 1973), pp. 53-78.

13. En la lista de la R. B. sobre la que identificamos los mss está indicada a veces la data; por ejemplo en núm. 2, 4, 11, 20, 31, 55, etc.

14. También la materia, cuando es pergamino, aparece señalada en los títulos de la lista: por ejemplo en núms. 67, 69, 70, 73, 79, 86, etc

15. En f. 45 dice así: *Impressus Venetus impensis Joha(n)nis Manthen de Gherretzem MCCCLXXV*. Sin embargo, hasta ahora no ha sido separado de la parte manuscrita.

fueron reencuadernados, uniendo partes de manuscritos distintos. Basamos nuestra sospecha en la coincidencia de un título de la lista con partes de dos manuscritos. Este podría ser el caso del manuscrito 2.139¹⁶.

Signaturas

Cuando ingresó el fondo de Santo Tomás de Avila en la R. B. sus manuscritos fueron distribuidos por los diversos estantes, atendiendo al contenido y al tamaño, y de acuerdo con el sistema de clasificación allí imperante, a los jurídicos les correspondieron los estantes designados por las letras C (Derecho Canónico), D (Derecho Civil) y también U, Aa y Cc, en los que aparecen entremezclados ambos Derechos.

A finales del siglo pasado se cambió el sistema de signaturas de letras del alfabeto, o *estantes*, más un número de orden, por el de numeración única y consecutiva, y entonces los manuscritos jurídicos no quedaron agrupados, sino dispersos por toda la serie, como puede apreciarse en el cuadro de equivalencia de signaturas que damos al final¹⁷.

Copistas

Sólo un pequeño número nos es dado conocer, gracias a las suscripciones, y de ellos unos son extranjeros y otros españoles. De los primeros encontramos en el manuscrito 252 (*Abbatis Panormitani Repetitiones*), escrito «per Gerardum Apis de Brabantia» en 1441; en el manuscrito 575 (*Jacobus Butrigarii super Codice*) escrito por «Angelus de Fano», al parecer italiano. Entre los escritos por españoles citaremos el manuscrito 696 (*Repertorium Ordinamenti*), copiado por «Johannes Roderici Ispalensis scriba» en 1467; ó 6.375 (*Joannis de Imola Recollecta*), escrito «per me Joannem de Moya, de Valentia, Bononiae studentem»; o el 7.563 (*Baldi et aliorum Consilia*), escrito «per dominum Alfonsum Garsie, familiarem domini Egidii Garsie»¹⁸

Encuadernación

Los manuscritos del fondo de Santo Tomás de la B. N. no tienen actualmente una encuadernación única y característica, ni la tenían tampoco cuando se encontraban en la biblioteca de Santo Tomás de Avila¹⁹. Lo dicho vale también para los manuscritos jurídicos de este fondo. Pero

16. Hay en él partes coincidentes con núm. 1 y otras con núm. 113 de Lista de mss.

17. Vid. p. 16.

18. Pueden verse las suscripciones citadas al completo en. ms. 252, f. 38, b; ms. 575, f. 170^v; ms. 696, f. 62^v; ms. 6.375, f. 302; ms. 7.536, f. 102

19. Puesto que las encuadernaciones conservadas no son todas iguales, según veremos

como —según ya anticipamos— la mayor parte de los manuscritos del fondo de Santo Tomás fueron reencuadernados tras su ingreso en la R. B., es preciso hacer una distinción entre los reencuadernados y aquellos que todavía conservan la encuadernación que tenían en Avila.

Entre las encuadernaciones de Santo Tomás conservadas hay algunas de piel estezada sobre tablas, como la de los manuscritos 1.551, 2.146, 2.213, 9.117, todas las cuales tienen una etiqueta pegada en la tapa posterior con el título del contenido en letra gótica caligráfica, del que a veces sólo quedan restos. Otras son simplemente de cuero sobre tablas, como las de 9.101 y 12.145, esta última con decoración mudéjar.

Pero la mayor parte de los manuscritos jurídicos de Santo Tomás fueron reencuadernados en la R. B., poco después de su entrada, por Juan Gómez²⁰, y algunos después por Antonio de Sancha, en tafíete rojo o avellana sobre cartones, con decoración de doble filete dorado en las tapas. A otros se los reencuadernó, ya en el siglo XIX, en pasta española o en holandesa y alguno, como 12.150, con encuadernación de lujo.

El contenido

Los 115 manuscritos jurídicos que contiene la lista se pueden clasificar atendiendo a la clase de Derecho que contienen. Hay 3 manuscritos de Derecho medieval español, que son los números 16, 22 y 46 de la lista. Los restantes se pueden dividir en dos subgrupos: uno que contiene Derecho Canónico y el otro Derecho Romano. El primero contiene una serie de comentarios de autores medievales sobre las Decretales. El segundo comprende las obras de comentaristas y glosadores medievales sobre alguna de las partes del Corpus Iuris Civilis de Justiniano.

La identificación

No resultó fácil por varias razones. De una parte, los títulos de la lista de entrada en la R. B. son muy concisos, y en muchos casos a esos títulos responden varios manuscritos de los existentes en la B. N. Por otra parte, el fondo de Santo Tomás, al cual pertenecen estos manuscritos jurídicos, carece —a diferencia de otras colecciones²¹— de unas características externas que lo distinguan, según queda dicho al tratar de la encuadernación.

En cambio, nos han ayudado en la identificación ciertos detalles o coincidencias observadas en el curso de la identificación. Así, el autor

20. Sobre Juan Gómez, encuadernador de la R. B., vide M. LÓPEZ SERRANO, *La encuadernación en Madrid en la primera mitad del siglo XVIII*, en *Archivo Español de Arte y Arqueología*, 37 (1937), 1-13

21. La colección de Uceda tiene una encuadernación característica: las de Plasencia y del Conde de Miranda tienen una etiqueta o una nota de procedencia

de la lista transcribe muchas veces una parte del *explicit* del manuscrito como título en aquélla. Otras veces el título de la lista coincide con el de la etiqueta en letra gótica caligráfica que tienen en una de las tapas los manuscritos que conservan la encuadernación de Santo Tomás.

Como resultado de nuestra labor, diremos que los títulos de la lista no identificados son muy pocos en relación con el total que comprende, y el porcentaje de pseudo-identificaciones esperamos que sea muy pequeño.

IV. ADQUISICION DEL FONDO DE SANTO TOMAS POR LA REAL BIBLIOTECA

Puesto que estos 115 manuscritos y 160 incunables jurídicos son una parte del fondo de Santo Tomás de Avila, la historia de su adquisición por la R. B. de Madrid es la misma que la del fondo a que pertenecen.

El fondo de Santo Tomás de Avila es una de tantas colecciones²² de manuscritos y libros adquiridos por la R. B. de Felipe V a lo largo del siglo XVIII para incrementar los fondos que ya poseía. La iniciativa de esta adquisición parece que partió del bibliotecario de la R. B. don Juan de Iriarte, el cual estuvo encargado de la agencia y compra de libros y manuscritos desde 1736 a 1751. Conocida la existencia de libros y manuscritos interesantes para la R. B. en Santo Tomás de Avila, se entablaron negociaciones, en las cuales actuó como apoderado del convento de Santo Tomás Fr. José Escudero Alvarado y como apoderado de la R. B. el propio don Juan de Iriarte²³. Como resultado de estas negociaciones, se llegó a un acuerdo entre ambas entidades, que consistió en una permuta de fondos en estos términos: la Comunidad de Santo Tomás entregaba a la R. B. los manuscritos y libros que hoy constituyen el fondo de Santo Tomás, el cual había sido seleccionado previamente por Iriarte. Por su parte, la R. B. se comprometía a entregar a la Comunidad de Santo Tomás una serie de libros de materias eclesiásticas contenidos en unas listas redactadas por la propia Comunidad. El número de volúmenes permutados había de ser igual. Asimismo

22. Recordemos varias de cuya historia nos hemos ocupado: José M^a FERNÁNDEZ POMAR, *Libros y manuscritos procedentes de Plasencia Historia de una colección*, en *Hispania sacra*, 18 (1965), 33-102; Id., complemento al anterior estudio: *La biblioteca del arzobispo don García de Loaisa Girón*, en *Archivos Leoneses*, 64 (1978), 215-271; Id., *La colección de Uceda y los manuscritos griegos de Constantino Láscaris*, en *Emerita*, 34 (1966), 211-288; complemento al anterior estudio: Id., *La colección de Uceda de la B N Nueva edición del Catálogo de Manuscritos*, en *Helmantica*, 27 (1976), 475-518; Id., *Manuscritos del VI Condestable de Castilla en la B N*, en *Helmantica*, 55 (1967), 89-108

23. En el Archivo de Papeles de Secretaría (PS) de la B. N. hay un ms., el PS 19.014, en el que se encuentran una serie de cartas cruzadas entre Iriarte y Fr. José Escudero Alvarado sobre la marcha de las negociaciones.

corrían a cargo exclusivo de la R. B. los gastos de traslado de los objetos permutados hasta su respectivo destino. Además se advertía que las obras entregadas por la R. B. a la Comunidad habían de estar completas —en el caso de que constasen de varios tomos— y bien encuadernadas.

La permuta había quedado concertada en octubre de 1736, y en diciembre del mismo año ya había entrado en la R. B. lo que hoy llamamos fondo de Santo Tomás de Avila. En cambio, la entrega de los libros por parte de la R. B. a la Comunidad de Avila tardó más, y no se terminó hasta septiembre de 1737. De las ediciones entregadas por la R. B. una parte eran duplicados existentes en la misma y otra parte fue comprada a propósito para este objeto.

Si se analiza esta permuta con un criterio de nuestros días, no hay duda de que resultó mucho más ventajosa para la R. B. que para la Comunidad de Avila. Pero hay que tener en cuenta que esta última actuaba con un criterio práctico: necesitaba tener en su biblioteca para el estudio y consulta obras de autores contemporáneos que estuviesen al día, las cuales probablemente no podía comprar la Comunidad; en cambio, podía prescindir muy bien de obras manuscritas de autores medievales y de incunables, cuya importancia por entonces ya era meramente histórica.

José M.^o FERNÁNDEZ POMAR

A LISTA DE MANUSCRITOS JURIDICOS PROCEDENTES DE SANTO TOMAS DE AVILA

(B. N., ms 18.841, ff. 314-336):

1. Angelus de Perusio, Lectura super Authenticas Item Bartoli, Lectura super III libris finalibus Codicis [Ms 2.139, partim²].
2. Henrici [Bohic] super Decreto; in fine haec nota: Absolutum opus anno a Nativitate Domini 1348 etc. [Ms. 12.150].
3. Petri Johannis de Ancharano et aliorum Repetitiones [Ms. 2.145].
- 4 Lectura Bartholomaei de Saliceto, 1462 [Ms. 17].
- 5 Lectura super Decretales, sine auctore [Ms. 2.141]
- 6 Lectura Vetus, sine auctore.
7. Lectura Andreae de Barulo super III primis de conveniendis fisci debitoribus [Ms 28].
- 8 Repertorium iuris, sine auctore, saeculi XIV ineuntis [Ms. 586].
- 9 Baldi Recollectiones [Ms. 12.147].
10. *Singularia* composita per D Ludovicum Pontanum de Roma, etc. [Ms. 12.246].
11. Abbatis Panormitani Repetitiones scriptae per Gerardum Apis de Brabantia, 1441 [Ms 252]
- 12 Commentarium in Decretalia, sine auctore etc. [583].
13. Antonii de Butrio Lectura secunda Decretalium [Ms. 2.140].
14. Novellae constitutiones ecclesiarum et pupillorum et alia opera [Ms 847].
15. Lectura Baldi et Saliceti super V^o lib. Codicis [Ms 2.207].
- 16 Este es el Libro de las Leyes que fizo el noble rey D Alfonso, señor de Castilla, etc. et seqq. [Ms 22].
- 17 Lectio Thesaurarii super Decretum [Ms 29].
18. Repertorium iuris ordine alphabetico sine auctore [Ms. 579].
- 19 Antonii de Butrio Repertorium iuris [Ms 12.154].
20. Repertorium textuum et glossarum et quorundam dictorum modernorum doctorum, praesertim Dni. Baldi de Perusio, iuris lucernae, etc., 1435 [Ms. 8.720].
21. Recollectio Baldi super titulis Decretalium [Ms.2.213].
- 22 Sexta Partida de las leyes del rey D Alonso, saeculi XIV ineuntis egregius codex [Ms. 580]
23. Commentarium in Codicem, sine auctore [Ms. 574].
- 24 Lectura super libris Codicis, sine auctore [Ms. 573]
- 25 Lectura super Instituta, sine auctore [Ms. 7.535]
- 26 Repertorium iuris incerti. Item Joannis cuiusdam qui *Mercuriales Quaestiones* scripsit sive glossae [Ms. 7.537].
27. Baldi et aliorum Consilia [Ms. 7.536].
28. Tancredi liber Ordinis iudicarij. Item de haeredibus et falcidia [Ms 823]
- 29 Incerti Lectura de officio, cui est mandata iurisdictio

30. Apparatus iuris, sine auctore.
31. Joannes de Lignano: 2^a pars de iudiciis, 1437 [Ms. 582].
32. Floriani de Sancto Petro de Rononia Disputatio. Item Raphaëlis Fulgosii etc. et aliorum [Ms. 2.146].
33. Henrici [Bohic] super II Decretalium, absque fine [Ms. 578].
34. Joannes Faventius super Decretum [Ms. 682].
35. Innocentii IV liber; Dinus de regulis iuris, et Repertorium Guillelmi Duranti [Ms. 393].
36. Constitutiones Clementinae editae in concilio Viennensi cum glossa Guillelmi de Monte Lauduno Item Lectura Joannis de Deo super Decretum [Ms. 399].
37. Baldi super VI Codicis [Ms. 2.263?].
38. Apparatus Dni. Guillelmi de Vallesicca, legum eximii professoris; inc *Anteriores Usatici*, etc. et sequentes [Ms. 695].
39. Rotlandini Bon(oniensis), not(arii) Ord. Praedicatorum, opusculum sive Summa edita super tribus partibus Notariae etc. [Ms. 694].
40. Ordo iudiciarius compositus a Dno. Bartholomaeo Brixensi, et aliorum Repetitiones canonicae et civiles [Ms. 8.994].
41. Tractatus de inquisitoribus incerti auctoris [Ms. 835].
42. Rotlandinus de ultimis voluntatibus, qui liber *Flos Rotlandini* vocatur [Ms. 9 017].
43. Lectura incerti in ius [Ms. 397?].
44. In nomine Domini incipit Summa de Feudis a Joanne Blanco cive Massilensi composita; inc. *Quoniam opus etc.* [Ms. 964].
45. Summa Decretalium incerti minutissimo caractere [Ms. 167].
46. Fuero de las Leyes; inc *En el nombre de Dios amen Porque los corazones de los hombres son repartidos de diversas maneras etc* [Ms. 691].
47. Summa de casibus fratris Raimundi abbreviata [Ms. 168].
48. Repertorium iuris incerti [Ms. 7.539].
49. Andreae de Isernia super feudis [Ms. 577].
50. De amicitia incerti, et Decissiones quaedam [Ms. 9.101].
51. Alberici Galioti Summa Iuridica [Ms. 698].
52. Raimundi Summa; in fine notat donatum hunc librum anno 1303 [Ms. 235].
53. Lectura Dni. Abbatis de Sicilia super Decretales [Ms. 200].
54. Baldus super Innocentio. Item aliorum diversi tractatus iuridici et lecturae [Ms. 7.766].
55. Repertorium ordinamenti per Joannem Roderici Hispalensem scribam pro venerabili bachallario Didaco Calderon, Febr. 1467 [Ms. 696].
56. Magistri Joannis de Deo Hispani liber I de iudicibus, arbitrii assessoribus, et alia [Ms. 243].
57. Incerti exceptiones de Summa de casibus [Ms. 866].
58. Joannis de Lignano liber de somnis, et alii tractatus iuridici [Ms. 735].
59. Rotfredi liber super iure canonico, et alii eiusdem tractatus [Ms. 1.876].
60. Mag. Joannis de Deo, Hispani sacerdotis, liber casuum Decretalium etc [Ms. 392].
61. Felineus de Florentia super I et II parte Sexti

62. Incerti auctoris de iure civili, fol. ms.
63. Baldi super feudis; ms. absque fine [Ms. 12.236].
64. Incerti auctoris iuris civilis, absque fine et principio, ms.
65. Angeli super Digesto Vetere, fol. ms. [Ms. 2.138].
66. Incerti auctoris de Censuris, 4.^o magno ms. [Ms. 449]
67. Jacobi de Belviso Lectura super usibus feudorum; fol. ms. membranac
Item Joannis Andreae super Decret.; ms., anno 1332 [Ms. 825]
68. De Imola super II Infortiati; fol. ms. absque fine [Ms. 11 506].
69. Vincentius super Decretales, fol. ms. membran. [Ms. 30]
70. Gaufridi et Pauli Collectarius super II Decretalium, ms. fol. membranac
[Ms. 257].
71. Butrio super Decretales, fol. ms. [Ms. 1.551].
72. Alfonsi de Benavento Repertorium, fol. ms. [Ms. 12 087]
73. Incerti auctoris Casus legales super Decretales; fol. ms. ant. membran
[Ms. 387].
74. Petri de Ancharanis super VI Decretalium, fol. ms. [Ms. 12 143]
75. Joannis de Deo *Cavillationes*, fol. ms., 1246 [Ms. 631].
76. Nicolai Mamestensis abbatis Glossae Clementinae, fol. ms. Item Nicolai de
Sicilia archiep. Panormitani Repetitiones, ms. [Ms. 255].
77. Ludovici Pontani *Singularia*, fol. 1475. Item incerti auctoris tractatus etc.,
ms. et alia [Ms. 12 151]
78. Petri de Ancharanis Consilia, fol. ms. ant., 1435 [Ms. 12 144].
79. Guido de Baysio Apparatus sexti lib. Decretalium, fol. ms. membran., abs-
que principio [Ms. 398].
80. Paulus [de Castro] super Clementinas, fol. ms. absque fine
81. Joannis de Imola super Decretalibus, ms. absque fine [Ms. 12 235]
82. Joannis de Imola Recollecta, 4.^o mai. ms., 1424 per Joannem de Moya a
Valentia, Bononiae studentem, absque principio [Ms. 6 375].
83. Bartoli Repetitiones, fol. ms. [Ms. 12 365].
84. Guillelmus de Mandagoto super electionibus, fol. ms. membran. [Ms. 396].
85. Baldus super 1.^a parte Digesti Veteris, fol. ms. [Ms. 2.137].
86. Guillelmi archidiaconi super VI Decretalium, fol. ms. membran. [Ms. 584]
87. Joannis Andreae Additiones ad librum Speculi Guillelmi Duranti, fol. ms.
cum altero opere ms. cui deest finis.
88. Jacobi Butrigarii super Codice, fol. membran., quem liber scripsit Angelus
de Fano [Ms. 575].
89. Jacobus [Butrigarius] super 2 Codicis et Bartolus super 3 libris; fol. ms.
[Ms. 576].
90. Incerti auctoris Lectura iuridica; fol. ms. absque principio et fine [Ms. 677?].
91. Bartholomaei de Saxoferrato Repetitiones per Antonium de Arena scriptae
anno 1424. Item alia opuscula aliorum etc.; fol. absque principio [Ms.
12 149].
92. Roffredi Beneventani de iure civili; fol. ms., deest primum folium [Ms.
826].
93. Guidon de Suzaria super Digestum; fol. ms.; deest folium in principio, in
medio et fine [Ms. 394].

94. Incerti auctoris opus iuris canonici; fol.; desunt folia in principio Item Azonis de re canonica; ms ; desunt folia circa medium [Ms. 676].
95. Nicolai Recollectae super I Decretalium; 4.º ms ; desunt in fine folia.
96. Rotlandini Aurora super contractibus; ms. 4.º mai.
97. Gofredus [Hostiensis] super titulos Decretalium; fol. ms. membran.; desunt ubique quamplurima folia [Ms. 1.148].
98. Joannes patriarcha Alexandrinus, administrator ecclesiae Tarraconensis in spiritualibus et temporalibus a Sede Apostolica deputatus in concilio Tarraconensi 4 kalend Martii anno Dni. 1329. Inc *Ad officium pertinet etc* ; 4.º mag. [Ms 737].
99. Summa de poenitentia et constitutionibus episcopatus Barchinonensis, 4.º mag. ms. et alia [Ms. 89].
100. Infortiati 1.ª et 2.ª pars; fol. ms ; deest folium in principio [Ms. 827].
101. Francisci de Aretio super 2.º Decretalium; fol. ms
102. Rotfredi Beneventani de Ordine iudiciorum; fol. ms membran [Ms 719].
103. Berengarii cardinalis Speculum iudiciale; 4.º mag ; desunt aliqua folia paulo post principium et finem; ms [Ms 693]
104. Summa Bartholina cum annotationibus; 4.º mag. ms.
105. Summa Bartholina, 4.º mag ms. [Ms. 450]
106. Incerti auctoris de vita et honestate clericorum. Item Henrici Bohic de Sponsalibus lib. IV; fol. mag. ms [Ms 581].
107. Glossa super I Digesti Veteris cum aliis opusculis; ms. 4.º mag. [Ms 9 015]
108. Incerti auctoris de Sponsalibus etc.; fol. mag ms.; deest finis [Ms. 2.144?].
109. Repertorium Decretalium; 8.º ms. membran. [Ms 478]
110. Institutiones Turolii atque Fororum; ms. 4.º membran. Ubi civitati Turolensi varia privilegia conceduntur per regem Aragonis kal Octobris 1214 etc [Ms 690].
111. Baldi Additiones super Speculo, et Abbreviationes super Innocentio IV. ms. [Ms 7 532]
112. Glossae in Constitutiones regni Siciliae per Andream de Isernia, cum aliis operibus iuridico-canonicis; fol. max. ms ; deest principium [Ms. 12.240].
113. Petri de Ancharano Repetitiones anno 1397, Bcnoniae Item Tractatus Ludi Mariani Sosi anno 1460, de nocte hora 11.ª et alia opera; ms 4.º max.
114. Incerti auctoris super Decretales; fol. max. ms [Ms 2 259]
115. Ms Commentar. in Pandectas Item Summa de libellis etc

EQUIVALENCIA DE LAS SIGNATURAS DE LOS MANUSCRITOS EN LA B N. A LOS NUMEROS DE ORDEN DE LA LISTA DE SANTO TOMAS

B N.	S. T.	B N.	S T	B. N.	S T.
17 (D.3)	= 4	582 (C 25)	= 31	2.144 (U.77)	= 108
22 (D 34)	= 16	583 (C 26)	= 12	2.145 (U.66)	= 3
28 (C.30)	= 7	584 (C 27)	= 86	2.146 (U.79)	= 32
29 (C.32)	= 17	586 (C 22)	= 8	2.207 (U 81)	= 15
30 (C.33)	= 69	631 (D.25)	= 75	2.213 (U.82)	= 21
89 (C 60)	= 99	676 (D.24)	= 94	2 259 (U.76)	= 114
167 (C.156)	= 45	677 (D.18)	= 90	2.263 (X.16)	= 37
168 (C 157)	= 47	682 (C 37)	= 34	6.375 (S.37)	= 82
200 (C 19)	= 53	690 (D 44)	= 110	7.532 (U.74)	= 111
235 (C.96)	= 52	691 (D 43)	= 46	7.535 (U.78)	= 25
243 (D 161)	= 56	693 (D 28)	= 103	7.536 (U.75)	= 27
252 (C 20)	= 11	694 (D 30)	= 39	7.537 (U.80)	= 26
255 (C.21)	= 76	695 (D.31)	= 38	7.539 (U.72)	= 48
257 (C 12)	= 70	696 (D.32)	= 55	7.766 (U 45)	= 54
387 (C.11)	= 73	698 (D 29)	= 51	8.720 (X 2)	= 20
392 C 8)	= 60	719 (D 27)	= 102	8.994 (Aa 17)	= 40
393 (C.21)	= 35	735 (C 57)	= 58	9.015 (Aa 19)	= 107
394 (D.10)	= 93	737 (C 77)	= 98	9.017 (Aa.18)	= 42
396 (C 31)	= 84	823 (D 17)	= 28	9.101 (Aa 13)	= 50
397 (C 35)	= 43	825 (D.21)	= 67	11 506 (Aa 1)	= 68
398 (C.29)	= 79	826 (D 20)	= 92	12 087 (Aa 5)	= 72
399 (C 48)	= 36	827 (D 12)	= 100	12 143 (Cc.2)	= 74
449 (C.44)	= 66	835 (D 114)	= 41	12.144 (Cc 3)	= 78
450 (C.59)	= 105	847 (D.104)	= 14	12 147 (Cc 9)	= 9
478 (C.155)	= 109	866 (C.168)	= 57	12.149 (Cc.11)	= 91
573 (D 4)	= 24	964 (D 33)	= 44	12.150 (Cc 5)	= 2
574 (D.6)	= 23	1.148 (C 18)	= 97	12.151 (Cc.10)	= 77
575 (D 8)	= 88	1 551 (U.62)	= 71	12.154 (Cc 1)	= 19
576 (D 5)	= 89	1 876 (C 37)	= 59	12.235 (Aa 2)	= 81
577 (D 7)	= 49	2.137 (U 67)	= 85	12 236 (Aa 4)	= 63
578 (C.23)	= 33	2.138 (U.83)	= 65	12 240 (Aa.6)	= 112
579 (D 15)	= 18	2.139 (U 71)	= 1	12.246 (Aa.7)	= 10
580 (D.9)	= 22	2.140 (U 63)	= 13	12 365 (Aa 3)	= 83
581 (C 24)	= 106	2.141 (U.64)	= 5		

B. LISTA DE INCUNABLES JURIDICOS PROCEDENTES DE SANTO TOMAS DE AVILA

(B. N, ms. 18.841, ff. 314-336):

1. Pauli de Castro Lectura, Ferrariae, 1480 [I/1.494].
2. Dominici de Sancto Geminiano Lectura super Decretales, 1481 [I/1.833].
3. Joannis Bertachini Repertorium iuris, 2.^a pars, Venet, 1486 [I/1.208].
4. Andreas Barbatia, Venet, 1474 [I/574].
5. Bartholi Lectura super Authenticis, 1485 [I/206].
6. Felini Sandei Lectura, 1497 [I/1.936].
7. Abbatis Panormitani Lectura super IV et V Decretalium etc [I/764].
8. Angeli de Aretio in 4 libros Institutionum, Venet, 1484 [I/1.575].
9. Baldi de Perusio Lectura, 1489 [I/1.841].
10. Petri de Ferrariis Practica iudicialis [I/1.104].
11. Consilia Abbatis Moniacensis Nicolai de Tudeschis de Sicilia, 1475 [I/667].
12. Glossa incerti super Codicem vel editio 1470 [I/1.024].
13. Bartholi Lectura, Venet, 1478 [I/1.228].
14. Nicolai de Ubaldis Tractatus, Romae 1473 regnante Sixto IV [I/1.224].
15. Barthol de Bellincinis super Abbatis et Antonii de Butrio Lectura, Postilla etc, Neapoli, 1479 [I/671].
16. Barthol de Saliceto super 9 Codicis, Venet., 1483 [I/1.574].
17. Joannis Imolensis in 2^{am} Digesti partem. [I/1.508].
18. Francisci de Accoltis de Aretio Lectura super lib. II Decretalium, 1481 [I/1.838].
19. Pauli de Castro Consiliorum 1.^a pars [I/1.495].
20. Joannis Andreae Novellae super V Decretalium, Venet, 1489 [I/1.202].
21. Summa Hostiensis super titulis Decretalium, Venet, 1480 [I/1.474].
22. Alexandri de Imola in 2^{am} partem Codicis [I/1.221].
23. Alexandri de Imola Consilia, Venet, 1476 [I/1.221].
24. Petri episcopi Brixienensis Repertorium iuris 1.^a pars ab A ad K [I/10].
25. Alexandri Imolensis super 2.^a Infortiati [I/1.486].
26. Philippi de Franchis de Perusio Lectura super Tit. de Appellationibus [I/5].
27. Angeli de Gambilionibus Aretini in Institutiones commentarium, Mediolani, 1483 [I/1.206].
28. Bartholi super 1.^a parte Codicis etc, Venet, 1476 [I/1.223].
29. Repetitiones Bartholomaei Cepollae, Romae, 1472 [I/1.233].
30. Bartholi super tribus libris Codicis [I/1.225].
31. Antonii de Alexandro super Codicem, Neapoli, 1474 [I/1.930].
32. Angelus [de Aretio] de Maleficiis, et quaedam singularia Baldi, Senis, 1487 [I/1.213].
33. Innocentius papa super Decretales, Venet., 1481 [I/211].
34. Guillelmi Durantis Speculi pars 2.^a, Patavii, 1480 [I/1.397].

35. Angeli de Aretio Maleficiorum Tractatus, Venet., 1484 [I/1 214].
36. Dominici de Sancto Geminiano Glossa super Decretales, 1476 [I/1 019]
37. Felini Sandei Lectura de officio et potestate iudicis delegati, Venet., 1493 [I/123].
38. Baldi super IV et V Codicis, 1481 [I/1 502].
39. Joannis Imolensis Commentaria in 3.^{um} Decretalium: in fine aliquod desiderat [I/1 842].
40. Casus Longi super 6.^o Decretalium, et Clementinarum compilatio in universitate Pictaviensi [I/2 305].
41. Nicolai Lectura super 3.^o Decretalium [I/763]
42. Abbatis Siculi 2.^a pars super 2.^a Decretalium, Venet., 1477 [I/761].
43. Codex cum notis Franc. Avertii
44. *Singularia* Ludovici de Roma, et Andreae de Barbatia Repetitio super Cap. Raynucii de Testamentis [I/1.783].
45. Aegidii de Bellamera Decisiones [Rotae] [I/577].
46. Francisci de Zabarellis super Clementinas Lectura, Venet., 1481 [I/115]
47. Ms. Commentar in Pandectas. Item Summa de libellia et.²⁴.
48. Baldi Lectura super 5.^o Codicis Item Alexandri de Imola Additiones in 1.^{am} partem Codicis, Venet., 1481 [I/1 229?].
49. Joannis Andreae Novella super 1.^o Decretalium, Venet., 1479 [I/1 199].
50. Abbatis Panormitani super Decretales, Venet., 1475.
51. Joannis de Platea Apparatus libri Institutionum [I/124]
52. Dominici de Sancto Geminiano Lectura prima super 6.^o Decretalium, absque fine [I/1 836].
53. Archidiaconus super Decretis, 1481 [I/207].
54. Pauli de Castro super 2.^a parte Infortiati, Ferrariae, 1480 [I/1 644].
55. Bartholomaei de Saliceto super 2.^o Codicis, Venet., 1481 [I/1 572]
56. Pauli de Castro super 7.^o Codicis, 1483 [I/1 927].
57. Sextus Decretalium et Clementinae cum glossa [I/1.932]
58. Dinus de regulis iuris, 1472 [I/1 934].
59. Francisci de Platea opus restitutionum [I/477].
60. Andreae Barbatia Rubricae de fide instrumentorum [I/356].
61. Secunda Compilatio Legum et Ordinationum regni Castellae quae a regibus Hispaniae etc. [I/192]
62. Fueros de Castilla con glosas; inc *En el nombre de Dios etc.* [I/215]
63. Compilacion de Leyes que mandaron facer D. Fernando y Dña Isabel partidas en 8 libros; inc. *Porque la justicia es muy alta virtud etc.* [I/1 339].
64. Incerti Commentarium super Institutiones.
65. Angeli de Perusio Consilia [I/1 218]
66. Joannis Bertachini prima pars Repertorii iuris, 1485 [I/1.207].
67. Nicolai Siculi Lectura 4.ⁱ libri Decretalium Item *Singularia* Ludovici Pontani [I/1.738].
68. Bernardi Casus Decretalium [I/2 306].

24. El núm 47 de la lista de Incunables debe considerarse no existente, pues se trata de un manuscrito y, como tal, figura en la lista de manuscritos bajo el núm 115.

69. La Recopilación de las Leyes y Pragmáticas hechas por los Reyes Católicos en Cortes, repartidas en 8 libros [I/1.338].
70. Ordenanzas de los Reyes Católicos: 8 libros etc., 1492 [I/2.528²].
71. Joannis de Imola super 1.^o Infortiati, 1475 [I/1.507].
72. Tercia y Cuarta Partida [I/618].
73. Findari Severi de Bartholis tractatus, sive lectura iuridica.
74. Lectura iuris antiqua.
75. Apparatus Substitutionum Dni. Petri Minoris. Item Bartholi commentarium libri minorum et alii.
76. Joannis de Turrecremata Summa, Romae, fol., anno 1489 [I/1.477]
77. Friderici de Senis Quaestiones Disputatae super Decretales, fol. [I/1 510]
78. Abbatis Siculi super Decretales, fol., Venet, 1476 [I/1.737].
79. P. Joannis Antonii de Sancto Georgio comment. super Decretal, anno 1476 [I/670²].
80. Abbatis Siculi secunda pars super Decretales, 1476 [I/1 741]
81. Pauli de Castro Consilia, 2.^a pars, 1485 [I/1.497].
82. Francisci de Zabarellis super Clementinas [I/114]
83. Guillelmi Norbot Decisiones Rotae, ant. fol. [I/757].
84. Guillelmi Durantis Speculum, 3.^a et 4.^a pars, fol. ant. 1479 [I/1.398].
85. Baldi de Perusio Lecturae Civiles, fol., 1481 [I/1.501²].
86. Pauli Castrensis Consilia, fol., 1475 [I/1.496].
87. Abbatis Siculi pars 3.^a super Decretales, fol., 1477 [I/1 742²]
88. Baldus super Digesto Novo cum op. Clausularum Vitalis de Cambanis, fol., 1478 [I/1 204].
89. Bartholi de Salicetis super 4.^o Codicis, fol. ant. [I/119].
90. Dominici de Sancto Geminiano Lectura super 6.^o Decretalium, fol., 1476 [I/1.835].
91. Dominici de Sancto Geminiano super 2.^a parte 6ⁱ Decretalium, fol., 1480 [I/1.834].
92. Bartholi Lectura super 1.^a parte Infortiati, Venet, 1477, fol. [I/1.226]
93. Baldus super 5.^o Codicis, 1481, cum add. de Imola [I/1.937²].
94. Guillelmi Durantis 1.^a pars Speculi cum add. Joannis Andreae et Baldi, fol. ant. [I/1.396].
95. Baldi Lectura super Instituta cum Repetit. Bartholom. de Saliceto, et Angeli de Perusio, fol. ant. [I/1.197].
96. Bartholus super 2.^a Infortiati, 1478 [I/1.227].
97. Ludovici Romani Consilia et Allegationes, fol. ant. [I/8].
98. Alexandri de Imola Responsa seu Consilia, fol ant. [I/1.026]
99. Justiniani Pandectae, fol. Venet., 1483 [I/1.571].
100. Pauli de Castro super Codicem, fol., 1477 [I/1 837].
101. Abbatis Siculi super 2.^o Decretalium, fol. ant. [I/759²].
102. Joannis Gaspar de Calderon Consilia, fol., 1472 [I/571].
103. Alexandri de Imola Additiones ad Baldum super Digesto Veteri, fol, Mediolani, 1481 [I/1 733].
104. Alfonsi de Montalvo Repertorium, fol, 1477 trae al fin unos versos [I/1 109].

105. Felini Sandei Tractatus de rescriptis officiorum et de Const, fol., 1489 [I/122].
106. Bartholomaei de Saliceto super toto Codice, fol. [I/118].
107. Fr. Francisci de Zabarellis super Clementinas, fol., Venet., 1481 [I/1476].
108. Guillelmus Norbot Alemannus: Novae Decisiones etc. [I/1.753].
109. Alexandri Imolensis vol III et IV Consilia, fol., 1485 [I/1.736].
110. Bartholomaei de Saliceto Lectura super toto Codice, t. 4.º [I/121].
111. Digestorum Veterum 1.ª et 2.ª pars per Nicol. Jenson Gallicum, tom. 1, fol. [I/1194].
112. Joannis Andreae Quaestiones super regulis iuris, fol, 1474. Item Lanfranchi Tractatus de arbitriis etc. [I/210].
113. Nicolai Abbatis Siculi Lectura super 5.º Decretalium, fol., Venet., 1477 [I/1.739].
114. Bartholomaei de Saliceto super 4.º et 5.º Codicis, fol., 1483 [I/1.573].
115. Petri Brixiensis Repertorium, 1480 [I/11].
116. Nicolai Abbatis 1.ª pars super 2.º Decretalium, fol, Venet., 1477 [I/760].
117. Alexandri de Imola Apostillae ad Bart. super 1.ª parte Digesti Novi, fol., 1480 [I/1.230].
118. Bartholi super Digesto Novo, fol, Venet., 1478 [I/1231].
119. Vitalis de Cambanis Tractatus de clausulis Item Johannina per Andream Siculum, Bononiae, sine anno [I/1025].
120. Oldradi de Laude Consilia per Eberardum Frannolt, 1481 [I/729].
121. Fr. Baptista de Salis ord Minorum Summa casuum conf., 4.º mai., 1488, sine loco [I/1.775].
122. S. Antonini Florentini 3.ª pars Summae, 4.º mai. absque fine [I/2338].
123. Jacobi regis Aragonum Fori, 4.º mai. sine loco et anno [I/616?].
124. Joannis Andreae Novellae super sexto Decretalium, fol, Venet., 1491 [I/1.203].
125. Alexandri de Imola Consilia, fol, Venet, 1477 [I/1.220]
126. Bartholomaei de Saliceto Lectura super sexto Codicis, fol sine loco et anno [I/120]
127. Infortiatum, fol., Venet, 1484 [I/1.570].
128. Alexandri de Imola super 1.ª parte Digesti Novi, absque loco et anno [I/1.483]
129. Alexandri Imolensis Responsa sive Consilia, Mediolani, fol., 1485 [I/1222].
130. Alexandri de Imola Consilia, fol., absque fine [I/1.232].
131. Bartholomaei de Bellincinis super Lecturas Abbatis et Antonii de Butrio Apostillae, fol., Venet., 1477 [I/1391].
132. Alexandri de Imola Lectura super 2.ª parte Digesti Novi Apostillae, fol. Mediolani, 1481 [I/1484].
133. Abbatis Siculi pars prima super 1.º Decretalium, fol., Venet, 1477 [I/758].
134. Joannis Andreae super 2.º Decretalium, Venet., 1489 [I/1200].
135. Joannis de Imola in Clementinas, fol, Venet., 1475 [I/1.506].
136. Abbatis Siculi pars tertia super 2.º Decretalium, fol, Venet, 1477 [I/762].
137. Nicolai de Ausma ord Minorum Supplementum ad Summam, quae Magistritia su Pisanella dicitur, 4.º mai. sine loco et anno [I/749].

138. Joannis de Imola super Clementinis, fol., Venet., 1480 [I/1.577].
139. Justiniani Institutiones, fol., sine loco et anno, cum glossa [I/110].
140. Incerti auctoris Repertorium iuridicum, fol., absque principio et fine [I/1.481?].
141. Incerti auctoris Repertorium iuridicum, fol. absque principio [I/1.209].
142. Justiniani Institutiones, Venet., 1477, cum glossa Baldi super Codice, absque principio et fine [I/668].
143. Joannis Andreae super 3.^o Decretalium, fol., Venet., 1489 [I/1.201].
144. Ludovici Pontani opus iuridicum, fol., absque principio et fine [I/1.480].
145. Antonii de Butrio Consilia, fol., Romae, 1472 [I/572].
146. Constitutiones Clementis papae V cum apparatu Joannis Andreae cum glossa et allegationibus Nicolai Siculi, sine loco et anno [I/117].
147. Baldi Lectura super 1.^a parte Digesti Veteris, 1476, sine loco [I/1.839].
148. Petri de Ancharano Repetitiones super 6.^o Decretalium, 4.^o mai., sine loco et anno [I/1.210?].
149. Innocentii Apparatus Decretalium, 4.^o mai.; desunt in principio aliqua folia.
150. Alfonsi de Montalvo Compilatio secunda Legum et Ordinationum regni Castellae, 4.^o magno sine loco et anno [I/612].
151. Incerti auctoris Supplementum super Decretales, Januae [I/1763].
152. S. Antonini Florentini 4.^a pars Summae, fol.; desunt in fine folia [I/2071].
153. Supplementum super Decretales, 4.^o maximo [I/1898?]
154. Joannis Petri de Papia nova Practica iuris, Nuremberg, 1482 [I/682].
155. Abbatis prima pars super 2.^o Decretalium, fol. max., Venet., 1477 [I/1740].
156. Francisci de Accoltis de Aretio Repertorium et Consilia, fol. max., Pisis, 1482 [I/669].
157. Quinta, Sexta y Setena Partidas del rey Dn. Alfonso, tom. 1, 4.^o max., Sevilla, 1491 [I/619].
158. Bartholi de Saxoferrato, Tractatus de consiliis. Item alia opuscula, fol. max., absque principio [I/209?]
159. Baldus super 1.^a parte Digesti Veteris et alia aliorum opuscula [I/1.840]
160. Baldi Repetitiones, fol. max.; deest principium et finis.
161. Primera Legum Partida, absque loco et anno [I/617?].

EQUIVALENCIA DE LAS SIGNATURAS DE LOS INCUNABLES EN LA
B. N. A LOS NUMEROS DE ORDEN DE LA LISTA DE SANTO TOMAS

B N	S. T.	B. N.	S. T.	B. N.	S. T.	B. N.	S T.				
5	=	26	682	=	154	1.225	=	30	1.575	=	8
8	=	97	729	=	120	1.226	=	92	1.577	=	138
10	=	24	749	=	137	1.227	=	96	1.644	=	54
11	=	115	757	=	83	1.228	=	13	1.733	=	103
110	=	139	758	=	133	1.229	=	48	1.734	=	22
114	=	82	759	=	101	1.230	=	117	1.736	=	109
115	=	46	760	=	116	1.231	=	118	1.737	=	78
117	=	146	761	=	42	1.232	=	130	1.738	=	67
118	=	106	762	=	136	1.233	=	29	1.739	=	113
119	=	89	763	=	41	1.338	=	69	1.740	=	155
120	=	126	764	=	7	1.339	=	63	1.741	=	80
121	=	110	1.019	=	36	1.391	=	131	1.742	=	87
122	=	105	1.024	=	12	1.396	=	94	1.753	=	108
123	=	37	1.025	=	119	1.397	=	34	1.763	=	151
124	=	51	1.026	=	98	1.398	=	84	1.775	=	121
192	=	61	1.104	=	10	1.474	=	21	1.783	=	44
206	=	5	1.109	=	104	1.476	=	107	1.833	=	2
207	=	53	1.194	=	111	1.477	=	76	1.834	=	91
209	=	158	1.197	=	95	1.480	=	144	1.835	=	90
210	=	112	1.199	=	49	1.481	=	140	1.836	=	52
211	=	33	1.200	=	134	1.483	=	128	1.837	=	100
215	=	62	1.201	=	143	1.484	=	132	1.838	=	18
356	=	60	1.202	=	20	1.486	=	25	1.839	=	147
477	=	59	1.203	=	124	1.494	=	1	1.840	=	159
571	=	102	1.204	=	88	1.495	=	19	1.841	=	9
572	=	145	1.206	=	27	1.496	=	86	1.842	=	39
574	=	4	1.207	=	66	1.497	=	81	1.898	=	153
577	=	45	1.208	=	3	1.501	=	85	1.927	=	56
612	=	150	1.209	=	141	1.502	=	38	1.930	=	31
616	=	123	1.210	=	148	1.506	=	135	1.932	=	57
617	=	161	1.213	=	32	1.507	=	71	1.934	=	58
618	=	72	1.214	=	35	1.508	=	17	1.936	=	6
619	=	157	1.218	=	65	1.510	=	77	1.937	=	93
667	=	11	1.220	=	125	1.570	=	127	2.071	=	152
668	=	142	1.221	=	23	1.571	=	99	2.305	=	40
669	=	156	1.222	=	129	1.572	=	55	2.306	=	68
670	=	79	1.223	=	28	1.573	=	114	2.338	=	122
671	=	15	1.224	=	14	1.574	=	16	2.528	=	70

APENDICE I

(B. N., ms. 691, ff. 317^r-318)

Los libros de mi el doctor A(lonso) Cota q(ue) q(ue)dan en mi casa son los sigue(n)t(e)s:

1. Istituta.
2. Codigo.
3. Digesto Viejo: tengo dos dellos.
4. Digesto Nuevo = I/1.231.
5. Esforçado.
6. P(r)imera parte del Bartulo sobre el Codigo y el Baldo sobre el I(n)noçe(n)çio.
7. Segu(n)da parte del Bartulo sobre el Codigo.
8. Primera parte del Bartulo sobre el Digesto Viejo.
9. Unas buenas Decretales.
10. Otras Decretales sin glosas.
11. El Abad antiguo.
12. Los casos del Bernaldo sobre las Decretales = I/2.306
13. El Juan Milex en el Reportorio canonico.
14. La suma del Vulgano sobre todos los titulos de las Decretales y libellos
15. La Suma de Oldrado sobre todas las accion(e)s.
16. Otro libro de la forma y orden de los juisios.
17. La tabla del Baldo muy singular glosada = ms 2 213.
18. La Pelegrina.
19. El Sexto Baldo.
20. El primero Baldo.
21. El quarto Salçeto.
22. La tercera Partida.
23. La quarta Partida
24. La setena Partida.
25. Este libro del Fuero de Leys y Ordenami(ent)os y Glosas = ms 691.
26. El sexto de las Decretales.
27. El quarto Abad.
28. El Çino muy singular.
29. Otro ordenami(ent)o entero de Alcalá [tachada la línea].
- 30-33. Otros quatro libros peq(ue)ños.
34. Otro Codigo que comp(r)ent(er)o en XVI de ag(ost)o de LXXVII años.
35. Otro libro q(ue) se llama de la Orden de los juisios y libellos fugitivos.
36. [Otro li]bro q(ue) se llama el Fuero Judgo.
37. Otro libro q(ue) se llama el Dino de Rregulis iur(is) = I/1.934.
38. [Otr]o libro q(ue) se llama p(r)imera p(ar)te del Bartulo sobre el esforçado = I/1.226.

- 39 Otro libro q(ue) se llama segu(n)da p(ar)te del Bartulo sobr(e) el Esforçado = I/1.227.
- 40 Ot(r)o D[ig]esto Viejo muy bueno, grande.
41. [Otro Di]gesto Nuevo de gra(n) volume(n) bueno [tachada la línea]
42. Ot(r)o Esforçado muy bueno rico, estoriado
43. It(em) la Suma de Ason en pargamino rrica de letra rredo(n)da, sobr(e) todo el cuerpo del dicho Azo.
44. It(em) ot(r)o volume(n) esc(r)ito en como Suma de Aso e es t(ra)tados e notas de ordenar.
45. It(em) unas mat(er)ias de gramatica e un dot(ri)nal e otros dos libros e tienelo Geronimo de la Qu(a)dra p(re)stado.
- 46 It(em) otra segu(n)da p(ar)te del Bartulo sobr(e) el Esforçado [tachado].
- 47 It(em) ot(r)o libro q(ue) se llama Acursio sobr(e) todas las leys d(e)l Co-digo los casos.
48. It(em) otro Fuero de Leys grande en pargamino glosado.
49. It(em) un Reportorio de Antonio de Butrio volume(n) grande = ms. 12.154.
50. It(em) otro libro de las Leys de Toledo fechas y t(ra)tados y libro del juego de axedr(e)s.
- 51 It(em) un volume(n) del Fuero de Leys, glosado, de la marca mayor, de molde.
52. It(em) ot(r)o libro q(ue) se llama segu(n)do Enriq(ue) = ms 578.
- 53 It(em) otro libro de la Suma por titulos del quarto d(e) las Dec(re)tal(e)s y rreportorios.
- 54 It(em) otro libro el salario en pargamino entero
- 55 It(em) otro libro q(ue) se llama Jacobo Libelador

APENDICE II

MANUSCRITOS E INCUNABLES CON EX-LIBRIS EN EL PRIMERO O EN EL ULTIMO FOLIO

Ms	258	Ms.	1.563	I/	223
	387		2.014		713
	410		3.340		1.211
	1.191		3.933		1.223
	1 199		7.533		1.227
	1.375		7.538		1.373
	1.408		9.011		1.698
	1.409		9.726		1.718
	1.410		12.144		1.745
	1.424		12.241		1.931
	1 560		12.366		

APENDICE III

INCUNABLES CON NOTA DE CONTENIDO EN PRIMER FOLIO
AÑADIDA POR OTRA MANO

I/ 10	I/1.206	I/1.501
11	1.207	1.502
110	1.208	1.503
117	1.209	1.504
123	1 225	1.738
207	1 396	1.839
577	1 397	1.840
1.026	1 495	1.841
1.197	1.496	1.927
1 204	1 497	

II

"REFEUDALIZACION" EN CASTILLA DURANTE EL SIGLO XVII: ¿UN TOPICO?

Es cierto que responder de forma coherente a la interrogación que da título a este artículo significaría previamente definir qué entendemos por feudalismo, teniendo en cuenta el carácter no unívoco del término, que, como otros, tiene un desarrollo histórico¹, para explicar después qué estructuras son las que se mantienen con intensidad, o más aún resucitar en esta centuria para que en puridad se pueda hablar de refeudalización. Bien es verdad que la limitación en extensión del trabajo no lo hacen posible, y por otra parte, el público al que va dirigido, innecesario.

Afortunadamente, al menos eso parece, todo hace indicar que se han superado los enfrentamientos más allá de lo puramente científico entre institucionalistas y partidarios del materialismo histórico a la hora de definir el constructo histórico feudalismo². Los muros sin ventanas entre aquellos que pretendían caracterizarlo desde categorías exclusivamente jurídico-políticas, y los que se empeñaban en reducirlo todo, y dimanar el resto de forma dogmática y mecanicista del desarrollo de las fuerzas productivas, las relaciones de producción, y la apropiación del excedente, da la sensación de que comienzan, favorablemente, a resquebrajarse, y que la luz comienza a comunicar ambos mundos de penumbra.

Y decimos favorablemente no porque queramos defender lo que en general no se sostiene, el eclecticismo, sino porque estamos de acuerdo en asumir que una formación económico-social es algo unitario, bien es verdad que compuesta de partes, de muy diversas

1. M. FOUCAULT, *Archéologie du Savoir*, París, 1969 (trad. cast. Siglo XXI Ed., México, 1970). Id., *Les Mots et les choses*, París, 1966 (trad. cast. Siglo XXI Ed., México, 1968).

2. Una buena puesta al día de las diferentes posturas en John E. MARTIN, *Feudalism to Capitalism. Peasant and Landlord in English agrarian development*, London, 1983, págs. 1-57.

variables, en las que aunque existiría una indudable jerarquización —no igual en todos los momentos—, la totalidad se explicaría desde todas las partes que entran en su composición³.

En estas breves páginas voy a trabajar con dos elementos que me parecen de lo más pertinente para definir el feudalismo, naturalmente sin excluir otros posibles; por una parte, la existencia del *señorío*, y por otra la fuerza de la *nobleza* como clase hegemónica —término que creo legítimo utilizar para este período—⁴, en la esfera de poder⁵. Lo segundo en el sentido weberiano de *concepción «privatizada» en el uso de la violencia militar, y en la apropiación corporativa de los medios de administración*. Así, pensamos que es necesario analizar los medios materiales del poder político, de la misma manera que los medios de producción. Estructuras políticas y económicas que no pueden ser diseccionadas de forma autónoma, sino en un grado de total simbiosis por emplear un término de la biología, o biyectivo, utilizando una conceptualización matemática.

Creemos poder defender que durante el siglo XVII, al menos en la Corona de Castilla, el desarrollo tanto cuantitativo como cualitativo del señorío es indudable, así como el incremento de la fuerza fáctica de la nobleza por lo que sería exacto hablar de refeudalización en la conceptualización que nosotros le hemos dado. A esto se sumaría la existencia de unos poderes intermedios crecientes, los municipios, que ha provocado que un excelente historiador inglés, I. A. Thompson, tal vez no muy exactamente hable para el período de «descentralización», «provincialización de poder» y «desburocratización»⁶.

3. P. VILAR, *Iniciación al vocabulario del análisis histórico*, Barcelona, 1980, págs. 67-70. Como explica REYNA PASTOR en la obra colectiva *Estructuras feudales y feudalismo en el mundo mediterráneo*, Barcelona, 1984. Una revisión del problema en IGNACIO ATIENZA HERNÁNDEZ, «El 'revival' de la feudalidad y la búsqueda de las 'entidades nacionales'». *Revista Internacional de Sociología*, julio-septiembre 1985, vol. 43, fascículo 3, págs. 529-532.

4. Su fundamentación teórica en P. VILAR, *Iniciación al vocabulario del análisis . . .*, págs. 107-141.

5. Javier GIL PUJOL, «Notas sobre el estudio del poder como nueva valoración de la historia política», *Pedralbes. Revista de Historia Moderna*, 3, 1983.

6. I. A. A. THOMPSON, *Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los Austrias, 1560-1620*, Barcelona, 1981. Nota crítica y comentario

Con este acercamiento nos alejamos de la definición de refeudalización poco factual y excesivamente «categorial» de un historiador por otra parte tan eminente como Hobsbawm que se refiere a un «capitalismo parasitario en un mundo feudal» al hablar del modelo italiano⁷, y nos acercamos a Rosario Villari cuando al analizar el caso italiano cree pertinente aclarar que la refeudalización «no se traduce únicamente en un desplazamiento más acentuado aún de capitales e iniciativas desde los sectores manufacturero y mercantil hacia la agricultura o hacia privilegiadas posiciones rentistas, sino en una especie de parálisis secular que afecta a toda la realidad humana, económica y política. Algo así como el triunfo de un mecanismo social que excluye la formación y desarrollo de cualquier fuerza tendente a actuar de forma independiente en relación a las estructuras feudales»⁸.

La existencia de una refeudalización durante el siglo XVII va a romper con el esquema unidireccional intentado aplicar a la evolución de la historia europea. Lectura sesgada puesto que más allá de una marcha hacia lo que los defensores de esta opción llaman el progreso, o lo que es sinónimo, el capitalismo, la realidad histórica es dialéctica. Es un camino de tira y afloja, de marcha y retroceso, claro que siempre relativo de acuerdo a nuestras propias convicciones que provocan la adscripción a uno u otro modelo historiográfico⁹. Esquema que se aproximaría a los de la filosofía de la ciencia más reciente, que vertiría unos preceptos epistemológicos según los cuales viviríamos en un proceso de discontinuidad social, política, cultural, etc., es decir, histórico, poniendo fin al proyecto

de las opiniones del anterior: Pablo FERNÁNDEZ ALBADALEJO, «La decadencia española, a través de los historiadores anglosajones». *Libros*, diciembre 1982, n.º 12, págs. 9-11.

7. E. HOBSBAWMN, «La crisis general de la economía europea en el siglo XVII», en *En torno a los orígenes de la revolución industrial*, Buenos Aires, 1975.

8. R. VILLARI, *La revuelta antiespañola en Nápoles*, Madrid, 1979, pág. 15. Del mismo autor: *Rebeldes y reformadores del siglo XVI al XVIII*, Barcelona, 1981. En este libro se recogen tres artículos interesantes sobre el tema.

9. J. FONTANA, *Historia. Análisis del pasado y proyecto social*, Barcelona, 1982. Ignacio ATIENZA HERNÁNDEZ, «¡Temblad, temblad, Neorrankianos y otras hierbas académicas!», *Revista Internacional de Sociología*, n.º 48, 1983, páginas 691-694.

ilustrado del orden lineal, del progreso continuo. Por supuesto que rechazar esta opción tampoco significa lo contrario, el desorden, la irregularidad, el indeterminismo, los fenómenos aleatorios ¹⁰.

Pero es hora de que después de estos preámbulos, necesarios para ver de qué coordenadas metodológicas partimos, abordemos casuística y empíricamente el problema, sin olvidar que necesariamente debe ser encuadrado en la denominada crisis del siglo XVII que tantos ríos de tinta ha hecho verter ¹¹. Crisis del XVII que afectará a la fiscalidad regaliana que ya había suspendido pagos en 1557, que arrastraría a las quiebras, especialmente de Felipe II, de 1575, 1596 y 1607 ¹², y a la introducción de un nuevo sistema impositivo, los servicios de millones, 1590, 1596, 1600, que supusieron la victoria de una fiscalidad medieval, sobre otra moderna ¹³, dando lugar a unas disfunciones constitucionales mediante la intervención del Reino ¹⁴.

Presión de la hacienda real en la que van a pesar de forma prioritaria los gastos militares, de tal manera que la guerra será en gran medida la que provoque determinados cambios en las estructuras

10. De esta forma podría entenderse la máxima «al orden por el ruido». Véase la obra de René THOM de 1972 y 1980, respectivamente: *Estabilidad estructural y morfogénesis y Modelos matemáticos de la morfogénesis*.

11. De los que ahora por pura razón de espacio seleccionamos el debate de Past and Present recogido por Trevor ASTON en *Crisis in Europe 1560-1660*, London, 1965 (trad. cast. en Alianza), Madrid, 1983. Con un comentario y puesta al día con las últimas opciones de Morineau, Wallerstein, historiadores italianos, etc., de P. FERNÁNDEZ ALBADALEJO, «Veinticinco años de debate sobre la crisis del siglo XVII», págs. 368-389). Para el modelo castellano una de las últimas aportaciones publicadas es la de Angel GARCÍA SANZ, «Auge y decadencia en España en los siglos XVI y XVII: Economía y sociedad en Castilla», *Revista de Historia Económica*, 1, 1985, págs. 11-27.

12. Felipe RUIZ MARTÍN, «Las finanzas españolas durante el reinado de Felipe II», *Cuadernos de Historia*, 2, 1968, págs. 109-173; David RINGROSE, «El desarrollo urbano y la decadencia española», *Revista de Historia Económica*, n.º 1, 1983, págs. 37-41.

13. Ignacio ATIENZA HERNÁNDEZ y Beatriz CÁRCELES DE GEA, «El gobierno político de la monarquía (1577). II La Hacienda Real. Ingresos y gastos», en el Congreso *Hernán Cortés y su tiempo*, Cáceres, 25-30 de noviembre de 1985. En prensa.

14. Pablo FERNÁNDEZ ALBADALEJO, «Monarquía, Cortes y «cuestión constitucional» en Castilla durante la Edad Moderna», *Revista de las Cortes Generales*, I, 1984, págs. 11-34.

del xvii, siguiendo la conocida polémica de Lombart (1913) y Nef (1942), matizada por Theda Scockpol en el sentido de que la historia europea se encuentra marcada por los conflictos generados entre sus formaciones políticas y aplicado al modelo castellano de la época moderna por I. A. Thompson ¹⁵.

En la búsqueda desesperada a la hora de obtener numerario la monarquía va a arbitrar una serie de soluciones, exponentes de la crisis, que a su vez son signo incuestionable de esta refeudalización. Me refiero a la *venta de títulos* y a la mal llamada venta de vasallos o *señorialización*.

La *organización social* del Antiguo Régimen se articula en torno al *estamento*. Precisamente algunos autores, entre los cuales se encuentra Artola ¹⁶, plantean una caracterización del Antiguo Régimen partiendo de esa variable jurídica de jerarquización y agrupación de los hombres, junto a la existencia de una monarquía absoluta en la cúspide. En amplia conexión con el estamento, orden o estado —términos que se repiten en la literatura del momento y por supuesto en la científica—, se encuentra la noción de privilegio. Frente al tópico de la igualdad jurídica que se consolidará con la revolución liberal-burguesa, el período anterior cristalizará unas «desigualdades estamentales», en diferentes órbitas, entre las cuales, de las más importantes, habría que mencionar las que se derivan de la práctica del derecho ¹⁷, y las fiscales, sin olvidar otras que serán comentadas más tarde que tienen que ver con la órbita del poder ¹⁸. De las diversidades ante esos supuestos surgirán los privilegiados: nobleza y clero, y los no privilegiados: Tercer Estado, definidos por exclusión ¹⁹.

15. I. A. A. THOMPSON, *Guerra y decadencia. Gobierno y*

16. «El Antiguo Régimen», en *Estudios sobre Historia de España. (Homenaje a Tuñón de Lara)*, tomo I, Madrid, 1981, págs. 149-166. *La Hacienda del Antiguo Régimen*, Madrid, 1982. Introducción: págs. 9-11. *La economía española al final del Antiguo Régimen. IV. Instituciones*, Madrid, 1982. Introducción. Especialmente págs. XV-XVI.

17. B. CLAVERO, «Derecho y privilegio», *Materiales*, 4, 1977, págs. 19-32.

18. M. ARTOLA, *Los orígenes de la España Contemporánea*, tomo I, Madrid, 1975, págs. 13-15; J. A. MARAVALL, *Poder, honor y élites en el siglo XVII*, Madrid, 1979, págs. 11 y ss.

19. El mejor conocedor de los privilegiados dentro de la historiografía hispana continúa siendo el Profesor Domínguez Ortiz. Su obra clásica *Las cla-*

Los estamentos privilegiados guardarán unas *solidaridades horizontales*, que partirán de su común pertenencia al grupo y de su unidad de intereses. Pero naturalmente también unas *diferencias verticales* que se derivan de distinciones jerárquicas y disparidades personales dentro de la misma clase. Estas disimilitudes, por referirnos ahora sólo a la nobleza, tienen su origen en la *forma de adquisición* de ésta, y también en el *rango* ocupado dentro de ella. La primera no por no establecer diferencias de privilegios legales, sino por pertenecer al ámbito de lo psicológico y la costumbre, de la aceptación social, deja de ser importante, si partimos de que por definición la nobleza viene de nacimiento. Ser *nobilis*, es ser *ortus parentibus nobilibus, ex nobili genere, ex nobili prosapia*. El vehículo material de la nobleza según los teóricos, es la sangre, y precisamente por eso sistemáticamente se ha distinguido en los textos genealógicos entre nobleza de sangre y la de privilegio.

Las formas de acceso a la segunda son muy variadas, y entre ellas se encontraría su compra al monarca en épocas de apuros financieros —no olvidemos que es el rey el único que puede conceder la nobleza de privilegio—, y será lo que ocurra en el siglo XVII. Período de inflación de honores como ha sido definido por Stone que provocará una serie de conflictos, bastante enconados a veces, entre la nobleza tradicional y los recién llegados.

Por poner sólo algunos ejemplos, de aproximadamente cien grandes al término del quinientos, se pasó a una cifra triplicada en 1700. Sólo Carlos II creó 12 vizcondes, 80 condes y 236 marqueses, mientras que 26 títulos obtuvieron la dignidad de grandes²⁰. Cifra que haría palidecer la ya abultada de Felipe III, que titulaba a 46 nuevos marqueses y 32 condes, sólo en la Corona de Castilla (ver anexo I). Naturalmente, que esta práctica no fue única de la

ses privilegiadas en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1973, es la síntesis más elaborada sobre este tema. Una breve aportación: Ignacio ATIENZA HERNÁNDEZ, «La Nobleza en el Antiguo Régimen: Clase dominante, grupo dirigente», *Estudios de Historia Social*, núms. 36-37.

²⁰ A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, *La sociedad española del siglo XVII*, tomo I; H. KAMEN, *La España de Carlos II*, Barcelona, 1981, págs. 410 y ss. Una cuantificación e interpretación del fenómeno en I. A. A. THOMPSON, «The Purchase of Nobility in Castile, 1552-1700», *The Journal of European Economic History*, vol. 2, n.º 2, 1979, págs. 313-360. En la misma revista, en 1982, James Amelang respondía al anterior, criticando sus datos, págs. 219-226.

Monarquía hispana, sino un fenómeno generalizado en Europa occidental, por ejemplo de los últimos Estuardo de Inglaterra, con Jacobo I y su favorito, el duque de Buckingham a la cabeza ²¹.

Los títulos durante el siglo XVII llegan a adquirir un valor de cambio. Así, en 1623, la Corona por un decreto concedía al Convento de Guadalupe un título de marqués de Italia, para que pudiera comerciar con él ²². No sabemos si efectivamente se pudieron llevar a cabo los trabajos a los que se iba a dedicar el producto de la venta del título. Desde luego el asunto estaba difícil si extrapolamos que al final del reinado de Carlos II, en 1700, el Convento de Santa Juana de la Cruz informaba que disponía de un título por el que se había calculado que obtendría 22.000 ducados, pero que «habiendo hecho muchas diligencias no han podido hallar aún los 7.000, teniendo por imposible llegue a la cantidad señalada» ²³. En definitiva se había producido una desvalorización de los títulos, como producto de su «generosa» concesión por la monarquía, especialmente en el siglo XVII como muestra el siguiente cuadro ²⁴:

Año	Número de titulados	Rata de crecimiento anual
1520	60	—
1554	68	0,24
1581	100	1,19
1597	124	1,5
1631	241	3,44
1700	533	4,2

21. Roger LOCKYER, *Buckingham. The life and Political Career of George Villiers first Duke of Buckingham, 1592-1628*, London, 1981; Lynda LEVY PECK, *Northampton Patronage and Policy at the Court of James I*, London, 1982; G. F. LYTLE and Stephen ORGEL, eds., *Patronage in the Renaissance*, Princeton, 1981. Especialmente los artículos de L. LEVY, «Court patronage and Government policy: The Jacobean dilemma», págs. 27 y ss., y el de R. HARDING, «Corruption and the moral boundaries of patronage in the Renaissance», págs. 47 y ss.

22. British Museum. Eggerton, 335, fol. 455.

23. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Consejos, leg. 7259 (consulta de 28-VI-1700).

24. Desgraciadamente los datos son únicamente aproximados, ya que no existe, que sepamos, ningún documento que recoja año por año los títulos concedidos. Es necesario utilizar fuentes indirectas, con los problemas de fia-

Al establecer el honor de la grandeza Carlos I, existían alrededor de 60 titulados²⁵, doblando su número a lo largo del siglo XVI²⁶, aunque con un crecimiento anual tímido en comparación con lo que ocurre en el siglo XVII encontrándonos con la circunstancia de que en el intervalo 1597-1631, de nuevo se ha doblado el número de titulados²⁷. Berni y Catalá plantean la creación de 66 nuevos títulos durante el reinado de Felipe III y la de 184 durante el reinado de Felipe IV²⁸, si bien la cifra es poco probable, ya que un documento más fiable nos muestra la aparición de 133 títulos nuevos entre 1621 y 1635²⁹. De ahí que podamos hablar de una «bastardización» de la nobleza, que preocupó a la Cámara de Castilla, quien advirtió al rey en 1647 del hecho de que muchos pretendientes no podían probar pureza de sangre, ni poseían cualidades personales para la guerra —misión por definición de la nobleza—, y que se estaban concediendo títulos sin investigaciones adecuadas³⁰. Desde luego se tuvo más en cuenta riqueza que «supuesta pureza». Familias de

bilidad que ello trae consigo. Ignacio ATIENZA HERNÁNDEZ, «Rentas y Nobleza en los siglos XVI-XVII: Un análisis cuantitativo», *Revista Internacional de Sociología*, número monográfico dedicado a las élites en la España moderna y contemporánea: Estudios de Sociología Histórica, en prensa.

25. Fernand BRAUDEL, *La Méditerranée et le Monde Méditerranéen à l'époque de Philippe II*, París, 1949, pág. 638 (trad. cast. en F.C.E.); DOMÍNGUEZ ORTIZ, *Las clases privilegiadas* da la cifra para el mismo año de 20 grandes y 35 títulos. Marie Claude GERBET ha estudiado el número de hidalgos y caballeros a principios del siglo XVI, «La population noble dans le Royaume de Castille vers 1500. La repartition géographique de ses différentes composantes», *Anales de Historia Antigua y Medieval*, Universidad de Buenos Aires, 1977-79, págs. 78-99.

26. La cifra de 1581 es también de Braudel. La de 1554 aparece en A.H.N. Consejos Suprimidos, 4430. Cámara de Castilla, 1646, n.º 120, 12 julio 1646. La de 1597 difiere un poco de las presentadas por Domínguez Ortiz, ya que él dice que a finales del reinado de Felipe II la cifra asciende a un centenar: 18 duques, 38 marqueses y 43 condes.

27. A.G.S. G.A. 1035. «Papel del Consejo de Castilla», 1631.

28. *Creación, Antigüedad y Privilegios de los Títulos de Castilla*, Madrid, 1763. Domínguez Ortiz mantiene que Felipe III creó 20 marqueses y 25 condes; Felipe IV, 67 marqueses y 25 condes, y Carlos II, 5 vizcondados, 78 condados y 209 marquesados.

29. B.N. 11077, ff. 55-58. «Títulos de Duques, Marqueses, Condes y Bizcondes que ha dado el Rey Don Phelippe quarto . hasta 1635».

30. A.H.N. Consejos Suprimidos 4430, Cámara de Castilla, n.º 34, 1647, 12, 4, 1647.

judíos, como el financiero Manuel de Paz obtuvieron el título de Conde después de pagar un millón y medio de maravedíes. Algo semejante ocurrió con los Cortizo, etc.³¹.

La nobleza titulada acentuó su proceso de marginación de la función primigenia que tenía asignada, la guerra^{31a}. Se iniciaba así una apetencia de cargos públicos, un hacerse notar en la Corte, es decir, *la participación directa en el poder*. El hecho comienza a ser cuantitativamente importante a partir de Felipe III, cuando la alta y mediana nobleza titulada definitivamente se hace cortesana, siguiendo las pautas de conducta de sus compañeros europeos como ha señalado Norbert Elias³². Su mala situación económica, fruto de una pésima administración patrimonial, y de una inadecuación entre gastos e ingresos producto de una manera importante de un consumo suntuario excesivo que provocó su endeudamiento mediante el recurso al censo consignativo³³, no fue obstáculo para que durante el reinado citado se acelerara su éxodo hacia la Corte, donde se construyeron mansiones. El asunto no es anecdótico sino que marca un proceso político importante como en su día marcó Tomás y Valiente en relación con el valimiento³⁴. Su interés era poder influir en el rey bien directamente, bien de forma institucionalizada a través de los Consejos. De éstos, especialmente el de Guerra y el de Estado se llenó de Grandes, influyendo en gran medida en la política exterior hispana. De las 40 personas que ocuparon lugares en el Consejo de Estado durante Felipe III, 28 fueron alta nobleza titulada³⁵. Influencia que no dejó de disminuir durante su sucesor:

31. Citado por Julio CARO BAROJA, *La sociedad criptojudía en la Corte de Felipe IV*, Madrid, 1963, pág. 58.

31a. Ignacio ATIENZA HERNÁNDEZ, «Sobre la conservación de la caballería y la nobleza del reino: En torno a la formación de cofradías de hidalgos en 1572», en *Théories, pratiques et représentations de la hidalguia dans le monde hispanique moderne*, Burdeos, 1987, en prensa.

32. NORBERT ELIAS, *The Court Society*, Oxford, 1983 (trad. cast. en el F.C.E.).

33. Ignacio ATIENZA HERNÁNDEZ, «La 'quiebra' de la nobleza castellana en el siglo XVII. Autoridad real y poder señorial: El secuestro de los bienes de la Casa de Osuna», *Hispania*, 156, 1984, págs. 49-81.

34. *Los validos en la Monarquía española del siglo XVII*, Madrid, 1982, págs. 117-122, especialmente

35. J. M. BATISTA E ROCA. Prólogo a Helmut G. KOENIGSBERGER, *La práctica del Imperio*, Madrid, 1975, pág. 34. Un estudio monográfico es el de Feliciano

Años	Grandes	Títulos	Otros	Total	% Nobleza titulada
1623	2	8	7	17	58,8
1643	4	6	1	11	90
1649	6	5	1	12	91,6

*Miembros del Consejo de Estado durante el reinado de Felipe IV*³⁶.

Tan apetecidos como los cargos del Consejo de Estado eran los de virreyes, especialmente los italianos, que aseguraban un fuerte poder y prestigio, y a veces importantes ingresos, más o menos ortodoxos³⁷. Once de los veintiocho miembros nobles del Consejo de Estado durante el período 1595-1621 habían sido virreyes, tres embajadores y diez comandantes del ejército como igualmente señala Batista i Roca. Su influencia en estos menesteres no disminuyó durante el siglo XVII.

Oficios	Grandes	Títulos	Otros	Total	% Nobleza titulada
Virrey de Nápoles	7	2	6	15	60
Id. Sicilia	7	3	7	17	58,8
Gobernador de Milán	4	8	6	18	66,6

BARRIOS, *El Consejo de Estado de la Monarquía española: 1521-1812*, Madrid, 1984.

36. J. H. ELLIOT, *The Revolt of the catalans*, Cambridge, 1963 (trad. cast. en Siglo XXI); F. BERTAUT, *Journal du Voyage D'Espagne*, París, 1669 GIL GONZÁLEZ DE AVILA, *Teatro de las Grandezas de la villa de Madrid Corte de los Reyes Católicos de España*, Madrid, 1623. Los datos han sido trabajados por Ch. J. JAGO, *Aristocracy, war and Finance in Castile, 1621-1665: The titled nobility and the house of Béjar during the reign of Philip IV*. Tesis doctoral leída en el Trinity College de Cambridge en 1969. Agradezco al autor su consulta. Pág. 32.

37. En 1682 Cornaro, embajador veneciano, afirmaba que el palacio que se estaba edificando el duque de Osuna en Madrid era el producto de su estancia en Milán; las riquezas del palacio del marqués de Astorga de los cargos de sus antepasados en Nápoles, etc. Citado por DOMÍNGUEZ ORTIZ, *Las clases privilegiadas*, págs. 115-116.

*Puestos de representación en Italia*³⁸.

Así, la nobleza titulada durante el siglo XVII ocupa posiciones, importantes en el aparato institucional de la monarquía, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la milicia y los asuntos exteriores. El reclutamiento para otros Consejos, y por consiguiente otros menesteres era distinto, Hacienda, Indias, Castilla, etc. Su formación necesariamente tenía que ser más técnica. De ahí que la mayoría fueran letrados, especialistas en leyes³⁹, procedentes de Colegios Mayores, a diferencia de la nobleza titulada que solía disponer de sus propios tutores particulares, o que recibían instrucción en los centros fundados recientemente por los Jesuitas, como el Colegio Imperial de Madrid para nobles, regentado por los seguidores de Ignacio de Loyola, y abierto bajo el auspicio de Olivares en 1625. Su función, hasta su clausura en pleno régimen liberal, a comienzos del siglo XIX, ya que rompía el principio de igualdad no permitiendo la entrada a los no nobles, fue la de formar jóvenes de una manera muy específica, para que cumplieran las misiones diplomáticas y militares que les correspondían por nacimiento⁴⁰: lenguas, tanto muertas como modernas, danza, deportes, artes militares, historia y geografía⁴¹.

No sólo su formación era distinta a la de los otros consejeros, también muchas veces sus intereses. En la situación de quiebra económica a la que llega la nobleza durante el siglo XVII, gran parte de las personas a las que debían dinero era a estos consejeros, o

38. BATISTA I ROCA, op. cit., págs. 32-41. *Cambridge Modern History*, vol. XIII, Cambridge, 1911. Tabla 137 y 138.

39. J. M. PERLOSOU, *Les «letrados, juristas» castillans sous Philippe III*, Poitiers, 1980; J. FAYARD, *Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746)*, Madrid, 1982; R. L. KAGAN, *Universidad y sociedad en la España Moderna*, Madrid, 1981, especialmente págs. 130-147.

40. I. A. A. THOMPSON, *Guerra y decaencia. Gobierno y administración en la España de los Austrias, 1560-1620*, Barcelona, 1981, cap. V. El papel de la nobleza, págs. 181-197. Del mismo autor: «The Armada and administrative reform: the Spanish Council of war in the reign of Philip II», *English Historical Review*, 335, octubre 1967, págs. 698-725.

41. J. VARELA, *Modo de educación en la España de la Contrarreforma*, Madrid, 1983, págs. 58-126; José SIMÓN DÍAZ, *Historia del Colegio Imperial de Madrid*, tomos I y II, Madrid, 1951.

bien al grupo social al que pertenecían. De ahí que sus conflictos fueran importantes y numerosos ya que sus motivaciones no eran generalmente coincidentes.

Esa crisis de la nobleza en el siglo xvii fue la que la llevó a arrimarse a su rey en busca de favores. El monarca no gozaba de una situación económica muy saneada, y su ayuda a los titulados llegaba con cuentagotas. A la inversa, muchas veces él mismo les «saqueó»⁴². Eran como dos ciegos que juntos buscaran un mismo camino. Su mutuo apoyo a veces iba en perjuicio de otros grupos sociales, como los concejos, cuyos bienes fueron en gran medida vampirizados y repartidos⁴³. Además, la voluntad real era tornadiza y aunque hubiera deseado satisfacer y ayudar a todos sus privilegiados no le hubiera sido posible. De ahí que se formaran camarillas, y grupos nobiliarios que quisieran acaparar y monopolizar al monarca. Los resultados eran los conflictos internobiliarios, la subida y caída en desgracia.

Esta ocupación de cargos públicos por parte de la nobleza de ninguna de las maneras significó un menoscabo del denominado absolutismo que tantos ríos de tinta ha provocado. Precisamente, fomentó la dependencia hacia la monarquía, ya que era el rey el que podía aligerar la pesada carga de la crisis, merced a una polí-

42. En 1639 el duque de Osuna sirvió al rey con 250 soldados. A.H.N. Osuna, leg. 15, n.º 20. Valor de las lanzas años 1738, 1739 y 1843. Idem, leg. 23, n.º 10. Conmutación del pago de lanzas a cambio de armar 20 soldados. Idem, leg. 15, n.º 25 (1639). Pago de lanzas y media annata, 1748. Idem, leg. 24, n.º 5.

43. A cambio de servicios militares el rey concedía a veces la facultad de romper tierras sobre patrimonio municipal. Por ejemplo al duque de Osuna, en 1639, en septiembre, 3 068 fanegas; en diciembre, 600, etc. Idem, leg. 15, n.º 19. Otras veces los perjudicados eran sus acreedores. En el siglo xvii como tantas otras casas, el patrimonio de Osuna estaba confiscado o secuestrado, en terminología de la época, lo que quiere decir que los bienes de los Estados nobiliarios no eran administrados por sus titulares, sino por algún delegado de la Corona, o por una junta de acreedores. Así las cosas, Felipe IV facultaba a Juan Téllez Girón para que tomara de los bienes concursados 5.000 ducados «para los gastos de la coronelia con que se avia encargado de servir a S M.». Idem, leg. 15, n.º 21. En 1641 otra vez para salario de 400 infantes. Idem, leg. 15, n.º 23. Naturalmente esto gravaba sobre los prestamistas. Obviamente no eran sus iguales, nobles, sino en general instituciones eclesiásticas, cofradías y burguesía urbana.

tica de ayudas, de concesiones, de puestos públicos, etc. Era necesario estar a bien con el rey⁴⁴.

A pesar del tópico, España no era diferente. Como en otras partes de Europa, la Corte era un lugar de competición política donde se libraban batallas por el poder y donde la relación patrón/cliente preñaba y conformaba el juego buscando el favor regio, máximo patrón⁴⁵. Se trataba de superar el conflicto entre varias facciones como ocurría en la Inglaterra isabelina, o la España filipina mediante la creación de una facción única. Era lo que intentaba Olivares⁴⁶, pretendiendo gobernar por hechuras, por validos del valido, dejando que otros patronos o facciones fueran apartados del poder. Claro que esta vía institucional no pudo triunfar debido entre otras muchas circunstancias, como el fracaso de la política catalana y portuguesa, a la presión de los grandes y titulados a los que se pretendía apartar del poder⁴⁷.

En conclusión, el no crecimiento proporcionado de las rentas y patrimonio nobiliario (ver anexo II), con la prácticamente cuadruplicación de los precios durante el siglo XVII proporcionaría una de las explicaciones posibles para entender su apetencia de cargos y la participación en el poder político. Situación económica crítica que se había hecho especialmente conflictiva en torno a 1580. Un año antes, de los 20.000 ducados de limosna distribuidos por el limos-

44. Todavía es necesario acudir a Jules GOUNON-LOUBENS, *Essais sur le administration de la Castille aux XVII^e siècle*, París, 1860.

45. G. R. ELTON, «Tudor Government· The point of contact The Court», en *Studies in Tudor and Stuart Politics and Government. Papers and Reviews*, Cambridge University Press, 1983; G. F. LYTLE and Stephen ORGEL, eds., *Patronage in the Renaissance*, Princeton University Press, 1981; Roger LOCKYER, *Buckingham The life and Political Career of George Villiers, first Duke of Buckingham, 1592-1628*, London, 1981; Lynda LEVY PECK, *Northampton. Patronage and Policy at the Court of James I*, London, 1977. Un estado de la cuestión en Julio A. PARDOS y Antonio FEROS, «Todos los hombres del valido», *Libros* (1984), n.º 33-34, págs. 3-7.

46. John H. ELLIOTT, *Richelieu y Olivares*, Barcelona, 1984.

47. Gregorio MARAÑÓN, *El Conde-Duque de Olivares*, Madrid, 1985, págs 74-80; Beatriz CÁRCELES DE GEA, *Valoraciones y controversias en el conflicto político de la España de 1621 a 1643*. Memoria de Licenciatura leída en la Universidad Autónoma de Madrid, julio de 1983. Inédita. Un resumen en «Oposición al gobierno de Olivares: El poder del Reino como alternativa político-ideológica». En Prensa. *Revista Internacional de Sociología*.

nero mayor de S.M. una gran parte iban dedicados a socorrer a la nobleza. Por ello, no se le pedían cuentas de su reparto «para que algunas personas de onrra no se recaten de pedirla viendo que despues han de dar escriptos en papeles», por lo que la forma del reparto era según «la orden que se tiene de repartir la es que el dicho limosnero tiene una persona muy aprovada y diligente el qual va a las casas donde se embia a pedir la limosna y viendo la necesidad y calidad de la persona le socorre»⁴⁸.

Pero señalemos ahora, brevemente por razones de espacio, otra de las manifestaciones de ese proceso de refeudalización: el *incremento de la señorialización*. La situación se había iniciado de forma importante durante los reinados de Carlos V y Felipe II⁴⁹. Gran parte de los bienes —señoríos entre otros—, de órdenes militares, vendidos por Carlos V y Felipe II, y de Iglesias, Mitras y Monasterios por este último, fueron comprados por banqueros y absentistas de la hacienda regia, especialmente genoveses: los Centurión, Spinola, Comellini y Cataño, que eclipsaron a los alemanes durante Felipe II, al igual que por Consejeros del monarca, y secretarios de despacho. Así consiguen su patrimonio solariego Cobos, Eraso de Gaspar Ramírez de Vargas, Secretario del Consejo Real y de las Cortes de 1535, el tesorero Melchor de Herrera, nombrado marqués de Auñón, etc.

La incidencia de este fenómeno alcanzó su techo en el siglo XVII, cuando una coyuntura crítica provocó una serie de desastres hacendísticos en la Monarquía, lo que unido a su política belicista en un intento desesperado de mantener el Imperio, la llevó a enajenar gran parte de territorios de realengo, creando obviamente islotes de poder señorial, y oficios que fomentaría el desarrollo y afian-

48. «Salarios que el Rey de España da en su Casa Real, Consejos y Chancillerías y Audiencias y Inquisición y guarda de su persona». British Library. Harley, 6.275. Más información en B. CÁRCELES DE GEA e I. ATIENZA HERNÁNDEZ, «El gobierno político de la monarquía (1577). I. Instituciones y Casa Real». Congreso «Hernán Cortés y su tiempo», Cáceres, 25-30 noviembre de 1985. En prensa.

49. S. DE MOXÓ, «Las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XVI», *Anuario de Historia del Derecho español*, 1961, págs. 327-361; J. CEPEDA ADÁN, «Desamortización de tierras de las órdenes militares en el reinado de Carlos V», *Hispania*, n.º 146, 1980.

zamiento de unas oligarquías municipales⁵⁰, generando un empaticiamiento urbano⁵¹.

Precisamente una de las formas donde más claramente se detecta el proceso de refeudalización es en uno de los elementos fundamentales del dominio nobiliario el que dimanaba del *ejercicio de la jurisdicción*, debido a la existencia del señorío por el que se producía una «privatización» de funciones públicas, y con ella de actividades de tipo gubernativo y judicial, naturalmente en el marco de unidad de funciones⁵².

La agrupación de diferentes señoríos, Estado señorial o Estado nobiliario si lleva agregado un título, se nos presenta como una *unidad «jurídico-política-administrativa»*, insertada en otra entidad mayor —la Casa—. El Estado señorial es un *centro de poder*, en el sentido weberiano, puesto que desde allí se dan *órdenes concretas*, con una gran probabilidad de que sean *obedecidas* por un determinado número de hombres⁵³. Poder, por otra parte, subordinado a instancias superiores. En este caso a la Corona que es la depo-

50. Entre otros trabajos se pueden consultar: Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, «Ventas y exenciones de lugares durante el reinado de Felipe IV», *Anuario de historia del derecho español*, tomo XXXIV, 1964, págs. 163-207. Del mismo autor: «Ventas de tierras y oficios públicos en la España de los Austrias», *Troisième Conférence internationale d'Histoire Economique*, Munich, 1965. En la misma obra el trabajo de Felipe RUIZ MARTÍN: «El fisco y la economía de Castilla en los siglos XVI y XVII» Francisco TOMÁS Y VALIENTE, «Las ventas de oficios de regidores y la formación de oligarquías urbanas en Castilla (siglos XVII y XVIII)», *Historia. Instituciones. Documentos*, n.º 2, págs. 525-547. Del mismo autor: «Ventas de oficios públicos en Castilla durante los siglos XVII y XVIII», en la obra *Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen*, Madrid, 1982, págs. 151-177. Una visión general en «La Hacienda Real», por Alvaro CASTILLO PINTADO y Juan Ignacio GUTIÉRREZ NIETO, en *La España de Felipe IV. El Gobierno de la Monarquía. La crisis de 1640 y el fracaso de la hegemonía europea*, tomo XXV de la Historia de España fundada por Ramón Menéndez Pidal y dirigida por José M.º Jover Zamora, Madrid, 1982, págs. 215-332.

51. El concepto en Ives BAREL, *La ciudad medieval. Sistema social - sistema urbano*, Madrid, 1981, págs. 73-141.

52. Véase al particular el debate entre A. GALLEGO ANABITARTE, «Administración y jueces: gubernativo y contencioso .», *Revista general de legislación y jurisprudencia*, 23, 1971, págs. 235-248, y E. GARCÍA DE ENTERRÍA, «La formación histórica del principio de autotutela de la Administración», *Moneda y Crédito*, 128, 1974, págs. 58-87.

53. Max WEBER, *Economía y sociedad. Los tipos de poder.* .

sitaria de la soberanía^{53a}. Monarquía que, a pesar de ser una aliada de su nobleza, a veces se enfrentará a ella cuando los intereses de ambas aparezcan como antagónicos. Poder también, definido por la capacidad de *apropiación y/o gestión del excedente y de ciertos bienes* —ríos, montes, bosques, etc.—, por parte del señor, excluyendo el resto de la comunidad de su uso.

Poder canalizado y desarrollado a través de ciertas instituciones y personas: vía judicial, reglamentística más que legislativa, las ordenanzas, ideológicas, mediante el derecho de patronato ejercido en la enseñanza y en la iglesia, y el control y designación de oficiales que controlan el orden público, encarcelan, vigilan y defienden los intereses del señor.

Por todo ello, pensamos que es legítima la adjetivación y concepto, *coacción extraeconómica*, para referirnos a la actuación de los señores en la Corona de Castilla del Antiguo Régimen. Existen agujeros negros de poder, «subterráneos», a veces hasta haciendo caso omiso de mandatos y normativa judicial y legal del rey, que deben ser estudiados y conocidos. A partir de aquí se hace necesario estudiar los Estados señoriales desde una óptica de *microfísica del poder*⁵⁴, para lo que como ha señalado insistente y acertadamente el profesor González Alonso, individualizar, enumerar y describir las facultades de los señores, así como explicar de qué modo las ejercieron^{54a}. Por supuesto que un Estado señorial no debe caracterizarse y estudiarse como un islote, sino integrarse en instituciones más amplias: administración regia, municipios, corporaciones e Iglesia, fundamentalmente, determinando sus múltiples interacciones.

53a. IGNACIO ATIENZA HERNÁNDEZ, *Aristocracia, poder y propiedad en la España moderna. La Casa de Osuna (siglos XV-XIX)*, Madrid, Siglo XXI, 1987, en prensa, especialmente capítulo 3: El Estado de Osuna. El señorío.

54. Somos conscientes de la deuda metodológica que hemos contraído con Michel FOUCAULT y su «Genealogía del Poder». Especialmente con sus obras: *Histoire de la Folie à l'Age Classique* (trad. cast. F.C.E., México, 1964); *Archéologie du Savoir*, París, 1969 (trad. cast. Siglo XXI, México, 1970); *Surveiller et Punir. Naissance de la Prison*, París, 1975 (trad. cast. Siglo XXI, México, 1977); *A verdade e as Formas Jurídicas*, Río de Janeiro, 1978 (trad. cast. Gedisa, Barcelona, 1980); *Microfísica del Poder*, Madrid, 1978, y *Diálogo sobre el Poder*, Madrid, 1981.

54a. *Aristocracia, poder y riqueza*, capítulo 4, Corona y señorío.

La situación de crisis económica de la nobleza castellana durante el siglo xvii la llevó a arbitrar una serie de soluciones de las que ya hemos planteado su acercamiento al poder, pero también a una serie de actuaciones como la de hipotecar propiedades vinculadas en mayorazgo, retrasar el pago a sus acreedores con la aquiescencia de la Corona⁵⁵, vender oficios concejiles a semejanza de lo que hacía la monarquía⁵⁶, etc.

Pero lo que ahora nos importa es señalar cómo esta situación de penuria fue de la mano de una *intensificación del poder del señor*, como ha demostrado Jago⁵⁷, y creo que yo mismo en mi tesis doctoral dirigida por el Profesor Artola⁵⁸.

De un tema tan extenso sólo podemos señalar ahora algunas generalidades como que se producen unas sistemáticas usurpaciones por parte del señor de baldíos y comunales⁵⁹, así como una mayor presión de actuaciones de su justicia en algunos casos no acorde a derecho⁶⁰ sobre todo en lo que concierne a la defensa de sus «intereses privativos» como el pago de deudas⁶¹ o la defensa

55. Ignacio ATIENZA HERNÁNDEZ, «La 'quiebra' de la nobleza castellana »; Charles JAGO, «The Influence of Debt on the Relations Between crown and Aristocracy in Seventeenth century Castile», en *The Economic History Review*, n.º 2, 1973, págs. 60-90.

56. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.). Osuna, leg. 11, n.º 7 (1598-1599); íd., leg. 3509, Arrendamiento, cuentas y ventas de oficios en Arahal (1592-1687); íd., leg. 33, n.º 3; leg. 2047; leg. 1511; leg. 98, n.º 15 leg. 67, n.º 15 (1638); leg. 15, n.º 24, 28 y 29, leg. 66, n.º 2 (1645) .

57. Ch. JAGO, «The 'crisis' of the Aristocracy in Seventeenth Century Castile», en *Past and Present*, 84, 1979, págs. 60-90 (trad. cast. en J. H. ELLIOT, ed., *Poder y sociedad en la España de los Austrias*, Barcelona, 1982, págs. 248-286).

58. *Una casa nobiliaria: Osuna (1450-1900)*, Universidad Autónoma de Madrid. Abril 1985.

59. A.H.N. Osuna, leg. 15, n.º 19 (1639); leg. 15, n.º 21 (1635); leg. 15, n.º 23 (1641)

60. Por ejemplo a la provisión de la Chancillería de Granada que ordenaba «que las Justicias de Arahal, Marchena y otros lugares, de señorío, guarden la Real Pragmatica sobre que a los labradores no se les prenda ni moleste por lo que debiesen, ni se les apremie para pagar el trigo que se les había prestado en especie». A.H.N. Osuna, leg. 60, n.º 21 (1648).

61. El mismo monarca emitía cédulas dirigidas a las justicias para que fueran especialmente duros con los arrendadores de rentas de los señores, en sentido inverso a lo enunciado en la cita 60, y con sus deudores: A.H.N. Osuna, leg. 15, n.º 23 (1641). Y hasta permitía que fueran los oficiales señoriales los

de sus bosques, como cuando sus vasallos protestan porque «ha tomado —el duque— parte del término de Osuna y lo ha juntado con el bosque que tiene en Puebla de Cazalla y prohíbe la caza»⁶². O se quejan de que llega al uso de la fuerza para imponer monopolios no contemplados por la ley⁶³:

«estanca los *hornos de pan* no dejando que particulares tengan hornos ni en las propias casas. . (idem) *molinos de aceite* (no deja que los tenga ningún vecino). . (Idem las *tenerías*) . antes de la cozambre que traen los vecinos de fuera parte curtida, les haze pagar nuevo curtimiento como si se curtiese en la dicha villa».

Lo que se uniría a ciertas imposiciones del señor en el tratamiento de la uva:

«hace meter la uva por una puerta —se supone que para controlar el pago del diezmo, pesada, etc.—, teniendo que rodear mucho por tener las viñas en partes y en pagos que pierden la mitad de los caminos que avian de hazer, por razon de lo mucho que rodean».

O la usurpación de la utilización de ciertos bienes como los rastrojos:

«siendo . de la villa suyos propios el Conde ha tomado la mitad y hace que le pagen 70.000 maravedis anuales».

Estas y otras protestas de los vasallos contra sus señores son relativamente frecuentes durante el siglo XVII lo que es prueba palpable de esa intensificación de los lazos feudales que defendemos.

Y no son más numerosas, porque a pesar de la clara supeditación de la autoridad señorial a la Corona al menos desde el siglo XV⁶⁴ en dos elementos clave —legislación real de obligado cumplimiento en todos los territorios tanto señoriales como de realengo y derecho de apelación a tribunales del monarca a las sentencias

que sentenciaran este tipo de conflictos en primera instancia. A.H.N. Osuna, leg. 19, n.º 7 (1708); leg. 19, n.º 10 (1709).

62. A.H.N. Osuna, leg. 9, n.º 13. Prohibición de cazar o talar en la dehesa de Alcalá propiedad del duque de Osuna, permitiéndole el rey que ponga un guarda que prenda a los que entren «sin licencia de s.e. o Gobernadores y la justicia ordinaria los pene y sentencie». A.H.N. Osuna, leg. 16, n.º 20 (1661).

63. A.H.N. Osuna, leg. 9, n.º 13 (1661).

64. Ignacio ATIENZA HERNÁNDEZ, «El poder real en el siglo XV: lectura crítica de los documentos de donación de villas y lugares. La formación de los Estados de Osuna», *Revista Internacional de Sociología*, 48, 1983, págs 557-591.

de instituciones señoriales—, los señores en sus reglamentos, a través de las ordenanzas⁶⁵ llegan a hacer caso omiso de tal legislación general. Por otra parte lo largo y costoso de la práctica de la justicia en el Antiguo Régimen⁶⁶ daba lugar a que las apelaciones se limitaran y redujeran a colectivos —concejos, monasterios, universidades, etc.—, o a individuos a los que se suponía un cierto estatus social, hidalgos generalmente, por el control de la mitad de oficios, o también titulados⁶⁷. Otro freno a estas apelaciones resultaba de las sentencias estadísticamente muy sesgadas y favorables a los intereses ducales⁶⁸, o que cuando no era así en segunda suplicación —puesto que la primera era atributo del poder señorial—, en Audiencias o Chancillerías, el señor apelara repetidas veces en caso de sentencia en contra hasta llegar al Consejo agotando económicamente a sus contrincantes⁶⁹.

Por otra parte era obvio que la Corona protegía en términos estructurales, dejando al margen ahora las pequeñas y poco importantes fisuras que pudieran producirse, a sus vasallos principales, la nobleza, y especialmente en momentos en los que podían tener problemas⁷⁰. Su posición ante las denuncias de los prestamistas de los aristócratas no deja lugar a dudas, impone la inhibición de los tribunales ordinarios, Audiencias y Chancillerías, llevando el asunto al Consejo, reduciendo la tasa de interés a su favor. Es verdad que en ocasiones se produce la confiscación de los bienes y señoríos de los titulados, pero la situación a la larga les favorece. No pierden el ejercicio de la jurisdicción, y en una situación de

65. Entre otras: A.H.N. Osuna, leg. 60, n.º 10; 82, n.º 3; 93, n.º 11; 94¹; 95, n.º 7; 102, n.º 3 .

66. FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE, *El derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVI-XVII-XVIII)*, Madrid, 1969; RICHARD L. KAGAN, «Pleitos y poder real. La Chancillería de Valladolid (1500-1700)», *Cuadernos de Investigación histórica*, 2, 1978, págs. 291-316; *íd.*, *Lawsuits and litigants in Castile (1500-1700)*, The University of North Carolina Press, 1981; MARÍA PAZ ALONSO, *El proceso penal en Castilla (siglos XIII-XVIII)*, Salamanca, 1982.

67. A.H.N. Osuna, leg. 94¹ (1638); leg. 67²; 84, n.º 2 (1607); 29, n.º 13 15, n.º 3 (1617-1634) 103².

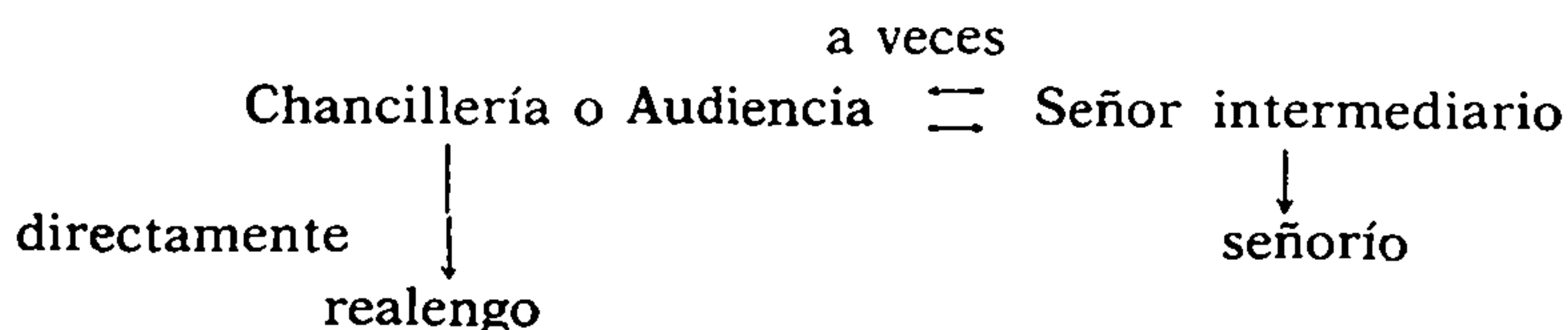
68. Por ejemplo esto aparece claro en el A.H.N. Osuna, leg. 9, n.º 13.

69. A.H.N. Osuna, leg. 16, n.º 9 (1653-1655); leg. 22, n.º 10⁴; leg. 83, n.º 6 (1579); 7 (1580); 8 (1595); 9 (1601) .

70. IGNACIO ATIENZA HERNÁNDEZ, «La 'quiebra' de la nobleza en el siglo XVII...».

falta de liquidez les garantizan unos ingresos anuales suficientemente importantes.

No cabe duda de que la monarquía había arbitrado unos mecanismos de control institucional: visitas y residencias no sólo en realengo sino también en señorío⁷¹. ¿Pero con qué grado de eficacia? En primer lugar, como ha señalado el Profesor González Alonso, ni los juicios de residencia, ni las visitas penetran en territorios señoriales antes de la segunda mitad del siglo XVI⁷². Pero por si esto fuera poco, durante el siglo XVII en pleno incremento de las relaciones señoriales el monarca suele delegar la realización de ambas figuras de control a los titulares de señorío que inspeccionan a los oficiales, instituciones, etc.⁷³; existiendo, eso sí, la posibilidad de acceder a las Chancillerías en el caso de no estar de acuerdo con las sentencias. De esta manera se va cortocircuitando sucesivamente el mecanismo institucional y directo de vigilancia por parte del rey: Residencia/Visita: Audiencia/Chancillería → territorios tanto de realengo como de señorío, y comienza a diferenciarse la situación en señorío donde la acción comienza a ejercerse por los señores que en sólo algunas ocasiones tienen que dar cuenta a instituciones reales:



71. Una puesta al día del problema en B. GONZÁLEZ ALONSO, «Control y responsabilidad de los oficiales reales: notas en torno a una pesquisa del siglo XVIII», en *Sobre la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen*, Madrid, 1981.

72. B. GONZÁLEZ ALONSO, «Notas sobre las relaciones del Estado con la administración señorial en la Castilla Moderna», en el *Anuario de Historia del Derecho español*, 1983, pág. 387.

73. A.H.N. Osuna, leg. 18, n.º 1; leg. 10, n.º 2; leg. 17, n.º 12 y 19a-c. Archivo de la Real Chancillería de Granada, Cabina 508, leg. 205, pieza 7 y Sala 3.ª, leg. 985, pieza 3.

Desarrollo de visitas y/o residencias en el siglo XVII

Más aún, se van a poner una serie de trabas «legales» para que se pueda llegar por parte de «residenciados» no de acuerdo con el señor a la justicia real. Por ejemplo, la Casa de Osuna en 1696 protestaba ante Carlos II por lo que consideraba un excesivo control de sus residencias por parte de la Chancillería de Granada que deseaba intervenir y aceptaba todas y cada una de las apelaciones sin discriminación alguna, por lo que en boca de su representante: «en lo qual seguía al Duque grave y notorio perjuicio»⁷⁴.

La respuesta del monarca era contundente respetando los intereses ducales, y para ello emitía una Real Cédula el 16 de febrero en la que se concluía que:

«ahora ni de aqui adelante no se pidan, ni lleven a essa chancilleria —por Granada—, las residencias que se tomaren en las vias y lugares de que va fecha mencion pertenecientes al dicho duque de Osuna, sino en los casos de haver quexa formal de parte, o que el Nro Fiscal exprese los agravios que se hayan hecho y entonzes se pedira por compulsa en lo que toque a los cargos que comprehendiere la quexa, o de que se haian expresado agravios, y no otra alguna»⁷⁵.

Pienso que las cosas están claras. En unos momentos de crisis financiera para la Corona y también de la nobleza titular de señoríos, ésta se va a enquistar y cerrar sobre sí misma, y de ello es prueba palpable desde un punto de vista de la historia de las mentalidades la complicación y alambicación de sus ceremonias, tratamientos, etc., su sentido de la fiesta barroca distanciada y en muchos casos separada del resto de los grupos sociales, etc.⁷⁶.

74. A.H.N. Osuna, leg. 18², n.º 8.

75. Id.

76. Como botón de muestra puede consultarse: Biblioteca Nacional (B.N.) manuscrito (ms.) 6494, fol. 62: «Tratamiento a los títulos». Academia de la Historia: F-11 (9-419), fols. 64 y ss.: «La ordenanza en la Capilla Real». British Museum. ms. Eg. 332, f. 297. «Copia de consulta, en que responde el Consejo de Castilla a una orden, que embio su Mag^d sobre el punto de tratamiento de cortesías». N. ELIAS, *La sociedad de Corte*. ; Pilar PEDRAZA, *Barroco efimero en Valencia*, Valencia, 1982; L. CLARE, *La quitaine, la course de baque et le jeu des tetes*, París, 1983, en el que se analizan los juegos ecuestres cortesanos. Con unos códigos refinados para uso de la nobleza. A.H.N. Osuna, leg 1537 sobre fiesta de toros, B N Raros 31633

Por ello, se van a consolidar unas relaciones ontológicamente necesarias rey/nobleza, de carácter simbiótico, articuladas en el eje patrón/clientes, cristalizadas en lo que podemos denominar relaciones de autoridad bien avenidas.

El rey aparece como el depositario de la soberanía, absoluto y desligado del derecho, mediante fórmulas como la siguiente: «An Princeps Sit legibus solutus», u otras semejantes, o incluyendo en los documentos legales cláusulas como *ex certa scientia*, *motu proprio*, o *plenitudo potestatis* por las que se marcaba el carácter suspensivo o revocable de cualquier precepto que contradijera la nueva normativa, etc..., por lo que el rey podía imponer su voluntad non obstante aliena lege, haciendo uso de su potestas absolutas. Esto es evidente para nosotros, como también es verdad que a cambio de «vampirizar» a su nobleza a través de concesiones «graciosas y voluntarias» como la de armar a soldados, otorgar donativos, etc., les dejaba hacer en sus señoríos y permitía situaciones como la ocupación de baldíos y comunales, el que controlaran los Concejos y en definitiva, la utilización de sus atribuciones jurisdiccionales para defender, mantener e incrementar sus privilegios como hemos intentado defender en base a documentación de archivo ya citada.

Precisamente esta situación, incrementada en el siglo xvii da lugar a que se pueda hablar en puridad de refeudalización y que se haya mantenido una polémica historiográfica sobre la oportunidad de utilizar el concepto de Estado hasta las revoluciones liberales burguesas, y aplicar el término formaciones políticas preestatales para caracterizar el modelo político del Antiguo Régimen ⁷⁷.

77. B. CLAVERO, «Institución política y derecho: Acerca del concepto historiográfico de 'Estado Moderno'», en *Revista de Estudios Políticos*, 19, 1981, págs. 43-57; *íd.*, «Señoríos y hacienda a finales del Antiguo Régimen en Castilla», *Moneda y Crédito*, 135, 1975. Carlos MARTÍNEZ SHAW, «Sobre el feudalismo tardío en España: algunas acotaciones a Bartolomé Clavero», *En Teoría*, 4, 1980, págs. 163-186; Pablo FERNÁNDEZ ALBADALEJO, «La transición política y la instauración del absolutismo», *Zona abierta*, 1984, 30, págs. 63-75; B. GONZÁLEZ ALONSO, *Sobre el Estado y la Administración*; MARAVALL, *Estado moderno y mentalidad social. Siglo XV a XVI*, Madrid, 1972; F. TOMÁS Y VALIENTE, «El gobierno de la monarquía y la administración de los reinos en la España del siglo xvii», en *La España de Felipe IV*, Madrid, 1982, págs. 30-43. La bibliografía en este sentido es tan amplia que no puedo ser más exhaustivo, me remito

En relación con este fenómeno de reseñorialización, o de forma más amplia, refeudalización, uno de los problemas que actualmente preocupan a los modernistas es conocer qué direcciones jurisdiccionales adoptan los procesos migratorios durante el Antiguo Régimen, y más específicamente en el siglo XVII, con las posibles combinaciones realengo/señorío.

La verdad es que honestamente, el estado actual de la investigación no permite dar respuestas concluyentes. Más aún, no parece haberlas. En primer lugar habría que establecer unas diferencias zonales. Por ejemplo, entre la Corona de Castilla y la de Aragón. En esta última la presión de los señores era fuerte, así como su fuerza jurisdiccional sancionada más que por el derecho, por la costumbre. Señores que prohibían y castigaban los intentos de pasar a realengo⁷⁸.

Distinta es la situación en Castilla. Aquí, y especialmente en Andalucía, los señores habían intentado repoblar sus territorios por lo que durante los siglos XV y XVI habían concedido una serie de privilegios otorgando exenciones fiscales —liberación de ciertas cargas— y penales —no encarcelamiento ante diferentes posibles delitos cometidos—, o repartiendo a los nuevos pobladores tierras del señor⁷⁹, lo que había originado un trasvase de población de realengo hacia señorío⁸⁰. Naturalmente que existen excepciones, y Valentina Fernández Vargas ha documentado que al menos en León existió un movimiento migratorio de habitantes de señorío hacia América, que obviamente no contó con el beneplácito de sus titulares que pusieron todo tipo de trabas para que esto ocurriera, por lo que cuando comenzó el Padre Las Casas su reclutamiento, los

al artículo excelente de Salustiano DE DIOS, «Sobre la génesis y los caracteres del estado absolutista en Castilla», *Studia Historica*, III, 3, 1985, págs. 11-45.

78. Gregorio COLÁS LATORRE y José Antonio SALAS AUSENS, *Aragón en el siglo XVI. Alteraciones sociales y conflictos políticos*, Zaragoza, 1982.

79. A.H.N. Osuna, leg. 3497. Un extracto del documento se publicó en el «Boletín de la Real Academia de la Historia» por Juan Moreno de Guerra y Alonso en 1913, LXII, págs. 418 y ss. A.H.N. Osuna, leg. 1, n.º 12; leg. 93, n.º 11; leg. 61, n.º 6; leg. 5, n.º 3.

80. Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ, *La repoblación de la zona de Sevilla durante el siglo XIV. Estudio y documentación*, Sevilla, 1975; Antonio COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, «Nuevas poblaciones del siglo XV en el Reino de Sevilla», *Cuadernos de Historia. Anexos de la Revista Hispania*, 7, 1977, págs. 283-336.

habitantes de Berlanga, cuyo señor era el Condestable, se inscribieron a escondidas, no porque buscaran en la aventura un incremento de sus bienes, sino porque deseaban una mayor libertad:

«teniendo la villa 200 vezinos se inscribieron mas de los 70 dellos, y para se inscribir entraron en Cabildo secretamente, por miedo del Condestable, (y algunos decían) señor, cada uno de nosotros no quiere ir a las Indias por falta que tenga aca, porque cada uno tenemos 400.000 maravedis de hacienda y aun mas, sino vamos por dejar a nuestros hijos en tierra libre y real»⁸¹.

Argumento de búsqueda de libertad que se repetirá en el movimiento de las Comunidades cuando los habitantes de Dueñas justifiquen su participación:

«porque son de jurisdiccion del Conde de Buendía, y los que son de jurisdicción real, en comparación con los demás, son tenidos por mas libres»⁸².

Naturalmente que se podría considerar como una forma de legitimación ideologizante y por lo tanto enmascaradora de la realidad. Ideología imaginaria como decía Duby. La verdad es que los trabajos anteriormente citados, otros⁸³, y mi misma tesis doctoral detectan un incremento de población importante en señoríos castellanos durante los siglos XV y XVI que no pueden explicarse por su puro crecimiento vegetativo, sino como producto de movimientos migratorios.

Aumento poblacional que igualmente se comprueba en islotes

81. Fray Bartolomé DE LAS CASAS, *Historia de las Indias*, citado por Valentina FERNÁNDEZ VARGAS, «El control señorial en España y la emigración a las Indias. Una aproximación al tema», separata del tomo II de *América y la España del siglo XVI*, Madrid, C.S.I.C. Instituto «Gonzalo Fernández de Oviedo», 1983, pág. 35.

82. J. MALDONADO, *La revolución comunera*, Madrid, Ed. del Centro, 1975, pág. 124. Citado en «El control señorial », pág. 35. Un acercamiento a las posibles conexiones. Guerra de las comunidades-movimiento antiseñorial en Juan Ignacio GUTIÉRREZ NIETO, *Las comunidades como movimiento antiseñorial*, Barcelona, 1973.

83. Valentina FERNÁNDEZ VARGAS, «Población urbana y población rural en León en el siglo XVI», *La Ciudad Hispánica*, Editorial de la Universidad Complutense, Madrid, 1985, págs 617-623.

señoriales durante el siglo XVIII⁸⁴. Lo que suceda en el XVII está por descubrir, si bien nada permite verificar que la curva cambie de signo. El modelo estudiado por nosotros, los señoríos de la Casa de Osuna, apunta hacia esta dirección. Es verdad que se incrementaron las rentas y la presión de los señores en este proceso de refeudalización descrito, pero también es cierto que la fiscalidad regaliana en la otra jurisdicción se hizo insoportable en relación con su benignidad hasta entrado el reinado de Felipe II⁸⁵.

Preguntas más que respuestas que necesitan una contestación oportuna partiendo de estudios modélicos y regionales que establezcan similitudes y diferencias.

IGNACIO ATIENZA HERNÁNDEZ
Departamento de Historia Moderna
Universidad Autónoma de Madrid

84. Juan Manuel GUIADO LÓPEZ, «La propiedad de la tierra y su jurisdicción en el Reino de Granada hacia 1750. Un ensayo de cuantificación de la magnitud del régimen señorial», *Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX*, U.C.M., 1984, págs. 599-612; Valentina FERNÁNDEZ VARGAS, Juan LLANERAS LEAL y otros, «Despoblados y nuevas poblaciones en Andalucía durante el Antiguo Régimen. Hipótesis y líneas de investigación», *Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Moderna (siglo XVIII)*, tomo I, Córdoba, 1978, páginas 173-177.

85. Ignacio ATIENZA HERNÁNDEZ y Beatriz CÁRCELES DE GEA, «El gobierno político de la monarquía (1577). II. La Hacienda Real ».

ANEXO I

CREACION DE TITULOS DURANTE EL REINADO DE FELIPE III
LINAJES Y RENTAS

A) MARQUESES

Título	Linaje	Renta 1617	Renta 1620
Laguna	Cerda	10	2 (sin bienes libres)
Malagón	Pardo y Tabera	—	30
Cea	Sandoval. ASIMILADO AL DUCADO DE LERMA		
Malpica	Ribera	30	30
Coriana	Dabila y Mejía	—	12
Fuentes	Guzmán	12	10
Jarandilla	Toledo. INCORPORADO AL CONDADO DE OROPESA		
Orellana	Fonseca y Figueroa	10	12
Caracena	Carrillo, Pacheco y Toledo	12	16
Guadalcazar	Córdoba	10	20
Povar	Avila y Guzmán	12	12
Valle de Zarato	Acuña	12	11
Belmonte	Rojas y Sandoval	—	20
Floresdavila	Zúñiga	6	10
Hinojosa	Guzmán y Mendoza	8	25
Salinas	Velasco	16	20
Toral	Guzmán	—	2
Elineda	Silva	—	4

Título	Linaje	Renta 1617	Renta 1620
Siete Iglesias	Calderón y Vargas. RETIRADO POR VIA JUDICIAL a Rodrigo de Calderón		
Viso	INCORPORADO AL MARQUESADO DE STA. CRUZ		
Montalbán	INCORPORADO AL MARQUESADO DE PRIEGO		
BEDMAR	Cueva y Mendoza	—	12
Valderrábano	Enríquez de Almansa	—	30
Villar	Requesenes y Zúñiga	—	40
Celada	Cardona y Aguilar	8	6
San Román	INCORPORADO AL MARQUESADO DE VELADA		
Valdefuentes	Sandi	—	5
Villamayor	Pacheco y Córdoba	—	14
Jabalquinto	Benavides	—	12
Jodar	Carvajal	—	10
Gelves	Portugal	—	15
Baidcs	Zúñiga	—	8
Belmonte	Cárdenas y Manrique	—	12
Heliche	Guzmán el Bueno	6	—
Lisala	Gómez de Lisón	6	—
Villamilar	Sandoval	10	—
Aldeanueva	Fonseca	13	—
Fuentes	Fuentes y Guzmán	12	—
Pozuelo	Sandoval	10	—
Oropesa	Enrique de Borja	24	—
Leriana	Avila	14	—
Armunia	Córdoba	14	—
Terranova	Mazaladrón de Ribera	14	—
Avila	Lafoz	12	—
Castelrodrigo	Mora	30	—
Cadrete	Almendares	—	—
Camudio	Guzmán	—	—

B) CONDES

Título	Línea	Renta 1620
Caracena	Carrillo de Toledo. CAMBIA A MARQUES	
Los Arcos	Laso de la Vega	20
Fuentidueña	Luna	16
Villalonso	Ulloa	8
Grajal	Vega	8
Villa Mediana	Tasse y Peralta	12
Torrejón	Carvajal	6
Villamor	Albarado	12
Casa Rubios	Chacón	8
Villaberde	Guzmán	4
Peñaranda	Bracamonte y Pacheco	16
Aramajona	Idiaquez y Mújica (incluido en el ducado de Villarreal)	
Ayala y Salvatierra	Fonseca	20
Salazar	Velasco	12
Castrillo	Delgadillo y Abellaneda	4
Cantillana	Vicentelo	20
Ampudia	Sandoval. UNIDO A CASA LERMA	
Saltes	Silva	4
Oliva	Vargas	8
Fuente el Cauco	Deca	10
Mora	Rojas y Guevara	8
Salvatierra	Ayala, Sotomayor y Sarmiento	9
Montijo	Portocarnero. UNIDO AL MARQUESADO DE VALDERRABANO	
Triviana	Guevara	30
Torre	Sandoval y Ribera	8

Título	Linaje	Renta 1620
Gondomar	Sarmiento, Acuña, Ribadavia y Mendoza	3
Mejorada	Padilla, Cerda y Mendoza	16
Villalba	Ayala	3
Mondova	Portocarnero	10
Bentosa	Sandoval	2
Revilla	Velasco	4
Peñaflor	Villacis	14

NOTA.—Las rentas se expresan en miles de ducados.

FUENTE: Pérez Carrillo, *Diálogo de las dos virtudes cardinales*.

1617: B.N. ms. 6.494.

1620: B.N. ms. 1.254.

ANEXO II

RENTAS ANUALES DE LOS DUQUES SIGLOS XVI-XVII

(En miles de ducados)

Títulos	(I) 1520	(II) 1539	(III) 1577	(IV) 1580	(V) 1597	(VI) 1610	(VII) 1615	(VIII) 1616	(IX) 1617	(X) 1620	(XI) 1630	(XII) (1)	(XIII) (2)	Totales
Alba	30	50	60	100	120	70	90	90	90	120	100	90	100	1 110
Alburquerque	20	25	50	100	50	50	50	50	50	50	50	40	50	635
Alcalá de los Gazules	—	30	100	100	100	90	100	100	100	100	80	50	80	1 030
Arcos	30	25	70	80	80	90	80	80	70	80	50	50	50	835
Béjar	24	40	50	75	80	90	75	75	90	80	70	70	70	889
Cea	—	—	—	—	—	—	11	—	80	40	—	—	40	171
Escalona	—	60	82	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	1 132
Feria	—	—	30	40	75	40	65	65	56	70	50	40	50	581
Frías	50	60	—	70	60	70	90	90	70	80	80	70	70	860
Infantado	30	60	100	120	120	100	100	100	90	120	100	100	120	1 260
Lerma	—	50	—	—	—	60	150	150	84	24	340	60	180	1 098
Maqueda	—	—	40	40	50	50	50	50	50	60	90	50	90	620
Medina de Rioseco	32	50	100	120	130	100	150	150	150	130	120	120	140	1 492
Medina Sidonia	50	55	150	200	170	200	160	160	160	170	300	140	200	2 115
Medinaceli	24	30	28	50	60	50	55	55	50	80	44	46	40	612
Nájera	16	39	50	40	50	56	60	60	50	50	—	40	—	502
Osuna	22	20	112	100	150	130	140	140	140	150	140	100	150	1 494
Pastrana	—	—	32	90	80	80	70	60	70	80	40	50	60	712

III

DE MAIORATUS NATIVITATE ET NOBILITATE CONCERTATIO

*A José Martínez Gijón, a cuyo mérito
debióse el tema y la exigencia de mi
tesis.*

En su artículo *Sobre nobleza, señoríos y mayorazgos* del anterior Anuario, estima José Luis Bermejo que mi tesis acerca de su tercer capítulo urgentemente necesita «un repaso a fondo». Estoy conforme, mas me temo que no por sus razones.

Todo su capítulo tercero se dedica a dicha revisión, aun anunciándola superficial: «La obra está pidiendo un repaso a fondo, que por supuesto no vamos a hacer aquí»; nadie ni nada le obligaba, ni a la crítica ni mucho menos a su contención. De agradecer la una, de sentir la otra, el debate en todo caso se debe.

Se detiene Bermejo especialmente en la cuestión de los orígenes o del más concreto momento de aparición del mayorazgo en Castilla, considerando que cambian substancialmente las cosas por anticiparlo un par de décadas. Está en lo cierto, respecto a la significación del cambio, mas no tanto, me sigue pareciendo, en lo que toca a su procedencia. Un desplazamiento de pocos años sería importante, pues llevaría este registro de nacimiento a una época anterior a la guerra civil de la segunda mitad del XIV a la que significué en este capítulo de la aparición del mayorazgo y a la que mayor importancia aún hoy concedo en la historia más general del derecho castellano. La fuerza de Bermejo es documental: aporta datos de mayorazgos de mediados del XIV, incluida toda una fundación.

Antes de entrarse en datos conviene revisar la lógica, o repararse en la petición de principio que ambos cometemos: la fijación del origen depende de la definición de la institución, distinta en uno y otro. Definía por mi parte el mayorazgo como régimen patrimonial, por su grado especialmente riguroso de vinculación que llevaba a extremos como el de la eliminación de concesiones enfiteúticas o el de la inconfiscabilidad de los bienes; lo define en cambio Bermejo por su régimen de sucesión, o por una vinculación más funcional al orden de primogenitura. La datación, antes que del dato, depende en efecto de la definición: su mayorazgo resulta evidentemente anterior al mío. La cuestión entonces es, antes que de documentación, de autoridad: ¿quién la tiene para definir el mayorazgo?

Antes que nosotros, la jurisprudencia de la época; a la luz de mi propio estudio, parece entonces que la balanza se inclina hacia la posición de Bermejo: la mayorazguística presentaba la institución como orden de sucesión, derivando el régimen patrimonial; el propio Bermejo lo registra, como la retorsión a la que entonces me vi obligado («Clavero ha llegado a la conclusión de que los clásicos tratadistas en la materia no supieron captar bien el significado del mayorazgo al anteponer los aspectos sucesorios a los tocantes a la propiedad»), pero dándome en este punto a su modo curiosamente la razón («semejante operación de inversión deductiva no hubiera tenido nada de particular, acostumbrados como nos tienen los juristas, de ayer y de hoy, a tales tipos de operaciones mentales»). No lo debiera; aquí Clavero se equivocaba, u obraba al menos con precipitación.

El estudio de Clavero se encerró demasiado en la mayorazguística, con sus supuestos apologéticos entre los que tal inversión se encontraba. Hubiera ya convenido una atención más abierta a la misma jurisprudencia. Baste un ejemplo, ya por sus características tanto de ambición enciclopédica como de apego a la práctica: el que nos ofrece a finales del XVII el *Theatrum veritatis et iustitiae* del cardenal de Luca, de cuyas mismas noticias podrá inferirse que el mayorazgo castellano especialmente se definía por peculiaridades de orden patrimonial.

Entre el conjunto de las primogenituras más comunes, el mayorazgo de Castilla realmente se singulariza en una obra como la de Giambattista de Luca por el grado muy estricto de su vinculación patrimonial: «illa amplia prohibitionem quam Hispani supponunt in illis maioratibus» que se extiende incluso a la alienación temporal, de concesiones agrarias, y que llega a una inembargabilidad que provoca verdaderos fraudes de acreedores (10, 170); más todavía le singulariza que este régimen dominical se extienda a fundaciones sobre bienes indiferentes o no señoriales (10, 121).

En el mismo capítulo sucesorio, cuestiones más bien dominicales diferenciarían al mayorazgo castellano, como la posesión que se dice de tenuta o como su régimen de compatibilidades. Por dicho remedio posesorio, se le concedía al primogénito una «fundata intentio» que le situaba en la posición de mayor ventaja procesal frente a pretensiones de cualquier otra índole, con su efecto de atracción de bienes al vínculo (10, 13). De otros medios más específicos de acumulación patrimonial por el mayorazgo, como el de dicho régimen de compatibilidades, menos noticia tenía el Cardenal, ya por la fecha más tardía de su tratadística especial; llegándole, su sorpresa se traduce en dura crítica (dicho mismo discurso 13 del libro décimo). Le extrañaría su peculiar lógica, o

su escolástica como dice, de conversión de una ley de incompatibilidad en una jurisprudencia de compatibilidades.

Tales cosas caracterizaban al mayorazgo frente a una institución más común, o europea si puede decirse, de primogenitura. Clavero sólo atisbó este terreno más abierto, al considerar por ejemplo el tratado de nobleza y primogenitura de André Tiraqueau, pero Bermejo desde un inicio lo clausura con sus definiciones más literarias, con su inversión de la filología: «gentilhombre» represte mundo. Y es éste un terreno que ya pudiera interesar para linaje, al que servirían las primogenituras. Ya mal entramos en este mundo. Y en éste un terreno que ya pudiera interesar para el mismo problema de los orígenes, para la determinación del momento de disociación entre primogenitura común de definición sucesoria y mayorazgo particular de definición patrimonial.

El estudio de Clavero ya se resiente de la deficiencia de este capítulo. El término de mayorazgo aparecería ciertamente en romance castellano sin especial significación: era la misma primogenitura que iba más generalmente imponiéndose en la sucesión de nobles y reyes; como tal se aceptaba por la jurisprudencia pese a no encontrarse en sus textos de primera autoridad, no sólo en los del *ius civile* naturalmente, sino tampoco en los de las *consuetudines feudorum* de derecho lombardo que también vinieron a componer el *Corpus*. Ya faltaba texto para la consideración de la materia, cuyo primer tratamiento jurisprudencial sufriría.

Tampoco es que se la ignorase, encontrándose el sucedáneo de algún capítulo del *Corpus Iuris Canonici* donde tratarla los comentaristas (así, Decretales 3, 34, 6, sobre dispensa de voto de un príncipe húngaro) y viniendo, por los mismos imperativos de la práctica, a la consideración de la literatura consiliarista. De este material ahora deduzco que, en el *ius commune* de los siglos XIV y XV, la sucesión por primogenitura con su afectación de patrimonio está como costumbre aceptada con carácter general respecto a reino y a nobleza y, para allí donde su derecho propio lo estableciere mediante dicha vía consuetudinaria o por ley o estatuto particulares, también respecto a bienes y derechos de dependencia feudal. Nada que extrañar, ni que significar, si esto aparece, como lo hace, en Castilla.

El mayorazgo todavía inespecífico, con sus mismas raíces de costumbres feudales, entra en dicho cuadro pacíficamente, sin suscitar problemas especiales ni significarse más allá del léxico; entran todos los casos aportados por Bermejo, que lo son de dependencia feudal, ampliándose la concesión de señorío por el rey a la facultad de «faser mayorazgo» o sucederse por línea de primogenitura con su afectación patrimonial. No hay aquí momento original de institución alguna; el mismo mayorazgo, sin necesi-

dad de fundación, ya se había introducido en la sucesión del reino y de una nobleza vieja, con su misma doble vertiente de conservación de linaje en todo caso y, eventualmente, de supeditación feudal para bienes concedidos con derechos hereditarios.

Las mismas fundaciones ya se multiplicarían tras la guerra civil por la propia ruptura de tracto en dicha clase feudal; también tras ella, comenzarían a introducirse aquellas peculiaridades o aquel especial rigor de la vinculación que determinará un régimen patrimonial propio, quebrándose la misma dependencia feudal más inmediata de las mercedes regias o imponiéndose más generalmente dicha otra función feudal de reforzamiento del linaje. Las peculiaridades del mayorazgo castellano ya en parte nacerían por superarse esta ruptura de tracto con las primogenituras más tradicionales. Hay aquí todo un proceso que puede especialmente iluminarse por la investigación más documental que ya desarrollan los medievalistas y en la que Bermejo abunda, si no se sigue así descuidando la debida distinción de supuestos. Y hay cosas; Ladero se ha ocupado del linaje al que interesa el *consilium* que ahora diremos de Paolo di Castro; otros han entrado en el estudio de lo que justamente llaman mayorazgos *arcaicos*, como los de Bermejo.

Los orígenes del mayorazgo ya los retrajo Clavero frente a la idea más común de que existiera desde el siglo XIII; la desmontó mediante comprobaciones documentales que Bermejo expresamente aprueba. Ambos tal vez se exceden; dicha historia resultaba exagerada, mas no por ello debiera tan precipitadamente liquidarse; podría guardar otras significaciones. Se trataba en particular del caso de un mayorazgo sevillano que venía desde Sempere considerándose como primero y original; el mayorazgo sería de patria hispalense; luego he visto que una ocurrencia análoga había corrido por el mismo *ius commune*.

En la literatura consiliarista que trata de primogenitura, he localizado ahora dos *consilia* que versan sobre mayorazgos ya formados; no creo que existan más: el *consilium* 164 de Paolo di Castro y el 62 de Ludovico Bolognini. Ambos dictaminan mayorazgos sevillanos, confundiéndose incluso el último con la existencia de un «Regnum Hispalense» cuya constitución serviría de modelo a la del mayorazgo. Comprendo ahora que en tratados europeos de primogenitura, como el de Tiraqueau, pueda luego decirse que mayorazgo es término que usan «Hispani et praesertim Hispalenses». Sevilla también se destacaba por otras latitudes como foco de mayorazgos.

Juegan por supuesto casualidades, pues no otra cosa lo es que sólo mayorazgos sevillanos llegasen a la consideración de los jurisprudentes en esta fase consiliarista todavía fundacional del *ius*

commune. Casualidad sobre exageración, he aquí en todo caso un indicio de que Sevilla significa algo; puede que el mayorazgo castellano tenga una patria no estrictamente castellana. En la guerra de la segunda mitad del XIV, pereció el derecho del reino de Castilla, con sus propias costumbres feudales; los orígenes del nuevo derecho, con su particular institución del mayorazgo, pudieran estar en Sevilla: gestarse en las conquistas andaluzas.

Hay un tiempo de gestación y hay un tiempo de nacimiento; la gestación todavía está propiamente por estudiar; el nacimiento lo ha considerado Clavero, con su fecha de las últimas décadas del XIV; o cabe que sea incluso posterior. Tras la guerra puede desarrollarse una práctica social de vinculaciones patrimoniales extremadamente rigurosas, pero el derecho todavía no las amparará. Y derecho ya es esencialmente el *ius commune*, aquella jurisprudencia que pacíficamente sólo aceptaba una vinculación funcional a sucesiones de clase superior o de dependencia feudal. El verdadero choque que se produjo entre derecho y práctica resultó desgraciado para ésta: obras de Rodrigo Suárez (comentario a Código 3, 28, 29, mal fechado en Clavero, de 1500, y no de mediados de siglo) y de Palacios Rubio (a Decretales 4, 20, 7, de 1503) ya lo testimoniaban en la monografía de Clavero, con dicha importante corrección.

Unas leyes, las de Toro, tuvieron que venir en 1505 al socorro de la práctica, con pronunciamientos verdaderamente incondicionales, pero no bastaron, hasta tal punto chocaba el mayorazgo con la jurisprudencia. Con verdadero agobio por el peso del *ius commune* que al tiempo inútilmente se rechazaba, alguna ley de Toro respecto a mayorazgos en algún punto que excepcionalmente menos reñía con este derecho, ya a un exceso de preocupación más bien se debería: así la número 44 se explicaría por la cercanía del citado *consilium* del Bolognini, que incidía en su materia. Mas en su conjunto intentaban imponer mediante ley tal práctica particular sobre dicho derecho común.

La jurisprudencia siguió resistiéndose, con interpretaciones todavía restrictivas de estas leyes. A mediados del XVI podría testimoniario el tratado de sucesiones de Vázquez de Menchaca, por Clavero mal interpretado y peor aprovechado. A favor de las leyes ya también presionaría la misma censura o la denegación de licencias de impresión cuando el jurisprudente más incondicional del mayorazgo, Diego de Covarrubias, alcanzaba la más alta magistratura de la corona de Castilla. El tratado de mayorazgo de Palacios Rubios no se imprimió entre sus *Opera*, perdiéndose; con su autoridad ya falsamente se avalaban dichas leyes de mayorazgo. Y claro que convendría atender testimonios de la práctica, o la jurisprudencia más operativa de los casos judiciales, pero no ya en sus

anécdotas, como se insinúa Bermejo, sino en su derecho, en el que se alega y en el que se aplica, superándose las dificultades de digresión de alegaciones e inmotivación de sentencias.

La autoridad de la ley no era en todo caso entonces la que luego se presume; en estas condiciones, la tratadística de mayorazgo que inaugura en 1573 el tratado de Molina fue institucionalmente creadora, tanto al menos como las propias leyes de Toro. El peligro de homologación o de sometimiento a la jurisprudencia común de primogenitura que sobre el mayorazgo venía gravitando sólo ahora se supera. En el registro de nacimiento de esta institución debiera ir más de una anotación, pero ésta ya sería principal. También es desde ahora que la jurisprudencia de mayorazgo se comunica, con todas sus peculiaridades, a la cultura europea como caso especial de la institución de primogenitura, con el distintivo esencial de su original régimen patrimonial.

Tampoco el registro de nacimiento está todavía enteramente cumplimentado; alguna pieza no poco importante, como la de la tenuta, aún afrontó serias dificultades de integración. Bermejo insiste en la importancia del capítulo, pero de hecho lo devalúa al reducir la tenuta a un mero asunto de posesión; la cuestión radicaba en el especial grado «civilísimo» de este derecho que confería al primogénito todas las ventajas procesales. Clavero lo atendía, pero muy deficientemente; su misma información de doctrina, que Bermejo le reconoce, aquí precisamente fallaba: más ilustrativo que el conocido tratado de tenuta de Cristóbal de Paz, de 1621, puede serlo el que en esencia contiene la *Alegación en Derecho sobre la propiedad del Estado de Sanlúcar y Agregados* de Fernández de Retes, algo más de medio siglo posterior; su importancia, como más que una alegación, no ha escapado a todos; Meerman destacaba este escrito presentando a Fernández de Retes en su *Thesaurus*, aunque, ya por no estar en latín, no lo reprodujera. Hará bien en no ignorarlo quien se detenga en el estudio de este complicado capítulo procesal del mayorazgo.

O hay también algún punto todavía suelto en la construcción institucional del mayorazgo castellano que Clavero enteramente ignoró y que Bermejo tampoco sospecha; me refiero a la sucesión, que no era vincular, del título de nobleza que ya interesaba a los vínculos principales. Que era un punto débil de las pretensiones del mayorazgo supo bien explicarlo Rodrigo Suárez en el escrito que Clavero fechaba mal: el título ya entonces aparecía como el elemento que, por precisar en cada caso confirmación regia, reflejaba una dependencia feudal de la nobleza castellana respecto al monarca que para los patrimonios, con la sucesión de mayorazgo, se estaba precisamente perdiendo.

El escollo quiso también salvarse: véase la *observatio* 117 de

Crespi de Valdaura y se contemplará, con sus documentos, cómo el Conde-Duque rompió brecha, haciendo por extender al título los principios de sucesión más automática o sin tracto, no sólo sin solución de continuidad sino también sin causación del inmediato antecesor, que eran propios del mayorazgo y que especialmente podían hacerse valer mediante la tenuta. Toda una cuestión por considerar; la alegación mencionada de Fernández de Retes ya también tocaba a la sucesión de Olivares; su caso bien merecería estudio desde la perspectiva que antes decía, menos social y política, más jurídica y procesal. Veremos si el *Count-Duke* de Elliott se asoma al asunto.

El mayorazgo tampoco quedó enteramente formado por obra de la mayorazguística porque pendía otro punto de importancia ya tratado por Clavero y que Bermejo ahora discute: el de las incompatibilidades o el de que, como muestra también de la autoridad relativa del derecho particular, una ley de incompatibilidad de mayorazgos pudiera ser convertida por su misma doctrina en una jurisprudencia de compatibilidades o de acumulación de vínculos. Esta sería la que sorprendió al cardenal de Luca y esto estrictamente lo que resaltaba Clavero, contra lo cual Bermejo aduce que existen casos judiciales de aplicación de incompatibilidades. Nadie lo ha negado, e interesante será que los estudie, siempre que nuevamente no confunda supuestos.

No es el único punto de incongruencia entre alegaciones: incluso para cuestiones de mayor alcance, como la de identificación dominical y calificación feudal del mayorazgo, Bermejo argumenta con razones ya atendidas, y en su caso descartadas, en la obra de Clavero; ya se centra su crítica en el título de *propiedad feudal* ignorando matices de la exposición, por no hablar tampoco de los traídos por publicaciones posteriores del mismo autor. Anuncia por otra parte novedades, como entre especies de mayorazgos o entre motivaciones de su fundación, que dicha misma obra pudiera hacerle sospechar que menos lo son o que, tal vez mejor, la utilización directa de la jurisprudencia le hubiera hecho saber hasta qué punto no lo eran; de curso común, casi mostrenco, era por ejemplo el motivo de la neutralización de la legítima sobre el que llama la atención. El debate en esto debe reducirse a la remisión. No se comprende que la jurisprudencia imponga más que el archivo.

También hay sus peticiones de principio: proclamándose que señorial no es feudal, puede aseverarse que tampoco feudal lo es el mayorazgo; no deja esto en todo caso de reforzarse con la evidencia de mayorazgos de objeto no señorial, o sobre bien indiferente que nos decía el Cardenal. Los equívocos resisten, mas no por ello se entiende que la extensión de un mecanismo haya de producir por sí misma su transformación. Era la institución del mayo-

razgo la que intrínsecamente se calificaba como feudal por la misma comprobación de la entidad y por el mismo análisis del juego de su específico régimen jurídico, en lo cual no se ha incidido. Importaba a dicho efecto la forma antes que el objeto, aunque por supuesto éste también se revele regularmente señorial en los datos de Bermejo. Su entrada en categorías feudales ya vimos cómo se producía.

Puede proceder Bermejo a su repaso a fondo sin atención a feudo; puede contentarse con conceptos hoy más convencionales sobre señorío como los de Moxó, escudarse tras la extraña pretensión de que nadie seriamente los impugna; no sé si avanzará mucho, pero ya comenzará por perder fuentes. Vaya a la colección de *Tractatus* más completa, la de Venecia de 1584, y busque la materia; no la encontrará si no acude a su libro décimo, *de feudis*, que le premiará incluso con materiales no aprovechados por Clavero: allí están tratados de primogenitura como el de Martin da Lodi, de la primera mitad del xv, o el del francés Jean de Cirey y el del portugués Jacobo da Sá, de la primera mitad del xvi, aparte también el tratado de mayorazgos y mejoras del castellano Peláez de Mieres, de 1575.

O si utiliza el *Theatrum* de Luca, no se quede en su citado libro décimo, *de fideicommissis, primogenituris et maioratibus*; aprovéchesele desde su primer libro, precisamente el primero, *de feudis*, prosiguiéndose con el segundo, exactamente tal, *de regalibus*. Ya a estas alturas Bermejo comprobará que el poder del monarca, a cuya intervención tanta significación otorga para la calificación no feudal del mayorazgo, no responde a sus presunciones, incardinado como aparece en la misma estructura señorial. A la altura del dicho libro décimo, *de fideicommissis*, otro también habrá de confesar su falta: la jurisprudencia de esta materia, implicando seriamente a la primogenitura, no puede despacharse tampoco como una mera operación ideológica en la forma que Clavero hacía.

Nada de esto es desde luego definitivo; tales índices no demuestran por supuesto nada. Nuestro capítulo ya carecía de sede fija por no encontrar expresión directa en el *Corpus Iuris Civilis*; términos como el de feudo y el de regalía no dejan de estar sufriendo su evolución; pero basta todo ello para poner en guardia. Basta para que hayan de ponerse en cuarentena todos los conceptos historiográficos que no casan con el cuadro de la jurisprudencia que conformara las instituciones de la época. Admítaseme la tenuta, ya que soy mayorazgo en el tema, y libéreseme de la prueba: la intención fundada es la feudal.

No defenderé por ello los conceptos de la tesis de Clavero, de 1974; ya también sobre ellos ha seguido el autor produciéndose. No seré yo quien los recuerde, incurriendo en unas reiteraciones

que ya vengo cuidadosamente evitando. Mi insatisfacción ante su libro ya puede haber quedado además patente: fallaba fundamentalmente en un punto en cuya ignorancia le acompaña la crítica. No situó el mayorazgo, desde sus orígenes, en la cultura jurídica o en el verdadero derecho de alcance europeo respecto al que históricamente esta institución se definía y en cuyo seno realmente se desarrolló; su mismo contraste ya podía por lo demás ayudar a una mejor captación y a un más preciso análisis de las peculiaridades que realmente la caracterizaron.

Las mismas alegaciones documentales y judiciales de Bermejo mal se entienden sin este encuadramiento. Ya los historiadores del derecho de hoy deberíamos desconfiar menos de los juristas de ayer. ¿Quién todavía teme a *Lupus* de Palacios Rubios?

BARTOLOMÉ CLAVERO

IV

DIVERSIDAD FORAL DE CARTAGENA ANTE EL ORDENAMIENTO DE ALCALA

La unidad política de los reinos de Castilla y León junto con la recepción romano-canónica, llevaron consigo un continuado impulso hacia la unidad legislativa y posible carácter territorial de las leyes. Fernando III y Alfonso X propugnaron su consecución por distintas vías y si los intentos del Rey Sabio con el Fuero Real no alcanzaron el objetivo deseado, el propósito se mantuvo en la tarea de elaborar y concluir definitivamente Las Partidas¹ y en menor grado por un gran número de disposiciones emanadas de la chancillería regia y encaminadas a este mismo fin.

Desde el comienzo del reinado de Alfonso XI, y especialmente con su tutor el infante don Pedro, puede valorarse la aceleración de este proceso que se manifiesta fundamentalmente en las incontables cartas-respuesta a las consultas y peticiones que hacían los concejos de ciudades y villas, en las que exponen sus dudas o irresoluciones respecto a diversas situaciones judiciales que se les ofrecían y a las que sus propios fueros ya no daban respuesta adecuada con que juzgar. Al mismo tiempo, y con igual sentido, desde la Corte se atendía a la confirmación de fueros y privilegios en los que se introducen oportunamente y cuando era conveniente y posible, pequeñas modificaciones; se omiten respuestas o se contemplan aspectos no tenidos en cuenta ni solicitados, pero útiles al fin propuesto.

1. Como es sabido, a raíz de las recientes y discrepantes tesis del profesor Alfonso García-Gallo, la problemática de la elaboración de Las Partidas y el conjunto de la obra alfonsina constituyen un tema polémico y controvertido, donde concurren, junto a esas tesis, las de otros especialistas españoles (Iglesia, Martínez Díez) y extranjeros (Craddock). Para un resumen del estado de la cuestión, véase ESCUDERO, J A: *Curso de Historia del Derecho*, Madrid, 1985, 456-467

En todas estas cartas aclaratorias o de confirmación de privilegios se ofrece un variado muestrario de gran interés, por cuanto en múltiples aspectos se manifiesta la tendencia de los asesores letrados del monarca hacia la unidad legislativa, así como se precisan también otras disposiciones contemporizadoras que no serían tenidas en cuenta a la hora de la recapitulación final del Ordenamiento de Alcalá. Un año antes, en 1347, Alfonso XI contestaba una petición del concejo de Cartagena con la doble solicitud de poder simplificar los pleitos y de la suspensión del Fuero de Córdoba, a fin de quedar tan solo con el Fuero Real. El estudio y análisis de estas dos peticiones son las que motivan el presente artículo.

La incorporación del reino de Murcia a la Corona de Castilla no se efectúa de manera uniforme y regular, ya que si fueron muchas las poblaciones y comarcas que suscribieron, y después cumplieron, el pacto de Alcaraz, firmado en 1243 entre Castilla y los representantes del rey musulmán y de los señores que se habían independizado de su poder, lo que suponía la implantación del protectorado castellano, algunas otras no lo aceptaron, lo que obligó a la acción militar del infante heredero de Castilla y su ocupación por la fuerza. Así sucedió en Cartagena y Mula, o con la rendición condicionada de Orihuela y Lorca, a las que se otorga el Fuero de Córdoba, como antes a Cartagena, que después se extendería a otras poblaciones, en tanto que Murcia recibe el de Sevilla.

Ambos fueros, no muy extensos, que básicamente se derivan del Fuero Juzgo vía Toledo², tuvieron vigencia diversa con aplicaciones parciales. Cartagena y Alicante, tras el Fuero de Córdoba, recibirían también diversas concesiones del Fuero de Toledo, mientras a Orihuela se le conceden sucesivamente el de Alicante, con su vigencia Córdoba-Toledo y posteriormente el de Murcia-Sevilla-Toledo, utilizados como derecho supletorio, de sus escuetos fueros originarios.

A todo ello se agrega la promulgación del Fuero Real, con base igualmente en el Fuero Juzgo pero orientado dentro de la poderosa corriente de la recepción romano-canónica, hacía una

2 GARCÍA-GALLO, A: *Los fueros de Toledo*, en AHDE, VL (1975), 401-406.

visión unificadora del derecho para la superación de la diversidad foral y hacia una legislación territorial en Castilla y León.

El Fuero Real que fue aplicado en todo el reino de Murcia como derecho supletorio, acabaría por imponerse en el transcurso del tiempo hasta llegar a su culminación con el Ordenamiento de Alcalá.

Paralela a esta corriente jurídica se produce un rápido proceso de urbanización en el adelantamiento murciano que alcanza su escala máxima en el transcurso del siglo XIV, una vez liberado el reino de las fuerzas aragonesas ocupantes (1296-1304), cuya presencia produjo la huida en masa de castellanos y mudéjares y el abandono de los señoríos.

Desde entonces la inseguridad general que pesa sobre el adelantamiento a causa de su despoblación, se agrava por la permanente amenaza granadina en sus profundas incursiones a la busca de botín y cautivos. La inestabilidad política de la nueva frontera aragonesa y la hostilidad de naves corsarias en todo el litoral murciano ocasionan una profunda y larga crisis, que se agrava por las sucesivas catástrofes que se abaten sobre todos los reinos peninsulares, pero con mayor incidencia en los territorios más inestables. Son estas, causas conjuntas que obligan al abandono de amplias zonas rurales y consiguiente incremento demográfico en las áreas urbanas.

Dicho aumento de población supone una vida social cada vez más compleja, que afecta no sólo a la convivencia vecinal y a la diversidad de razas que en ellas habitan, sino también al entramado mundo de la diferenciación social, ya que si caballeros hidalgos y caballeros villanos se hallan menos distanciados entre sí, también se alejan de la población pechera que en ella trabaja y labora en multiplicidad de oficios. Esta situación de complejidad urbana lleva consigo el continuo aumento de hechos, actos, transacciones, compraventas, pendencies de distinto alcance y penalidad, así como otros muchos asuntos que ocasionan disputas, celos, quejas, exposición de agravios que llegan hasta la corte real y pleitos. Porque es la hora de bachilleres y licenciados, concedores parcialmente de las nuevas doctrinas jurídicas y entre los cuales abunda el beneficioso principio de sostener y no enmendar, con alargamiento costoso de los pleitos en perjuicio de todos y

que las disposiciones aclaratorias de los monarcas no consiguen frenar, hasta que con Alfonso XI se impone el rigor monárquico que intenta en todos los frentes controlar, mejorar, centralizar y generalizar.

Un factor negativo incide más en Cartagena que en cualquier otra población del reino de Murcia. La causa es su aislamiento geográfico, el extenso campo despoblado de su entorno y su indefensión, también, en el litoral, que inutilizan las abundantes mercedes alfonsíes: Fuero de Córdoba; jurisdicción propia; dilatado término; beneficios del Fuero de Toledo para «burgueses»: caballeros y peones que armasen navíos para el comercio y el corso; restauración y capitalidad del obispado; creación y ubicación de la sede maestra de la Orden de Santa María de España; asentamiento de los monjes agustinos de Cornellá de Conflent en San Ginés de la Jara; alcaide y guarnición en su castillo; visita personal a la ciudad en dos ocasiones y un largo etcétera que manifiesta la preocupación de Alfonso X por potenciar la continuidad marinera de Cartagena y facilitar su desarrollo.

Todo fue inútil casi de inmediato la capitalidad de la diócesis pasa a Murcia, que tendrá su confirmación oficial, pontificia y real, antes de que acabe el siglo; desaparece la Orden de Santa María de España; decae el monasterio de San Ginés de la Jara, cuyos monjes marchan en su mayor parte o en su totalidad a Toledo; se abandonan alquerías y rafaes en un campo recorrido permanentemente por almogávares granadinos, y su puerto deja de ser enlace y depósito de las intensas corrientes mercantiles de genoveses, pisanos y catalanes, ante el amenazador bloqueo que imponen naves argelinas, ibicencas, granadinas y otras de diversa procedencia, reduciéndose ya todo a un gradual retroceso hacia el recinto amurallado de la ciudad³.

En este angosto mundo urbano, cada vez más retraído y más enfrentado, con asomos de pugnas y encuentros ya en el siglo XIII entre alcaide y guarnición de la fortaleza y los alcaldes forales, así como con los eclesiásticos, la vida urbana, difícil, apretada y a veces apurada, ocasiona enemistades por disputas no solucionadas a tiempo que se agravan por la penuria y por la intervención

3 TORRES FONTES, F: *El concejo de Cartagena en el siglo XIII*, Murcia, 1977.

y consejo de quienes fomentaban interesadamente su resolución por vía judicial, que irían creando un profundo malestar, hasta el extremo de que el propio concejo, gobernado sólo por hidalgos y caballeros, hubo de pronunciarse y recabar la intervención real.

La protesta, ya generalizada, era contra los abusos de quienes perturbaban la rápida acción judicial y alargaban la resolución de los pleitos con tecnicismos y alegaciones jurídicas, lo que ocasionaba su larga duración y elevados costes. La causa, según Font Rius⁴, había sido ocasionada por la progresiva sustitución de jueces legos por profesionales, al mismo tiempo que la intervención de los abogados, también integrados en la recepción romano-canónica, habían provocado el paso de unas formas simples, no escritas, cortas y rápidas, cual había sido la directa aplicación de las cláusulas forales y las establecidas por la costumbre, respetadas y acatadas por la frecuencia con que se repetían y observaban. El gradual aumento e intervención cada vez mayor y ya casi exclusiva y obligada por los abogados en el procedimiento judicial, iba a alargar y encarecer las cuestiones litigiosas. La recepción del derecho común había incrementado la profusión de bachilleres y licenciados, quienes en su afán de notoriedad y de beneficios complicaban las cuestiones pendientes entre los que, no aceptando mediación, avenencia y acuerdo, instaban la vía judicial para su resolución. De aquí que los excesos motivaron protestas de todas clases y se solicitara la necesaria reorganización, buscando volver a fórmulas más directas y rápidas. Lo había advertido Alfonso X, en carta que, previendo estos excesos, había dirigido a la ciudad de Murcia, al autorizar que en ella pudiera haber «bozeros», pero limitando su actuación si eran también legistas, a que sólo pudieran alegar por «nuestro fuero», esto es, el Fuero Real. Porque la diversidad de uferos y de cláusulas contrapuestas, utilizadas indistintamente, era la causa fundamental de este complicado mundo de las controversias judiciales.

El concejo de Cartagena expuso a Alfonso XI en breve carta y en larga exposición verbal por sus mensajeros, la situación a que se había llegado y su solicitud de recuperar los anteriores

4. FONT RIUS, J. M.: *La recepción del Derecho Romano durante la Edad Media*, en «Recueils de memoires et travaux de la Societé d'Histoire du Droit», Montpellier, 1967, 99-102

preceptos forales para la resolución de los pleitos que en ella se dice, lo que permite efectuar un doble análisis, histórico y jurídico.

En el aspecto histórico es interesante destacar que se invocan dos fueros concedidos a Cartagena, ambos con plena vigencia y de los que se pide la confirmación de uno y la supresión del otro. Se afirma que el rey don Fernando (IV), su padre, les había hecho merced del Fuero de Córdoba, y que el rey don Alfonso (X), *nuestro visauuelo les ouo dado el Fuero de las Leyes*, y que esta última carta de concesión la perdieron por lo que le pedían que fuera renovada y confirmada.

Sin duda hubo error en la cancillería regia, porque el Fuero de Córdoba fue dado a Cartagena por Fernando III hallándose en el sitio de Jaén el 16 de enero de 1246, limitándose Fernando IV a su confirmación el 1 de julio de 1306 por carta de carácter general en la forma acostumbrada de estos privilegios. Confirmaba todo cuanto les hubieran dado; fueros, privilegios, franquezas y libertades que concedieran Fernando III, Alfonso X y Sancho IV, pero sin expresa mención singular de fuero alguno. No parece posible que el concejo y los emisarios cartageneros desconociesen la concesión de Fernando III, ni que les interesara por algún motivo atribuírselo a Fernando IV, luego el error debió producirse en chancillería de Alfonso XI⁵.

Cuestión distinta es la pérdida de la carta de Alfonso X, por la que, según decían, *les ouo dado el Fuero de las Leyes*. Hoy día no queda ya duda alguna de la utilización del Fuero Real en diversos lugares del reino de Murcia, fundamentalmente en la capital⁶, pero no deja de extrañar la ausencia del menor vestigio documental de que así fuera dada esta merced y menos aún de su fecha a pesar de que existen cartas confirmatorias de privilegios anteriores otorgadas por Sancho IV y Fernando IV, que re-

5 Publicados en CODOM (Colección de documentos para la historia del reino de Murcia) III, II-3 y V-72.

6 CERDÁ RUIZ-FUNES, J.: *Documentos de Alfonso XI a la ciudad de Murcia*, en AHDE, XLI (1971), 840-846; *Principios del Derecho Común en los derechos locales del antiguo reino de Murcia, 1245-1248*, Murcia, 1986; y *En torno a los caballeros en los fueros de las ciudades del antiguo reino de Murcia, 1243-1248*, en «Liber Amicorum Prof. Ignacio de la Concha», Oviedo, 1986, 141-153

lacionan en largas listas un cuantioso número de concesiones así como de la fecha en que tuvieron lugar⁷. No haciéndose mención expresa de este privilegio en ninguna de ellas. Y si bien nada se opone a la posible efectividad de que esta concesión hubiera podido producirse, tal como lo manifestaba el concejo de Cartagena y que a la vigencia del Fuero de Córdoba se uniera el Fuero Real como supletorio y complementario, en cambio parece lógico deducir que siguiendo la tendencia alfonsí de generalizar el Fuero Real, al concederlo a Cartagena hubiera introducido una cláusula derogatoria del anterior, lo que no fue así, porque seguía vigente en 1347, según se expresa en el documento que publicamos.

Esta carencia de documentos concesionarios del Fuero Real a las poblaciones del reino de Murcia contrasta con los que quedan de otros fueros en un amplio recorrido cronológico, con la continuidad y vigencia de anteriores fueros, e incluso con el desconocimiento de la chancillería regia por cuanto supone su repetición o alternativa. El mejor ejemplo lo ofrece Orihuela, que recibe el Fuero de Córdoba, vía Alicante, el 25 de agosto de 1265, después se le otorga el de Sevilla-Murcia el 4 de abril de 1268, repite con el de Córdoba-Alicante el 20 de julio de 1271, y a todos ellos se agrega el de Toledo el 4 de mayo de 1282; y hay que sumarles el Fuero Juzgo, cuya utilización en todas las poblaciones murcianas es conocida, no sólo porque es recogido por el Fuero de Córdoba, sino porque se hace expresa mención de él en diversas cartas reales; aparte de que, la existencia de un código romanecado del siglo XIII en el Archivo Municipal de Murcia, lo confirma plenamente. De todo ello cabe llegar a una conclusión, y es el silencio documental sobre la concesión del Fuero Real por un lado y su utilización legal, tácitamente aceptada, por otro. Esto permite deducir que, pese a la afirmación cartagenera, no hubo directa concesión del Fuero Real, pero sí se recomendó su utilización, aunque sin orden escrita o directa, lo que explicaría esta supuesta pérdida de que se hace eco la carta de Alfonso XI, contestando a Cartagena sesenta y cinco años después de la muerte de Alfonso X, y el silencio documental que se ex-

7. Sancho IV en Atienza 19-I-285, CODOM, IV, 24-27; y Fernando IV en Valladolid, 3-VIII-1295, CODOM, V, 9-16.

tiende no sólo a la historia cartagenera, sino a todo el amplio territorio que abarca el reino de Murcia en el siglo XIII.

En el aspecto jurídico⁸ es interesante analizar la petición de suprimir los abogados en los procedimientos judiciales, para que las partes litigantes en los pleitos se defiendan por sí mismas, sin necesidad de letrados: *que non ouisen abogados en sus pleytos nin andudiesen y pleyto por escripto sy non tan solamente la demanda e la repuesta.*

Respondiendo el rey: *cada uno de ellos razone su pleito por si mesmo e non por otro abogado.* A pesar de ello, esta solicitud se opone a la regulación que de los abogados hace el Fuero Real (I,9,1 a 3; y II,6,2), cuya confirmación pedían los enviados de Cartagena por haberse perdido la carta concesionaria de Alfonso X.

Por otra parte, la petición del concejo, que es aprobada, también se opone al Ordenamiento de Alcalá, que será promulgado al año siguiente, en el que se regula la intervención de abogado en los pleitos (7, única), si bien en la carta de Alfonso XI se prevé que puedan tomar parte en la defensa de sus propios intereses: *que pueda razonar su pleyto mesmo.*

Otra disonancia se advierte en este documento cuando se dice: *los vecinos e moradores dende o a quien su voz touiese*, puesto que si se pide la supresión de los voceros, ¿cómo se inserta después esta delegación? Por lo que parece, se trata simplemente de una cláusula muy utilizada en las provisiones reales y que, como otros equívocos que encontramos en esta carta, escapó a la percepción de quienes la redactaban.

En el mismo sentido de rapidez y disminución de costas el municipio cartagenero solicitaba que no se mantuvieran los pleitos por escrito, sino tan solo la demanda y su respuesta, sobre las cuales los alcaldes sentenciarían conforme fuero, y caso de existir alguna excepción, ésta podría interponerse en el plazo máximo de tres días desde la notificación de la demanda. En este caso el rechazo estaba dirigido contra los cada vez más omnipotentes escribanos, a los que el monarca alude sin recato diciendo de ellos que: *fazien grandes costas en los abogados e en las escripturas.*

Comentario último a esta provisión real es el contrasentido que

⁸ Muestras de este tipo de cartas en Torres Fontes, y SÁEZ, E.: *Privilegios de la ciudad de Murcia*, en AHDE (1942-1943), 530-546

supone la petición de Cartagena de que fuera suspendido el Fuero de Córdoba, en el que nada se habla de abogados ni de escritos en los pleitos⁹ que había coexistido, según ellos, con el Fuero Real, y que aceptase el monarca la desaparición de uno y la vigencia de otro. Aún más, Alfonso XI no confirma el Fuero de las Leyes, sino que en atención a la solicitud de Cartagena *por esto, y sobre todo, porque fallamos que cumple mas a nuestro seruicio que vsen por el dicho Fuero de las Leyes que non por el Fuero de Córdoba, damosles e otorgamosles el dicho Fuero de las Leyes.*

En consecuencia, nada se dice de confirmación, sino de concesión. Todo parece conducir al mismo camino y dar un paso adelante hacia la unificación legislativa, que se ultimaré al año siguiente en el Ordenamiento de Alcalá, si bien como orden de prelación de fuentes.

Juan Carlos DOMÍNGUEZ NAFRÍA

A N E X O

Carta de Alfonso XI al Concejo de Cartagena de 20 de Julio de 1347 confirmando el Fuero real y dejando en suspenso el Fuero de Córdoba (RAH, 9-9-7/1955/31).

Sepan quantos esta carta uieren como nos don Alfonso, por la graçia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e señor de Molina, por razon quel conçeio de la çibdat de Cartagena nos enbiaron pedir por merçed que mandasemos que non uiesen abogados en sus pleytos nin andudieseny pleyto por ecripto sy non tan solamente la demanda e la respuesta e sobre aquello que los alcaldes judgasen aquello que fallaren por fuero e por derecho; e otrosy, que sy alguno ouiese a poner excepcion que rematase la demanda, que la pusiere fasta tres días del dia que ouiese leydo la demanda que su contendor le fiziese. Nos, por esto e por fazer bien e merçed al conçeio de la dicha çibdat e a los vezinos e moradores dende e de sus terminos e por les parar de costa e de daño que se les sigue en los pleytos que se prologan porque fazien grandes costas en los abogados e en las escripturas e porque sean más ricos e la dicha çibdat se pueble mejor, tenemos por bien e man

9. CASAL, F.: *El Fuero de Córdoba concedido a la ciudad de Cartagena*, Cartagena, 1931

damos que de aqui adelante cada vno dellos razone su pleito por si mesmo e non por otro abogado, e que ningun abogado non razone pleyto por /otro/ en la dicha çibdat, pero que tenemos por bien que pueda razonar su pleyto mesmo; otrosy, que ningunt pleyto non ande y por escripto sy non tan solamente la demanda e la respuesta, e sobre la demanda e la respuesta que los alcaldes que fueren en la dicha çibdat agora e de aqui adelante e cada vno dellos que judguen aquello que fallaren por fuero e por derecho, e sy alguno quisiere poner alguna excepcion en su pleyto que remate la demanda que su contenedor la faze, que la ponga fasta tres dias del dia que ouiere oydo la demanda que su contendor le faze, e sy en estos tres dias non la pusiere que dende adelante non le sea reçebida salvo si mostrare algun embargo o razon derecha porque en estos tres dias non pudo venir a la poner

E mandamos a los alcaldes e al alguazil de la dicha çibdat de Cartagena que agora son e seran de aqui adelante e a quelesquier e a qualquier dellos que guarden e fagan guardar todo esto de aqui adelante en la manera que dicha es, e defendemos que ninguno nin ningunos non sean osados de les yr nin de les pasar contra esta merçed que les nos fazemos nin contra ninguna cosa de las que en esta carta se contiene para ge las quebrantar nin menguar en ninguna manera, ca qualquier que lo fiziese pecharnos y a en pena mill maravedis de la moneda nueva a cada vno por cada vegada e al dicho conçeio de Cartagena e a los vezinos e moradores dende o a quien su boz touiese todo el daño e menoscabo que por ende reçibiesen doblado; e sobresto mandam a los alcaldes e alguazil de la dicha çibdat de Cartagena que agora son e seran de aqui adelante e a qualesquier e a qualquier dellos que esta nuestra carta vieren que anparen e defiendan el dicho conçeio de Cartagena e a los vezinos e moradores dende con esta merçed que les nos fazemos, e que les non uayan nin pasen contra ella nin contra parte della en ninguna manera, e sy alguno o algunos y ouiere que contra esto que dicho es o contra parte dello les quisieren yr o pasar para ge lo quebrantar o menguar en todo o en parte en cualquier manera, que les prenden por la dicha pena de los mill maravedis de la moneda nueva a cada vno por cada uegada e la guarden para fazer della lo que nos mandaremos

Otrosy, por razon que el dicho conçeio de Cartagena nos enbiaron dezir que el rey don Ferrando, nuestro padre, que Dios perdone, que les dio el Fuero de Cordoua por su priuillieio, otrosy, que el rey don Alfonso, nuestro visauuelo, que les ouo dado el Fuero de las Leyes por su carta, e que perdieron la dicha carta, e que auien vsado fasta aqui por el dicho Fuero de las Leyes, e nos enbiaron pedir merçed que mandasemos que vsasen de aqui adelante por el dicho Fuero de las Leyes. Nos, por esto e porque fallamos que cumple mas a nuestro seruiçio que vsen por el dicho Fuero de las Leyes que non por el Fuero de Cordoua, damosle e otorgamosles el dicho Fuero de las Leyes e tenemos por bien e mandamos que vsen e judguen por el de aquí adelante.

E non fagan ende al so la dicha pena a cada vno e demás por qualquier o qualesquier por quien fincare que los asy non cumplieren, mandamos al ome

que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare a quinze dias so la dicha pena de los mill maravedis a cada uno a dezir por qual razon non conplides nuestro mandado, e non fagades ende al so la dicha pena, e de como esta nuestra carta vos fuere mostrada e les vnos e los otros la cunpliredes, mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como cunplides nuestro mandado, e non faga ende al so la dicha pena. E desto mandamos dar esta nuestra carta seellada con nuestro scello de plomo. Dada en Oterdesiellasfi veynte días de Jullio era de mill e trezientos e ochenta e çinco años Yo Matheos Ferrandez la fiz escreuir por mandado del rey.

V

DAR "UNA VOZ" A LOS JUDIOS: REPRESENTACION EN LA ESPAÑA MEDIEVAL

El estado socio-económico de los judíos en la Edad Media estaba definido y protegido por la ley. Sin aceptar necesariamente las teorías, a veces inexactas, de la «servidumbre de la cámara real» (*servi camera*), se reconoce que Guido Kisch ha hecho una distinción útil entre los conceptos de «Jewry law» y «Jewish law». Lo anterior se refiere a las leyes del rey u otras autoridades no judías que tienen que ver con los judíos, y lo posterior a la propia ley judía¹.

En la España cristiana medieval, el «Jewry law» no tuvo el aspecto discriminatorio que descubrió Kisch en los códigos alemanes. En la ley española de la Edad Media, los derechos de los judíos eran reconocidos y protegidos. Sin embargo, hubo algunos conatos en el área de los procedimientos judiciales para poner a los judíos bajo la autoridad judicial cristiana. Así Alfonso VII de Castilla, en el fuero de Toledo (1118), otorgó al juez cristiano el poder de juzgar los pleitos entre un cristiano y un judío o un musulmán. Este fuero es de particular importancia porque más tarde su jurisdicción se extendió a numerosas ciudades de Andalucía². Esto, sin embargo, era una excepción a la práctica general en la que los pleitos entre un judío y un cristiano se llevaban ante un tribunal judío, o a lo menos ante un juez (*dayyan*) judío y un juez cristiano.

La legislación de Alfonso X respecto a los judíos ha excitado mucha equivocación. Baer y otros le han acusado de ser «antisemítico», pero está claro que Alfonso no escribió personalmente los

1. KISCH, *The Jews in Medieval Germany* (Chicago, 1949), pp. 4-10 (véase el índice, s.v. «Jewry law»). Por España, véase YITZHAK BAER, *Historia de los Judíos en la España Cristiana* (Madrid, 1981, en la excelente traducción de José Luis Lacave) I, 68-70; pero algo más correcto son las observaciones de Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, *Judíos Españoles en la Edad Media* (Madrid, 1980), pp. 92-93.

2. Tomás MUÑOZ Y ROMERO, ed., *Colección de Fueros Municipales y Cartas Pueblas* (Madrid, 1847), p. 366. Alfonso GARCÍA-GALLO, en su importante discusión de «Los Fueros de Toledo», *A.H.D.E.* 45 (1975): 341-488, no mencionaba esta provisión

códigos de su reino. Los verdaderos autores de las *Siete Partidas*, por ejemplo, eran canonistas como S. Ramón de Peñafort. También, estos códigos, y particularmente las *Partidas*, no se escribieron para ser promulgados en práctica; más bien, eran de naturaleza teórica, una especie de enciclopedia de las opiniones legales. Sin embargo, es interesante considerar algunas de las referencias en la legislación Alfonsina tocantes a los derechos de los judíos en pleitos con los cristianos.

Las *Partidas* dicen que todos los pleitos entre judíos y cristianos deben ser adjudicados ante la justicia del rey «de los lugares do moraren [=los judíos] et non por los viejos [=sabios, rabinos] dellos»³.

Ya según la ley romana, tenían los judíos el derecho de adjudicar sus propios pleitos. Después de la ley de Caracalla (*lex Antoniana de civitate*; 212 C.E.) todos los judíos del Imperio romano llegaron a ser ciudadanos romanos sujetos a las leyes romanas. El código bizantino, por ejemplo, instruía a los judíos «acercar los tribunales del modo acostumbrado en los casos que no conciernen su superstición tanto como el foro [tribunal], los estatutos y la ley». Sin embargo, en los pleitos civiles el estatuto permitía la concordia por ambos lados de «litigar ante los patriarcas judíos o [cristianos] como que ante los arbitadores [romanos]», e instruía a los «jueces» (ordinarios; gobernadores de las provincias) a poner en vigor tales decisiones⁴.

El famoso fuero de Cuenca, que llegó a ser la fuente de numerosos fueros locales (1189-1211), y el fuero de Iznatoraf (Fernando III), dice que los pleitos entre cristianos y judíos deben ser juzgados por dos jueces, uno cristiano y uno judío, y en caso de apelación por cuatro: dos de cada fe (¡no obstante, el mismo fuero dice después que no hay derecho de apelación en pleitos entre los cris-

3. *Las Siete Partidas*, edición de la Real Academia de la Historia (Madrid, 1807), VII. xxiv. 5.

4. *Cod. Theod.* II. i. 10; también en el *Breviarium* de Alaric, II. i. 10, y en *Cod. Just.* I. ix. 8. La ley visigoda no permitía a un judío testificar contra o acusar a un cristiano (*L. Visig.* XII. ii. 9; cf. *Los Códigos Españoles* [Madrid, 1872], t. I). Sobre la utilización de los tribunales gentiles por los judíos en la Provenza medieval, véase Joseph SHATZMILLER, «*Halijatam shel yehudim le-arkhaot shel goyim be-Provens bi-mei ha-beinayim*» (en hebreo), V. World Congress of Jewish Studies, *Proceedings* (1972) II, 375-81.

tianos y los judíos!). También en pleitos entre un cristiano y un judío, testigos de cada fe deben testificar⁵. Las *Partidas* no dicen nada acerca del derecho de relación de los judíos, pero tal derecho no era suprimido, ya que nada se dice de esto en el título que trata sobre apelaciones (III. xxiii. 2).

Las *Decretales* declaran enfáticamente que ya que los judíos «presumen» utilizar sus propios testigos en pleitos contra los cristianos, el testimonio de un cristiano (sólo) debe ser aceptado también en pleitos contra los judíos. Algunos gobernantes, especialmente en España, insistían en que tanto judíos como cristianos testificaran en pleitos en contra de judíos, porque la ley canónica declaraba anatema al que le diera tal preferencia a los judíos.

Esta es una de las muchas instancias en que no necesitamos especular si Alfonso X seguía en práctica a los ordenamientos de las *Partidas*, porque sabemos que no los hizo. Al contrario, como los otros reyes españoles, extendía privilegios especiales a los judíos en este respeto; por ejemplo, designaba jueces especiales en Burgos (1278) para juzgar a todos los pleitos entre los judíos y los cristianos. Claro, esto se hizo con el consentimiento de los judíos⁷. Sin embargo, anteriormente en su reinado (1263), en una carta a Burgos declaraba el rey que los judíos debían insistir en dos testigos, un cristiano y un judío, en tales pleitos. Alfonso no los concedió, más bien el testimonio debió ser sólo de dos «buenos cristianos». En el privilegio de Murcia (1272), ordenó que todos los habitantes deberían ser juzgados según las leyes de la ciudad, como en el fuero de Sevilla, excepto en los pleitos entre judíos solamente (parece que éstos eran juzgados en los tribunales judíos)⁸.

En Aragón-Cataluña, Jaime I concedió un privilegio a los judíos

5. *Fuero de Cuenca* (juntamente con el fuero de Iznatoraf) ed Rafael de Ureña y Smenjaud (Madrid, 1935), pp. 614-15, 630-31, 628-29

6. *Corpus Iuris Canonici*, ed. Emila A. Friedberg y A. Richter (Leipzig, 1879); *Decretals* C. 21. X. II, 20; III Lateran, c. 26. Curiosamente, el concilio de Albí (1254), c. 67, prohibía a los *cristianos* de testificar contra los *judíos* en las cosas civiles (cf. SOLOMON GRAYZEL, *The Church and the Jews in the XIIIth Century* [Filadelfia, 1933], pp. 335-36 [=HOFELE, *Histoire des Conciles* VI, 1, 77-82]).

7. ANTONIO BALLESTEROS BERETTA, «Burgos y la Rebelión del Infante don Sancho», *Boletín de la Real Academia de la Historia* 119 (1946): 130.

8. *Memorial Histórico Español* 1 (1851): 208 (la carta de 1263); *ibid*, p. 279

de Barcelona y de Cataluña en general (1236) que dice que es necesario el testimonio de un cristiano y de un judío en los pleitos entre los cristianos y los judíos. Este privilegio se concedió en Valencia también, por lo menos en 1262 (posiblemente anterior a esta fecha), y las Cortes de Gerona lo confirmaron en 1241⁹.

Teóricamente, según la ley eclesiástica, el judío es como un hereje (la mayoría de las leyes que tratan con judíos en las *Decretales* se encuentran bajo el título de herejes). No es una persona legal, y según la ley eclesiástica no tiene el derecho de acusar a cristianos. El *Fuero Real* también incluye esta decisión, y porque el autor principal de las *Partidas* es también el autor de las *Decretales*, quizá influyó en más legislación Alfonsina (según las *Partidas*, III. xxiii. 2, un esclavo no es una persona legal, pero un judío sí y puede pleitear contra un cristiano)¹⁰.

Sabemos que a pesar de la ley eclesiástica, en España el judío era persona legal. Así, en las *Leyes Nuevas*, escritas poco después del *Fuero Real*, se dice que así como un judío puede apelar un juicio contra él, también un cristiano puede apelar. El fuero de Salamanca específicamente declara que los judíos «den su voz a brayar», es decir, pueden pleitear en los tribunales¹¹.

Este concepto de «tener una voz» es una noción legal importante en el derecho español de la Edad Media. La noción de abogado, o «bozero» o «vocero», literalmente él que da su voz (en catalán, *advocado* o *procurador*) quiere decir que uno puede representar a un litigante que es «incapaz de dar su voz». En los *Fueros de Ara-*

(el privilegio de Murcia, la cual no es en el libro de Juan TORRES FONTES, *Fueros y Privilegios de Alfonso X el Sabio al Reino de Murcia* [Murcia, 1963-73, tres tomos]).

9. Jean RÉGNÉ, ed., *History of the Jews in Aragon, Regesta and Documents*, ed. Yom Tov Assis (Jerusalén, 1978), n.º 12 (1236) y n.º 47 (Mallorca, 1252). Pierre DE MARCA, *Marca Hispanica* (Paris, 1688, rpt. Barcelona, 1972), pp. 1433-36; cf *Cortes de Cataluña I*, 133-37.

10. *Fuero Real de España*, con las glosas de Alonso Díaz de Montalvo (Madrid, 1781); también en *Los Códigos Españoles I*, 353-426 (Tit. IV. xx. 2).

11. *Leyes Nuevas*, ley 7 (Alfonso X, *Opúsculos Legales* [Madrid, 1836] II, 185, y en *Los Códigos Españoles*, t. 6, p. 227). Véase también la queja de los alcaldes que los judíos mostraban una carta del rey que los permitiría apelar tales juicios (*Opúsculos II*, 198; *Códigos 6*, 233). Fuero de Salamanca, véase Fritz (YITZHAK) BAER, ed., *Die Juden im christlichen Spanien* (Berlin, 1936), I, 2, p. 30.

gón, está claro que abogado era eso literalmente; es decir, uno que hablaba por un menor o por un enfermo o por alguien que faltaba de capacidad mental. Pero un procurador podía representar a cualquier persona que lo deseara ¹².

Ya el fuero de Usagre (1242-1275), concedido por el Maestre de al Orden de Santiago, dice: «*Nullus iudeus non teneat vocem suam nec alienam*». Esta misma noción que el judío no tiene «voz» y que puede adjudicar por sí mismo pero que no tiene «voz» para otros (es decir, que no puede dar testimonio) se encuentra también en las *Leyes de Estilo* (cita al «fuero de Ciudada» —¿error por el fuero de Usagre?) ¹³.

Las *Leyes de Estilo* contiene muchas otras leyes de importancia con respecto a los judíos, y especialmente tocante a la litigación. En los procesos criminales entre judíos, deben juzgar una combinación de jueces civiles (adelantados) y rabinos («los Rabies»). Sin embargo, el rey puede decidir que el proceso debe ser adjudicado «en su casa», es decir, por los jueces del rey. En tal caso, los jueces y los rabinos quienes oyeron el proceso al principio deben estar presentes, y los rabinos deben instruir al rey y a sus jueces en la ley judía para que los judíos sean juzgados de acuerdo con esta ley. Procesos civiles entre judíos podían ser juzgados por los rabinos. En caso de apelación de la decisión del adelantado el caso era llevado ante un rabino y si se apelaba la decisión de éste el proceso se adjudicaba por el rey ¹⁴.

El tribunal del rey ha dicho que en casos criminales o civiles entre judíos, todos los pleitos, contratos, juicios, testimonios, cartas o instrumentos del tribunal deberían ser adjudicados según la ley

12. F. Cuenca, pp. 572-73 (cf. p. 579); *Fueros de Aragón*, ed. Gunnar Tilver (Lund, 1937), p. 27 (n.º 42), p. 32 (n.º 57), p. 49 (n.º 101), p. 27 (n.º 43). Véase generalmente las *Siete Partidas* III. v. Parece que necesitamos una monografía sobre la cuestión de los abogados y procuradores en la ley española medieval; es interesante, por ejemplo, que según las *Partidas* los hombres quienes andaban en guerra o representaban el rey o la ciudad como embajadores, y también peregrinos o estudiantes, usualmente designaban abogados (III. xxiii. 10-11). Véase Jesús LALINDE ABADÍA, *Derecho Histórico Español* (Barcelona, 1974), pp. 534-35, y más extenso, Rafael GIBERT, *Historia General del Derecho Español* (Granada, 1968), índice, s.v. «abogados» y «procuradores».

13. *Leyes del Estilo*, en *Fuero Real de España I* y en *Los Códigos Españoles I*, 309-43, Ley 217.

14. *Ibid.*, leyes 87 y 88.

judía. Si el rey embarga a los bienes de un judío para pagar una deuda de éste a otro judío o como consecuencia de algún juicio, debe hacerlo según la ley judía¹⁵. En los pleitos criminales entre los judíos aunque debe aplicar, al parecer, la ley judía, el rey debe saber la verdad de las acusaciones y puede aplicar todos los modos de interregación, examinación y aun tortura que se permite en los casos criminales entre cristianos¹⁶.

Hace este punto hablábamos de la «Jewry law». Cuando dirigimos nuestra atención a las fuentes judías y examinamos el «Jewish law» (la ley judía), encontramos más datos de interés.

No sólo en los casos criminales, pero aún en los civiles, los judíos utilizaban frecuentemente a los tribunales cristianos. Había un caso en que un judío declaró ante un tribunal cristiano que otro judío le había servido como fiador de una deuda a un tercer judío. El acusado lo negó y los jueces demandaron de él un juramento. Entonces dos testigos judíos declararon que en verdad había servido como fiador. Los jueces decidieron que el caso se adjudicara según la ley judía. Sin embargo, cuando se trajo el caso ante el rabino Salomón Ibn Adret de Barcelona, se aclaró que el acusado meramente había acordado ser fiador de «una» deuda, pero no de esta deuda específicamente¹⁷.

En un pleito similar, el rabino Salomón Corcos de Toledo intentó evitar que un tercer colectara una deuda contraída por un documento firmado ante un tribunal cristiano (aunque todos los rabinos españoles reconocían la validez de tales documentos). En este caso el deudor judío original tomó prestado de un cristiano y murió antes de pagar la deuda. El cristiano vendió el documento a un judío quien demandaba colectar de la propiedad hipotecaria («bienes inmuebles») del difunto. Corcos declaró que no puede hacerlo, porque en tal caso sería necesario un juramento y «un juramento de un idólatra [cristiano] falto de mérito». El caso vino a la atención del famoso rabino Zerajyah b. Isaac ha-Levy (Ferrer Saladin,

15. *Ibid.*, ley 89. Curiosamente, Arías de Balboa, el obispo de Plasencia, cita estas leyes casi palabra por palabra en sus glosas al *Fuero Real* IV. ii. 1, aunque no dice nada de la ley del *F.R.* que él discutía allá (cf. «Las Glosas de Arías de Balboa», ed. Joaquín Cerdá, *A.H.D.E.* 21-22 [1951-52]: 1053-54).

16. *Ibid.*, ley 90.

17. Ibn Adret, *She'elot u-teshuvot* (en hebreo) (Viena, 1812; rpt. Jerusalén, 1976) I, n.º 1148.

participante de la disputa de Tortosa, y rabino principal de Aragón en 1411), que mandó que la deuda podría cobrarse, pues si el documento fue escrito propiamente según la ley cristiana, es suficiente y no es necesario un juramento ¹⁸.

La interpretación estricta de Corcos respecto a juramentos de un «idólatra» es única porque la mayoría de las autoridades judías españolas hacía mucho tiempo habían establecido que se podía recibir juramentos de cristianos. Así, Meir Abulafia declaró que es permitido, bien entendido que el cristiano no jure por su Dios. Ibn Adret declaró que es permitido que cristianos juren «sobre esos cuatros» (es decir, los Evangelios) porque no hacen dioses de ellos ¹⁹.

Hay muchos ejemplos de decisiones (*responsa*) que tratan con documentos y la utilización de los tribunales cristianos. También en los casos criminales los judíos empleaban la justicia de los cristianos en España. En Alcalá un cristiano tomó por fuerza a la casa de un judío y la vendió a otro cristiano que la vendió a otro. Por último, después de algunos años, un judío compró la casa. Entonces, el dueño original demandó que se le devolviera su casa. El comprador se negó a devolverla diciendo entre otras cosas que «hay tribunales en la tierra» (es decir, que el dueño original debió buscar justicia en los tribunales cristianos), a lo cual respondió el dueño original que temía llevarlo a corte porque el comprador judío «era rico y no teme a los jueces». Isaac b. Sheshet de Zaragoza, a quien había tornado el rabino de Alcalá para que le diera su opinión, decidió en favor del dueño original basándose en la ley talmúdica de que «la propiedad jamás se roba» (es decir, resta por siempre en la posesión del dueño original; *Baba Batra* 47b). Si un cristiano toma la propiedad de un judío por causa de una deuda, pero sin juicio del tribunal judío o cristiano, entonces debe ser devuelta al dueño original aun después de un año; pero si es tomado por fuerza no hay ningún término de tiempo porque «la propiedad jamás se roba» y siempre debe ser devuelta (cita a Meir Abulafia, y también a un *responsum* de Asher b. Yejiel) ²⁰.

18. *Ibid.* (Vilna, 1881; rpt. Jerusalén, 1976) V, n.º 167.

19. La decisión de Abulafia se encuentra en Ibn Adret, *ibid.*, VII, n.º 524 (Varsovia, 1868; rpt. Jerusalén, 1976). Véase la decisión de Ibn Adret él mismo *ibid.*, n.º 302.

20. Isaac b. SHESHET, *She'elot u-teshuvot* (Vilna, 1878 rpt. Jerusalén, 1968), n.º 290

En Valencia, un judío mandó a un cristiano a escribirle un documento en el sábado, contra la ley judía, y parece que el judío también invitó a una mujer a su casa y la molestó (o amenazó hacerlo). Se le pidió a Isaac b. Sheshet decidir el caso, y éste dijo que se debió multar al hombre aún más, pero sería mejor castigarle en un tribunal judío y no en uno cristiano «porque debería ser temeroso poner a un judío en las manos de jueces idólatras, y tanto más [en los casos tocantes a] los mandamientos de nuestra Torá porque se sabe que muchos de ellos [=cristianos] codician el dinero de los judíos y no está bien darles una oportunidad a investigar nuestros negocios»²¹.

Sin embargo, Isaac b. Sheshet tuvo razón para estar agradecido a la intervención de «jueces idólatras», porque una disputa con un judío poderoso (Salomón Ibn Alrabbi) en Zaragoza resultó en el arresto de Isaac. Los judíos de la ciudad estaban sulfurados a causa de esto, y se abalanzaron a la casa de Salomón gritando: «¡Muerte a Salomón Abnrabbi; muerte!». Resultó que no sólo su casa pero quizás mucha parte de la judería habría sido destruida si no hubiera intervenido el merino y otros cristianos. El rey, Pedro IV, le escribió a su tesorero acerca de los sucesos, y se multó a toda la aljama. A Isaac se le dio libertad de la prisión, y luego él partió de Zaragoza y vino a hacer el rabino de Valencia²².

Finalmente, tenemos también evidencia rara en nuestras fuentes judías de la aplicación de los conceptos de abogado y de procurador según la ley judía.

La primera fuente es una pregunta de Mallorca a Ibn Adret de Barcelona, y se refiere a un judío que nombró a otro judío como «advocat» (así, en el hebreo), para que lo representase en todo, tanto ante los tribunales cristianos como los judíos²³.

La segunda es más complicada. Isaac b. Sheshet, como es bien conocido, trató extensamente con las leyes de los delatores (malsí-

21. *Ibid.*, n.º 387.

22. BAER, *Die Juden* I, pt. 1, pp 573-75. BAER, *Historia de los Judíos en la España Cristiana*, tr. José Luis Lacave (Madrid, 1981) II, 353-54 da el fondo de las actividades de Salomón en Zaragoza antes de la disputa (pero no dice nada de la disputa).

23. IBN ADRET, *The'elot u-teshuvot* III, n.º 141 (Licorno, 1778; rpt. Jerusalén, 1976).

nes; en hebreo, *malshin*). Pero, no se le ha dado mucha atención de sus respuestas acerca de abogados nombrados por un tribunal para representar y defender a un malsín acusado. Dice que en los pleitos civiles (de propiedad o de dinero), hay desacuerdo entre las autoridades judías en que si el demandado puede nombrar un procurador (*entelir* en arameo)²⁴, o si puede elegir no comparecer en persona y ser representado por un agente (*sheliaj* en hebreo). Isaac cita a la opinión de Natan de Roma que dice que se puede nombrar a un procurador. Sin embargo, también nota a una respuesta (*responsum*) de Isaac al-Fasi que dice, según él, que el demandado no puede nombrar a un procurador (pero no es exacto, porque ese caso se refiere a una mujer casada y si ella debe comparecer en persona ante el tribunal o si puede nombrar a un agente, y no a un procurador). Dice también es la opinión de Saadya Gaon²⁵.

Como es usual con tales respuestas, ni el autor ni el editor citó a las fuentes específicas mencionadas en el texto. Sin embargo, pude encontrar tanto el *responsum* de Isaac al-Fasi como el de Saadya²⁶. Sucede también que Ibn Megash (igualmente un rabino español) dice que «cada día» (frecuentemente) su maestro (Isaac al-Fasi) permitía a las mujeres ser representadas ante su tribunal por un agente. La fuente de esto es, por supuesto, el Talmud (*Shevout* 30a). Sin embargo, Moses b. Najman (Najmanides) no estaba de acuerdo con el razonamiento de Ibn Megash, y de su discusión del asunto es claro que él fue la fuente de información en el *responsum* de Isaac b. Sheshet, su discípulo, ya mencionado. Al parecer, Isaac no llegó a ver ni el *responsum* de al-Fasi ni el de Saadya²⁷.

Respecto a la decisión de Isaac b. Sheshet sobre la cuestión de nombrar a un procurador o abogado, él distingue entre los pleitos

24. Cf. el talmud de Jerusalén *Sanédrin* 19d, y léase *entelir*, del griego *entoleus*.

25. Isaac b. SHESHET, *She'elot u-teshuvot*, n.º 235.

26. Isaac AL-FASI, *She'elot u-teshuvot* (Varsovia, 1884), n.º 248. Saadya GAON, *Séfer ha-yerushot* (en *Ouevres Complètes*, ed. Joel Miller [Paris, 1897], t. 9, «*Liqutim*», p. 149, n.º 18; cf. Asher b. YEJIEL, «*Pesaqim*» (decisiones) sobre *Shevuot*, cap. 4, n.º 2.

27. JOSÉ IBN MEGASH, *Hiddushey Shevout* (rpt., s.l., s.a.) a fo. 30a. Moses b. NAJMAN, *Hiddushey Shevout*, ed. E. Lichtenstein (Jerusalén, 1976), col. 135-36.

civiles, en los cuales se permitía un procurador, y los pleitos criminales. Aun en los pleitos civiles hay una distinción entre el demandante, quien puede nombrar a un agente (porque el agente actúa en su lugar y puede recibir dinero por él, etc.), y el demandado quien no puede nombrar a un agente. Vemos otra vez que Isaac faltó en distinguir claramente entre un *procurador* y un *agente*. Son dos categorías distintas, porque un agente se basa en un principio bien conocido, «el agente del hombre es como el hombre mismo» (*Qiddushin* 41b, etc.), mientras que un procurador actúa en favor de y con el mejor interés de su cliente, y le representa empleando su propio juicio²⁸.

En los pleitos criminales, según Isaac, lo contrario es el caso. Un demandante no puede nombrar a un procurador porque el caso no pertenece a dinero, pero el demandado sí puede ser representado por un procurador porque todo el mundo se permite venir y ofrecer argumentos en defensa del acusado y aun después del juicio del tribunal. Esta distinción es correcta y útil. La ley judía siempre estaba menos interesada en culpar al acusado que en absolverle si era posible.

Sin embargo, no está claro que el demandante no podía ser representado por un procurador como el demandado en los pleitos criminales; tampoco está claro que cualquiera de los dos no podía ser representado por un procurador en los pleitos civiles. Ya que esto es el único *responsum* que, al parecer, habla de este punto en cuestión, da pena que no se hizo distinciones exactas entre un procurador y un agente.

Veíamos, sin embargo, en este examen de las fuentes judías españolas tocantes a los conceptos de abogado y de procurador, en la ley judía una semejanza, y aun la posibilidad de la influencia de la ley cristiana de la España medieval sobre ellos.

NORMAN ROTH
Ud. de Wisconsin (Madison)

²⁸ Sobre el agente en la ley judía en general, véase el artículo hebreo de N. RAKOVER, «*Al ha-kelal 'shelujo shel adam kemoto' be-diney mammonot*» en *Sinai* 63 (1968): 56-80, y también Asher BARAK, *Ajriyut shelijut be-diney neziquin* (Jerusalén, 1973) y I. LEVINTHAL, «The Jewish Law of Agency», *Jewish Quarterly Review* (n.s.) 13: 117 ss.

HISTORIOGRAFIA

I

EL HISPANISMO NORTEAMERICANO EN LA HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES DE INDIAS (notas) *

1. *La importancia historiográfica del hispanismo.*—El hispanismo es un fenómeno importante en el orden cultural, y, dentro de éste, específicamente, en el historiográfico. En este último caso se presenta como la atracción ejercida por la historia de España sobre los historiadores no españoles, y ofrece materia para muchas reflexiones, sobre todo, en cuanto a las causas profundas de un fenómeno que ofrece muchos puntos de contacto con el helenismo, el arabismo, el germanismo o el eslavismo, pero de los que le separan también otros varios¹. No se puede abordar todavía el estudio de las referidas causas profundas, entre otras razones, porque todavía no se ha hecho el estudio primario del fenómeno, es decir, su descripción. Para contribuir a éste, se escriben las presentes notas, en cuanto el hispanismo extiende su interés a las instituciones hispánicas en Indias, y dentro de ese hispanismo, el norteamericano ocupa un papel importante. No es casual que ya en 1921, el entonces rector de la Universidad de Santiago de Chile, Domingo Amunátegui, se preocupara por la apor-

* Las presentes notas fueron enviadas como posible comunicación al Congreso de historiadores del Derecho de las Indias, que se celebró en Buenos Aires (Argentina) en 1983

1. He llamado la atención sobre el fenómeno del hispanismo iushistoriográfico, en «La superación del nacionalismo iushistórico», I Seminario de Historia del Derecho y Derecho Privado. Universidad Autónoma de Barcelona, 1985, 177-215. El Seminario se celebró en 1982. También insistí en el tema, en el Primer Congreso Internacional de Historia de la Historiografía, celebrado el verano de 1983 en Montpellier (Francia), en el que A. Niño Rodríguez, un postgraduado español, presentó una comunicación sobre la institucionalización del hispanismo francés.

tación anglosajona², dentro de la que, al menos, cuantitativamente la norteamericana es la más destacada. Deficiente conocedor de la misma, no pretendo nada más que llamar la atención sobre el tema. Me limito, pues, a unas notas sobre el mismo, destacando algunos nombres y algunas realizaciones.

2. *El condicionamiento geopolítico del hispanismo norteamericano, dentro del hispanismo anglosajón.*—La vecindad entre las Indias y las colonias británicas americanas es suficiente causa de una curiosidad anglosajona por las primeras, como podía haberlo sido de una curiosidad española por las segundas. El que el fenómeno se produzca en un sola dirección, si es que ha sido así, debe ser explicado. Puede estribar en la debilidad política y cultural española, heredada y no superada por las repúblicas hispanoamericanas. La potencia española coincide con momentos en que no cabe una mayor proyección exterior de inquietud cultural por inexistencia del objeto o por carencia de estímulos, entendiendo que la verdadera potencia política española se centra en el siglo XVI. La potencia cultural necesita el respaldo de la potencia política para tener plena efectividad, y, además, es necesario replantearse la verdadera dimensión de la cultura española tradicional, centrada en los estudios teológico-jurídicos y bajo la opresión de una escuela intolerante y represiva³. En el momento de aparición del hispanismo, es decir, en el mundo contemporáneo, la situación cultural española es muy deficiente, lo que se acentúa en todos los estados americanos de habla española.

El hispanismo norteamericano, como movimiento sólido y fuerte, parece desarrollarse con su afirmación como gran potencia política y cultural mundial, tras la guerra de 1914-18, aunque se ha iniciado con su expansionismo en Hispanoamérica. Tras la conquista de Puerto Rico, ya aparece en Nueva York una historia norteamericana de la isla, la de Van Middledys⁴. En el caso de

2. Vid. «Hispanic American Historical Review» (en adelante cit. como H.A.H.R.), núm. 4, pág. 780.

3. Deben tenerse en cuenta mis trabajos sobre la escolástica tardía, escolástica española o segunda escolástica, publicados en los «Quaderni fiorentini per il pensiero moderno», que dirige el profesor Paolo Grossi, en Florencia.

4. Van Middledys, «The history of Porto Rico». Nueva York, 1903.

Puerto Rico, la conexión entre la política y la cultura aparece clara, y la obra historiográfica se encuentra al servicio de la deformación de la doctrina de Monroe. Así, el autor de otra historia posterior de Puerto Rico, la de 1923, es un político, Paul G. Miller, comisionado de Instrucción Pública en la isla. Por su parte, Adolfo de Hostos, que en 1976 publicará un importante «Diccionario histórico-bibliográfico», ha sido historiador oficial de la isla por nombramiento del gobernador norteamericano. No importa que Miller sea ponderado en sus juicios, y que Hostos sea ante todo un puertorriqueño, pues lo significativo es que su postura ha de ser, en todo caso, pro-norteamericana⁵.

A partir de la primera guerra mundial, el hispanismo norteamericano respecto a Indias experimenta su gran desarrollo, y se institucionaliza. Los norteamericanos acuden a España y a Hispanoamérica, y, especialmente, al Archivo de Indias, en Sevilla. Aparecen los órganos científicos de expresión, la especialización en las universidades, los intercambios de estudiantes y, como lógica consecuencia, las grandes figuras, parte de cuya labor va a ser reseñada en estas notas. La aportación norteamericana es muy importante en el estudio de las instituciones. Sus juicios serán ampliamente favorables a la obra española, y todo ello es compatible con el hecho de que el hispanismo norteamericano está condicionado por el factor geopolítico, que representa la vecindad geográfica, de una parte, y el expansionismo político, de otra.

3. *La institucionalización del hispanismo norteamericano, tras la primera guerra mundial.*—Como se ha indicado, tras la primera guerra mundial, la presencia de norteamericanos en España es intensa. Charles Henry Cunningham, que en 1919 es Profesor Adjunto de Historia en la Universidad de Texas, ha pasado tres años entre Sevilla, Madrid y Simancas, aparte de vivir otros varios en Manila⁶. En 1921, Arthur S. Aiton se dispone a abandonar Sevilla, donde ha trabajado becado por los «Native Sons of

5. Sobre ellos, informo en mi libro «La Administración española en el siglo XIX puertorriqueño» Sevilla, 1980, pág. 15 y ss.

6. Vid. Charles Henry Cunningham, «The Audiencia in the Spanish Colonies as illustrated by the Audiencia of Manila (1583-1800)». University of California Press, Berkeley, 1919. En Manila trabajó con los fondos de la «Philippines Library», Philippine Archive» y con los «Audiencia Records».

the Golden West», y es uno de los mejores conocedores del Archivo de Indias, como lo demuestra el informe que, justamente con J. Ll. Mecham, elabora para guía de sus compatriotas, y en el que alaba la organización, pues destaca la fácil localización de los fondos, las facilidades de acceso y otras características semejantes⁷.

Resulta interesante una figura femenina, que es la de Irene A. Wright. En 1920 está trabajando en Sevilla sobre historia cubana, y ha sido encargada de investigar en el Archivo de Indias sobre la actividad holandesa, por parte del Gobierno holandés. En ese momento, se recomienda a los profesores norteamericanos, en general, que se dirijan a ella, lo que la convierte en una especie de agregado cultural. En 1921, está presente en el segundo Congreso de Historia hispano-americana, que se celebra en la misma Sevilla, y que no deja de ser algo accidentado, siendo la que lo relata⁸. En 1922, sigue trabajando en Sevilla sobre documentos de la Florida, en comisión con otros hispanistas⁹. Cuando Lillian Estelle Fisher publica en 1929 uno de sus libros más importantes, no deja de dedicar un recuerdo a Irene A. Wright, quien dice la ha ayudado a obtener información, dando la impresión de que ha sido su corresponsal en España, y de que ella ha trabajado realmente en California¹⁰. Finalmente, en 1938, Irene A. Wright, perteneciente a los «National Archives» es elogiada por sus investigaciones en el Archivo de Indias, y por la ayuda que ha prestado a estudiantes e instituciones de diversos territorios, aparte de sus libros. Se la considera una de las mejores conocedoras del Archivo de Indias, donde ha trabajado durante veinticuatro años.

Si la presencia norteamericana en España es importante, lo es también la actividad desplegada en la América hispana. En 1921, existe institucionalizado un intercambio de estudiantes, teórica-

7 Vid. H.A.H.R., vol. IV, núm. 3.

8 Vid. H.A.H.R., vol. IV, págs. 504-509. La autora publicó en La Habana, 1927, una «Historia documentada de San Cristóbal de la Habana en el siglo XVI»

9. Vid. H.A.H.R., vol. V, pág. 514.

10. Vid. Lillian Estelle Fisher, «The Intendent System in Spanish America». University of California Press, Berkeley, 1929, reeditada en Nueva York, Gordian Press, 1969. Su centro de trabajo lo constituyó la «Bancroft Library» y la «University of California Library».

mente recíproco, aunque en la práctica con sentido casi unilateral, en el sentido de que son mucho más numerosos los estudiantes norteamericanos en Hispanoamérica, que los hispanoamericanos en Norteamérica y, sobre todo, que son los primeros los animados de un espíritu cultural expansivo, consecuencia de una preparación superior y de la disposición de medios superiores. En esas fechas, la historia latino-americana se encuentra entronizada en Estados Unidos, de la que es asistente en Harvard, por ejemplo, Julius Klein, el autor de la conocida obra sobre la Mesta castellana, y que forma parte de su graduación del doctorado. La institucionalización del hispanismo norteamericano ha experimentado ya un gran desarrollo en la década de los 40. Robert S. Chamberlain, hispanista destacado, ejerce el cargo de agregado cultural en Guatemala durante cuatro años, hasta 1946, en que vuelve a la «Carnegie Institution of Washington»¹¹. Lewis Hanke, uno de los hispanistas más apreciados en España, y que ha iniciado su actividad hispanista en 1930, como estudiante graduado de Harvard y estimulado por un estudio del catedrático y ministro socialista español Fernando de los Ríos, viaja, por ejemplo, el verano de 1941 a través de Río de Janeiro, Santiago de Chile y Méjico, con un programa de traducción, y en 1955 abandona la Universidad de Texas para participar en un programa de la «United States Information Agency» en España y Portugal. John Tate Lanning, profesor de la «Duke University» viaja a Guatemala en 1946. Arthur S. Aiton, a quien hemos visto iniciar su carrera de hispanista antes de la década de los 20, aparece en 1947 enseñando Historia de los Estados Unidos en el «American Cultural Center», de Bogotá¹². En 1941, la Universidad de Buenos Aires, desarrolla un doctorado en estudios hispánicos, que comprende un programa especial para los estudiantes norteamericanos. La condición ideológica del hispanismo norteamericano se refleja en el «Report» de un Comité, datado en

¹¹ Vid Robert S Chamberlain, «The founding of the City of Gracias a Dios, first seat of the Audiencia de los Confines» H.A.H.R., 26, 1946, páginas 1-18

12. Aiton pertenece a la Universidad de Michigan, y asiste a la Conferencia de Historia de América Latina, en diciembre de 1944, en Filadelfia. Pertenece al «Board of Editors» de la H.A.H.R. en 1944 y en 1945 asiste a unos cursos de verano en la ciudad de Méjico, donde colaboran tres universidades norteamericanas

Nueva York en 1944, y cuyo título es el de «American History in Schools and Colleges», donde se recomienda su estudio en escuelas elementales y altas, en nombre de los intereses ultramarinos, y de las relaciones con Latino América, Canadá y otras regiones del globo.

La presencia norteamericana es intensa también en los Congresos internacionales sobre la América hispana. Ya se ha hablado del papel relator de Irene A. Wright en cuanto al celebrado en Sevilla en 1921. Haring, junto al argentino Levene, aparece como figura central en el segundo Congreso Internacional de Historia de América, que se celebra en 1937 en Buenos Aires; sin intervención española, pues España se encuentra en guerra civil, y en la que se desarrolla una cierta tensión entre Argentina y Brasil. Arthur S. Aiton está presente en la Conferencia de Historia de América Latina, que se celebra en diciembre de 1944 en Filadelfia. La propia Norteamérica es, pues, la sede de algunas de estas reuniones científicas, que han de ser historiadas también, y que ofrecen muchas vertientes curiosas. Son frecuentes las tensiones políticas e ideológicas entre los países participantes, y no dejan de traslucir alguna ingenuidad, como es el caso del XXVI Congreso de Americanistas, celebrado en Sevilla, en 1935, y en el que se concluye que Montesinos, Las Casas y Vitoria son los auténticos representantes de la conciencia española en el Nuevo Mundo, como si una valoración de este tipo pudiera ser decidida por un Congreso a la manera de un proyecto de ley.

Es importante destacar, que los hispanistas norteamericanos han ocupado un puesto rector en el movimiento historiográfico de su propio país. Ejemplo de ello lo constituye Herbert Eugene Bolton, que en 1932 preside la «American Historical Association», recibiendo sendos homenajes en 1932 y en 1945¹³. Otro hispanista, como Charles Gibson, también ha presidido la citada Asociación, hasta concluir su vida académica oficial en 1981, en las Universidades de Iowa y Michigan¹⁴.

13 El homenaje de 1932 se realiza bajo el título de «New Spain and the Anglo-American West», y el de 1945, bajo el de «Greater America. Essays in Honor of Herbert Eugene Bolton».

14. Gibson colabora durante tres décadas en la H A H R. Vid. el número 62 1982, pág. 179.

El hispanismo norteamericano ha dado lugar a géneros literarios específicos. Es el caso del «Syllabus», al que corresponde, por ejemplo, el «Syllabus of Hispania-American History», de William Whatley Pierson jr., de la Universidad de Carolina del Norte, en 1920, apto para los estudiantes, en cuanto constituyen una especie de historia abreviada o síntesis. Otro «Syllabus» lo constituye la «Guide to Latin-American History», de Halford Lancaster Hoskins, por entonces asistente de Historia y Derecho Público, que aparece en Boston, en 1922. A diferencia de estas obras, en cierta manera divulgadoras y de abreviación, se producen también las de carácter amplio, y que pretenden reunir una información extensa, como es el caso del «Handbook of Latin American Studies», cuya publicación a lo largo de varios años aparece como laboriosa y cambiante. En 1945, por ejemplo, aparece el número 8, que lleva 1943 como data, y cuya edición se realiza por «Miron Burgin, Cambridge: Harvard University Press», y cuya publicación del volumen 10 es asumido por «The Hispanic Foundation of the Library of Congress», aunque el editor sigue siendo el Dr. Miron Burgin. Es esta una obra, en la que desempeña un papel importante el ya citado Lewis Hanke.

4. *La «Hispanic American Historical Review» como órgano idóneo de expresión del hispanismo norteamericano.*—En 1918, fin de la Primera Guerra Mundial, se funda la «Hispanic American Historical Review», una revista trimestral, desde febrero de 1921, que se vende al precio de suscripción de tres dólares anuales, y que dirige un «Board of editors» de seis personas, asesorado por dos «advisory editors», y realizado por un «managing editor» con un «bibliographer». Se publica en Baltimore, por Williams and Wilkins Co., y consigue mantener su módico precio, que es de tres dólares cincuenta por número anual suelto, merced a la ayuda financiera de un ciudadano norteamericano, que es quien soporta la publicación¹⁵.

El «Board of editors» se renueva quinquenalmente al principio, y sexenalmente desde 1932. Pasan por él los más destacados hispanistas norteamericanos, seleccionándose, a veces, por el área de su especialización, como sucede en 1920, en que Herbert Ingram

15 Vid H.A.H.R., vol. IV, de 1921.

Prietsley, de California, sucede a William Spencer Robertson, en cuanto conocedor de la historia mejicana. Puede pasarse de una condición a otra, como lo prueba el que Clarence H. Haring, al cesar en 1931 como miembro del «Board» pasa a ser «Advisory Editor». A los extranjeros, y posteriormente, parece reservárseles la condición de «Associate editors», y, entre ellos, se encontrarán el argentino Levene y el español Altamira.

La revista ofrece artículos, revista de libros, notas y comentarios, sección bibliográfica y notas. Los más destacados hispanistas norteamericanos colaboran en ella, y a través de sus noticias puede seguirse la marcha del movimiento. Es, pues, no solamente científica, a través de las colaboraciones, sino científico-periodística. Proyectos, congresos, viajes, e, incluso, hasta las vacaciones de las figuras más prestigiosas, aparecen reflejados en ella. Es, pues, un venero muy rico de noticias, al que tendrá que acudir el historiador, y también el historiógrafo. La «Hispanic American Historical Review» es así, el órgano idóneo de expresión de un hispanismo sólido, como es el norteamericano, y cuyo vigor se manifiesta también en su continuidad, pues, manteniéndose en el momento presente, significa que ha conseguido ya la condición de sexagenaria.

En cuanto revista seriamente científica, su ideología aflora en forma difícilmente perceptible, y, exclusivamente, a través de las opiniones manifestadas por sus colaboradores. Claro está que, como es corriente, la revista no se hace responsable de esas opiniones, pero es indudable que toda revista comulga con las ideas de los participantes, pues, de una manera o de otra, los selecciona.

En principio, puede afirmarse que la posición de la revista es claramente pro-española, como, en general, lo va a ser la posición del hispanismo norteamericano, como se indicará más adelante. En uno de sus primeros volúmenes, por ejemplo, y con ocasión de recensionar un libro, James Alexander Robertson censura al autor el que no utilice siempre las formas que él estima correctas, como «Hispanic America» e «Hispanic American», en lugar de emplearlas indiscriminadamente con las de «Latin America» y «Latin American»¹⁶. En otro lugar del mismo volumen, se advierte

16 Vid autoinformación en H.A.H.R., cit vol. IV, 1921

que «Hispanic America» es cada vez más usado en las universidades, en lugar de «Latin America», aunque se reconoce que este último subsiste en los círculos gubernamentales¹⁷. A través de J. F. Normano, se recensiona muy desfavorablemente la «America Hispana, A portrait and a prospect», de Waldo Frank, aparecida en Nueva York, en 1931, y en la que llegaba a sostenerse el origen negroide del tango¹⁸. Esa posición pro-española no lo es sólo frente al mundo extrahispánico, sino, incluso, dentro del mundo hispánico. Así, a través de Patrick Romanell, se recensiona desfavorablemente en 1952 la teoría del mestizaje expuesta por José María Gallegos Rocaful, que llega a sostener una recíproca influencia entre lo indígena mejicano y lo español. Para el hispanista norteamericano, sólo se puede hablar de influencia española, y, en lugar de «pensamiento mexicano en los siglos XVI y XVII», debe hablarse de «pensamiento en Méjico»¹⁹. Incluso, cuando Gerhard Masur censura ese mismo año la desmitificación de Bolívar realizada por Salvador de Madariaga, lo hace, en parte, como lo hubiera hecho un español, es decir, por razones de política exterior española. Considera que se ha servido mal la causa de la historia, pero, sobre todo, parece temer el deservicio a la causa de España²⁰.

La posición de la revista en cuanto a España parece ser la que conocemos como «de izquierdas», es decir, la de simpatía hacia los regímenes democráticos, si se observa la postura, por otra parte, muy circunspecta, al producirse la guerra civil española de 1936 a 1939. No hay una postura oficial de la revista, pero a través de la recensión de libros norteamericanos sobre la guerra civil española, lo frecuente es que el gobierno republicano sea citado como el gobierno leal, y el gobierno de Franco como gobierno insurgente. En realidad, el franquismo encuentra pocos defensores entre los intelectuales del mundo entero, y entre los hispa-

17 Vid. H A H.R., vol. 5, pág 272 Para el aspecto ideológico es interesante el núm 2 del vol IV, dedicado al panamericanismo y la Liga de Naciones, la doctrina de Monroe como concepción regional y una interpretación colombiana sobre el imperialismo yanqui, con motivo del aniversario de la independencia de Santo Domingo.

18. Vid. H A H R , 12, 1932, págs 223-225

19 H A.H R , 32, 1952, págs 404-406

20 Id , íd., págs 417-423

nistas norteamericanos esa defensa se encuentra en el embajador en España, Carlton J. H. Hayes, que es recensionado en la revista por Roscoe R. Hill, que en 1946 es jefe del «Department of State Archive», y se jubila en 1947, tras veinticinco años de empleo. Por otra parte, el parcialismo de Carlton J. H. Hayes es denunciado en la propia revista por Bayley W. Diffie²¹. Las ideas oficialistas de la España franquista, representadas en cierto momento por José Antonio Maravall, son combatidas en la revista por Ramón Iglesias en 1946.

Por último, no cabe sino destacar otra vez más que casi todos los grandes hispanistas norteamericanos han colaborado en la revista, y algunos de ellos han trabajado intensamente en ella, como es el caso de Lewis Hanke, que en 1946 como «advisory editor» se propone la elaboración de una guía que facilite el uso, y que en 1954, al menos, aparece como el «managing editor».

5. *La recepción de la investigación hispano-americana en Norteamérica.*—Como es natural, la investigación española e hispano-americana es «recibida» en Norteamérica, en gran parte, a través de la «Hispanic American Historical Review». La recepción puede decirse que es correcta, sin llegar en ningún momento a ser entusiasta, si se exceptúa, quizá, la ya aludida de Fernando de los Ríos por parte de Lewis Hanke.

La investigación argentina es, posiblemente, la primera en acceder tras la española. Haring recensiona a Ravignani, que es de los escritores que parecen despertar algún mayor eco, así como Ricardo Levene, cuyas «Lecciones de Historia Argentina» son traducidas por William Spencer Robertson, y publicadas por la Universidad de Carolina del Norte en 1937. El propio Robertson las había recensionado favorablemente, aunque lamentando la escasa atención al período constitucional²². En 1932 se considerará a Sigfrido Radaelli dentro de algunas tendencias con cierta popularidad en el mundo de habla inglesa²³. En 1954, Zorraquín Becú es elogiado por Haring²⁴.

Dentro de la investigación mejicana, la figura recibida amplia-

21. Id., íd., págs. 415-417

22. Id., 4, págs. 99-100.

23. Id., 12, 1932, pág. 533

24. Id., 34, págs. 220-221

mente es la de Silvio Zavala, de quien Hanke en 1945 dice que ningún historiador como él ha mostrado tanto interés por los aspectos teóricos de la conquista del Nuevo Mundo, desde que lo hiciera Fernando de los Ríos en 1927²⁵. Zavala experimenta, sin embargo, los ataques de Lesley Byrd Simpson, quien en 1947 le reprocha haber publicado una recopilación incompleta de fuentes para la Historia del Trabajo en Nueva España, además de publicarla antes de su proyectada Historia²⁶. Pese a ello, el prestigio de Zavala es uno de los más fuertes, como lo demuestra la todavía reciente entrevista por la «Hispanic American Historical Review», en 1982²⁷. Hay otras figuras del mundo hispanoamericano «recibidas», como es el caso del peruano Jorge Basadre, el cual, además, ha colaborado ya en 1932 en la «Hispanic American Historical Review». En 1982, la revista ha recogido la noticia de su muerte. Mario Góngora también ha sido recensionado en la referida revista, a través de José María Ots Capdequí, desde Valencia²⁸.

Con Fernando de los Ríos, la figura española más conocida es la de Rafael Altamira, quien, como se ha dicho, llegó a ser «associate editor» de la H. A. H. R. La revista recoge la noticia de su fallecimiento, ocurrido en Méjico, en 1951²⁹, y su figura es elogiada por Thomas Matthews en 1952³⁰, y por Ots Capdequí, su discípulo predilecto³¹, a su vez, otra de las figuras más conocidas en América. Salvador de Madariaga es muy conocido también, y respetado, aunque siempre más polémico que los anteriores. Giménez Fernández es recensionado en 1955 por C. J. Bishko. Como representantes de la postguerra civil española son «recibidos» Rodríguez Casado, J. A. Calderón, Palacio Atard, Rumeu de Armas y Céspedes del Castillo. J. A. Calderón y Vicente Rodríguez Casado son recensionados por Lilian E. Fisher en 1946, y el segundo, jun-

25. Id., 25, pág. 485.

26. Id., 27, 1947, págs. 290-291. Silvio Zavala o el profesor Silvio Zavala se convierte en el «Sr. Zavala», como sucede, por regla general, cuando el aludido es objeto de censura científica.

27. Vid. H.A.H.R., 62, 1982, págs. 553-568.

28. Id., 33, 1953, págs. 406-407.

29. Id., 30, 1951, págs. 546-547

30. Id., 32, 1952, págs. 452-457

31. Id., íd., págs. 393-395

32. Id., 1955

tamente con Palacio Atard son saludados como una evidencia del resurgimiento de la escuela española por Athur S. Airon en 1947, entonces en la Universidad de Michigan. Rumeu de Armas recibe la censura de Charles E. Nowell por su obra sobre Colón en Barcelona, aunque después recibirá también sus elogios por la obra sobre la piratería en Canarias³³. Céspedes del Castillo también recibe algunas críticas de Robert S. Smith, por el trabajo sobre la avería en el comercio de Indias.

6. *La tendencia pro-española de la axiología historiográfica norteamericana.*—Si puede hablarse de una axiología historiográfica norteamericana, es decir, de una cierta unidad en la valoración ética o moral de los hechos históricos por parte del hispanismo norteamericano, creo que hay que destacar su carácter pro-español, insistiendo en lo que ya se dijo sobre el espíritu de la «*Hispanic American Historical Review*». Aquí me voy a limitar a destacar el hecho, correspondiendo a los que estudien el fenómeno en el futuro el determinar las causas profundas de esta axiología. Supongo que tendrá que ver en ello el hecho de que España ya no sea una potencia política; el que constituiría un excesivo ensañamiento atacar a un colonizador por otro colonizador que acaba de despojarle de los últimos restos de su imperio; la ausencia total de peligrosidad en la vieja metrópoli, a diferencia de la siempre potencial en las antiguas colonias, o una común actitud antiindígena, aunque los matices hayan sido diferentes. Indudablemente, la axiología norteamericana es opuesta a la otra axiología anglosajona, es decir, a la inglesa, cuyos juicios sobre la colonización española son siempre de una gran dureza, como puede observarse, a título de ejemplo, en John Horace Parry, que no la adopta por la vía de la moral, sino de la inteligencia. Parry no se asusta de la crueldad de los españoles, sino que censura su incapacidad para evitar la disgregación del Imperio, y con él, de la misma España, pues ésta, en su economía, en su sociedad y en su comportamiento político ha estado condicionada por una dependencia de las Indias, y la necesidad de mantener un control administrativo de

33. Charles E. Nowell pertenecía a la Universidad de Illinois. Conforme a lo indicado en nota 26, el autor habla en el primer caso de «Señor Calderón Quijano» y «Señor Rumeu de Armas», en tanto que después Rumeu de Armas deja de recibir este título.

ellas, que ha sido acompañado de una amarga y destructiva guerra. Al final, las posesiones españolas han dependido más de Inglaterra y de Estados Unidos que de la propia España. Por otra parte y para Perry, la influencia española en gran parte de América, como Bolivia, Paraguay, Guatemala, etc., ha sido superficial; en Perú, han convivido dos mundos; en Méjico, se ha reconocido ampliamente la influencia india, simbolizado en la presencia estatutaria de un indio, como Cuauhtemoc, a diferencia de la Argentina, donde destaca la de San Martín, o la de Perú, donde se mantiene la del conquistador Pizarro³⁴. Esta visión, independientemente de que sea la más ajustada a la realidad, o a un tipo de realidad, no se presenta en los hispanistas norteamericanos, sino excepcionalmente, como puede ser en Philip A Means, cuya obra sobre la decadencia del Imperio Inca se publica en Nueva York, en 1932, y en ella se considera que los indios han sido más felices con los incas que con los españoles³⁵.

En 1920, aparece un libro de Herbert E. Bolton y Tomás M. Marshall, sobre la colonización de Norteamérica, desde 1492 hasta 1783³⁶. Frente a la tradicional historia de los Estados Unidos como una historia de las trece antiguas colonias inglesas, se concede un lugar preferente a la colonización europea y, sobre todo, española. Ciento ochenta y cinco páginas están dedicadas a la colonización inglesa; ciento veintinueve, a la española; noventa y dos, a la francesa, y quince, a la de alemanes y suecos. Bolton y

34. John Horace Parry, «The Spanish Seaborne Empire», *The History of Human Society*. Edited by J. H. Plumb. Alfred Koff. Nueva York, 1970. Nacido en 1914, y educado en Cambridge y Harvard, sirve en la Armada inglesa durante la Segunda Guerra mundial y regresa a Cambridge como lector, siendo después Profesor de las Indias Occidentales, Profesor visitante en Harvard y Profesor en Ibadan, Nigeria. Es también Vicecanciller de la Universidad de Gales. En el citado libro, y sobre historia general, considera provechable y placentera la de Robertson; moderna, la de Merriman; comprensiva de las instituciones la de Haring; informativa la de Ots; narrativas las de Bancroft y relevante la dirigida por Ballesteros y Beretta.

35. El libro se titula «Fall of the Inca Empire and the Spanish Rule in Peru: 1530-1780», Nueva York, 1932.

36. Herbert E. Bolton y Thomas M. Marshall, «The Colonisation of North America. 1492-1783», New York, Mac Millan Company, 1920, Bolton era Profesor de Historia de América en la Universidad de California, y Marshall, en la de Washington

Marshall exaltan la colonización española y la elevación de millones de indios a un plano más elevado de moralidad y civilización, que esa colonización ha supuesto.

La colonización de Centroamérica es analizada en 1932, sin ninguna acritud respecto a España, por parte de Francis Merriman Stanger³⁷. Parte de que las cinco repúblicas actuales proceden de establecimientos aislados de los españoles, que no descubriendo tesoros fabulosos, buscan la mejor agricultura con el mejor clima, junto con nativos para explotarla, lo que sólo encuentran en las tierras altas, lejos de las costas de uno y otro océano. Es un trabajo objetivo, sin alabanzas a la obra colonizadora española, pero sin censura, limitado por tanto a hechos objetivos de valoración neutra.

En 1929, aparece la primera edición de la obra de Lesley Byrd Simpson sobre la encomienda y los inicios de Méjico o Nueva España, que muchos años después será traducido al castellano³⁸. De espíritu muy crítico, como ya se ha indicado en el caso de Silvio Zavala, también él es objeto de riguroso examen³⁹. En 1950 revisa su propia obra⁴⁰, reconociendo que a lo largo de veinte

37. Francis Merriman Stanger, «National origine in Central America», H.A.H.R. 12, 1932, 18-45. El autor pertenecía al San Mateo Junior College, de California.

38. Lesley Byrd Simpson, «Los conquistadores y el indio americano», Ediciones Península, Barcelona, 1970, siendo la traducción de Encarnación Rodríguez Vicente. El título inglés es el de «The Encomienda in New Spain. The Beginning of Spanish Méjico», The University of California Press, 1950, siendo la primera edición, de 1929. Simpson fue profesor de español en Berkeley, y tradujo al inglés la Celestina, el Mío Cid y otras obras. En 1947, p. e., era catedrático del Departamento de Español-portugués en la citada Universidad.

39. Su obra sobre la explotación de la tierra en Méjico central en el siglo XVI no es recensionada muy favorablemente por Charles Gibson, H.A.H.R. 32, 1952, págs. 581-583, aunque la tercera edición de su «Many Mexicos» es muy celebrada por Hubert Herring en H.A.H.R. 33, 1953, págs. 101-102. También alaba otras obras, como la de F. Chevalier sobre la formación de grandes dominios en Méjico, en el mismo año y revista

40. Robert S. Chamberlain, «Simpson's The Encomienda in New Spain and recent Encomienda Studies», H.A.H.R., 34, 1954, 238-250, dice que la revisión es un nuevo trabajo en cuanto a organización y concepto. En este artículo, Chamberlain hace un estado de la cuestión

años de aparecer, se han producido nuevas investigaciones, y que la encomienda tiene menos valor que la asignada, por cuanto está acabada a fines del XVI, en cuanto a su función primordial, aunque no se aboliera hasta el siglo XVIII⁴¹. Lo interesante aquí es que a la manera de Bolton y Marshall considera positiva la colonización española, en cuanto ironiza sobre el hecho de que los indigenistas, es decir, los defensores de la civilización pre-hispánica frente a la hispánica, parecen satisfechos de vivir al modo europeo.

Robert S. Chamberlain, que trabaja sobre Centroamérica⁴², desarrolla un trabajo técnico o institucional puro; desde luego, no emite ninguna censura a la colonización española, e, incluso, re-censiona favorable, aunque prudentemente, a un autor tan españolista, como es Venancio Carro⁴³.

Ya se ha mencionado repetidamente a Lewis Hanke, uno de los hispanistas norteamericanos más decididamente pro-español, según propia declaración, puesto que habla de su «incurable predilección por todo lo español». No puede ser más significativo el título de su tesis doctoral, y que es el de la lucha española por la justicia en la conquista de América⁴⁴. Para Hanke, «la conquista

41. Para Simpson, el odio provocado por los aztecas entre sus estados vasallos es lo que hizo posible la conquista de un imperio por un simple puñado de españoles. Estudia económicamente la evolución de la encomienda, y considera que, políticamente, el feudalismo estaba moribundo en España en la época de la conquista. Declara que la documentación española fue puesta a su disposición por el profesor. Carl O. Sauer, de la Universidad de California.

42. Vid. op. cit., en nota 11. En el «Carnegie Institution of Washington», Chamberlain propone una investigación sobre el SO. hispánico, en Albuquerque, Nuevo Méjico. En 1947 pasa a ser profesor asociado de la Universidad de Miami, Coral Gables, Florida.

43. Vid. H.A.H.R., 27, 1947, 507-510.

44 El título inglés es el de «The Spanish struggle for justice in the Conquest of America», traducido al español por Luis Rodríguez Aranda como «La lucha española por la justicia en la conquista de América La segunda ed. es de 1967, ed. Aguilar. La obra la inicia en 1930, como graduado de Harvard, y estimulado por el estudio de Fernando de los Ríos. Es tesis doctoral en la Universidad de Harvard, 1936. Tras publicarse parcialmente, el libro aparece en 1948, siendo revisado el ms con ayuda de C. H. Haring. Entre otros datos relativos a Hanke, pueden darse los de que en 1946 es Director de la «Hispanic Foundation Library of Congress», y viaja a Europa,

española de América fue mucho más que una extraordinaria hazaña militar y política», siendo «uno de los mayores intentos que ha presenciado el mundo para que prevalezcan los preceptos cristianos en las relaciones entre las gentes». También ataca a los que presentan la conquista como un pillaje, y justifica a los que, como Madariaga, han tenido que recordar que otras naciones fueron tan crueles como los españoles⁴⁵. Hanke es un lascasista convencido, y ha desarrollado una gran labor en la difusión del pensamiento y la obra del Padre Las Casas⁴⁶, alguna vez en refutación de indigenistas mejicanos⁴⁷. En todo caso, no ha considerado que Las Casas, como tampoco Sepúlveda u otra individualidad cualquiera, pueda ser considerado como representante exclusivo del genio español. Lo que sí ha defendido ha sido la tolerancia de éste, frente a la leyenda negra, destacando, en especial, la libertad de expresión en los siglos de dominación española en América⁴⁸.

Una visión técnica o formal, es la de Clarence H. Haring, cuya pretensión es la de describir la vida real del Imperio español en América, recurriendo para ello a las «memorias» o «relaciones» de los virreyes, por ejemplo⁴⁹. No supone ofrecer una visión opuesta a la tradicional del hispanismo norteamericano, pues, en definitiva, utiliza fuentes españolas y, además, gubernamentales. La diferencia está en que prefiere fuentes oficiosas a oficiales, lo que puede, ciertamente, matizar algunos aspectos, pero no mucho

participando en la Escuela de Estudios Hispano Americanos, de La Rábida. En 1951, renuncia a la indicada dirección y acepta pasar a la Universidad de Texas.

45. Vid. op. cit., introducción.

46. En 1951, Hanke es autor del estudio preliminar de la «Historia de las Indias», de Las Casas, editada por Agustín Millares Carlo. «Bartolomé de las Casas, historian. An essay in Spanish Historiography», University of Florida Press, 1952, es una versión inglesa de la introducción a la «Historia de las Indias», 3 vols., Biblioteca American, México, 1951, donde defiende al dominico como historiador, frente a los que lo presentan como propagandista.

47. «Bartolomé de las Casas, an essay in hagiography and historiography», H.A.H.R. 33, 1953, es una refutación de la obra del mejicano Edmundo O'Gorman.

48. Vid. «Free Speech in sixteenth century Spanish America», H.A.H.R., 26-I, 1946, 135-149.

49. Clarence H. Haring, «The Spanish Empire in America». New York: Oxford University Press, 1947.

más. Con razón, Altamira mostró ciertas reticencias al recensionar el trabajo en el aspecto indicado, aparte de considerar que, a diferencia de lo expuesto por Haring, no hubo un trasplante de las instituciones castellanas en bloque, sino sólo la legislación colonial o la apta para esta situación. Altamira también reprochó a Haring no comprender el origen distinto de los colonizadores entre sí; la diferencia de instituciones de origen y de establecimiento, así como la falta de claridad en la comparación entre la colonización española y la inglesa, por ejemplo⁵⁰.

Charles Gibson, especializado en los estudios sobre Méjico, donde el indigenismo alcanza su mayor expresión, también se muestra favorable en el juicio sobre la colonización, considerando la existencia de una organización tutorial de España y un programa humanitario⁵¹. Eugene Korth, que trabaja sobre Chile desde Argentina⁵², realiza una exaltación de la colonización española, pues considera que uno de los rasgos más característicos de la conquista española de América es el esfuerzo de la Corona en la protección de los indios contra la agresión injusta y la explotación. Precisamente, frente a las tesis indigenistas o simpatizantes con ellas, Korth niega que la resistencia araucana se debiera al espíritu de independencia. Es decir, trata de desmitificar a los araucanos. Para Korth, puede deberse más a la pobreza de las armas españolas en la región, o a la experiencia del tratamiento duro sufrido antes los blancos, lo que no es en él una diatriba contra los españoles, sino contra algunos encomenderos, ayudados por oficiales poco escrupulosos o indiferentes, lo que, por otra parte, intentó corregir la legislación. Siendo jesuita el autor, no extrañará que exalte la obra de su orden⁵⁴. Finalmente, y dentro

50. Vid. H A H.R., 27, 1947, 500-506.

51 Vid. «Tlaxcala in the Sixteenth Century», New Haven: Yale University Press, 1952. La decadencia de Tlaxcala y de la sociedad indígena, en general la atribuye a los civiles.

52. Eugene H. Korth, S. J. «Spanish Policy in Colonial Chile. The Struggle for Social Justice, 1535-1700», Stanford University Press, Sanford, California, 1968. Korth era Decano de la Facultad de Artes y Ciencia en la Universidad Católica de Salta, Argentina.

53. Vid. el prefacio. La investigación parece haber sido realizada en 1950, principalmente en Santiago.

54. Los jesuitas son los «blackrobes» que arriban a Coquimbo en 20 de

de este repaso de posiciones favorables a España por parte del hispanismo norteamericano, puede citarse a Timothy E. Anna, que en 1982 ha declarado que el dominio de España en el Nuevo Mundo fue establecido más por la vía de las ideas, que por la vía de las armas⁵⁵.

Sin embargo, esta visión del hispanismo norteamericano, realizado a través de historiadores de las instituciones o cercanos a este estudio, quedaría todavía mucho más incompleto de lo que queda, si no se mencionara a James Brown Scott, alumno de las Universidades de Filadelfia, Harvard, Berlín, Heidelberg y París; profesor de las Universidades de California meridional, Illinois, Columbia, Nueva York y Georgetown de Washington; doctor «honoris causa» por las Universidades de Salamanca y París; fundador del «American Journal of International Law» y Secretario del «Carnegie Endowment for International Peace», entre otras cosas. Posiblemente, es el hombre que más ha influido en la consideración universalmente extendida de que el español Francisco de Vitoria es el verdadero fundador del Derecho Internacional. Como trabajo representativo puede leerse el discurso que publica el 12 de octubre de 1929 en el Hotel Briarcliff, del Parque de Briarcliff, de Nueva York, para conmemorar el descubrimiento de América, y que en 1930 es publicado en Madrid, con una introducción de Joaquín Fernández Prida, en ese momento ex-Ministro de Justicia y de Estado y Profesor del Derecho Internacional de la Universidad de Madrid, quien destaca la «modestia», «bondad» y «simpatía» de Scott, así como el hecho de que Francia le considere su amigo⁵⁶. Scott destaca como tres fechas importantes la del descubrimiento de América, 1492, la de las Nuevas Leyes, 1532, y la de la sistematización de Grocio, en 1625. El descubrimiento de América se examina en forma idealista e ingenua, pues siguiéndose a Lafuente se considera que «fue la predicación del Evangelio la que hizo que el nuevo Derecho de gentes viese la luz». Scott considera

marzo de 1593, procedentes de Callao. El autor ofrece un pequeño glosario de términos españoles e indios.

55. Vid. H.A.H.R., núm. 62, 1982, 553-568.

56. James Brown Scott, «El descubrimiento de América y su influjo en el Derecho Internacional», Madrid, Tipografía de Archivos, Olózaga, 1, 1930.

como escuela del Derecho Internacional a la que forman Vitoria, Gentile y Grocio, en tanto desdeña a Pufendorf y a Tomasio, y llega a declarar que «el descubrimiento espiritual de América sólo podía ser realizado por un hombre dedicado a las cosas del alma». Es interesante que el autor norteamericano, que no es católico como pudiera pensarse a primera vista, sino protestante, vincule estrechamente Grocio a Vitoria y considere a Grocio como el miembro más renombrado de la escuela española, proporcionando inconscientemente una de las claves del pensamiento cristiano de la edad moderna, dentro del que católicos y protestantes se distinguen en aspectos secundarios, pero coinciden en los principales. Scott destaca que Grocio declara el que para fundar su tesis de que los holandeses tenían el derecho de comerciar en las Indias Orientales había de apoyarse en la libertad de toda nación para viajar a otra y comerciar con ella. Asimismo, Scott, lúcidamente, dice que el «*De iure Praedae*» de Grocio es, por su método y forma, «un manual de confesor», dedicado a los protestantes accionistas de la Compañía de las Indias Orientales, que dudaban si aceptar sus presas. Scott, como anteriormente lo han hecho algunos profesores holandeses⁵⁷, han comprendido perfectamente la comunidad de ideas y argumentaciones que domina a Vitoria y la escolástica española, en general, de raíz católica, y a Grocio y al pensamiento centroeuropeo, en general, de raíz protestante. Lo que no han dicho Scott y los profesores holandeses es que Vitoria y Grocio, católicos y protestantes, no crean el «derecho internacional», sino «su derecho internacional», el derecho internacional de los europeos, que necesitan justificar el colonialismo depredador a que se van a entregar en Occidente y Oriente. Vitoria tiene que tranquilizar la conciencia de los conquistadores y encomenderos españoles en las Indias Occidentales, en tanto Grocio tiene que tranquilizar la conciencia de los mercaderes holandeses en las Indias Orientales, sin que se observe diferencia entre católicos y

57. Según Fernández Prada, Van der Vlugt considera a Grocio como gran casuista cristiano, y, como tal, miembro de la escuela española de Derecho Internacional, en tanto que el profesor Fruin advirtió que había bebido en Vitoria.

protestantes a la hora de estimular el ánimo depredador de las comunidades políticas en que se encuentran insertos, o que ellos mismos han creado⁵⁸.

7. *Virreinos, intendencias, audiencias y otros aspectos de la Administración, como áreas de investigación del hispanismo norteamericano.*—El hispanismo norteamericano ha extendido su acción investigadora a los campos más diversos y, sobre todo, fundamentales de la historia de las instituciones, y, por ello, no debe resultar «demasiado» sorprendente que a la hora de redactar un repertorio bibliográfico universal, la sección correspondiente a la América española se haya encomendado a un norteamericano, en este caso, Charles Gibson⁵⁹.

En primer lugar, cabe hablar del aspecto de los virreinos o de la institución virreinal. En otro lugar ya he señalado que el estudio de la institución virreinal indiana era, preferentemente, norteamericano, a través de dos grandes figuras, como la de Donald Eugene Smith y Lillian E. Fisher. Sigo creyendo como entonces, que el trabajo de la segunda tiene la ventaja de ofrecer una síntesis total, pero que el del primero es muy profundo, y su limitación al virreinato de Nueva España se debe exclusivamente a motivaciones técnicas⁶⁰. La falta de preparación jurídica y, sobre todo, el desconocimiento de las instituciones españolas, se pondría de manifiesto cuando estudiosos españoles, precisamente, replantearan el tema, pero esto sucedió muchos años después. Puede decirse que, casi una veintena de años, la institución virreinal indiana sólo ha podido ser conocida a través de la producción

58. Deben verse mis trabajos aludidos en nota 3. Se comprende también lo débil de la famosa tesis de Max Weber sobre el desarrollo del capitalismo en los países protestantes, pues la doctrina católica en la edad moderna no representó ningún freno al citado desarrollo. Las causas de la diversa evolución en los países fueron otras.

59. Me refiero a la «Introduction bibliographique a l'histoire du Droit et a l'Ethnologie juridique», publicada bajo la dirección de John Gilissen en Bruselas. La parte referente a «Amérique espagnole coloniale», F/4, 1964, fue realizada por Charles Gibson, entonces profesor en la Universidad estatal de Iowa. El autor sólo excluye Brasil y Guayanas.

60. Vid. mi trabajo sobre «El régimen virreino-senatorial en Indias», Anuario de Historia del Derecho Español, Madrid, 1967 (5-244), pág. 8.

librería norteamericana, sin que tampoco hoy pueda ser considerada como superflua, en especial, el libro de Smith.

La propia Lillian Estelle Fisher es pionera en el área de estudio de las intendencias⁶¹. Se propone en 1929 ofrecer más información sobre el sistema de intendencias en la América española; su establecimiento en las colonias españolas y en los cuatro departamentos de gobierno formalmente reconocidos; los argumentos coetáneos en favor y en contra, y, finalmente, evaluar los resultados de esta innovación. Ofrece traducida al inglés la «Real ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y provincia en el reino de la Nueva España», impresa en Madrid, en 1786, a la que califica de «Mexican legal code». En la traducción, se agrupan los artículos en párrafos referentes a la materia, y también se añaden palabras no contenidas en el documento español. Se respetan, sin embargo, unas glosas marginales de un jurista desconocido, que ha usado el libro entre 1786 y 1816, registrando los cambios observados en la práctica. Las notas originariamente impresas como glosas marginales, son referidas a los numerales y presentadas a pie de página, con ciertos materiales aclaratorios. Realmente, el libro es básicamente la presentación de la Real Ordenanza como capítulo IV, que abarca las páginas 97 a 331, precedida de una introducción, que es la que constituye los tres capítulos del libro, con un total de sólo noventa y seis páginas. La Ordenanza de Nueva España se compara con la dada para Buenos Aires en 1782 en un apéndice, pero la comparación, por lo metódica y mecánica, es, quizá, un poco inútil e infantil. El primer capítulo supone una visión del establecimiento de las intendencias, no sólo en Nueva España, sino en toda la América hispánica. De los manuales de historia del Derecho, el utilizado es el de Antequera, y el «Ensayo», de Fabié. También utiliza a Danvila, a Escriche, y a Levene, en su historia argentina.

Dentro de la historiografía anglosajona, el tema de la intendencia será reemprendido por el inglés John Lynch en 1958, quien considerará como pionera la obra de L. E. Fisher, junto con algún

61. Lillian Estelle Fisher, «The Intendant System in Spanish America», University of California Press, Berkeley, California, 1929, y Nueva York, Gordian Press, 1969. La obra es dedicada a su hermana Helen Gertrude Fisher, doctora en Filosofía y Profesor Asociado de Historia en el Colegio femenino de Iklahoma.

estudio incidental de Ravnani, y que se referirá al virreinato del Río de la Plata⁶². Otro inglés, J. F. Fisher, se ocupará en 1970 de la Intendencia en el Perú, con bibliografía que recuerda mucho la obra de Lynch. En general, la intendencia ha atraído más atención que el virreinato como obra de estudio, quizá, por ser más fácil su acotación, incidiendo franceses, españoles e hispanoamericanos.

En el área de estudio de las Audiencias, destaca como pionero Charles Henry Cunningham, estimulado a los «institutional studies» por Frederick J. Teggart, y que se ocupa específicamente de la Audiencia de Manila, pero como ilustrativa de la Audiencia hispánica, en cuanto ésta ofrece unidad para el autor, aunque reconozca la existencia de particularidades⁶³. El esquema de la obra persigue una visión general de la Audiencia de las colonias españolas; el establecimiento de la de Manila entre 1583 y 1598, las funciones judiciales, las relaciones entre Audiencia y Gobernador, la jurisdicción militar, los conflictos de jurisdicción, la interinación respecto al gobernador, el Real Patronazgo y la jurisdicción eclesiástica. Como es norma en las obras norteamericanas, y anglosajonas, en general, el índice de nombres y de conceptos es muy cuidado. La bibliografía es extensa, con nombres españoles y norteamericanos, aparte de europeos, entre los que se encuentra Desdévise du Dezert. Suministra, además, una relación de las Audiencias hispánicas por orden de aparición, desde la de Santo Domingo en 1526 a la de Vigán, en Filipinas, en 1893. De los españoles, utiliza a Altamira, Antequera, Danvila, Escriche, Fabié, Marichalar y Manrique, el Alcubilla, y también el trabajo de Francisco Mendizábal sobre la Audiencia española, que había aparecido en 1914. En suma, es una obra importante sobre el tema, que, además, creo no ha sido ni intentado superar hasta el momento presente.

62. John Lynch, «Spanish Colonial Administration, 1582-1810. The Intendant System in the Viceroyalty of the Río de la Plata». University of London, The Athlone Press, 1958. La traducción castellana se ha publicado en Buenos Aires, 1962 y 1967.

63. Vid. op. cit., en nota 6. El autor era entonces Profesor Adjunto de Historia en la Universidad de Texas. El libro apareció como vol. IX de las «Publications in History», de la «University of California», siendo sus editores H. Morse Stephens y Herbert E. Bolton.

Otra aportación anglosajona destacada sobre la Audiencia ha sido la de J. H. Parry en 1948, sobre la de Nueva Galicia⁶⁴. Es inglés, pero estimulado en gran parte por Clarence H. Haring, que le animó durante una estancia de Parry en Harvard, antes de que empezara la segunda guerra mundial. Posteriormente, y también en Norteamérica, Parry ha trabajado fecundamente sobre la venta de oficios en las Indias bajo los Austrias, habiéndose destacado en España su ponderado juicio, frente al de Esquivel, Levene, y el propio Schäffer⁶⁵. Este tema ha atraído recientemente otra colaboración norteamericana, como ha sido la de Kenneth J. Adrien en relación al Perú⁶⁶.

Otros diversos aspectos institucionales han sido objeto de colaboración muy estimable por parte del hispanismo norteamericano. Herbert Ingram Priestly ha estudiado en 1916 la visita, a través de la figura básica de José de Gálvez⁶⁷. Lyle N. Mc Alister se ha ocupado del ejército en Nueva España⁶⁸. Es fundamental en el campo de la cultura, especialmente, universitaria, la figura de John Tate Lanning, sobre todo, porque frente a la «leyenda negro» sobre España, sostiene que a fines de la era colonial, las bases aristotélicas ya habían desaparecido, y se practicaban direcciones filosóficas distintas⁶⁹. La encomienda, aparte de la ya citada

64 J. H. Parry, «The Audiencia of New Galicia in the Sixteenth Century. A Study in Spanish Colonial Government», Cambridge. At the University Press, 1948. Reprinted 1968.

65. Lo ha hecho Francisco Tomás y Valiente, «La venta de oficios en Indias» IEA. Madrid, 1972, en relación a J. H. Parry, «The sale of public office in the Spanish Indies under the Hapsburgs», University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1953, 73 págs.

66 Kenneth J. Andrien, «The Sale of Offices and the Decline of Royal Authority in the Viceroyalty of Perú. 1633-1700», H.A.H.R., 62, 1982. El autor asistente en la Universidad de Ohio, utiliza a Domínguez Ortiz, Sánchez Bella, Céspedes del Castillo y otros.

67. Herbert Ingram Priestly, «José de Gálvez, Visitor-General of New Spain, 1765-1771», University of California Press, 1916. En 1920 fue elegido para el «Board of Editors» de la H.A.H.R.

68. Lyle N. Mc Alister, «The reorganisation of the Army of New Spain, 1763-1766», H.A.H.R., 33, 1953, 1-32 El autor era entonces instructor en Historia en Florida.

69. John Tate Laning, «Academia Culture in the Spanish Colonies» N. Y. y Londres Oxford University Press, 1940. Roland Denis Hussey, H.A.H.R.,

obra de Simpson, ha atraído a otros estudiosos, aunque no hayan tenido trascendencia ⁷⁰. Los orígenes de un Consulado, como el de Guatemala, ha sido objeto de un trabajo por parte de Robert Sydney Smith ⁷¹. El repetidamente Charles Gibson, de una parte, y William Whatley Pierson jr., de otra, han atendido la institución del cabildo ⁷². Las reformas administrativas del siglo XVIII, también han atraído la atención, como en el caso de Stanley J. Stein, con base en una amplia bibliografía española ⁷³. Actualmente, se observa interés por las instituciones hispánicas en territorios que han pasado a la administración norteamericana, como es el caso del Prof. Joseph Mc Knight, de la «Southern Methodist University» de Dallas, en el estado de Tejas ⁷⁴.

Evitando el incurrir en una reseña bibliográfica, no creo necesario citar más nombres, que, indudablemente, los habrá, e importantes. Lo indicado es suficiente para justificar unas modestas notas, que lo que pretenden es destacar la importancia del hispanismo norteamericano en relación a los estudios institucionales indianos, estimulando con ello futuros estudios, dada la trascendencia del tema.

Jesús LALINDE ABADÍA

21, 1941, 624-626, saludaba la obra, diciendo que su tercer capítulo era «an english language demolition of the leyenda negra of Spanish obscurantism».

70. Es el caso de Elman R. Service, «The encomienda in Paraguay», H.A.H.R., 31, 1951, 230-273. El artículo es el resumen de una tesis doctoral en Filosofía.

71. Robert Sydney Smith, «Origins of the Consulado of Guatemala», H.A.H.R., 26-I, 1946, 150-161. De la Duke University, en 1946 había sido recientemente promovido a profesor asociado de ciencias económicas, viajando a Perú para seguir estudiando el tema del consulado. Como apéndice publicaba la petición de establecimiento de consulado, realizada en 1787.

72. Gibson, op. cit., en nota 51, y «Rotation of Alcaldes in the indian cabildo of México City», H.A.H.R., 33, 1953, 212-221; Pierson, «Some reflections on the Cabildo as an institution», H.A.H.R., vol. V, núm. 4, 1922, 573-596.

73. Stanley J. Stein, «Bureaucracy and Business in the Spanish Empire, 1759-1804: Failure of a Bourbon Reform in México and Perú», H.A.H.R., 61, 1981, 1-28. El autor es profesor en Princeton.

74. Vid, por e., J. Mc Knight, «Legitimation and adoption on the anglo-hispanic frontier of the United States», Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, LIII, 1985, págs. 135-150.

II

LA IUSHISTORIOGRAFIA ESPAÑOLA Y EUROPA EN EL UMBRAL DEL SIGLO XX*

1. *Introducción.*—En 1906, un historiador del Derecho español, Rafael de Ureña y Smenjaud, registraba como hecho simpático el que en esos momentos, Hermann Fitting, rector de la Universidad alemana de Halle, era objeto de la felicitación internacional, que se había iniciado por la Universidad de Montpellier¹. Puede ser simbólico el que el primer Congreso Internacional de Historia de la Historiografía, se haya celebrado en la misma Universidad francesa, que promoviera el homenaje a un sabio alemán, y que lo haya hecho sobre lo que podría denominarse el «umbral del siglo xx», cuando nos acercamos al «umbral del siglo xxi». Considerando poco acertado el término «Historia de la Historiografía», que pondrá en grave aprieto a los que hayan de rotular a los que en el futuro se ocupen de historiar a los actuales historiadores de la Historiografía, es, sin embargo, muy oportuno, analizar el umbral de un siglo, cuando se está cerca del umbral del siglo siguiente, y, en el presente caso, hacerlo en lo referente a la iushistoriografía española, una iushistoriografía que está marcada, en gran medida, por una apertura europeísta, como puede estarlo, y, sobre todo, como debe estarlo, la que se desarrolle en el umbral que se avecina. Las presentes notas se fijan en una corriente de atención de Europa hacia España, que es el hispanismo, el cual se ha desarrollado a lo largo del siglo xix, y que ha concluido por desencadenar una reacción correspondiente, como es la de la citada apertura europeísta.

* Las presentes notas sirvieron de base a una intervención en el I Congreso Internacional de Historia de la Historiografía, celebrado el verano de 1983 en Montpellier (Francia)

1. Rafael de Ureña y Smenjaud, «Observaciones acerca del desenvolvimiento de los estudios de Historia del Derecho Español». Madrid, 1906.

2. *El «hispanismo» como forma de proyección nacionalista.*— El hispanismo, como el helenismo, es un fenómeno cultural llamativo. En principio, parece ser, simplemente, la atracción ejercida por la cultura española sobre no españoles, como el helenismo es la atracción de la cultura griega sobre los no griegos. Sin embargo, llama la atención que otro «ismo», como el germanismo, no ofrezca las mismas características. El germanismo es la atracción que ejerce la cultura germana, pero no sólo sobre los no germanos, sino, incluso, más bien sobre los propios germanos, o lo que se consideran directamente sucesores de los germanos. Parece que en el caso del hispanismo, helenismo e, incluso, el arabismo, lo que atraen son las culturas antiguas, que provocan diversos sentimientos, especialmente, estéticos, pero en ningún caso, el de su asunción o imitación. Como en el teatro brechtiano, se mantiene el distanciamiento entre el actor y el espectador, lo que no sucede en el germanismo, donde se opera una fusión. La trascendencia del hispanismo es tal, que, en gran medida, España aparece en el exterior más bajo la óptica francesa, que bajo la propia óptica española, y para bien o para mal, en la actualidad, Carmen es más representativa de España que pueda serlo D. Quijote. Es de destacar que no existe un «galismo» o un «britanismo», pese al entusiasmo que despiertan la cultura francesa o la cultura inglesa, quizá porque en estos casos el entusiasmo está más provocado por la cultura actual que por la cultura del pasado.

En cuanto que la historia es uno de los componentes más intensamente ideológicos de la cultura, gran parte del hispanismo se desarrolla a través del cultivo de aquélla. Creo que nadie dudará que el germanismo es nacionalista, en tanto que no sé si esta convicción se produce también en el caso del hispanismo, que, a mi juicio, es también rabiosamente nacionalista, aunque de signo contrario. El hispanismo, historiográficamente, aparece como una proyección nacionalista, en la que el historiador no español estudia la historia española bajo su óptica nacionalista propia, sin deseos de subrogación en la mentalidad española. No es más parcial que el historiador español, pero tampoco, más imparcial. Es, simplemente, parcial de otra manera. Claro, que esto debe entenderse en cuanto al fenómeno general, pues, como ocurre en cualquier otro campo, existirán diferencias entre épocas y entre cultivadores

individuales. Una historia del hispanismo, que está por hacer, deberá establecer los caracteres generales del fenómeno, y detectar después los diferentes matices en su desarrollo.

Hay que conceder que el carácter nacionalista puede percibirse con más dificultad en el campo histórico, que el literario. Ello es fruto de la disciplina más rigurosa a la que se somete el historiador. El literato no impone límites a su fantasía, en tanto que lo hace el historiador. Sin embargo, la incidencia del nacionalismo de éste es mayor, pues el lector le concede mayor crédito. Por otra parte, el nacionalismo del historiador es más solapado, y se desarrolla a través de silencios u omisiones, más que a través de afirmaciones. Frecuentemente, es verdad lo que dice acerca del país estudiado, pero silencia lo que ha sucedido en el propio.

Si de la historia general pasamos a la Historia del Derecho, hay que reconocer que la proyección nacionalista se atenúa, aún más, cuando el área es intensamente jurídica, como es el caso del derecho privado, máxime si el historiador del derecho se deja llevar del estudio de la técnica, y se aleja del estudio de los fundamentos subyacentes. Por el contrario, la proyección nacionalista es más clara cuando se aborda el estudio del derecho público, sobre todo, en su vertiente política y administrativa, mucho más cercana a la historia general, que la vertiente civil.

En todo caso, el hispanismo no debe considerarse como un paso en el universalismo o internacionalismo iushistórico². Ni siquiera puede considerarse como una manifestación del llamado «derecho comparado». El hispanista no pretende comparar la evolución histórica española con la de otro país, y, menos aún, con la de su país. Puede pretender que el pasado español forma parte de su propio pasado, como es el caso de los germanistas, y de no ser así, lo único que hace es sustituir a un español por un extranjero en la observación del fenómeno español. Si el objetivo es de índole técnica, frecuentemente iguala o supera la competición indígena, en cuanto el nuevo observador suele proceder de países con técnica superior. Si el objetivo es político, puede superarlo también, pero lo que no excluye entonces son los prejuicios nacio-

2 Me he referido a ello en «La superación del nacionalismo iushistórico». I Seminario de Historia del Derecho y Derecho Privado». Universidad Autónoma de Barcelona, 1985, págs. 177-215.

nalistas, que en este caso son de signo negativo. El observador se siente atraído por lo diferente, y esto es lo que magnifica como dato. Desde el punto de vista axiológico, la valoración es, frecuentemente, negativa, aún en los supuestos de apariencia positiva. Puede declararse admirador de facetas hispánicas, cuando, precisamente, estas facetas no las admiraría en la historia de su país. La «leyenda negra» está alimentada de defectos magnificados, pero también, de falsas virtudes sugeridas al lector, para que éste las reduzca a su verdadera condición de defectos. Por otro lado, la leyenda no es tan negra como opinan los españoles, pues, frecuentemente, se ajusta a la realidad, y, además, sirve para compensar la «leyenda rosa» creada por los españoles. Su defecto reside en que no va acompañada de la leyenda negra de las patrias de los hispanistas.

3. *La procedencia europea del hispanismo iushistórico.*—No pasarán ni dos décadas del siglo xx, cuando se producirá un importante hispanismo anglosajón, especialmente, norteamericano, respecto a la colonización española en Indias (3). Sin embargo, y como era lógico, el primitivo hispanismo ha sido de procedencia europea, centrado, singularmente, en Alemania y Francia. A fines del siglo xix, la historiografía alemana ha sido más pujante que la francesa⁴, y esto es aún más predicable en el campo específico iushistórico. La Historia del Derecho español tiene origen ilustrado⁵, pero su vertiente jurídica la debe a la escuela histórica alemana, que ofrece un nutrido grupo de hispanistas. Al lado de alemanes propiamente dichos, hay que registrar los que, no siéndolo, pertenecen al mismo área lingüística, como es el caso de los austríacos. Menos importante y, sobre todo, menos escolástico, es el hispanismo francés. Se trata de figuras aisladas, y con

3. Vid. en este mismo Anuario, mi trabajo sobre «El hispanismo norteamericano en la historia de las instituciones de Indias (notas)».

4. Hay, sin embargo, matices interesantes en Charles-Olivier Carbonell, «Histoire et historiens», Privat, Toulouse, 1976, parte sexta.

5. Lo ha tocado la manualística, en general. También ha insistido en ello Bartolomé Clavero, «Leyes de la China, orígenes y ficciones de una Historia del Derecho español», AHDE LII, Madrid, 1982, 193-221. Se destaca que Burriel y Martínez Marina no son juristas. Creo que la tesis es válida, aunque se olvidan figuras de otro signo, como Ignacio de Asso, por ejemplo.

campos de trabajo diferentes. Esto les diferencia de los alemanes, que, al menos, idealmente, constituyen un equipo, pues su campo de trabajo es común, y aunque cada uno trabaje por su lado, la suma de sus obras parece una obra de conjunto.

El hispanismo alemán se inserta dentro del germanismo, e, incluso, del pangermanismo. Es de condición anticuaria, en cuanto es altomedievalista, y ello puede conferirle un aspecto inofensivo. Sin embargo, debe tenerse presente que su esfuerzo va encaminado a destacar la condición germánica del reino visigodo de España. Subyace, por tanto, un propósito ideológico, de naturaleza nacionalista, aunque sea de matiz culturalista. No es, naturalmente, que los sabios alemanes sueñen con una anexión o incorporación de España, y de hecho, algunos de ellos son claramente liberales, y adoptan posturas pro-españolas desinteresadas, como es el caso de Todoró Mommsen⁶. Sin embargo, mitifican una cultura, de la que ellos se sienten representantes, y lo cimentan con un trabajo serio, sin concesiones a la frivolidad, que lo hace todavía más peligroso. Bastará que en el futuro confluyan una serie de circunstancias históricas, para que el trabajo de la escuela, que no ha sido ajena a la creación de esas circunstancias, sirva de ideología expansionista política, como ya lo había sido antes, de ideología expansionista cultural. Es, quizá, el sino de una ciencia fuerte y compacta, como la alemana, que, en la actualidad, con signo liberal, ha sustituido el germanismo por el europeísmo, y el derecho germánico por el derecho romano⁷. En uno y otro caso, el resultado puede ser el mismo, es decir, la conservación de un gran espacio vital, en el que una población laboriosa y disciplinada como la alemana, pueda seguir siendo el elemento rector.

En el hispanismo francés, como se ha dicho, no existe la unidad de campo. Una parte se desenvuelve también en el altomedievalismo, y, posiblemente, en actitud hipercrítica, metodológicamente hablando. A diferencia de lo ocurrido con el hispanismo alemán, en el terreno anticuario no parece perseguirse la exalta-

6. Mommsen, liberal y antibismarckiano, manifestó sus simpatías por boers y españoles, en sus luchas contra ingleses y norteamericanos, respectivamente.

7. Me refiero a la línea que puede concretarse en Koschaker, Wieacker y Coing.

ción de una cultura, sino lo contrario, reducir ésta al mínimo posible. Puede hacerla más actual el hecho de aplicar también su atención a la edad moderna, a la que, políticamente, etiqueta con una denominación, como la de «antiguo régimen», que, curiosamente para mí, tiene fortuna entre los estudiosos españoles. En este caso, el fundamento nacionalista subyacente puede residir en la influencia francesa sobre España a partir del siglo XVIII. Si los alemanes pueden considerar el reino visigodo como una realización de la cultura germánica o alemana, los franceses pueden atribuir la monarquía absoluta borbónica del siglo XVIII español a creación del gremio galo, que igual la crea que la destruye, arrastrando España a la órbita francesa, aunque sea en malas copias.

El hispanismo no se reduce a Alemania-Austria y a Francia, pero en los demás casos, se trata de figuras aisladas, como puede ser en Holanda, o en la misma Rusia. En todo caso, y en cuanto a los fenómenos observados anteriormente, no debe pensarse en conjuras, ni en intenciones perversas. Los historiadores han actuado en función de valores considerados como los más elevados por la sociedad de su tiempo, y han contribuido a crearlos y desarrollarlos. El estudio historiográfico no pretende una «caza de brujas», ni una distribución de reproches y de imputaciones, sino explicar cómo han actuado los historiadores, y por qué lo han hecho así, y no, de otra manera. Esto no excluye una valoración moral o ética, si se realiza ponderadamente, es decir, considerando todas las circunstancias concurrentes, y extendiendo la valoración a todos los que hayan actuado en forma similar.

4. *La recepción española del hispanismo como método comparatista.*—Con algunas excepciones, el cuadro de conjunto de la iushistoriografía española en el siglo XIX puede calificarse de pobre, esterilizado en gran medida por una nefasta autarquía, que sólo ha tratado de romper el sector progresista del pensamiento español, que desembocará en la «Institución Libre de Enseñanza»⁸. En el umbral del siglo XX, la situación está cambiando, como

8. Vid. la manualística española, y, dentro de ella, por ejemplo, mi «Iniciación histórica al Derecho español», 3.^a ed., Ariel, Barcelona, 1983, párrafos 22 a 25.

consecuencia de la «recepción» del hispanismo, realizado, fundamentalmente, a través de Eduardo de Hinojosa, que es acompañado por Manuel Torres Campos, Rafael Altamira y Rafael de Ureña, entre otros⁹. Eduardo de Hinojosa es políticamente un conservador, y ello le ha servido de mucho, pues ha disfrutado de la ayuda del Gobierno para conocer Alemania, Francia y Bélgica¹⁰. Su condición conservadora en política no es incompatible con una postura progresista en lo cultural, lo que le permite asumir la recepción del hispanismo alemán, dando a conocer sus resultados entre 1881 y 1883¹¹. En 1901 traza una magistral semblanza de Teodoro Mommsen¹², y, posteriormente, informará ampliamente sobre la obra de Ulrico Stutz y su escuela.

Manuel Torres Campos, un ex-bibliotecario de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, y del Ateneo de Madrid, tras asumir una nueva cátedra dedicada a la «literatura jurídica», expone unas nociones de «bibliografía y literatura jurídica» en 1884, con notable erudición, en la que saluda los nuevos horizontes que abre la escuela histórica alemana de Savigny, se refiere a Blume y a Dahn, y cita la información de Hinojosa sobre el hispanismo alemán en cuanto al Derecho visigótico¹³.

9 Todo lo que se diga sobre Eduardo de Hinojosa sin especial referencia, puede verse en Alfonso García-Gallo, «Hinojosa y su obra», excelente estudio que precede al tomo I de las «Obras» de Hinojosa, Madrid, 1948, XI-CXXIX.

10. En 1887 va a estudiar a Alemania, enviado por el Ministro de Fomento, Conde de Toreno. Hacia 1885 es comisionado para estudiar el sistema de enseñanza primaria en Francia, y en 1906 reside unos meses en Toulouse. Ya en nuestro siglo es enviado a Bélgica, donde asiste en 1908 al Congreso histórico de Lieja.

11. Lo hace en «Publicaciones alemanas sobre la historia del Derecho visigótico». *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, 1881, 139-147; «Publicaciones alemanas sobre la historia de España», *Revista Hispano-Americana*, 1882, 599-608, y «Félix Dahn y sus publicaciones sobre la historia de los pueblos germánicos», *Revista Hispano Americana*, 1882, 513-527.

12. Se trata de un discurso, con motivo del homenaje rendido por Academia de la Historia al sabio alemán.

13. Manuel Torres Campos, «Nociones de bibliografía y Literatura jurídicas de España», Madrid, 1884. La parte primera es la «Bibliografía jurídica», y lo desarrolla como «lecciones», dentro de las que la séptima está dedicada a la Historia del Derecho español. En nota 2, pág. 53, cita el artículo de Hinojosa en la *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*. Torres Campos censura a Marichalar, en tanto que respeta a Colmeiro

La altura intelectual de Rafael Altamira` tiente a poder ser contrapuesto a Eduardo de Hinojosa¹⁴. Sin embargo, no hay lugar a ello. El propio Altamira, liberal y progresista, ha admirado sin reservas a Hinojosa, conservador y progresista. La vocación filosófica de Altamira es superior a la de Hinojosa, pero se apoya en unas condiciones como historiador, indudablemente, inferiores. Tanto como Hinojosa, pues más no es posible, Altamira participa en la recepción del hispanismo. Exalta a los hispanistas, y hasta propone una asociación internacional de cultivadores de la historia jurídica española. Para Altamira, los historiadores extranjeros pueden estudiar mejor que los españoles algunas parcelas, como la denominación romana y goda, y los estimula¹⁵. Es más, colabora idealmente con ellos, al prevenirles contra la utilización de algunos historiadores españoles¹⁶. Conoce a alemanes, franceses y rusos¹⁷. Considera que los hispanistas se dedican a la historia literaria y a la externa política y militar, porque siguen a los autores nacionales no recomendables¹⁸.

14. Algo se trasluce en mi Panorama incompleto de la iushistoriografía argentina», Anuario de Historia del Derecho Español, Madrid, 1979, 665-702, al observar el paradójico emparejamiento de Carlos Octavio Bunge con Hinojosa y de Levene con Altamira. Induce a ello también la contraposición política y filosófica. La posición de Altamira se simboliza en su dedicatoria de las «Cuestiones de Historia del Derecho y de legislación comparada», Madrid, Sucesores de Hernando, 1914. Esa dedicatoria se hace a Gumersindo de Azcárate, «maestro en el aula, en el libro y en la vida». También dedicará una obra a Hinojosa. Sobre Altamira debe verse la semblanza hecha por Luis G. de Valdeavellano.

15. Altamira, op. cit., págs. 12-13.

16. En op. cit. previene contra Antequera, Marichalar y Manrique y Lafuente. Tampoco deja bien parados a Colmeiro, Danvila y Cárdenas. Vid. en nota 13 la opinión de Torres Campos sobre Marichalar y Colmeiro.

17. En op. cit., pág. 14, recuerda a Fitting, Ficker, Du Boys, Piskorski, Calmette, Brutails, Barreau-Dihigo y Allen. También conoce perfectamente a los germanistas, como Dahn o Zeumer, según puede verse en «Historia del Derecho español», Madrid, Victoriano Suárez, 1903. También maneja con soltura a los principales teóricos, como Xénopol, Croce, Gierke, Marx o Lamprecht.

18. Lo considera culpa de los principios españoles, e insiste en su crítica a Marichalar y Manrique o a Antequera. El se sitúa a sí mismo en la línea de Martínez Marina, Muñoz y Romero, Joaquín Costa y Eduardo de Hinojosa

Rafael de Ureña es un gran erudito, que comienza siendo profesor de Derecho político, para asumir la cátedra de Historia de la Literatura Jurídica española. A él pertenece una frase, que ha sido repetida como un «ritornello» entre muchos de los historiadores del derecho actuales, como la de que «la Historia de nuestro Derecho está por hacer»¹⁹. Conoce perfectamente a todos los autores alemanes, y habla de la «doctrina historicista» de Dahn²⁰ o califica de «poderoso movimiento científico» al que en el siglo XIX tiene lugar en Alemania respecto a la epigrafía jurídica hispanorromana²¹. Se ocupa de los «*Monumenta Germaniae Historica*» y su incidencia en el estudio de la legislación gótica hispana. Encabeza los germanistas alemanes con Weber en 1822, que estudia la «*Lex Visigothorum Ervigiana*» en el *Codex Parisinus*, Lat. 4418, y al que sigue el impulso del malogrado Knust entre 1839-1841, para seguir con la publicación del palimpsesto de París por parte de Blume en 1847 y cerrarse con Carlos Zeumer, y sus ediciones del «*Liber Iudicorum*» en 1894 y 1902²². Destaca a Helfferich en 1858, y a Félix Dahn, profesor de Breslau, jurisconsulto, historiador, dramaturgo y poeta, al que califica de «otro Echeagaray»²³. También destaca a Ficker, en sus trabajos de 1886 sobre los «*Usatges*» de Barcelona, y de 1887, sobre el parentesco del derecho español con el noruego-islandico²⁴. La atención de Ureña se centra también en los franceses, entre los que destaca al magistrado De Lagrèze, cuya obra no se limita a la Navarra francesa, y cuya *Historia del Derecho* dice ser «única en su género». También se ocupa de Gounon-Loubens, que escribe en 1860; Du Boys, que lo hace en 1870; Desdevises du Dezert, del que hay trabajos en 1897 y 1904; y Du-Hamel, que es traducido entre 1845-46. No olvida a Barrau-Dihigo, impulsor de la «*Revue Hispanique*», en la que trabaja en 1900²⁵.

19. Ureña, op. cit., pág. 10

20. Id., íd., pág. 13.

21. Id., íd., pág. 124. No descuida a las figuras españolas, como Manuel Rodríguez Berlanga, a quien rinde homenaje.

22. Id., íd., pág. 125.

23. Id., íd., pág. 126.

24. Id., pág. 130. También lo habían hecho Altamira, op. cit., en nota 17, página 85, nota 2.

25. Ureña, op. cit., págs. 132-133.

Como puede verse, no hay una postura recelosa española frente al hispanismo. Los autores señalados se declaran partidarios del método comparado, y para ellos, el hispanismo es una manifestación de éste, según expresan directa o tácitamente. Sería erróneo obtener la conclusión de que la iushistoriografía española de la época ha superado el nacionalismo. Desde luego, creo que éste no se encuentra en un momento de exarcebación, consecuencia de una decadencia política manifiesta. La decadencia política conduce a una amarga renuncia al «patriotismo» o forma agresiva del nacionalismo, que se acentúa en 1898, con la pérdida de las últimas colonias en América, pero que está presente a lo largo de casi todo el siglo XIX. Por otro lado, el germanismo no suscita reacciones nacionalistas en España, a diferencia de lo que hubiera provocado un «galismo» o un «britanismo». Alemania no es un vecino, como lo es Francia, ni tampoco una potencia que haya socavado el poderío español, como lo es Inglaterra. Todavía hoy sigue doliendo en España mucho más cualquier actuación francesa o inglesa, que su correspondiente alemana.

Sin embargo, creo que lo que más nos interesa destacar en la recepción del hispanismo es la ausencia de historiografía científica, es decir, de lo que aquí se denomina «historia de la historiografía». En ese momento, la historiografía queda reducida a la información sobre las corrientes históricas, y dentro de ellas, el hispanismo, pero sin sumisión a una crítica de sus fundamentos. El propio marxismo no ha profundizado en la condición ideológica de la historia, porque, incluso, ni siquiera se ha hecho en el momento actual²⁶. Sólo se detectan los casos que podríamos llamar más groseros, cuando éstos son los menos corrientes, y, desde luego, los menos peligrosos, en cuanto más llamativos.

La ausencia de una ciencia historiográfica ha permitido el triunfo del germanismo, que lo hace en más de una dirección. Joaquín Costa, miembro de la Institución Libre de Enseñanza», y uno de

26. Lo he intentado en trabajos como «Apuntes sobre las ideologías en el Derecho histórico español», XLV, 1975, 123-157; «Notas sobre el papel de las fuerzas políticas y sociales en el desarrollo de los sistemas iushistóricos españoles», AHDE, XLVIII, 1978, 249-268, «Una ideología para un sistema», Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno 8/1979, Milán, 1980, 61-156.

los más inquietos pensadores, parece caer en la órbita de Otto von Gierke²⁷, quizá, porque su pertenencia al krausismo le conduce al organicismo que rezuma el autor alemán. Hinojosa es el más claro representante del germanismo en España. Las obras de conjunto que inicia en 1880 sobre la historia del derecho romano, y en 1887 sobre la historia del derecho español, son fruto del impacto recibido en su primera visita a Alemania. Uno de sus más finos trabajos, como es el que versa sobre la recepción del derecho romano en Cataluña, se publica en el homenaje a Fitting, como se sabe, un hispanista alemán²⁸. Su trabajo más influyente, por su base metodológica o iusfilosófica, está escrito en alemán y versa sobre el elemento germánico en los derechos españoles²⁹. La pérdida de cualquier trabajo de Hinojosa nos le hubiera dejado incólume, salvo la pérdida de esta comunicación en alemán y a un Congreso celebrado en Alemania.

El germanismo se enseorea de la Historia del Derecho español. Leibnitz había distinguido una historia externa del Derecho y otra, interna. Era la primera, lo que podríamos denominar trascendente, es decir, la que aparecía más allá del propio Derecho, fundamentalmente, la historia general o social de los pueblos, en cuanto explicativa de la generación de los ordenamientos. La escuela histórica del Derecho alemana transforma en inmanente la historia externa, que ya no se encuentra fuera o más allá de la historia del derecho, sino dentro o más acá. Historia externa o historia interna no son ya dos conceptos de naturaleza diferente, sino dos aspectos de la evolución inmanente del Derecho. Esa revolución metodológica se atribuye a Klimrath, un discípulo de Thibaut, quien influye en los españoles a través de

27. Según Altamira, *op cit*, en nota 17, pág. 62, nota 1, que sitúa a Giner junto a Costa.

28 El trabajo, titulado «La reception du Droit romain en Catalogne», se publica en el tomo II de los «Mélanges Fitting» Montpellier, 1908, y será versión castellana de Guillermo María de Brocà. Fitting trabajó sobre la «interpretatio» en el Breviario de Alarico. Sobre todo esto, recuérdese el trabajo citado de A. García-Gallo.

29. El título es «Das germanische Element in spanischen Recht». Leído el 12 de agosto de 1908 en el Congreso de Berlín, se publica en la «Zeitschrift der Savigny-Stiftung», 1910, 282-359, ampliada y traducida por R. Köstler. La versión castellana publicada es de Galo Sánchez.

los franceses³⁰. Su éxito es total en España, incluso, entre los que se resisten a haber aceptado ese cambio, pues en ellos, la historia externa en el sentido de Leibnitz, se ha anquilosado³¹. A partir del momento en que la historia externa se hace inmanente, puede resultar paralógico su mantenimiento³², pero esto no es problema para discutir aquí.

El germanismo triunfa en lo material, a través de Hinojosa, que no es resistido por nadie en su momento. Los resultados pueden encontrarse sintetizados en un discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que tiene lugar en 1923, y que procede de un doctor en Derecho y Filosofía por la Universidad de Heidelberg, como es Fr. W. von Rauchhaupt³³.

El Código de Eurico resulta ser una primera codificación del derecho consuetudinario oral de los godos. El derecho germánico se introduce por los visigodos en el año 416, y encuentra un medio ambiente predispuesto en el derecho de la población indígena, en estado de cultura primitiva, con similitud en las tribus inmigrantes. El Fuero Juzgo es una «Ley germánica», e ideas germánicas se encuentran en los fueros municipales del siglo XI al XV, y en las leyes de Toro. Es cierto que el derecho germánico cae en el olvido frente a las Partidas, pero su conocimiento resurge en la segunda mitad del siglo XVIII, si bien «desgraciadamente», este renacimiento del derecho germánico no da frutos, porque el nuevo derecho francés pasa a primer plano. Todas estas y otras ideas, condensadas en este hispanista alemán, han sido desmontadas en las últimas décadas, pero con muchos esfuerzos, y su huella no se ha borrado completamente. Es más, no se borrará durante siglos, quizá, en un «nunca» histórico. El ger-

30. Así lo hace Altamira, op. cit., págs. 36-37.

31. Me refiero a las bases políticas y sociales que desarrolla la manualística española iushistórica con anterioridad a la guerra civil de 1936-39.

32. Así lo comprendió A. García-Gallo en su «Manual de Historia del Derecho español», y yo mismo, aún más acentuadamente, en «Derecho histórico español», cuya 3.ª ed. ha aparecido en 1983. Curiosamente, esta postura tiene apoyo metodológico en Altamira, quien en op. cit. dice que la solución del conflicto sería que la ley, costumbre y jurisprudencia, se nos mostrarán como fenómenos no menos internos que las instituciones.

33. Fr. W. von Rauchhaupt, «Estudio comparativo entre el desarrollo del Derecho español y el alemán», Madrid, Reus, 1923.

manismo ha dejado de ser en España una tesis o un modo de conocer, y ha devenido un elemento paralógico en la evolución de su derecho.

5. *La apertura europeísta de la iushistoriografía española bajo el estímulo del hispanismo.*—Ya se ha indicado que la iushistoriografía española no adopta una postura recelosa frente al hispanismo. Lo que éste ampara es una apertura europeísta, ya que no puede decirse que sea quien lo provoca. Sin hispanismo, la apertura se hubiera producido también. Con el hispanismo, la apertura se ha agilizado. Pérez Pujol, una de las honrosas excepciones del período autárquico, ha aprendido el alemán para conocer la obra de Félix Dahn. Hinojosa ha aprendido varios idiomas europeos, frecuentemente, por la vía del autodidactismo, como el francés, el alemán o el inglés, y, especialmente, entre 1899 y 1900, ha iniciado el aprendizaje del ruso, para leer el trabajo de Wladimiro Piskorski, profesor de la Universidad de Kiel, sobre los «malos usos» en Cataluña³⁴. Sin el hispanismo, los españoles se hubieran internacionalizado especulativamente. Merced al hispanismo, la internacionalización se ha tenido que producir en el terreno práctico de la lectura de otros idiomas.

El internacionalismo de los iushistoriadores españoles se manifiesta en su presencia en reuniones y publicaciones extranjeras, así como en su atención a temas supranacionales. En el primer aspecto, hay que tener en cuenta los Congresos Internacionales de Ciencias Históricas. El de Roma, de 1903, parece haber sido seguido de lejos. Altamira cita una memoria de Moritz Hartmann sobre evolución histórica, y, sobre todo, el que sirve de protesta por una disminución de los estudios histórico-jurídicos en Italia, que personalizan figuras tan prestigiosas, como Pascuale del Giudice, Landucci, Gierke, Leonhard y Saleilles³⁵. El Congreso que representa una especie de consagración española en el ámbito internacional, lo constituye el de Berlín, en 1908. Como se ha indicado, en él presenta Hinojosa su trabajo fundamental sobre el elemento germánico en los derechos hispánicos, y también Altamira presenta su comunicación en la sección de «Historia

34. Esos datos pueden verse en el trabajo cit. de A. García-Gallo.

35. Altamira, op. cit., pág. 146

jurídica», cuyo texto francés se publica en el «Bulletin Hispanique» en 1909, para terminar siéndolo en castellano en 1914, debidamente completado³⁶.

En el terreno de las publicaciones, y como en un codo a codo, Hinojosa y Altamira publican en el Homenaje a Fitting, en 1908³⁷. Una vez más se advierte la diferencia. Hinojosa publica un trabajo de historiador, como es la recepción del derecho romano en Cataluña, en tanto que Altamira muestra su vocación por la iushistoriografía, ocupándose de los vacíos en el estudio del Derecho romano en España. Mientras el uno detecta los huecos de la investigación, el otro, en este caso, Hinojosa, trata de cubrirlos. Pero Altamira publica también en Alemania³⁸, y más tarde lo hará en Norteamérica, compartiendo, en cierta manera, la representación de Europa³⁹, y demostrando con ello, su vocación internacionalista. Esta vocación conduce a Hinojosa a pronunciar conferencias en el Ateneo de Madrid, en el curso 1898-99, sobre la «Historia de la esclavitud y de la servidumbre de la gleba en Europa»⁴⁰.

La europeización se manifiesta también en la actividad traductora. J. Castillejo, pensionado en 1903 por la Universidad de Oviedo, traduce en 1910 la «Filosofía del Derecho e Historia General del Derecho», de Kohler⁴¹, autor, cuyas teorías, junto con las de Blackstone, Maine y Post son expuestas en los seminarios que desarrolla Altamira en la citada Universidad de Oviedo⁴². Otro

36. Es el primero de los tres trabajos que integran la obra de Altamira, cit. en nota 14.

37. El trabajo de Altamira sobre «Los vacíos en la Historia del Derecho romano en España, se publica en los «Mélanges Fitting».

38. Con el título «Das römische Recht in Spanien», Altamira publica en «Studien zur Erläuterung des Bürgerlichen Rechts», Breslau, 1906. Con el tiempo, Altamira será magistrado internacional, y su vida concluirá en México.

39. Altamira publica un capítulo dedicado a España en la «Continental Legal History Series», de la «Association of American Law Schools». Lo hace en el primer volumen, titulado «A General Survey of Events, Sources, Persons and movements in Continental Legal History». Se publica en Boston en 1912.

40. Informa Ureña, op. cit., pág. 109.

41. Vid. Altamira, op. cit., en nota 14.

42. Vid. op. cit., págs. 349-381, donde, bajo la rúbrica «Trabajos de inves-

miembro de esta Universidad, que desempeña un papel rector en aquel momento, y que es conocido como uno de los más grandes literatos españoles, Leopoldo Alas, prologa la traducción de «La lucha por el Derecho», de Ihering⁴³. Rafael Atard, auxiliar de la Dirección General de los Registros y del Notariado, traduce en 1908 trabajos de Savigny, Eichhorn, Gierke y Stammler, en cuanto constitutivos de la Escuela Histórica del Derecho⁴⁴.

Entre las traducciones, y por la personalidad de los que intervienen, hay que destacar la de «Los principios filosóficos de la Historia del Derecho», de Pedro de Tourtoulon, profesor de la Universidad de Lausana, miembro del Instituto de Derecho Internacional y discípulo de M. Brocher de la Fléchère, también profesor de Ginebra y de Lausana. Tourtoulon es dado a conocer en España por Gumersindo de Azcárate, catedrático de la Universidad de Madrid, y uno de los miembros más importantes de la Institución Libre de Enseñanza. Ramón Carande, uno de los futuros creadores del «Anuario de Historia del Derecho español», y una de las figuras más prestigiosas de nuestra Historiografía recientemente fallecido, es quien toma la iniciativa de traducir a Tourtoulon, al oír la explicación de su libro por parte de Azcárate, lo que realiza en 1909⁴⁵. Por su parte, Altamira traduce una

tigación personal en la Cátedra» informa sobre los cursos 1903-04, circunstanciadamente, indicando incluso, el alumno que intervino. Eran trabajos de seminario, con un número de quince a veinte inscritos.

43. Informa Altamira en op reseñada en nota 17, pág. 9, nota 1.

44. La obra se publica bajo el título de «La Escuela histórica del Derecho. Documentos para su estudio por Savigny, Eichorn (sic), Gierke, Stammler». Madrid, Victoriano Suárez, 1908. De Gierke dice que pertenece a la segunda rama del historicismo, pero en cuanto discípulo de Beseler no está alejado de la escuela histórica, a diferencia de lo que sucede con Ihering y Merkel. A Stammler, profesor de Halle, lo califica de «jurista filósofo». El trabajo de Stammler se titula «Sobre el método de la teoría histórica del Derecho».

45. Desde Renens (Lausana), Tourtoulon dirige una carta a Carande, agradeciéndole el que le de a conocer al público español, y a que «uno de los más ilustres profesores de la Universidad de Madrid», con lo que se refiere a Azcárate, haya tenido a bien explicar su libro. La carta es de 25 de septiembre de 1909. Por su parte, Gumersindo de Azcárate escribe a Carande en 30 de septiembre de 1909, respondiendo a su deseo de opinión sobre el propósito de traducir la obra de Tourtoulon, lo que celebra. Azcárate con-

lección inaugural de G. Des Marez, investigador de historia jurídico-económica, con cátedra en la Sección de Ciencias Sociales, de la Universidad Libre de Bruselas ⁴⁶.

El panorama metodológico de la época no difiere mucho del actual, en el sentido de que nuestro tiempo no ha planteado direcciones nuevas. Es posible que, algunas veces, nos sintamos orgullosos de nuestras reflexiones, pero la verdad es que ya han sido realizadas anteriormente, aunque nosotros las hayamos re-creado, por no haberlas conocido, como era nuestro deber. Lo que inquieta en el umbral del siglo XX, como me parece que seguirá inquietando en el umbral del siglo XXI, es si el Derecho es un producto político, económico-social o cultural, y si el ordenamiento más eficaz es el racional o el histórico.

La contraposición entre el Derecho como producto político y como producto cultural se ha concretado en el siglo XIX en la tensión entre la «escuela histórica política» y la «escuela histórica moderna». La primera, representada por Ranke, ha producido en Alemania y Países Bajos y en el campo del Derecho, la «Historia del Estado y del Derecho» ⁴⁷. La segunda hace nacer la «Historia de la Cultura», y ambas posiciones se enfrentan en 1888 y 1889, a través de Schäfer y Eberhard Gothein ⁴⁸. Altamira, siempre preocupado por el concepto de la disciplina, se afilia a la escuela histórica moderna, lo que no parece preocupar a Hinojosa, siempre más atento a hacer historia del derecho que a definirla. Estas dos posiciones se siguen manteniendo en nuestros días. En la

fiesa que, aunque no está conforme con todas las doctrinas de Tourtoulon, le cautiva el rigor científico, la originalidad, la eduridición, y la imparcialidad, exenta de todo espíritu sectario. Azcárate se muestra de acuerdo con Tourtoulon en que la historia conciliará las dos teorías, la racionalista y la tradicionalista, y cree que la vida jurídica, como la vida, en general, es «sucesiva y continua». El krausista español denomina «nomotesia» a la ciencia de la legislación.

46. Altamira, en op. reseñada en nota 17.

47. Se trata de la «Staats und Rechtsgeschichte», que en Warnkonig es la «Flandrische Staats und Rechtsgeschichte».

48. Se trata de la «Kulturgeschichte». La posición de Schäfer se contiene en «Das eigentliche Arbeitsgebiet der Geschichte», y la de Eberhard Gothein en «Die Aufgaben der Kulturgeschichte». La polémica es recensionada por H. Pi enne, siempre según Des Marez.

Unión Soviética y en los países del socialismo realista, parece seguirse un cerrado positivismo político, a través de la conocida como «Historia General del Estado y del Derecho», en tanto que en los países democráticos occidentales, especialmente en la República federal alemana, se abre paso una «Historia del Derecho Privado», de naturaleza idealista, y en la que el Derecho es un producto cultural, hasta el punto de concebirse como posible la existencia de un derecho histórico europeo⁴⁹.

Por influencia, especialmente del marxismo, el Derecho aparece también como un producto socio-económico, postura que en el umbral del siglo xx sintetiza Karl Lamprecht, profesor de Leipzig, acusado de «materialista» por los que se califican a sí mismos, de «idealistas», y también por Hildebrand, de la Universidad de Gratz, quien en 1896 explica la evolución del Derecho a través, exclusivamente, de las circunstancias económicas⁵⁰. Es curioso que, aún destacando las diferencias, Altamira sitúa a Hinojosa en la dirección de Marx, Lamprecht y Hildebrand⁵¹, y que él mismo emplee la expresión «grupo dominante»⁵². Desde luego, considera la concepción social y económica del Derecho como problema «palpitante», y que «apasiona» a sociólogos y juristas. Es indudable que Hinojosa y sus discípulos más directos han reservado siempre un lugar a las circunstancias sociales y económicas en sus exposiciones históricas, pero su confesionalismo les aleja totalmente de cualquier explicación materialista de la evolución

49 El título de la primera concreción es en polaco «Powszechna historia państwa i prawa», y en rumano, «Istoria generală statului și dreptului». Algunos de sus principales representantes son los polacos Karol Koranyi y Michel Scznieski, y el rumano Wladimir Hanga. La segunda concreción es la de la «Privatrechtsgeschichte», cuyos principales representantes son los citados en nota 7, y que ha dado lugar a una monumental obra del Instituto Max-Planck para la historia del Derecho europeo, de Frankfurt sobre el Main, dirigida por Helmut Coing

50. La obra de Lamprecht es la «Deutsche Geschichte», entre 1891 y 1895. La de Hildebrand es «Recht und Sitte auf den verschiedenen wirtschaftlichen Kulturstufen», publicada en Jena, en 1896. Des Marez se opone a Hildebrand, como también lo hace a Mayer, «Deutsche und französische Verfassungsgeschichte von 9 bis zum 13 Jahrhundert», Leipzig, 1899, en cuanto a este último por retornar en exclusividad a los libros positivos

51. Altamira, op. cit., en nota 17

52. Id., id., pág. 25

jurídica. El propio Altamira, menos vinculado confesionalmente, tampoco ha seguido la vía materialista. Posiblemente, en la escuela directa de Hinojosa las circunstancias sociales y económicas tienen un carácter más cultural que propiamente socio-económicas, y esto es lo que explicaría lo que de otra manera tiene que resultar paradójico. En todo caso, algo parece indudable, y es que en el umbral del siglo XXI la iushistoriografía española seguirá debatiéndose en las mismas dudas en las que se debatió en el umbral del siglo XX, y ello por renunciar a unas bases filosóficas sólidas de partida, refugiándose en un «positivismo histórico-jurídico», como es el de limitarse a una descripción de la realidad, o de las apariencias de la realidad.

Jesús LALINDE ABADÍA

III

AMOS Y SIRVIENTES, ¿PRIMER MODELO CONSTITUCIONAL?

Je ne veux faire aucun tort à la classe laborieuse. Cette classe n'a pas moins de patriotisme que les autres classes... Mais autre est, je le pense, le patriotisme qui donne le courage de mourir pour son pays, autre est celui qui rend capable de bien connaître ses intérêts. La propriété seule rend les hommes capables de l'exercice des droits politiques.

BENJAMIN CONSTANT, 1815

Pendant longtemps le Code civil a été considéré, dans l'opinion générale des historiens et des juristes, comme une législation démocratique. Cette légende a été peu à peu détruite. Même en s'en tenant à la doctrine individualiste du XVIII^e siècle et de la Révolution, le Code civil ne peut être considéré comme ayant été fait dans un but démocratique, c'est-à-dire en vue d'accorder à toutes les personnes une égale protection de leurs intérêts privés.

ALBERT TISSIER, 1904

Ya se sabe que el constitucionalismo actualmente se halla bien distante de sus formas primigenias, las que históricamente se impusieron tras las revoluciones llamadas liberales, mas asunto tan pacífico no resulta el del alcance y la significación de dicha misma toma de distancia. ¿Constituyen, el actual y el primero, modelos constitucionales realmente distintos, de supuestos doctrinales heterogéneos, estructuras políticas diversas y sustentos sociales diferentes, o trátase tan sólo de fases, ciclos, vaivenes o altibajos de un mismo diseño? Aunque la pregunta como tal no suela ciertamente plantearse, es la segunda perspectiva, con sus variantes, la que claramente prevalece en las exposiciones al uso; la primera sirve de guía a mi manual de evolución histórica del constitucionalismo español. Alicia Fiestas, reseñándolo¹, discute

la misma «clave», como bien dice, de los modelos, con severas alegaciones. Una respuesta se debe.

El primer modelo constitucional realmente operativo, aparte ensayos, se caracterizaba esencialmente a mi entender por una sustancial reducción del liberalismo al campo civil de propiedad y mercado, con sus secuelas de fuerte restricción o incluso abierto repudio de libertades públicas y de más mitigado confinamiento de la clase trabajadora a una posición todavía prácticamente servil o de singular privación de derechos. Este último elemento, aunque más solapado, resultaba lógicamente de particular significación para mi argumento. A él interesa precisamente en especial la crítica de Fiestas.

Indicaba por mi parte que tal especie de discriminación ya al menos la posibilitaba la constitución de 1812, con su suspensión de los derechos ciudadanos «por el estado de sirviente doméstico», y que por ella más resueltamente se optó durante el Trienio, con el testimonio del proyecto de código civil de 1821 reputando como tal sirviente a quien «presta servicios puramente mecánicos en favor de otras personas como objeto principal de su ocupación». Se encontrarán fórmulas más viables con el régimen de sufragio censitario, más restrictivas también como no deja de subrayar Fiestas, pero en dicho motivo, a mi entender, ya se manifestaba paladinamente un signo bien definitorio del primer modelo constitucional.

Mas no entiende Fiestas que tales expresiones deban propiamente referirse a la clase trabajadora; a tal efecto recuerda la prosecución de dicho proyecto de código en su artículo 79, del que se trataba: «La ley no considera por servicios mecánicos las labores del campo, el ejercicio de las artes, oficios, comercio y otro cualquier género de industria o granjería; la enseñanza y educación de la juventud; el empleo en oficinas de administración, contabilidad u otros semejantes»; item más, a colación trae una orden de 24 de junio de 1821, que yo desconocía, todavía más concluyente, si falta hiciera: «Las Cortes... se han servido declarar que bajo la referida voz sólo deben comprenderse los criados que estipulen o contraten prestar a las personas de sus amos como objeto principal algún servicio casero y puramente mecánico».

1 *Anuario de Historia del Derecho Español*, 55, 1985, pp. 837-842

Por mi parte, también me refería en su momento al código de 1889, asegurando que sustancialmente mantenía la composición discriminatoria, con su asimilación bajo un mismo título del contrato de trabajo y del servicio doméstico. Era para mí esto un signo de que, en un modelo constitucional ya políticamente liberal, aún predominaba el liberalismo civil de propiedad y mercado, con la correspondiente desconsideración entre las libertades públicas de las específicamente laborales. Fiestas por su parte arguye que dicha asimilación entre servidumbre y contrato de trabajo sólo existiría en mi imaginación, distinguiendo a su entender netamente el código, como figuras de «arrendamiento de servicios», el de los «criados domésticos» y el de los «trabajadores asalariados». La distinción ya vendría incluso de otros proyectos del XIX.

Las cosas así, ¿de dónde me sacaba la significación de una concepción servil del contrato de trabajo para la distinción de pretéritos modelos constitucionales? Fiestas no llega a impugnar frontalmente mi figuración de modelos, pero, con su crítica de un extremo bien sensible, el montaje cuando menos se resiente, resquebraja y tambalea. ¿Qué cimientos le sostenían? La explicación se debe.

No ha sido de entrada invento mío; el mérito no me corresponde. Ya lo fue, invento y mérito, de la misma historia, conduciéndonos a otras latitudes, como suele. Allá por el siglo XVII, durante la revolución inglesa, nuestra cuestión se suscita, habiendo quien defiende, y no precisamente entre las fuerzas contrarrevolucionarias, la denegación de derechos políticos a los asalariados; en concreto, son los *levellers* o niveladores que hacían honor a su nombre pugnando efectivamente por una extensión del sufragio, como de otras formas de participación política, quienes más significadamente adoptan esta reserva. Imperaban planteamientos más restrictivos que ni siquiera se acercaban a su supuesto; tampoco faltaban los que en otra dirección sobrepasaban a estos niveladores, pero desbordando también entonces alguna perspectiva que pudiera decirse constitucional².

2 CHRISTOPHER HILL, *El Mundo Transtornado. El ideario popular extremista en la Revolución inglesa del siglo XVII* (1972), Madrid 1983, p 110, ya con traducción vacilante del calificativo constitucional.

Macpherson, que se ha interesado en nuestro punto, ofrece sus explicaciones: «Los *levellers* en ocasiones se manifestaban como si a todos los hombres hubiera de corresponderles un derecho igual al voto», pero ya solían entender la excepción de «sirvientes y mendigos», y de los primeros por cuanto que «habían enajenado el uso y la aplicación de sus capacidades al suscribir el contrato de trabajo asalariado» o así «habían perdido la propiedad de su trabajo»; «los *levellers* consideraban la libertad como una función de la propiedad de la propia persona» o «de la conservación de la propiedad del trabajo», propugnándose para otro caso una pérdida de derechos que así podía no sentirse en contradicción con los propios principios más igualitarios³.

Ante posibles dudas, Macpherson puntualiza: «El término *servant*, en la Inglaterra del siglo xvii, designaba a todo aquel que trabajara para un patrono a cambio de un salario»⁴; y tampoco entre historiadores faltan quienes desbordan: «*Servants* eran en suma —concluirán otros— aquellos a los que hoy llamaríamos asalariados, obreros, trabajadores o, en fin, proletarios... Lo cual pone en evidencia —apostillarán— que los niveladores, lejos de sostener el sufragio universal, daban por descontado que siervos y mendigos, esto es, proletarios y desposeídos, quedaban excluidos del derecho electoral»⁵. Si cuestión en aún de denunciar a aquellos benditos precursores, ya es curioso que se olvide la exclusión más primaria de las mujeres, pero sigamos todavía con nuestro preciso punto de la ecuación entre sirvientes y trabajadores, que él mismo nos llevará enseguida a otros.

Estos niveladores, en palabras de Christopher Hill «aceptaban la santidad de la propiedad privada, recluyéndose su deseo de extender la democracia dentro de los límites de la sociedad capitalista»⁶, con lo cual parece además presumirse que en el capitalismo por definición otra cosa no cabe. ¿No estamos saltando de época, forzándose la historia? Si guardamos un respeto aunque

3. C. B. MACPHERSON, *La teoría política del individualismo posesivo* (1962), Barcelona 1970, pp 127-131

4. C. B. MACPHERSON, *Individualismo posesivo*, p. 240.

5. MAURO SAGATORI, *Proprietari e cittadini nella polemica ideologica dei Livellatori*, p. 145, en M. Tronti (ed.), *Stato e Rivoluzione in Inghilterra*, Milán 1977, pp 101-181.

6. C. HILL, *Mundo Transtornado*, p 112, con traducción literal.

sólo sea a la cronología, las ecuaciones tampoco resultan tan evidentes. La cuestión ya debe devolverse a su tiempo, como por lo demás tampoco ha dejado de hacerse: «El fundamento de la exclusión de los *servants*... era el mismo —se nos explica— que para las mujeres y para los niños... Los niveladores no intentaban cuestionar los presupuestos de la sociedad patriarcal en la que vivían: el voto era de familia, ejerciéndolo su cabeza por sus sirvientes del mismo modo que por su mujer y por sus hijos. Y esto tampoco dejaba de relacionarse con un motivo de independencia, puesto que, conforme a la estructura dada de poder en la familia, mujeres y *servants* no podía esperarse que votaran de otro modo que el determinado por su *master*» o amo⁷. En otros términos, tan sólo comenzaba entonces a pugnar por introducirse en el derecho, y en el civil antes que en el político, la misma noción individual de persona como sujeto⁸.

Parece entonces que nuestra cuestión pertenecía más al pasado que al futuro, reduciéndose su alcance; hay desde luego quienes todavía pretenden que ni siquiera entonces tuvo mayor significación⁹. Reducido al menos parecía ciertamente que habría de ser su efecto en la perspectiva de los mismos niveladores, pero ya a su modo. No habiéndose todavía generalizado, ni con mucho, el régimen de trabajo asalariado, las previsiones podían ser otras, como la de que esta forma de enajenación se redujera efectivamente al ámbito doméstico. Era una visión ciertamente anclada en un pasado todavía presente, pero también constituía una imagen de futuro, de un futuro que no advendría. La utopía niveladora se forjaba una especie de democracia de padres de familias económicamente autónomas y políticamente iguales, en cuyo cuadro alcanzaba efectivamente su sentido la aparente contradicción entre defensa de un sufragio general y denegación de derechos a mujeres

7 BRIAN MANNING, *The English People and the English Revolution*, Londres 1976, pp. 311-312; traducido, ya el arranque de KEITH THOMAS, *Las mujeres y las sectas de la guerra civil* (1958), en T. H. Aston (ed), *Crisis en Europa, 1560-1660*, Madrid 1983, pp. 326-349.

8. HANNA F. PITKIN, *El concepto de representación*, Madrid 1985, pp. 15-39; B. CLAVERO, *Tantas Personas como Estados. Por una antropología política de la historia europea*, Madrid 1986, pp. 74-83.

9. PEREZ ZAGORIN, *Rebels and Rulers, 1500-1660*, Cambridge 1982, II, p. 165 (edición castellana en curso; segundo volumen, para 1986).

y trabajadores no autónomos. Estos son los *servants*, «dependientes»; su ecuación con proletario todavía puede regir, pero respecto a una sociedad, como a un modelo político, que no seguiría ciertamente a las revoluciones liberales europeas.

El modelo de *master y servant* para la relación de trabajo no ha sido tampoco exclusivo de una determinada corriente política entre las generadas por la revolución inglesa; el mismo ya mayormente ha pesado en esta tradición jurídica, de la que a su modo participaba dicha corriente. En el autor seguramente más significado para la evolución moderna del *common law*, ha podido Kahn-Freund identificar como «uno de sus más característicos y sorprendentes rasgos, entre los que más dilatada y duraderamente han influido además en la jurisprudencia ulterior», el de su tratamiento del motivo *master and servant*, recluido sustancialmente en el derecho de familia, cual guía y modelo de la relación de empleo o contrato de trabajo¹⁰; la misma rúbrica de amo y sirviente presta denominación a la legislación correspondiente en la Inglaterra del XIX¹¹, quedando todavía algún indicio al menos léxico como el de *civil servant* por funcionario. Lo que no estaba probablemente en la intención de los niveladores vino entonces a cumplirse: una asimilación entre condición servil y relación laboral que no afecta precisamente tan sólo a un reducido sector doméstico.

Y el tiempo no corre en vano. En el debate constituyente norteamericano, y aún con las condiciones de las colonias, más difícilmente ya se vería una lógica niveladora en la conciliación entre sufragio general y exclusión social; dentro de una práctica electoral bastante variopinta, la denegación de derechos políticos a los *indented servants* o trabajadores contratados, no esclavos, todavía resistirá, pero una posición considerada *leveller*, o de *leveller democracy*, ya podía identificarse contrariamente mejor con la pugna contra este género de desigualdad; Beard, quien lanzó allí tempranamente el debate, no dejó de ver en estas exclu-

10 OTTO KAHN-FREUND, *Blackstone's Neglected Child: The Contract of Employment*, p. 508, en *The Law Quarterly Review*, 93, 1977, pp. 508-528.

11 Sección inglesa, debida a WILLIAM R. CORNISH, pp. 2252-2259 y 2772, de H. COING (ed.), *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, III-2, Munich 1982, pp. 2217-2279

siones, frente a la mitología democrática de la historia constitucional estadounidense, una tendencia de discriminación de la clase trabajadora como tal. Y éste es el punto que a nosotros nos interesa, que no ahora dichas otras implicaciones, ya superadas por la historiografía, si no todavía por la cultura política, ni su particular debate, que ya contará con su división de interpretaciones¹².

En Francia, aparte de que también tenga su reflejo más directamente constitucional, no dejará el motivo de ser acogido, con efectos jurídicos más tangibles, en la misma codificación napoleónica¹³. No tiene esto en su caso por qué significar alguna especie de importación; arraigaba este elemento en estructuras sociales y tradiciones doctrinales bien comunes y que así podían de algún modo todavía resistir en una época de progresiva superación de los mismos condicionamientos culturales de aquella primitiva y más inocente discriminación *leveller* del trabajador por cuenta ajena. Aunque no falten historiadores que otra cosa quieran¹⁴, no ha habido, ni el primer constitucionalismo aún traerá, algún derecho del trabajo, ni siquiera para situarse formalmente el trabajador en igualdad de condiciones respecto al propietario¹⁵. La misma precisa conformación de la categoría básica de contrato de trabajo todavía significativamente se hará esperar, cuánto más la de convenio¹⁶.

12. CHARLES A BEARD, *Una interpretación económica de la Constitución de los Estados Unidos* (1913), Buenos Aires 1953, pp 24-26, 64-69 y 192; bibliografía del debate que le siguió, RICHARD HOFSTADTER, *The Progressiv Historians*, Nueva York 1968, pp. 480-482.

13 ANDRÉ CASTALDO, *L'histoire juridique de l'article 1781 du Code Civil: «Le maître est cru sur son affirmation»*, en *Revue Historique du Droit Français et Étranger*, 55, 1977, pp. 211-237.

14 HARALD STEINDL (ed.), *Wege zur Arbeitsrechtsgeschichte*, Frankfurt am Main 1984, su crítica de introducción; también la de GERD BENDER, *Vorindustrielles Arbeitsrecht?*, en *Rechtshistorisches Journal*, 4, 1985, pp. 45-49. Y en nuestro caso, véanse los equívocos que se traslucen en el preliminar de RAFAEL GIBERT, *El contrato de servicios en el Derecho medieval español*, en *Revista de Política Social*, 101, 1974, pp. 5-134.

15 STEVEN KAPLAN, *Réflexions sur la police du monde du travail, 1700-1815*, en *Revue Historique*, 529, 1979, pp. 17-77, puede destacar, desde perspectivas menos jurídicas, continuidades.

16 ALFRED SÖLLNER, *Der industrielle Arbeitsvertrag in der deutschen Rechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts*, en W. Wilhelm (ed.), *Studien zur*

Pro patria mori, en materia de derecho político, es entonces para el trabajador el único capítulo; con sinceridad no exenta de cinismo, lo reconocerían los mismos constitucionalistas orgánicos de un primer período¹⁷. Y la privación de derechos más sustancialmente se producía por obra del código en el campo civil, aunque, con su mayor carga de profundidad, para un reconocimiento tan pacífico hubiera de esperarse a efemérides tan poco cercanas como la del propio centenario¹⁸. Resulta extremo además dotado de una extraña facilidad para volver a eclipsarse¹⁹; su mismo alcance constitucional parece que automáticamente se desvanece si tan sólo, como se acostumbra, es el tema del sufragio censitario el que se atiende, ya con sus propias dificultades de implantación en la época con un criterio de clase.

Puede haber más; durante el primer constitucionalismo, mientras que de una parte se precisaría tan radical reducción de derechos por la pendencia de asuntos tan poco populares como el de la destrucción de solidaridades históricas, y entre ellas las familiares, de otra, y por los mismos objetivos del liberalismo de propiedad y mercado, ya no cabrían imposiciones directas de discriminaciones de clase. A los propios constitucionalistas de entonces conviene abrirles crédito, entendiéndoles en sus términos: la exclusión se produce, no porque los mecanismos constitucionales vayan en sí a servir para la formación y operación de clases, sino por evidencias más transitorias como la de que el voto popular apoyaría el nuevo sistema en la misma escasa me-

europaischen Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main 1972, pp. 288-303; G. BENDER, *Strukturen des Kollektiven Arbeitsrechts vor 1914*, en H. Steindl (ed.), *Wege zur Arbeitsgeschichte*, pp. 251-293; B. HEPPLÉ (ed.), *The Making of Labour Law in Europe*, Londres 1986.

17. Nuestra primera cita capitular: B. CONSTANT, *De la liberté chez les Modernes. Écrits politiques*, ed. Marcel Gauchet, París 1980, p. 316.

18. Nuestra segunda cita capitular: A. TISSIER, *Le Code civil et les Classes ouvrières*, p. 73, en *Le Code Civil, 1804-1904. Livre du Centenaire*, París 1904 (rep. 1979), I, pp. 71-94. Para síntoma del descuido del siglo, *Bibliographie de Droit et de Jurisprudence dans l'ordre des Codes*, ed. París 1888, pp. 19-20.

19. El monógrafo del *Code*, ANDRÉ-JEAN ARNAUD, no incide realmente en la cuestión, ni por *origenes doctrinales* (1969) ni por *analyse structurale* (1973), aun no ignorando el problema en momentos más específicos: *Les juristes face à la société du XIXe siècle à nos jours*, París 1975, pp. 84-90 y 137-140. Para las peculiaridades del caso inglés, nota 52.

didada en la que el trabajador individualmente se prestaría a abandonar vinculaciones grupales y usos comunales; a menudo se olvida que el liberalismo no sólo se dirigía contra la explotación señorial. El Estado constitucional naciente no podía permitirse ciertos lujos; hubo de adoptar en otro frente una posición activista que luego pudo encubrirse con ocurrencias como la de que practicaba una inhibición respetuosa de la libertad. Ya hay sus razones para que el mito explicativo del *laissez-faire* se muestre tan resistente²⁰.

Tampoco será preciso que entremos en profundidades; nos basta la evidencia de la historia más patente. La hemos recorrido en verdad con prisas, pero al menos haciendo las estaciones precisas. Retorno a mi planteamiento. Visto el transfondo, ya se será más comprensivo con mi explicación de manual; allí más concretamente exponía que la constitución de 1812 parecía responder al tipo de horizonte utópico de aquella que calificaba como democracia de padres de familia, pudiendo originariamente comprenderse en este contexto su mismo principio de exclusión de los sirvientes; y el anacronismo duraría poco; la dura prueba de los hechos, el choque con un desarrollo de la sociedad bien diverso, ya impondría su interpretación, siempre latente, en el sentido propio del primer modelo constitucional operativo. Todo ello, con las alegaciones dichas, lo discute Fiestas, obligando a matizaciones.

No eran ya ciertamente tiempos de ingenuidad como los de la revolución inglesa; tras la experiencia americana ya podía peor figurarse la misma utopía *leveller*; menos inocentes ya resultan sus términos. Los constituyentes gaditanos ya vacilaron en nuestro punto, optando realmente por el texto menos comprometido para la clase trabajadora; consideraron una versión que establecía la pérdida de derechos políticos «por el estado de sirviente a soldada de otro»²¹, pero prefirieron la referida que a estas alturas menos equívocamente califica al sirviente como «doméstico»; la

20. P. S. ATIYAH, *The Rise and Fall of Freedom of Contract*, Oxford 1979, aun con otras razones para denunciar el mito, o menospreciando más bien las nuestras: pp. 231-237, 258-259, 275 y 528-543.

21. Lo dejaba indicado en nota, y ahora puede bastar, DIEGO SEVILLA, *Constituciones y otras Leyes y Proyectos Políticos de España*, Madrid 1969, I, p. 165

familia de comienzos del XIX tampoco es la de mediados del XVII. No se metieron en todo caso en profundidades, tampoco ellos; realmente, aunque se disimulase, sólo trataban de transponer el equivalente inciso de la constitución francesa de 1791 (título III, capítulo I, sección II, artículo 2: «...n'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire de serviteur à gages»); más remotamente, y tampoco es que se registrase, otros ánimos podían estar todavía pesando.

En sí, la expresión constitucional francesa, como la española, no conectaba particularmente con el motivo revolucionario inglés; lo que hacía en nuestro caso que esto ocurriese, como ya en el manual aún sin el término de comparación argumentaba, era el propio contexto de un sufragio general de mandato no representativo que, junto a otros elementos constitucionales de promoción y participación, incluida una peculiar religiosidad, producía la conexión en un sentido clásicamente *leveller*. Sólo que luego la recepción del motivo a través de la codificación civil, con su implicación más precisa de degradación del trabajo, puede ya alterar el mismo alcance de la expresión, activándola en un sentido que tampoco originariamente le era ajeno.

Cierto que el proyecto de código de 1821 precisaba del modo señalado por Fiestas el concepto de sirviente, como que una disposición más efectiva que esta autora justamente nos recuerda ya impuso por la misma fecha la lectura más restrictiva del precepto constitucional, o más favorable para el trabajo. También es cierto que el mismo proyecto traslucía una especial preocupación porque el concepto de propiedad no perdiese su capacidad de atracción de servicios ajenos o, dicho de otro modo, de expropiación de fuerza de trabajo (artículo 42: «Es propiedad... 2.º El derecho de aprovechar los servicios que prestan a cada uno las personas o las cosas ajenas con arreglo a la ley...»), como igualmente lo es que luego se resiste a recibir el capítulo de la codificación napoleónica tocante degradatoriamente al trabajo²². Ciertas son unas cosas como las otras, resultando mayores resistencias al abandono de la utopía gaditana de las que mi manual ciertamente refleja.

22. MARIANO PESET, *Análisis y concordancias del proyecto de Código Civil de 1821*, pp. 93-96, en *Anuario de Derecho Civil*, 28, 1975, pp. 29-100.

Pero adviértase también siempre que la definición ya se precisaba en razón de la misma carga semántica que la voz de «sirviente doméstico» todavía arrastraba. Su entendimiento más estricto necesitaba de declaración legal por cuanto que, con su misma connotación servil, todavía encerraba la acepción de trabajador asalariado respecto a la que su misma delimitación se produce; tal misma fijación normativa, lejos de solventar la cuestión, ya debiera infundir sus sospechas. Tampoco es que parezca más que un signo, resultando motivo utópico en un sentido y, en otro, poco operativo. No es la clase, a diferencia del sexo, un factor tan reconocible, ocurriendo además que el ámbito de la exclusión social debía superar al de la dependencia por enajenación de fuerza de trabajo. A ello acudirá desde luego el régimen censitario, pero también habrá de encontrarse el modo de no reducirse la evolución del sufragio a cuestión poco menos que cuantitativa, perdiéndose sus implicaciones más precisamente constitucionales.

En cuanto al código de 1889, bien están las precisiones de Fiestas, pero la relación de trabajo aparece aquí, aunque ciertamente en un capítulo de «arrendamiento de servicios», en una sección conjunta «del servicio de criados y trabajadores asalariados», virtualmente comunicados con secuelas todavía degradatorias de la condición del trabajo; ya la mejor manualística repara en ello²³. Y adviértase más, la propia rúbrica primaria de «arrendamiento de servicios» se queda en mero epígrafe, sin articulado o sin principios propios; en realidad, tal especie contractual en este código ni siquiera como tal existe, con lo que mal pueden distinguírsele figuras. Esto tampoco constituye una originalidad suya; la misma sustancial reducción en el código francés, con todo su trasfondo también en este punto, de las especies de arrendamiento al de cosas y al de obra, ha sido justamente detectada como vestigio de concepciones serviles²⁴. Añadía Fiestas que su distinción ya venía de otros proyectos del siglo, mas el comentario

23. FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE, *Manual de Historia del Derecho Español* (1979), Madrid 1983, p. 610; sección española, de JOHANNES-MICHAEL SCHOLZ, pp. 562-563 y 592, en H. Coing (ed.), *Handbuch*, III-1 (1982), pp. 397-686.

24. O KAHN-FREUND, *Blackstone's Child*, p. 515; trasfondo: HELMUT COING, *Europäisches Privatrecht, 1500 bis 1800*, I, Munich 1985, pp. 456-460. Y había tenido su aplicación clásica al profesorado de derecho, que nos envileceríamos de reclamar salario: *Digesto*, 50, 13, 1 (5)

de García Goyena al más significado de 1851 bien reflejaba contrariamente la asimilación: «Los criados y trabajadores se han confiado a la buena fe del amo», como argumento de común subordinación, doméstica si todavía quiere decirse²⁵.

La correspondencia entre el código francés y el español tampoco es exacta, pero también porque las cosas han cambiado; así, respecto al extremo que en el manual decía muy significativo, y que Fiestas también debate, de la regla conforme a la cual la palabra del patrón en materia de salario constituye prueba, las expresiones del código español tal vez pudieran reducirse mejor que las del francés al supuesto del sirviente doméstico, pero también resulta que en Francia este artículo del código, jurisprudencialmente en todo caso interpretado de forma extensiva al trabajo asalariado, había debido ya derogarse en 1868²⁶. Era el transcurso del tiempo y el cambio también del modelo constitucional, no se olvide; bajo uno ya políticamente liberal, el código español adopta, y no sé si reaviva, este motivo de asimilación entre relación de trabajo y servidumbre, ya con todos sus inevitables desajustes²⁷.

Ya era bien distinto, y no sólo constitucionalmente, el contexto de nuestro código al de su fuente; con la obligada evolución de las mismas leyes, su jurisprudencia ya habrá de avanzar en una dirección diversa a la francesa anterior a 1868, entrando finalmente en las distinciones de contratos queridas por Fiestas²⁸. Se trata

25. FLORENCIO GARCÍA GOYENA, *Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil Español*, Madrid 1952 (rep. 1973), sub art. 1526.

26. A. CASTALDO, *Article 1781*, pp. 213 y 231-233; sólo el dato de la derogación en la sección francesa, de Ernst Holthöfer, pp. 1047 y 1067, en H Coing (ed.), *Handbuch*, III-1, pp. 863-1068.

27. A la altura del código incluso en círculos oficiales se barajan ideas de arbitraje laboral y negociación colectiva: JUAN MONTERO, *Los Tribunales de Trabajo (1908-1938). Jurisdicciones especiales y movimiento obrero*, Valencia 1976, pp. 24-28

28. RAFAEL GARCÍA ORMAECHEA, *Jurisprudencia del Código Civil (1889-1926)*, Madrid 1928, sub art. 1584, no muy inmediata tampoco al código, RICARDO OYUELOS, *Digesto. Principios, doctrina y jurisprudencia referentes al Código Civil español*, VI, Madrid 1930, sub art. 1583, presumiendo ya la intención del código de remitirse a la especialidad del «contrato de trabajo», lo que viene tras el llamado «Código del Trabajo» de 1926. Y cito a juristas de sabida orientación socialista

todavía en todo caso de cuestión rigurosamente por estudiar, pese a la propia afición historiadora de los laboristas españoles²⁹, pero a ella tampoco tocaba estrictamente mi argumentación. Especialmente tal circunstancia del código definitivo sólo como signo la alegaba, aunque otra cosa para su momento, bien que más difícil de imaginar, tampoco deba sin estudio descartarse. Y un signo bien expresivo es de la dimensión no democrática del modelo constitucional políticamente liberal, todavía impuesta por la referida prevalencia del liberalismo civil que entre nosotros sólo cederá con la constitución de 1931.

E insisto en que la figuración de modelos no es un recurso didáctico o un esquema pedagógico, según la excusa usual para el empobrecimiento de cuestiones al que acostumbra la manualística; se pretende con ellos poner de relieve diferencias tan sustantivas que llegan a afectar a los mismos fundamentos del sistema. Ya pasó felizmente la época en la que el constitucionalismo interesadamente se confundía con doctrinas y prácticas históricas de otra índole; de esto hemos podido salir incluso por vías tan tortuosas como la de confusión no menos interesada entre parlamentarismo corporativista histórico y corporativismo antiparlamentario actual³⁰; por líneas derechas o torcidas, ya sabe hoy generalmente distinguirse entre constitucionalismos *ancient* y *modern* o propiamente tal, pero estamos en cambio sumidos en la indistinción del constitucionalismo de signo democrático, tratándosele por lo co-

29. No se espere que descienda a estas minucias MANUEL ALONSO OLEA, *De la servidumbre al contrato de trabajo*, Madrid 1979. Para otras referencias patrias, M. CARLOS PALOMEQUE, *Derecho del Trabajo e Ideología Medio siglo de formación ideológica del Derecho Español del Trabajo, 1873-1923*, Madrid 1980.

30. JOSÉ MANUEL PÉREZ PRENDES, *Cortes de Castilla*, Barcelona 1974, con la conexión ya en notas. A efectos más generales, cabe advertir que la *Commission internationale pour l'histoire des assemblées d'états* estuvo más cerca de realidades históricas en una primera etapa de planteamiento corporativista, desde 1935, con la animación de EMILE LOUSSE, que en una segunda, tras la guerra mundial, que ya se refleja en su denominación, que no exactamente traducción, como *International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions*: JOHN BELL HENNEMAN, *Studies in the History of Parliaments*, en *Legislative Studies Quarterly*, 7 1982, pp 161-180, que es introducción de número monográfico

mún conjuntamente con otros modelos constitucionales con efectos análogamente lesivos.

Todavía, y sólo es un síntoma, pacíficamente se presentan como «democráticos» regímenes históricos cual el español de 1869, con su repudio de las libertades más específicas de la clase trabajadora y su expulsión del universo político, pues de «sufragio universal» se habla, de la media sociedad que forman las mujeres³¹; el mismo calificativo ya sirve incluso para identificar su período. Y esto por no referirnos a quienes siguen presentando sin matices como «democrática» a la constitución de Cádiz. Con tales baremos, tampoco sería para hoy mucha la exigencia de un principio democrático, o no se esperará ya excesiva consecuencia de una constitución que de tal se precie. La comunicación continua a su modo abierta: doctrinas de constitucionalismos entitativamente no democráticos ya encuentran franca la entrada. La historia todavía legítima, estando al quite de deficiencias democráticas, desde sus tracciones monárquicas a un principio electivo hasta secuestros parlamentarios de un canon participativo, con lógicas que deben fundamentalmente alimentarse de experiencias pretéritas³². No sólo en Estados Unidos se mantenía una mitología histórica con su significación práctica en la cultura política. Ya ingenuamente se piensa que el reverdecimiento de nuestros particulares mitos, tras décadas de denigración, auxilia a la democracia, mas hay abrazos que ahogan.

Menos trascendentemente, podemos también estar ante efectos de que la historia constitucional no acabe de encontrarse aquí en manos de historiadores; casos como el de la propia Alicia Fiestas, con su tesis doctoral sobre los delitos políticos, aún constituyen desafortunadamente excepción. Aunque, para nuestro asunto, no sería tampoco justo olvidar que la indistinción de modelos, si ciertamente ya sugerida de constitucionalistas³³, más resueltamente

31. JORDI SOLÉ TURA y ELISEO AJA, *Constituciones y períodos constituyentes en España (1808-1936)*, Madrid 1977, pp. 60-62.

32. Así desconciertan intervenciones que, con toda la ingenuidad que se quiera, meten el dedo en la llaga: C. B. MACPHERSON, *La democracia liberal y su época*, Madrid 1982.

33. Caso especialmente del manual citado de J. SOLÉ y E. AJA, pregonándose desde el anuncio de contraportada, y de forma que por lo demás mantiene el complejo de diferencia española, en lo que ni tan siquiera la

ha sido entre nosotros elevada a teoría por gracia de historiador³⁴. Y frente a ello todavía quiere reanimarse la idea más tradicional de ciclos —moderados y progresistas— que, con el éxtasis de base que pide el mismo juego de alternancias, difícilmente reintroduce el propio sentido de la historia³⁵.

Las lesiones no sólo se le infringen al constitucionalismo actual, sino también al histórico, desfigurándosele y proyectándosele categorías. Véase cómo ha podido justamente señalarse para el constitucionalismo francés algo que interesa y en sí vale para el primer modelo: que su principio de separación de poderes, en su realidad tanto como en su concepción, se revela de una entidad bien diversa a la que, desde su momento posterior, suelen presumir tanto juristas como historiadores³⁶. Y otros temas esperan; también ha podido recientemente indicarse que sólo ahora los teóricos más orgánicos del primer modelo constitucional, cuya misma inteligencia facilitan, vienen a ser estudiados, no como precursores más o menos conservadoramente aprovechables o más o menos también gratificatoriamente confrontables³⁷, sino en su propia significación, con su mismo positivo liberalismo, que no por ello democracia³⁸.

El momento Guizot, que ahora se nos dice³⁹, precisaría un

hay. Un texto elemental comparativo se enfrenta en Alemania con su particular trauma de *Sonderweg*: H. D. LOOCK y H. SCHULZ (eds.), *Parlamentarismus und Demokratie im Europa des 19. Jahrhunderts*, Munich 1982.

34. Conferencias de MIGUEL ARTOLA, *El modelo constitucional español del siglo XIX*, Madrid 1979, o su discurso, sobre base aún más amplia de refundición, *Declaraciones y Derechos del Hombre*, Madrid 1982.

35. F. TOMÁS Y VALIENTE, *La Constitución de 1978 y la historia del constitucionalismo español*, en este *Anuario*, 50, 1980, pp. 721-751.

36. MICHEL TROPER, *La séparation des pouvoirs et l'histoire constitutionnelle française* (1973), París 1980. Resulta aquí ahora especialmente ilustrativo de la incomprensión de las diferencias JUAN IGNACIO MARCUELLO, *La práctica parlamentaria en el reinado de Isabel II*, Madrid 1986.

37. Entre nosotros, naturalmente, LUIS DÍEZ DEL CORRAL, *El liberalismo doctrinario* (1945), Madrid 1984.

38. MAURO BARBERIS, *Constant, Guizot e il liberalismo preso sul serio*, en *Materiali per una Storia della Cultura Giuridica*, 15, 1985, pp. 465-481. Para nuestro contraste, este *Anuario*, 55, 1985, pp. 793-805.

39. PIRRE ROSANVALLON, *Le moment Guizot*, París 1985, que ya comenta M. BARBERIS, *Liberalismo preso sul serio*, pp. 474-477

abordaje tan diferenciado como, pongamos, el *momento Kelsen*. Que ha venido a formarse en nuestro siglo un *nuevo* derecho constitucional es dato al fin y al cabo sabido prácticamente desde el mismo acontecimiento de su aparición⁴⁰; lo que nos toca es deducir el corolario: existe *otro* derecho constitucional *antiguo*, y no precisamente medieval. También nos es contemporáneo; el reto es que sólo mediante la historia lo sea. Ya conviene para ello estudiarse diferenciadamente estos *derechos*, con más sincronía que diacronía, no aislándose los componentes del sistema ni refundiéndose contra secuencia sus momentos. También con todo se trata de que la necesaria apertura de perspectivas en el estudio histórico del constitucionalismo no recaiga en las consabidas reducciones socio y politológicas, con disolución de su objeto, sino que recupere motivos más específicos en la propia sustentación, elevación y ocupación de los edificios constitucionales, con rehabilitación de su ciencia.

Pues parece que la sorpresa ya la provoca mi introducción de motivos menos constitucionales, pero en todo caso jurídicos, en la misma conformación de los modelos. La responsabilidad tampoco es mía; es el constitucionalismo actual el que reivindica materias, erigiéndose en verdadera parte general de todo el ordenamiento. La cuestión estriba en que las mismas, como la de trabajo que venimos discutiendo, o como más en general la civil, no son realmente nuevas para el propio constitucionalismo; no han estado ordinariamente acogidas en la norma constitucional, pero no han dejado por ello de ser un elemento fundamental de su sistema. La falaz identificación entre materia política y derecho constitucional ya estorba, aparte una cabal comprensión del actual constitucionalismo, el mismo abordaje de sus modelos históricos. Tampoco es cuestión de que la historia constitucional pierda sus perfiles, diluyéndose ahora en la historia del derecho, sino de que precisamente se ocupe de su parte que realmente lo constituye o lo fundamenta.

Que la materia civil entraba desde un inicio en el modelo

40. BORIS MISKINE-GUETZÉVITCH, *Modernas tendencias del Derecho Constitucional* (1931), Madrid 1934, significadamente, también por su especial consideración entre nosotros.

constitucional, ya en el mismo modo de expulsarse se acusaba: «Il sera fait un Code de lois civiles communes a tout le Royaume», ya era el anuncio, y la renuncia, de la constitución francesa de 1791. Tampoco esta incapacidad o esta dejación de funciones de los órganos expresamente constituyentes va a extrañar en los constitucionalismos menos democráticos. El supuesto inglés es desde luego otro, con su verdadera reserva de jurisprudencia, constitucional en todo caso a la par y del mismo modo que civil, como también con ello originalmente menos democrático, pero el nuestro es el francés. El código era en él un requisito de la propia constitución, con toda su carga de fundación social bajo principio impositivo de unidad que culturalmente su término entonces encerraba⁴¹. A efectos metodológicos, la advertencia pudiera ser análoga a la que ya ha debido desprenderse en el capítulo del sirviente: no basta una lectura inmediata para la filología de los textos, aunque ya sólo fuese porque, en nuestro campo jurídico al menos, cada idioma europeo no es mucho más que un dialecto. No hay *sirviente* sin *servant* ni *código* sin *code*.

Como se sabe pero a menudo se olvida, y mi manual recordaba, ya el propio concepto de constitución política, superando anteriores sentidos menos específicos, aquí procedía de un desgajamiento del de codificación jurídica; el concepto de código, conjunto al fin y al cabo de constituciones en los significados que se superan, era incluso originalmente el básico. Y a su modo las ideas también renacen; frente a constituciones más democráticas, también se sabe que resurge la ocurrencia de la constitucionalidad material del código⁴²; hay su parte de verdad: para un modelo de constitucionalismo no democrático efectivamente el código presenta este carácter. El código, con toda su implicación, resulta pieza de los modelos constitucionales históricos de revolución no temprana que ya culturalmente pudieron y políticamente quisieron documentalmente fundarse; ignorarlo, supone condenarse a la incomprensión de nuestra misma particular historia, con las dificultades que

41. B. CLAVERO, *El Código y el Fuero*, Madrid 1982, pp. 48-52.

42. La idea ha reafiorado por ejemplo en la polémica sobre la reciente legislación andaluza llamada de «reforma agraria», por mérito especialmente de juriconsultos colaboradores del diario «ABC» de Sevilla, pero no descenderé a este linaje de citas ajenas, como tampoco propias.

arrostra el arraigo del régimen constitucional mientras falla el código o, cuando se supera su modelo, con las garantías que deben ofrecerse desde la propia norma constitucional para las transformaciones del caso.

Las mismas cuestiones que entran ahora en el campo de visión de esta norma, desde el trabajo a la cultura, desde la familia a la economía, no parece entonces sino que cayeran del cielo, sin término de comparación con su menos celestial estado bajo otros modelos constitucionales. Ya puede resultar significativo que el derecho canónico ni siquiera por lo regular comparezca en estas historias. ¿Cómo explicar luego, en 1931, solemnes proclamaciones constitucionales como la de igualdad de sexos fuera y dentro del matrimonio? Ya se sabe, si algo se dice: elusiva noticia, y un tanto incómoda aunque beligerante no sea, sobre la «constitucionalización» de cosas como el divorcio o la investigación de la paternidad, honor como tal inexplicado. Sin contraste con el derecho civil precedente, tampoco desde luego se dará razón de la fundación constitucional del derecho del trabajo que también aquí se produce en 1931. No es de extrañar que a estas alturas el mismo texto de la constitución parezca definitivamente más ilustrativo que las explicaciones usuales de manual⁴³. Los docentes a veces sobramos.

En el terreno manualístico en el que estamos moviéndonos, la misma trascendencia para nuestro constitucionalismo de circunstancias como la de que el código sólo se lograra a costa de una doble renuncia o de una verdadera capitulación tanto frente al derecho canónico como ante unos derechos forales no menos resistentes a la evolución contemporánea del orden social⁴⁴, ¿dónde y cómo se trata? Entre el canonista que, sobre todo a efectos docentes, sigue definiendo confesionalmente su sujeto, y el civilista que a su vez, impartiendo igualmente su doctrina, a idéntico efecto lo concibe intemporal, el constitucionalista español ya suele guardar silencio. Respeto o timidez, lo sufre el constitucionalismo, el científico y el político; que, aparte ensayismos, pueda llegársele

43 J. SOLÉ y E. AJA, *Constituciones*, p. 102, ya que viene citándose, aunque otros manuales pondrían las cosas ciertamente más fáciles.

44. PABLO SALVADOR, *La Compilación y su historia*, Barcelona 1985, p. 3, necesitándose recordar de entrada la obviedad

a configurar como especialidad administrativa, según también por lo demás ocurre con el derecho del trabajo, ya es una simple derivación⁴⁵; los problemas quedan lejos. Un constitucionalismo que conformarse puede como una especialidad más, no está ya a la altura de la propia constitución; que no arrastre por los menos a la historia. Que por ésta el derecho se reintegre, dejándose de fugas hacia adelante con historias sociales o de huidas hacia atrás con ciencias jurídicas especiales⁴⁶.

Los mismos problemas básicos mal se identifican. Ignorado el código como norma histórica materialmente constitucional, o incluso formalmente, pues tampoco se concebía como inferior a la constitución, el mismo alcance del reforzamiento normativo de esta última puede escaparse; se habla ahora, desde el punto de vista civil, de la «decodificación» en curso, pero menos se aprecia el paralelo proceso de atracción por la constitución de la dirección codificada de todo el ordenamiento⁴⁷; la misma disminución del poder directriz de la ley por efecto de una inflación que ya tiene sus raíces en la pluralidad alimentada por el derecho del trabajo, puede verse compensada, con su interesante acercamiento a formas del *common law*, por una nueva revaluación de la función judicial en la que elemento primordial ya viene a resultar una jurisprudencia constitucional, en parte ahora además europea común, de emigraciones y préstamos ya menos descontrolados⁴⁸.

¿Otros ejemplos? Vistos los tenemos, pues ya lo es desde luego nuestro asunto del contrato de trabajo, o también, si no queremos resultar monotemáticos, el de la otra discriminación principal aparecida, por razón de sexo. La historia del derecho

45. A enderzarla se dirigía la misma colección de *Temas Claves de la Constitución Española* que precisamente se inauguraba, en 1984, con un manual de evolución histórica, pero su desenvolvimiento ya también viene resultando bastante más irregular de lo siempre previsible en empresas colectivas de esta índole.

46. Y ya que estamos con manuales y alegando en causa propia: las posiciones extrañamente las confunde JOSÉ ANTONIO ESCUDERO, *Curso de Historia del Derecho*, Madrid 1985, p. 35.

47. NATALINO IRTI, *L'età della decodificazione*, Milán 1979, pp. 3-39; PIETRO BARCELLONA, *I soggetti e le norme*, Milán 1984, pp. 54-56.

48. MAURO CAPPELLETTI (ed.), *New Perspectives for a Common Law of Europe*, Florencia 1978, y sus *Giudici legislativi?*, Milán 1984.

del trabajo regularmente se empeña en producirse desde el momento y en la medida en que el propio ordenamiento viene a alumbrarlo, o a extraerlo comienza de su zona de oscuridad⁴⁹; no de otro modo se conduce ordinariamente luego una historia de la emancipación femenina; la cuestión historiográfica primordialmente estribaría en la misma emergencia más primaria de la mujer al universo público, manteniéndose en la sombra todavía la base verdaderamente constitucional de una discriminación⁵⁰. El problema ya lo constituye el dato previo de una ausencia inobservada. Tiene el derecho sus puntos ciegos, qué menos que la historia no los tenga⁵¹.

Tampoco es que las discriminaciones constitucionalmente significativas se agoten en el trabajo y en el sexo; también operaba por su parte la edad, factor más característicamente británico, con sus títulos senatoriales y sus dinastías familiares, pero no faltando su incidencia entre nosotros⁵². Nos basta en todo caso

49 Se anuncia un título por sí expresivo: JACQUES LE GOFF, *Du silence à la parole. Droit du travail, société, État (1830-1985)*, Quimper 1986.

50 CONCHA FAGOAGA, *La voz y el voto de las mujeres, 1877-1931*, Barcelona 1985, también por su militante presentación.

51. En esto presta más ayuda A. J. ARNAUD, *Essai d'analyse structurale du Code civil français*, París 1973, pp. 65-66 y 71-77. La especial cerrazón ante la mujer del mundo jurídico inglés puede todavía mejor encubrirse por su tradicional carencia de un capítulo de personas: A. H. MANCHESTER, *A Modern Legal History of England and Wales, 1750-1950*, Londres 1980, pp. 70-71 y 361.

52. B. CLAVERO, *La primogenitura de la libertad*, en *La Reforma de la Compilació: El sistema successori*, Barcelona 1985, pp. 9-37. No otra circunstancia que la señalada en la nota anterior dificulta en el caso inglés la misma apreciación del fenómeno; no poca de su mitología constitucional se sostiene sobre estos apagones sin arreglo. Aun con todo su lastre dogmático, para la edad contemporánea permiten los esquemas del *civil law* una transparencia que parece vedada al *common law* (véase todavía el contraste del citado capítulo inglés del *Handbuch* dirigido por Coing); y no me salgo con esto del tema, pues la potencialidad de nuestro leit-motiv *master and servant*, si en algún lugar se ha desplegado, es en el derecho inglés que resulta, y no sólo desde el exterior, de más dificultosa penetración; así el asunto no puede decirse que adquiera su relieve ni siquiera en las exposiciones más renovadoras: G. R. RUBIN y D. SUGARMAN, *Law, Economy and Society Essays in the History of English Law, 1750-1914*, Oxford 1984, p. 50 y nota correspon-

esta constancia de espacios constitucionales sin iluminar. Sigue el código resultando opaco. ¿Y cuántas controversias sobre la distinción suma del derecho entre «público» y «privado», con las correspondientes marginaciones y con sus superaciones luego a ras-tras, no encubren y alimentan la misma dimensión más ideológica de unos conceptos que realmente responden a intereses de un constitucionalismo bien caracterizado ya por sus limitaciones?⁵³.

Pero atengámonos a nuestro asunto y no tomemos la respuesta a Alicia Fiestas como pretexto para distintas polémicas. Tan sólo una, ya última, alegación, referente a la orientación bibliográfica que clausura mi manual, pues la crítica le reprocha, en juicio también final, arbitrarias descalificaciones; me sería según ella de aplicación el veredicto de culpabilidad que Marc Bloch dictara contra los historiadores-jueces por sus distinciones, como ante los gases pésimos químicos de antaño, entre «buenos» y «malos». Mal puedo ejercer la defensa frente a imputación tan inconcreta, pero alguna justificación también quizá se deba.

Porque no tomemos su nombre en vano, deberíamos recordar que Bloch tampoco se privaba de juicios sumarios, pues su mismo símil ya no se refería al encausamiento de pobres historiadores, sino de personajes históricos. Mas todos cometemos errores; a las mismas vísperas de la ocupación que entre tantas se cobraría su vida, resulta que Bloch benévolamente juzgaba publicaciones de

diente; A. H. MANCHESTER, *Modern Legal History*, pp 267-268, 286-297 y 327-329; P. S. ATIYAH, *Freedom of Contract*, pp. 142, 215, 377, 444 y 523. Otras más especialmente autorizadas entre *legal historians* todavía lo ignoran: S. F. C. MILSOM, *Historical Foundations of the Common Law* (1969), Londres 1981. Si para KAHN-FREUND éste era el *neglected child* del derecho inglés, por MANCHESTER se nos presenta como una *ugly sister*, bien que en su caso a su vez ocurre que no acaba de situársele en el capítulo del derecho del trabajo, manteniéndosele substancialmente en el más tradicional de la responsabilidad civil del *master* por actos del *servant* frente a terceros, como si una cuestión doméstica internamente aún fuese, sin trascendencia para el ordenamiento: la fase de eclipse es también visible en este observatorio, mas con la condición de que se enfoque y mire.

53. Sin irse ya por las ramas, y repasando las del derecho, A. PIZZORUSSO y V. VARANO (eds), *L'influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei*, Milán 1985

mal disimulada influencia nazi⁵⁴. A nada viene por supuesto tampoco aquí este trágico recuerdo de una humana debilidad, pero ya existen otros malestares, no dados precisamente a la publicidad. La misma bibliografía guardaba su coherencia con el apartado del propio manual sobre la degradación de la cultura jurídica bajo el franquismo, de cuya herencia nadie nos libramos. Cierto que ni las épocas ni los problemas ni mucho menos los autores pueden parangonarse, pero, dado el pie forzado, admítaseme también la comparación.

Y sea todo así dicho con el debido respeto no sólo de distancias. Entra en nuestra profesión el juicio de obras, nunca de personas. No es fácil el deslinde, añadiendo ya a veces su malicia la susceptibilidad; y claro que la cortesía académica ayuda, tanto como defrauda. En fin, no sé ya si con justicia se me tendrá por insincero si dejo todavía constancia de agradecimiento a quien expone bajo firma sus reservas de quien quiere también siempre responder de sus criterios.

Bartolomé CLAVERO

54. CARLO GINZBURG, *Mythologie germanique et nazisme*, en *Annales. Economies, Sociétés, Civilisations*, 40, 1985, pp. 695-715; su principal encartado, y otro caso desde luego, ha vivido para defenderse: GEORGES DUMÉZIL, *Science et politique*, en los mismos *Annales*, pp. 985-989.

IV

LA CORONA DE ARAGON: REGIMEN POLITICO Y CORTES.

ENTRE EL MITO Y LA REVISION HISTORIOGRAFICA*

Pocos temas historiográficos tan apasionantes y con tanta carga polémica como el del estudio del régimen político en las Coronas y reinos españoles y del papel de las instituciones representativas. Es, sin duda, uno de los que están en el fondo de lo que quizás algo pomposamente se dio en llamar el «problema de España», de su invertebración, de la tensión continua España-Españas. Lógicamente se plantea con más agudeza para el periodo XVI-XVII, pero la visión clásica sobre el particular ha tenido evidente repercusión sobre nuestra historia contemporánea y se proyecta también en los análisis que se realizan sobre las estructuras políticas bajomedievales. La coincidencia cronológica de la unión de las Coronas —en diferente estadio de evolución político-social y jurídica— y el nacimiento de un Estado en el que quedan integradas generó tensiones abundantes precisamente porque ese Estado naciente no logró en ellas la misma fuerza ni presencia, ni los límites de hecho del ejercicio del poder por la Monarquía eran idénticos en todos los casos. Es en la interpretación de estas realidades donde se han producido graves desenfoques.

Durante siglos, escritores políticos e historiadores han puesto énfasis en los evidentes contrastes y diferencias entre el sistema vigente en la Corona de Castilla y los de Navarra o los territorios aragoneses, para pasar luego a una contraposición neta, un tanto voluntarista en ocasiones, y a etiquetar esos regímenes: los de Absolutismo y Monarquía Absoluta serían los términos apropiados para definir el régimen castellano; un sistema «decisionista», según la expresión de Lalinde, en el que la autoridad real no en-

* Comunicación presentada en el XII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Montpellier, septiembre 1985.

cuentra límites reconocidos y se sitúa por encima de la Ley. Frente a él, en las antípodas de las formas de gobierno, el régimen «pactista», típicamente aragonés, o catalán, o valenciano, según quien lo contemple, o bien de toda la Corona de Aragón, de antigua tradición medieval, enraizado en la más íntima «conciencia política de los pueblos». Pero además, y por contrapuesto al Absolutismo, ese pactismo sería, ineluctablemente, «liberal» y hasta «democrático», añadiendo calificativos propios de nuestros tiempos a unas estructuras político-sociales «Ancien Règime».

Lo que da más hondura a estas cuestiones es que tales imágenes proyectan su propia luz, única bajo la que se contemplan otras realidades históricas conexas: desde las «peculiaridades», muchas veces sólo presuntas, de la historia española hasta pleitos y rebeliones políticas, como el alzamiento contra Juan II, las alteraciones aragonesas, la sublevación catalana de 1640 o la guerra de Sucesión. No creemos necesario acumular en este punto citas eruditas que nada añadirían a la conciencia general de que éstos son los planteamientos habituales, incluso en sólidas obras de especialidad.

1. MITIFICACION Y VIGENCIA DE LAS VISIONES MITICAS

El proceso de mitificación de unos determinados usos y tradiciones políticos es en todos los reinos simultáneo a los primeros choques con una Monarquía en trance de fortalecimiento, pero se desarrolla más y alcanza mayor dimensión en la Corona aragonesa en la época del Antiguo Régimen y es particular de cada reino; es decir, se fundamenta en las supuestas excelencias del régimen de cada uno de ellos en relación con el de los demás, y no suele aludirse, en general, a que los de los tres territorios de la Corona respondan a unas mismas pautas. Esta sería ya una nota a retener; los aragoneses dicen tener un régimen más libre que el de todos los demás pueblos¹, para que los catalanes, por su lado, sostengan sobre

1. MARTEL dedica el cap. II de su *Forma de celebrar Cortes en Aragón* a señalar las virtudes originales y «la diferencia que ay de las Cortes de Aragón a las de los otros reynos», sin matizar, por ejemplo, que las catalanas o valencianas tengan virtudes al menos aproximadas.

el suyo conceptos sensiblemente idénticos². El historiador de hoy sabe muy bien que este tipo de hipervaloraciones no tienen el menor rigor científico, constituyen un fenómeno prácticamente universal en Occidente y responden a una reacción pasional de unos grupos sociales poderosos que sienten la amenaza de los avances del poder público del Estado y tratan de frenarlos con elaboraciones doctrinales mejor o peor apoyadas en recuerdos, en detalles formales de muy escasa trascendencia política, en la ignorancia general y, excepcionalmente, en algunas realidades cuya interpretación apasionada no puede ser de recibo para un estudioso de hoy. Hay algún ejemplo que nos hace sonreír por su ingenuidad, que resulta paradigmático de este irracionalismo mitificador: «Siempre havemos oido dezir antigament —escribe J. de Blancas— e se troba por experiencia que, attendida la gran esterilidad de aquesta tierra e pobreza de aqueste reyno, si non fues por las libertades de aquel se iryan a bibir y habitar las gentes a otros reynos e tierras mas fructiferos...»³. Durante varios siglos la apelación a fueros y usos antiguos, mal estudiados y peor interpretados, a supuestas libertades políticas de los «pueblos» es continua. Es interesante constatar que en los mismos organismos de la administración real se cuelan algunos de estos mitos de la mano de quienes en cada reino se integran en la burocracia real⁴. Es frecuente que los que sostienen una imagen idealizada del pasado echen mano de las frases de halago o de expresiones anecdóticas de los monarcas medievales en que se referían, con un

2 «Les coses del Principat de Catalunya no s'han de medir ni judicar conforme les d'altres regnes y provincies, on els Reis y senyors de aquells son sobirans senyors », escribirá Francisco de Copons en 1622. Cit. ELLIOTT, *La rebelión de los catalanes*, p. 45.

3. *Comentarios de las cosas de Aragón* (Zar. 1878), p. 325.

4. El monarquista catalán Felip Vinyes se hace eco sin empacho del pacto de los catalanes con Carlomagno y señala que «entre otras muchas cosas notables que pactaron y convinieron los catalanes con el Emperador Carlo Magno en el tiempo que voluntariamente se le entregaron fue que solamente pudiesen cobrar los Condes, sus sucesores ciertos derechos forçosos en Cathaluña y que no pudiesen imponerles otros sin voluntad y consentimiento de los naturales» ACA. CA. Secr. Cataluña, Leg. 260. El mismo Vinyes escribe en otra ocasión que los catalanes «no trasfirieron el absoluto poder ni le entregaron su libertad con dominio libre, sino con ciertas retenciones y convenciones.. » ACA. Procesos Cortes, núm. 51, fl 404.

oportunismo político claro para cualquier observador atento, a la liberalidad de su propio gobierno; tales manifestaciones se convierten después en «demostración» de la justeza de las idealizaciones⁵.

Es bien sabido que la mitificación de las libertades aragonesas y, por extensión, de las de los otros reinos de la Corona, empezó a cobrar una dimensión y una trascendencia europeas tras el conflicto de 1591 y la muerte del Justicia Lanuza. Los monarcómanos europeos, Hottman en particular, consiguieron añadir confusión y el efecto se completó al producirse la resistencia a los programas de Olivares desde 1626, la rebelión en Cataluña y el enfrentamiento intrahispánico inserto en la Guerra de Sucesión. Coincidiendo con la época de la Revolución Francesa, los ideólogos españoles tradicionalistas tratan de perfilar la imagen de un antiguo régimen español equilibrado, popular y liberal, que haría innecesarias aquí sacudidas violentas como las sufridas por nuestros vecinos del Norte. Ahí están como botón de muestra las apasionadas frases de José de Marchena: «Francia necesitaba de una regeneración; España no necesita más que una renovación»⁶. En seguida el pasionalismo romántico empieza a hacer de las suyas y en Cádiz se inicia el enfrentamiento entre el constitucionalismo uniformista liberal y unos incipientes fuerismos de esencias anti-liberales y anticonstitucionales. La noción gratuita de que los viejos sistemas forales respondían en cualquier caso a un modelo político-jurídico (supuestamente emanado, además, de las Cortes antiguas) superior al que trataba de perfilarse por la vía de las Constituciones la sostenían minorías reducidas⁷; pero, aún así, se

5. El episodio en que la «castellana» Leonor recrimina a su marido Pedro el Ceremonioso la blandura con que se conduce respecto de la aristocracia en comparación con lo que haría su hermano el rey de Castilla ha sido aludido multitud de veces en la historiografía catalano-aragonesa. O el discurso de Martín I a las Cortes catalanas de 1406: «Todos los pueblos del mundo o la mayor parte de ellos están sujetos a las tasaciones de sus señores y a los donativos que a éstos les plazcan, excepto vosotros, que estáis exentos de tamañas tasaciones». Son dos entre multitud de ejemplos explotados hasta la saciedad.

6. *A la Nación española* Cit por HERR: *España y la revolución del s. XVIII*, p. 288

7 Vid ARTOLA: *Orígenes de la España Contemporánea*, pp. 326 y ss.

inició uno de los más flagrantes e incomprensibles fenómenos de manipulación ideológica del XIX europeo y un confusionismo que tuvo responsabilidades claras en algunos de los más tristes y reaccionarios episodios de violencia civil de la Historia Contemporánea occidental.

El constatar el lógico talante uniformista y centralizador —bien poco jacobino, por cierto— del liberalismo fue un auténtico hallazgo para los románticos defensores del mito del régimen de «libertades» de la Corona de Aragón. Autonomismos contra Centralismo fue el nuevo ropaje de la cuestión; la presión de los acontecimientos condujo a lo que recientemente denominaba Bartolomé Clavero «engendro del Estado centralista y foral»⁸. A cualquier intento de signo uniformizador, como el de la codificación del Derecho, se oponía una idea foral que reivindicaba la recuperación de las esencias de un régimen político antiguo para algunas regiones en nombre de unas supuestas excelencias de tales fórmulas. Pero, como ha señalado el propio Clavero, no se trataba de una «reacción de tipo regional», sino de la de una clase terrateniente y de la Iglesia, de modo que era «la referida tendencia antiliberal del foralismo... la que esencialmente operaba en dicha posición y no puede así justamente reducirse la cuestión a aquellos términos de confrontación entre especies de centralismo y regionalismo: se libraba más primariamente el conflicto entre el desenvolvimiento del sistema constitucional y la reacción antiliberal representada, entre otros tópicos, por los fueros»⁹.

La realidad es que el confusionismo creciente en torno a estas cuestiones completaba la acción de los mitos, dotándoles de nuevos argumentos susceptibles de atraer a sectores políticos más progresistas. «Desde la misma Restauración —seguimos con Clavero— ha podido imponerse en el mundo profesional de nuestra «ciencia jurídica» una correspondiente ideología foralista que, amparada en su confusionismo, puede presentarse como la mejor fórmula de respeto de la Historia y de la personalidad de las regiones diferenciadas, sin medirse mínimamente con otras posi-

8 B. CLAVERO: *El Código y el Fuero. De la cuestión regional en la España contemporánea*, p. 10.

9. *Ibidem*, pp. 7-8.

ciones políticamente más eficaces de carácter autonomista o federal»¹⁰.

La actual coyuntura política española no parece que esté animando la revisión de tan apasionantes problemas, sino antes al contrario. Propaganda política y lógicos afanes de reencontrarse con el pasado lejano y de reencontrar en él argumentos para justificar el movimiento autonomista (que para nada necesita ni nada va a sacar de verdad de una historia poco estudiada y mal interpretada) coinciden en reivindicaciones de «derechos históricos» y en el reverdecimiento de los mitos que, en el caso de la historiografía de la Corona de Aragón, nunca han llegado a estar arrumbados. Como ha escrito otro historiador del Derecho, Tomás y Valiente, «asistimos a la explosión de un historicismo neoromántico... En parte se pretende ahora... compensar aquel enfático y vetusto nacionalismo [del régimen franquista] con otros de radio menor. En uno y otro caso, antes y ahora, la Historia resulta arma arrojadiza y plataforma ideológica... Nos acucia el problema de la mitificación de la Historia al margen del conocimiento científico de la misma... Al mismo tiempo se mitifica el pasado de algunos de los pueblos de España... y abunda una tentación preocupante: la de acudir al pasado como fuente de legitimidad superior a la Constitución...»¹¹.

La idealización historicista sigue insistiendo hoy mismo en concepciones abstractas, como la de las «libertades aragonesas», catalanas o valencianas, a veces en forma sumamente confusa; o bien se centra en cuestiones concretas, como la falsa fórmula del «juramento político aragonés», sobre cuya existencia todavía sugiere Jesús Lalinde que hay «sospechas»¹²; en el papel de defensor del pueblo y encarnación de las libertades políticas del Justicia de Aragón y, de manera muy general, en la calificación del régimen

10. *Ibid.*, p. 9. Algo más adelante señala que «algunos intentarán ahora rehacer la historia del tópico proyectando a foralismos pasados, incluido el carlista, una significación democrática que anteriormente los fueros por su misma entidad no podían simplemente asumir».

(11) TOMÁS Y VALIENTE: *La Constitución de 1978 y la historia del constitucionalismo español*. En AHDE, 1980, p. 749. En la misma línea la citada obra de CLAVERO y su art. *Historia jurídica y Código político Los derechos forales y la Constitución*, en AHDE, 1980, 131-154.

12 J. LALINDE: *Los fueros de Aragón*, p. 113.

de los reinos aragoneses de «pactista liberal» y democrático, como decíamos antes, prácticamente original y exclusivo de estos reinos. En ellos las revueltas contra el Poder habrían sido lisamente conflictos en defensa de la libertad política contra la tiranía¹³.

Pero hay una total coincidencia en apoyar principalmente la idealización en el papel sobresaliente de las Cortes; Cortes que serían auténticamente representativas, en las que se pasaría cuentas al rey y se obtendría el reparo de los agravios «por justicia», como se dice de las aragonesas; defensoras de libertades generales y titulares de competencias judiciales, de aprobación del presupuesto y —mérito clave— titulares de amplias competencias legislativas cuando no encarnación de un poder legislativo independiente; sus brazos habrían sido los defensores de los derechos del pueblo frente al despotismo de la Monarquía. La idealización pasa a veces por un anticastellanismo que llega a extremos de radical irracionalidad¹⁴, o por convertir a las oligarquías feudales, a la Iglesia y a los grupos que controlaban el gobierno de algunas ciudades en generosos benefactores del «pueblo»¹⁵. Criterios y

13 Las contradicciones son frecuentes en una misma obra. Así, COROLEU y PELLA (*Las Cortes catalanas*, p. 301) presentan la revuelta contra Juan II como el movimiento de Cataluña contra la tiranía. Más adelante, al narrar acontecimientos puntuales, como la reunión del parlamento fiel de 1468 o de las Cortes de Monzón, el evidente monarquismo del campesinado remensa, etcétera, introducen matices, pero siguen refiriéndose a las «tropas del Principado» cuando aluden a las de los rebeldes. Los calificativos de «patriotas» y «traidores» salpican muchos relatos clásicos catalanes de estos conflictos y las referencias a personajes del momento. Fontanella y Vinyes serían ejemplo de ambas calidades a mediados del XVII. Es recomendable leer en ELLIOTT, *op. cit.*, qué circunstancias hicieron de ambos lo uno y lo otro.

14. MARTÍNEZ ALOY, en *La Diputación de la Generalidad del reino de Valencia*, pp. 188-189, a fuerza de cargar las tintas contra las dinastías «castellanas», llega a escribir cosas tan peregrinas como que la Casa de Barcelona siempre hizo causa común con el pueblo para defender los principios democráticos, viendo en Castilla un reino sometido al Feudalismo, mientras que «la primitiva sociedad valenciana, bajo un código que no conoce privilegios de clase» ha vivido una lucha constante, sostenida por el pueblo y la Monarquía, contra el Feudalismo.

15 Como ejemplo, DOMÍNGUEZ ORTIZ (*Las clases privilegiadas en el A Régimen*, p. 178) cita críticamente las opiniones del Marqués de Ciadoncha sobre la nobleza aragonesa, que «no fue feudal»; quizá dura frente a la Monarquía, pero «siempre en beneficio de su pueblo y nunca del propio».

métodos más rigurosos se van abriendo paso poco a poco, pero aún hay una renuencia general a revisar los mitos y sigue pesando la imagen legada por los analistas del Barroco y los escritores nacionalistas del XIX¹⁶. Leer a Salvador Bové, quien afirma que siglos atrás los de la Corona de Aragón eran «estados» tan libres como lo era en 1900 ¡el Imperio Austro-Húngaro!, o que, tras referirse a los abusos de la Veintiquatrena de Barcelona, dice que «la representació de la voluntat del poble en aquell temps sí que era una veritat» y no lo que él estaba viendo en su tiempo¹⁷; leer a los mismos Coroleu y Pella, a Cliver, López de Haro, etc., es un ejercicio altamente interesante para el historiador de nuestros días y toda una invitación a dudar.

16. «Las Cortes eran la expresión más típica de la mentalidad estamental y símbolo de las libertades tradicionales», escriben Vázquez de Prada y Molas, para añadir que «sus atribuciones eran legislativas y en cierto aspecto fiscales y de gobierno» (*Notas sobre las instituciones públicas de Cataluña en el s. XVIII*. En *Actas del Simp. H.ª de la Admón.*, 1970, pp. 305-317). GARCÍA CÁRCCEL (*Cortes del reinado de Carlos I*, Val. 1972, p. V) escribe que la atracción del régimen foral «sólo ha producido machaconas visiones laudatorias y eruditos ahondamientos jurídicos», pero que se justifican por «las resonancias liberales de los fueros valencianos».

En la presentación de una ed. facsímil de la *Forma de celebrar...* de MARTEL (Zar. 1984) escriben SARASA Y REDONDO que las Cortes «en el marco de las libertades aragonesas, canalizaron las aspiraciones legítimas de los aragoneses . y, con sus deficiencias y, a veces, escasa efectividad, defendieron a los aragoneses de los agravios o greuges infligidos por el rey o sus oficiales a sus personas, complementaron la actividad política del Consejo Real, ordenaron las medidas de salvaguardia del cuerpo social en momentos difíciles, regularon el sistema de prestaciones personales . y mantuvieron un diálogo continuo entre gobernantes y gobernados para evitar autoritarismos o posturas radicales». Nos atreveríamos a decir que ni siquiera la obra de Martel, un tanto deleznable por lo demás, justifica una imagen tan redonda. Basta, como ejemplo, leer los caps. 54-55 de Martel sobre agravios para advertir cómo se siguen alimentando ahora mismo imágenes desenfocadas.

17. *Institucions de Catalunya*, 1894. «En aquells temps en que's professaven les verdaderes nocions de llibertat y dignitat», dice en las pp. 15-16, al tiempo que añora las excomuniones eclesiásticas de los que no obedecían los mandatos

2. UNA REVISION NECESARIA

¿Por qué se mantienen tales mitos sobre el régimen político y las Cortes a finales del siglo xx? La respuesta más simple y más exacta es que porque todavía no hay estudios serios y con criterios rigurosos sobre el problema¹⁸. Hay que recordar algo tan palmario como que aún no contamos con una obra de conjunto equiparable a la que escribiera Piskorski hace un siglo sobre las Cortes de Castilla. No deja de ser llamativo que, cuando historiadores sólidos se refieren a las Cortes castellanas puedan prescindir de Martínez Marina o de Colmeiro y ni siquiera aceptan la visión sobre el particular de Sánchez Albornoz; pero, al referirse a las de la Corona de Aragón, se apoyan en obras como las de Peguera, Sarrovira, Matheu y Sanz, Blancas o Martel porque no se tiene nada más moderno o lo que hay se apoya en aquéllos¹⁹. En el caso de las Cortes catalanas medievales no se puede argumentar que las fuentes básicas no estén publicadas; sencillamente no se han estudiado sistemáticamente, como nadie se ha atrevido aún a estudiar el Justiciazgo aragonés.

Cuando menos se tendría que reconocer, por pura prudencia científica, la fragilidad de visiones sobre estos temas basadas en lo que escribieron autores de hace trescientos o cuatrocientos años. Por lamentable que resulte, hay que decir que, en general, no es así y que para algunos mitómanos acérrimos lo que dijeron aquellos venerables difuntos ni siquiera se puede poner en duda. Lo que sorprende más aún es que en nuestros días se sostienen esas visiones idealizadas sin tener para nada en cuenta qué es la Europa del Antiguo Régimen, cómo terminó éste y con él las ins-

18. Aparte el atisbo de mejores criterios de análisis en artículos de divulgación de varios autores, por nuestra parte intentamos en *Las Cortes de Aragón* (Zar. 1978) un primer acercamiento riguroso al tema. Al año siguiente publicaba E. SARASA, *Las Cortes de Aragón en la Edad Media*, con más atención a cuestiones puramente formales y abundantes concesiones a la visión tradicional. El único estudio reciente sobre las Diputaciones publicado es el de A. SESMA: *La Diputación del reino de Aragón en la época de Fernando II* (Zar. 1977)

19. Dos ejemplos muy elocuentes y distintos entre sí: la citada obra de ELLIOT y el *Manual de H.^a del Derecho Español*, de TOMÁS Y VALIENTE. Es el mismo caso de García Gallo, Valdeavellano y tantos otros.

tituciones representativas de corte estamental; como tampoco se tiene en cuenta qué se investiga y se escribe desde hace décadas sobre estas instituciones en otros países próximos.

La revisión de todos estos temas se impone; si hoy se revisan continuamente las imágenes del parlamentarismo del siglo XIX, cómo no hacerlo en este otro caso. «La bondad y excelencia de una constitución política se aquilata al examinar el carácter de la época... y los resultados de esta práctica son la piedra de toque en donde puede realmente apreciarse su valor verdadero. La de Aragón era excelente para que la nobleza hiciera, como hacía, lo que se le antojaba con el pueblo, la masa en general, sin que el rey, que era juguete suyo, pudiera impedirlo...». Es una cita, vieja de un siglo, del valenciano Danvila²⁰, que en éste y otros puntos hacía observaciones lúcidas, aunque caiga también en otros estilos de mitificación. Pero otro ilustre investigador, mucho menos sospechoso, Ramón d'Abadal, advertía también hace años que las Cortes, las catalanas en este caso, «fueron el instrumento válido de actuación para los dirigentes feudales y municipales... y su actuación fue más bien negativa...»; combate la interpretación de que en 1283 comenzara la legislación paccionada, o señala respecto del tema de las libertades que «... débese entender por libertades el control de los feudales sobre la Monarquía y sus oficiales...»; se refiere a las posiciones reaccionarias de las instituciones, «todo lo contrario de lo que supuso la historiografía romántica», etc.²¹. «Sé perfectamente —concluye— que la idea de las Cortes que flota a lo largo de esta presentación se aparta mucho del sentir general que sobre ellas proyectaron los escritores románticos. Contradice la opinión de que las Cortes constituían el baluarte del pueblo contra la tiranía de los monarcas y de sus oficiales. Es evidente que corrigieron con celo los abusos de unos y otros y en este sentido su obra fue beneficiosa. Lo que no enmendaron fueron los propios abusos y con ello irrogaron al Estado un daño constitucional que comportaría su decadencia»²².

20. *Las libertades de Aragón. Ensayo histórico, jurídico y político* (Madrid, 1881), pp. 215-216.

21. *Pedro el Ceremonioso y los comienzos de la decadencia política de Cataluña*. Prólogo al T. XIV de la H.^a de España Pidal, pp. XCIV y LXXXIX.

22. *Ibidem*, p. XCIV

En estas palabras del maestro d'Abadal había implícita, nos parece, una invitación a revisar estos planteamientos clásicos y tal invitación no se ha seguido; se escribe por un lado de estructuras sociales sin ningún temor a calificarlas de feudales y abusivas o aludir a las luchas de clase, etc.; por otro de estructuras políticas liberales, pactistas, democráticas, de sociedades políticamente «ordenadas» y armónicas, y ambas imágenes de un mismo tiempo histórico, por supuesto, no encajan. A veces se ha querido encontrar alguna vía de armonización: Vicens Vives distinguía «pactismo feudal» y «pactismo burgués» y Sobrequés Callicó ha desarrollado la misma idea²³, pero la revisión sigue sin acometerse, no se han dado los pasos necesarios y parece existir un cierto temor a la dureza del trabajo por realizar y a sus mismos resultados, al eventual derrumbe de unos mitos mantenidos en pleno final del siglo xx.

La revisión, aparte del asunto de las Cortes en sí mismo, creemos que debe abarcar la problemática general del régimen político en la Corona de Aragón. El asunto clave de la creación y del desenvolvimiento del Estado se encuentra casi completamente desatendido en la historiografía española. Hay que partir de la base, por ejemplo, de que la contraposición entre Absolutismo y Pactismo, tal y como la sugiere la visión tradicional, es esencialmente falsa, como ha señalado Maravall²⁴; que las resistencias al Poder creciente del Estado las protagonizan los beneficiarios de unas estructuras residuales del Feudalismo, pero no los «pueblos», y ésa es una perspectiva lógica y realista desde la que reinterpretar las grandes crisis políticas en el Antiguo Régimen.

No nos resistimos a proponer algunas *reflexiones metodológicas*, aunque no haya margen sino para enunciarlas escuetamente.

23. *La práctica política del Pactismo en Cataluña*. En *El Pactismo en la Historia de España*, de VV.AA. Madrid, 1980.

24. «...ese elemento pactista... ni es ajeno a la Monarquía Absoluta, de manera que donde aquél se encuentre no se dé ésta, ni muchísimo menos puede ser la base para caracterizar una historia constitucional catalana a diferencia de otras, entre ellas de la castellana...». «Desde el derecho romano imperial hasta el absolutismo ilustrado del xviii en toda Europa la idea de pacto es la que, con sólo matices de diferenciación muy secundarios, se sitúa en la base justificadora del poder...», etc. *Estado Moderno y mentalidad social*, t. I, pp. 290 y 291 y otras.

Previamente y, tal y como están las cosas, hay que decir que lo primero que se precisa es tener voluntad de emprender tal revisión y estar convencidos de su necesidad, cosa nada clara en determinados círculos historiográficos²⁵; y también que la revisión debe emprenderse entrando en los Archivos y dejando a un lado, de momento, las Bibliotecas donde duermen Peguera o Martel, yendo a las fuentes básicas sin ninguna predeterminación iconoclasta, pero sin temor a lo que la propia revisión nos depare.

Dicho esto, creemos que hay unos pocos principios fundamentales que, en cualquier caso, deberían ser tenidos en cuenta:

1) Intentar el estudio comparado, tener presente qué ocurre en los demás reinos de España, por de pronto, y de Occidente; cómo evolucionan en ellos las instituciones representativas y por qué; atender a la vez y en cuanto sea posible al tratamiento que los distintos especialistas dan hoy a este tema. Es la única posibilidad de comprenderlo aceptablemente, pero evitando también las comparaciones apresuradas y basadas en muy distinto grado de conocimiento de unos y otros casos²⁶. De este modo llegaremos a saber mejor qué hay de general y qué de específico en cada ejemplo²⁷.

25 «Lo que sí podemos y debemos hacer es no extender nuestra mirada sobre el pasado directamente, sino a través de las imágenes que una vez estuvieron en la retina de los antiguos.. Hasta el propio Zurita, y no digamos los demás, llama «cortes» a las del s. XII porque las considera cortes iguales a las de su tiempo. Si ningún autor medieval o del Renacimiento y del Barroco han puesto en duda la citada unidad institucional ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? ¿No es esto ser... más papistas que el Papa? Podremos clasificarlas, tipificarlas, etiquetarlas, valorarlas, a condición de no alterar la imagen antigua» (el subrayado es nuestro). LALINDE: *Presupuestos metodológicos para el estudio institucional de las Cortes medievales aragonesas*, en *Rev. Medievalia*, 3, 1982, pp. 53-79. Es una de las más llamativas muestras del intento de reverdecer a toda costa los mitos clásicos sin el esfuerzo de investigación de las fuentes documentales, a las que el prof. Lalinde no gusta de asomarse, en este tema al menos.

26. A este respecto es claro que no se puede seguir comparando las Cortes de Castilla, tal y como nos las describen las revisiones más recientes, con las Cortes de la C. de Aragón pintadas por Peguera o Blancas.

27. Siguiendo, claro está, a Sarrovira y Peguera, ELLIOT escribe que «como era quizá lógico en una institución ocupada preferentemente en la defensa de los derechos del individuo, los catalanes habían inventado una forma exclusiva de procedimiento que daba a cada miembro de las Cortes un poder

2) Acometer el estudio mediante unos análisis globales; atender a la vez a las realidades políticas, sociales, ideológicas, económicas de toda una época sin encerrarse en estudios meramente formales. Las instituciones representativas, por su misma naturaleza, son un reflejo fiel de la sociedad de la que emanan y que se sirve de ellas; en su seno es lógico encontrar el mismo tipo de tensiones que enfrentan fuera de ellas a los distintos grupos de poder. La perspectiva sociológica se nos aparece así como especialmente útil para abordar la investigación. En qué medida son verdaderamente representativas, quiénes se integran en las Cortes y por qué; en favor de quién actúan las Cortes; qué relaciones existen entre sus miembros y sus teóricos representados, etc. Hay que atender a las teorías y a las doctrinas, pero no sólo a las que sustentan los brazos y quienes escriben por su encargo, sino también a las de los organismos reales y a las de las gentes modestas que no tienen derecho a estar en las Cortes. Es la única forma de acercarse un poco más a la verdad y lograr una imagen más real.

3) En tercer lugar hay que atender a otra preocupación fundamental: la de distinguir cuanto sea posible la teoría y la práctica, doctrinas y realidades, derecho y hecho, como escribiera en su día Emile Lousse²⁸. Hay que llegar a dar ese paso fundamental de analizar hasta qué punto las doctrinas y las pretensiones de las Cortes (o las de la Monarquía) se llevan a la realidad; qué hay detrás de las idealizaciones historicistas y de las fórmulas, qué distancia existe entre el «ser» y el «deber ser». Así podremos ir respondiendo a otros interrogantes básicos: ¿Qué hacen las Cortes? ¿Qué la Monarquía en Cortes y a espaldas de las Cortes? ¿Qué pretensiones de los estamentos encuentran respuesta positiva y cuáles no? ¿Se legisla sólo en Cortes, o también al margen de ellas? ¿Hasta qué punto son operativos los condicionamientos a la concesión de servicios; en qué proporción llegan a la Hacienda Real y quién los paga? ¿Qué cargas imponen las Cortes sobre sus

ilimitado: el de disentir y paralizar el desarrollo de las Cortes» (op. cit., p. 197). Naturalmente, no hay tal exclusiva, ni puede aceptarse la idea de que las Cortes se ocuparan en la defensa de los derechos individuales.

28. *Gouvernés et Gouvernants en Europe Occidentale durant le Bas Moyen Age et les temps modernes* En RSJBodin, T. XXIV, 1966, p. 41.

connacionales sin ninguna relación con los servicios al rey y para qué fines? La dificultad de hallar respuestas válidas no se oculta a nadie, pero algo se avanzará, y en la buena dirección, si, por principio metodológico, intentamos saber si hay o no un foso entre teorías y prácticas.

4) Aquilatar y resolver problemas de terminología y concepto. No caben confusionismos semánticos y las trasposiciones conceptuales tan comunes en las visiones clásicas al aplicar conceptos propios de una época a otras completamente distintas con intención, a veces, de crear impresiones subliminales absolutamente improcedentes. Por ejemplo, el concepto mismo de Cortes, con el que se liga el problema de su fecha de nacimiento. La tensión política ¿se produce entre la Monarquía y el «reino» o sería más correcto decir entre los poderes públicos, o el Estado, y los poderes privados privilegiados? ¿Son términos como «centralización-autonomía política del reino» los más idóneos para describir las realidades de épocas como la Baja Edad Media o el Antiguo Régimen? ¿Qué significa entonces, de positivo y de negativo, el proceso de «estatificación» frente a la pervivencia de estructuras preestatales? ¿Cabe hablar de un sistema liberal o democrático, por muy fuertes que puedan ser las Cortes y, en teoría, muy representativas? ¿Cortes representativas significa, como pretende Jesús Lalinde, que «las Cortes medievales son tan representativas como lo son las nuestras para nosotros», o bien, como dice Georgesco, suponen «la representación feudal... de los inferiores por los superiores, de los sometidos por los detentadores del poder. por la clase dominante»?²⁹. ¿Qué significa de verdad la antinomia derecho del rey-derecho del reino? ¿Son tales conceptos los que expresan correctamente el auténtico dilema en estas épocas?

29. LALINDE, *Presupuestos* . . , p. 77. V. GEORGESCO, *Le problème des origines des A. d'États. Reflexions méthodologiques à la lumière de l'ère. du sud-est européenne de l'institution*, en *Rev. P.E.R.*, II, I, 1982, 73-80. El prof. Lalinde, en una clara muestra de falta de rigor lógico, escribe: «La institución *debe* [de] haber satisfecho las aspiraciones de representatividad, aunque pueda haber localidades que se hayan sentido preteridas, y en este sentido las Cortes medievales *son* tan representativas como lo son las nuestras para nosotros» (los subrayados son nuestros).

3. UNOS PRIMEROS RESULTADOS DE LA REVISION

Una revisión que quiera ser coherente con todo lo dicho, aplicar esas líneas metodológicas y responder a todos los interrogantes esenciales encierra, es cierto, unas dificultades superiores y los resultados son aquí, más que nunca, muy provisionales³⁰. Ahora bien; el estudio de la documentación referida a una época larga (s. XVI-XVII) y aunque haya de ser por muestreos, nos revela muy rápidamente que la imagen clásica se nos cae en seguida en sus partes esenciales. Veámoslo en tres planos distintos.

3.1. *La Monarquía-El Reino-Las Cortes*

La monarquía no actúa en principio de manera agresiva respecto de las Cortes, pero en ninguno de los reinos tuvieron éstas «la posibilidad de constituirse en un límite institucionalizado del poder absoluto», como ha señalado con total acierto el Prof. Maravall³¹. En todos los casos sin excepción los estamentos reconocen formalmente que su reunión es una «merced real», un compromiso moral, una medida de buen gobierno, pero no un derecho del reino³². La Monarquía no sólo logra que triunfe tal concepción, sino que alude con frecuencia al puro papel de órgano consultivo y de información de las Cortes, que existen para dar «consell, suvencio e ajuda»; se siguen dando prudentemente al olvido los viejos fueros en que se determinaba la periodicidad con que *debían ser* reunidas las Cortes, ante la diferencia de todos. Los estamentos no sólo no suelen reivindicar que se cumplan tales ordenaciones, sino que muestran incluso su oposición expresa a las reuniones frecuentes y conocemos ya muy bien algunas de las causas. El que la Monarquía fijara el cuándo era una baza tan definitiva que significa por sí que las Cortes no fueron jamás una institución estable, independiente y consubstancial con el régimen político vigente en la Corona de Aragón, como no lo eran en

30. Remitimos desde ahora a la publicación próxima de un amplio estudio sobre «Las Cortes en la España del Antiguo Régimen» Allí se encontrarán las abundantes apoyaturas y citas documentales que no tienen aquí cabida

31. *Estado Moderno*, I, 358.

32. Por ej., Valencia «reconoce la singular merced y favor que V. M. por su benignidad ha sido servido hazernos teniendonos Cortes », ARV Real 516 bis, fl. 36.

ningún otro país todavía en 1700³³. Si resultan poco molestas se las reúne con mayor frecuencia; si sus resistencias van demasiado lejos dejan, sencillamente, de existir; el rey prescinde de ellas aunque ello le suponga otro tipo de problemas. A la pretensión de los estamentos de que no se conceden ayudas sino en Cortes, opone la Monarquía el principio de que las Cortes dejan de existir si no colaboran; es la otra cara de la realidad. Es decir: en este tiempo las Cortes actúan si la Monarquía Absoluta permite que existan. En todo el siglo XVII apenas se las reúne, y las catalanas prácticamente desaparecen en 1626-32. Esa misma Monarquía Absoluta afirma también sus posiciones en otros aspectos menos importantes del procedimiento, a la vez que va ganando un poco de eficacia lo que podríamos llamar el «aparato estatal».

Efectivamente, cada vez es más palpable la diferencia de capacidad técnica entre los organismos de la Monarquía y los de los reinos, y ello juega en beneficio de los primeros y acentúa la desconfianza de las masas respecto de los segundos; se reconoce muchas veces de manera expresa la superioridad del modelo de administración política de la Corona y el mal funcionamiento de las «instituciones del reino», pidiendo que el rey las corrija por fuero; hay peticiones concretas, por ejemplo, de que las Audiencias aragonesas actúen al estilo de las Chancillerías castellanas, o que el tribunal del Justicia lo haga con el mismo cuidado y honestidad que la Audiencia³⁴.

Consejos y comisiones especiales mantienen informado al rey de lo que pueden plantear los estamentos, cómo puede responder y qué apoyos tiene en los mismos fueros de cada reino, etc. Martínez Aloy reconocía hace años que las Cortes se iban convirtiendo en «un mero cuerpo administrativo sometido a la voluntad de un monarca que daba a sus mandatos la forma de petición o

33. ROSKELL recuerda que debe dejar de desplazarse «la frontera entre la constitución moderna, de la cual el parlamento es una parte indispensable, inevitable y permanente, y la constitución premoderna (incluyendo la medieval) en la que el parlamento, siendo dependiente de la voluntad del rey directamente, en cuanto a su reunión, era un acontecimiento extraordinario y ocasional y no una parte regular de la constitución». Cit. G. CUTTINO: *Medieval Parliament reinterpreted*, Rcv. *Speculum*, 1966, p. 687.

34. ACA CA. Leg. 1359/2/7, p. .

ruego»³⁵. En 1626 crea Felipe IV las Juntas de Cortes, instrumento esencial de la Monarquía desde entonces para controlar un poco mejor a la institución, aunque no siempre lo consiguiera.

Ahora bien; todo ello no impide que las Cortes «antiguo régimen» de la Corona aragonesa mantengan una extraordinaria fortaleza por un tiempo; una razón clara es la de que siguen estando integradas por los brazos clásicos y por tanto concentran la fuerza de todos los grupos de poder de la sociedad de la época. Pero además, y ante la inhibición de los reyes, los brazos nobiliarios se hinchan desmesuradamente como creemos que no ocurre en ningún otro reino europeo de la época, y según un proceso que es el reverso exacto del vivido por las Cortes castellanas, de las que desaparecen los privilegiados en 1538. A las catalanas de 1563 asisten hasta 281 nobles, 317 a las valencianas de 1604, 437 caballeros a las aragonesas de 1702. La administración real es consciente del problema³⁶, pero está claro que no se puso empeño en cortar este desarrollo anormal que llegó a hacer de las reuniones de Cortes tumultuarias asambleas de privilegiados atentos a obtener todo género de prebendas. Por otro lado, los estamentos acaban mostrando un desinterés creciente por las Cortes, mientras los más fuertes de cada grupo desvían su ambición hacia el control de las Diputaciones, más eficaces y cómodas desde su punto de vista. El declive de los parlamentos seguramente se debe más a tal desinterés y a las resistencias furibundas a colaborar con la Monarquía que a los ataques directos del Absolutismo. Esto es algo que contradice frontalmente la idealización tradicional de estas instituciones.

Es evidente también que en una época y sociedad crecientemente críticas el espíritu oligárquico de las Cortes las hace ir perdiendo el prestigio y la autoridad moral que pudieran haber conservado. Ellas (y las Diputaciones) aparecen ante las masas como más responsables que la Monarquía de los diversos sistemas de tributación y es del dominio público entonces que buena parte de los tributos a que estaban sujetas iban a parar, legalmente, a

35. *Op cit.*, pp 293-294.

36. ACA CA. Leg 1350/48/1-3, Leg. 1372/39 y otros. Podríamos recordar que en 1789 la reunión de los Estados Generales de toda Francia supuso la presencia de 270 nobles, de un país de 26 m. hab. En 1700 la población aragonesa no superaba el medio millón de personas.

los bolsillos de los miembros de los brazos. La desconfianza de las clases modestas era lógica; las Cortes eran para ellas la institución que reunía a los poderosos del país; la fuerza y el protagonismo político les venía precisamente de ello. Es dentro de las Cortes, a su través, como en la Corona de Aragón se formaliza el *pacto* de fondo entre la Monarquía Absoluta y las clases privilegiadas que caracteriza en toda Europa al Antiguo Régimen. Ello supone casi lo contrario que la existencia de un régimen pactista antiabsolutista, como todavía hoy se pretende. Las Cortes eran aquí una encarnación perfecta precisamente de la sociedad arcaica y feudalizante de la época del Absolutismo. Ese es el modelo social y jurídico que defienden hasta su extinción. Los choques de intereses entre los brazos, tan estridentes en ocasiones³⁷, no impiden que las Cortes empeñen, formalmente solidarias, toda su capacidad de presión en reivindicar para las minorías el disfrute del «poder y dominación absolutos. Las propuestas de fueros de las Cortes valencianas de 1604 constituyen uno de los ejemplos más acabados de ello. Los términos en que se pide que por fuero confirme el rey este poder absoluto y el que este tipo de peticiones aparezcan formalmente suscritas por los tres brazos revela el sentido en que actúan estas instituciones representativas en el Antiguo Régimen. El que obras de doctrina, que recogen como gran mérito de las constituciones aragonesas la defensa que hacen las Cortes del derecho de abusar del privilegio personal o del *ius maletractandi* hayan servido a historiadores modernos para apoyar una visión de aquéllas como defensoras de un régimen de libertades políticas de los reinos es, para nosotros, un enigma merecedor de una investigación particular.

Esto al margen, la verdad es que las respuestas de la Monarquía a peticiones del tipo de las aludidas suele ser ampliamente positiva para los privilegiados³⁸ Recorta unas pretensiones, recha-

37. Por ej., de las 39 peticiones del clero valenciano en 1604, 9 están destinadas a defender o ampliar sus jurisdicciones a costa de las villas del reino. Nada hay tan falso y a-racional en la visión mítica de las Cortes como el que éstas constituían un bloque armónico y sin fisuras.

38. Como favorables a los privilegiados son las que suele dar en Cortes de Castilla rechazando precisamente peticiones netamente contrarias a Iglesia y Nobleza. El «pacto» funciona aproximadamente igual en todos los casos, aunque por vías distintas. Difícilmente podía ser de otra forma.

za otras, pero en conjunto el rey de turno no se resiste demasiado a convertir en fueros peticiones claramente lesivas para el Estado y los poderes públicos y para las masas. Es evidente que la Monarquía claudica en exceso, porque, como ha escrito también Maravall, «el Absolutismo de las Monarquías modernas se constituye en definitiva como clave de bóveda de un régimen social de privilegios señoriales, restablecido y vigorizado en el siglo barroco»³⁹. Pero las claudicaciones y los consiguientes triunfos de los estamentos no significan que el régimen político no sea «no absoluto», de pactismo liberal, sino que el acuerdo de los poderosos con el gobernante se realiza, insistamos en ello, por la vía de la relación Monarquía-Cortes.

3.2. *Colaboración de las Cortes. El problema de los servicios*

¿Existe alguna razón más precisa de la fortaleza de las Cortes? Evidentemente, sí: la pobreza de recursos propios de la Monarquía y la necesidad de obtener a través de ellas ayudas económicas. El problema no preocupa mucho en la época de expansión; después la cuestión de los servicios genera los graves enfrentamientos conocidos y, de hecho, la práctica desaparición de las Cortes en Cataluña y casi en los otros territorios. En los tres la asimilación entre Cortes y concesión de servicios era casi absoluta. Una de las cosas que intentó la Monarquía fue extender el principio de que los servicios constituían un deber de súbditos para con el gobernante⁴⁰. Las necesidades públicas, la defensa del propio reino, la correcta administración de la justicia eran los argumentos reales para explicar la necesidad de tales servicios, y estos argumentos llegaron a calar en cierta medida⁴¹; pero las Cortes seguían manteniendo la tesis de la voluntariedad del servicio («servici graciós») «com los habitants en dit Principat y Com-

39. *Op. cit.*, I, 387.

40. Dentro de esa óptica se movieron los progresistas y «modernos» planes fiscales de Olivares, e incluso otros anteriores. Vid. al respecto DOMÍNGUEZ ORTIZ: *Política fiscal y cambio social en la España del s. XVII*, en particular los dos primeros capítulos (Madrid, 1984)

41. En 1625 la Diputación aragonesa pide la convocatoria de Cortes «considerando este reyno la obligación que tiene de acudir con todas sus fuerzas al servicio de S. M.». ACA. CA Leg. 1351/2/20.

tats sien poble franch y llibert de tota imposicio forçossa»⁴². Hay que recordar, no obstante, que tal concepto no tenía ninguna originalidad ni en la España ni en la Europa de la época. La concesión o no y el regateo eran la baza de los estamentos, pero la rigidez del sistema y la pobreza de los recursos de la Monarquía provocó a veces graves situaciones de indefensión que los propios estamentos se ven forzados a lamentar, como ocurre en Valencia en 1604.

Cuando las reuniones de Cortes eran relativamente frecuentes (hasta 1552) los servicios son casi fijos y pagados en tres plazos anuales⁴³, sistema que se mantiene cuando son más escasas, para pasar luego a estirar el plazo de abono hasta los quince años, sin que las cuantías crecieran en la misma proporción y mucho menos si consideramos además los índices de inflación. La insuficiencia de los servicios se agudizó cuando los estamentos consiguieron vía libre para abonarlos, en todo o en parte, en especie, contra el parecer de Juntas y Consejo⁴⁴. De manera habitual no llegaban a la Hacienda sino en una pequeña parte y aún así con retrasos de más de treinta o cuarenta años⁴⁵.

Pero que la Monarquía lograra poco fruto de los servicios de Cortes de ninguna manera quiere decir que los habitantes de la Corona de Aragón no estuvieran sujetos, con la disculpa de los servicios, a un régimen contributivo duro y poco transparente, responsable de toda suerte de corrupciones, de las que se beneficiaban descaradamente unas oligarquías reducidas⁴⁶. Las Diputaciones, o más habitualmente comisiones especiales de las Cortes, en contacto con funcionarios reales de los que llegan a recibir órdenes directas⁴⁷, redactan las ordenanzas sobre los tipos de

42. ARV. Real 515, fl. 750. ACA. CA. Leg 1372/8/2, etc.

43. ACA. CA. Leg. 1371/7/9-11 y Leg. 1372/34 y 8/2.

44. Vid. Leg. 1372, núm. 1, fls. 323-325v., Leg. 1359/11/9.

45. En 1528, aprobados los tres servicios y descontadas deudas, retenciones y recompensas, se llega a la conclusión de que sumarían los ingresos 345 827 ducados y los gastos 346.525. En 1629 el rey pide a la Diputación catalana que se le abone lo que se le debe de un servicio aprobado ¡44 años antes! Servicios de 1602-04 de Valencia aún no se han acabado de cobrar en 1626, etc

46. Vid. ACA. CA. leg. 1352/3/32-37.

47. ACA. CA. leg. 1372, núm. 1, fls. 97-106.

cargas y el modo de recaudación. Teóricamente sisas y generalidades obligaban a todos; en la práctica las exenciones habituales de los privilegiados se reafirman de continuo, sin contar con que, pese a ser tributos sobre consumo y comercio, se impone el sistema de que cada núcleo venga obligado a entregar unas cantidades fijas, con lo que resultaba fácil hacer las cosas según conviniera a los que tenían el poder de decidir⁴⁸. Por otro lado hay que recordar que, si el reino debía pagar sisas durante tres años para, teóricamente, recaudar el servicio concedido al rey, durante otro plazo igual tenía que seguir las pagando para los bolsillos de todo tipo de señores de vasallos, como nos detalla Blancas para el caso de Aragón⁴⁹ y que las Diputaciones se aseguraban siempre crecidos sobrantes, de cuantías difíciles de evaluar por el momento, para engrosar la «hacienda del reino», sin que hubiera luego una rendición de cuentas ante las Cortes. El casuismo, la falta de criterio con que se fijan las cargas y los procedimientos de cobro y administración provocaron el desarrollo de un sistema extraordinariamente corrompido y graves daños a la economía de cada reino, males frecuentemente denunciados por los naturales y, por supuesto, por los organismos reales. La hipertrofia del mismo aparato recaudatorio llega a extremos verdaderamente desconcertantes. Las Cortes aparecían como responsables de todo ello ante sus conciudadanos y la Monarquía cedía cada vez sin dejar de mostrar la frustración que le producía lo anárquico del sistema.

Aunque la concesión se acaba dando por supuesta y se produce sin falta, salvo en las catalanas de 1626, los estamentos intentaban siempre obtener el máximo de contrapartidas e introducir algunas condiciones; pero las más interesantes a priori, la obtención de leyes favorables y el reparo previo de agravios, no pasaron de ser una aspiración⁵⁰. Una de las condiciones habituales era la retención automática de una parte del servicio (aproximadamente

48. En Valencia, 1626, se dice que «si el clero no contribuye», cosa que se sabía de antemano, los otros brazos no se vieran cargados con su parte. ACA CA. Leg. 1372, núm 1, fls. 97-106.

49. BLANCAS: *Sumario y resumario de las Cortes celebradas en Aragón* Ms 97 de la Bibl. Univ. de Zaragoza.

50 Vid. más adelante, y ARV. Real 515, fl 751-751vv, ACA CA Leg. 1372, núm. 1, fl. 94, etc.

un tercio) para distribuir entre los «agraviados»; otras partidas quedarían como de libre disposición de los Diputados para gastarlas «en cosas de la libertad del reyno», como se dice en Aragón⁵¹, aunque hay episódicas negativas del rey a aceptar estas corruptelas. Aparte, otras cantidades se dedicaban a toda suerte de recompensas particulares o se pedía también que se atendiera a gastos específicos y muy concretos. Por el lado opuesto, las presiones directas o indirectas de la Monarquía sobre los municipios, a veces por la vía de amenazarles con inspeccionar la administración de los bienes propios, eran también frecuentes, de modo que la idea de la independencia y firmeza de las Cortes en este capítulo debe ser muy matizada.

3.3. *Reparo de agravios y competencias legislativas*

Uno de los lugares comunes más repetidos y más carentes de realidad era el de que las Cortes no aprobaban la concesión del servicio hasta ver reparados los agravios presentados por los estamentos contra el rey; se ha estimado habitualmente como una de las pruebas del poder e independencia de la institución. Hay que señalar en primer lugar que los mismos teóricos más proclives a mitificar a las Cortes puntualizan que en realidad en ellas se presentaban agravios contra el rey, pero también contra las mismas instituciones del reino, incluidas las Diputaciones o el Justicia de Aragón; de unos brazos contra otros, de villas contra ciudades o de vasallos contra señores; que con el nombre de agravios se caracterizaba con frecuencia simples peticiones de mercedes cuya concesión se reconoce como discrecional para el rey o que éste no tenía en su mano conceder⁵². El tema no tuvo jamás el sentido unidireccional y político que se ha pretendido.

En segundo lugar, la Monarquía acaba saliendo bastante airosa frente a la pretensión de condicionarlo todo al «reparo» previo. A mediados del siglo XVI ya es frecuente que el examen de los agravios, encargado a comisiones mixtas, se inicie después de

51. ACA. CA. Leg. 1370/11.

52. Por ej., peticiones de que el Papa actúe en determinado sentido; que las Cortes de otros reinos levanten prohibiciones, etc. En 1563 un infanzón de Zaragoza presentó agravios «contra los Diputados y Reyno de Aragón», etc.

terminadas las Cortes; en 1585 los brazos catalanes prevén un plazo de estudio de siete meses y de presentación de los agravios ¡hasta treinta días después de la clausura de las Cortes! Este dato, y hay otros ejemplos semejantes, nos ahorra comentarios y demuestra de manera clara la irrealidad de los tópicos, aceptados y repetidos sin crítica. La Monarquía, pues, consigue lo que quiere: que concesión de servicios y clausura de Cortes no quedaran condicionadas, que no hubiera que discutir el reparo sino con un reducido número de comisionados de los brazos, ante los que el rey mostraba también sus propios greuges contra el «reino», y que el reparo, en lo que la concernía, se hiciera en todo caso mediando el dictamen de sus propios técnicos y juristas.

Y en cuanto a la última gran cuestión, las repetidas afirmaciones de que en la Corona de Aragón las Cortes compartieron con la Monarquía el poder de legislar se apoyan a nuestro modo de ver en la sobrevaloración de la evidente capacidad de presión que tuvieron y en la interpretación forzada de lo que escribieron los teóricos de diversas épocas. Ni Blancas ni Matheu y Sanz, por poner dos ejemplos conocidos, escribieron nunca, que sepamos, que las Cortes tuvieran o compartieran el poder legislativo; lo que sí se sostuvo es que el rey venía obligado a legislar con el acuerdo de las Cortes. Resulta muy difícil de entender que si el rey hiciera las leyes *con las Cortes*, y encargándose a menudo las Diputaciones de la edición de los fueros, éstos aparezcan indefectiblemente bajo fórmulas como éstas usadas en Valencia: «Furs nous fets *per* lo cristianissim e molt alt Senyor Rey don Ferrando... *en* les Corts Generals...»; «Furs, capitols, provisions y actes de Cort fets e publicats... *per* la Magestat de don Carlos... *en* les Corts Generals...»; «Furs e actes de Cort fets e atorgats *per* lo Invictissim Rey don Carlos...»⁵³; los textos siempre remiten a la autoridad personal y exclusiva del rey («statuhi y ordeno»). Las fórmulas tienen siempre un valor relativo; negar que éstas indican con claridad que no hay una potestad compartida nos parece no querer ver la realidad.

Es evidente que las Cortes influyeron, y mucho, en la legisla

53. BELENGUER CEBRIÁ: *Cortes del reinado de Fernando el Católico*, Val., 1972. GARCÍA CÁRCCEL: *Cortes del reinado de Carlos I*, Val., 1972. Lo mismo en las colecciones de Fueros y Constituciones de Aragón y Cataluña.

ción; tenían una gran capacidad de presión y una gran fuerza fáctica. La influencia era tanto más fácil cuanto que todo el sistema jurídico era en los reinos aragoneses de una extrema fragilidad y arcaísmo; pero nunca les fue reconocido un carácter de órgano legislador regular al modo en que se conciben los parlamentos contemporáneos. Reivindicaban que no se legislara sin ellas, que se contara con su acuerdo, que las leyes hechas en Cortes no se modificaran fuera de ellas; pero nunca, en lo que hoy sabemos, ni ellas ni los teóricos reivindicaron su derecho, ni compartido ni mucho menos exclusivo, a legislar. Estas ideas suelen expresarse en la época en todos los reinos diciendo que hacer fueros y ordenanzas competía al rey *con* las Cortes. Es más, y este dato parece apoyar a los amantes de las idealizaciones: un hombre como Felipe Vinyes señala que Rey y Cortes pueden actuar juntos «en virtud de la perfecta y natural potestad legislativa que juntamente tienen». Si un hombre del aparato real dice algo así parece que es inútil buscar más. Y, sin embargo, el tema no puede agotarse ahí, porque la realidad diaria demuestra que se trata sólo de nociones teóricas y expresiones y conceptos que parecen ganar fuerza sólo a base de escribirlos y repetirlos. Crespí de Valldaura, por ejemplo, se fija en esas realidades al reconocer que el rey «puede dictar por su autoridad "ley universal" con tal de que no repugne a los fueros y privilegios». Pero no se trata de que Crespí diga que «puede», ni de las fórmulas antes citadas. El que la Monarquía Absoluta no acepta la separación de los tres poderes clásicos símbolo de su soberanía ni compartir alguno de ellos se demuestra en todo un cúmulo de detalles y en el procedimiento general seguido para legislar, tal y como se describe en las fuentes documentales. El rey indica a virreyes y presidentes qué normas y en qué sentido deben ser hechas⁵⁴ y las Cortes reconocen como real esta potestad de «hacer leyes»; la oferta catalana del servicio en 1585, redactada, por cierto, en unos términos muy secos, reconoce que «*per V. M. en aquestes Corts son stades fetes, ordenades y provehides moltes coses, axi per constitucions com per capitols y actes de Cort*»⁵⁵.

Es habitual que los estamentos pidan al rey que eleve, por así

54. Por ej., en ACA. CA Leg. 1372, núm. 1, fl. 183v

55. También las Cortes catalanas al habilitar al entonces heredero Felipe II.

decir, la categoría jurídica de distintas ordenaciones que por tradición solían determinar ellos mismos, como las relativas a los modos de recaudar el dinero de los servicios. Las Cortes son igualmente conscientes de que el rey legisla continuamente al margen de las Cortes, que la emisión de pragmáticas y reales cédulas de obligado cumplimiento era una práctica habitual ya en pleno siglo xv. Antes citábamos a Matheu y Sanz; pues bien, Matheu reconoce expresamente que el monarca tiene potestad legislativa absoluta al referirse a las «leyes compradas» y a su conversión en pacto mediante la entrega de dinero, nociones cuya significación se ha desenfocado tanto.

¿Qué queda de verdad a las Cortes? Por de pronto el derecho de petición y súplica, que son los términos siempre utilizados en Aragón, Cataluña o Valencia: «los fueros y actos de Corte que se suelen hacer y supplicarse por los tres estamentos para que, aviendolos visto, los decrete... Que vosotros trateis de las causas universales del beneficio del Reyno y de conferir y tratar entre vosotros de las leyes, fueros y actos de Corte que os convendrá pedir y supplicarme, para que aviendolos visto yo, los decrete en la forma que mas convenga...», se recoge en una minuta de Felipe IV⁵⁶. Es evidente que las propuestas o peticiones ni vinculan para nada al rey ni son siempre aceptadas.

En segundo lugar los estamentos suelen manifestar la reserva de su derecho a mostrar su desacuerdo con la respuesta del rey y a no aceptarla; ello lleva a las «réplicas» e insistencias e incluso, excepcionalmente, a la paralización de la actividad de las Cortes como vía de presión para que el rey acceda. Pero, si éste se mantiene en sus negativas, o el tema se olvida o las respuestas «se aceptan como últimamente están decretadas». Como ya hemos indicado, eventualmente se pretende condicionar la concesión del servicio al *placet* real a los cuadernos de peticiones, pero se trata de una ficción más, porque el texto de los fueros acaba fijándose después de concluidas las Cortes y porque la Monarquía responde con el mismo tipo de presión: si no hay servicio no hay mercedes ni prebendas, de modo que los brazos comprenden que tienen mucho que perder si niegan un servicio que, en general, obligaba poco a sus miembros.

56. ACA. CA Leg. 1372, núm. 1, fl. 94r.

Como ocurría con el problema de los agravios, la necesidad de tecnificar al máximo todo el proceso legislativo lleva a que, una vez concluidas las Cortes, sean comisiones mixtas las encargadas de «adaptar» o «alargar» los fueros decretados por el rey; no se trataba de una simple ordenación o puesta en limpio. Tal y como funcionan las comisiones, y las subcomisiones de técnicos en las que se delega para hacer el trabajo efectivo, se aprecia palpablemente que la Monarquía ata muy bien los últimos cabos y tiene todas las posibilidades de introducir aún nuevas correcciones y recortes en el sentido que le interesa⁵⁷, ante la inhibición de los comisionados por los brazos, como ocurre en las Cortes aragonesas de 1626⁵⁸.

CONCLUSION

Si las Cortes en la Corona de Aragón no son el poder legislativo, si no tienen competencias colegisladoras —y no las tienen—; si los agravios no se reparan antes de conceder el servicio; si la pobreza de los servicios económicos a la Corona no parece significar un alivio fiscal apreciable para los habitantes; si las Cortes defienden un orden social señorial y arcaico y los brazos más fuertes crecen tan desmesuradamente como hemos indicado; si las reuniones desde mediados del siglo XVI son tan raras como todos sabemos, cabe, volviendo al principio, preguntarse si el régimen en los reinos de la Corona de Aragón es de naturaleza distinta y hasta opuesta al Absolutismo; si las Cortes tienen más competencias que en otros reinos o si sólo tienen mayor protagonismo y más fuerza política, que es una cuestión bien diferente; si representan y encarnan un sistema de «libertades» y de democracia «avant la lettre» o son en estos reinos una de las más claras encarnaciones del sistema institucional y del estamentalismo social propios del Antiguo Régimen; si son, en definitiva, un acicate o un freno para la modernización de las estructuras de tales reinos.

Luis GONZÁLEZ ANTÓN

57. Vid ADZ. Ms. 190, fls. 195-202.

58. La clausura de las Cortes aragonesas fue en julio y la comisión empieza a trabajar tres meses después, pero varios de los representantes de los brazos ya se han ido a Madrid y se niegan a participar en los trabajos

BIBLIOGRAFIA

RECENSIONES

BAILBE, Manuel: *Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983)*, Madrid (Alianza Editorial), 1983, 488 págs.

Pocos libros de historia han tenido estos últimos tiempos mejor acogida de prensa y crítica. Existen sus razones; enlaza por una parte con la actualidad, tomando posiciones en materias bien candentes; por otra parte también a mi juicio conecta con el complejo de una sociedad salida de una dictadura. Una y otra razón distan de constituir para la investigación virtudes.

Este es un libro de tesis en su doble sentido; tesis doctoral que, partiendo de legítimas preocupaciones actuales, menos legítimamente ocupa la historia, tesis que pesa. Como constante hoy titánicamente a vencer, toda la historia constitucional española se encontraría, no sólo hipotecada o lastrada, sino verdaderamente anulada por un elemento militar introducido más que en el orden público. El despropósito ya se manifiesta en un primer capítulo sobre la situación pre-constitucional: Felipe V habría fundado una «Monarquía militar».

Hitos fundamentales de la propia historia constitucional en este horizonte se desvanecen; subsistiendo jurisdicción militar, el Decreto de Unificación de Fueros de la Gloriosa resulta que poco significa; abonando una militarización ya arraigada, la Ley de Jurisdicciones de la Restauración no supuso viraje alguno. Surgen evidencias inoportunas, que a notas oportunamente se relegan y no se exploran; así, para el último caso, la indicación de la monografía de Ricardo Lezcano en el sentido de que la jurisprudencia no vendría exactamente siguiendo una tendencia militarista en el campo del orden público, queda como mera cita de opinión.

No ignora el autor que existen otros tratamientos; así, abordándose el punto cardinal del engarce de fuerzas armadas en un sistema de derechos ciudadanos, presenta «el mejor libro sobre esta temática, C. Villalón, *El Estado de Sitio y la Constitución*, Madrid, 1980». Los descuidos ya son sintomáticos: el apellido Cruz citado como nombre y el título registrado sin la referencia cronológica, 1789-1878, que, aunque viniera de origen tan sólo en portadilla, desde luego interesa. Que, pese al propio reconocimiento, no se aprovechen, o ni siquiera propiamente notifiquen, sus bastantes más matizados planteamientos, ya no extrañará.

Y el síntoma no sólo lo es de falta de ponderación y sesgo en la utilización de sus materiales; allí, en la obra de Cruz, existe una sensibilidad precisamente constitucional, de identificación y análisis en su situación histórica de problemas de tal índole, que aquí más bien falta, o que incluso resultaba inconveniente para la plasmación de la propia tesis. La misma lectura de las normas va obsesivamente en busca de sus signos militares sacrificándose otros sentidos. La propia selección demuestra.

Viene una concesión tan sólo en un momento, extrañamente además nada constitucional. Durante el franquismo, «catedráticos de Derecho administrativo sin ligazón con el régimen y sin la búsqueda ni obtención de beneficio alguno» lograron una reforma de la legislación administrativa que estableció «un terreno de convivencia» y «un mínimo de garantías en los derechos de los administrados» que a su vez explican «el éxito parcial de la transición gradual de la dictadura a la democracia iniciada en 1976». No es ahora de extrañar que Eduardo García de Enterría, en prólogo proclame que este libro obliga a «la revisión de nuestra historia constitucional». Más que de complejo se trataba.

El libro por lo demás ofrece abundante información de la efectiva interferencia militar a todo lo largo del curso del constitucionalismo español, concluyendo con su justa preocupación presente, todavía actual.

B CLAVERO

CANALES ALIENDE, José Manuel: *La Administración de la Segunda República. La Organización Central del Estado*, Madrid (Instituto Nacional de Administración Pública), 1986. 454 págs.

Expone este libro lo que anuncia: el entramado institucional de la Administración central entre 1931 y 1936, con un entendimiento además extenso del propio concepto de Administración; por una parte, se eleva hasta la Jefatura del Estado, por otra, se introduce en la administración consultiva y en la institucional o mediante organismos autónomos; entre una y otra, el Presidente del Gobierno, el mismo Ejecutivo, el Departamento de la Presidencia, los Ministerios civiles y los militares, las Comisiones interministeriales y las ministeriales, composición, estructura y competencias; cambios y evoluciones. Las figuras quedan perfiladas; el conjunto, encuadrado. Tenemos una fotografía, movida conforme ya lo fuera. Menos tenemos una radiografía.

El problema ya procede a mi entender del escenario, que tiende a reducirse a decorado. ya es difícil tratar como cuestión primordial o meramente administrativa asuntos como el de la designación de un Jefe de Estado o el de un Presidente de Gobierno. Sirva un ejemplo. el de la elección del propio Gobierno; artículo 75 de la Constitución del 31. «El Presidente de la República nombrará y separará libremente al Presidente del Gobierno y, a propuesta de éste, a los Ministros. Habrá de separarlos necesariamente en el caso de que las Cortes les negaren de modo explícito su confianza»; sin tratar todavía de esta eventualidad de la censura, por la sola intervención de ambos Presidentes en la formación del Gobierno, ya nos habla el autor de «una doble confianza» (p 60); llegando más tarde a los terrenos de la segunda cuestión, la de censura, ésta sólo comparece como «tercera clase de responsabilidad» del Presidente del Gobierno, la política tras la civil y la penal, sin relacionársele con el mecanismo constitucional de su misma designación, a lo que vagamente se alude con expresiones como «la realidad política del momento» a tener en cuenta por el Presidente de la República (pp. 114-118).

La institución no menos constitucional por implícita de formación del Gobierno

sin confianza positiva y bajo la eventual censura del Parlamento, o la dinámica no menos constitucionalmente prevista por no explicada que ponen en juego estas piezas, escapa al campo de visión de este estudio. Cuenta el Derecho constitucional con unas inteligencias que no conoce el Derecho administrativo. Ya suele aquí recurrirse a citas extensas en nota de observadores constitucionalistas de la época para eludir el mismo problema, que en el texto no se integra. De ello viene, no sólo que la perspectiva se reduzca, sino que las propias cuestiones contempladas ya lo sean a una luz que oscurece y distorsiona los espacios superiores. El mismo Derecho atinente a estas cuestiones fundamentales de la «Organización Central del Estado» cuando lo es constitucional no llega aquí propiamente a definirse.

La propia delimitación del objeto ya también produce sus puntos ciegos, o al menos sus penumbras; ha sido amplia, pero no lo suficiente, ya por su criterio administrativo. Sirva otro ejemplo: el del Tribunal de Garantías Constitucionales, que ya aparecía en el capítulo de las responsabilidades del Ejecutivo, o que también se encuentra en otros, con competencias no siempre exactamente judiciales, como en el de la elección del Presidente de la República. Ya se sabe que este Tribunal presenta entonces más dimensiones que la que su concepto directamente expresa; por lo visto y comprobado, debiera habersele menos tangencialmente considerado, mal que pese a una concepción dada de Administración central. Parece que la demarcación de lo administrativo respecto a lo constitucional ya no debiera haberse aplicado, al menos en estos momentos de mayor calado.

De hecho, el autor no partió de esta demarcación; muy al contrario, su introducción justamente nos informa de una idea inicial de estudiarse las instituciones más constitucionales —Jefatura del Estado, Gobierno, Cortes, Tribunal de Garantías Constitucionales, Tribunal de Cuentas y Poder Judicial, en su relación— para sólo descenderse luego con tal bagaje al terreno más llano de la Administración, de dichos fundamentos sólo han quedado la Jefatura del Estado y el Gobierno. El mismo criterio administrativo se ve que pesa en la selección; podría al menos habersele entendido de modo menos orgánico o más funcional, con lo que habría quedado la vía para tocar mejor en lo que interesara otras instituciones, como también las Cortes, con sus Comisiones de Ministerios. O qué vamos a decir del Tribunal de Cuentas, ya también situado en la órbita del Parlamento, cuando incluso aquí, excluido, alguna atención debe prestársele.

El criterio administrativo supone un déficit constitucional, sufriendolo el propio reconocimiento y la diagnosis de los planteamientos de la época. Venga su ejemplo: el del Consejo de Estado; artículo 93 de la Constitución del 31: «Una ley especial regulará la creación y el funcionamiento de los órganos asesores y de ordenación económica de la Administración, del Gobierno y de las Cortes. Entre estos organismos figurará un Cuerpo consultivo supremo de la República en asuntos de Gobierno y Administración, cuya composición, atribuciones y funcionamiento serán regulados por dicha ley» ¿Por qué no se le nombra?, aquí ya es el problema. Innominado además constitucionalmente siguió el Consejo de Estado durante toda la República, pues la referida ley no se promulgó.

¿O por qué, mejor, se le denomina «de Gobierno y Administración» y no *de Estado*? La cuestión, que ya se debatió en la época, el autor no parece comprenderla; no entiende este escrúpulo constituyente ante un colegio cuya designación

tradicional tiende a situarlo por encima de otros, incluidos los representativos, porque además tradicionalmente, asesorando a un Ejecutivo encabezado por la Monarquía, ya tenía base constitucional para ello. Con dicha incompreensión, todo el debate sumamente rico de la República sobre los organismos consultivos pierde su interés nodal, precisamente jurídico, de verdadera encrucijada en la propia evolución del constitucionalismo.

Insensibilidad constitucional, con el consecuente empobrecimiento del propio objeto administrativo, también denota la demarcación cronológica. «Segunda República», reza el título; hasta «el comienzo de la Guerra Civil», de continuo en el texto se nos puntualiza. ¿Es lo mismo? ¿Es que no siguen tras julio del 36 una Constitución y una Administración? ¿Es que su desenvolvimiento en unas condiciones que ya suponen prueba no puede resultar, aparte de por sí interesante, bien ilustrativo para la misma comprensión y análisis de la Organización Central de la República? Un primer momento todavía no constitucional, durante el año 1931, no deja de tratarse, con las precisas distinciones, en cada capítulo, ¿a qué entonces este silencio sobre la Administración todavía constitucional de los años de la guerra?

Hoy, todavía hoy, nuestro Ministerio de la Presidencia ofrece edición microfotográfica de la prensa oficial interrumpiendo la gaceta constitucional el 17 de julio de 1936 para dar paso, sin competencia, al boletín anticonstitucional. El defecto es común; tal vez por ello ni siquiera se siente la necesidad de explicarlo. El defecto hunde sus raíces en presunciones de continuidad, cuando no de legitimidad, retroproyectadas por una victoria militar; tal vez por ello convendría siempre explicarse. También aquí expresamente se trata, como la propia introducción advierte, de que interesa, tanto o más que el estricto conocimiento histórico, el que pueda depararse para la Administración actual. La vía muerta de la última República indudablemente entonces poco importa.

Los deslindes encierran, mas tampoco aquí se acepta la clausura. Ya en los preliminares metodológicos quiere asegurarse una apertura, profesándose el estudio de una Ciencia de la Administración, más comprensiva que el puro Derecho administrativo y con más títulos por ende para hacerse atender por la misma historiografía. Ello presumiblemente requeriría la colación de más noticias que las normativas respecto a la propia Administración, a fin de que pudiera progresarse en su mismo conocimiento. Ante todo se precisan datos más materiales, mas el caso es que no se ofrecen, o que ni siquiera se persiguen, contentándonos el autor con referencias historiográficas menos específicas.

¿Qué era, materialmente como digo, la Administración española a la llegada de la República? Tan sólo se arriesga de referencias una cifra global de funcionarios, no hay más; del propio funcionariado, nada; de medios materiales, igual; de organización del trabajo, lo mismo; de comunicaciones internas y externas, otro tanto; del espacio de la propia Administración central, ni trazas; de cuestiones contables, testimonio de parte de un presidente del Tribunal de Cuentas; y así (para más cuestiones, o para otras, contrástense las del último capítulo de la *Histoire de l'Administration* de Pierre Legendre, que data en más de un sentido de 1968 y que ya también a su modo, para superarla, reclama una Ciencia de la Administración).

La introducción ya también se disculpa, manifestando que la documentación más administrativa de la época «o bien apenas existe o está en paradero desconocido, debido fundamentalmente a la Guerra Civil y a la política documental depuradora del régimen político franquista», con nota de la que resulta que no se han visitado archivos. La excusa, con su mismo «apenas», mal convence; investigaciones que el propio autor no deja de citar, así sobre reforma agraria por cuanto que interesa a administración institucional, hacen sospechar que no es tanta la penuria. Ya por su limitación documental al propio ordenamiento, la apertura metodológica se queda aquí en propósito.

Como apéndice que documental se dice, tenemos el último centenar de páginas: posiciones de partidos en materia de Administración, cuadros clasificatorios de Ministros, algún estadillo presupuestario y selección de normas, incluida la propia Constitución; apéndices dispendiosos y de aportación más bien ajena, tomándose los laboriosos de obras tan conocidas y asequibles como *Partidos y Programas* de Miguel Artola o *Los grupos de presión* de Manuel Ramírez. No parece que el Instituto Nacional de Administración Pública tenga problemas de presupuesto, ni de derechos de autor. Mariano Baena prologa el volumen, que a su entender dignifica la profesión universitaria.

Digno en sí el trabajo lo es, perjudicándole la pretensión. Vuelvo al principio: dibuja un cuadro de la Administración central de la República con riqueza de detalles y sentido de la composición, fácil de contemplar, y provechoso.

B. CLAVERO

CANELLAS LÓPEZ, Angel: *Diplomática Hispano-Visigoda*, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1979, 283 págs. y 5 láminas.

Entre la publicación de los libros y su digestión por parte de los especialistas median, a veces, años, sobre todo cuando estamos ante obras rigurosas cuyos planteamientos muy nuevos o ricas informaciones necesitan tiempo para la respuesta: un ejemplo de lo primero ofreció a los lectores de este ANUARIO el estudio de José Luis Bermejo en relación a la tesis sobre mayorazgo de Bartolomé Clavero (cfr. AHDE 55 (1985) 284-296), en tanto que muestra de lo segundo —de trabajos informativos que reclaman continuado uso para ser valorados correctamente— sería, desde luego, la aportación de Canellas de diplomática visigoda.

Tratándose de la misma no han de extrañar los retrasos. Quien suscribe estas notas, entonces estudiante de Historia, oyó durante un ya lejano curso de Diplomática en la Universidad de Sevilla la espaciosa génesis del libro de Canellas (cfr. págs. 5-6), que así sirve para justificar de alguna forma la lenta gestación de su reseña: lección magistral en origen (1944), colaboración publicada en el homenaje a D. Antonio Marín Ocete después (1974), libro definitivo —con la edición de los documentos en amplio apéndice— cinco años más tarde (1979). Por lo demás, la circunstancia de mi especialización como visigotista desde la última fecha —el manejo repetido *del* Canellas— me permite por fin escribir unas

líneas que aspiran, simplemente, a compartir el fruto obtenido de la experiencia propia.

Permítaseme realizar dos observaciones previas, a modo de advertencia. El trabajo de Canellas, doblemente básico por adscripción científica y contenido, presenta un valor instrumental; esto quiere decir, simplemente, que sus méritos se encuentran en función de los usuarios, pero también que éstos, yo uno de ellos, han de formar juicio según especialidad y campo de investigación. Y segundo: aquella adscripción científica, tal vez —mejor— académica, a la (ciencia auxiliar) Diplomática encierra ciertos problemas, pues si la Diplomática tiene como objeto el estudio externo de los diplomas, esto es, de escritos realizados para la prueba o constitución de relaciones jurídicas, alguna formación (histórico)-jurídica será presupuesto ineludible por sus cultivadores, quienes, en otro caso, forzosamente han de incurrir en tropiezos al describir, clasificar y criticar los documentos. Son las mías reflexiones de índole general surgidas al margen de la consideración del libro de Canellas, aunque quisiera que no se olvidasen para situar con exactitud la opinión que éste me merece.

Opinión buena, desde luego. ya no resulta legítima la queja por la carencia de una colección solvente de los documentos visigodos; su sola factura, y de ahí el mérito de Canellas, estimula la ulterior investigación, pues esos documentos han resultado mayores en número e interés de cuanto creíamos a la vista de las publicaciones dispersas de varios de ellos. Las dudas, sin embargo, surgen precisamente en el mismo momento de integración del *corpus* documental: algunas piezas (docs. núms. 93a, 93b, 93c, los antiguos núms. 42 y 59 —con apéndice— del regesto publicado en el homenaje Marín Ocete; cfr. la aclaración de Canellas, algo escondida en pág 116) no deben adscribirse a la diplomática hispanovisigoda, sino a la pontificia (registros de cancillería del Papa Gregorio Magno), aunque más discutible aún resulta la inclusión de otras (epígrafes, epístolas...) que propiamente quedan fuera del terreno mismo de la Diplomática (docs. núms. 1, 10, 15, 18, 25, 27, 29, etc.; docs. núm. 45, 144, 185, etc.); podrá alegarse, en defensa del criterio amplio adoptado por Canellas, que la escasez de fuentes recomienda coleccionar cuantas permitan conocer aspectos del formulario de los diplomas (así las cláusulas de datación gracias a *epitaphia* y *monumenta aedificationis*, o las cláusulas de invocación y dirección por las epístolas), mas en este caso el lector se preguntará por las razones que llevaron a Canellas a seleccionar unos textos y desechar otros, tan importantes o más que los incluidos en su obra (recuérdese, por ejemplo, el famoso epitafio de Oppila, ed. José Vives, *Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda*, Barcelona, 2.ª ed., 1969, núm. 287, que atestigua la participación de los *potentes* en la guerra rodeados por el séquito de clientes; recuérdense también, en relación a las epístolas, las cartas de Sisebuto o las eclesiásticas de Isidoro y Braulio de Zaragoza) El silencio de Canellas es total.

Si la generosidad como máxima de selección parece sólo aparente, así lo es la pretensión de Canellas al presentar un «Regesto —y posterior publicación— de la documentación hispano-visigoda conservada» (págs. 18-30); el especialista sabe que la relación y la colección son incompletas, pero conviene advertirlo en beneficio de quienes no lo sean.

Los materiales pueden levantar críticas; todavía más su ordenación: nos situamos ya ante objeciones definitivamente nucleares, tratándose de un estudio de Diplomática. Comienzo con un ejemplo elemental. «Los 231 documentos se han consignado en este regesto en orden cronológico correlativo (atendidas sus datas explícitas o supuestas», escribe Canellas (pág. 18), para presentar a continuación un elenco de documentos —no todos ellos, lo advertí, diplomas— presuponiendo en los lectores conocimientos suficientes en orden a la datación de los textos. El historiador del derecho que desee manejar las conocidas fórmulas visigodas se sorprenderá al comprobar que las mismas han perdido identidad como formulario documental, dispersas a lo largo del regesto, y luego de la colección, elaborados por Canellas; la razón, obvia a tenor del principio cronológico adoptado, reside en la diversa fecha aproximada atribuida a estas piezas, pero es una atribución por hechos concluyentes —colocación bajo tales o cuales números— y nunca justificada. La adhesión de Canellas a la hipótesis tradicional (cfr. págs 16-17: «... una colección de fórmulas documentales atribuibles a un compilador, tal vez notario cordobés que viviría en el siglo VII, y fabricada hacia los años 615-620, bajo el reinado de Sisebuto») choca frontalmente con la dispersión del formulario en el regesto y en la colección de documentos, pues si es cierto que la mención en FV 20 de Sisebuto como reinante no faculta para datar en esos años las cuarenta y seis piezas del formulario (cfr. Alfonso García Gallo, AHDE 44, 1974, 406; Carlos Petit, AHDE 55, 1985, 188 y n. 73), se requiere la prueba positiva de la fecha asignada a cada fórmula o grupo de fórmulas por parte de Canellas. FV 2 se convierte en doc. núm. 2 de Canellas, que la considera de los siglos V-VI; sigue una serie de cinco fórmulas (FV 12, 13, 14, 21 y 35, que son los docs. núms. 20 a 24 de Canellas) datadas en el siglo VI; otras seis (FV 6, 11, 15, 19, 22 y 40, equivalentes a docs. núms. 48 a 53 de Canellas) se suponen también del siglo VI, pero con interrogante que el lector no sabe bien valorar; encontramos a continuación un lote de cuatro fórmulas (FV 25, 27, 28 y 29; son los docs. núms. 55 a 58 de Canellas) desplazadas de las anteriores al considerarse elaboradas entre los siglos VI y VII, de nuevo con interrogantes; veinte fórmulas más (FV 1, 7, 17, 18, 23, 30, 31, 32, 33, 39, 41, 42, 43, 44, 3, 4, 24, 36, 37 y 38, igual a los docs. núm. 74 a 93 de Canellas) serían de los siglos VI-VII, sin interrogación, (docs. núm 74 a 87) y de comienzos del siglo VII (docs. núm 88 a 93), la conocida fórmula versificada (FV 20) es el doc. núm. 101, fechado en los años 615-616; FV 34 (doc. núm. 105 de Canellas) es de *circa* a. 633; FV 46 (doc. núm. 122 de Canellas) debe su lugar en la colección al ser datada *ante* a. 650, dos fórmulas más (FV 5 y 45) se convierten en los docs. núms. 124 y 125 de Canellas, del siglo VII sin mayor información, apreciándose además un error en el regesto que repite, como doc. núm. 125, FV 5 (a su vez doc. núm. 124, correctamente), número correspondiente a FV 45 (cfr. pág. 26); finalmente, las cinco fórmulas restantes (FV 8, 9, 10, 16 y 26, o sea docs. números 210 a 214 de Canellas) figuran al acabar la colección, por estimarse su data en el siglo VII pero con un interrogante que el lector, tampoco ahora, llega a valorar (¿se trata de textos muy tardíos, pues en el regesto van precedidos de otros, originales, fechados a finales del siglo VII?). Yo no discuto que Canellas habrá tenido sus razones para distribuir de ese modo —con esa cronología— las

fórmulas, pero como lector y usuario exijo la explicación de los argumentos que llevan a fijar las fechas hipotéticas de las piezas. Que haya razones jurídicas para la datación —el reflejo de normas mejor situadas temporalmente gracias al *Liber Iudiciorum*— tal vez haya sido uno de tales desconocidos argumentos, aunque adelante mi escepticismo sobre su operatividad; comprobarlo, en todo caso, merecerá el trabajo específico del que Canellas, si lo realizó, no ha dado cuenta.

Frente a asunto tan importante —entiéndase: desde el punto de vista heurístico, que justifica el esfuerzo todo de Canellas— otras observaciones al regesto, automáticamente a una colección ordenada a su arreglo, parecerán secundarias; no me resisto sin embargo a ofrecer como muestra el doc. núm. 223, datado a finales del siglo VII por Canellas, probablemente sin otra base, pues se trata de un *exorcismus ordaliae caldariae*, que la aceptación de LV 6,1,3 como novela de Egica. De ser así —nuevamente el silencio de Canellas impone la investigación de sus posibles criterios— tendremos que lamentar que autor tan erudito no acudiera a las páginas de Aquilino Iglesia sobre la ordalía, ricas en la consideración de estas fuentes (cfr. AHDE 47 (1977) 193-194; la aportación más específica de Iglesia, AHDE 51 (1981) 97, era inaccesible por su fecha)

Las partes sobre «el documento hispano-visigodo» se abren con un breve párrafo de «notas del derecho hispano-visigodo» (págs. 30-31) que el historiador del derecho preferirá no consultar; le previene en cualquier caso acerca de los conocimientos que Canellas acredita en relación a las fuentes jurídicas visigodas, y por tanto sobre el propio resultado de su labor como diplomata. La distinción de documentos constitutivos/dispositivos y documentos probatorios ofrece el esperado terreno en el que historiadores del derecho y diplomatas difícilmente nos encontraremos; no sin cierta habilidad, tras unos párrafos que me atrevo a calificar de inseguros (págs. 33-35), Canellas opta por marginar esta *summa diviso* de su especialidad, definida, o indefinida si se prefiere, habitualmente en términos de *magna quaestio* que se traduce, con frecuencia, en *Confusión de confusiones*: así llega a estimar que «entre documento dispositivo o constitutivo —que da vida al negocio consignado— y probatorio —que recoge la existencia de un acto ya celebrado para atestiguarlo— la distinción es más teórica que efectiva» (pág. 45), estructurando en consecuencia la «tipología documental» hispanovisigoda con un muy abierto criterio en lo que hace a los documentos dispositivos; entendidos en otro lugar por Canellas como «escritos que constatan en su dispositivo un negocio jurídico», la mayoría de las 231 piezas coleccionadas lo son, excepto unas pocas clasificadas como documentos descriptivos y narrativos («aquellos que constatan un acto jurídico descriptivo o narrativo», pág. 45) y otras «indefinidas» a tenor de su estado lamentable de conservación

Rechazando la clasificación inicial —yo no sé bien qué se entiende por *actos jurídicos narrativos* respecto al derecho visigodo— caen, carente de base, las divisiones ulteriores en que se desarrolla la tipología. No se puede aceptar, por ejemplo, que las *procuraciones* —los diplomas, por lo común del formulario de fecha que hemos descubierto tan variada, documentando un mandato/representación— sean «documentos dispositivos públicos», pues si la razón para considerar público un documento hispanovisigodo estriba en ser «emanado de personas públicas» parece muy forzado, al margen ahora la difícil definición del término

mismo «persona pública», entender que lo eran los litigantes al nombrar un mandatario; la excepción, que no la regla, sería la representación del rey —llego a admitir la del obispo— según lo dispuesto por Recesvinto en LV 2,3,1 (cfr Carlos Petit, AHDE 55, 1985, 238-240). Y estas críticas podrían extenderse a la mayoría de los documentos clasificados como «dispositivos públicos forenses» (págs. 55-62, sobre las que insisto líneas abajo).

Como «documentos dispositivos públicos reales» Canellas estudia las *leges*, limitándose a analizar aquéllas que a su juicio presentan interés diplomático, los *tomí*, los *precepta* y los *mandata*. Sobre las primeras sólo tengo que reprochar a Canellas, y es una crítica extensible también a documentos de procedencia eclesiástica, que los textos hayan sido reproducidos parcialmente, omitiendo las cláusulas con «partes dispositivas carentes de interés para el propósito diplomático de este estudio» (págs. 115-116), porque si la opción seguida resulta muy válida, los lectores asiduos *del* Canellas lamentaremos operar con piezas mutiladas. Tampoco he de entretenerme en los *tomí*, cuando las dudas mayores surgen al reflexionar sobre las dos categorías de *precepta* y *mandata*. Aquéllos serían «disposiciones de rango legislativo de gran importancia dirigidas a la generalidad del pueblo, a sus autoridades o a un grupo social concreto, por ejemplo el episcopado», siendo el «elemento típico de los mismos ... la presencia en su tenor de una dirección»: pero si se apunta que los copistas —yo diría los compiladores— de las *leges* procedieron a mutilar su formulario (cfr. pág. 47), cabría pensar que también las leyes presentaban esa cláusula que Canellas considera definitoria del tipo documental; a mi modo de ver no hay la menor base jurídica ni diplomática para distinguir *leges* y *precepta*, y el argumento lo ofrece el mismo Canellas: cuatro de sus pretendidos *precepta* (docs. núms. 12, 47, 169 y 170) son elencados y analizados *también* como *leges* (cfr. pág. 48), aunque el lector ha de sentirse inseguro al comprobar que el «índice tipológico diplomático» de págs. 277-278 distribuye estos cuatro documentos tres veces como *leges* (docs. núms. 47, 169 y 170) y una como *preceptum* (doc. núm. 12), sin repeticiones en esta ocasión; desde luego es exigible mayor rigor a una especialidad cuya razón de ser se apoya en la pulcritud, mas el caso sirve ahora para demostrar la artificialidad de la tipología en este punto concreto. Y en relación a los *mandata* reales: conocemos sólo «notas indirectas de mandatos», las contenidas en las actas de Concilio de Toledo XII, a. 681, referentes al deseo de Wamba de la promoción al trono de Ervigio y su consagración por el metropolitano de Toledo, para Canellas, de nuevo excesivamente generoso al valorar los documentos, consideradas «copias» (pág. 16; es una confusión insistente: cfr. doc. núm. 146, que Canellas, pág. 17 y n. 33, estima «copia» de las *conditiones iuramenti* de Paulo en el proceso por traición seguido ante la corte de Wamba, cuando se trata simplemente de la referencia que a ese juramento contiene el *Iudicium in tyrannorum perfidiam promulgatum* 5-6) de *mandata*, pero por su verdadero carácter de «notas indirectas» impiden la reconstrucción del formulario; muy discutible, por razones de conservación del original, la pizarra que recogería un mandato de Chindasvinto (doc. núm. 116), queda aislado el doc. núm. 3 en orden al análisis de los *mandata*: pero este documento es el *commonitorium* del Breviario Alariciano, respecto del cual pueden formularse ciertas dudas sobre su adscripción a

la diplomática *hispano-visigoda*. La supuesta categoría de los *mandata* nos sería, en conclusión, verdaderamente desconocida.

De los «dispositivos episcopales» (págs. 51-55) me interesa especialmente el tipo de los *decreta synodalia*, definidos como «decisiones de justicia acordados en los sínodos». Hay que observar, en primer lugar, que la más importante y completa de cuantas «decisiones de justicia» eclesiástica conservamos —el *decretum* del juicio entre Marciano y Habencio, en las actas del Concilio de Toledo VI, a. 638— no se encuentra incluido en este apartado (aparece entre los «dispositivos forenses», como muestra de *sententia*), en tanto Canellas colecciona ahí, en segundo lugar, la epístola *De fisco barcinonensi* (doc. núm. 40), que nada tiene que ver con las funciones judiciales de los obispos. Carencias de (in)formación jurídica, según apuntaba al principio, dificultan casi siempre la factura de estudios de Diplomática.

Los «dispositivos forenses» de Canellas (págs. 55-62) aparecen, ya lo advertía poco antes, con un vicio de raíz: suponer que se trata de documentos públicos, porque lo sería la persona de la que emana el documento. Canellas traiciona su principio clasificatorio cuando se ve en la necesidad, impuesta por las fuentes, de distinguir «entre documentos emitidos por el juez y documentos emitidos por el litigante»: siendo dudoso el carácter público de los primeros, es indudable que no lo presentan, salvo matización anterior, la mayoría de los segundos. Y un análisis de los tipos que Canellas incluye en una y otra clase de «dispositivos forenses» multiplica las perplejidades. Discutible que doc. núm. 155, *recognitio scripturarum Wambae regis* según definición de Canellas (pág. 225), sea un ejemplo de los *mandata iudicum* (así Canellas, pág. 56), y en todo caso que se trate mejor de un documento que de la mera noticia de una actuación jurídica que no llegó como tal a documentarse, muy difícil será admitir que la *declaratio in iudicio* representada por el doc. núm. 64 de Canellas ha sido «emitida por el juez» y, por tanto, aproximada a las *professiones* del acusado en un litigio que —éstas sí: cfr. LV 2,1,25, Chindasvinto; se aplica la regla del *iudicium* (sentencia), pues el documento de *professio* hacía sus veces en la práctica— tenía que redactar y suscribir el juez; síntoma de las dudas que asaltaron, probablemente, a Canellas a la hora de calificar ese documento sería su descripción como *cartula conditiones sacramentorum* al presentarlo en la colección documental (pág. 157). Con esta confusión inicial, es lógico descubrir en el apartado dedicado a las *conditiones sacramentorum* una amplia gama de incongruencias. La legislación procesal visigoda distingue entre juramento del testigo y juramento del litigante, sin que proceda ahora mencionar otras especies de juramentos (los juramentos de fidelidad, los juramentos de los judíos acatando la ortodoxia católica) que Canellas considera a veces entre los «dispositivos forenses» (cfr. doc. núm. 145, noticia del juramento de fidelidad exigido por el rebelde Paulo, en relación a la doctrina de Canellas, pág. 58), pero el autor no sabe distinguir esta diversidad jurídica de los documentos de juramento, sin perjuicio de su presumiblemente similar —aunque no igual— formulario en todo caso. Mi crítica a Canellas en este punto debe endurecerse, lamentablemente: el párrafo inicial sobre juramentos, inaceptable por parte del historiador del derecho, recoge, traducíendolas, observaciones ajenas como cosa propia. La víctima ha sido Manuel

Cecilio Díaz y Díaz, y su artículo «Un document privé de l'Espagne wisigothique sur ardoise» (*Studi Medievali*, serie terza, 1, 1960, 52-71) *corpus delicti* (cfr. pág. 57 de Canellas y págs. 62 y 63, nota 39, de Díaz y Díaz). Los errores abultados al describir las *conditiones sacramentorum* («se trata de una institución de derecho consuetudinario y consiste en el juramento prestado ante el juez para confirmar un contrato cuyo documento se ha perdido o cuyo derecho no es reconocido. Era medio muy corriente para confirmar los derechos...») no deben, entonces, cargarse a Canellas, pero con ello no se agota su responsabilidad: es penoso advertir a un diplomatista sobre las diferencias entre un *original* y una *copia*. ¿Estaremos ante el renacimiento y la miseria de la Diplomática, por recordar una anécdota siempre dolorosa para los historiadores del derecho (cfr. Benjamín González Alonso, *Revista de estudios políticos* 33, n.º, 1983, 169-185)?

Las *sententiae* que analiza seguidamente Canellas (págs. 58-59) tampoco aparecen exentas de problemas. Como «adición de época tardía a la legislación recesvindiana» es calificada LV 2,1,25, una ley sobre redacción del *iudicium* promulgada por Chindasvinto; por lo demás, de las piezas catalogadas como *sententiae* (docs. núms. 53, 93a, 93b, 93c, 111, 145, 147 y 154; el «índice tipológico diplomático» incluye también doc. núm. 59, pero se trata, según advierte Canellas, pág. 116, de los nuevos núms. 93a y 93c, así erróneamente duplicados) propiamente sólo aceptaremos el doc. núm. 53 (= FV 40): varias pertenecen a la diplomática pontificia, bastando esa circunstancia para excluirlas de una colección que pretende reunir documentos hispanovisigodos, si es que no admitimos que la cita en ellos de los textos jurídicos justinianos los aparta definitivamente de las prácticas diplomáticas del reino de Toledo (docs. núms. 93a, 93b y 93c); otro de aquellos documentos encuentra, como dije, en los *decreta synodalia* mejor sede (doc. núm. 111), un quinto (doc. núm. 145) era invocado antes por Canellas (pág. 58 y nota 242) como «noticia de juramento», que es de lo que se trata; los dos últimos ejemplares de *sententiae* (docs. núms. 147 y 154) se resuelven propiamente en referencias indirectas a actuaciones judiciales y, en tanto que noticias, diplomáticamente inutilizables (cfr. pág. 59, donde Canellas esquematiza sin embargo el discurso diplomático de doc. núm. 147). Sobre las *procuraciones* realicé ya alguna observación; ahora he de limitarme a recomendar a Canellas la sustitución del término *vocero* por el de *personero* en pág. 60, así como la conveniencia de una nueva lectura de LV 2,3,3 en lo referente al —supuesto, por Canellas— número de tres testigos del documento de procuración. Los documentos forenses, poco pacíficos como cabe deducir de estas líneas, incluyen finalmente varias referencias «en textos legales sin ejemplares de aplicación»; a riesgo de fatigar al lector me permito advertir que cuanto escribe Canellas al punto 5º («remisión de la causa a otro juez», págs. 61-62) no es de recibo, comenzando por la atribución de la ley que allí se comenta (LV 2,2,7, Chindasvinto) a «época ervigiana», las confusiones sobre la identidad del monarca promulgador reaparecen al punto 6º, donde Canellas atribuye a Recesvinto una ley que lo es de Chindasvinto; el posible documento de «recusación de juez», punto 7º de Canellas en pág. 62, seguramente no ha dejado ejemplares porque la ley que lo mencionaría (LV 2,1,24, Chindasvinto) evoca más bien una queja oral del litigante (LV 2,1,24. «Si quis iudicem aut comitem aut vicarium comitis

seu thiuphadum suspectos habere se *dixerit* et ad suum ducem aditum accedendi poposcetit aut fortasse eundem ducem suspectum habere *dixerit* ... Sed ipsi, qui iudicant eius negotium, unde suspecti *dicuntur* haberi...», etc.); y, en fin, esa «carta del litigante por vocero (*entiéndase: personero*), dirigida al juez», que Canellas descubre en LV 2,1,25, sencillamente no aparece en el texto legal invocado.

Las págs 62-73 de Canellas sobre «documentos dispositivos privados» suscitan iguales cuestiones, pues a la discutible raíz clasificatoria se superponen ambigüedades e inexactitudes diversas en el momento de calificar los diplomas en concreto. Si las doce piezas que interesan al *status personarum* presentan el único inconveniente de excluir el importante doc. núm. 65, pizarra datable entre los aa. 586 y 601 con restos de una *cartula patrocini* (cfr. el «índice tipológico diplomático», donde ese documento se incluye entre las *cartulae donationis*; cfr. además pág. 71 y nota 357), son las *obligationes* los diplomas peor clasificados. No podía extrañar al lector, avisado por Canellas, págs. 62-63, de que bajo tal epígrafe encontraría «tres grupos: el de contratos reales, con varias *cartulae mutui*; el de contratos consensuales con *cartulae venditionis* y *cartulae commutationis*; y el de contratos innominados, con *cartulae precariae* y una *cartula placitis*». El dogmatismo de Canellas lleva a la incongruencia de clasificar como *mutuum* «o préstamo de consumo» el doc. núm. 61, una pizarra muy estropeada que parece referirse a un equino, y no a efectos alimenticios, en tanto su insensibilidad por aislar un tipo documental de *cautio* (cfr. Aquilino Iglesia Ferreirós, *las garantías reales en el derecho histórico español* I/1, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago, 1977, págs. 92, 94, 96, 97 y nota 179; cfr. de nuevo págs. 92 y 96, sobre la variedad documental que presentan los pactos *cum stipulatione subnixta*, FV 44 y 45, que son los docs. núm. 87 y 125 de Canellas, respecto a la *cautio* de FV 38, doc. núm. 93 de Canellas) encuentra pertinente reflejo en el párrafo sobre los mutuos (pág. 65); pero el escollo jurídico resulta más grave cuando el autor diserta sobre permutas innominadas (págs. 66-67). Con grave violencia al contenido documental, bajo el (sub)tipo *cartula placiti* se recoge, por último, «un documento en que los judíos toledanos prometen observar las prescripciones reales» (págs. 67-68); pero así analiza Canellas solamente el *placitum* de tiempos de Recesvinto (LV 12,2,17), reservando la mención del otorgado en tiempos de Chintila (a. 637; doc. núm. 109 de Canellas), citado por cierto en el documento recesvindiano, a la categoría de las *professiones fidei* (pág. 78), en unión de LV 12,3,14 y 15, Ervigio, docs. núms. 166 y 167. Que este *placitum* tenga el —siempre dudoso para la época— contenido jurídico privado que supone Canellas, pues se aproxima —desde el ángulo institucional— cfr. Carlos Petit, AHDE 55 (1985) 194-195— al juramento de fidelidad, que *placitum* sea también la carta de mutuo; que de *placita* procesales nos hablen ciertas leyes (cfr. LV 2,2,4, Chindasvinto), son otros argumentos carentes de atención en páginas que parecían prometerlo.

En relación a los «documentos narrativos» de págs. 75-79 quedó recogida la extraña definición ofrecida por Canellas; observé también, y me autocito para ser breve, que muchas de las piezas así clasificadas carecen de la condición de diplomas. Al igual que los «documentos indefinidos» (págs. 79-80), los que sean originales aportan indudables servicios a la historia de la escritura, pero —no

parece necesario recordarlo a Canellas— una cosa es la Paleografía y otra la Diplomática.

Frente a páginas que por exigir conocimientos jurídicos demuestran las limitaciones del diplomata, las dedicadas a la «forma documental» resultan poco menos que irreprochables. Me limito a señalar lo excesivo de remontar hasta Eurico «la escritura de consenso para un arbitraje», principio deducido por Canellas (pág. 84 y nota 515) de la ley de Chindasvinto LV 3,5,1, *De coniunguis et adulteris incestivis*; la errata tipográfica, con pérdida de alguna línea, de páginas 86-87; la incorrecta suposición de la dirección regia a sayón en LV 10,2,6, Chindasvinto (doc. núm 120 de Canellas) de pág 102; y, en fin, la lamentable exclusión del estudio de los preámbulos por considerar (pág 109) que «escapan al ámbito de los documentos de aplicación de este ensayo» (cfr. Carlos Petit, AHDE 54, 1984, 236 y nota 52).

El libro de Canellas termina con la relación bibliográfica y la colección documental, que consume la mayoría de sus páginas. La primera revela, a mi juicio desgraciadamente, la lentitud de su elaboración: referencias antiguas, si no anticuadas, en lugar de otras más recientes que Canellas debía haber tenido en cuenta (así se cita el trabajo de Alfonso García Gallo de AHDE 13, 1939-1941, 168-264, con desconocimiento de la aportación de AHDE 44, 1974, 343-464; siempre de Alfonso García Gallo, no se tienen en cuenta las páginas sobre documentos y formularios jurídicos publicadas en los *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, 22, 1978, 133-178, aunque tal vez lo disculpe la fecha; menos explicable la omisión de Aquilino Iglesia, *Las garantías reales*, pues el libro se publicó en 1977; etc.) La segunda, los documentos, sabemos que no sirve, y es grave, para sustituir las ediciones —las peores a veces preferidas, inexplicablemente, por Canellas (por ejemplo la *Historia* de Julián de Toledo, que se usa por la *España Sagrada* en lugar del texto de B. Krusch y W. Levison de los *Monumenta Germaniae Historica*: cfr. entre otros docs. núms. 145 y 146)— originarias, un cierto descuido tipográfico, seguramente inevitable (cfr. doc. núm 2. *ciucmque* por *ciuemque*; doc. núm. 38: *Wiredici* por *Vviderici*; doc. núm. 52: *cartulia* por *cartula*; doc. núm. 64: *litigare* por *litigare*) aunque no menos perturbador, difícil en ocasiones su manejo; la omisión de libro, título y *era*, cuando lo reproducido son leyes visigodas, o de los elementos identificatorios de las disposiciones conciliares, serían otras muestras de las barreras innecesarias que eleva Canellas entre los lectores y su obra.

Obra con defectos, algunos reseñados; obra, incluso, en que prácticas abusivas en cuanto a citas arrojan sombras sobre la honestidad de un autor, que por trayectoria y méritos la tiene bien cimentada. Obra cuya importancia para los historiadores del derecho, no obstante críticas de escuela, aconsejaba —aunque tarde— discutirla desde las páginas de este ANUARIO.

CARLOS PETIT

CASANOVA AGUILAR, Isabel: *Aproximación a la Constitución nonnata de 1856. Presentación general y primera publicación del texto íntegro*, Murcia (Secretariado de Publicaciones de la Universidad), 1985, 200 págs.

Estamos ante bastante más que una aproximación: es la presentación un estudio no menos informado por más apretado de este proyecto constitucional, entendiéndose por tal no sólo su cuerpo principal, sino también sus apéndices que se declararan de su mismo rango y que fueran igualmente aprobados por las Cortes constituyentes, esto es, las becas de las leyes orgánicas que se relacionaban en su artículo 92: la electoral, la de relaciones entre los dos Cuerpos Colegisladores, la del Consejo de Estado, la de gobierno y administración provincial y municipal, la de organización de los Tribunales, la de imprenta y la de la Milicia Nacional.

Se reintegra así el proyecto, considerándose cuidadosamente sus peculiaridades en el seno de nuestra historia constitucional y comparándosele especialmente con los regímenes de las Constituciones precedentes. Las cuestiones contempladas son las primariamente constitucionales conforme al propio testimonio de este complejo textual. Hay algún capítulo cuya misma trascendencia constitucional parece escaparse, como el de la Milicia Nacional que ni siquiera se contrasta con la Guardia Civil, o algún otro cuyo planteamiento no parece suficiente, como el del Consejo de Estado que no acaba de situarse en el mismo entramado institucional, pero el conjunto ya puede reflejar la significación histórica del proyecto.

Recibe también consideración el propio proceso constituyente, con un muy sucinto resumen en su epígrafe del artículo sobre la formación de la asamblea adelantado en la *Revista de Estudios Políticos* (37, 1984). Si el título con todo queda modestamente corto, una largueza enseguida le compensa: «primera publicación del texto íntegro». No lo es en rigor, pues ya la tuvo entonces parlamentaria, de la que lógicamente se toma. Resulta en todo caso su reproducción de interés pues no se encuentra completo en ninguna de las colecciones habidas de Constituciones históricas, pero tampoco debe olvidarse que no fue norma, sino proyecto. El equívoco a veces se desliza en el mismo estudio, con un afán también por reivindicársele a este texto constitucional primicias que no llegaron propiamente a ser.

¿O lo llegaron? Se nos explica que ya las referidas bases entraron en la Constitución a fin de sortearse la aduana de la sanción real, bastando entonces el acuerdo de las Cortes constituyentes. Puede que la Constitución de 1856, con bases comprendidas, no fuera tan *nonnata*. Las circunstancias políticas confusas de los días en que pudo estar vigente ya también aquí se recuerdan. Nacida estuvo; esperaba si acaso el bautismo, más bien de fuego. Lo suyo no fue aborto, sino infanticidio. ¿No la llamarían ya *nonnata* sus propios asesinos? Los apodos son cómodos, pero raramente inocentes.

Sin interrogantes comprometidos, a su objeto se atiene esta presentación, pero también advierte que procede de una investigación más amplia, que fuera tesis doctoral y cuya publicación se prepara, sobre el derecho y la política del período.

A juzgar por su preceptivo resumen (*El Bienio Progresista, 1854-56. Análisis de un intento de modernización institucional*, Universidad de Murcia, 1984), poco más que su índice en prosa, y por un epígrafe final del mencionado artículo, se trata del análisis de su legislación más efectiva, como la procesal, la desamortizadora, la bancaria y crediticia y la de ferrocarriles; de sus proyectos frustrados pero de importancia también ulterior, como en materia registral y notarial o en la de enseñanza, e incluso de sus propuestas más perdidas, como en el campo laboral o en algún otro todavía de más clara implicación constitucional, como el eclesiástico.

Este anticipo ya se ha beneficiado del trasfondo de unos conocimientos cuya segunda publicación, tras la doctoral que también lo es, o debería serlo, podrá traer la verdadera constancia de una significación histórica. Pasaría al limbo el proyecto constitucional, pero no toda la obra de estas Cortes constituyentes. Gracias a esto, que no a una Constitución ya no reasumida, las Constituyentes venideras del 69 tendrían una base de sustentación, lo que también debiera merecer consideración específicamente constitucional, con su remisión a materia de Códigos; mas ignoro si la categoría precisamente más inespecífica de *modernización institucional* sirve al efecto. Incógnitas naturalmente quedan para la obra

B. CLAVERO

CIRUJANO MARÍN, Paloma; ELORRIAGA PLANES, Teresa y PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio: *Historiografía y nacionalismo español, 1834-1868*, Madrid (Centro de Estudios Históricos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas), 1985, XI + 206 págs.

El atractivo del título se ratifica y acrecienta con el del sumario. la cristalización del saber histórico; el estado burgués español y la aparición de la historia nacional; la monarquía, protagonista historiográfica; centralización y federalización. los fueros; la revolución liberal, colofón historiográfico. Difícil colmar expectativas; ya por la desproporción entre cobertura temporal y entidad temática, la decepción era seguramente inevitable.

Se presenta el libro como lo que parece primer resultado de un programa de investigación de verdadero interés. el del estudio histórico de dicha ecuación entre la propia obra de los historiadores y un determinado nacionalismo que desde luego mucho les debe. Quiere así también vivificarse una disciplina tan apagada como la historiografía. No es el objetivo entonces, sino el objeto, el que falla.

Falla, a mi entender, su demarcación. Cada cosa tiene su tiempo y en la época isabelina ni se funda ni cristaliza dicho nacionalismo historiográfico; ni se asientan sus bases ni se eleva el edificio; lo uno es anterior; lo otro. posterior. En la fijación del punto de partida el hándicap especialmente se aprecia; irreprochablemente se le concibe: la revolución española; deficientemente se le realiza: la fecha cuando la misma ya resulta irreversible. No deja tampoco de subrayarse que para la propia época la revolución arrancaba indiscutiblemente de Cádiz; los planteamientos de la misma historiografía ya podían haber guiado

No es tampoco que hacia atrás no se mire, incluso más lejos, pero estas visiones ya esencialmente se producen con la servidumbre de referencias a través de la propia historiografía isabelina. Sirva un ejemplo; se registran expresiones de Alcalá Galiano:

La obra de Martínez Marina es un tejido de sueños, y de aquellos que creídos verdades inducen a las equivocaciones más completas en punto a la historia de las leyes y costumbres. El docto canónigo enamorado de la Constitución de 1812 le buscó origen en nuestra historia, y la encontró planteada o poco menos en nuestra tierra, ya en los tiempos de la dominación goda, ya en los siglos XIV y XV (.) Su libro á descaminado en España a muchos, prendados de la erudición que encierra, y que de la indudable bondad y rectitud del autor equívocamente suponían ser verdaderas y santas sus doctrinas. Sempere, aunque alguna vez erró por el lado opuesto, lo enmendó con frecuencia bien; pero por desgracia pocos españoles han leído a Sempere y a Marina

Como nuestros autores, pues ello parece bastar, con su mismo descuido de un paradigma común de fondo. La pista en caso alguno se sigue, siendo así que se nos está remitiendo a un momento fundacional, ya vinculado a la revolución española, de la especie de *historia constitucional* que más interesa al nacionalismo historiográfico. De esto los mismos autores se muestran conscientes, apuntándolo en más de una ocasión, pero sin detenerse ninguna de ellas. La misma bibliografía europea del asunto, con títulos de tanta relevancia como el de Bockenförde, ha pasado desapercibida, ocupando otra menos específica.

En todo caso, quiere expresarse el propio objeto al máximo, cuidándose la metodología. Hay un esfuerzo de encuadramiento intelectual y social de la historiografía y unos ejercicios preliminares para accederse a ella en términos de significación colectiva, pero luego la exploración a duras penas responde, tendiendo realmente a derivar hacia lecturas lineales de autores ya contados. Y no es tampoco que no den para más las fuentes; aun tratándose de fueros, la literatura privativa vasca ni siquiera, por ejemplo, se recuerda; véanse tan sólo las páginas correspondientes de la *Historiografía de Vizcaya* de Marañicúa para sospecharse lo que se pierde. Tampoco siempre la historiografía entre nosotros es una ciencia tan descuidada como aquí se presume.

Otra dimensión tiene aún peor suerte; así, al menos, con los fueros, se trata la vertiente de reducción interior de otras historias a la de España, pero, y pese a alusiones, no se aborda en cambio la que también a su modo es interior, y más impertinente para la propia imaginación del sujeto nacional, de paralela negación de historias a escala superior. Tal vez ya lo dificultase el confinamiento cronológico; al fin y al cabo el efecto de expulsión como *leyes de la China* del Derecho y la Iglesia romanos ya se había producido durante aquella última Ilustración aludida por Galiano. La laguna ya es también más llamativa por cuanto que se nos informa de que el libro se ha financiado a cargo de un más amplio programa de investigación sobre *España y Europa*.

Y ya que en historiografía versamos, no se reputarán extemporáneos unos últimos reparos más formales, respecto a autoría, respecto a aparato y respecto a sede. Respecto a lo primero, bien está el orgullo de la obra en equipo, pero nada sobraría información sobre su funcionamiento, asumiéndose de paso responsabilidades. Ya el propio desajuste entre capítulos de planteamientos y de resultados parece denotar que el trabajo tampoco es tan colectivo.

Respecto a aparato, este libro pide a gritos catálogo bibliográfico e índices onomástico y temático, más aún por sus viciosos latiguillos de op. cit. y otras más vagas referencias. Algún fallo de remisión interna ya delata que su publicación ha podido precipitarse, pero tales requisitos eran en todo caso inexcusables para un estudio de esta índole. No los suplen otras formas menos tradicionales de gráficos y cuadros que aquí sirven para procesar, ya limitándola, la información del género; tampoco, lógicamente, las indicaciones de catalogación.

Respecto a sede, el libro aparece como monografía de un Centro de Estudios Históricos, lo que trasciende por supuesto a los autores, pero es circunstancia de la publicación. No sé hasta qué punto resulta legítimo arrogarse el nombre de una prestigiosa institución pretérita con la que no se guarda filiación conocida o en relación a la que hubo en todo caso una radical solución de continuidad. Y no es ésta además la única resurrección reciente del Centro de Estudios Históricos, con su confusión adicional.

Así al menos, con todo ello se le ponen más difíciles las cosas a una historiografía futura. Ya que bien no lo hacemos, que tampoco nos superen

B CLAVERO

DE DIOS, Salustiano: *Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla*, Salamanca 1985, 349 págs.

No es ésta la primera vez que tengo ante mí una obra de indudable envergadura (y no sólo en su dimensión cuantitativa) de este autor. Con anterioridad se publicó su tesis doctoral, que versaba precisamente sobre *El Consejo real de Castilla (1385-1522)*, Madrid 1982, 518 págs. Es lo cierto que para poder enjuiciar el estudio al que ahora nos referimos con un mínimo de rigor, resulta necesario tener delante aquella, dado que ambas constituyen un todo de apretada interrelación entre sí, de modo que difícilmente puede penetrarse en el contenido de una, desconociendo la otra. En este sentido, y hasta donde llegan mis conocimientos sobre lo que podemos denominar sin titubeos la obra básica del profesor Salustiano de Dios, creo que la tesis doctoral aún no ha sido objeto del comentario crítico que, normalmente, merecen las obras de investigación propiamente dicha, sobre las que existe la generalizada conciencia (no siempre expresada por los cauces normales) de su interés científico.

El trabajo que ahora suscita mi atención primordial constituye, básicamente, una labor complementaria (no tiene por qué ser necesariamente tributaria) de la otra anterior. Al autor no le pasa inadvertida esta circunstancia, ya que claramente nos la participa en la introducción de aquel.

El estudio de las instituciones político-administrativas, como las iusprivatistas, ha de realizarse sobre la base de las más diferentes fuentes que permitan extraer los diferentes y necesarios datos para su más correcta factura: normativas, doctrinales, literarias entendiendo el término de forma genérica, y, finalmente, documentales. No creo necesario insistir, con mayor profusión de detalles, en el hecho de que mientras más numerosas y variadas sean las noticias y testimonios reunidos, mayores serán las posibilidades de que (partiendo de una línea media de rigor científico) el estudio final alcance mayores cotas de seriedad científica. No obstante, dando por válido este principio, al que desde luego puede calificarse como desiderativo, ello no quiere decir que cualquier otro talante investigador deba ser tachado sin más de insuficiente, originando con ello su radical descalificación. En otras palabras, la actitud metodológica no implica que el investigador se sienta en la obligación de sumergirse ineludiblemente en todo tipo de fuentes, para así llegar, tal vez con pie un tanto forzado, al fondo del asunto de forma que podamos llamar totalizadora. Las razones que justifican esta aseveración son variadas y de todos conocidas. Sin menoscabo del mérito que cabe atribuir a aquella posición metodológica, lo cierto es que no ha de considerarse imprescindible atarse a los dictados de la llamada historia total, para que la investigación alcance a obtener el beneplácito general, incluidas las secuencias admirativas de quienes, situados más en la utopía que en la realidad práctica, esperan de otros o aspiran ellos mismos a dar algún día un tono omnicomprendivo a sus investigaciones. No en vano existen y seguirán existiendo, delimitadas en sus contornos más o menos precisos, las diversas especialidades históricas.

Lo que sí me parece importante resaltar es que, cuando los propósitos indagatorios no se caracterizan por su amplitud de objetivos, parece indicado que el autor así lo haga constar, al tiempo que acomete su tarea investigadora investido del debido espíritu científico. Por esto, la existencia de esas especialidades históricas, perfectamente ensambladas entre sí, constituirá un medio de gran utilidad práctica para que la contribución así hecha de forma parcial, pueda verse algún día complementada con los resultados de otras investigaciones, más o menos tangenciales respecto de las fuentes de conocimiento.

Ante la aportación que el autor hace, tengo el convencimiento de que sólo cabe, por parte de quien se acerca a juzgarla, una actitud que pueda calificarse como mínimo de justa. Es ésta la del reconocimiento de la presencia a lo largo de toda ella de un esfuerzo notable por encontrar soluciones a los numerosos interrogantes que el mismo autor tiene el acierto de plantear. Pero se trata de un esfuerzo que entendemos coronado por el éxito. La primera impresión que la obra me merece, puede sintetizarse en tres principios: coherencia metodológica, rigor científico en el manejo de variadas y abundantes fuentes y, por último, nitidez expositiva, casi siempre hija ésta de una previa claridad de ideas en el autor.

El Prof. De Dios nos facilita el camino en nuestro discurrir crítico, desde las primeras páginas de su libro. No ha pretendido sacrificar la virtualidad de la investigación, a la no siempre sana tendencia hacia una exhaustividad (innecesaria no pocas veces) respecto de un indiscriminado acopio de fuentes. Ha seleccionado estas últimas, con ambicioso propósito, aportando además unos documentos ciertamente expresivos a la hora de obtener resultados «probados» sobre el objetivo

que realmente persigue: llegar a conocer la organización interna y el funcionamiento efectivo y diario del principal Consejo de la Monarquía hispánica.

De acuerdo con lo anterior, el autor traza oportunamente las líneas maestras que definieron el largo discurrir histórico de la institución. Y ese decurso histórico se verificó, a su entender, de acuerdo con una doble vertiente que va perfilándose al par de su evolución: por una parte, su institucionalización como factor de participación de los distintos poderes políticos y sociales (corona, iglesia, nobleza y ciudades); por otra, como instituto instrumentalizado monopolísticamente por la monarquía. Por otra parte, ese proceso se va a desarrollar en el seno de una sociedad calificada de señorial o feudal.

Al amparo de esta última consideración, que hemos de calificar de esencial para entender y valorar la aportación de Salustiano de Dios, el autor distingue dos versiones o dos momentos en el Consejo. El primero como propio de una sociedad feudal típica. El segundo, como correlato del anterior, dentro de una línea evolutiva lógica su conformación en el seno de una monarquía absoluta, inserta en una formación feudal no tanto más compleja, como con un mayor nivel de desarrollo. La razón que explica esto último, estaría estrechamente unida a las tensiones existentes entre las distintas potestades, antes enumeradas, por controlar el más importante mecanismo de poder político y económico, y su resultado final, a principios del siglo XVI, de absorción del Consejo por el monarca. Si la presencia de letrados confiere un carácter eminentemente técnico al organismo, no por ello pierde (más bien sucede todo lo contrario) su condición de instrumento de control real y, a través de éste, de mecanismo destinado a perpetuar, si bien que indirectamente, el poder de la nobleza.

En este punto, cabe recordar que los enfrentamientos entre los poderes mencionados, perfectamente identificables durante la Edad Media, culminarán en la Edad Moderna con el triunfo de la realeza, apoyada ésta en la eficacia de los letrados. No obstante, desde hace tiempo se sabe que tras la consolidación del Estado absoluto, encarnado en la figura del rey, el distanciamiento entre este último respecto del reino, no supuso la supeditación de la nobleza al antojo monárquico. Por el contrario, lo que tiene lugar es el surgimiento de una dialéctica entre ambos poderes en virtud de la cual, si quedó clara la potenciación del poder regio y la consiguiente centralización política, la nueva situación apenas enmascaró una realidad fácilmente apreciable. Esta fue la consolidación del poder nobiliario (a través de continuas medidas filoaristocráticas adoptadas por la corona) en función de una nueva entente en la que las pretensiones nobiliarias, tuvieron como soporte la propia fortaleza del poder político.

En síntesis, puede decirse que este es el planteamiento del autor y el que le hace reconocer como «señorial» o feudal al Estado (ver págs. XVII y XVIII de la obra que ahora comentamos, así como 1-2 y 481-485 de *El Consejo real...*) de este período. Así pues, monarquía absoluta no equivale (siempre según el autor) a debilitamiento nobiliario, sino más bien a una nueva forma de gobierno en que, superadas las tensiones anteriores propias de relaciones feudovasalláticas clásicas, se llega a la constitución de una nueva situación gubernativa en la que los intereses aristocráticos, considerados como propios de una clase social dominante,

quedan amparados por la propia monarquía, por un Estado configurado como perpetuador de un sistema de clases

En el libro al que ahora nos venimos refiriendo, el autor desliza algunas consideraciones (más ampliamente desarrolladas en la tesis doctoral) en torno a la composición del Consejo; la carrera burocrática de los consejeros, delineada como un *cursus honorum* a través del cual se advierte el ascenso gradual de los letrados, desde puestos de menor entidad, hasta llegar a ocupar un lugar en el Consejo de Castilla, ya sean laicos, ya eclesiásticos. De todos ellos destaca dos facetas en buena medida definitorias de su personalidad: el construir unos y otros un grupo privilegiado siempre atento al servicio del interés regio, y el haber formado, desde el primer momento, un núcleo de carácter elitista marcado por un espíritu intensamente corporativo a través del cual protegían sus importantes prerrogativas

Sobre las competencias del Consejo se ocupa Salustiano de Dios más brevemente en el libro al que ahora prestamos atención preferente, que en la tesis: el importante capítulo de las concesiones de merced; la actuación de carácter normativo; la protección de derechos y el reparo de agravios; protección de la justicia real; control de los oficiales públicos; actividades de fomento; avocación de pleitos iniciados en otras instancias; el conocimiento de éstas por vía de apelación, etc.

Esto en lo que concierne a las competencias específicas. Por lo que respecta a su modo de actuación en los asuntos sobre los que ejercía la competencia, el autor distingue entre el despacho de cámara, origen del futuro Consejo de Cámara y referido a cuestiones de mercedes en sentido genérico; los expedientes de gobierno y los expedientes de proceso, atinentes estos últimos a cuestiones jurisdiccionales

Es evidente que el análisis del libro sobre las *Fuentes para el estudio del Consejo real de Castilla*, nos proporciona suficiente panorámica para conocer la institución. Sin embargo, será en la anterior obra, *El Consejo real de Castilla (1385-1522)*, donde los aspectos antes enumerados aparecen desarrollados con la amplitud y el rigor que reclaman tanto el carácter del trabajo, como la naturaleza de una labor investigadora desarrollada con amplitud de miras

Es importante conocer la profesión metodológica que el autor hace en la página 1 de este último libro, al que, si bien brevemente, consideramos necesario aludir. Entiende que la Historia del Derecho o de las Instituciones, considerada como una especialidad de la Historia, reclama por su propia naturaleza «insertar la institución en el marco social y político donde ella se desenvuelve .. sin renunciar por ello a un análisis jurídico». Esta afirmación de principio la hemos visto repetida en más de una ocasión en obras de parecido contenido a la que ahora enjuiciamos. Lo que sucede es que, en no pocas ocasiones, tales demostraciones de «pureza» metodológica, por lo general reconocida expresamente en prometedores prólogos o introducciones a los respectivos trabajos de investigación, no han ido más allá de ser simples proclamaciones vacías de contenido. El desajuste entre las profesiones de fe en un determinado método investigador y su aplicación práctica, es un fenómeno corriente en este tipo de trabajos.

Distinto es el caso en que el autor, reconociendo las virtudes de un determi-

nado método, opte (con una libertad que en todo caso debe serle reconocida) por un camino menos «totalizador» o más apegado a un cierto tipo de fuentes. Quienes, en distinta medida, conocemos la riqueza que pueden aportar a los estudios histórico institucionales (por citar este caso concreto) la aplicación de una metodología de ancha mira, también estamos conscientes de que la evidencia de esta virtud, corre paralela a la servidumbre que para su aplicación práctica significa el tropezar con un ingente acopio de datos, capaz por sí mismo de frenar el sincero ímpetu inicial. Paradójicamente, la riqueza de las fuentes puede, a veces, transformarse en obstáculo para hacer realidad un proyecto acariciado de antemano.

Una cosa sí me parece incuestionable, planteando el tema en términos genéricos; y es que ante la «invitación» que cualquier tema de éstos pueda hacer al investigador, respecto a insertar plenamente una institución en el marco socioeconómico al que por su naturaleza responde, caben varias actitudes: desconocer ese fenómeno; admitirlo, pero renunciar a él por cualquiera de las razones antes apuntadas; finalmente, penetrar en el mismo como elemento de referencia para abordar, con amplio talante, el estudio institucional. Queda claro que esto último está íntimamente relacionado con el nivel con que el aludido talante forma parte de la actitud metodológica previa que el autor sustente. Dicho esto, reconocemos en Salustiano de Dios una decidida inclinación por llevar adelante su estudio conforme a la tercera de las pautas someramente mencionadas.

Así las cosas, un rápido repaso de la tesis doctoral del mencionado autor (cuyo conocimiento, insisto, no puede llevarse a cabo seriamente al margen del libro objeto primordial de esta crítica, dada la interrelación existente entre ambos) nos muestra una perspectiva, obtenida a través de diferentes ángulos, de la institución del Consejo real, desde su nacimiento hasta el primer tercio del siglo XVI. Desde los organismos más o menos alejados en el tiempo, que pudieran ser considerados como precedentes, hasta su constitución formal en 1385, y desde aquí hasta el término *ad quem* del estudio, discurre un largo período jalonado de circunstancias políticas y sociales que van, primero configurando y después consolidando social e institucionalmente al que será más tarde conocido como Consejo de Castilla.

Ordenanzas enderezadas a reglamentar el nuevo organismo; tensiones entre los diversos poderes sociales por controlarlo, lo que equivale a dominar la principal institución administrativa y política del Estado; la pugna interna por dirigir desde dentro la vida política de la Monarquía, suscitada entre consejeros y secretarios; fenómenos de duplicidad de la institución en las frecuentes ocasiones de ausencia del rey; actitud pro regia y, por lo tanto, pro nobiliaria del Consejo ante el fenomenal, por muchos motivos, acontecimiento de la revolución comunera, etc., marcan los hitos por donde discurre, no pocas veces tumultuosamente, la vida del Consejo.

Todo lo anterior constituye la primera parte del libro (capítulos I al V), conjunto de secuencias abordadas por el autor, con el firme pulso de quien sabe lo que hace y hacia dónde discurren los planteamientos temáticos y las consideraciones deducidas de un modo, plenamente consciente, de interrogar a las fuentes. La segunda parte (capítulos I y II), aborda con escrupulosa meticulosi-

dad, todo lo concerniente a la estructura institucional del organismo. denominación, sede, naturaleza y autoridad efectiva; composición del mismo, desde los presidentes hasta los oficiales subalternos, pasando por los consejeros, escribanos y relatores, poniendo especial énfasis en los aspectos concernientes al origen y condición social de cada uno, las formalidades para la designación, duración de los cargos, retribuciones, etc.; finalmente, los capítulos III y IV de esta segunda parte abordan cuestiones atinentes a las atribuciones del Consejo, así como las diferentes vías a través de las cuales aquellas se canalizaban y, por último, su funcionamiento propiamente dicho.

No quiero pasar por alto el interés que estos dos últimos capítulos tienen en sí mismos. Tal como en el libro aparece desplegada la problemática que sustentaba y daba vida a la intensa actividad de la institución, nos parece asistir en todo momento a la actuación concreta de un organismo vivo, al cotidiano quehacer de un mecanismo en acción, dentro de la ingente y compleja maquinaria administrativa montada en la Baja Edad Media y consolidada con los Reyes Católicos. Ante la rigidez y frialdad normativa, el autor sabe en cada momento añadir la oportuna dosis de «savia vital». Junto al andamiaje «constitutivo» de las ordenanzas, encontramos el calor de unos documentos, cuya lectura «anima» la institución proporcionándonos su pulso de órgano «en marcha». El Consejo de Castilla se nos muestra, pues, desde fuera, como ente organizado o como artificio, y desde dentro como pieza activa dentro de la máquina de gobierno. Tal vez sea esto último lo más interesante del estudio, sin desmerecer en lo más mínimo por ello el acierto que supone haber sabido penetrar en las actitudes y los objetivos del elemento humano, factor este último que siempre constituye el soporte de la construcción administrativa. El hombre, en fin, artífice y destinatario al par de sus propios logros, elemento activo en el que siempre se hallan presentes una serie de sentires y de ambiciones, que no son sino motores de la propia vida política, protagonistas, en suma, de un modelo de sociedad.

JOSÉ M.^a GARCÍA MARÍN
Universidad de Córdoba

DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: *Política fiscal y cambio social en la España del siglo XVII*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1984, 250 págs.

Nos encontramos ante una obra de síntesis. Este gran conocedor de la época moderna que es Domínguez Ortiz, nos muestra en ella los efectos provocados por la política fiscal de los Austrias menores en los distintos estratos de la sociedad castellana del siglo XVII, en este sentido no hay una correspondencia exacta entre el contenido y un título que se presenta como más ambicioso. Se trata de efectos indirectos —que no secundarios—, no buscados ni queridos, e incluso contrarios a los deseos e intenciones de los artífices de la fiscalidad.

El autor, tras unas preliminares e ilustrativas palabras sobre el contenido del

libro, introduce al lector no especializado en el mundo de la Real Hacienda, poniendo ante su vista una imagen global y sintética de su desarrollo a lo largo del siglo xvii, «mostrando —al tiempo— su imbricación con las grandes líneas de la historia política y social» (Introducción). Felipe III y su valido Lerma intentaron proporcionar un respiro a la deficitaria Hacienda castellana y a sus abrumados contribuyentes mediante la consecución de una paz exterior que, en todo caso, no solucionó la crítica, aunque no agobiante, situación de aquélla. Y no lo logró principalmente por dos motivos: estar enajenadas en forma de juros las rentas más productivas y porque la disminución del gasto externo se vio compensado con un aumento del gasto interior resultado de una política de relajación y despilfarro. A finales de este reinado, ante el estado realmente comprometido en que se encontraba la Hacienda, se realizaron algunos esfuerzos para sanearla, esfuerzos ineficaces y tardíos que vinieron a coincidir con el inicio de la Guerra de los Treinta Años y, consiguientemente, con el incremento de los gastos previstos. Para hacer frente a todo ello hubiera sido necesario recortar los gastos superfluos —comenzando por la mismísima Casa Real— y arbitrar nuevas fuentes de ingresos; sin embargo, se limitaron a acuñar moneda de vellón y a gastar por anticipado las rentas futuras. Desde el punto de vista hacendístico, el reinado de Felipe IV es considerado como el más decisivo de nuestra historia moderna, marcado por el esfuerzo tributario que se exigió a una Castilla agotada y en franca regresión, en aras de una ambiciosa política exterior. De ahí que este período —extensible a todo el siglo xvii— fuera una época dorada para los arbitristas (Domínguez Ortiz sintetiza aquí su obra *Política y Hacienda de Felipe IV*). El reinado de su sucesor, Carlos II, es contemplado como una mera prolongación del anterior; en él, a pesar de reducirse al mínimo los gastos militares, la situación de la Hacienda no mejoró al estar enajenadas casi por completo todas las rentas de la corona y faltar una autoridad capaz de imponer las reformas que la Hacienda estaba demandando. 1680 fue «punto de partida de una serie de esfuerzos que, de momento, sólo produjeron duros sacrificios, pero a largo plazo pusieron las bases para una restauración», gracias a la presencia de gobernantes como el duque de Medinaceli o el conde de Oropesa, con la decisión suficiente para tomar medidas enérgicas e impopulares a fin de encontrar una vía para sacar a la Hacienda del callejón en el que se encontraba.

Una vez ambientado el lector, el autor se adentra en el tema presentándonos en primer lugar (Cap. I) a la fiscalidad como factor de disolución de la sociedad estamental (modelo teórico mal ajustado a la realidad) al quebrarse en este siglo uno de los principios que la sustentaban: la inmunidad fiscal de los privilegiados. Problema distinto, no resuelto en ese siglo, fue el de hacer efectiva la formulación antitética: todos deben contribuir en proporción a su riqueza.

En los sucesivos capítulos se nos muestra la repercusión que tuvo la política fiscal del xvii en los diversos estratos de la sociedad. Crisis de la aristocracia —capa nobiliaria superior— nacida principalmente a la sombra de las mercedes enriqueñas y renovación de la surgida bajo los Austrias, especialmente por la incorporación de elementos de origen burgués gracias a la venta masiva de títulos. La nobleza contribuyó a las necesidades de la monarquía por diversas vías: desempeño de magistraturas públicas, cargas impuestas para mantener las continuas

guerras, donativos, lanzas, media anata de títulos, etc. No es posible cifrar esta contribución económica. En todo caso, la aristocracia encontró a su vez varios caminos —por ejemplo, las mercedes— para recuperar, al menos en parte, las sumas aportadas; sería interesante llegar a conocer el saldo final (Cap. II). La política fiscal afectó negativamente al clero español, que vio incrementarse su número por la atracción que sobre la población ejercía el beneficio de la inmunidad personal y real, incremento que trajo consigo un descenso de su calidad y por consiguiente un deterioro de muchos aspectos de la vida religiosa. En cuanto a su contribución, los monarcas, a pesar de su indudable religiosidad, «no dudaron en explotar a fondo las posibilidades que se les ofrecían de derivar hacia las arcas públicas la mayor suma posible de ingresos eclesiásticos» (Cap. III). Los efectos sobre la población urbana (Cap. IV) —entendiendo por tal a la clase media de funcionarios, profesionales, comerciantes, artesanos especializados y rentistas— no siempre fueron negativos, ya que en muchos casos este sector supo aprovechar las oportunidades que le brindaban las continuas ventas de cargos y honores. Efectivamente, el siglo xvii llevó aparejado un aumento desmedido de la burocracia por la necesidad de multiplicar el personal de la Hacienda Real ante el aumento de tributos y por la venta de cargos y oficios públicos —cuestión a la que por su especial interés dedicará un capítulo aparte (Cap. V), convencido de que la venalidad de los oficios era una de las causas de la «capilaridad malsana» del Seiscientos—, definiendo las líneas generales de la actuación de los monarcas en este punto. Por otra parte, es en la población urbana donde repercute con mayor fuerza la manipulación de la moneda, cuyo único fin era el de obtener una ganancia inmediata y elevada. El último sector estudiado es el de las clases rurales (Cap. VII). Estas se encontraban gravemente endeudadas, principalmente porque, a pesar de que los campesinos no eran sujetos impositivos, en cuanto vecinos de un municipio debían responder solidariamente al pago de tributos y deudas. La venta de lugares fue otro de los efectos de la fiscalidad en el mundo rural. Dado su volumen y repercusión el autor estudia por separado —como lo hizo con las ventas de oficios y cargos públicos, y con la conmutación de penas por dinero (Cap. VI)— la venta de tierras de aprovechamiento comunal. El problema que entraña el reconocimiento de la propiedad de tierras baldías hará que se vendan en muchos casos «so color de que no son valdíos los que se venden» sino de realengo (Cap. VIII).

En definitiva, a lo largo de las interesantes páginas de este trabajo, Domínguez Ortiz conecta con habilidad, en una relación causa-efecto, la fiscalidad con los cambios sufridos en la sociedad castellana del siglo xvii. Su peculiar interpretación de los hechos le lleva a defender una intensa movilidad social, si bien impulsada por causas diferentes a las del siglo anterior, así como a mostrarse contrario a la tesis de la refeudalización que, en su opinión, si se dio fue en pequeña medida debido a que la nueva aristocracia, carente de tradiciones feudales, había renunciado a disputar al rey su poder.

P. ARREGUI ZAMORANO

GARCÍA FERNÁNDEZ, Javier: *El origen del Municipio Constitucional*, Madrid (Instituto de Estudios de Administración Local), 1983, 346 págs.

En 1983 el Instituto de Estudios de Administración Local publica la obra objeto de esta reseña. En ella se recoge sin alteraciones fundamentales, como el propio Javier García Fernández nos confirma (pág. 19), el texto originario de su Tesis Doctoral. Y quizá se convierta esta aseveración del autor en una de nuestras principales objeciones a medida que vamos profundizando en los temas analizados sucesivamente en los diferentes capítulos de la obra.

Principal crítica, sin duda, que se le ha de hacer a este libro, porque estamos convencidos de que unos simples retoques y la verificación oportuna de unos datos por parte del autor, que por otro lado demuestra ser un investigador sagaz, hubiesen bastado para salvar las a veces importantes imprecisiones que se advierten en partes concretas de la obra. A estas imprecisiones y en su caso confusiones nos referiremos con detalle en otro momento.

Antes de adentrarnos en el examen pertinente de la estructura y contenido del libro habría que detenerse en otro punto que no por nimio resulta menos chocante. El investigador que empieza (imaginamos que el experto no es muy distinto en este sentido) agradece muy de veras la ayuda que le prestan unos adecuados índices bibliográficos, índices de materias, y por supuesto los apéndices documentales; pero sobre todo agradece el que el título de una obra responda ni más ni menos al contenido de la misma. No es extraño encontrar obras en las relaciones bibliográficas con títulos sugerentes (que el investigador inexperto llega a considerar de inexcusable y urgente consulta para conseguir ese deseado avance en cualquier proyecto investigador), que cuando llegan a nuestras manos nos defraudan porque, o bien, el título es lo único sugerente que tienen (supuesto éste que desde luego no tiene nada que ver con el libro que nos ocupa) o bien, comprobamos tras la lectura de las primeras páginas que su contenido no responde al título que provocó nuestras expectativas. A este segundo caso sí corresponde, aunque con ciertas matizaciones, la obra de Javier García Fernández.

Para constatar esta afirmación basta con conocer el título del libro reflejado en su portada «El origen del Municipio Constitucional», y el objetivo que con esta obra el autor se propone conseguir, según nos descubre en las páginas introductorias: «Esta obra pretende estudiar la génesis del principio de autonomía municipal en el momento en que tiene lugar el nacimiento del Estado Constitucional en Francia y en España». (p. 31)

Y es en verdad el origen de este principio el eje central del trabajo, aunque para ello el autor se vea obligado necesariamente a analizar a un tiempo la organización y el funcionamiento del municipio surgido en Francia tras la Revolución y en España a raíz de la Constitución de 1812

Por ello, y de ahí el primer matiz de nuestra afirmación, el título en portada sólo responde a medias al contenido del libro. Inmediatamente se nos ocurre que el problema hubiera sido soslayado añadiendo simplemente al título originario un subtítulo en el que se aclarase la verdadera intención del autor. Pero cuál será

nuestra sorpresa al comprobar que el autor ya pensó en un subtítulo, sólo que en vez de ser colocado en la portada del libro se puso en la primera página, en la que se lee: «El origen del municipio constitucional: autonomía y centralización en Francia y en España». Subtítulo éste que responde con exactitud al propósito inicial del autor.

En este supuesto, quizá, y no queremos dejar de señalarlo, habría que eximir de responsabilidad al autor; son numerosos los casos en los que la propia composición de la portada influyen decisivamente a la hora de la necesaria elección de un título final.

A continuación, tras estas aclaraciones previas, pasemos ya sin más preámbulos a revisar la estructura que la obra presenta y el contenido de los capítulos en los que se divide.

El libro, dividido en nueve capítulos, presenta dos partes bien diferenciadas. La primera, formada por cuatro capítulos, se dedica principalmente al estudio del municipio francés. En la segunda, cuantitativamente más importante, el autor analiza el origen del municipio constitucional español; introducen esta segunda parte dos capítulos (5.º y 6.º) que se refieren, respectivamente, a las reformas que en el ámbito municipal se llevaron a la práctica en el siglo XVIII y al sistema municipal de la monarquía de José I.

La relación que se establece entre las dos partes de la obra es sumamente interesante y constructiva para el lector que llega a apreciar con exactitud y con una mayor facilidad las características del sistema municipal español una vez que conoce el origen y la evolución del francés; y esto, porque como muy bien aclara el autor (p. 26) el régimen local español es ciertamente incomprensible si no se conocen las líneas generales del sistema municipal francés.

No se trata de comparar dos sistemas, ni de demostrar qué de original tuvo el régimen español con respecto al francés, ni del análisis de instituciones concretas en una organización y en otra; se trata en definitiva, y quizá sea uno de los más logrados objetivos de la obra de «poner ante el lector el origen y desarrollo de dos ordenamientos» (p. 27).

Las influencias y conexiones que necesariamente se han de observar llegan imperceptiblemente a formar parte de las conclusiones del propio lector.

En la primera parte, el autor analiza con una sistemática que es de agradecer los diferentes sistemas municipales que se originan en Francia desde 1789 hasta aproximadamente el año 1840:

- Municipio descentralizado, autónomo y en cierto sentido democrático (sufragio censitario) derivado del Decreto de la Asamblea Constituyente de 14 de diciembre de 1789 (capítulo 1).
- Municipio centralizado, antidemocrático y sin autonomía que se concreta en la Ley napoleónica de 28 Pluvioso del año VIII (capítulo 2).
- Y, municipio descentralizado, no democrático o, lo que es lo mismo, municipio «doctrinario» que se manifiesta principalmente en dos leyes: Ley de Organización Municipal de 21 de marzo de 1831, y en la Ley de Atribuciones Municipales de 18 de julio de 1837 (capítulo 3)

El capítulo 4 también se incluye en esta primera parte y justamente su inclusión, aunque imaginamos que el autor tuvo en su día motivos suficientes para considerarla necesaria, resulta, desde nuestro particular punto de vista más un inconveniente que un beneficio. Este capítulo, que analiza las reformas municipales prusianas de Von Stein, rompe de alguna manera con la sistemática del conjunto y consigue desorientar al lector que espera, tras los conocimientos adquiridos del sistema municipal francés, adentrarse en la segunda parte de la obra, o lo que es lo mismo, en el municipio constitucional español.

El núcleo fundamental de la segunda parte lo constituyen los capítulos 7 y 8, que nos van a permitir acercarnos al municipio constitucional en las Cortes de Cádiz. En el capítulo 9, a modo de conclusión, el autor se referirá, en líneas muy generales, a la consolidación del sistema municipal constitucional; éste somero estudio abarcará el período comprendido entre el Trienio Liberal y la revolución de 1868.

Introducen esta segunda parte a la que nos venimos refiriendo dos capítulos. El primero, se dedica a la obra municipal de Carlos III, basándose principalmente el autor en las consecuencias que, en el ámbito municipal, tuvo el Auto Acordado de 5 de mayo de 1766. En el segundo de estos capítulos introductorios, referido al sistema municipal de la Monarquía de José I, es donde mayor cúmulo de imprecisiones y confusiones se aprecian. Al examen de este capítulo procedemos acto seguido.

El principal pilar del sistema municipal josefista es un Real Decreto en el que se establece «la división del gobierno civil de los pueblos del Reyno» en Prefecturas, Subprefecturas y Municipalidades. (En este caso hemos considerado necesario manejar la misma fuente documental que utiliza el autor del libro: *PRONTUARIO de las Leyes y Decretos del Rey Nuestro Señor Don José Napoleón I* Tomo II, págs. 56 a 74. El Real Decreto de 17 de abril también se encuentra publicado en la «Gaceta de Madrid» de 4 de mayo de 1810).

La fecha de esta disposición es la primera de las imprecisiones que se observan. El Decreto se rubrica en El Real Alcázar de Sevilla a 17 de abril de 1810. El autor se refiere a él como «Decreto de 14 de abril de 1810» (pp. 199, dos veces, y 200). La última vez que lo cita (p. 208), por el contrario, lo fecha correctamente.

Se detiene unas líneas el autor para explicar el origen conflictivo del Decreto de 17 de abril. Disposición conflictiva, sin duda, porque resultó ser, y en esto estamos completamente de acuerdo con García Fernández, una réplica política a los famosos Decretos Imperiales de 8 de febrero de 1810 que vinieron a significar la segregación efectiva de las provincias del Nordeste Peninsular; pero a continuación afirma: «Se conocen las presiones que ejerció el rey sobre su hermano para evitar tan contundente decisión, especialmente a través de la reina (que residía en Francia) y de varias embajadas extraordinarias, pero una vez fracasadas estas gestiones ., José I toma una decisión de auténtica trascendencia política .». (p. 200).

Cómo se puede decir que esta disposición fuera consecuencia del fracaso de unas gestiones que en esa fecha (17 de abril) aún no habían comenzado, pues Miguel José de Azanza, primer embajador extraordinario enviado a París, todavía

se halla en Madrid el 15 de abril, y con él, Deslandes, secretario particular del Rey José, con una carta para la Reina Julia.

Pasemos ya, junto con el autor de la obra objeto de esta reseña, al análisis del Título IV de la Disposición de 17 de abril, dedicado íntegramente a las municipalidades.

Las funciones ejecutivas en el ámbito local estarán encomendadas a un Cuerpo formado por el corregidor y los regidores, a los que el Decreto de 17 de abril denomina «empleados del gobierno de las municipalidades» (Título IV, artículo 8), lo que entra claramente en contradicción con la afirmación que hace García Fernández (p. 208) sobre que el corregidor es, en sí mismo, un órgano de la estructura política del municipio, distinto del colegio de regidores, a los que se denomina simplemente «empleados municipales».

Junto a este órgano ejecutivo, a nivel local habrá también un órgano colegiado, denominado Junta municipal, que tendrá las siguientes funciones:

- Repartir las cuotas individuales de las contribuciones (artículo 5).
- Inspeccionar las cuentas de los empleados en el gobierno municipal (artículo 6)
- Formar el presupuesto de las rentas y cargas de la municipalidad (artículo 14)
- Nombrar directamente a los miembros del gobierno municipal, es decir, al corregidor y a los regidores, cuando el vecindario de la municipalidad no exceda de dos mil vecinos (artículo 4)

Estas son las únicas funciones ordinarias que tienen las Juntas municipales y no estamos de acuerdo con Javier García Fernández cuando afirma (p. 204) que «la Junta municipal no tiene otras funciones que proponer candidaturas para la formación del órgano de gobierno, y para los representantes de la municipalidad en las Juntas Generales de prefectura y subprefectura»; esta última función a la que se refiere García Fernández, sin duda alguna, no la tienen las Juntas municipales sino los concejos abiertos de vecinos contribuyentes que serán en definitiva los que nombren a los miembros de las propias Juntas (artículo 2)

En cuanto a la primera de las funciones a las que se refiere García Fernández, proponer candidatos para la formación del órgano de gobierno, ya vimos cómo las Juntas municipales en los municipios con menos de dos mil vecinos no proponen sino que nombran directamente a los miembros del gobierno municipal. Indiscutiblemente la inadecuada interpretación que el autor realiza del artículo 4 de la Disposición de 17 de abril, repercute negativamente en las conclusiones a las que se llegan, porque, efectivamente, el municipio josefista es un municipio centralizado, pero con un germen democrático que no sólo se aprecia en la elección de los miembros de la Junta municipal (concejo abierto de vecinos contribuyente) cualquiera que sea el número de vecinos, sino también en la designación del órgano de gobierno, en aquellos municipios con menos de dos mil vecinos, nombrado directamente por aquellas Juntas cuyos miembros fueron elegidos, a su vez, por sufragio censitario.

Otra cosa es cómo se llevó a la práctica este precepto, si es que efectivamente se llevó. Sólo la pertinente aparición de monografías locales permitiría llegar a conclusiones válidas en este sentido.

Una última objeción que se ha de hacer en cuanto al contenido del Título IV del Real Decreto de 17 de abril se refiere a la duración de las sesiones de las Juntas municipales

El artículo 7 es claro en ese sentido, no permite la más mínima duda: « y en ningún caso podrán estas sesiones exceder de diez días». Javier García Fernández entiende, a pesar de la claridad del precepto, que, en todo caso, estas reuniones no podrán exceder de diez cada año (p. 205).

Para terminar con este capítulo de objeciones, una última, en este caso, apreciación referida a la bibliografía utilizada por el autor, y más en concreto a dos libros que son de obligada consulta en un trabajo de investigación de estas características; nos referimos a las obras de Juan Mercader Riba: *José Bonaparte, rey de España, 1808-1813 Historia externa del reinado* Madrid, 1971, y *José Bonaparte, rey de España, 1808-1813. Estructura del Estado español bonapartista*, Madrid, 1983 La primera de ellas manejada con asiduidad por Javier García Fernández; a la segunda, por el contrario, no se hace ninguna referencia, lo que tampoco resultaría tan extraño, dada la coincidencia en el año de publicación de ambos libros, el de Mercader y el de García Fernández, si no fuera porque en la página 192 (nota 2) el autor de la obra que aquí se reseña hace alusión a una supuesta segunda edición, de 1983, del primero de los libros de Mercader Riba, edición de la que no tenemos ninguna noticia, lo que nos hace suponer que ha habido en este sentido una leve confusión y que en realidad se está refiriendo al libro publicado en 1983 con el mismo título que el de 1971, pero con un subtítulo que lo distingue claramente. Subtítulo, por cierto, que se encuentra bien visible en la portada del libro.

Las críticas que desde estas líneas se han hecho a partes muy concretas del libro de Javier García Fernández, producto, quizá, algunas de ellas de una excesiva meticulosidad, no serían válidas si al mismo tiempo no reconociéramos que aquellas imprecisiones comentadas aquí no afectan en líneas generales a la valía de la obra.

La estructura del libro, que resulta sistemática, coherente y sobre todo ordenada, permite al lector adentrarse en la problemática del municipio constitucional.

El libro resulta útil y de necesario manejo, en sentido general, en cualquier trabajo de investigación en el que se analicen parcelas concretas de la organización municipal francesa o española del siglo XIX Respecto a Francia, también son interesantes las conclusiones a las que se llegan sobre el régimen local de finales del XVIII Sin embargo, su utilidad quiebra cuando se refiere a la organización municipal española de finales del siglo XVIII y primer decenio del XIX

CARMEN MUÑOZ DE BUSTILLO
Departamento de Historia del Derecho
Universidad de Cádiz Jerez

HERR, Richard (edición y comentario): *Memorias del cura liberal don Juan Antonio Posse con su Discurso sobre la Constitución de 1812*, Madrid (Centro de Investigaciones Sociológicas y Siglo XXI de España Editores), 1984, 293 págs.

Juan Antonio Posse no sólo fue el fedatario de prácticas comunales que aprovechara Joaquín Costa. Se significó por un sermón en gloria de la Constitución de Cádiz que difundió impreso y le trajo serios sinsabores, acabando por escribir en 1834 su autobiografía testimonial, que no exculpatoria, en la que diera fe de bastante más cosas que de colectivismo o de constitucionalismo y en la que dejara reflejadas las cotidianidades más difíciles de recuperar para la propia historia. Ya el propio Posse se mostró consciente de este valor (p. 181):

Frecuentemente, la más pequeña acción, una simple palabra, un juego, hacen conocer mucho mejor las costumbres de los hombres que los combates, las batallas y las extendidas arengas.

El manuscrito llegó a manos de Gumersindo de Azcárate, quien ya dio la noticia de sus expresiones colectivistas y más tarde lo confió a la revista *La Lectura*, donde se publicó entre 1916 y 1918, pero interrumpiéndosele sin explicación a la altura del Trienio y perdiéndose desde entonces la pista del original. Richard Herr lo ha buscado con empeño, mas en vano; edita aquí la parte que ya viera así la luz, más el mencionado sermón: *Discurso sobre la Constitución que dixo Don Juan Antonio Posse, Cura Párroco de San Andres, Diócesis de Leon, al publicarla á su pueblo en veinte y nueve de noviembre de mil ochocientos doce*, La Coruña 1813, que ya fuera también reedición

La reproducción ya en sí merece celebrarse. No se agotan las obras publicadas de Posse; sus mismas memorias ya nos informan de que editó artículos en periódicos como *Ciudadano por la Constitución*, en parte para defenderse de ataques a su sermón, que aquí no se hace por recoger; las actas de su posterior proceso, tras 1814, en las que obrarían sus papeles, tampoco se han localizado; de él no falta en las propias memorias un relato bien expresivo. No hay índices, de nombres ni de materias. Nada libra entonces del provecho, y el placer, de la lectura. El comentario de Herr ya es también voluntariamente somero, como las notas; se centra el uno y van las otras en las Memorias, más vivas desde luego que el Discurso

Es la vida de un gallego que para llegar a la cultura escrita abandona pronto Galicia (p. 18).

Allí no había cartillas impresas, de manera que en mi país primero se aprende a leer lo manuscrito que lo impreso.

Llega al castellano y al latín por medio principalmente de su bachillerato en la Universidad de Valladolid; a sus posiciones políticas, a través de su misma carrera eclesiástica. Ya en la Universidad no todos los maestros eran escolásticos de tendencia ultramontana (p. 28):

Algunas veces, en sus ausencias, sustituían la cátedra otros de diferentes opiniones que estaban por las máximas Galicanas.

Y mayores novedades allí vivió (p. 45):

Durante mis últimos años de mi estudio en Valladolid llegaron muchos franceses escapados de la Revolución o que la habían visto; algunos estropeados o heridos, y todos ponderando los funestos efectos de ella. Unos acriminaban la irreligión de los revolucionarios y su odio al Rey; otros decían que quitaban los curas y los frailes. Sin yo formar juicio de nada, oía sus relaciones con una suerte de asombro y ocupado con estas ideas.

Aprendió francés, al menos para leerlo, directamente sobre libros (p. 79):

Fue tanta mi aplicación que en breve los traduje todos, aunque con muchas faltas. De aquí pasé a los deberes y derechos del ciudadano, cada vez mejor, hasta llegar a términos que ninguno por allí traducía el francés como yo.

Así llegaría a su sermón sobre Cádiz, alcanzando entre otros penosos honores el de encontrarse censurado en tan buena compañía como la de un Martínez Marina (p. 227):

En Santiago había visto fijada a las puertas de la biblioteca una lista de varios libros prohibidos que me sorprendió, incluso la de mi discurso, obras de Marina y otros.

En el discurso ensalzaba ciertamente la Constitución, pero, siendo sermón, con sus peculiaridades. Abomina de los tiempos bien recientes en los que tanto la teología como el derecho andaban pervertidos (pp. 257-258):

Idólatras de las monarquías de los papas y de las de los reyes (la mayor parte de los teólogos) buscaban y encontraban razones para defender cuanto usurpaban. Por más excesivas que fuesen sus pretensiones y contrarias al bien de sus súbditos; por más que Jesucristo fundase en su iglesia un gobierno libre; por más que fuese republicana la policía de los hebreos; por más que Dios dixese a los judíos por Samuel que no los oiría en sus oraciones por el delito de pedirle rey, con todo tenían razones para defenderlos.

Es otra la teología que la Constitución asume, ya por imperativo precisamente de religión (p. 267):

La Constitución prohíbe el despotismo religioso que la misma religión aborrece; y estableciendo la libertad civil (art. 371), establece la religiosa.

La religión le presta su garantía a la misma Constitución, confluyendo sus cualidades (pp. 272-273).

Esta santa religión nos manda obedecer y observar la Constitución en todos sus 384 artículos que comprende (...) El juramento que váis a hacer, y con que habéis de sancionar este Código, sólo añade un acto más de virtud si le observáis, o un sacrilegio si quebrantáis algún artículo de ella.

La misma patria en guerra ya resulta amparada por Constitución tanto como por Religión, conjuntamente (pp. 265-266)

El artículo doce de la Constitución establece que la religión católica, apostólica, romana, única verdadera, es y será la religión de España, y como un resorte el más firme para seguridad de nuestra patria.

Es religioso el sentimiento constitucional, como el patriótico que con él, y con la España así constituida, se identifica (p. 262):

Nadie sabía quien era español. Ahora ya somos españoles los gallegos, andaluces, castellanos, etc.

Como gallego, todavía en todo caso especialmente celebra el decreto de señoríos que, atacando a un feudalismo bien arraigado en su tierra, ha precedido a la Constitución. Como eclesiástico, todavía también reclama muy particularmente algo (p. 269).

¿Cuánta (gloria) deberá provenir a nuestros representantes, si después de haber establecido la libertad civil entre los españoles, establecen también la religiosa, aboliendo la inquisición, tribunal indigno de una nación libre?

Algún requisito todavía quedaba para una definitiva comunión entre Constitución y Religión. Cosas ya había también irremediables o que debían constitucionalmente aceptarse en aras de la operación (p. 274).

Dexa (la Constitución) a los reyes su inviolabilidad, a los eclesiásticos sus privilegios, y a los señores sus propiedades bien o mal adquiridas

La cuestión de la propiedad especialmente parece dolerle, aunque se resigna (p. 261):

Justamente, pues, nuestros representantes abolieron los señoríos antes de entablar la grande obra de nuestra Constitución. Por no dañar la propiedad de ningún individuo, que debe ser sagrada, no quitaron aquella enorme desproporción de fortunas que hacen el patrimonio de algunas familias y la miseria de todas las otras.

Por sus mismas memorias puede comprobarse cómo en su concepto casa la Constitución mejor con Religión que con Propiedad, cabiendo otro constitucionalismo que el de esta última extensión de lo sagrado (pp. 64-65).

Sólo un instinto natural y el ejemplo de tus modestas virtudes (de su primera parroquia, Llánabes) me han hecho conocer que la igualdad que puede y debe haber es la de derechos, para ser gobernados por las mismas leyes y ser juzgados por los mismos tribunales. De ti he aprendido que la propiedad, acumulando poco a poco en un pequeño número de manos las heredades de todo un pueblo, deja a todos los demás en la indigencia (...). No te olvides de que tu suerte está cifrada en que las tierras sigan siendo comunes, y que al punto que esta comunidad te falte serás reducido a un desierto, en que sólo habitarán los buitres y las fieras.

Realmente creía en otro constitucionalismo que exactamente el liberal. Algún choque con la realidad ya le deprimiría. A la llegada del Trienio, se negó a volver a sermones constitucionales. Su mismo patriotismo ya quiere cambiar de sujeto (p. 249):

Por esta desconfianza y presentimiento de nuestra ruina escribí a La Coruña y a mi país para tratar de hacerse independiente, erigiéndose en República libre y separada de los demás, pues tenían todo lo necesario para poderse gobernar por sí mismos. Y en este caso podían hacerse confederados de los otros españoles, aliados natos de los ingleses y otras cosas de esta especie que entonces me ocurrieron.

No gustó esta propuesta y aun fue causa de que se me tuviese por loco en lo sucesivo y me vi precisado a recoger velas, no volviendo a hablar de ello

Y había método, como en la inhibición, en la locura. Había raíces; ya las propias memorias, considerando regularmente a Galicia *patria*, conecta especialmente con sentimientos de juventud. Había razones; lo que ya se estima como fracaso del constitucionalismo español produce este reverdecimiento, que no sólo la nostalgia alimentaba (p. 250).

De este modo fueron la enajenación de los bienes nacionales, que, debiendo repartirse igualmente entre los vecinos de los pueblos, donde los había, para que quedasen libres eternamente y comunes, como he dicho que son los de Llanaves, se los agregaron a los poseedores de vales Reales con el pretexto de extinguir la deuda inextinguible que cargaron a la nación, como si ésta la hubiera contraído. Así se iban haciendo grandes propietarios los Sierras, los Canejas y otros semejantes que serían estimables si se deshiciesen generosamente de estos vales en beneficio del bien público. Contra estas ventas de los bienes del clero clamaba todo lo posible, no porque no creyese conveniente sacarlos de estos poseedores, sino antes porque quedasen a la disposición de los pueblos, libres y comunes, enajenables y partibles con igualdad, y enseñarlos a la comunidad de los bienes y a que las demás propiedades fuesen sagradas

En este preciso punto, y tras lo de Galicia, quedó interrumpida la publicación del manuscrito; alguna explicación puede ya maliciarse. No perdamos la esperanza en que Richard Herr encuentre todavía la continuación.

B. CIAVERO

LA PARRA LÓPEZ, Emilio: *El primer liberalismo español y la Iglesia. Las Cortes de Cádiz*, Alicante (Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Diputación Provincial), 1985, XIV + 320 págs.

La construcción constitucional de las Cortes de Cádiz ya se sabe que recibe en materia religiosa las calificaciones literalmente más extremas; bien se le considera de un confesionalismo católico particularmente incompatible con el propio constitucionalismo, bien se le tiene de una irreligiosidad especialmente enemiga de la misma iglesia católica. Emilio La Parra aborda el asunto en interlocución con este último planteamiento, concerniéndose en problemas tan poco historiables como el de los sentimientos íntimos de nuestros padres fundadores, pero con un conocimiento de causa y con un tratamiento de efectos que ya de por sí traen la cuestión a sus términos.

Su punto constitucional de partida también es sabido: «La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra», rezaba el artículo 12 de la Constitución del 12. Su rotundidad ya era aparente, entre una soberanía legislativa que había de responder a sabiduría y justicia y una religión que a estas alturas se prestaba en el mismo mundo católico a más de una interpretación. La alternativa ya se planteaba entre diversas versiones de la propia religión católica, precisado como además estaba el Estado en construcción a contar con unas estructuras eclesiásticas que hasta el momento habían cumplido funciones políticas y que aseguraban una presencia efectiva en todas las poblaciones todavía impensable para la misma administración pública.

El motivo, a mi entender crucial, de que en el diseño gaditano se encierra una determinada versión, constitucionalmente funcional, de la religión vigente, se identifica y trata justamente por La Parra, con insistencia por su parte en sus raíces ilustradas. Sobre éstas no hay duda, y menos aún tras su aportación, pero me parece que una no menos cierta solución de continuidad peor a su vez se percibe. Referencias continuas de la obra de las Cortes de Cádiz en materia religiosa resultan aquí el Sínodo de Pistoia y la Constitución Civil del Clero, con tendencia a la equiparación; el constitucionalismo doceañista se situaría en la línea del regalismo más acendrado de la Ilustración acercándose a unas cotas similares a las de la Revolución Francesa. Ya la falta de una consideración específica de las referencias dificulta la apreciación de la novedad de una religión nacional en un proyecto de Estado, así como de la singularidad de su versión gaditana.

La Parra con su repaso de cuestiones, ofrece en todo caso sus pistas; así, apuntando en el capítulo de la desamortización: «Ahora no se solicita la venia

papal», o registrando el argumento de los derechos individuales, y por individuo además con experiencia norteamericana, en el del debate sobre la Inquisición. El contexto de la Constitución ya obliga; no deja de testimoniarlo otra publicación, menor, del propio La Parra: *La libertad de prensa en las Cortes de Cádiz*, Valencia 1984. Las coordenadas de la Ilustración otras eran; mas si la exposición se conduce todavía para tiempo de Constitución por unos cauces de alternativas religiosas de definición previa, como aquí esencialmente la del jansenismo, la misma entidad constitucional de la materia fácilmente se desdibuja.

El artículo 1.º del decreto abolicionario de la Inquisición, o creador de otros «Tribunales protectores de la fe», ya es expresivo de la forma como las propias Cortes entendieron el susodicho 12 de la norma constitucional: «La religión católica, apostólica, romana, será protegida por leyes conforme a la Constitución»; privaba ésta. Y las mismas Cortes se pusieron a la obra, con un resultado irregular y naturalmente incompleto que La Parra considera en sus apartados más directos, institucionales y económicos; no en todos, pues deja desafortunadamente al margen otros no tan indirectos para la propia Iglesia como el de la abolición de las jurisdicciones señoriales. Mas visión suficiente ya se aporta de la consecuencia de estas Cortes en el entendimiento constitucional de la materia religiosa.

Las Cortes asumieron el compromiso, o se hicieron con la competencia, pero no había sido éste el planteamiento inicial; antes se había previsto la convocatoria de un Concilio Nacional que, complementario de las Cortes, entendiéndose de la reforma religiosa. Afirma Antonio Mestre, prologando el libro, que su «aportación esencial» estriba en el «descubrimiento, análisis e interpretación» de dicha convocatoria; La Parra no pretende tanto; descubrimiento no hay, pero sí estudio con edición en apéndice de los correspondientes papeles; el interés ya es máximo. Se perfilaba una Iglesia Nacional en comunión de fe, que no de disciplina, con Roma.

La Constitución todavía dejaba margen para este otro planteamiento, con lo cual, ya que no hubo Senado con su parte eclesiástica, habríamos tenido Concilio junto a las Cortes de Cádiz, para mayor relieve constitucional de la problemática religiosa; pero el entendimiento que prevaleció del artículo 12, en cuanto a la misma competencia esencial de determinación de la sabiduría y la justicia también requeribles de la religión, cerraba la vía. Y una frustración no pocas veces en la historia resulta doblemente ilustrativa: de unas posibilidades y de unas limitaciones, constitucionales unas y otras para el caso. Las primeras resaltan más que las segundas en el análisis de La Parra.

Su obra ya ofrece base para que las cuestiones se centren, entrándose con mejor pie en una materia ciertamente tan vejada como ésta de la religión en la historia de nuestro constitucionalismo. Ya aquellas mismas posiciones extremas derivaban de la estricta incomprensión como meros objetos históricos de la religión, en una, o de la constitución, en otra; ya dependían de un concernimiento personal con el objeto de investigación que, en lo que a la religión toca, La Parra tampoco enteramente supera, aunque menos le lastra. También la confesión constitucional sin sensibilidad histórica es lastre para otros.

Una última observación. La obra, habiendo sido tesis doctoral, está bien confeccionada, con las virtudes propias del género, como su cumplido registro de

fuentes y bibliografía, y su solo vicio de las conclusiones; es el acabado para publicación, como suele lastimosamente ahora ocurrir en editoriales públicas, lo que más seriamente puede defraudar: prólogo de autoridad anunciando mediterráneo y título de portada que más todavía promete, *El primer liberalismo y la Iglesia*, sin otra especificación. No sé si el autor aceptaría el trato, pero el lector no lo merece.

B. CLAVERO

MARCUELLO BENEDICTO, Juan Ignacio: *La práctica parlamentaria en el reinado de Isabel II*, Madrid (Publicaciones del Congreso de los Diputados), 1986, X + 384 págs.

Miguel Artola, que dirigió este trabajo como tesis doctoral, anuncia en su prólogo que entramos en *terra incognita*, pues lo sería la de una *práctica política* de estudio especialmente descuidado por los juristas; incógnita al menos lo parece de partida para esta empresa, con su conocimiento muy remoto de una bibliografía comparada y su confinamiento entre las fuentes más inmediatas, pero no tanto pese a todo de salida, tras explorarse cuestiones que le son ciertamente interesantes.

Que tampoco son ni exclusiva ni totalmente las que el título promete; se considera más que la práctica parlamentaria, y no sólo por el preciso reflejo de la de otras instituciones, como particularmente el Gobierno, sino también por el añadido de una parte consagrada especialmente a la Corona. Y se considera menos; no se cubre el referido reinado, sino tan sólo los años 1834-1854, lo que ni siquiera en portadilla se advierte; se estudia también menos que la práctica parlamentaria por otras razones que irán surgiendo.

Demarcado el tema, ya es bastante lo que se ofrece, y de suficiente interés un estudio de las efectivas prácticas políticas de las principales instituciones centrales en contraste a menudo con las propias previsiones del ordenamiento vigente (incidentalmente, aquí siempre y de continuo las Constituciones y otras normas «previenen» cuando hacen previsión); así puede contemplarse la aparición de una práctica de voto de censura mediante vías u ocasiones como la de elección de la presidencia del Congreso o la de contestación al discurso de la Corona, o por otras reglamentariamente menos imprevistas; o puede analizarse la formación más decisiva de una práctica menos parlamentaria de delegación legislativa o de deslegalización de materias fundamentales, comenzándose por las presupuestarias.

Todo un capítulo se dedica al verdadero ejercicio, poco en efecto parlamentario, de la potestad legislativa; resulta del mayor interés, aunque pudiera echarse en falta una atención a las obras legislativas magnas que fueran los Códigos, de iter bien ilustrativo incluso de frustrarse, como entonces el civil, y no menos de sustituirse y de reformarse, casos del penal. Y si de normas superiores hablamos, tampoco Marcuello confiere un tratamiento diferenciado a los procesos constituyentes, o a la práctica política de la elaboración de Constituciones. Pesa una idea ya dada del constitucionalismo, como veremos.

Pero no es porque falte algún epígrafe, aun esencial, por lo que decíamos que la práctica parlamentaria no se cubre; es porque faltan cuestiones. No se sabe bien por qué el Senado tan sólo se considera para algún punto particular, cual el de la censura, como si no participara plenamente entonces de la institución parlamentaria; y más absolutamente se olvidan las Juntas vascas, ni siquiera recordadas para excluirlas, como si no tuviesen su práctica parlamentaria o como si no perteneciesen al país que se estudia. Es la práctica del Congreso, que al fin y al cabo becó y publica, la que como parlamentaria realmente se trata.

Y la misma práctica parlamentaria del Congreso debía ser más que la considerada, sobre todo si quiere responderse a la expectativa creada por los conceptos del prólogo que habrían dirigido la investigación. No sólo por sus relaciones con otras del Estado se define la práctica política de una institución; tampoco por su reglamentación particular de este mismo tipo de relaciones; hay más, sobre todo en un período de formación como éste. Existe así toda la problemática de dotación de personal y material o de constitución más permanente de la propia institución, no poco entonces significativa de las concepciones operantes sobre su entidad y su papel.

Podrían así verse temas como el de la secretaría o el de la propia administración parlamentaria (que trataba José Vicente Gómez Rivas en las I Jornadas de Derecho Parlamentario, publicadas también por el Congreso, en 1985), o el de la biblioteca (historiada por Vicente Salavert, con edición asimismo del propio Congreso, de 1983), para apreciarse lo que decimos. O véase tan sólo el muy expresivo capítulo I-3, y correspondientes documentos en apéndice, del libro de Salavert: una ley de 1838 liquidaba la Biblioteca de las Cortes por entenderse que nada servía a los trabajos parlamentarios; ya le debía haber interesado a Marcuello por ser un caso de legislación por iniciativa del propio Congreso, además para devaluarse. Y si de presupuestos se hablaba, ¿cómo olvidar la misma financiación de las propias Cortes?

Más el flanco débil de este estudio no sólo lo veo en la insuficiente cobertura que ofrece de su propio título de *práctica parlamentaria*; en este mismo concepto creo que se encierra el principal problema. El libro está planteado y desenvuelto desde el paradigma de un régimen parlamentario, aún balbuciente, entre cuyas categorías se determinan, analizan y solventan cuestiones. Poco le importa que su mismo arco temporal, aun no dilatado, fuese sumamente heterogéneo para una perspectiva constitucional, desde el Estatuto del 34 a la Constitución del 45, y que sólo la más precaria del 37 respondiese de algún modo a sus presunciones; el estudio lo refunde todo sin empacho.

Parámetros así anacrónicos resultan proyectados; un constitucionalismo ficticio para la época preside el estudio de sus prácticas constitucionales. Véase el análisis del iter normativo de la desamortización de Mendizábal, de por sí muy interesante, pero también violentado por su encuadramiento forzoso en los presupuestos de un régimen constitucional que no era el suyo, si alguno lo era bajo el Estatuto. Ya el descuido del Senado era bien sintomático del defecto. No son siempre los juristas quienes, en materia constitucional, acusan un sentido escaso de la propia historia.

El añadido de toda una última parte sobre la Corona, que se nos dice no figuraba en la tesis, ya puede venir de una constancia del defecto; sin este capítulo, ya más claramente resaltaría el sesgo de una imagen parlamentaria, todo lo problemática que se quisiese, de un primer régimen constitucional. Pero la agregación no lo remedia; ya entra por un concepto de «poder moderador», caro ciertamente a Artola, que no rinde suficientemente cuenta de la posición constitucional de una Corona que por lo pronto participaba tanto del poder ejecutivo como del legislativo. Que las mismas formas de su ejercicio práctico no llegaran además a concretarse, puede delatarlo el dato de que no adquiriera relieve o tratamiento propio la figura, constitucionalmente imprevista, del Presidente del Gobierno. El proceso político efectivo no siempre tampoco se capta.

Hubiera sido preciso sumergirse más resueltamente en la misma mentalidad constitucional de la época, que no es desde luego la de hoy; con un aparato ya muy selecto (confróntese la bibliografía sobre 1837 de la *Revista de Derecho Político* de la UNED, 20, 1983-1984, pp. 285-321, aunque ésta tienda a pecar de lo contrario), Marcuello ni siquiera realmente aprovecha la primera literatura constitucionalista española, que es precisamente de estos años y que el Centro de Estudios Constitucionales viene ahora reeditando. No habría ciertamente bastado, pero a veces la evidencia viene más por contraste de ideas que por choque de unos datos ya procesados mediante las propias categorías.

Pero el libro es incitante y sus cuestiones, básicas. De su misma iniciativa cabe felicitarse cuando efectivamente los juristas no la tienen mejor entre nosotros para estos esenciales temas.

B. CLAVERO.

PÉREZ MARTÍN, Antonio, ed.: *España y Europa, un pasado jurídico común*. Actas del I Simposio Internacional del Instituto de Derecho Común (Murcia, 26/28 de marzo de 1985), Murcia, Publicaciones del Instituto de Derecho Común, 1986, 774 págs. (índice selectivo de materias y autores citados en págs. 759-772).

Sobre el pasado jurídico común de España y Europa disertaron, según lo que promete el título de este volumen y del I Simposio del que procede, un conjunto de destacados especialistas en marzo del año pasado, y ahora aparecen dignamente publicadas sus ponencias. El mismo Antonio Pérez Martín, al que debemos agradecer el parto del Instituto de Derecho Común, figura como editor, y con todo merecimiento: por su capacidad de convocatoria, su diligencia en allegar recursos no siempre disponibles para fomentar especialidades tan poco 'rentables' como la nuestra, su sagacidad en la distribución de temas variados pero que se integran homogéneamente en un volumen de más de setecientas páginas, su laboriosidad —en fin— al preparar un excelente índice de contenido y realizar o

revisar traducciones ... disponemos de este hermoso libro que colecciona diez y ocho intervenciones de especialistas españoles (A. Pérez Martín, J. Lalinde Abadía, J. Ferreiro Alemparte, A. Iglesia Ferreirós, B. Clavero, A. García y García, J. Cerdá, M. Peset) y extranjeros (G. Dolezalek, H. Coing, W. Wagner, D. Tamm, F. Ranieri, D. Maffei, A. Gouron, A. Wolf, P. Lineham, R. MacDonald).

Tanta ciencia organizada, sobre todo cuando se trata de buena organización, es algo a lo que no estábamos muy acostumbrados; sería fácil incurrir en el tópico nacionalista razonando que la larga estancia alemana de Pérez Martín, la presencia incluso de varios historiadores alemanes en el Simposio y sus actas, domesticaron la componente ibérica de improvisación o alegría ejecutiva, pero el razonamiento parece indefendible. Y considerando la falta de rigor de los tópicos enfrentados a la ciencia nos situamos ya ante la más general consideración que formulará la crítica ante este libro. «la construcción de la nueva Europa ha de ser una obra común también de los historiadores del Derecho», anuncia Pérez Martín en la primera de las disertaciones publicadas (pág. 12), originariamente intervención de apertura del Simposio, subrayando la actualidad de esfuerzos científicos para el conocimiento del derecho *común* en los días de la adhesión hispanoportuguesa al mercado, también *común*, en que resulta agotada la idea de Europa; un derecho y un mercado *comunes* para el *orbis christianus* de vigencia clásica del primero, aunque hoy, y todavía en tiempos más modernos de aquel derecho, para un espacio geográfico cuyas reducidas dimensiones cuestionan semejante vocación universal, será consecuencia necesaria de la revolución burguesa, datándose así de manera precisa; pero un derecho *común* históricamente localizado —*ius commune*— con dificultad podrá fundamentar la ilusión o el compromiso europeísta. El lector supondrá concesiones a los problemas de organización, con lo que se cierra el círculo que describe el párrafo presente: la financiación del Simposio, aún la del mismo Instituto, al ser pública —al depender de organismos oficiales que unen la despreocupación por el destino de sus inversiones a la contingencia anecdótica con que aprueban las distribuciones de fondos—, obliga a esgrimir argumentos tan convenientes para el político como impresentables ante el científico; mas el lector teme que no se trata solamente de retórica. Si no opondré yo reparos a la afirmación de Pérez Martín según la cual «la historia del Derecho ha tenido la suerte o la desgracia de haberse constituido como disciplina jurídica autónoma en una época que podríamos calificar de nacionalista», siendo así «una historia del Derecho en gran medida artificial» (pág. 12), tampoco este autor, y con él la concepción toda del Simposio, quedarán libres de artificialidades: «de acuerdo con las realidades políticosociales del presente, en adelante deberíamos prestar más atención en la historia del Derecho a la orientación regionalista, autonómica y a la orientación europeísta, comunitaria, sin abandonar por ello la orientación nacionalista» (págs. 12-13), lo que Pérez Martín justifica «siguiendo el ejemplo de los fundadores de nuestra disciplina» (pág. 12), previa y oblicuamente acusados de *artificiales*; las páginas de Pérez Martín sobre la «importancia del Derecho Común» (págs. 16-18) desarrollan estos planteamientos; la búsqueda de razones para fundamentar la instalación en Murcia del Instituto que nacía con el Simposio (págs. 18-23), al ir más allá de su reconocida autoridad como experto en las fuentes del *ius*

commune y animoso editor de los textos hispánicos, se presenta excesivamente lejana de exigencias académicas.

Acaso, entonces, tras la retórica aparezcan vicios en la metodología; acaso estemos ante una determinada manera de entender y practicar la historia del derecho trivializada una vez más por la situación de presente. Así Gero Dolezalek: en sus «Observaciones sobre el desarrollo del derecho común hasta la época de Alfonso X el Sabio» (págs. 27-44), título por lo demás un tanto forzado en el intento de conceder plaza a la figura alfonsina en el séptimo centenario de su fallecimiento, el mito comunitario abre («En la actualidad nos esforzamos por reencontrar lo que los europeos tenemos en común. Diez estados de Europa han constituido una unidad, en la que pronto entrarán España y Portugal. En este caminar hacia la unidad política se debería recordar la unidad jurídica pasada que unió antiguamente a los países de Europa, es decir, el *Ius Commune*») y cierra («Ojalá que la cultura jurídica vuelva a ser de nuevo totalmente europea, como lo era entonces») la erudita disertación; así también Helmut Coing al precisar, muy a grandes rasgos, «La contribución de las naciones europeas al derecho común» (págs. 45-61), necesariamente pecando por exceso (del «jurista belga Christynen» se nos habla en pág. 57) y por defecto (ausente de la comparación de «contribuciones» nacionales territorios no estatales, como Cataluña). La aceptación apresurada de la idea de Europa en la historiografía jurídica contemporánea ha roto, lo acepto gustoso, un trasnochado nacionalismo que llevaba a identificar la historia del derecho con la descripción de fueros y poco más; ha supuesto también la aparición de obras e instituciones de envergadura —entre todas, el Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte— que han renovado y estimulado nuestros conocimientos; pero conviene extremar la reflexión para evitar —retomo expresiones de Pérez Martín— sustituir unas artificialidades por otras. Aunque las segundas sean preferibles, al menos para mí, a las primeras.

Ya anuncié la diversidad como rasgo común a los diez y ocho trabajos que integran el volumen, pero ahora conviene mayores precisiones. Algunos son, propiamente, escritos de presentación (Antonio Pérez Martín: «Planteamiento y objetivos del Simposio Internacional 'España y Europa, un pasado jurídico común'», págs. 11-26), no exentos, lo hemos visto, de interés metodológico; en otro caso estamos ante conferencias o disertaciones de naturaleza similar (Helmut Coing, antes citada; Jesús Lalinde Abadía, «El Derecho Común en los territorios ibéricos de la Corona de Aragón», págs. 145-178); en ocasiones las aportaciones se presentan como informes de trabajos en curso (Domenico Maffei, «Manuscritos jurídicos napolitanos del Colegio de España y sus vicisitudes entre los siglos xv y xvi», págs. 119-129; Gero Dolezalek, de obra anteriormente recogida; Robert MacDonald, «El Espéculo atribuido a Alfonso X, su edición y problemas que plantea», págs. 611-653; Antonio García y García, «La tradición manuscrita de las Siete Partidas», págs. 655-699); finalmente, el resto de los escritos pueden considerarse como monografías, de variable amplitud temática y contenido (Wolfgang Wagner, «Las Constituciones del emperador Federico II para el reino de Sicilia y la legislación de Alfonso el Sabio», págs. 63-79; Ditlev Tamm, «Un paralelo nórdico de la obra alfonsina: la legislación del rey Valdemar II de Di-

namarca», págs. 81-100; Filippo Ranieri, «El estilo judicial español y su influencia en la Europa del Antiguo Régimen», pp. 101-118; André Gouron, «Las relaciones jurídicas entre Cataluña y Provenza en el siglo XII», págs. 131-143; Jaime Ferreiro Alemparte, «Acercamiento mutuo de España y Alemania con Fernando III y Alfonso X el Sabio», págs. 179-222; Armin Wolf, «Derecho electivo y sucesión hereditaria en los reinos y en el Imperio de Alfonso el Sabio», págs. 223-257 más una tabla sin paginar; Peter Linehan, «Pseudo-historia y pseudo-liturgia en la obra alfonsina», título que difiere del recogido en los encabezamientos de las páginas, más hermosos: «Liturgia soñada y pseudo-historia en la obra alfonsina», págs. 259-274, Joaquín Cerdá «Principios del Derecho Común en los derechos locales del antiguo Reino de Murcia, 1245-1284», págs. 701-726; Mariano Peset, «Los fueros y privilegios alicantinos de Alfonso X», págs. 727-758). Quedan aún dos estudios de difícil clasificación, no en último lugar por tener una extensión muy diferente a la de los anteriores: Aquilino Iglesia Ferreirós, «La labor legislativa de Alfonso X el Sabio», págs. 275-599 (el lector sepa que no cometo aquí errata), y Bartolomé Clavero, «Signo social y secuela política de la legislación alfonsina. Planteamientos manualísticos», págs. 601-610; uno y otro, además, íntimamente relacionados, pues las páginas de Clavero recogen, con la inexcusable remodelación, las ideas de su intervención oral tras la exposición de Iglesia y con ocasión de un debate cuyo atractivo no hará falta describir por la personalidad científica de los especialistas implicados.

Temas variados, pero recurrentes: de nuevo el *ius commune* como coordenadas que sitúan la mayoría de, si no todos, los trabajos publicados, agotado en ese «pasado jurídico común» a España y Europa según la convocatoria y rótulo del Simposio. *Ius commune* en la Península Ibérica —ausente, no obstante la vocación comparativa o integradora del Simposio todo y varias de las ponencias, el territorio de Portugal— aunque concretado en la personalidad, la época y las leyes de Alfonso X, que de Murcia se trataba y dentro aún del centenario de su muerte; al menos diez de los trabajos son de asunto alfonsino, con lo que el libro editado por Pérez Martín resulta la principal aportación de los historiadores del derecho a ese centenario, y, desde ahora, obra de cita obligada en la ya abultada discusión sobre la política legislativa del rey Sabio.

Si el título del Simposio, aceptado en las actas, encierra, como hemos visto, *artificialidades* en los planteamientos científicos, la constatación anterior revela ese título insuficiente, de nuevo: que de una colección de monografías alfonsinas dispone el lector, no se deduce del mismo necesariamente, guiándole tan sólo el lenguaje de los iconos: la reproducción, así no inocente, de una miniatura de Alfonso con atributos y leyenda imperiales en la colorida portada del libro.

Conviene reflexionar sobre el doble argumento del Simposio, *ius commune* y Alfonso X, pues la combinación, junto a sus muchas ventajas, adolece de carencias. Algunas ponencias se limitan a lo primero, a pesar —a veces— de concesiones de título (Gero Dolezalek, Helmut Coing, André Gouron, Jesús Lalinde), mientras otras, prescindiendo de Alfonso como protagonista simbólico de la recepción, van referidas a diversos aspectos de la historia alfonsina (Jaime Ferreiro, Armin Wolf, Peter Linehan); las que estudian, más bien desde el ángulo de la llamada historia de las fuentes, la obra de Alfonso X como capítulo poco menos que

esencial de la recepción peninsular del *ius commune* (Aquilino Iglesia, Bartolomé Clavero, Robert MacDonald, Antonio García y García), en ocasiones insistiendo en comparaciones que —desde luego— prometía el enunciado del Simposio (Wolfgang Wagner, Ditlev Tamm), se ciñen, con violencia a ese enunciado, a un momento demasiado germinal y específico de la larga *historia iuris communis*, si bien no falta alguna compensación en las propias actas del Simposio (Filippo Ranieri, Domenico Maffei). Una visión del *ius commune* como fenómeno de origen medieval y operante, en la práctica de nuestra docencia y nuestra investigación, en la Edad Media es, aún, demasiado habitual, aunque autores como Bartolomé Clavero o António M. Hespanha hayan contribuido poderosamente a superarla; mas de su operatividad, acaso por la atracción que ejercía el centenario alfonsino, el Simposio de Murcia es excelente ejemplo.

Algunas de las pretendidas carencias, en la medida en que lo son simplemente en relación a los propósitos confesados o supuestos del Simposio, pueden constituir virtudes, que no quisiera desconocer el autor de estas líneas. Sobre todo destacan los trabajos de Jaime Ferreiro Alemparte y Armin Wolf, no referentes al *ius commune* pero ilustrativos, y porque cubren lagunas de nuestros conocimientos como historiadores del derecho los festejaremos, del complejo mundo cultural de la corte de Alfonso X (evocado, en sus conexiones con Alemania, por el primero) y de las bases jurídicas y políticas de las pretensiones de ese rey al trono imperial (ponencia del segundo). Por lo demás, las limitaciones de contenido de los estudios eruditos sobre las fuentes (en general, Gero Dolezalek; en relación con las alfonsinas, Robert MacDonald y Antonio García y García), son ampliamente compensadas cuando, como es el caso, los esfuerzos de sus autores han desembocado en preparar la base necesaria para disertaciones de mayor enjundia.

* * *

Tan numerosas las contribuciones al Simposio y, muchas de ellas, tan ricas de contenido, es prácticamente imposible dar cuenta cumplida de sus términos. De las páginas antecedentes ha obtenido el lector una idea global de las actas, y, convencido seguramente de su importancia, no evitará el estudio directo de las mismas. En ese entendimiento, me limitaré a mencionar algunos trabajos de atractivo especial y a comentar ciertos aspectos de contenido.

De los más afectados por el espíritu europeísta, un conocedor tan reputado de los manuscritos medievales del *ius commune* como Gero Dolezalek siempre tiene algo que enseñar; los escrúpulos de método no impiden el aprovechamiento de su muchas experiencia. Dolezalek comienza por precisar, ofreciendo explicaciones que al lector parecerán a veces demasiado simplistas, el contenido del *ius commune* en los siglos XII y XIII: la separación entre los estudios y los estudiosos de *canones* y de *leges*, pues Irnerio, *magister artium* y no teólogo, «por añadidura fiel al emperador y enemigo del Papa» (pág. 29), comenzó a glosar los textos romanos prescindiendo del saber de los canonistas. Seguidamente Dolezalek quiere responder a la cuestión de la difusión del *ius commune* en el siglo XIII, concluyendo acerca de la existencia de «dos oleadas distintas» en la historia de la

recepción una primera, rápida, en el seno de la Iglesia, y una segunda, que afectó a la praxis jurídica laica, más lenta y necesariamente conectada con el acceso de «hombres cultos» a los «puestos de la administración de los reinos y principados y de las ciudades» (págs. 31-32). Es evidente que Dolezalek ofrece planteamientos y respuestas clásicos en el estudio de la recepción, aceptando el papel de personalidades individuales, como Irnerio, en la orientación de los conocimientos jurídicos y tesis harto generales —«la difusión (del *ic*) a través de hombres cultos que poseyeron posiciones clave»— en defecto del análisis que deberá respaldarlas, pero sus páginas han de aceptarse en lo que son: una apretada síntesis apoyada en muchos años de trabajo directo con las fuentes. Por eso es la parte final de la ponencia, la relativa al grado de elaboración de glosas y otras obras jurídicas hasta mediados del siglo XIII, la que más interesará al especialista, dependiendo estrechamente de propias investigaciones: el menor tecnicismo de los textos canónicos, difundidos además con rapidez y sin una previa interpretación doctrinal, ocasionaría «antes de la fijación del siglo XIII» —antes de Inocencio IV, Bernardo Parmense, el Hostiense y Bartolomé de Brescia— «una gran diversidad de opiniones», reflejadas en el elevado porcentaje de glosas originales de algún manuscrito aislado (dos tercios de las glosas al Decreto, estudiado, por Rudolf Weigand en colaboración con Dolezalek, ofrecen una muestra autorizada de ello), en tanto las fuentes romanas serían objeto de estudio más uniforme, como revela el porcentaje menor de glosas originales y la literatura misma de *Disensiones dominorum*. Ahora bien; explicar, sobre esa base, la diferente difusión de manuscritos romanos y canónicos en las bibliotecas actuales (págs. 36 y ss., con mapas de las págs. 38 y 39), parece violento: difícil de aceptar la afirmación de Dolezalek según la cual «los lugares en los que hoy se conservan manuscritos jurídicos del siglo XII, coinciden en gran medida con las mismas regiones geográficas en las que ya en la Edad Media también se encontraban los manuscritos» (pág. 37), la presencia de instituciones eclesiásticas por todo el *orbis christianus* justificaría en mi opinión la mayor repartición geográfica de los manuscritos canónicos.

Si Dolezalek se ocupa de un momento clásico del *ius commune*, analizando a grandes trazos fuentes manuscritas, Wagner y Tamm, lo sabemos ya, optaron por la proyección alfonsina del Simposio, ofreciendo paralelos —así, expresamente, el segundo de los autores citados— extrapeninsulares de la legislación del Alfonso X Acostumbrados normalmente a cotejar la política legislativa de Alfonso, ocasionalmente también sus resultados —los textos que la protagonizaron—, con acontecimientos de la historia jurídica peninsular, en especial la actividad de Jaime I, la lectura de las páginas de Wagner y Tamm sirve para enriquecer nuestros habituales planteamientos. Wagner, con todo, logra más una presentación general y una aportación bibliográfica de y sobre el *Liber Augustalis* de Federico II que avanzar en el estudio de su hipotética relación con el Fuero Real; la confrontación de pasajes similares es demasiado débil (cfr. págs. 76-77) como para pronunciarse, según hace Wagner (pág. 79, conclusiva), a favor de la utilización del *Liber* siciliano por el rey de Castilla, aparte de que la lectura detenida de las actas del Simposio obligará a este autor a matizar afirmaciones (pág. 75 «el Espéculo se articula en cinco libros», o en la misma pág. 75, y

recogiendo a José Antonio Maravall. «Se ha considerado a Alfonso el Sabio como vencedor de una sociedad feudal en favor de una sociedad organizada estamentalmente», lo que yo retrasaría hasta otro Alfonso, pero de mediados del siglo XIV) no siempre bien fundamentadas. Desde luego las comparaciones siempre serán fructíferas, aunque permitan tan sólo reflexionar mejor sobre lo que conocemos; de ahí la utilidad de repasar también el artículo de Tamm, centrado en la tarea legislativa de Valdemar II —*legifer*— de Dinamarca. Del trabajo de Tamm resaltaría, sobre todo, el dato de redacciones de leyes en lengua danesa a fines del siglo XII, no aclarado suficientemente todavía (no lo hace, aceptando la hipótesis más tradicional de los filólogos, Robert MacDonald, en págs. 631-632, aunque para el autor se trate de una respuesta encontrada «fácilmente») el temprano uso del romance en la legislación castellana del siglo XIII; resaltaría además, por ser un «paralelo» que, apartado de Alfonso X y su obra, sin embargo interesa a la legislación de Aragón, la figura del obispo de Lund Andreas Sunesen, redactor de una versión latina del derecho de Escandia (*Libert Legis Scaniae*) a comienzos del siglo XIII, que evoca al historiador del derecho español la personalidad y actuaciones de Vidal de Canellas. Pero fue ya Alfonso García-Gallo quien, interviniendo en la discusión que siguió la exposición oral de la ponencia, recordaba la principal característica de las líneas paralelas: discurren juntas y nunca llegan a encontrarse.

Uno de los más breves, pero para mí uno de los más sugerentes, es el trabajo de Filippo Ranieri sobre el estilo de las decisiones judiciales. Sugerente, en primer lugar, por ofrecer en sus notas una selecta bibliografía extranjera aquí frecuentemente olvidada, siendo así que se refiere a un aspecto de importancia para conocer la cultura jurídica en que nos situamos y las bases mismas de comprensión de una abundante práctica. Partiendo de la hipótesis de que «el estilo de la sentencia es ... un reflejo de la cultura jurídica de que procede», Ranieri se ocupa en fijar los modelos mejor identificables en la Europa continental (francés, italiano, alemán. págs. 104-106) en orden a concluir de la comparación «la existencia de una tradición común por encima de las actuales diferencias»; la obra de Juan de Matienzo, *Dialogus relatoris et advocati pntiani senatus*, 1588, fue «la primera en la que se expuso esta técnica del *ars referendi*» (pág. 110); en el siglo XIX se produjo una «nacionalización del estilo judicial» (págs. 113 y ss.), que Ranieri documenta también en relación a España de la mano de García Ormaechea (págs. 117-118). Conviene, en mi opinión, desarrollar el estudio de Ranieri e investigar el estilo judicial español en el siglo XIX, dando, gracias a este autor y no obstante las limitaciones de su trabajo, por conocidos los antecedentes; el estudio de la forma de las sentencias emanadas en los diversos ámbitos jurisdiccionales —en qué se parecen y en qué difieren las sentencias civiles, penales y de comercio— tendrá un indudable interés para reflexionar sobre jurisdicciones orgánicamente separadas. Me permito avanzar al lector una impresión particular, escasamente fundamentada como para elevarla a hipótesis: la jurisprudencia de comercio constituye, con su ejercicio por jueces comerciantes, un caso particular, en el que el dogma liberal de un Estado como instancia neutral de resolución de intereses sociales contrapuestos, cede ante la imparcialidad imposible

de los jueces mercantiles; el análisis del estilo judicial mercantil tal vez determinará los contornos exactos de la afirmación anterior.

Existe un bloque bastante uniforme de trabajos, todos ellos referidos a la legislación alfonsina. Fundamental, y no sólo por su inusitada extensión, el de Aquilino Iglesia, los de Robert MacDonald y Antonio García y García se ocupan de precisar las necesarias cuestiones de tradición de los textos de Espéculo y Partidas, en tanto Bartolomé Clavero ofrece importantes elementos de reflexión sobre el «signo social» de esas obras, situando la discusión, del habitual terreno de la filología, en el menos transitado, y asombra, camino de la historiografía jurídica. Permítame el lector finalizar esta ya demasiado larga reseña ocupándome de estos cuatro trabajos, remitiéndole, en lo que hace a los restantes, antes relacionados, al manejo directo de los mismos sin otra referencia por mi parte que la ofrecida al clasificar y enjuiciar generalmente las ponencias presentadas al Simposio.

Bajo el título «La labor legislativa de Alfonso X el Sabio», Iglesia publica más de trescientas páginas, muy parcas en notas, donde desarrolla el «esquema interpretativo» que viene siguiendo —ya desde la época de elaboración de su tesis doctoral sobre la traición: pág. 276— en el estudio de los textos, y sus relaciones, de las principales obras legales de Alfonso X: Fuero Real, Espéculo y Partidas. El autor anuncia que las esperadas ediciones críticas de estas obras, algunas presentadas por quienes vienen trabajando en su factura (así, Robert MacDonald a propósito del Espéculo), pudiendo alterar ese «esquema» sustancialmente no exonera de la necesidad de su diseño; ofrece, en consecuencia, el propio, apoyado además en una copiosa producción monográfica anterior que le ha convertido en uno de los principales estudiosos del derecho alfonsino.

Copiosa producción, ahora multiplicada. Y antes de entrar en lo cualitativo, no será indiferente insistir en lo cuantitativo de los trabajos de Iglesia. El mismo autor parece acusar la repercusión escasa de éstos en la nota inaugural de su disertación, observación un tanto más clara en la nota final de pág. 599, donde invita, para escapar a versiones demasiado inexactas de su pensamiento, a la consulta directa de la obra ya publicada; pero pudiera ser que el formato de las publicaciones de Iglesia no venga precisamente a facilitar esa consulta y aquella repercusión: no me resisto a la tentación de recordar la divertida visión de la corte alfonsí que presentaba no hace mucho Juan José Rey (*Revista de Occidente*, 43, diciembre 1984, 166-183) analizando el estado de ánimo de quienes, en ella, padecían la espaciosa recitación de las Cantigas.

«La labor legislativa de Alfonso X»: propiamente, varios trabajos bajo único título. Iglesia perfila en págs. 282-283 sus contenidos: una primera parte exponiendo su «idea acerca de la labor legislativa alfonsina», formulada dogmáticamente pues se trata de la redacción de la exposición académica que el autor declara realizar a sus estudiantes, seguida sin embargo de un «capítulo de dudas» (págs. 284-463); una parte segunda que contiene «una exposición crítica del planteamiento originario de García Gallo» (págs. 463-512); terminando con una tercera «dirigida a señalar que las afirmaciones básicas de García Gallo —Gregorio López realizó una labor de acumulación y desvirtuación al mismo tiempo del texto alfonsino, mediante el recurso a autores posteriores al momento

de la redacción de las Partidas; la Academia no se atrevió a desautorizar el texto de la edición de Gregorio López y finalmente Martínez Marina, consciente de las grandes divergencias existentes entre los diferentes manuscritos, prefirió ocultar la verdad, antes de descubrir que durante siglos se había reconocido como auténtico un texto resultado de una cierta mixtificación— no encuentran más apoyo que la autoridad del Prof. García Gallo» (págs 512-599). Crítica y exposición de la concepción personal de la política legislativa de Alfonso X como contenidos esenciales de estas páginas, justificándose así determinados aspectos formales que pueden llamar la atención del lector: escasez de notas y referencias frente a la inclusión frecuentísima de pasajes legales o párrafos del autor que se discute en el cuerpo mismo de la ponencia.

Son tan repetidas, y seguramente justificadas, las quejas de Iglesia sobre la deformación de sus planteamientos por parte de los usuarios de su obra que temo presentar ahora un resumen de los mismos, no en último lugar porque todo resumen resulta distorsionador; pero me consuelo pensando que, una vez publicada, la obra rompe el cordón umbilical que la unía al autor, cuya opinión, no sólo etimológicamente *autorizada*, es sin embargo una de las posibles que permite formular el dato de la publicación. Los escritos científicos generan relaciones dinámicas, tanto más cuando son ricos e importantes de contenido

Enfrentado al problema de la creación del derecho en la Edad Media, Iglesia acepta la visión de Fritz Kern. para la sociedad altomedieval, el derecho es una creación divina ante la que sólo cabe, por parte del hombre, una tarea de descubrimiento e identificación; los actos que hoy calificaríamos de legislativos—entendiendo el término como creación jurídica, en un sentido amplio— fueron, a los ojos de los contemporáneos, simplemente momentos de declaración, restauración o discreta reforma de un viejo y buen derecho creado por la divinidad. Con algunos precedentes, la actividad de Alfonso X supone la reivindicación definitiva de la facultad de crear derecho reconocida al monarca, esto es, el triunfo del universo jurídico nuevo identificado con el fenómeno de la Recepción. Esta idea fundamental engloba necesariamente otras, que sólo la necesidad de facilitar su conocimiento obliga ahora a distinguir. la unificación jurídica de los territorios sometidos a Alfonso y el impulso de la renovación jurídica en los mismos. Fuero Real, Espéculo y Partidas serían las piezas en que descansaba esta política de creación real del derecho, predominando en FR el establecimiento del monopolio legislativo a favor del rey, la finalidad de unificar jurídicamente los reinos alfonsino en Espéculo y la tarea de renovación jurídica en Partidas (cfr pág 292).

Así se explica que FR fuese objeto de concesión especial a Castilla y las Extremaduras, es decir, a zonas diferenciadas jurídicamente por el arraigo de la llamada creación libre de derecho mediante fazañas y la autonomía normativa municipal (cfr. pág. 291, pág. 307, pág. 309), sin que a esta vigencia generalizada, que autores antiguos y modernos (cfr. Bartolomé Clavero en *Historia. Instituciones Documentos* 3, 1976, 146-147 y 164-165) no dejaron de apuntar, obste la concesión municipal de dicho Fuero (cfr de nuevo pág. 309). También «se comprende . que al mismo tiempo que se realizaba el Fuero Real, se estuviese realizando una obra más ambiciosa, dirigida a consolidar el monopolio legislativo, pero dirigida a alcanzar al mismo tiempo la unificación jurídica y a proceder a

una renovación profunda del derecho, acorde con la política planteada. Esta obra, donde Alfonso X pensaba culminar su tarea, es la que conocemos hoy con el nombre de *Espéculo*» (págs. 310-311). Desarrollando estas ideas, Iglesia insistirá en los rasgos diferenciales de *Espéculo* frente a FR (págs. 316 y ss.), probablemente profundos, pero en esas páginas diseñados con trazos muy débiles como para sustentar satisfactoriamente sus hipótesis; no veo inconvenientes en admitir que las diferencias entre los prólogos de FR y *Espéculo* —el silencio en el de esta segunda obra sobre los albedríos de los hombres, no obstante se mantenga la referencia a las hazañas— revelan finalidades distintas para textos insertos dentro de la misma línea política (cfr. págs. 311-312), mas las diversidades sistemática y de contenido en los libros iniciales de FR y *Espéculo* me resultan poco decisivas; vincular la labor de renovación jurídica a los libros cuarto y quinto del *Espéculo*, «donde el proceso romano-canónico ha sido ampliamente recibido» (págs. 331-332), tampoco parece fundamental cuando estamos perfectamente informados de la naturaleza esencialmente canónica del proceso en el Fuero Real (cfr. Jesús Vallejo en AHDE 55, 1985, 612-644, 644-653).

¿Y las Partidas? Iglesia entiende que *Espéculo*, la obra de Alfonso X destinada a actuar la unificación y la renovación del derecho en los reinos, quedó interrumpida bruscamente por el fecho del Imperio cuando llegaron a Soria los enviados de Pisa, ofreciendo al monarca castellano-leonés la corona imperial, comienza (1256) la elaboración del tercer libro jurídico alfonsino (cfr. pág. 332). El autor aclara, probablemente para ahuyentar esas interpretaciones torcidas de que ha sido objeto, que «no se trata de afirmar que las Partidas fuese una obra realizada para el imperio sino una obra realizada para los reinos castellanos en atención al fecho del imperio» (pág. 332). Si el *Espéculo* fracasó porque surgieron las Partidas, no hay dificultad en reconocer la identidad de planteamiento que manifiestan estas dos obras: sus prólogos, aun con «diferencias evidentes», reflejan «un clima mental semejante» (pág. 337), e idéntica consideración cabe realizar tras el análisis de los respectivos primeros libros (págs. 338 y ss.), no obstante ocasionales matizaciones (cfr., por ejemplo, pág. 340 ó pág. 358).

Prescindo por ahora de otros aspectos del trabajo de Iglesia para realizar alguna observación. Primera: la aceptación de la concepción de Fritz Kern sobre el viejo y buen derecho altomedieval es, ya lo destaqué e Iglesia insistentemente lo reconoce (cfr. pág. 285, pág. 287, pág. 295, pág. 320, pág. 357, pág. 461), punto de partida para la comprensión tanto del panorama de la creación del derecho en la Alta Edad Media como de las transformaciones que, referidas a esa creación, tienen lugar a partir del siglo XIII y que explican globalmente la política jurídica de Alfonso X; pero así se establecen unas bases que no todos llegaremos a compartir: no se trata de recordar que la lúcida visión de Kern, tan fructífera para la investigación posterior como acredita su conversión en recurrido tópico historiográfico, ha sido objeto modernamente de profundas revisiones (cfr. R. Sprandel en *Savigny-Zeitschrift*, Kan. Abt., 48, 1962, 117-137; Karl Kroeschell en *Vorträge und Forschungen*, 12, 1968, 309-335; Gerhard Koblér, *Das Recht im frühen Mittelalter Untersuchungen zu Herkunft und Inhalt frühmittelalterliche Rechtsbegriffe im deutschen Sprachgebiet*, Köln-Wien, Bohlau, 1971; últimamente, Dieter Wyduckel, *Ius Publicum Grundlagen und Entwick-*

lung des Offentlichen Rechts und der deutschen Staatsrechtswissenschaft, Berlín, Duncker & Humblot, 1984, págs 43 y ss.), obligando de esta forma a una reflexión crítica, sino de descender al terreno de lo concreto como vía de comprensión de una política legislativa que une a múltiples problemas de historia de las fuentes caracteres de lucha por el poder en un momento y una sociedad determinados. El idealismo de Kern, asumido por Iglesia, puede no ser la guía mejor para captar los términos de esa lucha o conocer, según la titulación que da Clavero a sus páginas en el libro que se reseña, el «signo social y la secuela política» de unos textos normativos de historia tan accidentada. Y así me permito formular una segunda observación: tal vez por su actitud idealista, el «esquema» que ofrece Iglesia en orden a la comprensión de la obra legislativa alfonsina parece resentirse en especial al señalar las relaciones entre Espéculo y Partidas, o, si se prefiere, a la hora de justificar la no finalización del Espéculo por el inicio de la redacción de las Partidas. Sabemos ya que las Partidas serían «una obra realizada para los reinos castellanos en atención al fecho del imperio» (página 332), lo que Iglesia perfila cuando en pág. 456 escribe que «Alfonso X no quiere hacer una ley para el imperio, sino una ley para sus reinos, pero digna de un emperador». El rigor que he aprendido por la lectura, desde hace años, de la producción científica de Iglesia me lleva a exigirle una mayor precisión: ¿qué debemos entender por leyes dignas de emperadores? La aparente respuesta de pág. 455 necesitaría en mi opinión ese deseado rigor: «Pienso que Alfonso X, para ganar méritos en sus aspiraciones a la corona imperial, tuvo que cambiar los planes legislativos originariamente establecidos», escribe allí Iglesia, razonando que «quien quiere aspirar al imperio, quien quiere ser emperador, no puede realizar una obra legislativa donde el derecho del imperio no aparezca recogido. De aquí que abandone la redacción del Espéculo, basado en los mejores fueros de León y Castilla, aunque también en el derecho común, y acometa la redacción de las Partidas, basadas en los dichos de los santos y de los sabios»; aunque, desarrollando esta explicación, además de matizar otras afirmaciones de las que sólo recordaré la relativa a los libros cuarto y quinto del Espéculo «donde el proceso romano-canónico ha sido ampliamente recibido» (págs. 331-332), habría que aportar la prueba diabólica de que los competidores de Alfonso X —Otón de Brandeburgo y sobre todo Ricardo de Cornualles— cfr Armin Wolf, en este mismo libro, págs 231 y ss — realizaron o pensaron realizar «una obra legislativa donde el derecho del imperio . . . aparezca recogido». Por ahora hay que reconocer que no sabemos la razón de la interrupción del Espéculo; futuras investigaciones sobre su «signo social» son, para mí, la única esperanza de solución de este y otros «enigmas»

Que el Espéculo fue una obra fallida, como gusta decir Iglesia, resulta, gracias a sus estudios, indiscutible. No solamente la escasísima tradición manuscrita de esta obra lo acreditaría; también la lectura detenida de las partes conservadas, mérito principal de Iglesia (págs 409 y ss), conduce a esa conclusión: las leyes del Espéculo citan siete libros, siendo cinco los conocidos; pero es más que probable que su estructura definitiva no se encontrase aún determinada cuando el proyecto fue abandonado para comenzar las Partidas (cfr. págs. 446-447). En cuanto que obra fallida —no terminada y no promulgada, a pesar del testimo-

nio de un prólogo compuesto antes de finalizar la redacción— es aventurado proceder a una reconstrucción de su contenido, pero Iglesia ha avanzado el máximo a tenor de las fuentes hoy disponibles (cfr. págs 448-453).

La segunda parte del extenso trabajo de Iglesia (págs. 463-512) es una discusión de la revisión a que sometió Alfonso García Gallo los conocimientos tradicionales sobre la obra legislativa alfonsina en AHDE 21-22, 1951-1952. Iglesia, con precisión de cirujano, revisa las hipótesis y conclusiones de García Gallo, y convence plenamente de la fragilidad de sus planteamientos, la revisión de éstos por el propio García Gallo en AHDE 46, 1976, más profunda de lo que el autor parece admitir, ya da idea de lo aventurado de muchas de aquellas conclusiones. Iglesia ha insistido últimamente (cfr. AHDE 55, 1985, 95-149) en la crítica a García Gallo, dirigida en esta ocasión al trabajo publicado en AHDE 54, 1984, que se anunciaba no exento de polémica. Esta, cuando, como es el caso, se desenvuelve en el terreno de la argumentación científica (un ejemplo contrario incluye el mismo Iglesia en pág. 458), no deja de interesar vivamente a los especialistas, incluso a quienes, como yo, se encuentran alejados de la investigación alfonsina; pero me pregunto si insistir en la polémica —recoger minuciosamente los párrafos ajenos sometidos a contradicción— no llega a desplazarnos demasiado de los objetivos finales de la disputa: la mejor valoración de los libros jurídicos de Alfonso X. Yo reservaría, en una palabra, la crítica textual para las Partidas.

La crítica a García Gallo conduce naturalmente a la tercera parte del largo artículo de Iglesia, destinada a demostrar la debilidad de una afirmación básica de aquel autor: las Partidas no serían obra de Alfonso X, sino fruto de sucesivas redacciones a partir de lo que hoy conocemos como *Espéculo*. Frente a García Gallo —a la secuela necesaria de la dura condena de las ediciones de López y de la Academia de la Historia a que llevaba su planteamiento—, Iglesia revisa la labor editorial de Gregorio López, para concluir a favor del respeto de López por el texto de las Partidas. En definitiva (cfr. pág. 537) Iglesia viene a alinearse una vez más con Martínez Marina, y de ahí que se manifieste por la honestidad de los académicos de la Historia.

Iglesia finaliza reproduciendo una extensa autocita de síntesis de su interpretación de la política legislativa alfonsina, una vez obtenida la «conclusión última» del trabajo y que no es otra que «restituir las Partidas a su legítimo autor. Alfonso X» (pág. 599), pero de nuevo quedan flotando dudas sobre las razones de abandono del *Espéculo* e inicio de las Partidas. «El 'fecho del Imperio' vino a alterar este esquema y a crear confusión», admitía Iglesia; sus lectores, yo al menos, compartimos probablemente el aserto, mas en el sentido de que el 'fecho del Imperio', valorado a estos efectos por la historiografía, confunde más que explica las razones de la obra legislativa de Alfonso X.

La solución final parece lejana, en la medida en que aún lo está la edición de los materiales disponibles, siendo cierto, aunque sorprenda, «que no hayamos sido todavía ni para resolver los problemas básicos de situación y fijación de textos» (queja de Clavero en pág. 604); la frecuente sustitución de la historia por la —digamos— filología acerca poco al objetivo. Tal vez nunca lleguemos a averiguar porqué el *Espéculo*, no terminado, cede ante las Partidas; pero, de

nuevo tal vez, no radique ahí el principal problema. La suerte de Fuero Real y Partidas después del reinado de Alfonso X —la relación entre el derecho que incorporaban con las tradiciones jurídicas castellana y de la frontera— ha de merecer mayor investigación; Bartolomé Clavero aporta en este volumen algunas reflexiones (págs. 601-610): es tarea común desarrollarlas. Baste un ejemplo, de apariencia impropia, por conocido: ese Ordenamiento de Alcalá (1348) que todos explicamos, para tranquilizar a nuestros alumnos, y a nosotros mismos, como reglamentación ordenadora de mundos jurídicos diferentes condenados a coexistir, no resulta ahora de interpretación pacífica (cfr. Aquilino Iglesia, páginas 298 y ss. y Bartolomé Clavero, pág. 606), como tampoco, en la época de su vigencia, de fácil aplicación; el testimonio de la literatura contemporánea (cfr. Carlos Petit en *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* 50, 1982, 160-169), el silencio, sobre todo, en que cae el Ordenamiento a partir del siglo xv, obligaría a reservarle una plaza de inferior categoría en las exposiciones histórico-jurídicas al uso. O a concluir, previa la investigación de que aún carecemos, que el éxito final del Ordenamiento justificó un honroso olvido del que sólo nos sacó, hace dos siglos, la erudición del padre Burriel.

En defecto de ediciones no faltan los proyectos, algo es, aunque los historiadores del derecho profesionales no siempre estaremos de acuerdo con los planteamientos de los filólogos. Uno muy avanzado, aunque no tanto como la raquítica tradición manuscrita de la obra justificaría, corresponde a Robert MacDonald y va referido al Espéculo. Su aportación al simposio de Murcia («El Espéculo atribuido a Alfonso X, su edición y problemas que plantea», págs. 611-653), es una noticia de esa edición; y como anuncio debe valorarse, es decir, como adelanto de futuros resultados y exposición de puntos de partida. A la espera de los primeros, no será ocioso entretenerse en los segundos; el lector cuenta para ello con la base que aporta Iglesia, a mi modo de ver decisiva en relación a esta obra alfonsina. Y cotejando los resultados de Iglesia con los enunciados de MacDonald comienzan a surgir las preguntas. Iglesia argumentaba que el Espéculo fue inacabado; MacDonald no llega a pronunciarse con claridad, pues razonando (muy artificialmente) sobre la división en siete libros del Espéculo (págs. 620 y ss.), esto es, con admisión de que faltan —¿por qué no fueron compuestos o por inclemencias de la tradición?— dos libros, ofrece algunas hipótesis sobre su fecha de terminación: el Espéculo sería (págs. 653) «confeccionado en el período 1249-1253 por un equipo encargado del rey, promulgado u oficialmente nombrado en las Cortes de Toledo (marzo de 1254) y puesto en vigor a lo más tardar en mayo de 1255» (cfr. pág. 649: «vigente o no desde 1255 hasta 1272, formó el fundamento del proyecto más grande y comprensivo llamado hoy las Siete Partidas»); salvo que MacDonald piense en la promulgación («en las Cortes de Toledo *de jure* en 1254 y puesto en vigor *de facto* por la corte en Palencia en 1255» pág. 644) de un cuerpo legal inacabado, habría que inducir de sus noticias, un tanto extrañas (¿qué se entienden por promulgación *de jure* y entrada en vigor *de facto*?), que Espéculo fue terminado en 1254/1255. En este caso MacDonald, en tanto editor, debería interrogarse por la pérdida de libros del Espéculo según los dos (más un tercero del siglo xviii, carente de interés) manuscritos que lo conservan. Por lo demás, los argumentos de datación que emplea Mac-

Donald son muy alambicados: discute sobre la base de la mención del almirante del mar como confirmante de los privilegios rodados, que se documenta en diciembre de 1253, para fechar así *a quo*, pues menciona ese oficio (4,12,17 y 4,12,55), el Espéculo; la admisión, a iguales efectos de data, de una cita del Fuero Real (2,15,2) como *Ffuero de las leys* en Espéculo 5,4,22 (MacDonald, pág. 649), probablemente referida al propio Espéculo 5,4,21 (cfr. Aquilino Iglesia, pág. 324), por más que haya confundido a otro investigador (Jesús Vallejo en *Historia Instituciones Documentos* 11, 1984, 363, n. 59), no puede compartirse.

Menos cercana parece la edición de las Partidas, cuya tradición manuscrita ha interesado en el coloquio de Murcia al P. Antonio García y García (págs. 655-699). Sus lectores, que lo son también de las otras ponencias, podrán oponer reparos a las observaciones que introducen el cuerpo de la exposición. Las críticas a la edición académica, que (con García Gallo) formula García y García (cfr. páginas 658 y ss), deberán en todo caso revisarse tras la matizada defensa de Martínez Marina y la Real Academia realizada por Aquilino Iglesia; pero el trabajo de García y García es esencialmente instrumental: elenca los manuscritos de las Partidas hoy localizados (hasta 117), acompañados de una descripción e indicaciones bibliográficas, éstas, al parecer, procedentes de Jerry Craddock (cfr. pág. 670: «Para compilar la bibliografía sobre cada uno de los códices, me ha sido de gran utilidad la obra de Jerry R. Craddock *A Bibliography of the Legislative Works of Alfonso X el Sabio, King of Castile and Leon, 1251-1284* », cfr. además nota adicional en pág. 699)

* * *

¿Dudarán mis lectores que el libro editado por Antonio Pérez Martín es uno de los más importantes publicados este año y referentes a nuestra especialidad? Convencido de ello, he procurado siempre, en la limitada medida que permite mi actual campo de trabajo, demostrarlo. En buena hora nacido sea el Instituto de Derecho Común de la Universidad de Murcia, si tan activo se muestra en el futuro. Quienes creemos en los rendimientos de una historia europea del derecho —en los intercambios científicos, en la superación de anacrónicos nacionalismos.. — saludaremos iniciativas como la presente; los resultados logrados animan a proseguir, incluso cuando no se desea, al contrario que Juan García-Granero (AHDE 55, 1985, 492), que «el redescubrimiento de Europa como comunidad de naciones cristianas unidas por la fe católica sobre una base cultural griega y romana, nos pueda hacer encontrar el camino a seguir para que Europa vuelva a ser lo que fue, y sobre todo, para superar lo que tristemente ha llegado a ser: una sociedad neopagana o excristiana fundada en el materialismo y en la amoralidad» (1)

CARLOS PETIT

PIÑA HOMS, Román: *Alfonso el Sabio y Ramón Llull. Su concepción de la justicia y del orden social* (Serie Ensayos-7, Facultad de Derecho de la Universidad de Palma de Mallorca, 1984), 133 págs.

Profesor de Historia del Derecho de la joven Universidad mallorquina, el Dr. Piña Homs pertenece a la productiva e ilusionada historiografía autóctona balear, tradicionalmente preocupada por superar la relativa escasez de estudios insulares con respecto al resto de la historiografía hispánica. Con indudable éxito, el profesor mallorquín ha sacado ya a luz temas iushistóricos de palpante actualidad y fundamentales para la comprensión del pasado isleño. No lo es menos la obra que ahora le reseñamos, si tenemos en cuenta la extraordinaria fuerza histórica del mallorquín Ramón Llull dentro del pensamiento bajomedieval, especialmente en el ámbito catalano-balear, y del egregio Alfonso el Sabio, personajes coetáneos que el autor relaciona encontrando en sus obras respuestas que nos permiten conocer con mayor certeza la concepción jurídica de su tiempo.

Buceando con rigor en el *opus* jurídico alfonsí y en la magna obra lulliana, Román Piña nos muestra la visión que ambos tenían acerca de la justicia y del orden social, contrastando agudamente sus analogías y diferencias en uno y otro campo. Nuestro autor interrelaciona, de forma inédita, a Alfonso X y a Ramón Llull como resultantes utópicos y universalistas de dos focos culturales de «frontera» y representativos de la España nuclear —Toledo— y periférica —Palma de Mallorca.

Ambas urbes se nos muestran en el siglo XIII como prototipos sintetizadores de los tres legados monoteístas, con actitud dialogante e integradora tanto científica como culturalmente. Y Alfonso X y Ramón Llull, notabilísimos exponentes de la proyección toledano-mallorquina y de la centuria en la que vivieron, van a entrar en contacto con el contexto social de su tiempo en sus múltiples facetas política, religiosa, filosófica, jurídica, social, etc. Sin embargo, en lugar de descubrir, interpretar y encauzar con limitado pragmatismo la realidad concreta y circunstancial que tenían ante sus ojos, los dos van a situarse por encima de dicha realidad, cayendo en múltiples ocasiones dentro del terreno de la utopía, pero marcando y dejando una huella profunda y duradera.

Piña Homs, en su breve pero enjundioso libro, nos presenta dos capítulos más bien introductorios antes de pasar a la tercera parte, que es en la que desarrolla su tesis central. En el primero, el autor ofrece aspectos biográficos comparados de Ramón Llull y Alfonso X, aproximando a ambos personajes a pesar de que sus actuaciones vitales y sociales estuvieron claramente diferenciadas. E incluso, en estas reflexiones de acercamiento biográfico, nuestro autor introduce un tercer personaje, el emperador Federico II Staufen, por el que siente una inconfesada admiración y en el que ve un «sutil hilo conductor» que le lleva hasta Alfonso X y Llull. En las interconexiones de este triángulo, con denominadores comunes evidentes, las influencias arrancarían del germano-siciliano en dirección a los hispánicos.

Junto a la relación familiar que une a Alfonso X con Federico de Sicilia y las supuestas simpatías de Llull hacia los descendientes del Staufen, protegidos

por la Casa de Aragón frente a los anjevinos, el profesor Piña constata en el controvertido emperador una serie de valores que se encuentran también en el haber luliano o en el alfonsino. Sin embargo, pensamos que Román Piña parece apuntar hacia una concepción cuasimítica de Federico II como símbolo de la lucha por el poder secular y precursor del príncipe renacentista, entregado a las artes e integrador de las culturas oriental y occidental, contrario a un expansionismo beligerante y firme defensor de una racionalización de las relaciones, creador de una monarquía soberana sobre la base de una nueva legislación técnico-decisionista...

Ciertamente que ya en el siglo XIX Nietzsche reivindicó la imagen histórica de Federico II como «hombre superior» y que quien más contribuyó a esta mitificación fue Kantorowicz con su trabajada biografía sobre el Staufén, pero cuya visión concluyente sobre el mismo resulta insostenible, como ya demostrara Brackmann o Hampe, en aquel momento, u Odilo Engels, en el presente. Pensamos que es necesario relativizar más la figura de Federico II en el contexto del siglo XIII como pionero irradiador de la modernidad sin que ello suponga restarle grandeza con respecto, incluso, a los valores que ya le apuntábamos.

En el capítulo segundo, el autor elabora una atinada síntesis de lo que representó el siglo XIII, especialmente en el campo del pensamiento político. Con ello, Piña Homs crea el marco espacio-temporal adecuado sobre el que proyectar su estudio. Lógicamente, el tema que más le preocupa es el concepto del poder en esta centuria y la transición que se produjo con el resquebrajamiento del Sacro Imperio romano-germánico (y con él la unidad de la sociedad cristiana) unido a la eclosión de las monarquías nacionales.

Tras estos preliminares, el profesor mallorquín aborda, en una proporcionalmente extensa tercera parte la temática de la justicia-Derecho y del orden social en la retina de Alfonso X y Ramón Lull. La concepción de la justicia como virtud natural y el Derecho, como objetivación de la misma, cuenta en la centuria del trece con la tradición platónico-agustiniano-isidoriana y el elemento renovador aportado por la Recepción y por el pensamiento aritotélico-tomista; y es dentro de estas coordenadas donde Román Piña sitúa a sus personajes. Ya que ambos reflejan el legado altomedieval agustiniano —en el que la justicia, incardinadora del ordenamiento jurídico, aparece como la virtud que ordena las relaciones humanas hacia el bien común, que es la paz entre unos y otros— y el mensaje escolástico de base racionalista y finalista.

Espigando en el *opus* alfonsino y luliano, Román Piña extrae su concepción sobre el Derecho, deteniéndose especialmente en la distinción doctrinal de los ordenamientos y en la validez de las diferentes fuentes del Derecho. El autor reafirma el concepto decisionista y racionalizador de Alfonso X en el proceso legislativo y la visión utópica luliana de superar la pluralidad de Derechos positivos mediante la vigencia de un código universal, *Libre general a la ciència del Dret*, dentro de una comunidad de naciones. Esta actitud jurídica sistemático-integradora de Ramón Lull —ciertamente poco interesado en la problemática del Derecho— está relacionada por Piña Homs con la incidencia unificadora que el Derecho común tuvo en Mallorca ya desde finales del siglo XIII.

No nos resulta falto de interés el apartado relativo al orden social, en donde

nuestro autor va desnudando el pensamiento alfonsino y luliano respecto de las grandes categorías políticas del momento vertebradoras de la estructura social: el Imperio, el Pontificado, las monarquías la responsabilidad política, los estamentos y el papel dirigente de la caballería

Según el profesor Piña, no son unánimes las posturas del *Doctor iluminado* y el monarca castellano al enjuiciar el Imperio. Su postración irreversible tras el enfrentamiento Federico II-Papado no va a dejar indiferente al pertinaz Alfonso ante el posible acceso a la dignidad imperial. Partidario de una armonía Imperio-Papado, rechazará el agustinismo político al defender una secularización del poder temporal. Sin embargo, Llull, defensor de la «plenitudo potestatis del Papa y como medida frente a la crisis que atraviesa el Imperio, preconizará la unidad de las naciones bajo el arbitraje supremo del Pontificado

Apoyándose doctrinalmente en las tesis de Strayer y Ullmann, el profesor Piña colige una mayor afinidad entre ambos personajes acerca del origen, naturaleza y atribuciones de la monarquía. También aparece en su pensamiento el principio de la responsabilidad política y la actitud frente al tirano, ya dibujada por Juan de Salisbury en el siglo anterior. Asimismo, el autor coteja la influencia aristotélica en cuanto a la representación política, que considera mejor troquelada en la obra luliana y que, de algún modo, podría conectarse con el pactismo político que en esos momentos está arrancando en la Corona de Aragón.

Por último, Román Piña sondea el pensamiento del Rey Sabio y Ramón Llull acerca de la propia estructura social, una vez analizadas las instituciones superiores de poder. Ambos mantienen una postura tradicional claramente estamentalista, otorgándole un papel hegemónico al estado de la caballería como garante de la justicia y de la paz. La actitud elitista de Llull, que casa mal con su apasionado evangelismo, y el recelo alfonsí hacia la nueva clase burguesa no empece el que estas dos figuras señeras, que buscaron ansiosamente el saber sin importarles su origen, sean magnificadas históricamente, entre otras muchas cosas, por haber puesto dicho alto saber —según el profesor Piña— «al servicio de la regeneración social de su época, captando sus problemas y alumbrando racionalmente las posibles soluciones»

SIXTO SÁNCHEZ-LAURO PEREZ

I Seminario de historia del derecho y derecho privado. Nuevas técnicas de investigación. Edición a cargo de Joaquín Cerdá y Ruiz-Funes y Pablo Salvador Coderch. Bellaterra (Barcelona), Universidad Autónoma de Barcelona-Diputación de Barcelona-Instituto Alemán de Cultura de Barcelona-Fundación Raimon Noguera de Guzmán, 1985. 524 págs.

Si buenas son las iniciativas, sus rótulos no siempre las mejoran; y no es cuestión indiferente, pues, con frecuencia, licencias de título condicionan los contenidos. Los de la obra presente diez trabajos bien diversos, unidos solamente por su dedicación a temas relacionados con la historia del derecho: en lenguas

de uso —se diría, con Lalinde— paralógico (un italiano —Filippo Ranieri— que escribe en alemán y un alemán —Gero Dolezalek— que lo hace en italiano) y de extensión e interés muy desiguales. Y por lo que hace a los títulos: *historia del derecho y derecho privado - nuevas técnicas de investigación*; pero falta toda atención al segundo elemento de la cópula inicial, transformada en *historia del derecho privado* por obra y gracia de la presentación de los editores (Joaquín Cerdá y Pablo Salvador), no dándose propiamente cumplimiento, o sólo en muy escasa medida, a la oferta del subtítulo —*nuevas técnicas de investigación*— del libro que vengo comentando.

La lectura de la referida presentación ayuda poco a la mejor comprensión de los objetivos —y, mediante ellos, de los temas propuestos— perseguidos al celebrar el simposio, porque, al margen ahora la inseguridad detectada respecto a la definición de su temática fundamental, en vano buscaremos una enunciación exacta de aquéllos. Se quiso —según Cerdá y Salvador— «reunir ... durante una semana de trabajo a una docena de prestigiosos especialistas españoles y extranjeros a fin de que desarrollaran y discutieran otras tantas ponencias sobre el estado de la cuestión en relación al tema del seminario y su propia área de especialidad»; mas ésta se agota en la indicación *historia del derecho* (¿privado?), en exceso genérica a efectos delimitadores, y de acotar el *tema del seminario* precisamente se trata. Que fueran las del simposio «jornadas centradas en cuestiones mayoritariamente metodológicas» tampoco contribuye a orientar a un lector especializado que sabe distinguir bien entre el *método* y la *técnica* de sus investigaciones.

Indefinidos así temas y objetivos, los participantes de entonces (1982), autores de ahora (1985), han elaborado sus ponencias con grandes dosis de albedrío. Algunas enfrentan problemas de *método* (Bartolomé Clavero; Rafael Gibert. Johannes-Michael Scholz); otras más exactamente de *técnica* (Gero Dolezalek, matizadamente, Filippo Ranieri); unas terceras son exposiciones de líneas de investigación seguidas, con avance de resultados (Aquilino Iglesia; Antonio Pérez Martín; Mariano Peset; de nuevo, Filippo Ranieri); y la variedad de las aportaciones se proyecta todavía en meticulosas reseñas de los principios adoptados en algún trabajo de crítica textual (Juan Miquel, a propósito de Pescani) o en una ambiciosa propuesta de «superación del nacionalismo iushistórico» (Jesús Lalinde).

Un juicio sobre obra tan dispar, concebida además según contornos borrosos, resulta muy difícil. Habría que reprochar a los diez autores su despreocupación por la *historia del derecho privado* que, más o menos, parece constituir el argumento del simposio, salvo que en la mente de muchos de ellos, y en todo caso de los organizadores, opere el concepto de *historia del derecho privado* al uso en la práctica académica alemana: una historia de la aparición y recepción del *ius commune*, cuya factura no puede por supuesto enajenar cuestiones de las fuentes de la tradición jurídica romana y canónica (Gero Dolezalek, Antonio Pérez Martín, Juan Miquel) ni el punto, más que clásico —pero de resolución ineludible cuando, como es el caso hispánico, la investigación apenas se encuentra en sus comienzos—, de los caminos peculiares de esa recepción (Aquilino Iglesia); desde esta perspectiva, de verosimilitud que apoya la circunstancia de la participación en el Seminario de varios investigadores del Max-Planck-Institut für europäische Rechts-

geschichte, el lector se encuentra realmente ante *nuevas técnicas* —si bien no, ya, muy nuevas— para *viejos temas* —aunque, por la escualidez de nuestra historiografía interesante, no, aún, muy viejos—. Semejante modo de racionalizar el simposio *a posteriori* excluye todavía ciertas intervenciones recalcitrantemente extravagantes; lo son, sin que deba verse en mi afirmaciones connotaciones valorativas por ahora, las ponencias —de *método*— de Gibert y de Scholz o la peculiar aportación de Lalinde, mientras que las páginas suscritas por Clavero y Ranieri —de *método*, también, las primeras, pero de método en orden al estudio del *ius commune* o, más propiamente, de la historia europea mediante su concurso, presentación de resultados habidos en una investigación sobre la litigiosidad ante el *Reichskammergericht*, con soporte estadístico y una visión clara de los objetivos a cubrir, en el segundo caso— podrían, exactamente, ser clasificadas en el marco general de la *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit* que debió encuadrar, no obstante reticencias, el simposio. Dentro de ese marco se sitúa pacíficamente la disertación de Peset: el estudio de las Facultades jurídicas y de la actividad de sus profesores es otro *viejo tema* de encuesta, que, si proyectado al siglo XIX —una *Neuzeit* abarcando siempre lo contemporáneo— como hace Peset, resulta, entre nosotros, *nuevo*

Comento a continuación algunos de los trabajos de este libro colectivo, son, es evidente, aquellos que me interesan primordialmente, o —el ejemplo contrario lo ofrece la obra de Juan Miquel— los que por limitada formación me es dado comprender y aprovechar. Rechazo en cualquier caso la posibilidad de presentar *regesta* de cada artículo, según suele ser habitual en un panorama historiográfico que, como el español, no es muy dado al género literario de la reseña; la calidad de muchas de las aportaciones, al menos válidas todas como exponentes del diverso hacer en nuestra especialidad, obliga a una lectura directa, nunca sustituible por esa suerte de reseñas-resúmenes tan frecuentes

* * *

Y entre esos trabajos del mayor interés, ante todo el de Clavero Su «Historia y antropología. Por una epistemología del derecho moderno» (págs. 9-35) contienen las claves para una *Privatrechtsgeschichte* que huya del idealismo wieackeriano, ofreciendo la vía más adecuada para reconstruir —de la mano de la literatura jurídica, a la que correspondió históricamente una tarea fundacional de la sociedad moderna— la antropología —el sistema de instituciones— de los siglos preburgueses en Europa. El desprecio de los historiadores, también, y causa asombro, los del derecho, hacia una jurisprudencia efectivamente circulante en su momento con dominio de la realidad social ha impedido, y así lo subraya Clavero, trazar el «horizonte cultural» de la modernidad; estudios de «historia social» —sobre matrimonio y familia, sobre estudiantes y litigantes— o/e «institucional» —burocracia, Consejos, instancia política— vienen abortando, precisamente, por la falta de categorías previas e históricamente adecuadas que sólo puede ofrecer la doctrina.

Lo puede recordar Clavero, incluso manejando sagazmente nombres tan prestigiosos como Domínguez Ortiz, porque sus observaciones —de *método*— no son otra cosa que la expresión de ideas y actitudes intelectuales que dirigen la

obra propia. Sin que el pionero *Mayorazgo* se sitúe fuera de este ámbito, el especialista reconocerá el «*Hispanus fiscus*» como la monografía en que Clavero ha sabido aplicar mejor los postulados que ahora sistematiza, estimulando su difusión. La armonía entre teoría —*método*— y práctica de la investigación resulta solidísima, y enriquecida además por la línea de trabajo tan consecuente que este autor desarrolla desde hace doce años.

Pero el mismo especialista, que sin duda habrá utilizado la obra de António Manuel Hespanha, destacar cuya importancia debemos también a Clavero, no se siente satisfecho por la rápida puntualización que aparece en pág. 25. «No se dice, por supuesto, que pueda bastar este acceso a las ideas, por muy jurídicas que sean, para un conocimiento de la respectiva sociedad», advierte, tras situarnos ante la importancia de la doctrina moderna, Clavero; y lo advierte con razón, pues el mundo moderno no-oficial, el de la magistratura popular, el de la vida jurídica iletrada, el de aquellos rústicos dulcemente dominados por la razón violenta de los sabios legistas, forzosamente se nos escapa ciñéndonos al recurso a la literatura. Acaso sepamos el diseño de las siete puertas tebanas, pero no será tan fácil averiguar, solamente de la mano de la razón jurídica oficial, quien se sacrificó para construirlas.

No se trata de recurrir a las fuentes documentales o, al menos, no es ese el problema: conocemos el mayorazgo, a despecho de algunas críticas formuladas a Clavero, sin necesidad de haber multiplicado el estudio de piezas inéditas —sin tener que camuflar la miseria del método bajo la laboriosidad del archivo—; conocemos también el sujeto político moderno al margen ya de farragosas e imprecisas alegaciones políticas barrocas. Otro es el asunto evitar la pérdida como campo para la elaboración historiográfica de una realidad social que cohabita junto a, o bajo de, las categorías formuladas por una jurisprudencia esencialmente incapaz de suministrar los elementos conceptuales necesarios para la comprensión de aquélla

* *

Si Clavero se ha basado en su experiencia anterior para ofertar ahora, expresa y exclusivamente, el *método*, Aquilino Iglesia ha procurado contrastar, en orden al conocimiento de la recepción, una *técnica* —análisis del formulario de los actos jurídicos— con los resultados obtenidos mediante su aplicación. Es evidente que perseguir en los cambios sufridos por el formulario documental un grado creciente de presencia romanista obligaría —acéptese como hipótesis— a estudiar millares de escrituras de todo tipo si quisiéramos lograr algún resultado positivo; es evidente también que semejante proceder suele escapar de las posibilidades de un investigador, sobre todo si, como Iglesia, actúa individualmente y mediante medios artesanales (cfr. pág. 94). Por eso, aunque resultan lógicas las limitaciones institucionales —las cartas de compraventa— y geográficas —el cartulario de San Cugat del Vallés— impuestas, tras la lectura de las más de ochenta páginas del trabajo se verán confirmadas unas impresiones iniciales demasiado críticas sobre la utilidad del *modus operandi* escogido. Y sin que fuera necesario, por supuesto, sentirse vinculados por la amarga observación preliminar del autor: la

vía seguida en el estudio de la recepción habría «resultado una vía fallida», y de ahí «la ineficacia de recorrer(la) de nuevo» (pág. 94); porque, junto a esas críticas impresiones, no faltarán otras, favorables a la continuación de este tipo de investigación con recursos materiales más apropiados

En efecto, no hace mucho Mariano Peset y Juan Gutiérrez Cuadrado se lamentaban del olvido en que ha permanecido «el mundo de los notarios», añadiendo, entre otros extremos que componen un amplio catálogo de *desiderata* que así brindan a los especialistas, que «un cambio de fórmula no es innovación caprichosa de un escriba» (*Clérigos y juristas en la baja edad media castellano-leonesa*, Vigo, Colegio Universitario, 1981, págs 77 y ss.) Pero para la correcta valoración de esos cambios, además de compulsar diversos ámbitos negociales, interesa además diversificar las fuentes: multiplicar la utilización de cartularios Aquilino Iglesia, excesivamente prolijo en la —digamos— depuración del *corpus* de materiales en observación (hasta la pág 111, y arrancando de la pág. 93, no parece iniciarse exactamente su artículo), no reflexiona de manera suficiente sobre los problemas que encierran los cartularios para el tipo de encuestas como la realizada: ¿hasta qué punto el cartulario recoge la documentación en sus términos originales? No basta con destacar, y porque se olvida es mérito de Iglesia el recordarlo, que «el Cartulario ofrece una visión deformada de la participación del monasterio en la vida jurídica del momento» (pág 109), pues no interesaba conservar todos los documentos una vez agotada la relación jurídica a la que ofrecían soporte material; hace falta cuestionar la exactitud de lo copiado en el cartulario respecto de unas cartas envejecidas y que pueden resultar, si no inconvenientes siempre, al menos, siglos después de su redacción, frecuentemente indescifrables. La crítica previa de la fuente con la que se opera, y no solamente desde un punto de vista jurídico —institucional, interno—, parece requisito obligado en un análisis de los formularios. Y si se está de acuerdo con estas matizaciones, habrá de concluirse aún que el peligro de manipulaciones *a posteriori* del tenor de los diplomas originales llega a soslayarse, o a reducirse siquiera, en función directa del número de los cartularios examinados.

Y es, en fin, de lamentar, ya que se trata —o debiera tratarse— de las actas de un seminario/simposio, que las discusiones habidas cuando la exposición primera de los trabajos no se reflejen en el libro objeto de comentario, sobre todo si, como leemos en el de Iglesia, pág 137 y n 84, algunas han llegado a incidir en aspectos capitales de la investigación: se debatía en 1982, y el lector de 1985 conoce sólo la noticia, sobre la condición laica o clerical de los escribas de San Cugat, inclinándose Iglesia por afirmar, contra los reparos de Mundó y Dolezalek, que «en Cataluña, durante la Alta Edad Media, se mantuvo un grupo de personas que parece continuar la antigua profesión de los escritores/redactores de documentos», entendidas al margen de la carrera eclesiástica. Se ofrece así un mundo de problemas ante unos lectores a quienes los organizadores han sustraído los términos del debate.

* * *

«Pour une histoire du droit moderne» presenta sus elementos Johannes-Michael Scholz, en la aportación más amplia (págs 423-524) de cuantas figuran en

el libro del Seminario. Quien escribe debe confesar que el interés y la dedicación con que se ha entregado a la lectura de esas páginas no están compensados por la comprensión, si no satisfactoria, al menos correcta de sus afirmaciones. el arranque de Scholz, lamentando con insistencia que la historiografía jurídica académicamente consolidada opte por desconocer aquellas posturas críticas que no aceptan sus márgenes estrechos, resulta volverse en contra del propio autor cuando es un excesivo hermetismo, y no la solución del silencio ante lo incómodo, la pantalla que obstaculiza la difusión de su obra. Dentro de la dificultad de lectura siempre hay grados, y es el alegato inicial, la crítica de aquella historiografía, lo que puede estudiarse con mejor provecho. la asunción de la formación jurídica al uso por parte de los historiadores del derecho insensiblemente les convierte en «Huter von Recht und Ordnung», impidiendo de ese modo, por el imposible distanciamiento objetivo respecto de la ciencia que han de estudiar, que su saber sea crítico puesto que histórico (cfr. págs. 423, 426, 430) Una historia del derecho elaborada desde esas coordenadas actúa (pág. 434) «comme perception idéalisante de l'histoire du droit de l'ère moderne en vue d'une légitimation historique du présent, mais non en vue d'une science historique»; nuestra especialidad será ciencia histórica solamente «en rupture avec la disposition juridique», o, si se prefiere, como «critique de la rationalité juridique de la modernité». El diagnóstico parece claro, aunque algún *colega* hispano acercara hace unos años las posiciones de Scholz a aquéllas de ¡Wieacker! (cfr. AHDE 47 (1977), pág. 887), pero el tratamiento, esto es, la «nouvelle fondation épistémologique» que Scholz propone para la historia jurídica (especialmente capítulos III y IV del trabajo), plantea problemas de tolerancia: no se puede sustituir una crudición por otra, cuando de lo que se trata es de trazar un modelo para la reflexión y su aplicación futura al campo de la investigación. Que el terreno jurídico es, a pesar de Coing (cfr. pág. 465), un terreno de lucha, por lo que resulta falsa la separación entre derecho y poder, debe aceptarse pacíficamente sin necesidad de prolijas disquisiciones; el lector se siente con frecuencia abrumado, pues apenas le compensan las afirmaciones brillantes, cuya digestión dará los mejores frutos, que incidentalmente multiplica Scholz en su abigarrado discurso. Aquí se encuentran todos los ingredientes de la fórmula: falta simplemente someterlos al alambique.

* * *

Que el libro del Seminario es un libro-herramienta podrán comprobarlo los lectores sin necesidad de sentirse contaminados por el afrancesamiento intelectual de Johannes-Michael Scholz: las páginas firmadas por Mariano Peset y Antonio Pérez Martín lo acreditan. El primero, bajo el título «Cuestiones sobre la investigación de las Facultades de Derecho durante la segunda mitad del siglo XIX», ofrece más resultados —todo lo provisionales que se quiera— que «cuestiones»: evolución de la matrícula, reforma de los estudios jurídicos e incidencias en el escalafón de catedráticos, publicaciones de éstos (su número, su tipología), semblanzas de algunas grandes figuras. . . Aprendemos de Peset que el nivel de las Facultades jurídicas es modestamente creciente desde mediados del siglo XIX a comienzos del XX, que las monografías jurídicas, en un principio inexistentes

—reducidas, o casi, al ínfimo género de lecciones inaugurales y discursos—, hacen por fin su aparición, que se escriben manuales o comentarios no despreciables. He aquí unas grandes líneas: es necesario continuarlas.

Y para esa deseable continuación me permito realizar unas pocas sugerencias. Las muchas miserias o los escasos logros de la jurisprudencia académica —universitaria— hispana se deben valorar en cotejo con la realidad de otros países europeos del momento, respecto de los cuales no dudo ha de existir una nutrida bibliografía mejor conocida por Peset que por mí; brindo, en todo caso, el ejemplo que supone, para Francia, André J. Arnaud, cuya síntesis sobre los juristas y la sociedad francesa en los siglos XIX y XX, no ceñido al mundo de las Facultades de Derecho, traza caminos interesantes que bien podemos recorrer. Por similares razones —porque aquellas Facultades resultan impenetrables sustraídas de la reflexión sobre problemas más generales que afectan al derecho y a la sociedad a los que sirven— los futuros estudios deberán insistir en la relación entre determinados eventos legislativos y la organización de las disciplinas académicas —más allá de la lógica aparición del correspondiente comentario o del remozado manual—, o en la incidencia de los cambios políticos en los escalafones .. Insistirán también en la movilidad del profesorado, cuyo arraigo geográfico desconocemos, en sus contactos exteriores, en la proyección profesional de los estudiantes, singularmente mediante «oposiciones» de las que, *grosso modo*, parecen haberse sustraído zonas enteras, como Cataluña, en la presencia universitaria en la política activa, y en un largo etcétera. Todo esto que ahora se me ocurre, y mucho más, no resulta en demérito de las páginas de Peset: su intención de acotar un nuevo terreno de investigación, presentando líneas generales, resulta sin duda cumplida. Esperemos que esos investigadores de buena fe, a los que convoca Peset en pág. 368, se decidan a avanzar por el terreno explorado.

* * *

Iguals votos formularán los lectores a la vista del trabajo de Antonio Pérez Martín, centrado en un momento mucho más «clásico» de la *Privatrechtsgeschichte* que incardina el Seminario con un título abierto —«El estudio de la recepción del derecho común en España»— el profesor de Murcia nos ofrece un nutrido catálogo de escritos jurídicos medievales con precisiones sobre localización, contenido, estado de la investigación y problemas de edición. El catálogo está enriquecido con algunas síntesis, vehículo de la presentación de las investigaciones del autor, entre las que se leerá con especial aprovechamiento la contenida en págs. 245-250 sobre el «Corpus iuristarum hispanorum»; ahora podemos confrontarla con el trabajo de Peset y Gutiérrez Cuadrado citado antes.

La erudición de Pérez Martín peca, sin embargo, por exceso, pues el especialista encuentra en su trabajo informaciones, tan inesperadas como útiles, con violencia a la oferta del título y de la temática inducida del libro en que se inserta: me refiero a las páginas sobre el llamado derecho territorial castellano, cuyas relaciones con el *ius commune*, más bien escasas, habrá en todo caso que precisar tras la labor editorial que el autor ha facilitado, o —el ejemplo es tan

extremo que no escapa al mismo Pérez Martín— a las fórmulas visigodas. Nuevamente problemas de rotulación comprometen los contenidos.

Gracias a Pérez Martín —a este nuevo Ureña que nos vino de Alemania— conocemos ya muchos textos o nos encontramos en disposición de investigar y editar otros muchos, por él descritos y exhumados. Pero me gustaría mayor sensibilidad de historiador en los estudios sobre fuentes. Leyendo los párrafos dedicados a Jacobo de las Leyes o sobre la obra alfonsina —los puntos de vista de Pérez Martín son ya, en mi opinión, directamente incorporables a la manualística— me asaltaba con insistencia una pregunta que no sé si el autor piensa llegar a responder: ¿por qué una frondosa literatura y legislación en romance castellano? García y García, que iniciara hace unos años la tarea que consume Pérez Martín, ofrecía en este mismo ANUARIO unas referencias demasiado vagas sobre las razones de las obras de derecho común medieval en castellano; Riaza, tiempo atrás, tampoco llegó a interesarse más por la cuestión. Responder que desde el reinado de Fernando III la cancillería real va abandonando el latín para acoger la lengua vulgar, en la que encuentra siempre expresión Alfonso X, es una falsa respuesta: se trataría de precisar las circunstancias de tan temprano cambio, y de conectarlo a su vez con la difusión de la literatura jurídica en romance. ¿Se puede pensar todavía que el «fecho del Imperio» impulsó a elaborar las Partidas, precisamente en castellano? ¿Se olvidará que en el siglo XVI, según sabemos por Clavero, la aparición de una jurisprudencia en romance de Castilla tuvo incidencias —implicaciones— muy concretas? Frente a un *Dottor volgare* en el umbral histórico de superación del *ius commune*, la adelantada Castilla, vulgar en el siglo XIII, obliga a mayores reflexiones

* * *

¿Cuándo contaremos con un *II Seminario*? Una mejor organización, mayores precisiones respecto de contenido y objetivos, y poco —o nada— más brindarán a los especialistas otra obra del interés y utilidad de la presente. Cuando el germanismo que importamos se reduce, pobremente, a aclimatar prácticas tan poco afortunadas —salvo excepciones— como la de la *Festschrift*, los coloquios científicos —con sus posibilidades de centrar en un tema determinado la discusión y, sobre todo, de seleccionar en su función los participantes al margen de forzadas cortesías académicas y conveniencias— son ocasiones privilegiadas para elaborar misceláneas histórico-jurídicas que reúnan algo más que escritos de compromiso. No es éste el caso ahora. se trata, por tanto, de continuarlo

CARLOS PETIT

VARIOS AUTORES: *La época de los primeros Borbones. La nueva monarquía y su posición en Europa* (1700-1759), tomo XXIX, volumen I, Historia de España fundada por Ramón Menéndez Pidal y dirigida por José M.^o Jover Zamora. Ed. Espasa-Calpe, Madrid 1985, LXXII + 706 págs.

Con la esmerada presentación externa habitual en esta colección desde que en 1935 la fundara Menéndez Pidal, un nuevo tomo dedicado a la España de los primeros Borbones ha venido a completarla recientemente. De los dos volúmenes en que se ha dividido —I.—*La nueva monarquía y su posición en Europa* (1700-1759), II.—*La cultura española entre el Barroco y la Ilustración* (1680-1759)—, es el primero el que suscita nuestra atención en estos momentos. Como toda obra colectiva, que condensa bajo la unidad cronológica representada por los reinados de Felipe V y Fernando VI varias colaboraciones sobre aspectos diversos de la Historia española, acusa algunos de los inconvenientes característicos de este género. Al desigual valor de las aportaciones o la inevitable duplicidad en el tratamiento de unas mismas cuestiones, se añade en este caso la ruptura de la unidad cronológica del tomo prevista por su director, José M.^o Jover, que en alguna de sus partes —caso de las destinadas a la exposición de las transformaciones en los órganos de la administración— se ha visto ampliamente rebasada. Aun aceptando el peculiar ritmo de cambio de la Historia institucional y lo artificioso de circunscribir a reinados la evolución de las instituciones político-administrativas, circunstancia que, por otra parte, ninguno de los autores se preocupa de poner de manifiesto, su tratamiento ampliado en el tiempo, coherente en la exposición evolutiva de las instituciones, puede restar significado al período estudiado y desenfocar la pretendida visión de conjunto.

¿Qué supuso en la Historia de España el reinado de los dos primeros Borbones, el gobierno de una monarquía que a lo largo del volumen, y haciendo hincapié en alguno de sus rasgos más destacados, se califica sucesivamente de reformadora, castellana o militar? Ese es el planteamiento inicial de esta obra y en torno a él las distintas aportaciones parecen mantener a modo de telón de fondo esa imagen plástica del surgir de España como entidad política definida que Domínguez Ortiz nos ofrecía en su célebre estudio sobre la sociedad española en el siglo XVIII: «Más chica que el Imperio, más grande que Castilla, España, la más excelsa de las creaciones de nuestro siglo XVIII, sale del estado de nebulosa y toma contornos sólidos y tangibles».

Contornos que, hacia el interior, perfiló una distinta organización política y administrativa, más homogénea y en la que los Decretos de Nueva Planta, la reforma de los órganos de la administración central, territorial y local y de la Hacienda Pública y un nuevo enfoque en las relaciones Iglesia-Estado fueron sus pilares fundamentales. Contornos que, al exterior, delinearon los Tratados de Utrecht y que supusieron la definitiva renuncia de la monarquía española a la herencia de Carlos V, el cese de la tremenda dispersión continental europea del período austríaco y el paso a una entidad política mucho más compacta, recogida en el perímetro peninsular y más proyectada hacia las Indias

Y es ese nuevo marco institucional y esa nueva situación de España en el concierto internacional lo que se ha pretendido exponer en el presente volumen que, en lógica correspondencia, se ha dividido en dos partes: «La nueva planta de la monarquía» y «La política exterior de España entre la Paz de Utrech y el Tercer Pacto de Familia». A la primera dan cuerpo los trabajos de Francisco Cánovas Sánchez, José Antonio Escudero, José M.^a García Marín, Pere Molas Ribalta y Antonio Mestre Sanchís dedicados, respectivamente, al estudio de «Los Decretos de Nueva Planta y la nueva organización política y administrativa de los países de la Corona de Aragón», «La reconstrucción de la Administración Central en el siglo XVIII», «La reconstrucción de la administración territorial y local en la España del siglo XVIII», «Las finanzas públicas» y «La Iglesia y el Estado. Los concordatos de 1737 y 1753». A la segunda, la aportación de José M.^a Jover y Elena Hernández Sandoica sobre «España y los Tratados de Utrecht» y el análisis de «La política exterior de España en tiempo de Felipe V y de Fernando VI» encomendado a Didier Ozanam.

Introduce los dos volúmenes un extenso prólogo de Vicente Palacio Atard en el que, calificando de «monarquía reformadora» a la nueva dinastía («pues la palanca que mueve los resortes de las reformas está en manos del "poder omnímodo" del rey»), plantea como objetivos fundamentales de la misma el fortalecimiento del poder y la reconstrucción económica que generase los recursos necesarios para costear los gastos de una política de potencia. Objetivos reformistas que, a su juicio, habrían de tropezar con tres factores: el simplista temor a lo nuevo, el peso de la tradición administrativa y política y la escasez de recursos humanos y económicos. A la caracterización global del período desde el eje central de la monarquía y el enfrentamiento reforma-conservadurismo, sin descender al análisis social del proceso, sigue una minuciosa recapitulación sobre cada uno de los trabajos que componen la obra.

Entre ellos, la exposición de la nueva planta de la monarquía a la que el desarrollo de la llamada «guerra de sucesión al trono español» proporcionó una ocasión inmejorable, se inicia con la correcta síntesis, clara y sistemática, que Cánovas Sánchez nos ofrece sobre el significado de los Decretos de Felipe V para —algunos autores prefieren decir contra— los territorios de la corona de Aragón. Muy acertado el punto de partida, inserta los Decretos en el marco global de lucha contra la crisis del siglo XVII y el inicio de una profunda transformación política y administrativa de la que surgió la España moderna, con el absolutismo, el despotismo ilustrado como fórmula para salir de la crisis asegurando la subsistencia del modelo de sociedad pero enlazados también en la línea de aspiraciones autóctonas mantenidas ya por los arbitristas castellanos —Alamos de Barrientos— que insistían en la necesidad de reforzar las estructuras del Estado para superar la crítica situación de los últimos Austrias o el conde-duque de Olivares o amplios sectores del pueblo castellano, descontentos con la desigual imposición de las cargas fiscales. Acertado también por lo mismo —y excepcional en el conjunto de los trabajos del volumen— el análisis del sustrato social que amparó en cada uno de los países de la corona de Aragón el levantamiento de determinadas capas de su población contra Felipe V y su apoyo al archiduque, análisis que sitúa la contienda internacional con perfiles propios

dentro del país y que rebasa el clásico planteamiento del enfrentamiento entre dos diferentes opciones políticas: absolutismo *versus* pactismo. Reafirma con ello el autor lo que hubo de conflictividad social en la contienda bélica (el mayoritario apoyo del campesinado valenciano al archiduque como respuesta a sus promesas de abolición de los señoríos, la raíz popular de la revuelta de Aragón, la asunción de las aspiraciones de la burguesía mercantil catalana por el pretendiente austríaco...) y la consolidación, con su desenlace, de la privilegiada situación de las clases dominantes.

En capítulos separados, el examen de la nueva organización política y administrativa alumbrada en los Decretos de Nueva Planta para Valencia, Aragón, Cataluña y Mallorca sigue un esquema común: sustrato social y desenvolvimiento de la contienda y estudio de la nueva planta y su desarrollo en torno a sus cuatro puntales representados por el capitán o comandante general, la audiencia, la reorganización de la hacienda, marginal a la Nueva Planta pero que el autor no rehúye, y el nuevo gobierno municipal, en la línea del municipio castellano. Tras el planteamiento del marco, la dinámica del sistema le permite comprobar el desequilibrio efectivo a favor del poder militar, que es interpretado por Cánovas en base a la situación bélica en que se gesta la reforma y a la «posición preponderante de los mandos militares en el sistema político de los Borbones», el sentido modernizador y racionalizador de las reformas hacendísticas y la regresión operada en el ámbito municipal, convertidos los ayuntamientos en instituciones uniformes, burocráticas y aristocráticas, desconectadas de su entorno y al servicio del poder real. Al final de cada uno de los capítulos se insiste en la castellanización cultural de estos países, el predominio de los castellanos en los puestos clave del gobierno y la burocracia, pero, desde la perspectiva del historiador del Derecho, sorprende el escaso énfasis que se hace en el alcance de las medidas dentro de la Historia del Derecho español. En ningún momento se explica por qué la uniformización jurídica se hace precisamente sobre la base de la extensión del Derecho castellano a estos territorios ni tampoco queda clara la situación de sus respectivos ordenamientos jurídicos peculiares. Aparte la pérdida absoluta de su Derecho por Valencia y la conservación del Derecho privado en Aragón, Cataluña y Mallorca, nada se dice de los otros sectores que en estos dos últimos países se mantuvieron. El mapa jurídico español, que debiera haber quedado delineado en este trabajo introductor a la nueva planta de la monarquía, queda, sin embargo, desdibujado y confuso.

La reconstrucción de la administración central en el siglo XVIII, analizada a continuación por uno de sus mejores especialistas, José Antonio Escudero, parte de la inserción de la política reformista sobre la base de una estructura preexistente escasamente dúctil y con un notable grado de consolidación «Adecuado soporte de clima plurinacional» para el pensamiento ilustrado europeo traído de la mano de influyentes personajes políticos de la corte española, franceses pero también italianos y anglosajones, otros factores se presentan por el autor de irrecusable análisis para la comprensión del proceso. a) gran parte de los planteamientos iniciales fueron consecuencia de una guerra que significó el trasplante del sistema político-administrativo de Castilla a la Corona de Aragón; b) parte de los criterios no se integraron en un plan coherente de renovación sino que aparecen

como medidas coyunturales; c) el distinto ritmo seguido en los tres niveles de la administración —central, territorial y local— y en los diferentes reinados.

Planteadas así las bases de la reorganización, la exposición, fiel síntesis de su conocida obra sobre los orígenes del Consejo de ministros en España, se inicia con un capítulo destinado al examen de su fundamento ideológico, bajo el título «Absolutismo ilustrado y Administración pública», con la centralización y racionalización administrativas como objetivos prioritarios. Meta la primera de ellas que, si bien se consiguió plasmar en España en los niveles local y territorial, en la administración central venía arrastrándose ya desde los Austrias en los centralizados Consejos dependientes del rey, por lo que en este sector las reformas tendieron más a obtener una mecánica funcional fluida y operativa. También la propia organización administrativa española explicaría, en su opinión, el desprecio de la nobleza por la participación activa en la gestión política frente a la generalizada presión de la nobleza sobre el aparato de la administración en Europa. Los Consejos, postergados en la acción burocrática y orden político, mantuvieron, sin embargo, su tradicional rango externo que los hacía gratos a los nobles, quienes contemplaban con indiferencia y como más propias de covachuelistas las Secretarías de Estado a las que fue desplazándose la gestión político-administrativa. Sólo avanzado ya el siglo se hizo patente que el nervio del gobierno discurría por la *vía reservada* de las Secretarías y fue entonces cuando el conde de Aranda aceptó ser ministro.

Toda esa dinámica Consejos-Secretarías y los sucesivos desdoblamientos de la Secretaría del Despacho Universal son analizados minuciosamente por Escudero, que ha considerado necesario para ello no romper la unidad del proceso y extender su estudio hasta las Cortes de Cádiz. Articulada la gran renovación del XVIII sobre las Secretarías del Despacho, consolidado el régimen ministerial en el decenio 1715-1724 en un sistema de 5 departamentos, culminó con la aparición de la Suprema Junta de Estado de Carlos III en 1787, «reunión institucionalizada y sistemática de todos los ministros y de sólo ellos» y, en cuanto tal, ya auténtico Consejo de ministros. Para su exposición el autor ha optado por relatos cronológicamente, con una abrumadora profusión de datos, las sucesivas incidencias registradas en el organigrama administrativo y sus correspondientes titulares, dando la impresión al lector de que, aparte de los condicionantes expuestos en la introducción, lo que realmente impulsó o frenó las reformas en muchas ocasiones fue la personalidad y el peso específico de determinados políticos, la debilidad de los monarcas, las intrigas cortesanas, presiones extranjeras. Nombramientos, relevos, conspiraciones palaciegas, brillo de destacados personajes oscurecen, así, la comprensión del funcionamiento real del sistema de gobierno que habría de esperarse de su más sólido investigador y que en este estudio se presenta excesivamente dependiente de los ocupantes de los respectivos despachos. En esta línea, la caída de Floridablanca, en febrero de 1792, explicaría la inmediata supresión de la Suprema Junta de Estado, «aquel modélico Consejo de Ministros», identificado como la obra política del ministro saliente.

Más breve, la aportación al volumen de José M.^o García Marín en torno a la reconstrucción de la administración territorial y local en la España del siglo XVIII ofrece, con una estimable claridad expositiva, una síntesis de los trabajos de

Kamen, Molas Ribalta, González Alonso, García Gallo, Lalinde, Muro Romero . relativos al tema. Dividida en dos capítulos, estudia en el inicial los medios de la administración territorial agrupados en torno a dos epígrafes: a) capitanías generales y audiencias, y b) corregimientos, alcaldías mayores e intendencias. El punto de partida del primero, los Decretos de Nueva Planta, le lleva inevitablemente a adentrarse en un terreno ya estudiado antes en este volumen, aunque ahora ya no sólo circunscrito a la corona de Aragón y que, al extender el análisis a todo el siglo XVIII, le da pie para advertir, junto a la castellanización inicial de esta última, el influjo de la nueva planta de las audiencias aragonesas y la implantación del modelo aragonés del real acuerdo, con predominio del mando militar, en las audiencias y chancillerías castellanas. En el segundo, los problemas derivados de la inserción de una figura nueva, los intendentes, sobre un esquema institucional que se mantiene, conflictos de competencias con los corregidores y aclaración progresiva de sus respectivos perfiles. Completa el capítulo la organización territorial de las Indias: virreinos, capitanías generales, audiencias, gobernaciones, alcaldías mayores, corregimientos e intendencias. El capítulo II, la administración municipal, se inicia también con la alusión al significado de los Decretos de Nueva Planta dentro del proceso de uniformización del régimen local sobre el modelo del municipio castellano. Especial hincapié hace el autor en los desajustes de un sistema impuesto desde el poder y en el proceso de patrimonialización de los oficios corceviles, que condujo a la oligarquización de la administración municipal, para terminar con el célebre Auto Acordado de 5 de mayo de 1766, sus objetivos, acogida y resultados.

La aproximación de Pere Molas Ribalta a «Las finanzas públicas» de los dos primeros Borbones, tras una referencia a la situación hacendística durante la Guerra de Sucesión y el aumento de la recaudación motivado fundamentalmente por el recurso a ingresos extraordinarios, nos presenta la reforma del sistema fiscal en los países de la antigua Corona de Aragón fundamentada en un derecho de conquista que posibilitó el logro de las viejas aspiraciones de Olivares de establecer en ellos una carga fiscal similar a la de Castilla, con un sistema moderno establecido en base a diferentes variantes de aquel impuesto único reclamado por los mercantilistas desde las décadas finales del siglo precedente. el *equivalente* en Valencia, la *contribución única* en Aragón y, como versión más perfecta y teóricamente modélica, el *catastro* catalán. Teóricamente porque, en realidad, como el autor advierte, no llegó a ser nunca un impuesto moderno, proporcional a la riqueza, sino más bien un impuesto de reparto tradicional (el intendente distribuía un cupo anual a las distintas poblaciones) donde, por otra parte, su administración nunca fue muy transparente.

Junto a la equiparación fiscal entre Castilla y Aragón, la supersión de *puertos secos* entre los reinos, con la excepción del País Vasco y Navarra, y el incremento en la administración directa de diferentes impuestos jalonaron la política fiscal reformista cuya meta más problemática habría de ser el amplio proyecto de transformación de los impuestos interiores castellanos en una contribución única que gravase la propiedad inmueble, sobre el modelo del catastro catalán. Ese es el objetivo del capítulo IV y último, donde se examinan las vicisitudes del ambicioso plan de Ensenada, su puesta en marcha con los decretos de octubre

de 1749 que planteaban las instrucciones para la realización de la magna encuesta necesaria a fin de «averiguar los efectos en que pueda fundarse la única contribución» y potenciaban en su control la figura de los intendentes, la resistencia popular y nobiliaria y el fracaso de la idea, al final sólo plasmada en «letra muerta». El «catastro de Ensenaña» pasaría, así, a la Historia, más que como un avance de la política fiscal reformista de los Borbones, como un importantísimo vehículo de información sobre la distribución de la propiedad y riqueza contenida en las respuestas a su encuesta preparatoria.

Cierra esta primera parte del volumen el trabajo de Antonio Mestre Sanchís sobre las relaciones Iglesia-Estado y los concordatos de 1737 y 1753. Su punto de partida es la incardinación del regalismo borbónico dentro de la tradición regalista hispana anterior y la negación de su pretendida heterodoxia, apuntando que las diferencias con Roma se debieron a aspectos económicos o a las situaciones bélicas derivadas de los intereses españoles en suelo italiano y no a divergencias en los principios doctrinales. Sus implicaciones con el jansenismo se iniciarían en la segunda mitad del siglo XVIII y no en esta primera etapa, en que el regalismo estaba controlado por los jesuitas, enemigos de los principios doctrinales jansenistas. «De la ruptura de 1709 al acuerdo de Alberoni» de 1717, contenido del capítulo primero, se pasa en los dos restantes al examen del clima, negociación y marco de relaciones perfilado en los concordatos de 1737 y 1753. Del primero, desfavorable en cuestiones económicas a los bienes del clero, al eliminar las exenciones tributarias de los que se adquiriesen en el futuro, en gran medida su ineficacia se debió a la mera afirmación de promesas para el futuro en muchas de sus disposiciones, dejando en pie el problema de fondo, el control de las reservas beneficiales, arrastrado ya desde los Reyes Católicos. Nuevas y dificultosas negociaciones, expuestas con detenimiento, culminaron con la firma del concordato de 11 de enero de 1753, cuyo núcleo, citando a Lamadrid, resume en la abolición de las reservas apostólicas tanto en la provisión de los beneficios como en la percepción de los frutos beneficiales. De ahí los elogios de los españoles y las protestas de quienes participaban del sistema económico de reservas. Fue el final de una etapa del regalismo y el inicio de otra en las relaciones Iglesia-Estado, con predominio indiscutible del poder monárquico. «A partir de ese momento, el regalismo se convierte en el eje de los movimientos doctrinales, eclesiásticos y aun teológicos», con los manteístas en el poder y ya proclive a las ideas jansenistas.

El extenso tratamiento de la política exterior española en la segunda parte del libro se abre con la aportación de José M.^a Jover Zamora y Elena Hernández Sandoica en torno al tema «España y los Tratados de Utrecht». Calificada la Paz de Utrecht como «la primera organización «moderna» del equilibrio y de la estabilidad internacionales», debió en gran medida su vigencia más prolongada a la perfecta adecuación a la realidad del poder de cada uno de los firmantes. La guerra europea, tomando como pretexto las dos candidaturas al trono español, ofreció el marco propicio para la reacomodación de las piezas de un sistema en el que el influjo creciente de un «poder marítimo» de carácter comercial arraigado en el mundo atlántico y ultramarino estaba llamado a compartir el protagonismo con las grandes potencias continentales, más pendientes de problemas

territoriales y dinásticos relacionados con proyectos de hegemonía continental. Desde esta perspectiva, los Tratados de 1713 se presentan como una solución de equilibrio ponderado, racionalmente planificado desde fuera del continente por aquella potencia, Gran Bretaña, que aspiraba a la hegemonía de la navegación comercial y que saldría triunfante con ellos en la escena marítima internacional. En el continente, el equilibrio se fundamentó en el contraste resultante de la existencia de dos potencias, la Francia de los Borbones y el Imperio de los Habsburgo, salvaguardado por Inglaterra de cualquier pretensión hegemónica continental en base al sistema de «barreras» y el control de las rutas marítimas. Convenida la nueva ordenación internacional como acuerdo francobritánico, por lo que los autores hablan de un sistema «anglo-francés» alumbrado en Utrecht, España se limitó a prestar su asentimiento, obligada por las circunstancias. A la vez, la firma de tratados bilaterales con Inglaterra en ese mismo año —de «Asiento de negros», de «Paz y Amistad», de «Comercio y Navegación»—, aseguraron los privilegios británicos en el comercio con las Indias españolas y la cesión de Gibraltar y Menorca.

En la trayectoria histórica de la monarquía española, la Paz implicó un profundo cambio de su *status* territorial, por tres caminos convergentes. a) definitiva renuncia a la herencia de Carlos V, b) ruptura por su eje Norte-Sur de la unidad territorial de la vieja Corona de Aragón tras la pérdida de los dominios italianos, y c) diferente posición de Portugal, consolidado como pieza clave en el dispositivo estratégico de Gran Bretaña y, por ello, en un sistema de poder coordinado pero contrapuesto a aquél en que se insertó España. A partir de entonces, España, con una monarquía mucho más homogénea nacionalmente, «castellana», recogida en el perímetro peninsular pero claramente diferenciada de Portugal, va a avanzar hacia un proceso de atlantización progresiva que, con la pujanza de las Indias españolas en el siglo XVIII, la hará consolidarse como auténtica potencia mundial gracias a su condición atlántica.

Así fijado el marco de relaciones y planteado el clima europeo con que se inicia el período, concluye el volumen con la exposición de la política exterior de España en los reinados de Felipe V y Fernando VI que hace Didier Ozanam. El más amplio de todos los estudios incluidos en él, ocupa aproximadamente un tercio de su extensión total y se estructura en tres capítulos alusivos, respectivamente, a los instrumentos de dicha política y a su desarrollo en ambos reinados. Entre aquéllos, la recapitulación sobre la diplomacia española, reorganizada administrativamente en torno a la Secretaría de Estado para asuntos exteriores que se perfila en 1705 y se esboza definitivamente en 1714 y 1717, le permite atribuir a la baja calidad e improvisación de su personal un cierto protagonismo en el fracaso de la política exterior española. Análisis de los instrumentos de negociación que va seguido de unas amenísimas páginas sobre la reorganización de la marina, impulsada por políticos de la talla de Patiño o Ensenada, conscientes de que era precisamente éste el instrumento del resurgir de España en el concierto de las grandes potencias y que tanta inquietud habría de despertar en la vigilante Inglaterra. Desde una sólida instalación en el poder, ambos políticos, y de modo muy destacado Ensenada, consiguieron levantar a la marina española de su lastimoso estado, potenciando la construcción de buques en nue-

vos arsenales conforme a técnicas modernas que el «espionaje» de Jorge Juan y Ulloa trajo de Europa, la creación de industrias adicionales, la plantación de bosques, la formación de su personal... De manera que a finales de los años 50 la marina española, dotada de buques modernos, bases y arsenales de nivel internacional, constituía una fuerza nada despreciable cuya misión se orientó prioritariamente a la defensa y disuasión, lo que explicaría, a juicio de Ozanam, su escasa eficacia en los enfrentamientos bélicos del momento. Otras interesantes perspectivas del tema, como el papel de «escuela de gestión» de la España preindustrial que supusieron los nuevos métodos de trabajo en los arsenales o la aportación de la marina al progreso del espíritu científico en España son resaltados por el autor como colofón del epígrafe.

Y, junto a la marina, el ejército, que, desde el estado de franco deterioro y desprestigio en que se encontraba a fines del reinado de Carlos II, llegó a convertirse también en un instrumento de peso al servicio de la política exterior en la España ilustrada. Con abundante material informativo, el hispanista francés se recrea en el examen de la evolución del poderío militar español y reorganización del ejército en base a sus finanzas y efectivos, infraestructura administrativa y material, plazas, fortificaciones, armamento y equipamiento, cifrando en gran medida la clave de su progreso en la calidad de sus oficiales y administradores. Las palabras con que concluye el capítulo, y en las que aparece un nuevo calificativo a añadir a esa monarquía «reformadora» y «castellana», dan cabal idea de la importancia que el autor atribuye al ejército en el período: «Oficiales generales, ingenieros militares, funcionarios del ejército proporcionaron al poder, a su acción exterior, a sus estructuras centrales y locales, y a su política económica, el armazón sólido, competente y eficaz que debía llevar al país a realizar progresos considerables. En este sentido, no resulta excesivo afirmar que, en esta época, la monarquía borbónica de España fue esencialmente una monarquía militar»

- o «Felipe V, Isabel Farnesio y el revisionismo mediterráneo (1715-1746)» es el título que elocuentemente encabeza el capítulo II y que fija la clave de la política exterior de esas tres décadas en la obstinada pretensión de conseguir «establecimientos» en suelo italiano para los hijos del primer Borbón y la «ambiciosa parmesana», con el consiguiente replanteamiento del estatuto de Utrecht. Al hacer un balance de la misma, aunque acepta como «original y seductora» la tesis de Seco Serrano según la cual el monarca español, asumiendo la herencia de los reyes aragoneses, habría tratado de asegurarse bases en Africa y en Italia para restablecer en el Mediterráneo el equilibrio de fuerzas roto por la presencia de Inglaterra en Gibraltar y Menorca y la preponderancia de Austria en Italia, se muestra más inclinado por la tradicional atribución a Isabel de Farnesio de la inspiración y responsabilidad de la política familiar e italiana, por sus ambiciones maternas. No hubo, en su opinión, motivaciones estratégicas o económicas en las empresas italianas.

Con la subida al trono de su sucesor, la política exterior («El neutralismo de Fernando VI [1746-1759]») se proyectó sobre unas líneas de fuerza nuevamente definidas: Gibraltar, las Indias y el comercio. La Paz de Aquisgrán, en 1748, marcó claramente la línea de ruptura entre ambos reinados. Los dos grandes

proyectos de Carvajal, su Secretario de Estado, fueron a partir de ahora la obtención de una paz duradera para que España pudiera por fin rehacer fuerzas, restaurando su potencia económica y organizando el aprovechamiento de su inmenso imperio colonial, y la redistribución de alianzas en el equilibrio europeo en virtud de la cual pudiera escapar de la dependencia francesa, estrechar lazos con Portugal y Austria y, sobre todo, establecer una alianza privilegiada con Inglaterra. Pero Carvajal no pudo completar sus objetivos; su muerte, en 1754, y la caída de Ensenada, que compartía sus proyectos, modificaron el planteamiento: de la «neutralidad voluntaria» se pasó a la «neutralidad pasiva», al inmovilismo, impotencia y anarquía de los últimos años de un rey enfermo y loco.

Por eso el denominador común de todo el reinado habría de ser el neutralismo, la constante actitud de expectativa observada por España en el plano internacional. Y si en el reinado anterior la clave de la política externa la había dado el tesón de una madre por asegurar el porvenir de sus hijos, en el presente Ozanam la va a encontrar, en último extremo, en el inestable equilibrio mental del monarca y el celoso cuidado de su esposa, la portuguesa Bárbara de Braganza, por apartarle de toda inquietud y preocupación que pudiera alterarlo. Neurasténico, carente de voluntad propia y sin afición por los negocios del gobierno, Fernando VI no supo o no pudo asumir el papel de dirección y coordinación que, ante la ausencia de una verdadera estructura de gobierno y el funcionamiento independiente de las diversas Secretarías de Estado, se hubiera precisado para desarrollar una política exterior obediente a un plan consciente y maduro como el imaginado por Carvajal. Es una forma de hacer la Historia.

M.ª PAZ ALONSO ROMERO
Universidad de Salamanca

VASSBERG, David E.: *Tierra y sociedad en Castilla. Señores, «poderosos» y campesinos en la España del siglo XVI*, Ed. Crítica, Barcelona, 1986, 331 págs.

1. «El campesinado productor de entonces —escribió hace ya años Noël Salomon refiriéndose a la Castilla de la segunda mitad del XVI— era una magnífica bestia de carga. En sus lomos llevaba a la aristocracia, al estado, a los propietarios de la ciudad, a la Iglesia, a los comerciantes y a los financieros. El edificio de la magnífica sociedad llamada del Siglo de Oro se asentaba en gran parte sobre él. El esplendor y el fasto de la Corte (en especial después de 1598), las vajillas de oro y de plata, los tapices, los palacios que admiraron los viajeros extranjeros del siglo XVII (Madame d'Aulroy, Brunel, etc.) no se explican sólo por los filones de América y por el trabajo de los indios. Estas riquezas, que la aristocracia acumula en las ciudades en plena expansión, en buena parte las extrajo del tenaz trabajo de los destripaterrones, que constituían la base «energética» de la economía peninsular» (*La vida rural castellana en tiempos de Felipe II*, Ed. Ariel, Barcelona, 1982, pág. 213). Esta larga cita del desaparecido

hispanista francés enmarca de forma particularmente expresiva la problemática objeto del presente comentario: la tierra —medio de producción por excelencia en cualquier formación social precapitalista y, desde luego, en la castellana del quinientos— y las relaciones sociales de producción que entablan en torno a ella los diversos grupos o clases sociales. Cuestión, pues, de Historia agraria o rural pero con muchas y muy importantes implicaciones jurídicas (en especial si el estudio transcurre, como es el caso, en el interior del feudalismo tardío o desarrollado), no siempre suficientemente tenidas en cuenta. Campo, en suma, de mutuos desconocimientos entre sus cultivadores específicos y los historiadores del Derecho¹.

David Vassberg, conocido estudioso de estos temas por obvias razones científicas que en su caso son además vitales, con una obra apreciable ya bastante conocida entre nosotros², es el autor del libro que me ocupa cuya edición original inglesa apareció en 1984. En esta ocasión nos presenta «una visión global», «una introducción al tema» (pág. 12) de la tierra, de sus propietarios y de sus poseedores, a pesar de que ya desde el principio no se distinguen adecuadamente ambos conceptos. Todo ello respecto a los territorios peninsulares de la Castilla del xvi, excepción hecha de Galicia, Asturias y las provincias vascas.

La propia estructura de la obra no deja de ser sorprendente. En efecto, a la hora de analizar la propiedad territorial conforme a la naturaleza de sus titulares, cuestión esta a la que se dedica el grueso del estudio, Vassberg abandona la división que se venía haciendo tradicionalmente entre los propietarios (eclesiásticos, nobles, inversores de la clase media y campesinos) y adopta otra, ciertamente más completa aunque no más rigurosa, que se asienta en la distinción entre propiedad pública y propiedad privada. En este sentido, son considerados propietarios públicos el Estado y los municipios, incluyéndose entre los privados todos los que formaban parte de la clasificación tradicional. El empleo tajante, sin ningún matiz, de la dualidad propiedad pública-propiedad privada respecto a ordenamientos jurídicos anteriores al Derecho de la Codificación denota un grave anacronismo conceptual, no por frecuente menos lamentable, al aplicar conceptos de una época a otra bien distinta. Cuando nuestro autor invoca la paternidad de Cárdenas en la aludida distinción parece no ser consciente de los poderosos resortes ideológicos que condicionaron la labor de la historiografía liberal.

1. El interés de los historiadores del Derecho por la historia de la propiedad territorial —de las obras clásicas de Cárdenas y Altamira a los estudios más recientes de Clavero y Mariano Peset, por mencionar algunos ejemplos relevantes— ha venido siendo compatible con una acusada desatención a las mencionadas implicaciones jurídicas de la Historia rural. No deja de ser significativo que no hayan sido objeto de recensión en el ANUARIO libros tan notables en este ámbito como el de Viñas y Mey, el de Bernal para Andalucía Occidental en los siglos xviii-xix, el de Villares sobre la Galicia del Antiguo Régimen o el de Brumont respecto a La Bureba bajo Felipe II. Excepción a esta regla constituye el comentario que escribió TOMÁS Y VALIENTE a la obra de Salomon aparecido en el ANUARIO, XXXIV (1964), págs. 655-659.

2. Vid. *La venta de tierras baldías: El comunitarismo agrario y la corona de Castilla durante el siglo xvi*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1983, reseñado por Pedro GARCÍA MARTÍN en este ANUARIO, LV (1985), págs. 950-952.

Más allá de la cuestión central que acaba de ser planteada, el libro culmina con sendos capítulos en los que se estudian las transformaciones acontecidas en la propiedad territorial y, sobre todo, en la producción así como el problema de quiénes se beneficiaban de los frutos de la tierra. En el terreno de las fuentes, sorprende, y en este caso muy gratamente, el manejo abundante, y desde luego novedoso, de documentación contenciosa proveniente de los Archivos de las Chancillerías de Granada y Valladolid.

2. Con independencia de los problemas conceptuales que han quedado apuntados y que, como veremos, seguirán coleando en el transcurso de estas páginas, parece claro que la aportación más original del libro reside en los tres primeros capítulos. De ahí que debamos prestarles una especial atención.

Del contenido del capítulo primero, y en esta línea también de los dos siguientes, se desprende inequívocamente la entidad que en la problemática de la propiedad de la tierra tuvo el fenómeno de «la tradición comunitaria» o «el sistema comunitario», expresiones ambas que se repiten hasta la saciedad a lo largo de estas páginas. Su lectura muestra bien a las claras su importancia en la Castilla de la baja Edad Media y temprana Edad Moderna así como que, al tratarse de un fenómeno esencialmente consuetudinario, no haya dejado demasiadas huellas escritas y de ahí, quizá, que haya sido minusvalorado por los historiadores. Pero a partir de aquí al lector le asaltan las dudas y los problemas. Posiblemente, en el fondo de todo ello, se esconde el escaso esfuerzo de Vassberg por conceptualizar adecuadamente la tan invocada tradición comunitaria, por definir con precisión sus límites, por huir de las ambigüedades a las que tan fácilmente se presta el tema. Y este tratamiento confuso, unido a una insuficiente comprensión de la distinción entre propiedad y posesión³, llevan a nuestro autor a mezclar o, al menos, a no distinguir con la necesaria claridad, por más que se aborden formalmente en capítulos separados, esa tradición comunitaria —que, en mi opinión, tiene lugar en el plano de la utilización o explotación de la tierra⁴— de la propiedad de los municipios sobre la misma. Por otra parte, su visión peca en buena medida de irreal al no haber tenido suficientemente en cuenta que la consolidación de oligarquías en los concejos castellanos, muy avanzada a la altura del siglo XVI⁵, hubo de incidir de forma negativa en el aprovechamiento comunitario de los terrenos municipales

3. La distinción propiedad-posesión, de cuño romano, consiste esencialmente en la existencia de dos relaciones de pertenencia sobre la misma cosa, si bien de entidad y consecuencias jurídicas muy diversas. Se reconoce tanto en los sistemas normativos inspirados en el Derecho Común como en el correspondiente a la Codificación (vid. J. LALINDE ABADÍA, *Iniciación histórica al Derecho español*. Ed. Ariel, 3.ª ed. actualizada, Barcelona, 1983, págs. 744-745). Como relevantes testimonios normativos de tal reconocimiento en nuestro Derecho pueden mencionarse P., III,2,27; III,30,1-3 y VII,33,10, así como los arts. 348 y ss y 430 y ss. del C. C.

4. En este ámbito tiene lugar precisamente la derrota de mieses, una de las principales manifestaciones del reiteradamente aludido comunitarismo, y de la que Vassberg se ocupa en este capítulo

5. Hecho este unánimemente admitido por la historiografía. Véanse, en el terreno de las obras de conjunto, por no descender a trabajos y monografías, A SACRISTÁN Y MARTÍNEZ, *Municipalidades de Castilla y León*, I.E.A.L., Madrid.

El capítulo segundo, dedicado al estudio de los patrimonios rústicos concejiles, es un buen capítulo, posiblemente el mejor del libro, Vassberg simultanea en estas páginas un aceptable nivel conceptual y, sobre todo y fundamentalmente, se nos muestra como un magnífico conocedor de la documentación relativa a esta temática. En esta ocasión arranca precisando términos y conceptos, lo cual siempre es de agradecer «Propiedad municipal» para él es «el patrimonio de la localidad administrado por el concejo municipal» (pág. 34), tronco que presenta dos grandes ramas: los comunales y los propios. La distinción entre estos dos tipos de bienes, y de ambos con relación a los baldíos, es compleja si bien, en su opinión, las dificultades no derivan tanto de sus respectivos regímenes jurídicos como de una acusada propensión a su aprovechamiento indiscriminado⁶.

Los bienes de propios reciben una atención sucinta que se plasma en los siguientes aspectos. origen, utilización, heterogeneidad y diversa entidad de estos patrimonios y, finalmente, naturaleza jurídica (aquí la amortización pasa bastante desapercibida o, en todo caso, no se le concede la relevancia que merece, y no por casualidad como se verá más adelante).

Por contra, el tratamiento de los terrenos comunales alcanza una riqueza descriptiva realmente notable. Vassberg procede a una clasificación, detallada y minuciosa en grado superlativo, de estos bienes teniendo en cuenta el destino que se les confería. Así, desfilan ante nosotros los diversos tipos de pastos y montes. En cuanto a los labrantíos comunales, la atención se extrema, si cabe, para poner de manifiesto ese mundo variopinto de actuaciones concejiles para regular y organizar su cultivo por parte de los respectivos vecindarios. Buenas páginas, cargadas de rica información. En suma, el mejor Vassberg.

En el capítulo tercero se estudian diversas manifestaciones de la propiedad territorial de los municipios bajo el significativo rótulo de «Otros aspectos del sistema comunitario», lo que nos indica, y el propio contenido del capítulo no lo desdice, que, como ha quedado apuntado, el autor sigue sin deslindar suficientemente la propiedad y el uso de estos bienes. Dentro de un no menos expresivo «comunitarismo intermunicipal» (pág. 83), en pocas pero muy densas páginas, se nos habla de las repercusiones sobre nuestro tema de las comunidades de Villa y Tierra, esas instituciones interconcejiles tan arraigadas en la Cas-

1981, págs. 431-438. A. GARCÍA-GALLO, *Manual de Historia del Derecho Español*, 9.ª ed. revisada, Madrid, 1982, I, párrafos 1259 y 1361. J. A. ESCUDERO, *Curso de Historia del Derecho Fuentes e Instituciones Político-administrativas*, Gráficas Solana, Madrid, 1985, pág. 780. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, *El Antiguo Régimen: los Reyes Católicos y los Austrias*, Alianza Ed.-Alfaguara, Madrid, 1973, págs. 196-197. A. MACKAY, *La España de la Edad Media Desde la frontera hasta el Imperio (1000-1500)*, Ed. Cátedra, 2.ª ed., Madrid, 1981, pág. 173.

6 En Partidas (III,28,9 y 10) se recoge la distinción claramente perfilada aunque sin acuñar del todo las denominaciones que más tarde se harán habituales. «En este trabajo, escribe Vassberg, a menos que esté especificado de otra manera, los conceptos «tierras baldías» y «baldíos» se aplicarán a las tierras realengas no concedidas por la Corona y en consecuencia disponibles al aprovechamiento público» (*La venta...*, pág. 30). «El confuso carácter de los bienes municipales (afirma en la obra que comento) estaba acentuado por el hecho de que frecuentemente los propios habían sido usurpados de los terrenos comunales y, a su vez, ambos procedían de los baldíos» (pág. 41)

tilla de la época. Se nos ofrecen, así, datos acerca de la organización de estas especies de concejos, así como respecto a sus patrimonios rústicos y a cómo eran utilizados por los diversos vecindarios que los integraban

Buena parte de este capítulo se emplea en responder a la cuestión de cómo se protegía a la propiedad municipal de las agresiones provenientes de campesinos y, sobre todo, de miembros de la nobleza y de las oligarquías ciudadanas. Como es obvio, una primera y más destacada línea de defensa pasaba por los propios concejos mediante la actuación de sus oficiales aplicando las ordenanzas municipales, señaladamente aquéllas destinadas de forma específica a la regulación y protección de sus bienes. Por otra parte, los monarcas parecieron sensibilizarse sobre el particular a partir de la aprobación de una ley en las Cortes de Toledo de 1480 que encomendaba a los corregidores la persecución de estas usurpaciones.

En todo caso, el desenlace del capítulo, y con él de los otros dos dedicados a la «propiedad pública» (ya que, como no dejará de observarse, la atención prestada a las tierras de la Corona es mínima), no ofrece dudas: sin perjuicio de que todavía parece pronto para proceder a su cuantificación global, los patrimonios rústicos municipales alcanzaron una enorme envergadura en la Castilla del xvi sobrevivieron no sin dificultades en el xviii, como atestigua el Catastro de Ensenada, para recibir sucesivos golpes de muerte con las desamortizaciones liberales

El capítulo cuarto abre el estudio de la «propiedad privada», en este caso de la perteneciente a los estamentos privilegiados, quienes, en tanto que criterio de estratificación social, siguen gozando de toda la confianza científica de Vassberg ya que, no sólo no los cuestiona, sino que ni siquiera dedica una sola línea a las polémicas doctrinales al respecto. Nobleza, iglesia y órdenes militares son los protagonistas de estas páginas, centrándose el tratamiento en dos ejes estrechamente relacionados. la entidad y configuración de sus respectivas propiedades territoriales y, en segundo lugar, cómo se organizaron las relaciones entre los señores y sus colonos con motivo de la explotación de la tierra. Todo ello con una atención decreciente a las diversas entidades señoriales tal como han quedado enunciadas.

Algunos aspectos me han chocado en el desarrollo del capítulo. La calidad de la descripción desciende de forma apreciable respecto a lo que venía siendo el libro, hay menos apoyos bibliográficos y también menor respaldo documental. En cuanto a cuestiones más de interpretación, el régimen jurídico de estas propiedades pasa prácticamente desapercibido⁷, lo que no puede sorprender dado lo que llevamos visto, y el autor se muestra partidario de una proliferación —a mi entender inexistente o, cuando menos, muy cuestionable— de arrendamientos enfiteúticos en la Castilla de la época, tema que merece ser abordado más despacio en otro lugar de este comentario. En suma, estamos posiblemente ante el capítulo más endeble y criticable de todo el estudio.

La otra vertiente de la «propiedad privada», la perteneciente a los no privilegiados, es objeto del capítulo quinto. Los protagonistas de nuestra historia

7. En el caso del sector laico de la clase feudal, la vinculación se despacha con un par de líneas y una cita de Clavero (pág. 142). Ni se hace mención a la amortización respecto a las tierras de la iglesia y de las órdenes.

son, fundamentalmente, en este caso los campesinos, término del todo insuficiente para expresar la complejidad social que encierra, y los «propietarios burgueses», gentes adineradas de las ciudades que invertían en tierras, por lo común próximas a sus lugares de residencia. En cuanto a los primeros, Vassberg se aventura a conceder una considerable magnitud a su dominio —«me arriesgaría a decir que quizá una quinta parte de las tierras de labranza de Castilla eran propiedad de los campesinos» (pág. 181), escribe— aunque sin avanzar demasiado en la determinación de quiénes se llevaban la parte del león dentro del mundo abigarrado de los que se dedicaban a la producción agropecuaria⁸. Por lo que hace a los segundos, no se asumen riesgos como el antecedente y se les presta una atención mucho menor. No deja de producirse una cierta falta de definición al incluirlos dentro de «los poderosos», término de la época que englobaba a estos inversores burgueses urbanos juntos a labradores enriquecidos.

Por lo demás, sigo observando en este capítulo los mismos defectos que han quedado señalados en el anterior. Tampoco aquí el tratamiento bibliográfico y documental alcanza la altura de los tres primeros capítulos⁹. El desinterés por el régimen jurídico de estas propiedades es absoluto, brilla por su ausencia, y, habida cuenta de lo deficientemente que se planteó la cuestión en las tierras de los privilegiados, no existe ni siquiera posibilidad de contraste. Y continúa esa creencia, abusiva e injustificada, del autor en la amplísima difusión de los arrendamientos enfitéuticos que tendría por beneficiarios —«en unas condiciones que muchas veces resultaban ser más ventajosas que la misma propiedad» (pág. 181)— a los colonos castellanos.

En el capítulo sexto se pueden distinguir dos partes, diversas pero estrechamente relacionadas entre sí. Se plantea Vassberg en primer lugar cómo se explotaban las tierras, lo que supone analizar en primera instancia su distribución

8. «En un sentido estricto, escribe Vassberg en el libro que nos ocupa, no existía una clase «campesina» bien definida en la Castilla del siglo XVI. Algunos de los habitantes de las aldeas rurales eran meros trabajadores asalariados; otros eran aparceros o renteros; otros eran propietarios de granjas familiares, o prósperos hacendados, o ganaderos con un gran número de trabajadores asalariados; también había terratenientes absentistas, a los que podríamos denominar «campesinos». Además, existía una frecuente superposición de estas categorías. Así, pues, el término «campesino» es demasiado amplio para resultar útil, excepto al designar a la población rural o la directamente vinculada a la producción agropecuaria, ya fuera por trabajar directamente los campos o por poseer las tierras» (pág. 187). Al enfrentarse a estos temas facilita mucho las cosas un buen instrumental conceptual («Por clase social entendemos ante todo un conjunto de personas que tienen una función similar en la producción y están, respecto a otras, en idénticas relaciones. Si la expresión «clase social» tiene para nosotros un sentido, es en primer lugar al nivel de las relaciones de producción. Es una noción que se define por el tipo de propiedad o por la ausencia de propiedad, y que no queremos confundir con la «categoría social», que se define en especial por la técnica, el oficio e incluso el estatuto jurídico». N. SALOMON, *La vida rural*, pág. 259).

9. Al acudir una vez más a la repoblación, en este caso para estudiar los orígenes de la «propiedad campesina», junto a la mención de un trabajo claramente secundario de SÁNCHEZ-ALBORNOZ, resalta la ausencia de su notable «Despoblación y repoblación del valle del Duero», Instituto de Historia de España, Buenos Aires, 1966.

entre tierras de labranza, pastos y montes o bosques. La tendencia general del fenómeno queda apuntada con claridad: impulsada por aumentos demográficos drásticos e incuestionables, la Castilla del quinientos continuó desforestándose a pasos agigantados y predominaron de forma cada vez más acusada los cultivos sobre los pastos. Todo ello hacia una agricultura extensiva, sin apenas transformaciones cualitativas en los medios de producción. El único cambio tecnológico de consideración, «revolucionario en ciertos aspectos» (pág. 205), consistió en una sustitución gradual de bueyes por mulas como animales de labor.

Por otra parte, las crecientes dificultades financieras de los monarcas —como escribe el autor, «Carlos V y Felipe II tenían tantos apuros económicos que estaban dispuestos a vender lo que fuera» (pág. 218)— afectaron directamente al régimen jurídico de las tierras. En esta línea se inscriben las abundantes concesiones de villazgos a los pueblos que las pagaron o las ventas que, con escaso éxito económico, llevó a cabo la Corona del privilegio de acotamiento o cerramiento, con la secuela de erradicar la vieja tradición de la derrota de mises y constituir los llamados «cotos redondos» o «dehesas». Sin olvidar las masivas ventas de baldíos, operación sustanciosa para la hacienda filipina, como el propio Vassberg ha demostrado en un libro anterior¹⁰.

La obra que vengo comentando culmina con un capítulo en el que se nos presenta un interesante catálogo de cuestiones —inmersas todas ellas, en una u otra medida, en la economía rural del XVI— que contribuyeron a deteriorar la situación del campesino castellano, claro está que más o menos, teniendo en cuenta la consabida heterogeneidad que encierra este término. Era el caso de la profusión de mercados —las grandes ferias francas anuales y, también y sobre todo, los numerosísimos mercados semanales de pueblos y lugares— o de ese «mercantilismo municipal» (pág. 241) que controlaba hasta lo más recóndito de las actividades productivas e intermediadoras. Por no hablar de la política de tasas de los diversos granos, establecida (y ya no abandonada) desde el principio de la centuria.

Se pregunta Vassberg por qué los cultivos producían poco, cada vez menos, a medida que transcurría el siglo, contestando con acierto que «la culpa no era del entorno» sino más bien «de las instituciones creadas por el hombre, que no eran eficaces ni permitían un aprovechamiento adecuado de los recursos existentes» (pág. 256). Y aborda problemas de tanta incidencia en las economías campesinas como el endeudamiento por la vía de los censos o el coste de los arrendamientos. Por si todo lo anterior fuera poco, sobre las espaldas de estos desgraciados recaía en su mayor parte un conjunto, abigarrado y no precisamente armonioso ni liviano, de impuestos que el autor conceptúa atinadamente como «un medio institucionalizado para transferir a las clases privilegiadas de la sociedad los excedentes agrícolas» (pág. 281).

Y es que, en verdad, todo arrancaba de ahí, frente a tanta visión historiográfica idealista aún por erradicar. Como bien escribe Vassberg (al igual que hiciera Salomon en el texto que abre esta reseña) en las líneas finales de su libro: «Mientras los campesinos castellanos fueron capaces de generar unos saneados

10. Vid. nota 2.

excedentes, el imperio pudo mantener su prestigio y sustentar a las hordas de burócratas, juristas, clérigos, soldados y otros miembros no productivos de la sociedad que constituían el símbolo de su gloria. Pero cuando la producción agraria empezó a flaquear, el edificio entero comenzó a derrumbarse; y ni siquiera el tesoro de las Indias pudo evitarlo, puesto que sus cimientos ya estaban socavados» (pág. 293).

Aun a riesgo de prolijidad, se me permitirá una observación final relativa a aspectos formales. Así como la documentación aparece correctamente citada a pie de página, la forma de citar la bibliografía —en el texto, y de manera muy incompleta— resulta incómoda porque obliga al lector a acudir constantemente a la relación bibliográfica.

3 Estas páginas se han ido extendiendo más de la cuenta y es hora ya de darles fin. Pero no sin manifestar sin ambages que las inexcusables implicaciones jurídicas de la problemática no han sido bien resueltas, me atrevería a afirmar que casi ignoradas, por no decir que se ha incurrido en graves vicios conceptuales, que tanto lastran esta obra, valiosa por lo demás en otros aspectos.

Los historiadores juristas sabemos que la evolución del Derecho no es algo lineal, una continuidad sin sobresaltos. Estamos acostumbrados a comprobar cómo en la vida de las instituciones hay hitos, transformaciones de gran calado, no por lentas en su gestación menos subversivas una vez que plasman, auténticamente revolucionarias en ocasiones. Es el caso de la propiedad, paradigmático donde los haya. Frente a la vieja propiedad feudal, la nueva o liberal, de las que nos ha hablado Mariano Peset, y cuya concreción para Castilla en el caso de la primera con tanta lucidez estudió Clavero (respectivamente, *Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra*, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1982, y *Mayorazgo Propiedad feudal en Castilla (1369-1836)*, Siglo XXI Ed., Madrid, 1974) Frente a la propiedad dividida, explotada en régimen señorial, vinculada o amortizada, de titularidad fundamentalmente señorial, la propiedad privada, individual, plena y libre. En última instancia, burguesía revolucionaria *versus* clase feudal laica y eclesiástica. Y la no siempre bien apreciada importancia del Derecho en la lucha de clases, «porque, como ha escrito con tino Tomás y Valiente, una revolución es precisamente la sustitución de un orden jurídico por otro radicalmente distinto, es decir, diferente en su raíz última. Con leyes no se hacen las revoluciones, pero en leyes cristalizan y esas normas jurídicas no crean por sí solas una nueva forma de sociedad, pero la hacen posible y en alguna medida la encauzan y orientan. Esa es, en circunstancias de cambio social profundo, la función del Derecho, que no es pequeña» (*La obra legislativa y el desmantelamiento del Antiguo Régimen*, en «Historia de España, fundada por Ramón Menéndez Pidal, dirigida por José María Jover Zamora», Ed. Espasa-Calpe, XXXIV, Madrid, 1981, pág. 193).

Pues bien, compruebo una vez más¹¹ que estas importantes cuestiones con-

11. Ya apunté carencias en el sentido apuntado en mi recensión al libro de J. DONÉZAR, *Riqueza y Propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen. La provincia de Toledo en el siglo XVIII*, Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, Madrid, 1984, aparecida en este ANUARIO, LV (1985), páginas 857-864.

ceptuales —si no obvias e incuestionables, desde luego aceptadas sin demasiados problemas entre nosotros— no reciben la atención que merecen, por no decir que son ignoradas supinamente, por quienes cultivan la historia rural.

Porque, una vez culminada la obra de Vassberg, en la Castilla tardofeudal, el lector puede preguntarse sin hipérbole, y la duda de por sí es suficientemente significativa, qué tipo de propiedad era el dominante en aquella sociedad. Las alusiones —leves y pasajeras, cuando existen— a la vinculación y a la amortización podrían hacerle pensar que está ante la propiedad feudal, mientras que esa rígida e indiscriminada distinción entre la propiedad pública y la privada es más bien predicable de la propiedad capitalista. ¿No denota todo esto, unido a significativos y reiterados descuidos formales¹², un notable grado de menosprecio hacia la Historia del Derecho como ciencia que estudia la función de lo jurídico en las sociedades del pasado?

Por si quedaran dudas acerca de esta actitud del autor, su análisis de la cuestión de la enfiteusis acabará por despejarlas. Como ha quedado apuntado en algunos lugares de este comentario, Vassberg mantiene que esta figura contractual se difundió masivamente a lo largo y a lo ancho del territorio castellano. O dicho en otros términos, que los colonos fueron capaces de imponer a sus señores —a todos, a nobles, eclesiásticos y órdenes militares— arrendamientos perpetuos o a muy largo plazo, a cambio del pago anual de un canon que difícilmente se revisaba, «en unas condiciones que muchas veces resultaban ser más ventajosas que la misma propiedad» (pág. 181). Con lo que la anécdota —la existencia de testimonios documentales aislados— se eleva a categoría.

Pero no parecen ser éstos los derroteros del problema. Muy por el contrario. Clavero, a quien paradójicamente no se deja de citar en la bibliografía, ha demostrado —y se trata de una de las tesis centrales de su libro— cómo la reacción feudal triunfante en la Castilla de finales del xiv, a diferencia de lo acontecido en otros territorios, abolió la relación enfiteútica, es decir, privó al colono del dominio útil, de la posibilidad de gozar de un derecho real subordinado. Y cómo esta supresión se mantuvo en el régimen de la propiedad feudal laica durante la Edad Moderna hasta el extremo de encarnarse, de hacerse consustancial con el

12. Ahí está esa cita no original de Partidas de pág. 37. O las correspondientes a Nov. R. de las que se desprende una no excesiva familiaridad en su manejo. Por no hablar de un empleo reiteradísimo de la expresión «concejo municipal» o «ayuntamiento municipal», o «los funcionarios del ayuntamiento», de la frecuencia con que aparece el término «concejales» en lugar de regidores.

13. *Mayorazgo.*., *passim*. Verdaderamente la tesis aludida recorre la obra de arriba abajo y podrían multiplicarse las referencias al respecto. Es muy significativo, también en este sentido, que Clavero defina al mayorazgo como «aquella forma del modo de propiedad vinculada cuyo régimen concreto somete a las condiciones de la propiedad territorial feudal al colonato por medio de la prohibición de enfiteusis, a la burguesía gracias a la vinculación estricta y general, y a la corona mediante la inconfiscabilidad incluso en los delitos exceptuados, imponiendo al mismo tiempo, en beneficio de las líneas principales de la clase feudal, un proceso de acrecentamiento y acumulación patrimonial» (ibíd., pág. 278). Incluso se apunta la posibilidad de que la abolición de la enfiteusis se hiciera extensible a la propiedad feudal eclesiástica (ibíd., pág. 330).

mayorazgo, institución destinada a garantizar la perpetuación de este tipo de dominio ¹³.

Termino ya. Con la esperanza en la superación de las incomprensiones mutuas entre los historiadores agrarios y los del Derecho. Unos y otros hemos de aprender cosas recíprocamente. En beneficio de todos.

JAVIER INFANTE MIGUEL-MOTTA
Universidad de Salamanca

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

BISCHOFF, B.: *Paléographie de l'antiquité romaine et du moyen âge occidental*, tr. por H. Atsma y J. Vezin (Paris, Ed. Piccard, 1985), (326 págs. + 23 láminas fotográficas).

Este libro contiene una historia de la escritura latina desde sus comienzos en Roma y su evolución en los diversos países medievales hasta la aparición de la imprenta. Se añade, además el tratamiento de la iluminación de los libros y la realización material de los mismos desde la fabricación del soporte material de la escritura hasta la encuadernación que es el último estadio de este proceso. De estas páginas emerge el libro como soporte material de algo tan inmaterial como es la historia intelectual en la Antigüedad y Medievo.

El libro está dividido en cuatro partes: codicología, historia de la escritura latina, signos accesorios de la escritura y el manuscrito y la historia de la cultura. La primera parte consta de cuatro apartados: soporte de la escritura y utensilios de los escribas (papiro, pergamino, palimpsestos, papel, tabletas de cera, otros soportes de la escritura, tintas y colores, instrumentos para escribir), formas exteriores de los manuscritos (codex, formato, impaginación, encuadernación, rótulos y hojas plegadas, *tabulae*, documentos y cartas), escribir y transcribir, falsificaciones.

La segunda parte, sobre historia de la escritura latina, se subdivide en tres apartados: la antigüedad (escritura latina, escritura capital, cursiva romana antigua, cursiva romana reciente, uncial, semiuncial antigua [oriental], semiuncial reciente, combinaciones de diversos tipos de escrituras, taquigrafía), Edad Media (escritura latina irlandesa, anglosajona, visigótica [mozárabe], escritura del Sinaí, evolución de la escritura hacia la minúscula de Italia y Francia, escritura beneventana, apogeo y triunfo de la minúscula carolingia, evolución de la escritura desde finales del siglo IX hasta el siglo XII, la textura o escritura textual gótica, la cursiva gótica y la bastarda, la escritura humanística.

La tercera parte, sobre los signos accesorios de la escritura trata de las abreviaciones, signos de puntuación y similares, notación musical, cifras y escrituras cifradas.

Por fin, la cuarta parte, que trata del manuscrito en el contexto de la historia de la cultura, desarrolla el tema siguiendo el mismo orden espacio-temporal de los apartados anteriores: antigüedad, alto medievo, época carolingia, del siglo X al XII, bajo medievo, la época del humanismo.

Completan el volumen 32 láminas representativas de las principales escrituras y unos buenos índices de siglas, bibliografía, manuscritos citados, autores citados, nombres, materias y figuras o diseños contenidos en el texto.

Este manual recoge el fruto de 50 años de investigación, estudio y docencia del Prof. Bernhard Bischoff en la Universidad de Munich, que le han dado a conocer internacionalmente. Para esta traducción francesa, la obra de Bischoff ha sido puesta al día previamente. Para la Península Ibérica sigue muy de cerca

el *Tratado de Paleografía* de Agustín Millares Carlo, en su edición de 1983 (ver reseña de este último en AHDE 55, 1985, 923-26). Esta obra contiene el máximo de información en el mínimo de espacio. Constituye un manual solvente, de rápida y fácil consulta.

ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA

1. BROMMER, P.: «*Capitula episcoporum*». *Die bischöflichen Kapitularien des 9. und 10. Jahrhunderts* (Typologie des Sources du Moyen Âge Occidental fasc. 43: A-III.1* ; Turnhout, Brepols, 1985), 66 págs.
2. BAZAN, B. C. - WIPPEL, J. W. - FRANSEN, G. - JACQUART, D.: *Les questions disputées et les questions quodlibétiques de théologie, de droit et de médecine* (Typologie des Sources du Moyen Âge Occidental fasc. 44-45: A-III, 1*, A-V, C. 6* et D, 2* ; Turnhout, Brepols, 1985), 315 págs.
3. VOGUÉ, A. de: *Les règles monastiques anciennes (400-700)* (Typologie des Sources du Moyen Âge Occidental fasc. 46: A-III.1* , Turnhout, Brepols, 1985), 62 págs.

La bien conocida serie *Typologie des Sources du Moyen Age Occidental*, dirigida por L. Génicot, se enriquece constantemente con nuevos títulos. Aunque el esquema expositivo de cada tipo de fuentes es sensiblemente parecido, los contenidos son variables y variados, como veremos seguidamente.

1 Larga es ya la lista de bibliografía y ediciones de los alrededor de 50 capitulares que de los obispos carolingios se conservan. El presente fascículo contiene una espléndida síntesis de cuanto de valdiero se ha escrito sobre este argumento. Su autor, que cuenta en su haber más de diez publicaciones sobre los capitulares, enriquece esta exposición con interesantes aportaciones suyas. En un primer capítulo trata de fijar el concepto de capitulares episcopales, diferenciándolos cuidadosamente de otros géneros análogos, como los capitulares de los reyes carolingios, cartas, libros, penitenciales, constituciones sinodales, sermones sinodales, enviados como visitadores, colecciones canónicas, etc. Completan este primer apartado diversas observaciones sobre la morfología de los capitulares de los obispos. En el segundo capítulo se describe la finalidad reformista de los capitulares junto con su área espaciotemporal de vigencia, que se extiende a los territorios francos entre el año 800 y el 950. El capítulo siguiente contiene útiles observaciones sobre el uso inteligente de estas fuentes. El cap. 4 se ocupa de las ediciones y traducciones. En el quinto se describe la temática de los capitulares, que cubre la totalidad de los diferentes aspectos de la vida eclesiástica de las respectivas iglesias. Esta exposición se cierra con el cap. 6, en el que

se ofrece una valoración de los capitulares, que han sido calificados como los testigos mejores para conocer la vida real de las iglesias francas del siglo IX-X. Una buena bibliografía antecede a toda esta exposición. Difícilmente se podía concebir ni realizar un manual mejor en menos espacio, que no sólo será útil a los lectores cultos en general sino incluso a los especialistas en esta clase de fuentes históricas.

2. En este tomo, cinco veces más voluminoso que los otros dos que aquí reseñamos, se expone el tema de las cuestiones disputadas tal como se desarrolló en el área de cuatro saberes como la teología, la filosofía, ambos derechos y la medicina. Las cuestiones disputadas o *disputatio* tenían la doble finalidad de suscitar y desarrollar en los escolares la capacidad dialéctica. Aunque con variaciones muy importantes en cada una de las cuatro especialidades indicadas, se expone aquí el concepto de este género, su deslinde con otras realidades más o menos afines, clases de disputaciones, metodología para su utilización científica, difusión de este género, aspectos de la historia medieval afectados por este tipo de fuentes. Con este esquema como telón de fondo, cada uno de los autores, todos ellos especialistas bien conocidos en su respectiva parcela, ofrece una espléndida síntesis, constantemente enriquecida con nuevos matices y puntos de vista. Imposible reflejar en una simple reseña, toda la riqueza de información que hay en este volumen sobre un género de fuentes como las cuestiones disputadas, cuya importancia y trascendencia para el progreso científico fue enorme, pese a que permaneció un tanto ignorada hasta una época relativamente reciente. Para los lectores de una revista jurídica como la presente, conviene llamar la atención sobre la importancia especial que para la historia del derecho tiene el estudio del Prof. Gérard Fransen (pp. 223-77) sobre las cuestiones disputadas de los civilistas y canonistas. Su alto grado de especialización en este campo, bien conocido de todos por sus numerosas publicaciones sobre las cuestiones de los canonistas, le ha permitido realizar la mejor exposición de conjunto que hoy día tenemos sobre este argumento

3. Contrariamente a lo que ocurre con los dos primeros títulos aquí reseñados, la bibliografía sobre la tipología de las antiguas reglas monásticas es realmente escasa. De ahí la relativa amplitud que el autor dedica al análisis del concepto de este género o tipo de fuentes y a sus coincidencias y diferencias con otros dominios relacionados con él, su evolución (dimensiones, estructura, terminología, instituciones), sus diversos tipos, ámbitos o instancias en conexión con ellos, etc. El segundo capítulo trata de los métodos de investigación y problemas críticos de este género de fuentes. *investigación de las fuentes* (genealogía de la obra, cronología, determinación de las fuentes de cada texto, distinguir lugares paralelos y fuentes, sinopsis completa de cada texto), *autores, redactores, compiladores* (posibilidad de varios autores declarados y un solo redactor, distinción entre compilador y autor), *manuscritos y estados del texto, colecciones y mosaicos de textos* (estructura de los textos, posible anterioridad de textos breves, la edad de los manuscritos, *codex regularum* y *corpus regularum*, mosaicos de textos), *principios y problemas de interpretación* (comparaciones a distancia, silencios, abreviaciones y omisiones, transcripción y redacción original). El cap. 3 trata de la expansión y conservación de las reglas monásticas. En el cap. 4 se da

una valoración crítica de las ediciones tanto antiguas (*Codex regularum* de Holste-Brockie y *Concordia regularum* de Ménard) como recientes, sin olvidar ciertas lecciones que se desprenden para futuros trabajos en este sector. El cap. 5 trata del impacto ejercido por este género tanto hacia dentro del mundo monacal, como hacia afuera en la sociedad circundante. En un apéndice se ofrece una ficha muy útil de cada una de las casi 50 reglas aquí reseñadas, en las que se contiene la indicación de las piezas si son varias, autor, lugar y fecha de aparición, destinatarios, principales fuentes y ediciones de cada una de las reglas.

ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA

CASELLI, G.: *El Imperio Romano y la Europa Medieval*, tr. por J. M. Ibeas (La vida en el pasado 3; Madrid, Ediciones Generales Anaya, 1985), 48 págs.

Esta obrita es traducción de la primera edición inglesa de 1983. En ella se describe brevemente y se ofrecen innumerables gráficos de los principales utensilios e instrumentos tecnológicos propios de la cultura celta, romana, anglosajona, bizantina, árabe, vikinga, feudal y eclesiástica que se suceden y en parte coinciden a lo largo de los primeros 13 siglos de la era cristiana. Costumbres, ambiente, objetos y artículos de uso cotidiano en cada uno de los períodos históricos quedan reconstruidos en estas páginas de acuerdo con las más recientes investigaciones en este campo. La utilidad de esta obrita radica en que ofrece lo que suele omitirse en obras históricas de mayor mole y alcance. La excelente presentación tipográfica y la perfección de sus dibujos y colorido subraya la utilidad y atractivo de esta publicación, que resulta altamente intuitiva y pedagógica.

ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA

CASTILLEJO BENAVENTE, A.: *Manuscritos jurídicos de la Biblioteca Universitaria de Sevilla* (Biblioteca Universitaria 6; Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1986), 269 págs.

En este volumen se catalogan 114 manuscritos jurídicos que hoy día se conservan en la Biblioteca Universitaria de Sevilla. En ellos se contiene un crecido número de obras de más de 150 juristas que figuran nominalmente, sin contar la larga lista de anónimos. Sesenta de estos manuscritos proceden de Salamanca, y consisten generalmente en lecciones de profesores de su Universidad. Otros nueve provienen de Alcalá, Córdoba, Madrid, Osuna y Valencia. El resto de los códices carece de indicaciones de origen. El hecho de que la mayoría provenga de Salamanca es un dato importante para la historia de la enseñanza del derecho en la España moderna, particularmente en el siglo xvii. La mayoría de los có-

dices están datados, pero la data no se refiere a la fecha de copia del manuscrito, sino a la fecha en que el profesor en cuestión impartió su lectura en las aulas universitarias. En todo caso, la labor del amanuense parece que fue contemporánea de la del profesor. Según la cronología resultante de estas indicaciones, hay aquí 10 obras del siglo XVI (1564-1599), cerca de un centenar del siglo XVII, 8 del siglo XVIII, 14 del siglo XIX. Quedan, en fin, 37 sin esta clase de indicaciones cronológicas, las cuales, por otros criterios se adscriben de un modo más aproximativo a los siglos XVI-XIX.

El catálogo está bien concebido y bien realizado, incluso desde el punto de vista tipográfico. Para la utilización de su contenido, ayudan mucho los siguientes índices que se incluyen al final de la obra; poseedores, usuarios y procedencias; índice cronológico; de lugar de origen de los manuscritos; de amanuenses; manuscritos editados, que son realmente muy pocos; índice de textos legales comentados; de autores y de obras anónimas. La realización de un catálogo de manuscritos resulta siempre una tarea muy ardua. En este caso la dificultad ha sido todavía mayor, porque sobre la inmensa mayoría de estos juristas no sabemos nada o casi nada, ya que se carece de una mínima investigación sobre ellos. El autor de este libro pone al alcance de los estudiosos un gran instrumento de trabajo para iniciar esta investigación. Curiosamente, no es sólo la Biblioteca Universitaria Hispalense la que conserva tan crecido número de códices jurídicos salmantinos, sino que se registra el mismo fenómeno en otras muchas de la Península Ibérica, mientras que en Salamanca no se conservan códices de muchos de estos autores. La paradoja creo que es sólo aparente. La mayoría de los escolares no eran salmantinos, sino forasteros, y de su mano emigraron los códices (que eran verdaderos manuales de clase) de la Ciudad del Tormes. El mismo fenómeno había ocurrido en los tiempos anteriores a la imprenta, como puede verse en el siguiente artículo: «Códices jurídicos medievales salmanticenses», *Satura Roberto Feenstra sexagesimum quintum annum aetatis complenti ab alumnis collegis amicis oblata* (Fribourg/Suisse 1985) 463-76.

ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA

DE LA GRANJA, José Luis: *Nacionalismo y II República en el País Vasco. Estatutos de autonomía, partidos y elecciones. Historia de Acción Nacionalista Vasca, 1930-1936*, Madrid (Centro de Investigaciones Sociológicas y Siglo XXI de España Editores), 1986, XXIV + 687 págs.

El múltiple título de este volumen, aunque sólo el primero figure en portada, tiene su explicación: se trata de una tesis doctoral sobre Acción Nacionalista Vasca que se desbordó, mas el desbordamiento se produjo sin pérdida de control ni dominio de la materia, resultando el más completo y penetrante estudio de la vida política vasca entre la descomposición de la Primera Dictadura por empuje democrático y la fractura de la Segunda República por rebelión militar.

Buena elaboración y presentación de los datos electorales (municipales de abril del 31; constituyentes de junio; locales parciales de abril del 33, con la novedad del voto femenino; de vocales del Tribunal de Garantías Constitucionales en septiembre del 33; refrendo del proyecto estatutario y generales de noviembre del mismo 33, generales nuevamente de febrero del 36) y abundante información, aunque de análisis menos logrado a mi juicio, del largo proceso estatuyente (proyecto de la Sociedad de Estudios Vascos, Asamblea de Estella, proyecto de las Comisiones Gestoras provinciales o Diputaciones interinas, Asambleas de Pamplona y de Vitoria, referido refrendo, estancamiento parlamentario y Estatuto del 36), el título destacado en portada se encuentra plenamente justificado, tanto como los restantes. Dan la medida de su aportación.

B CLAVERO

DUARTE I MONTSERRAT, C.: *El vocabulari jurídic del «Llibre de les costums de Tortosa»* (MS de 1272) (Estudis 4: Barcelona, 1985), 128 págs.

El presente estudio trata del léxico jurídico de *Les costums de Tortosa*. Se tiene noticia de 5 manuscritos de esta colección jurídica. uno de 1272, que sirve de base a este estudio, otro de 1277-79 (ambos conservados en el Archivo Municipal de Tortosa) y otros tres hoy perdidos. El MS de 1272 pertenece a muy buena época dentro del contexto de la formación y consolidación de la lengua catalana. En estas fechas de la segunda mitad del siglo XIII se disponía Raimundo Lulio a iniciar el ciclo de sus obras en catalán. En este manuscrito de 299 folios se estudian los primeros 50 folios, donde se contienen unos 600 términos jurídicos, de los cuales se ofrece aquí un muestrario, que comprende aproximadamente un 1.6 por 100 del total, ya que se limita a las palabras que comienzan por alguna de las primeras cuatro letras del alfabeto (ABCD), de las que se da su significado y lugares paralelos de otros textos catalanes antiguos. De los restantes, a partir de la E tan sólo se da una lista de las palabras, sin comentarios a las mismas. Por cierto que una tabla de las siglas con que se citan los textos catalanes antiguos hubiese ahorrado al lector tener que identificarlas, no sin cierta dificultad, en las páginas del estudio introductorio. Otra observación más de fondo consiste en que hubiese sido oportuno distinguir claramente los términos y conceptos de derecho catalán propiamente dicho de los que están tomados del derecho común medieval. Estas posibles limitaciones no empañan el mérito indudable de este estudio.

ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA

FAGOAGA, Concha: *La voz y el voto de las mujeres. El sufragismo en España, 1877-1931*, Barcelona (Editorial Icaria), 1985, 214 págs.

Artículo 3 del Reglamento de las Cortes de 1810: «No se permitirá a las mujeres la entrada en ninguna de las galerías de la Sala de sesiones. Los hombres de todas clases podrán indistintamente asistir a ellas (...)»; artículo 25 de la Constitución de 1931: «No podrá(n) ser fundamento de privilegio jurídico: (...) el sexo (...)»; entre uno y otro, entre la negativa a admitir a la mujer ni siquiera como espectadora y el principio de que no cabe distinción jurídica por razón de sexo, corre una larga historia, la historia de la más seria discriminación constitucional, aquella que, al contrario que la otra mencionada de la clase, no puede ni individualmente superarse.

Esta historia la sigue Fagoaga partiendo de dichos mismos inicios y centrando su atención en una época más avanzada de debate público; sendos capítulos se dedican a los indicios de unos primeros mensajes sufragistas; a las propuestas parlamentarias sobre el voto de la mujer durante la Restauración; a la aparición de un movimiento más específicamente feminista, con su debilidad interna y con sus conexiones internacionales; al planteamiento de un sufragio femenino por la legislación de la Dictadura, y a su consagración final por las Constituyentes del 31. Resulta a menudo un repaso más bien panorámico y no exento de algún error en materia de derecho, pese a proceder de una tesis doctoral, pero reúne información muy instructiva para extremo tan cardinal como descuidado. Los historiadores siguen por lo regular sin darse por enterados de una verdad tan elemental como la formulada por *La Voz de la Mujer*, allá por 1928: «No puede llamarse sufragio universal al que no abarca el de la mujer».

No era la única cuestión; más naturalmente había; he aquí propuestas de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas hechas llegar en 1921 a la Comisión de Códigos: igualdad de derechos y deberes en la sociedad conyugal, con personalidad jurídica plena de la mujer; igualación de penas por abandono de hogar o por adulterio; equiparación de hijos legítimos e ilegítimos. El problema de que la mujer «no pueda abrir una cuenta corriente, concertar un seguro de vida (o) ni ser siquiera testigo de un testamento» no parecía separable del de su privación de derechos ciudadanos, de participar en las elecciones como de formar parte del Jurado, también por ejemplo. Alguna referencia al «Código Napoleón» tampoco falta.

Pero esto aquí no es más que la punta de un iceberg no emergido; la tesis se contenta con la crónica, conforme a su título al cabo: *voto* desde que hay *voz*, esencialmente de prensa. Para tiempo anterior habla Fagoaga de la «invisibilidad del objeto»; sumergido ciertamente estaba, pero una mirada más atenta a la misma constitución doméstica ya podría acercarlo a la superficie.

B. CLAVERO

GAUDEMET, J.: *Les sources du droit de l'Église en Occident du II^e au VII^e* (Initiations au christianisme ancien 1; Paris, Ed. du Cerf-Ed. du C.N.R.S., 1985), 188 págs.

Con este volumen se abre una nueva serie dirigida al gran público culto. Como el título bien expresa, trátase en este primer volumen de una historia de las fuentes del derecho canónico y no de una historia de dicha disciplina en toda su amplitud. En sucesivos capítulos se abordan estos temas: el ciclo de las colecciones llamadas pseudoapostólicas, la legislación conciliar del siglo IV, las decretales pontificias del siglo IV-V, el derecho romano en la iglesia del mismo período, las decretales pontificias dentro del mismo ámbito cronológico, las colecciones canónicas hasta el siglo V, desarrollo de la legislación pontificia en los siglos VI-VII, la actividad conciliar de la misma época, los primeros penitenciales, las colecciones canónicas en los siglos VI-VII. La presente obra tiene en común con las que le precedieron el rigor científico, y difiere de ellas en que se dirige no sólo a estudiosos y estudiantes de historia del derecho canónico, sino al público culto en general. Esto se advierte no sólo en la intención de la serie en que aparece, sino también por la forma de exposición y por el carácter selectivo de las fuentes y bibliografía, donde se ofrecen los títulos necesarios y suficientes. Este libro tampoco carece de toda utilidad para los profesionales, ya que en muchos casos encontrarán aquí una puesta al día que se echa de menos en las anteriores publicaciones, aparecidas hace ya bastantes años. Los lectores encontrarán aquí una exposición no sólo de detalle, sino también del proceso que siguieron los textos canónicos de los siete primeros siglos, que se difunden en colecciones privadas, sin ningún refrendo de la autoridad eclesiástica, descollando en el firmamento de esta actividad compilatoria la Dionisiana y la Hispana.

ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA

GOÑI, GAZTAMBIDE, J.: *Historia de los obispos de Pamplona, 3-4: Siglo XVI* (Pamplona, Ediciones Univ. de Navarra-Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra-Institución Príncipe de Viana, 1985), 706 + 634 págs.

Con estos dos volúmenes, el Dr. D. José Goñi Gaztambide concluye su espléndida obra sobre los obispos de Pamplona. En la *Rev. Esp. de Der. Can.* 36 (1980) 627-28, tuve el honor de reseñar en su día los dos primeros tomos, correspondientes a los siglos XII-XV. En realidad, tendría que repetir aquí las apreciaciones altamente positivas que allí reflejaba, salvo dos consideraciones. La primera se refiere al hecho de que esta historia se vuelve todavía más interesante en el siglo XVI, porque los obispos navarros participaron en episodios de la historia tanto eclesiástica como profana de mayor relevancia. La segunda consiste en que en estos dos tomos del siglo XVI, en vez de presentar la obra dividida

en tantos apartados principales como obispos, como en los volúmenes anteriores, aquí se introduce una división sistemática con incidencia mayor en la línea evolutiva de esta historia. El Dr. Goñi distingue, en efecto, tres períodos en el episcopado navarro del siglo XVI: decadencia (1507-39), reforma católica (1539-61) y contrarreforma (1561-1600). A esto se refería una pequeña observación crítica mía a los dos primeros volúmenes.

La secuencia de obispos navarros es la siguiente. Card. Fazio Santori, Card. Amaneo de Labrit, Card. Alejandro Cesarini y Juan Rena en el primero de los períodos indicados; Pedro Pacheco, Antonio Fonseca y Alvaro Moscoso en el segundo; y Diego Ramírez Sedeño de Fuenleal, Antonio Manrique de Valencia, Pedro de la Fuente, Card. Bernardo de Rojas y Sandoval, Antonio Zapata y Sandoval en el tercero.

Cualquiera de estos obispos ejercía un gran influjo no sólo en la Iglesia sino también en la sociedad circundante. Por ello, el interés de esta historia se multiplica por el número de aspectos relevantes en la vida de aquella sociedad. Para circunscribirnos a aspectos jurídico-canónico-pastorales, en esta obra se encuentran tratamientos muy sustanciosos de cuestiones como las relaciones Iglesia-Estado, concilios y sínodos, visita canónica a la diócesis, *visitas ad limina* de los obispos navarros, oficios y beneficios, seminario, predicación, administración eclesiástica, vida monástico-religiosa y actividad de sus miembros, cabildo catedralicio, participación en el Concilio de Trento y puesta en práctica de la reforma tridentina, culto divino, herejes y brujería, etc., etc.

Toda esta historia está elaborada con una documentación manuscrita e impresa, que el Dr. Goñi sabe interrogar con gran profesionalidad y exponer de modo nítido. Las entidades editoras han sabido presentar la obra con una calidad tipográfica a la altura de la alta calidad del libro.

ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA

HERNÁNDEZ MARÍN, Rafael: *Historia de la filosofía del derecho contemporánea*, Madrid, Tecnos, 1986, 357 págs.

No se trata propiamente de un libro de historia, aunque el lector encontrará aquí una magistral exposición de las doctrinas iusfilosóficas fundamentales de los siglos XIX y XX. El mérito del autor, cuya laboriosidad y espíritu crítico sólo cabe describir en términos de asombro —remito a la completísima bibliografía (pp. 319-352, sagaz e intensamente manejada en las numerosas notas de los capítulos) o al escrúpulo en cotejar casi siempre texto original y traducciones—, no estriba en último lugar en demostrar la importancia del conocimiento filosófico-jurídico a una comunidad científica demasiado escéptica ante el desolado panorama de la academia española de la Filosofía del Derecho, diluida además —qué más da— en la moral y la política. El rigor (término) lógico de Hernández Marín le lleva a situar unos «presupuestos ontológicos» al comienzo de la exposición, que suministra las claves mínimas para la ulterior lectura; ésta

nos desplaza por el iusnaturalismo (inclusa la Escuela Histórica), los positivismos jurídicos (jurisprudencia de conceptos o el derecho como sistema lógico; teoría pura o el derecho como sistema jerárquico; jurisprudencia analítica inglesa; neokantismo; jurisprudencia de intereses; movimiento del derecho libre), el realismo jurídico escandinavo y anglosajón, el sociologismo jurídico y las posiciones eclécticas. El capítulo final de *críticas*, antecedido ocasionalmente por partes propiamente conclusivas (v. gr., capítulo XIV: el positivismo jurídico en general), conduce al autor «en favor del realismo jurídico puro y externo».

Somera descripción del índice, que traiciona por supuesto la importancia de la obra; pero si la traición estimula su consulta, se habrá cumplido la finalidad de estas líneas.

CARLOS PETIT

LÓPEZ DE SILANES, C. - SÁINZ RIPA, E.: *Colección diplomática calceatense. Archivo Catedral, 1125-1397* (Logroño, 1985), 302 págs.

Bajo el título de 'Colección diplomática calceatense', los autores de este libro se proponen un ambicioso plan editorial, consistente en la publicación de los fondos archivísticos de Santo Domingo de la Calzada hasta el año 1500, y en ofrecer en otra serie el catálogo documental de los fondos posteriores a esta fecha. Este primer volumen constituye ya una espléndida primera singladura de este plan. En él editan, de un modo muy profesional, los documentos existentes desde el año 1125 hasta el final del siglo XIV, lo cual da un total de 144 diplomas todos hasta ahora inéditos, salvo 15 que habían sido objeto de edición total o parcial. De estos 144 diplomas, siete son del siglo XII, sesenta y tres del XIII, y ochenta y cuatro del XIV. Es realmente enorme la masa de datos que aquí se contienen sobre la organización y la historia local eclesiástica y civil, y a veces trasciende esta información a ámbitos más amplios que la historia local, como por ejemplo la pieza n. 80 (p. 125) donde aparece una tasación de todos los obispados de Castilla del año 1326, o el n. 28 (pp. 54-57) en el que se contienen las constituciones del Cardenal Gil Torres para el cabildo local cuyo interés, como punto de referencia para las constituciones del mismo autor para otros obispados, es obvio. En una introducción, los autores realizan la historia de estos fondos documentales. Hay índices onomástico y toponímico. Se echa de menos el temático, que sería muy útil a los lectores.

ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA

MARCÓ Y DACHS, L.: *Los judíos en Cataluña* (Barcelona, Ed. Destino, 1985), 308 págs.

Este libro es una versión castellana, hecha por el propio autor, del original catalán *Els jueus i nosaltres* de la Editorial Pòrtic, aparecido en 1977. El principal mérito de esta obra consiste en que ofrece una buena síntesis del argumento

a base de numerosas monografías, enormemente dispersas y de carácter local, no fácilmente accesibles. El autor trata de describir cómo vivieron, en las diversas épocas, los judíos en Cataluña, relatando tanto las vicisitudes más sobresalientes como recogiendo los datos contenidos en los materiales disponibles, ya que es inmenso lo que todavía yace inexplorado en los fondos manuscritos de archivos y bibliotecas. Después de un breve resumen de la historia del pueblo hebreo hasta la época romana, trata, en sucesivos apartados de su presencia en Cataluña, siguiendo un orden cronológico del siglo x al xv, en que termina su afincamiento en tierras ibéricas con la expulsión decretada por los Reyes Católicos. Diversos planos, mapas y otras ilustraciones enriquecen y hacen atractiva esta exposición de conjunto. En siete apéndices, se da el texto de algunas piezas literarias o documentales más características del pueblo judío en Cataluña y en España. Tales son las semblanzas del Decálogo con otros textos antiguos, el juramento de los mandamientos y las maldiciones, relación de los supervivientes del ataque al call de Barcelona en el año 1391, edicto general de expulsión de los judíos de Aragón y edicto de 1512 del Dr. Andrés de Palacio, inquisidor del Reino de Valencia. Echo de menos el uso de la rica colección documental de J Régné, *History of the Jews in Aragon Regesta and Documents 1213-1327* publicada originariamente en la *Revue des Études Juives* y recientemente reeditada en la serie *Hispania Judaica* 1 (Jerusalem 1978) 736 pp., anotada por Yom Tov Assis en colaboración con Adam Gruzman.

ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA

NIEVO, C. - GIRARD, F.: *Catalogo dei periodici esistenti in biblioteche di Roma* 3 ed. accresciuta (Roma, Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma, 1985), XVIII + 1.420 págs.

En 1955 aparecía la primera edición de esta obra, bajo el título de *Catálogo delle pubblicazioni periodiche esistenti in varie biblioteche di Roma e Firenze* (Roma 1955) xv + 495 pp. Siguió una segunda edición 10 años más tarde, *Catalogo dei periodici esistenti in biblioteche di Roma* (Roma 1975) 989 pp., con un suplemento en 1979, de xii + 197 pp. En esta tercera edición, el número de bibliotecas representadas sube de 34 a 38 entre las cuatro incluidas ahora por vez primera destaca la Accademia Nazionale dei Lincei. De todas ellas se da en las primeras 18 páginas la dirección postal de cada una, su horario de visita, condiciones para ser admitido a la misma, período de clausura estiva. Los títulos de publicaciones periódicas sube en 3.358 títulos con respecto a la edición de 1975, totalizando ahora la cifra de 17.418. Es una colección realmente excepcional tanto por la cantidad como por la calidad y por la internacionalidad y la universalidad de campos y especialidades representadas. Con este volumen, los estudiosos disponen de un extraordinariamente valioso instrumento de trabajo que les ahorrará muchas horas de pesquisas, con frecuencia inconclusivas. Esta

publicación ahorra incluso el viaje a Roma o a la biblioteca en cuestión, ya que se puede pedir una reproducción fotográfica del artículo o pieza deseados. En la ficha de cada una de las publicaciones indica el título, las bibliotecas romanas que la poseen, y desde qué fecha a qué fecha caso de no encontrarse allí completa. Este instrumento de trabajo merecería la pena que fuese realizado para otras ciudades que cuentan con un elevado número de bibliotecas, y donde los estudiosos tienen que perder mucho tiempo para saber en qué centro se conserva la revista o publicación periódica que buscan si es que se encuentra en alguna realmente. La presente obra es comercializada por la Biblioteca Apostólica Vaticana

ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA

PEIRÓ ARROYO, Antonio: *Las Cortes Aragonesas de 1808. Pervivencias forales y revolución popular*, Zaragoza (Cortes de Aragón), 1985, 131 págs.

He aquí un título desproporcionado en todos sus elementos: Cortes, Fueros y Revolución. Desde su sede tal vez se piense que sea la desmesura un medio para abrirse espacio; para mí, que se cierra.

Trátase de la agregación de un trabajo sobre establecimiento y evolución de la Nueva Planta en Aragón, prestándosele atención menor al capítulo de las dichas *pervivencias forales*; un estudio de rebeldías sociales entre siglos en la zona, a lo que respondería el más generoso epígrafe de *revolución popular*, y un par de páginas acerca de la ocurrencia militar, por un Palafox en cargo precario como capitán general, de una convocatoria que sería la de tales presuntas *Cortes Aragonesas*

Un apéndice de otro par de páginas trae una llamada *Acta de las Cortes Aragonesas de 1808*, de cuyo texto claramente se desprende que no se consideraron Cortes, sino Diputación extraordinaria de las mismas reunidas como Junta Suprema del Reino para elegir y dar paso a otra más reducida. Presenta el documento en todo caso el interés de que también así se presumiese transitoriamente resucitado un orden político inexistente desde la Abolición de Fueros. Se celebró una única sesión el 9 de junio de 1808.

La abultada introducción está realizada con conocimiento de causa en sus distintas materias, añadiéndose de propia cosecha interés. Buenos artículos pueden formar un mal libro, imponiéndose cautelas. Onerosas, no sólo en el sentido presupuestario, pueden ser las alegrías culturales de instituciones nuevas, tan novatas que aún se empeñan en recobrar la historia con ficciones. Aunque algún efecto positivo tal vez con suerte también haya cuando tanta fantasía se arriesga de citarse sin lectura.

Y no hay al fin razón para inquietarse; unas Cortes de Zaragoza, con base foral y revolución popular, no vendrán a arrebatarse el sitio, sin una cosa ni la otra, a las Cortes de Cádiz.

B CLAVERO

PELÁEZ, Manuel J. y FERNÁNDEZ VILADRICH, Jesús: *Una oferta científica iushistórica internacional al doctor J. M. Font i Rius por sus ocho lustros de docencia universitaria*, edición coordinada por..., Barcelona, Promociones Publicaciones Universitarias («Serie bibliográfica de derecho histórico e historia de las instituciones»), 1985, 424 págs. más índice de autores y aportaciones.

[ARVIZU, Fernando de (ed.)]: *Liber amicorum profesor don Ignacio de la Concha*, Oviedo, Universidad de Oviedo - Servicio de Publicaciones, 1986, 470 págs

La edición de obras en homenaje a profesores universitarios jubilados o fallecidos, o que festejan algún aniversario especial, es relativamente nueva en España, al menos en lo que afecta a la historia del derecho y de las instituciones; más difundida aún la práctica de dedicar, siempre a igual título de homenaje, números de revistas especializadas, el libro-homenaje se viene consolidando como uso académico entre nosotros, dándose, incluso, la circunstancia de la simultaneidad en el tiempo de varios homenajes que concurren en captar la atención de colegas y lectores. Y las dos modalidades de homenaje tienen ventajas e inconvenientes. La pérdida de su identidad cuando el homenaje queda disuelto en la secuencia inexorable de los tomos de la revista que accidentalmente lo acoge impide, al menos, el esfuerzo de redacción y financiación exigido por el libro de estudios independiente, y tal vez la mayor fragilidad científica —sacrificada la ciencia por razones de cariño y cortesía— en este segundo caso. Por lo demás, nadie como nosotros para conocer el contenido feudal del propio término que designa el género, un punto más discreto cuando de homenajes en revistas se trata.

Lo anterior, por sabido, resulta obvio, pero tal vez no será superfluo recordarlo por escrito. Al menos, a la hora de enjuiciar las dos obras que motivan esta nota de anuncio, libros-homenaje en sentido estricto, el repaso de las hipotéticas carencias que son de esperar en los mismos ayudará al lector a situar la crítica que merezcan en concreto.

Cariño/ciencia como frecuente alternativa de características de los libros-homenaje de la que no siempre, y así en el caso actual, saben dar cuentas sus respectivos títulos. Apropiado en mi opinión el que antecede a los estudios de De la Concha —un *Liber amicorum* animado por afectos personales más que por el reconocimiento de deudas científicas—, ya lo es menos el que M. J. Peláez y J. Fernández Viladrich escogieron para rotular los trabajos dedicados a Font i Rius, que no toda *oferta iushistórica*, aunque *internacional*, necesariamente resultará *científica*; el juicio de terceros deberá, de cualquier modo, determinarlo por encima de la pretensión de los editores. El afecto entre amigos justifica, por ejemplo, la concurrencia al homenaje a De la Concha de compañeros que no comparten la especialidad del homenajeado (trabajos de Jaime Alberti, Manuel Álvarez-Valdés, Joaquín Arce, Fernando Díaz, Manuel B. García Álvarez, Manuel Iglesias y Rafael Fonseca, José M^a Muñoz Planas, Alfonso Prieto, Eduardo Serrano, carentes de interés histórico-jurídico) o el esfuerzo, extremando ya el

respeto a la personalidad de la dedicatoria, por aproximarse a esa especialidad con abandono de la propia (trabajos de Justo García Sánchez, páginas iniciales del antes citado Manuel Alvarez-Valdés, lo mismo de Manuel B. García Alvarez, César García-Arango, Elena Naharro, muy desiguales de información y contenido, especialmente lamentables los del primero, que además figura a título de romanista); pero la proclamación de aspiraciones científicas en los estudios Font i Rius, con insistencia en contenidos *ishistóricos*, hubiera llevado a excluir varias de las aportaciones coleccionadas (páginas de Pierpaolo Donati, María Paz Mesa-Moles, Stefano Zunarelli, que no se refieren a la historia del derecho, y a mi modo de ver, por lo que hace al estudio de «derecho internacional privado romano» de la segunda, tampoco al derecho romano ni, seguramente, al derecho internacional privado), cuya vocación internacionalista se agota en doce colaboraciones de nueve participantes italianos, no todos demasiados conocidos, dos franceses y un polaco, resultando mayoritaria la participación española (prólogos de Luis G. de Valdeavellano y Jesús Lalinde y los trabajos de Antonio Alvarez de Morales, Jon Arrieta, Joan Beneyto, Santos M. Coronas, Emilio de la Cruz, Jesús Fernández Viladrich, Rafael Gibert, Ferrán Guardiola, Josefina Mateu, María Paz Mesa-Moles, Manuel J. Peláez, Antonio Pérez Martín, Mariano Peset, Sixto Sánchez-Lauro).

Sería prolijo entrar en el contenido de los estudios más netamente histórico-jurídicos de ambos libros-homenaje, demasiado variado para formular una valoración de conjunto. Sería además, impropio, pues el cariño parece haber predominado sobre la ciencia: el juicio habría entonces de extenderse por el terreno de las simpatías personales, por definición, y desde esta sede, irrelevante.

CARLOS PETIT

SÁNCHEZ FERRIZ, Remedios: *La Restauración y su Constitución política*, Valencia (Departamento de Derecho Político), 1984, 496 págs.

En edición multicopiada, pero con formato de libro, bien que a su vez un tanto clandestino al carecer de ISBN, aparece, con alguna reducción, la tesis doctoral de Sánchez Ferriz, de la que ya se había adelantado algún artículo. Si el cambio no lo es de criterio en la conceptualización de este género de norma, mejor respondía a su contenido el título original: *La Restauración y su Ley Fundamental*. Tras un capítulo sobre los protagonistas y el acontecimiento de la Restauración, sin la problemática de su concepto político, nos ceñimos al proceso de elaboración y acuerdo de su Constitución escrita, sin entrar tampoco en otras cuestiones ni originarias ni derivadas, por su mismo desarrollo legislativo, de su estructura constitucional.

De escuela especialmente hipotecada por preocupaciones políticas retrospectivas, con su correspondiente arrastre de tópicos, también conserva su virtud de lectura de textos, de actas parlamentarias como de prensa política. Un útil digesto de estos materiales en substancia se ofrece.

B. CLAVERO

SASTRE SANTOS, 1.: *Metodología giuridica* (Roma, Commentarium pro Religiosis - Institutum Iuridicum Claretianum, 1985), 196 págs.

El presente libro es un manual de metodología jurídico-canónica, realizado en contacto directo del autor con sus alumnos de esta materia en la Universidad Urbaniana de Roma. Esta circunstancia le da un acentuado carácter práctico y pedagógico. Su finalidad primordial consiste en la asistencia al alumno en el manejo de las bibliotecas y los libros en orden a su primer trabajo científico. La información bibliográfica es más ejemplificativa que exhaustiva. A diferencia de otras metodologías jurídicas que le precedieron, tales como las de Alt, Kurt scheid-Brlek, Tocanel, etc., ésta está en lengua vulgar, que en este caso es la italiana. El libro está dividido en tres partes, que tratan de los prolegómenos del trabajo científico (diversos tipos de trabajo y elección de un tema), la recogida de materiales (fichas, búsqueda del material e instrumentos técnicos de trabajo) y la técnica del trabajo científico (estructura del trabajo, elaboración y presentación de los resultados). En otros tantos apéndices, se ofrecen al lector: 1) Las abreviaturas y siglas generales, las de documentos eclesiásticos y las de las colecciones legales; 2) Correspondencia de los términos técnicos bibliográficos en las tres lenguas italiana, española e inglesa; 3) Esquema-tipo de documento público. Cierran la obra tres índices: analítico, onomástico y general. El libro está bien concebido y bien realizado desde el punto de vista que el autor se propone, aunque tal vez algo excesivamente esquemático. Creo que podría y debería enriquecerse, precisamente en función de destinatarios principantes, de un buen capítulo o apartado sobre los principales problemas de redacción con que los tales destinatarios tropiezan. Un buen ejemplo en este sentido puede ser R. Vellilla Barquero, *Cómo se realiza un trabajo monográfico* (Barcelona, 1979), 117-46. Tampoco estaría de más un mayor detenimiento en el análisis de los textos, al estilo por ejemplo de A. Ubieto Arteta, *Cómo se comenta un texto histórico*, 2.ª ed (Zaragoza, 1978). También sería útil una mayor información bibliográfica sobre cada uno de los temas tocados, a donde el lector pueda acudir en demanda de ulterior información.

ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA

Series episcoporum Ecclesiae Catholicae occidentalis ab initio usque ad annum MCXVIII, Series V: Germania, 1: Archiepiscopatus Coloniensis; 2: Archiepiscopatus Hammaburgensis sive Bremensis curaverunt Stepfan Weinfurter et Odilo Engels (Stuttgart, Anton Hiersemann, 1982 y 1984), XII-205 y XI-90 págs.

El episcopado de la Iglesia Católica jugó un papel tan importante en la historia de Occidente, tanto eclesiástica como civil, que constituye un punto de referencia obligado para todo tipo de historiografía actual. Pese a ello, hasta hace relativamente poco tiempo los episcopologios de las diferentes diócesis, andaban

muy lejos de ofrecer al historiador un rigor crítico mínimamente solvente. Hasta 1873, los historiadores debían acudir a los episcopologios de cada una de las iglesias locales, establecidos por la erudición del siglo XVI-XVIII con escaso rigor. En 1873, aparece la *Series episcoporum Ecclesiae Catholicae* de Pius Bonifacius Gams, en gran parte confeccionada a base de los anteriores episcopologios que acabamos de aludir. Esta situación mejoró sustancialmente con la *Hierarchia Catholica Medii Aevi* de Conradus Eubel y sus continuadores, que cubre desde el comienzo del pontificado de Inocencio III (1198) y alargando el título (*Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi*), llega hasta 1789. Pero queda en la penumbra de la incertidumbre histórica el período más difícil, que es desde el principio de cada diócesis hasta el año 1198. Esta es la tarea que abordan los directores y colaboradores de esta nueva *Series episcoporum* que aquí presentamos. De ahí que sólo el intentar!o significa ya un noble y necesario intento. Los dos volúmenes que aquí reseñamos contienen el episcopologio de los dos arzobispados o sedes metropolitanas de Alemania: Colonia y Hamburgo-Bremen. En el primero van incluidas las diócesis de Colonia (Koln), Leodium (Liège), Minda (Minden), Monasterium (Münster), Osnabrugensis (Osnabrück) y Traiectum (Utrecht).

El arzobispado de Hamburgo comprendía las diócesis Hammaburgensis o Bremensis (Hamburg-Bremen), Lubeka (Lübeck), Raceburgensis (Ratzeburg), Sverinensis (Schwerin), Ykescola (Üxküll/Ikskulle). Colaboran para las diferentes diócesis o iglesias aquí mencionadas los siguientes estudiosos. S. Weinfurter, J.-L. Kupper, W. Herpich, H. Kluger, H. Wolter, A. Spicker-Wendt, W. Jappe Alberts, K. Reinecke, J. Petersohn. El trabajo está bien concebido, bien realizado y bien presentado. No sólo incorpora los resultados de la más reciente historiografía, sino que contiene incluso aportaciones nuevas que no figuraban en anteriores publicaciones. La introducción a cada uno de los dos tomos está redactada en alemán. El resto de la obra está en latín. La obra completa comprende siete secciones: 1. *Italia*; 2. *Africa et Oriens latinus*; 3. *Iberia*; 4. *Gallia*; 5. *Germania*; 6. *Britannia, Scotia et Hibernia, Scandinavia*; 7. *Graecia, Illyricum et Hungaria, Polonia*. Este nuevo y necesario instrumento de trabajo viene a colmar una laguna muy sensible, por lo que encontrará sin duda una acogida llena de reconocimiento por parte de los estudiosos.

ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA

SIEBEN, H. J.: *Die Konzils-idee des lateinischen Mittelalters, 847-1378* (Konziliengeschichte, Reihe B: Untersuchungen; Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1984), xx + 484 págs.

Del primer tomo de esta obra se dio cuenta en *Rev. Esp. de Der. Can.* 37 (1981) 266-67. Dicho tomo se refiere a la idea de concilio hasta mediados del siglo IX, que es donde retoma el tema el volumen que aquí reseñamos. Este volumen cubre un espacio cronológico de medio milenio, que corre desde el comienzo del pontifi-

cado de León IV (837) hasta el comienzo del Cisma de Occidente (1378). Trata de analizar la idea que la Iglesia medieval de Occidente tenía de la realidad conciliar y sinodal. No es ésta una tierra nueva, sino que desde diversos ángulos se han ocupado ya muchos estudiosos de esta cuestión, que el autor del presente libro reseña críticamente en la Introducción a su estudio, por cuyas páginas desfilan estudiosos como Hirsch, Tierney, Schulte, Sohm, Boye, Happe, Congar, Fransen, Fuhrmann, Bacht, Schmale, Andresen, Bonicelli, Bermejo, Schweiger, Hefele-Leclercq, etc.

El autor estudia el tema en diez capítulos, en los que se interroga a los principales autores de la imagen de concilio que el Occidente se formó a lo largo de estos cinco siglos. Roma, Hincmaro de Reims, Bernoldo de Constanza, Anselmo de Havelberg, o sea la idea gregoriana frente a la griega, el concilio y su relación con la S. Sede en las colecciones canónicas, la idea del concilio en los decretistas y decretalistas, la idea medieval del concilio en el contexto de la controversia del Filioque, publicistas y teólogos entre 1294 y 1342 sobre el concilio o balance de un momento de crisis, Marsilio de Padua o del *consilium pontificis* al *consilium principis*, Guillermo Ockham o la problematización sistemática de la idea de concilio.

El presente libro describe en detalle el doble proceso de formación y desintegración de la idea que el medievo se formó de concilio. Este libro se cierra justamente en la víspera del Cisma de Occidente, que dará paso al conciliarismo. Pero el conciliarismo tiene unos antecedentes, bien expuestos en la segunda parte de este libro, sin los cuales resultaría difícilmente inteligible y fácilmente deformable. Los más recientes trabajos sobre el conciliarismo tienden a verlo en clave política, lo cual es cuando menos un enfoque parcial del tema, ya que sus principales raíces son eclesiológicas y no políticas. Tal es, a grandes rasgos, el contenido de la presente monografía, realizada con gran profesionalidad y dominio del tema.

ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA

SORGE, G.: *Il 'Padroado' Regio e la S. Congregazione 'De propaganda fide' nei secoli XIV-XVII* (Bologna, Cooperativa Libreria Universitaria Editrice, 1985), VIII-105 págs.

Este libro contiene una exposición sobre la formación de la institución del 'regio padroado' portugués. Comienza por los antecedentes contenidos en las bulas pontificias dirigidas a la Orden de Cristo y a su sucesora la Corona portuguesa, para continuar con la evolución ulterior hasta los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado portugués en 1940. En un segundo apartado, traza las grandes líneas de la historia de la Congregación de Propaganda Fide. Es un argumento demasiado amplio para tratarlo en sólo 100 páginas de exposición, problema agravado todavía por el excesivo número de páginas que se dedican a transcri-

bir documentos enteros o pasajes amplios de los mismos. El criterio que preside este tratamiento no es muy histórico, ya que consiste en demostrar lo negativo fue el 'padroado' y lo acertada que estuvo siempre la Congregación romana, como si de una comedia de buenos y malos se tratara. Como suele ocurrir, la historia es también en este caso mucho más matizada. Pese al despliegue de fuentes y bibliografía que en este librito se realiza, hay que decir que ni es todo lo que está ni está todo lo que es. Hay cuestiones que necesitarían una mejor información. Así, por ejemplo, no es cierto que por las bulas alejandrinas de 1493 se concede a Castilla lo mismo que anteriormente se había concedido por los papas a la Corona portuguesa. Sin salirnos de este mismo tema, la antigua teoría feudal que aquí se defiende, citando a un autor reciente, no es más que una de las varias explicaciones del sentido de las bulas alejandrinas, sobre lo cual hay una amplia bibliografía reciente que es preciso tener en cuenta.

ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA

VARIOS AUTORES: *Les moines noirs (XIII^e-XIV^e s.)* (Cahiers de Fanjeux. Collection d'histoire religieuse du Languedoc au XIII^e et au début du XIV^e siècle 19; Fanjeux, Édouard Privat Éditeur, 1984), 422 págs., 9 mapas, 8 láminas fuera de texto, 110 Fr.

La presente serie, que trata de la historia religiosa del Languedoc, se enriquece con un nuevo volumen, que es el 19 de la colección. En esta nueva edición adopta como tema los monjes negros o benedictinos, que tuvieron en dicho territorio unas 40 abadías, que animaron la vida religiosa de esta zona desde los lejanos días del siglo IX e incluso en algún caso desde el VII. Fueron sus principales centros Gellone, Aniane, Saint Gilles, La Grasse, Lézat, etc. El período aquí escogido es poco brillante en la vida de dicha familia religiosa en la Francia meridional, como ocurría generalmente también en otras partes por este mismo tiempo. Los autores de los estudios monográficos aquí contenidos son Vicaire, Gérard, Giordanengo, Pailhès, Blanc, Biget, Gazzaniga, Amargier, Gaussin, Stouff, Guilles, Avril, Magnou Coulet, Becquet. Dos de estas monografías pasan revista a la documentación existente sobre el tema de los monjes negros en los archivos del suroeste francés y en Saint Germain des Prés. En otro serial de estudios se analizan las diferentes situaciones: abadías en crisis o en período de reforma una abadía que se convierte en cabildo catedralicio, abadía anexada a una metrópoli, abad profundamente dedicado a los grandes asuntos del país, la institución de la encomienda en favor de la corona real. La llama de la reforma, encendida por los concilios, papas o por otras abadías, se expresa en el agrupamiento de abadías bajo la de S. Víctor de Marsella, la de Cluny o la de Chaise-Dieu. Otros estudios se ocupan de los diferentes tipos de dependencia de los prioratos, iglesias, capillas, etc., a través de los cuales se realiza el contacto más directo con la vida real y cotidiana de las gentes del país. Particularmente interesante para la historia del derecho canónico es el estudio de Gilles

sobre el diezmo monacal, que tan importante papel jugó desde la reforma gregoriana hasta el fin del antiguo régimen. Por cierto que la const. 55 (*Nuper ab-bates*) del Conc. 4 Lateranense de 1215 presenta dos recensiones o lecturas diferentes, con ciertos cambios de matiz, en la nueva edición que de dicho concilio ofrecimos en 1981 en *Monumenta iuris canonici* cambios que afectan en alguna dimensión a la exposición que aquí se hace de dicho tema de los diezmos de los monjes. Me es grato dejar constancia de que los autores de este volumen interrogan inteligentemente la documentación existente sobre el tema objeto de estudio. Creo innecesario subrayar que este volumen, así como toda la serie, es importante para la historiografía española, dado que se trata de un territorio no sólo cercano sino incluso incorporado a la corona catalana por tanto tiempo. Innecesario igualmente recordar que abadías como la de S. Víctor de Marsella y Saint-Pons de Thomières se relacionan con los reinos ibéricos desde los días de la reforma gregoriana.

ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA

VARIOS AUTORES: *The role of the book in medieval culture*, ed. by P. Ganz (Bibliología: Elementa ad librorum studia pertinentia 3-4: Brepols - Turnhout 1986), 153 + 133 págs.

Estos dos volúmenes, que aquí reseñamos, recogen las actas de un congreso internacional que tuvo lugar en Oxford, el año 1982, y cuyo objeto consistía en la investigación y estudio del proceso que seguía el libro medieval desde el estado de su producción hasta el de su conservación actual, pasando por el más interesante que es el uso que de los libros se hacía. Habida cuenta de que para el medievo es precisamente el libro la fuente más importante que se conserva, está más que justificado el intento de reconstrucción de lo que los libros eran y significaban para la Edad Media, tomando como base los códices que aún subsisten y las noticias que sobre el particular suministran los escritores medievales.

Las cuestiones analizadas en estos dos volúmenes se agrupan en cinco secciones: producción de los libros, preparación de los textos, su significado para hacerse una idea del grado de cultura literaria de la época y del medio ambiente en que el libro surge, presencia de los libros en diferentes colecciones, importancia de las glosas de los lectores como síntoma de conservación de la cultura heredada y como intento de cambio o renovación de la misma. Como es lógico, tratándose de un congreso, no se trata toda esta temática monográfica y sistemáticamente, sino que cada autor examina algún aspecto de cada una de las secciones indicadas.

En la primera sección se contiene una exposición de conjunto con carácter introductorio (Parkes), relaciones entre el *scriptorium* de St. Denis y otros (J. Vezin) y rayado del papel o pergamino (Gumbert).

La segunda sección consta de las siguientes colaboraciones: métodos para establecer el *stemma codicum* (Reeve), pecias, apopecias y un manuscrito de Toronto

con la *Sententia libri Ethicorum* de Santo Tomás de Aquino (Boyle) y un test de ingenuidad entre los falsificadores medievales y los investigadores modernos (Meyvaert).

En la tercera de las secciones anunciadas, encuentran cabida los siguientes argumentos: lengua popular y cultura escrita (Fromm), alfabetismo y educación gráfica de los escribas altomedievales del s. VII-X (Petrucci) y el género de obras *De viris illustribus* como ejemplo de bibliografía anterior a la imprenta (Rouse).

Sobre las colecciones de libros hay una introducción al tema (Doyle), la librería de Otón III (Mütherich), la conquista normanda y las bibliotecas inglesas (R. M. Thomson) y la biblioteca de Randshofen en la temprana y alta Edad Media (Kramer).

De los libros como instrumento de conservación y de cambio se trata en las siguientes colaboraciones: las manipulaciones del Apocalipsis en el medievo (Lobrichon), los vocabularios como instrumento de conservación y de cambio (Grubmüller) y manuscritos glosados de las tres *Aetates Virgilianae*.

Un índice final de centenares de manuscritos pertenecientes a unas ochenta bibliotecas (¡ninguna de la Península Ibérica!), que se utilizan en las 16 ponencias recogidas en estos dos fascículos que aquí reseñamos, da idea de la seriedad del sondeo realizado. No es éste el lugar para una exposición más detenida y más crítica de cada una de las comunicaciones recogidas en esta obra. En conjunto, constituye una investigación modélica en su género. Cada uno de estos estudios es un trabajo ejemplar, dado que están todos ellos realizados con gran profesionalidad por especialistas, en su mayoría bien conocidos por sus trabajos precedentes, que conocen a fondo la problemática que aquí se plantea y los métodos para abordarla. La excelente presentación tipográfica, es la ya característica de esta serie (ver AHDE 54, 1984, 747-48).

ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA

VILANOVA, E.: *Història de la teologia cristiana. 1: Des dels orígens al segle XV* (Col. lectània Sant Pacià 32; Barcelona, Editorial Herder, 1984), 787 págs.

No es un hecho frecuente la aparición de una nueva historia de la teología cristiana. Las ya existentes se cuentan con los dedos de una mano y sobran dedos. Por ello, es para felicitar al Autor y a los lectores por la publicación de una nueva obra de esta especialidad. Cualquier otra especialidad humanística cuenta con más historias que la teología, sin que ello quiera decir que la teología tenga menos historia que cualquier otro saber humano. Entre las historias de la teología que se han escrito, sólo hay una (la de Cayré) que cubre toda el área cronológica de los 20 siglos de cristianismo con sus antecedentes bíblicos.

La historia cuyo primer volumen aquí presentamos comprende los 15 primeros siglos. Se divide en los siguientes apartados: *Teología del principio* (teología bíblica, Credo de la Iglesia), *teología patristica* (los padres de la Iglesia, del

Credo a una teología sabia, elaboración de un método científico, Orígenes, S. Gregorio de Nisa, S. Agustín, Dionisio Areopagita, Boecio, S. Gregorio I Magno), *teología bizantina* (edad media bizantina, crisis iconoclasta, teología monástica, ruptura con la Iglesia latina, intentos de unión), *teología monástica occidental* (de la patrística a la escolástica, renacimiento carolingio, método de la teología en la etapa carolingia, controversias doctrinales del s. IX, la reforma del s. XI, el ámbito benedictino, el ámbito cisterciense), *teología escolástica* (nuevo método de hacer teología, las escuelas del s. XII, las escolásticas no cristianas, el siglo XIII como una nueva edad, teología franciscana, teología dominicana, efervescencia en la Universidad de París, nuevos horizontes del siglo XIV, la teología de los países catalanes del siglo XIII-XIV, la mística renano-flamenca, el reformismo en el ocaso de la Edad Media).

Esta obra se presenta como una síntesis panorámica para principiantes, y no como un libro dirigido a especialistas. Sería, por consiguiente, fuera de lugar pedirle desarrollos más amplios o una información bibliográfica exhaustiva sobre cada una de las cuestiones que toca. Aun teniendo cuenta de esta circunstancia, la información bibliográfica no siempre ha sido correctamente seleccionada. Pero no solamente es discutible el criterio selectivo de la bibliografía, sino que la síntesis que aquí se ofrece a veces no está debidamente actualizada según la mejor bibliografía. Así, por ejemplo, las páginas dedicadas a las universidades medievales parecen basarse en una información obsoleta, y es fácil señalar en ellas no pocas inexactitudes históricas. El ejemplo no es único.

En el esquema de esta obra se advierte alguna carencia, como es la vertiente teológica de la canonística, que tanto afecta a la eclesiología y sacramentología medieval. Resulta raro que un Hugucio de Pisa no merezca aquí una sola mención, al lado de tantos personajes mucho menos importantes en la historia de la teología que encuentran un puesto de honor en este retablo.

El hecho de que una determinada cuestión sea hoy día actual e importante no implica que lo fuera en la Edad Media. Algunas apreciaciones de este manual están hechas más desde enfoques actuales que desde el punto de mira desde el cual fueron vistas por los medievales.

No dudo de que estos y otros posibles reparos serán obviados oportunamente en una nueva edición de esta obra, con lo cual aumentará sensiblemente su utilidad para toda clase de lectores.

ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA

WYDUCKEL, Dieter: *Ius Publicum. Grundlagen und Entwicklung des Öffentlichen Rechts und der deutschen Staatsrechtswissenschaft*, Berlín, Duncker & Humblot (= Schriften zum Öffentlichen Recht, Band 471), 1984, 407 págs.

Estamos ante la publicación de una *Habilitationsschrift* perteneciente a la mejor tradición alemana: absoluto dominio de los instrumentos de investigación, amplísimo conocimiento bibliográfico, exhaustividad y rigor en el desarrollo del

plan de estudio. Las objeciones de método —¿cabe una ciencia del Estado antes del Estado?— nunca impedirán apreciar la labor realizada y sus ricas informaciones. Traduzco a continuación la rápida descripción del contenido de esta obra realizada por el propio autor (págs. 25-26): «El trabajo que sigue trata ... en primer lugar las raíces del *ius publicum* en la alta y baja Edad Media (parte primera). Ilustra luego los fundamentos de validez y la evolución del Derecho Público en la época del Sacro Romano Imperio de la Nación Alemana (parte segunda). La investigación ulterior se refiere a los presupuestos y consecuencias del positivismo jurídico-estatal (*staatsrechtlich*) en la segunda mitad del siglo XIX, así como a su superación por la doctrina del Derecho del Estado en los tiempos de Weimar (tercera parte), para terminar con una alusión a los planteamientos y problemas actuales de todo Derecho público bajo las condiciones de un realismo jurídico postpositivista».

CARLOS PETIT.

YARZA, F.: *El obispo en la organización eclesiástica de las Decretales Pseudoisidorianas* (Pamplona, Eunsa, 1985), 308 págs.

El presente libro constituyó la tesis doctoral que su autor realizó en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, bajo la experta dirección del profesor Eloy Tejero. La elección del tema es muy oportuna, por una triple razón. Carecíamos, ante todo, de un estudio, mínimamente suficiente, sobre esta cuestión. Por otra parte, el Pseudoisidoro ejerció un enorme influjo directo en las colecciones legales de la Iglesia, desde su aparición por los años de 847-52 hasta el Decreto de Graciano de mediados del s. XII, y un todavía más prolongado influjo indirecto hasta el Código de Derecho Canónico de 1917. Por otra lado, subyacen todavía en la eclesiología y ordenamiento canónico actuales elementos que en su día fueron caros a los falsificadores pseudoisidorianos. La institución episcopal, en fin, es una de las más fundamentales en la Iglesia.

El autor presenta, de modo sistemático, en tres capítulos, el pensamiento pseudoisidoriano subyacente en infinidad de textos, dispersos en la colección como *membra disiecta*, y trata de evaluarlos en el contexto de la colección pseudoisidoriana y en el más remoto de la legislación anterior de la Iglesia, teniendo también en cuenta los resultados de la abundante investigación moderna sobre los textos del Pseudoisidoro, y bastante menos abundante sobre la cuestión concreta del episcopado en dichos textos.

En el primer capítulo se estudian diversos elementos determinantes de la concepción pseudoisidoriana del obispo: títulos de los obispos, consagración, lugar que ocupan dentro del *ordo ecclesiasticus*, su potestad y funciones.

El cap. 2 se ocupa de una meta muy importante de los pseudoisidorianos, a saber, la autonomía del obispo y la defensa de su libertad, tema que se desgrana en sucesivos apartados, como las circunstancias históricas del reino franco que permitían a los poderosos instrumentalizar en su propio provecho la institución episcopal, sustracción del juicio de los obispos al concilio provincial avocándolo

a la Sede Apostólica, garantías procesales en favor de los obispos (donde los pseudoisidorianos se muestran realmente originales), la calificación de mayores para las causas episcopales, la apelación en ellas a la S. Sede, etc.

En el último capítulo se trata de una serie de normas canónicas especialmente subrayadas por el Pseudoisidoro en orden a aminorar el influjo de cualquier otra potestad que pudiera sombrear a los obispos, así como la supresión de los corepiscopos, el debilitamiento de los metropolitanos y el reforzamiento de los primados.

Aparte de su interés para los diversos tipos de historiadores relacionados con esta temática, el presente libro ayudará sin duda a los canonistas no historiadores a encontrar el sentido y la carga históricos de las normas del derecho vigente.

ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA

V A R I A

TESIS DOCTORALES

El 11 de abril de 1986, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, defendió sus Tesis Doctoral Francisco Luis Pacheco Caballero sobre «Las servidumbres prediales en el Derecho histórico español (desde sus orígenes hasta la Recepción del Derecho Común)», dirigida por el Doctor Aquilino Iglesia Ferreirós. El Tribunal que juzgó la Tesis estuvo compuesto por los Doctores Font Rius (presidente), Otero Varela, Gacto Fernández, Fernández Espinar y Pérez-Victoria de Benavides.

El trabajo doctoral, que contiene un capítulo dedicado al estudio de las servidumbres prediales en el Derecho romano y otro al estudio de la institución en el Derecho visigodo, se centra de modo fundamental en el análisis, a base de los llamados documentos de aplicación del Derecho, de los medios jurídicos arbitrados por la sociedad medieval, con anterioridad a la Recepción, para dar cauce a las situaciones de hecho, necesidades y conflictos que están en la base de las servidumbres prediales. En este sentido, son de destacar los siguientes datos: en primer lugar, se detecta una fuerte tendencia a solucionar los problemas de paso por fundo ajeno y los de conducción y toma de agua mediante la adquisición de la propiedad del terreno para el paso, del agua o del terreno, para efectuar su conducción, lo que supone un regreso a la concepción romano arcaica de las servidumbres en términos de pertenencia, regreso y similitud comprensibles si se tiene en cuenta el carácter primitivo y naturalista tanto del Derecho romano arcaico como del Derecho altomedieval; en segundo lugar, se aprecia una gran importancia del uso y la costumbre en orden a la fundamentación de lo que serían derechos sobre el fundo ajeno, originándose figuras de goce que si se resisten a la calificación dogmática y son de difícil encuadre institucional, son precisamente las que están en la base de cada tipo concreto de servidumbre predial.

El Tribunal decidió por unanimidad, y de acuerdo con la nueva legislación sobre la materia, conceder la calificación de «apto cum laude».

En la Universidad de Navarra, el investigador argentino Jaime Peire ha defendido su Tesis Doctoral sobre «La Visita-Reforma de los religiosos de América en 1769», y el chileno José Antonio González Pizarro la suya, sobre «La política de España en América bajo Isabel II». Ambas han sido dirigidas por el profesor Ismael Sánchez Bella.

Fermín Garralda Arizcun ha elaborado una extensa monografía sobre «La administración municipal de Pamplona en el siglo XVIII». La Tesis fue dirigida por el profesor Valentín Vázquez de Prada.

El 24 de noviembre de 1986 tuvo lugar en la Universidad de León la lectura de la tesis doctoral de don Manuel de Abol y Alvarez-Tamargo, titulada «El Derecho Privado en los documentos sobradenses de la Alta Edad Media», dirigida por el profesor Fernando de Arvizu. El tribunal, presidido por don Alfonso García-Gallo y formado por don José Orlandis Rovira, don Alfonso Prieto y Prieto, doña Teodora F. Torres García y doña Emma Montanos Ferrín, concedió al trabajo la calificación de Apto «cum laude» por unanimidad.

La Memoria pretendió, sobre la apoyatura diplomática del archivo monasterial, perfilar el derecho civil que se vivía en el entorno del cenobio gallego, con lo que se llega a una visión apreciable del ordenamiento jurídico en Galicia y en el antiguo Reino de León hasta mediados del siglo XIII.

En el primer capítulo se examinan las personas físicas y morales tanto seculares como eclesiásticas, con especial incidencia en la del monasterio, según la traslucen los propios documentos. La separación y diferencia de los diversos elementos que la componen y su virtualidad en los aspectos jurídicos, se han estudiado con detenimiento.

El segundo capítulo aborda la familia, basada en este tiempo en un patrimonio protegido y en los lazos biológicos. Las uniones de hecho, la condición y situación de la mujer, la *perfilatio* y la tutela son estudiados con detalle, precisando lo que en ello existe de origen romano-visigodo.

El tercer capítulo se ocupó de los bienes y sus clases, tanto en el círculo familiar como en el de las instituciones y personas eclesiásticas, su administración y enajenación. La cuota de libre disposición y los derechos de la esposa y los hijos en el caudal familiar y el régimen interno de éste han sido estudiados tras un análisis minucioso de cada documento, buscando similitudes y el criterio jurídico ordenador.

El cuarto capítulo está dedicado a la situación de los bienes en las diversas figuras contractuales: compraventa, donación, permuta, prenda y fianza, así como a los derechos de propiedad, posesión, tenencia y usufructo. Al final se aborda la diferencia y relación entre los bienes raíces y los muebles.

El quinto versa sobre la encomendación, la familiaridad monástica y los contratos de servicios, prolijo en lo que se refiere a aquellas dos figuras y muy limitado por el propio tenor documental en lo que respecta a las prestaciones libres de trabajo.

El sexto estudia el casuismo de los contratos y figuras agrarios, en los que se observa, como en otros puntos, la extremada variedad con la que el mundo medieval acogió la herencia bajo-imperial y visigoda, dejando un amplio margen a la voluntad de los particulares.

Y finalmente, el séptimo y último capítulo se ocupa de los aspectos for-

males internos del documento, así como de la suscripción del escriba y notario y del valor constitutivo y probatorio del documento.

Completan la tesis tres árboles genealógicos de los grados de parentesco, según San Isidoro, el *Liber Iudiciorum*, y el Fuero Juzgo, en donde se aprecia la simplificación sufrida en los lazos y denominaciones parentales a lo largo de la Alta Edad Media, fenómeno constatado en los diplomas. Además, se inserta un apéndice documental de más de treinta documentos, en su mayor parte inéditos y un cotejo preciso entre los documentos publicados de los cartularios y los pergaminos del Archivo Histórico Nacional, poniendo de manifiesto su correspondencia o divergencias.

Las fuentes documentales, que proceden del antiguo archivo del monasterio de Sobrado, se componen tanto de diplomas originales, como de copias, de los Archivos Histórico Nacional, del Reino de Galicia y de la Real Academia Gallega.

JUBILACION DEL PROFESOR DON JESUS LALINDE ABADIA

La racha de jubilaciones anticipadas provocadas por la reciente legislación sobre funcionarios públicos ha alcanzado también a nuestro querido colega y viejo colaborador en la cátedra barcelonesa, Jesús Lalinde Abadía. Su jubilación se ha producido en 30 de septiembre de 1986.

La personalidad de Lalinde se define muy en sus dos aspectos de docente e investigador. Por circunstancias personales, Lalinde llegó un poco tarde a la docencia universitaria, ya que obtuvo el grado doctoral en 1958, rozando ya la cuarentena, y tras varios años de Adjuntía barcelonesa, accedió a la Cátedra de Historia del Derecho en 1966, a sus cuarenta y cinco. Pero resarcó con creces este aparente retraso mediante una intensa y extensa labor en los años que ha permanecido en la docencia, a la que ha ofrecido una dedicación exclusiva, abandonando totalmente desde un principio su anterior puesto en la Administración pública en la que había prestado meritorios servicios y alcanzado un relevante grado dentro de su carrera. En la universitaria, Lalinde, después en breves estancias en las Universidades de La Laguna y San Sebastián, pasó a Zaragoza, cuya cátedra de Historia del Derecho regentó durante 12 años, y de cuya Facultad fue Decano en los últimos cinco de su estancia en la misma. Finalmente en 1981, volvió a Barcelona, para ocupar la segunda cátedra de Historia del Derecho recién creada, y en la que ha permanecido hasta su jubilación. La aplicación de Lalinde a la labor docente, se ha distinguido en todas partes por su rigor y su escrupulosidad, y por su inquietud en introducir nuevos métodos didácticos de cara al logro de un mayor rendimiento en el trabajo escolar.

Pero en la trayectoria académica de Lalinde destaca sobre todo su extensa y notable labor de investigación y estudio que ha cuajado en un conjunto

de publicaciones realmente impresionante y que lleva al centenar entre libros (13) y monografías. Un amplio espectro temático ha atraído la atención de Lalinde, proyectada así en las instituciones públicas como en el derecho privado, e historia de las doctrinas, o en otros aspectos de historia general, preferentemente en torno a los territorios catalanes y aragoneses y su expansión mediterránea. Estos trabajos personales junto con un estudio repensado y maduro de la historiografía existente le han permitido la elaboración de un par de exposiciones generales de todo el panorama de la historia del derecho español, entrevistas, especialmente la segunda de ellas bajo una perspectiva preeminentemente jurídica, método no utilizado todavía en la manualística antecedente. Ultimamente su inquietud le ha llevado a interesarse por una visión universalista de la historia del derecho y al consiguiente encuadramiento de las instituciones hispánicas en el marco más general de una historia europea y aún universal, y que se ha dejado sentir así en alguna visión de conjunto, como en el tratamiento de particulares temas de historia jurídica española.

Sería imperdonable silenciar una dimensión destacada del *curriculum* de Lalinde, cual es la de su participación activa en congresos y coloquios de historia jurídica, institucional o afines a ella. Miembro del Comité permanente de los Congresos de Historia de la Corona de Aragón, ha participado en casi todos los celebrados en los últimos decenios, como ponente nato de la vertiente institucional de los mismos; también en varios de los Congresos Internacionales, y en un sinfín de otras reuniones científicas celebradas en lo ancho de Europa y de América, siempre con aportaciones sugestivas incitadoras de nuevos problemas o interpretaciones de los mismos.

Ya se comprende con ello que su colaboración al *Anuario* —de cuyo Consejo de Redacción forma parte en la actualidad— ha tenido que ser intensa tanto en artículos monográficos como en recensiones bibliográficas, colaboración que aparece en el vol. XXX (1960) y termina —de momento— en el presente. En ellos se pueden encontrar sazonadas aportaciones a la historia de las instituciones públicas —de Aragón, de Indias— y a cuestiones particulares de derecho familiar y sucesorio así como a apreciaciones de conjunto sobre el perfil de diferentes sistemas normativos peninsulares y sobre los presupuestos «ideológicos» y las fuerzas políticas y sociales que han sustentado el desarrollo del derecho hispano.

No dudamos que esta imprevista jubilación de Lalinde, lejos de suponer una interrupción de su labor científica, le proporcionará, por el contrario mayor oportunidad de seguir trabajando incansablemente, como hasta ahora, en la investigación de nuevos campos de estudio y de matener su continuada colaboración en nuestro *Anuario*

CARANDE HA MUERTO

En el verano de 1986, a punto de cumplir el siglo, tras treinta años de jubilación. ¿Pero aún vivía?, es la pregunta usual ante la muerte de un ilustre jubilado. Nadie la ha hecho en este caso. Carande ha vivido hasta sus últimos meses plenamente, no sólo además para sí, no sólo tampoco para la ciencia histórica. Ha rendido a la naturaleza y ha doblegado a la historia; ha fallecido un símbolo de que esta victoria cabe. Frente a un tiempo de miserias y frente a las miserias de una edad, él mismo se labró meritoriamente el mito. Resiste ahora a la derrota siempre segura, mas no siempre definitiva, de la muerte. Otra es entonces habitualmente la pregunta: ¿pero era para tanto?

Lo era, y no sólo para nosotros como fundador de este Anuario, no sólo tampoco para toda la ciencia histórica en España como impulsor decisivo de su especialidad económica. Lo ha sido para la propia historia común. Durante una primera época de su vida, la del tiempo corriente de los mortales, nada hubo en realidad de extraordinario, comprendida dicha función. La figura de Carande ya destacaba por los años veinte acercándose a sus cuarenta, pero como la de un miembro más de una generación, con su sólida formación cultural y responsable vocación política. Ya también con su experiencia a la llegada de la república, verdadera oportunidad generacional. Su derrota lo fue personal. Perdió compañeros, por la muerte o por el exilio, perdió papeles de trabajo, con las destrucciones y los expolios; perdió temporalmente profesión, entre la revancha y la arbitrariedad.

Y en este segundo tiempo de auténtica miseria colectiva fue pacientemente labrándose su triunfo; fue naciendo a su segunda vida, a una edad ya no común a los mortales. Triple fue, como su competencia, su resarcimiento. En cuanto que universitario, y sin contar ya tras la jubilación con el poder de la cátedra, fue un elemento clave en la resistencia frente a la ocupación política del profesorado superior. En cuanto que político, bien lo saben quienes, también de otros sectores, experimentaron y agradecieron su apoyo y empeño. En cuanto que historiador, nuestra obligación es conocerlo. Como todo ello, inescindiblemente, tras su prorrogada y generosa vida, le extrañamos. No es lo único extraordinario que al fin don Ramón nos deja

B. C